Plan Hidrológico de Cuenca

APÉNDICE XI.6. DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA CONSULTA PÚBLICA

Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
Ámbito de competencias del Estado

Junio de 2013

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

ÍNDICE GENERAL

6.1. DOCUMENTOS INICIALES

6.1.1 ALEGACIONES

6.1.2. DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS ALEGACIONES

6.2 ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES

6.2.1. ALEGACIONES

6.2.2. DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS ALEGACIONES

6.3 EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

6.3.1 DOCUMENTO DE REFERENCIA

6.4. INFORME SOBRE LAS PROPUESTAS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

6.4.1. ALEGACIONES

6.4.2. DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS ALEGACIONES

6.1. DOCUMENTOS INICIALES

6.1.1 Alegaciones

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
29 ENE 2008
Confederación Hidrográfica del Norte
ENTRADA 1358

25. 1. 2008
LLANES

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE
(Plaza España, Oviedo)

Domingo Goñi Tirapu como Presidente y en represtación de la Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA), con NIF G74173931y domicilio a efectos de comunicación en la c/ Postigo Alto, 14 bajo 33009- Oviedo; ante Vd. comparece en forma y plazo y como mejor proceda, DICE:

Que por medio del presente escrito, y en relación con el "**PROGRAMA, CALENDARIO Y FÓRMULAS DE CONSULTA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN**", y "**PROYECTO DE PARTICIPACIÓN** actualmente en fase de consulta pública, viene a presentar las siguientes:

ALEGACIONES

1- Ausencia de calendario concreto de continuación del proceso. La mayoría nos enteramos por "alguien" que nos dice que va a convocarse una reunión en un determinado ámbito y, a última hora, se convoca desde la página web de la Confederación a las reuniones de Temas Importantes para los ámbitos central (día 31 de enero), y oriental (día 5 de febrero). En fecha del 18 de Enero acabamos de enterarnos de la reunión por un correo electrónico enviado por el único grupo ecologista que ha sido convocado.

2- El horario de las reuniones no facilita la presencia de las organizaciones sociales ya que sus representantes son trabajador@s y algunas de las reuniones han sido convocadas por la mañana. Las convocatorias a las 2ª reuniones se hace en la mañana tanto en Oviedo (ámbito Central) como en Llanes (ámbito Oriental) perseverando en los horarios inconvenientes para las personas que trabajan. Además las fechas de reunión de diferentes ámbitos coinciden en el día y en la hora imposibilitando la asistencia a quien desee participar en todas.

3- Falta de interés por impulsar la sensibilización social sobre la gestión del agua. Hasta el momento y vamos hacia la 2ª reunión no se han convocado ni concretado ningún tipo de jornada pública, taller, o debate sobre el diagnóstico ni sobre los Temas Importantes, tampoco la administración ha llevado a cabo ninguna difusión en los medios de comunicación de Asturias. La dinámica actual, de seguir así, no difiere demasiado de otros procesos en los que es preceptivo el informe de impacto ambiental dando un plazo para la presentación de alegaciones. No nos parece que sea ese el espíritu ni la letra de la DMA, en la que nos parece, se quiere impulsar un proceso donde las partes interesadas sean protagonistas y al final del proceso se llegue a un nuevo P.H ampliamente consensuado, y producto del conocimiento y el debate.

Confederación Hidrográfica del Norte
PRESIDENCIA
PASE
1. Original 2. Copia
☐ Presidencia
☐ Comisaría de Aguas
☐ Dirección Técnica
☐ Secretaría General
☒ O. Planificación
☐ Acunor
.....
.....
Fecha 30/01/08 Firma

4- Falta de apoyo económico para hacer determinados estudios o poder disponer de técnicos de nuestra confianza para clarificarnos en determinados temas de los que no somos especialistas.

PRESIDENCIA
SALIDA
Fecha 31 ENE. 2008
Firma

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICA
Número 08/0098
1 FEB. 2008
ENTRADA

5- Total dependencia de la web de la Confederación y de la dinámica que marca la Mesa. No se convoca a las organizaciones sociales a pesar de que en la primera reunión se proporcionaron las direcciones adecuadas para hacer las convocatorias.

6- Imposibilidad de ascender en la cadena de datos hasta las fuentes de información que han permitido elaborar los documentos, si bien en la web se han colgado los documentos en discusión hasta el momento, y se han hecho algunos documentos divulgativos sintéticos interesantes sobre los temas a tratar.

7-Creemos que en este proceso se debería dar ejemplo de sensibilidad medioambiental y utilizar papel reciclado en los documentos.

Y en relación con el "ESTUDIO GENERAL DE LA DEMARCACIÓN", actualmente en fase de consulta pública, presentamos las siguientes Alegaciones:

1- Ausencia de todo tipo de referencias a la identificación de problemas y conflictos relacionados con el agua y que desde hace tiempo han sido motivo de movilizaciones ciudadanas en algunos ámbitos de la Cuenca Norte (embalse de Caliao, trasvase del Navia, encauzamientos de arroyos en Corvera y otros lugares, potenciales y peligrosos nuevos demandantes de agua en las nuevas urbanizaciones costeras y campos de golf asociados, etc).

2- No se mencionan las fuentes ni las fechas de los estudios sobre las condiciones climáticas y los recursos hídricos.
Teniendo en cuenta la escasez de estaciones meteorológicas que están operativas no se pueden considerar actualizados los resultados que se presentan. Lo mismo se puede decir sobre las aportaciones de los ríos dada la deficiente calidad y cantidad de estaciones de aforo. Si los datos provienen del estudio realizado para la elaboración del PH de Cuenca aprobado en el 1998, serían datos elaborados en la década de los 80 o principios de los 90, hace casi 20 años. No se han tenido en cuenta las variaciones esperadas de la pluviometría como consecuencia del cambio climático, ni las evapotranspiraciones que tendrán lugar con el aumento de temperatura esperado, creemos que se deberían hacer estudios con series reducidas de los últimos 20 años para así acercarnos más a las condiciones climáticas que hay hoy. Si no se dispone de datos actuales corregidos con las previsiones esperadas por los modelos que tienen en cuenta el cambio climático, es necesario hacer estudios actuales sobre esos parámetros ya que difícilmente se podrá hacer una evaluación correcta si partimos de datos erróneos.

3- Los caudales ecológicos son los definidos en el P.H de Cuenca, y en este momento la DMA plantea otros criterios para su determinación. Para poder estimar extracciones de agua de una determinada masa de agua superficial es imprescindible saber cuanta es necesaria para poder mantener en buenas condiciones los ecosistemas fluviales.
En la página 35 se muestra la Tabla 8 "Caudales ecológicos en los principales embalses de la Cuenca del Norte", sin embargo en dicha tabla solamente aparecen 3 embalses, estando ausentes, entre otros, los tres embalses del Navia donde se encuentran los mayores de la cuenca (Salime y Doiras). Tampoco se especifica como se controlará el

cumplimiento de mantener este caudal (en la actualidad existen muchas dudas sobre el cumplimiento en varios lugares de la demarcación)
Es imprescindible programar la instalación de redes de control cuantitativos y cualitativos (aforos en ríos y arroyos, análisis químicos y bacteriológicos rutinarios y extraordinarios en zonas de riesgo de contaminación puntual, etc) que permitan conocer en el futuro y de forma instantánea datos necesarios para tomar decisiones avaladas por la racionalidad y el rigor. Es necesario conocer no solo el estado de una masa de agua sino el tipo y cantidad de contaminante o tipo de alteración morfológica. En el documento viene en forma gráfica (mapa con distintos colores según el estado de la masa de agua) pero se necesita conocer en mayor profundidad para mejorarlo, sobre todo en el río Nalón y sus afluentes, y la parte baja del Navia (aguas de transición)

4- En relación con la demanda se proporcionan datos estimados (del Instituto Nacional de Estadística) **y sin desagregar**.
No se puede planificar con criterios racionales si no se dispone de una buena información. ¿Cuanta agua se destina a consumo urbano, cuanta se va por las redes, cuanta se destina a consumo industrial, etc?. Para el caso de la piscifactorías se dice que *requieren un volumen importante de agua* pero no se aporta ninguna cifra concreta. No debería ser muy difícil conocer estos datos ya que son informaciones que pueden proporcionar los Ayuntamientos o sus empresas gestoras de agua, el consorcio CADASA y las industrias más consumidoras de agua en Asturias. Además se deberían reflejar los datos desagregados por sectores, cuencas y subcuencas.

5- Al referirse a las **masas de agua muy modificadas** se menciona el estuario del Navia describiendo las alteraciones sufridas desde el siglo XIX y señalando que las más recientes son las llevadas a cabo por la construcción de los grandes embalses; sin embargo no se hace ninguna alusión a las obras del **trasvase** previsto.

6- ¿Con que criterios se han seleccionado los tramos de río de interés medioambiental y los de interés natural?. En el punto 3.5.5 se exponen las características que debe cumplir un tramo para ser considerado de interés medioambiental y más adelante muestra un listado en el que faltan muchos tramos e incluso ríos enteros que cumplen esas características. Curiosamente está el río Alba (que tiene una piscifactoría) y falta el Caliao.

7- En el análisis de presiones e impactos tan solo el río Noreña se considera en riesgo seguro por fuentes puntuales de contaminación y por alteraciones morfológicas, sin embargo son patentes los problemas de contaminación y alteración morfológica que existen en muchos otros ríos.

8- Falta total de datos relacionados con las masas de agua subterráneas, apenas existen piezómetros, ni estudios de los diferentes acuíferos, no se dan cifras de recarga ni de descarga. Teniendo en cuenta que la extracción de agua subterránea ha de hacerse considerando la importancia que los diferentes manantiales tienen para el mantenimiento del buen estado de las masas de agua superficial y el cumplimiento de sus funciones medioambientales, y que también es preciso conocer los intercambios de agua entre diferentes acuíferos comunicados, sería imprescindible establecer un programa de actuaciones hasta el 2015 que consiga paliar esa deficiencia de conocimiento. También es imprescindible establecer mecanismos que permitan conocer

las extracciones que se realizan desde los pozos instalados en los diferentes acuíferos y no confiar en que los usuarios respetarán los caudales de su concesión.
Son especialmente importantes las masas de agua 012.006 (Oviedo- Cangas de Onis), 012.005 (Villaviciosa), y 012.007 (Llanes-Ribadesella), por ubicarse en zonas muy pobladas y tener instalados sondeos de abastecimiento.

9- En Asturias existen numerosos huecos en el subsuelo producto de las explotaciones mineras de carbón del último siglo, una vez abandonadas las labores mineras esos huecos son rellenados por agua hasta que rebosa a los cauces fluviales. Son aguas subterráneas muy alteradas y que requieren que se las tenga en cuenta a la hora de planificar ya que representan un volumen muy grande (un volumen equivalente a los m^3 de carbón y estériles extraídos por debajo de la cota de los ríos, reducido por la compactación producida) concentrado casi exclusivamente en la cuenca del Nalón (Nalón, Aller).

10.- Deberían analizarse medidas de ahorro y gestión de la demanda que permitieran cumplir los objetivos de la directiva. **No se hace**, y creemos que debe ser un objetivo prioritario para el futuro más inmediato.

11.- En lo referente a la **recuperación de costes**, en el documento se señala que en **Asturias sólo** se produce una recuperación del **56,48%** de los costes. Esto exigiría poner en marcha medidas para lograr la recuperación total, es decir subidas de las tarifas en términos reales, organizando su estructura de forma que incentivaran el ahorro. Sin embargo **no se propone nada para mejorar la tasa de recuperación**, es más, en la pagina 209 se supone para el periodo hasta 2015 un escenario de **estabilidad de precios** en términos reales.
Es decir, en materia de recuperación de costes, se ignora totalmente lo que señala la Directiva.

12-Escenarios de demanda. En ese capítulo se hacen unas consideraciones sobre la elasticidad de la demanda de agua (dicen que es de -0.65), los factores de los que depende, etc y **se calcula un escenario** de demanda urbana para 2015 que en consumo urbano **supone un cierto crecimiento** con respecto a la actualidad, pasando de 120 a 124 Hm^3. **Para calcular esta demanda parten de supuestos contrarios a los principios de la directiva**: suponen que los precios en términos reales no aumentarán (no se recuperarán los costes), no consideran el cambio tecnológico y sus posibilidades en cuanto a los mecanismos de ahorro de agua en electrodomésticos, etc, presumen que el consumo por vivienda y persona no va a cambiar nada (no se prevé una política de fomento del ahorro), etc
Es decir, se calcula un escenario de demanda totalmente al margen de las indicaciones de la Directiva. Es como si se dijera: la Directiva está muy bien, y sus contenidos también, pero aquí todo eso no nos afecta y el escenario futuro no tiene nada que ver con eso. Los redactores del documento parece que no se creen en absoluto los objetivos ni la filosofía de la DMA. Y entendemos que eso no puede ser. Es una burla a la ley, a los ciudadanos y al medio ambiente.

13- En relación con todo esto queremos destacar también que según los últimos datos del INE **desde 2000 está bajando el consumo de agua en España: un 6.48%** entre 2000 y 2005. Sobre todo baja por la disminución de las pérdidas (-20.59%) y la del

consumo industrial (-5.68%), pero también por la bajada del consumo de los hogares (-1.19%).
En cambio, en Asturias, es de los sitios donde **aumenta,** al contrario que la tendencia nacional,. ¿Por qué se produce esto? Creemos que está claro que se produce porque en Asturias hay una ausencia total de políticas de ahorro y gestión de la demanda. Y esto no debe seguir así y **debe corregirse urgentemente**. El nuevo Plan Hidrológico debe contribuir a ello.

14- En relación con los costes medioambientales, no siempre se pueden pagar ciertos impactos que algunas actuaciones llevan implícitas, por muchas medidas correctoras que se quieran tomar y sobre todo por que la mayoría de esos impactos son irreversibles.

15- En el documento **se resaltan las tendencias del aumento del nº de plazas turísticas pero esos datos deben conocerse con más precisión** ya que para planificar es necesario saber de cuanta demanda se parte y que parte de la demanda doméstica proviene de segundas residencias y turismo (campos de golf asociados a urbanizaciones) y que tiene en la época estival (la de mayor escasez) su mayor consumo.

16- Se menciona que se esperan demandas de consumo para usos de refrigeración en instalaciones de producción energética de 40 Hm^3, pero **¿se han tenido en cuenta los proyectos de instalación de centrales de ciclo combinado y sus consumos de refrigeración**?.

17- Por último resaltar la deficiente calidad de los mapas presentados que dificulta su análisis.

Por lo expuesto,
SOLICITO:

1º. Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones se tengan en cuenta las mismas y sean contestadas.

Oviedo a 25 de enero de 2008

El Presidente de ACA
Domingo Goñi Tirapu

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
Núm. 0870097
- 1 FEB. 2008
ENTRADA
25. 1. 2008 CORREOS LLANES
arall

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
29 ENE 2008
Confederación Hidrográfica del Norte
ENTRADA 1357

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

(Plaza España, Oviedo)

La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), declarada de utilidad pública, con NIF G33327651, y domicilio a efectos de comunicación en La Pesa de Pría, 33591- Llanes y en su representación y como secretario de la misma Domingo Goñi Tirapu con DNI 15876193Y; ante Vd. comparece en forma y plazo y como mejor proceda, DICE:

Que por medio del presente escrito, y en relación con el "**PROGRAMA, CALENDARIO Y FÓRMULAS DE CONSULTA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN**", y "**PROYECTO DE PARTICIPACIÓN** actualmente en fase de consulta pública, viene a presentar las siguientes:

-ALEGACIONES

1- **Ausencia de calendario concreto de continuación del proceso**. La mayoría nos enteramos por "alguien" que nos dice que va a convocarse una reunión en un determinado ámbito y, a última hora, se convoca desde la página web de la Confederación a las reuniones de Temas Importantes para los ámbitos central (día 31 de enero), y oriental (día 5 de febrero). En fecha del 18 de Enero acabamos de enterarnos de la reunión por un correo electrónico enviado por el único grupo ecologista que ha sido convocado.

2- **El horario de las reuniones no facilita la presencia de las organizaciones sociales** ya que sus representantes son trabajador@s y algunas de las reuniones han sido convocadas por la mañana. Las convocatorias a las 2ª reuniones se hace en la mañana tanto en Oviedo (ámbito Central) como en Llanes (ámbito Oriental) perseverando en los horarios inconvenientes para las personas que trabajan. Además las fechas de reunión de diferentes ámbitos coinciden en el día y en la hora imposibilitando la asistencia a quien desee participar en todas.

3- **Falta de interés por impulsar la sensibilización social sobre la gestión del agua**. Hasta el momento y vamos hacia la 2ª reunión no se han convocado ni concretado ningún tipo de jornada pública, taller, o debate sobre el diagnóstico ni sobre los Temas Importantes, tampoco la administración ha llevado a cabo ninguna difusión en los medios de comunicación de Asturias. La dinámica actual, de seguir así, no difiere demasiado de otros procesos en los que es preceptivo el informe de impacto ambiental dando un plazo para la presentación de alegaciones. No nos parece que sea ese el espíritu ni la letra de la DMA, en la que nos parece, se quiere impulsar un proceso donde las partes interesadas sean protagonistas y al final del proceso se llegue a un nuevo P.H ampliamente consensuado, y producto del conocimiento y el debate.

4- **Falta de apoyo económico para hacer determinados estudios** o poder disponer de técnicos de nuestra confianza para clarificarnos en determinados temas de los que no somos especialistas.

Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL). Asociación declarada De Utilidad Pública (BOE 12-5-2004)
Apartado de Correos 81 - 33500 Llanes (Asturias)

5- Total dependencia de la web de la Confederación y de la dinámica que marca la Mesa. No se convoca a las organizaciones sociales a pesar de que en la primera reunión se proporcionaron las direcciones adecuadas para hacer las convocatorias.

6- Imposibilidad de ascender en la cadena de datos hasta las fuentes de información que han permitido elaborar los documentos, si bien en la web se han colgado los documentos en discusión hasta el momento, y se han hecho algunos documentos divulgativos sintéticos interesantes sobre los temas a tratar.

7-Creemos que en este proceso se debería dar ejemplo de sensibilidad medioambiental y utilizar papel reciclado en los documentos.

Y en relación con el "ESTUDIO GENERAL DE LA DEMARCACIÓN", actualmente en fase de consulta pública, presentamos las siguientes Alegaciones:

1- Ausencia de todo tipo de referencias a la identificación de problemas y conflictos relacionados con el agua y que desde hace tiempo han sido motivo de movilizaciones ciudadanas en algunos ámbitos de la Cuenca Norte (embalse de Caliao, trasvase del Navia, encauzamientos de arroyos en Corvera y otros lugares, potenciales y peligrosos nuevos demandantes de agua en las nuevas urbanizaciones costeras y campos de golf asociados, etc.).

2- No se mencionan las fuentes ni las fechas de los estudios sobre las condiciones climáticas y los recursos hídricos.
Teniendo en cuenta la escasez de estaciones meteorológicas que están operativas no se pueden considerar actualizados los resultados que se presentan. Lo mismo se puede decir sobre las aportaciones de los ríos dada la deficiente calidad y cantidad de estaciones de aforo. Si los datos provienen del estudio realizado para la elaboración del PH de Cuenca aprobado en el 1998, serían datos elaborados en la década de los 80 o principios de los 90, hace casi 20 años. No se han tenido en cuenta las variaciones esperadas de la pluviometría como consecuencia del cambio climático, ni las evapotranspiraciones que tendrán lugar con el aumento de temperatura esperado, creemos que se deberían hacer estudios con series reducidas de los últimos 20 años para así acercarnos más a las condiciones climáticas que hay hoy. Si no se dispone de datos actuales corregidos con las previsiones esperadas por los modelos que tienen en cuenta el cambio climático, es necesario hacer estudios actuales sobre esos parámetros ya que difícilmente se podrá hacer una evaluación correcta si partimos de datos erróneos.

3- Los caudales ecológicos son los definidos en el P.H de Cuenca, y en este momento la DMA plantea otros criterios para su determinación. Para poder estimar extracciones de agua de una determinada masa de agua superficial es imprescindible saber cuanta es necesaria para poder mantener en buenas condiciones los ecosistemas fluviales.
En la página 35 se muestra la Tabla 8 "Caudales ecológicos en los principales embalses de la Cuenca del Norte", sin embargo en dicha tabla solamente aparecen 3 embalses, estando ausentes, entre otros, los tres embalses del Navia donde se encuentran los mayores de la cuenca (Salime y Doiras). Tampoco se especifica como se controlará el cumplimiento de mantener este caudal (en la actualidad existen muchas dudas sobre el cumplimiento en varios lugares de la demarcación)
Es imprescindible programar la instalación de redes de control cuantitativos y cualitativos (aforos en ríos y arroyos, análisis químicos y bacteriológicos rutinarios y extraordinarios en zonas de riesgo

Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL). Asociación declarada De Utilidad Pública (BOE 12-5-2004)
Apartado de Correos 81 - 33500 Llanes (Asturias)

de contaminación puntual, etc) que permitan conocer en el futuro y de forma instantánea datos necesarios para tomar decisiones avaladas por la racionalidad y el rigor. Es necesario conocer no solo el estado de una masa de agua sino el tipo y cantidad de contaminante o tipo de alteración morfológica. En el documento viene en forma gráfica (mapa con distintos colores según el estado de la masa de agua) pero se necesita conocer en mayor profundidad para mejorarlo, sobre todo en el río Nalón y sus afluentes, y la parte baja del Navia (aguas de transición)

4- En relación con la demanda se proporcionan datos estimados (del Instituto Nacional de Estadística) **y sin desagregar**.
No se puede planificar con criterios racionales si no se dispone de una buena información. ¿Cuanta agua se destina a consumo urbano, cuanta se va por las redes, cuanta se destina a consumo industrial, etc?. Para el caso de la piscifactorías se dice que *requieren un volumen importante de agua* pero no se aporta ninguna cifra concreta. No debería ser muy difícil conocer estos datos ya que son informaciones que pueden proporcionar los Ayuntamientos o sus empresas gestoras de agua, el consorcio CADASA y las industrias más consumidoras de agua en Asturias. Además se deberían reflejar los datos desagregados por sectores, cuencas y subcuencas.

5- Al referirse a las **masas de agua muy modificadas** se menciona el estuario del Navia describiendo las alteraciones sufridas desde el siglo XIX y señalando que las más recientes son las llevadas a cabo por la construcción de los grandes embalses; sin embargo no se hace ninguna alusión a las obras del **trasvase** previsto.

6- ¿Con que criterios se han seleccionado los tramos de río de interés medioambiental y los de interés natural?. En el punto 3.5.5 se exponen las características que debe cumplir un tramo para ser considerado de interés medioambiental y más adelante muestra un listado en el que faltan muchos tramos e incluso ríos enteros que cumplen esas características. Curiosamente está el río Alba (que tiene una piscifactoría) y falta el Caliao.

7- En el análisis de presiones e impactos tan solo el río Noreña se considera en riesgo seguro por fuentes puntuales de contaminación y por alteraciones morfológicas, sin embargo son patentes los problemas de contaminación y alteración morfológica que existen en muchos otros ríos.

8- Falta total de datos relacionados con las masas de agua subterráneas, apenas existen piezómetros, ni estudios de los diferentes acuíferos, no se dan cifras de recarga ni de descarga. Teniendo en cuenta que la extracción de agua subterránea ha de hacerse considerando la importancia que los diferentes manantiales tienen para el mantenimiento del buen estado de las masas de agua superficial y el cumplimiento de sus funciones medioambientales, y que también es preciso conocer los intercambios de agua entre diferentes acuíferos comunicados, sería imprescindible establecer un programa de actuaciones hasta el 2015 que consiga paliar esa deficiencia de conocimiento. También es imprescindible establecer mecanismos que permitan conocer las extracciones que se realizan desde los pozos instalados en los diferentes acuíferos y no confiar en que los usuarios respetarán los caudales de su concesión.
Son especialmente importantes las masas de agua 012.006 (Oviedo- Cangas de Onis), 012.005 (Villaviciosa), y 012.007 (Llanes-Ribadesella), por ubicarse en zonas muy pobladas y tener instalados sondeos de abastecimiento.

9- En Asturias existen numerosos huecos en el subsuelo producto de las explotaciones mineras de carbón del último siglo, una vez abandonadas las labores mineras esos huecos son rellenados por agua hasta que rebosa a los cauces fluviales. Son aguas subterráneas muy alteradas y que requieren que se las tenga en cuenta a la hora de planificar ya que representan un volumen muy grande (un volumen equivalente a los m^3 de carbón y estériles extraídos por debajo de la cota de los ríos,

Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL). Asociación declarada De Utilidad Pública (BOE 12-5-2004)
Apartado de Correos 81 - 33500 Llanes (Asturias)

reducido por la compactación producida) concentrado casi exclusivamente en la cuenca del Nalón (Nalón, Aller).

10.- Deberían analizarse medidas de ahorro y gestión de la demanda que permitieran cumplir los objetivos de la directiva. **No se hace**, y creemos que debe ser un objetivo prioritario para el futuro más inmediato.

11.- En lo referente a la **recuperación de costes**, en el documento se señala que en **Asturias sólo** se produce una recuperación del **56,48%** de los costes. Esto exigiría poner en marcha medidas para lograr la recuperación total, es decir subidas de las tarifas en términos reales, organizando su estructura de forma que incentivaran el ahorro. Sin embargo **no se propone nada para mejorar la tasa de recuperación**, es más, en la pagina 209 se supone para el periodo hasta 2015 un escenario de **estabilidad de precios** en términos reales.
Es decir, en materia de recuperación de costes, se ignora totalmente lo que señala la Directiva.

12-Escenarios de demanda. En ese capítulo se hacen unas consideraciones sobre la elasticidad de la demanda de agua (dicen que es de -0.65), los factores de los que depende, etc y **se calcula un escenario** de demanda urbana para 2015 que en consumo urbano **supone un cierto crecimiento** con respecto a la actualidad, pasando de 120 a 124 Hm^3. **Para calcular esta demanda parten de supuestos contrarios a los principios de la directiva**: suponen que los precios en términos reales no aumentarán (no se recuperarán los costes), no consideran el cambio tecnológico y sus posibilidades en cuanto a los mecanismos de ahorro de agua en electrodomésticos, etc, presumen que el consumo por vivienda y persona no va a cambiar nada (no se prevé una política de fomento del ahorro), etc
Es decir, se calcula un escenario de demanda totalmente al margen de las indicaciones de la Directiva. Es como si se dijera: la Directiva está muy bien, y sus contenidos también, pero aquí todo eso no nos afecta y el escenario futuro no tiene nada que ver con eso. Los redactores del documento parece que no se creen en absoluto los objetivos ni la filosofía de la DMA. Y entendemos que eso no puede ser. Es una burla a la ley, a los ciudadanos y al medio ambiente.

13- En relación con todo esto queremos destacar también que según los últimos datos del INE **desde 2000 está bajando el consumo de agua en España: un 6.48%** entre 2000 y 2005. Sobre todo baja por la disminución de las pérdidas (-20.59%) y la del consumo industrial (-5.68%), pero también por la bajada del consumo de los hogares (-1.19%).
En cambio, en Asturias, es de los sitios donde **aumenta,** al contrario que la tendencia nacional,. ¿Por qué se produce esto? Creemos que está claro que se produce porque en Asturias hay una ausencia total de políticas de ahorro y gestión de la demanda. Y esto no debe seguir así y **debe corregirse urgentemente**. El nuevo Plan Hidrológico debe contribuir a ello.

14- En relación con los costes medioambientales, no siempre se pueden pagar ciertos impactos que algunas actuaciones llevan implícitas, por muchas medidas correctoras que se quieran tomar y sobre todo por que la mayoría de esos impactos son irreversibles.

15- En el documento **se resaltan las tendencias del aumento del nº de plazas turísticas pero esos datos deben conocerse con más precisión** ya que para planificar es necesario saber de cuanta demanda se parte y que parte de la demanda doméstica proviene de segundas residencias y turismo (campos de golf asociados a urbanizaciones) y que tiene en la época estival (la de mayor escasez) su mayor consumo.

Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL). Asociación declarada De Utilidad Pública (BOE 12-5-2004)
Apartado de Correos 81 - 33500 Llanes (Asturias)

16- Se menciona que se esperan demandas de consumo para usos de refrigeración en instalaciones de producción energética de 40 Hm^3, pero ¿**se han tenido en cuenta los proyectos de instalación de centrales de ciclo combinado y sus consumos de refrigeración**?.

17- **Por último resaltar la deficiente calidad de los mapas presentados que dificulta su análisis.**

Por lo expuesto,
SOLICITO:

1°. Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones se tengan en cuenta las mismas y sean contestadas.

Oviedo a 25 de enero de 2008

El Secretario de AVALL
Domingo Goñi Tirapu

PRESIDENCIA
SALIDA
Fecha 31 ENE. 2008
Firma

Confederación Hidrográfica del Norte
PRESIDENCIA
PASE
1. Original 2. Copia
☐ Presidencia
☐ Comisaría de Aguas
☐ Dirección Técnica
☐ Secretaría General
☒ O. Planificación
☐ Acunor
☐ .....
☐ .....
Fecha 30/01/08 Firma

Confederación Hidrográfica del Norte
PRESIDENCIA
PASE
1. Original 2. Copia
Presidencia
Comisaría de Aguas
Dirección Técnica
Secretaría General
O. Planificación
Acunor
Fecha 29/01/08 Firma
PRESIDENCIA
SALIDA
Fecha 29 ENE. 2008
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
25 ENE 2008
Confederación Hidrográfica del Norte
ENTRADA 1154
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
Número
08/0090
1 FEB.
ENTRADA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROFRÁFICA DEL NORTE
(Plaza España, Uviéu)

D. *Pablo Ríos Suárez*, mayor d'edá,con DNI número *10889562M* en nome propiu, y en representación de la muerganización *Andecha Astur*, y con domiciliu a efeutos de notificaciones en *Xixón, Cai Prendes Pando, 11 Baxu* énte Vd compaez en forma y plazu y comu meyor proceda, DIZ:

Que al traviés del presente escritu y en rellación col "*PROGRAMA, CALENDARIO Y FÓRMULAS DE CONSULTA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN*" y "*PROYECTO DE PARTICIPACIÓN*" anguañu en fas de consulta público, vien a presentar les siguientes:

ALTRIQUES

1. Ausencia de calandariu concretu de continuación del procesu. Los más enterémosmos por "daquién" que mos diz que va convocase un aconceyamientu nun determináu ámbetu y, a lo cabero, convócase dende la páxina ueb de la Confederación a los aconceyamientos de Temes Importantes pa los ámbetos central (díi 31 de xineru), y oriental (díi 5 febreru). En fecha del 18 Xineru venimos d'enteramos del aconceyamientu per un corréu lletrónicu unviáu pol únicu grupu ecoloxista que fuere convocáu.

2. L'horariu de los aconceyamientos nun facilita la presencia de les muerganizaciones sociales yá que los sos representantes son trabayaores y dellos de los aconceyamientos foren convocaos pela mañán. Les convocatories a los 2º aconceyamientos faese na mañán tanto n'Uviéu (ámbetu Central) comu en Llanes (ámbetu Oriental) perseverando nos horarios poco afayaizos pa les presones que trabayen. Amás les feches d'aconceyamientu d'estremaos ámbetos coinciden nel díi y na hora, imposibilitando l'asistencia a los que quieran participar en toes.

3. Falta d'interés por dar puxu a la sensibilización social sobro la xestión del augua. Fasta'l momentu y vamos pal 2º aconceyamientu nun se convocare nin concretare denguna triba de xornada pública, taller o alderiques sobro'l diagnósticu nin sobro los Temes Importantes, tampoco l'Alministración nun llevare alantre denguna difusión nos medios de comunicación nacionales. La dinámica d'anguañu, de siguir asina, nun s'estrema demasiadamente d'otros

procesos nos que ye preceptivo l'informe d'impautu ambiental dando un plazu pa la presentación d'altriques. Nun mos paez que seya esi l'espíritu nin la lletra de la DMA, na que mos paz, preténdese da-y puxu a un procesu onde les partes interesaes seyan protagonistes y a la fin del procesu lleguese a un nueu PH ampliamente consensuáu, y el productu del conocimientu y l'alderique.

4. Falta de sofitu económicu pa la rialización de determinaos estudios o poder cuntar con téunicos en quien enfotamos pa esclariamos en determinaos temes de los que nun somos especialistes.

5. Dependencia dafechu de la ueb de la Confederación y de la dinámica que marca la Mesa. Nun se convoquen a les muerganizaciones sociales pesia que nel primer aconceyamientu proporcionárense les direiciones afayaices pa facer les convocatories.

6. Imposibilidá d'ascender na cadena datos fasta les fontes d'información que permitieren ellaborar los documentos, si bien na ueb escolingárense los documentos en discutiniu fasta agora, y se fixeren dellos documentos divulgativos sintéticos interesantes sobro los temes a tratar.

7. Camentamos que nesti procesu debería dase exemplu de sensibilidá mediuambiental y emplegar papel recicláu nos documentos.

Y en rellación col "*ESTUDIU XENERAL DE LA DEMARCACIÓN*", anguañu na fas de consulta público, presentamos los Altriques que vienen darréu:

ALTRIQUES

1. Ausencia de toa triba de referencies a la identificación de problemes y conflictos rellacionaos col augua y que dende va tiempu son motivu de movilizaciones ciudadanes en dellos ámbetos de la denomada Cuenca Norte (banzáu de Caliao, tresvase del Navia, encalzamientos de regatos en Corvera y otros llugares, potenciales y pelligrosos nueos demandantes d'augua nes nueves urbanizaciones costeres y campos de golf asociaos, etc).

2. Nun se mencionen les fontes nin les feches de los estudios sobro les condiciones climátiques y los recursos hídricos.
   Teniendo en cunta la escasez d'estaciones meterorolóxiques que tan operatives nun puen considerase actualizaos los resultaos que se presenten. Lo mesmo pue dicise sobro les aportaciones de los ríos dao la deficiente calidá y cantidá d'estaciones d'aforu. Si los datos provienen del estudiu rializáu pa la ellaboración del PH de Cuenca aprebáu nel 1988, sedríen datos ellaboraos na década de los 80 o entamos de los 90, va cuasique 20 años. Nun se tuvo en cuenta les variaciones esperaes de la pluviometría comu consecuencia del cambiu climátiu, nin les evapotrespiraciones que tenrán llugar col aumentu la temperatura esperáu. Camentamos que deberíen faese estudios con series reducíes de los caberos 20 años p'asina averamos más a les condiciones climátiques anguañu esistentes. Si nun se dispón de datos actuales correxíos coles previsiones esperaes polos modelos que tienen en cunta'l cambiu climátiu, ye mester faer estudios actuales sobro esos parámetros darréu que dificilmente podrá facese una evaluación correcha si partimos de datos errónios.

3. Los caudales ecolóxicos son los definíos nel P.H. de Cuenca, y nesti intre la DMA plantega otros criterios pal so determín. Pa poder estimar estraiciones d'augua d'una determinada masa d'augua superficial ye imprescindible saber cuanta ye precisa pa poder caltener en bones condiciones los ecosistemes fluviales.
   Na páxina 35 amuesase la Tabla 8 "Caudales ecolóxicos nos principales banzaos de la Cuenca Norte", por embargu en dicha tabla namás apaecen 3 banzaos, tando ausentes, ente otros, los tres banzaos del Navia onde s'alcuentren los mayores de la cuenca (Salime y Doiras). Tampocu non s'especifica comu va controlase'l cumplimientu de caltener esti caudal (anguañu esisten munches duldes sobro'l cumplimientu en varios llugares de la demarcación).
   Ye imprescindible programar la istalación de redes de control cuantitatives y cualitatives (aforos en ríos y regatos, analís químicos y bauteriolóxicos rutinarios y estraordinarios en fasteres de riesgu de contaminación puntual, ect) que permitan conocer nel futuru y de mena istantanea datos precisos pa tomar decisiones avalaes pola racionalidá y el rigor. Ye preciso conocer non solo l'estáu d'una masa d'augua sinon la triba y cantidá de contaminante o triba d'alteración morfolóxica. Nel documentu vien en forma gráfico (mapa con estremaos collores sigún l'estáu de la masa d'augua) pero precisase conocer con mayor fondura pa meyoralu, sobro too nel ríu Nalón y los sos afluyentes, y la parte baxa del Navia (augües de transición).

4. En rellación cola demanda proporcionense datos estimaos (del Istitutu Nacional d'Estadística español) y ensin desagregar.
Nun pue planificase con criterios racionales si nun se dispón d'una bona información ¿Cuantu augua se destina a consumu urbanu, cuantu va peles redes, cuantu se destina a consumu industrial, ect? Pal casu de les pisicifactoríes dizse que *riquen un volume importante d'augua* pero nun s'aporta denguna cifra en concreto. Nun debiere ser perdificil conocer estos datos yá que son informaciones puen proporcionar los Ayuntamientos o les sos empreses xestores d'augua, el consorciu CADASA y les industriesmás consumidores d'augua n'Asturies. Amás deberíen espeyase los datos desagregaos por seutores, cuenques y subcuenques.

5. Al referise a les mases d'augua mui modificaes mencionase l'estuariu del Navia describiendo les alteraciones carecíes dende'l sieglu XIX y siñalando que les más recién son les llevaes a cabu pola costruición de los grands banzaos; por embargu nun se fae denguna alusión a les obres del tresvase previstu.

6. ¿Con qué criterios se seleicionaren los tramos de ríu d'interés mediuambiental y los d'interés natural? Nel puntu 3.5.5 espónense les carauterístiues que tien de cumplir un tramu pa ser consideráu d'interés mediuambiental y más alantre amuesa un llistáu nel que falten munchos tramos ya inclusu ríos enteros que cumplen eses carauterístiques. Curiosamente ta'l ríu Alba (que tien una piscifactoría) y falta El Caliao.

7. Nel analís de presiones ya impautos namás el ríu Noreña se considera en riesgu ciertu por fontes puntuales de contaminación y por ateraciones morfolóxiques, por embargu son patentes los problemes de contaminación y alteración morfolóxico qu'esisten en munchos otros ríos.

8. Falta dafechu de datos rellacionaos coles mases d'augua soterránies, malpenes esisten piezómetros, nin estudios de los estremaos acuiferos, nun se dan cifres de recarga nin descarga. Teniendo en cuenta que la estraición d'augua soterránia tien de faese considerando la importancia que los estremaos mananciales tienen pal caltenimientu del bon estáu de les mases d'augua superficial y el cumplimientu de les sos funciones mediuambientales, y que tamién ye preciso conocer los intercambios d'augua ente estremaos acuíferos comunicaos, sedríe imprescindible afitar un programa d'actuaciones fasta'l 2015 que seua a paliar esa deficiencia de

conocimientu. Tamién ye imprescindible afitar mecanismos que permitan conocer les estraiciones que se rialicen dende los pozos istalaos nos estremaos acuíferos y nun enfotase en que los usuarios respetarán los caudales de la so concesión.
Son especialmente importantes les mases d'augua 012.006 (Uviéu-Cangues d'Onís), 012.005 (Villaviciosa), y 012.007 (Llanes-Ribeseya), por afayase en fasteres mui poblaes y tener istalaos sondeos d'abastecimientu.

9. N'Asturies esisten numberosos fuexos nel sosuleu productu de les esplotaciones mineres de carbón nel sieglu caberu, una vuelta abandonaos los llabores mineros esos fuexos son recebaos por augua fasta que rebosa a los calces fluviales. Son augües soterránies mui alteraes y que riquen ser teníes en cunta a la hora planificar yá que representen un volume mui grande (un volume equivamlente a los m3 de carbón y estériles estrayíos per baxo la cota los ríos, reduciu pola compactación producío) concentrao causique esclusivamente na cuenca'l Nalón y El Caudal.

10. Debieren analizase midíes d'aforru y xestión de la demanda que permitieren cumplir los oxetivos de la direutiva. Nun se fae, y camentamos que debe ser un oxetivu prioritariu pal futuru más imediatu.

11. No que cinca a la recuperanza de costes, nel documentu siñalase que n'Asturies namás se produz una recuperanza del 56,48 % de los costos. Esto desixiría poner en marcha midíes pa llograr la recuperanza total, ello ye,xubíes de les tarifes en términos riales, organizando la so cadarma de miente qu'incentivaren l'aforru. Por embargu nun se propón ná pa meyorar la tasa de recuperanza, ye más, na páxina 209 supónse pal periodu fasta 2015 un escenariu d'estabilidá de precios en términos riales.
Ello ye, en materia de recuperanza de costos, ignórase dafechu lo que siñala la Direutiva.

12. Escenarios de demanda. Nesi capítulu faense unes considerances sobro la ellasticidá de la demanda d'augua (dicen que ye de -0,65) los factores de los que depende, etc y calculase un escenariu de demanda urbano pa 2015 qu'en consumu urbanu supón un ciertu xorrecimientu con respeutu a lo d'anguañu, pasando de 120 a 124 Hm3. Pa calcular esta demanda esta demanda parten de supuestos contrarios a los principios de la direutiva: suponen que los precios en términos riales nun aumentarán (nun se recuperarán los costos), nun

consideren que'l cambiu teunolóxicu y les sos posibilidaes en cuantes a los mecanismos d'aforru d'augua en lletrodomésticos, ect, presumen qu'el consumu por vivienda y persona nun va a camudar un res (nun se prevé una política de fomentu del aforru), etc.
Ello ye, calculase un escenariu de demanda al marxe dafechu de les indicaciones de la Direutiva. Ye comu si se dixera: la Direutiva ta perbien, y los sos conteníos tamién, pero equí too eso nun mos afeuta y l'escenariu futuru nun tien un res que ver con eso. Los redautores del documentu paez que nun se creen un res los oxetivos nin la filosofía de la DMA. Y atalantamos qu'eso nun pue ser. Ye una burlla a la llei, a los ciudadanos y al mediu ambiente.

13. En rellación con too ello queremos destacar tamién que sigún los datos caberos del INE dende 2000 ta baxando'l consumu d'augua nel Estáu español: un 6,48% ente 2000 y 2005. Sobro too baxa pol amenorgamientu les perdes (-20,59%) y la del consumu industrial (-5,68%), pero tamién pola baxada del consumu de los hogares (-,19%).
A la escontra, n'Asturies ye de los sitios onde aumente, a la escontra de la tendencia nacional ¿Por qué se produz esto? Creyemos que ye nidio que se produz porque n'Asturies hai una ausencia dafechu de polítiques d'aforru y xestión de la demanda. Y esto nun pue siguir asina y tien de correxise urxentemente. El nueu Plan Hidrolóxicu tien de contribuyir a ello.

14. En rellación colos costos mediuambientales, nun siempres puen pagase ciertos impautos que delles d'actuaciones arrecostinen, por munches midíes correchores que quieran tomase y sobro too porque los más d'esos impautos son inreversibles.

15. Nel documentu resaltense les tendencies del aumentu del númberu de places turístiques pero esos datos tienen de conocese con más precisión darréu que pa planificar ye preciso saber de cuanta demanda se parte y que parte dela demanda doméstico provién de segundes residencies y turismu (campos de golf asociaos a urbanizaciones) y que tien na dómina estival (la de mayor escasez) el so mayor consumu.

16. Menciónase que s'esperen demandes de consumu pa usos de refrixeración n'istalaciones de produición enerxético de 40 Hm3, pero ¿Tovierense en cunta los proyeuros d'istalación de cientrales de ciclu combináu y los sos consumos de refrixeración?

17. Pa finar, solliñar la deficiente calidá de los mapes presentaos que fae enforma abegoso'l so analís.

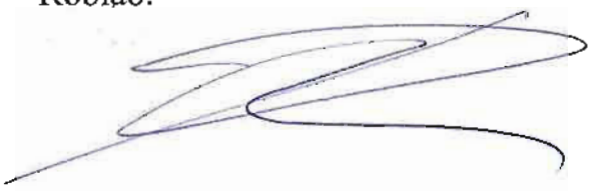
Polo espuesto:

SOLICITO:

1°.- Que teniendo por rializaes les presentes altriques tengase en cuenta les mesmes y seyan contestaes.

Uviéu a 25 xineru de 2008-01-24

Roblao:



ECOLOXISTES ASTURIES
N'Aición

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
25 ENE 2008
Confederación Hidrográfica del Norte
ENTRADA 1151

A LA CONFEDERACIÓN HIDROFRÁFICA DEL NORTE
(Plaza España, Uviéu)

D. Beatriz González Fernández, mayor d'edá, con DNI 9358554 en representación de Ecoloxistes N'Aición D'Asturies, y con domiciliu a efeutos de notificaciones en Ovieu, c/ Marcelino Suarez nº 8, 6º B, 33012, énte Vd compaez en forma y plazu y comu meyor proceda, DIZ:

Que al traviés del presente escritu y en rellación col "PROGRAMA, CALENDARIO Y FÓRMULAS DE CONSULTA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN" y "PROYECTO DE PARTICIPACIÓN" anguañu en fas de consulta público, vien a presentar les siguientes:

ALTRIQUES

1º Ausencia de calandariu concretu de continuación del procesu. Los más enterémosmos por "daquién" que mos diz que va convocase un aconceyamientu nun determináu ámbetu y, a lo cabero, convócase dende la páxina ueb de la Confederación a los aconceyamientos de Temes Importantes pa los ámbetos central (díi 31 de xineru), y oriental (díi 5 febreru). En fecha del 18 Xineru venimos d'enteramos del aconceyamientu per un corréu lletrónicu unviáu pol únicu grupu ecoloxista que fuere convocáu.

2º L'horariu de los aconceyamientos nun facilita la presencia de les muerganizaciones sociales yá que los sos representantes son trabayaores y dellos de los aconceyamientos foren convocaos pela mañán. Les convocatories a los 2º aconceyamientos faese na mañán tanto n'Uviéu (ámbetu Central) comu en Llanes (ámbetu Oriental) perseverando nos horarios poco afayaizos pa les presones que trabayen. Amás les feches d'aconceyamientu d'estremaos ámbetos coinciden nel díi y na hora, imposibilitando l'asistencia a los que quieran participar en toes.

3º Falta d'interés por dar puxu a la sensibilización social sobro la xestión del augua. Fasta'l momentu y vamos pal 2º aconceyamientu nun se convocare nin concretare denguna triba de xornada pública, taller o alderiques sobro'l diagnósticu nin sobro los Temes Importantes, tampoco l'Alministración nun llevare alantre denguna difusión nos medios de comunicación nacionales. La dinámica d'anguañu, de siguir asina, nun s'estrema demasiadamente d'otros procesos nos que ye preceptivo l'informe d'impautu ambiental dando un plazu pa la presentación d'altriques. Nun mos paez que seya esi l'espíritu nin la lletra de la DMA, na que mos paz, preténdese da-y puxu a un procesu onde les partes interesaes seyan protagonistes y a la fin del procesu lleguese a un nueu PH ampliamente consensuáu, y el productu del conocimientu y l'alderique.

4º Falta de sofitu económicu pa la rialización de determinaos estudios o poder cuntar con téunicos en quien enfotamos pa esclariamos en determinaos temes de los que nun somos especialistes.

5º Dependencia dafechu de la ueb de la Confederación y de la dinámica que marca la Mesa. Nun se convoquen a les muerganizaciones sociales pesia que nel primer aconceyamientu proporcionárense les direiciones afayaices pa facer les convocatories.

6º Imposibilidá d'ascender na cadena datos fasta les fontes d'información que permitieren ellaborar los documentos, sí bien na ueb escolingárense los documentos en discutiniu fasta agora, y se fixeren dellos documentos divulgativos sintéticos interesantes sobro los temes a tratar.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
Número
08/0093
- 1 FEB. 2008
ENTRADA

7º- Camentamos que nesti procesu debería dase exemplu de sensibilidá mediuambiental y emplegar papel recicláu nos documentos.

Y en rellación col "ESTUDIU XENERAL DE LA DEMARCACIÓN", anguañu na fas de consulta público, presentamos los Altriques que vienen darréu:

1º.- Ausencia de toa triba de referencies a la identificación de problemes y conflictos rellacionaos col augua y que dende va tiempu son motivu de movilizaciones ciudadanes en dellos ámbetos de la denomada Cuenca Norte (banzáu de Caliao, tresvase del Navia, encalzamientos de regatos en Corvera y otros llugares, potenciales y pelligrosos nueos demandantes d'augua nes nueves urbanizaciones costeres y campos de golf asociaos, etc).

2º.- Nun se mencionen les fontes nin les feches de los estudios sobro les condiciones climátiques y los recursos hídricos.
Teniendo en cunta la escasez d'estaciones meterorolóxiques que tan operatives nun puen considerase actualizaos los resultaos que se presenten. Lo mesmo pue dicise sobro les aportaciones de los ríos dao la deficiente calidá y cantidá d'estaciones d'aforu. Si los datos provienen del estudiu rializáu pa la ellaboración del PH de Cuenca aprebáu nel 1988, sedríen datos ellaboraos na década de los 80 o entamos de los 90, va cuasique 20 años. Nun se tuvo en cuenta les variaciones esperaes de la pluviometría comu consecuencia del cambiu climátiu, nin les evapotrespiraciones que tenrán llugar col aumentu la temperatura esperáu. Camentamos que deberíen faese estudios con series reducíes de los caberos 20 años p'asina averamos más a les condiciones climátiques anguañu esistentes. Si nun se dispón de datos actuales correxíos coles previsiones esperaes polos modelos que tienen en cunta'l cambiu climátiu, ye mester faer estudios actuales sobro esos parámetros darréu que dificilmente podrá facese una evaluación correcha si partimos de datos errónios.

3º.- Los caudales ecolóxicos son los definíos nel P.H. de Cuenca, y nesti intre la DMA plantega otros criterios pal so determín. Pa poder estimar estraiciones d'augua d'una determinada masa d'augua superficial ye imprescindible saber cuanta ye precisa pa poder caltener en bones condiciones los ecosistemes fluviales.
Na páxina 35 amuesase la Tabla 8 "Caudales ecolóxicos nos principales banzaos de la Cuenca Norte", por embargu en dicha tabla namás apaecen 3 banzaos, tando ausentes, ente otros, los tres banzaos del Navia onde s'alcuentren los mayores de la cuenca (Salime y Doiras). Tampocu non s'especifica comu va controlase'l cumplimientu de caltener esti caudal (anguañu esisten munches dulces sobro'l cumplimientu en varios llugares de la demarcación).
Yc imprescindiblc programar la istalación de redes de control cuantitatives y cualitatives (aforos en ríos y regatos, analís químicos y bauteriolóxicos rutinarios y estraordinarios en fasteres de riesgu de contaminación puntual, ect) que permitan conocer nel futuru y de mena istantanea datos precisos pa tomar decisiones avalaes pola racionalidá y el rigor. Ye preciso conocer non solo l'estáu d'una masa d'augua sinon la triba y cantidá de contaminante o triba d'alteración morfolóxica. Nel documentu vien en forma gráfico (mapa con estremaos collores sigún l'estáu de la masa d'augua) pero precisase conocer con mayor fondura pa meyoralu, sobro too nel ríu Nalón y los sos afluyentes, y la parte baxa del Navia (augües de transición).
4º.- En rellación cola demanda proporcionense datos estimaos (del Istitutu Nacional d'Estadística español) y ensin desagregar.
Nun pue planificase con criterios racionales si nun se dispón d'una bona información ¿Cuantu augua se destina a consumu urbanu, cuantu va peles redes, cuantu se destina a consumu industrial, ect? Pal casu de les pisicifactoríes dizse que *riquen un volume importante d'augua* pero nun s'aporta denguna cifra en concreto. Nun debiere ser perdificil conocer estos datos yá que son informaciones puen proporcionar los Ayuntamientos o les sos empreses xestores d'augua, el consorciu CADASA y les industriesmás consumidores d'augua n'Asturies. Amás deberíen espeyase los datos desagregaos por seutores, cuenques y subcuenques.

5º.-Al referise a les mases d'augua mui modificaes mencionase l'estuariu del Navia describiendo les alteraciones carecíes dende'l sieglu XIX y siñalando que les más recién son les llevaes a cabu pola costruición de los grands banzaos; por embargu nun se fae denguna alusión a les obres del tresvase previstu.

6º.- ¿Con qué criterios se seleicionaren los tramos de ríu d'interés mediuambiental y los d'interés natural? Nel puntu 3.5.5 espónense les carauterístiues que tien de cumplir un tramu pa ser consideráu d'interés mediuambiental y más alantre amuesa un llistáu nel que falten munchos tramos ya inclusu ríos enteros que cumplen eses carauterístiques. Curiosamente ta'l ríu Alba (que tien una piscifactoría) y falta El Caliao.

7º.- Nel analís de presiones ya impautos namás el ríu Noreña se considera en riesgu ciertu por fontes puntuales de contaminación y por ateraciones morfolóxiques, por embargu son patentes los problemes de contaminación y alteración morfolóxico qu'esisten en munchos otros ríos.

8º.- Falta dafechu de datos rellacionaos coles mases d'augua soterránies, malpenes esisten piezómetros, nin estudios de los estremaos acuiferos, nun se dan cifres de recarga nin descarga. Teniendo en cuenta que la estraición d'augua soterránia tien de faese considerando la importancia que los estremaos mananciales tienen pal caltenimientu del bon estáu de les mases d'augua superficial y el cumplimientu de les sos funciones mediuambientales, y que tamién ye preciso conocer los intercambios d'augua ente estremaos acuíferos comunicaos, sedríe imprescindible afitar un programa d'actuaciones fasta'l 2015 que seua a paliar esa deficiencia de conocimientu. Tamién ye imprescindible afitar mecanismos que permitan conocer les estraiciones que se rialicen dende los pozos istalaos nos estremaos acuíferos y nun enfotase en que los usuarios respetarán los caudales de la so concesión.
Son especialmente importantes les mases d'augua 012.006 (Uviéu-Cangues d'Onís), 012.005 (Villaviciosa), y 012.007 (Llanes-Ribeseya), por afayase en fasteres mui poblaes y tener istalaos sondeos d'abastecimientu.

9º.- N'Asturies esisten numberosos fuexos nel sosuleu productu de les esplotaciones mineres de carbón nel sieglu caberu, una vuelta abandonaos los llabores mineros esos fuexos son recebaos por augua fasta que rebosa a los calces fluviales. Son augües soterránies mui alteraes y que riquen ser teníes en cunta a la hora planificar yá que representen un volume mui grande (un volume equivamlente a los m3 de carbón y estériles estrayíos per baxo la cota los ríos, reducíu pola compactación producío) concentrao causique esclusivamente na cuenca'l Nalón y El Caudal.

10º.- Debieren analizase midíes d'aforru y xestión de la demanda que permitieren cumplir los oxetivos de la direutiva. Nun se fae, y camentamos que debe ser un oxetivu prioritariu pal futuru más imediatu.

11º.- No que cinca a la recuperanza de costes, nel documentu siñalase que n'Asturies namás se produz una recuperanza del 56,48 % de los costos. Esto desixiría poner en marcha midíes pa llograr la recuperanza total, ello ye,xubíes de les tarifes en términos riales, organizando la so cadarma de miente qu'incentivaren l'aforru. Por embargu nun se propón ná pa meyorar la tasa de recuperanza, ye más, na páxina 209 supónse pal periodu fasta 2015 un escenariu d'estabilidá de precios en términos riales.
Ello ye, en materia de recuperanza de costos, ignórase dafechu lo que siñala la Direutiva.

12º.- Escenarios de demanda. Nesi capítulu faense unes considerances sobro la ellasticidá de la demanda d'augua (dicen que ye de -0,65) los factores de los que depende, etc y calculase un escenariu de demanda urbano pa 2015 qu'en consumu urbanu supón un ciertu xorrecimientu con respeutu a lo d'anguañu, pasando de 120 a 124 Hm3. Pa calcular esta demanda esta demanda parten de supuestos contrarios a los principios de la direutiva: suponen que los precios en términos riales nun aumentarán (nun se recuperarán los costos), nun consideren que'l

cambiu teunolóxicu y les sos posibilidaes en cuantes a los mecanismos d'aforru d'augua en lletrodomésticos, ect, presumen qu'el consumu por vivienda y persona nun va a camudar un res (nun se prevé una política de fomentu del aforru), etc.
Ello ye, calculase un escenariu de demanda al marxe dafechu de les indicaciones de la Direutiva. Ye comu si se dixera: la Direutiva ta perbien, y los sos contenios tamién, pero equí too eso nun mos afeuta y l'escenariu futuru nun tien un res que ver con eso. Los redautores del documentu paez que nun se creen un res los oxetivos nin la filosofía de la DMA. Y atalantamos qu'eso nun pue ser. Ye una burlla a la llei, a los ciudadanos y al mediu ambiente.

13°.- En rellación con too ello queremos destacar tamién que sigún los datos caberos del INE dende 2000 ta baxando'l consumu d'augua nel Estáu español: un 6,48% ente 2000 y 2005. Sobro too baxa pol amenorgamientu les perdes (-20,59%) y la del consumu industrial (-5,68%), pero tamién pola baxada del consumu de los hogares (-,19%).
A la escontra, n'Asturies ye de los sitios onde aumente, a la escontra de la tendencia nacional ¿Por qué se produz esto? Creyemos que ye nidio que se produz porque n'Asturies hai una ausencia dafechu de polítiques d'aforru y xestión de la demanda. Y esto nun pue siguir asina y tien de correxise urxentemente. El nueu Plan Hidrolóxicu tien de contribuyir a ello.

14°.- En rellación colos costos mediuambientales, nun siempres puen pagase ciertos impautos que delles d'actuaciones arrecostinen, por munches midíes correchores que quieran tomase y sobro too porque los más d'esos impautos son inreversibles.

15° Nel documentu resaltense les tendencies del aumentu del númberu de places turístiques pero esos datos tienen de conocese con más precisión darréu que pa planificar ye preciso saber de cuanta demanda se parte y que parte dela demanda doméstico provién de segundes residencies y turismu (campos de golf asociaos a urbanizaciones) y que tien na dómina estival (la de mayor escasez) el so mayor consumu.

16°.- Menciónase que s'esperen demandes de consumu pa usos de refrixeración n'istalaciones de produición enerxético de 40 Hm3, pero ¿Tovierense en cunta los proyeuros d'istalación de cientrales de ciclu combináu y los sos consumos de refrixeración?

17°.- Pa finar, solliñar la deficiente calidá de los mapes presentaos que fae enforma abegoso'l so analís.

Polo espuesto

SOLICITO:
1°.- Que teniendo por rializaes los presentes altriques tengase en cuenta les mesmes y seyan contestaes.

Uviéu a 25 xineru de 2008-01-24

Roblao: Beatriz González Fernández

ECOLOXISTES ASTURIES
n'iniciativa
c/ San Ignacio, 8 bajo 33205 XIXÓN
c/El Peso, 8 - 2° - 33009 UVIÉU
www.ecoloxistesasturies.org

PRESIDENCIA
SALIDA
30 ENE. 2008
Fecha
Firma

Confederación Hidrográfica del Norte
PRESIDENCIA
PASE
1. Original 2. Copia
☐ Presidencia
☐ Comisaría de Aguas
☐ Dirección Técnica
☐ Secretaría General
☒ O. Planificación
☐ Acunor
☐ .....
☐ .....
Fecha 29/01/08 Firma

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
25 ENE 2008
Confederación Hidrográfica del Norte
ENTRADA 153

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE
(Plaza España, Oviedo)

D. **Eduardo Menéndez Casares**, mayor de edad, con D.N.I. número 10544199, actuando en representación propia y con domicilio a efecto de notificaciones en Oviedo, calle Facetos nº 43, escl. 4, ático H , C.P. 33013; ante Vd. comparece en forma y plazo y como mejor proceda, DICE:

Que por medio del presente escrito, y en relación con el **"PROGRAMA, CALENDARIO Y FÓRMULAS DE CONSULTA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN"**, y **"PROYECTO DE PARTICIPACIÓN** actualmente en fase de consulta pública, viene a presentar las siguientes:

ALEGACIONES

1- Ausencia de calendario concreto de continuación del proceso. La mayoría nos enteramos por "alguien" que nos dice que va a convocarse una reunión en un determinado ámbito y, a última hora, se convoca desde la página web de la Confederación a las reuniones de Temas Importantes para los ámbitos central (día 31 de enero), y oriental (día 5 de febrero). En fecha del 18 de Enero acabamos de enterarnos de la reunión por un correo electrónico enviado por el único grupo ecologista que ha sido convocado.

2- El horario de las reuniones no facilita la presencia de las organizaciones sociales ya que sus representantes son trabajador@s y algunas de las reuniones han sido convocadas por la mañana. Las convocatorias a las 2ª reuniones se hace en la mañana tanto en Oviedo (ámbito Central) como en Llanes (ámbito Oriental) perseverando en los horarios inconvenientes para las personas que trabajan. Además las fechas de reunión de diferentes ámbitos coinciden en el día y en la hora imposibilitando la asistencia a quien desee participar en todas.

3- Falta de interés por impulsar la sensibilización social sobre la gestión del agua. Hasta el momento y vamos hacia la 2ª reunión no se han convocado ni concretado ningún tipo de jornada pública, taller, o debate sobre el diagnóstico ni sobre los Temas Importantes, tampoco la administración ha llevado a cabo ninguna difusión en los medios de comunicación de Asturias. La dinámica actual, de seguir así, no difiere demasiado de otros procesos en los que es preceptivo el informe de impacto ambiental dando un plazo para la presentación de alegaciones. No nos parece que sea ese el espíritu ni la letra de la DMA, en la que nos parece, se quiere impulsar un proceso donde las partes interesadas sean protagonistas y al final del proceso se llegue a un nuevo P.H ampliamente consensuado, y producto del conocimiento y el debate.

4- Falta de apoyo económico para hacer determinados estudios o poder disponer de técnicos de nuestra confianza para clarificarnos en determinados temas de los que no somos especialistas.

5- Total dependencia de la web de la Confederación y de la dinámica que marca la Mesa. No se convoca a las organizaciones sociales a pesar de que en la primera reunión se proporcionaron las direcciones adecuadas para hacer las convocatorias.

6-Creemos que en este proceso se debería dar ejemplo de sensibilidad medioambiental y utilizar papel reciclado en los documentos.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICA
Número
08/0091
- 1 FEB. 2008
ENTRADA

Y en relación con el "ESTUDIO GENERAL DE LA DEMARCACIÓN", actualmente en fase de consulta pública, presentamos las siguientes Alegaciones:

1- Ausencia de todo tipo de referencias a la identificación de problemas y conflictos relacionados con el agua y que desde hace tiempo han sido motivo de movilizaciones ciudadanas en algunos ámbitos de la Cuenca Norte (embalse de Caliao, trasvase del Navia, encauzamientos de arroyos en Corvera y otros lugares, potenciales y peligrosos nuevos demandantes de agua en las nuevas urbanizaciones costeras y campos de golf asociados, etc).

2- No se mencionan las fuentes ni las fechas de los estudios sobre las condiciones climáticas y los recursos hídricos.
Teniendo en cuenta la escasez de estaciones meteorológicas que están operativas no se pueden considerar actualizados los resultados que se presentan. Lo mismo se puede decir sobre las aportaciones de los ríos dada la deficiente calidad y cantidad de estaciones de aforo. Si los datos provienen del estudio realizado para la elaboración del PH de Cuenca aprobado en el 1998, serían datos elaborados en la década de los 80 o principios de los 90, hace casi 20 años. No se han tenido en cuenta las variaciones esperadas de la pluviometría como consecuencia del cambio climático, ni las evapotranspiraciones que tendrán lugar con el aumento de temperatura esperado, creemos que se deberían hacer estudios con series reducidas de los últimos 20 años para así acercarnos más a las condiciones climáticas que hay hoy. Si no se dispone de datos actuales corregidos con las previsiones esperadas por los modelos que tienen en cuenta el cambio climático, es necesario hacer estudios actuales sobre esos parámetros ya que difícilmente se podrá hacer una evaluación correcta si partimos de datos erróneos.

3- Imposibilidad de ascender en la cadena de datos hasta las fuentes de información que han permitido elaborar los documentos, si bien en la web se han colgado los documentos en discusión hasta el momento y se han hecho algunos documentos divulgativos sintéticos interesantes sobre los temas a tratar.

4- Los caudales ecológicos son los definidos en el P.H de Cuenca, y en este momento la DMA plantea otros criterios para su determinación. Para poder estimar extracciones de agua de una determinada masa de agua superficial es imprescindible saber cuanta es necesaria para poder mantener en buenas condiciones los ecosistemas fluviales.
En la página 35 se muestra la Tabla 8 "Caudales ecológicos en los principales embalses de la Cuenca del Norte", sin embargo en dicha tabla solamente aparecen 3 embalses, estando ausentes, entre otros, los tres embalses del Navia donde se encuentran los mayores de la cuenca (Salime y Doiras). Tampoco se especifica como se controlará el cumplimiento de mantener este caudal (en la actualidad existen muchas dudas sobre el cumplimiento en varios lugares de la demarcación)
Es imprescindible programar la instalación de redes de control cuantitativos y cualitativos (aforos en ríos y arroyos, análisis químicos y bacteriológicos rutinarios y extraordinarios en zonas de riesgo de contaminación puntual, etc) que permitan conocer en el futuro y de forma instantánea datos necesarios para tomar decisiones avaladas por la racionalidad y el rigor. Es necesario conocer no solo el estado de una masa de agua sino el tipo y cantidad de contaminante o tipo de alteración morfológica. En el documento viene en forma gráfica (mapa con distintos colores según el estado de la masa de agua) pero se necesita conocer en mayor profundidad para mejorarlo, sobre todo en el río Nalón y sus afluentes, y la parte baja del Navia (aguas de transición)

5- En relación con la demanda se proporcionan datos estimados (del Instituto Nacional de Estadística) **y sin desagregar.**
No se puede planificar con criterios racionales si no se dispone de una buena información. ¿Cuanta agua se destina a consumo urbano, cuanta se va por las redes, cuanta se destina a consumo industrial, etc?. Para el caso de la piscifactorías se dice que *requieren un volumen*

importante de agua pero no se aporta ninguna cifra concreta. No debería ser muy difícil conocer estos datos ya que son informaciones que pueden proporcionar los Ayuntamientos o sus empresas gestoras de agua, el consorcio CADASA y las industrias más consumidoras de agua en Asturias. Además se deberían reflejar los datos desagregados por sectores, cuencas y subcuencas.

6- Al referirse a las **masas de agua muy modificadas** se menciona el estuario del Navia describiendo las alteraciones sufridas desde el siglo XIX y señalando que las más recientes son las llevadas a cabo por la construcción de los grandes embalses; sin embargo no se hace ninguna alusión a las obras del **trasvase** previsto.

7- **¿Con que criterios se han seleccionado los tramos de río de interés medioambiental y los de interés natural?.** En el punto 3.5.5 se exponen las características que debe cumplir un tramo para ser considerado de interés medioambiental y más adelante muestra un listado en el que faltan muchos tramos e incluso ríos enteros que cumplen esas características. Curiosamente está el río Alba (que tiene una piscifactoría) y falta el Caliao.

8- En el análisis de presiones e impactos tan solo el río Noreña se considera en riesgo seguro por fuentes puntuales de contaminación y por alteraciones morfológicas, sin embargo son patentes los problemas de contaminación y alteración morfológica que existen en muchos otros ríos.

9- **Falta total de datos relacionados con las masas de agua subterráneas**. Apenas existen piezómetros, ni estudios de los diferentes acuíferos, tampoco se dan cifras de recarga ni de descarga. Teniendo en cuenta que la extracción de agua subterránea ha de hacerse considerando la importancia que los diferentes manantiales tienen para el mantenimiento del buen estado de las masas de agua superficial y el cumplimiento de sus funciones medioambientales, y que también es preciso conocer los intercambios de agua entre diferentes acuíferos comunicados, sería imprescindible establecer un programa de actuaciones hasta el 2015 que consiga paliar esa deficiencia de conocimiento. También es imprescindible establecer mecanismos que permitan conocer las extracciones que se realizan desde los pozos instalados en los diferentes acuíferos y no confiar en que los usuarios respetarán los caudales de su concesión.
Son especialmente importantes las masas de agua 012.006 (Oviedo- Cangas de Onis), 012.005 (Villaviciosa), y 012.007 (Llanes-Ribadesella), por ubicarse en zonas muy pobladas y tener instalados sondeos de abastecimiento.

10- En Asturias existen numerosos huecos en el subsuelo producto de las explotaciones mineras de carbón del último siglo, una vez abandonadas las labores mineras esos huecos son rellenados por agua hasta que rebosa a los cauces fluviales. Son aguas subterráneas muy alteradas y que requieren que se las tenga en cuenta a la hora de planificar ya que representan un volumen muy grande (un volumen equivalente a los m^3 de carbón y estériles extraídos por debajo de la cota de los ríos, reducido por la compactación producida) concentrado casi exclusivamente en la cuenca del Nalón (Nalón, Aller).

11.- **Deberían analizarse medidas de ahorro y gestión de la demanda** que permitieran cumplir los objetivos de la directiva. **No se hace**, y creemos que debe ser un objetivo prioritario para el futuro más inmediato.

12.- En lo referente a la **recuperación de costes**, en el documento se señala que en **Asturias sólo** se produce una recuperación del **56,48%** de los costes. Esto exigiría poner en marcha medidas para lograr la recuperación total, es decir subidas de las tarifas en términos reales, organizando su estructura de forma que incentivaran el ahorro. Sin embargo **no se propone nada para mejorar la tasa de recuperación**, es más, en la pagina 209 se supone para el periodo hasta 2015 un escenario de **estabilidad de precios** en términos reales.

Es decir, en materia de recuperación de costes, se ignora totalmente lo que señala la Directiva.

13-Escenarios de demanda. En ese capítulo se hacen unas consideraciones sobre la elasticidad de la demanda de agua (dicen que es de -0.65), los factores de los que depende, etc y **se calcula un escenario** de demanda urbana para 2015 que en consumo urbano **supone un cierto crecimiento** con respecto a la actualidad, pasando de 120 a 124 Hm^3. **Para calcular esta demanda parten de supuestos contrarios a los principios de la directiva**: suponen que los precios en términos reales no aumentarán (no se recuperarán los costes), no consideran el cambio tecnológico y sus posibilidades en cuanto a los mecanismos de ahorro de agua en electrodomésticos, etc, presumen que el consumo por vivienda y persona no va a cambiar nada (no se prevé una política de fomento del ahorro), etc
Es decir, se calcula un escenario de demanda totalmente al margen de las indicaciones de la Directiva. Es como si se dijera: la Directiva está muy bien, y sus contenidos también, pero aquí todo eso no nos afecta y el escenario futuro no tiene nada que ver con eso. Los redactores del documento parece que no se creen en absoluto los objetivos ni la filosofía de la DMA. Y entendemos que eso no puede ser. Es una burla a la ley, a los ciudadanos y al medio ambiente.

14- En relación con todo esto queremos destacar también que según los últimos datos del INE **desde 2000 está bajando el consumo de agua en España: un 6.48%** entre 2000 y 2005. Sobre todo baja por la disminución de las pérdidas (-20.59%) y la del consumo industrial (-5.68%), pero también por la bajada del consumo de los hogares (-1.19%).
En cambio, en Asturias, es de los sitios donde **aumenta,** al contrario que la tendencia nacional,. ¿Por qué se produce esto? Creemos que está claro que se produce porque en Asturias hay una ausencia total de políticas de ahorro y gestión de la demanda. Y esto no debe seguir así y **debe corregirse urgentemente**. El nuevo Plan Hidrológico debe contribuir a ello.

15- En relación con los costes medioambientales, no siempre se pueden pagar ciertos impactos que algunas actuaciones llevan implícitas, por muchas medidas correctoras que se quieran tomar y sobre todo por que la mayoría de esos impactos son irreversibles.

16- En el documento **se resaltan las tendencias del aumento del nº de plazas turísticas pero esos datos deben conocerse con más precisión** ya que para planificar es necesario saber de cuanta demanda se parte y que parte de la demanda doméstica proviene de segundas residencias y turismo (campos de golf asociados a urbanizaciones) y que tiene en la época estival (la de mayor escasez) su mayor consumo.

17- Se menciona que se esperan demandas de consumo para usos de refrigeración en instalaciones de producción energética de 40 Hm^3, pero **¿se han tenido en cuenta los proyectos de instalación de centrales de ciclo combinado y sus consumos de refrigeración**?.

18- Por último resaltar la deficiente calidad de los mapas presentados (su pequeño tamaño) que dificulta su análisis.

Por lo expuesto,
SOLICITO:

1º. Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones se tengan en cuenta las mismas y sean contestadas.

Oviedo a 25 de enero de 2008

Firmado: Eduardo Menéndez Casares

PRESIDENCIA
SALIDA
Fecha 29 ENE. 2008
Firma

Confederación Hidrográfica del Norte
PRESIDENCIA
PASE
1. Original 2. Copia
Secretaría
D. Planificación
Asunto
Fecha 29/01/08 Firma

IBERDROLA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
18 ENE 2008
Confederación Hidrográfica del Norte
ENTRADA 111

D. Baldomero Navalón Burgos, con D.N.I. nº 5.393.279, en nombre y representación de Iberdrola Generación, S.A., C.I.F. A-95-075586, con domicilio, a efectos de notificaciones, en Madrid, C/ Tomás Redondo, 1, en virtud de escritura de apoderamiento otorgada el 6 de Octubre de 2006 ante el notario de Madrid D. Miguel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, con el número 1.419 de su protocolo,

Confederación Hidrográfica del Norte
PRESIDENCIA
PASE
1. Original 2. Copia
Presidencia
Comisaría de Aguas
Dirección Técnica
Secretaría General
O. Planificación
Acunor
Fecha 22/01/08 Firma

PRESIDENCIA
SALIDA
Fecha 22 ENE. 2008
Firma

EXPONE:

Primero.- Que, dentro del proceso de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Norte, se han sometido a consulta pública, por parte del Organismo de cuenca, los documentos titulados "Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta" (en adelante, Programa), "Proyecto de Participación Pública en el Proceso de Planificación" (en adelante, Proyecto), y "Estudio General de la Demarcación Hidrográfica del Norte" (en adelante, Estudio).

Segundo.- Que, dentro del plazo concedido, mi representada desea hacer constar los siguientes

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
Número 08/0052
22 ENE. 2008
ENTRADA

COMENTARIOS:

Primero.- En el Proyecto, en la Tabla 1 "Relación de las posibles partes interesadas" no están expresamente señalados los usos energéticos del agua (hidroeléctricos y de refrigeración de térmicas convencionales, ciclos combinados, nucleares, termosolares y centrales de biomasa). Consideramos que esto debe ser corregido, dada la gran relevancia que los usos energéticos del agua, tanto continental como de la franja costera, tienen en el entramado económico español.

En consecuencia, solicitamos la incorporación de las empresas energéticas como actores participantes, citados expresamente, así como la del Ministerio de Industria y Red Eléctrica de España, tal como lo está, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura junto con otros muchos representantes de las intereses agrícolas. Esto permitiría la presencia efectiva de los intereses energéticos, junto con la defensa del interés general en ese ámbito.

IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. (Sdad. Unipersonal. Domicilio Social - Gardoqui, 8 - 48008 Bilbao - Reg. Mer. de Vizcaya, t. 3.853, f. 0, f. 199, sec. 8, h. BI-27059, insc. 1.ª - NIF: A-95075586

IBERDROLA

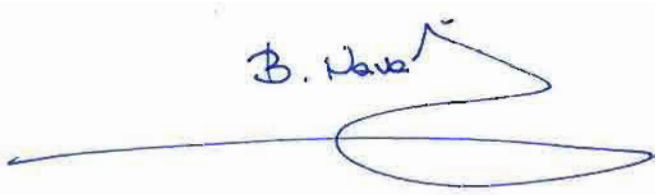
En general, es imprescindible que en este proceso de planificación que culminará en Diciembre de 2009, y en las sucesivas revisiones de los Planes de Demarcación, se tengan en cuenta los requerimientos de la planificación energética, en cualquiera de sus modalidades, para lo que resulta imprescindible la incorporación y participación activa y permanente de las autoridades energéticas.

Por todo ello,

SOLICITA:

Que se tengan en consideración los comentarios presentados, y se introduzcan en los documentos señalados las modificaciones y correcciones sugeridas en este escrito.

En Madrid, a 14 de Enero de 2008.



EXCMO. SR.PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE.
PLAZA DE ESPAÑA, 2. 33071, OVIEDO

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICA
Número
08/0095
- 1 FEB. 2008
ENTRADA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
28 ENE 2008
Confederación Hidrográfica del Norte
ENTRADA 1253

Dª. Ana Silvia González García, en nombre y representación de la asociación Jóvenes Por la Ecología de Asturias, CIF G-33482472, viene a efectuar las siguientes alegaciones respecto al proceso de consulta en la parte asturiana de la Cuenca Norte II:

En primer lugar y sobre los documentos relativos al "PROGRAMA, CALENDARIO Y FORMULAS DE CONSULTA" y "PROYECTO DE PARTICIPACIÓN...." han de efectuarse las siguientes consideraciones:

- **Primera**: lamentar la ausencia de un calendario concreto de continuación del proceso. La mayoría nos enteramos por "alguien" que nos dice que va a convocarse una reunión en un determinado ámbito y, a última hora, se convoca desde la página web de la Confederación.

-**Segunda**: ha de señalarse que el horario de las reuniones no facilita la presencia de las organizaciones sociales ya que sus representantes son trabajador@s y algunas de las reuniones han sido convocadas por la mañana. Las convocatorias a las 2ª reuniones se hace en la mañana tanto en Oviedo (ámbito Central) como en Llanes (ámbito Oriental) perseverando en los horarios inconvenientes para las personas que trabajan.

- **Tercera**: ha de criticarse la falta de interés que se aprecia en cuanto a impulsar la sensibilización social sobre la gestión del agua. No se ha convocado ni concretado ningún tipo de jornada pública, taller, o debate sobre el diagnóstico ni sobre los Temas Importantes, tampoco la Administración ha procedido a su difusión en los medios de comunicación de Asturias.

-**Cuarta**: denunciar la total falta de apoyo económico para efectuar determinados estudios o poder disponer de técnicos de nuestra confianza que nos asesoren en determinados temas de los que no somos especialistas.

-**Quinta**: Se constata una total dependencia de la web de la Confederación y de la dinámica que marca la Mesa y no se ha convocado a las organizaciones sociales a pesar de que en la primera reunión se proporcionaron los datos necesarios a tal efecto.

-**Sexta**: Se observa una total imposibilidad de ascender en la cadena de datos hasta las fuentes de información que han permitido elaborar los documentos por más que en la web se hayan colgado los documentos en discusión hasta el momento, y se han hecho algunos documentos divulgativos sintéticos interesantes sobre los temas a tratar que por cierto, bien podrían ser en papel reciclado.

En segundo lugar y acerca del documento denominado "ESTUDIO GENERAL DE LA DEMARCACIÓN...." venimos a formular las siguientes alegaciones:

Primera: No se mencionan las fuentes ni las fechas de los estudios sobre las condiciones climáticas y los recursos hídricos.
Teniendo en cuenta la escasez de estaciones meteorológicas que están operativas no se pueden considerar actualizados los resultados que se presentan. Lo mismo se puede

decir sobre las aportaciones de los ríos dada la deficiente calidad y cantidad de estaciones de aforo. Si los datos provienen del estudio realizado para la elaboración del PH de Cuenca aprobado en el 1998, serían datos elaborados en la década de los 80 o principios de los 90, hace casi 20 años. No se han tenido en cuenta las variaciones esperadas de la pluviometría como consecuencia del cambio climático, ni las evapotranspiraciones que tendrán lugar con el aumento de temperatura esperado. Si no se dispone de datos actuales corregidos con las previsiones esperadas por los modelos que tienen en cuenta el cambio climático, es necesario hacer estudios actuales sobre esos parámetros ya que difícilmente se podrá hacer una evaluación correcta si partimos de datos erróneos.

Segunda: Los caudales ecológicos son los definidos en el P.H de Cuenca, y en este momento se plantean otros criterios para su determinación. Para poder estimar extracciones de agua de una determinada masa de agua superficial es imprescindible saber cuanta es necesaria para poder mantener o mejorar la masa de agua de la que se trata.
En la página 35 se muestra la Tabla 8 "Caudales ecológicos en los principales embalses de la Cuenca del Norte", sin embargo en dicha tabla solamente aparecen 3 embalses, estando ausentes, entre otros, los tres embalses del Navia donde se encuentran los mayores de la cuenca (Salime y Doiras). Tampoco se especifica como se controlará el cumplimiento de mantener este caudal (en la actualidad creemos que se incumple)
Es imprescindible programar la instalación de redes de control cuantitativos y cualitativos (aforos en ríos y arroyos, análisis químicos y bacteriológicos rutinarios y extraordinarios en zonas de riesgo de contaminación puntual, etc) que permitan conocer en el futuro y de forma instantánea datos necesarios para tomar decisiones avaladas por la racionalidad y el rigor. Es necesario conocer no solo el estado de una masa de agua sino el tipo y cantidad de contaminante o tipo de alteración morfológica. En el documento viene en forma gráfica (mapa con distintos colores según el estado de la masa de agua) pero se necesita conocer en mayor profundidad para mejorarlo, sobre todo en el río Nalón y sus afluentes y la parte baja del Navia (aguas de transición)

Tercera: En relación con la demanda se proporcionan datos estimados (del Instituto Nacional de Estadística) **y sin desagregar**.
No se puede planificar con criterios racionales si no se dispone de una buena información. ¿Cuanta agua se destina a consumo urbano? ¿cuanta se va por las redes? ¿cuanta se destina a consumo industrial, etc?. Para el caso de la piscifactorías se dice que *requieren un volumen importante de agua* pero no se aporta ninguna cifra concreta. No debería ser muy difícil conocer estos datos ya que son informaciones que pueden proporcionar los Ayuntamientos o sus empresas gestoras de agua, el consorcio CADASA y las industrias más consumidoras de agua en Asturias. Además se deberían reflejar los datos desagregados por sectores, cuencas y subcuencas.

Cuarta: Al referirse a las **masas de agua muy modificadas** se menciona el estuario del Navia describiendo las alteraciones sufridas desde el siglo XIX y señalando que las más recientes son las llevadas a cabo por la construcción de los grandes embalses; sin embargo no se hace ninguna alusión a las obras del trasvase previsto.

Quinta: Falta total de datos relacionados con las masas de agua subterráneas, apenas existen piezómetros, ni estudios de los diferentes acuíferos, no se dan cifras de recarga ni de descarga. Teniendo en cuenta que la extracción de agua subterránea ha de

hacerse considerando la importancia que los diferentes manantiales tienen para el mantenimiento del buen estado de las masas de agua superficial y el cumplimiento de sus funciones medioambientales, y que también es preciso conocer los intercambios de agua entre diferentes acuíferos comunicados, sería imprescindible establecer un programa de actuaciones hasta el 2015 que consiga paliar esa deficiencia de conocimiento.

Sexta- ¿Con que criterios se han seleccionado los tramos de río de interés medioambiental y los de interés natural?. En el punto 3.5.5 se exponen las características que debe cumplir un tramo para ser considerado de interés medioambiental y más adelante muestra un listado en el que faltan muchos tramos e incluso ríos enteros que cumplen esas características. Curiosamente está el río Alba (que tiene una piscifactoría) y falta el Caliao.

Séptima- En el análisis de presiones e impactos tan solo el río Noreña se considera en riesgo seguro por fuentes puntuales de contaminación y por alteraciones morfológicas, sin embargo son patentes los problemas de contaminación y alteración morfológica que existen en muchos otros ríos.

Octava- En relación con los costes medioambientales, no siempre se pueden pagar ciertos impactos que algunas actuaciones llevan implícitas, por muchas medidas correctoras que se quieran tomar y sobre todo por que la mayoría de esos impactos son irreversibles.

Novena: En el documento **se resaltan las tendencias del aumento del nº de plazas turísticas pero esos datos deben conocerse con más precisión** ya que para planificar es necesario saber de cuanta demanda se parte y que parte de la demanda doméstica proviene de segundas residencias y turismo (campos de golf asociados a urbanizaciones) y que tiene en la época estival (la de mayor escasez) su mayor consumo.

Décima- Se menciona que se esperan demandas de consumo para usos de refrigeración en instalaciones de producción energética de 40 Hm^3, pero ¿**se han tenido en cuenta los proyectos de instalación de centrales de ciclo combinado y sus consumos de refrigeración**?.

Décimo primera - Ausencia de todo tipo de referencias a la identificación de problemas relacionados con el agua y que desde hace tiempo han sido motivo de movilizaciones ciudadanas en algunos ámbitos de la Cuenca Norte (embalse de Caliao, trasvase del Navia, encauzamientos de arroyos en Corvera y otros lugares, potenciales y peligrosos nuevos demandantes de agua en las nuevas urbanizaciones costeras y campos de golf asociados, etc).

Décimo segunda.- En Asturias existen numerosos huecos en el subsuelo producto de las explotaciones mineras del último siglo, una vez abandonadas las labores mineras esos huecos son rellenados por agua hasta que rebosa a los cauces fluviales. Son aguas subterráneas muy alteradas y que requieren que se las tenga en cuenta a la hora de planificar ya que representan un volumen muy grande concentrado casi exclusivamente en la cuenca del Nalón.

Décimo tercera.- Ha de resaltarse la deficiente calidad de los mapas presentados, lo que dificulta enormemente su análisis.

Esperando que todas estas obervaciones y alegaciones sean debidamente consideradas,

En Oviedo, a 28 de enero de 2008.



Confederación Hidrográfica del Norte
PRESIDENCIA

PASE
1. Original 2. Copia

- [ ] Presidencia
- [ ] Comisaría de Aguas
- [ ] Dirección Técnica
- [ ] Secretaría General
- [x] O. Planificación
- [ ] Acunor
- [ ] .....
- [ ] .....

Fecha 29/01/08 Firma

PRESIDENCIA
SALIDA
Fecha 29 ENE. 2008
Firma

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
28 ENE 2008
Confederación Hidrográfica del Norte
ENTRADA 1252

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
Número
08/0094
- 1 FEB. 2008
ENTRADA

Correos y Telégrafos
25-01-08
ENTREGO 32

D. MIGUEL NAVA VAZQUEZ, con DNI 32872194L, domiciliado en Blimea, C/ Libertad 96, c.p. 33960, en su propio nombre viene a efectuar las siguientes alegaciones respecto al proceso de consulta en la parte asturiana de la Cuenca Norte II:

En primer lugar y sobre los documentos relativos al "PROGRAMA, CALENDARIO Y FORMULAS DE CONSULTA" y "PROYECTO DE PARTICIPACIÓN...." han de efectuarse las siguientes consideraciones:

- **Primera**: Lamentar la ausencia de un calendario concreto de continuación del proceso. La mayoría nos enteramos por "alguien" que nos dice que va a convocarse una reunión en un determinado ámbito y, a última hora, se convoca desde la página web de la Confederación.

-Segunda: Ha de señalarse que el horario de las reuniones no facilita la presencia de las organizaciones sociales ya que sus representantes son trabajador@s y algunas de las reuniones han sido convocadas por la mañana. Las convocatorias a las 2ª reuniones se hace en la mañana tanto en Oviedo (ámbito Central) como en Llanes (ámbito Oriental) perseverando en los horarios inconvenientes para las personas que trabajan.

- **Tercera**: Ha de criticarse la falta de interés que se aprecia en cuanto a impulsar la sensibilización social sobre la gestión del agua. No se ha convocado ni concretado ningún tipo de jornada pública, taller, o debate sobre el diagnóstico ni sobre los Temas Importantes, tampoco la Administración ha procedido a su difusión en los medios de comunicación de Asturias.

-Cuarta: Denunciar la total falta de apoyo económico para efectuar determinados estudios o poder disponer de técnicos de nuestra confianza que nos asesoren en determinados temas de los que no somos especialistas.

-Quinta: Se constata una total dependencia de la web de la Confederación y de la dinámica que marca la Mesa y no se ha convocado a las organizaciones sociales a pesar de que en la primera reunión se proporcionaron los datos necesarios a tal efecto.

-Sexta: Se observa una total imposibilidad de ascender en la cadena de datos hasta las fuentes de información que han permitido elaborar los documentos por más que en la web se hayan colgado los documentos en discusión hasta el momento, y se han hecho algunos documentos divulgativos sintéticos interesantes sobre los temas a tratar que por cierto, bien podrían ser en papel reciclado.

En segundo lugar y acerca del documento denominado "ESTUDIO GENERAL DE LA DEMARCACIÓN...." venimos a formular las siguientes alegaciones:

Primera: No se mencionan las fuentes ni las fechas de los estudios sobre las condiciones climáticas y los recursos hídricos.
Teniendo en cuenta la escasez de estaciones meteorológicas que están operativas no se pueden considerar actualizados los resultados que se presentan. Lo mismo se puede

decir sobre las aportaciones de los ríos, dada la deficiente calidad y cantidad de estaciones de aforo. Si los datos provienen del estudio realizado para la elaboración del PH de Cuenca aprobado en el 1998, serían datos elaborados en la década de los 80 o principios de los 90, hace casi 20 años. No se han tenido en cuenta las variaciones esperadas de la pluviometría como consecuencia del cambio climático, ni las evapotranspiraciones que tendrán lugar con el aumento de temperatura esperado. Si no se dispone de datos actuales corregidos con las previsiones esperadas por los modelos que tienen en cuenta el cambio climático, es necesario hacer estudios actuales sobre esos parámetros ya que difícilmente se podrá hacer una evaluación correcta si partimos de datos erróneos.

Segunda: Los caudales ecológicos son los definidos en el P.H de Cuenca, y en este momento se plantean otros criterios para su determinación. Para poder estimar extracciones de agua de una determinada masa de agua superficial es imprescindible saber cuanta es necesaria para poder mantener o mejorar la masa de agua de la que se trata.

En la página 35 se muestra la Tabla 8 "Caudales ecológicos en los principales embalses de la Cuenca del Norte", sin embargo en dicha tabla solamente aparecen 3 embalses, estando ausentes, entre otros, los tres embalses del Navia donde se encuentran los mayores de la cuenca (Salime y Doiras). Tampoco se especifica como se controlará el cumplimiento de mantener este caudal (en la actualidad creemos que se incumple)

Es imprescindible programar la instalación de redes de control cuantitativos y cualitativos, (aforos en ríos y arroyos, análisis químicos y bacteriológicos rutinarios y extraordinarios en zonas de riesgo de contaminación puntual, etc), que permitan conocer en el futuro y de forma instantánea datos necesarios para tomar decisiones avaladas por la racionalidad y el rigor. Es necesario conocer no solo el estado de una masa de agua sino el tipo y cantidad de contaminante o tipo de alteración morfológica. En el documento viene en forma gráfica (mapa con distintos colores según el estado de la masa de agua) pero se necesita conocer en mayor profundidad para mejorarlo, sobre todo en el río Nalón y sus afluentes y la parte baja del Navia (aguas de transición)

Tercera: En relación con la demanda se proporcionan datos estimados (del Instituto Nacional de Estadística) **y sin desagregar**.
No se puede planificar con criterios racionales si no se dispone de una buena información. ¿Cuanta agua se destina a consumo urbano?, ¿cuanta se va por las redes?, ¿cuanta se destina a consumo industrial, etc?. Para el caso de las piscifactorías se dice que *requieren un volumen importante de agua,* pero no se aporta ninguna cifra concreta. No debería ser muy difícil conocer estos datos ya que son informaciones que pueden proporcionar los Ayuntamientos o sus empresas gestoras de agua, el consorcio CADASA y las industrias más consumidoras de agua en Asturias. Además se deberían reflejar los datos desagregados por sectores, cuencas y subcuencas.

Cuarta: Al referirse a las **masas de agua muy modificadas** se menciona el estuario del Navia describiendo las alteraciones sufridas desde el siglo XIX y señalando que las más recientes son las llevadas a cabo por la construcción de los grandes embalses; sin embargo no se hace ninguna alusión a las obras del trasvase previsto.

Quinta: Falta total de datos relacionados con las masas de agua subterráneas, apenas existen piezómetros, ni estudios de los diferentes acuíferos, no se dan cifras de recarga ni de descarga. Teniendo en cuenta que la extracción de agua subterránea ha de hacerse considerando la importancia que los diferentes manantiales tienen para el mantenimiento del buen estado de las masas de agua superficial y el cumplimiento de sus funciones medioambientales, y que también es preciso conocer los intercambios de agua entre diferentes acuíferos comunicados, sería imprescindible establecer un programa de actuaciones hasta el 2015 que consiga paliar esa deficiencia de conocimiento.

Sexta- ¿Con que criterios se han seleccionado los tramos de río de interés medioambiental y los de interés natural?. En el punto 3.5.5 se exponen las características que debe cumplir un tramo para ser considerado de interés medioambiental y más adelante muestra un listado en el que faltan muchos tramos e incluso ríos enteros que cumplen esas características. Curiosamente está el río Alba (que tiene una piscifactoría) y falta el de Caliao.

Séptima- En el análisis de presiones e impactos tan solo el río Noreña se considera en riesgo seguro por fuentes puntuales de contaminación y por alteraciones morfológicas, sin embargo son patentes los problemas de contaminación y alteración morfológica que existen en muchos otros ríos.

Octava- En relación con los costes medioambientales, no siempre se pueden pagar ciertos impactos que algunas actuaciones llevan implícitas, por muchas medidas correctoras que se quieran tomar y sobre todo por que la mayoría de esos impactos son irreversibles.

Novena: En el documento **se resaltan las tendencias del aumento del nº de plazas turísticas pero esos datos deben conocerse con más precisión** ya que para planificar es necesario saber de cuanta demanda se parte y que parte de la demanda doméstica proviene de segundas residencias y turismo (campos de golf asociados a urbanizaciones) y que tiene en la época estival (la de mayor escasez) su mayor consumo.

Décima- Se menciona que se esperan demandas de consumo para usos de refrigeración en instalaciones de producción energética de 40 Hm^3, pero, **¿se han tenido en cuenta los proyectos de instalación de centrales de ciclo combinado y sus consumos de refrigeración**?.

Décimo primera - Ausencia de todo tipo de referencias a la identificación de problemas relacionados con el agua y que desde hace tiempo han sido motivo de movilizaciones ciudadanas en algunos ámbitos de la Cuenca Norte (embalse de Caliao, trasvase del Navia, encauzamientos de arroyos en Corvera y otros lugares, potenciales y peligrosos nuevos demandantes de agua en las nuevas urbanizaciones costeras y campos de golf asociados, etc).

Décimo segunda.- En Asturias existen numerosos huecos en el subsuelo producto de las explotaciones mineras del último siglo, una vez abandonadas las labores mineras esos huecos son rellenados por agua hasta que rebosa a los cauces fluviales. Son aguas subterráneas muy alteradas y que requieren que se las tenga en cuenta a la hora de

planificar ya que representan un volumen muy grande concentrado casi exclusivamente en la cuenca del Nalón.

Décimo tercera.- Ha de resaltarse la deficiente calidad de los mapas presentados, lo que dificulta enormemente su análisis.

Esperando que todas estas observaciones y alegaciones sean debidamente consideradas, y respondidas.

En Blimea, a 25 de enero de 2008

Fdo. Miguel Nava

PRESIDENCIA
SALIDA
Fecha 29 ENE. 2008
Firma

Confederación Hidrográfica del Norte
PRESIDENCIA
PASE
1. Original 2. Copia
Presidencia
Comisaría de Aguas
Dirección Técnica
Secretaría General
O. Planificación
Asunto
.....
.....
Fecha 29/01/08
Firma

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICA
Número
08/0096 - 1 FEB. 2008
ENTRADA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
28 ENE 2008
Confederación Hidrográfica del Norte
ENTRADA 1254

Dª. Zulima Izquierdo Cuadrado, con DNI 09430596-K, viene a efectuar las siguientes alegaciones respecto al proceso de consulta en la parte asturiana de la Cuenca Norte II:

En primer lugar y sobre los documentos relativos al "PROGRAMA, CALENDARIO Y FORMULAS DE CONSULTA" y "PROYECTO DE PARTICIPACIÓN...." han de efectuarse las siguientes consideraciones:

- **Primera**: lamentar la ausencia de un calendario concreto de continuación del proceso. La mayoría nos enteramos por "alguien" que nos dice que va a convocarse una reunión en un determinado ámbito y, a última hora, se convoca desde la página web de la Confederación.

-**Segunda**: ha de señalarse que el horario de las reuniones no facilita la presencia de las organizaciones sociales ya que sus representantes son trabajador@s y algunas de las reuniones han sido convocadas por la mañana. Las convocatorias a las 2ª reuniones se hace en la mañana tanto en Oviedo (ámbito Central) como en Llanes (ámbito Oriental) perseverando en los horarios inconvenientes para las personas que trabajan.

- **Tercera**: ha de criticarse la falta de interés que se aprecia en cuanto a impulsar la sensibilización social sobre la gestión del agua. No se ha convocado ni concretado ningún tipo de jornada pública, taller, o debate sobre el diagnóstico ni sobre los Temas Importantes, tampoco la Administración ha procedido a su difusión en los medios de comunicación de Asturias.

-**Cuarta**: denunciar la total falta de apoyo económico para efectuar determinados estudios o poder disponer de técnicos de nuestra confianza que nos asesoren en determinados temas de los que no somos especialistas.

-**Quinta**: Se constata una total dependencia de la web de la Confederación y de la dinámica que marca la Mesa y no se ha convocado a las organizaciones sociales a pesar de que en la primera reunión se proporcionaron los datos necesarios a tal efecto.

-**Sexta**: Se observa una total imposibilidad de ascender en la cadena de datos hasta las fuentes de información que han permitido elaborar los documentos por más que en la web se hayan colgado los documentos en discusión hasta el momento, y se han hecho algunos documentos divulgativos sintéticos interesantes sobre los temas a tratar que por cierto, bien podrían ser en papel reciclado.

En segundo lugar y acerca del documento denominado "ESTUDIO GENERAL DE LA DEMARCACIÓN...." venimos a formular las siguientes alegaciones:

Primera: No se mencionan las fuentes ni las fechas de los estudios sobre las condiciones climáticas y los recursos hídricos.
Teniendo en cuenta la escasez de estaciones meteorológicas que están operativas no se pueden considerar actualizados los resultados que se presentan. Lo mismo se puede decir sobre las aportaciones de los ríos dada la deficiente calidad y cantidad de

estaciones de aforo. Si los datos provienen del estudio realizado para la elaboración del PH de Cuenca aprobado en el 1998, serían datos elaborados en la década de los 80 o principios de los 90, hace casi 20 años. No se han tenido en cuenta las variaciones esperadas de la pluviometría como consecuencia del cambio climático, ni las evapotranspiraciones que tendrán lugar con el aumento de temperatura esperado. Si no se dispone de datos actuales corregidos con las previsiones esperadas por los modelos que tienen en cuenta el cambio climático, es necesario hacer estudios actuales sobre esos parámetros ya que difícilmente se podrá hacer una evaluación correcta si partimos de datos erróneos.

Segunda: Los caudales ecológicos son los definidos en el P.H de Cuenca, y en este momento se plantean otros criterios para su determinación. Para poder estimar extracciones de agua de una determinada masa de agua superficial es imprescindible saber cuanta es necesaria para poder mantener o mejorar la masa de agua de la que se trata.
En la página 35 se muestra la Tabla 8 "Caudales ecológicos en los principales embalses de la Cuenca del Norte", sin embargo en dicha tabla solamente aparecen 3 embalses, estando ausentes, entre otros, los tres embalses del Navia donde se encuentran los mayores de la cuenca (Salime y Doiras). Tampoco se especifica como se controlará el cumplimiento de mantener este caudal (en la actualidad creemos que se incumple)
Es imprescindible programar la instalación de redes de control cuantitativos y cualitativos (aforos en ríos y arroyos, análisis químicos y bacteriológicos rutinarios y extraordinarios en zonas de riesgo de contaminación puntual, etc) que permitan conocer en el futuro y de forma instantánea datos necesarios para tomar decisiones avaladas por la racionalidad y el rigor. Es necesario conocer no solo el estado de una masa de agua sino el tipo y cantidad de contaminante o tipo de alteración morfológica. En el documento viene en forma gráfica (mapa con distintos colores según el estado de la masa de agua) pero se necesita conocer en mayor profundidad para mejorarlo, sobre todo en el río Nalón y sus afluentes y la parte baja del Navia (aguas de transición)

Tercera: En relación con la demanda se proporcionan datos estimados (del Instituto Nacional de Estadística) **y sin desagregar**.
No se puede planificar con criterios racionales si no se dispone de una buena información. ¿Cuanta agua se destina a consumo urbano? ¿cuanta se va por las redes? ¿cuanta se destina a consumo industrial, etc?. Para el caso de la piscifactorías se dice que *requieren un volumen importante de agua* pero no se aporta ninguna cifra concreta. No debería ser muy difícil conocer estos datos ya que son informaciones que pueden proporcionar los Ayuntamientos o sus empresas gestoras de agua, el consorcio CADASA y las industrias más consumidoras de agua en Asturias. Además se deberían reflejar los datos desagregados por sectores, cuencas y subcuencas.

Cuarta: Al referirse a las **masas de agua muy modificadas** se menciona el estuario del Navia describiendo las alteraciones sufridas desde el siglo XIX y señalando que las más recientes son las llevadas a cabo por la construcción de los grandes embalses; sin embargo no se hace ninguna alusión a las obras del trasvase previsto.

Quinta: Falta total de datos relacionados con las masas de agua subterráneas, apenas existen piezómetros, ni estudios de los diferentes acuíferos, no se dan cifras de recarga ni de descarga. Teniendo en cuenta que la extracción de agua subterránea ha de hacerse considerando la importancia que los diferentes manantiales tienen para el

mantenimiento del buen estado de las masas de agua superficial y el cumplimiento de sus funciones medioambientales, y que también es preciso conocer los intercambios de agua entre diferentes acuíferos comunicados, sería imprescindible establecer un programa de actuaciones hasta el 2015 que consiga paliar esa deficiencia de conocimiento.

Sexta- ¿Con que criterios se han seleccionado los tramos de río de interés medioambiental y los de interés natural?. En el punto 3.5.5 se exponen las características que debe cumplir un tramo para ser considerado de interés medioambiental y más adelante muestra un listado en el que faltan muchos tramos e incluso ríos enteros que cumplen esas características. Curiosamente está el río Alba (que tiene una piscifactoría) y falta el Caliao.

Séptima- En el análisis de presiones e impactos tan solo el río Noreña se considera en riesgo seguro por fuentes puntuales de contaminación y por alteraciones morfológicas, sin embargo son patentes los problemas de contaminación y alteración morfológica que existen en muchos otros ríos.

Octava- En relación con los costes medioambientales, no siempre se pueden pagar ciertos impactos que algunas actuaciones llevan implícitas, por muchas medidas correctoras que se quieran tomar y sobre todo por que la mayoría de esos impactos son irreversibles.

Novena: En el documento **se resaltan las tendencias del aumento del nº de plazas turísticas pero esos datos deben conocerse con más precisión** ya que para planificar es necesario saber de cuanta demanda se parte y que parte de la demanda doméstica proviene de segundas residencias y turismo (campos de golf asociados a urbanizaciones) y que tiene en la época estival (la de mayor escasez) su mayor consumo.

Décima- Se menciona que se esperan demandas de consumo para usos de refrigeración en instalaciones de producción energética de 40 Hm^3, pero ¿**se han tenido en cuenta los proyectos de instalación de centrales de ciclo combinado y sus consumos de refrigeración**?.

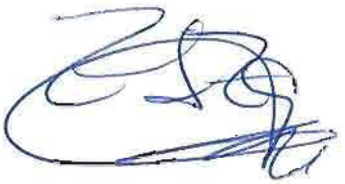
Décimo primera - Ausencia de todo tipo de referencias a la identificación de problemas relacionados con el agua y que desde hace tiempo han sido motivo de movilizaciones ciudadanas en algunos ámbitos de la Cuenca Norte (embalse de Caliao, trasvase del Navia, encauzamientos de arroyos en Corvera y otros lugares, potenciales y peligrosos nuevos demandantes de agua en las nuevas urbanizaciones costeras y campos de golf asociados, etc).

Décimo segunda.- En Asturias existen numerosos huecos en el subsuelo producto de las explotaciones mineras del último siglo, una vez abandonadas las labores mineras esos huecos son rellenados por agua hasta que rebosa a los cauces fluviales. Son aguas subterráneas muy alteradas y que requieren que se las tenga en cuenta a la hora de planificar ya que representan un volumen muy grande concentrado casi exclusivamente en la cuenca del Nalón.

Décimo tercera.- Ha de resaltarse la deficiente calidad de los mapas presentados, lo que dificulta enormemente su análisis.

Esperando que todas estas observaciones y alegaciones sean debidamente consideradas,

En Oviedo, a 28 de enero de 2008.





REAL ASOCIACIÓN
ASTURIANA
DE PESCA FLUVIAL

C/ Valentín Masip, 25
33013-OVIEDO
Teléfono: 985 270 496
Fax: 985 235 837
e-mail: info@asturianadepesca.es

D. JESUS GONZÁLEZ PIEDRA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE
C/ ASTURIAS Nº8
33071 OVIEDO

En reunión de Junta Directiva de la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial, se toma el acuerdo de enviar las siguientes alegaciones sobre el documento para participación pública sobre el esquema de temas importantes en materia de gestión de aguas.

Puntos a tratar:

1.- Demolición de obstáculos artificiales que impiden el paso de salmónidos en los ríos. (presa del Machón en el río Trubia y otros)

2.- Control en los desembalses para generación de energía eléctrica.

a) Adecuación de caudales mínimos de acorde con los tiempos actuales, al objeto de que puedan vivir los peces en condiciones ambientales normales.

b) Vigilancia de caudales máximos al objeto de evitar accidentes mortales como los que se están dando en algunos ríos. (río Narcea y otros)

c) Dotar de avisadores acústicos por parte de las empresas concesionarias, al objeto de tomar las medidas pertinentes por los usuarios (pescadores) en evitación de accidentes mortales.

3.- Vigilancia por parte de esa Confederación en muchas minicentrales para que respeten caudales ecológicos mínimos y pongan redes que impidan el acceso de los peces a las cámaras de carga de las mismas.

4.- Control de vertidos de purines a los ríos y a las fincas limítrofes que hacen daño fulminante a los ecosistemas.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICA
Número
08 / 0099
- 1 FEB. 2008
ENTRADA

REAL ASOCIACIÓN
ASTURIANA
DE PESCA FLUVIAL

C/ Valentín Masip, 25
33013-OVIEDO
Teléfono: 985 270 496
Fax: 985 235 837
e-mail: info@asturianadepesca.es

5.- Establecimiento de unas normas consensuadas para hacer compatible el recurso de la pesca con el uso de canoas en los ríos; especialmente Sella y Cares.

a) Control del número de canoas mediante matriculación para cada uno de los operadores turísticos, al objeto de que no proliferen de una manera completamente arbitraria en número de las mismas y horario de uso.

6.- Control de riegos en fincas próximas a los ríos sin la autorización pertinente y en las épocas de estío que tanto daño hacen a la vida piscícola.

7.- Comunicación por parte de esa Confederación a los propietarios de fincas situadas en los márgenes de los ríos de la obligatoriedad de permitir el paso a los deportistas de la caña sin ninguna restricción.

Lo que le comunicamos a los oportunos efectos.

En Oviedo a 30 de enero de 2008

REAL ASOCIACIÓN ASTURIANA DE PESCA FLUVIAL
C/ Valentín Masip, 25 33013 Oviedo
Tfno 985270496 - Fax 985235837

Fdo. Delfín Puente Rodríguez
Presidente

6.1.2. Documento de respuesta a las alegaciones

DOCUMENTO DE RESPUESTA DE LAS ALEGACIONES A LOS DOCUMENTOS INICIALES

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Versión mayo de 2008

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 3

2 VERSIÓN SINTÉTICA DE LAS ALEGACIONES 4

3 RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 9

3.1 ESTUDIO GENERAL DE LA DEMARCACIÓN 9

3.2 PROYECTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 20

ÍNDICE TABLAS

Tabla 1.- Relación de remitentes de alegaciones 4
Tabla 2.- Relación de alegaciones 5
Tabla 3.- Distribución de alegaciones por remitente 7
Tabla 4.- Agrupación de las alegaciones 10

1 INTRODUCCIÓN

La Confederación Hidrográfica del Norte elaboró durante el año 2007 los siguientes documentos iniciales de la Demarcación del Cantábrico[1]

- Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica (EGD)
- Proyecto de Participación Pública en el proceso de planificación (PPP)
- Programa, Calendario y Fórmulas de consulta (PCFC)

Según establece el punto 1 del artículo 74 del Reglamento de Planificación Hidrológica, debe realizarse un proceso de consulta pública de los tres documentos iniciales, con una duración como mínimo de seis meses. Además, según el punto 3 de este artículo, las aportaciones de la consulta pública se integrarán en informes que formarán parte del proceso de planificación y que se recogerán en el anexo del plan.

Como consecuencia de lo anterior, el 25 de julio de 2007 se publicó en el BOE nº 177 la *Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del período de consulta pública de los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar y parte española de las Demarcaciones Hidrográficas del Miño-Limia, Norte, Duero, Tajo, Guadiana.* Esta consulta se ha desarrollado desde el 25 de julio de 2007 al 25 de enero de 2008, período durante el cual se han estado recibiendo diversas *observaciones y alegaciones* – en lo sucesivo, se utiliza únicamente el término *alegación* –.

[1] Según el RD 266/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica la Confederación Hidrográfica del Norte y se divide en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la Demarcación Hidrográfica del Norte pasa a denominarse Demarcación Hidrográfica del Cantábrico.

2 VERSIÓN SINTÉTICA DE LAS ALEGACIONES

De los tres documentos a consulta, se han presentado alegaciones al Estudio General de la Demarcación (EGD) y al Proyecto de Participación Pública (PPP), tal y como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1.- Relación de remitentes de alegaciones

FECHA RECEPCIÓN	REMITENTE	REFERENCIA DOCUMENTO
18-01-2008	Iberdrola Generación S.A.	PPP
25-01-2008	Eduardo Menéndez Casares	EGD
25-01-2008	Coordinadora Ecoloxista d'Asturies	EGD
25-01-2008	Andecha Astur	EGD
25-01-2008	Ecoloxistes n'Aición d'Àsturies	EGD
28-01-2008	Dª Zulima Izquierdo Cuadrado	EGD
28-01-2008	Jóvenes por la Ecología de Asturias	EGD
28-01-2008	D. Miguel Nava Vazquez	EGD
29-01-2008	Agrupación de Colectivos Asturianos	EGD
29-01-2008	Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes	EGD

Las alegaciones han sido tratadas de diferente manera:

Así, una de ellas tiene un carácter más general al haberse recibido en más demarcaciones hidrográficas y por tanto la respuesta se ha redactado siguiendo las

indicaciones de la Subdirección General de Planificación y Uso Sostenible del Agua del Ministerio de Medio Ambiente[2]

El resto de las alegaciones son más particulares y centradas en una parte concreta del territorio de la demarcación. Han sido remitidas por organizaciones pertenecientes al tejido social y presentando prácticamente las mismas alegaciones por organización. Han sido estudiadas y contestadas de forma particular por la Confederación Hidrográfica del Norte.

En la Tabla 2 se describen las diferentes alegaciones, indicando los documentos a los que se refieren y asignándoles un código que ayudará a identificarlas en el Apartado 3 *"Respuesta a las Alegaciones"*.

Tabla 2.- Relación de alegaciones

DOCUMENTO INICIAL	ALEGACIÓN	CÓDIGO ALEGACIÓN
PPP	**Relación de las posibles partes interesadas**	PPP-1
EGD	**No se mencionan las fuentes y las fechas de los estudios sobre las condiciones climáticas y los recursos hídricos**	EGD-1
EGD	**Imposibilidad de ascender en la cadena de datos hasta las fuentes de información que han permitido elaborar los documentos**	EGD-2
EGD	**Los caudales ecológicos son los definidos en el P.H. de Cuenca y en este momento la DMA plantea otros criterios para su determinación**	EGD-3
EGD	**En relación con la demanda se proporcionan datos estimados (del Instituto Nacional de Estadística) y sin desagregar**	EGD-4
EGD	**Masas de agua muy modificadas**	EGD-5
EGD	**¿Con que criterios se ha seleccionado los tramos de río de**	EGD-6

[2] Según el RD 432/2008, de I2 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, el Ministerio de Medio Ambiente pasa a denominarse Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

DOCUMENTO INICIAL	ALEGACIÓN	CÓDIGO ALEGACIÓN
	interés medioambiental y los de interés natural?	
EGD	**Análisis de presiones e impactos**	EGD-7
EGD	**Falta total de datos relacionados con las masas de agua subterránea**	EGD-8
EGD	**En Asturias existen numerosos huecos en el subsuelo producto de las explotaciones mineras de carbón**	EGD-9
EGD	**Deberían analizarse medidas de ahorro y gestión de la demanda**	EGD-10
EGD	**Recuperación de costes**	EGD-11
EGD	**Escenarios de demanda**	EGD-12
EGD	**Esta bajando el consumo de agua en España**	EGD-13
EGD	**Costes medioambientales**	EGD-14
EGD	**Tendencias del aumento del nº de plazas turísticas**	EGD-15
EGD	**¿Se han tenido en cuenta los proyectos de instalación de centrales de ciclo combinado y sus consumos de refrigeración?**	EGD-16
EGD	**Deficiente calidad de los mapas**	EGD-17

En la Tabla 3 aparecen reflejadas las alegaciones (código de alegación) procedentes de cada uno de los remitentes. Asimismo se puede observar que se ha recibido un total de 18 alegaciones. Es importante señalar que 17 de ellas han sido enviadas por más de un remitente.

Tabla 3.- Distribución de alegaciones por remitente

CÓDIGO ALEGACIÓN / REMITENTE	PPP-1	EGD-1	EGD-2	EGD-3	EGD-4	EGD-5	EGD-6	EGD-7	EGD-8	EGD-9	EGD-10	EGD-11	EGD-12	EGD-13	EGD-14	EGD-15	EGD-16	EGD-17
Iberdrola Generación S.A.	x																	
Eduardo Menéndez Casares		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Coordinadora Ecoloxista d'Asturies		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Andecha Astur		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ecoloxistes n'Aición d'Àsturies		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dª Zulima Izquierdo Cuadrado		x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x
Jóvenes por la Ecología de Asturias		x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x
D. Miguel Nava Vazquez		x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x
Agrupación de Colectivos Asturianos		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nº DE ALEGACIONES	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	6	6	6	9	9	9	9

3 RESPUESTA A LAS ALEGACIONES

A continuación se responde a las alegaciones del Estudio General de la Demarcación y del Proyecto de Participación Pública (no se ha recibido ninguna alegación referente al Programa, Calendario y Fórmulas de consulta).

En cada caso se recoge la alegación formulada por el remitente y a continuación se expone la respuesta. Algunas alegaciones presentan características comunes, por lo que se han agrupado, considerándose adecuado darles una respuesta común.

Asimismo, debe de tenerse en cuenta que la mayoría de las alegaciones referentes al Estudio General de la Demarcación (EDG) han sido enviadas por más de un remitente y por tanto se genera una sola respuesta.

3.1 ESTUDIO GENERAL DE LA DEMARCACIÓN

El Estudio General de la Demarcación recoge la información transmitida en 2005 a la Unión Europea, referente a la caracterización de la demarcación y a su registro de zonas protegidas, incluyendo las actualizaciones realizadas hasta el comienzo de la consulta pública de los Documentos Iniciales (25 de julio de 2007). Tiene un carácter técnico, y constituye la descripción del estado actual de la demarcación.

Este documento ha de servir como base y punto de referencia para la elaboración del Esquema de Temas Importantes (ETI) y el Proyecto de Plan Hidrológico. Por tanto la mayor parte del mismo está siendo revisada y actualizada dentro de las líneas de trabajo abiertas actualmente en la demarcación y según la Instrucción de Planificación Hidrológica (en tramitación). Así, las alegaciones serán analizadas y en su caso, tenidas en cuenta, en la elaboración de dichos documentos. Por ello, y de acuerdo a las directrices establecidas por la Dirección General del Agua, en este momento no procede realizar su actualización.

No obstante el Plan Hidrológico de cuenca recogerá el Estudio General de la Demarcación actualizado.

Como se ha mencionado anteriormente, se han formado grupos constituidos por aquellas alegaciones que tienen características comunes, con el objetivo de darles una respuesta global y común. A continuación se recogen los grupos generados referentes al Estudio General de la Demarcación, indicando los códigos de las alegaciones que los constituyen.

Tabla 4.- Agrupación de las alegaciones

GRUPO DE ALEGACIONES	CÓDIGO ALEGACIONES
Fuentes y fechas de los estudios sobre clima y recursos hídricos	EGD-1, EGD-2
Caudales ecológicos	EGD-3
Masas de agua muy modificadas. Estuario del Navia	EGD-5
Tramos de interés natural y medioambiental	EGD-6
Presiones e impactos	EGD-7
Aguas Subterráneas	EGD-8, EGD-9
Demandas	EGD-4, EGD-10, EGD-15, EGD-16
Recuperación de costes y escenarios de demanda	EGD-11, EGD-12, EGD-13, EGD-14
Deficiente calidad de los mapas	EGD-17

➢ FUENTES Y FECHAS DE LOS ESTUDIOS SOBRE CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS (EGD-1 y EGD-2)

Alegaciones:

EGD-1. No se mencionan las fuentes y las fechas de los estudios sobre las condiciones climáticas y los recursos hídricos. Teniendo en cuenta la escasez de estaciones meteorológicas que están operativas no se pueden considerar actualizados los resultados que se presentan. Lo mismo se puede decir sobre las aportaciones de los ríos, dada la deficiente calidad y cantidad de estaciones de aforo. Si los datos provienen del estudio realizado para la elaboración del PH de Cuenca aprobado en el 1998, serían datos elaborados en la década de los 80 o principios de los 90, hace casi 20 años. No se han tenido en cuenta las variaciones esperadas de la pluviometría como consecuencia del cambio climático, ni las evapotranspiraciones que tendrían lugar con el aumento de temperatura esperado, creemos que se deberían hacer estudios con series reducidas de los últimos 20 años para sí acercarnos más a las condiciones climáticas que hay hoy. Si no se disponen de datos actuales corregidos con las previsiones esperadas por los modelos que tienen en cuenta el cambio climático, es necesario hacer estudios actuales sobre esos parámetros ya que difícilmente se podrá hacer una evaluación correcta si partimos de datos erróneos.

EGD-2. Imposibilidad de ascender en la cadena de datos hasta las fuentes de información que han permitido elaborar los documentos, si bien en la Web se han colgado los documentos en discusión hasta el momento y se han hecho algunos documentos divulgativos sintéticos interesantes sobre los temas a tratar.

Respuesta:

Los datos relativos a recursos hídricos presentados en el Estudio General de la Demarcación, son los del Plan Hidrológico vigente. En el nuevo Plan Hidrológico de Cuenca se incorporarán datos actualizados a través del SIMPA (Sistema Integrado para la Modelación del proceso Precipitación Aportación). Esta información estará próximamente disponible.

En los documentos del proceso de Planificación se incluirán fuentes, fechas, etc., de la información aportada.

La información referente a los recursos hídricos es recogida en los apartados 2.4. "Inventario de recursos hídricos naturales" y 3.5. "Asignación y Reserva de Recursos" de la Instrucción de Planificación Hidrológica (en tramitación).

En relación al cambio climático, el Reglamento de Planificación establece en los Artículos 11.4 y 21.4 lo siguiente: *"El plan hidrológico evaluará el posible efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de la demarcación. Para ello estimará los recursos que corresponderían a los escenarios climáticos previstos por el Ministerio de Medio Ambiente, que se tendrán en cuenta en el horizonte temporal al año 2027".* Asimismo, el apartado 2.4.6. "Evaluación del efecto del cambio climático" de la Instrucción de Planificación Hidrológica (en tramitación) recoge información sobre la integración del cambio climático en la planificación hidrológica.

➢ CAUDALES ECOLÓGICOS (EGD-3)

Alegaciones:

EGD-3. Los caudales ecológicos son los definidos en el P.H. de Cuenca y en este momento la DMA plantea otros criterios para su determinación. Para poder estimar extracciones de agua de una determinada masa de agua superficial es imprescindible saber cuanta es necesaria para poder mantener en buenas condiciones los ecosistemas fluviales.

En la página 35 se muestra la Tabla 8 "Caudales ecológicos en los principales embalses de la Cuenca Norte", sin embargo en dicha tabla solamente aparecen 3 embalses, estando ausentes, entre otros, los tres embalses del Navia donde se encuentran los mayores de la cuenca (Salime y Doiras). Tampoco se especifica como se controlará el cumplimiento de mantener este caudal (en la actualidad existen muchas dudas sobre el cumplimiento en varios lugares de la demarcación)

Es imprescindible programar la instalación de redes de control cuantitativos y cualitativos (aforos en ríos y arroyos, análisis químicos y bacteriológicos rutinarios y extraordinarios en zonas de riesgo de contaminación puntual, etc) que permitan conocer en el futuro y de forma instantánea datos necesarios para tomar decisiones avaladas por la racionalidad y el rigor. Es necesario conocer no solo el estado de una masa de agua sino el tipo y cantidad de contaminante o tipo de alteración morfológica. En el documento viene en

forma gráfica (mapa con distintos colores según el estado de la masa de agua) pero se necesita conocer en mayor profundidad para mejorarlo, sobre todo en el río Nalón y sus afluentes y la parte baja del Navia (aguas de transición).

Respuesta:

La Instrucción de Planificación Hidrológica, actualmente en trámite de aprobación, establece en el apartado 3.4 "Caudales ecológicos" los elementos que ha de considerar la determinación del régimen de los caudales ecológicos, siguiendo un enfoque metodológico ecosistémico en el que se van a determinar caudales mínimos, máximos, sus variaciones, crecidas y tasas máximas de variación. Para estas determinaciones se emplean tanto métodos hidrológicos como su ajuste por métodos de modelización de hábitat. Por otra parte, la implantación del régimen de caudales ecológicos se desarrollará conforme a un proceso de concertación que tendrá en cuenta los usos y demandas actualmente existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas. Su objetivo es compatibilizar los derechos al uso del agua con el régimen de caudales ecológicos para hacer posible su implantación.

En relación al estado de las masas de agua y de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 "Estado de las aguas" de la Instrucción de Planificación Hidrológica, se pondrán en marcha las redes de control (vigilancia, operativa, investigación) que van a permitir conocer la evaluación del estado de las masas de agua.

➢ MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS. ESTUARIO DEL NAVIA (EGD-5)

Alegaciones:

EGD-5. Al referirse a las **masas de agua muy modificadas** se menciona el estuario del Navia describiendo las alteraciones sufridas desde el siglo XIX y señalando que las más recientes son las llevadas a cabo por la construcción de los grandes embalses; sin embargo no se hace ninguna alusión a las obras del trasvase previsto.

Respuesta:

Una masa de agua muy modificada tiene un proceso de identificación y designación de acuerdo a la WFD CIS Guidance Document nº 4. De acuerdo con este proceso, se han identificado de forma preliminar como masas de agua muy modificadas, el tramo de río

aguas abajo del embalse de Arbón y el estuario del Navia. La designación definitiva se realizará en 2009.

La infraestructura del trasvase del Arbón, del que se pretende extraer un caudal medio aproximado de 6 Hm^3/año cantidad muy pequeña frente a la aportación anual de 2171 Hm^3 de la cuenca del Navia, se tendrá en cuenta para la designación de masa de agua muy modificada a realizar en 2009.

➢ TRAMOS DE INTERÉS NATURAL Y MEDIOAMBIENTAL (EGD-6)

Alegaciones:

EGD-6. ¿Con que criterios se ha seleccionado los tramos de río de interés medioambiental y los de interés natural? En el punto 3.5.5. se exponen las características que debe cumplir un tramo para ser considerado de interés medioambiental y más adelante muestra un listado en el que faltan muchos tramos e incluso ríos enteros que cumplen esas características. Curiosamente está el río Alba (que tiene una piscifactoría) y falta Caliao.

Respuesta:

Los tramos de interés natural y medioambiental vienen recogidos en el Plan Hidrológico vigente, y como tal van a ser incluidos en el siguiente.

El artículo 23 "Régimen de protección especial" del Reglamento de la Planificación Hidrológica establece que:

"Podrán ser declaradas de protección especial determinadas zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua por sus características naturales o interés ecológico, de acuerdo con la legislación ambiental y de protección de la naturaleza. Los planes hidrológicos recogerán la clasificación de dichas zonas y las condiciones específicas para su protección.

Las administraciones competentes por razón de la materia facilitarán al organismo de cuenca correspondiente, durante la elaboración de los planes hidrológicos, la relación de zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua declaradas de protección especial para su inclusión en dichos planes, bajo la supervisión del Comité de Autoridades Competentes de la demarcación.

La clasificación y las condiciones para su protección se recogerán en los planes hidrológicos de cuenca de forma expresa o remitiéndose de manera concreta a los preceptos vigentes de la legislación ambiental y de protección de la naturaleza que pudieran afectarle. Dichas zonas formarán parte del registro de zonas protegidas".

Además, en su artículo 24 "Registro de zonas protegidas" recoge información detallada sobre el registro de zonas protegidas.

➢ PRESIONES E IMPACTOS (EGD-7)

Alegaciones:

EGD-7. En el **análisis de presiones e impactos** tan solo el río Noreña se considera en riesgo seguro por puentes puntuales de contaminación y por alteraciones morfológicas, sin embargo son patentes los problemas de contaminación y alteración morfológica que existen en muchos otros ríos

Respuesta:

El análisis de presiones e impactos del Estudio General de la Demarcación es preliminar. Actualmente hay información mejorada y avanzada, que en breve se pondrá a disposición del público en el Esquema de Temas Importantes.

➢ AGUAS SUBTERRÁNEAS (EGD-8, EGD-9)

Alegaciones:

EGD-8. Falta total de datos relacionados con las masas de agua subterránea. Apenas existen piezómetros, ni estudios de los diferentes acuíferos, tampoco se dan cifras de recarga ni de descarga. Teniendo en cuenta que la extracción de agua subterránea ha de hacerse considerando la importancia que los diferentes manantiales tienen para el mantenimiento del buen estado de las masas de agua superficial y el cumplimiento de sus funciones medioambientales y que también es preciso conocer los intercambios de agua entre diferentes acuíferos comunicados sería imprescindible establecer un programa de actuaciones hasta el 2015 que consiga paliar esta deficiencia de conocimiento. También es imprescindible establecer mecanismos que permitan conocer las extracciones que se

realizan desde los pozos instalados en los diferentes acuíferos y no confiar en que los usuarios respetarán los caudales de su concesión.

Son especialmente importantes las masas de agua 012.006 (Oviedo-Cangas de Onis), 012.005 (Villaviciosa) y 012.007 (Llanes-Ribadesella) por ubicarse en zonas muy pobladas y tener instalados sondeos de abastecimiento.

EGD-9. En Asturias existen numerosos huecos en el subsuelo producto de las explotaciones mineras de carbón del último siglo, una vez abandonadas las labores mineras esos huecos son rellenados por agua hasta que rebosa a los cauces fluviales. Son aguas subterráneas muy alteradas y que requieren que se las tenga en cuenta a la hora de planificar ya que representan un volumen muy grande (un volumen equivalente a los m3 de carbón y estériles extraídos por debajo de la cota de los ríos, reducido por la compactación producida) concentrado casi exclusivamente en la cuenca del Nalón (Nalón, Aller).

Respuesta:

El Esquema de Temas Importantes recoge la falta de estudios sobre las masas de agua subterráneas como uno de los temas importantes, y así se establecerán líneas de actuación y medidas para paliar este déficit de información.

La propuesta en relación a los huecos en el subsuelo producto de explotaciones mineras del último siglo, se estudiará en la fase de establecimiento del Programa de Medidas.

➢ DEMANDAS (EGD-4, EGD-10, EGD-15, EGD-16)

Alegaciones:

EGD-4. Imposibilidad de ascender en la cadena de datos hasta las fuentes de información que han permitido elaborar los documentos, si bien en la Web se han colgado los documentos en discusión hasta el momento y se han hecho algunos documentos divulgativos sintéticos interesantes sobre los temas a tratar.

EGD-10. Deberían analizarse medidas de ahorro y gestión de la demanda que permitieran cumplir los objetivos de la directiva. No se hace y creemos que debe ser un objetivo prioritario para el futuro más inmediato.

EGD-15. En el documento se resaltan **las tendencias del aumento del nº de plazas turísticas** pero esos datos deben conocerse con más precisión ya que para planificar es necesario saber cuanta demanda se parte y que parte de la demanda doméstica proviene de segundas residencias y turismo (campos de golf asociados a urbanizaciones) y que tiene en la época estival (la de mayor escasez) su mayor consumo

EGD-16. Se menciona que se esperan demandas de consumo para usos de refrigeración en instalaciones de producción energética de 40 Hm3, pero **¿se han tenido en cuenta los proyectos de instalación de centrales de ciclo combinado y sus consumos de refrigeración?**

Respuesta:

En relación con estas alegaciones, el apartado 3.1.2 "Demandas de agua" de la Instrucción de Planificación Hidrológica (en tramitación), establece que:

"El Plan Hidrológico incorporará la estimación de las demandas actuales y de las previsibles en el escenario tendencial en los años 2015 y 2027".

"Las estimaciones de demanda deberían ajustarse, para las demandas correspondientes a la situación actual, con los datos reales disponibles sobre detracciones y consumo en las unidades de demanda más significativas de la demarcación."

"Las demandas futuras se estimarán teniendo en cuenta las previsiones de evolución de los factores determinantes".

"El cálculo de la demanda de abastecimiento a poblaciones se basará, teniendo en cuenta las previsiones de los planes urbanísticos, en evaluaciones demográficas, industriales y de servicios, en general las industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta tanto la población permanente como la estacional, así como en número de viviendas principales y secundarias por tipologías".

Para recabar información sobre las demandas de la demarcación, se enviaron encuestas a diversos usuarios y gestores del agua. Sin embargo, se obtuvieron muy pocas

respuestas. Actualmente se está trabajando en esta línea para obtener información actualizada e incluirla en el Plan Hidrológico de Cuenca.

Las medidas de ahorro y gestión de la demanda serán estudiadas en la fase de establecimiento del Programa de Medidas La Directiva Marco del Agua y el Reglamento de Planificación Hidrológica contemplan estas medidas como prioritarias.

➢ RECUPERACIÓN DE COSTES Y ESCENARIOS DE DEMANDA (EGD-11, EGD-12, EGD-13, EGD-14)

Alegaciones:

EGD-11 En lo referente a la **recuperación de costes**, en el documento se señala que en Asturias sólo se produce una recuperación del 56,48% de los costes. Esto exigiría poner en marcha medidas para lograr la recuperación total, es decir subidas de las tarifas en términos reales, organizando su estructura de forma que incentivaran el ahorro. Sin embargo no se propone nada para mejorar la tasa de recuperación, es más, en la página 209 se supone para el periodo hasta 2015 un escenario de estabilidad de precios en términos reales. Es decir, en materia de recuperación de costes, se ignora totalmente lo que señala la Directiva.

EGD-12. Escenarios de demanda. En ese capítulo se hacen unas consideraciones sobre la elasticidad de la demanda de agua (dicen que es de -0,65), los factores de los que depende, etc y se calcula un escenario de demanda urbana para 2015 que en consumo urbano supone un cierto crecimiento con respecto a la actualidad, pasando de 120 a 124 HM3. Para calcular esta demanda parten de supuestos contrarios a los principios de la directiva: suponen que los precios en términos reales no aumentarán (no se recuperan los costes), no consideran el cambio tecnológico y sus posibilidades en cuanto a los mecanismos de ahorro de agua en electrodomésticos, etc, presumen que el consumo por vivienda y persona no va a cambiar nada (no se prevé una política de fomento del ahorro (, etc

Es decir, se calcula un escenario de demanda totalmente al margen de las indicaciones de la Directiva. Es como si se dijera: La Directiva está muy bien y sus contenidos también, pero aquí todo eso no nos afecta y el escenario futuro no tiene nada que ver con esto. Los redactores del documente parece que no se creen en absoluto los

objetivos ni la filosofía de la DMA. Y entendemos que eso no puede ser. Es una burla a la ley, a los ciudadanos y al medio ambiente.

EGD-13. En relación con todo esto queremos destacar también que según los últimos datos del INE **desde 2000 esta bajando el consumo de agua en España**: un 6,48% entre 2000 y 2005. Sobre todo baja por la disminución de las pérdidas (-20,59%) y la del consumo industrial (-5,65%) pero también por la bajada del consumo de los hogares (-1,19%).

EGD-14. En relación con **los costes medioambientales**, no siempre se pueden pagar ciertos impactos que algunas actuaciones llevan implícitas, por muchas medidas correctoras que se quieran tomar y sobre todo porque la mayoría de esos impactos son irreversibles

En cambio, en Asturias, es de los sitios donde aumenta, al contrario que la tendencia nacional. ¿Por qué se produce esto? Creemos que está claro que se produce porque en Asturias hay una ausencia total de políticas de ahorro y gestión de la demanda. Y esto no debe seguir así y debe corregirse urgentemente. El nuevo Plan Hidrológico debe contribuir a ello.

Respuesta:

La caracterización económica de los usos del agua es una novedad en el proceso y aunque se ha avanzado mucho, aún queda por completar y detallar. Para la aprobación de los planes se alcanzará el suficiente nivel de detalle en los estudios y se seguirá trabajando, tras la aprobación de estos para la siguiente revisión del Plan, además de para cumplir con el resto de etapas establecidas en nuestra legislación, como la recuperación de los costes de los servicios del agua

En el Estudio General de la Demarcación se expone un escenario futuro tendencial sin medidas (este escenario sólo incluye medidas básicas de otras Directivas. Los precios para recuperar costes son básicos pero no son parte del escenario tendencial). Esto no significa que la recuperación de costes no sea una medida porque si lo es, y por supuesto podría servir para moderar la demanda en función de la elasticidad del precio.

El Estudio General de la Demarcación toma los datos del INE en relación al consumo de agua. Como se ha dicho anteriormente, se presenta el escenario tendencial, que no contempla medidas. No es objeto del Estudio General de la Demarcación.

En la elaboración del Programa de Medidas se compararán el escenario tendencial y escenarios que contemplen medidas, teniendo como objetivo el uso eficiente del agua.

- **DEFICIENTE CALIDAD EN LOS MAPAS (EGD-17)**

Alegaciones

EGD-17. Deficiente calidad de los mapas presentados, (su pequeño tamaño) dificulta su análisis.

Respuesta:

Para que el documento sea manejable, la escala de los mapas debe ser la que aparece en el mismo. No obstante toda la información gráfica, a una escala más visible, está a disposición pudiendo ser solicitada por los interesados.

3.2 PROYECTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Se ha presentado una alegación referida a este documento que, tras a su análisis, ha sido incorporada al documento definitivo del Proyecto de Participación Pública.

Alegaciones:

PPP-1. En la Tabla 1 **"Relación de las posibles partes interesadas"** no están expresamente señalados los usos energéticos del agua (hidroeléctricos y de refrigeración de térmicas convencionales, ciclos combinados, nucleares, termosolares y centrales de biomasa). Consideramos que esto debe ser corregido, dada la gran relevancia que los usos energéticos del agua, tanto continental como de la franja costera, tienen en el entramado económico español.

En consecuencia, solicitamos la incorporación de las empresas energéticas como actores participantes, citados expresamente, así como la del Ministerio de Industria y Red Eléctrica de España, tal como lo está, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura junto con otros muchos representantes de los intereses agrícolas. Esto permitiría la presencia efectiva de los intereses energéticos, junto con la defensa del interés general en ese ámbito.

En general, es imprescindible que en este proceso de planificación que culminará en Diciembre de 2009, y en las sucesivas revisiones de los Planes de Demarcación, se tengan en cuenta los requerimientos de la planificación energética, en cualquiera de sus modalidades, para lo que resulta imprescindible la incorporación y participación activa y p permanente de las autoridades energéticas.

Respuesta:

La solicitud de incluir los usuarios energéticos y Red Eléctrica de España como agentes interesados en el proceso de participación pública, ha sido aceptada. Por tanto, se han incluido en la tabla 1 del Proyecto de Participación Pública y en la base de datos de agentes interesados de la demarcación.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se encuentra representado en el Consejo del Agua de la cuenca, y se contará con su participación en el proceso participativo, en el grado de implicación que consideren oportuno.

En el Proyecto de Participación Pública se consideran participantes activos aquellos actores o agentes que se han mostrado activos, atendiendo a alguna de las invitaciones o consultas que se les han realizado. La voluntad de la demarcación en el proceso de participación es que lo sean la mayoría de los agentes.

6.2 ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES

6.2.1. Alegaciones

De: eap [mailto:eap@piraguismo.com]
Enviado el: dom 31/08/2008 18:36
Para: Directiva Marco
Asunto: Sobre esquema de temas importantes

Estimados señores:

Habiendo enviado su documentación sobre el proceso de participación pública en el que hemos participado nos encontramos con cuestiones que creemos no han sido tratadas al menos desde el punto de vista que se plasma en el documento de esquemas importantes, de ahí que queramos poner de manifiesto nuestra discrepancia a diversos aspectos que nos afectan directamente y que creemos han de ser aclarados y/o corregidos dada su repercusión a l tratarse de un documento público.

Así dentro del esquema de temas importantes, en el apartado II.3, sobre gestión y compatibilización de usos lúdicos (pesca deportiva, baño, piragüismo, deporte activo…), en el apartado 1, sobre caracterización y localización del problema, se realiza una afirmación concreta que no se corresponde exactamente con lo tratado en las reuniones y que nos gustaría que se aclarase, pues puede dar lugar a equívocos futuros de gran trascendencia.

Cuando se afirma de forma genérica, que la práctica de la navegación puede provocar una pérdida de la calidad del agua restringiendo su utilización posterior, no responde a lo tratado en las reuniones, donde esa aseveración se ha mencionado en un caso muy concreto de la navegación en embalses , cuya agua su destino es el consumo humano, y se sobreentendía que se refería siempre a usos de navegación con motor o a embarcaciones que permanecen amarradas en el agua , lo que podía dar lugar a contaminaciones de diferentes tipos (incluso se habló entre otros de la posible afección de embarcaciones provenientes de otros lugares , llegando a citarse como ejemplo el mejillón cebra, etc.

Por ello rogamos se haga mención a los diferentes tipos de navegación y a la diferencia existente por la cual el piragüismo quedaría excluido de ese supuesto uso nocivo.

Asimismo se habla del problema asociado al uso recreativo en los ríos que va ligado a la posible afección a las poblaciones de peces y al problema del pisoteo de frezaderos, u otros ecosistemas acuáticos (pag.18). Esta otra aseveración no puede darse como una conclusión, puesto que solamente responde a un comentario hecho por representantes del colectivo de pescadores, del que nos sorprende su reproducción fiel, incluso a pesar de incurrir en errores conceptuales (ecosistema es un sistema formado por una comunidad natural de seres vivos y por componentes abióticos) y que por supuesto no compartimos. A día de hoy no conocemos la existencia de un solo estudio, en ningún país y sobre el particular que haya concluido que la navegación a remo en los ríos afecte a las poblaciones de peces y que esta conlleve un pisoteo de frezaderos.

La navegación se realiza deslizándose por la lámina de agua, y los piragüistas van sobre la embarcación. Excepcionalmente se ponen de pie sobre el lecho del rio, solo en casos de vuelcos y escasa profundidad, así como en las salidas y entradas a las

orillas en embarques y desembarques, produciéndose estos casos allí donde navegan inexpertos esto es en las partes bajas de los ríos y en época veraniega, y sabido es que en los ríos Cantábricos los peces desovan en la época invernal, y preferentemente en las partes altas de los ríos y en riachuelos. En estos mismos tramos se desarrolla la práctica de la pesca a mosca seca, que se practica desde el lecho del río. Diferentes formas de medir, pescar o simplemente verlo.

En cambio en esta misma línea direccional, no se hace la mas mínima mención a la afección de la pesca a este medio y por el contrario, curiosamente se hace referencia (pág. 19) a destacar la importancia de la calidad de las aguas en relación directa a la pesca deportiva, reflejándose la importancia de esta actividad no solo frente al medio natural (¿), sino en el tejido social y el ámbito económico de la zona circundante (¿).

Como comentario a este párrafo nos gustaría decir que se deja ver demasiado el plumero partidario y añadir que la importancia de la calidad de las aguas va en relación directa no solo con la pesca, sino con la navegación, el baño, y todos los usos lúdicos o no, con la calidad de vida, etc., etc.

Además nos preguntamos cuál es la importancia de la actividad de la pesca, frente al medio natural, esto es de forma positiva, que es lo que se deduce del párrafo. ¿Nos lo explican?. En tanto nosotros podemos enumerarles un sinfín de aspectos negativos para el ecosistema fluvial, incluido el más directo que es la afección a la población de peces. Parece un sin sentido achacar al piragüismo la influencia sobre alteraciones en las poblaciones de peces, y en cambio a la pesca que implica la desaparición directa de los peces a través de su muerte, parece ser importante para el medio natural (¿). Pero podemos continuar con la construcción de caminos, pasos de hormigón, destrucción de vegetación de ribera, pasarelas, casetas o refugios de pesca, contaminación por plomos, caza de especies competidoras, pájaros enganchados en anzuelos, puesta en peligro de especies emblemáticas (salmón, etc.), repoblaciones con el único objetivo de su pesca (solo se repuebla si el recurso es escaso), pesca en condiciones de caudales mínimos, etc.

Como colofón en el párrafo mencionado se cita la importancia de la pesca en el ámbito económico de las áreas circundantes, cuando está demostrado que el coste de la gestión pública de la pesca, supera con creces a los recursos que esta genera y que por cierto van en disminución acentuada desde su consideración como pesca deportiva... Tal es así que su importancia en el turismo regional es insignificante.

En el apartado 3 (pág. 20), se vuelve a incidir en los efectos negativos que la navegación puede provocar en la perdida de la calidad del agua y la posible afección a las poblaciones de peces y al problema del pisoteo de frezaderos u otros ecosistemas acuáticos (¿). Parece que no se trata pues de un error y creemos que se debe clarificar este apartado, diferenciando los tipos de navegación y centrar el debate en los justos términos, no inventándose posibles efectos, inexistentes, siguiendo esquemas contrarios a la praxis científica.

Por último manifestarles que es bastante des motivador que las conclusiones que Uds. resumen en este documento, sean tan diferentes a las que habíamos sacado de nuestra participación pública, y de las que considerábamos había un cierto consenso.

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento

23/09/2008 11:10:01
REGISTRO DE ENTRADA
E0012008000314 9
N: 3149

En contestación a su escrito de 1 de agosto de 2008 por el que se remite a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León el Esquema de Temas Importantes en materia de gestión de aguas, con el fin de establecer los principales asuntos focales del futuro Plan Hidrológico, le comunico que no se realizan observaciones al mismo.

Valladolid, 16 de septiembre de 2008

EL CONSEJERO,

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Consejería de Fomento -

Antonio Silván Rodríguez

PASE Copia ___ Orig ___ A
Pres.
PH
Para conocimiento
Para Informe
Para [illegible]miento
Para Despachar conmigo
Para preparar [illegible]ación
Fecha 24-09-08 Firma

PRESIDENCIA
25 SET. 2008
Fecha
Firma

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO.

ura
ur agentzia
agencia vasca del agua
REGISTRO DE ENTRADA
23/10/2008
11:56:20
Oficina Plaza de España
E001200800004776

ura
21 OCT 2008
SARRERA
Zkia. 554/970

Jorge Marquínez García
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Plaza de España, 2
33071 Oviedo

ASUNTO: ***ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES. PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO***

Con fecha 11 de septiembre de 2008 se ha recibido en la Agencia Vasca del Agua / Uraren Euskal Agentzia el documento "**Esquema Provisional de Temas Importantes. Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico**", remitido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) con el fin de que sean efectuadas por esta Agencia aquellas observaciones que se consideren oportunas, en el marco de su período de consulta pública.

A tal efecto, me complace remitirle la documentación adjunta:

- Informe de la Agencia Vasca del Agua relativo al *Esquema Provisional de Temas Importantes. Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico*. Incluye diferentes observaciones y aportaciones efectuadas por la Agencia Vasca del Agua a dicho documento.
- *Contribución de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la elaboración del Esquema de Temas Importantes en materia de Gestión de Aguas en la Demarcación Hidrográfica del Norte* (memoria y anejo de participación pública). Se trata de un completo documento elaborado por la Agencia Vasca del Agua, tras un proceso de participación pública en el que han intervenido los principales agentes, públicos y privados, relacionados con el medio hídrico del País Vasco. En él se pueden encontrar, entre otras cuestiones, los principales problemas que entendemos deberían ser abordados en el futuro Plan Hidrológico, así como las estrategias o líneas generales de actuación para su solución.

Atentamente, en Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2008.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICA
Número 008/00846
31 OCT. 2008
ENTRADA

PRESIDENCIA
SALIDA
Fecha 24 OCT 2008

Fdo. Tomás Epalza Solano
Zuzendari Nagusia
El Director General

PASE Copia Orig. A
P. H
Para Despacho
Para Conocimiento
Fecha 24/10/08
Firma

ASUNTO: **INFORME DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA RELATIVO AL *ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES. PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO***

Con fecha 11 de septiembre de 2008 se ha recibido en la Agencia Vasca del Agua / Uraren Euskal Agentzia el documento "**Esquema Provisional de Temas Importantes. Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico**", remitido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (en adelante CHC) con el fin de que sean efectuadas por esta Agencia aquellas observaciones que se consideren oportunas, en el marco de su período de consulta pública.

A tal efecto, en este informe se efectúan diferentes comentarios y aportaciones al contenido del citado Esquema de Temas Importantes (en adelante ETI), que complementan lo expresado en el documento anexo *Contribución de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la elaboración del Esquema de Temas Importantes en materia de Gestión de Aguas en la Demarcación Hidrográfica del Norte.*

CONSIDERACIONES

El documento elaborado por la CHC presenta un índice y unos contenidos generales ajustados a lo estipulado por la DMA y por Reglamento de Planificación Hidrológica. La estructura general se compone de los siguientes apartados:

- Introducción.
- Rasgos básicos de la demarcación. Incluye una descripción muy sucinta de la cuenca.
- Usos del agua. Se realiza una breve descripción de los usos del agua, a nivel de Juntas de Explotación, incluyendo balances recurso/demanda, así como algunas consideraciones generales con respecto a costes de los servicios relacionados con el agua y su recuperación.
- Evaluación del estado. En este apartado se sintetiza el análisis de riesgo de no alcanzar los objetivos de la DMA.
- Temas Importantes. Se identifican los problemas que deben ser tratados en el futuro Plan Hidrológico, agrupados en cuatro epígrafes: Incumplimiento de objetivos medioambientales, demandas y racionalidad de uso, fenómenos extremos y conocimiento y gobernanza.
- Líneas de actuación. Se proponen las actuaciones para resolver los problemas identificados, incluyendo tanto actuaciones en curso como nuevas actuaciones a considerar.
- Conclusiones.
- Bibliografía.
- Anexos.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. El documento en su conjunto se valora de forma **positiva**. En él se pueden encontrar, con diferente grado de desarrollo, los problemas fundamentales que deben ser abordados en el futuro Plan Hidrológico, así como diferentes estrategias para su solución. Las conclusiones del documento sintetizan de forma clara y adecuada las cuestiones más relevantes a resolver.

2. La identificación de los problemas o temas importantes nos parece acertada en líneas generales. Desde nuestro punto de vista, todas (o prácticamente todas) las cuestiones fundamentales que deben resolverse, al menos en las cuencas del País Vasco, están identificadas:

   - *Afecciones al medio hídrico:* Vertidos urbanos e industriales insuficientemente depurados, insuficiente vegetación de ribera, y mal estado morfológico de las masas de agua superficiales, entre otros.
   - Satisfacción de demandas: mejora de abastecimientos urbanos (actuaciones no estructurales y estructurales), etc.
   - Fenómenos extremos: inundabilidad; sequías y cambio climático.
   - Gobernanza: necesidad de mejora de coordinación entre administraciones.

   Los problemas, descritos de forma adecuada en el documento, suelen ser acompañados de la inclusión de casos concretos con redacción más desarrollada. Pero en este sentido llama la atención que apenas hay ejemplos relativos al ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

   A esta falta de casos concretos de las cuencas del País Vasco se une la falta de referencias (tanto en el apartado relativo a la identificación de problemas como en la bibliografía) a determinados trabajos desarrollados por las administraciones de la CAPV, trabajos que por su detalle y calidad son de indudable interés en el proceso de planificación hidrológica de la demarcación. Tal es el caso, por ejemplo, de los estudios de recursos y abastecimiento realizados por el Gobierno Vasco en 2003 y 2004 respectivamente; o de las redes de seguimiento del estado de las aguas superficiales y subterráneas que gestiona la Agencia Vasca del Agua, con nutrida información acerca del estado de las diferentes masas de agua. Esta es una cuestión que es importante en la etapa de planificación actual, pero que será esencial en la elaboración del proyecto de Plan Hidrológico y, especialmente, en el diseño de un adecuado programa de medidas.

3. Las líneas de actuación que se recogen también deben valorarse, en su conjunto, de forma positiva.

   No obstante, tal y como se comentará en apartados posteriores, se aprecia una diferencia en el detalle de la información relativa a actuaciones en curso por parte de las CCAA. En este sentido, y con el objeto de proporcionar una imagen homogénea de la Demarcación, es preciso completar las actuaciones en elaboración por parte de diferentes administraciones de la CAPV, corrigiendo la ausencia de referencias a diferentes planes o programas que

guardan relación más o menos estrecha con los objetivos de la planificación hidrológica. Tal es el caso, por poner un ejemplo, del Programa Marco Ambiental 2007-2010, del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático, o del nuevo Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV, en tramitación.

En cuanto a las nuevas actuaciones, consideramos que con carácter general están bien enfocadas. No obstante, pensamos que es conveniente matizar y/o completar algunas de las estrategias que se proponen. En el apartado relativo a consideraciones específicas se expresan estas cuestiones de forma más detallada pero, por su importancia en la CAPV, cabe destacar las relativas a inundabilidad y a las afecciones morfológicas a las masas de agua superficiales. Desde nuestro punto de vista esta es, junto con los vertidos insuficientemente depurados, una de las principales problemáticas de nuestros ríos, y en este sentido es necesario compatibilizar, por un lado, la consecución de la máxima seguridad de los bienes y de las personas y, por otro, el cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA.

En todo caso, una visión completa de las estrategias y líneas de actuación que pensamos se deberían acometer para solucionar los problemas detectados se encuentra en el documento adjunto *Contribución de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la elaboración del Esquema de Temas Importantes en materia de Gestión de Aguas en la Demarcación Hidrográfica del Norte.*

4. Conforme a lo dispuesto en la DMA y en el Reglamento de Planificación Hidrológica, el Esquema de Temas Importantes (ETI) debe incluir la "propuesta inicial de objetivos medioambientales". El documento presentado por la CHC recoge, por un lado, los objetivos genéricos de la DMA. Por otro lado, incluye para cada problema o tema importante unos objetivos específicos, que también son generalistas.

   Desde nuestro punto de vista la definición de los objetivos ambientales es uno de los aspectos clave del proceso de planificación hidrológica: van a identificar las masas de agua y zonas protegidas en las que es preciso actuar de forma prioritaria (masas de agua y zonas protegidas en riesgo) y, en función de lo estricto de los objetivos, el carácter y la intensidad de las medidas a adoptar.

   Teniendo en cuenta esta importancia, esperamos del ETI **más concreción en la propuesta de los objetivos que se manejan para el Plan**, tanto en lo que se refiere a aguas superficiales como a subterráneas, zonas protegidas y masas de agua muy modificadas. Y sobre todo, cuando ya existen objetivos de calidad fijados por determinadas normativas, u objetivos provisionales que se han plasmado en disposiciones tales como la nueva Instrucción de Planificación Hidrológica.

   Siendo consciente de la importancia de los objetivos ambientales, en la Agencia Vasca del Agua hemos realizado para las Cuencas Internas del País Vasco una definición provisional de estos objetivos, que ha sido incluida en el ETI correspondiente. De la misma forma, se ha trabajado con el mismo nivel de detalle estos objetivos en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico dentro del País Vasco. Éstos han sido objeto de discusión en diferentes talleres de participación pública y están recogidos, a modo de propuesta, en el documento *Contribución de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la elaboración del*

Esquema de Temas Importantes en materia de Gestión de Aguas en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico, que se remite con este informe.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

En este apartado se efectúan otros comentarios y aportaciones, de carácter más específico, a diferentes apartados del ETI.

Apartado 2. Rasgos básicos de la demarcación.

Marco Institucional. En la página 13 y tabla 2.4 se aporta información sobre los organismos de las CCAA con competencias en materias directamente o indirectamente relacionadas con la planificación hidrológica. En lo que respecta a la CAPV figuran exclusivamente determinados departamentos del Gobierno Vasco, y se omiten las Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa. Es preciso incorporar estas administraciones en este apartado, pero también en los apartados descriptivos de los problemas o temas importantes, dado que en ellos se incluye un listado de las autoridades competentes.

Balances en los sistemas de explotación. En las páginas 90 y siguientes se procede a la determinación del balance recurso-demanda a nivel de sistemas de explotación. Este balance se realiza sobre la premisa de los caudales ambientales recogidos en los planes hidrológicos aprobados en 1997 y concluye con la existencia de escasez de recurso en verano en (casi) todos los sistemas de explotación. Desde nuestro punto de vista, es necesario dejar claro que este balance es provisional, puesto que no se han utilizado los nuevos regímenes de caudales ambientales que se incorporarán al futuro plan hidrológico. En este sentido, nuestra experiencia con este tipo de nuevos regímenes indica que el caudal ecológico recogido en los antiguos planes hidrológicos está sobredimensionado en condiciones de estiaje en cuencas con poca capacidad de autorregulación natural. De esta forma, el diagnóstico definitivo puede arrojar resultados notablemente diferentes al que ahora se presenta en el ETI.

Recuperación de costes de los servicios del agua. En la página 99 (tabla 3.32) es preciso incorporar el Canon del Agua establecido por la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del País Vasco. También en la descripción de la página 104.

Apartado 4. Evaluación del estado

Objetivos ambientales. Sería deseable un mayor grado de concreción de los objetivos. En el documento *Contribución a la elaboración del Esquema de Temas Importantes en materia de Gestión de Aguas en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico* se efectúa una propuesta en este sentido.

Estado de las masas. Por su importancia, es necesario que se utilicen todos los datos disponibles para la determinación del riesgo de no alcanzar los objetivos DMA. En el

documento no queda claro si se están manejando los datos de las redes de seguimiento gestionadas por la Agencia Vasca del Agua.

En la página 123 se presenta la evaluación del estado químico de los ríos. En ella no se valora el estado de las masas de agua muy modificadas. Sin embargo, hay que recordar que los objetivos fisicoquímicos deben alcanzarse en todas las masas de agua, independientemente de clasificación o no como muy modificadas.

En la página 136 se concluye que todas las masas de agua subterránea de la Demarcación presentan riesgo nulo. Sin embargo, en el caso del País Vasco, hay que recordar la situación del acuífero Troya, ubicado en la masa de agua Beasain. Se trata de una masa de agua con una problemática específica de contaminación de origen minero, bien conocida a través de los trabajos realizados por las administraciones de la CAPV. Es preciso reflejar esta problemática en la clasificación de riesgo.

Registro de Zonas Protegidas. El río Lea (página 149) se encuentra en las Cuencas Internas del País Vasco.

Apartado 5. Temas Importantes. En este apartado se resumen las problemáticas que deben ser abordadas en el futuro Plan Hidrológico, y que se encuentran desarrolladas en el Anexo A. A continuación se expresan algunos comentarios genéricos al apartado 5, que son completados posteriormente con observaciones específicas al contenido de dicho anexo.

Cumplimiento de objetivos ambientales. En la página 156 se presenta el listado de temas importantes relacionados con el cumplimiento de objetivos ambientales. Se trata de 16 problemas de todo tipo, pero de la lectura del documento no queda una idea clara de cuales son los prioritarios, de aquellos que comprometen con carácter general la consecución de los objetivos de la DMA. Sería conveniente entresacar los problemas más importantes, que a nuestro entender en el ámbito de la CAPV son: la ocupación de dominio / alteración morfológica de masas de agua; y los vertidos urbanos e industriales insuficientemente depurados.

Fenómenos extremos. No compartimos el razonamiento expresado en la página 170 *"Los daños derivados de la afección por inundaciones no son reversibles a corto plazo, por lo que las masas de agua que sufrieran este tipo de alteración probablemente no podrían cumplir con los objetivos medioambientales de la Directiva y serían candidatas a ser justificadas como una excepción"*. Resulta evidente que la inundabilidad es un fenómeno natural propio de la dinámica fluvial y que este fenómeno no representa en sí mismo riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos de la DMA. ES PRECISO ELIMINAR ESTE PÁRRAFO. Por otro lado, dicha afirmación contradice otros planteamientos expresados en el mismo apartado.

Conocimiento y gobernanza. Es preciso hacer énfasis en la necesaria coordinación entre administraciones de la Cuenca (CHC, CCAA, ayuntamientos, entes abastecedores, ...). Entre otros aspectos, esta coordinación debe llegar a la información generada por cada una de ellas y, en especial, a las redes de seguimiento del medio hídrico. Este problema

no es debido, tal y como se dice en el ETI, a la falta de un Comité de Autoridades Competentes.

Apartado 6. Líneas de actuación

Actuaciones en curso. De la lectura del documento se desprende que se ha hecho un esfuerzo importante a la hora de indicar las actuaciones en curso por parte de determinadas CCA (Asturias, Cantabria), pero en el caso del País Vasco apenas se citan planes, programas y actuaciones. A continuación se recogen algunos de ellos:

- II Programa Marco Ambiental de la CAPV 2007-2010
- Planes Territoriales Sectoriales (algunos de ellos se citan en el ETI) y Planes Territoriales Parciales
  - http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-565/es/contenidos/informacion/pts/es_1161/pts_c.html
  - http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-565/es/contenidos/informacion/ptp/es_1167/indice_c.html
- Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático
- Programas de Formación: Programa Aztertu http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6136/es/contenidos/informacion/aztertu_programa/es_aztertu/indice.html
- Vigilancia: Plan de Inspección y Control Ambiental 2003-2007, http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-434/es/contenidos/plan_programa_proyecto/inspeccion/es_plan/indice.html
- Plan de suelo contaminados http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-7932/es/contenidos/plan_programa_proyecto/suelos_contaminados/es_plan/indice.html
- Plan de gestión de residuos peligrosos 2003-2006. http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-4892/es/contenidos/plan_programa_proyecto/plan_residuos_peligrosos/es_10758/indice.html
- Plan de Saneamiento de la CAPV 2015 (en fase de redacción)

Entre ellos merece la pena destacar el nuevo Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos de la CAPV, actualmente en fase de tramitación, que incorpora los Criterios de uso del suelo en función del grado de inundabilidad, sobre la base de la definición de las franjas inundables para diferentes periodos de retorno de todos los núcleos urbanos de la CAPV, herramienta que consideramos fundamental para compatibilizar la existencia de asentamientos seguros con la consecución de los objetivos ambientales hidromorfológicos de la DMA.

Actuaciones previstas.

Cumplimiento de objetivos medioambientales (página 190). Las únicas actuaciones previstas recogidas en el documento se refieren a determinados planes directores de saneamiento ya publicados (Asturias y Cantabria). No se citan, en cambio, importantes actuaciones en materia de saneamiento y depuración previstas en la CAPV, derivadas el Plan de Saneamiento en vigor. Por otro lado, es necesario incorporar también las actuaciones

encaminadas a la reducción de la contaminación de otro origen, como por ejemplo la ganadera, que en determinadas cuencas puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la DMA. Tal es el caso, por ejemplo, del nuevo Plan de gestión de residuos generados en el sector agroalimentario de la CAPV 2008-2011, elaborado por el Gobierno Vasco.

Fenómenos extremos. Es preciso citar los estudios relativos a inundabilidad desarrollados en el País Vasco, enmarcados en parte en el nuevo PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos, así como el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático.

Alternativas de actuaciones posibles

Las alternativas de actuaciones posibles son descritas en el Anexo B del ETI.

Apartado 7. Conclusiones

A nuestro entender, las conclusiones reflejan de forma clara y sintética los problemas más importantes que deben resolverse en la Demarcación en general, y en las cuencas del País Vasco en particular. Se valora de forma positiva.

Bibliografía

La bibliografía relativa al País Vasco, tal y como se ha comentado anteriormente, es muy incompleta. Es preciso incorporar diferentes planes y programas de las administraciones de la CAPV relacionados con el medio hídrico, parte de los cuales ya se han citado anteriormente, así como documentación de referencia, como por ejemplo los informes de las redes de seguimiento del estado de las masas de agua gestionadas por la Agencia Vasca del Agua. Un listado de bibliografía de interés se puede encontrar en el documento anexo a este informe (*Contribución a la elaboración del Esquema de Temas Importantes en materia de Gestión de Aguas en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico).*

Anexo A. Selección de Temas Importantes

En este anexo se efectúa una jerarquización de los problemas de la cuenca. De la aplicación de la metodología empleada resulta que los temas más importantes a abordar serían la depuración de aguas residuales urbanas, el abastecimiento de poblaciones y los caudales ecológicos.

En esta jerarquización llama la atención la escasa importancia que se le asigna a dos temas que desde nuestro punto de vista también son prioritarios: la alteración morfológica de los ríos (posición 15) y la inundabilidad (posición 21). A nuestro entender, las actuaciones relativas estas dos cuestiones deben constituir, conjuntamente con las de saneamiento y el abastecimiento, los ejes del futuro Plan Hidrológico, al menos en lo que a la CAPV respecta.

Anexo B. Fichas de Temas Importantes

Tal y como se ha comentado anteriormente, para ofrecer una visión homogénea de la demarcación sería preciso completar el listado de autoridades competentes que figuran en cada uno de estos apartados, así como la relación de actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la CAPV.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

Alteraciones hidromorfológicas en ríos y lagos (página 1). Se considera que este apartado está bien enfocado, aunque sería conveniente hacer énfasis en la pérdida de calidad ecológica en los tramos afectados por encauzamientos, y en la necesidad de medidas de ordenación para compatibilizar asentamientos urbanos e industriales seguros con el cumplimiento de los objetivos de la DMA. Por otro lado, se habla de la necesidad de escalas para peces pero no de los problemas en flujo descendente (mortandad de peces en turbinas de minicentrales). Es un problema tan importante como el ascendente en muchos ríos y debe plantearse una línea de actuación específica (instalación de barreras sónicas, rejillas, etc.).

Alteraciones hidromorfológicas en aguas de transición y costeras (página 17). Sin comentarios, no incluye ámbito de la CAPV.

Uso hidroeléctrico (página 31). Sin comentarios adicionales.

Extracción de agua superficial (página 41). Sin comentarios adicionales.

Extracción de agua subterránea (página 49). En el documento se comenta que el escaso conocimiento que se tiene de las aguas subterráneas en la demarcación hace que cualquier alternativa pase por la realización de estudios para la cuantificación del recurso y para el establecimiento de funcionamiento hidrogeológico, incluyendo la realización de sondeos de investigación. En una segunda etapa se plantea ajustar las extracciones a las condiciones hidrogeológicas de cada acuífero.

Sin embargo, ésta no es la situación del conocimiento de las aguas subterráneas en la CAPV. Por el contrario, estos estudios previos, incluyendo estudios geológico-hidrogeológicos, determinación de funcionamiento, perforación de sondeos de investigación y explotación, etc. ya han sido realizados. También se cuenta con información suficiente acerca de las principales extracciones de aguas subterráneas (volumen, régimen, etc.). Hay que recordar en este sentido la publicación, ya en 1996, de la síntesis hidrogeológica recogida en el Mapa Hidrogeológico del País Vasco, información que ha sido completada en los últimos años con estudios específicos y controles en determinadas masas de agua.

Ecosistemas dependientes de aguas subterráneas (página 57). Sin comentarios adicionales a lo expresado en el punto anterior.

Caudales ecológicos (página 65). A nuestro juicio el apartado debería dar más importancia a las futuras actuaciones relativas a la implantación de los futuros regímenes de caudales

ecológicos, especialmente en el caso de concesiones antiguas sin caudal ecológico en su condicionado.

Saneamiento de aglomeraciones urbanas (página 75). Pensamos que uno de los problemas fundamentales es la ausencia, en muchas ocasiones, de entes gestores de abastecimiento/saneamiento con capacidad técnica y de gestión suficiente (pequeños ayuntamientos, Concejos, ...). Es preciso apoyar la creación de entes que puedan gestionar de forma eficaz el ciclo integral del agua.

Contaminación por vertidos industriales (página 89). En la figura de la página 91 (vertidos de industrias IPPC) se aprecia que no se ha representando ninguna industria del País Vasco. Es preciso incluirlas.

Piscifactorías, cetáreas y zonas de acuicultura (página 99). Sin comentarios adicionales.

Pesca y marisqueo en aguas costeras (página 107). Sin comentarios adicionales.

Contaminación por vertidos agrícolas y ganaderos (página 113). En el ámbito del País Vasco es preciso citar el nuevo Plan de Residuos Agrarios, en el que se plantean soluciones a la gestión de purines en las áreas con mayor densidad ganadera de la CAPV, enclavadas en la demarcación del Cantábrico: área de Karrantza y Asteasu-Aia.

Problemas asociados con otras fuentes potenciales de contaminación (página 119). Es necesario incluir el Plan de Suelos Contaminados de la CAPV.

Incidencia sobre el estado de las masas de transición y costeras debido a las presiones ejercidas en los ríos y sus cuencas (página 125). Sin comentarios adicionales.

Presencia de especies alóctonas e invasoras (página 133). En este apartado es preciso introducir estrategias para la prevención de la expansión de determinadas especies invasoras y, expresamente, para el mejillón cebra que, cuya presencia ha sido detectada recientemente en el sistema Zadorra.

Ocupación de DPH y DPMT (página 145). Desde nuestro punto de vista esta es una de las problemáticas más importantes en el ámbito de la CAPV. Coincidimos con el enfoque que se da en el ETI, entendiendo que uno de los principales retos es una correcta ordenación del territorio, y que la ocupación del DPH ha hecho necesaria la posterior construcción de defensas que han afectado al estado de los ríos. De esta forma, este problema está íntimamente ligado al de la inundabilidad.

La Agencia Vasca del Agua entiende que la estrategia para solucionar estas cuestiones, tal y como se ha expresado en apartados anteriores, pasa por compatibilizar asentamientos urbanos e industriales seguros con los objetivos ambientales de la DMA en las masas de agua superficial. Y para ello es necesaria una ordenación del territorio en función del grado de inundabilidad. Este planteamiento se detalla en el nuevo Plan de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV.

ATENCIÓN DE DEMANDAS Y RACIONALIDAD DE USO

Abastecimiento urbano (página 1). En el apartado de autoridades competentes no hay que olvidar que en el Territorio de Alava la competencia en abastecimiento de agua potable en lo núcleos menores no recae en el Ayuntamiento, sino en los Concejos.

Nos parece adecuado el planteamiento relativo a la estacionalidad del recurso disponible y a la garantía del abastecimiento en determinados núcleos con sistemas no regulados, así como el énfasis en el uso sostenible y la gestión de la demanda.

En este apartado se echa en falta el diagnóstico de la calidad del agua servida para, en su caso, plantear soluciones a los eventuales problemas.

Otros usos (página 9). En las páginas 14 y 15 hay párrafos repetidos "La importancia que en esta demarcación...".

Gestión y compatibilización de usos lúdicos (página 17). Sin comentarios adicionales.

Cuestiones económicas y recuperación de costes (página 25). Es necesario citar en este apartado el Canon del Agua del País Vasco. Si bien compartimos el diagnóstico de la problemática y de las estrategias planteadas, entendemos que las actuaciones apuntadas sólo se podrán llevar a cabo por entes abastecedores con capacidad de gestión suficiente, y para ello es necesario promover la creación de este tipo de entes allá donde todavía no operan.

FENÓMENOS ADVERSOS Y ACCIDENTES

Inundaciones (página 1). Si bien el enfoque general del apartado nos parece adecuado, pensamos que su redacción debería ser más completa, más detallada.

Por un lado, creemos necesario que se citen de forma expresa los diferentes trabajos relativos a inundabilidad realizados en el ámbito de la CAPV, y que han conducido a una completa cartografía de inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV (disponible en http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/cartografia/es_cartogra/inundabilidad.html).

Por otro lado, desde la Agencia Vasca del Agua pensamos, coincidiendo con lo expresado en el documento de ETI, que la solución a la problemática de la inundabilidad debe basarse en políticas de prevención, utilizando criterios de gestión de uso del suelo en función del grado de inundabilidad. De esta forma, se debe garantizar que los nuevos asentamientos sean seguros para las personas y para los bienes. Esta política, además, debe contribuir de forma decisiva al manteniendo de unas adecuadas condiciones morfológicas de las masas de agua superficial. Por otra parte, este planteamiento debe ser completado con las necesarias infraestructuras para la eliminación del riesgo en zonas urbanas consolidadas, eso sí, diseñadas para ser compatibles con los objetivos de la DMA. Estos principios están recogidos en los Criterios de Uso del Suelo en función del Grado de Inundabilidad, y en el nuevo PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV.

Sequías (página 13). Sin comentarios adicionales.

Incendios (página 27). No se trata de una problemática extendida en el País Vasco. En cambio sí lo es la erosión ligada a las prácticas de matarrasas de especies de crecimiento rápido, con la consiguiente afección al estado de determinadas masas de agua, y a la calidad del agua de captaciones de abastecimiento urbano, cuestión que no es citada en el ETI.

Contaminación accidental (página 37). Sin comentarios adicionales.

Seguridad en infraestructuras (página 45). Sin comentarios adicionales.

CONOCIMIENTO Y GOBERNANZA

Definición de criterios comunes entre administraciones (página 1). De acuerdo con lo expresado en el ETI, entendemos que dada la distribución competencial, la coordinación interinstitucional es un elemento clave para la consecución de los objetivos de la DMA. En este sentido, uno de los puntos de partida para la integración de las políticas tiene que ser, entre otros, la utilización en el proceso de la planificación hidrológica de la información generada por las diferentes administraciones y, por su importancia en este particular, de los datos relativos al estado del medio hídrico. Esta cuestión es ya importante en la fase de Temas Importantes, pero será crucial en el diseño de un adecuado programa de medidas para las diferentes masas de agua.

Soporte de información consolidado (página 7). Sin comentarios adicionales.

Participación pública activa (página 11). De la misma forma que se citan los procesos de participación autonómicos desarrollados en Navarra y Cantabria, es preciso citar el desarrollado en la CAPV.

Cumplimiento de acuerdos con otros países (página 21). Sin comentarios adicionales.

Cambio climático (página 25). Sin comentarios adicionales.

Anexo C. Resultados de la participación pública hasta el momento

Sería conveniente una mención a los procesos de participación desarrollados por las comunidades autónomas.

CONCLUSIONES

1. El documento en su conjunto se valora de forma positiva. La identificación de problemas y líneas de actuación es, en general, adecuada. El documento, con las mejoras que debe incorporar, es una base muy sólida para la elaboración del futuro Plan Hidrológico.

2. Los principales aspectos a mejorar son, a nuestro juicio, los siguientes:

   - Falta de referencias a planes, programas o actuaciones en curso por parte de las administraciones de la CAPV, así como a determinadas autoridades competentes.

   - Asegurar la utilización de determinada información de interés, en particular los datos relativos al estado de las masas de agua superficiales y subterráneas generadas por la CAPV.

   - Completar o matizar algunas de las problemáticas y líneas de actuación con lo expresado en el apartado de consideraciones específicas del presente informe, así como con lo recogido en el documento anexo *Contribución de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la elaboración del Esquema de Temas Importantes en materia de Gestión de Aguas en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico.* Se trata de un completo documento elaborado por la Agencia Vasca del Agua, tras un proceso de participación pública en el que han intervenido los principales agentes, públicos y privados, relacionados con el medio hídrico del País Vasco. En él se pueden encontrar, entre otras cuestiones, los principales problemas que entendemos deberían ser abordados en el futuro Plan Hidrológico, así como las estrategias o líneas generales de actuación para su solución.

En Vitoria-Gasteiz, 15 de octubre de 2008

Plangintza eta Lanen zuzendaria
El Director de Planificación y Obras

Fdo.: José Mª Sanz de Galdeano Equiza

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
Plaza de España, 2 - 33071 OVIEDO (ASTURIAS)

30/10/2008
11.54.04
E001200800005134

Asunto: **CORRECCIÓN A Alegaciones al Plan Hidrológico de cuenca.**
Directiva Marco del Agua

En fecha 19 de septiembre de 2008 se presentó en la Subdelegación del Gobierno de La Coruña un escrito con alegaciones al Plan Hidrológico de cuenca.

En este escrito el nombre del destinatario estaba erróneo (indicaba CH del Miño-Sil en lugar de CH del Cantábrico), aunque la dirección era la correcta.

Se adjunta el mismo escrito presentado el 19 de septiembre de 2008 con la corrección del destinatario.

En A Coruña, a 26 de octubre de 2008.



Fdo.: Luz Arregui Maraver

Presidenta ADSG OP ATRUGAL
Frei Rosendo Salvado, nº10, 1º B
15701 Santiago de Compostela

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
Plaza de España, 2 - 33071 OVIEDO (ASTURIAS)

Asunto: **CORRECCIÓN A Alegaciones al Plan Hidrológico de cuenca.**
Directiva Marco del Agua

Luz Arregui Maraver, actuando como Presidenta y en nombre y representación de ATRUGAL, Asociación Gallega de Piscifactorías de Trucha, con C.I.F. G-15795834, y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Marqués de Figueroa Nº 4, entreplanta, 15007 A Coruña, ante la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, comparece, y

EXPONE

Dentro del procedimiento de participación pública en la elaboración del Plan Hidrológico de cuenca, por aplicación de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, se presentan las siguientes alegaciones en nombre de esta Asociación de piscicultores de Galicia, y en lo que atañe exclusivamente a la actividad de acuicultura continental.

ALEGACIONES

I.- Teniendo en cuenta que las industrias de acuicultura continental trabajan con biomasa particularmente sensible a las condiciones del medio hídrico, y a las modificaciones de régimen hidrológico, resultaría conveniente que en las Juntas de Explotación reguladas en el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, se asegurase la presencia de los representantes de los usuarios de concesiones de aprovechamiento piscícola.

II.- Por el mismo motivo, debería darse traslado en condición de interesados, a los titulares de piscifactorías con derivación de ríos sobre los que exista regulación, de las resoluciones de la Comisión de Desembalses por las cuales se establezca para cada año hidrológico, el caudal mínimo de mantenimiento.

III.- Las centrales hidroeléctricas suponen una constante amenaza de siniestro para las instalaciones de acuicultura continental existentes aguas abajo, por el riesgo de disparo no programado de sus equipos, con el consecuente cierre de compuertas y corte de los caudales devueltos al río. Para evitar la pérdida de los stocks de peces criados en las piscifactorías por indisponibilidad de caudales tras el disparo de una central hidroeléctrica, y la correlativa falta de oxigenación de los estanques, se proponen las siguientes medidas:

- Instalación de un módulo regulador en la toma de las centrales hidroeléctricas, para asegurar que el caudal ecológico establecido, no pueda ser derivado a la cámara de carga.

- Colocación de topes en las compuertas de las centrales, para evitar que en caso de disparo no programado de los equipos, queden cerrados por completo esos dispositivos, y así asegurar que discurra por el río un caudal ecológico suficiente para la supervivencia de los peces criados en las piscifactorías.

- Construcción de sistemas de by pass de funcionamiento automático en los aprovechamientos hidroeléctricos, para conseguir la devolución de los caudales no turbinados al cauce del río, sin interrupción del régimen fluyente.

Sobre esta cuestión debe indicarse que algunas piscifactorías están dotadas de sistemas de recirculación de caudales, y muchas más con sistemas de inyección de oxígeno en los estanques. Sin embargo, está demostrado por la experiencia en cortes de caudales, que estos sistemas sólo pueden evitar o paliar los efectos de un corte de caudales, cuando dichos cortes son de breve duración, y concurren además circunstancias de baja densidad de peces en los estanques. Ante un corte de caudales a cero en la derivación de una piscifactoría, será imposible inyectar ya oxígeno líquido para que este se diluya, y la recirculación supondrá también la rápida degradación de la calidad del agua, con lo que pasado cierto tiempo sin detracción de agua para los estanques, el siniestro será inevitable.

IV.- La suciedad en los cauces de los ríos, debido a los materiales arrastrados por las aguas, y al crecimiento espontáneo de vegetación, supone, en caso de avenidas, la elevación de la lámina de agua por efecto tapón, y el riesgo de inundación de las instalaciones de acuicultura continental. Sería preciso por ello, acometer trabajos de limpieza de los cauces y retirada de los materiales acumulados, en aquellos tramos en los cuales exista peligro de inundación para piscifactorías.

V.- Las obras de construcción y mantenimiento de infraestructuras tales como carreteras, puentes, o viaductos, han ocasionado también siniestros en piscifactorías, debido a vertidos directos o indirectos de materiales a los cauces, con afección a la derivación de las industrias de acuicultura continental. Previamente y durante la ejecución de esos trabajos, deberían adoptarse las medidas minimizadoras precisas para evitar los vertidos y arrastres por escorrentía que acarrean la pérdida de calidad del agua

necesaria para la supervivencia de los peces. En todo caso procedería dar trámite de audiencia a los titulares de concesiones para uso piscícola, en los procedimientos administrativos de autorización de obras en cauce o con afecciones al mismo, cuando dichas obras vayan a efectuarse en tramos en los cuales exista alguna de estas concesiones.

VI.- Otras actividades potencialmente peligrosas para la acuicultura continental, tal como ya se ha demostrado en el pasado, son la industria química y la minería, incluyendo también las extracciones de áridos. Por tal razón, dichas actividades deberían contar con un plan de medidas minimizadoras de impactos, tendentes a evitar la contaminación del medio acuático sobre el cual existan derivaciones a piscifactorías, así como los vertidos y arrastres, cuando por proximidad sean previsibles o posibles las afecciones.

VII.- Determinadas obras de protección de cauces y las escolleras, cuando se ejecutan sobre una sola margen del cauce, suponen en caso de avenidas, la inundación de los terrenos existentes en la margen opuesta que queda descubierta. También los estrangulamientos de los cauces para la ejecución de obras de infraestructuras, acarrean siempre la subida de la lámina de agua y el riesgo de inundación. Deberá entonces asegurarse que cuando se realicen dichos trabajos sobre los cauces, en un tramo sobre el que exista una instalación piscícola, se coloque escollera en las dos márgenes del río para reducir en lo posible la probabilidad de inundaciones.

VIII.- La crisis por la que atraviesa el sector de la acuicultura continental en España, obliga a la consideración de otras especies susceptibles de comercializarse, aparte de la habitual trucha arco iris. Asimismo, con objeto de dar valor añadido al producto de nuestra actividad, las piscifactorías podrían ser susceptibles de ampliación en cuanto a su conversión también en centros de transformación del pescado. Entendemos que deberían facilitarse los trámites administrativos para la autorización de nuevas especies y la realización de actividades de transformación en las piscifactorías, particularmente cuando no fuese precisa la modificación de las características de las concesiones de aguas.

IX.- El mantenimiento de un sistema de doble imposición fiscal sobre los vertidos, canon de control de vertidos estatal regulado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y tasa de saneamiento de la Comunidad Autónoma, supone un serio quebranto económico para las empresas de acuicultura continental, que como se ha dicho se encuentran ya en una grave crisis sectorial, y que llega a amenazar su supervivencia. Esa doble imposición es además contraria a lo dispuesto en la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, cuyo artículo 6.2 establece: *Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas, no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado.*

X.- La modificación en el año 2003 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha supuesto para todas las empresas de acuicultura, un importante aumento del canon de control de vertidos, estableciéndose una regulación específica de coeficientes para las piscifactorías. Sin embargo, para valorar adecuadamente la carga contaminante que pueden producir estas instalaciones y su repercusión ambiental, debería atenderse inicialmente a la calidad del agua del cauce de derivación inmediatamente aguas arriba de la toma, para ser puesta en relación con los valores de los parámetros de contaminación de las aguas devueltas al cauce. Por otra parte, este aspecto no debería ser tratado de forma genérica para todas las instalaciones de acuicultura, cuando los sistemas de depuración de las aguas utilizadas, varían sustancialmente, también de unas a otras.

Por lo expuesto,

SE SOLICITA a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil: Tenga por formalizado en plazo en nombre de ATRUGAL, el presente escrito de alegaciones en relación a la actividad de acuicultura continental, para su consideración en la elaboración del Plan Hidrológico de cuenca, dentro del procedimiento previsto en la Directiva Marco del Agua.

En A Coruña, a 16 de septiembre de 2008.



Fdo.: Luz Arregui Maraver

Presidenta ADSG OP ATRUGAL
Frei Rosendo Salvado, nº10, 1º B
15701 Santiago de Compostela

GOBIERNO de CANTABRIA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Dirección General de Obras Hidráulicas y
Ciclo Integral del Agua

C/ Lealtad, 24 4ª -39002- Santander
Tfno. 942-202356 - Fax 942-202304

04/11/2008 13:08:58
REGISTRO DE ENTRADA Oficina Plaza de España
E00120080000053 59

GOBIERNO DE CANTABRIA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
REGISTRO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
30 OCT. 2008
Hora: /
N.º DE REGISTRO (S) 21648

Estimado Sr.:

Al objeto de realizar aportaciones al documento Esquema de Temas Importantes en materia de gestión de aguas cuya finalidad es establecer cuales serán los principales asuntos focales del futuro Plan Hidrológico, adjunto se remite la propuesta de aportaciones por parte de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, con el objeto de que tengan en consideración aquellos aspectos remarcados en el informe.

Aprovechando la ocasión, le saluda atentamente.

Santander, 30 de octubre de 2008
LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS
Y CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Fdo.: Ana Isabel RAMOS PÉREZ

PRESIDENCIA
Fecha 5 NOV. 2008
Firma

P.S.E. Copia Original
P. H
5/11/08
Firma

EXCMO. SR. D. JORGE MARQUÍNEZ GARCÍA
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
PLAZA DE ESPAÑA, 2
33071 OVIEDO
ASTURIAS

A) APORTACIONES AL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.

1- INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto reflejar una serie de comentarios y posibles mejoras que se plantean, desde la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, tras la lectura del *Esquema provisional de Tema Importantes* (ETI) emitido por la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico (DHC). El documento analizado tiene fecha de julio de 2008 y se estructura en una memoria, que consta de 8 capítulos, y tres anexos.

Se han agrupado los comentarios en dos niveles, el primero de carácter más conceptual y general, donde se abordan temas que afectan a varios apartados, y un segundo nivel de aspectos específicos con menor relevancia, incluyendo erratas.

Cabe resaltar que la mayor parte de los puntos tratados no constituyen deficiencias o errores que requieran ser subsanados, sino que se trata de información que posiblemente pueda aportar más precisión y representatividad al texto, en aquellos apartados en que se hace referencia al territorio de Cantabria. Asimismo, los comentarios siguientes podrán ser de utilidad para la redacción del borrador del Plan Hidrológico, hito fundamental en el proceso de planificación que se llevará a cabo tras la redacción del Esquema de Temas Importantes.

2- COMENTARIOS DE CARÁCTER GENERAL

Los comentarios de carácter general que se derivan de la lectura del documento se estructuran en los siguientes epígrafes:

1) Vigencia y representatividad de la información de partida
2) Aspectos gráficos y de presentación de tablas

2.1- VIGENCIA Y REPRESENTATIVIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PARTIDA

En diversos apartados del ETI se perciben carencias relativas a la información de partida, habitualmente debidas a tomar como referencia estudios antiguos, sin mencionar otros más recientes. Se considera conveniente incorporar toda la información que existe en relación con cada tema, señalando las fuentes y, si cabe, los procedimientos que se han seguido para obtenerla. En concreto, los aspectos donde se echa en falta información complementaria, por existir estudios recientes dentro del ámbito territorial de Cantabria, son:

- Aportaciones en régimen natural
- Caudales de mantenimiento

- Demandas de agua por zonas en diferentes horizontes
- Garantías de abastecimiento y sistemas de explotación

En el apartado 2.4.3 de aportaciones de recursos hídricos no se reflejan las cifras obtenidas en el estudio de recursos hídricos de los ríos de la vertiente norte de Cantabria, de la CMA del Gobierno de Cantabria, apareciendo las correspondientes al Plan Hidrológico Norte-II, obtenidas mediante series de aforos que finalizan, en el mejor de los casos, a principios de la década de los noventa. En algunos casos, los resultados difieren notablemente.

En el apartado 2.6.1, la figura 2.14 no refleja los últimos datos relativos a cumplimiento de la Directiva 91/271, que esta Comunidad Autónoma ha cargado en el programa CIRCA y en sucesivas modificaciones relativas a aglomeraciones urbanas.

En el apartado 3.8.1, no se reflejan las restricciones ambientales obtenidas en el estudio de caudales ecológicos del Gobierno de Cantabria, que es un trabajo reciente y ambicioso en cuanto a metodología. El hecho de que se está redactando en la actualidad un nuevo estudio de caudales ecológicos para el ámbito de la CHC no impide reflejar cuanta información se encuentre ya disponible.

En el apartado 3.1, las dotaciones de consumo que se proponen, tomadas del INE, para estimar las demandas son incorrectas en el ámbito de Cantabria, tal y como se muestra en la publicación El agua de abastecimiento en Cantabria 2005 (Consejería de Medio Ambiente, 2006), redactada como fase previa al Plan integral de ahorro de agua de Cantabria (PIAA). Esto conlleva que las demandas urbanas de agua resultantes sean también parcialmente incorrectas. No se hace mención a los resultados del estudio de demandas de abastecimiento incluido en el documento de Estudios previos para la redacción del Plan de abastecimiento en alta de Cantabria (2007-2012).

Referente al apartado 6.2 y puesto que el Plan Director de Saneamiento, Depuración y Calidad de las Aguas de Cantabria se encuentra en fase de Evaluación Ambiental Estratégica, no es conveniente plasmar las actuaciones recogidas, puesto que hasta que no haya aprobación definitiva, éstas pueden cambiar.

Finalmente, resulta llamativo que no se refleje ni describa en la documentación el nuevo sistema de abastecimiento de Cantabria, que incluye como grandes infraestructuras la Autovía del agua y el nuevo bitrasvase Ebro-Besaya-Pas, con un coste total de más de 250 millones de euros. Estas obras permiten desvincular la garantía de abastecimiento de la mayor parte de los sistemas de explotación de Cantabria de los recursos locales aportados por los diferentes ríos, configurando a efectos prácticos un sistema único interconectado. Los índices de explotación del apartado 3.9, relativos a los balances hídricos por sistemas, deberán ser revisados.

2.2- ASPECTOS GRÁFICOS Y DE PRESENTACIÓN DE TABLAS

Muchas de las figuras representan la totalidad del ámbito de estudio, que por su geografía tiene mucha mayor dimensión en dirección este-oeste que en sentido norte-

sur. Al representarlo en formato de papel, sería adecuado orientar la figura de forma apaisada, ya que si no apenas pueden distinguirse los sistemas de explotación, y mucho menos las masas de agua; otra posible solución sería subdividir en dos partes (oriental y occidental), o incluso en tres, el ámbito de planificación. En el capítulo 4, por ejemplo, se hace especialmente patente la falta de definición gráfica en las figuras, a la hora de representar el estado de las masas de agua.

Asimismo, las tablas que contienen información relativa a los sistemas de explotación, muchas de ellas en el capítulo 3, lo hacen siguiendo un orden alfabético, hecho que no facilita su interpretación e impide hacer una agregación por regiones o conjuntos de sistemas de explotación. Teniendo en cuenta que algunos de los sistemas de explotación pasarán a ser gestionados por las CCAA de Asturias y Cantabria en un breve plazo, parece conveniente que también se presente la información de esta manera.

3- COMENTARIOS Y REVISIÓN DE PUNTOS ESPECÍFICOS

3.1- MEMORIA

Se enumeran a continuación erratas, imprecisiones o posibles mejoras puntuales dentro de la memoria del ETI, siempre en lo relativo al ámbito territorial de Cantabria.

Apartado 2.4: Encuadre físico. No se hace referencia a los estuarios y costas, desde el punto de vista fisiográfico.

Apartado 3.1, pág. 52: Se dice que la población de Santander es de 147.256 habitantes, cuando debería decir 183.000 (INE 2006)

Apartado 3.1, pág. 54: Las dotaciones de abastecimiento urbano que propone el INI para Cantabria son muy bajas. Ver PIAA y PAALCAN

Apartado 3.1, pág. 53: La reciente crisis de la construcción torna muy improbables las estimaciones del MMA de duplicación del número actual de viviendas secundarias para el año 2027 en el ámbito de la CHC. Las demandas de agua previstas se ven afectadas por este hecho.

Apartado 3.1: Se echan en falta tablas y gráficas que reflejen la demanda urbana total por sistemas de explotación y años horizonte.

Capítulo 3: El concepto de retornos empleado se hace confuso, al no especificarse cuáles de dichos retornos se realizan al mar, y cuáles a cauce (de forma que dicho recursos pueda tener nuevos usos). Esto afecta a los índices de los balances del apartado 3.9.

Apartado 3.2: Las prognosis de demandas industriales para el sistema Saja-Besaya indican un aumento de 13 Hm^3 (de 87 a 100) desde la actualidad hasta 2027. Esta

cifra es dudosa y tiene gran relevancia, por lo que debe justificarse. Sería igualmente factible considerar una reducción de este consumo por diversos motivos.

Apartado 3.7: El resumen de las demandas debería también presentarse por ámbitos geográficos, regiones y sistemas de explotación, no sólo por tipos de uso.

Apartado 3.9: Muchas de las dudas anteriores, relativas a las prognosis de consumos, volumen y naturaleza de los retornos y restricciones ambientales, se trasladan a este punto, haciendo que sus resultados sean muy cuestionables.

Apartado 6.1.1. Pág. 179: Hay errores de asignación de provincia en las actuaciones de la estrategia nacional de restauración de rios (p.e. debe decir Santiurde en lugar de Santiurce, y Cantabria en lugar de Burgos).

Capítulo 8: Aparece en el índice del documento como bibliografía, pero no se encuentra en el documento escrito utilizado para esta revisión. Puede tratarse de un error de impresión.

3.2- ANEXOS

Las posibles mejoras detectadas en los anejos son las siguientes:

Anexo B1. Pág. 7. Incluir los ríos internos de Castro Urdiales, especialmente los ríos de la cuenca del Brazomar.

Anexo B1. Pág. 35: No se menciona el río Nansa como uno de los ejemplos más característicos, en el ámbito de estudio, de afecciones de los aprovechamientos hidroeléctricos a los cauces.

Anexo B1. Pág. 69: El más representativo es el problema del río Pas, y no es destacable el caso del río Agüera, que en cambio sí se menciona.

Anexo B1. Pág. 95: Incluir entre los casos concretos la ría de Ajo (cuenca del Campiazo).

Anexo B1. Pág. 103: En los casos concretos, se habla de zonas de extracción marisquera y no de instalaciones de acuicultura. Se propone incluir las instalaciones de acuicultura fluvial detalladas en el mapa así como la inclusión en el mismo de la planta sita en la ría de Tina Menor (cuenca del Nansa). Incluir asimismo la piscifactoría sita en el municipio de Ruiloba.

Anexo B1. Pág. 108: Incluir casos concretos de Cantabria (donde por cierto al "ocle" se llama "caloca"). No se incluye ningún ejemplo concreto, teniendo en cuenta el elevado interés de la producción marisquera en los estuarios y costas de la región.

Anexo B1. Pág. 114: Considerar las instalaciones de ganadería intensiva de toda La Marina de Cantabria y algunos valles interiores de la región.

Anexo B1. Pág. 129: Al hablar de las afecciones de los ríos a los estuarios y costa, es más representativo poner el río Saja-Besaya y el Campiazo, probablemente los dos casos más importantes de Cantabria en este sentido, que Tina Menor.

Anexo B1. Pág. 140: Considerar la alta afección de la *reynutria* en el tramo del río Saja comprendido entre Cabezón de la Sal y Torrelavega, que tampoco aparece correctamente representado en el mapa.

Anexo B2. Pág. 4: No se habla del nuevo sistema de abastecimiento en alta de Cantabria.

Anexo B2. Pág. 33: En lo que se refiere al tema de incendios, es muy significativo y relevante el tema de las prácticas agroganaderas de las comarcas pasiegas (quema de matorrales para evitar la proliferación del bosque y, en consecuencia, mantenimiento de los pastizales).

Anexo B3. Pág. 5: Mencionar alguno de los problemas de riesgos de inundación en Cantabria, como por ejemplo el río Pas en el valle de Toranzo.

B) APORTACIONES AL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS DESARROLLADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

1- INTRODUCCIÓN

El Gobierno de Cantabria ha optado, como medida estratégica dentro de su modelo de desarrollo social y territorial, potenciar la implantación de la Directiva Marco del Agua (DMA), integrando su filosofía en el mayor número posible de planes y programas sectoriales relacionados con el medio ambiente y el territorio.

Como consecuencia de la aplicación de la DMA en Cantabria y teniendo en cuenta el creciente interés que los temas relativos al agua y sus ecosistemas suscitan en gran parte de los sectores de la sociedad, en 2006 se puso en marcha la Oficina de Participación Hidrológica de Cantabria (OPHIC), con la vocación de canalizar el proceso de información, consulta y participación pública asociado a la implantación de la DMA en la región, tratando de alcanzar el mayor consenso posible entre los agentes implicados sobre los contenidos de los futuros Planes de Demarcación Hidrográfica.

Desde la creación de la OPHIC se han desarrollado procesos participativos en la totalidad de las cuencas internas de la región: Pas-Pisueña, Saja-Besaya, Miera, Campiazo, Escudo y ríos costeros occidentales, y ríos internos de Castro Urdiales.

Desde un principio, estos procesos se han planificado y ejecutado en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), Organismo de Cuenca competente en la gestión de las cuencas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Asimismo, se han fomentado las sinergias entre los procesos ya citados y los activados por la CHC, ya que los procesos coordinados desde el Gobierno de Cantabria pretenden enriquecer el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico, al haber trabajado a una escala de cuenca con alto grado de detalle.

En el actual contexto, tras el análisis del Esquema provisional de Temas Importantes (ETI) emitido por la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico (DHC) con fecha de julio de 2008, desde la OPHIC se considera que el ETI elaborado por la CHC presenta un alto grado de coherencia y solidez, que sin duda hará posible la redacción de un Plan Hidrológico completo y eficaz.

Por ello, el presente documento pretende incorporar algunas aportaciones desde la perspectiva de la experiencia adquirida con el desarrollo de procesos participativos en las cuencas internas de Cantabria. En algunos casos se realizan algunas aportaciones o matices en determinados Temas Importantes, y en otros se añaden Temas Importantes nuevos por considerar que tienen igualmente relevancia.

Se pretende con ello conseguir un ETI que garantice la inclusión en el Programa de Medidas de todos los aspectos con relación directa o indirecta sobre la gestión de las cuencas recogidos en los procesos participativos desarrollados hasta la fecha.

2- APORTACIONES AL CAPÍTULO 5 DEL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES.

En este punto se explicita la propuesta de nuevos Temas Importantes, y los matices que se incorporan a algunos de los Temas Importantes propuestos.

En la página 164 del documento aportado por la CHC, y con respecto al **Tema Importante 5.2.11**, referido a la pesca y a los usos marisqueros, se considera que ha de tenerse en cuenta que las actividades marisqueras en áreas afectadas por contaminación urbana y/o industrial, fenómeno este generalizado en algunas de las áreas extractivas, pueden suponer un riesgo para la salud pública.

Se considera también que no se ha recogido en el presente Esquema Provisional con la suficiente propiedad la gestión forestal de las cabeceras de los ríos, así como los problemas derivados de malas prácticas en cuanto a los laboreos y calendario de los mismos. Por ello se propone añadir un tema específico, que bien podría ser denominado **5.2.12 Incidencia de las actividades forestales en las masas de agua superficiales**, y que debería hacer referencia a problemas como la profusión de pistas, aumento desproporcionado del riesgo de erosión, colmatación de los intersticios del lecho y de estuarios, alteración del régimen hidrológico de la cuenca y altos consumos hídricos en el caso de especies de rápido crecimiento.

También es difícil encontrar el espacio apropiado para la **Ocupación agroganadera de las márgenes y las riberas**, con la consecuencia más notable de la pérdida del bosque de ribera y de sus funciones de depuración natural, y protección de márgenes frente a la erosión asociada. Proponemos la creación de un **Tema Importante adicional** para dar cabida a este aspecto, ya que en los preexistentes **5.2.12** y **5.2.16**, referidos respectivamente a la contaminación agroganadera y a la ocupación urbanística de las riberas el tema no encaja con la suficiente naturalidad, aunque sería posible incluirlo en este último Tema Importante **5.2.16.**

En cuanto al tema **5.2.12**, se propone la inclusión del problema asociado con la ausencia de una estrategia de gestión para los plásticos empleados para el ensilado del forraje. Se trata de un plástico de muy baja calidad que no admite reciclado ulterior a su uso para el fin señalado, y que por lo tanto no es asumido por los centros de tratamiento y gestión de residuos sólidos.

Consideramos importante además incluir en el enunciado del primer párrafo referido a las fuentes de comunicación del Tema Importante **5.2.13** de un modo explícito las canteras, puesto que tienen un elevado interés en las cuencas en las que la OPHIC ha desarrollado procesos participativos.

Por último, con respecto al **Tema Importante 5.5.3**, sobre **Participación Pública Activa**, se propone incluir como factor limitante para el éxito en la Participación Pública activa la escala de los procesos desarrollados. En general, puede decirse que los agentes participantes y la población local pueden verse superados por un proceso desarrollado a una escala que supera su conocimiento real y su implicación con las cuencas. Por ello este es un aspecto importante que ha de tenerse en cuenta.

Además, se considera de alto interés, a la vista de los resultados de los procesos desarrollados y en respuesta a múltiples demandas de los participantes en los mismos, la inclusión de programas de capacitación, sensibilización y educación ambiental vinculados al agua, con el doble fin de poner en valor los ecosistemas acuáticos y mejorar la calidad de la participación pública.

José Rodríguez Sanz-Pastor

Junta de Castilla y León
Consejería de Cultura y Turismo
Secretario General

Sr. D. Jorge Marquínez García
Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico

Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino
Plaza de España, 2
33071.- OVIEDO

Valladolid, 5 de noviembre de 2008

Estimado Sr.

A los efectos previstos en el artículo 79 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, y sin perjuicio de las alegaciones que esta Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León pueda formular en la tramitación del correspondiente Plan Hidrológico, se remite el informe del Servicio de Ordenación y Protección de la Dirección General de Patrimonio Cultura en relación con el documento "Esquema provisional de Temas Importantes, parte española de a Demarcación Hidrográfica del Cantábrico".

Reciba un cordial saludo.

Junta de
Castilla y León
Consejería de Cultura y Turismo

INFORME RELATIVO AL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE AGUAS REMITIDO POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARÍTIMO

En relación con el Esquema Provisional de temas importantes en materia de gestión de aguas, remitido por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marítimo, se informa lo siguiente:

El documento, dado su escaso nivel de concreción, no permite realizar una estimación de cómo este proyecto puede afectar al Patrimonio Cultural incluido en su ámbito territorial.

Este Esquema se refiere a la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico, y afecta al norte de las provincias castellanoleonesas de León, Palencia y Burgos, sin que conozcamos qué términos municipales se verían incluidos en el ámbito de afección.

Sería conveniente que el documento, al igual que incluye zonas de protección a efectos medioambientales (LIC, ZEPA, etc.), incluyera una relación de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural, especialmente Bien de Interés Cultural y yacimientos arqueológicos, cuya protección debería quedar garantizada en la puesta en práctica de las actuaciones derivadas de la planificación hidrológica.

Valladolid, 5 de noviembre de 2008
LA JEFA DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN



Fdo.: Silvia Escuredo Hogan.

Avenida del Monasterio Ntra. Sra. de Prado, s/n. - 47071 Valladolid - Teléf. 983 411 800 - Fax 983 411 050

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MERIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL CANTABRICO

COMISARÍA DE AGUAS

O F I C I O

S/REF.

N/REF.

FECHA 11 NOV. 2008

ASUNTO

DESTINATARIO **PRESIDENCIA - OVIEDO**

COMISARIA DE AGUAS
CANTABRIA
SALIDA
FECHA: 11 NOV. 2008
FIRMA:

Directiva Marco del Agua

Se remite escrito de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística del Gobierno de Cantabria por el que remite informe relativo a Directiva Marco del Agua (DMA): Esquema de Temas importantes y proceso de planificación hidrológica en la página web de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

EL JEFE DE SERVICIO DE CANTABRIA

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Comisaría de Aguas

Alberto López Casanueva

Confederación Hidrográfica del Cantábrico
PRESIDENCIA
PASE
1. Original 2 Copia
☐ Presidencia
☐ Comisaria de Aguas
☐ Dirección Técnica
☐ Secretaria General
☒ O.Planificación
☐ Acunor
☐.....
☐.....
Fecha 14-11-08 Firma

CORREO
reg.santander@chcantabrico.es

Programa AGUA
Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua

JUAN DE HERREERA Nº 1,
2º
39071 – SANTANDER
TEL.: 942 366 440
FAX.: 942 365 835

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo

Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística

05 NOV. 2008
Hora:
Nº DE REGISTRO E/02214

EXP92/08

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO

REGISTRO DE ENTRADA	OFICINA SANTANDER
07/11/2008	12:42:44

E004200800001055

Adjunto remito informe elaborado por el Servicio Técnico de esta Dirección General relativo a "Directiva Marco del Agua (DMA): Esquema de Temas importantes y el proceso de planificación hidrológica en la página web de la Confederación hidrográfica del Cantábrico.

Santander, 4 de noviembre de 2008.
EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y EVALUACION AMBIENTAL URBANISTICA,

Fdo. Luis Collado Lara.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO.
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO.

INFORME TECNICO

SOLICITANTE: Mº DE M.AMB. Y M.R. y M.- CONF. Hª DEL CANTABRICO

FECHA DE LA SOLICITUD: 01/08/08 **Nº DE REGISTRO: E 1128**

SITUACION: CANTABRIA **TERMINO MUNICIPAL: TODOS LOS DE CANTABRIA**

REFERENTE A: Directiva Marco del Agua (DMA): Temas importantes en materia de gestión de aguas.

DOCUMENTACION APORTADA: Oficio del Presidente de la Conf. Hª del Cantábrico adjuntando anuncio en el B.O.E.

En relación con el asunto de referencia, el técnico que suscribe informa lo que sigue:

Dentro del campo de las materias del ámbito de la Ordenación Territorial y la evaluación ambiental urbanística, cabe destacar las determinaciones contenidas en la Ley de Cantabria 2/2004, del Plan de Ordenación del Litoral, sobre aspectos de los incluídos en la presente consulta, concretados en los siguientes artículos:

Art.15.Prevención de riesgos. Redactado de forma genérica.

" 21.Gestión del agua. Recoge criterios generales que coinciden con los de la DMA

" 69.Planificación de riesgos.Textualmente su contenido es:"1. Se aprobarán uno o varios Planes Especiales de zonas de riesgos en el ámbito de los municipios litorales. En concreto, se abordará el estudio de las zonas inundables estableciendo una zonificación y delimitando los usos en las proximidades de los distintos ríos y arroyos en función de la probabilidad de inundación o del riesgo generado, y de las áreas cársticas y los riesgos de afección a los acuíferos de la Comunidad Autónoma.

2. Se establecerán fórmulas de cooperación entre las distintas administraciones para la elaboración e intercambio de los estudios técnicos necesarios para estos fines."

" 73. Inventario de humedales. Materia que la Ley atribuye a la Consejería de Medio Ambiente.

Conforme con lo anterior, se sugiere tramitar convenios de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y, de forma no exhaustiva, las Direcciones Generales competentes en Protección Civil, Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, Urbanismo y Ordenación del Territorio a través de los órganos de gobierno facultados para ello, de manera que llegue a disponerse de una documentación general de interés conjunto y de la específica para cada organismo, y que pudiera estar a disposición de las Corporaciones Locales, otros organismos y particulares interesados y los redactores de proyectos de planeamiento, edificación, obra civil etc.

En lo relativo a la valoración y jerarquización de los temas importantes, parecen adecuadas las que figuran en las tablas 3.1 y 3.3, con la modificación de trasladar los temas del grupo fenómenos adversos y accidentes-inundaciones hasta las posiciones más elevadas de las tablas.

Lo que se informa a los efectos correspondientes.

Santander, 10 de septiembre de 2008

EL TECNICO URBANISTA

Fdo:Luis Javier Herrero Ahnert

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 24/11/2008
OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 11:40:02
E001200800006323
21.11.2008 CORREOS SUC. 12

IBERDROLA

D. Baldomero Navalón Burgos, con D.N.I. nº 5.393.279, en nombre y representación de Iberdrola Generación, S.A.U. (en adelante IBERDROLA), C.I.F. A-95-075586, con domicilio, a efectos de notificaciones, en Madrid, C/Tomás Redondo, 1, 28033, en virtud de escritura de apoderamiento otorgada el 26 de Octubre de 2006 ante el notario de Bilbao D. José María Arriola Arana, con el número 1.419 de su protocolo,

EXPONE:

Primero: Que, como usuario interesado en el proceso de planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por ser titular de derechos o intereses legítimos afectados por la elaboración del Plan Hidrológico, según lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se ha procedido al análisis del documento denominado "Esquema provisional de temas importantes", sometido a consulta pública por ese Organismo de cuenca.

Segundo: Que, dentro del plazo otorgado para dicha consulta, se formulan las siguientes

ALEGACIONES:

Primera: Con carácter general, hay que destacar el papel actualmente insustituible que juega la energía de origen hidroeléctrico con regulación, en la calidad de cobertura de la demanda de nuestro Sistema Eléctrico Nacional.

En efecto, este tipo de energía, capaz como ninguna otra de arranques, paradas y variaciones rápidas de la carga aportada al Sistema, es la única que puede garantizar el seguimiento fino de la curva de demanda y la atención rápida a variaciones bruscas de la energía entregada, bien por posibles fallos de grandes grupos térmicos, por problemas localizados en la red, o, recientemente, por el significativo aumento de las energías renovables no garantizadas (eólica y solar), aumento que necesariamente requiere como complemento nueva potencia hidroeléctrica para hacer frente con rapidez y eficacia a los inevitables ceros de dichas energías.

Por ello, las afecciones a la energía hidroeléctrica con regulación pueden transformarse con gran facilidad en graves pérdidas de garantía de suministro del Sistema Eléctrico Nacional. En este sentido, las dos afecciones potencialmente más perjudiciales para los usos hidroeléctricos son la imposición de caudales ecológicos y las restricciones a las variaciones rápidas en los

caudales turbinados; Ambas pueden hacer inviable, o inútil, la operación de un determinado aprovechamiento hidroeléctrico.

En este sentido, es de destacar el carácter esencial del suministro de energía eléctrica, como se declara en la exposición de motivos de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en la que se expresa que:

"El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. [...] La presente Ley tiene, por consiguiente, como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas las características de este sector económico."

Por tanto, dada la importancia de garantizar el suministro eléctrico y la calidad de éste, debe valorarse la importancia del uso del agua para la generación eléctrica con máximo rigor. Todo ello, sin olvidar la protección al medio ambiente.

En este sentido, interesa destacar que la minihidráulica fluyente, aporta una energía casi constante, de base, que en caso de resultar seriamente afectada debería ser sustituida por producción de origen térmico -convencional o nuclear-, con el consiguiente incremento de la factura de combustibles importados y, en su caso, de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Finalmente, hay que tener en cuenta que un incremento excesivo de los condicionantes y restricciones a los usos en térmicas convencionales, ciclos combinados, nucleares, termosolares o biomasa, sea en la disponibilidad de agua para refrigeración y procesos, o en las características de los vertidos, puede afectar gravemente a la garantía del suministro eléctrico nacional, en sus aspectos cuantitativos. Por ello, hay que tomar en consideración que no deben imponerse restricciones innecesarias que puedan afectar al suministro de energía eléctrica, ni a su calidad y que pueden causar más perjuicios que beneficios al medio ambiente y a la Sociedad en general.

IBERDROLA

Segunda: La importancia estratégica de los usos energéticos, puesta de manifiesto en la alegación primera, ha de ser debidamente refrendada por las autoridades energéticas nacionales, y en concreto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como máximo responsable de la garantía de suministro de energía eléctrica, y por Red Eléctrica de España, como responsable de la operación del Sistema Eléctrico Nacional.

Este último organismo no sólo reúne los requisitos exigidos por el artículo 31 de la Ley 30/1992, para ser considerado como parte interesada sino que, además, posee unos conocimientos técnicos y una experiencia que pueden resultar más que útiles para que la elaboración del Plan Hidrológico se realice con pleno respeto al interés público.

No se persigue que se otorgue al uso hidroeléctrico una importancia desmedida o desproporcionada, colocándola por encima de los objetivos medioambientales. Pero sí se pretende abrir la discusión con la finalidad de encontrar el punto de equilibrio entre el medio ambiente, el uso racional del agua y la sostenibilidad.

Por ello, debe asegurarse la incorporación, no solo nominal sino real y efectiva, de ambos organismos -Ministerio de Industria y Red Eléctrica- al proceso de planificación hidrológica, con el fin de garantizar que las afecciones a los usos energéticos del agua, originadas por los nuevos planes, no pongan en riesgo inadmisible la garantía de suministro eléctrico, con la calidad y cantidad necesarias para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.

Tercera: Entrando ya en aspectos concretos del documento sometido a consulta, se ha de destacar que la importancia económica del uso energético del agua aparece reflejada en el Esquema provisional que, en su apartado 3.3, expresa que *"el uso industrial del agua para la producción de energía eléctrica en la DHC es en su mayor parte un uso no consuntivo, sin embargo la utilización del recurso hídrico proporciona un valor económico importante en la Demarcación"*.

Por el contrario, nada se dice del imprescindible papel del uso energético del agua para garantizar el suministro eléctrico a la población.

Asimismo, hemos de hacer las siguientes consideraciones, en relación con los puntos que se indican a continuación:

IBERDROLA

.- **Apdo. 2.6.4**: En el último párrafo debe tenerse en cuenta que la energía hidroeléctrica está incluida también entre las renovables, junto con la eólica y solar que se citan.

.- **Apdo. 3.8.1**: Al hablar de la determinación del régimen de caudales se dice que el proceso de concertación se llevará a cabo en *"aquellos casos que condicionen significativamente las asignaciones y reservas del plan hidrológico"*. Parece razonable que el proceso de concertación se aplique en todos los casos, ya que todos los usuarios van a verse afectados en mayor o menor medida. Lo mismo puede indicarse respecto al apartado 5.2.7 y al tema importante 1.7.

.- **Apdo. 5.2.3**: Para valorar debidamente los posibles efectos del uso hidroeléctrico, ha de tenerse en cuenta lo dicho al inicio de este escrito, sobre determinadas características de dicho uso, y sobre la importancia de que se sopese debidamente, en estrecha colaboración con las autoridades energéticas, hasta qué punto puede restringirse o afectarse al uso hidroeléctrico sin poner en riesgo la garantía de cobertura de la demanda. También es aplicable esto en lo que se refiere al tema importante I.3.

.- **Apdo. 5.3.3**: Respecto a las consideraciones que se hacen sobre los usos lúdicos, hay que tener en cuenta que son usos situados en el último lugar en el orden de prioridad, por lo que ningún uso puede verse condicionado por ellos, y menos aún uno de la máxima importancia estratégica como es el hidroeléctrico.

Por otra parte, en caso de destinar a esos usos recursos regulados, sus beneficiarios deberán satisfacer el correspondiente canon de regulación, y, en su caso, participar plenamente en la recuperación de costes de los servicios de agua. Esto es aplicable también al tema importante II.3.

.- **Ficha III.5**: Si bien todo lo que se indica en esta ficha es correcto, resulta necesario hacer constar que algunas de las consideraciones que se exponen en ella no son de aplicación a las presas de titularidad privada, ya que se derivan del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, de 1996, que solo aplica parcialmente a dichas presas.

IBERDROLA

Por todo lo cual,

SOLICITA:

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones al Esquema provisional de temas importantes, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, sean tomadas en consideración para la elaboración del documento definitivo, y, en general en todo el proceso de planificación hidrológica de la cuenca.

En Madrid, a 17 de Noviembre de 2008

B. Nava

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO.
Plaza de España, 2. 33071-OVIEDO

ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN HUESCA
SECRETARÍA GENERAL

02/02/2009
11:19.58
E001200900001179

S/REF.

N/REF. IR/mb

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTABRICO
OVIEDO

FECHA 30/01/2009

ASUNTO

A los efectos pertinentes y de acuerdo con lo previsto en el Art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 adjunto remito escrito presentado en el Registro General de la Subdelegación del Gobierno de Huesca De Julian Ezquerra Gomez presidente de COAGRET en el que formula alegaciones al esquema provisional de temas importantes de planificación hidrológica.

A fin de su debida constancia devuelva una de las dos copias del escrito debidamente cumplimentada con el sello de entrada de esa oficina.

Huesca, 30 de enero de 2009
EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.

Fdo.: Francisco Pascau Canales

PLAZA CERVANTES 1
22071 HUESCA
TEL.: 974769000
FAX.: 974222054

secretario_general.huesca@map.es

COAGRET
Apartado de Correos 3056
50080 Zaragoza

Teléfono: 656.666.091
correo electrónico: coagret@coagret.com
página web: www.coagret.com

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO. OVIEDO

Julián Ezquerra Gómez, vecino de Zaragoza, presidente de la Asociación sin ánimo de lucro Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), con dirección a efectos de notificaciones en Apartado Postal 3056, 50080 Zaragoza, y con DNI 17871523-V, comparece y como mejor procede en derecho,

SUBDEL. DEL GOBIERNO EN HUESCA
[illegible]NICA
992240000000363
29/01/2009 11:10:06
JULIAN EZQUERRA GOMEZ

DICE:

Que a la consulta pública de los documentos "Esquema provisional de temas importantes" del proceso de planificación hidrológica (BOE nº 183, el 30 de julio de 2008), presenta las siguientes

CONSIDERACIONES:

Las grandes presas han provocado grandes y traumáticos desplazamientos de personas. Constituyen barreras importantes al movimiento de la fauna piscícola, tanto en sentido ascendente, como en sentido descendente. Reducen considerablemente los caudales aguas debajo de la presa, en algunas casos por debajo del caudal ecológico y llegando a dejar tramos en seco. Provocan cambios potencialmente considerables en el tramo aguas abajo ocasionando potencialmente erosión en el cauce y arrastre de biota.

A veces, han tenido un papel influyente como laminadoras de inundaciones. Pero también, en esas ocasiones, no se ha valorado cual función positiva hubiera supuesto el mantenimiento de llanuras aluviales hoy reconocidas por el relevante papel que desempeñan en la laminación natural de las avenidas.

En otras ocasiones, las presas se han revelado como solución técnica insuficiente y generadoras de grandes inundaciones al realizar rápidos desembalses, por el mal funcionamiento, deslizamientos de tierras o por rotura.

Aunque a nivel internacional muchos son los casos siniestrados, en España, sirvan como ejemplo los siguientes:

- Un 9 de enero de hace 50 años la presa de Vega de Tera reventaba y arrasaba el pueblo de Ribadelago, en Zamora. En catorce interminables minutos, por la tremenda avalancha de agua, rocas y troncos de árboles el pueblo quedó sumergido por olas de hasta nueve metros de altura. De los quinientos cincuenta habitantes, casi un tercio de ellos, murieron ahogados. Tan sólo se rescataron veintiocho cadáveres. El resto de los fallecidos, en su mayoría niños, jamás se recuperaron.
- En octubre de 1982 la rotura de la presa de Tous asoló parte del casco urbano de la población de Sumacàrcer (Valencia) y arrasó el 70% de los campos de cultivo.
- La deficiente gestión de los embalses del Sistema Zadorra (Urrúnaga-Ullíbarri) en Vitoria ha causado graves inundaciones repetidas veces provocando daños materiales importantes.

- El 25 de Abril de 1998 se produce la rotura de la presa de contención de la balsa de decantación de la mina de pirita (FeS2) en Aznalcóllar (Sevilla). Como resultado aparece un importante vertido de agua ácida y de lodos muy tóxicos, conteniendo altas concentraciones de metales pesados, de gravísimas consecuencias para la región. El vertido fue de unos 4,5 Hm3 (3,6 de agua y 0,9 de lodos) y se desbordó sobre las riberas de los ríos Agrio y Guadiamar a lo largo de 40 Km para los lodos y 10 Km más para las aguas, con una anchura media de unos 400 metros. La superficie afectada ha sido de 4.402 hectáreas. Los lodos no llegaron a alcanzar el Parque Nacional del Coto de Doñana, quedando retenidos en sus estribaciones, dentro del Preparque, pero las aguas sí invadieron la región externa del Parque Nacional y desembocaron en el Guadalquivir en el área del Coto de Doñana, y alcanzaron finalmente, ya poco contaminadas, el Océano Atlántico, en Sanlucar de Barrameda.

La creciente sensibilidad social y ambiental frente a este problema ha hecho imprescindible mejorar e incrementar el control de seguridad de las presas y embalses con el objetivo de reducir el riesgo de consecuencias negativas estableciendo medidas para prevenir y reducir los daños a la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.

En el documento sometido a consulta pública se hace referencia a la Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación que contempla una evaluación preliminar del riesgo potencial significativo, la elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación y la realización de planes de gestión del riesgo de inundación establecidos sobre la base de los mapas anteriores en los que deben incorporarse los Planes de Emergencia de Presa, que, de acuerdo con la Directiva Básica de Protección Civil, quedarán integrados en los correspondientes Planes de Comunidades Autónomas y, en caso de emergencia de interés nacional, en el Plan Estatal.

Para cumplir con la normativa comunitaria y las propias necesidades de gestión de inundaciones, en España, se ha modificado a través del Real Decreto 9/2008 el Reglamento del dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1086, de 11 de abril) que persigue como objetivo la protección de las personas y los bienes, y del medio ambiente. Se subraya la necesidad de mejorar e incrementar el control de la seguridad de las presas y embalses debido al importante número de grandes presas en explotación, el progresivo envejecimiento técnico y estructural de las grandes presas y a la construcción de balsas de agua por iniciativa privada para diferentes usos fuera de la zona de dominio público hidráulico.

El informe de la Comisión Mundial de Represas de 16 de noviembre de 2000, avalado por el Banco Mundial, estableció un diagnóstico y unas recomendaciones en materia de seguridad de presas que han sido tenidas en cuenta en esta nueva regulación.

El enfoque tradicional para abordar este riesgo, consistente en plantear soluciones estructurales (construcción de presas, encauzamientos, motas de defensa, y otros), se ha revelado insuficiente, por lo que resulta necesario profundizar en las medidas de gestión del riesgo como instrumento fundamental para mejorar la protección de la población. El respeto de las zonas

inundables como zonas de exclusión de nuevas actividades urbanísticas en la ordenación territorial es una de las medidas de prevención.

Y SOLICITA:

- Como primera medida para emprender la recuperación del buen estado de los ríos la declaración de los ríos Patrimonio de la Humanidad.

- Incorporar, en el apartado relativo a inundaciones, a las grandes presas como elemento de riesgo y generadoras de inundaciones.

- Incluir en la evaluación del riesgo potencial de inundación la condición de que el Dominio Público Hidráulico de un río está supeditado a la existencia de una presa, tanto aguas arriba como aguas abajo.

- Como medida de prevención del riesgo de inundación iniciar el progresivo desmantelamiento de las grandes presas.

En tanto llega la medida anterior,

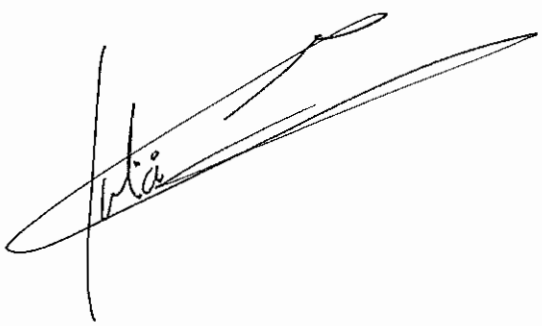
- Como línea de actuación frente a la gestión del riesgo de inundación incluir el Real Decreto 9/2008 en el documento a consulta pública.

- El deslinde del Dominio Público Hidráulico de los ríos empleando los mapas elaborados en los Planes de Emergencia de Presas allá donde las hubiera y teniendo como referencia la línea envolvente del área potencialmente inundable.

- Que se tenga por presentado este escrito y formuladas las alegaciones en él expresadas, solicitando particularmente la respuesta razonada a las mismas según lo dispuesto en el art. 86.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Zaragoza a 28 de enero de 2009

Fdo. Julián Ezquerra Gómez



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

VICECONSEJERÍA DE MODERNIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA OFICINA PLAZA DE ESPAÑA
04/02/2009 13:14:08
E001200900001367

ADMÓN. PRINCIPADO DE ASTURIAS
Reg. Salida Nº. 200970200004399
02/02/09 12:12:02

Adjunto se remiten escritos, dirigidos a ese organismo, que han sido presentados en el Registro General Central de esta Administración, en virtud de lo previsto en el artículo 38.4.b) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

NUMERO	FECHA	INTERESADO	DOCUMENTO
7732	30/01/09	JUAN IGANCIO HERNANDEZ GAGO	ALEGACIONES
7810	30/01/09	COORDINADORA ECOLOXISTA D,ASTURIES	ALEGACIONES
7811	30/01/09	JUAN IGNACIO HERNANDEZ GAGO	ALEGACIONES

Oviedo, a 31 de enero de 2009
ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA

PRINCIPADO DE ASTURIAS * REGISTRO GENERAL CENTRAL *

Fdo.: Mª Paz López Álvarez

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
PL. ESPAÑA, 2
33071 - OVIEDO
ASTURIAS

PRINCIPADO DE ASTURIAS

REG. GENERAL DE ENTRADA

DESTINO: **MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO**

DERIVACION:

Nº DE REGISTRO .....: 200900000007810

FECHA DE ENTRADA .....: 30 de enero de 2009

INTERESADO .....: COORDINADORA ECOLOXISTA D,ASTURIES

OBJETO .....:

PRESENTA ESCRITO DE ALEGACIONES CON MOTIVO DE LA INFORMACION PUBLICA DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

DILIGENCIA: SE HA RECIBIDO EL DOCUMENTO QUE ACOMPAÑA A ESTA PORTADA

Fdo.	

Coordinadora Ecoloxista d'Asturies
C/ Padre Teral, 26-Q. 33403. Avilés. Asturies - Tfnu: 985 577 587
Web: http://coordinadoraecoloxista.blogspot.com - mail: ecoloxista@lelecable.es

Confederación Hidrografica del Cantabrico
Plaza de España s/n.
Oviedo 33005

Aviles a 30 de enero de 2009

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, legalizada el 22 de Marzo de 1990 en la Delegación de Gobierno de Asturias y con el CIF G-33247891, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Padre Teral nº 26-Q, de Villalegre-Avilés en Asturias 33403. En su representación, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI: 11393200N.

Con motivo de la información publica de la Directiva Marco del Agua.

EXPONE:

1. La Directiva Marco del Agua (DMA) significa una revisión fundamental del planteamiento de la política de aguas; no puede ser considerada como un anexo a la práctica habitual. La DMA no se limita a
regular los aspectos relacionados con los objetivos ambientales, como si
fuera subsidiaria de un planteamiento más general (el establecido por la
Ley de aguas española) que, habiendo incorporado desde su transposición
las aportaciones "ambientales" de la DMA, vendría a ordenar todo lo relativo a la política hídrica. La DMA establece un marco para la gestión de las aguas en todos sus aspectos, partiendo del principio de que sólo la recuperación de los ecosistemas hídricos y su mantenimiento en buen estado pueden garantizar la disponibilidad duradera de agua para los usos humanos. Por ello los objetivos ambientales son prioritarios, ya que constituyen la condición de posibilidad de los usos a largo plazo. En este sentido, la propuesta del ministerio no se ajusta a los fines de la DMA.

2. La estructuración del documento "Esquema de Temas Importantes..."
invierte el orden de presentación y tratamiento de los temas coherente con la DMA: la prioridad de los objetivos ambientales se debe expresar en la estructura del documento en la que debe aparecer en primer

lugar
la "Evolución del estado" (actual apartado 4), seguida por el tratamiento de los "Usos del agua" (actual apartado 3). En este último, posiblemente sería necesario empezar por la definición de "Restricciones
ambientales" (régimen de caudales ambientales), que actualmente quedan
relegadas a una posición final dentro de este epígrafe. Este tema es importante dado que a través de él se expresa la concepción, el sentido,
los objetivos y el alcance que se atribuye al nuevo ciclo de planificación iniciado.

3. En la página 1 dice que el presente documento ha de "describir las estrategias de actuaciones actuales y previstas, junto con una selección
de alternativas posibles para resolver los problemas identificados". No se realiza ninguna alternativa para problemas identificados como: alteraciones hidromorfológicas, contaminaciones puntuales, riesgos, etc

4. En la página 3 se dice que"los nuevos planes hidrológicos amplían los anteriores y se reorientan para alcanzar el buen estado de las masas
de agua....". No parece adecuado este párrafo ya que los nuevos están basados en un paradigma diferente y no son una reorientación ni una ampliación de los anteriores, sino que se fundamentan en la DMA que pregona una visión diametralmente opuesta a la existente hasta el momento, que tuvo en el hidraulismo su núcleo duro, mientras que la visión de la DMA es alcanzar el buen estado de las masas de agua. La visión anterior estaba basada en la gestión de la oferta (conseguir aumentar la cantidad de recurso para que la "sociedad" accediera al agua
sin tener ningún tipo de restricciones pero ahora se trata de gestionarla desde la perspectiva de la gestión de la demanda. En el proceso de implementación, del cual este texto de ETI es un nuevo paso,
coexisten dos enfoques, dos estrategias no armonizadas: la de la Directiva marco del agua y la de la planificación hidrológica tradicional. Hay dos (posibles) grandes problemas: sobreestimación de recursos a la vez que se mantiene la actitud tolerante o disposición positiva a sobredimensionar o tolerar crecimientos no controlados de demandas.

5. El inicio del llamado "Nuevo ciclo de planificación hidrológica" es una consecuencia directa de la aprobación y entrada en vigor de la DMA. Su razón de ser es precisamente la de dar cumplimiento a lo establecido en la directiva y, tanto el contenido de los planes como el proceso de su elaboración están claramente definidos en el texto legal europeo. Por el contrario, toda la primera parte de la introducción del

documento de Esquema de Temas Importantes acentúa la continuidad entre el nuevo proceso de planificación y el anterior. Reconoce un "cambio sustancial de la legislación europea", pero da por buena y suficiente la transposición realizada. Simplemente se "amplían los objetivos anteriores" y se incluyen "contenidos adicionales". Este es un problema político clave y de fondo.

6. Respecto al clima, se dan los datos de lluvia (página 20) sin especificar que años se han tomado para calcular la lluvia media. No sabemos si se ha tenido en cuenta el cambio climático. Creemos que se deberían tomar los datos de lluvia de los últimos 25 años, ya que quedaría mejor reflejada la realidad pluviométrica al tomar datos actuales, y estaría más en la línea de lo que va a ser el futuro más influenciado por el cambio climático. En la página 22, se toman los datos del periodo 1940/1 a 2005/6 con lo cual quedan distorsionados los valores, hacia valores más altos de los que nos vamos a encontrar en el futuro. Las previsiones de reducción de lluvia, previstos en los modelos del cambio climático y las restricciones que imponen los caudales ambientales a las previsiones de recursos y reservas, hace que sea muy problemático aceptar un documento que no cuente aún con estos datos, ya que es fundamental saber de que partimos y cuales son las previsiones para los horizontes que se contemplan en el Plan a la hora de llegar a un cálculo de recursos. En Pág.175 sobre el cambio climático, se dice que a falta de datos suficientemente contrastados y siguiendo la Instrucción de Planificación Hidrológica se considera una disminución del 2 % en las aportaciones. Cuando se empezó el proceso de elaboración del nuevo PH aún no existían estos modelos pero casi al final de dicho proceso, que es cuando nos encontramos ahora, difícilmente se puede justificar que nada se haya avanzado en el conocimiento sobre este tema.

7. En general se puede criticar que el documento no ha avanzado nada con respecto al inicio del proceso en cuanto a conocimiento de dotaciones, demandas, programa de medidas, etc., así en los párrafos siguientes se señalarán algunas cuestiones concretas que adolecen de ese defecto.

-En la Página 54, cuando se habla de dotaciones, estas son estimaciones del INE, cuando pensamos que debería de partirse de datos reales. Difícilmente pueden adoptarse medidas sin conocer la realidad y trabajar

con estimaciones (¿Cuánto se consume?), desagregándolo por zonas y sectores.
-En la página 62 se dice "en el escenario futuro no incorporan el efecto del Programa de Medidas (aún por desarrollarse) y cuya futura implementación podría conllevar a un ahorro en el consumo y reducción de pérdidas en las redes de distribución...". Resulta difícil hacer previsiones de futuro sin conocer que demanda debemos abastecer.
-En el caso de la demanda de agua en la industria tampoco se tiene en cuenta los posibles efectos del programa de medidas (aún por desarrollarse) por lo que se puede decir lo mismo que en el caso del abastecimiento humano.

8. En el Reglamento de Planificación Hidrológica (Art. 79 del RPH. apartado a), dice que el Esquema de Temas Importantes incluirá "Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el Plan Hidrológico, incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales". Esto no se especifica en el documento, que nos lo expone gráficamente en mapas con muy poco detalle. Así, en la página 107 en Evaluación del estado, se puede decir que el diagnostico de la situación del estado de las masas de agua actuales es cualitativo y se desconocen tanto las causas como las actividades. En el caso de las aguas de transición, 3 son muy modificadas: la desembocadura del Navia y la de la ría de Avilés. En cuanto a las aguas costeras en Asturias solamente se ha identificado una masa muy modificada y es el puerto del Musel.

9. En cuanto al riesgo, volver a insistir sobre la falta de datos ya que la mayoría de masas de agua están en la categoría de riesgo desconocido (en función de presiones e impactos), pero aquellas que están en la categoría de riesgo seguro no se aporta en el documento información alguna que permita propuestas de futuro para disminuir o eliminar ese riesgo.

10. Respecto al estado de las masas de agua, en el documento de Temas Importantes se expresa gráficamente con diferentes colores en función del estado, pero la calidad de las figuras y el desconocimiento del tipo de contaminante que hace que una masa sea considerada como en mal estado químico, nos hace solicitar se mejoren los mapas y la información que con ellos se pretende.

11. En el apartado de Temas Importantes respecto a las cuestiones que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la planificación (pág.155), no se dice nada de la elevación de temperatura por uso de refrigeración para procesos industriales y de producción energética

(pag.158) cuando se sabe que es una importante modificación que afecta a la vida del río. Este tema tiene importancia sobre todo en el río Nalón, Narcea y Aboño.
En cuanto a la extracción se agua subterránea se definen (pág.160) los recursos como el valor medio interanual, que no es lo mismo que se dice
en el Reglamento de Instrucción Hidrológica "Se considerará que una masa
o grupo de masas se encuentra en mal estado cuando el índice de explotación sea mayor de 0,8 y además exista una tendencia clara de disminución de los niveles piezométricos en una zona relevante de la masa de agua subterránea."
En página 166 sobre los cumplimientos objetivos medioambientales destaca
la "Ocupación del dominio público hidráulico y marítimo terrestre" señalando que resulta necesario definir con claridad los límites... Después del tiempo pasado desde que se inició el proceso de participación pública para la elaboración del nuevo PH, tenemos que decir que ese deslinde del dominio público hidráulico debería de haberse
realizado ya y no haberlo hecho aún sugiere que sea porque no existe ninguna voluntad política de realizarlo.

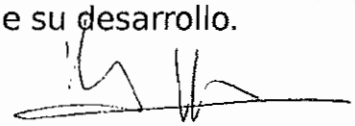
12. La Directiva marco del agua implica un cambio de objetivos y de métodos que no se podrán llevar acabo sin un cambio de la relación entre la Administración del agua y la sociedad. No se trata simplemente
de aceptar la participación de los sectores más activos, sino de desarrollar un plan de información, de reflexión y de avance de los nuevos objetivos legalmente establecidos en un contexto social que va a
seguir presentando resistencias y dificultades por parte de los agentes sociales más poderosos y mejor organizados. En este sentido, es necesario asumir la necesidad de que la administración pública habilite los recursos necesarios para permitir una presencia suficiente en el proceso a la parte de la sociedad civil identificada con los objetivos de la aplicación de la DMA.

13. La identificación de temas importantes constituye un ámbito paradigmático para la aplicación del principio de participación, ya que, estando al inicio del proceso de elaboración del plan de gestión, condiciona fuertemente el desarrollo de éste. Por otra parte, es precisamente en este ejercicio de jerarquización y priorización de los asuntos relevantes dónde deben expresarse los valores e intereses de los distintos actores sociales, dónde emergerán las discrepancias y se abrirán las posibilidades de exploración de futuros consensos. El procedimiento seguido para la elaboración del documento de Temas Importantes por parte del ministerio opta por una metodología de selección (jerarquizada) basada excesivamente en el juicio de los técnicos de la administración, no prestando suficiente atención a las

prioridades de los agentes sociales identificados con los nuevos objetivos, que sólo pueden ser captados a través de la participación directa mediante técnicas hoy ya estandarizadas.

Es por lo que **SOLICITA:**

Se tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenerme por comparecido en el expediente y por formuladas las alegaciones, informándonos de su desarrollo.



Fdo. Fructuoso Pontigo Concha en representación de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies

CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL CANTÁBRICO
Atención Jefe de la Oficina de Planificación
Sr. Jesús González Piedra
Plaza de España, 2
33071- OVIEDO

Pamplona, 27 de enero 2009

Estimado Sr.:

Como Vd. ya conoce, esta Fundación, por encargo de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra está dinamizando los procesos de participación pública vinculados a la subcuenca del río Bidasoa en aplicación de la Directiva Marco del Agua en esta Comunidad Foral de Navarra.

En primer termino agradecer el esfuerzo realizado en relación al proceso de consulta y con los materiales editados y su contenido, y a la colaboración entre esta Confederación y nuestra Fundación en dicho proceso.

En el marco del proceso de consulta del documento de temas importantes elaborado por esa confederación, queremos hacer constar que consideramos de interés incluir en el documento las siguientes propuestas:

1) Incluir en el apartado de "Gobernanza y participación pública" la necesidad de contemplar la participación pública en las fases siguientes hasta la evaluación del nuevo plan hidrológico prevista para el año 2015:

Considerando que la participación pública que se ha llevado a cabo hasta la fecha corresponde a la fase de planificación, esta propuesta pretende que el documento de Temas Importantes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico –bajo el epígrafe "Conocimiento y Gobernanza"-), se haga referencia a la necesidad de contemplar la participación pública (participación activa) en las fases siguientes hasta la evaluación del nuevo plan hidrológico previsto para el año 2015. Siguiendo las indicaciones del Documento Guía nº 8 de la Estrategia Común de Implantación de la Directiva Marco del Agua, que contempla la participación pública en todas las fases del plan hidrológico: planificación, seguimiento y aplicación y evaluación.

2) Contemplar dentro de cada ficha de Temas Importantes. O dar un tratamiento específico a las medidas de información, sensibilización, formación y educación

Esta propuesta –relacionada con la anterior- viene motivada por la importancia que las diversas entidades participantes en el Foro del Agua de Navarra, así como diversos expertos y especialistas en educación ambiental atribuyen a las medidas de información, sensibilización, formación y educación para una buena gestión del agua. Precisamente, son estas medidas las que pueden hacer posible que la sociedad se interese y participe en la aplicación del nuevo plan hidrológico y de que éste tenga un importante respaldo institucional y social.

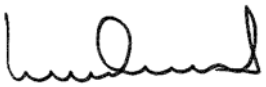
Estas medidas junto a otras relacionadas con la necesaria coordinación administrativa han sido ampliamente respaldadas y propuestas por todas las entidades participantes en los procesos de participación pública desarrollados en las distintas subcuencas de Navarra.

3) Incluir en el Anexo C de Resultados de la participación pública la información correspondiente a los procesos de subcuenca desarrollados en esta Comunidad

Finalmente proponemos , que en el Anexo C de Resultados de la participación pública. En este sentido los procesos por subcuenca han sido gestionados tanto por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico como por las diferentes Comunidades Autónomas, en nuestro caso en la subcuenca del Bidasoa.

Por ello y con el fin de facilitarles la información sobre las jornadas y seminarios organizados en Navarra en relación con la DMA, se detallan en el anexo 1 a estas alegaciones; y, en el anexo 2 se informa sobre las cifras de participación por subcuenca, así como de las entidades participantes y los talleres desarrollados en la subcuenca del Bidasoa.

Atentamente,



Javier Asín Semberoiz
Director Gerente CRANA

Anexo 1: Jornadas Temáticas y Seminarios organizados en Navarra en relación con la aplicación de la DMA

Nº	Nombre de la Jornada	Fecha	nº participantes
0	Presentación a diversos Consejeros/as y Direcciones Generales del Gobierno de Navarra de la DMA y del proceso de participación pública previsto	27/09/05	**18**
1	Seminario sobre y la Participación Pública en la Directiva Marco del Agua en Navarra	19/10/2005	**47**
2	Seminario sobre la Información y la Participación Pública en la Directiva Marco del Agua en Navarra	09/02/2006	**65**
3	Encuentro para las Administraciones y Organizaciones sociales (mixto)	31/03/2006	**35**
4	Presentación del Foro en una Jornada pública el 15 de junio en Pamplona	15/06/2006	**93**
6	Información al personal del Guarderío de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra sobre la aplicación de la DMA en Navarra	14/06/2007	**44**
7	JORNADA SOBRE GESTIÓN DEL ESPACIO FLUVIAL Y PLAN DE RESTAURACIÓN DE LOS RÍOS	03/07/2007	**103**
8	Jornada sobre Nitratos y Calidad del Agua.	03/10/2007	**62**
9	Jornada "Entidades Locales en la Gestión Sostenible del Agua".	20/02/2008	**113**
10	Jornada técnica sobre la DMA y las empresas.	14/03/2008	**42**
11	Jornada "La Aplicación de la Directiva Marco del Agua: una responsabilidad compartida".	22/04/2008	**43**
12	Gestión del Agua en Navarra dirigido al guarderio	27/06/2008	**27**
14	Seminario técnico "Biodiversidad y Restauración de ecosistemas fluviales.	24-25/09/08	**183**
15	Jornada "La Directiva Marco del Agua". Para Colegios profesionales	06/10/2008	**55**
16	Presentación del Documento de Temas Importantes en materia de gestión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro.	17/10/2008	**71**
17	Jornada "Medidas para la lucha contra la Contaminación de Aguas por Nitratos y Pesticidas"	23/10/2008	**75**
			1076

Anexo 2:Listado de entidades participantes en el Foro del Agua de Navarra (participación activa)

Se han celebrado, durante el año 2007, un total de 3 reuniones con los grupos de trabajo, 3 reuniones con los grupos de consulta, y 2 reuniones de información y difusión, en la que se han recogido todas las sensibilidades, discursos e intereses, y en las que han participado y/o se ha informado a un total de 317 personas tal y como recoge la siguiente tabla.

SUBCUENCA	NÚMERO DE PERSONAS				
	Grupos de Trabajo		Grupos de Consulta		Reciben Información
	Personas	Entidades	Personas	Entidades	Personas
Bidasoa	26	19	60	45	317

Subcuenca de Bidasoa

ENTIDADES PARTICIPANTES
En el proceso de participación de la subcuenca del Bidasoa han participado 60 personas de los diferentes sectores y organizaciones de Baztan, Malerreka y Bortziriak, organizadas en un grupo de trabajo y un grupo de consulta, además de entidades de referencia que han recibido toda la información relativa a la labor desarrollada. Con la colaboración de todos ellos, y a partir del Documento Técnico de Base realizado por el Gobierno de Navarra, se ha elaborado un diagnóstico y la propuesta de medidas de actuación concretas para conseguir el buen estado ecológico de los ríos y regatas de la zona.

Grupo de trabajo:
Administración Local: Ayuntamiento de Arantza, Ayuntamiento de Baztan, Ayuntamiento de Bera, Ayuntamiento de Lesaka, Concejo de Narbarte.
Sector productivo: Agencia de desarrollo Cederna-Garalur, Consorcio Turístico de Bertiz, BKZ Navarra Aventura, Sindicato EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna), Sindicato UAGN (Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra), Central hidroeléctrica Puente Marín.
Organizaciones sociales: AEMS Ríos con vida (Navarra), Asociación Navarra de Pescadores a Mosca (ANAPAM), Sociedad de Caza y Pesca de Bera, Urberri Elkartea, Asociación Iturri-Ederra.
Expertos/as y usuarios/as: Alejandro Arizkun, Aitor Bazterrika, José Ignacio Irusta, Monika Redondo.

Grupo de consulta:
Administración Local: Ayuntamientos de Arantza, Baztan, Bertizarana, Bera, Doneztebe, Etxalar, Ituren, Lesaka, Saldías, Sunbilla; Concejos de Legasa y Narbarte (Bertizarana), Pueblos de Almandoz, Arizkun, Arraioz y Azpilkueta (Baztan), Mancomunidad de Malerreka.
Sector productivo: ARCELOR, Central Hidroeléctrica Puente Marín, SAT Amaiur, Sindicato EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna),Sindicato UAGN (Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra), ITG Ganadero, Asociación de Comerciantes de Doneztebe, Cederna-Garalur Baztan, Cederna-Garalur Bortziriak y Malerreka. BKZ Navarra
Aventura, Consorcio Turístico de Bertiz.
Organizaciones sociales: AEMS Ríos con vida (Navarra), Asociación de Cazadores y Pescadores de Baztan, Asociación Navarra de Pescadores a Mosca (ANAPAM), Sociedad de Caza y Pesca de Bera, Urberri Elkartea, Asociación Iturri-Ederra, APYMA Toki Ona de Bera, IES Toki Ona de Bera.
Expertos/as: Alejandro Arizkun (UPNA), Raúl Bermejo (Universidad de Navarra), Julia Ibarra (UPNA), Víctor Peñas (Agencia Vasca del Agua-Uragentzia), CAP de Lekaroz, Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra.
Usuarios/as: Juan Mari Alemán, Gabriel Errandonea, Gabriel Fuentes, José Ignacio Irusta, Mónika Redondo, Txetxu Salazar, Lander Santamaría, Arkaitz Vicente.

Listado de reuniones del Proceso de Participación pública en la Subcuenca del Bidasoa

	Nombre de la Reunión	Fecha	Lugar	nº participantes
0	Jornada Informativa	28.3.07	Bertiz	**43**
1	Encuentro 1º Grupo de Consulta	16.5.07	Bertiz	**31**
2	Encuentro 2º Grupo de Consulta	7.6.07	Bertiz	**29**
3	1ª Reunión Grupo de Trabajo	28.6.07	Bertiz	**15**
4	1ª Sesión de la 2ª Reunión Grupo de Trabajo	12.9.07	Bertiz	**17**
5	2ª Sesión de la 2ª Reunión Grupo de Trabajo	26.9.07	Bertiz	**15**
6	Encuentro 3º Grupo de Consulta	23.10.07	Bertiz	**33**
7	Encuentro Presentación de Resultados	28.11.07	Bertiz	**25**

Más información sobre actas de las reuniones, así como de las medidas propuestas en cada subcuenca, ver www.crana.org (apartado agua)

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL
Y MARINO

O F I C I O

MINISTERIO Y MEDIO AMBIENTE
DEMARCACIÓN DE COSTAS
29 ENE 2009
Nº ENTRADA 872

SECRETARIA GENERAL DEL MAR
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR
Demarcación de Costas de Cantabria

S/REF.
N/REF. TEMAS IMPORTANTES
FECHA 29.01.2009
ASUNTO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 02/02/2009
OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 08:56:30
E0012009000001170

Sr.PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

PLAZA DE ESPAÑA Nº 2

33071 - OVIEDO

ORME SOBRE EL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS ..... ORTANTES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN HIDROLOGICA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO

A la vista del documento del Esquema Provisional de Temas Importantes sometido a consulta pública por resolución de la Dirección General del Agua de 24 de Julio de 2008, y teniendo en cuenta las competencias de esta Demarcación sobre la gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre en el que se encuentran incluidas las aguas de transición y las costeras, se proponen las siguientes modificaciones en la redacción de los "Temas Importantes" con incidencia en el Dominio Público Marítimo-Terrestre:

1. Alteraciones hidromorfológicas en ríos y lagos

Se propone incorporar como una afección de las alteraciones longitudinales de los ríos la: "Modificación de la morfología de las desembocaduras de los ríos y rías, así como de los puntales de arena debidos a lo modificación de los regímenes de caudales y velocidades del agua durante las avenidas".

2. Alteraciones hidromorfológicas en aguas de transición y costeras

Se deberá incluir como una alteración hidromorfológica los cierres, parciales o totales, de marismas, así como la desecación de terrenos marismosos.

3. Caudales ecológicos

Dentro de los estudios técnicos para determinar los elementos del régimen se debería realizar la evaluación hidrológica y de los caudales sólidos necesarios para el mantenimiento de nuestras costas.

C\ VARGAS, 53
SANTANDER 39071
CORREO ELECTRÓNICO
...@mma.es
Tfno.: 942 373968
FAX: 942 372926

4. Presencia de especies alóctonas e invasoras

Dentro de este apartado se debería incluir el estudio de protocolos para el control y erradicación, si se considera necesario, de las especies alóctonas que se consideren invasoras.

5. Gestión y compatibilización de usos lúdicos (pesca deportiva, baño, piragüismo, deporte activo, etc.)

Se debe incluir, dentro de los requisitos que requieren estos usos lúdicos los siguientes:

- La necesidad de mantener las playas en buenas condiciones para su uso estacional, lo que puede requerir la realización de movimientos de arena o incluso de recargas de arena procedente de dragados. Así mismo, es necesario mantener los sistemas dunares para el correcto funcionamiento natural de las playas.

- También es necesario incluir la necesidad de delimitar y adecuar sendas costeras con tres fines primordiales:

  - Dar, a la costa, la accesibilidad prevista en la Ley de Costas.

  - Servir de barrera para la prevención de presiones sobre el dominio público marítimo-terrestre y por tanto sobre las aguas de transición y costeras colindantes.

  - Canalizar el uso peatonal por la costa evitando el pisoteo indiscriminado de la vegetación característica de la zona.

6. Inundaciones

Se deben tener en cuenta las inundaciones, en las aguas de transición y costeras, por el efecto conjunto de las mareas, oleajes y avenidas en el horizonte del cambio climático, así como las que se producen por la perdida de superficie de la zona intermareal como consecuencia de los cierres, y rellenos de terrenos de marismas. Y la necesidad de actuación en las masas de agua de transición y costeras para prevenir sus efectos

EL JEFE DE DEMARCACIÓN,

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
DEMARCACIÓN DE COSTAS
CANTABRIA

Fdo: José Antonio Osorio Manso

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

D. **Eduardo Menéndez Casares**, mayor de edad, con D.N.I. número 10544199 X, actuando como representante de Ecoloxistes n`Aición d`Asturies, con domicilio a efecto de notificaciones en la calle San Ignacio. nº 8, bajo, 33205 Gijón; comparece y como mejor proceda, DICE

Que por medio del presente escrito, y en relación con el **"ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO"**, actualmente en fase de consulta pública, viene a presentar en tiempo y forma, las siguientes:

ALEGACIONES

I. OBSERVACIONES GENERALES

En primer lugar hemos de señalar que todavía, y a estas alturas del proceso de planificación, no se han proporcionado datos básicos imprescindibles para poder formular observaciones y sugerencias al ETI con conocimiento de lo que se está hablando y opinando. A esto se une, que la falta de muchos de los datos básicos que indicamos, se acumula a los incumplimientos y deficiencias en el suministro de información básica para poder efectuar una participación con garantías, que ya se indicaron en los informes de los arts. 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua (Informe 2005), Estudio General de la Demarcación (EGD 2007).

Si para realizar las observaciones al ETI todavía no están definidos ni se aportan datos suficientes sobre la evaluación del estado de las aguas, caracterización del riesgo en las masas de agua, caudales y objetivos ambientales, presiones, recursos disponibles, etc, no se está produciendo una adecuada participación pública, con todos los elementos esenciales para participar y opinar. La participación no está siendo real y efectiva, pues falta información fundamental para poder opinar: no tiene sentido hacer observaciones sobre las medidas para cumplir unos objetivos y salvar unas presiones o riesgos que no se conocen con claridad. De esta manera,

aunque se permita hacer observaciones al ETI, se está produciendo una mera participación formal, vacía de contenido, desde luego no efectiva, que incumple lo establecido en el art. 14 DMA, 41.3 TRLA, y 71 a 75 RPH.

En segundo lugar indicamos que las tres reuniones de participación que hasta el momento se han celebrado por la Confederación han sido absolutamente insuficientes; al margen de éstas tan solo se han realizado reuniones específicas para tratar el tema de la compatibilización de los usos lúdicos del agua, no ha habido prácticamente espacio para el debate ni información previa sobre el contenido material de lo que se propone en el ETI. En este sentido, la participación ha sido más formal que real.

Dentro de la identificación de Temas Importantes una de las categorías es Conocimiento y Gobernanza y relacionados con ella el apartado de Participación pública activa donde se dice (en la página 174) que *"España es un país sin una arraigada tradición participativa tanto por la administración como por el ciudadano"... y en otro párrafo posterior se dice.."la escasa participación pública parte de que el ciudadano no se plantea su participación en los diferentes procedimientos abiertos por la administración, al considerar que no son factibles, viables o que simplemente sus comentarios no van a ser tenidos en cuenta"* .

Si bien compartimos ese diagnóstico nos parece que la administración al reconocer los motivos de la falta de interés de la población debería mostrar un propósito de enmienda y dejar claro durante este proceso que las cosas se pueden modificar y hacer una política participativa que contribuya a involucrar al mayor número posible de personas y colectivos sociales. Sin embargo ésa no ha sido su actitud a lo largo de este proceso en que al menos los grupos ecologistas nos hemos sentido comparsas de la Confederación, que lo único que ha perseguido es cumplir burocráticamente con las premisas que le marca la DMA:

En tercer lugar, hemos de decir que la actual crisis medioambiental (oculta por la financiera) y que tiene su expresión más aguda en el cambio climático, pone límites a la humanidad y a su sistema económico de tal manera que se debería tener presente a la hora de legislar y de desarrollar normas. Los límites al crecimiento son y van a seguir siendo motivo de debate en el futuro ya que hemos de asumir que no se puede crecer indefinidamente en el consumo de materia y energía, en un planeta finito.

En el caso del agua, la DMA es un documento que esta impregnado de esta visión y pone como objetivo alcanzar el buen estado de las masas de agua y la adecuada protección del dominio público hidráulico para el 2015.

II. ALEGACIONES

1) La prioridad de los objetivos medioambientales ha de expresarse tanto en la estructura del documento como en su contenido.

Por ello **alegamos que:**

Debería aparecer en primer lugar la "Evolución del estado de las masas de agua", actual apartado 4, seguida de los "Usos del agua" que es el actual apartado 3.

2) En la página 1, primer párrafo se dice que los objetivos de la planificación hidrológica han de alcanzarse "*incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales*". Entendemos que la primera frase "incrementando las disponibilidades del recurso" entra en contradicción con el resto del párrafo.
Tal como se ha expuesto en párrafos anteriores la crisis medioambiental exige poner límites al crecimiento del consumo de recursos naturales por lo que los objetivos de la planificación no pueden perseguir un incremento de la disponibilidad de recursos sino la estabilización o incluso la reducción de los consumos mediante una gestión continua orientada a mejorar la garantía, la calidad y la seguridad de los abastecimientos, con capacidad de respuesta rápida a las posibles oscilaciones de la demanda, que necesariamente han de ser limitadas.

Por ello **solicitamos que:**
Se suprima del párrafo mencionado la frase "incrementando las disponibilidades del recurso".

3) También en la página 1 se dice que "*El presente documento tiene como objeto ....., así como describir las estrategias de actuaciones actuales y previstas, junto con una selección de alternativas posibles para resolver los problemas identificados*". También en el Reglamento de Planificación Hidrológica (art. 79 del RPH. apartado a) se dice que el Esquema de Temas Importantes incluirá "*Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el Plan Hidrológico, incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales*". Sin embargo, no se plantea ninguna alternativa para problemas identificados como: alteraciones hidromorfológicas, contaminaciones puntuales, riesgos, etc. Tampoco se especifican sectores ni actividades y portanto no se entiende sobre

qué estamos opinando y participando en esta fase de consulta, que se queda vacía de contenido por la ausencia de datos básicos.

Por ello **solicitamos que:**

Se planteen en el documento las posibles alternativas para solucionar los problemas existentes.
Se identifique por masas de agua y a escala adecuada, con tablas o listados que describan e identifiquen con coordenadas, las presiones significativas sobre las masas de agua (contaminación de fuente puntual, extracción y regulación de caudal, alteraciones morfológicas y otros tipos de incidencia humana).

4) En la página 3 se dice que..."*los nuevos planes hidrológicos amplían los anteriores y se reorientan para alcanzar el buen estado de las masas de agua...*". No consideramos correcto este párrafo ya que los nuevos planes están basados en un paradigma diferente y no son una reorientación ni una ampliación de los anteriores sino que se fundamentan en la DMA que pregona una visión diametralmente opuesta a la existente hasta el momento; mientras que el antiguo paradigma tuvo en el hidraulismo su núcleo duro, la visión de la DMA es alcanzar el buen estado de las masas de agua. La visión anterior estaba basada en la gestión de la oferta, es decir, que se trataba de conseguir aumentar la cantidad de recurso para la "sociedad" sin tener ningún tipo de restricciones a la hora de acceder al agua cualquiera que fuera el uso que se le diera (abastecimiento urbano, industrial, regadío, turismo, etc), ahora se trata de gestionar de otra forma basada en la gestión de la demanda.

Por ello **solicitamos que:**

Se elimine ese párrafo y quede clara la vocación nueva y sensible medioambientalmente de la nueva planificación

5) En relación con los datos climáticos e hidrológicos, las previsiones de reducción de lluvia previstos en los modelos del cambio climático y las restricciones que imponen los caudales ambientales a las previsiones de recursos y reservas hace que sea muy problemático aceptar un documento que no cuente aún con estos datos ya que es fundamental saber de qué partimos y cuáles son las previsiones para los horizontes que se contemplan en el Plan a la hora de llegar a un cálculo de recursos.

- En la página 20 se dan los datos de lluvia sin especificar qué años se han tomado para calcular la lluvia media. No se explica si se ha tenido en cuenta el cambio climático. Creemos que se deberían tomar los datos de lluvia de los últimos 25 años ya

que quedaría mejor reflejada la realidad pluviométrica al tomar datos actuales y estaría más en la línea de lo que va a ser el futuro más influenciado por el cambio climático..

- En la página 22 al tratar los Recursos Hídricos se toman los datos del periodo 1940/41 a 2005/06 con lo cual quedan distorsionados los resultados hacia valores más altos de los que nos vamos a encontrar en el futuro ya que, como hemos dicho anteriormente, existirá una reducción de la lluvia y un aumento de la evapotranspiración por efecto del cambio climático.
- En la página 175 sobre el cambio climático se dice que "*Siguiendo la Instrucción de Planificación Hidrológica, a falta de datos suficientemente contrastados, para el conjunto de la Demarcación se considera en el horizonte de la planificación y por causa del cambio climático una disminución de las aportaciones del 2%*". A su vez en la Instrucción de Planificación Hidrológica se dice que "...*estimará, mediante modelos de simulación hidrológica, los recursos que corresponderían a los escenarios climáticos previstos por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Esta evaluación se realizará para el cálculo de los balances correspondientes al horizonte temporal indicado para este fin en el apartado 3.5.2 siguiendo la zonificación que se haya establecido para la realización del inventario de recursos referida en 2.4.3. En tanto en cuanto las evaluaciones correspondientes a estos escenarios no se encuentren disponibles se aplicarán los porcentajes de reducción global de las aportaciones naturales de referencia indicados en la tabla siguiente...*"

Cuando comenzó el proceso de elaboración del nuevo Plan aún no existían estos modelos y por lo tanto se puede entender que se tomara el valor de 2%, pero casi al final de dicho proceso, que es cuando nos encontramos ahora, difícilmente se puede justificar que nada se haya avanzado en el conocimiento sobre este tema.

Por ello **solicitamos que:**

Se faciliten los datos actuales de lluvia, evapotranspiración, escorrentía, etc. y se realicen los modelos de simulación que permitan hacer estimaciones más ajustadas que incluyan las previsiones del cambio climático en Asturias.

6) En general se puede criticar que el documento no ha avanzado nada con respecto al inicio del proceso en cuanto a conocimiento de: dotaciones, demandas, programa de medidas, etc.; así, en los párrafos siguientes se señalarán algunas cuestiones concretas que presentan este defecto.

- En la Página 54 cuando se mencionan las dotaciones, éstas son estimaciones del INE basadas en encuestas medioambientales que no siempre aportan datos fiables. Difícilmente pueden adoptarse medidas sin conocer la realidad y trabajar con estimaciones. Es imprescindible conocer el consumo real desagregándolo por zonas y sectores.
- En la página 62 se dice "*las estimaciones sobre demanda de agua en el escenario futuro no incorporan el efecto del Programa de Medidas (aún por desarrollarse) y cuya futura implementación podría conllevar a un ahorro en el consumo y reducción de pérdidas en las redes de distribución…*". En el caso de la demanda de agua en la industria tampoco se tienen en cuenta los posibles efectos del programa de medidas (aún por desarrollarse).

Por ello **solicitamos que:**

Se necesitan los datos de consumos urbanos e industriales desagregados por localidades e industrias y no estimaciones estadísticas. Asimismo es indispensable conocer qué demandas urbanas e industriales se deberán abastecer ya que con los datos que se dan en el informe al no tener en cuenta las medidas de gestión de la demanda, el nuevo Plan Hidrológico no cambiaría mucho con respecto al anterior en cuanto a valores de demanda.

7) En relación con el apartado 5 Temas Importantes, no se recogen las actividades, actuaciones y proyectos que afectan o pueden afectar a la calidad, estado y flujo de las masas de agua. Así, nada se dice de las centrales termoeléctricas (Lada, Soto de Ribera, Aboño y Soto de la Barca) y la regasificadora (Puerto del Musel en Gijón) existentes o en proyecto que utiliza(rá)n grandes cantidades de agua dando lugar a la elevación de la temperatura del agua del río o del mar; de las industrias o explotaciones ganaderas que vierten contaminantes al río o al mar; de los emisarios submarinos (Maqua en Aviles, Este y Oeste de Gijón, etc) que vierten en el mar las aguas grises que colectan; de las canalizaciones de los ríos que los desnaturalizan e incrementan la velocidad de su flujo (los ríos Nalón, Caudal, Nancea, Nora, Noreña, etc) y de los proyectos de nuevos embalses (Caliao); de las urbanizaciones y polígonos industriales construidos o a construir en las proximidades de los ríos afectando a terrenos de expansión natural en el caso de caudales incrementados (Olloniego); o a los proyectos de nuevas urbanizaciones que requerirán mayores suministros de agua justamente en los períodos de estiaje (unas 60000 viviendas en el litoral asturiano).

Alegamos que:

Se deberían describir las zonas de río o del mar afectados por la elevación de temperatura debido al uso para refrigeración de centrales térmicas y la proyectada regasificadora; los afectados por vertidos de industrias y explotaciones ganaderas; los afectados por los emisarios marinos; los afctados por canalizaciones, por urbanizaciones o polígonos industriales o por nuevos embalses o las demandas de nuevos suministros de agua para urbanizaciones proyectadas.

8) En la página 160, apartado 5.2.5 (Extracción de aguas subterráneas) se dice: "*Sin embargo, en esta Demarcación la escasa importancia, en general, de los acuíferos existentes, en los que no es posible la construcción de captaciones con elevados caudales, ...Dado el bajo nivel de conocimiento actual, resulta necesaria la realización de estudios hidrogeológicos de base para el mejor conocimiento del recurso hídrico subterráneo, tanto en lo referente a la cantidad, como en aquellos aspectos relacionados con la calidad y las relaciones con los posibles ecosistemas que puedan ser dependientes de las aguas subterráneas*".
Entendemos que existe una clara contradicción entre afirmar que los acuíferos existentes tienen una escasa importancia y en ellos no es posible la construcción de captaciones con elevados caudales y, más adelante, reconocer que existe un bajo nivel de conocimiento actual de los recursos hídricos subterráneos. Si no se conocen bien los acuíferos no tiene sentido decir que sus recursos son de escasa importancia.

Por ello **solicitamos que:**

Se suprima la frase: *"Sin embargo, en esta Demarcación la escasa importancia, en general, de los acuíferos existentes, en los que no es posible la construcción de captaciones con elevados caudales"*

9) En la página 166, apartado 5.2.16 (Ocupación del dominio público hidráulico y marítimo terrestre) se señala que resulta necesario definir con claridad sus límites.
Después del tiempo pasado desde que se inició el proceso de participación pública para la elaboración del nuevo Plan es preciso decir que ese deslinde del dominio público hidráulico debería de haberse realizado ya y el no haberlo hecho aún sugiere que no existe ninguna voluntad política de realizarlo.

Por ello **solicitamos que:**

Se realice el deslinde del Dominio Público Hidráulico antes de la elaboración del nuevo PH.

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

JOSÉ ANTONIO BALLESTEROS GARRIDO, mayor de edad, con D.N.I. Número 9.365.787-A y domicilio a efectos de notificaciones en Oviedo, c/ Sta. Teresa, 20, esc. A, 6º dcha.; actuando como representante de **Los Verdes de Asturias**, con NIF G.33.797.101, comparezco y digo:

Que por medio del presente escrito, y en relación con el **"ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO"**, actualmente en fase de consulta pública, presento las siguientes:

ALEGACIONES

I. OBSERVACIONES GENERALES

Primera.- En primer lugar hemos de señalar que todavía, y a estas alturas del proceso de planificación, no se han proporcionado datos básicos imprescindibles para poder formular observaciones y sugerencias al ETI con conocimiento de lo que se está hablando y opinando. A esto se une, que la falta de muchos de los datos básicos que indicamos, se acumula a los incumplimientos y deficiencias en el suministro de información básica para poder efectuar una participación con garantías, que ya se indicaron en los informes de los arts. 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua (Informe 2005), Estudio General de la Demarcación (EGD 2007).

Si para realizar las observaciones al ETI todavía no están definidos ni se aportan datos suficientes sobre la evaluación del estado de las aguas, caracterización del riesgo en las masas de agua, caudales y objetivos ambientales, presiones, recursos disponibles, etc, no se está produciendo una adecuada participación pública, con todos los elementos esenciales para participar y opinar. La participación no está siendo real y efectiva, pues falta información fundamental para poder opinar: no tiene sentido hacer observaciones sobre las medidas para cumplir unos objetivos y salvar unas

presiones o riesgos que no se conocen con claridad. De esta manera, aunque se permita hacer observaciones al ETI, se está produciendo una mera participación formal, vacía de contenido, desde luego no efectiva, que incumple lo establecido en el art. 14 DMA, 41.3 TRLA, y 71 a 75 RPH.

Segunda.- En segundo lugar indicamos que las tres reuniones de participación que hasta el momento se han celebrado por la Confederación han sido absolutamente insuficientes; al margen de éstas tan solo se han realizado reuniones específicas para tratar el tema de la compatibilización de los usos lúdicos del agua, no ha habido prácticamente espacio para el debate ni información previa sobre el contenido material de lo que se propone en el ETI. En este sentido, la participación ha sido más formal que real.

Dentro de la identificación de Temas Importantes una de las categorías es Conocimiento y Gobernanza y relacionados con ella el apartado de Participación pública activa donde se dice (en la página 174) que *"España es un país sin una arraigada tradición participativa tanto por la administración como por el ciudadano"... y en otro párrafo posterior se dice.."la escasa participación pública parte de que el ciudadano no se plantea su participación en los diferentes procedimientos abiertos por la administración, al considerar que no son factibles, viables o que simplemente sus comentarios no van a ser tenidos en cuenta"* .

Si bien compartimos ese diagnóstico nos parece que la administración al reconocer los motivos de la falta de interés de la población debería mostrar un propósito de enmienda y dejar claro durante este proceso que las cosas se pueden modificar y hacer una política participativa que contribuya a involucrar al mayor número posible de personas y colectivos sociales. Sin embargo ésa no ha sido su actitud a lo largo de este proceso en que al menos los grupos ecologistas nos hemos sentido comparsas de la Confederación, que lo único que ha perseguido es cumplir burocráticamente con las premisas que le marca la DMA:

Tercera.- En tercer lugar, hemos de decir que la actual crisis medioambiental (oculta por la financiera) y que tiene su expresión más aguda en el cambio climático, pone límites a la humanidad y a su sistema económico de tal manera que se debería tener presente a la hora de legislar y de desarrollar normas. Los límites al crecimiento son y van a seguir siendo motivo de debate en el futuro ya que hemos de asumir que no se puede crecer indefinidamente en el consumo de materia y energía, en un planeta finito.

En el caso del agua, la DMA es un documento que esta impregnado de esta visión y pone como objetivo alcanzar el buen estado de las masas de agua y la adecuada protección del dominio público hidráulico para el 2015.

II. ALEGACIONES CONCRETAS

Cuarta.- La prioridad de los objetivos medioambientales ha de expresarse tanto en la estructura del documento como en su contenido.

Por ello **alegamos que:**

Debería aparecer en primer lugar la "Evolución del estado de las masas de agua", actual apartado 4, seguida de los "Usos del agua" que es el actual apartado 3.

Quinta.- En la página 1, primer párrafo se dice que los objetivos de la planificación hidrológica han de alcanzarse "*incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales*". Entendemos que la primera frase "incrementando las disponibilidades del recurso" entra en contradicción con el resto del párrafo.

Tal como se ha expuesto en párrafos anteriores la crisis medioambiental exige poner límites al crecimiento del consumo de recursos naturales por lo que los objetivos de la planificación no pueden perseguir un incremento de la disponibilidad de recursos sino la estabilización o incluso la reducción de los consumos mediante una gestión continua orientada a mejorar la garantía, la calidad y la seguridad de los abastecimientos, con capacidad de respuesta rápida a las posibles oscilaciones de la demanda, que necesariamente han de ser limitadas.

Por ello **solicitamos que:**
Se suprima del párrafo mencionado la frase "incrementando las disponibilidades del recurso".

Sexta.- También en la página 1 se dice que "*El presente documento tiene como objeto ....., así como describir las estrategias de actuaciones actuales y previstas, junto con una selección de alternativas posibles para resolver los problemas identificados*". También en el Reglamento de Planificación Hidrológica (art. 79 del RPH. apartado a) se dice que el Esquema de Temas Importantes incluirá "*Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el Plan Hidrológico, incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales*". Sin embargo, no se plantea ninguna alternativa para problemas identificados como:

alteraciones hidromorfológicas, contaminaciones puntuales, riesgos, etc. Tampoco se especifican sectores ni actividades y por tanto no se entiende sobre qué estamos opinando y participando en esta fase de consulta, que se queda vacía de contenido por la ausencia de datos básicos.

Por ello **solicitamos que:**

Se planteen en el documento las posibles alternativas para solucionar los problemas existentes.
Se identifique por masas de agua y a escala adecuada, con tablas o listados que describan e identifiquen con coordenadas, las presiones significativas sobre las masas de agua (contaminación de fuente puntual, extracción y regulación de caudal, alteraciones morfológicas y otros tipos de incidencia humana).

Séptima.- En la página 3 se dice que..."*los nuevos planes hidrológicos amplían los anteriores y se reorientan para alcanzar el buen estado de las masas de agua…*". No consideramos correcto este párrafo ya que los nuevos planes están basados en un paradigma diferente y no son una reorientación ni una ampliación de los anteriores sino que se fundamentan en la DMA que pregona una visión diametralmente opuesta a la existente hasta el momento; mientras que el antiguo paradigma tuvo en el hidraulismo su núcleo duro, la visión de la DMA es alcanzar el buen estado de las masas de agua. La visión anterior estaba basada en la gestión de la oferta, es decir, que se trataba de conseguir aumentar la cantidad de recurso para la "sociedad" sin tener ningún tipo de restricciones a la hora de acceder al agua cualquiera que fuera el uso que se le diera (abastecimiento urbano, industrial, regadío, turismo, etc), ahora se trata de gestionar de otra forma basada en la gestión de la demanda.

Por ello **solicitamos que:**

Se elimine ese párrafo y quede clara la vocación nueva y sensible medioambientalmente de la nueva planificación

Octava.- En relación con los datos climáticos e hidrológicos, las previsiones de reducción de lluvia previstos en los modelos del cambio climático y las restricciones que imponen los caudales ambientales a las previsiones de recursos y reservas hace que sea muy problemático aceptar un documento que no cuente aún con estos datos ya que es fundamental saber de qué partimos y cuáles son las previsiones para los horizontes que se contemplan en el Plan a la hora de llegar a un cálculo de recursos.

- En la página 20 se dan los datos de lluvia sin especificar qué años se han tomado para calcular la lluvia media. No se explica si se ha tenido en cuenta el cambio climático. Creemos que se deberían tomar los datos de lluvia de los últimos 25 años ya que quedaría mejor reflejada la realidad pluviométrica al tomar datos actuales y estaría más en la línea de lo que va a ser el futuro más influenciado por el cambio climático..
- En la página 22 al tratar los Recursos Hídricos se toman los datos del periodo 1940/41 a 2005/06 con lo cual quedan distorsionados los resultados hacia valores más altos de los que nos vamos a encontrar en el futuro ya que, como hemos dicho anteriormente, existirá una reducción de la lluvia y un aumento de la evapotranspiración por efecto del cambio climático.
- En la página 175 sobre el cambio climático se dice que "*Siguiendo la Instrucción de Planificación Hidrológica, a falta de datos suficientemente contrastados, para el conjunto de la Demarcación se considera en el horizonte de la planificación y por causa del cambio climático una disminución de las aportaciones del 2%*". A su vez en la Instrucción de Planificación Hidrológica se dice que "...*estimará, mediante modelos de simulación hidrológica, los recursos que corresponderían a los escenarios climáticos previstos por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Esta evaluación se realizará para el cálculo de los balances correspondientes al horizonte temporal indicado para este fin en el apartado 3.5.2 siguiendo la zonificación que se haya establecido para la realización del inventario de recursos referida en 2.4.3. En tanto en cuanto las evaluaciones correspondientes a estos escenarios no se encuentren disponibles se aplicarán los porcentajes de reducción global de las aportaciones naturales de referencia indicados en la tabla siguiente...*"

Cuando comenzó el proceso de elaboración del nuevo Plan aún no existían estos modelos y por lo tanto se puede entender que se tomara el valor de 2%, pero casi al final de dicho proceso, que es cuando nos encontramos ahora, difícilmente se puede justificar que nada se haya avanzado en el conocimiento sobre este tema.

Por ello **solicitamos que:**

Se faciliten los datos actuales de lluvia, evapotranspiración, escorrentia, etc. y se realicen los modelos de simulación que permitan hacer estimaciones más ajustadas que incluyan las previsiones del cambio climático en Asturias.

Novena.- En general se puede criticar que el documento no ha avanzado nada con respecto al inicio del proceso en cuanto a

conocimiento de: dotaciones, demandas, programa de medidas, etc.; así, en los párrafos siguientes se señalarán algunas cuestiones concretas que presentan este defecto.

- En la Página 54 cuando se mencionan las dotaciones, éstas son estimaciones del INE basadas en encuestas medioambientales que no siempre aportan datos fiables. Difícilmente pueden adoptarse medidas sin conocer la realidad y trabajar con estimaciones. Es imprescindible conocer el consumo real desagregándolo por zonas y sectores.
- En la página 62 se dice "*las estimaciones sobre demanda de agua en el escenario futuro no incorporan el efecto del Programa de Medidas (aún por desarrollarse) y cuya futura implementación podría conllevar a un ahorro en el consumo y reducción de pérdidas en las redes de distribución…*". En el caso de la demanda de agua en la industria tampoco se tienen en cuenta los posibles efectos del programa de medidas (aún por desarrollarse).

Por ello **solicitamos que:**

Se necesitan los datos de consumos urbanos e industriales desagregados por localidades e industrias y no estimaciones estadísticas. Asimismo es indispensable conocer qué demandas urbanas e industriales se deberán abastecer ya que con los datos que se dan en el informe al no tener en cuenta las medidas de gestión de la demanda, el nuevo Plan Hidrológico no cambiaría mucho con respecto al anterior en cuanto a valores de demanda.

Décima.- En relación con el apartado 5 Temas Importantes, no se recogen las actividades, actuaciones y proyectos que afectan o pueden afectar a la calidad, estado y flujo de las masas de agua. Así, nada se dice de las centrales eléctricas y la regasificadora existentes o en proyecto que utiliza(rá)n grandes cantidades de agua dando lugar a la elevación de la temperatura del agua del río o del mar; de las industrias o explotaciones ganaderas que vierten contaminantes al río o al mar; de los emisores que vierten en el mar las aguas grises que colectan; de las canalizaciones de los ríos que los desnaturalizan e incrementan la velocidad de su flujo y de los proyectos de nuevos embalses; de las urbanizaciones y polígonos industriales construidos o a construir en las proximidades de los ríos afectando a terrenos de expansión natural en el caso de caudales incrementados; o a los proyectos de nuevas urbanizaciones que requerirán mayores suministros de agua justamente en los períodos de estiaje.

Alegamos que:

Se deberían describir las zonas de río o del mar afectados por la elevación de temperatura debido al uso para refrigeración de centrales térmicas y la proyectada regasificadora; los afectados por vertidos de industrias y explotaciones ganaderas; los afectados por los emisarios marinos; los afctados por canalizaciones, por urbanizaciones o polígonos industriales o por nuevos embalses o las demandas de nuevos suministros de agua para urbanizaciones proyectadas.

Undécima.- En la página 160, apartado 5.2.5 (Extracción de aguas subterráneas) se dice: "*Sin embargo, en esta Demarcación la escasa importancia, en general, de los acuíferos existentes, en los que no es posible la construcción de captaciones con elevados caudales, ...Dado el bajo nivel de conocimiento actual, resulta necesaria la realización de estudios hidrogeológicos de base para el mejor conocimiento del recurso hídrico subterráneo, tanto en lo referente a la cantidad, como en aquellos aspectos relacionados con la calidad y las relaciones con los posibles ecosistemas que puedan ser dependientes de las aguas subterráneas*".

Entendemos que existe una clara contradicción entre afirmar que los acuíferos existentes tienen una escasa importancia y en ellos no es posible la construcción de captaciones con elevados caudales y, más adelante, reconocer que existe un bajo nivel de conocimiento actual de los recurso hídricos subterráneos. Si no se conocen bien los acuíferos no tiene sentido decir que sus recursos son de escasa importancia.

Por ello **solicitamos que:**

Se suprima la frase: *"Sin embargo, en esta Demarcación la escasa importancia, en general, de los acuíferos existentes, en los que no es posible la construcción de captaciones con elevados caudales"*

Duodécima.- En la página 166, apartado 5.2.16 (Ocupación del dominio público hidráulico y marítimo terrestre) se señala que resulta necesario definir con claridad sus límites.
Después del tiempo pasado desde que se inició el proceso de participación pública para la elaboración del nuevo Plan es preciso decir que ese deslinde del dominio público hidráulico debería de haberse realizado ya y el no haberlo hecho aún sugiere que no existe ninguna voluntad política de realizarlo.

Por ello **solicitamos que:**

Se realice el deslinde del Dominio Público Hidráulico antes de la elaboración del nuevo PH.

SOLICITO que se tengan en cuenta las anteriores alegaciones, en Oviedo a 30 de enero de 2009.

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

D. **Amador Rodriguez Garcia**, mayor de edad, con D.N.I. número 71867081-Q, actuando como representante de **Salternavia**, con domicilio a efecto de notificaciones en la calle Las Veigas nº 9, 1º C C.P. 33710 Navia; comparece y como mejor proceda, DICE

Que por medio del presente escrito, y en relación con el **"ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO"**, actualmente en fase de consulta pública, viene a presentar en tiempo y forma, las siguientes:

ALEGACIONES

1- Señalar el incumplimiento del artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica, en adelante (RPH), que regula el contenido del Esquema provisional de Temas Importantes, en adelante (ETI). Dicho artículo establece que el (ETI) contendrá la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y posibles alternativas de actuación, describiendo específicamente las principales presiones e impactos, incluyendo los sectores y actividades que puedan suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales.

Sin embargo, el (ETI) provisional presentado no aporta datos concretos ni suficientes, ni describe específicamente los principales impactos que sufren las masas de agua. En concreto en los documentos del Esquema de Temas Importantes se pintan en rojo las masas en riesgo pero en ningún sitio se dice cuales son las actividades o sectores que lo realizan, creemos desde esta asociación que este es un punto clave que se debe concretar.

En relación al estuario del río Navia se deben incluir como presiones que ponen en riesgo la masa de agua de transición, las contaminaciones puntuales producidas por las industrias Papelera, Lácteas y astilleros. Así como la ejercida por la población ribereña.

2- A fin de recuperar unos pocos kilómetros de río libre y contribuir a la recuperación de las aguas de transición que conforman el curso bajo del Navia y su zona de ría, creemos que se debe incorporar, como principal y única alternativa de actuación, la eliminación del embalse de Arbón.

El embalse de Arbón no solo constituye el principal impacto sobre la zona baja del curso del Navia, sino que constituye un grave riesgo para las poblaciones ribereñas asentadas aguas abajo.

3- La Directiva Marco del Agua (DMA) hace especial hincapié en atender las demandas mediante una gestión racional y sostenible.

Este E.T.I. forma parte del proceso de adecuación de los nuevos planes hidrológicos a la (DMA). Dado que el proyecto del trasvase del río Navia recogido en el actual plan hidrológico, se redacto desde una mentalidad desarrollista y en base a unas estimaciones de crecimientos demográficos y demandas hídricas que cuanto menos podemos definir como fantasiosas, aunque mas bien parezcan falseadas e interesadas.

Pedimos que dicho proyecto sea recogido como uno de los principales impactos sobre el río Navia, y que se recojan como primera medida para desarrollar posibles alternativas de actuación (de acuerdo al RPH) una nueva estimación realista y participativa de las demandas hídricas que se supone debería abastecer.

Así mismo que se concrete el riesgo que se produce por las extracciones de agua (con datos cuantitativos) con el trasvase del Navia, que se calcule cual va a ser el caudal del río una vez puesta en marcha esa infraestructura. Y finalmente que se establezca el caudal mínimo ecológico que ha de tener el río. Sin todo ello no es posible hacer una valoración del riesgo para la masa de agua

4- El (ETI) debe recoger también la valoración y descripción de los problemas previsibles en relación con las masas de agua. En este sentido nada se menciona sobre los proyectos en el alto Navia (proyectos de embalses) para la producción de energía hidroeléctrica. Proyectos que de llevarse a cabo supondrían otro impacto mas sobre la masa de agua del ya de por si deteriorado río Navia.

5- En último lugar, y en lo referente al conjunto global del proceso de planificación del (ETI) de la demarcación hidrográfica del cantábrico y en especial al proceso de participación ciudadana, **Salternavia** suscribe en su totalidad las alegaciones presentadas por **Ecoloxistes n`Aición d`Asturies** siendo D. Eduardo Menéndez Casares su representante**.**

EN NAVIA A 30 DE ENERO DE 2009

SALTERNAVIA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Dña. GLORIA GARCIA NIETO, mayor de edad, con D.N.I. número 10182782S, actuando como representante de la **PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE REDES**, con domicilio a efecto de notificaciones en la calle Virrey Abascal, 15-6ºL, 33008-OVIEDO; comparece y como mejor proceda, DICE

Que por medio del presente escrito, y en relación con el **"ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO"**, actualmente en fase de consulta pública, viene a presentar en tiempo y forma, las siguientes:

ALEGACIONES

I. OBSERVACIONES GENERALES

En primer lugar señalar que todavía, y a estas alturas del proceso de planificación, no se han proporcionado datos básicos imprescindibles para poder formular observaciones y sugerencias al ETI con conocimiento de lo que se está hablando y opinando. A esto se une, que la falta de muchos de los datos básicos que indicamos, se acumula a los incumplimientos y deficiencias en el suministro de información básica para poder efectuar una participación con garantías, que ya se indicaron en los informes de los arts. 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua (Informe 2005), Estudio General de la Demarcación (EGD 2007).

Si para realizar las observaciones al ETI todavía no están definidos ni se aportan datos suficientes sobre la evaluación del estado de las aguas, caracterización del riesgo en las masas de agua, caudales y objetivos ambientales, presiones, recursos disponibles, etc, no se está produciendo una adecuada participación pública, con todos los elementos esenciales para participar y opinar. La participación no está siendo real y efectiva, pues falta información fundamental para poder opinar: no tiene sentido hacer observaciones sobre las medidas para cumplir unos objetivos y salvar unas presiones o riesgos que no se conocen con claridad. De esta manera, aunque se permita hacer observaciones al ETI, se está produciendo una mera participación formal, vacía de contenido, desde luego no

efectiva, que incumple lo establecido en el art. 14 DMA, 41.3 TRLA, y 71 a 75 RPH.

En segundo lugar indicar que las tres reuniones de participación que hasta el momento se han celebrado por la Confederación, han sido absolutamente insuficientes, al margen de éstas tan solo se han realizado reuniones específicas para tratar el tema de la compatibilización de los usos lúdicos del agua, no ha habido prácticamente espacio para el debate ni información previa sobre el contenido material de lo que se propone en el ETI. En este sentido, la participación ha sido más formal que real.

Dentro de la identificación de Temas Importantes una de las categorías es Conocimiento y Gobernanza y relacionados con ellos el apartado de Participación pública activa donde se dice (en la página 174) que *"España es un país sin una arraigada tradición participativa tanto por la administración como por el ciudadano"*...y en otro párrafo posterior se dice: *"la escasa participación pública parte de que el ciudadano no se plantea su participación en los diferentes procedimientos abiertos por la administración, al considerar que no son factibles, viables o que simplemente sus comentarios no van a ser tenidos en cuenta"* .

Si bien compartimos ese diagnóstico nos parece que la administración al reconocer los motivos de la falta de interés de la población debería mostrar un propósito de enmienda y dejar claro durante este proceso que las cosas se pueden modificar y hacer una política participativa que contribuya a involucrar al mayor número posible de personas y colectivos sociales, sin embargo esa no ha sido su actitud a lo largo de este proceso en que, al menos los colectivos vinculados a movimientos sociales, nos hemos sentido comparsas de la Confederación que lo único que ha perseguido es cumplir burocráticamente con las premisas que le marca la DMA.

En tercer lugar decir que la actual crisis medioambiental (oculta por la financiera) y que tiene su expresión más aguda en el cambio climático, pone límites a la humanidad y a su sistema económico de tal manera que se debería tener presente a la hora de legislar y de desarrollar normas. Los límites al crecimiento son y van a seguir siendo motivo de debate en el futuro ya que hemos de asumir que no se puede crecer indefinidamente en el consumo de materia y energía, en un planeta finito.

En el caso del agua, la DMA es un documento que esta impregnado de esta visión y pone como objetivo alcanzar el buen estado de las masas de agua y la adecuada protección del dominio público hidráulico para el 2015.

II. ALEGACIONES

1.- La prioridad de los objetivos medioambientales ha de expresarse tanto en la estructura del documento como en su contenido.

Por ello **alegamos que:**

Debería aparecer en primer lugar la "Evolución del estado de las masas de agua", actual apartado 4, seguida de los "Usos del agua" que es el actual apartado 3.

2.- En la pág. 1, primer párrafo se dice que los objetivos de la planificación hidrológica han de alcanzarse "*incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales*". Entendemos que la primera frase "incrementando las disponibilidades del recurso" entra en contradicción con el resto del párrafo.
Tal como se ha expuesto anteriormente, la crisis medioambiental exige poner límites al crecimiento del consumo de recursos naturales por lo que **los objetivos de la planificación no pueden perseguir un incremento de la disponibilidad de recursos** sino la estabilización o incluso la reducción de los consumos mediante una gestión continua orientada a mejorar la garantía, la calidad y la seguridad de los abastecimientos, con capacidad de respuesta rápida a las posibles oscilaciones de la demanda, que necesariamente han de ser limitadas.

Por ello **alegamos que:**
Se suprima del párrafo mencionado la frase "incrementando las disponibilidades del recurso".

3.- También en la pág. 1 se dice que "*El presente documento tiene como objeto ....., así como describir las estrategias de actuaciones actuales y previstas, junto con una selección de alternativas posibles para resolver los problemas identificados*". También en el Reglamento de Planificación Hidrológica (art. 79 del RPH. apartado a) se dice que el Esquema de Temas Importantes incluirá "*Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el Plan Hidrológico, incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales*". Sin embargo, no se plantea ninguna alternativa para problemas identificados como: alteraciones hidromorfológicas, contaminaciones puntuales, riesgos, etc. Tampoco se especifican sectores ni actividades y por tanto no se entiende sobre qué estamos opinando y participando en esta fase de consulta, que se queda vacía de contenido por la ausencia de datos básicos.

Por ello **alegamos que:**

Se planteen en el documento las posibles alternativas para solucionar los problemas existentes.
Se identifique por masas de agua y a escala adecuada, con tablas o listados que describan e identifiquen con coordenadas, las presiones significativas sobre las masas de agua (contaminación de fuente puntual, extracción y regulación de caudal, alteraciones morfológicas y otros tipos de incidencia humana).

4.- En la pág. 3 se dice que…"*los nuevos planes hidrológicos amplían los anteriores y se reorientan para alcanzar el buen estado de las masas de agua…*". No consideramos correcto este párrafo ya que **los nuevos planes están basados en un paradigma diferente** y no son una reorientación ni una ampliación de los anteriores sino que se fundamentan en la DMA que parte de una visión diametralmente opuesta a la existente hasta el momento. Mientras que el antiguo paradigma tuvo en el hidraulismo su núcleo duro, la visión de la DMA es alcanzar el buen estado de las masas de agua. La visión anterior estaba basada en la gestión de la oferta es decir que se trataba de conseguir aumentar la cantidad de recurso para la "sociedad" sin tener ningún tipo de restricciones a la hora de acceder al agua cualquiera que fuera el uso que se le diera (abastecimiento urbano, industrial, regadío, turismo, etc), ahora se trata de gestionar de otra forma basada en la gestión de la demanda.

Por ello **alegamos que:**

Se elimine ese párrafo y quede clara la vocación nueva y sensibilidad medioambiental de la nueva planificación.

5.- En relación con los datos climáticos e hidrológicos, las previsiones de reducción de lluvia previstos en los modelos del cambio climático y las restricciones que imponen los caudales ambientales a las previsiones de recursos y reservas hace que sea muy problemático aceptar un documento que no cuente aún con estos datos ya que es fundamental saber de que partimos y cuales son las previsiones para los horizontes que se contemplan en el Plan a la hora de llegar a un cálculo de recursos.

- En la pág. 20 se dan los datos de lluvia sin especificar qué años se han tomado para calcular la lluvia media. No se explica si se ha tenido en cuenta el cambio climático. Creemos que se deberían tomar los datos de lluvia de los últimos 25 años ya que quedaría mejor reflejada la realidad pluviométrica al tomar datos actuales y estaría más en la línea de lo que va a ser el futuro más influenciado por el cambio climático.

- En la pág. 22 al tratar los Recursos Hídricos se toman los datos del periodo 1940/41 a 2005/06 con lo cual quedan distorsionados los resultados hacia valores más altos de los que nos vamos a encontrar en el futuro ya que, como hemos dicho anteriormente, existirá una reducción de la lluvia y un aumento de la evapotranspiración por efecto del cambio climático.
- En la pág. 175 sobre el cambio climático se dice que "*Siguiendo la Instrucción de Planificación Hidrológica, a falta de datos suficientemente contrastados, para el conjunto de la Demarcación se considera en el horizonte de la planificación y por causa del cambio climático una disminución de las aportaciones del 2%*". A su vez en la Instrucción de Planificación Hidrológica se dice que "*...estimará, mediante modelos de simulación hidrológica, los recursos que corresponderían a los escenarios climáticos previstos por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino Esta evaluación se realizará para el cálculo de los balances correspondientes al horizonte temporal indicado para este fin en el apartado 3.5.2 siguiendo la zonificación que se haya establecido para la realización del inventario de recursos referida en 2.4.3. En tanto en cuanto las evaluaciones correspondientes a estos escenarios no se encuentren disponibles se aplicarán los porcentajes de reducción global de las aportaciones naturales de referencia indicados en la tabla siguiente...*"

Cuando comenzó el proceso de elaboración del nuevo Plan aún no existían estos modelos y por lo tanto se puede entender que se tomara el valor de 2%, pero casi al final de dicho proceso, que es cuando nos encontramos ahora, difícilmente se puede justificar que nada se haya avanzado en el conocimiento sobre este tema.

Por ello **alegamos que:**

Se faciliten los datos actuales de lluvia, evapotranspiración, escorrentía, etc. y se realicen los modelos de simulación que permitan hacer estimaciones más ajustadas que incluyan las previsiones del cambio climático en Asturias.

6.- En general se puede criticar que el documento no ha avanzado nada con respecto al inicio del proceso en cuanto a conocimiento de: dotaciones, demandas, programa de medidas, etc, así en los párrafos siguientes se señalarán algunas cuestiones concretas que presentan este defecto.

- En la Pág. 54 cuando se mencionan las dotaciones éstas son estimaciones del INE basadas en encuestas medioambientales que no siempre aportan datos fiables. Difícilmente pueden adoptarse medidas sin conocer la realidad y trabajar con estimaciones. **Es imprescindible conocer el consumo real desagregándolo por zonas, sectores y usos**. Por otra parte y en este sentido, **utilizar como base para los cálculos de demanda de agua el dato de 180 l/hab/día pone de manifiesto una contradicción más con el espíritu y los**

objetivos de la DMA. Un consumo de 180 l/hab/día además de ser insostenible, nos situa a la cabeza de las comunidades más derrochadoras y triplica la cantidad considerada 'básica' por los organismos internacionales, dejando patente que se apuesta por una política del agua encaminada a mantener consumos desmesurados que agotan el recurso y para cuya disponibilidad se harían necesarias infraestructuras que provocan graves alteraciones morfológicas en las masas de agua, afectando gravemente a los ecosistemas acuáticos y a los vinculados; que es precisamente lo que trata de prevenir y remediar la DMA.

- En la pág. 62 se dice *"las estimaciones sobre demanda de agua en el escenario futuro no incorporan el efecto del Programa de Medidas (aún por desarrollarse) y cuya futura implementación podría conllevar a un ahorro en el consumo y reducción de pérdidas en las redes de distribución..."*. En el caso de la demanda de agua en la industria tampoco se tienen en cuenta los posibles efectos del programa de medidas (aún por desarrollarse).

- En el apartado 3.10 referido a la recuperación de costes, se ha obviado toda referencia a los costes ambientales y de recurso, siendo estos explícitos en la DMA.

Por ello **alegamos que:**

Se necesitan los datos de consumos urbanos e industriales desagregados por localidades e industrias y no estimaciones estadísticas. Asimismo <u>es indispensable conocer qué demandas urbanas e industriales se deberán abastecer y con qué calidades de agua</u>, ya que con los datos que se dan en el informe y al <u>no tener en cuenta ninguna medida de gestión de la demanda</u> –que básicamente deberá encaminarse a un uso eficiente del recurso, lo que implica, entre otras medidas, el reducir el desmesurado consumo-, el nuevo Plan Hidrológico no cambiaría mucho con respecto al anterior en cuanto a valores de demanda. También entendemos que la referencia a los costes ambientales y del recurso, así como los estudios necesarios para su cálculo y posterior repercusión deben estar reflejados.

7.- En relación con el apartado 5 Temas Importantes.

Alegamos que:

Se deberían describir los tramos de río afectados por la elevación de temperatura debido al uso para refrigeración de

centrales térmicas ya que se sabe que es una importante modificación que afecta a la vida del río. Este tema tiene importancia sobre todo en los ríos Nalón, Narcea y Aboño. También consideramos que se deben especificar cuáles son las presiones concretas en cada masa de agua.

En el punto 5.3. referido a la "atención de demandas y racionalidad del uso", consideramos que **es necesario relacionar la deficiencias en la atención a las demandas con las deficiencias en la gestión del recurso y de las políticas del agua**, para no tener que recurrir sistemáticamente a aumentar las disponibilidades del recurso sino a hacer más eficiente el uso de las que hay. Consideramos insostenible el aumento de disponibilidades cuando no se ha implementado ninguna medida para controlar el desmesurado consumo ni para aumentar el 0% de reutilización, cuando son escasísimas y localizadas las medidas para reducir las cuantiosas pérdidas en la red de distribución y cuando el desmesurado desarrollo urbanístico se ha hecho sin analizar los impactos previsibles.

En el punto 5.3.4, relacionado con "Cuestiones económicas y recuperación de costes.." **sigue sin mencionarse los costes medioambientales y de recurso y**, contraviniendo uno de los ejes de la DMA, **no se computan para su repercusión**.

8.- En la pág. 160, apartado 5.2.5 (Extracción de aguas subterráneas) se dice: "*Sin embargo, en esta Demarcación la escasa importancia, en general, de los acuíferos existentes, en los que no es posible la construcción de captaciones con elevados caudales, ...Dado el bajo nivel de conocimiento actual, resulta necesaria la realización de estudios hidrogeológicos de base para el mejor conocimiento del recurso hídrico subterráneo, tanto en lo referente a la cantidad, como en aquellos aspectos relacionas con la calidad y las relaciones con los posibles ecosistemas que puedan ser dependientes de las aguas subterráneas*".
Entendemos que existe una clara contradicción entre afirmar que los acuíferos existentes tienen una escasa importancia y en ellos no es posible la construcción de captaciones con elevados caudales y, más adelante, reconocer que existe un bajo nivel de conocimiento actual de los recursos hídricos subterráneos. Si no se conocen bien los acuíferos no tiene sentido decir que sus recursos son de escasa importancia.

Por ello **alegamos que:**

Se suprima el párrafo: *"Sin embargo, en esta Demarcación la escasa importancia, en general, de los acuíferos existentes, en los que no es posible la construcción de captaciones con elevados caudales"*

9.- En la página 166, apartado 5.2.16 (Ocupación del dominio público hidráulico y marítimo terrestre) se señala que resulta necesario definir con claridad sus límites.
Después del tiempo pasado desde que se inició el proceso de participación pública para la elaboración del nuevo Plan es preciso decir que ese deslinde del dominio público hidráulico debería de haberse realizado ya y el no haberlo hecho aún sugiere que no existe ninguna voluntad política de realizarlo.

Por ello **alegamos que:**
Se realice el deslinde del Dominio Público Hidráulico antes de la elaboración del nuevo PH.

10.- En cuanto a los puntos 6.1.4. y 6.2.4. : "Conocimiento y gobernanza", señalar que la DMA recoge **el principio de gestión participativa y su implantación supone pasar a un modelo de gestión basado en la participación ciudadana proactiva que debe implementarse desde el inicio de la planificación** y no reducirse a una mera información o al final de los procesos, como se señala en este apartado, en el que se zanja el tema de la participación con la frase *"…actividades de participación pública para 'divulgar' las tareas realizadas o en marcha".*
El principio de gestión participativa **significa abrir la gestión de las aguas a toda la sociedad**, pasar de una gestión en la que sólo tienen la palabra algunos de los actores tradicionales (autoridades, técnicos, grandes usuarios,...) a otra en la que **se toma conciencia del carácter público de la misma, incorporando en su planificación a consumidores, ciudadanos y ciudadanas organizadas, personas y entidades afectadas, etc. Con ello se pretende gestionar el agua teniendo en cuenta a todas las partes implicadas y a todas las personas interesadas, lograr compromisos colectivos, compartir responsabilidades y mejorar la gestión, evitar conflictos o resolverlos mediante el diálogo y dotar de una mayor solidez y apoyo social a la gestión del agua, mejorando su gobernabilidad.**

En Oviedo, a 30 de enero de 2009

Fdo.: Gloria García Nieto (por la Plataforma por la Defensa de Redes)

6.2.2. Documento de respuesta a las alegaciones

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA REFERENTE AL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Versión octubre de 2008

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3

2. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA 4

1. ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS 5

2. USO HIDROELÉCTRICO 9

3. CAUDALES ECOLÓGICOS 12

4. SANEAMIENTO 16

5. PISCIFACTORÍAS, CETÁREAS Y ZONAS DE ACUICULTURA 27

6. PROBLEMAS ASOCIADOS A LA PESCA Y MARISQUEO EN AGUAS COSTERAS 28

7. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN AGRÍCOLA Y GANADERO 29

8. AGUAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN: MAYOR INTEGRACIÓN CON AGUAS CONTINENTALES 34

9. INVASORAS: IDENTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO Y CONTROL 36

10. OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y MARÍTIMO TERRESTRE-ORDENACIÓN DEL TERRITORIO-URBANISMO 39

11. ABASTECIMIENTO 41

12. GESTIÓN Y COMPATIBILIZACIÓN DE USOS LÚDICOS 47

13. CUESTIONES ECONÓMICAS Y RECUPERACIÓN DE LOS COSTES DEL AGUA 48

14. INUNDACIONES 54

15. SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS 57

16. CONFLICTOS DE COMPETENCIAS, COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES 58

17. PARTICIPACIÓN PÚBLICA 60

18. CAMBIO CLIMÁTICO 61

19. ZONAS PROTEGIDAS, CONSERVACIÓN, ETC. 64

20. OTROS TEMAS 67

1. INTRODUCCIÓN

En relación con el Esquema de Temas Importantes, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha desarrollado un proceso de **participación activa** entre Noviembre de 2007 y Febrero de 2008. Este proceso se ha llevado a cabo a través de dos reuniones de trabajo en cada uno de los seis ámbitos de participación territorial que constituyen la demarcación, en las que se ha trabajado sobre la identificación de los temas importantes y la definición de las grandes líneas de actuación. Asimismo, se han puesto en marcha otras actividades complementarias, como por ejemplo un **foro** virtual, que ha fomentado la comunicación entre los agentes interesados, posibilitando el acceso e intercambio de información, observaciones, aportaciones, etc.

Los objetivos de la participación activa en esta fase han sido, entre otros, involucrar en la preparación del esquema de temas importantes a aquellos agentes que sean susceptibles de ser afectados por el Plan de cuenca; identificar la problemática de la demarcación hidrográfica y plantear posibles alternativas de actuación, a partir de las experiencias, conocimientos y opiniones de las partes interesadas; y permitir que se tengan en cuenta opciones creativas e innovadoras.

La participación activa ha sido simultánea a la elaboración del Esquema Provisional de Temas Importantes. De esta forma, se ha conseguido que los agentes interesados participen desde el comienzo del proceso. Este Esquema Provisional de Temas Importantes estará en consulta pública desde Julio de 2008 a Enero de 2009, y posteriormente se realizará un documento que recoja las alegaciones de dicha consulta y cómo han sido tenidas en cuenta.

El **objeto** del presente documento es **recoger los resultados de la participación activa referente al Esquema de Temas Importantes** y **cómo se han tenido en cuenta en la elaboración del documento**. En las reuniones se han aportado propuestas relativas al programa de medidas, otras administraciones, etc., que serán analizados en las siguientes fases del proceso de planificación.

Es importante destacar que en el **documento final del Plan Hidrológico** se incluirá un informe que contendrá de manera resumida las medidas de información pública y de consulta llevadas a cabo, sus resultados y los cambios consiguientes efectuados en el plan, de acuerdo con lo indicado en los artículos 71 a 20 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El presente documento representa un paso intermedio y previo a dicho informe.

2. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA

A continuación se presentan los resultados de la participación activa relacionados más directamente con el Esquema de Temas Importantes y la forma en que se han tenido en cuenta en la elaboración del *"Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de aguas"*. Han sido aportados por los agentes interesados de la demarcación, a través de las reuniones de trabajo, foro virtual, correo electrónico, etc.

Las aportaciones de los diferentes agentes se han tratado de agrupar por temática, realizándose en conjunto, un total de cien aportaciones relacionadas con el Esquema Provisional de Temas Importantes. De forma general, cabe señalar que la mayor parte de ellas están en la línea de lo establecido por la DMA.

1. ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS

1. La presencia de presas pequeñas (de 2 – 3 metros de altura) causa un importante impacto en la vida fluvial. Serían fácilmente adaptables mediante la colocación de escalas para peces, principalmente para el salmón.

Esta problemática se describe en mayor detalle en la Ficha "I.1. Alteraciones hidromorfológicas en ríos y lagos" del Esquema Provisional de Temas Importantes. Se remarca que uno de los principales problemas es el efecto barrera a la migración de la fauna piscícola. Del mismo modo se hace hincapié en la importancia de evaluar si las obras existentes son franqueables o no, y en especial en las zonas de interés piscícola.

Entre las líneas de actuación propuestas para alcanzar los objetivos planteados y que serán objeto de trabajo en el próximo Programa de Medidas se encuentran las siguientes:

- *Revisión de concesiones.*
- *Adecuación de escalas para peces en azudes.*

2. Deben realizarse estudios específicos antes de actuar para la eliminación de las presas. De esta forma se podrían evitar acciones desafortunadas como inundaciones, cambios de regímenes, destrucción de frezaderos. No hay que olvidar que en ciertas zonas se ha llegado ya a un equilibrio, debido a que algunas de las infraestructuras tienen una antigüedad de más de cien años.

Los criterios de selección de las medidas se basarán en estudios que justifique la aplicación de las mismas de forma sostenible y económicamente viable, principalmente irán encaminadas a la eliminación de las infraestructuras transversales al cauce.

El Esquema Provisional de Temas Importantes en su Ficha "I.1. Alteraciones hidromorfológicas en ríos y lagos" recoge las medidas analizadas en este sentido que irán encaminadas a solucionar estas cuestiones, como por ejemplo:

- *Revisión de concesiones.*
- *Restauración de riberas.*
- *Adecuación de cauces en zona urbana.*

- *Definición de criterios básicos de diseño de las infraestructuras de defensa contra inundaciones.*

- *Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.*

- *Plan de Cauces de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico.*

3. Deben crearse más escalas para el paso de los peces por los azudes, las soluciones del pasado han sido rígidas sobre todo en las ocasiones en las que los caudales fluviales se modifican. Se pueden generar derivaciones de caudales de forma natural o artificial para tal efecto, es decir, utilizar soluciones de ingeniería blanda.

Tras la revisión de las concesiones, se eliminarían las infraestructuras que estén en desuso o caducada su concesión, así como los canales de derivación y modificando aquellas construidas con métodos poco acordes con los objetivos medioambientales que la Directiva Marco del Agua.

Las líneas de actuación que recoge la Ficha "I.1. Alteraciones hidromorfológicas en ríos y lagos" del Esquema Provisional de Temas Importantes, engloba:

- *Escalas para peces en azudes*

- *Recuperación de la morfología natural del cauce*

- *Planes de ordenación de Recursos Naturales*

- *Plan de Cauces*

4. Se han de tener en cuenta todos los cerrados presentes en las áreas de marismas, el efecto que se daba por laminación en las avenidas se ha reducido considerablemente.

Esta aportación se encuentra recogida en la Ficha "I.2. Alteraciones hidromorfológicas en aguas de transición y costeras" del Esquema Provisional de Temas Importantes. Uno de los objetivos que se pretenden alcanzar con la planificación es integración de las políticas sectoriales y coordinación entre las administraciones implicadas. Para ello se ha puesto en marcha una estrategia global de ordenación y gestión del Dominio Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre, para afrontar todas las problemáticas que se dan en estas masas de agua y en sus ecosistemas.

En el apartado de líneas de actuación existen varias alternativas a tal efecto como son:

- *Restauración de riberas.*
- *Creación y restauración de humedales (continentales, de transición y costeros).*
- *Restauración de dunas y marismas costeras.*
- *Restauración y rehabilitación de estuarios y lagunas costeras.*
- *Diseño del Plan de Cauces (que promueve acciones dirigidas en este sentido).*
- *Planes de Ordenación de Recursos Naturales (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y Navarra).*
- *Planes Territoriales del Litoral (Asturias y País Vasco) y Plan de Ordenación del Litoral (Cantabria).*

5. Se considera que en lugar de comenzar justificando la necesidad de las infraestructuras, se debería hacer una breve introducción a las transformaciones que tradicionalmente han sufrido estos medios. A continuación se sugiere un texto: "Tradicionalmente el espacio marítimo ribereño ha sufrido importantes presiones humanas, que han llevado a una transformación y antropización de gran parte de estas zonas. No obstante, y al amparo de la vigente Ley de Costas, la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre debe ser un primer paso hacia una restauración de estos espacios".

El párrafo propuesto ha sido incluido en la Ficha de "I.2 Alteraciones hidromorfológicas en aguas de transición y costeras", concretamente, en el apartado 1 "Caracterización y localización del problema".

6. Se han de revisar las concesiones y promover la recuperación de todas aquellas que se localicen en zonas potencialmente recuperables incluidas aquellas que se encuentren en grave peligro de inundación.

La revisión de concesiones es una de las líneas de actuación de diferentes temas importantes, como por ejemplo "I.1 Alteraciones hidromorfológicas en ríos y lagos", "I.2 Alteraciones hidromorfológicas en aguas de transición y costeras", "I.4 Extracción de agua superficial", "I.5 Extracción de agua subterránea", "I.16 Ocupación del Dominio Público Hidráulico y Marítimo Terrestre", "II.1 Abastecimiento urbano y población dispersa", "III.1 Inundaciones", etc.

Además, en relación con las zonas inundables, el Plan de Cauces conlleva un diagnóstico de todas las áreas fluviales del ámbito territorial de la Confederación tanto a nivel medioambiental como de vulnerabilidad frente a inundaciones y promueve actuaciones prioritarias en cada una de ellas. Este Plan constituye asimismo una de las líneas de actuación del Esquema Provisional de Temas Importantes.

2. USO HIDROELÉCTRICO

7. En época de estiaje el aprovechamiento energético del río se ve limitado, incluso no llegando al caudal de concesión otorgado al titular. ¿Cuál será la línea de actuación en cuanto a las concesiones hidroeléctricas? El agua es uno de los recursos disponibles y energía renovable

Es importante establecer las medidas que permitan un equilibrio entre la explotación de dichas obres y los ecosistemas potencialmente afectados. Se deberán establecer los caudales mínimos que de deben mantener en los cauces, garantizar, si es el caso, el paso de los peces, y determinar la tasa de cambio máxima en los niveles del río cuando se producen aprovechamientos hidroeléctricos, de tal forma que no se produzcan daños aguas abajo, como puede ser la erosión de riberas.

Para avanzar en la sostenibilidad del Plan, resulta imprescindible implementar medidas destinadas a alcanzar una mejora sustancial en la contabilización de volúmenes de agua. En este sentido, se considera prioritaria la actualización de los Registros de Aguas de la Confederación Hidrográfica facilitando con ello la actualización del derecho al uso de aguas públicas, la caracterización de los aprovechamientos existentes y la revisión de las concesiones. Esto permitirá caracterizar, cualitativa y cuantitativamente, las afecciones en cada caso, y en consecuencia aplicar las medidas más razonables desde la perspectiva de la sostenibilidad en el aprovechamiento.

A su vez, en la Ficha I.3 “Uso hidroeléctrico” del Esquema Provisional de Temas Importantes, se plantea un segundo bloque de medidas específicas que deben ir dirigidas a optimizar el funcionamiento de las instalaciones ya existentes, con el objetivo de mitigar los principales impactos ambientales provocados por el aprovechamiento en cualquier época del año.

8. Algunas de las minicentrales instaladas no respetan los caudales ecológicos. Se destaca la ausencia de redes en las minicentrales, apuntando que con una sencilla visita periódica a estas zonas se solucionaría. A su vez son preocupantes los desembalses que causan la muerte de pescadores.

Tal y como se señala en el apartado 6 de la Ficha I.3 “Uso hidroeléctrico”, se están implantando medidas que eviten la pérdida de fauna piscícola por entrada a las minicentrales y que estas respeten los caudales ecológicos (en caso de obligatoriedad).

Dos de las medidas principales que intentan solucionar esta problemática son:

- *Barreras que bloquen el acceso al canal de derivación y zona de turbinas.*

- *Revisión de las actuales concesiones y posible compra de derechos de agua, con el fin de corregir deficiencias en los caudales ecológicos.*

9. Son necesarios estudios para conocer la afección del uso hidroeléctrico en la mortandad de peces.

Esta aportación se encuentra recogida en el Esquema Provisional de Temas Importantes en la Ficha I.3 "Uso hidroeléctrico", si bien no aparece directamente como una medida, se da por su puesto la realización de los estudios necesarios a la hora de aplicar ciertas líneas de actuación. Estas líneas intentarán minimizar o eliminar la mortandad de peces en los canales de derivación y en las turbinas de las centrales hidroeléctricas.

10. Este Plan que ahora comienza a ver la luz debería ser el momento y la oportunidad para generar el marco necesario que permita compatibilizar la actividad hidroeléctrica con el medio ambiente. Se deberían integrar más elementos de análisis (social, económico…) que el estrictamente ecológico.

En el Esquema Provisional de Temas Importantes se refleja que la producción de energía hidroeléctrica tiene un papel relevante en el ámbito de esta Demarcación Hidrográfica. Esto obliga al avance en la sostenibilidad del propio Plan que garantice el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la DMA, y estos a su vez generen un modelo más sostenible en el resto de modelos (social, económico, etc.).

En el apartado I.3 "Uso hidroeléctrico" del EPTI, viene recogida esta compatibilización entre el aprovechamiento hidroeléctrico, el medio ambiente, la sociedad, etc.

11. Minimizar el impacto visual de las centrales hidroeléctricas.

Si existe un buen diseño de las pequeñas presas, estas ocasionan un impacto visual mínimo, teniendo en cuenta que para los casos en que estas estructuras sean ubicadas en áreas de alto valor paisajístico o ambiental ocasionan un deterioro considerable de esos paisajes.

Los grandes embalses modificarán el aspecto natural del área. Esta alteración visual puede mitigarse utilizando materiales nativos para la construcción, ocultando la presa, por ejemplo, con cortinas arbóreas y haciendo una selección adecuada del emplazamiento de la presa.

Cualquier construcción humana en un área natural es una fuente de contaminación visual, pero existen maneras de diseñar esas construcciones de manera de evitar un gran contraste entre lo naturalmente existente y las obras humanas. El uso de los edificios y obras de infraestructura existentes así como el diseño de las obras de forma tradicional con respecto al lugar donde se encuentran y el uso de recursos locales, minimizarán el impacto visual. Es importante destacar que estas medidas pueden tener un efecto positivo en presas pequeñas, pero en los grandes emprendimientos hidroeléctricos los esfuerzos para evitar la distorsión del paisaje son casi en vano.

3. CAUDALES ECOLÓGICOS

12. Se resalta la falta de estudios e informes técnicos en el tema de los caudales ecológicos. Se deben realizar estudios por cada tramo fluvial, se debe ir a regímenes variables que dependerán de numerosos factores (época del año, precipitaciones,…).

Tal y como se recoge en el Esquema Provisional de Temas Importantes, el régimen de caudales ecológicos a incluir en el Plan Hidrológico se establecerá de modo que permita mantener, de forma sostenible, la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos y aguas de transición.

La determinación del régimen de caudales ecológicos se realizará en tres fases:

- Estudios técnicos para determinar los elementos del régimen: evaluación hidrológica y posterior ajuste mediante modelización de hábitat.
- Proceso de concertación, para aquellos casos que condicionen significativamente las asignaciones y reservas del plan hidrológico.
- Proceso de implantación y su seguimiento adaptativo.

Algunas de las medidas recogidas en el Esquema Provisional de Temas Importantes y que permitirán corregir los vacíos existentes a nivel metodológico y técnico, son las citadas a continuación:

- *Cálculo de parámetros que definan el régimen de caudales ecológicos en ríos y aguas de transición.*
- *Desarrollo de modelos de la calidad ecológica de las masas de agua que tengan en cuenta la evolución climática prevista.*
- *Desarrollo de modelos y escenarios hidrológicos, que permitan obtener escenarios fiables en todos los procesos del ciclo hidrológico, incluido eventos extremos, considerando la interacción de los sectores altamente dependientes del recurso.*

13. En el proceso de determinación de caudales ecológicos se deberían tener en cuenta los ciclos reproductivos de las especies.

Al igual que en el punto anterior, en la Ficha "I.7. Caudales ecológicos" se destaca que, para la determinación del régimen de caudales ecológicos, tras la evaluación hidrológica se procederá a un ajuste mediante modelización del hábitat. Estos modelos para el cálculo del régimen ambiental de caudales de ríos y aguas transicionales, que permita compatibilizar los efectos de las detracciones con el mantenimiento de la funcionalidad ecológica de los ecosistemas evidentemente incluyendo sus ciclos reproductivos.

14. La información sobre el nuevo régimen de caudales ecológicos debería ser pública.

Los caudales ecológicos están sujetos a un proceso independiente que incluye en su ejecución un proceso de concertación y seguimiento de la eficacia y cumplimiento de los caudales ecológicos implantados

La implantación del régimen de caudales ecológicos se desarrollará conforme a un proceso de concertación que tendrá en cuenta los usos y demandas actualmente existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas.

Este proceso de concertación podrá incluir diferentes niveles de acción (información, consulta pública y participación activa), que se aplicarán en función de la complejidad del proceso de implantación de caudales ecológicos. Éste deberá ser un proceso transparente, con objetivos claramente definidos de antemano, que facilite la participación de las partes interesadas previamente identificadas y que permita, cuando sea pertinente, la inclusión de las conclusiones obtenidas mediante este proceso, en la toma de decisiones.

El proceso de concertación tendrá como objetivos:

(1) Valorar la integridad hidromorfológica y ambiental del régimen de caudales ecológicos,

(2) Analizar su viabilidad social y económica,

(3) Estudiar la viabilidad técnica de la implantación efectiva del régimen de caudales propuesto

(4) Proponer un plan de seguimiento y gestión adaptativa del régimen de caudales ecológicos que permita conocer el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, e introducir eventuales modificaciones del régimen definido.

Este proceso de concertación e implantación afectará a los usos preexistentes, pero no modificará las condiciones a imponer a los usos posteriores a la aprobación del plan hidrológico.

En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione significativamente las asignaciones y reservas de los planes hidrológicos, el proceso de concertación abarcará los niveles de información, consulta pública y participación activa. En este último nivel se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores que puedan afectar o verse afectados de manera directa por la decisión tomada. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el correspondiente plan hidrológico.

En dicho proceso de concertación se deberá disponer de toda la información relevante cubriendo al menos los siguientes aspectos:

(1) Informes y estudios técnicos que justifiquen el régimen de caudales ecológicos propuesto y los valores ambientales asociados a dichos caudales,

(2) Información sobre la repercusión tanto positiva como negativa desde el punto de vista económico y social de su implantación,

(3) Marco legal de los usos existentes incluyendo las características técnico-administrativas de los mismos.

En el resto de casos, el proceso de implantación del régimen de caudales será objeto de un programa de medidas específico que incluirá la definición del proceso de concertación a realizar, y por tanto será posterior a la propia redacción del Plan. Este proceso de concertación deberá abarcar por lo menos los niveles de información y consulta pública, quedando a criterio del Organismo de cuenca la necesidad de iniciar el nivel de participación activa.

15. Se hace especial hincapié en el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos.

Con el objetivo de realizar una gestión adaptativa, deberá realizarse un seguimiento del régimen de caudales ecológicos, y de su relación con los ecosistemas, que incorpore al proceso los siguientes elementos:

- La mejora del conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y de las especies objetivo identificadas.
- La consideración de la interrelación de los caudales ecológicos con el mantenimiento y estructura de los ecosistemas terrestres asociados.

- Las previsiones del efecto del cambio climático sobre la disponibilidad del agua y su repercusión sobre los ecosistemas acuáticos.
- El seguimiento de la eficacia y grado de cumplimiento de los caudales ecológicos implantados.
- El seguimiento de la explotación sostenible de las masas de agua subterráneas y su interrelación con el mantenimiento de los caudales ecológicos.
- La evolución y nivel de cumplimiento del régimen de crecidas, desde la implantación del régimen de caudales ecológicos.
- La información pública continuada del proceso de seguimiento.

4. SANEAMIENTO

16. Se solicita apoyo de las administraciones superiores a los ayuntamientos en relación a la gestión en la depuración de pequeños núcleos y más concretamente con los lodos generados.

Ambas cuestiones se recogen en Tema Importante "I.8. Saneamiento de las aglomeraciones urbanas y de la población dispersa" que se enmarca dentro del Esquema Provisional de Temas Importantes.

Dentro de las líneas de actuación a nivel local se ha identificado la problemática en la que están insertos los pequeños municipios en relación a sus sistemas de depuración. Generalmente (sobretodo en los pequeños municipios) los ayuntamientos no tienen recursos técnicos ni económicos para gestionar este tipo de actuaciones. Los mantenimientos de EDAR de menos de 2000 ha-eq son muy costosos para los vecinos y la privatización de los servicios como modo de financiación y de obtención de apoyo técnico no es rentable.

El Plan constituye el instrumento adecuado para analizar las necesidades de saneamiento y depuración y estableciendo el número y tipo de infraestructuras necesarias para alcanzar los objetivos ambientales de las masas de agua sometidas a este tipo de presiones fundamentalmente de carácter difuso.

Se prevén el establecimiento de fórmulas y mecanismos de apoyo a las administraciones locales que permitan la operatividad de los controles municipales de las redes de saneamiento.

17. Se propone promover un Reglamento Base de Vertidos al que se sujete cada Ayuntamiento.

A nivel estatal, Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, tiene por objeto el establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y de la legislación específica que les sea de aplicación.

Con el objeto de cubrir y armonizar el vacío normativo existente en algunas entidades locales, las Comunidades Autónomas han elaborado su propia normativa de regulación de las condiciones de vertido al alcantarillado, que servirá de base para que los Ayuntamientos elaboren o modifiquen sus Ordenanzas municipales. De este modo se encuentran:

- Asturias: Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento.

- Cantabria: Ley 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

- Galicia: Ley 8/1993, de 23 de junio, reguladora de la Administración Hidráulica de Galicia.

- País Vasco: Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

- Navarra: Decreto Foral 191\2000, de 22 de mayo, por el que se modifica parcialmente el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10\1988, de saneamiento de las aguas residuales de Navarra.

De este modo se fijan los criterios mínimos a los que deben atenerse todas las ordenanzas municipales, y además establece que las autorizaciones de vertido al alcantarillado deben de recoger los pronunciamientos que sobre vertidos de aguas residuales, determinen las evaluaciones de impacto ambiental o las calificaciones ambientales realizadas por la administración competente. Además, antes de ser concedida la autorización de vertido, el Ayuntamiento debe recabar informe de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio en el caso de actividades sometidas calificación ambiental de competencia municipal.

Las competencias administrativas en materia de vertidos se distribuyen en función del medio receptor del mismo. Así nos encontramos en competencias en los tres ámbitos legislativos españoles.

- La Administración de la Comunidad Autónoma es competente en la gestión de la calidad de aguas interiores y vertidos al mar desde tierra.

- La Administración Municipal, le corresponde autorizar y regular los vertidos al alcantarillado público, a través de Ordenanzas Municipales

- Por último, la Administración General del Estado tienen competencia exclusiva sobre las siguientes materias: legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma.

El órgano competente para vertidos a cauce público es la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Además, también es competente para los vertidos al mar, desde buques y aeronaves, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, perteneciente al Ministerio de Fomento.

Dentro de las líneas de actuación planteadas en el Esquema Provisional de Temas Importantes se destacan:

- *Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos*
- *Elaboración de ordenanzas para la regulación de vertidos a redes de saneamiento*

18. Un tema importante es el estado de las aguas de los arroyos y ríos que llegan a las playas ¿se contemplan medidas en el esquema de temas importantes para que se aplique la depuración de los ríos antes de llegar a las costas?

Tal y como se recoge en el apartado "I.14. Incidencia sobre el estado de las masas de transición y costeras debido a las presiones ejercidas en los ríos y sus cuencas" del Esquema Provisional de Temas Importantes, la modificación del cauce de los ríos que drenan al mar y la alteración del flujo del agua en dichos ríos influyen en los ecosistemas marinos y ambientes asociados, debido a que estas alteraciones suponen una reducción o incremento de nutrientes, sedimentos y contaminantes, así como el movimiento y circulación de las aguas.

Teniendo en cuenta el grado de conocimiento en esta materia, con la planificación hidrológica se pretende generar instrumentos que permitan obtener la información básica para la correcta gestión del agua. En el Plan se llevarán a cabo actuaciones específicas para caracterizar y dimensionar estos efectos.

A continuación se proponen algunas de ellas cuya viabilidad y oportunidad deberá ser analizada convenientemente a la hora de formular el Programa de Medidas del Plan:

- *Mejora en la monitorización de la calidad de las aguas que afluyen al estuario y ampliación de los protocolos ordinarios de monitorización de calidad ambiental y de las aguas a todas las cuencas vertientes en estuarios contemplados en la DMA.*
- *Identificación y trazabilidad de los contaminantes que afluyen a los estuarios mediante muestreo sistemático.*
- *Determinación de tasas de bioacumulación de contaminantes a lo largo de la cuenca hasta su ingreso en los estuarios.*

19. Partiendo de la base de que se puede maximizar la eficiencia de las depuradoras mediante la incorporación de redes separativas, de cara a la planificación, se sugiere la importancia de que la propia Dirección General de Obras Hidráulicas condicione a los Ayuntamientos con las dotaciones económicas para invertir en

saneamiento, permitiendo de este modo incorporar redes separativas, mejorar las redes de saneamiento, evitar fugas, depurar agua de lluvia o de mar, etc. Si los ayuntamientos no están informados de los medios que brinda el gobierno, hay que lanzar campañas de sensibilización con el PHC.

Tal y como se recoge en el Esquema Provisional de Temas Importantes, el saneamiento y la depuración de las aguas tras su uso, es un enfoque ambientalmente sostenible y de carácter prioritario, con el fin de garantizar una buena calidad fisicoquímica de las masas de agua. Por este motivo, todos los esfuerzos del Plan Nacional de Calidad de las Aguas van dirigidos a este fin y es necesario concienciar a los Entes de Gestión de la concepción global de la problemática del alcantarillado, de los colectores y de la depuración.

La incorporación de las redes separativas al sistema de saneamiento se encuentra recogida explícitamente en el apartado 6 Líneas de actuación dentro del bloque de Instrucción de Planificación Hidrológica y entre otras se destacan las siguientes:

- *Establecimiento de redes separativas para pluviales.*
- *Adecuación de las redes de saneamiento.*

La ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas exigirá un importante esfuerzo inversor a todas las Administraciones involucradas en el mismo, para lo cual se define un modelo económico financiero del Plan y de los mecanismos de recuperación de los costes de los servicios asociados.

20. Se solicita que se promueva una mayor información, quizás a través de la red, de la calidad de las aguas, más concretamente referente a la calidad de las aguas a la salida de las depuradoras y en las playas.

La Red ICA (Red Integrada de Calidad de las Aguas) es una de las herramientas más importantes usadas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para analizar el estado de las aguas superficiales que discurren por sus cuencas. Dar cumplimiento a las distintas directivas europeas y a sus correspondientes trasposiciones en materia de calidad de las aguas superficiales, así como garantizar los objetivos de calidad de las aguas establecidos en el Plan Hidrológico son sus principales fines.

El control de la calidad de las aguas se realiza con un doble objeto, uno más inmediato, asegurar que dichas aguas sean aptas para los usos a que se destinen, y otro más a largo plazo, alcanzar un buen estado ecológico y químico en todas ellas, independientemente de los usos a que se destinen.

La Red ICA engloba los siguientes controles:

- Red de Control de Aguas Prepotables
- Red de Control de Zonas Piscícolas
- Red de Control de Calidad General
- Red de Control de Zonas de Baño
- Red de Control de Sustancias Peligrosas

El Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas (SAICA) tiene como objetivo principal proporcionar información sobre la calidad de las aguas superficiales continentales y optimizar su utilización y disponibilidad controlando en tiempo real tramos de especial interés para su vigilancia (abastecimientos) y para la detección de vertidos.

El SAICA dispone en el ámbito de la CHN de 29 Estaciones Automáticas de Alerta (EAA), además de un Centro de Proceso de Cuenca, ubicado en la ciudad de Oviedo.

Estas estaciones miden de continuo distintos parámetros de calidad del agua, como por ejemplo la temperatura, el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto o la turbidez. Asimismo, miden el nivel de las aguas en el cauce. Sus Sistemas de Adquisición de Datos procesan la información que reciben de cada uno de los analizadores y transmiten cada quince minutos, vía satélite al Centro de Proceso de Cuenca, los datos acumulados, además de todas las alarmas que se produzcan en situaciones como:

- Superación de los límites de alarma establecidos en los parámetros a analizar.
- Fallos en las instalaciones.
- Eventos de seguridad, intrusismo o inundación de la estación.

El SAICA supone un gran avance cualitativo en la vigilancia de calidad de las aguas, ya que, al permitir la gestión informatizada de los datos, facilita la realización de informes, de diagnósticos de calidad y la evaluación de las aguas para sus diferentes usos.

Mediante la página Web de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se tiene acceso a la información sobre las Estaciones Automáticas de Alerta, su Localización, el Resumen de niveles en cada una de ellas, la posibilidad de realizar la Consulta de datos históricos y el Resumen general de niveles.

Evidentemente, desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se está trabajando para mejorar este servicio.

Por otro lado, la Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño, se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español mediante Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Establece, entre otros, criterios sanitarios de calidad para las aguas de baño basados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en motivos de salud pública. Igualmente es objeto de esta normativa conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, por lo que la detección de incumplimientos de los criterios de calidad obligan a la investigación de la causa subyacente y a la aplicación de medidas correctoras y preventivas para la protección de la salud de los bañistas, por parte de la administración competente.

21. Para el tratamiento de las aguas residuales en las zonas rurales, pequeñas aldeas. ¿No sería factible actuar con la tecnología más local, por ejemplo filtros verdes?

Para la depuración de los núcleos menores de 2.000 habitantes equivalentes la Directiva exige realizar un "tratamiento adecuado" para el cumplimiento de otras Directivas o de objetivos fijados en el medio receptor. Este es uno de los retos que afrontará directamente el Plan Nacional de Calidad de las Aguas y por lo tanto uno de los objetivos que se pretenden alcanzar con la planificación.

Entre las líneas de actuación planteadas en el Esquema Provisional de Temas Importantes se proponen:

- *Abordar la depuración de los núcleos menores de 2000 habitantes equivalentes, identificando los que puedan verter a masas de agua en buen estado.*

- *Diseñar soluciones económicamente sostenibles para reducir o eliminar este tipo de presión difusa sobre las masas de agua.*

22. Se detectan problemas como la poca sensibilidad en la población por el saneamiento; vigilancia insuficiente por parte de Administración; problemas en el saneamiento.

Evidentemente, se identifican dos de las causas de los principales problemas para dar cumplimiento a los objetivos de calidad de las aguas en relación con el saneamiento. Hay que concienciar a la ciudadanía que mantener una depuradora, o un simple imbornal, es una apuesta de futuro por un desarrollo sostenible igual que proteger directamente un río, una laguna o una playa. Cada vez más los ciudadanos exigen políticas activas que aborden el problema de la contaminación de las aguas globalmente, estudiando y planteando estrategias realistas con los medios humanos, técnicos y financieros disponibles.

En el Esquema Provisional de Temas Importantes, en la Ficha "I.8. Saneamiento de las aglomeraciones urbanas y de la población dispersa" se proponen las siguientes líneas de actuación en relación a estos temas:

- *Campañas de concienciación en uso urbano*
- *Identificación y control de vertederos*
- *Actualización del censo de vertidos, regularización y revisión de las condiciones de las autorizaciones de vertido*
- *Actualización de los registros autonómicos de vertidos tierra-mar, regularización de las autorizaciones y revisión de las condiciones de dichas autorizaciones*
- *Incremento del personal para el control de vertidos*

23. Si bien en los grandes Municipios existen los suficientes recursos tanto humanos como técnicos, en los más pequeños la situación cambia totalmente.

La insuficiencia de medios humanos y materiales para la correcta explotación y mantenimiento de las plantas depuradoras y el escaso control y seguimiento del funcionamiento de las instalaciones por parte de las autoridades competentes, es uno de los aspectos identificados ya para la elaboración del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.

Los avances llevados a cabo en este tema, se reflejan en que cada vez son más las Corporaciones Locales que cuentan con medios técnicos y humanos, y sobre todo que se han dotado de Ordenanzas municipales que regulan el vertido al alcantarillado

Sin embargo, la gestión, explotación y mantenimiento actuales de las infraestructuras son la clave para asegurar todo el esfuerzo conseguido. Se cuenta actualmente con un importante parque de infraestructuras de saneamiento y depuración, que necesitan de inversiones permanentes para asegurar su eficacia. Por ello, este reto sí que puede tener consecuencias funestas para el medio ambiente si no se toman medidas adecuadas.

Por ello, en el PNCA se exige la necesaria y adecuada gestión de los servicios de alcantarillado, saneamiento y depuración, como requisito imprescindible para contar con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la financiación de actuaciones.

Dentro de las líneas de actuación propuestas en el Anexo B del Esquema Provisional de Temas Importantes en relación a este tema son:

- *Los Ayuntamientos deben contar con personal técnico adecuado para controlar y gestionar las redes de saneamiento que realicen los informes oportunos sobre el estado de la red: revisión de acometidas, extensión de redes pluviales, colocación de tanques de tormenta donde fuera preciso, etc.*

- *Todas las obras nuevas deben contar con el visto bueno de este personal antes de ser recibidas por el Ayuntamiento.*

24. En el tema de saneamiento existen dos problemas destacables, en primer lugar la existencia de pocas depuradoras y en segundo, que las ya instaladas su sistema funciona de forma errónea o directamente no funcionan.

Uno de los aspectos ya identificados cuando se abordó la redacción del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración, fue la insuficiencia de medios humanos y materiales para la correcta explotación y mantenimiento de las plantas depuradoras y el escaso control y seguimiento del funcionamiento de las instalaciones por parte de las autoridades competentes. En base a los datos aportados por el estudio para el Plan, en la Ficha "I.8. Saneamiento de las aglomeraciones urbanas y de la población dispersa" se representan las aglomeraciones urbanas (con más de 2000 h-e), diferenciando las que presentan inconformidad analítica respecto a algún parámetro (DBO, DQO o sólidos en suspensión ya que se considera en la información consultada que la carga contaminante por nitrógeno y fósforo no es relevante) de las que tienen conformidad analítica y de las que aún no se dispone de datos.

En el conjunto de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico se sitúan 64 aglomeraciones urbanas, de las que una de ellas (Gijón Este) presenta disconformidad analítica respecto a algún parámetro, si bien ya se han iniciado los trámites para resolverlo, 27 son conformes y 36 sin definir. De este último grupo hay 9 aglomeraciones sin EDAR asociada.

25. Algunas EDAR's tratan aguas residuales de polígonos industriales que no poseen depuradoras propias y que vierten directamente en los sistemas de alcantarillado público (por ejemplo en pequeñas fábricas de pinturas).

Los vertidos residuales a los sistemas de saneamiento de aguas residuales urbanas son procedentes de los usos urbanos y los correspondientes a la actividad industrial asociados al mismo. Estos vertidos son responsables de una parte considerable de la carga contaminante a la que se enfrentan las estaciones depuradoras.

En aquellos casos que se produce un control insuficiente de vertidos y residuos tóxicos, así como la falta de instalaciones de depuración de vertidos en la industria y/o polígonos industriales, hace imposible plantearse el correcto funcionamiento de las EDAR's asociadas.

En consecuencia se plantea un control de vertidos industriales como un aspecto más dentro de los controles establecidos para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones de depuración existentes. Se trata de una tarea continua que exigirá la dotación de medios personales y económicos.

De este modo, se propone llevar a cabo un Control de vertidos industriales de manera conjunta entre las distintas administraciones competentes en el tema de vertidos a colector (Comunidades Autónomas, Confederación Hidrográfica, Ayuntamientos, etc.) y debe trabajarse bajo un enfoque de previsión y concienciación de las industrias.

26. La población de la Demarcación está distribuida de forma dispersa. Este es un valor estructural a tener en cuenta para entender nuestra problemática. En los núcleos de poblaciones pequeños no se le puede colocar una EDAR a cada uno. En este sentido, una de las soluciones para la adecuación de los tratamientos de las aguas residuales es la creación de pequeñas balsas de decantación.

Es un problema importante y destacable en esta Demarcación y así se plasma en el contenido del Esquema Provisional de Temas Importantes. Además del vertido procedente del saneamiento asociado a las aglomeraciones urbanas, que constituyen una presión puntual en el medio, en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico todavía existe población dispersa o de pequeños núcleos con un déficit de saneamiento o un saneamiento inadecuado que constituye una contaminación difusa sobre el medio y un tema a caracterizar y a abordar en el Plan Hidrológico de Cuenca.

Atendiendo a los criterios planteados en el PNCA y a las necesidades detectadas, se plantearon una serie de prioridades de las cuales destacamos las siguientes relacionadas con este tema:

- *Potenciar la depuración de aglomeraciones urbanas en zonas de la Red Natura 2000 de núcleos menores de 2.000 habitantes equivalentes y, prioritariamente, en los Parques Nacionales y en las incluidas en espacios de especial protección, para cumplir los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua*

- *Apoyar las acciones preferentes en aquellas zonas rurales con capacidad económica menor y que necesitan de apoyos externos para implantar la cultura de la gestión del ciclo integral del agua.*

27. Se deben aplicar inmediatamente en los planes de saneamiento el uso de aguas reutilizables depuradas para uso urbano e industrial.

Uno de los objetivos fundamentales del Programa AGUA, es el incorporar en la mayor medida posible la Reutilización de Aguas Depuradas para incrementar las disponibilidades de recursos hídricos.

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1620/2007 que establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. En él se establece que las aguas regeneradas podrán utilizarse para usos urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y ambientales. En todos los casos el Organismo de cuenca solicitará a las autoridades sanitarias un informe que tendrá carácter vinculante.

El agua residual, antes de su reutilización, ha de someterse a un tratamiento de regeneración para alcanzar los niveles de calidad sanitaria y ambiental necesarios para el uso que se destina.

Por otro lado, se prohíben determinados usos que presentan riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Así, se prohíbe la reutilización de aguas para el consumo humano –salvo declaración de catástrofe en las que la autoridad sanitaria especificará los niveles de calidad exigidos a dichas aguas y los usos–; para los usos propios de la industria alimentaria; para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares; para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura; para el uso recreativo como agua de baño; para el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos; para el uso en fuentes y laminas ornamentales en espacios públicos o interiores de edificios públicos, y para cualquier otro uso que la autoridad sanitaria considere riesgo para la salud de las personas o un perjuicio par el medio ambiente, cualquiera que sea el momento en el que se aprecie dicho riesgo o perjuicio.

28. En el mapa de conformidad respecto a la Directiva 91/271/CE, figuran como no conformes las EDAR de Santesteban y la de Oitz-Donamaria. La EDAR de Oitz-Donamaria es de menos de 2000 habitantes equivalentes y por tanto no está afectada por dicha directiva.

Han sido analizados los datos facilitados, y en consecuencia se eliminó de la tabla/figura la depuradora de Oitz-Donamaria dado que su población equivalente es menor a los 2.000 habitantes. Sin embargo si se ve afectada por la Directiva 91/271/CEE, para estos casos de aglomeraciones urbanas menores de 2.000 hab-eq y se viertan en aguas dulces o estuarios, como es el caso de Oitz-Donamaria, las aguas residuales han de ser sometidas a un tratamiento adecuado. Según esta Directiva se entiende por tratamiento adecuado cualquier proceso y/o sistema de eliminación en virtud del cual, después del vertido de dichas aguas, las aguas

receptoras cumplan los objetivos de calidad pertinentes y las disposiciones pertinentes de la presente y de las demás Directivas comunitarias.

Por otro lado, según los datos facilitados de la EDAR de Santesteban es conforme a la Directiva, así fue remitido al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y en consecuencia en los datos más recientes facilitados han sido modificados.

29. Se deben controlar los informes emitidos en la tramitación de licencias para la expansión urbanística. Al aumentar el número de viviendas no lo hace el de estaciones de depuración, con lo cual éstas se saturan rebasando los límites de aporte.

El artículo 25 de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, establece lo siguiente:

"Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, **ordenación del territorio y urbanismo**, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno.

Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas".

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico está cumpliendo con la legislación y por tanto, realizado el control que propone esta aportación.

5. PISCIFACTORÍAS, CETÁREAS Y ZONAS DE ACUICULTURA

30. Piscifactorías, cetáreas y zonas de acuicultura: Dentro de los problemas que genera se debería incluir la desaparición de hábitats y comunidades animales y vegetales de esas zonas ante la ocupación del terreno por los cultivos marinos.

Este párrafo propuesto ha sido incluido en el apartado 3 “Efectos sobre las masas de agua” de la Ficha sobre piscifactorías, cetáreas y zonas de acuicultura.

31. Se ha realizado revisión de la información aportada en los documentos iniciales sobre piscifactorías y se aporta información sobre una piscifactoría ya cerrada y sin permiso en el listado que fue enviado previamente. Además se cree de la existencia de otra piscifactoría que actualmente está clausurada en el ámbito territorial de Asturias Galicia.

Con los datos aportados por Atrugal, y tras verificar la situación de baja de las empresas mencionadas se procedió a la modificación de los datos de la capa de piscifactorías tal y como se recoge actualmente en el Esquema Provisional de Temas Importantes.

6. PROBLEMAS ASOCIADOS A LA PESCA Y MARISQUEO EN AGUAS COSTERAS

32. Se hace mención en varios apartados al incremento de la vigilancia sobre el Dominio Público Marítimo-terrestre y su Servidumbre de protección. Es evidente que un incremento de la vigilancia del dominio costero por parte de las administraciones implicadas sería una estrategia adecuada, no obstante, según nuestra opinión el incremento de la vigilancia de la Servidumbre de Protección tendría ligera eficacia o guarda escasa relación con los problemas que se plantean.

En el apartado 6 “Líneas de actuación” de la Ficha sobre Pesca y Marisqueo se cita la medida de la Instrucción de Planificación Hidrológica “Vigilancia sobre el Dominio Público Marítimo-terrestre y su Servidumbre de protección”. En la fase del Programa de Medidas se analizarán más en detalle las medidas.

7. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN AGRÍCOLA Y GANADERO

33. Deberían establecerse mecanismos ágiles de control de los vertidos de origen ganadero e implantar estaciones de tratamiento de los mismos.

Los principales efectos medioambientales ligados a las explotaciones ganaderas intensivas están relacionados con la producción de estiércoles y purines, debido a que, si bien son productos que inicialmente no contienen compuestos de alto riesgo medioambiental, la producción y acumulación de los mismos en grandes volúmenes puede plantear grandes problemas de gestión. La actividad ganadera presenta una fuerte concentración espacial en esta demarcación, y los impactos medioambientales más importantes que pueden derivarse de la utilización de purines y estiércoles son la contaminación de acuíferos y la eutrofización de las aguas superficiales.

El vertido directo a cauces está totalmente prohibido y penalizado por la legislación vigente en materia de aguas y de protección medioambiental. En el caso de producirse, han de ser denunciadas, perseguidas y sancionadas.

Referente a la implantación de sistemas de tratamiento de purines, el nuevo Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Efecto Invernadero incluye un paquete de medidas concretas y urgentes que afectan directamente a las explotaciones ganaderas. En concreto tiene previsto establecer un plan que fomente y subvencione la aplicación de los procesos técnicos de biodigestión de purines. Estas medidas, que de mantenerse el calendario previsto, se pondrían en marcha a partir del año 2008, incluyen dos líneas esenciales:

- Ayudas para instalaciones individuales en explotaciones ganaderas intensivas
- Y ayudas para instalaciones de tratamiento centralizado.

Hay que tener presente que cuando se propone un sistema de tratamiento de purines, el procedimiento no sólo debe ser eficaz desde el punto de vista medioambiental sino que además tiene que estar dentro de unos costes asumibles para el mantenimiento competitivo de la actividad económica que lo genera.

Actualmente no existe ninguna solución tecnológica idónea para el problema del tratamiento de los purines. Aunque tecnológicamente es posible reducir las cargas hasta cumplir la normativa de vertido a cauce, sin embargo los costes asociados a estas tecnologías no son fácilmente asumibles. A su vez, muchos de los procesos tecnológicos a lo largo del tiempo tienden a ir disminuyendo en su rendimiento, y en paralelo, incrementando los costes asociados.

En la Ficha "I.12 Contaminación de origen agrícola y ganadero" del Esquema Provisional de Temas Importantes, se proponen diferentes líneas y alternativas de actuación en relación a este problema, entre las que se destacan las siguientes:

- *Diseñar soluciones económicamente sostenibles para reducir o eliminar este tipo de presión difusa sobre las masas de agua, mediante la el desarrollo reglamentario de directrices y criterios técnicos en el empleo de pesticidas y fertilizantes, la gestión de los residuos ganaderos y en la reutilización de los purines, atendiendo a las particularidades orográficas de cada territorio.*

- *La adecuación del régimen sancionador de vertidos mediante las oportunas modificaciones normativas.*

- *La mejora y modernización de las instalaciones ganaderas existentes.*

- *Intensificar el control de los vertidos y vertederos con medios técnicos, humanos y dotaciones económicas suficientes.*

- *El desarrollo de campañas de concienciación y elaboración, ampliación y difusión de los Códigos de Buenas Prácticas en los sectores agrícola y ganadero.*

34. La mayor parte de las explotaciones ganaderas realizan su vertido a fosas sépticas lo que causa contaminación de acuíferos, es una cuestión a considerar desde diferentes ámbitos.

Según el Código de Buenas Prácticas Agrarias, se estipula que en el diseño de la fosa séptica se tenga en cuenta que el volumen de almacenaje debería permitir contener, como mínimo, los efluentes del ganado producidos durante el periodo en que su distribución no es aconsejable, y si el foso no está cubierto, las aguas de lluvia y aguas sucias ocasionales.

Evidentemente, las obras de almacenaje deben ser estancas, de forma que se eviten los vertidos directos en el medio natural. El lugar de implantación y el tipo de almacenaje dependen de numerosos factores (relieve del terreno, naturaleza del suelo, condiciones climáticas, etc.). De cualquier manera, el emplazamiento estará alejado como mínimo 25 metros de los cursos de agua (ríos, riachuelos y barrancos).

En el Esquema Provisional de Temas Importantes, la ficha que desarrolla el tema importante "I.12 Contaminación por vertidos agrícolas y ganaderos" describe la problemática relacionada con la actividad ganadera.

35. En las zonas costeras, los purines líquidos constituyen un problema importante. Se plantea estudiar la instalación de tratamiento de purines líquidos. Desde la agenda 21 se ha planteado la implantación de esta técnica.

En la página Web de la Agenda 21 de Llanes está disponible el Estudio base para la Gestión de los Recursos Ganaderos en el Concejo de Llanes (http://www.agenda21llanes.com/Estudiopurines1.pdf y http://www.agenda21llanes.com/Estudiopurines2.pdf)

36. En época seca, los ganaderos no se deshacen de los purines y al llover son arrastrados dando un olor intenso a las aguas. Con las riadas no se puede beber agua del grifo. Además hay cloraminas unos días después, porque se clora el agua de las depuradoras debido precisamente al problema de los purines.

Como ya se ha mencionado anteriormente, los dispositivos de almacenamiento de purines deberían estar adecuados de tal manera que dispongan de cobertura o en caso contrario sean capaces de retener las aguas de escorrentía en su interior evitando así la contaminación de las aguas superficiales por vertidos indirectos. En el Esquema Provisional de Temas Importantes, la ficha que desarrolla el tema importante "I.12 Contaminación por vertidos agrícolas y ganaderos" describe la problemática relacionada con la actividad ganadera.

37. En nuestros días se está produciendo un aumento de solicitudes de explotaciones para la ganadería de tipo intensivo, generándose numerosos problemas ambientales por el desconocimiento de una correcta gestión de esta temática de usos. Los problemas aparecen debido al gran consumo de elevadas cantidades de agua para diferentes usos como el propio consumo de los animales, las tareas de limpieza, el tratamiento de los residuos… Desde esta asociación se reclama una regulación mucho más transparente y exigente en la normativa de este tema.

Evidentemente, el desarrollo tanto urbano como agrícola o industrial ejerce una importante presión sobre los recursos hídricos en términos de demanda.

En el estudio de la demanda se incluye la previsión para garantizar el abastecimiento de agua asociado a los diferentes usos, teniendo en cuenta la posibilidad de mantener y conservar actividades con tendencias de crecimiento bajas o negativas así como la creación de nuevas actividades.

38. Debería aprobarse un Reglamento que regulase el límite por hectárea, la época del año en que puede echarse el purín, teniendo en cuenta la pluviosidad,etc.

En relación a la utilización de los purines como fertilizantes, la Directiva 91/676/CEE, transpuesta a la legislación española por el Real Decreto 261/1996, tiene por objeto proteger la calidad de las aguas frente a la contaminación difusa derivada del uso de los fertilizantes y estiércoles utilizados en el marco de las actividades agrícolas. Los puntos clave para la correcta gestión agrícola de los purines son:

1. El tipo de cultivo receptor, sus necesidades, capacidades extractivas y el ciclo vegetativo
2. La dosis de aplicación
3. El momento de aplicación
4. Los instrumentos de gestión

A su vez, el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008 – 2015, en su versión preliminar, presenta propuestas se refieren a la gestión ecológica y agronómica de los purines. Son las siguientes:

1. Medidas preventivas para la gestión de los purines destinadas a minimizar la cantidad de agua y/o nitrógeno del purín generado en las granjas ganaderas.
2. Medidas para garantizar la aplicación óptima del purín en los cultivos, que evitarán la saturación de las zonas agrícolas de nutrientes. En esta línea se propone la puesta en marcha de una serie de medidas técnicas y de gestión basadas en:
    - Incrementar la capacidad y mejorar la calidad y las condiciones de las balsas de almacenamiento de purines.
    - Realizar una planificación de la fertilización de una forma integral, en la que se contemple el equilibrio entre el abonado mineral y orgánico en base a la demanda de los cultivos.
    - Incentivar la creación de entidades para la gestión de los purines.
    - Desarrollar un servicio de asesoramiento a los agricultores y ganaderos (prevista su creación y financiación en el Reglamento 1782/2003) que contemple, entre sus actividades, la gestión de purines incluidos los tratamientos y su aplicación al suelo.
    - Desarrollar instrumentos para ligar la elección de los tratamientos, si son necesarios, al estudio previo de las fuentes de nutrientes, su cuantía y el equilibrio entre esas disponibilidades y la demanda potencial para la fertilización de los cultivos

Una de las líneas de actuación de la ficha "I.12 Contaminación por vertidos agrícolas y ganaderos" del Esquema Provisional de Temas Importantes, es "diseñar soluciones económicamente sostenibles para reducir o eliminar este tipo de presión difusa sobre las masas de agua, mediante el desarrollo reglamentario de directrices y criterios técnicos en la gestión de los residuos ganaderos y en la reutilización de los purines, atendiendo a las particularidades orográficas de cada territorio.

39. ¿Hasta qué punto están las cuencas afectadas por la contaminación difusa por purines?

Frente a la contaminación procedente de los purines ganaderos urge regular la instalación de actividades ganaderas, especialmente, en zonas de mayor densidad y que se muestren más vulnerables realizando una correcta gestión de los residuos generados.

En la Demarcación del Cantábrico hasta la fecha no existen zonas vulnerables, sin embargo para evitar llegar a esta situación se deberá tomar medidas que controlen aquellas zonas que actualmente presenten mayor presión por vertidos agrícolas. Como es el caso de los vertidos generados en las explotaciones de ganado de leche en el nor-occidente asturiano.

Algunas de las líneas generales seleccionadas en relación a este Tema Importante son las siguientes:

- *Fomento de la reducción de las dosis de fertilizantes.*
- *Fomento del empleo de fertilizantes menos contaminantes.*
- *Tratamiento de purines.*
- *Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos.*
- *Elaboración de ordenanzas para la regulación de vertidos a redes de saneamiento.*

8. AGUAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN: MAYOR INTEGRACIÓN CON AGUAS CONTINENTALES

40. La documentación presentada en la primera reunión de participación pública está muy enfocada a aguas continentales, apreciándose una falta de información sobre las aguas de transición y costeras. En el Plan se debe incluir información referente a las mismas, y de forma especial, en cuestiones en que la problemática es diferente como en alteraciones hidromorfológicas, vertidos, biodiversidad, especies. Desde las propias Demarcaciones de Costas se está trabajando en esta dirección.

Los documentos de trabajo presentados en las primeras jornadas de participación pública fueron la base para el desarrollo de los contenidos del Esquema Provisional de Temas Importantes y posteriormente el nuevo Plan Hidrológico de Cuenca.

Dichos trabajos, desarrollados por la Confederación Hidrográfica, parten de los datos que disponía en ese momento, y dado que las aguas de transición y costeras son competencia de las CCAA, no se disponía en ese momento de la información suficiente para poder desarrollar con mayor detalle los contenidos en relación a esa materia.

41. Es importante incorporar en el apartado de gestión de masas de agua no sólo las continentales, sino también las costeras y de transición. Para ello no sólo tienen competencias las Comunidades Autónomas sino también las Demarcaciones de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

La integración de las aguas continentales y de transición y costeras a todos los niveles es un reto importante para las diferentes administraciones competentes. Para ello, el Comité de Autoridades Competentes es fundamental. Se está avanzando en el intercambio de información y la integración de la misma.

De este modo, en el Esquema Provisional de Temas Importantes se remarca que uno de los objetivos que se pretende alcanzar con la planificación es la integración de las políticas sectoriales y la coordinación entre las administraciones implicadas.

La nueva política del agua, obliga a tener en cuenta numerosos parámetros, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha puesto en marcha una estrategia global de ordenación y gestión del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre, para afrontar todas las problemáticas que se dan en estas masas de agua y en sus ecosistemas asociados.

42. En la documentación de trabajo de las reuniones de participación pública se observa descompensación entre las líneas de actuación de aguas continentales frente a las costeras.

En línea con la aclaración del punto anterior, destacar que en el Esquema Provisional de Temas Importantes se recogen medidas básicas y complementarias tanto para aguas continentales como para aguas de transición y costeras.

43. Se consideran importantes las presiones que ejercen de las aguas continentales (ríos, arroyos, etc.) que llegan a la zona costera. ¿Se han contemplado medidas en el Estudio de Temas Importantes en relación a la depuración de este tipo de aguas antes de llegar a las aguas de transición y costeras?

El Esquema Provisional de Temas Importantes expone esta idea como tema importante en la Ficha " I.14. Incidencia sobre el estado de las masas de transición y costeras debido a las presiones ejercidas en los ríos y sus cuencas".

En la ficha del Anexo B se desarrollo este tema importante, incluyendo líneas de actuación como son la actualización de los registros autonómicos de vertidos tierra-mar, la regularización de las autorizaciones y revisión de las condiciones de dichas autorizaciones, la elaboración de ordenanzas municipales que regulen la limpieza de canales, golas y otros elementos que desembocan al mar en DPMT, etc.

9. INVASORAS: IDENTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO Y CONTROL

44. Se destacan las especies invasoras como tema importante en la demarcación, debido principalmente a la relación que tienen estas especies con los ecosistemas acuáticos y sus posteriores modificaciones en ellos.

El EPTI recoge un tema importante en relación con esta cuestión: " I.15 Presencia de especies alóctonas e invasoras". Señala que las especies invasoras compiten favorablemente con las especies autóctonas por el espacio y los recursos, y acaban desplazándolas o incluso eliminándolas. Producen graves alteraciones en los ecosistemas en los que se introducen cambios en su estructura, composición y funcionamiento. Constituye una de las mayores amenazas para la biodiversidad en las masas de agua. Otro efecto negativo que pueden provocar es una progresiva erosión y destrucción de la ribera natural.

El Esquema Provisional de Temas Importantes incluye líneas de actuación al respecto, entre las que pueden destacarse las siguientes:

- *Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos.*
- *Control de especies invasoras en medio marino y costero.*
- *Elaboración de directrices para la eliminación de especies invasoras.*
- *Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.*
- *Plan de Cauces.*

45. Desde la Administración competente se debería fomentar la elaboración de un catálogo específico de especies invasoras y su problemática asociada

La Ficha I.15 del EPTI, referente a especies alóctonas e invasoras, recoge un listado de especies invasoras relacionadas con los ambientes acuáticos, e incluye líneas de actuación y alternativas, que van en gran medida dirigidas a aumentar el conocimiento y control de las mismas.

46. Se hace hincapié en relación a la importancia en el control de especies invasoras (p.ej. la desaparición de la anguila y la extensión de las carpas).

Las líneas de actuación y alternativas que recoge la Ficha I.15 del EPTI, referente a especies alóctonas e invasoras, van dirigidas a la prevención, control y erradicación de las especies invasoras.

En este sentido, se incluyen líneas de actuación como por ejemplo:

- Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos.

- Control de especies invasoras en medio marino y costero.

- Diseño de programas periódicos de control y eliminación para las especies identificadas como invasoras, así como programas de vigilancia y muestreo periódicos en las áreas más sensibles, priorizando las actuaciones sobre los ecosistemas más vulnerables o de mayor valor ambiental, y especialmente sobre las zonas protegidas.

- Desarrollo de regulaciones legislativas e institucionales en el ámbito de la Demarcación, sobre las especies alóctonas e invasoras, que incluyen cuestiones de tipo jurídico, técnico y administrativo, así como protocolos de intervención.

- Desarrollo de un esquema de trabajo que incorpore necesariamente la coordinación administrativa entre la Demarcación y el resto de Administraciones que ejecutan acciones de eliminación de especies invasoras.

47. Es evidente que es necesaria una clasificación de las especies invasoras, al uso de la corriente científica actual, en función de la capacidad invasiva y dañina de estas especies. No obstante, no se considera adecuada una única caracterización, o especial incidencia, sobre aquellas objeto de plantaciones madereras, cuando existen otro buen número de plantas o animales capaces de crear gravísimos problemas, en hábitats dulceacuícolas, salobres o halófilos.

Esta aportación ha sido tenida en cuenta de la siguiente forma en la ficha I.15 del EPTI, referente a la presencia de especies alóctonas e invasoras, presentando lo siguiente: “Un aspecto clave es establecer cuáles son las especies que deben considerarse netamente invasoras, y a las que, por tanto, han de aplicarse medidas de control y erradicación. En este sentido, cabría plantearse la conveniencia de establecer una categoría diferenciada con las especies habituales en plantaciones forestales que afectan a riberas fluviales o al litoral, como son el eucalipto (*Eucaliptus globulus*), los pinos (*Pinus sp. pl.*) o los chopos (*Populus sp. pl*) que deberían recibir un tratamiento diferente”.

Además, esta ficha muestra un catálogo restringido de especies invasoras relacionadas con los ambientes acuáticos, apuntando que "sin embargo, se evidencia la necesidad de clasificar las anteriores especies, en función de la capacidad invasiva y dañina de las mismas, ya que existe un buen número de plantas o animales capaces de crear gravísimos problemas en los hábitats dulceacuícolas, salobres o halófilos".

48. En determinadas situaciones en que las plantaciones de eucalipto llegan al borde del río, se ha talado una plantación y los restos han ido al río. Se plantea establecer limitaciones en relación con las distancias de la plantación al río.

Esta propuesta constituye una medida concreta, clasificada como complementaria según la Instrucción de Planificación Hidrológica, y por tanto se dirige al programa de medidas.

No obstante, cabe señalar que en la zona de policía se condiciona cualquier uso del suelo. Además, el dominio público hidráulico y la zona de servidumbre deberían estar en el estado más natural posible, y en este sentido las plantaciones de eucaliptos producen efectos adversos puesto que son especies alóctonas.

49. Uno de los temas importantes que afecta a los municipios costeros y con aumento de población, es la ampliación de plantaciones forestales agresivas, más concretamente los eucaliptos que tienen un gran consumo de agua y dejan el estado de las cuencas en un estado de conservación crítico.

El Esquema Provisional de Temas Importantes contiene la información relativa a los balances de explotación en el apartado 3.9. Se trata de una primera aproximación a los resultados de los balances, resultando válida para detectar las situaciones donde se pueden presentar problemas en la satisfacción de las demandas. Se ha realizado de acuerdo a lo establecido en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la cual no recoge las plantaciones forestales.

La herramienta utilizada para todo ello es el SIMPA, que será aplicada con carácter general. Se realizarán estudios de detalle en aquellos casos que se estime necesario.

10. OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y MARÍTIMO TERRESTRE-ORDENACIÓN DEL TERRITORIO-URBANISMO

50. Existe una ocupación de los márgenes de los ríos, pequeños afluentes, arroyos, humedales, etc., como consecuencia del urbanismo difuso de reciente instalación de polígonos o urbanizaciones.

Esta aportación se enmarca dentro del tema importante "I.16 Ocupación del Dominio Público Hidráulico y Marítimo Terrestre". La Ficha que desarrolla este tema hace referencia a la creciente y rápida presión sobre los cauces y la zona marítimo-terrestre, fundamentalmente urbanística, que reduce el espacio fluvial y marino, incrementa los riesgos frente a las inundaciones y menoscaba la protección medioambiental del dominio público.

Además, en el apartado 6 de la Ficha se presentan las líneas de actuación de la Instrucción de Planificación (pendiente de aprobación) y Planes y Estrategias a nivel Nacional y Autonómico. Estas líneas serán concretadas en el futuro Programa de Medidas a integrar en el Plan Hidrológico en función de los resultados de la participación pública y el análisis coste-eficacia de las mismas.

51. La ocupación de la franja costera tiene graves y grandes consecuencias, como por ejemplo inundaciones, aumento de velocidad de los caudales, pérdidas de áridos, destrucción de infraestructuras costeras, modificación y pérdidas de hábitats, etc.

Esta aportación se refiere al tema importante "I.16 Ocupación del Dominio Público Hidráulico y Marítimo Terrestre". La Ficha que desarrolla este tema hace referencia a la creciente y rápida presión sobre los cauces y la zona marítimo-terrestre, fundamentalmente urbanística, que reduce el espacio fluvial y marino, incrementa los riesgos frente a las inundaciones y menoscaba la protección medioambiental del dominio público.

Así, la presión urbanística y la presencia de infraestructuras afectan a la dinámica costera y se manifiestan en la desembocadura de los ríos, la zona costera y los humedales asociados. Las afecciones al medio hídrico están muy extendidas en toda la demarcación, constituyendo uno de los principales problemas del medio hídrico en este ámbito. Se destruye la compleja estructura de las orillas naturales, trayendo consigo en la mayoría de los casos la eliminación de la vegetación de ribera y el empobrecimiento de la fauna acuática.

Este tema se encuentra estrechamente relacionado con las alteraciones hidromorfológicas debidas a obras de defensa y encauzamiento conduciendo a un notable empobrecimiento del potencial biológico no solo en los tramos alterados sino en los naturales ubicados aguas arriba y

debajo de estas actuaciones. En ocasiones algunas de estas presiones han dado lugar a la consideración de la masa de agua como masa muy modificada en la que se exigirán unos objetivos menos exigentes asociados a un potencial ecológico. En el apartado 3 de la Ficha que desarrolla el tema "I.2 Alteraciones hidromorfológicas en aguas de transición y costeras" se recogen los efectos sobre el medio, como por ejemplo, la modificación de la profundidad, de las características del sustrato, de la condición de la zona de oscilación de la marea y del flujo de agua, o de la estructura de la zona ribereña intermareal.

En los apartados 6 y 7 de las Fichas de los dos temas importantes citados se recogen líneas y alternativas de actuación.

52. El agua no es un factor considerado en la planificación urbanística de la zona. Debe ser considerada como un factor clave en el ordenamiento urbanístico.

Esta cuestión está relacionada con algunos de los temas importantes recogidos en el EPTI, especialmente con los siguientes: "I.16 Ocupación del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre", "II.1Abastecimiento urbano y población dispersa", "III.3 Inundaciones" y "IV.1 Definición de criterios comunes entre Administraciones y conflictos de competencias". Se considera prioritaria la coordinación entre las políticas del agua y las de ordenación del territorio y urbanismo.

53. En el ámbito de participación territorial "Cantabria Central" existen multitud de alteraciones hidromorfológicas como presas, antiguos molinos, azudes, parte de las cuales que no están cumpliendo la función para la que se crearon. Las administraciones deben tomar medidas al respecto.

El apartado de "casos concretos" de las Fichas que desarrollan los temas importantes "I.1 Alteraciones hidromorfológicas en ríos y lagos" y "I.2 Alteraciones hidromorfológicas en aguas de transición y costeras" recoge esta aportación.

Además, el apartado "líneas de actuación" de dichas fichas presenta diferentes líneas de actuación para solucionar este problema, como por ejemplo, la revisión de concesiones, el Plan de Cauces, etc.

11. ABASTECIMIENTO

54. Existe una preocupación por la falta de educación previa sobre el consumo del agua, deberían llevarse a cabo medidas en este sentido.

Esta propuesta se relaciona con diferentes temas importantes, y en concreto con "II.1 Abastecimiento urbano y población dispersa". En los apartados 6 y 7 de la Ficha que desarrolla este tema se incluyen líneas y alternativas dirigidas a la información, sensibilización y concienciación sobre la importancia del ahorro del agua.

55. El consumo de agua se ve afectado por el aumento de viviendas unifamiliares en la zona, en ocasiones no se tiene una capacidad de gestión adecuada que pueda controlar este problema.

El crecimiento de la población y sus tendencias urbanísticas tienen grandes incertidumbres, sin embargo se observa una demanda de agua creciente. El grado de afección al medio dependerá de la aplicación eficiente de medidas que permitan un equilibrio con los recursos naturales existentes. Otro problema a destacar es la falta de información sobre las demandas de agua en los diferentes tipos de uso urbano.

Dentro de las líneas de actuación planteadas en el Esquema Provisional de Temas Importantes se encuentran las siguientes:

- *Regulación y fomento de la instalación de dispositivos de menor consumo en el abastecimiento urbano.*
- *Control de los volúmenes utilizados por usuarios individuales*
- *Actualización del Registro de Aguas y regulación de concesiones*

56. Se considera necesaria la obtención de datos sobre los consumos, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo para poder abordar con éxito el tema del abastecimiento. Tanto las empresas privadas como las administraciones públicas deberían facilitar estos datos.

Para el desarrollo del Esquema Provisional de Temas Importantes se han estimado los consumos de agua en los diferentes sectores, actualizando la población abastecida para el año

2005. Sin embargo, dichas estimaciones serán mejoradas a través de los resultados de las encuestas sobre los servicios del agua realizadas a los Ayuntamientos y gestores.

57. Una de las medidas que deberían tomar tanto los ayuntamientos como industrias, comercios, empresas, etc. es la colocación de contadores para conocer el valor real del agua destinada a cada uso o actividad, para de esta forma poder tomar medidas más específicas y efectivas. Se ha de transmitir que no se van a conceder nuevas ayudas a ningún ayuntamiento que no posea contadores para poder gestionar de manera eficaz su consumo de agua.

Esta propuesta está recogida en el Esquema Provisional de Temas Importantes como "Control de los volúmenes utilizados por usuarios individuales". De forma más detallada, se encuentra en los apartados "6 Líneas de actuación" y "7 Alternativas de solución posibles" de las Fichas que desarrollan los temas importantes del grupo II sobre Atención de las demandas y racionalidad del uso.

58. Reducir el consumo del agua es un tema importante. Se destaca la importancia de trabajar sobre el ahorro, eficiencia del agua y la recuperación de costes. El principal problema es que siempre se insiste en la filosofía de adaptar los recursos a las demandas sin tener en cuenta el propio recurso. El agua es un factor limitante.

El apartado del EPTI referente a las líneas de actuación para los temas importantes relacionados con la "Atención de las demandas y racionalidad del uso" (apartado 6.1.2.) expone lo siguiente: Tras la aprobación de la DMA, para asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso se están sustituyendo los tradicionales enfoques de "oferta" por estrategias de gestión de la demanda y de conservación y restauración de los recursos hídricos, cuyas principales actuaciones estratégicas se encuadran dentro del Programa Global de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua (Programa A.G.U.A.).

El Programa A.G.U.A. integra los objetivos mencionados dentro de la planificación hidrológica, destacando las actuaciones de depuración de aguas residuales, de regeneración y reutilización de las aguas, de mejora y modernización de sistemas de abastecimiento y de riego. Una de las líneas de actuación principales de este programa, que ya se puso en marcha en 2004, es la aplicación de medidas de gestión de la demanda y asignación eficiente del recurso, además de tener gran capacidad de adaptación para solventar nuevas situaciones. El EPTI también muestra las actuaciones/noticias más recientes (desde el 2007) del Programa A.G.U.A. en esta Demarcación por Comunidad Autónoma.

59. Existe desde la industria una percepción de que en un futuro se restringa en mayor medida el consumo de agua para usos industriales en Asturias, perjudicando a la industria frente a sus competencias en el resto de Europa. Por otro lado, parece que va a haber déficit de agua en verano por falta de lluvias, y reducir el consumo, ahorro de agua se cree que no va a compensar ese déficit y se deberían tomar medidas e incluirlas en el plan.

En el apartado del EPTI referente a los usos industriales (apartado 3.2), se presenta la estimación de la demanda industrial en el escenario actual, basada inicialmente en la aplicación de coeficientes medios de consumo por los niveles de producción alcanzada (VAB a nivel municipal) y sector CNAE. Sin embargo, dichas estimaciones preliminares fueron mejoradas con datos de estudios concretos que permiten conocer las demandas de agua por parte de las industrias de mayor peso, así como la opinión de expertos.

Del mismo modo, en el apartado 3.2. del EPTI se muestran las demandas que previsiblemente se pueden alcanzar en el 2015 y 2027, de acuerdo al análisis del crecimiento de los diferentes sectores industriales (VAB y empleo). Si bien las estimaciones de la demanda de agua para la industria muestran una tendencia creciente, en los escenarios futuros no se han incorporado los posibles efectos del programa de medidas (aún por desarrollarse) y cuya futura implementación podría conllevar a un ahorro en el consumo, tal como la incorporación de circuitos cerrados en las industrias de mayor consumo. En el borrador del Plan Hidrológico se mejorarán las actuales estimaciones basadas en la recopilación de información de los consumos de agua y vertidos en las industrias de mayor peso.

60. Uno de los principales problemas es el abastecimiento. En este sentido, se plantean diferentes alternativas de solución: potenciar la reutilización, el ahorro de agua, mejoras en la gestión, implantar microlagunas, creación de acuíferos inducidos, etc.

Según el análisis realizado en el Anexo A del EPTI, el abastecimiento constituye uno de los problemas más importantes de la demarcación. En los apartados 6 y 7 de las Fichas que desarrollan los temas importantes del grupo II sobre Atención de las demandas y racionalidad del uso se presentan líneas de actuación y alternativas, respectivamente. No obstante, se profundizará en todo ello en el Programa de Medidas.

61. Desarrollo de técnicas de ahorro de agua en ganadería y agricultura.

En los apartados 6 y 7 de la Fichas que desarrolla el tema importante "II.2 Otros usos (industria, regadío, ganadería, piscifactorías y navegación) se presentan líneas de actuación y alternativas, respectivamente. No obstante, se profundizará en todo ello en el Programa de Medidas.

62. Se considera como tema importante el suministro no garantizado: deficiencias en la gestión administrativa; aumento de la demanda industrial y urbana; poca cultura de ahorro y consumo sostenible del agua; y problemas de abastecimiento.

El "Abastecimiento urbano y población dispersa" constituye uno de los temas importantes más significativos en la Demarcación Hidrográfica, tal y como se refleja en el EPTI.

En los apartados "1. Caracterización y localización del problema" y "4. Casos concretos" de la Ficha que desarrolla este tema importante se recogen las cuestiones propuestas a este respecto. Además, en el apartado "6. Líneas de actuación" se presentan multitud de líneas de actuación que serán estudiadas en el Programa de Medidas.

63. Se indica que las redes de distribución suponen un gasto del 62%, destinándose el resto a las EDAR's y ETAP's. No existen planes de mantenimiento ni de reposición de las redes de distribución, y además no se hacen de forma regular. Un problema estructural a destacar es la carga de materia orgánica de las potabilizadoras: si los efluentes van muy cargados de materia orgánica, se disparan los trihalometanos (nocivos a determinados niveles). En el 2008 se ha rebajado su concentración a 50ng creándose así una nueva metodología de las ETAP y cambiando sus procesos para la ozonización, percloración, etc. En la potabilización de las ETAP's también se debe hacer un esfuerzo para acomodarlos a los estándares actuales.

En relación con la primera cuestión sobre las redes de distribución, se señala que una de las líneas de actuación presentadas en la ficha II.1 del Esquema Provisional de Temas Importantes, referente al abastecimiento urbano, es la mejora de la eficiencia de conducción en redes de tuberías.

En relación con los límites más restrictivos de ciertas sustancias, cabe señalar que la adaptación a los límites de las diferentes sustancias tanto para el abastecimiento como para el saneamiento, son medidas básicas y por tanto de obligado cumplimiento.

64. Muchas de las actuales potabilizadoras no han considerado la recogida de los fangos que generan y después llegan a los ríos. Esto genera grandes gastos económicos, problemas para los propios ríos, su fauna, flora, para la pesca…

La problemática de los lodos de las depuradoras se enmarca dentro del tema importante "Problemas asociados con otras fuentes potenciales de contaminación".

La ficha I.13 que desarrolla este tema muestra los problemas generados por los lodos de depuradoras en el apartado "Caracterización y localización del problema". Además, recoge alternativas de solución en el apartado 7 "Alternativas de actuación posibles".

65. Se debería identificar como tema importante la presión urbanística, y más concretamente en las zonas costeras como consecuencia del impacto del turismo y su estacionalidad.

Este tema se aborda en las fichas relacionadas con la atención a las demandas y racionalidad del uso, más concretamente en la Ficha II.1 sobre "Abastecimiento urbano y población dispersa". Así se dice que "los principales problemas de abastecimiento se vinculan a las necesidades urbanas, condicionadas fundamentalmente por la expansión urbana, en muchos municipios principalmente debida a la vivienda secundaria, además de la actividad comercial, turística e industrial inmersa. Además, los problemas de abastecimiento en la demarcación tienen una naturaleza fundamentalmente de carácter estacional, fruto de los acusados descensos de caudal medio que se registran en estiaje en muchas masas de agua superficiales del norte peninsular".

De forma general se cita la falta de garantía de abastecimiento en periodos de estiaje en algunos sistemas de explotación dentro de la Demarcación.

66. Los datos de demanda de agua para abastecimiento urbano muy baja, según CADASA la cifra sería de 214 hm3/año mientras que en el documento de trabajo presentado y que se extrajo del art. 5 es de 97 hm3.

La demanda de agua por parte de la población asentada dentro de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico es del orden de 255,4 hm^3/año, de ésta se estima que cerca del 80% retorna al medio, o sea unos 204 hm^3. Estos datos se encuentran en el apartado "3.1. Abastecimiento de población" del EPTI.

67. Reforzar la vigilancia de la guardería fluvial frente a las tomas ilegales.

En relación con esta propuesta, cabe señalar que la Instrucción de Planificación Hidrológica contiene una medida básica denominada "incremento del personal de guardería para control de extracciones". Esta medida ha sido incorporada en la ficha II.2 del Esquema Provisional de

Temas Importantes sobre “Otros usos (industria, regadío, ganadería, piscifactorías y navegación).

12. GESTIÓN Y COMPATIBILIZACIÓN DE USOS LÚDICOS

68. Problemas en la compatibilización de la pesca y el piragüismo, especialmente en el ámbito de participación territorial "Asturias-Cantabria-Castilla y León". Se propone fomentar una gestión integral y coordinada entre las distintas administraciones y agentes implicados.

Esta cuestión hace referencia al tema importante "II.3 Gestión y compatibilización de usos lúdicos (pesca deportiva, baño, piragüismo, deporte activo…)". En la ficha que desarrolla este tema se muestran los casos concretos de compatibilización de usos lúdicos en el río Sella (dificultades para compatibilizar entre los pescadores de trucha y salmón y los practicantes de piragüismo y deportes de aventura) y en las playas (como la práctica de deportes náuticos de motor y surf con otros usos recreativos como el baño o el buceo). También se cita brevemente la afección de estas actividades sobre el medio hídrico.

Se ha realizado un proceso de concertación temático-sectorial para abordar la compatibilización de los usos lúdicos entre los agentes sociales relacionados con este tema importante. El objetivo general ha sido consensuar medidas dirigidas a mejorar la compatibilización de la pesca y el piragüismo para su análisis e inclusión en el plan hidrológico y transmitirlas a las diferentes administraciones competentes.

69. Los aprovechamientos hidroeléctricos tienen una gran incidencia sobre la pesca deportiva y en especial sobre el piragüismo. En Francia desde hace unos años se están habilitando canales para el descenso de las piraguas y canoas por las mismas presas, evitando así su alta peligrosidad para la integridad física de los deportistas. Esto se está llevando a cabo mediante convenio entre los diferentes organismos de cuenca y las federaciones de piragüismo.

El sector hidroeléctrico ha sido convocado y ha participado en las reuniones del proceso de concertación sobre compatibilización de usos lúdicos de la demarcación, dado que el uso hidroeléctrico incide en el desarrollo de la pesca y el piragüismo. Además, tanto algunas empresas hidroeléctricas como piragüistas y pescadores han solicitado que este sector fuese convocado.

Nota: Las conclusiones de las reuniones de participación activa referentes a la compatibilización de usos lúdicos han sido recogidas en el "Documento sobre el proceso de concertación de usos lúdicos (pesca y piragüismo)", que se encuentra disponible en la página Web de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (www.chcantabrico.es).

13. CUESTIONES ECONÓMICAS Y RECUPERACIÓN DE LOS COSTES DEL AGUA

70. Los costes del agua no se repercuten de forma adecuada sobre el usuario, en Galicia el agua es muy barata y de este modo se fomenta el consumo. Deberían tomarse medidas de concienciación.

Esta propuesta se relaciona con el tema importante "II.4 Cuestiones económicas y recuperación de los costes del agua" (desarrollado en el EPTI, en su apartado 3.10 y en la Ficha correspondiente).

En la Ficha que desarrolla este tema importante, se constata que la Directiva Marco del Agua establece, desde el año 2000 pero con el horizonte fijado en el 2010, que los Estados Miembros deberán diseñar tasas, tarifas u otros instrumentos de manera que el precio del agua para cada uso sirva para:

- Proporcionar incentivos adecuados para un uso más eficiente del agua que contribuya al logro de los objetivos medioambientales de la Directiva.

- Contribuir de forma adecuada por parte de los diferentes usos a la recuperación de los costes de los servicios del agua, incluidos los costes medioambientales y los del recurso, teniendo en cuenta el principio de quien contamina paga.

Los apartados 6 y 7 de la Ficha también incluyen líneas y alternativas de actuación, respectivamente, entre las que se encuentran la regulación y fomento de instalación de dispositivos de menor consumo en el abastecimiento urbano, la introducción de programas de gestión de la demanda de agua destinados a modificar los hábitos colectivos de uso, las campañas de concienciación en uso urbano, la información al usuario sobre su consumo, mejores prácticas y ciclo del agua del sistema de abastecimiento en la factura, etc.

71. En relación con la recuperación de costes, debería garantizarse que no hay fugas en la red (este coste debería absorberlo la propia administración). Deben garantizarse determinados mínimos (gratis o precio político) e incentivar el ahorro del ciudadano.

Esta propuesta se relaciona con el tema importante II.4 "Cuestiones económicas y recuperación de los costes del agua" (desarrollado en el EPTI, en su apartado 3.10 y en la ficha correspondiente).

La Ficha que desarrolla este tema importante, hace referencia a que una buena gestión del agua permitirá aumentar la productividad en el uso del agua, de forma que no aumente la factura aunque aumenten los costes unitarios de los servicios que recibimos.

Asimismo, las tarifas constituyen un instrumento para mejorar la eficiencia y la productividad en los usos del agua. Los servicios proporcionados por organizaciones y organismos autónomos deben aplicar en su gestión el principio de recuperación de costes.

Los apartados 6 y 7 de la Ficha también incluye líneas y alternativas de actuación entre las que se encuentran la mejora de la eficiencia de conducción en redes de tuberías, la introducción de programas de gestión de la demanda de agua destinados a modificar los hábitos colectivos de uso, las campañas de concienciación en uso urbano, la información al usuario sobre su consumo, mejores prácticas y ciclo del agua del sistema de abastecimiento en la factura, etc.

72. Se han de regular las tarifas y el verdadero coste del agua por estamentos superiores a los municipales, que exista un asesoramiento más activo por parte de las diferentes administraciones que tienen competencias en el tema. Todo esto debería realizarse a partir de parámetros comunes.

Esta propuesta se relaciona con el tema importante II.4 “Cuestiones económicas y recuperación de los costes del agua” (desarrollado en el EPTI, en su apartado 3.10 y en la ficha correspondiente).

Tal y como dice la Ficha que desarrolla este tema importante, la cuestión de la recuperación de los costes de los servicios del agua está directamente condicionada por el mapa competencial que nuestra legislación vigente establece en materia de aguas, de manera que serán fundamentalmente las entidades locales y las Comunidades Autónomas las responsables últimas y competentes para el replanteamiento y modificación de las tarifas cobradas a los usuarios por los servicios de abastecimiento y saneamiento existentes en el ámbito de la demarcación. La propia Administración del Estado (Demarcación Hidrográfica y Ministerio de Medio Ambiente) ha de cuestionarse la adecuación y necesidad de cambio de ciertos instrumentos económicos recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (canon de control de vertidos, canon de regulación y tarifa de utilización del agua).

73. En referencia al tema económico, se considera que los estudios entregados no incluyen unas estimaciones de demanda razonables en la línea de los criterios de ahorro y recuperación de costes de la Directiva. Se apunta que en Asturias, en la actualidad, sólo se recupera el 56% de los costes del agua y en los documentos entregados por la CHN se calcula un escenario de demanda futura que no mejore

esa situación y está totalmente al margen de las indicaciones de la Directiva. Se considera que los precios del agua no van a aumentar y que no se va a producir ningún ahorro por avances técnicos o campañas de concienciación. Para conseguir la recuperación de costes y los objetivos de la Directiva es necesario que los precios reales del agua se incrementen lo necesario para conseguir esos objetivos y que se ponga en marcha medidas paralelas de ahorro y mejor gestión de la oferta y la demanda.

Las estimaciones de la demanda realizadas en el EPTI son preliminares, con el objetivo de constatar la situación. En el Plan Hidrológico se realizarán de acuerdo a la Instrucción de Planificación Hidrológica y por tanto, incorporando las demandas actuales y las previsibles en el escenario tendencial en los años 2015 y 2027.

El escenario tendencial se define como aquel que se produciría si se mantuviesen las tendencias de los usos del agua y sólo se aplicasen las medidas básicas necesarias para aplicar la legislación sobre protección de las aguas, definidas en el apartado 8.2.1.1.1 de la Instrucción.

La caracterización económica de los usos del agua es una novedad en el proceso y aunque se ha avanzado mucho, aún queda por completar y detallar. Para la aprobación de los planes se alcanzará el suficiente nivel de detalle en los estudios y se seguirá trabajando, tras la aprobación de estos para la siguiente revisión del Plan, además de para cumplir con el resto de etapas establecidas en nuestra legislación, como la recuperación de los costes de los servicios del agua.

74. Se debe aplicar un canon unitario para poder repartir las cargas económicas de los procesos de saneamiento y depuración y resolver la recuperación de costes.

El apartado "3.10.2 Ingresos-Precios y Tarifas" del EPTI cita las distintas categorías de pagos por servicios prestados en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico. Entre ellas se encuentra el cobro del **Canon de Saneamiento** (servicio de depuración de aguas residuales) que sirve para financiar los gastos de funcionamiento y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración, así como, en su caso, la construcción de las mismas. Lo gestionan las respectivas Comunidades Autónomas con criterios similares. La estructura es similar a las tarifas de suministro con una parte variable en función del consumo del agua y una parte fija en algunas Comunidades Autónomas y una diferenciación según uso doméstico o industrial. En el País Vasco se denomina Tasa de Saneamiento y son los propios entes gestores los que tienen las competencias en el establecimiento y fijación de la cuantía de la misma.

En el apartado 5.3.4 del Esquema Provisional de Temas Importantes se recoge que los estudios realizados sobre cuestiones económicas en el uso del agua apuntan a que existe un cierto

margen para mejorar la recuperación de los costes de los servicios mediante las tarifas de abastecimiento, los cánones de saneamiento de los servicios de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas, así como los cánones de vertido, considerado también que la última fase del ciclo integral, la de los servicios de control de los vertidos, tiene una relevancia muy elevada, por la intensa actividad industrial y al alto riesgo contaminante de muchas de las industrias establecidas.

Además, esta aportación se relaciona con el tema importante II.4 "Cuestiones económicas y recuperación de los costes del agua", desarrollado en su ficha correspondiente.

75. Para desincentivar los consumos excesivos deberíamos dejar de subvencionar el propio recurso. Conviene que se de un marco normativo muy regulado para evitar que cada municipio y/o ayuntamiento cobre lo que a su entender considere oportuno. De esta forma se podrá comenzar a trabajar positivamente en la economía del agua y en la recuperación de sus costes.

Esta propuesta se relaciona con el tema importante II.4 "Cuestiones económicas y recuperación de los costes del agua" (desarrollado en el EPTI, en su apartado 3.10 y en la ficha correspondiente).

En línea con el apartado de alternativas de actuación de la Ficha de este tema importante, señalar que el Plan debe ponderar y evaluar, al menos cualitativamente, la capacidad de cada instrumento económico de los que se plantean dentro de las líneas de actuación para modificar los comportamientos relacionados con un consumo de agua más racional, responsable y eficiente. La potencialidad, en este sentido, de las soluciones tarifarias, puede ser muy variable según los sectores de actividad, los territorios, las características socioeconómicas de los usuarios y, en definitiva, está fuertemente condicionado por la forma de las funciones de demanda de agua y la elasticidad-precio de la misma. Alternativamente, la introducción de modificaciones legislativas y la puesta en marcha actuaciones de promoción pública dirigidas a ampliar las condiciones de cuasi-mercado en el juego de la oferta y la demanda de agua pueden dar resultados muy positivos en determinadas circunstancias de exceso e infrautilización de los derechos concesionales de agua.

La implantación de políticas de precios por parte de los gestores del agua como instrumento para mejorar la eficiencia y la productividad en los usos del agua podrá concretará, entre otros, mediante:

- *Sistemas de tarificación progresivos que penalice los consumos altos e incentiven el ahorro. La cuota ficha que se cobra en muchos casos es demasiado alta, lo que penaliza los consumos bajos.*

- *Tarifas que incluyan bonificaciones por miembros de la unidad familiar, por situaciones especiales por ingresos, descuentos de bajos consumos, etc.*

76. Se debe resaltar la importancia del precio real del agua, fomentar el ahorro y la eficiencia en la gestión.

Las cuestiones relacionadas con la economía y recuperación de los costes del agua están reflejadas en el tema importante II.4 "Cuestiones económicas y recuperación de los costes del agua". La implantación de políticas de precios por parte de los gestores del agua como instrumento para mejorar la eficiencia y la productividad en los usos del agua se concretará previsiblemente mediante:

- *Sistema de tarificación progresivo que penalice los consumos altos e incentive el ahorro. La cuota fija que se cobra en muchos casos es demasiado alta, lo que penaliza los consumos bajos.*

- *Tarifas que incluyan bonificaciones por miembros de la unidad familiar, por situaciones especiales por ingresos, descuentos por bajos consumos, etc.*

- *Control individualizado y periódico del uso mediante instalación de contadores individuales.*

- *Tarifas que reflejen el coste real de los servicios, de modo que los distintos usuarios paguen en relación al coste del servicio que reciben.*

- *Información al usuario sobre su consumo, mejores prácticas y ciclo del agua del sistema de abastecimiento en la factura.*

77. El dinero del agua debería invertirse en la gestión del agua y no en otras políticas.

En el apartado 3.10.2 "Ingresos – Precios y Tarifas" del EPTI, se muestran las distintas categorías de pagos por servicios prestados en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico, que se muestran a continuación. La aportación realizada va dirigida a fomentar la transparencia y una buena gestión por parte de los organismos públicos al invertir fondos o subvenciones.

- El Canon de Regulación (Servicios de captación y embalse de aguas superficiales) es una figura de ingreso de derecho público que se cobra a los usuarios que aprovechan los recursos captados por las presas y embalses, cuyo titular sea la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

- La Tarifa de Utilización del Agua (Servicios de transporte de aguas superficiales) grava a los usuarios que utilizan los canales, infraestructuras y otras obras hidráulicas, distintas de la regulación, que realiza la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

- Las Tarifas del servicio de abastecimiento o suministro urbano que sirven para recuperar los costes de los servicios de potabilización y distribución a través de las redes de distribución. Se fijan generalmente en 2 partes (tarifas binómicos). La parte fija refleja los costes fijos del servicio y la parte variable la cantidad de agua consumida, estableciendo bloques de tarificación en función de los tramos de consumo durante el período de facturación.

- La Tasa de Alcantarillado (Servicio de recogida de aguas residuales urbanas) se cobra por la prestación del servicio por parte de los municipios a los usuarios. Generalmente, presenta la misma estructura en 2 partes que la tarifa de suministro, con una parte fija y una variable por bloques, aunque con diferentes niveles de precios en cada tramo.

- El cobro del Canon de Saneamiento (Servicio de depuración de aguas residuales urbanas) sirve para financiar los gastos de funcionamiento y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración, así como, en su caso, la construcción de las mismas. Lo gestionan las respectivas Comunidades Autónomas con criterios similares. La estructura es similar a las tarifas de suministro con una parte variable en función del consumo del agua y una parte fija en algunas Comunidades Autónomas y una diferenciación según uso doméstico o industrial. En el País Vasco, se denomina Tasa de Saneamiento y son los propios entes gestores los que tienen las competencias en el establecimiento y fijación de la cuantía de la misma.

- El Canon de Control de Vertidos grava los vertidos al dominio público hidráulico (tanto a los titulares con autorización de vertido como a los responsables de vertidos no autorizados) con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor. Este canon es independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales para financiar las obras de saneamiento o depuración. La gestión y la recaudación del Canon de control de vertidos en el País Vasco está encomendada al Gobierno Vasco aportando un 10% a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

- El Gobierno Vasco ha creado una figura específica Canon del Agua, destinado a la protección, restauración y mejora del medio acuático aunque su aplicación no afectará al ámbito doméstico, sólo a los grandes consumidores agrícolas, ganaderos e industriales.

14. INUNDACIONES

78. Ocupación de llanuras de inundación, deficiente mantenimiento del cauce y riberas, y poca consideración hacia el fenómeno del cambio climático.

Se relaciona con el tema importante III.1 “Inundaciones”, así como con ocupación del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre y el cambio climático.

79. Las inundaciones son consideradas como uno de los temas más importantes de la demarcación. Ocupación de las zonas inundables. Nuevos desarrollos urbanísticos.

Uno de los temas importantes recogidos en el EPTI son las Inundaciones. Así, la inundabilidad representa uno de los fenómenos con mayor repercusión en la gestión fluvial de los ríos de esta Demarcación, tanto por la relación existente entre la alta frecuencia de inundación con una elevada potencialidad ecológica, como en relación con la correcta ordenación del territorio para minimizar el riesgo.

Como muestra el apartado 4 “casos concretos” de la Ficha que desarrolla este tema, se han tratado de localizar las zonas más frecuentes castigadas por las inundaciones y de reunir, clasificar y sistematizar los datos obtenidos, con el fin de definir las causas principales que produjeron las inundaciones, los daños más frecuentes y su magnitud relativa. Se presenta un mapa con las poblaciones más importantes que sufren estos fenómenos en la demarcación, si bien se seguirá trabajando en esta línea para mejorar la información.

Asimismo, se han revisado las líneas de actuación indicadas en el Anejo VI de la Instrucción de Planificación (pendiente de aprobación) y en Estrategias o Planes elaborados a nivel Internacional, Nacional o Autonómico, que serán concretadas en el futuro Programa de Medidas a integrar en el Plan Hidrológico. Cabe destacar que se está diseñando un Plan de Cauces propio adaptando los objetivos del Estrategia Nacional de Restauración de Ríos a las particularidades de esta demarcación. El diseño de este plan, que ya está avanzado, conlleva un diagnóstico de todas las áreas fluviales del ámbito territorial de la Confederación tanto a nivel medioambiental como de vulnerabilidad frente a inundaciones y promueve actuaciones prioritarias en cada una de ellas.

Por otro lado, como herramienta para aplicar la nueva Directiva Europea de Inundaciones se está elaborando en la DHC “la cartografía de zonas inundables del Cantábrico” formada entre otros estudios por la creación de un Sistema de Información de Zonas Inundables y de Avenida Torrencial del Principado de Asturias, elaborado por el INDUROT para Protección civil en el

2004, la zonificación de áreas inundables de los sectores no asturianos de las cuencas hidrográficas del Eo, Navia, Sella, Cares , Deva del 2006, la zonificación de áreas inundables de la cuenca del Pas, del 2007, etc.

80. Otro enfoque en relación a las inundaciones, además del ámbito puramente urbano, es el que afecta al ámbito rural.

Las inundaciones están recogidas en el EPTI como uno de los temas importantes de la demarcación.

En el apartado "3 Principales efectos sobre las masas de agua" de la Ficha que desarrolla este tema importante, se señala que las inundaciones son fenómenos naturales recurrentes que ocupan, cuando ocurren, las llanuras aluviales. En el último siglo, estos problemas se han agravado al verse estas llanuras ocupadas por infraestructuras, viviendas, industrias, así como una actividad agrícola muy relacionada precisamente con estos terrenos colindantes al curso fluvial. Los desbordamientos actúan de manera positiva en las llanuras de inundación, favoreciendo la diversidad de hábitats, laminando las propias avenidas y recargando los acuíferos.

En el apartado "6 Líneas de actuación" se indica que en el ámbito de la DHC se está diseñando un Plan de Cauces propio adaptando los objetivos del Estrategia Nacional de Restauración de Ríos a las particularidades de esta demarcación. El diseño de este plan, que ya está avanzado, conlleva un diagnóstico de todas las áreas fluviales del ámbito territorial de la Confederación tanto a nivel medioambiental como de vulnerabilidad frente a inundaciones y promueve actuaciones prioritarias en cada una de ellas.

81. Este tema es de suma importancia sobre todo en la Cuenca del Bidasoa. La presión urbanística va dirigida principalmente hacia las zonas inundables ocupadas por los diferentes usos (industrial, vivienda, agrícola/ganadero, etc.).

Esta aportación hace referencia a dos de los temas importantes del EPTI: "I.16 Ocupación del Dominio Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre" y "III.1 Inundaciones".

El apartado de "casos concretos" de la Ficha que desarrolla las Inundaciones recoge la problemática específica del Bidasoa. A continuación se expone un breve resumen de esta información:

En la cuenca del Bidasoa los principales problemas de inundaciones se dan en las zonas donde la presión urbana ha llevado a la ocupación de las llanuras de inundación del Bidasoa. En esta

cuenca, y debido a lo abrupto del terreno, la presión para ocupar este tipo de zonas suele ser elevada.

Actualmente se están redactando los POT (Planes de Ordenación Territorial de Navarra), que desarrollan los objetivos y directrices de la ETN (Estrategia Territorial de Navarra) y que deberán contribuir al mantenimiento de los objetivos de uso sostenible del agua. Los POT deben indicar en cada municipio las zonas susceptibles de riesgos naturales (entre ellos inundabilidad) o de otro tipo, y deben fijar los criterios y normas referidos a estos suelos. Además, deberán delimitar y clasificar como suelo no urbanizable el suelo susceptible de sufrir algún tipo de riesgo.

15. SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS

82. Se solicita un mayor control en el estado de conservación y seguridad de las infraestructuras de los embalses (p.ej. Desbordamiento del embalse de Tanes).

La Seguridad de las infraestructuras es uno de los temas importantes del EPTI, que se desarrolla en la Ficha III.5 “Seguridad de las Infraestructuras”. En ella se recoge la normativa relacionada, líneas de actuación, alternativas, etc. Se señala que en una reciente modificación del Reglamento del Dominio público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 9/2008, se subraya la necesidad de mejorar e incrementar el control de la seguridad de las presas y embalses, debido por un lado al importante número de grandes presas en explotación, el progresivo envejecimiento técnico y estructural de las grandes presas y a la construcción de balsas de agua por iniciativa privada para diferentes usos fuera de la zona de dominio público hidráulico.

El Real Decreto determina las condiciones esenciales de seguridad que deben cumplir las presas y embalses, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de sus titulares, los procedimientos de control de la seguridad y las funciones que corresponden a la Administración Pública, con la finalidad de proteger a las personas, el medio ambiente y las propiedades.

Entre las excepciones previstas, siguiendo los criterios más estrictos recogidos en la normativa de los países europeos en materia de seguridad de presas y embalses, se establece un umbral mínimo, de tal manera que quedan exceptuadas del ámbito de aplicación, incluso de la obligación de clasificarse, aquellas pequeñas presas cuya altura sea menor de cinco metros y tengan menos de cien mil metros cúbicos de capacidad.

En los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo en la materia, procediéndose a la elaboración de las propuestas de clasificación, a la elaboración y redacción de los Planes de Emergencia, a la elaboración y redacción de las Normas de Explotación, así como a la realización de las reglamentadas Revisiones de Seguridad, y al mismo tiempo se están dedicando importantes esfuerzos en materia de conservación y mantenimiento de presas para garantizar las adecuadas condiciones de funcionalidad y seguridad de las mismas.

Los próximos pasos a dar a corto plazo se refieren a los procesos de implantación de los Planes de Emergencia una vez aprobados, así como a la adecuación de las presas al vigente Reglamento de Seguridad en función de los resultados de las inspecciones de seguridad en curso. Por otra parte, en la Demarcación Hidrográfica se encuentra en fase de implantación el S.A.I.H., que por sus características será especialmente útil como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en la gestión hídrica de la cuenca y en la actuación ante avenidas, pudiéndose aprovechar su potencial para reforzar la seguridad de las infraestructuras.

16. CONFLICTOS DE COMPETENCIAS, COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

83. Se debería incidir en un mayor control de las competencias de las diferentes administraciones con el fin de evitar la duplicación de informes, trabajos, potenciar y facilitar el intercambio de información útil, etc. La DMA brinda la gran oportunidad de fomentar y favorecer la participación pública, pero deben darse más instrumentos para consensuar y continuar con criterios comunes entre las diferentes y diversas administraciones. A parte del Comité de Autoridades Competentes debería existir, o sino, conformarse un órgano técnico que posibilitara esta unión de criterios, competencias, agentes administrativos, etc.

El tema Importante IV.1 "Definición de criterios comunes entre administraciones y conflictos de competencias" recoge las cuestiones a las que hace referencia esta propuesta. En este tema resulta imprescindible reforzar el papel del Comité de Autoridades Competentes y dentro del mismo, el Plan deberá valorar la oportunidad de recomendar la formación de grupos de trabajo específicos, conforme a lo previsto en el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, para el establecimiento de criterios comunes en aquellas cuestiones que requieran un mayor grado de coordinación.

Asimismo, se deberá propiciar el desarrollo de otras fórmulas simples de cooperación y coordinación como el establecimiento de acuerdos, generales y específicos, del organismo de cuenca con el resto de las instituciones y administraciones.

En la aplicación de la DMA confluye una gran dispersión de competencias: costas, puertos, medio ambiente, ordenación del territorio, sanidad, agricultura, etc. con lo que mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones afectadas servirá para ampliar y homogeneizar la información de base en la toma de decisiones.

Por otro lado, dada la extensión del territorio protegido, la notable presión humana en amplias zonas, la influencia del turismo y el desarrollo de la planificación territorial, resulta importante la adecuada coordinación entre la planificación hidrológica y la planificación territorial ya existente y en desarrollo, para no dañar el frágil equilibrio de un territorio que tiene un alto porcentaje de su superficie protegida por sus notables valores ambientales.

84. Se percibe un conflicto de competencias en materia de gestión de agua, principalmente se tiene un desconocimiento de las condiciones de vertido que poseen las empresas. Los Municipios otorgan licencias de vertido y a la hora de asesorar y sancionar a las industrias no es un proceso ágil como consecuencia de la falta de medios humanos y técnicos necesarios para hacer cumplir la normativa.

La Ficha IV.1 del Esquema Provisional de Temas Importantes sobre la "Definición de criterios comunes entre administraciones y conflicto de competencias" hace referencia a la dispersión de competencias en base a la extensión del territorio y la existencia de numerosos organismos con competencias jurídico-administrativas. En definitiva el nuevo Plan deberá articular los mecanismos e instrumentos necesarios para garantizar la gestión y desarrollo coordinado sin perjuicio de la titularidad de las competencias que en materia de gestión de aguas corresponda a las diferentes Administraciones Públicas.

85. Existe un alejamiento entre la administración y el usuario del río, se solicita una reordenación de las competencias en materia de gestión el agua y un acercamiento a los ribereños.

La Ficha IV.1 del Esquema Provisional de Temas Importantes sobre la "Definición de criterios comunes entre administraciones y conflicto de competencias" hace referencia a la dispersión de competencias en base a la extensión del territorio y la existencia de numerosos organismos con competencias jurídico-administrativas. En definitiva el nuevo Plan deberá articular los mecanismos e instrumentos necesarios para garantizar la gestión y desarrollo coordinado sin perjuicio de la titularidad de las competencias que en materia de gestión de aguas corresponda a las diferentes Administraciones Públicas.

Asimismo, se deberá propiciar el desarrollo de otras fórmulas simples de cooperación y coordinación como el establecimiento de acuerdos, generales y específicos, del organismo de cuenca con el resto de las instituciones y administraciones.

El tema importante IV.3 "Participación pública activa" hace referencia al acercamiento de la gestión del agua a la sociedad. De acuerdo al artículo 14 de la Directiva Marco del Agua, los Estados Miembros deben fomentar la participación activa de todas las partes interesadas en la implementación de la Directiva y en la elaboración de los planes hidrológicos. Para alcanzar el escenario sostenible que persigue el Plan, es fundamental la integración de los agentes interesados y de la sociedad civil en la toma de decisiones, ofreciendo una oportunidad de involucrarles en la puesta en marcha del plan hidrológico de cuenca. Para ello es necesario un proceso de información y sensibilización de la sociedad, en relación al medio hídrico, la DMA, la nueva planificación hidrológica, etc. Asimismo, es fundamental la corresponsabilidad por parte de los agentes en todo el proceso. Por tanto, el plan deberá contemplar las medidas necesarias para el desarrollo de una estrategia que permita avanzar en el proceso de participación pública de la demarcación iniciado con su elaboración, conforme a los criterios de la Directiva Marco del Agua.

17. PARTICIPACIÓN PÚBLICA

86. La información, sensibilización y concienciación ciudadana en relación con el agua es imprescindible para conseguir los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Deben potenciarse y fomentarse actividades dirigidas en este sentido.

Esta propuesta se relaciona con gran parte de los temas importantes de la demarcación, y de una forma muy directa, con la participación pública. El Esquema Provisional de Temas Importantes recoge líneas de actuación y alternativas dirigidas a la información, sensibilización y concienciación ciudadana, en las Fichas que desarrollan los temas importantes. A continuación se enumeran algunas de ellas:

- *Campañas de concienciación en uso urbano.*
- *Ampliación y difusión de códigos de buenas prácticas en la agricultura.*
- *Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas en la ganadería.*
- *Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico.*
- *Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Marítimo Terrestre.*

18. CAMBIO CLIMÁTICO

87. Se debería introducir al menos de forma transversal la problemática que viene asociada con las modificaciones que está produciendo ya el Cambio Climático. La importancia de sus efectos en el recurso agua es indiscutible y de consideración a tener en cuenta no solo por la Administración, investigadores, empresas privadas sino por toda la ciudadanía en general. El Cambio Climático desde el punto de vista de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, debiera ser introducido y empujado en todos los temas en los que influya o bien crear un capítulo específico donde sus efectos sean valorados y puedan planificarse en función de su importancia.

Para ello, y basándose principalmente en las directrices del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, se ha elaborado una ficha sobre los Impactos del Cambio Climático, según el modelo facilitado por la CHN. No obstante, su contenido ha sido preparado para dar un primer paso a la hora de estructurar el problema y, por lo tanto, requiere desarrollo y maduración para que pueda ser incorporado a un documento final. Asimismo, se adjunta una breve lista bibliográfica de documentos que pudieran ser para enriquecer la ficha mencionada.

El cambio climático es uno de los temas importantes del Esquema Provisional de Temas Importantes, y además, se considera como un tema transversal a los demás, en especial con los caudales ecológicos, ecosistemas acuáticos y terrestres dependientes de las aguas subterráneas, atención a las demandas y racionalidad del uso del agua, sequías e inundaciones.

Además, en el Esquema Provisional de Temas Importantes se hace referencia al cambio climático en el apartado de descripción del clima, en los balances de recursos hídricos y el régimen de caudales ecológicos.

En la ficha de cambio climático se recogen las líneas de actuación de la Instrucción de Planificación Hidrológica (en trámite de aprobación), así como los planes estatales autonómicos. Las diferentes Comunidades Autónomas de la demarcación están elaborando estrategias o planes en relación al cambio climático.

88. El Plan Hidrológico debe ser previsor y generar medidas para la adaptación al Cambio Climático.

El cambio climático es uno de los temas importantes del EPTI, y además, se considera como un tema transversal a los demás, en especial con los caudales ecológicos, ecosistemas acuáticos y

terrestres dependientes de las aguas subterráneas, atención a las demandas y racionalidad del uso del agua, sequías e inundaciones. En la ficha que desarrolla este tema importante se recogen medidas de la Instrucción de Planificación Hidrológica (en trámite de aprobación) tales como:

- *Regulación y fomento de la instalación de dispositivos de menos consumo en el abastecimiento urbano.*
- *Campañas de concienciación en uso urbano.*
- *Aplicación de sistemas de circuito cerrados de circulación de aguas en instalaciones industriales.*
- *Instalación de dispositivos de menor consumo en el abastecimiento urbano.*
- *Reutilización de aguas depuradas en uso urbano e industrial.*
- *Control de los volúmenes utilizados por usuarios individuales.*
- *Mejora de la eficiencia de conducción en redes de tuberías*
- *Entubación de conducciones a cielo abierto.*
- *Revisión de concesiones*
- *Control de volúmenes extraídos de masas de agua*
- *Actualización del Registro de Aguas y regularización de concesiones*
- *Incremento del personal de guardería para control de extracciones*
- *Aportación de recursos externos a masas de agua subterránea en riesgo*
- *Adecuación del régimen hidrológico de lagos y zonas húmedas*
- *Restauración de vegetación en zonas húmedas*
- *Incremento de los recursos disponibles para uso agrícola y recreativo mediante*
- *tratamiento de reutilización*
- *Incremento de los recursos disponibles mediante obras de regulación*
- *Incremento de los recursos disponibles mediante obras de conducción*

Además, se considera necesaria la creación de escenarios hidrológicos teniendo en cuenta la interacción de sectores altamente dependiente de los recursos hídricos (energía, agricultura, bosques, turismo, etc.) y el desarrollo de modelos regionales acoplados clima-hidrología que permitan obtener escenarios fiables de todos los términos y procesos del ciclo hidrológico, incluidos los eventos extremos.

Asimismo, a nivel estatal existe el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020. Y las Comunidades Autónomas están desarrollando Estrategias y Planes de cambio climático.

No obstante, a medida que el conocimiento sobre el cambio climático avance, se tomarán medidas para adaptarse.

19. ZONAS PROTEGIDAS, CONSERVACIÓN, ETC.

89. Se manifiesta preocupación por el mantenimiento de la existencia y la mejora de los humedales, en especial los de pequeño tamaño. Aparecen problemas relacionados con la calidad de sus aguas, ¿qué medidas se van a tomar para salvaguardar la integridad de estos ecosistemas tan sensibles?

Existe aún un gran desconocimiento sobre las aguas subterráneas y sus relaciones con las aguas superficiales. Sin embargo, desde la propia Confederación Hidrográfica del Cantábrico se están impulsando nuevos trabajos en este campo. El Esquema Provisional de Temas Importantes recoge líneas de actuación en relación a los humedales, como por ejemplo, restauración de vegetación en zonas húmedas, recuperación de morfología natural de lagos y zonas húmedas, adecuación del régimen hidrológico de zonas húmedas, etc.

Según la Ley 44/2007 sobre el tratamiento específico de los humedales, ya existe una base jurídica para poder defender las pequeñas masas de agua que quedan en el territorio y son vitales para su buen estado ecológico.

90. Incorporar al diagnóstico la red regional de espacios protegidos (paisajes protegidos, monumentos naturales, etc.) que afecta en la demarcación.

El apartado del Esquema Provisional de Temas Importantes que incluye la información sobre zonas protegidas es el 4.2 “Cumplimiento de objetivos de las zonas protegidas”. En este apartado se cita que serán objeto de especial protección los espacios declarados en base a la Ley de Conservación de Espacios Naturales y de Flora y Fauna Silvestre que clasifica los espacios naturales en Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Parques Nacionales. La información a este respecto será ampliada en el Plan Hidrológico de Cuenca.

91. En la elaboración del Plan se debe tener en cuenta los hábitats fluviales, su situación actual y buscar soluciones para aquellas zonas en las que se hicieron escolleras, se eliminó la vegetación de ribera, etc. debido a obras en los ríos. La geometrización de los cauces, los dragados, no son la solución, se deben recuperar las zonas afectadas.

El objetivo fundamental de la Directiva Marco del Agua es alcanzar el buen estado de las masas de agua en el año 2015, mediante el uso sostenible del recurso, siendo muy importantes los

hábitats fluviales. En el EPTI se refleja esta cuestión y se incluyen líneas de actuación como la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, el Plan de Cauces, el Plan Estratégico de Directrices de Gestión Integrada de Costas, restauración de riberas, restauración de dunas y marismas costeras, restauración hidrológico-forestal, revisión de concesiones, etc.

En las Fichas que desarrollan los temas importantes "I.1 Alteraciones hidromorfológicas en ríos y lagos", "I.2 Alteraciones hidromorfológicas en aguas de transición y costeras" y "I.16 Ocupación del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre" se hace especial hincapié en estas cuestiones.

92. Se señala el mal estado de las riberas y ecosistemas: Presencia de basura y restos diversos; ocupación del suelo de ribera por cultivos o edificios; bosques de ribera en mal estado; ruptura de la continuidad del río.

El objetivo fundamental de la Directiva Marco del Agua es alcanzar el buen estado de las masas de agua en el año 2015. En el apartado 4.1 "Estado de las masas de agua" del EPTI se recoge la evaluación del estado, señalando que sólo se ha podido avanzar hasta la fecha en la evaluación del estado de las masas de agua superficiales. Se incluye en el concepto de estado para las masas de agua superficiales tanto su "estado químico", definido a partir de concentraciones límites de determinados contaminantes, como su "estado ecológico", entendido éste como una expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.

Los problemas señalados sobre presencia de basura, ocupación de riberas, etc. están recogidas en las diferentes fichas del Esquema Provisional de Temas Importantes (en concreto, "alteraciones hidromorfológicas en ríos y lagos", "alteraciones hidromorfológicas en aguas de transición y costeras", "ocupación del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre, etc.).

93. El régimen de caudal ecológico debe de ser muy específico, sobre todo cuando son ríos con algún tipo de figura de protección.

De acuerdo a la Instrucción de Planificación, el régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición. En la consecución de estos objetivos tendrán prioridad los referidos a zonas protegidas, a continuación los referidos a masas de agua naturales y finalmente los referidos a masas de agua muy modificadas.

Esta cuestión se presenta en el apartado 5 “Objetivos que se pretenden alcanzar con la planificación” de la ficha del EPTI “I.7 Caudales ecológicos”, en el que se recoge que se conferirá prioridad a los caudales ecológicos referidos a zonas protegidas.

94. Se pone de manifiesto el acuciante problema que sufren actualmente los fondos marinos gallegos (oriental) y asturianos (occidental), debido a la acuciante desaparición de muchas algas. Esto se ha constatado a través de la observación directa y de los comentarios de los propios pescadores y mariscadores de las zonas afectadas.

Esta cuestión ha sido transmitida a la entidad correspondiente de llevar a cabo los trabajos de evaluación del estado ecológico de las masas de agua de las zonas a las que hace referencia esta aportación.

20. OTROS TEMAS

95. Resaltar una inadecuada gestión del agua en la comarca del Bajo Bidasoa, la ausencia de una gestión racional y sostenible que actúe sobre la demanda. Como ejemplo se destaca el incumplimiento de caudales ecológicos, la existencia de vertidos industriales y vertederos incontrolados en la zona de Jaizkibel.

En forma general, como es el objeto del Esquema Provisional de Temas Importantes, se han considerado los aspectos de la presente propuesta, siendo abordados en concreto en la siguiente etapa de Programa de Medidas.

96. Definir el estado de las masas de agua artificiales de Reocín y Mediajo.

En colaboración con el Gobierno de Cantabria y según la información recopilada, ambas masas de agua se han incluido en el Esquema Provisional de Temas Importantes como masas de agua artificiales (apartado "4.1.2 Caracterización de las masas de agua superficiales"). Actualmente se está trabajando en la evaluación del estado de ambas masas de agua.

97. Se identifican problemas relacionados con la inadecuada utilización de los fondos europeos y estatales asignados para el saneamiento y la recuperación de cauces, márgenes y zonas de expansión de los ríos. Se propone todo ello como un tema importante.

Los comentarios planteados se han tenido en cuenta en la elaboración de la ficha I.16 sobre "Ocupación del Dominio Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre", haciendo hincapié en que todas las actuaciones y cada una de sus alternativas deberán contemplar medidas tendentes a cumplir los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua, siendo sostenibles y económicamente viables. Posteriormente se analizarán los casos concretos en el Programa de Medidas. En detalle, se ha incluido en el último párrafo del apartado 1 de la Ficha de ocupación del DPH y DPMT lo siguiente:

En relación a proyectos de saneamiento, ordenación hidráulica o el acondicionamiento de cauces y márgenes fluviales realizados en el DPH, promovidos en gran parte por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino o Corporaciones locales y financiados en gran medida por fondos europeos, se debe velar por minimizar los daños asociados al ecosistema, la flora, el arbolado y la fauna, así como promover una correcta programación de las actuaciones a realizar e intervención de equipos interdisciplinarios cualificados, en su diseño y realización.

98. El documento entregado en las reuniones de participación pública es muy genérico. El punto 4.4 no se ha enfatizado que normativa de aplicación debe homogeneizarse. Pide enfatizar que normas, leyes, etc. y no solo hablar de planes y programas.

El documento que se distribuyó a los asistentes de las diferentes jornadas de participación pública consistía en un documento de trabajo preliminar, que sólo pretendía ser un punto de partida para el desarrollo de las reuniones, dejando abierta la posibilidad de realizar aportaciones por parte de los agentes interesados, desde el inicio de la elaboración del Esquema Provisional de Temas Importantes. De este modo y como pueden verificar en el Esquema Provisional de Temas Importantes actualmente en consulta pública, se han matizado las referencias normativas en cada caso.

99. Singularidad del uso del agua como fuente de salud, es decir, como recurso sanitario. En este conjunto se englobarían las aguas termales, el desarrollo del sector del termalismo estableciéndose una evolución futura y sostenible del mismo.

El conjunto de aguas minero-termales se encuentra en el registro de zonas protegidas, dentro de la evaluación del estado de las masas de agua (apartado 4 del EPTI).

100. Diferentes agentes interesados han elaborado fichas sobre algunos temas importantes (p. ejemplo, "Inundaciones", "Extracción de agua subterránea", "Cuestiones económicas y recuperación de costes de los servicios del agua", "Cambio climático", etc.).

Tras la revisión de la información aportada en las Fichas mencionadas, se han incluido las aportaciones en las fichas correspondientes del Esquema Provisional de Temas Importantes.

6.3 EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO

REGISTRO DE ENTRADA	OFICINA PLAZA DE ESPAÑA
08/05/2009	13:40:53

E001200900006231

SECRETARÍA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL

O F I C I O

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
30 ABR 2009
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Ambiental
SALIDA 16412

S/REF.

N/REF. SGEA/AJR/ 20080P13AG

ASUNTO Comunicación de la aprobación del documento de referencia para la evaluación ambiental del Plan Hidrológico 2009-2015 y traslado del mismo.

REMITENTE Dª. María Jesús Rodríguez de Sancho
DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD
Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

DESTINATARIO D. JORGE MARQUÍNEZ
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
Plaza de España 2
33071-Oviedo

Adjunto se remite copia de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se aprueba el documento de referencia para la evaluación ambiental del Plan Hidrológico 2009-2015 de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Se adjunta asimismo documento de referencia y copia de las sugerencias remitidas por las administraciones afectadas y público interesado.

Madrid, 30 de ABRIL de 2009
LA DIRECTORA GENERAL DE
CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL

María Jesús Rodríguez de Sancho

Confederación Hidrográfica del Cantábrico
PRESIDENCIA
PASE
1. Original 2 Copia
☐ Presidencia
☐ Comisaría de Aguas
☐ Dirección Técnica
☐ Secretaría General
☐ O.Planificación
☐ Acunor
☒ I. H. Benito
☐
Fecha 8/5/09 Firma

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE CAMBIO CLIMÁTICO

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD
Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL POR LA QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN HIDROLÓGICO 2009-2015 DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO.

I. ANTECEDENTES

La Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, establece la obligatoriedad de someter a evaluación medioambiental los planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Tal es el caso de los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas que establecen el marco para la aprobación de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.

El Plan Hidrológico 2009-2015 de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico viene a sustituir al Plan actualmente vigente, aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, publicado en el BOE de 11 de agosto de 1998. La Directiva 2002/60/CE Marco del Agua establece un nuevo modelo de gestión del agua cuyo objetivo básico es alcanzar el buen estado de las masas de agua y ecosistemas dependientes a través de una gestión racional e integrada del recurso. La Directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas y el Real Decreto 907/07, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la hidrológica. El nuevo marco legislativo instaura un nuevo proceso de planificación que debe culminar con la aprobación de los planes hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas para el próximo 2010.

Con fecha 22 de agosto de 2008 como prevé el artículo 18 de la Ley 9/2006, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico remitió a esta Dirección General la documentación necesaria para iniciar el procedimiento de evaluación ambiental. Con fecha 24 de octubre de 2008 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental notificó a las Administraciones previsiblemente afectadas y publico interesado de carácter estatal y autonómico la iniciación del procedimiento, solicitando sus consideraciones para la realización de la evaluación. Se adjunta como anexo I del documento de referencia el listado de administraciones previsiblemente afectadas y publico interesado de carácter estatal y autonómico consultados mediante correo ordinario. Asimismo dada la amplitud de la consulta que se debía realizar de acuerdo al articulo 9 y 19 de la Ley 9/2006, puesto que la planificación hidrológica condiciona de forma directa o indirecta a todas las administraciones locales, a numerosos sectores económicos, y a un amplio público interesado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 60 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, y a fin de darle la máxima publicidad posible al procedimiento de evaluación ambiental del Plan Hidrológico, se decide comunicar mediante anuncio en Boletín Oficial del Estado nº

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

294 de 6 de diciembre de 2008 (www.boe.es) el inicio del período de consultas a todas las administraciones públicas afectadas y al público interesado.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 3, 9 y 19 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

III. CONCLUSIÓN

A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho, esta Dirección General resuelve aprobar el documento de referencia para la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Hidrológico 2009-2015 de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico, en cuya redacción se han considerado las contestaciones de las Administraciones públicas interesadas y público interesado.

En dicho documento se integra la determinación de las modalidades de información y consulta y el listado de administraciones públicas afectadas y público interesado.

Lo que se comunica a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en su calidad de Órgano Promotor de dicho Plan, para su consideración en el proceso de planificación, y se hace público mediante su inserción en la página Web del Ministerio de Medio Ambiente (www.marm.es).

Madrid, 29 de ABRIL de 2009
LA DIRECTORA GENERAL
DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

Mª Jesús Rodríguez de Sancho

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

SECRETARÍA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN HIDROLÓGICO 2009-2015 DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

1. INTRODUCCIÓN.

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de planes y programas, regulada en la Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, es el instrumento que permite integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones que se deriva de la puesta en marcha de los planes y programas.

Los tres objetivos principales de la EAE son:

a) Diagnóstico de los efectos ambientales de los planes o programas que permita adoptar una decisión:

La EAE se configura como un instrumento de prevención, ya que la integración de las consideraciones ambientales y la prevención, minimización y corrección de impactos se realiza en el primer nivel de decisión, al evaluar las distintas alternativas de actuación propuestas.

Por otro lado, la EAE permite mejorar la transparencia de las políticas públicas al someter a consulta pública los planes y programas que permiten desarrollar éstas. Además permite fomentar y mejorar la participación ciudadana para valorar y, en su caso, incorporar las aportaciones de la ciudadanía desde la primera fase de elaboración de los planes y programas que desarrollan la acción pública en los distintos ámbitos sectoriales.

b) Propuesta de medidas para integrar la dimensión ambiental en el diseño del Plan.

La evaluación de las alternativas que permitan alcanzar los objetivos planteados en el plan o programa y la valoración de las medidas propuestas en cada alternativa, permite identificar los efectos ambientales de las diferentes posibilidades de actuación y elegir aquella que suponga una mejor integración de la variable ambiental y unos menores efectos negativos sobre el medio.

c) Diseño de un sistema de seguimiento de cumplimiento y eficacia de las medidas adoptadas.

La EAE no termina en la integración de la componente ambiental en los planes o programas, sino que establece también un sistema que permite valorar el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales incluidos en el documento, así como la aplicación

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

de los criterios ambientales estratégicos para garantizar la protección a largo plazo de los recursos.

El conjunto de estrategias, directrices y propuestas contenidas en los planes y programas no se ejecutan directamente, sino que se desarrollan y ponen en marcha a través de un conjunto de proyectos concretos. Por tanto, la EAE supone un marco en el que se desarrollarán futuros proyectos que, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y según sus características concretas, serán sometidos si así corresponde al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Como consecuencia de lo expuesto la EAE fomenta, en definitiva, la transparencia de las actuaciones de la Administración pública, en línea con los principios de buena gobernanza y actuación pública.

Los aspectos mencionados contribuyen a dotar, si cabe, de una mayor integración de la variable ambiental en el proceso de toma de decisiones desarrollado en las distintas fases de redacción de los planes hidrológicos de cuenca antes de su aprobación definitiva. Este proceso se está desarrollando en función de las disposiciones emanadas de la Directiva 2000/60/CE, transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, mediante el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, así como por el conjunto de modificaciones normativas llevadas a cabo desde entonces en la legislación de desarrollo de la Ley de aguas, especialmente a través de la modificación del Reglamento de la Administración del agua y de la Planificación Hidrológica (Real Decreto 907/2007) y la orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.

El conjunto de las modificaciones mencionadas tiene por objeto la incorporación de los principios y objetivos de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y la legislación española de aguas, para que éstos se reflejen a través de los Planes Hidrológicos de cuenca, objeto de esta EAE.

Los objetivos de la planificación hidrológica serán los de conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de la Ley de aguas,

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

es decir las superficiales continentales, las de transición, las costeras y las subterráneas, que se constituyen en si mismos objetivos ambientales. Además, la planificación hidrológica incluye entre sus objetivos satisfacer las demandas de agua, el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

Por ello este documento trata de servir de guía e introducir algunas cuestiones relativas a la planificación ambiental y otras políticas generales de protección ambiental, sin abandonar las propias que la legislación ambiental considera, y que deberán ser tenidas en cuenta en la redacción del ISA que el órgano promotor deberá elaborar junto al borrador de plan; tras esta fase del proceso, será redactada la memoria ambiental de forma conjunta entre ese órgano y el ambiental, de forma que se recoja en la misma la consideración dada a todas las cuestiones ambiéntales en el proceso de redacción de los planes de cuenca antes de su aprobación definitiva.

2. FASE DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS PREVIAS LLEVADAS A CABO PARA LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA.

La Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente indica en su artículo 19 que una vez que los órganos de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella (en adelante, órgano promotor) comuniquen al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (en adelante, órgano ambiental) la iniciación de un plan o programa mediante la presentación del Documento de Inicio, el órgano ambiental consultará al menos a las Administraciones públicas afectadas, otorgándoles un plazo de 30 días para que remitan sus sugerencias.

La presentación del Documento de Inicio por parte del órgano promotor Confederación Hidrográfica del Cantábrico al órgano ambiental Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino fue realizada con fecha 22/08/08.

Posteriormente y con fecha 24/10/08, el órgano ambiental remitió solicitud de consultas a las cuarenta y ocho (48) Administraciones afectadas y público interesado identificados. Puede encontrarse en el anexo I de este documento la lista completa de las

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

consultas realizadas, y en el anexo II un esquema de las respuestas recibidas, organizadas por temas principales.

Mediante Resolución 69.444/08 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 294 de 6/12/08 (www.boe.es) se comunicaba el inicio del período de consultas a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico. En esta Resolución se indicaba que en la sección de evaluación ambiental de la página web www.marm.es se encontraba disponible la relación de los consultados.

Con fecha de 28/11/08, y en previsión de la aplicación del artículo 11 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, referido a las consultas transfronterizas, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental comunica a la Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y Otras Políticas Comunitarias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación su interés en hacer partícipe a la República de Francia del procedimiento de evaluación ambiental del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico, por considerar que el desarrollo del mismo pudiera tener efectos ambientales significativos en su territorio. A tal efecto, se facilita CD con el Documento de Inicio y se informa de la disponibilidad de otros documentos de interés en la página web de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (www.chcantabrico.es).

Con fechas 13/01/09 se recibe en esta Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la respuesta de la Embajada de Francia respectivamente, manifestando su interés en participar en la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan.

3. PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD. OBJETIVOS AMBIENTALES E INDICADORES ASOCIADOS.

Los principios de sostenibilidad que deben alcanzarse con la planificación hidrológica se derivan de la aplicación en nuestro país de los Convenios Internacionales en materia de protección del medio ambiente de los que España es Parte Contratante, de las diferentes políticas, planes y programas existentes a nivel comunitario, nacional y regional, así como de la legislación existente sobre protección, conservación y defensa del medio ambiente en los niveles de gobierno europeo, nacional y autonómico.

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Estos objetivos de protección del medio y de desarrollo sostenible permiten establecer un marco en el que deben inscribirse las políticas sectoriales desarrolladas, y especialmente, la gestión de los recursos naturales. Éste es el caso de la planificación de los recursos hídricos, para la cual existen unos objetivos ambientales claros.

Los indicadores de los objetivos ambientales sirven para informar sobre el estado y la evolución de los objetivos ambientales en el marco de la planificación, por lo que deben estar directamente relacionados con dichos objetivos.

Los principales principios de sostenibilidad que deben regir el Plan Hidrológico de Demarcación, de modo que se incorporen los objetivos de la Ley 9/2006, se encuentran en el anexo III del presente documento de referencia. Del análisis de dichos principios se han deducido los objetivos ambientales y los indicadores asociados que deben contemplarse durante la elaboración del Plan, para la redacción del ISA (análisis y comparación de las diferentes alternativas y actuaciones) e incorporarse al posterior seguimiento del Plan. Dichos objetivos e indicadores se encuentran recogidos también en el anexo III de este documento.

4. AMPLITUD Y NIVEL DE DETALLE DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA)

En este Documento de Referencia se han incorporado los resultados de las consultas efectuadas a las Administraciones afectadas y público interesado de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico. En el momento de redactar el presente documento se habían recibido diecisiete (17) respuestas en total.

Para la redacción del ISA, el órgano promotor deberá recabar la información necesaria de otras Administraciones públicas y público interesado. Para ello debe realizarse un intercambio de información y la necesaria colaboración y la cooperación con los mismos.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino colaborará con el órgano promotor, en la medida de lo posible, en la recopilación y análisis de los datos, de modo que se garantice la validez de los indicadores establecidos. El ISA incluirá en su anexo III, junto con los objetivos ambientales y los indicadores asociados, un listado de todos los organismos y agentes consultados, así como un resumen de la información recogida de cada uno de ellos.

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

4.1. CONTENIDO DEL PLAN

El contenido mínimo del ISA se encuentra recogido en el anexo I de la Ley 9/2006, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y ha de incluir los aspectos que a continuación se desarrollan, además de otros que el órgano promotor considere relevante incluir por las particularidades de la Demarcación Hidrográfica correspondiente.

4.1.1. Esbozo del contenido del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica. Información a considerar desde el punto de vista ambiental.

El ISA debe contener un resumen del contenido del Plan Hidrológico, que en virtud del artículo 81 del RD 907/2007, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica ha de incluir:

- Memoria:

i. La descripción general de la Demarcación Hidrográfica

ii. La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas sobre las aguas

iii. La identificación y mapas de las zonas protegidas

iv. Las redes de control establecidas para el seguimiento del estado de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas y de las zonas protegidas, y los resultados de este control

v. La lista de objetivos medioambientales para las aguas superficiales, subterráneas y las zonas protegidas, incluyendo los plazos previstos para su consecución, la identificación de condiciones para excepciones y prórrogas, y sus informaciones complementarias

vi. Un resumen del análisis económico del uso del agua, incluyendo una descripción de las situaciones y motivos que puedan permitir excepciones en la aplicación del principio de recuperación de costes.

vii. Un resumen de los Programas de Medidas adoptados para alcanzar los objetivos previstos

viii. Un registro de los programas y planes hidrológicos más detallados relativos a subcuencas, sectores, cuestiones específicas o categorías de aguas, acompañado de un resumen de sus contenidos, así como las determinaciones pertinentes para el plan hidrológico de cuenca derivadas del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 de Plan Hidrológico Nacional y Ley 11/2005, por la que se modifica la Ley 10/2001)

ix. Un resumen de las medidas de información pública y de consulta tomadas, sus

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

resultados y los cambios consiguientes efectuados en el plan.

x. Una lista de las autoridades competentes designadas.

xi. Los puntos de contacto y procedimientos para obtener la documentación de base y la información requerida para las consultas públicas.

- Normativa: incluirá los contenidos del Plan con carácter normativo, según lo recogido en el artículo 81 del Reglamento de la Planificación Hidrológica y los trabajos desarrollados por la Dirección General del Agua del MARM.

En relación con los puntos a) i-iii y vi, lo recogido en estos apartados son cuestiones que determinan los objetivos propuestos para las masas de agua de la Demarcación, y consecuentemente las diferentes alternativas de actuación y las medidas a implementar. De todo ello se derivan los aspectos ambientales a valorar e integrar en el Plan Hidrológico de la Demarcación a través del procedimiento de EAE actualmente en marcha. En este sentido, la información presentada debe ser completada en el ISA en relación a lo recogido en el Documento de Inicio de la DH del Cantábrico. Los detalles concretos a completar se encuentran recogidos en el anejo IV de este documento, y se incluyen algunas consideraciones en el punto siguiente.

4.1.2. Objetivos principales del Plan

El ISA deberá reflejar los objetivos generales de la planificación hidrológica recogidos en el artículo 1 del RD 907/2007, por el que se aprueba en Reglamento de Planificación Hidrológica, especificando su aplicación a los diferentes tipos de masas de agua. El ISA también debe recoger los objetivos del Plan Hidrológico, destacando los objetivos de carácter ambiental propuestos para el ámbito geográfico de la DH del Cantábrico.

Los objetivos incluidos en el Plan Hidrológico deben plantearse para dar respuesta a los principales problemas concretos encontrados en la Demarcación, por lo que están directamente relacionados con éstos. Los problemas concretos pueden ir más allá de los temas importantes identificados en el Esquema de Temas Importantes (ETI), puesto que existen problemas relevantes desde el punto de vista ambiental que podrían ser excluidos una vez que se configura la versión final del ETI. Sólo un correcta identificación de los problemas, diferenciando con precisión entre las causas y los efectos de los mismos, asegura que los objetivos propuestos sean los adecuados para darles solución y que el resto del plan (alternativas, medidas, posibles efectos, etc.) esté correctamente enfocado. Por ello, el ISA

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

debe concretar no sólo los problemas concretos identificados, sino también las causas y efectos de cada uno,

Los objetivos deberán estar consensuados en la medida de lo posible con las Administraciones afectadas y público interesado por el Plan y ser mensurables de modo que pueda determinarse su grado de cumplimiento durante la vigencia del Plan y especialmente a su finalización. Para ello, se utilizará al menos el sistema de indicadores asociado a los objetivos ambientales recogido en el anexo VI de este Documento de Referencia, sin perjuicio de otros seleccionados por el órgano promotor en virtud de las particularidades y su conocimiento existente sobre el territorio de aplicación del Plan. La evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos ambientales se detalla en el punto 4.4 Seguimiento Ambiental del Plan de este documento y en el anexo VI.

El órgano promotor ha de identificar con claridad en el ISA cómo los objetivos del Plan Hidrológico se correlacionan y responden a los objetivos generales de la planificación hidrológica, particularmente a los objetivos ambientales. Para ello, la información deberá presentarse en un cuadro similar al siguiente:

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Objetivos de carácter general. art 1 RPH	Tipo de masas de agua	Objetivos ambientales Art. 35 RPH	Problemas concretos de la DH	Objetivos del Plan Hidrológico de la DH
I. Conseguir el buen estado y la adecuada protección del Dominio Público Hidráulico y de las aguas	Aguas superficiales	• Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua • Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua con el objeto de alcanzar un buen estado de las mismas • Reducir progresivamente la contaminación de sustancias prioritarias, y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones, y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias		
	Aguas subterráneas	• Evitar o limitar la entrada de contaminantes, y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua • Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua , y garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga • Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier contaminante derivado de la actividad humana		
	Zonas protegidas	Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en una zona y alcanzar los objetivos particulares que en ellas se determinen		
	Masas artificiales Masas muy modificadas	Proteger y mejorar las masas de agua artificiales y muy modificadas para lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales		
	Masas con objetivos menos rigurosos			
II. Satisfacción de las demandas de agua				
III: Equilibrio y armonización del desarrollo regional, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales				

Tabla 1. Correlación entre los objetivos establecidos con carácter general en la planificación hidrológica y los propios del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico.

En dicha evaluación se analizará de forma resumida y acompañándola de información cartográfica aquellos objetivos y masas de agua donde los diferentes objetivos entren en conflicto, indicando, en su caso, la existencia y denominación de espacios naturales protegidos.

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX : 91 597 58 16

Respecto de los objetivos generales del futuro Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico, se indican en particular unas consideraciones con respecto a lo expuesto en el Documento de Inicio que deberán ser incluidas y tratadas con más profundidad en el ISA:

a) Los objetivos de satisfacción de demandas:

Por otro lado, el Documento de Inicio no se recogen los resultados de la aplicación de un modelo para estimar los balances en los distintos sistemas de explotación de la DH del Cantábrico. Este modelo de optimización debe ser sometido a distintos escenarios en los que se planteen distintas hipótesis respecto a los recursos con los que cuentan los sistemas. El ISA ha de recoger los resultados de la aplicación del modelo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

* El análisis de los balances mediante la aplicación del modelo debe tener en cuenta los recursos, las demandas y las restricciones existentes en las distintas unidades de explotación de la DH, de acuerdo con la información que aparece en el anexo IV.

* Los caudales ecológicos que han de incluirse en el modelo no pueden ser los indicados en el Plan Hidrológico Nacional. que con carácter general cuantificaba como caudal mínimo el equivalente al 10% de la aportación media en cada punto. Tal y como recoge la Directiva Marco del Agua en su espíritu y en su contenido, los caudales ecológicos no son los caudales mínimos, establecidos éstos como un porcentaje determinado de la aportación hídrica, sino los caudales que permiten mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados.

Por tanto, el establecimiento pormenorizado del régimen de caudales ecológicos cobra especial relevancia para alcanzar los objetivos marcados por la legislación europea de buen estado o potencial ecológico de las masas de aguas de la cuenca. En este sentido, la aplicación del modelo debe realizarse aplicando los datos de caudales ecológicos resultantes del proceso de concertación.

Además, el ISA debe recoger los criterios que se hayan seguido para el establecimiento de los caudales ecológicos básicos que representen las condiciones límites de tolerancia a la escasez del caudal, así como la estimación de los mismos, en virtud del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/20001, por el que se aprueba el Texto Refundido de

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

la Ley de Aguas, y el artículo 18 del R.D. 907/2007, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. Como las exigencias de hábitats y caudales circulantes de las especies no se mantienen estables durante el año, además del establecimiento de los caudales ecológicos básicos sería necesario establecer un régimen de caudales modulados de acuerdo con las variaciones de los caudales circulantes a lo largo del año, con el objetivo de proteger el hábitat fluvial en todos los estados de desarrollo de las especies acuáticas y las que son dependientes de éstas.

* El modelo debe de aplicarse para evaluar en el horizonte temporal de 2027 el balance entre los recursos previsiblemente disponibles y las demandas previsibles correspondientes a los diferentes usos. Para la realización de este balance, y siguiendo lo dispuesto en el punto 3.5.2 de la Instrucción de Planificación Hidrológica y en el Libro Blanco de Agua, ha de tenerse en cuenta el posible efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de la Demarcación. Para ello, debe aplicarse un porcentaje de reducción global de las aportaciones naturales de referencia del 11% (hipótesis de aumento de 1º C de la temperatura) y del 22% (hipótesis de un aumento de 1º C y una reducción de las precipitaciones en un 5%).

4.1.3. Relación del Plan con otros Planes y Programas conexos

La política de aguas es una política pública transversal ya que, debido a la importancia de los recursos que incluye, interacciona con numerosos elementos estratégicos. En la mayoría de los casos existen ya políticas, planes y programas de carácter sectorial, por lo que la EAE es el momento idóneo para identificar las posibles interacciones con los objetivos de otros instrumentos existentes, los cuales son principalmente y para el caso que nos ocupa los relativos a los usos del agua y del suelo.

El ISA ha de analizar la coherencia entre los objetivos del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico y los objetivos de las distintas políticas, planes o programas existentes tanto a nivel nacional (incluyendo la aplicación a nuestro país de los Convenios internacionales de los que España es Parte Contratante) como autonómicos que estén interrelacionados con el Plan. Entre otros, debe hacerse en el ISA una referencia expresa al VI Programa Europeo en materia de Medio Ambiente, indicando cuáles de sus objetivos van a ser reforzados y fortalecidos como consecuencia de la formulación de los objetivos del Plan Hidrológico del Ebro.

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Se incluye en el anexo VII de este Documento de Referencia un listado no exhaustivo de los principales planes cuyos objetivos o actuaciones pueden estar relacionados con la planificación hidrológica. Dada la influencia de la planificación hidrológica en números sectores, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico deberá revisar dicho listado y actualizarlo, en su caso, incorporando todos aquellos planes o programas que puedan tener incidencia significativa sobre el medio ambiente y que tengan dependencia del recurso agua. Una vez actualizado el listado se seleccionarán aquellos planes que:

- impliquen variaciones significativas en la oferta/demanda de los sistemas de explotación
- Conlleven alteración significativa del medio: obras públicas, planes de ordenación del territorio, turismo, agrarios, etc
- Limiten el uso del suelo: planes de ordenación de recursos naturales, hábitats o especies, etc

Sobre dichos planes el ISA debe realizar una evaluación en profundidad sobre la coherencia y compatibilidad de los objetivos y actuaciones previstos en aquellos y el Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico. Este análisis se configura como uno de los elementos clave del ISA y de la EAE.

Debe realizarse una evaluación que ponga de manifiesto cómo se integran los objetivos del Plan Hidrológico con los de los distintos instrumentos de planificación, al objeto de promover la consecución de objetivos comunes. En los casos en los que pueden presentarse solapamientos, conflictos o incompatibilidades con los objetivos y líneas de actuación de los planes o programas sectoriales, deben evaluarse las alternativas de actuación del Plan Hidrológico poniendo de manifiesto los posibles problemas detectados

4.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN DEL PLAN

4.2.1. Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no aplicar el plan.

El ISA debe recoger un estudio del medio en el que se describa los elementos ambientales incluidos en el ámbito geográfico de la cuenca y su estado actual, con el fin de

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

establecer un marco general de análisis de los posibles efectos del Plan. Para ello, debe realizarse un inventario del medio físico terrestre y marino que permita valorar la realidad físico-biológica del ámbito territorial de la DH. A modo de orientación se incluyen los siguientes aspectos a tener en cuenta:

- Ámbito geográfico: marco geográfico, características fisiográficas
- Características climatológicas: precipitación, temperatura, evapotranspiración potencial
- Geología y geomorfología: estructura, litología, elementos geomorfológicos sobresalientes. Debe realizarse un inventario de la geodiversidad existente en el ámbito territorial de la DH del Cantábrico, conforme al anexo VIII de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de modo que se tenga en cuenta en el proceso de planificación hidrológica el valioso patrimonio geológico asociado a las masas de agua superficiales y subterráneas, así como los elementos geológicos de las aguas de transición y costeras. Se realizará también un estudio de pérdida de suelo por erosión, con datos cuantitativos y cualitativos
- Hidrología e hidrogeología: red fluvial, lagos y zonas húmedas, ecosistemas, unidades hidrogeológicas, infraestructuras de almacenamiento y de captación, red de riegos tradicionales, aprovechamientos energéticos en la cuenca, red de abastecimiento.
- Áreas Protegidas, independientemente de su figura de protección. Especies y hábitats protegidos presentes en en ámbito geográfico de la Demarcación.
- Vegetación
- Fauna
- Hábitats presentes
- Ecosistemas más relevantes
- Patrimonio: vías pecuarias, montes públicos, patrimonio histórico-artístico, etc. También debe recogerse el patrimonio arqueológico sumergido o las rutas históricas del Camino de Santiago.
- Infraestructuras: presas, canales, carreteras, ferrocarriles, tendidos eléctricos, EDARs, etc.
- Medio socioeconómico: debe recogeré el análisis de la población, los diferentes sectores de actividad y otros factores que puedan resultar relevantes.

Deben cartografiarse todos los elementos analizados y elaborar listados o fichas de aquellos aspectos que así lo requieran.

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgeai@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Para la alternativa de no actuación o alternativa cero, los resultados del análisis sobre cómo los principales aspectos del medio ambiente evolucionarán en el futuro y pueden afectar a la Demarcación puede resumirse en una tabla como la que sigue:

Elemento del medio ambiente/ relacionado o afectado por el medio ambiente	Evolución previsible
Aire, clima	
Vegetación, fauna, ecosistemas, biodiversidad	
Patrimonio geológico	
Suelo, paisaje	
Agua, población, salud humana	
Patrimonio cultural	
Bienes materiales	

Tabla 2. Resumen de la evolución de los principales aspectos del medio ambiente o relacionados/afectados por él en la alternativa de no actuación en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

4.2.2. Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa.

- El ISA ha de identificar aquellas zonas de mayor relevancia ambiental, las que incluyan especies amenazadas y las que sean representativas de ecosistemas bien conservados terrestres o marinos vinculados a la existencia de agua.

Además, deben recogerse los espacios catalogados con alguna figura de protección, tales como Red Natura 2000 (LIC, ZEC Y ZEPA), lista de Humedales de Importancia Internacional (lista Ramsar, Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), Zonas Ospar y el resto de figuras recogidas en Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. También es interesante que el ISA identifique en el ámbito de la Demarcación las IBAs (Zonas de Importancia para las aves) existentes, y las figuras de protección Zonas Importantes para los lepidópteros, para anfibios y reptiles y para mamíferos, identificadas con criterios científicos para la conservación de estos grupos animales, Reservas Fluviales, Refugios de Pesca, etc.

También se reseñarán las zonas terrestres o marinas vinculadas a la existencia de agua que, si bien no están catalogadas actualmente con alguna figura de protección, pueden estarlo en el futuro debido a la existencia de estudios que así lo avalan, a la importancia y/o representatividad de la biodiversidad que albergan, bien a los planes de las Comunidades Autónomas encargadas de su designación, o porque se encuentran en tramitación para ser

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

protegidas a medio plazo. Entre otros, deben incluirse zonas con ecosistemas dependientes o vinculados con aguas costeras, marinas o de transición como playas, acantilados, marismas, estuarios, lagunas costeras, comunidades bentónicas, etc.

Para ambos tipos de zonas marinas y terrestres, tanto si están catalogadas como no, que son especialmente sensibles o importantes desde el punto de vista ambiental, deben analizarse las principales presiones y problemas existentes en relación con el agua y su probable evolución en caso de no aplicar el Plan Hidrológico. La misma evaluación será realizada para las especies de fauna y flora incluidas en los anexos reseñados anteriormente,

En relación con los espacios, y las especies que están incluidos en la Red Natura 2000, para cada espacio identificado deben recogerse:

- Hábitats presentes en el ámbito geográfico de la Demarcación y que aparezcan recogidos en el anexo I de la Ley 42/2007, del Patrimonio natural y la Biodiversidad.

Para la elaboración del ISA es interesante consultar el Manuel de Interpretación de los hábitats de interés Comunitario de la CA. Del País Vasco, elaborado por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, que recoge información relativa a la ecología, distribución, estado de conservación, estados a fomentar (que podrían considerarse objetivos específicos del hábitat), vulnerabilidad y recomendaciones para la gestión de los hábitats continentales. Actualmente este Departamento está también trabajando en la elaboración de un manual similar para los hábitats marinos de interés comunitario.

Del resultado de las consultas realizadas se indica que es necesario que se analice con especial detalle aquellos hábitats de interés comunitario para los que la Comisión Europea considera deficiente la designación de lugares de importancia comunitaria en la región atlántica de España que los alberguen. Concretamente, se trata de los siguientes hábitats:

- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de *Erica ciliaris* y *Erica tetralix* (4020*)
- Turberas altas activas (7110*)
- Mires de transición (7140*)

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

En este sentido, se deberían tener en cuenta los resultados del proyecto "Bases ecológicas para la conservación de los tipo de hábitats de interés comunitario en España", realizado por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, principalmente en lo concerniente a la tipificación y caracterización ecológica de esos tipos de hábitat, a la definición, determinación y evaluación de su estado favorable de conservación, y al análisis de sus principales factores de amenaza

Además, cabe indicar aquí que la Ley 7/1992 de Pesca Fluvial de Galicia permite a esta Comunidad Autónoma la declaración de masas de agua de interés especial para la riqueza piscícola. En este sentido, el ISA debería considerar al río Eo de la DH del Cantábrico como un tramo de interés natural y ambiental, habida cuenta de la importancia de sus poblaciones salmoneras y de lamprea y de los esfuerzos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia para poner a disposición de estas poblaciones el máximo hábitat posible, incrementando la permeabilidad de las presas hasta las zonas de cabecera.

- Especies de flora recogidas en el anexo II de la Ley 42/2007, especies recogidas en el anexo IV, en el anexo V de la citada norma, o especies incluidas en los catálogos nacional o autonómicos en las categorías de en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat y vulnerables. Debe especificarse el anexo al que pertenecen de la Ley, el tipo de catálogo y Comunidad Autónoma, y la categoría en la que aparecen recogidas
- Especies de fauna recogidas en el anexo II de la Ley 42/2007, especies recogidas en el anexo IV, en el anexo V de la citada norma, o especies incluidas en los catálogos nacional o autonómicos en las categorías en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat y vulnerables. Debe especificarse el anexo al que pertenecen de la Ley, el tipo de catálogo de que se trata la Comunidad Autónoma correspondiente, en su caso, y la categoría en la que aparecen recogidas. Para las especies de aves amenazadas de extinción, se recomienda consultar los planes de acción internacional aprobados por AEWA (http://www.unep-aewa.org/publications/technical_series.htm) y por la Comisión Europea (http://www.birdlife.org/action/science/species/species_action_plans/europe/esap_list.html).

Con respecto a la fauna, debe prestarse una especial atención a aquellas especies cuyo ámbito de distribución es reducido, con una determinada singularidad biogeográfica o genética, o endémicas del ámbito de aplicación del plan. Se relacionan a continuación algunas de las especies sobre las que, a priori, cabría esperar un mayor grado de afección

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

por su representatividad, singularidad, o por estar gravemente amenazadas en el ámbito de aplicación del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico (este aspecto deberá ser estudiado con mayor detalle en el ISA): oso pardo (*Ursus arctos*), visón europeo (*Mustela lutreola*), avetoro (*Botaurus stellaris*), urogallo cantábrico (*Tetrao urogallus subsp. cantabricus*), y Rosalía (*Rosalia alpina*).

También debe el ISA hacer referencia a las especies de peces migratorios presentes en la vertiente cantábrica que, además de su gran interés desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad y de constituir excelentes indicadores de la calidad de los ríos, se encuentran incluidas en el anexo II de la Directiva Hábitats: salmón atlántico (*Salmo salar*), sábalo (*Alosa alosa)* y la lamprea marina (*Petromyzon marinus*).

De las consultas realizadas se deduce que, para todos los espacios protegidos Red Natura 2000 presentes en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico, deben identificarse en el ISA además los siguientes aspectos: cómo y cuando utilizan las especies de flora y fauna el agua, la calidad del agua necesaria para las diferentes especies, el nivel y el régimen del agua de forma estacional, el tamaño que deben tener los humedales y las condiciones físicas que tienen que tener los márgenes teniendo en cuenta su uso por parte de las especies como refugio, lugar de reproducción y de descanso.

- Por otro lado, debe recogerse en el ISA una descripción de la problemática ecológica y económica que puede existir en las distintas masas de agua de la DH del Cantábrico en relación con las especies exóticas invasoras.

- El ISA incluirá también una descripción por un lado de los humedales continentales, y por otro de las masas de agua costeras y de transición incluidas en el ámbito de aplicación del Plan que en la actualidad se encuentren degradados en cuanto a su calidad ambiental, o bien que estén sometidos a presiones importantes. Debe recogerse para cada una de ellos su posible evolución en caso de que no se incluyeran las medidas necesarias para su recuperación el Plan Hidrológico.

Además, el ISA incluirá una descripción de los acuíferos existentes en el ámbito de aplicación del Plan que se encuentren sobreexplotación o en riesgo de sobreexplotación así como aquellos que se encuentren en mal estado químico o en riesgo de contaminación por nitratos y plaguicidas.

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

- Para finalizar, en el ISA deben recogerse los posibles corredores ecológicos identificados en la Demarcación para lograr la conectividad ecológica de este territorio, los cuales se establecerán en particular entre los espacios protegidos Red Natura 2000 y entre aquellos espacios naturales de singular relevancia para la biodiversidad. Tal y como establece el artículo 20 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para ello se otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de montaña y otros elementos del territorio, lineales y continuos, o que actúan como puntos de enlace, con independencia de que tengan la condición de espacios naturales protegidos.

4.2.3. Problemas ambientales existentes que sean relevantes para el Plan.

El cambio climático es un problema ambiental que puede condicionar notablemente los contenidos del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico, debido a su relación directa con las aportaciones naturales, los fenómenos climáticos extremos, el aumento del nivel del mar, y otras cuestiones. Por ello, el ISA debe recoger un análisis de la situación actual y de las tendencias para el ámbito geográfico de la Demarcación, recogidas en los informes, documentos de referencia e información disponible sobre el tema. En particular, debe atenderse a lo recogido en:

✓ Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC)

✓ Informe especial del grupo de trabajo II del IPCC "Impactos regionales del cambio climático: evaluación de la vulnerabilidad" (1997)

✓ Informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente "Evaluación de los impactos del cambio climático en Europa" (2004, EEA Report No 2/2004)

✓ Informe técnico "Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en Europa" (2005, EEA Technical Report No 7/2005)

✓ Informe técnico "Agua y cuestiones de adaptación al cambio climático" (2007, EEA Technical Report No 2/2007)".

✓ Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: escenarios climáticos regionales (AEMET), resultados de los estudios que está llevando a cabo el CEDEX en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en España, resultados del estudio realizado por la Universidad de Cantabria para la elaboración de una metodología para evaluar los impactos en la costa española por efecto del

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

cambio climático.

En el ámbito geográfico de la DH del Cantábrico, él órgano promotor puede haber identificado otra serie de problemas ambientales relevantes diferentes del cambio climático, en cuyo caso deben ser incluidos en el ISA. Para ellos y del mismo modo que en el caso anterior, ha de realizarse un análisis de la situación actual y de las tendencias para el ámbito geográfico de la Demarcación, recogidas en los principales documentos técnicos existentes relativos al tema.

4.3. ANÁLISIS DE LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES DEL PLAN

4.3.1. Criterios ambientales estratégicos

El Plan Hidrológico de la Demarcación es la herramienta específica que permitirá gestionar el Dominio Público Hidráulico y las aguas objeto del texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, y alcanzar los objetivos generales de la planificación hidrológica, derivados de la puesta en marcha de una nueva política de aguas tras la aprobación de la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua y su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico interno.

El Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico propondrá una serie de alternativas de actuación para alcanzar los objetivos propuestos, que llevarán asociadas una serie de medidas. Cabe recordar aquí que los objetivos propuestos deben responder cada uno de ellos a un problema concreto identificado, siendo los problemas un estado negativo de una situación sobre la cual el Plan puede actuar y los objetivos su contrario positivo; es decir, los problemas deben ser abordables en el marco de las actuaciones del plan, y no referirse a situaciones externas relacionadas con el Plan que no sean corregibles a través de actuaciones del mismo.

Los criterios ambientales estratégicos son el instrumento básico que refuerza la integración de la variable ambiental en el Plan, y permiten identificar de forma cualitativa los efectos significativos positivos y negativos que pueden tener las alternativas y las medidas, en cada uno de los elementos del medio donde se pone en marcha. Una vez realizado este análisis preliminar, la evaluación a través de indicadores permite la cuantificación de los impactos significativos.

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

En el anexo V se incluyen los criterios ambientales estratégicos propuestos, agrupados por los principales elementos del medio ambiente, que deben ser utilizados en el ISA para valorar de una manera cualitativa la integración en la planificación hidrológica de la variable ambiental.

4.3.2. Estudio de alternativas y justificación de la elección de las mismas. Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas propuestas.

Una vez que se han recogido los criterios de sostenibilidad del Plan y su traslación a los objetivos ambientales e indicadores asociados, el ISA debe incluir las distintas alternativas generadas para alcanzar los objetivos del Plan. Las alternativas a considerar debe ser técnicamente viables y evaluables, y deben estar dirigidas a satisfacer los objetivos establecidos en el Plan, los cuales han de dar respuesta a los problemas concretos identificados en el ámbito de la Demarcación.

Una de las alternativas a estudiar es necesariamente la alternativa cero, o alternativa tendencial, donde se contempla cómo se alcanzarían los objetivos ambientales para las distintas masas de agua si no se aplicase el Plan, y las medidas establecidas en la Directiva Marco del Agua, es decir, manteniendo el Plan actualmente vigente y cumpliendo las directivas relacionadas con la gestión y calidad del agua diferentes a la Directiva Marco del Agua (aguas residuales, sustancias peligrosas, nitratos, zonas sensibles, inundaciones, etc).

Para clarificar los datos anteriormente indicados, el ISA debe incluir una tabla a modo de resumen similar a la que se presenta a continuación, en la que se correlacione los problemas de mayor relevancia ambiental (identificados en los apartados 4.2.1 y 4.2.2) con las alternativas estratégicas de gestión en la cuenca:

Problema concreto identificado	Objetivos		Alternativas de solución
	Ambiental	Otros	
I			Alternativa 0:
			Alternativa 1:
			Alternativa N
II			Alternativa 0:
			Alternativa 1:
			Alternativa N

Tabla 3. Cuadro sinóptico donde se recogen los problemas concretos identificados en la DH del Cantábrico. su correspondencia con los objetivos que se plantean para solucionarlos y las distintas alternativas de actuación

Una vez presentadas todas las alternativas de actuación para cada problema concreto identificado, el ISA ha de recoger una justificación detallada de la elección realizada de las

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

mismas, utilizando para ello criterios objetivos y cuantos argumentos sean necesarios para explicar la elección. En particular, se pondrán de manifiesto las razones de índole ambiental que han soportado la elección de una determinada alternativa.

Es muy importante que las alternativas elegidas de cada problema sean finalmente compatibles entre sí y puedan ser visualizadas y valoradas en conjunto, dando lugar a una gestión integrada de los recursos de la cuenca y de sus problemas.

La selección de las alternativas del primer problema concreto identificado no puede suponer una restricción completa al resto de alternativas, de modo que las siguientes alternativas seleccionadas sean una verdadera elección y no se configuren como una concatenación de decisiones supeditadas completamente a las de la primera alternativa. Es decir, se trata de presentar distintas alternativas a cada problema concreto de tal manera que cada una de ellas pueda ser una solución al mismo. Por ejemplo, para solucionar el problema cuantitativo de las aguas continentales superficiales tipo ríos, se presentan una serie de medidas cuyo volumen de agua ahorrada, como sumatorio, dan solución al problema; de hecho para cada medida se cifra cómo se va reduciendo el déficit. Sin embargo no son alternativas entre si, pues sólo la ejecución conjunta de todas ellas darían solución al problema, lo que implica que no hay comparación de alternativas. En ese caso concreto todo el conjunto de medidas que eliminan el déficit sería una alternativa, pero esta alternativa debe de poder compararse con otras que también encuentren solución al problema.

Problema concreto identificado	Objetivos		Alternativa elegida	Descripción de la alternativa. Análisis de su compatibilidad
	Ambiental	Otros		
I				
II				
.....				

Tabla 4. Cuadro sinóptico donde se recogen el conjunto de alternativas elegidas para alcanzar los distintos objetivos planteados en la DH del Cantábrico

El planteamiento y análisis de alternativas se realizará tomando en consideración las siguientes cuestiones:

1. Las alternativas se deben plantear ante distintos escenarios, los cuales aparecen definidos por factores externos a la Demarcación, sobre los que no existe posibilidad de actuación a través del Plan Hidrológico, pero que puedan condicionar el desarrollo de las alternativas en los horizontes temporales de la planificación. Algunos de ellos son el cambio

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

climático, la evolución demográfica y desarrollo de población en la Demarcación, la evolución de sectores económicos (agricultura, ganadería, industria), la evolución de la política agraria común, el desarrollo turístico y de ocio, el Plan Hidrológico Nacional y la existencia de trasvases, etc.

Para aquellas masas de agua donde el Plan contemple prórrogas para los horizontes temporales de 2021 y 2027 deberán contemplarse asimismo los potenciales escenarios a dichos horizontes. El ISA debe seleccionar y determinar cuales de los escenarios previsibles para la cuenca pueden tener mayor impacto en la planificación, considerando las características propias del ámbito territorial (ej: cuenca deficitaria, ámbito territorial receptor de emigración, etc).

2. Cobra especial importancia para la planificación hidrológica, una vez conocidos los recursos con los que se cuenta y las demandas existentes, establecer en relación a las aguas continentales de cada sistema de explotación unos criterios de prioridad y compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos, que deben marcarse teniendo en cuenta el objetivo de sostenibilidad del uso del agua y la protección de los recursos a largo plazo.

Aunque estas dos cuestiones deben ser recogidas específicamente el Plan Hidrológico de Demarcación tal y como establece el artículo 4 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, dada la importancia que desde el punto de vista de afección ambiental tienen estas decisiones, sería interesante que el ISA recogiese un resumen de las mismas.

La elección entre las diferentes alternativas de actuación o planificación para cada problema concreto identificado así como el establecimiento del orden de preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos determinarán el modelo de gestión de los recursos hídricos elegido para la demarcación hidrográfica, y en buena medida el modelo de desarrollo del ámbito territorial de la Demarcación. Para las alternativas y los posibles órdenes de preferencia planteados el ISA debe recoger cuadros de recursos disponibles y demanda hídrica, de modo que se cuantifiquen los recursos destinados a los diferentes usos en los posibles escenarios identificados:

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

PROBLEMA CONCRETO IDENTIFICADO: ALTERNATIVAS SELECCIONADAS:								
APORTACIONES HÍDRICAS		Escenario 1		Escenario 2		Escenario N		
		Hm³/año	% total	Hm³/año	% total	Hm³/año	% total	
RÉGIMEN NATURAL (Hm³/año)	Superficial							
	Subterráneo							
REGULACIONES (Hm³/año)	Embalses							
	Retornos riegos							
	Retorno Centrales							
	Retornos urbanos							
	Reutilización							
	Desalación							
	Desalobración							
	Transferencias							

Tabla 5: Cuadro-sinóptico de las aportaciones hídricas existentes para el modelo de gestión elegido en la DH del Cantábrico, a través de la combinación de las alternativas seleccionadas para los diferentes problemas

PROBLEMA CONCRETO IDENTIFICADO: ALTERNATIVAS SELECCIONADAS:								
DEMANDA HÍDRICA			Escenario 1		Escenario 2		Escenario N	
			Hm³/año	% total	Hm³/año	% total	Hm³/año	% total
ELEMENTOS TERRITORIALES	Espacios Naturales							
	Abastecimiento urbano							
	Industria no conectada							
	Agricultura	Regadío						
		Secano						
	Ganaderia							
	Transferencias							
	Energía hidroeléctrica							
	Refrigeración de Centrales térmicas							
	Ocio y turismo	Alojamientos turísticos						
		Viviendas secundarias						
		Campos de golf						
	Acuicultura							
ELEMENTOS AMBIENTALES	Cauces superficiales							
	Acuíferos							
	Embalses							

Tabla 6: Cuadro-sinóptico de la demanda hídrica existente para el modelo de gestión elegido en la DH del Cantábrico, a través de la combinación de las alternativas seleccionadas para los diferentes problemas

3. Una vez planteados los posibles criterios de prioridad y compatibilidad de usos, (en particular el orden de preferencia de cada sistema de explotación y los caudales ecológicos) así como los principales problemas identificados y las causas que los originan (apartado 4.1.2), y teniendo en cuenta para cada uso del agua los escenarios tendenciales de oferta y demanda planteados, se incluirá en el ISA un análisis cuantitativo y cualitativo de los impactos

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

que se generarán por los posibles ordenes de preferencia y por las alternativas de actuación propuestas para los principales problemas.

4. Deberá realizarse también una descripción de la manera en la que se realizó la evaluación de las alternativas previstas, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.

Para finalizar, y tal y como indica específicamente el anexo I de la Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, el ISA ha de incluir un informe sobre la viabilidad económica de las distintas alternativas consideradas, en el que se ponga de manifiesto el análisis coste-eficacia de cada una de las medidas consideradas.

Con carácter general, esta evaluación económica se realizará según lo dispuesto en el punto 8.2.4 de la Instrucción de Planificación Hidrológica. Según lo ahí indicado, cuando se valore el coste de las medidas no sólo se considerarán los costes económicos y sociales, sino también los ambientales. Los costes ambientales son difíciles de cuantificar de una manera exacta pero debe realizarse un esfuerzo para reconocer en términos monetarios las externalidades que se deriven de las distintas medidas que componen las alternativas recogidas en el ISA.

En cualquier caso, la metodología de análisis aplicada debe permitir:

- Establecer en cada caso el sujeto, entidad o administración que soporte el coste
- Establecer en cada caso el sujeto o entidad que obtiene el beneficio
- Alcanzar conclusiones sobre si costes y beneficios recaen equilibradamente sobre los mismos agentes sociales, usuarios o entidades
- Calcular los costes y beneficios de carácter monetario según el ámbito local o supralocal
- Identificar y estimar, si es posible, los costes y los beneficios en términos de pérdidas de recursos naturales, bienes y servicios ambientales sin valor monetario en el mercado que generan las distintas alternativas.

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

4.3.3. Efectos de las distintas alternativas consideradas

El ISA ha de realizar un examen ambiental de las distintas alternativas de actuación propuestas. Para ello debe incluirse la descripción de las propuestas contenidas en las distintas alternativas del plan, la descripción y valoración global de los principales impactos de cada una de las alternativas planteadas, en comparación con la alternativa 0 y, en su caso, la opinión de las Administraciones afectadas y público interesado en relación con éstas.

El ISA ha de recoger específicamente, para los cuatro grupos de casos propuestos en apartado 4.2.2 (zonas de relevancia ambiental catalogadas o no, humedales continentales, medio costero marino deteriorado y/o amenazado, zonas con problemática de especies exóticas invasoras y corredores ecológicos) un estudio para estos espacios en el que se particularice el efecto de aplicación de las distintas alternativas de actuación

Una vez definidas las alternativas a considerar, se valorará de una manera sistemática cada una de ellas en relación a los ámbitos temáticos establecidos en este documento, de manera que se pueda realizar una comparación objetiva de las mismas. Como resultado de esta valoración se obtendrá una relación de las alternativas en función de su idoneidad desde el punto de vista ambiental, y se habrá detectado qué alternativas poseen efectos ambientales previsibles significativos.

Con carácter general, para la comparación de alternativas de *modo cualitativo* se emplearán los criterios ambientales estratégicos establecidos en el anexo V. Además, y en función del grado de concreción de la alternativa contemplada y de su nivel de desagregación en medidas o actuaciones, se emplearán para la *evaluación cuantitativa de los efectos* los indicadores establecidos en el anexo VI de este documento.

4.3.4. Programa de medidas de actuación

El ISA debe recoger un resumen de las medidas propuestas en cada alternativa definida anteriormente. Conocer las propuestas de actuación o medidas es esencial para abordar el análisis de los efectos ambientales previsibles, por lo que las diferentes medidas deben presentarse desagregadas hasta donde sea posible y con el máximo grado de concreción posible.

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Problema concreto:	Objetivos		Alternativas	M. básicas		M. complementarias	
	Amb	Otros		Medida	Descripción	Medida	Descripción
I			Alt 0				
			Alt 1				
			Alt 2				

Tabla 7. Cuadro donde se recogen las distintas medidas propuestas para cada alternativa, y se detalla una descripción lo más concreta posible de las mismas.

Por otra parte, el ISA debería incluir un apartado de medidas específicas para la preservación, restauración y conservación de los espacios incluidos en el punto 4.2.2. presentes en el ámbito de aplicación del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico, en este caso los existes en las CC.AA. de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Castilla y León.

Finalmente, las medidas a desarrollar en cada zona de la DH del Cantábrico deben seleccionarse y establecerse justificadamente, de tal manera que quede garantizada la conservación de los recursos naturales que sustentan los ecosistemas asociados a la presencia de agua.

4.3.5. Probables efectos significativos en el medio ambiente

La identificación y valoración de posibles efectos de las medidas del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico que pueden ser fuente de impactos ambientales, ha de llevarse a cabo mediante el estudio de las interacciones entre las medidas propuestas en el Plan y los elementos específicos del medio afectado, que han sido agrupados en ámbitos temáticos en este Documento de Referencia.

El ISA incluirá una tabla donde se crucen los posibles efectos ambientales de la planificación hidrológica (anexo III de este documento) y las medidas del plan incluidas en cada alternativa para la cual se haya concluido previamente tras su análisis (punto 4.3.3 de este documento) que tienen efectos previsibles significativos en el medio ambiente.

Estas medidas podrán ser clasificadas en medidas con efectos ambientales previsibles favorables, desfavorables, y medidas que pueden ser favorables o desfavorables según los

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

criterios empleados. Cada uno de estos tres tipos de medidas requiere un alcance diferente en su evaluación siendo las medidas con efectos desfavorables las que exigen un mayor detalle en la evaluación. Según lo anterior, las medidas con previsible efecto ambiental desfavorable han de ser objeto de una evaluación detallada en el ISA, valorando cuantitativamente y cualitativamente sus efectos sobre los ámbitos temáticos recogidos en este documento.

a) Para la *evaluación cualitativa* de estas medidas, se emplearán los criterios ambientales estratégicos establecidos en el anexo V

b) Para la *evaluación cuantitativa,* se usarán los indicadores establecidos en el anexo III de este documento; se evaluarán también las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en particular:

- La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos
- El carácter acumulativo de los efectos
- El carácter transfronterizo de los efectos
- Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente, incluyendo la magnitud y el alcance espacial de esos efectos (áreas geográfica y tamaño de la población que puedan verse afectadas)
- El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de sus especiales características naturales o del patrimonio cultural existente, la superación de los estándares de calidad ambiental o valores límite fijados en la normativa, la explotación intensiva del suelo, y los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido.

Una vez realizada la evaluación, sería interesante que ISA recogiese para cada problema concreto identificado, una explicación descriptiva de los efectos desfavorables detectados de las medidas incluidas en cada alternativa concreta (sólo de las alternativas con efectos significativos), sobre los siguientes temas:

- Reducción/anulación de los caudales ecológicos de los cursos de agua, ya sean de origen subterráneo o superficial:
  - Afecciones ecológicas debidas a la supresión o reducción del régimen de caudal
- Extracción de aguas subterráneas:
  - Afecciones debidas a la reducción de caudales, o por desecación
  - Afecciones debidas a la reducción del nivel piezométrico

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

- Afecciones debidas a la salinización de acuíferos costeros por sobreexplotación o por intrusión marina

- Extracción de aguas superficiales
  - Afecciones debidas a la existencia de caudales circulantes menores al ecológico
  - Efectos que la regulación de la cuenca supone para la conservación de las especies de fauna y de flora presentes en las masas de agua.
  - Aumento significativo de la concentración de contaminantes. Reducción de la tasa de dilución del agua y capacidad de autodepuración del sistema
  - Afecciones debidas al empleo de los volúmenes muertos o considerados mínimos de los embalses

- Otras afecciones:
  - Efectos ecológicos y sanitarios derivados de la concentración de la fauna en puntos muy localizados para abrevarlos
  - Efectos debidos a la introducción de especies exóticas invasoras por transferencia de recursos entre cuencas/subcuencas
  - Efectos ecológicos derivados de la imposibilidad de luchar adecuadamente contra los incendios forestales. Dificultades de recarga de medios terrestres y aéreos
  - Efectos sobre los procesos erosivos actualmente en curso, Efectos sobre los procesos de pérdida de suelo en los terrenos agrícolas
  - Efectos sobre la calidad de las aguas continentales y litorales derivadas de las actuaciones del Plan que aumenten los niveles de turbidez debido a las pérdidas de suelo
  - Efectos de los aportes de nitratos y nitrógeno total procedentes de actividades agrícolas e industriales sobre la calidad de las masas de aguas continentales, subterráneas, de transición y costeras.
  - Efectos de los aportes de nitratos y nitrógeno total, y salmuera sobre las praderas de fanerógamas marinas y su estado de conservación.
  - Efectos sobre la funcionalidad de los corredores ecológicos
  - Efectos sobre la dinámica del flujo de sedimentos y nutrientes
  - Efectos sobre el consumo de energía y recursos naturales
  - Efectos sobre la generación de residuos y las emisiones atmosféricas.

Se indican a continuación algunas consideraciones específicas respecto al contenido del ISA:

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

I. **Debe incluirse en un capítulo específico los impactos (positivos y negativos) del Plan y del Programa de Medidas sobre las zonas protegidas, aportando los datos sobre las siguientes cuestiones**:

- Cartografía señalando las zonas protegidas y su tipología.
- Cuadro indicativo de los objetivos medioambientales de las zonas protegidas según la directiva Marco del Agua y de los objetivos de calidad, protección, etc., establecidos por la legislación por las que fueron declaradas. En caso de que la legislación autonómica no hubiera establecido objetivos específicos se indicará asimismo dicha circunstancia.
- Un diagnóstico de su estado actual y del grado de acercamiento a la consecución de tales objetivos.
- Descripción detallada de las medidas del Plan encaminadas a la consecución de los mismos, así como los resultados esperados.
- Para aquellas masas de agua donde la consecución de los objetivos ambientales para 2015 se prevea particularmente complicada se analizará la problemática concreta asociada a la misma, se identificarán los objetivos de protección del espacio vinculados al agua, (ecosistemas, hábitats, especies, etc), se describirán las medidas previstas del Plan que incidan (positiva o negativamente) sobre dichas masas de agua y se realizará una estimación del resultado que previsiblemente se pueda alcanzar con las medidas propuestas respecto a los objetivos ambientales del Plan, así como respecto a los valores ambientales por los que fue declarada la zona o espacio.
- En el caso particular de masas de agua de categoría ríos o embalses incluidos en la Red Natura 2000 o corredores ecológicos fluviales, se indicarán claramente el régimen de caudales ambientales y los niveles mínimos de embalse establecidos por criterios técnicos para la consecución del buen estado de la masa de agua, así como los valores actuales (régimen actual) y los que se han decido tras el régimen de concertación, así como el régimen esperable con la aplicación de las medidas del Plan.

En relación con lo anterior, de las respuestas recibidas a las consultas efectuadas se indica que en el establecimiento de los regímenes de caudales ecológicos en las situaciones de alerta y eventual sequía en las zonas protegidas sería necesario considerar prioritario el mantenimiento de régimen de caudales ecológicos.

- Para las zonas húmedas incluidas entre las zonas protegidas, se indicarán las masas de agua subterránea a las que se encuentran conectadas y los niveles piezométricos mínimos, establecidos por criterios técnicos, necesarios para garantizar la satisfacción de las

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

demandas ambientales de estas zonas húmedas y la consecución del buen estado cuantitativo. Se describirá la situación actual, así como la situación esperable con las medidas específicas del Plan.

II. Por otro lado, el ISA incluirá otro capítulo específico dedicado a los artículos 36, 37, y 38 y 39 del RD 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, donde se detallan los casos en que se permiten el establecimiento de prórrogas, objetivos menos rigurosos, deterioro temporal y nuevas modificaciones y alteraciones, así como las condicionantes para su declaración. Se aportará la siguiente información:

En todos los casos: Identificación cartográfica de la masa de agua, diagnóstico, clasificación de su estado, grado de cumplimiento de la legislación de aguas actualmente vigente (Directiva aguas residuales, Nitratos, Prepotables, Peces, etc) figura de protección y grado de cumplimiento de la legislación sectorial por las que fueron declaradas, problemática asociada, y medidas del plan que afecten (positiva o negativamente) a dichas masas en relación con el régimen de excepcionalidad previsto.

III. Para todas las masas de agua (estén o no incluidas entre las zonas protegidas) en que sea de aplicación el Art. 39, de nuevas modificaciones o alteraciones, se aportará la siguiente información:

- Identificación cartográfica de la masa de agua, diagnóstico, clasificación de su estado y grado de cumplimiento de la legislación sectorial por las que fueron declaradas (en caso de tratarse de zonas protegidas).
- Descripción de las modificaciones previstas de las características físicas, en caso de masas de agua superficial, o alteraciones previstas del nivel de la masa de agua, en caso de masa de agua subterránea.
- Análisis de alternativas para dichas modificaciones (gestión de la demanda, restricciones en la garantía, etc). Justificación de las modificaciones o alteraciones, aludiendo al interés público superior y los beneficios sobre la salud pública, mantenimiento de la seguridad humana o desarrollo sostenible.
- En el caso de masas de agua incluidas en las zonas protegidas, se evaluará la compatibilidad de la modificación o alteración con los objetivos o condiciones de protección establecidas en su legislación sectorial.

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

- En el caso de masas de agua incluidas en la Red Natura 2000, se tendrá en cuenta todo lo especificado en el Art. 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. De acuerdo con esto, se evaluarán las repercusiones sobre dicho espacio (de acuerdo con legislación estatal y autonómica), se presentarán alternativas, se justificarán razones imperiosas de interés público de primer orden en caso de afección a la integridad del lugar.
- Clasificación del estado de la masa de agua una vez realizadas estas modificaciones o alteraciones.
- Identificación de los espacios, ecosistemas, etc., hídricamente dependientes de estas masas de agua, descripción de la interconexión o dependencia, valoración de los posibles efectos negativos debidas a las nuevas modificaciones o alteraciones sobre las masas de agua y medidas de protección adoptadas.

IV. La información del apartado III se hará extensiva a todas aquellas medidas o actuaciones que por su tipología o ubicación estén incluidas en los anexos de Real Decreto Legislativo 1/2008, aun cuando por las características hidrológicas o morfométricas del cauce, humedal o acuífero donde se proyecten no se hallen incluidos en una masa de agua.

Finalmente, el ISA recogerá también las dificultades e incertidumbres más importantes que hayan existido para determinar el impacto ambiental de las medidas. También deben recogerse los efectos acumulativos y sinérgicos de las diferentes medidas del Plan.

4.3.6. Medidas previstas para prevenir, reducir y en la medida de lo posible eliminar, los efectos significativos negativos. Informe sobre la viabilidad técnico-económica de las medidas previstas.

Una vez que se han seleccionado las alternativas de actuación, se han analizado sus efectos, se han determinado las medidas con previsibles efectos ambientales significativos negativos, y se han valorado los impactos que generan, el ISA debe especificar las medidas técnicamente viables que se contemplen para prevenir, reducir y en la medida de lo posible eliminar los efectos ambientales adversos. Para ello, y dado que se conocen la magnitud de los impactos generados, las medidas preventivas, correctoras y minimizadoras deben diseñarse en relación a estos impactos y presentarse lo más detalladamente posible. Un ejemplo de cómo presentar la información son los cuadros incluidos a continuación:

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

PROBLEMA CONCRETO IDENTIFICADO:	ALTERNATIVA: MEDIDA (con efectos ambientales previsibles desfavorables):						
MEDIDA MINIMIZADORA:							
Características de la medida	**AIRE CLIMA**	**VEGETACIÓN, FAUNA, ECOSISTEMAS, BIODIVERSIDAD**	**PATRIMONIO GEOLÓGICO**	**SUELO PAISAJE**	**AGUA POBLACIÓN SALUD HUMANA**	**PATRIMONIO CULTURAL**	**BIENES MATERIALES**
Impacto que minimiza							
Definición de la medida preventiva/protectora							
Objetivo							
Eficacia							
Descripción de la medida							
Entidad responsable de gestión							
Necesidad de mantenimiento							
Coste de ejecución							

PROBLEMA CONCRETO IDENTIFICADO:	ALTERNATIVA: MEDIDA (con efectos ambientales previsibles desfavorables):						
MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTORA:							
Características de la medida	**AIRE CLIMA**	**VEGETACIÓN, FAUNA, ECOSISTEMAS, BIODIVERSIDAD**	**PATRIMONIO GEOLÓGICO**	**SUELO PAISAJE**	**AGUA POBLACIÓN SALUD HUMANA**	**PATRIMONIO CULTURAL**	**BIENES MATERIALES**
Efecto que previene							
Definición de la medida preventiva/protectora							
Objetivo							
Eficacia							
Descripción de la medida							
Entidad responsable de gestión							
Necesidad de mantenimiento							
Coste de ejecución							

Tablas 8 y 9: Tabla que resume las principales características de cada medida preventiva, correctora o minimizadora

Para aquellas alternativas que impliquen medidas o actuaciones que puedan afectar de forma apreciable a la **Red Natura,** se incluirá en este apartado la propuesta de medidas correctoras y compensatorias, que deberá justificarse en función del análisis de los impactos realizado en el apartado 4.3.5. Para la propuesta de las mismas se solicitará informe al órgano gestor de la Red Natura afectado.

Para finalizar, tal y como indica específicamente el anexo I de la Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y al igual que ocurría en relación con las alternativas, el ISA ha de incluir un informe sobre la viabilidad económica de las distintas medidas preventivas, correctores y minimizadoras, en el

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

que se ponga de manifiesto el análisis coste-eficacia de cada una de las medidas consideradas. Cuando se valore el coste de las medidas no sólo se considerarán los costes económicos y sociales, sino también los costes ambientales derivados de su aplicación.

4.4. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN

4.4.1. Medidas previstas para el seguimiento

El órgano promotor Confederación Hidrográfica del Cantábrico deberá realizar un seguimiento periódico de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del Plan Hidrológico. El ISA ha de establecer con claridad el protocolo de seguimiento del plan, sus principales puntos, y el calendario e instrumento de coordinación con el órgano ambiental.

Este plan de seguimiento ambiental debe aportar, al menos, información acerca de:

- Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos.
- Estado de ejecución de los programas y actuaciones previstas en el Plan.
- Envergadura de los efectos ambientales negativos derivados de su puesta en marcha.
- Funcionamiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
- Metodología para la identificación de los efectos ambientales adversos no previstos sobre los elementos del medio.
- Protocolo de aplicación de medidas adicionales contra los efectos ambientales adversos no previstos, medición de su efectividad.

En períodos de alerta de la DH del Cantábrico por diversas causas el ISA debe de recoger la necesidad de realizar un informe adicional indicando las repercusiones ambientales detectadas tras estas situaciones, y las posibles medidas correctoras a aplicar.

Asimismo, los resultados obtenidos en el seguimiento ambiental deberán ser expresados en términos fácilmente comprensibles, para la divulgación pública de la repercusión ambiental del Plan.

4.4.2. Indicadores de seguimiento

Las medidas de seguimiento propuestas deben generar información cualitativa y cuantitativa sobre la evolución de los objetivos ambientales y la integración efectiva de los criterios de sostenibilidad y medidas preventivas en el Plan.

Una fórmula que contribuirá a la integración de la variable ambiental como medida preventiva es que los criterios ambientales estratégicos sean considerados en la contratación

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

y/o se incluyan en la asignación de un capítulo presupuestario en los pliegos de prescripciones técnicas de los proyectos que se aprueben en el marco del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico. En dicha línea se propone que se incluya como lista de chequeo para la contratación de proyectos los criterios ambientales establecidos en el Anexo V.

En el anexo VI se incluyen las tablas que deben incorporarse al Plan debiendo ser completadas en un estado intermedio de la aplicación del Plan Hidrológico y al final de su período de vigencia. Estas tablas muestran tanto el grado de consecución de los objetivos ambientales propuestos inicialmente en la planificación, como el grado de integración de los criterios ambientales estratégicos en los proyectos concretos aprobados en el marco del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico.

Se incluirá asimismo en dicho estado intermedio de la aplicación del Plan Hidrológico y al final de su período de vigencia, el análisis de la inclusión de los criterios ambientales (anexo V) en la contratación de los proyectos derivados del Plan de cuenca, presentando una tabla similar a la siguiente:

SEGUIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS EN EL PLAN						
PROBLEMA CONCRETO IDENTIFICADO: ALTERNATIVA: MEDIDA:						
Asignación presupuestaria (A) y/o considerado en pliegos de prescripciones técnicas de los proyectos (B)						
Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I f)	Criterios ambientales estratégicos	Criterios de evaluación: ¿La medida propuesta...?	Proyecto 1		Proyecto N	
			A	B	A	B
AIRE CLIMA	• Medidas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones • Medidas que promuevan el uso de maquinaria eco-efciente Medidas que promuevan el uso de energías renovables	• ¿Promueve el ahorro y eficiencia energética de energía? • ¿Reduce las emisiones de gases de efectos invernaderos? • ¿Permite obtener la energía de una fuente renovable en vez de una fuente tradicional?				
VEGETACIÓN FAUNA ECOSISTEMAS BIODIVERSIDAD	• Medidas para prevenir, y erradicar especies exóticas invasoras • Medidas para evitar la traslocación de especies entre diferentes cuencas	• ¿Fomentan la prevención de entrada de especies exóticas invasoras en la cuenca? • ¿Permiten erradicar las especies exóticas invasoras? • ¿Generan coste ambiental en relación con los beneficios obtenidos al eliminar las especies exóticas? ¿Mejoran la información y sensibilización ambiental de la sociedad en relación con la problemática de las especies exóticas invasoras?				
	• Diseño de actuaciones basado en la no afección a zonas de alto valor ecológico • Programas de medidas en espacios protegidos • Diseño de actuaciones basado en el principio de no causar afección apreciable a Red Natura 2000	• ¿Supone la ocupación total o parcial de un espacio natural protegidos? • ¿Causa afecciones a un espacio natural protegido y/o a su área de influencia? • ¿Causa influencia y/o afección en el espacio natural protegido aún no ubicádonse en él? Supone la disminución de la cantidad o el empeoramiento de calidad del agua en el entorno o en una zona húmeda propiamente dicha?				

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

SEGUIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS EN EL PLAN						
PROBLEMA CONCRETO IDENTIFICADO: ALTERNATIVA: MEDIDA:						
Asignación presupuestaria (A) y/o considerado en pliegos de prescripciones técnicas de los proyectos (B)						
Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I f)	Criterios ambientales estratégicos	Criterios de evaluación: ¿La medida propuesta...?	Proyecto 1		Proyecto N	
			A	B	A	B
	Mantenimiento y seguimiento del régimen de caudales ecológicos	¿Lleva asociado indicadores y medio que permitan realizar el seguimiento de los caudales ecológicos de las cuencas?				
	Restauración, protección y mejora de las relaciones de dependencia entre sistemas acuáticos	¿Supone el empeoramiento de la situación de una masa de agua de la cual depende otra?				
	• Medidas que permitan y mejoren la conectividad lateral del cauce y sus riberas (eliminación motas, reducción taludes, eliminación de escolleras y encauzamientos, etc.) • Medidas que eviten el efecto barrera en tramos fluviales (pasos para la fauna • Medidas que eviten el efecto barrera de embalses y azudes (escalas) • Eliminación de infraestructuras obsoletas (presas, azudes, tendidos eléctricos, etc.) y restauración ambiental	• ¿Mejora o elimina el efecto barrera para la fauna en ríos, embalses o azudes? • ¿Mejoran sensiblemente la conectividad lateral del cauce y sus riberas? • ¿Permiten la llegada del agua a las riberas en las avenidas ordinarias? • ¿Permiten la llegada del agua a la llanura de inundación en las avenidas extraordinarias? • ¿Permite eliminar infraestructuras obsoletas o que no cumplen razonablemente su la función para la que fueron diseñadas?				
	• Plan de mejora ecológica de las masas de agua artificiales • Integrar criterios ambientales en el seguimiento de los Sistemas de Explotación de Recursos parciales	• ¿Permiten una mejora ecológica de las masas de agua artificiales de la cuenca? • ¿Tienen asociado un estudio que justifique la necesidad de ser realizada la infraestructura? • ¿Los sistemas de explotación de recursos cuentan con indicadores de su actividad referidos a aspectos del medio ambiente?				

**Al presentarse los resultados, debe completarse la tabla con el resto de ámbitos temáticos marcados en colores, y sus correspondientes criterios ambientales estratégicos y preguntas asociadas.*

4.5. RESUMEN NO TÉCNICO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA) DEL PLAN

El resumen debe recoger para el público no técnico, en un lenguaje asequible y con vocación didáctica, los resultados de la evaluación ambiental con el objeto de facilitar el proceso de consulta pública. El resumen debe incluir al menos los siguientes apartados:

- Un resumen de la situación ambiental de la cuenca, sus principales características y problemas relacionados con el medio ambiente.
- Los objetivos ambientales propuestos para el Plan Hidrológico, derivados de la identificación de los principales temas importantes de la Demarcación
- Los criterios ambientales estratégicos
- Las alternativas propuestas para alcanzar esos objetivos, y el análisis de los probables efectos significativos de las mismas

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

- Las medidas incluidas en las diferentes alternativas, el análisis de sus probables efectos significativos, y la valoración de impacto de las que tengas efectos negativos.
- Medidas preventivas, correctoras y minimizadoras propuestas en relación con los efectos significativos negativos

4.6. MODALIDADES Y FORMA DE CONSULTA DEL ISA

Antes de la elaboración del ISA, y a la vista de de la identificación por el órgano ambiental de las administraciones pública afectadas y público interesado y de los resultados obtenidos en la consulta llevada a cabo sobre el Documento de Referencia, así como de los resultados de la consulta de los Documentos Iniciales del proceso de planificación de la Demarcación Hidrográfica, el órgano promotor ha de identificar a los principales actores implicados en el Plan Hidrológico, sus características, aspectos positivos, debilidades, intereses y/o expectativas, conflictos potenciales y potencial implicación en el desarrollo del Plan. El análisis de las partes interesadas responde a la necesidad de identificar todos aquellos actores que a distintos niveles e intensidades condicionan o pueden condicionar la gestión de los recursos hídricos de la Demarcación. Para ello, se recogerá en el ISA un cuadro como el que sigue:

Actor	Características	Aspectos positivos	Debilidades	Intereses y/o expectativas	Conflictos potenciales	Implicación en el proyecto

Tabla 10. Características más relevantes de la relación de los principales actores con el Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico

La Ley 9/2006 de evaluación de los efectos ambientales de determinados planes y programas en el medio ambiente establece la obligación de que el órgano promotor someta la versión preliminar del Plan, incluyendo el ISA, a consulta pública. La duración del plazo de consultas está establecida en la norma en 45 días como mínimo. Las actuaciones de información y consulta incluirán, al menos, las siguientes:

- Anuncio de la información pública en el Boletín Oficial del Estado, advirtiendo de que la consulta se dirige tanto al público en general como a las personas físicas o jurídicas que se consideren interesadas de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se otorgará un plazo de al menos 45 días para examinar la versión preliminar del Plan y el ISA y realizar alegaciones y sugerencias. Este anuncio oficial se completará con otros a insertar en los

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

principales diarios de tirada regional.

Por otro lado, el texto íntegro de la versión preliminar del Plan y del Informe de Sostenibilidad Ambiental deben hacerse públicos al menos a través de la página web de la Confederación Hidrográfica correspondiente, facilitando su acceso mediante su inclusión como noticia destacada en el portal en formato pdf u otro de uso común. La información se presentará de forma que sea fácilmente descargable por los interesados.

Así mismo, el órgano promotor elaborará un cronograma con las previsiones para la realización de la fase de participación pública, que hará público mediante su inclusión en un lugar fácilmente accesible de la página web de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Este cronograma también contendrá la información necesaria sobre las distintas etapas del proceso, la forma de acceder a la versión preliminar del Plan y el ISA (incluyendo la descarga telemática), y los lugares y plazos en que se puede ejercer el derecho de la participación.

- Se realizará una consulta personalizada a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado señalados expresamente en el anexo I de este documento, utilizando para ello medios convencionales, telemáticos o cualquier otro válido de acuerdo con la legislación existente sobre procedimiento administrativo común. En todo caso, el medio que se emplee debe permitir acreditar efectivamente la realización de la consulta. El plazo otorgado para la respuesta será de al menos 45 días.

A las Administraciones públicas afectadas y al público interesado identificado en este documento se les facilitará el Plan y el Informe de Sostenibilidad Ambiental junto con la solicitud de consulta, preferiblemente mediante CD-Rom o DVD y en formato pdf u otro de uso general.

- Dados los previsibles efectos transfronterizos de la planificación, y según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, cuando se haga la información pública y consultas se notificará a la República de Francia para que ejerza su derecho a participar en la evaluación ambiental del Plan. A tal efecto, se le facilitará un ejemplar de la versión preliminar del Plan y del ISA, así como un documento adicional traducido al francés, en donde se evalúen de forma particularizada los efectos ambientales de carácter transfronterizo del Plan (anexo VIII del ISA).

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

4.7. ANEXOS A INCLUIR EN EL ISA

- Anexo I: Normativa internacional, comunitaria, nacional y regional de carácter sectorial relacionada con el desarrollo del ISA.
- Anexo II: Objetivos ambientales del Plan e indicadores asociados
- Anexo III: Organismos y agentes consultados para la redacción del ISA y resumen de la información recogida de cada uno de ellos
- Anexo IV : Documento donde se de respuesta a las alegaciones o sugerencias planteadas por las Administraciones públicas afectadas y público interesado en el periodo de consultas previas.. En caso de que la cuestión se halle recogida adecuadamente en el ISA, se indicará el capítulo correspondiente.
- Anexo V: Indicadores de seguimiento ambiental
- Anexo VI: Compendio de la cartografía incluida en el ISA
- Anexo VII: Relación de masas de agua afectadas por alguna figura de protección
- Anexo VIII: Documento adicional traducido al francés en donde se evalúen de forma particularizada los efectos ambientales de carácter transfronterizo del Plan.
- Otros que el órgano promotor estime necesarios

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

ANEXO I. RELACIÓN DE ADMINISTRACIONES AFECTADAS Y PÚBLICO INTERESADO CONSULTADO PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA DE LA DH DEL CANTÁBRICO.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CONSULTADAS
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO • D.G. de Medio Natural Y Política Forestal • D.G. de Sostenibilidad de la Costa y el Mar • Oficina Española de Cambio Climático • O.A. Parques Nacionales.
MINISTERIO DE CULTURA • D.G. de Bellas Artes y Bienes Culturales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA • Consejería de Sanidad • D.G. de Biodiversidad. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería , Pesca y Biodiversidad • D.G. de Cultura. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. • D.G. de Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente. • D.G. de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua. Consejería de Medio Ambiente. • D.G de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA • Consejería de Sanidad • D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. • D.G. de Conservación de la Naturaleza. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible • Servicio de Planificación y Programación Hidrológica. D.G. de Aguas de Galicia. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. • D.G. de Urbanismo. Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes • D.G. Patrimonio Cultural. Consejería de Cultura y Deporte
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN • Consejería de Sanidad • D.G. de Patrimonio Cultural. Consejería de Cultura y Turismo. • D.G. de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio. Consejería de Medio Ambiente. • D.G. del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS • D.G. de Agua y Calidad Ambiental Conserjería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Gobierno del Principado Asturias • D.G. de Biodiversidad y Paisaje Conserjería Medio Ambiente y Desarrollo Rural Gobierno del Principado de Asturias • D.G. de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Conserjería de Infraestructuras, Políticas Territorial Y Vivienda Gobierno del Principado de Asturias • D.G. de Patrimonio Cultural Conserjería de Cultura y Turismo Gobierno del Principado de Asturias. • D.G. de salud Pública. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO • Agencia Vasca del Agua Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Gobierno Vasco • Dirección de Patrimonio Cultural Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes. Departamento de Cultura Gobierno Vasco • Departamento de Sanidad Gobierno Vasco • Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Viceconsejería de Medio Ambiente Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco • Dirección de Calidad Ambiental Viceconsejería de Medio Ambiente Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco • Dirección de Ordenación del Territorio Viceconsejería de Ordenación Territorio y Aguas. Dpto. de Medio

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco • Dirección de Planificación, Evaluación y Control Ambiental. Viceconsejería de Medio Ambiente. Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA • Departamento de Salud Gobierno de Navarra • D.G. de Cultura Departamento de Cultura y Turismo Institución Príncipe de Viana Gobierno de Navarra • D.G. de Medio Ambiente y Agua Conserjería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente Gobierno de Navarra • D.G. de Ordenación del Territorio y Vivienda. Conserjería de Vivienda Ordenación y Territorio Gobierno de Navarra
ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES • Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza - ANA • Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos - AEMS - Ríos Con Vida • Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria - (ARCA) • Coordinadora Ecologista de Asturias • Ecologistas en Acción • Fundación Nueva Cultura del Agua • Fundación Naturaleza y Hombre (Cantabria) • Greenpeace • Gurelur - Fondo Navarro Para La Protección Del Medio Natural • S.E.O • WWF/ADENA

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

ANEXO II. ESQUEMA TEMÁTICO DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS.

Respuesta recibida	Fecha	Sugerencias, objetivos y contenidos	Principales elementos del medio	Objetivos de protección ambiental. Indicadores y criterios asociados	Principales impactos del Plan sobre los elementos del medio	Principales medidas preventivas, correctoras o compensatorias	Análisis ambiental de alternativas	Viabilidad económica de las alternativas y medidas	Programa de seguimiento ambiental del Plan
CONSULTAS TRANSFRONTERIZOS									
Embajada de Francia en España	13/01/09								
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO									
.División para la Protección del Mar y Prevención de la Contaminación. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino	12/12/08, 12/01/09 y 29/01/09	X	X	X	X	X	X	X	X
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	23/02/09	X	X	X	X	X	X		X
Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	02/12/08	X							
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA									
Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	03/12/08	X	X		X	X			
Aguas de Galicia. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	11/12/08	X	X						
Dirección General de Patrimonio Cultural.	09/03/09		X			X			

CORREO ELECTRONICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Respuesta recibida	Fecha	Sugerencias, objetivos y contenidos	Principales elementos del medio	Objetivos de protección ambiental. Indicadores y criterios asociados	Principales impactos del Plan sobre los elementos del medio	Principales medidas preventivas, correctoras o compensatorias	Análisis ambiental de alternativas	Viabilidad económica de las alternativas y medidas	Programa de seguimiento ambiental del Plan
Consejería de Cultura e Deporte.									
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS									
Dirección General de Agua y Calidad Ambiental. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Gobierno del Principado de Asturias	22/12/08	X	X	X	X	X			
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA									
Dirección General de Biodiversidad. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. Gobierno de Cantabria.	09/12/08	X	X	X	X	X	X	X	X
Dirección General de Cultura. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Gobierno de Cantabria.	21/11/08				X				
Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Gobierno de Cantabria	27/01/09	X	X	X	X	X	X		
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO									
Agencia Vasca del Agua	25/11/08	X	X	X	X	X			
Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco	03/03/09	X	X	X	X	X			

CORREO ELECTRÓNICO
b[illegible]n-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Respuesta recibida	Fecha	Sugerencias, objetivos y contenidos	Principales elementos del medio	Objetivos de protección ambiental. Indicadores y criterios asociados	Principales impactos del Plan sobre los elementos del medio	Principales medidas preventivas, correctoras o compensatorias	Análisis ambiental de alternativas	Viabilidad económica de las alternativas y medidas	Programa de seguimiento ambiental del Plan
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA									
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio. Gobierno de Navarra	20/01/09	X							
Dirección General de Medio Ambiente y Agua. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra	13/01/09	X		X	X	X	X	X	X
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN									
Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León.	11/12/08								
AYUNTAMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES									
S.E.O.	12/02/09	X	X	X	X	X	X		X

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

ANEXO III. PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD. OBJETIVOS AMBIENTALES E INDICADORES ASOCIADOS DE COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN.

CA=Comparación de alternativas del Plan. Se= Seguimiento del Plan. CARTOGRAFÍA= recoger los resultados en soporte cartográfico

Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I f)	Efectos	Principios de sostenibilidad.	Objetivos ambientales	Indicadores
AIRE CLIMA	Emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas de gestión del recurso (bombeos, desalad oras, etc.)	Eficiencia y minimización del consumo energético	• Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación hidrológica • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los sistemas de gestión del recurso, aumentando el uso de las energías renovables y mejorando la eficiencia energética • No incrementar el consumo de energía	• Consumo energético en el PHD desglosado (desaladoras, bombeos, etc). (CA y Se). • Reducción de la producción hidroeléctrica (MW y %) y fuentes energéticas que lo sustituyen con el PHD. (CA y Se)
VEGETACIÓN FAUNA ECOSISTEMAS BIODIVERSIDAD	Aumento de la conectividad ecológica Restauración de ríos y ecosistemas asociados Recuperación acuíferos, zonas húmedas y ecosistemas asociados Alteración, limitación o destrucción de hábitats de especies amenazadas (declaradas en peligro o vulnerables en el CNEA o autonómicos) Alteración, limitación o destrucción de hábitats de especies de alto valor ecológico Fragmentación de hábitats. Pérdida de la conectividad ecológica Ocupación de espacios naturales protegidos Disminución superficie zonas húmedas. Incremento de la presión sobre las zonas húmedas	• Conservación de espacios naturales protegidos • Conservación de la biodiversidad y los ecosistemas asociados al agua • Recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas	• Evitar la ocupación de espacios naturales protegidos y hábitats de especies prioritarias • Evitar la fragmentación de hábitats • Evitar cambios en la composición de ecosistemas • Conservación, recuperación y mejora de los ecosistemas acuáticos o ligados al uso del agua • Prevenir las alteraciones ecológicas en cauces, riberas, zonas húmedas, zonas costeras y de transición • Mejora del estado de las masas de aguas por recuperación de las masas de agua de las cuales son dependientes • Recuperación de zonas húmedas degradadas • Aumento de la diversidad biológica de zonas ligadas al uso del agua	• Número, tipo y porcentaje de superficie hábitats de interés comunitario (respecto al total de la cuenca) afectados por las actuaciones del PHD, discretizando por categoría de masa de agua (por ejemplo: detracción de caudales, usos del suelo, restauración ambiental, inyección de acuíferos, etc.). (CA y Se). • Número, Km y porcentaje de LIC fluviales con sí/no cumplimiento de los caudales ambientales (calculado considerando los objetivos de protección). (CA y Se). • Número, superficie y porcentaje de espacios protegidos y de la Red Natura 2000 conectados a masas de agua afectados por las actuaciones del PHD, discretizando por categoría de masa de agua (detracción de caudales, usos del suelo, restauración ambiental, inyección de acuíferos, etc.). (CA y Se). • Número y taxones de especies ligadas a las aguas costeras y de transición incluidas dentro de los catálogos de especies amenazadas nacionales o autonómicos que son perjudicados o favorecidos por las actuaciones del plan. (Se). • Número y taxones de especies ligadas al hábitat fluvial y/o humedales incluidas dentro de los catálogos de especies amenazadas nacionales o autonómicos que son perjudicados o favorecidos por las actuaciones del

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I f)	Efectos	Principios de sostenibilidad.	Objetivos ambientales	Indicadores
	Aumento de la conectividad ecológica	• Recuperación y mejora cuantitativa y cualitativa de las masas de agua asociadas a ecosistemas	• Mejorar el potencial ecológico de las masas de agua artificiales • Proteger la calidad de agua para los peces en zonas de especial valor piscícola • Recuperación de zonas húmedas degradada	plan. (CA y Se). • Número de humedales incluidos entre las "zonas protegidas", y porcentaje respecto al total, para los que se han establecido las conexiones de su demanda hídrica con los niveles piezométricos mínimos necesarios del acuífero que los alimenta. (CA y Se). • Número de humedales y superficie, respecto al total de la cuenca, recuperados por las actuaciones del PHD, distinguiendo aquellos legalmente protegidos. (CA y Se).
	Alteración de la conexión entre aguas superficiales y subterráneas			
	Alteración de ecosistemas ligados o dependientes del agua (cauces, riberas, zonas húmedas, aguas de transición, aguas costeras, etc)			
	• Pérdida de la conectividad lateral de las masas de agua (encauzamientos, revestimientos, escolleras, diques, etc.) • Pérdida de la conectividad longitudinal de las masas de agua (modificación cauces, desconexión hídrica de tramos, impermeabilización de los lechos, etc)		• Mejorar la conectividad lateral de las masas de agua • Prevenir las alteraciones hidromorfológicas de las masas de agua • Eliminar y controlar las especies exóticas invasoras	• Número y categoría de masas de agua afectadas por especies invasoras (Se) • Número, tipo e importancia de especies exóticas invasoras potencialmente introducidas como consecuencia de las actuaciones del PHD: trasvases, etc. (Se) • Número, tipo e importancia de especies exóticas invasoras erradicadas gracias a las medidas del PHD. (Se). • Evolución de la erradicación de especies invasoras por las actuaciones del PHD (por superficie de ocupación, número de poblaciones, porcentaje de masas de agua afectada, etc.). (Se). • Número de infraestructuras hidráulicas modificadas (retirada, retranqueo, etc.) que mejoren la conectividad de los ecosistemas acuáticos. (CA y Se). • Número y porcentaje respecto al total en la cuenca de masas de agua superficiales en que se cumplen los regímenes de caudales ambientales. (CA y Se). • Longitud de ríos, y porcentaje respecto al total, donde mejora el estado de los indicadores hidromorfológicos. (CA y Se). • Longitud de ríos, y porcentaje respecto al total, donde se realiza restauración fluvial de las riberas. (CA y Se). • Número de masas de agua en que se empeora la calidad de los indicadores hidromorfológicos por nuevas infraestructuras. (CA y Se). • Número, y porcentaje respecto al total, de azudes y presas con escalas de peces construidas y mejoradas. (CA y Se). • Superficie inundada por la construcción de nuevas presas o modificación de las existentes, distinguiendo la superficie en espacios protegidos. (CA y Se). • Número y ubicación de nuevas infraestructuras. (presas, puentes, azudes, etc.), por Km. de cauce. (CA y Se). • Longitud y porcentaje respecto a las masas de agua declaradas en peor estado que el "buen estado", en que se mejora la conectividad lateral. (CA y
	Pérdida de naturalidad de las masas de agua por alteraciones hidromorfológicas (regulación, trasvases, canalizaciones			

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I f)	Efectos	Principios de sostenibilidad.	Objetivos ambientales	Indicadores
				Se).
PATRIMONIO GEOLÓGICO	Alteración o destrucción del patrimonio geológico	Conservación y mejora de la geodiversidad	• Evitar la ocupación de espacios naturales protegidos debido a su geodiversidad • Evitar la afección a lugares con elementos relevantes de geodiversidad	Número, superficie y porcentaje respecto al total de espacios naturales protegidos por su geodiversidad, afectados por las actuaciones del PHD. (CA y Se).
	Recuperación de elementos de interés geomorfológico			
SUELO PAISAJE	Ocupación del suelo	• Optimización de la ocupación del suelo • Prevenir, reducir y mitigar la erosión y desertificación del suelo • Conservación y mejora del paisaje existente	• Conservación, protección y mejora de las masas forestales • Mejora de las prácticas agrícolas en relación al suelo	• Superficie (ha) y porcentaje de suelo en que se modifica el riesgo de sufrir, agravarse o mejora procesos erosivos por actuaciones sobre el suelo. Especificar si se trata de laderas, zonas llanas, zona litoral, interior de la DH, etc. (CA y Se). • Previsión de superficie modificada, y porcentaje respecto al total, en los usos del suelo asociados a nuevas concesiones de agua (Se). • Superficie del suelo y porcentaje con respecto al total ocupada por las nuevas infraestructuras que se ejecuten con arreglo al PHC. (CA y Se). • Superficie de llanura de inundación ganada y recuperada para mejora del bosque de ribera y cumplimiento de la función ambiental de la zona de policía. (CA y Se). • Número y superficie de DPH ocupadas por usos agrícolas, ganaderos, urbanizaciones, etc., y superficie de zonas recuperadas por las actuaciones del PHD. (CA y Se).
	Recuperación de espacios degradados por el uso humano.			
	Aumento de la erosión del terreno			
	Extensión y agravamiento de la desertificación			
	Contaminación del suelo por residuos y sustancias contaminantes		Disminución de la contaminación del suelo por residuos y sustancias contaminante	• Volumen de residuos producidos con las actuaciones recogidas en el PHC. Volumen estimado de movimiento de tierras ((Se). • Volumen de materiales utilizadas: hormigón, escollera, metálicos, minerales, plásticos, etc., con las actuaciones recogidas en el PHC y porcentaje de material reutilizado. (Se)
	Pérdida de la calidad del paisaje			
	Disminución de la cuenca visual			
	Obtención del buen estado para las masas de aguas	• Garantizar la cantidad y calidad suficiente del recurso	• Reducción de la contaminación • Reducción paulatina de la contaminación de masas de agua subterráneas y su prevención • Protección y mejora del medio acuático • Garantizar la cantidad y calidad	• Número de EDARs, y porcentaje respecto al total, que se dotan de tratamiento terciario, identificando aquellas que vierten en zonas sensibles o declaradas afectadas por contaminación de nitratos. (CA y Se). • Número de masas de agua de la categoría ríos y longitud y porcentaje respecto al total naturalizados como consecuencia de las actuaciones del PHD. (CA y Se). • Número y superficie de zonas vulnerables con programas de actuación aprobados. (Se). CARTOGRAFÍA • Número y superficie de zonas vulnerables que se han recuperado por las actuaciones del PHD. (CA y Se). • Número y tipo de cabezas de ganado en zonas declaradas vulnerables (Se). • Número, categoría y porcentaje de masas de agua subterráneas con

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I f)	Efectos	Principios de sostenibilidad.	Objetivos ambientales	Indicadores
AGUA POBLACIÓN SALUD HUMANA	Deterioro de la calidad de las masas de aguas superficiales y subterráneas (vertidos, fuentes puntuales y difusas de contaminación, eutrofización, etc.)	hídrico para el buen estado de las masas de agua y ecosistemas acuáticos y terrestres • Sustitución del enfoque de oferta por estrategias de gestión de la demanda • Mejorar la disponibilidad y garantía de los usos del agua	suficiente de recurso hídrico para el buen estado de las masas de agua, y ecosistemas acuáticos y terrestres • Aumentar la superficie de agricultura ecológica, libre de productos químicos de síntesis • Restitución de las corrientes a sus condiciones naturales de funcionamiento hidrológico • Acondicionamiento y recuperación ambiental de cauces y riberas • Limpieza de las riberas de ríos, masa de agua de transición y costeras	concentración de cloruros ≥ 1000mg/l. (Se). • Número, tipo y porcentaje de masas agua subterránea costera con mejora en la concentración de cloruros. (Se). • Volumen de agua aproximado y porcentaje respecto al total recuperado/ legalizado con la clausura de pozos ilegales. (Se). • Número de pozos costeros afectados/recuperados por efecto de intrusión salina por las actuaciones del PHD. (CA y Se). • Número y categoría de masas de agua eutrofizadas, por subcuencas, que se han mejorado como consecuencia de las actuaciones del PHD. (CA y Se). • Nº y categoría de masas de agua para las que se establecen excepciones en el cumplimiento de los objetivos medioambientales: prórrogas, objetivos menos rigurosos, Deterioro temporal, modificaciones (artículo 39 del RD de la Planificación Hidrológica). (CA y Se). • Número de municipios costeros con autorización de vertido respecto al total de municipios existentes y aumento por las actuaciones del PHD. (CA y Se). • Aumento (en volumen y en carga contaminante) de la capacidad de depuración de efluentes urbanos, distinguiendo zonas sensibles, por las actuaciones del PHD. (CA y Se).
	• Deterioro del estado cuantitativo de las masas de agua superficiales y subterráneas. • Sobreexplotación del recurso	• Sostenibilidad del uso del agua • Eficiencia en el uso del agua. • Protección a largo plazo del recurso • Recuperación y gestión ambiental de las masas de	• Reducción de extracciones para que la relación entre bombeo y recarga sea ≤ 1 • Construcción de captaciones de recarga artificial de acuíferos para situaciones de emergencia por sequía • Fomento de la utilización de las aguas regenerada • Minimización de los impactos ambientales derivados de las sequías y de las inundaciones	• Capacidad de desalación instalada (hm3/día) en el PHD. (CA y Se). • Longitud de sistemas de distribución en que se realizan mejoras para evitar pérdidas de recurso hídrico. Volumen de agua ahorrado. (CA y Se). • Número de concesiones modificadas y volumen de agua recuperados para los ecosistemas acuáticos como consecuencia de la obtención de recurso hídrico por medio de la desalación de agua de mar del PHD. (CA y Se). • Volumen de salmuera vertido al mar e incremento como consecuencia del PHD. (CA y Se). • Número y longitud de emisarios existentes en la DH (distinguiendo por ARU y salmuera) y aumento por las actuaciones del PHD. (CA y Se). • Volumen de agua, y porcentaje respecto al total, reutilizada para un nuevo uso o consumo y volumen de agua recuperada en fuente convencional gracias a la reutilización prevista en el PHD. (CA y Se). • Volumen de agua y porcentaje respecto al total que se deja de verter a ríos como consecuencia de su uso para reutilización. (CA y Se). • Número de concesiones modificadas (a la baja) y volumen de agua rescatados gracias a las actuaciones de modernización de regadíos en el PHD (o sustitución por cultivos de menor demanda hídrica). (CA y Se).

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I f)	Efectos	Principios de sostenibilidad.	Objetivos ambientales	Indicadores
	Aumento de la presión social en la demanda del agua (aplicación de políticas y/o usos insostenibles, precio inadecuado del recurso, etc.)	agua • Conservación y mejora del estado cuantitativo y cualitativo del recurso (contaminación por nitratos, salinización de masas de agua subterráneas, contaminación orgánica en ríos, depuración de las aguas residuales urbanas, calidad de las aguas de baño litorales, etc.)	• Mejora de la eficiencia en el consumo de recursos hídricos en la agricultura, y en el ocio y turismo • Mejora del conocimiento del patrimonio natural y cultural asociado a las masas de agua	• Aumento estimado en los niveles piezométricos de las masas de agua subterránea gracias al agua recuperada por modernización de regadíos (o sustitución por cultivos de menor demanda hídrica) y por aumento de la capacidad de desalinización de agua de mar en el PHD. (CA y Se). • Nº masas de agua subterráneas en riesgo de sobreexplotación y nº de masas de agua subterráneas declaradas sobreexplotadas añadidas /recuperadas en la DH por las actuaciones del PHD. (CA y Se). • Volumen de agua inyectado en masas de agua subterránea. (CA y Se). • Número, y porcentaje respecto al total de masas de agua y masas de agua sin buen estado cuantitativo, en que se alcanza el buen estado cuantitativo gracias a la recarga artificial prevista en el PHD. (CA y Se). • Porcentaje de concesiones (y porcentaje de volumen concedido) que cuentan con caudalímetro de control. (Se). • Aumento de la superficie (ha) de regadío (y porcentaje respecto al total agrícola), con sistema de riego localizado (Se). • Volumen, y porcentaje respecto al total consumido de agua recuperado como recurso como consecuencia de las actuaciones de modernización de regadíos. (Se). • Consumo de agua (m3/año) que se produce en nuevas viviendas secundarias y alojamientos turísticos, y especificar los que se produzcan ligados a nuevos campos de golf (Se). • Superficie (ha) ocupada por nuevas viviendas secundarias y alojamientos turísticos y especificar la que se produzca ligada a nuevos campos de golf (Se). • Dotaciones económicas respecto al total del coste de las medidas del PHD, destinadas a la sensibilización de la población. (Se).
PATRIMONIO CULTURAL	Recuperación de espacios o bienes degradados Afecciones al patrimonio cultural y las vías pecuarias	Preservar, recuperar y mejorar el patrimonio histórico	Evitar las afecciones al patrimonio histórico y a las vías pecuarias	Número y tipo de elementos del patrimonio cultural que se encuentren inventariados y protegidos que se vean afectados por las actuaciones del PHC. (Se).
	Armonizar el equilibrio territorial • Ocupación de territorios ocupados o utilizados por el hombre • Agravamiento de los desequilibrios territoriales en términos de población por actuaciones del PHD	• Preservar el tejido social • Reducción del descenso de población en zonas rurales. Fijación de población en zonas rurales	• Minimizar la afección producida a las comunidades por las grandes obras hidráulicas • Aumento de la población fijada al territorio rural	• Nº personas y de poblaciones desplazadas como consecuencia de la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas del PHD o por modificación de las existentes. (CA y Se). • Superficie, y porcentaje de superficie respecto al total, ocupadas por cultivos y urbanizaciones en zonas inundables (Se).

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I f)	Efectos	Principios de sostenibilidad.	Objetivos ambientales	Indicadores
BIENES MATERIALES	• Variación (aumento o disminución) de los riesgos naturales y/o inducidos por el hombre sobre bienes y personas en el ámbito de la DH, en relación con las aguas superficiales continentales • Subsidencia del terreno generada por explotación de acuíferos.	Minimizar los riesgos naturales y/o inducidos por el hombre sobre bienes y personas en el ámbito de la DH, en relación con las aguas superficiales continentales	Reducir el número de personas y la superficie afectada por fenómenos de inundación, de sequía, y de riesgo sísmico en zonas de presas	• Número de personas y superficie (ha) afectadas por fenómenos de inundación en la DH y su aumento o disminución como consecuencia de las actuaciones del PHD. (CA y Se). • Número de personas y superficie (ha) afectadas por fenómenos de sequía en la DH y su aumento o disminución tras las actuaciones del PHD. (CA y Se). • Aumento o disminución de los efectos negativos derivados de fenómenos de inundación y sequía por ejecución de actuaciones del PHD. (CA y Se).
	• Variación (aumento o disminución) de los riesgos naturales y/o inducidos por el hombre sobre bienes y personas en el ámbito de la DH, en relación con las aguas costeras • Aceleración del retroceso del borde costero. Pérdida de playas, erosión del borde litoral e inundación terrenos	• Minimizar los riesgos naturales y/o inducidos por el hombre sobre bienes y personas en el ámbito de la DH, en relación con las aguas costeras • Optimización de las infraestructuras de regulación de la cuenca (presas, balsas de regulación, etc). Retirada de infraestructuras obsoletas • Racionalización de las infraestructuras costeras (diques, espigones, puertos, etc.). Retirada de infraestructuras obsoletas	• Reducir el número de personas y la superficie afectada por fenómenos de retroceso del borde costero, inestabilidad de los terrenos, inundación en las zonas costeras, etc. • Evitar, corregir y minimizar los impactos sobre las zonas costeras derivados de las infraestructuras de regulación de la DH y de las infraestructuras costeras • Lograr el buen estado ecológico de los bienes de DPMT	• Nº de personas y superficie (ha) afectada por fenómenos de retroceso del borde costero, inestabilidad de los terrenos, inundación en las zonas costeras y su aumento o disminución por las actuaciones del PHD. (Se). • Tasa de avance o retroceso (m/año) del borde costero en las áreas cercanas a las desembocaduras (misma unidad fisiográfica litoral) y su aumento o disminución como consecuencia de las actuaciones del PHD. (Se). • Variación del nivel del mar (m de altura) en las diferentes unidades fisiográficas de la DH. (Se). • Nº de puertos deportivos/comerciales existentes en el ámbito de la DH e incremento (Se). • Número de playas y longitud de costa en estado de erosión y número de playas regeneradas y devueltas al equilibrio dinámico. (Se). • Número de infraestructuras costeras y porcentaje respecto al total, de nueva construcción. (Se). • Número de infraestructuras costeras y porcentaje respecto eliminadas para naturalización del litoral. (Se). • Número de sistemas dunares y superficie asociada en mal estado de conservación y número de ellos y superficie devueltos al equilibrio dinámico. (Se). • Número de marismas y terrenos bajos e inundables y superficie asociada en mal estado de conservación y número de ellos y superficie restaurados. (Se).

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

ANEXO IV. INFORMACIÓN A CONSIDERAR DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL QUE ES NECESARIO APORTAR

A. CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA DE LA DEMARCACIÓN:

A.1. Tablas-resumen de la caracterización de las masas de agua de la Demarcación: el ISA debe recoger dos tablas como las que siguen:

Categorías de masas de agua superficiales	Nº masas	% Nº	Superficie total (ha)	% superficie
Ríos				
Lagos				
Aguas costeras				
Aguas de transición				
Masas de agua muy modificadas				
Masas de agua artificial				
TOTAL				

Tabla 11. Masas de agua superficiales de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Masas de agua subterráneas	Nº masas	% Nº	Superficie total (ha)	% superficie
Masas de agua subterráneas				
TOTAL				

Tabla 12. Masas de agua subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

A.2. El incluir una masa de agua en la categoría de artificial, y especialmente en la de muy modificada ha de estar exhaustivamente justificado y demostrado, ya que no todas las masas de agua, por el hecho de estar alteradas hidrológicamente, son de facto masas de agua muy modificadas; máxime cuando la normativa existente rebaja los objetivos de calidad ambiental a lograr en estas masas mediante la consecución para ellas de un buen potencial ecológico y no un buen estado ecológico.

Debido a ello, es de interés que el ISA recoja una explicación detallada para todas las categorías de las causas que llevan a estas masas de agua a ser incluidas en la categoría de muy modificadas

A.3. En relación con los humedales, el ISA debe recoger una tabla como la que sigue sobre las zonas húmedas de la Demarcación señalando si han sido o no incluidas en el registro de zonas protegidas, o en alguna categoría de masas de agua, reseñando sus principales características ecológicas y una pequeña valoración de su importancia ambiental.

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Nombre de la masa	S (km^2)	Profundidad máxima (m)	Coord. X	Coord. Y	Justificación de no inclusión en el inventario de masas de agua

Tabla 13. Zonas húmedas existentes en la Demarcación Hidrográfica, incluyendo las no catalogadas como masas de agua tipo lago

B. ANÁLISIS DE USOS, PRESIONES E IMPACTOS ANTRÓPICOS SIGNIFICATIVOS

Dado que esta información es necesaria para poder realizar una EAE correcta del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico, que consiga un elevado nivel de protección del medio ambiente y la integración de los aspectos ambientales en el nuevo proceso de planificación, se indican a continuación una serie de aspectos que han de ser recogidos en el ISA:

B.1. Análisis de presiones:

El ISA debe recoger, al menos, una tabla como la que se presenta a continuación, la cual sintetiza las presiones ejercidas sobre las masas de agua superficiales en la Demarcación Hidrográfica:

Tipo de presiones estudiadas	Significativas		No significativas		Sin datos		Totales	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Fuentes de contaminación puntual								
Fuentes de contaminación difusa								
Extracciones de agua y retornos								
Regulaciones del flujo de agua								
Alteraciones morfológicas								
Otras incidencias antropogénicas								
Usos del suelo								

Tabla 14. Presiones ejercidas sobre las masas de agua superficiales de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico.

El riesgo de una masa de agua puede estar ocasionado por una o varias presiones, y en muchos casos pueden darse efectos sinérgicos, por lo que para poder calcular el impacto final sobre una masa de agua es necesario analizar de forma global la presión que se está ejerciendo sobre ella. En este sentido, el ISA ha de incluir una tabla, con una evaluación cuantitativa, como la que sigue:

MASAS DE AGUA SUPERFICIALES	PRESIONES		
	SIGNIFICATIVAS	NO SIGNIFICATIVAS	SIN DATOS
Ríos			
Lagos			
Aguas de transición			
Aguas costeras			
Masas artificiales			
Masas muy modificadas			

Tabla 15. Presiones globales ejercidas sobre las masas de agua superficial de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Esta información debe presentarse acompañada de un mapa que refleje las presiones globales ejercidas sobre las masas de agua superficiales, señalando las masas de agua según se encuentren sometidas a presiones significativas, no significativas y sin datos.

B.2. Respecto a las masas de agua subterráneas, el ISA debe recoger una tabla como la que se presenta a continuación, la cual sintetiza las presiones ejercidas sobre estas masas:

Tipo de presiones estudiadas	Significativas		No significativas		Sin datos		Totales	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Fuentes de contaminación puntual								
Fuentes de contaminación difusa								
Extracciones de agua y retornos								
Regulaciones del flujo de agua								
Otras incidencias antropogénicas								
Usos del suelo								

Tabla 16. Presiones ejercidas sobre las masas de agua subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Al igual que en caso anterior, debe realizarse una evaluación de las presiones globales, compendiar los datos en una tabla, e incluir un mapa que distinga las distintas masas de aguas subterráneas según el tipo de presión a la que se encuentren sometidas:

Masas de agua subterráneas	Presiones		
	Significativas	No significativas	Sin datos
Número de masas			
Porcentaje de masas			

Tabla 17 Presiones globales ejercidas sobre las masas de agua subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Esta información debe presentarse acompañada de un mapa que refleje las presiones globales ejercidas sobre las masas de agua subterráneas, señalando las masas de agua según se encuentren sometidas a presiones significativas, no significativas y sin datos.

B.3. Evaluación de impacto:

El ISA debe presentarse una tabla que recoja, para todas las categorías de masas de agua, la evaluación de los impactos realizada para las distintos tipos de masas de agua.

Tipo de impacto	Comprobado		Probable		Sin Impacto		Totales	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Ríos								
Lagos								
Aguas de transición								
Aguas costeras								

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Masas artificiales								
Masas de agua muy modificadas								

Tabla 18. Evaluación del impacto sobre las masas de agua superficiales de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Tipo de impacto					
Comprobado		Probable		Sin impacto	
Nº	%	Nº	%	Nº	%

Tabla 19. Resultados de la evaluación de impacto sobre masas de agua superficiales de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Esta información debe presentarse acompañada de un mapa que refleje los resultados de la evaluación global de impacto y las tres categorías: impacto comprobado, probable y sin impacto.

B.4. La misma evaluación de impacto que en el caso anterior debe recogerse para las masas de agua subterráneas de la Demarcación Hidrográfica.

B.5. Evaluación de riesgo:

Los datos cuantitativos deben presentarse en una tabla similar a la siguiente:

Tipo de riesgo	Seguro		En estudio		Nulo		Sin definir	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Ríos								
Lagos								
Aguas de transición								
Aguas costeras								
Masas artificiales								
Masas de agua muy modificadas								
Masas de agua subterráneas								
TOTAL								

Tabla 20. Resultados de la evaluación del riesgo de incumplir los objetivos medioambientales de la DMA para la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Los datos han de presentarse acompañados de dos mapas (para aguas superficiales y aguas subterráneas) que recoja las diferentes masas de agua de la cuenca según su tipología y las clasifique en función del tipo de riesgo correspondiente,

C. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS USOS DEL AGUA

C.1. Sería necesario incluir, en primer lugar, una tabla que resumiese brevemente el volumen de agua que se utiliza actualmente en cada sistema de explotación de la

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Demarcación para cubrir las demandas de la misma y las fuentes de la que procede, así como en los escenarios tendenciales que recoge la normativa (para los escenarios 2021 y 2027, si se dispone de las estimaciones al respecto).

APORTACIONES HÍDRICAS		Situación actual: año XX		2015		2021		2027	
		Hm³/año	% respecto al total	Hm³/año	% respecto al total	Hm³/año	% respecto al total	Hm³/año	% respecto al total
RÉGIMEN NATURAL (Hm³/año)	Superficial								
	Subterráneo								
REGULACIONES (Hm³/año)	Embalses								
	Retornos riegos								
	Retorno Centrales								
	Retornos urbanos								
	Reutilización								
	Desalación								
	Desalobración								
	Trasvases								
TOTAL									

Tabla 21. Cuadro sinóptico de la oferta hídrica disponible en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico actualmente, y en los escenarios tendenciales 2015, 2021 y 2027.

La información reflejada en el cuadro anterior debe plasmarse en cuatro gráficos, uno para cada uno de los horizontes temporales.

C.2. Respecto a los usos urbanos actuales, debe realizarse el análisis separadamente de viviendas principales y secundarias, para que, una vez conocidos estos datos y su previsible aumento a través de los escenarios ambientales, poder valorar la afección ambiental en determinadas zonas derivada de estos aumentos.

Por ello, debe incluirse en el ISA los datos del agua facturada en las viviendas principales de la Demarcación (m^3/año) en los últimos años, y la tasa de crecimiento correspondiente, y un mapa que recoja la distribución de los consumos de agua en viviendas principales en la Cuenca, de modo que pueda observarse las zonas donde claramente los consumos son mayores.

Un aspecto vital en planificación hidrológica es el análisis de tendencias y escenarios futuros de consumos de agua, que deben estimarse en tres horizontes: 2015, 2021 y 2027 (para los escenarios 2021 y 2027, si se dispone de las estimaciones al respecto). Es posible estimar los consumos de agua futuros para estos tres momentos temporales, de acuerdo con

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

lo dispuesto e el artículo 14 del RD 907/2007, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. De este modo, debe incluirse una tabla como la que sigue:

2015 (m^3/año)	2021 (m^3/año)	2027 (m^3/año)

Tabla 22 Escenarios de futuro de agua consumida en viviendas principales en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Sería interesante que este apartado considerase también el abastecimiento para usos públicos como limpieza de calles, mantenimiento de jardines y espacios de uso público, comercios, etc, ya que aunque su importancia aún es escasa en comparación con el resto de usos de agua urbana, lo cierto es que el uso del agua depurada para estas cuestiones está cada vez más extendido y su expansión será mayor en los próximos años.

C.3. Respecto a los usos industriales, para la caracterización de la presión industrial sobre los recursos hídricos de la Demarcación es necesario tener en cuenta tanto los factores cuantitativos (número de empresas emplazadas en la zona) como los cualitativos (actividades industriales con mayores requerimientos hídricos, actividades industriales más contaminantes). Esta información permite establecer dónde se concentran las mayores presiones e impactos sobre los recursos hídricos.

En relación con lo anterior, el ISA debe recoger un listado de las actividades industriales presentes en la Demarcación más contaminantes, y su consumo de agua actual y su ubicación geográfica mediante un mapa, y los consumos estimados de agua para las mismas en el futuro. La caracterización de una industria como contaminante se realiza en virtud de la norma autonómica correspondiente, y en su defecto, en la Ley 16/2002, de prevención y control integrado de la contaminación (actividades sometidas a Autorización Ambiental Integrada). En este punto, también debe recogerse el dato de consumo anual para abastecimiento industrial en la Demarcación actualmente (hm^3/año) y una tabla con los datos de la estimación de los consumos de agua en los tres escenarios tendenciales (para los escenarios 2021 y 2027, si se dispone de las estimaciones al respecto).

C.4. Sobre la caracterización económica de los usos del agua en la agricultura, el ISA. deberá analizar si se prevén nuevos regadíos para la DH del Cantábrico y en su caso incluir

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

los datos relativos al aumento estimado de la superficie con respecto a la existente, y el análisis tendencial de consumo de agua para esta actividad.

Además, el ISA debe recoger el análisis de los principales tipos de cultivo, la superficie que ocupan, si son de secano o de regadío, y los consumos de agua derivados. Todo ello es necesario conocerlo para evaluar la presión de esta actividad sobre los recursos hídricos de la cuenca, su evolución futura, y los impactos ambientales significativos que tiene en las distintas zonas del territorio de la Demarcación.

Por todo lo anterior, el ISA debe completar el análisis realizado y recoger las siguientes tablas:

Cultivos (tipos)	Total de la Demarcación Hidrográfica (ha)
Cereales para grano	
Cultivos industriales	
Olivar	
Viñedo	
Cítricos	
Frutales no cítricos	
Otros cultivos	
Barbecho	
Total de superficie en secano (ha)	
Total de superficie en regadío (ha)	
Total de superficie en cultivo (ha), incluyendo la superficie de barbecho	
Necesidades hídricas de cultivos (m^3)	

Tabla 23. Cultivos más importantes incluidos en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Cultivos (tipos)	Total (ha)	Secano (ha)	Regadío (ha)	Consumo en secano (hm^3)	Consumo en regadío (hm^3)	Consumo en parcela (hm^3)
TOTAL						

Tabla 24. Cultivos más importantes en los territorios incluidos en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico. Estimación para 2015

La tabla 24 debe completarse también para los escenarios tendenciales de 2021 y 2028 (para los escenarios 2021 y 2027, si se dispone de las estimaciones al respecto).

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

C.5. En el Documento de Inicio de la DH del Cantábrico no se incluye ningún dato relativo a la ganadería en la Demarcación. Teniendo en cuenta las presiones e impactos que de esta actividad se derivan principalmente para la calidad de las aguas, sería conveniente completar este punto en el ISA a efectos de conocer la situación actual y tendencias y valorar mejor las afecciones al medio ambiente que puedan producirse. Para reflejar las presiones sobre la calidad de las aguas derivadas de la ganadería pueden utilizarse las tablas de conversión realizadas por el antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca en la caracterización económica de los usos del agua correspondiente al cumplimiento de la Directiva Marco del Agua.

Situación actual	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Cabezas				
Consumo (m^3/año)				

Tabla 25. Estimación de consumos producidos en ganadería i en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Situación actual	Situación actual: año XX	2015	2021	2028
Cabezas				
Consumo (m^3/año)				

Tabla 26. Escenario de tendencias de cabezas de ganado en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

C.6 Tampoco incluye el Documento de Inicio de la EAE datos relativos al ocio y el turismo en la DH, como actividad recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008). El concepto de actividad turística es difícil definir con precisión ya que abraca un gran conjunto de servicios y oportunidades de recreo, pero existen tres actividades que tienen importancia en relación al uso significativo del agua: los alojamientos turísticos, las viviendas secundarias y los campos de golf.

La Demarcación Hidrográfica del Cantábrico comprende un territorio vasto y variado, en el que existe también una zona costera y marina con un desarrollado sector turístico y del ocio, elevados impactos al medio y una gran presión sobre los usos del agua. Por ello, es necesario analizar este punto para poder realizar una EAE acertada del Plan y de las determinaciones en él contenidas. Por ello, el ISA debe incluir:

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

- Con respecto a los alojamientos turísticos, deben estimarse los consumos de agua que en la actualidad se producen en los alojamientos turísticos, para lo cual es necesario conocer su distribución espacial en el territorio (zonificándolo por municipios y en tres categorías: litoral, urbano de interior, rural de interior), los consumos medios de agua en los alojamientos turísticos (existe una cierta relación entre la categoría del establecimiento y el consumo medio de agua (litros/plaza y día), el número de establecimientos turísticos existentes, las plazas existentes en alojamientos turísticos, y el nivel de ocupación de los establecimientos (días/año). Mediante la relación de los tres factores indicados debe obtenerse una tabla similar a la siguiente:

Tipo de alojamiento	Consumo de agua (Hm^3)
Apartamentos	
Campamentos turísticos	
Hoteles	
Hotel-Apartamento	
Pensiones	
Turismo rural	
TOTAL	

Tabla 27. Consumos de agua en alojamientos turísticos en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Así mismo, es importante realizar un análisis tendencial que recoja, para los años 2015, 2021 y 2027 (para los escenarios 2021 y 2027, si se dispone de las estimaciones al respecto) los consumos estimados de agua totales de los alojamientos turísticos para poder realizar una planificación hidrológica acertada. Es necesario estimar el futuro crecimiento de los hoteles y otros alojamientos turísticos, la distribución temporal de la demanda de estas plazas, el incremento de un turismo no estacional asociado, por ejemplo a los campos de golf, el desplazamiento de estas nuevas presiones hacia los municipios interiores por la saturación de la zona costera, etc, para poder valorar la afección ambiental de las disposiciones incluidas a este respecto en el Plan Hidrológico.

- Debe analizarse también lo relativo a las viviendas secundarias, es decir, el turismo que utiliza una vivienda vacacional en determinadas temporadas del año. Analizar cual ha sido cuál ha sido la evolución de viviendas del parque secundario en los últimos años y la evolución de los consumos de agua en ese período permitirá evaluar el incremento de la presión por esta actividad sobre el agua para el territorio de la Demarcación Hidrográfica

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

(para los escenarios 2021 y 2027, si se dispone de las estimaciones al respecto). Esta información debe acompañarse presentada en un mapa que refleje los consumos de agua en viviendas secundarias en la Demarcación en la situación actual para los distintos municipios y los tres ámbitos territoriales indicados antes (litoral, urbano de interior y rural de interior). La información puede presentarse de la siguiente manera:

Demarcación Hidrográfica	Situación actual :año XX	2015	2021	2028
Número de viviendas secundarias				
Consumo de agua en viviendas secundarias (m^3/año)				
Tasa de Crecimiento Nº viviendas (%)				
Tasa de crecimiento del consumo de agua (%)				

Tabla 28. Escenarios de futuro de consumo de agua en viviendas secundarias en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

- Campos de golf: conocer el consumo actual de agua de estas instalaciones y realizar el escenario tendencial para 20015, 2021 y 2027 (para los escenarios 2021 y 2027, si se dispone de las estimaciones al respecto), teniendo en consideración las instalaciones existentes y las que están en tramitación, es necesario para tener una visión completa de las demandas de agua de cara a una planificación de las mismas en el Plan. Estos dos tipos de análisis, el de consumo actual y las previsiones a futuro, no aparecen recogidos en el Documento de Inicio y han de ser incluido en el ISA.

Estas evaluaciones son particularmente interesantes debido a las importantes repercusiones directas tanto socioeconómicas como ambientales que estas instalaciones tienen sobre el área de influencia donde se localizan, por tres motivos:

- Los campos de golf en sí son grandes consumidores de recursos hídricos y es necesario valorar su tendencia temporal al futuro para realizar una planificación hídrica de los recursos disponibles real y ajustada.
- La proliferación de nuevos proyectos de campo de golf ha aumentado en los últimos años en las zonas costeras, precisamente donde se produce el fenómeno de litoralización de la población y un aumento más acusado de la demanda de agua.
- Los nuevos proyectos de campo de golf, en la mayoría de los casos, llevan asociados promociones urbanísticas y en aquellos caso en lo que esto no sucede, los campos un

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgeai@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX: 91 597 58 76

reclamo para las mismas, lo que supone de nuevo un aumento de la demanda de agua que por el tipo de turismo que atrae, es considerable.

Por todo lo anterior, el ISA debe incluir el volumen de agua consumida por los campos de golf actualmente existentes en la Demarcación Hidrográfica (m^3/año) y su evolución a lo largo del tiempo, en unas tablas como las siguientes:

Nº de campos de golf	Tamaño (nº de hoyos)	Consumos (m^3/año)
	18	
	27	
	36	
	TOTAL	

Tabla 29. Volumen de agua consumida por los campos de golf en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

	Situación actual: año XX	2015	2021	2027
Nº campos de golf 18 hoyos				
Nº campos de golf 27 hoyos				
Nº campos de golf 36 hoyos				
Nº campos de golf				
TOTAL nº campos de golf				
Consumo (m^3/año) campos 18 hoyos				
Consumo (m^3/año) campos 27 hoyos				
Consumo (m^3/año) campos 36 hoyos				
TOTAL consumo (m^3/año) campos de golf				

Tabla 30. Análisis de las tendencias en los volúmenes de agua consumidos en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

A modo de resumen, y con objeto de visualizar mejor los datos, es conveniente incluir una tabla de estas características:

Concepto	Consumo situación actual (Hm^3/año)	Consumo 2015 (Hm^3/año)	Consumo 2021 (Hm^3/año)	Consumo 2027 (Hm^3/año)
Alojamientos turísticos				
Viviendas secundarias				
Campos de golf				
TOTAL				

Tabla 31. Consumos medios de agua en turismo en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

C.7. Respecto a la caracterización económica de los usos del agua para la producción de energía, sería conveniente que el ISA incluye los datos actualizados de uso del agua para el sector hidroeléctrico, para la producción térmica y otros tipos de energías:

Central	Potencia Instalada (Mw)	Consumo actual: año XX (hm^3)
TOTAL		

Tabla 32. Consumos de agua asociados a la producción de energía eléctrica y térmica en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Deben también ubicarse geográficamente las centrales existentes en el ámbito territorial de la DH del Cantábrico, así como el análisis tendencia del consumo de agua en usos energéticos para los años 2015,2021 y 2027 (para los escenarios 2021 y 2027, si se dispone de las estimaciones al respecto).

Para finalizar la información complementaria a recoger en el ISA con respecto a la caracterización económica de los usos del agua, debe incluirse una tabla-resumen como la que sigue:

Usos del agua	Consumo actual (Hm^3)	Porcentaje sobre el total de usos
Abastecimiento urbano		
Industria		
Agricultura		
Ganadería		
Turismo		
Energía		
TOTAL		

Tabla 33. Cuadro sinóptico de los consumos de agua por uso en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

C.8. En relación con las demandas de agua para cada uno de los usos principales de la Demarcación, sería interesante que apareciesen analizadas en el ISA, además de los usos más habituales del agua, los siguientes:

- La acuicultura continental, tanto en agua dulce como en agua salobre: debe indicarse para cada instalación, si las hubiere, los puntos de extracción y vertido del efluente, que

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgcea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

además deben figurar en el inventario de presiones relativo a extracción de agua y contaminación por fuentes puntuales respectivamente.

- Los usos recreativos, tanto los que implican derivar agua del medio natural como las que usan el agua en embalses, ríos y parajes de un modo no consuntivo (deportes acuáticos como vela, windsurf, remo, barcos de motor, esquí acuático, piragüismo, rafting), el baño y la pesca deportiva. Es interesante incluir también las actividades de ocio relacionadas indirectamente con el agua, utilizándola como centro de atracción o punto de referencia (acampadas, excursiones, ornitología, caza, senderismo, etc.)

- Los usos de navegación y transporte acuático que puedan existir actualmente en la Demarcación Hidrográfica.

Es importante para realizar una correcta planificación hidrológica contar con un cuadro que radiografíe la situación y tendencias de la cuenca en lo que se refiere a las demandas de recursos hídricos (para los escenarios 2021 y 2027, si se dispone de las estimaciones al respecto). Este punto es muy importante conocerlo para valorar posteriormente los aspectos ambientales planteados en las medidas, alternativas, etc., que se deriven de los objetivos que se planteen. Por ello, el ISA ha de recoger una tabla como la que sigue:

DEMANDA HÍDRICA			Situación actual: año XX		2015		2021		2027	
			Hm³/año	% respecto al total	Hm³/año	% respecto al total	Hm³/año	% respecto al total	Hm³/año	% respecto al total
ELEMENTOS TERRITORIALES	Espacios Naturales									
	Abastecimiento urbano									
	Industria no conectada									
	Agricultura	Regadío								
		Secano								
	Ganadería									
	Trasvases									
	Energía hidroeléctrica									
	Refrigeración de Centrales térmicas									
	Ocio y turismo	Alojamientos turísticos								
		Viviendas secundarias								
		Campos de golf								
	Acuicultura									
ELEMENTOS AMBIENTALES	Cauces superficiales									
	Acuíferos									
	Embalses									
TOTAL										

Tabla 34. Cuadro sinóptico de la demanda hídrica identificada en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico y los escenarios tendenciales estudiados.

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

La información reflejada en el cuadro anterior debe plasmarse en cuatro gráficos, uno para cada uno de los horizontes temporales

D. REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS

D.1 En el caso de las zonas de captación para abastecimiento, el ISA debe recoger un resumen de la información existente al respecto, y una tabla que sintetice los resultados con un formato como el que sigue:

Tipo de captaciones		Masas de agua afectadas (nº)	Captaciones (nº)
SUPERFICIALES (embalses)			
SUBTERRÁNEAS	Manantiales		
	Pozos/sondeos		
Captaciones totales en la Demarcación Hidrográfica del Segura			

Tabla 35. Masas de agua afectadas por captaciones de agua potable en la Demarcación Hidrográfica del

Sería también interesante incluir dos mapas diferentes, para las masas de agua superficial y subterránea, que recojan los puntos de captación de masas de agua diferenciando entre embalses, manantiales y pozos.

D.2. En el caso de las zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas, también debe incluirse un resumen de la información existente, así como una tabla similar a que se presenta a continuación:

Nº zonas de cría de moluscos	Superficie de zonas de cría de moluscos	Masas de agua afectadas	Superficie de masas de agua afectadas

Tabla 36. Zonas de producción de moluscos en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Al igual que en los casos anteriores. Como complemento de la información sería interesante incluir un mapa donde se reflejasen las zonas de producción de moluscos existentes en la Demarcación y las masas de agua afectadas

D.3. Para las masas de agua designadas vulnerables a nutrientes, la información ha de ser completada, incluyendo unas tablas resúmenes similares a las siguientes:

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Zonas vulnerables	Superficie total de la zona vulnerable (km^2)	% de la S total de las masas de agua de la Demarcación
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE XX		
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE XX		
COMUNIDAD AIUTÓNOMA DE XX		
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE XX		
Total		

Tabla 37. Masas de agua afectadas por la declaración de zonas vulnerables en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Tipos de masas de agua		Superficie afectada (km^2)	Longitud afectada (km)	N° masas de agua afectadas	% del N° masas de agua totales
Superficiales	Red	----------			
	Masas		----------		
Subterráneas			----------		

Tabla 38. Masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Sería interesante incluir dos mapas, uno para las aguas superficiales y otros para las subterráneas, donde apareciesen las masas de agua afectadas por la declaración de zonas vulnerables. En el caso de las aguas superficiales, debe detallarse no sólo las zonas vulnerables declaradas sino también las masas de agua afectadas, y en el caso de las aguas subterráneas, deben distinguirse no sólo las zonas vulnerables sino también las masas de agua subterráneas afectadas y las que no lo están.

D.4 Para el caso de las masas de agua designadas sensibles, debe aportarse una tabla con datos completos y detallados que ayuden a visualizar la magnitud de la situación. Un ejemplo de lo anterior sería la siguiente tabla:

Zonas sensibles	N° masas de agua designadas sensibles	% del total de las masas de agua de la Demarcación
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE XX		
COMIUNIDAD AUTÓNOMA DE XX		
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE XX		
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE XX		
TOTAL		

Tabla 39. Masas de agua afectadas por la declaración de zonas sensibles en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Tipos de masas de agua		Superficie afectada (km²)	Longitud afectada (km)	Nº masas de agua afectadas	% del Nº masas de agua totales
Superficiales	Red	----------			
	Masas		----------		
Subterráneas			----------		

Tabla 40. Masas de agua declaradas sensibles a nutrientes en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Sería interesante que en el ISA apareciesen dos mapas con las masas de agua afectadas por la declaración de zonas sensibles, para las masas de agua superficiales y subterráneas.

D.5. En relación con las zonas designadas para la protección de hábitats o especies, el ISA debe reflejar esta información, incluyendo una cuantificación en relación al número, superficie y distribución de los lugares de la Red Natura 2000 en los que el mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un factor importante de su protección. El documento ha de incluir unas tablas como las siguientes:

Tipo de masas de agua		Masas de agua afectadas (nº)	Superficie afectada (km²)	Longitud afectada (km)
SUPERFICIALES	Red		----------	
	Masas			----------

Tabla 41. Masas de agua superficiales afectadas por la declaración de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Tipo de masas de agua		Masas de agua afectadas (nº)	Superficie afectada (km²)	Longitud afectada (km)
SUPERFICIALES	Red		----------	
	Masas			----------

Tabla 42. Masas de agua superficiales afectadas por la declaración de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

La relación completa de masas de agua afectadas por alguna figura de protección en la Demarcación Hidrográfica debe aparecer detallada en un anexo del ISA.

Sería también deseable incluir dos mapas diferentes; uno relativo a las masas de agua superficiales afectadas por la declaración de zonas LIC, indicando los límites de las zonas LIC y las masas de agua superficiales afectadas en función de su tipología (masas de agua tipo ríos, lagos, costeras, de transición, artificiales y muy modificadas). El segundo mapa debe recoger lo mismo pero respecto de las zonas ZEPA

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

En este apartado también debe completarse la información relativa a zonas declaradas bajo otras figuras de protección en las que el agua sea un factor determinante de su conservación (zonas Ramsar, ZEPIM, Reservas de la Biosfera, Reservas marinas, Reservas Naturales, etc.), incluyendo una breve reseña de texto, tablas y gráficos similares a los anteriores.

D.7 En el caso de las zonas de protección o mejora de la vida piscícola, designadas tanto desde el punto de vista ecológico como económico para proteger las poblaciones de peces de las diversas consecuencias asociadas al vertido de sustancias contaminantes en las aguas (Directiva 2006/44/CE y Orden de 16 de diciembre de 1988), el ISA debe completar este aspecto y reseñar para las Comunidades Autónomas incluidas en el ámbito territorial de la Demarcación, si lo hubiere, los tramos de ríos declarados por el Gobierno español protegidos por albergar especies ciprinícolas y salmonícolas de interés, y los tramos de ríos declarados por las propias administraciones regionales. Esta información debe acompañarse de un plano donde se reflejen los tramos de ríos declarados bajo esta figura de protección.

Debe incluirse una tabla que refleje los datos, similar a la siguiente:

TRAMO	Masas de agua afectadas	Longitud afectada (km)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA		
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA		
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA		
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA		
TOTAL		

Tabla 43. Tramos de río declarados Zonas para la protección de la vida piscícola en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

ANEXO V. CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS

	Criterios ambientales estratégicos	Criterios de evaluación: ¿La medida propuesta...
AIRE CLIMA	• Medidas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones • Medidas que promuevan el uso de maquinaria eco-efciente • Medidas que promuevan el uso de energías renovables	• ¿Promueve el ahorro y eficiencia energética de energía? • ¿Reduce las emisiones de gases de efectos invernaderos? • ¿Permite obtener la energía de una fuente renovable en vez de una fuente tradicional?

	Criterios ambientales estratégicos	Criterios de evaluación: ¿La medida propuesta...
VEGETACIÓN FAUNA ECOSISTEMAS BIODIVERSIDAD	<u>Conservación de espacios naturales protegidos</u> • Programas de medidas en espacios protegidos • Diseño de actuaciones basado en el principio de no causar afección apreciable a Red Natura 2000 <u>Conservación de la biodiversidad y los ecosistemas asociados al agua</u> • Integrar criterios ambientales en el seguimiento de los Sistemas de Explotación de Recursos parciales • Medidas que eviten el efecto barrera en tramos fluviales (pasos para la fauna) • Medidas que eviten el efecto barrera de embalses y azudes (escalas) • Medidas que permitan y mejoren la conectividad lateral del cauce y sus riberas (eliminación motas, reducción taludes, eliminación de escolleras y encauzamientos, etc.) • Eliminación de infraestructuras obsoletas (presas, azudes, tendidos eléctricos, etc.) y restauración ambiental • Mantenimiento y seguimiento del régimen de caudales ecológicos • Plan de mejora ecológica de las masas de agua artificiales • Medidas para prevenir, y erradicar especies exóticas invasoras • Medidas para evitar la traslocación de especies entre diferentes cuencas	• ¿Fomentan la prevención de entrada de especies exóticas invasoras en la cuenca? • ¿Permiten erradicar las especies exóticas invasoras? • ¿Genera coste ambiental en relación con los beneficios obtenidos al eliminar las especies exóticas? • ¿Mejoran la información y sensibilización ambiental de la sociedad en relación con la problemática de las especies exóticas invasoras? • ¿Supone la ocupación total o parcial de un espacio natural protegidos? • ¿Causa afecciones a un espacio natural protegido y/o a su área de influencia? • ¿Causa influencia y/o afección en el espacio natural protegido aún no ubicándose en él? • ¿Supone la disminución de la cantidad o el empeoramiento de calidad del agua en el entorno o en una zona húmeda propiamente dicha? • ¿Lleva asociado indicadores y medidas que permitan realizar el seguimiento de los caudales ecológicos de las cuencas? • ¿Supone el empeoramiento de la situación de una masa de agua de la cual depende otra? • ¿Mejora o elimina el efecto barrera para la fauna en ríos, embalses o azudes? • ¿Mejora sensiblemente la conectividad lateral del cauce y sus riberas? • ¿Permite la llegada del agua a las riberas en las avenidas ordinarias? • ¿Permite la llegada del agua a la llanura de inundación en las avenidas extraordinarias? • ¿Permite eliminar infraestructuras obsoletas o que no cumplen razonablemente su la función para la que fueron diseñadas? • ¿Permite una mejora ecológica de las masas de agua artificiales de la cuenca? • ¿Tiene asociado un estudio que justifique verdaderamente la necesidad de ser realizada la infraestructura? • ¿Los sistemas de explotación de recursos cuentan con indicadores de su actividad referidos a aspectos del medio ambiente?

	Criterios ambientales estratégicos	Criterios de evaluación: ¿La medida propuesta...
PATRIMONIO GEOLÓGICO	<u>Conservación y mejora de la geodiversidad</u> • Medidas para la conservación del patrimonio geológico (declaración de georeservas u otras figuras de protección). • Diseño de actuaciones basado en el principio de no causar afección apreciable a la geodiversidad	• ¿Supone la ocupación total o parcial de un espacio natural con valores geológicos? • ¿Causa afecciones a un espacio natural con valores geológicos?

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

	Criterios ambientales estratégicos	Criterios de evaluación: ¿La medida propuesta...
SUELOS PAISAJE	<u>Prevenir, reducir y mitigar la erosión y desertificación del suelo</u> • Conservar y aumentar la cobertura forestal del terreno. • Conservación de las características naturales del terreno. • No utilización de maquinaria pesada que compacte o degrade el terreno • Buenas prácticas de riego agrícola • Buenas prácticas en la realización de obras con respeto al suelo <u>Conservar la naturalidad de los paisajes existentes en el ámbito territorial</u>	• ¿Supone un cambio de uso del suelo? • ¿Supone un aumento de la superficie de tierras agrícolas? • ¿Supone un crecimiento de las superficies artificiales de suelo? • ¿Supone un aumento de la superficie artificial de suelo en la franja de los 10 primeros Km. de costa? • ¿Puede suponer un aumento del número de acuíferos costeros salinizados, o un agravamiento de la problemática en los ya existentes? • ¿Supone un aumento de la extracción anual de agua subterránea de los acuíferos? • ¿Supone un aumento del gasto en programas para prevenir la erosión del suelo? • ¿Supondrá el vertido de sustancias contaminantes y residuos al suelo, aunque sea accidentalmente? • ¿Aumenta el grado de artificialidad del territorio donde se aplica? • ¿Puede causar con su aplicación fragmentación del paisaje?

	Criterios ambientales estratégicos	Criterios de evaluación: ¿La medida propuesta...
AGUA POBLACIÓN SALUD HUMANA	<u>Sostenibilidad del uso del agua</u> • Políticas que impliquen el uso del agua adecuadas a la realidad territorial (geográfica, climática e hidrológica) • Medidas de diversificación del recurso • Priorización de las actuaciones que conlleven ahorro o reducción del consumo de agua (reducción de pérdidas, cambio de actividad, reutilización) • Penalización de las actuaciones que incrementen el uso del agua <u>Eficiencia en el uso del agua. Protección a largo plazo del recurso</u> • Medidas para la modernización en las infraestructuras asociadas al agua y en particular en las redes de distribución. • Medidas para el fomento del ahorro del recurso agua • Internalización de los costes reales del agua, incluyendo sus costes medioambientales • Medidas de coordinación con otros planes para optimizar la utilización de los recursos hídricos • Medidas de recuperación de caudales por optimización en la gestión del agua <u>Conservación y mejora del estado cuantitativo y cualitativo del recurso</u> • Utilización de las mejores tecnologías disponibles • Medidas de control sobre vertidos y otras actividades con incidencia en el estado de las aguas • Medidas de detección, reducción y eliminación de las sustancia peligrosas recogidas en la lista I, lista II preferentes y lista II prioritarias del anexo IV del RPH	• ¿Supone un aumento de la detección y el control sobre aquellas actividades que generan vertidos y/o daños a las aguas? • ¿Conlleva medidas para prevenir, reducir y corregir las repercusiones negativas de los episodios de contaminación accidental que se producen en las masas de agua? • ¿Supone un aumento de la seguridad de los usuarios frente a medidas contaminantes o perjudiciales de la salud humana? • ¿Supone un aumento de la vigilancia que ejerce la policía fluvial? • ¿Supone una mejora de la aplicación del régimen sancionador (nº de denuncias atendidas, nº de expedientes tramitados, proporcionalidad de la sanción a la infracción)? • ¿Supone una modernización y mejora de las redes de distribución de agua y sistemas de riego? • ¿Supone un cambio de actividad que permita reducir el consumo de agua? • ¿Favorece instauración de un régimen de caudales ecológicos por optimización de la gestión del agua? • ¿Supone una internalización de los costes reales del agua? • ¿Supone un aumento de la superficie agrícola en zonas con déficit hídrico? • ¿Supone un aumento del uso del agua en zonas con déficit hídrico? • ¿Supone un uso del agua sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta la realidad hídrica de la zona? • ¿Puede suponer el fomento y la atracción de actividades altamente consumidoras de agua? • ¿Conlleva una penalización económica de las actividades que supongan un aumento del uso del

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

	• Medidas para prevenir, reducir y corregir as repercusiones negativas de los episodios de contaminación accidental en cualquier tipo de masa de agua • Aumento de la vigilancia de la policía fluvial • Aplicación de la potestad sancionadora más eficientemente	agua?

	Criterios ambientales estratégicos	Criterios de evaluación: ¿La medida propuesta...
PATRIMONIO CULTURAL	Preservar,, recuperar y mejorar el patrimonio histórico Protección y mejora de los sistemas tradicionales asociados al agua (acequias, estanques, canales, pozos, molinos, molinos de marea, caños de marea, diques de carena, casas salineras, vueltas de afuera, salinas tradicionales, etc.)	• ¿Aumenta la protección o la conservación del patrimonio cultural existente asociado al uso del agua? • ¿Promueve la divulgación y el conocimiento por parte de la sociedad de la riqueza del patrimonio cultural asociado al uso del agua existente?

	Criterios ambientales estratégicos	Criterios de evaluación: ¿La medida propuesta...
BIENES MATERIALES	• Preservar el tejido social • Fijar población al territorio rural, evitando agravar los desequilibrios territoriales que en términos de población puedan existir • Reducir el número de personas y la superficie afectada por fenómenos de inundación, de sequía, y de riesgo sísmico en zonas de presas • Eliminar, cuando sea posible, las actuaciones del hombre que pueden agravar los efectos de las inundaciones: ocupación llanura de inundación, canalizaciones mal dimensionadas, etc. • Reducir el número de personas y la superficie afectada por fenómenos de retroceso del borde costero, inestabilidad de los terrenos, inundación en las zonas costeras, etc. • Evitar, corregir y minimizar los impactos sobre las zonas costeras derivados de las infraestructuras de regulación de la DH y de las infraestructuras costeras • Eliminar, cuando sea posible, las actuaciones del hombre que causan interrupción del transporte de sedimentos y retroceso del borde costero	• ¿Incorpora criterios ambientales y sociales en los estudios de situación y actuaciones de grandes infraestructuras hidráulicas? • ¿Ayuda a fijar población a las zonas rurales? • ¿Reduce el número de personas y la superficie que puede verse afectadas por fenómenos de inundación, de sequía, o de riesgo sísmico en zonas de presas? • ¿Reduce el número de personas y la superficie afectada por fenómenos de retroceso del borde costero, inestabilidad de los terrenos, inundación en las zonas costeras, etc.? • ¿Favorece la eliminación de las actuaciones del hombre que pueden agravar los efectos de las inundaciones: ocupación llanura de inundación, canalizaciones mal dimensionadas, etc.? • ¿Supone la existencia de algún tipo de impacto sobre las zonas costeras? • ¿Disminuye el número de infraestructuras de regulación de la DH o de las infraestructuras costeras? • ¿Favorece la eliminación, cuando sea posible, de las actuaciones del hombre que causan interrupción del transporte de sedimentos y retroceso del borde costero? • ¿Favorece la eliminación, cuando sea posible, de las actuaciones del hombre que desnaturalizan los bienes de DPMT disminuyendo su biodiversidad asociada?

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

ANEXO VI. INDICADORES DE COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS Y DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN

CA=Comparación de alternativas del Plan. Se= Seguimiento del Plan. CARTOGRAFÍA= recoger los resultados en soporte cartográfico

SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES					
Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I f)	**Objetivos ambientales**	**Indicadores asociados**	**Valor de los indicadores en el estado inicial (punto 4.2.1)**	**Valor de los indicadores tras aplicar PHD (PARA CADA ALTERNATIVA)**	**Descripción de los resultados obtenidos**
AIRE CLIMA	• Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación hidrológica • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los sistemas de gestión del recurso, aumentando el uso de las energías renovables y mejorando la eficiencia energética • No incrementar el consumo de energía	Consumo energético en el PHD desglosado (desaladoras, bombeos, etc). *(CA y Se).*			
		Reducción de la producción hidroeléctrica (MW y %) y fuentes energéticas que lo sustituyen con el PHD. *(CA y Se).*			
VEGETACIÓN FAUNA ECOSISTEMAS BIODIVERSIDAD	• Evitar la ocupación de espacios naturales protegidos y hábitats de especies prioritarias • Evitar la fragmentación de hábitats • Evitar cambios en la composición de ecosistemas • Conservación, recuperación y mejora de los ecosistemas acuáticos o ligados al uso del agua • Prevenir las alteraciones ecológicas en cauces, riberas, zonas húmedas, zonas costeras y de transición • Mejora del estado de las masas de aguas por recuperación de las masas de agua de las cuales son dependientes • Recuperación de zonas húmedas degradadas • Aumento de la diversidad biológica de zonas ligadas al uso del agua • Mejorar el potencial ecológico de las masas de agua artificiales • Proteger la calidad de agua para los peces en zonas de especial valor piscícola • Recuperación de zonas húmedas	Número, tipo y porcentaje de superficie hábitats de interés comunitario (respecto al total de la cuenca) afectados por las actuaciones del PHD, discretizando por categoría de masa de agua (por ejemplo: detracción de caudales, usos del suelo, restauración ambiental, inyección de acuíferos, etc.). *(CA y Se).*			
		Número, Km y porcentaje de LIC fluviales con sí/no cumplimiento de los caudales ambientales (calculado considerando los objetivos de protección). *(CA y Se).*			
		Número, superficie y porcentaje de espacios protegidos y de la Red Natura 2000 conectados a masas de agua afectados por las actuaciones del PHD, discretizando por categoría de masa de agua (detracción de caudales, usos del suelo, restauración ambiental, inyección de acuíferos, etc.). *(CA y Se).*			
		Número y taxones de especies ligadas a las aguas costeras y de transición incluidas dentro de los catálogos de especies amenazadas nacionales o autonómicos que son perjudicados o favorecidos por las actuaciones del plan. *(Se).*			
		Número y taxones de especies ligadas al hábitat fluvial y/o humedales incluidas dentro de los catálogos de especies amenazadas nacionales o autonómicos que son perjudicados o favorecidos por las actuaciones del plan. *(CA y Se).*			
		Número de humedales incluidos entre las "zonas protegidas", y porcentaje respecto al total, para los que se han establecido las conexiones de su demanda hídrica con los niveles piezométricos mínimos necesarios del acuífero que los alimenta. *(CA y Se).*			

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES					
Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I f)	**Objetivos ambientales**	**Indicadores asociados**	**Valor de los indicadores en el estado inicial (punto 4.2.1)**	**Valor de los indicadores tras aplicar PHD (PARA CADA ALTERNATIVA)**	**Descripción de los resultados obtenidos**
	degradadas	Número de humedales y superficie, respecto al total de la cuenca, recuperados por las actuaciones del PHD, distinguiendo aquellos legalmente protegidos. *(CA y Se)*.			
	• Mejorar la conectividad lateral de las masas de agua • Prevenir las alteraciones hidromorfológicas de las masas de agua • Eliminar y controlar las especies exóticas invasoras	Número y categoría de masas de agua afectadas por especies invasoras *(Se)*.			
		Número, tipo e importancia de especies exóticas invasoras potencialmente introducidas como consecuencia de las actuaciones del PHD: trasvases, etc. *(Se)* .			
		Número, tipo e importancia de especies exóticas invasoras erradicadas gracias a las medidas del PHD. *(Se)*.			
		Evolución de la erradicación de especies invasoras por las actuaciones del PHD (por superficie de ocupación, número de poblaciones, porcentaje de masas de agua afectada, etc.). *(Se)*.			
		Número de infraestructuras hidráulicas modificadas (retirada, retranqueo, etc.) que mejoren la conectividad de los ecosistemas acuáticos. *(CA y Se)*. Número y porcentaje respecto al total en la cuenca de masas de agua superficiales en que se cumplen los regímenes de caudales ambientales. *(CA y Se)*.			
		Longitud de ríos, y porcentaje respecto al total, donde mejora el estado de los indicadores hidromorfológicos. *(CA y Se)*.			
		Longitud de ríos, y porcentaje respecto al total, donde se realiza restauración fluvial de las riberas. *(CA y Se)*.			
		Número de masas de agua en que se empeora la calidad de los indicadores hidromorfológicos por nuevas infraestructuras. *(CA y Se)*.			
		Número, y porcentaje respecto al total, de azudes y presas con escalas de peces construidas y mejoradas. *(CA y Se)*.			
		Superficie inundada por la construcción de nuevas presas o modificación de las existentes, distinguiendo la superficie en espacios protegidos. *(CA y Se)*.			
		Número y ubicación de nuevas infraestructuras. (presas, puentes, azudes, etc.), por Km. de cauce. *(CA y Se)*.			
		Longitud y porcentaje respecto a las masas de agua declaradas en peor estado que el "buen estado", en que se mejora la conectividad lateral. *(CA y Se)*.			
PATRIMONIO GEOLÓGICO	• Evitar la ocupación de espacios naturales protegidos debido a su geodiversidad	Número, superficie y porcentaje respecto al total de espacios naturales protegidos por su geodiversidad, afectados por las actuaciones del PHD. *(CA y Se)*.			

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX : 91 597 58 16

SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES					
Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I f)	**Objetivos ambientales**	**Indicadores asociados**	**Valor de los indicadores en el estado inicial (punto 4.2.1)**	**Valor de los indicadores tras aplicar PHD (PARA CADA ALTERNATIVA)**	**Descripción de los resultados obtenidos**
	• Evitar la afección a lugares con elementos relevantes de geodiversidad				
SUELO PAISAJE	• Conservación, protección y mejora de las masas forestales • Mejora de las prácticas agrícolas en relación al suelo	Superficie (ha) y porcentaje de suelo en que se modifica el riesgo de sufrir, agravarse o mejora procesos erosivos por actuaciones sobre el suelo. Especificar si se trata de laderas, zonas llanas, zona litoral, interior de la DH, etc. *(CA y Se).*			
		Previsión de superficie modificada, y porcentaje respecto al total, en los usos del suelo asociados a nuevas concesiones de agua *(Se)*			
		Superficie del suelo y porcentaje con respecto al total ocupada por las nuevas infraestructuras que se ejecuten con arreglo al PHC. *(CA y Se).*			
		Superficie de llanura de inundación ganada y recuperada para mejora del bosque de ribera y cumplimiento de la función ambiental de la zona de policía. *(CA y Se).*			
		Número y superficie de DPH ocupadas por usos agrícolas, ganaderos, urbanizaciones, etc., y superficie de zonas recuperadas por las actuaciones del PHD. *(CA y Se).*			
	Disminución de la contaminación del suelo por residuos y sustancias contaminantes	Volumen de residuos producidos con las actuaciones recogidas en el PHC. Volumen estimado de movimiento de tierras *((Se).*			
		Volumen de materiales utilizadas: hormigón, escollera, metálicos, minerales, plásticos, etc., con las actuaciones recogidas en el PHC y porcentaje de material reutilizado. *(Se)*			
AGUA POBLACIÓN SALUD HUMANA	• Reducción de la contaminación • Reducción paulatina de la contaminación de masas de agua subterráneas y su prevención • Protección y mejora del medio acuático • Garantizar la cantidad y calidad suficiente de	Número de EDARs, y porcentaje respecto al total, que se dotan de tratamiento terciario, identificando aquellas que vierten en zonas sensibles o declaradas afectadas por contaminación de nitratos. *(CA y Se).*			
		Número de masas de agua de la categoría ríos y longitud y porcentaje respecto al total naturalizados como consecuencia de las actuaciones del PHD. *(CA y Se).*			
		Número y superficie de zonas vulnerables con programas de actuación aprobados. *(Se).* CARTOGRAFÍA			
		Número y superficie de zonas vulnerables que se han recuperado por las actuaciones del PHD. *(CA y Se).*			
		Número y tipo de cabezas de ganado en zonas declaradas vulnerables *(Se).*			
		.Número, categoría y porcentaje de masas de agua subterráneas con concentración de cloruros ≥ 1000mg/l. *(Se).*			

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES					
Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I †)	**Objetivos ambientales**	**Indicadores asociados**	**Valor de los indicadores en el estado inicial (punto 4.2.1)**	**Valor de los indicadores tras aplicar PHD (PARA CADA ALTERNATIVA)**	**Descripción de los resultados obtenidos**
	recurso hídrico para el buen estado de las masas de agua, y ecosistemas acuáticos y terrestres • Aumentar la superficie de agricultura ecológica, libre de productos químicos de síntesis • Restitución de las corrientes a sus condiciones naturales de funcionamiento hidrológico • Acondicionamiento y recuperación ambiental de cauces y riberas • Limpieza de las riberas de ríos, masa de agua de transición y costeras	Número, tipo y porcentaje de masas agua subterránea costera con mejora en la concentración de cloruros. *(Se)*.			
		Volumen de agua aproximado y porcentaje respecto al total recuperado/ legalizado con la clausura de pozos ilegales. *(Se)*.			
		Número de pozos costeros afectados/recuperados por efecto de intrusión salina por las actuaciones del PHD. *(CA y Se)*.			
		Número y categoría de masas de agua eutrofizadas, por subcuencas, que se han mejorado como consecuencia de las actuaciones del PHD. *(CA y Se)*.			
		Nº y categoría de masas de agua para las que se establecen excepciones en el cumplimiento de los objetivos medioambientales: prórrogas, objetivos menos rigurosos, Deterioro temporal, modificaciones (articulo 39 del RD de la Planificación Hidrológica). *(CA y Se)*.			
		Número de municipios costeros con autorización de vertido respecto al total de municipios existentes y aumento por las actuaciones del PHD. *(CA y Se)*.			
		Aumento (en volumen y en carga contaminante) de la capacidad de depuración de efluentes urbanos, distinguiendo zonas sensibles, por las actuaciones del PHD. *(CA y Se)*.			
	• Reducción de extracciones para que la relación entre bombeo y recarga sea ≤ 1 • Construcción de captaciones de recarga artificial de acuíferos para situaciones de emergencia por sequía • Fomento de la utilización de las aguas regenerada • Minimización de los impactos ambientales derivados de las sequías y de las inundaciones	Capacidad de desalación instalada (hm3/día) en el PHD. *(CA y Se)*.			
		Longitud de sistemas de distribución en que se realizan mejoras para evitar pérdidas de recurso hídrico. Volumen de agua ahorrado. *(CA y Se)*.			
		Número de concesiones modificadas y volumen de agua recuperados para los ecosistemas acuáticos como consecuencia de la obtención de recurso hídrico por medio de la desalación de agua de mar del PHD. *(CA y Se)*.			
		Volumen de salmuera vertido al mar e incremento como consecuencia del PHD. *(CA y Se)*.			
		Número y longitud de emisarios existentes en la DH (distinguiendo por ARU y salmuera) y aumento por las actuaciones del PHD. *(CA y Se)*.			
		Volumen de agua, y porcentaje respecto al total, reutilizada para un nuevo uso o consumo y volumen de agua recuperada en fuente convencional gracias a la reutilización prevista en el PHD. *(CA y Se)*.			
		Volumen de agua y porcentaje respecto al total que se deja de verter a ríos como consecuencia de su uso para reutilización. *(CA y Se)*.			
		Número de concesiones modificadas (a la baja) y volumen de agua rescatados gracias a las actuaciones de modernización de regadíos en el PHD (o sustitución por cultivos de menor demanda hídrica). *(CA y Se)*.			

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sqea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES					
Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I f)	**Objetivos ambientales**	**Indicadores asociados**	**Valor de los indicadores en el estado inicial (punto 4.2.1)**	**Valor de los indicadores tras aplicar PHD (PARA CADA ALTERNATIVA)**	**Descripción de los resultados obtenidos**
		Aumento estimado en los niveles piezométricos de las masas de agua subterránea gracias al agua recuperada por modernización de regadíos (o sustitución por cultivos de menor demanda hídrica) y por aumento de la capacidad de desalinización de agua de mar en el PHD. *(CA y Se).*			
		Nº masas de agua subterráneas en riesgo de sobreexplotación y nº de masas de agua subterráneas declaradas sobreexplotadas añadidas /recuperadas en la DH por las actuaciones del PHD. *(CA y Se).*			
		Volumen de agua inyectado en masas de agua subterránea. *(CA y Se).*			
		Número, y porcentaje respecto al total de masas de agua y masas de agua sin buen estado cuantitativo, en que se alcanza el buen estado cuantitativo gracias a la recarga artificial prevista en el PHD. *(CA y Se).*			
		Porcentaje de concesiones (y porcentaje de volumen concedido) que cuentan con caudalímetro de control. *(Se).*			
	• Mejora de la eficiencia en el consumo de recursos hídricos en la agricultura, y en el ocio y turismo • Mejora del conocimiento del patrimonio natural y cultural asociado a las masas de agua	Aumento de la superficie (ha) de regadío (y porcentaje respecto al total agrícola), con sistema de riego localizado *(Se).*			
		Volumen, y porcentaje respecto al total consumido de agua recuperado como recurso como consecuencia de las actuaciones de modernización de regadíos. *(Se).*			
		Consumo de agua (m3/año) que se produce en nuevas viviendas secundarias y alojamientos turísticos, y especificar los que se produzcan ligados a nuevos campos de golf (Se).			
		Superficie (ha) ocupada por nuevas viviendas secundarias y alojamientos turísticos y especificar la que se produzca ligada a nuevos campos de golf (Se).			
		Dotaciones económicas respecto al total del coste de las medidas del PHD, destinadas a la sensibilización de la población. *(Se).*			
PATRIMONIO CULTURAL	Evitar las afecciones al patrimonio histórico y a las vías pecuarias	Número y tipo de elementos del patrimonio cultural que se encuentren inventariados y protegidos que se vean afectados por las actuaciones del PHC. *(Se).*			
BIENES MATERIALES	• Minimizar la afección producida a las comunidades por las grandes obras hidráulicas • Aumento de la población fijada al territorio rural	Nº personas y de poblaciones desplazadas como consecuencia de la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas del PHD o por modificación de las existentes. *(CA y Se).*			
		Superficie, y porcentaje de superficie respecto al total, ocupadas por cultivos y urbanizaciones en zonas inundables *(Se).*			

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX : 91 597 58 16

SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES					
Aspectos ambientales (Ley 9/2006 anexo I f)	**Objetivos ambientales**	**Indicadores asociados**	**Valor de los indicadores en el estado inicial (punto 4.2.1)**	**Valor de los indicadores tras aplicar PHD (PARA CADA ALTERNATIVA)**	**Descripción de los resultados obtenidos**
	Reducir el número de personas y la superficie afectada por fenómenos de inundación, de sequía, y de riesgo sísmico en zonas de presas	Número de personas y superficie (ha) afectadas por fenómenos de inundación en la DH y su aumento o disminución como consecuencia de las actuaciones del PHD. *(CA y Se).*			
		Número de personas y superficie (ha) afectadas por fenómenos de sequía en la DH y su aumento o disminución tras las actuaciones del PHD. *(CA y Se).*			
		Aumento o disminución de los efectos negativos derivados de fenómenos de inundación y sequía por ejecución de actuaciones del PHD. *(CA y Se).*			
	• Reducir el número de personas y la superficie afectada por fenómenos de retroceso del borde costero, inestabilidad de los terrenos, inundación en las zonas costeras, etc. • Evitar, corregir y minimizar los impactos sobre las zonas costeras derivados de las infraestructuras de regulación de la DH y de las infraestructuras costeras • Lograr el buen estado ecológico de los bienes de DPMT	Nº de personas y superficie (ha) afectada por fenómenos de retroceso del borde costero, inestabilidad de los terrenos, inundación en las zonas costeras y su aumento o disminución por las actuaciones del PHD. *(Se).*			
		Tasa de avance o retroceso (m/año) del borde costero en las áreas cercanas a las desembocaduras (misma unidad fisiográfica litoral) y su aumento o disminución como consecuencia de las actuaciones del PHD. *(Se).*			
		Variación del nivel del mar (m de altura) en las diferentes unidades fisiográficas de la DH. *(Se).*			
		Nº de puertos deportivos/comerciales existentes en el ámbito de la DH e incremento *(Se).*			
		Número de playas y longitud de costa en estado de erosión y número de playas regeneradas y devueltas al equilibrio dinámico. *(Se).*			
		Número de infraestructuras costeras y porcentaje respecto al total, de nueva construcción. *(Se).*			
		Número de infraestructuras costeras y porcentaje respecto eliminadas para naturalización del litoral. *(Se).*			
		Número de sistemas dunares y superficie asociada en mal estado de conservación y número de ellos y superficie devueltos al equilibrio dinámico. *(Se).*			
		Número de marismas y terrenos bajos e inundables y superficie asociada en mal estado de conservación y número de ellos y superficie restaurados. *(Se).*			

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

ANEXO VII. PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Planificación de carácter nacional. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Planificación Hidrológica
- Plan Hidrológico Nacional - Programa A.G.U.A. - Plan Especial de Actuación en Situación de Alerta y Eventual Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Segura - Plan Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y depuración 2007-2015 - Estrategia Nacional de Reutilización - Estrategia Nacional de Restauración de Ríos - Programa de Voluntariado en Ríos - Plan de Choque tolerancia cero de vertidos - Programa de Conservación y Mejora del Dominio Público Hidráulico - Plan Nacional de Regadíos - Plan de Choque de Regadíos - Programa Alberca y Registro de Aguas - Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables
Conservación de la biodiversidad, cambio climático , zonas costeras, puertos, desarrollo sostenible y energía
- Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales - Programa de Acción Nacional contra la Desertificación y el Proyecto LUCDEME - Plan Forestal Español - Programa de Defensa contra Incendios Forestales - Plan Director de la Red de Parques Nacionales - Estrategia Española de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica - Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - Estrategia Española de Desarrollo Sostenible - Estrategia de Sostenibilidad de la Costa - Convenio de Barcelona y sus Protocolos - Plan Sectorial de Transporte Marítimo y Puertos - Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 - Plan de Acción 2008-2012 de Ahorro y Eficiencia Energética - Plan de Energías Renovables de España 2006-2010 - Plan de Choque de Energías Renovables 2006-2010 (- Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020

Planificación de carácter regional Comunidad Autónoma de Asturias
- Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de Asturias - Estrategias de desarrollo local dentro del Programa de Desarrollo Rural para el período 2007-2013 - Estrategia Energética del Principado de Asturias 2007-2012 - Plan Hidrológico-Forestal y de restauración de cauces y enclaves naturales - Plan de uso y gestión integral del agua en el Parque Nacional de Picos de Europa. - Planificación relativa a la conservación y gestión de la naturaleza: Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Rectores de Uso y Gestión y Planes de recuperación, conservación, conservación del hábitat y manejo de las especies catalogadas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Asturias. - El Plan Forestal de Asturias - Plan Básico para la Gestión de Residuos en Asturias - Planes de aprovechamientos en montes de utilidad pública - Plan protector y el plan de desarrollo sostenible del paisaje protegido de las cuencas mineras - Plan de Fomento de las Energías Renovables - Plan de saneamiento atmosférico del concejo de Langreo - Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados 1995-2005 - Planes de mejora y primera instalación de agricultores jóvenes - El Plan Regional de Carreteras 2000-2010 - Programa de Desarrollo Rural 2007 – 2013 - Programa de forestación de tierras agrícolas - Programa Nacional Apícola - Programa para la recuperación, modernización y puesta en valor del pastoreo tradicional en la vertiente asturiana de los Picos de Europa - Programa regional de fomento forestal en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y mejora de bosques en zonas rurales - Programas de ahorro energético y uso de energías renovables - Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Norte y el

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Principado de Asturias por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007 -2015.

Planificación de carácter regional **Comunidad Autónoma de Cantabria**
- Estrategia cántabra contra el cambio climático - Estrategia cántabra de educación ambiental - Plan forestal de Cantabria. - Plan de Ahorro del Agua en Cantabria - Planes Especiales Hidráulicos - Plan de Residuos de Cantabria 2006/2010 - Plan energético de Cantabria 2006-2011 PLENERCAN - Plan Ambiental Integral de Cantabria - Plan de ordenación del litoral - Planes de aprovechamientos en montes de utilidad pública - Plan Especial de Protección Civil sobre Incendios Forestales –Infocant- - Plan de educación para la sostenibilidad en el sistema educativo - Planificación relativa a la conservación y gestión de la naturaleza: Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Rectores de Uso y Gestión y Planes de recuperación, conservación, conservación del hábitat y manejo de especies protegidas. - Plan de gestión de residuos sólidos urbanos - El Plan Estratégico de Desarrollo y Ordenación Turística de la Comunidad. Autónoma de Cantabria - Plan de Ordenación Cinegética - Programa de Desarrollo Rural de Cantabria

Planificación de carácter regional **Comunidad Autónoma de Galicia**
- Estrategia gallega del desarrollo sostenible - Estrategia Gallega para el Medio Rural. - Estrategia gallega de gestión de residuos - Estrategia gallega educación ambiental - Estrategia gallega de la sociedad de la información - Estrategia gallega para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad - Estrategia gallega de gestión forestal sostenible - Plan Hidrológico de Galicia-Costa. - Plan Hidrológico de las cuencas intracomunitarias - Plan sectorial hidroeléctrico de las cuencas hidrográficas de Galicia Costa - Planes de Ordenación Municipal - Plan de saneamiento de Galicia 2000-2015. - Plan de Abastecimiento de Galicia. - Plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia - Plan de gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos de Galicia - Plan de gestión de residuos industriales y de suelos contaminados - Plan de gestión de residuos agrarios. - Planificación relativa a la adecuación, sellado y clausura de vertederos. - Plan Energético de Galicia 2007-2012. - Plan de gestión de residuos - Plan de protección civil ante emergencias por incendios forestales - Planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal - Plan de desarrollo comarcal - Planificación relativa a la conservación y gestión de la naturaleza: Planes de Ordenación de los Recursos Naturales - Plan de gestión del lobo en Galicia - Programas de desarrollo rural y selección y reconocimiento de grupos de desarrollo rural como entidades en la gestión del programa Leader Galicia 2007-2013 - Programa de puesta en valor de la red de caminos naturales no motorizados de Galicia - Convenio marco de colaboración con el Organismo Autónomo Aguas de Galicia, en materia de aguas subterráneas - Catálogo Gallego de Árboles Sobresalientes - Catálogo Gallego de Especies Amenazadas - Borrador de Ordenanza Municipal de Vertidos y uso del sistema público de saneamiento en baja.

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

Planificación de carácter regional Comunidad Autónoma de Castilla y León
- Estrategia regional de accesibilidad 2004-2008. - Estrategia regional de residuos de la Comunidad de Castilla y León 2001-2010. - Estrategia forestal. Aprobación. - Plan de espacios naturales protegidos. - Plan forestal de Castilla y León. - Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. - Plan regional sectorial de carreteras 2002-2007 - Plan regional de ámbito territorial del Puerto de San Isidro, León. - Plan regional de ámbito territorial del Canal de Castilla. - Planes territoriales de protección civil de Castilla y León. - Plan de protección civil ante emergencias por incendios forestales. - Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Transportes de Mercancías Peligrosas de Castilla y León. - Plan de residuos industriales de Castilla y León 2002-2010 - Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010. - Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León 2008-2010. - Plan director de vivienda y suelo 2002-2009. - Plan director de infraestructura hidráulica urbana. - Plan Regional de Saneamiento. - Plan de labores y de recopilación de datos para la estadística minera de las autorizaciones de explotación de recursos mineros de la sección A) y de las concesiones de explotación de recursos mineros de la sección C) de la CA Castilla y León. - Plan Regional de Ámbito Territorial del Complejo de Actividades Económicas Burgos-Riopico. - Programa «parques naturales de Castilla y León». - Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013. - Programa regional de forestación de tierras agrarias. - Programas de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero. - Programas de desarrollo local. - Programas de exploración geológico-minera y seguridad minera.

Planificación de carácter regional Comunidad Autónoma de País Vasco
- Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020). - Estrategia Vasca de Lucha contra el Cambio Climático. - Estrategia de Biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el periodo 2008-2015 - PLANA, Estrategia de marketing turístico - Estrategia energética vasca - Plan territorial sectorial de zonas húmedas - Plan Forestal Vasco - Plan de actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria - Plan territorial sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos del País Vasco, vertiente mediterránea - Plan Director de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales 2015 - Planificación relativa a la conservación y gestión de la naturaleza: Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Rectores de Uso y Gestión y Planes de recuperación, conservación, conservación del hábitat y manejo de especies protegidas. - Planes de Ordenación del Territorio - Plan de prevención y gestión de residuos peligrosos 2008-2011 - Plan de suelos contaminados 2007-2012 - Plan de emergencia para incendios forestales - Plan general de carreteras - Plan energético vasco - El Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático - Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral - Plan de Jóvenes Agricultores de la Comunidad Autónoma Vasca - Criterios de uso del suelo en función del grado de inundabilidad. - Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía (PES) de la Cuenca del Ebro, - Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 - Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco - Programa Erein. Ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales. - Programa Etorgai. Programa de apoyo a la realización de proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico, - Programa de ayudas para el fomento de acciones y proyectos de ahorro, eficiencia energética y utilización de

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

energías renovables
- Programa de ayudas para la incentivación de explotaciones subterráneas de áridos
- Programa "Elkarteak". Ayudas a las asociaciones y federaciones de desarrollo rural, de agricultura de montaña y a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la comunidad autónoma del país vasco -
- Programa de educación ambiental en el sistema educativo no universitario

Planificación de carácter regional **Comunidad Autónoma de Navarra**
- La Estrategia para la gestión y el uso sostenible del agua en Navarra - La Estrategia Navarra para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica - La Estrategia Navarra de Educación Ambiental - Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra - El Plan Integral de Saneamiento y Abastecimiento de Aguas de Pamplona y su Comarca - Plan Director de Saneamiento de los Ríos en Navarra - Plan Director de Ordenación Piscícola de Salmónidos de Navarra - Plan especial de emergencias ante el riesgo de inundaciones - Plan especial de protección civil de emergencia por incendios forestales - Plan Foral de Regadíos y el Plan Estratégico de la agricultura de Navarra, - Plan forestal de Navarra - Planificación relativa a la conservación y gestión de la naturaleza: Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Rectores de Uso y Gestión y Planes de recuperación, conservación, conservación del hábitat y manejo de especies protegidas. - Plan Energético de Navarra horizonte-2010 - Plan de Acción por el clima - Plan de promoción del turismo en Navarra - Plan de inspección ambiental de la actividad industrial - Programa de inspección ambiental de la actividad industrial - Programa de actuaciones para las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de actividades agrarias - Programa de desarrollo rural de Navarra, 2007-2013 - Programa Nacional Anual Apícola

CORREO ELECTRÓNICO
buzon-sgea@mma.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 MADRID
TEL.: 91 597 63 32
FAX.: 91 597 58 16

6.4. INFORME SOBRE LAS PROPUESTAS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

.

INFORME SOBRE LAS PROPUESTAS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS EN LA CONSULTA PÚBLICA

Octubre 2012

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Índice

1. INTRODUCCIÓN 1

2. ACCIONES DESARROLLADAS PARA FOMENTAR LA CONSULTA PÚBLICA 3

3. VISIÓN SINTÉTICA DE LOS DOCUMENTOS DE ALEGACIONES RECIBIDOS 5

4. RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS DE ALEGACIONES RECIBIDOS 9

5. RESPUESTA A LAS ALEGACIONES RECIBIDAS 17

6. MODIFICACIONES INCORPORADAS AL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO 18

6.1. CUESTIONES GENERALES 18
6.1.1. Modificaciones Normativas 18
6.1.2. Otras modificaciones 19
6.2. MEMORIA DEL PLAN 19
6.2.1. Capítulo 1. Introducción y antecedentes 19
6.2.2. Capítulo 2. Descripción general de la demarcación 19
6.2.3. Capítulo 3. Descripción de usos, demandas y presiones 24
6.2.4. Capítulo 4. Prioridades de uso y asignación de recursos 25
6.2.5. Capítulo 5. Identificación y mapas de las zonas protegidas 26
6.2.6. Capítulo 6. Programas de control y estado de las masas de agua 27
6.2.7. Capítulo 7. Objetivos medioambientales para las masas de agua 29
6.2.8. Capítulo 8. Diagnóstico del cumplimiento de los objetivos medioambientales 30
6.2.9. Capítulo 9. Análisis económico del uso del agua 33
6.2.10. Capítulo 10. Planes y programas relacionados 34
6.2.11. Capítulo 11. Planes dependientes: sequías e inundaciones 34
6.2.12. Capítulo 12. Programas de medidas 34
6.2.13. Capítulo 13. Participación pública 35
6.2.14. Capítulo 14. Seguimiento del plan de cuenca 36
6.2.15. Capítulo 15. Listado de autoridades competentes 36
6.3. ANEJOS 36
6.3.1. Anejo I. Masas de agua muy modificadas y artificiales 36
6.3.2. Anejo II. Inventario de recursos hídricos 36
6.3.3. Anejo III. Usos y demandas de agua 37
6.3.4. Anejo IV. Registro de zonas protegidas 38
6.3.5. Anejo V. Caudales ecológicos 41
6.3.6. Anejo VI. Sistemas de explotación y balances 42
6.3.7. Anejo VII. Inventario de presiones 43
6.3.8. Anejo VIII. Objetivos medioambientales y exenciones 43
6.3.9. Anejo IX. Recuperación de costes de los servicios del agua 45
6.3.10. Anejo X. Programa de medidas 46
6.3.11. Anejo XI. Participación pública 47
6.4. NORMATIVA DEL PLAN HIDROLÓGICO 48
6.4.1. Preámbulo 49

6.4.2. Capítulo 1. Ámbito territorial, definición de masas de agua y registro de zonas protegidas 49
6.4.3. Capítulo 2. Objetivos medioambientales 50
6.4.4. Capítulo 3. Regímenes de caudales ecológicos 51
6.4.5. Capítulo 4. Prioridad y compatibilidad de usos 56
6.4.6. Capítulo 5. Asignación y reserva de recursos 60
6.4.7. Capítulo 6. Utilización del Dominio Público Hidráulico 60
6.4.8. Capítulo 7. Protección del dominio público hidráulico y calidad de las aguas 71
6.4.9. Capítulo 8. Estructuras organizativas de gestión de los servicios del agua. Régimen económico y financiero. Directrices de planes de gestión de la demanda. Fomento de la transparencia y la concienciación ciudadana 91
6.4.10. Capítulo 9. Seguimiento y revisión del plan hidrológico 94
6.4.11. Anejos de la Normativa 95
6.5. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 97
6.5.1. Memoria 97
6.5.2. Anejo II. Objetivos Ambientales 97
6.6. MODELO DE DATOS. INFORMACIÓN GIS Y ALFANUMÉRICA 97

Índice de Tablas

Tabla 1. Relación de documentos de alegaciones recibidos durante la consulta pública, organizados por código, fecha, remitente y sector 5
Tabla 2. Sectores y subsectores que han remitido documentos de alegaciones 7
Tabla 3. Resumen de los documentos de alegaciones en función de los apartados temáticos a los que van dirigidos 7

Apéndices

Apéndice 1. Alegaciones recibidas

1. INTRODUCCIÓN

Con fecha 4 de mayo de 2011, se publicó en el BOE la "Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se someten a consulta pública las Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental en el ámbito de competencias del Estado y los Informes de Sostenibilidad Ambiental" (BOE nº 106). De este modo se dio inicio al periodo de consulta pública, que ha tenido una duración de seis meses, dando cumplimiento así a los artículos 14 y 74 de la Directiva Marco del agua (DMA) y del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), respectivamente.

Los documentos sometidos a consulta pública son tal y como dice el título de la Resolución, la Propuesta de Proyecto de Plan y el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). La Propuesta de Proyecto de Plan se estructura en la Memoria (compuesta por 15 Capítulos y 11 Anejos) y la Normativa, cuyo contenido se atiene a los requerimientos del artículo 81 del Reglamento de Planificación Hidrológica. Por otra parte, el Informe de Sostenibilidad se redacta de acuerdo a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Esta documentación estuvo a disposición del público para la formulación de observaciones y sugerencias hasta el 4 de noviembre de 2011. Asimismo, la Propuesta de Proyecto de Plan y el Informe de Sostenibilidad se enviaron a las partes interesadas para que presentasen, en el plazo de tres meses, las propuestas y sugerencias que estimasen oportunas.

El Reglamento de Planificación Hidrológica establece en su artículo 80 lo siguiente: "Ultimadas las consultas a que se refieren los apartados 2 y 3, los organismos de cuenca realizarán un informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias que se hubiesen presentado e incorporarán las que en su caso consideren adecuadas a la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico". Además, la Ley 9/2006, determina que "el órgano promotor responderá motivadamente a las observaciones y alegaciones que se formulen en las consultas, a cuyos efectos elaborará un documento en el que se justifique cómo se han tomado en consideración aquéllas en la propuesta de plan o programa incluyendo el informe de sostenibilidad ambiental".

Con el presente documento se intenta dar respuesta a los requerimientos citados anteriormente, es decir, constituye el informe de análisis de propuestas, observaciones y sugerencias del artículo 80 del RPH, así como la respuesta motivada que exige la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, teniendo como objetivo analizar con rigor las alegaciones recibidas durante la consulta pública y justificar adecuadamente su consideración en la redacción del Proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental.

Los apartados en que se estructura este documento son los siguientes:

- Apartado 2: Describe las *acciones desarrolladas para fomentar la participación pública* relacionada con la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico.
- Apartado 3: Contiene una *visión sintética de los documentos de alegaciones*.
- Apartado 4: Incluye el *resumen de los documentos de alegaciones* y se complementa con el Apéndice 1 que adjunta los documentos de alegaciones recibidos.

- Apartado 5: Se refiere a la *respuesta a las alegaciones*.
- Apartado 6: Expone las *modificaciones incorporadas a la Propuesta de Proyecto de Plan* tras el periodo de consulta pública.

El presente informe se incorporará en el Anejo X de la Memoria del Proyecto de Plan Hidrológico.

2. ACCIONES DESARROLLADAS PARA FOMENTAR LA CONSULTA PÚBLICA

Durante el periodo de consulta pública de la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), en coordinación con la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, puso en marcha una serie de acciones para fomentar la participación pública. Entre los objetivos de estas acciones, cabe destacar los siguientes:

- Difundir la información referente a la Propuesta de Proyecto de Plan entre la ciudadanía.
- Concienciar y sensibilizar a la sociedad en cuestiones medioambientales, en concreto, las relacionadas con el agua.
- Promover la consulta pública de la Propuesta de Proyecto de Plan y del ISA, tratando de recabar activamente los comentarios, opiniones y aportaciones de las partes interesadas y del público en general.
- Incrementar la corresponsabilidad social con el nuevo Plan Hidrológico de cuenca, intentando promover el debate social sobre el agua y tratando de llegar a consensos.

A continuación se describen las acciones llevadas a cabo para la consecución de estos objetivos:

- Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en su sesión de 25 de abril de 2011, por la que se inicia la consulta pública durante un periodo mínimo de seis meses. Publicada en el BOE el 4 de mayo de 2011.
- Publicación del documento de la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico y del Informe de Sostenibilidad Ambiental en la página web de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (tanto en la página principal (www.chcantabrico.es) como en la de participación pública (www.chcantabrico.es/participacion).
- Publicación de ambos documentos en la página web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (www.marm.es).
- Edición en papel y copias en CD de los documentos para estar disponibles al público en las distintas oficinas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
- Envío del documento de la Propuesta de Proyecto de Plan y del ISA en formato digital a 75 Administraciones relacionadas con la planificación hidrológica de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental.
- Envío de un correo electrónico informativo sobre el inicio de la consulta pública a más de 500 agentes interesados de la Demarcación.

- Notas de prensa.
- Elaboración de documentos de apoyo y su difusión en la página web de la Confederación, entre los que cabe destacar los siguientes:
  - ❖ Documento resumen de la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico.
  - ❖ Atlas cartográfico, que comprende la información gráfica ofrecida en forma de figuras en la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación. Incluye una serie de 173 mapas agrupados en 11 bloques temáticos que se relacionan con los capítulos y anejos del Plan, así como con el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
  - ❖ Información gráfica del contenido de los anejos de la Normativa (en formato shape, geodatabase y pdf).
  - ❖ Documentos divulgativos sobre diversos aspectos de la planificación hidrológica como la evaluación del estado de las masas de agua, la evaluación ambiental estratégica, la participación pública y el régimen de caudales ecológicos.

Además, es importante señalar que, entre los meses de marzo y noviembre de 2011, se realizó un proceso de participación activa sobre la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental. Este proceso estuvo dirigido, fundamentalmente, a los Objetivos medioambientales y las exenciones, el Programa de medidas y la Normativa.

El proceso fue de carácter territorial, desarrollándose dos reuniones en cada uno de los ámbitos de participación territorial en que se ha estructurado la Demarcación a efectos de la participación pública.

Igualmente, cabría destacar los trabajos desarrollados en el marco del Comité de Autoridades Competentes durante este periodo de consulta pública, y enfocados principalmente al Programa de medidas.

3. VISIÓN SINTÉTICA DE LOS DOCUMENTOS DE ALEGACIONES RECIBIDOS

Se han recibido 42 documentos de alegaciones durante la consulta pública de la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental. La siguiente tabla muestra una relación de los mismos, estructurada por código, fecha de entrada en el registro de la CHC, remitente y entidad[1].

Tabla 1. Relación de documentos de alegaciones recibidos durante la consulta pública, organizados por código, fecha, remitente y entidad

CÓDIGO	FECHA DE ENTRADA	RESPONSABLE (ENTIDAD)
001_Ori_Alternativas_energeticas	09/08/2011	Mª Lourdes Frías Esteban, Presidenta del Consejo de Administración de Alternativas energéticas y Proyectos, S.L.
002_Ori_Munksjo_paper	18/10/2011	Juan Antonio Navalpotro Pascual, Director de Fábrica Munksjö Paper S.A.
003_Ori_RFEPiraguismo	20/10/2011	Juan José Román Mangas, Presidente de la Real Federación Española de Piragüismo
004_Ori_Clusterpapel	28/10/2011	Luís Fernando Ruíz Arrúe, Presidente de la Asociación Cluster del Papel de Euskadi
005_Ori_Etxezarreta	28/10/2011	Jesús Villajos Gómez Lucerón, representante de Etxezarreta Urigintza
006_Ori_HC	28/10/2011	Miguel Mateos Valles, representante de Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.,
007_Ori_Electra	28/10/2011	José Ignacio Galarraga Urretavizcaya, Administrador de Electra Bravo
008_Ori_Giwatt	28/10/2011	Francisco Jabier Lakuntza Beunza, Presidente de la Asociación de Productores de Energía Hidroeléctrica de Gipuzkoa GIWAT
009_Ori_CH_Olaverri	31/10/2011	José Javier Belza Pérez, representante de la Central Hidroeléctrica Olaverri, S.L.
010_Ori_CH_Olaverri_(2)	31/10/2011	José Javier Belza Pérez, representante de la Central Hidroeléctrica Olaverri, S.L.
011_Ori_Hidroeléctrica_Deba	31/10/2011	José Javier Belza Pérez, representante de Hidroeléctrica del Deba, S.L.
012_Ori_CA_Katauriko	31/10/2011	José Ramón Toña, Director gerente del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza
013_Ori_Aralar	02/11/2011	Senén Amunarriz, Director gerente de Papel Aralar, S.A.
014_Ori_CH_Usabal	03/11/2011	Patxi Xabier Lizarraga Echeberria, representante de la Central Hidroeléctrica Usabal, S.L.
015_Ori_Hidro_Cadagua	03/11/2011	Jorge Garcia-Egocheaga, representante de Hidroeléctrica del Cadagua, S.A.
016_Ori_DGMA_DForalGipuzkoa	03/11/2011	Juan Carlos Alduntzin, Diputación Foral de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
017_Ori_Masustanegiko	03/11/2011	Esteban Andueza Sarratea, Administrador único de la mercantil Masustanegiko, C.B.
018_Ori_H_Cadagua_(2)	03/11/2011	Jorge Garcia-Egocheaga, representante de Hidroeléctrica del Cadagua
019_Ori_Electra_Irun_Endara	04/11/2011	Miguel Ballarena Arraztoa, Administrador de la mercantil Electra Irun Endara, S.A.

[1] Los remitentes de alegaciones se han clasificado en tres sectores: Administraciones, agentes económicos y tejido social. A su vez, cada sector se ha dividido en los subsectores, tal y como se muestra en la Tabla 2.

CÓDIGO	FECHA DE ENTRADA	RESPONSABLE (ENTIDAD)
020_Ori_DMA_Navarra	04/11/2011	Andrés Eciolaza Carballo; Director General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra
021_Ori_Hidraulicas_Bidasoa	04/11/2011	Miguel Ballarena Arraztoa; Administrador de la mercantil Hidráulicas del Bidasoa, S.A.
022_Ori_GOIKO-URA	04/11/2011	Lukas Mendikute Jauregi, Administrador General de Goiko URA, S.L.
023_Ori_Electra_Navasturen	04/11/2011	Miguel Ballarena Arraztoa, Administrador de Electra Navasturen, S.L.
024_Ori_Unesa	04/11/2011	José María Marcos, Vocal de UNESA en el Consejo Nacional del Agua
025_Ori_Sarriopapel	04/11/2011	Ibon Antolin Aguirre, representante de Sarriopapel y Celulosa S.A.
026_Ori_Barbo_ER	04/11/2011	Pablo García Hernández, representante de Barbo Energías Renovables
027_Ori_EON	07/11/2011	Luis Feniández Rubio, representante de E.ON GENERACIÓN, S.L.
028_Ori_Reysalde	07/11/2011	Oscar Diez de Ulzurrun Goñi, Administrador de Reysalde, S.L.
029_Ori_Ayto_Amurrio	07/11/2011	Iñigo Mínguez Ojembarrena, Ingeniero municipal del Ayuntamiento de Amurrio
030_Ori_Electra_Olloqui	07/11/2011	Fco. Javier Celayeta San Sebastian, apoderado de Electra Olloqui, S.A.
031_Ori_JuanPello	07/11/2011	Oscar Diez de Ulzurrun Goñi, Administrador de Juan Pello, S.A.
032_Ori_Astizubi	07/11/2011	Luis Astiz Garay, gestor de Astizubi, S.L.
033_Ori_MarinMugaire	07/11/2011	Oscar Diez de Ulzurrun Goñi, Administrador de Marin Mugaire, S.L.
034_Ori_Santolaz	07/11/2011	Oscar Diez de Ulzurrun Goñi, Administrador de Santolaz, S.L.
035_Ori_Iberdrola	08/11/2011	Baldomero Navalón Burgo, representante de Iberdrola
036_Ori_SGGIDPH	09/11/2011	Javier Ruza Rodríguez; Subdirector General Adjunto de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico. Dirección General del Agua delMinisterio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
037_Ori_AP_Erenovables	10/11/2011	José María González Véles, Presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables
038_Ori_DGDSMR	11/11/2011	Jesús Casas Grande, Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
039_Ori_JCyL_Carreteras	21/11/2011	Luis Alberto Solís Villa, Director General de Carreteras e Infraestructuras. Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
040_Ori_JCyL_DG_Medio_Natural	30/11/2011	Francisco Javier Ezquerra Boticario, Jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Dirección General de Medio Natural. Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
041_Ori_DG_Vivienda_Navarra	16/12/2011	Marie Gómez Sánchez, Directora General de Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra
042_Ori_Dbiodiversidad_Gvasco	23/12/2011	Germán Alonso Campos; Director de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco

En total, se han recibido 9 documentos proceden de las Administraciones y 33 documentos del sector económico. La siguiente tabla muestra un análisis detallado de los documentos en función de los sectores y subsectores remitentes de las mismas.

Tabla 2. Sectores y subsectores que han remitido documentos de alegaciones

SECTOR	SUBSECTOR	Nº DOCUMENTOS DE ALEGACIONES REMITIDOS
Administración	Administración estatal	2
	Administración autonómica	5
	Administración provincial	1
	Ayuntamientos	1
Agente económico	Abastecimiento, saneamiento y depuración	1
	Asociación de empresarios	2
	Energía	26
	Industria	3
	Piragüismo	1
Tejido social	Particular	-
Total		**42**

El análisis detallado del contenido de las alegaciones se desarrolla en el apartado 4 del presente documento, si bien a continuación se expone una síntesis sobre los apartados de la Propuesta de Plan que han sido objeto de los documentos de alegaciones. Así, se muestran los distintos capítulos de la Memoria (y sus Anejos) y de la Normativa, indicando el número de alegaciones que hacen referencia a cada uno de ellos.

Tabla 3. Resumen de los capítulos afectados por las alegaciones recibidas.

APARTADO DE LA PROPUESTA DE PH	Nº de alegaciones
MEMORIA Y ANEJOS DE LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO	
Capítulo 1. Introducción y antecedentes	-
Capítulo 2. Descripción General de la Demarcación (Anejo I. Designación de masas de agua artificiales y muy modificadas, Anejo II. Inventario de recursos hídricos)	2
Capítulo 3. Descripción de los usos, demandas y presiones (Anejo III. Usos y demandas de agua, Anejo VII. Inventario de presiones)	6
Capítulo 4. Prioridades de usos y asignación de recursos (Anejo V. Caudales ecológicos, Anejo VI. Sistemas de explotación y balances)	8
Capítulo 5. Identificación y mapas de las zonas protegidas (Anejo IV. Registro de Zonas protegidas)	3
Capítulo 6. Programas de control y estado de las masas de agua	4
Capítulo 7. Objetivos medioambientales para las masas de agua (Anejo VIII. Objetivos medioambientales y exenciones)	5
Capítulo 8. Diagnóstico del cumplimiento de los objetivos medioambientales	-
Capítulo 9. Análisis económico del uso del agua (Anejo IX. Recuperación de costes de los servicios del agua)	-
Capítulo 10. Planes y Programas relacionados	2
Capítulo 11. Planes dependientes. Sequías e inundaciones	-
Capítulo 12. Programas de medidas (Anejo X. Programa de medidas)	6

APARTADO DE LA PROPUESTA DE PH	Nº de alegaciones
MEMORIA Y ANEJOS DE LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO	
Capítulo 13. Participación Pública (Anejo XI. Participación Pública)	-
Capítulo 14. Seguimiento del Plan Hidrológico	-
Capítulo 15. Listado de autoridades competentes	2
NORMATIVA	
Capítulo 1. Ámbito territorial, definición de masas de agua y registro de zonas protegidas	2
Capítulo 2. Objetivos medioambientales	-
Capítulo 3. Regímenes de caudales ecológicos	26
Capítulo 4. Prioridad y compatibilidad de usos	6
Capítulo 5. Asignación y reserva de recursos	-
Capítulo 6. Utilización del Dominio Público Hidráulico	27
Capítulo 7. Protección del Dominio Público Hidráulico y calidad de las aguas	8
Capítulo 8. Estructuras organizativas de gestión de los servicios del agua. Régimen económico y financiero. Directrices de planes de gestión de la demanda. Fomento de la transparencia y la concienciación ciudadana	-
Capítulo 9. Seguimiento y revisión del Plan Hidrológico	-

En base a la tabla anterior, se deduce que las alegaciones recibidas van enfocadas a los Capítulos 3 y 4 de la Memoria así como un especial interés en los capítulos 3 y 6 de la Normativa sobre los Regímenes de caudales ecológicos y la Utilización del DPH respectivamente.

Por otra parte, puede indicarse que 13 entidades del sector hidroeléctrico han enviado idénticos documentos de alegaciones enfocados principalmente a la Normativa.

4. RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS DE ALEGACIONES RECIBIDOS

En el presente apartado se expone un resumen de las alegaciones recibidas, con el objetivo de mostrar brevemente las principales sugerencias, observaciones y propuestas realizadas durante el periodo de consulta pública de la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico. Cabe señalar que este resumen no pretende ser exhaustivo y reproducir literalmente las alegaciones recibidas, sino que constituye una síntesis de las principales cuestiones recibidas. El texto completo de las alegaciones se incluye en el Apéndice 1.

Se ha recibido la identificación de diversas ***erratas,*** como por ejemplo, error en la fecha en la que se inició la consulta pública del Plan que aparece en la introducción de la normativa, el apartado 2 del artículo 38 contiene una referencia errónea al RDH (no se trata del artículo 15.1.5 sino del 15.1.3), no coincide la prioridad de usos establecida en la Memoria y en la Normativa del Plan, etc.

Con carácter general también se solicita la armonización de este Plan con el de las Cuencas Internas de la CAPV en temas de dotaciones, prioridades de usos, caudales ecológicos, inundaciones y sobretodo en la normativa. En relación con la ***coordinación entre administraciones*** también se incide en que es necesaria para conservar el patrimonio natural.

Por otro lado, se indica que se debe adecuar la redacción de todos los artículos en los que se producen remisiones o citas de normativa vigente, cuidando las reproducciones literales de la misma.

Asimismo se incide en integrar el paisaje en las políticas y estrategias dentro del marco de las competencias del Plan, fomentar la eficiencia, el ahorro y el buen uso de los recursos hídricos en el medio rural en el marco de la planificación hidráulica.

Cabe destacar que la mayor parte de las alegaciones van dirigidas a los ***caudales ecológicos*** y se han recibido varios documentos iguales del ***sector hidroeléctrico*** en los que se alega lo siguiente:

- La redacción del artículo 11 de la Normativa relativo al Régimen de Caudales Ecológicos, no se ajusta a Derecho y su aplicación supone dos consecuencias: aplicación retroactiva, discrecional y arbitraria lo cual conduce a un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

- En relación con el artículo 12, relativo a los Caudales mínimos ecológicos, se concluye que la aplicación del modelo metodológico SIMPA II, se torna arbitrario e injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre, añadiendo el hecho de que la administración no ha querido consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado.

- Respecto al artículo 34, relativo a la Limitación a los plazos concesionales, se establece que el plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica. Asimismo, se solicita que el texto del Plan Hidrológico respete lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, de esta forma solicitan suprimir lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

- La redacción del artículo 35.2 (Resolución de expedientes de concesión), supone un nuevo gravamen para el concesionario al poder exigir la demolición o reparación a costa del concesionario de la obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional.

- Se solicita que la redacción del artículo 37.7, relativo a las Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos, sea más explícita a la hora de establecer los criterios de incremento de plazo concesional.

- En relación con el artículo 38, Modificación y revisión de los caudales concesionales, se propone un aumento sustancial del porcentaje aplicado en las variaciones de caudal propuestos al considerarlas insuficientes por no tener en cuenta el tamaño de la concesión ni el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción. Se determina además que no es posible mantener el punto 3 del presente artículo, ya que no es esperable pretender que los concesionarios admitan el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados. De esta forma solicitan una adecuada definición de lo que se considera una "modificación de los supuestos determinantes del otorgamiento de la concesión y el reconocimiento del derecho del concesionario". Finalmente, el punto 5 debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sí debe considerarse como una revisión unilateral "De Facto" de la concesión, por lo que se entiende que sí debe de estar sujeto a compensación. En algún caso se propone la supresión de este punto del artículo.

Asimismo, más representantes del ***sector hidroeléctrico*** han enviado sus comentarios, mostrando en la mayoría de los casos las mismas preocupaciones que se indican en las alegaciones anteriores, pero además añaden algunas particularidades enfocadas también hacia los caudales ecológicos, usos del agua y dotaciones:

- Se insiste en la importancia de la energía hidroeléctrica con regulación, como elemento actualmente insustituible para garantizar la seguridad y calidad del suministro en el Sistema Eléctrico español. Indicando además que las dos afecciones potencialmente más perjudiciales para los usos hidroeléctricos son la imposición de caudales ecológicos y las restricciones a las variaciones rápidas en los caudales turbinados. Ambas pueden hacer inviable, o inútil, la operación de un determinado aprovechamiento hidroeléctrico.

- Las previsiones de determinados planes, de construcción de nuevas escalas o pasos de peces y otras medidas que no están impuestas en el clausulado concesional, representa una afección sobrevenida a los aprovechamientos en los que se imponga.

- El proceso de concertación del régimen de caudales ambientales debe llevarse a cabo con todo usuario con derechos preexistentes afectados, máxime a aquellos que prestan un servicio esencial.

- Se debería mantener en todos los planes la prelación que figura en la propia Ley de Aguas, al menos para los tres primeros usos: 1º Abastecimiento, 2º Regadíos y 3º Usos industriales para producción de energía eléctrica.

- Se solicita que se respeten y mantengan los caudales ecológicos definidos en los títulos concesionales.

- La fijación de los caudales ecológicos a través del Plan Hidrológico, está en el supuesto previsto en los artículos 65.1 y 65.3 de la Ley de Aguas, que dan cobertura a la

decisión de la Administración de revisar concesiones previas y proceder a la consiguiente indemnización, de conformidad con la normativa de expropiación forzosa.

- Las inversiones debidas a la adecuación de las instalaciones a los nuevos requerimientos de la Planificación Hidrológica deben ser consideradas en los términos previstos en el artículo 59.6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en relación a la prórroga del plazo concesional, en los términos previstos en dicho artículo 59.6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

- Se muestra la necesidad de tener en cuenta: el impacto ambiental diferenciando según la tipología de los aprovechamientos hidroeléctricos en referencia a la detracción de caudal, las afecciones al ecosistema fluvial y por tanto las correcciones específicas necesarias. Se solicita además que se establezca una ordenación específica para los aprovechamientos "a pie de presa".

- Se solicita la incorporación al Comité de Autoridades Competentes de al menos un representante del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

- En el apartado 4.4 de la Memoria, se solicita que el punto b) reproduzca textualmente el artículo 18.3 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, de forma que todas las afecciones sean tenidas en cuenta en el proceso de concertación.

- Se propone una matización para el artículo 15, Usos del agua, de forma que se articule un sistema de compensación por la toma y detracción de caudales aguas arriba de la concesión.

- En relación con el artículo 16, se solicita que se deje la relación de prioridades de uso que se establece en el apartado 4.3 de la Memoria, sin unir los "Usos industriales para producción de energía eléctrica" y "Otros usos industriales".

- En relación con el artículo 24, Instalación de dispositivos de medida, consideran que su redacción se extralimita en relación a la habilitación normativa proporcionada por la Ley de Aguas. En otros casos se solicita que se exonere a las minicentrales de agua fluyente de la obligación de instalar dispositivos de medida de los caudales derivados y/o evacuados.

- En la tabla en la que se muestran las dotaciones de agua para las centrales hidroeléctricas (artículo 30), se debería de incluir la dotación de agua para la refrigeración de las plantas termosolares en la modalidad de circuito abierto.

- En el artículo 31.1, la calificación de "esenciales" referido al condicionado de la concesión, es una categoría jurídica inexistente en nuestro derecho hidráulico.

- Respecto al artículo 34, se incide nuevamente en la insuficiencia que supone el plazo de 20 años, solicitando, en este caso que el plazo concesional sea de al menos 40 años. Por otro lado, se propone la supresión de los apartados tercero, cuarto y quinto del presente artículo.

- La redacción del apartado 1 del artículo 35 es contraria a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

- Se propone una modificación en la redacción del apartado 2 del artículo 37 añadiendo al final del párrafo "o justificación de su ineficacia o inviabilidad". Asimismo se propone la eliminación del apartado 6 del presente artículo.

- En relación con el artículo 41.6. se considera que los criterios establecidos para establecer la altura de los azudes que requieran de construcción de dispositivos de franqueo son arbitrarios y que únicamente pueden conducir a la nulidad de este precepto. En otros casos se estima que se debería hacer explícita la mención a que este precepto no resulta de aplicación a los aprovechamientos existentes que no tengan expresamente establecido en su título concesional la obligación de la construcción de una escala de peces.

- Que se recalculen los caudales en el punto final de la masa Cadagua II en Sodupe basándose en los datos reales de caudales diarios proporcionados por la estación de aforos.

- Que el caudal ecológico que se imponga a Ordunte sea el del título concesional (300 1/s en Nov, Dic y Enero y de 150 l/s el resto de año).

- Que para el cálculo de los caudales ecológicos de puntos intermedios entre el fin de la masa de Cadagua I y de Cadagua II no se tenga en cuenta el área de cuenca de Ordunte dado que su aportación al Cadagua está reducida al caudal ecológico (y ocasionalmente a los desembalses por coronación, que a efectos de cálculos no deben ser tenidos en cuenta).

- Por otro lado, se solicita que de la descripción de la masa de Cadagua II se elimine la mención a varias centrales hidroeléctricas al ubicarse en la masa de aguas arriba.

- Se muestra la reducción del producible hidroeléctrico para el conjunto de las centrales de las que es concesionaria HC.

- Se considera insuficiente el régimen de caudales planteados en el Plan para el río Cadagüa en el tramo burgalés.

El ***sector del papel*** muestra, con carácter general, una preocupación por las acciones que pudieran proponerse al aprobar el nuevo Plan Hidrológico, ya que los objetivos de calidad fijados para los cauces a los que vierten son inalcanzables a pesar de implantar las Mejores Técnicas Disponibles y esto puede suponer una amenaza a la viabilidad de las empresas papeleras que están ubicadas en cauces de pequeños caudal. Más concretamente solicitan que:

- Se tenga en cuenta que la situación actual de la calidad de los cauces Amezketa o Amavirgiña I, Zelai y Berástegui, y en general, en todos los cauces que reciban vertidos directos papeleros una vez depurados según las condiciones de las correspondientes Autorizaciones Ambientales Integradas, se debe en buena medida a que confluyen vertidos no depurados de orígenes no papeleros y que contribuyen al empeoramiento de las características del río. Como consecuencia de ello no podrán exigirse esfuerzos complementarios a la industria papelera para compensar la falta de depuración por parte de otros agentes.

- Se tenga en cuenta que el vertido de la papelera está ya depurado con instalaciones diseñadas con las Mejores Técnicas Disponibles. Se deberían considerar las características excepcionales del vertido a la hora de fijar los límites de calidad, teniendo en cuenta también la viabilidad técnica y económica.

- Se tenga en cuenta a los representantes de las industrias a la hora de establecer las condiciones de vertido.

- Se considere que los objetivos de calidad propuestos para los cauces Amezketa, Zelai y Berástegui serán alcanzables como muy pronto en 2021, siempre y cuando todas las infraestructuras de saneamiento oportunas estén operativas.

Desde el ***sector del piragüismo*** también proponen modificaciones y sugerencias:

- Proponen una nueva redacción del artículo 15 de la Normativa sobre los usos del agua, para adaptarlo al apartado 3.1.2.7 y 3.1.2.8 de la Instrucción de Planificación Hidrológica en cuanto a qué se consideran usos recreativos y usos de navegación y transporte acuático

- Asimismo, proponen una nueva redacción para el artículo 16.1 sobre preferencia de usos, para matizar que la priorización es aplicable a los usos privativos del agua.

- Sugieren que se añada un artículo nuevo en la sección 1ª del Capítulo 6 donde se definan y distingan los usuarios comunes y privativos, haciendo mención expresa a los usuarios recreativos comunes.

- Incluir un nuevo epígrafe en el artículo 41 sobre la adopción de sistemas de franqueo aguas abajo que faciliten el tránsito de embarcaciones recreativas.

- También proponen que se establezcan criterios generales de gestión pertinentes para las zonas declaradas "de uso recreativo" así como criterios objetivos y concretos para decidir la declaración de zonas de uso recreativo que lo sean por un motivo diferente al baño.

- En el punto 4.3 sobre prioridades de usos de la Memoria, proponen la modificación del tratamiento del piragüismo, pasando a tratarse dentro del punto 7 (usos recreativos).

- Incluir en la Memoria la descripción y requerimientos de los usos recreativos no consuntivos que se realizan en la cuenca, indicando expresamente que la satisfacción de dichos usos no sólo requiere un mero aporte cuantitativo de agua sino también la satisfacción de una serie de condiciones de calidad y de no deterioro del dominio público hidráulico.

- Incluir en la Memoria una tabla con los ríos de mayor interés para la práctica del piragüismo recreativo (aguas bravas) y otra tabla con los embalses para los que se reciben solicitudes de práctica de la actividad. Asimismo proponen incluir un plano de situación con estos tramos de río y embalses.

- Establecer tanto en la Memoria como en la Normativa criterios objetivos y concretos para decidir la inclusión o no como zonas protegidas, de aquellas "zonas de uso recreativo" diferentes de las "declaradas de baño".

- Definir los niveles de uso recreativo común aceptable en los tramos de río protegidos o en las Reservas Naturales Fluviales.

- Incluir o adecuar los programas de actuaciones del Plan para acoger varias líneas de actuación concretas que proponen relacionadas con la presencia de obstáculos en el cauce, especies invasoras, plan de mejora y creación de zonas lúdicas, protección del dominio público hidráulico y educación ambiental.

El resumen de las alegaciones enviadas por el resto de sectores se muestra a continuación agrupado por los temas a los que hacen referencia.

En cuanto a las ***zonas protegidas***:

- La catalogación de Zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas no tiene reflejo en la Normativa del Plan. Se propone plantear un régimen de protección en la Normativa.

- Se plantea incluir el Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece *el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León*, en la relación de normas vigentes relativas a los lugares Natura 2000.

- Se considera que hay similitud entre varias figuras de protección, por lo que se propone simultanear varias de las mismas con el fin de conseguir un régimen de protección homogéneo y efectivo.

- Se proponen a continuación algunos valores naturales presentes en el ámbito castellano de la Demarcación y que se considera deberían quedar bajo el amparo del Plan Hidrológico: conservación de las micropoblaciones de cangrejo autóctono y de las poblaciones de trucha autóctona, tener presentes la existencia de numerosas especies incluidas en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León estrechamente ligadas el medio acuático. En el lado opuesto estarían las especies invasoras como el black bass, el cangrejo señal o el visón americano que suponen una amenaza para las especies autóctonas haciendo imprescindible su control.

- Se solicita a la CHC el acceso a los datos obtenidos en el sistema de control de las zonas protegidas.

- Se propone la inclusión en las Zonas de protección de hábitats o especies de al menos aquellas zonas del ámbito de la Demarcación declaradas de interés especial en los planes de gestión de especies amenazadas ligadas al medio acuático.

- Se considera conveniente revisar la cartografía del Registro de Zonas Protegidas para incorporar la nueva delimitación oficial realizada por el Gobierno Vasco.

- No se aprecia la diferencia entre las Zonas de Interés Natural y la categoría de Reservas Naturales Fluviales.

- Se proponen nuevos tramos a incluir como Zonas de Interés Medioambiental.

- Se propone actualizar los humedales incluidos en el Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV.

En relación con la ***definición, naturaleza y estado de las masas de agua*** y con los ***objetivos medioambientales*** se solicita un cambio en la calificación de las siguientes masas muy modificadas: Bidasoa III, Urumea I, Leizaran II, Urumea III y Asteasu II de forma que pasen a designarse como masas de agua naturales. Así, se propone también que los objetivos medioambientales de dichas masas sean el Buen estado ecológico y químico al 2015. También se solicita que el Bidasoa III pase a buen estado ecológico ya que en la propuesta de Plan no alcanza el buen estado.

De la misma manera se propone un cambio en los objetivos medioambientales de las masas Bidasoa II y Bearzun pasando del Estado ecológico Muy bueno al Buen estado ecológico al 2015.

También se solicita que la masa Cadagua II se diferencie en dos tramos y que se elimine la calificación de masa muy modificada para el tramo entre el punto de terminación de la masa Cadagua I y Balmaseda o Güeñes, así como incluir el tramo restante hasta Sodupe en la definición de la masa Cadagua III.

Por otro lado, se propone que se califique al embalse de Lareo como masa de agua muy modificada asimilable a río.

En relación con el ***Programa de medidas***:

- Se proponen varias alternativas a la solución del problema generado por el vertido de aguas fecales de varios núcleos rurales en la cabecera del río Nervión a fin de que se recojan dentro del Plan Hidrológico y se estime su valoración.
- Se aporta la actuación "Plan Solución de regulación de Llodio" para incluir en el Plan.
- Se indican algunas modificaciones a realizar en la forma de recoger las actuaciones de saneamiento y depuración de los núcleos de población de la Cuadrilla de Ayala.
- Se echa en falta el planteamiento de medidas de actuación sobre el dominio público hidráulico en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.
- Se incide en el especial cuidado que ha de tenerse en las actuaciones de restauración de riberas en relación con el material vegetal a utilizar, de forma que se tenga en cuenta el "*Protocolo Técnico para la gestión de materiales forestales de reproducción de especies empleadas en restauración de riberas*".
- Se echa en falta concreción en las medidas relacionadas con la "Conservación y mejora de la biodiversidad" al estar vinculadas a la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Asimismo es necesario llamar la atención sobre estas actuaciones, que analizadas individualmente pueden carecer de impactos de entidad, pero que en conjunto afectan a muchos tramos de la red fluvial pudiendo provocar impactos apreciables.
- No aparece el coste de la elaboración de los documentos para la designación de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) del País Vasco en el ámbito del Plan en el *apéndice X.5. Resumen del Programa de Medidas*.

En relación con los ***Planes y Programas relacionados***, se propone que se incluyan los planes de objetivos y medidas de conservación de las Zonas Especiales de Conservación de la Red Natura 2000 en los Planes y Programas de la CAPV.

Hay numerosas sugerencias y propuestas sobre la ***Normativa*** de la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico:

- Se echa en falta alguna disposición relativa a los aprovechamientos forestales o plantaciones de especies ribereñas.
- Se considera razonable que las depuradoras pequeñas, que no implican reducción significativa de la capacidad de desagüe del cauce, sean evaluadas con criterios diferentes a las depuradoras de gran tamaño y sea posible construirlas en la zona de flujo preferente. Este aspecto también se considera necesario tenerlo en cuenta a la hora de delimitar los Corredores fluviales y los Ámbitos de Protección Específica del Medio Fluvial.

- Se considera que no es necesario instalar dos líneas de depuración para vertidos que superen los 400m^3/día y el 20% del caudal de dilución en las depuradoras de aguas residuales para pequeños y medianos núcleos de población.

- Se propone revisar la redacción de varios artículos a la vista de la propuesta en trámite de la modificación del RDPH.

- Resulta un tanto confusa la sección 1, en la que no se incluye ninguna determinación relativa al deslinde.

- Se solicita una actualización de las concesiones existentes en el Capítulo 5.

- Se considera necesario que en el artículo 11 se incluya la previsión de que los caudales ecológicos mínimos puedan ser objeto de revisión.

- En relación con el artículo 25, se considera que el almacenamiento de regulación mínimo de 10 días es un valor excesivo, al menos para las concesiones de abastecimiento, que debería matizarse.

- Revisión de los artículos 42.4 y 44, relativos a la protección frente a inundaciones y a la definición de corredor fluvial, respectivamente, en base a varios aspectos que no se corresponden con la regulación establecida en los Planes de Ordenación aprobados por el Gobierno de Navarra, a fin de armonizar las competencias de la CHC y de los órganos competentes en materia de ordenación del territorio y/o urbanismo. Más concretamente en los aspectos relativos a las nuevas edificaciones que deben realizarse a cotas no alcanzables por las avenida de periodo de retorno de 500 años y en los corredores fluviales con ámbitos superiores al definido por los terrenos incluidos en las zonas de flujo preferente.

- Se propone una modificación del artículo 43, relativo a las Normas específicas para el diseño de puentes, coberturas y modificaciones de trazado, incluyendo un párrafo que indique que se preservará la continuidad de las riberas.

- En el artículo 44 no se aclara cuál es el objetivo y virtualidad del corredor fluvial y tampoco se fija un plazo para su definición. Se propone que se revise este artículo.

- Se propone la eliminación de varios artículos: el 32, relativo a las Concesiones para riegos, el 55, de Vertidos procedentes de residuos sólidos y el 58 en el que se desarrollan las Bases técnicas para las autorizaciones de vertidos.

- En relación con el Anejo 3.1 de la Normativa se propone descender los límites de P total y ortofosfatos en los parámetros físico-químicos y biológicos.

Finalmente, también se trata el tema de los ***usos del agua*** solicitando que los Usos industriales sean prioritarios sobre los Usos industriales para la producción de energía eléctrica. O que se lleve a cabo una evaluación que tenga en cuenta la aportación real de las minicentrales hidroeléctricas a la producción energética nacional y sus indudables afecciones ambientales.

5. RESPUESTA A LAS ALEGACIONES RECIBIDAS

Tras el análisis de los documentos de alegaciones recibidos, se ha elaborado la respuesta motivada para cada uno de ellos. Los documentos de alegaciones se han dividido en varios apartados a efectos de su análisis y contestación.

Cabe mencionar que el contenido de las cartas, una vez enviadas éstas a cada alegante, será puesto a disposición del público en la página web de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, junto a la documentación referente al Plan Hidrológico de cuenca, a efectos de garantizar el derecho de los interesados a la información ambiental (Figura 1.).



Figura 1. Apartado de la página web de la CHC dedicado a la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la D.H. del Cantábrico Oriental y su consulta pública

6. MODIFICACIONES INCORPORADAS AL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO

De acuerdo al análisis efectuado en el apartado 5 del presente documento, se exponen a continuación las modificaciones que se realizan en el Proyecto de Plan Hidrológico de la D.H. del Cantábrico Oriental como consecuencia de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas mediante los documentos de alegaciones por parte de los agentes interesados y los trabajos de perfeccionamiento desarrollados durante el proceso de consulta pública por las Administraciones competentes.

Este análisis se efectúa para cada uno de los documentos del Proyecto de Plan, es decir, Memoria, Anejos y Normativa y para el Informe de Sostenibilidad Ambiental. Asimismo, se indican las modificaciones introducidas en el modelo de datos (información GIS y alfanumérica).

Para que la exposición de la información sea lo más clara posible se han numerado las modificaciones en los diferentes apartados, excepto en el de la Normativa, donde se detallan los cambios correspondientes a cada artículo y anejo.

6.1. CUESTIONES GENERALES

En este apartado se recogen los cambios que se producen en varios apartados de los documentos sometidos a consulta pública, en función de las modificaciones normativas sufridas, de erratas detectadas y otras modificaciones.

6.1.1. Modificaciones Normativas

Durante el proceso de consulta pública se aprobaron y/o modificaron normas que han sido recogidas en los documentos de los planes hidrológicos y que se mencionan a continuación:

Modificación 1.

Publicación de la Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. Se han tenido en cuenta las modificaciones en los apartados afectados y en aquellos documentos en los que se nombre de forma explícita la Orden ARM/2656/2008. Debe añadirse un texto que detalle la modificación, como "Orden ARM/2656/2008 de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica, modificada por la Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo". Si se habla simplemente de la "IPH" no es necesario explicitar la nueva Orden.

Modificación 2.

La Ley 19/2011, de 5 de julio, por la que pasan a denominarse oficialmente «Araba/Álava», «Gipuzkoa» y «Bizkaia» las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente «Álava», «Guipúzcoa» y «Vizcaya», afecta con carácter general a los documentos del PHC y en consecuencia se han modificado allí donde corresponda. Así, se modificaron los siguientes nombres:

Álava: pasa a denominarse oficialmente Araba/Álava.

Guipúzcoa: pasa a denominarse oficialmente Gipuzkoa.

Vizcaya: pasa a denominarse oficialmente Bizkaia.

Modificación 3.

Con la aprobación del Real Decreto 1627/2011, de 14 de noviembre, se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua del ámbito de competencia estatal de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, conforme a lo previsto en el artículo 36 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

El Real Decreto establece las funciones generales y específicas del Consejo del Agua de la Demarcación, que es el órgano de participación y planificación de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. De este modo, a los cometidos generales de información, consulta y participación pública del proceso planificador, se han incorporado funciones específicas. De este modo se ha recogido en el Proyecto de Plan.

Modificación 4.

Publicación del Real Decreto 1626/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y por el que se modifica el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los Comités de Autoridades Competentes de las Demarcaciones Hidrográficas de las cuencas intercomunitarias. Este real decreto establece la composición del Comité de Autoridades Competentes de la parte española de la DHC Oriental y así se ha reflejado en el Proyecto de Plan.

6.1.2. Otras modificaciones

Modificación 5.

Se ha detectado que aparecen dos tipos de numeración en los índices de varios capítulos de la Memoria de la Propuesta de Plan Hidrológico. Se ha realizado una homogenización con el formato de la plantilla general de todos los documentos.

6.2. MEMORIA DEL PLAN

6.2.1. Capítulo 1. Introducción y antecedentes

Modificación 1.

En el *Apartado 1.1.2 El Plan Hidrológico del Norte* se mencionaba el ámbito del Plan Norte III y este término es erróneo. Se ha procedido a la corrección del mismo.

6.2.2. Capítulo 2. Descripción general de la demarcación

Modificación 2.

Se ha modificado el punto 2.4.2.1.3. "Características Básicas de Calidad de las Aguas en Condiciones Naturales" del Capítulo 2 de la Memoria, ampliando la información sobre las características básicas de las aguas de la Demarcación. Este epígrafe ha quedado de la siguiente manera:

2.4.2.1.3 Características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales

El artículo 42.e del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) establece que uno de los contenidos de los Planes Hidrológicos de cuenca ha de estar constituido por las características

básicas de calidad de las aguas. Asimismo, el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH, artículo 4.a.c´), determina que este contenido ha de formar parte del inventario de recursos superficiales y subterráneos, a incluir en la descripción general de la demarcación hidrográfica.

Así pues, siguiendo lo dispuesto en los epígrafes 2.4.1 y 2.4.5 de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), a continuación se muestra un resumen de las características básicas de calidad de las masas de agua superficiales y subterráneas de la presente Demarcación, estando esta información más desarrollada en el Anejo 2 del presente Plan.

2.4.2.1.3.1. Características básicas de calidad de las masas de agua superficiales

El ciclo hidrológico natural y la actividad humana son determinantes en la calidad de las aguas. Esto implica que la porción atribuida al ciclo natural debe ser identificada, medida y separada de la evaluación del impacto de la actividad humana, por lo tanto las variables de calidad deben considerarse como variables aleatorias. En consecuencia, es útil describir las mismas tanto en términos estadísticos, tales como parámetros de distribución, como en términos de características de la cuenca.

El trabajo realizado para obtener las características básicas de la calidad de las aguas superficiales se llevó a cabo utilizando todos los datos disponibles recopilados en todas las redes de control gestionadas por la CHC. A partir de los datos de estas estaciones seleccionadas se han calculado unos estadísticos que incluyen una medida de la incertidumbre (la media y el intervalo de confianza del 95%) de dos grupos de parámetros: los elementos de calidad que cuentan con condiciones de referencia y valores umbral en la IPH (pH y conductividad) y otros parámetros como la dureza, alcalinidad e iones mayoritarios que completan la caracterización básica de calidad de las aguas superficiales.

Tras el estudio y análisis de estos valores históricos, se puede concluir que las características de las aguas superficiales continentales de esta Demarcación parecen obedecer a una cierta zonificación que tiene que ver con las agrupaciones litológicas presentes en la Demarcación, existiendo una correlación entre las tipologías y litologías calcáreas y los valores más altos de los parámetros.

Las aguas de esta Demarcación presentan valores de conductividad que varían desde 250 µS/cm hasta los 1000 µS/cm, si bien la mayoría de los datos son menores de 700 µS/cm.

En general hay un buen ajuste de los umbrales de conductividad y pH a las distintas tipologías presentes, si bien se considera que en determinadas ocasiones, bien por litologías locales más salinas, bien por la variabilidad estacional del caudal que modifica sustancialmente los valores de las variables en el periodo estival, los umbrales de la IPH asociados a determinadas litologías son demasiado estrictos. Es por ello que en la evaluación de estado se han utilizado umbrales de fisicoquímicos generales no variables por tipología.

Por otro lado se considera que no es útil el límite inferior marcado en la IPH en los umbrales de conductividad para distinguir masas en mal estado.

2.4.2.1.3.2. Características básicas de calidad de las masas de agua subterráneas

En relación con las masas de agua subterráneas, se han analizado la conductividad eléctrica y la concentración de los siguientes iones mayoritarios: como cationes, calcio, magnesio y sodio y potasio; y como aniones, bicarbonato, sulfato y cloruro. La información utilizada en el análisis se ha obtenido del histórico de datos hasta el 2008 (escenario actual del Plan Hidrológico) de

las estaciones de control químico de las masas de agua subterráneas, filtrando aquellas que pudieran presentar algún impacto (NO_3>20mg/l o algún otro impacto significativo).

En general, las aguas presentes en el ámbito competencial de la CHC en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental tienen valores de conductividad entre 140 y 500 µS/cm, por lo que se puede decir que las aguas de este ámbito son blandas y ligeramente duras, variando su alcalinidad según la zona. También se registra una masa de agua clasificada como muy blanda y cuatro como muy duras.

Complementariamente se ha realizado el Diagrama de Piper para el análisis de los iones mayoritarios en las masas de agua subterráneas de la Demarcación. La mayor parte de las masas son bicarbonatadas cálcicas, si bien hay 2 masas clasificadas como bicarbonatadas sulfatadas cálcicas, una como bicarbonatada calcicomagnésica y una bicarbonatada calcicosódica.

Modificación 3.

Se ha cambiado la naturaleza de cuatro masas de agua pasándolas de muy modificadas a naturales, por cambios en el estado (componente biológica de macroinvertebrados) fruto de alegaciones, en la necesaria coordinación con la Administración Vasca (URA). Esto influye en la verificación como muy modificadas en última instancia. Es el caso de las masas Urumea I, Urumea III, Leizarán II, Oria V y Maguna. Por ello, se procede a modificar las tablas 18, 19 y 23 y las figuras 15, 18 y 19.

Modificación 4.

Se han eliminado las condiciones de referencia de los indicadores fisicoquímicos generales en ríos (tabla 14) como consecuencia de la coordinación llevada a cabo con la Administración Vasca.

Modificación 5.

En relación con el *Apartado 2.3.2 Caracterización inicial de las masas subterráneas*, se ha verificado que en la tabla 27, relativa a los ecosistemas terrestres dependientes de masas de agua subterráneas, los solapes entre las masas y los LIC coinciden con los indicados en el Anejo IV del PHC.

Modificación 6.

Se han incorporado los siguientes cambios en el *Apartado 2.3.3 Caracterización adicional de las masas de agua subterráneas*:

- En el *Apartado 2.3.3.1.10 Estado químico* se han eliminado el sulfato y el hierro como causa de incumplimiento de la masa 013.013 Beasain, puesto que no se han establecido valores umbral para ellos.
- En el *Apartado 2.3.3.1.11 Tendencias significativas y sostenidas de contaminantes: definición de los puntos de partida de las inversiones*, se han eliminado el texto y las gráficas sobre tendencias del sulfato y el hierro. Asimismo se ha suprimido la tabla 40 sobre los niveles de hierro y arsénico tras la decantación (no aportaba información).

Modificación 7.

Se han actualizado los datos de series mensuales del epígrafe *2.4.1.2 Series mensuales:*

4.4.1.2.1 Sistema de Explotación Nervión

Tabla 45. Promedios mensuales (SE Nervión). Serie 1940/41-2005

VALORES MEDIOS	UNIDAD	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	AÑO HIDROLÓGICO
PRECIPITACIÓN	mm	104.79	128.62	141.85	123.77	99.99	93.15	122.11	91.97	63.36	43.80	56.28	74.06	**1143.73**
ET POTENCIAL	mm	42.32	23.13	18.03	19.54	28.36	45.21	61.26	80.19	94.97	100.70	90.77	65.92	**670.39**
ET REAL	mm	37.88	22.86	17.97	19.51	28.20	44.05	58.35	70.95	70.90	59.02	53.43	51.26	**534.36**
RECARGA ACUÍFEROS	hm3	37.36	59.79	74.48	74.76	64.29	57.16	65.45	42.67	20.13	7.87	11.21	19.50	**534.66**
Q SUPERFICIAL	hm3	32.35	53.39	88.28	76.23	52.41	38.64	52.51	23.03	7.61	1.98	3.94	7.53	**437.90**
Q SUBTERRÉNEA	hm3	26.75	35.25	46.76	56.14	59.95	59.35	59.69	56.90	47.18	35.41	27.03	23.92	**534.33**
Q TOTAL	hm3	59.10	88.63	135.04	132.38	112.36	98.00	112.20	79.93	54.79	37.40	30.97	31.44	**972.24**

Tabla 46. Promedios mensuales (SE Nervión). Serie 1980/81-2005/06

VALORES MEDIOS	UNIDAD	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	AÑO HIDROLÓGICO
PRECIPITACIÓN	mm	102.26	128.70	122.70	114.15	97.28	89.88	121.46	85.52	54.79	47.35	51.21	65.45	**1080.75**
ET POTENCIAL	mm	42.19	22.98	17.96	19.57	28.39	45.53	61.42	80.52	94.98	99.92	90.35	65.75	**669.55**
ET REAL	mm	36.90	22.58	17.93	19.54	28.26	44.44	58.68	70.90	69.26	59.21	49.74	49.50	**526.94**
RECARGA ACUÍFEROS	hm3	35.68	60.08	67.94	70.22	63.62	54.71	63.85	38.27	15.06	8.73	9.65	15.30	**503.12**
Q SUPERFICIAL	hm3	31.50	50.48	65.20	65.47	47.35	35.43	51.38	18.71	4.21	2.09	3.73	4.69	**380.23**
Q SUBTERRÉNEA	hm3	24.11	33.42	44.36	52.71	56.96	56.87	57.40	54.29	43.78	32.59	25.03	21.52	**503.03**
Q TOTAL	hm3	55.61	83.89	109.56	118.17	104.31	92.30	108.79	73.00	47.99	34.68	28.76	26.21	**883.27**

4.4.1.2.2 Sistema de Explotación Oria

Tabla 47. Promedios mensuales (SE Oria). Serie 1940/41-2005

VALORES MEDIOS	UNIDAD	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	AÑO HIDROLÓGICO
PRECIPITACIÓN	mm	148.12	180.74	186.78	158.21	135.53	125.59	159.55	123.56	83.92	66.92	77.81	109.59	**1556.33**
ET POTENCIAL	mm	47.63	28.87	22.11	24.23	33.20	49.54	62.12	82.45	97.78	104.83	95.56	72.13	**720.46**
ET REAL	mm	43.90	28.67	22.05	24.13	32.86	48.03	59.26	73.87	73.94	64.93	61.91	59.68	**593.22**
RECARGA ACUÍFEROS	hm3	35.12	50.90	56.00	51.16	45.84	41.10	46.48	33.19	17.54	10.56	12.19	22.29	**422.37**
Q SUPERFICIAL	hm3	32.95	51.34	65.94	54.75	39.57	30.67	41.49	20.72	6.65	3.33	4.45	11.67	**363.53**
Q SUBTERRÉNEA	hm3	24.72	34.40	43.57	47.40	46.60	43.80	43.14	40.20	31.70	22.88	18.00	18.67	**415.10**
Q TOTAL	hm3	57.68	85.74	109.51	102.15	86.18	74.47	84.64	60.91	38.35	26.21	22.45	30.35	**778.63**

Tabla 48. Promedios mensuales (SE Oria). Serie 1980/81-2005/06

VALORES MEDIOS	UNIDAD	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	AÑO HIDROLÓGICO
PRECIPITACIÓN	mm	151.21	183.47	180.45	159.12	139.74	131.69	156.76	119.29	79.96	69.22	75.91	97.10	**1543.90**
ET POTENCIAL	mm	48.35	29.21	22.73	24.10	33.35	49.69	62.70	83.25	100.16	106.37	96.23	73.45	**729.59**
ET REAL	mm	43.99	28.89	22.65	23.97	33.05	48.33	59.74	74.16	73.59	65.18	60.78	58.53	**592.87**
RECARGA ACUÍFEROS	hm3	35.74	51.92	55.02	51.07	47.40	43.18	45.82	31.87	16.22	11.20	11.63	18.62	**419.69**
Q SUPERFICIAL	hm3	33.42	51.56	61.60	55.55	40.28	32.71	40.06	19.05	5.79	3.54	4.27	8.36	**356.18**
Q SUBTERRÉNEA	hm3	23.08	33.60	42.48	46.12	46.17	44.30	43.47	39.70	30.70	22.20	17.51	17.17	**406.49**
Q TOTAL	hm3	56.50	85.16	104.07	101.67	86.45	77.01	83.52	58.75	36.49	25.74	21.78	25.53	**762.67**

4.4.1.2.3 Sistema de Explotación Urumea

Tabla 49. Promedios mensuales (SE Urumea). Serie 1940/41-2005

VALORES MEDIOS	UNIDAD	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	AÑO HIDROLÓGICO
PRECIPITACIÓN	mm	184.15	222.07	224.26	197.20	169.66	159.31	196.33	156.03	105.23	94.57	103.19	132.70	**1944.70**
ET POTENCIAL	mm	45.65	27.03	20.38	22.37	30.32	46.93	59.93	80.88	96.30	102.09	93.58	70.43	**695.87**
ET REAL	mm	44.40	26.98	20.37	22.36	30.31	46.81	59.33	77.54	81.43	76.88	72.33	63.37	**622.11**
RECARGA ACUÍFEROS	hm3	6.80	8.69	9.00	8.76	8.31	7.98	8.24	7.18	4.89	3.74	3.92	5.34	**82.84**
Q SUPERFICIAL	hm3	21.65	33.31	38.86	33.76	26.45	21.83	27.32	16.17	5.97	4.01	4.63	9.02	**242.97**
Q SUBTERRÉNEA	hm3	5.26	6.74	8.19	9.00	9.15	8.97	8.86	8.49	7.18	5.50	4.48	4.43	**86.25**
Q TOTAL	hm3	26.91	40.05	47.04	42.76	35.61	30.80	36.18	24.66	13.15	9.51	9.10	13.44	**329.22**

Tabla 50. Promedios mensuales (SE Urumea). Serie 1980/81-2005/06

VALORES MEDIOS	UNIDAD	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	AÑO HIDROLÓGICO
PRECIPITACIÓN	mm	183.09	211.75	209.08	187.83	166.66	158.91	189.00	143.08	97.51	91.63	95.58	118.97	**1853.08**
ET POTENCIAL	mm	45.62	27.57	20.82	22.61	30.53	47.55	61.05	81.63	97.37	102.72	93.68	70.54	**701.68**
ET REAL	mm	43.77	27.42	20.81	22.61	30.52	47.39	60.37	77.79	79.64	75.19	69.84	61.77	**617.13**
RECARGA ACUÍFEROS	hm3	6.61	8.39	8.65	8.38	8.32	7.98	8.11	6.84	4.45	3.56	3.52	4.66	**79.45**
Q SUPERFICIAL	hm3	21.61	31.09	35.37	32.00	25.84	21.79	25.76	13.69	5.10	3.81	3.97	7.24	**227.28**
Q SUBTERRÉNEA	hm3	4.72	6.26	7.66	8.40	8.67	8.64	8.53	8.05	6.67	5.08	4.10	3.94	**80.70**
Q TOTAL	hm3	26.33	37.35	43.03	40.40	34.51	30.43	34.29	21.74	11.77	8.89	8.07	11.18	**307.99**

4.4.1.2.4 Sistema de Explotación Bidasoa

Tabla 51. Promedios mensuales (SE Bidasoa). Serie 1940/41-2005

VALORES MEDIOS	UNIDAD	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	AÑO HIDROLÓGICO
PRECIPITACIÓN	mm	160.39	188.08	201.38	175.38	148.24	137.55	165.13	139.14	87.04	74.01	83.39	112.06	**1671.77**
ET POTENCIAL	mm	45.89	25.42	17.74	20.25	28.82	48.50	64.99	84.97	106.15	114.18	103.73	76.57	**737.21**
ET REAL	mm	42.47	24.68	17.26	19.67	27.93	46.51	61.22	76.83	79.68	69.92	65.29	61.60	**593.08**
RECARGA ACUÍFEROS	hm3	21.98	30.05	34.00	31.36	28.85	26.57	27.40	22.44	11.65	7.25	7.94	13.59	**263.08**
Q SUPERFICIAL	hm3	40.68	63.16	82.74	71.74	53.82	42.18	49.84	30.47	8.49	4.76	6.71	13.93	**468.51**
Q SUBTERRÉNEA	hm3	15.48	20.96	26.33	28.99	29.16	28.14	27.53	26.09	21.53	15.94	12.39	12.22	**264.77**
Q TOTAL	hm3	56.16	84.13	109.08	100.74	82.98	70.33	77.37	56.57	30.02	20.70	19.10	26.15	**733.33**

Tabla 52. Promedios mensuales (SE Bidasoa). Serie 1980/81-2005/06

VALORES MEDIOS	UNIDAD	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	AÑO HIDROLÓGICO
PRECIPITACIÓN	mm	152.76	177.46	178.95	160.41	145.61	134.36	159.16	124.11	79.53	69.27	75.33	101.23	**1558.19**
ET POTENCIAL	mm	45.58	25.31	17.84	20.16	28.77	48.68	64.95	85.07	106.85	113.78	102.67	76.38	**736.04**
ET REAL	mm	40.53	24.06	17.04	19.21	27.35	45.70	59.74	74.67	76.08	65.51	60.47	58.72	**569.08**
RECARGA ACUÍFEROS	hm3	19.95	27.80	30.34	28.51	28.01	25.37	25.93	19.95	10.09	6.59	6.73	11.51	**240.79**
Q SUPERFICIAL	hm3	39.21	58.46	71.21	64.87	52.66	41.59	48.02	24.84	6.89	4.47	5.86	11.67	**429.77**
Q SUBTERRÉNEA	hm3	13.75	19.29	24.27	26.70	27.37	26.88	26.31	24.56	19.86	14.60	11.27	10.83	**245.69**
Q TOTAL	hm3	52.96	77.75	95.49	91.58	80.03	68.48	74.34	49.41	26.76	19.07	17.13	22.50	**675.51**

4.4.1.2.5 Sistema de Explotación Ríos Pirenaicos

Tabla 53. Promedios mensuales (SE Ríos Pirenaicos). Serie 1940/41-2005

VALORES MEDIOS	UNIDAD	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	AÑO HIDROLÓGICO
PRECIPITACIÓN	mm	153.11	168.14	190.11	179.48	140.74	132.71	152.63	144.18	83.95	72.87	87.68	99.93	**1605.53**
ET POTENCIAL	mm	42.46	22.44	15.07	17.60	25.69	46.03	63.70	77.53	102.86	109.71	95.73	74.16	**692.99**
ET REAL	mm	37.57	20.09	13.54	15.77	23.00	41.18	56.44	67.16	78.30	69.93	66.64	58.59	**548.21**
RECARGA ACUÍFEROS	hm3	4.80	6.08	6.94	6.96	6.33	6.00	5.81	5.50	2.86	1.75	2.15	2.78	**57.96**
Q SUPERFICIAL	hm3	11.11	17.12	23.93	22.67	15.62	12.34	13.65	10.43	2.58	1.24	1.99	3.16	**135.82**
Q SUBTERRÉNEA	hm3	3.44	4.37	5.34	5.93	6.10	6.03	5.95	5.74	4.93	3.82	3.06	2.95	**57.64**
Q TOTAL	hm3	14.58	21.54	29.31	28.65	21.77	18.42	19.66	16.22	7.55	5.09	5.08	6.13	**194.02**

Tabla 54. Promedios mensuales (SE Ríos Pirenaicos). Serie 1980/81-2005/06

VALORES MEDIOS	UNIDAD	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	AÑO HIDROLÓGICO
PRECIPITACIÓN	mm	131.02	147.02	153.10	144.61	125.79	120.26	130.34	114.13	68.99	58.39	71.15	82.86	**1347.65**
ET POTENCIAL	mm	42.38	22.43	15.14	17.57	25.64	46.30	63.74	77.71	103.84	109.69	94.84	74.11	**693.38**
ET REAL	mm	34.02	18.36	12.53	14.45	21.07	38.00	51.51	60.77	69.69	60.17	56.97	51.72	**489.23**
RECARGA ACUÍFEROS	hm3	2.32	3.10	3.52	3.47	3.35	3.16	2.99	2.63	1.31	0.75	0.95	1.25	**28.81**
Q SUPERFICIAL	hm3	5.47	8.54	10.79	10.41	8.28	6.65	6.72	4.30	1.04	0.50	0.84	1.39	**64.94**
Q SUBTERRÉNEA	hm3	1.82	2.38	2.93	3.25	3.38	3.39	3.36	3.19	2.69	2.07	1.65	1.55	**31.67**
Q TOTAL	hm3	7.31	10.95	13.76	13.69	11.69	10.08	10.10	7.52	3.76	2.59	2.50	2.96	**96.91**

6.2.3. Capítulo 3. Descripción de usos, demandas y presiones

Modificación 8.

Tras la revisión del borrador se ha modificado la redacción en varios apartados de este capítulo con el fin de dar una redacción más clara de los conceptos desarrollados:

- Último párrafo del *Apartado 3.1.1. Introducción.*
- Se revisó la redacción del *Apartado 3.1.2. Actividades socioeconómicas* de forma general para simplificar su lectura.

Modificación 9.

En el *Apartado 3.1.2.4 Usos energéticos* se ha revisado parte de la redacción de algunos párrafos. En este apartado se ha incluido también una nota sobre la central hidroeléctrica de Barázar. Esta central, aunque está ubicada dentro del ámbito del sistema Nervión, turbina las aguas procedentes del sistema Zadorra de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Organismo responsable de la concesión de captación, aunque su retorno se produce en la cuenca del río Nervión.

Modificación 10.

En el *Apartado 3.1.2.5 Otros usos* se ha revisado parte de la redacción de algunos párrafos. En el *Apartado 3.1.2.5.2 Campos de golf* se han incluido las correcciones relacionadas con la incorporación de dos campos de golf, por lo que se ha modificado la tabla 22. En el *Apartado 3.1.2.5.3 Deportes acuáticos y pesca deportiva* se ha añadido un resumen de las limitaciones a la navegación en masas de agua categoría río y embalse, definidas según los criterios considerados por las Comunidades Autónomas y por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Asimismo se ha incorporado un mapa que muestra los tramos navegables para usos recreativos.

Modificación 11.

Dentro del análisis de la evolución futura de los factores determinantes de los usos del agua, se han revisado algunos párrafos del *Apartado 3.1.3.2 Usos urbanos: Sector turístico* y del *Apartado 3.1.3.4 Usos agrarios*.

Modificación 12.

Dentro del *Epígrafe 3.1.4 Demandas de agua* se han repasado las tablas y la redacción de los distintos apartados que lo conforman. Más concretamente se han modificado los siguientes apartados: *3.1.4.1. Demandas urbanas* (Unidades de demanda urbanas- UDU), *3.1.4.2 Demandas agrarias* (Unidades de demanda agraria- UDA), *3.1.4.3 Demandas industriales* (Unidades de demanda industrial- UDI), *3.1.4.4 Demandas energéticas* y *3.1.4.5 Demandas otros usos*.

Modificación 13.

En el *Apartado 3.1.5. Resumen de demandas* se han actualizado todas las tablas, una vez se habían analizado nuevamente las demandas. En el *Apartado 3.1.5.1 Demanda total por origen* se ha modificado la tabla 57. Aportaciones de recursos externos (trasvases) con el fin de incluir el trasvase de Deba, que está destinado a reforzar el abastecimiento de la zona de Ermua y representa un volumen de 3,15 hm^3/año.

Modificación 14.

Se ha incorporado en este Capítulo 3, en el *Apartado 3.2.2.2 Resumen de la contaminación originada por fuentes de contaminación difusa*, una tabla en la que se muestran a modo resumen todas las fuentes de contaminación difusa.

Modificación 15.

Se han considerado los cambios en las tomas de abastecimiento superficial y subterráneo y su relación con el control de prepotables y con la asignación a masas. En concreto, los apartados que se han visto afectados son: *3.2.2.3 Resumen de extracción de agua en aguas superficiales*, *3.2.3.3. Resumen de las extracciones de agua subterráneas*.

6.2.4. Capítulo 4. Prioridades de uso y asignación de recursos

Modificación 16.

En el *Apartado 4.3 Prioridades de uso* se ha actualizado el orden de preferencia de usos para que coincidan con el Artículo 16 de la Normativa. Orden de preferencias de usos la Normativa.

En el *Apartado 4.3* se recoge el orden de prioridades de la siguiente forma:

"3 Usos industriales para producción de energía eléctrica

4 Otros uso industriales"

Mientras que en el *Artículo 16 de la Normativa* figura lo siguiente:

"3 Usos industriales incluidos los energéticos"

Modificación 17.

En el *Apartado 4.4. Caudales ecológicos* se ha modificadoó el párrafo b para adecuarlo a la normativa actual: se sustituye "b) Proceso de negociación o concertación. Esta fase podría realizarse en aquellos casos que condicionen significativamente las asignaciones y reservas del plan hidrológico y está definido por diferentes niveles de acción (información, consulta pública, participación activa)" por "b) Proceso de negociación o concertación. Esta fase se realizará

posteriormente a la aprobación del Plan y antes de la comunicación a los concesionarios, al no afectar significativamente las reservas y asignaciones del Plan. Alcanzará como mínimo, tal y como indica la IPH, los niveles de información y consulta pública".

6.2.5. Capítulo 5. Identificación y mapas de las zonas protegidas

6.2.5.1. Zonas de abastecimiento actual y futuro

Modificación 18.

Se ha corregido las masas de abastecimiento actual y futuro así como las captaciones unidas a las mismas. En concreto se añadió el embalse de Añarbe y se incluyó la relación de las zonas de abastecimiento futuro con masas.

Estos cambios repercuten en los mapas, y en los conteos de volumen y número de captaciones superficiales y subterráneas.

6.2.5.2. Masas de agua de uso recreativo

Modificación 19.

Se ha añadido un párrafo para indicar que el censo del NÁYADE de zonas de baño se revisa anualmente.

Modificación 20.

Se ha añadido un párrafo para indicar hay un vacío legal que impide ampliar el registro de zonas de uso recreativo que en la actualidad se alimenta sólo de las zonas de baño.

6.2.5.3. Zonas de protección de hábitat o especies

Modificación 21.

Corrección en el número de LIC, ZEPAS y la superficie que ocupan tanto en el texto como en los mapas (se actualiza el contorno de LIC y ZEPAS con las capas oficiales).

Modificación 22.

Se ha homogenizado el criterio para seleccionar las ZEPAS dependientes del medio hídrico respecto a la metodología de los LIC incluyendo las especies del Anejo I de la Directiva de Aves por las que se seleccionan las ZEPAS y quitando la clasificación de dependencia "media, alta o baja".

Modificación 23.

Se añaden LIC por alegaciones (solapes con masas de cabecera lo que también afecta a los caudales ecológicos de estas masas). En la siguiente tabla se muestran los nuevos LIC a incorporar como dependientes del medio hídrico:

CÓDIGO DEL LIC	NOMBRE DEL LIC
ES4120028	Monte Santiago
ES4120049	Bosques del Valle de Mena
ES2110004	Arkamo-Gibijo-Arrastaria
ES2120008	Ernio-Gatzume

CÓDIGO DEL LIC	NOMBRE DEL LIC
ES2130009	Urkiola
ES2200017	Señorío de Bértiz
ES2200019	Monte Alduide

6.2.5.4. Reservas naturales fluviales

Modificación 24.

Se corrige el trazado de la Reserva Natural Fluvial Altube (zona protegida 1609100018).

Modificación 25.

Se incluye un párrafo en el que se establece que se permiten los usos lúdicos en las reservas naturales fluviales, siempre que no comprometan el estado muy bueno de la masa de agua.

6.2.5.5. Zonas de protección especial

Modificación 26.

Se cambia la estructura del documento pasando a considerar las zonas húmedas de protección especial como otras zonas húmedas dentro del apartado general de zonas húmedas que ya incluía las RAMSAR y las del Inventario Nacional de Zonas Húmedas.

Modificación 27.

Los Juncales de Villabona (1610100304) han sido eliminados en la modificación del Plan Territorial Sectorial del País Vasco relativo a Zonas Húmedas aprobada en 2011, por lo que se han eliminado del registro de zonas protegidas.

Modificación 28.

Las Turberas de Verdeoespesoa (1610100306) han cambiado de denominación en la modificación del Plan Territorial Sectorial del País Vasco relativo a Zonas Húmedas aprobada en 2011, ahora se denominan Trampales de Orozko.

Modificación 29.

El total de zonas húmedas en la Demarcación del Cantábrico Oriental es de 22. De estas 5 proceden del Inventario Nacional de Zonas Húmedas, 16 han sido propuestas por el País Vasco y 1 proviene de la selección de zonas húmedas para los estudios de caracterización hidrológica.

6.2.6. Capítulo 6. Programas de control y estado de las masas de agua

6.2.6.1. Programas de investigación en masas superficiales continentales

Modificación 30.

Se ha añadido un programa de investigación en el río Izorio para mejorar el conocimiento de la masa y las causas de incumplimiento, que también se ha tenido en cuenta en el programa de medidas con una aproximación a su presupuesto y puesta en marcha.

Modificación 31.

Se ha añadido la Red SAICA como programa de investigación, tal y como está en el Plan de explotación de 2010 gestionado por Comisaría de Aguas de la CHC.

6.2.6.2. Programas de control de zonas protegidas

Modificación 32.

Se ha añadido el control de la zona sensible Embalse de Ordunte con la estación $NO_3$094 (477023, 4778876) situada en la presa.

6.2.6.3. Programas de control operativo en masas de agua subterráneas

Modificación 33.

En el *Apartado 6.1.2.2.2 Programa de control operativo*, se ha señalado al arsénico como causante del mal estado en la masa subterránea 013.013 Beasain, quitando la referencia a los sulfatos y metales.

6.2.6.4. Metodología de evaluación de estado de las masas de agua superficiales continentales

Modificación 34.

Cambios en los umbrales de fisicoquímicos generales por coordinación con la Administración Vasca en las masas río. Además de quitar las condiciones de referencia, se elimina el umbral MB/B y la variación de los umbrales por tipología. Se ha añadido la DQO como parámetro en lugar del oxígeno disuelto. En la siguiente tabla se muestran los nuevos umbrales.

INDICADORES FÍSICO - QUÍMICOS NO VARIABLES POR TIPOLOGÍA	LÍMITE BUENO / MODERADO	
pH	6-9	
Saturación de oxígeno (%)	70-120	
Conductividad (µS/cm)	700	
Nitrato (mg NO_3/l)	15	
Amonio (mg NH_4/l)	0,50	
DBO_5 (mg/l)	5	
DQO (mg/l)	DQO al dicromato 17	DQO al Permanganato 10
Fósforo Total (mg/l)	0,40	

6.2.6.5. Metodología de evaluación del estado en masas de agua subterráneas

Modificación 35.

En el *Apartado 6.3.2.2 Estado químico* se ha modificado el apartado sobre el establecimiento de los valores umbral. Se incluye la siguiente tabla de valores umbral y normas de calidad y se corrige la redacción en base a esta modificación.

MASAS DE AGUA	NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL		VALORES UMBRALES PARA DETERMINADOS CONTAMINANTES						
	Nitratos (mg/l)	Plaguici(*) (mg/l)	NH_4 (mg/l)	Hg (µg/l)	Pb (µg/l)	Cd (µg/l)	As (µg/l)	TCE (µg/l)	PCE (µg/l)
ETXANO	50	0,1 0,5 (total)	0.5	0.5	10	5	10	5	5
OIZ									
BALMASEDA-ELORRIO									
ARAMOTZ									
ITXINA									
MENA-ORDUÑA									
SALVADA									
ANDOAIN									
TOLOSA					50				
MACIZOS PALEOZÓICOS CINCO VILLAS-QUINTO REAL					10				
ARAMA									
BASABURUA-ULZAMA									
BEASAIN							80		
ARALAR							10		
(*) Sustancias activas de los plaguicidas, incluidos metabolitos y los productos de la degradación y reacción.									

Modificación 36.

En el *Apartado 6.3.2.3 Tendencias significativas y sostenidas al aumento* se realizan algunas correcciones en cuanto a la Normativa que se ha utilizado para determinar las tendencias.

6.2.7. Capítulo 7. Objetivos medioambientales para las masas de agua

Modificación 37.

En el *Apartado 7.4 Resumen de objetivos medioambientales de las masas de agua*, la figura 1, que refleja los objetivos medioambientales y exenciones de las masas de agua superficiales de la Demarcación y la tabla 1, que incluye un resumen de los mismos por categoría de masa de agua, se han modificado para adaptar su contenido a los siguientes cambios:

- Se ha procedido a asignar prórroga de plazo a 2021 a las siguientes masas: Río Amavirgina II, Río Izorio, Arroyo de Aquelcorta y Río Cadagua I.
- Se elimina la prórroga de plazo a 2021 para las masas Río Leizarán II y Río Oria V.
- El objetivo medioambiental de las masas Río Bearzun y Río Bidasoa II pasa del "estado ecológico muy bueno y estado químico bueno al 2015" al "estado ecológico bueno y estado químico bueno al 2015".

- Como se ha explicado anteriormente, las masas Río Urumea I, Río Urumea III, Río Leizarán II y Río Oria V pasan de muy modificadas a naturales, por lo que en estos casos debe sustituirse el objetivo del "buen potencial" por el de "buen estado".

Modificación 38.

Se ha añadido el siguiente párrafo al final del *Apartado Perímetros de Protección de aguas minerales y termales*: "No obstante, hay que señalar que actualmente las Comunidades Autónomas están desarrollando los Planes de Gestión de los espacios Natura 2000, que definen, entre otros aspectos, los sistemas de valoración del estado de conservación de sus hábitats."

Modificación 39.

En el *Apartado 7.6 Justificación de exenciones* de la versión sometida a consulta pública aparecen 23 exenciones. Con los cambios anteriormente descritos, actualmente son 26 exenciones.

6.2.8. Capítulo 8. Diagnóstico del cumplimiento de los objetivos medioambientales

6.2.8.1. Masas de agua superficiales

Modificación 40.

Los cambios realizados en la evaluación del estado de las masas de agua que se describen a continuación, han supuesto el cambio de tablas, mapas y apéndices correspondientes, tal y como se indica acontinuación:

- Cambios en el estado biológico:

MASA DE AGUA		BPH CONSULTA PÚBLICA	SEGUIMIENTO
Código	Nombre		
ES002MAR002380	Río Bidasoa II	Muy bueno	Bueno
ES002MAR002350	Río Bearzun	-	Bueno
ES010MAR002420	Río Bidasoa III	Moderado	Bueno
ES018MAR002470	Río Urumea III	-	Bueno
ES018MAR002492	Río Urumea I	-	Bueno
ES027MAR002620	Río Leizarán II	Moderado	Bueno
ES028MAR002661	Río Oria V	-	Bueno
ES052MAR002710	Río Izorio	Bueno	Moderado

- Cambios en el estado de los indicadores fisicoquímicos generales:

MASA DE AGUA		BPH CONSULTA PÚBLICA	SEGUIMIENTO
Código	Nombre		
ES020MAR002570	Río Zaldivia	Moderado por NH_4, DBO_5	Moderado por NH_4, DBO_5, DQOd
ES021MAR002582	Río Amavirgina II	Muy bueno	Moderado por NO_3, DQOd
ES023MAR002591	Río Araxes II	Moderado por DBO_5	Moderado por DBO_5, DQOd
ES028MAR002661	Río Oria V	Muy bueno	Moderado por DBO_5, DQOd
ES052MAR002690	Río Nervión I	Muy bueno	Moderado por DBO_5, DQOd
ES052MAR002710	Río Izorio	Moderado por DBO_5, Ptot, NH_4	Moderado por DBO_5, Ptot, NH_4, DQOd
ES067MAR002830	Río Amorebieta-Arechavalagane	Muy bueno	Moderado por DQOd

MASA DE AGUA		BPH CONSULTA PÚBLICA	SEGUIMIENTO
Código	Nombre		
ES068MAR002841	Río Nervión II	Moderado por Cond-20, DBO_5	Moderado por COND-20, DBO_5, NH_4, DQOd
ES068MAR002842	Río Ibaizabal III	Muy bueno	Moderado por DQOd
ES055MAR002721	Río Altube I	Muy bueno	Bueno
ES056MAR002730	Río Ceberio	Muy bueno	Bueno
ES059MAR002760	Arroyo de Aquelcorta	Muy bueno	Bueno
ES059MAR002780	Río Ibaizabal I	Muy bueno	Bueno
ES064MAR002820	Río Maguna	Muy bueno	Bueno
ES066MAR002800	Río Indusi	Muy bueno	Bueno
ES073MAR002890	Río Herrerías	Muy bueno	Bueno
ES073MAR002900	Río Cadagua II	Muy bueno	Bueno
ES073MAR002910	Río Cadagua III	Muy bueno	Bueno
ES001MAR002320	Río Olavidea	Muy bueno	Bueno
ES002MAR002360	Río Artesiaga	Muy bueno	Bueno
ES002MAR002380	Río Bidasoa II	Muy bueno	Bueno
ES005MAR002390	Río Ezcurra y Espelura	Muy bueno	Bueno
ES010MAR002420	Río Bidasoa III	Muy bueno	Bueno
ES010MAR002430	Río Endara	Muy bueno	Bueno
ES017MAR002450	Río Añarbe	Muy bueno	Bueno
ES018MAR002470	Río Urumea III	Muy bueno	Bueno
ES018MAR002491	Río Urumea II	Muy bueno	Bueno
ES018MAR002492	Río Urumea I	Muy bueno	Bueno
ES020MAR002502	Río Oria II	Muy bueno	Bueno
ES020MAR002510	Río Oria III	Muy bueno	Bueno
ES020MAR002520	Río Estanda	Muy bueno	Bueno
ES020MAR002540	Río Agunza II	Muy bueno	Bueno
ES026MAR002610	Río Berastegui	Muy bueno	Bueno
ES028MAR002662	Río Oria VI	Muy bueno	Bueno
ES026MAR002680	Río Asteasu II	Muy bueno	Bueno

- Cambios en los indicadores de sustancias preferentes:

MASA DE AGUA		BPH CONSULTA PÚBLICA	SEGUIMIENTO
Código	Nombre		
ES065MAR002810	Río Ibaizabal II	No alcanza el bueno (Zn)	Bueno
ES028MAR002661	Río Oria V	No alcanza el bueno (Se)	Bueno
ES073MAR002920	Río Cadagua IV	No alcanza el bueno (Se)	Bueno

- Cambios en el estado ecológico:

MASA DE AGUA		BPH CONSULTA PÚBLICA	SEGUIMIENTO
Código	Nombre		
ES052MAR002690	Río Nervión I	Deficiente por Macroinvertebrados	Deficiente por Macroinvertebrados, DBO_5, DQOd
ES068MAR002841	Río Nervión II	Malo por Macroinvertebrados, COND-20, DBO_5, Selenio	Malo por Macroinvertebrados, COND-20, DBO_5, NH_4, DQOd, Selenio
ES067MAR002830	Río Amorebieta-Arechavalagane	Deficiente por Macroinvertebrados	Deficiente por Macroinvertebrados, DQOd
ES068MAR002842	Río Ibaizabal III	Moderado por Macroinvertebrados	Moderado por Macroinvertebrados, DQOd
ES052MAR002710	Río Izorio	Moderado por DBO_5, Ptot, NH_4	Moderado a Juicio de experto, DBO_5, Ptot, NH_4, DQOd
ES065MAR002810	Río Ibaizabal II	Deficiente por Macroinvertebrados, Ptot,	Deficiente por Macroinvertebrados, Ptot, DBO_5

MASA DE AGUA		BPH CONSULTA PÚBLICA	SEGUIMIENTO
Código	Nombre		
		DBO_5, Zinc	
ES073MAR002920	Río Cadagua IV	Moderado a juicio de experto, COND-20, Selenio	Moderado a juicio de experto, COND-20
ES002MAR002350	Río Bearzun	Muy bueno	Bueno
ES002MAR002380	Río Bidasoa II	Muy bueno	Bueno
ES020MAR002570	Río Zaldivia	Moderado por Juicio de experto, NH_4, DBO_5	Moderado por Juicio de experto, NH_4, DBO_5, DQOd
ES021MAR002582	Río Amavirgina II	Moderado por Macroinvertebrados	Moderado por Macroinvertebrados, NO_3, DQOd
ES023MAR002591	Río Araxes II	Moderado por Macroinvertebrados, DBO_5	Moderado por Macroinvertebrados, DBO_5, DQOd
ES028MAR002661	Río Oria V	Moderado a juicio de experto y selenio	Moderado por DBO_5, DQOd
ES027MAR002620	Río Leizarán II	Moderado por Macroinvertebrados	Bueno

- Cambios en el estado químico:

MASA DE AGUA		BPH CONSULTA PÚBLICA	SEGUIMIENTO
Código	Nombre		
ES052MAR002690	Río Nervión I	No alcanza el bueno por plomo	Bueno

- Cambios en el estado total:

MASA DE AGUA		BPH CONSULTA PÚBLICA	SEGUIMIENTO
Código	Nombre		
ES027MAR002620	Río Leizarán II	No alcanza el bueno	Bueno

Modificación 41.

Se ha cambiado la leyenda de colores al representar el estado químico de las masas de agua superficiales en tablas y mapas de verde/rojo a azul/rojo en las figuras correspondientes.

6.2.8.2. Masas de agua subterráneas

Modificación 42.

En la leyenda de las figuras 9, 10, 11, 16, 17 y 18 se ha sustituido el término "no alcanza el bueno" por "malo", para adecuar la clasificación del estado químico a lo establecido por la IPH. Además se han restituido los códigos de las masas por sus nombres.

Modificación 43.

Se han realizado los siguientes cambios en el *Apartado 8.2.2 Estado químico de las masas de agua subterráneas*:

- En el *Apartado 8.2.2.3 Análisis individual de la masa de agua subterránea 013.013 Beasain*, se modificó la redacción en cuanto al sulfato y hierro, diciendo que tienen valores altos pero que para ellos no se han determinado valores umbral. Asimismo, en la tabla 16 se eliminaron los datos de sulfato y hierro y se marcaron en gris dos celdas que antes estaban por debajo del umbral del arsénico y que al ser de 80 µg/l los superan.

- En el *Apartado 8.2.2.5 Resultados*, se eliminaron el texto y las figuras referidas a sulfatos y hierro.
- Se simplificó el *Apartado 8.2.2.6 Tendencias significativas y sostenidas al aumento* ya que se volvía a explicar la metodología utilizada para analizar las tendencias al aumento, casi con las mismas palabras que en el Capítulo 6. Por ello, se ha dejado un breve párrafo de introducción y se incluyen los datos obtenidos. Además, en la figura 13 se modifica el valor umbral del arsénico (80 µg/l).
- Se modificó el *Apéndice 8.8 Análisis químicos de las masa de agua subterránea* de la siguiente forma: se mantienen únicamente las sustancias para las que la DAS establece normas de calidad ambiental y las sustancias del Anexo II. Parte B de la DAS. Se incluyen los valores umbrales identificados a juicio experto. En aquellas masas que no fueron analizadas en dicho estudio y para el cloruro, amonio y sulfato, se hace referencia a los valores del RD 140/2003.

6.2.8.3. Zonas protegidas

Modificación 44.

Se diagnosticó el estado de las masas protegidas de abastecimiento a partir de su unión con el programa de control de prepotables y con los datos del último informe oficial disponible enviado a Europa sobre el cumplimiento de la Directiva de Prepotables (periodo 2005-2007). En las masas protegidas heterogéneas en cuanto a la evaluación de estado se realizó un análisis específico en coordinación con Comisaría de aguas. En consecuencia, se incorporaron mejoras en la calidad de la información contenida en el *Apartado 8.3.1 Zonas de captación destinadas a la producción de agua para consumo humano*. Se actualizó el número de captaciones con control de prepotables.

6.2.9. Capítulo 9. Análisis económico del uso del agua

Modificación 45.

A lo largo de todo el documento se han corregido algunas erratas de texto.

Modificación 46.

Se han modificado varios párrafos del *Apartado 9.1 Introducción* para simplificar la lectura.

Modificación 47.

En el *Apartado 9.3. Organismos que prestan los servicios del agua,* tabla 1: en la columna de los Instrumentos de recuperación de costes de los servicios de agua urbanos, se ha sustituido el canon o tasa de saneamiento por la tarifa de depuración.

Modificación 48.

Dado que el programa de medidas se ha visto sometido a un proceso de adaptación a las disponibilidades presupuestarias actuales desde la publicación del Borrador del Plan, en el *Apartado 9.8.1. Costes ambientales* se modifica la tabla 27, con los costes de las medidas previstas para el cumplimiento de los objetivos ambientales según las correspondientes actualizaciones del programa de medidas.

6.2.10. Capítulo 10. Planes y programas relacionados

A lo largo de todo el capítulo se han corregido algunas erratas de texto detectadas.

6.2.11. Capítulo 11. Planes dependientes: sequías e inundaciones

Este capítulo se mantiene inalterado.

6.2.12. Capítulo 12. Programas de medidas

Debido a las severas limitaciones presupuestarias que afrontan las Administraciones Públicas de España, con fecha de 21 de Julio de 2011, la Dirección General de Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino envía a las Oficinas de Planificación de las Confederaciones Hidrográficas las "Instrucciones para adecuar los Programas de Medidas de los Planes Hidrológicos a la situación presupuestaria real".

De oficio, y según los términos de dicho texto, las Oficinas de Planificación Hidrológica de las Cuencas intercomunitarias deben proceder a la reconsideración de las inversiones previstas en la versión presente del Programa de Medidas en los casos en los que le corresponda y a la realización las oportunas consultas.

Entre los meses de septiembre y octubre de 2011 se procedió a la elaboración de una serie de documentos de consulta para los diferentes organismos que participan en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, con el fin de proceder a su adecuación conforme a futuras limitaciones presupuestarias.

En la misma línea de los trabajos anteriores, con fecha de 11 de Abril de 2012 la Subdirección General de Planificación y Uso Sostenible del Agua del MAGRAMA, solicitó la elaboración de un **Informe relativo a la situación actual de los trabajos correspondientes a la implementación de los Programas de Medidas**.

En la reunión de Oficinas de Planificación de 18 de abril de 2012, se reciben instrucciones con el fin de limitar las inversiones previstas en el plan de cuenca en el periodo 2009-2015, en concreto, "*no se deben contemplar inversiones que no se hayan licitado ya o que no cuenten con presupuesto real que asegure la ejecución de la medida*".

Con dicha premisa se procedió a integrar la información aportada por los diferentes agentes implicados en la adecuación del Programa de Medidas, contactando de nuevo con algunos de ellos cuando se ha estimado necesario y actualizando la información disponible hasta la fecha.

Las principales modificaciones son:

Modificación 49.

Se ha modificado el periodo del Programa de Medidas al 2009-2015, eliminando las inversiones realizadas en 2008 hasta ahora contempladas.

Modificación 50.

Traslado al siguiente ciclo de planificación (2016-2021) de todas aquellas actuaciones cuya realización no está asegurada antes de 2015 (ausencia de financiación asegurada en el periodo 2009-2015 o desconocimiento del agente financiador).

Modificación 51.

Como consecuencia de las modificaciones anteriores, se han actualizado todas las tablas y figuras con referencias a datos económicos del programa de actuaciones

Modificación 52.

Para facilitar la presentación y la comprensión de la información, las actuaciones que componen el Programa de Medidas de la Demarcación, se recogieron y describen atendiendo a tres criterios de agrupación: Esquema de Temas Importantes, Texto refundido de la Ley de Aguas y los informes de la Comisión Europea. En consecuencia, se incluyen dos nuevos apartados:

- *Apartado 12.7. Adecuación del Programa de Medidas a los requerimientos del texto refundido de la Ley de aguas*: Se introduce este nuevo apartado desarrollando el proceso de adecuación del programa a cada uno de los apartado del artículo 42.1 g del TRLA
- *Apartado 12.8. Adecuación del Programa de Medidas a los informes a la comisión europea*: Se introduce este nuevo apartado desarrollando el proceso de adecuación del programa a los requerimientos de los informes a la comisión.

De acuerdo con las modificaciones anteriores, se redacta de nuevo el *Apartado 12.4 Presentación de resultados.*

Modificación 53.

Por otro lado, a lo largo de todo el documento se han corregido algunas erratas de texto detectadas y otras modificaciones que se comentan a continuación:

- El *Apartado 12.7. Resumen del Programa de Medidas* se convierte en el *Apartado 12.9. Resumen del Programa de Medidas.*
- El *Apartado 12.7.1. General* se convierte en el *Apartado 12.9.1. General.*
- El *Apartado 12.7.2. Efecto del Programa de Medidas* se convierte en el *Apartado 12.9.2. Efecto del Programa de Medidas.*
- El *Apartado 12.7.3. Costes del Programa de Medidas* se convierte en el *Apartado 12.9.3. Costes del Programa de Medidas.*
- El *Apartado 12.7.4. Financiación del Programa de Medidas* se convierte en el *Apartado 12.9.4. Financiación del Programa de Medidas.*
- *Apartado12.7.4. Financiación del Programa de Medidas*: se modificó el texto completo del apartado con el fin de aclarar que el "agente financiador" reflejado se refiere a la administración que financia en primera instancia las actuaciones, ya que no es función del Plan Hidrológico establecer los flujos de capital que se producen a lo largo de todo el proceso de pago de las medidas.

6.2.13. Capítulo 13. Participación pública

Modificación 54.

La Agencia Vasca del Agua remitió la documentación sobre su proceso de participación pública referente a la elaboración del PH, por ello, se modifica el *Apartado 13.4.3.2.3 Reuniones de las Comunidades Autónomas*, adaptando el texto a la situación actual.

6.2.14. Capítulo 14. Seguimiento del plan de cuenca

Este capítulo se mantiene inalterado.

6.2.15. Capítulo 15. Listado de autoridades competentes

Conforme a lo descrito anteriormente en las modificaciones normativas sobre la aplicación de los RD 1626/2011 y RD 1627/2011, este capítulo ha sido modificado incorporando la documentación relativa al Consejo del agua de la Demarcación así como al Comité de Autoridades Competentes.

6.3. ANEJOS

6.3.1. Anejo I. Masas de agua muy modificadas y artificiales

Modificación 1.

Se ha modificado la naturaleza de las masas de agua Río Urumea I, Río Urumea III, Río Leizarán II, Río Oria V y Río Maguna, que pasa de muy modificada a natural. Esto se debe a que existen indicios de que cumplan con el buen estado en el escenario del Plan y por tanto, tras realizar la verificación de la identificación preliminar según el apartado 2.2.2.1.1.2 de la IPH, las cinco masas se consideran naturales.

Como consecuencia de lo anterior se han modificado los A*partados 4.2 Verificación de la identificación preliminar* y *4.3 Designación definitiva*, en concreto las tablas 5, 7, 8 y 10; las figuras 5 y 6; las fichas relativas a las cinco masas y los párrafos descriptivos donde corresponda.

Modificación 2.

Se han actualizado los umbrales de los indicadores fisicoquímicos generales en las fichas por coordinación con la Administración Vasca según se explica en el Capítulo 6.

6.3.2. Anejo II. Inventario de recursos hídricos

Modificación 3.

Se han modificado las tablas de las series hidrológicas de los sistemas de explotación, contenidas en los puntos *4.3.1.1. Series anuales* y *4.3.1.2. Series mensuales*, para adecuarlas a los cambios que ha sufrido la delimitación de la demarcación a lo largo del proceso de planificación.

Modificación 4.

Se ha cambiado la redacción del *Apartado 4.4 Características Básicas de Calidad de las Aguas en Condiciones Naturales* ampliando la información sobre las características básicas de las aguas de la Demarcación, introduciendo un mayor número de puntos de muestreo y un número de parámetros descriptivos que definan las características naturales del agua en la demarcación y quitando todos los puntos muestreados que tengan impactos.

El enfoque a seguir es analizar la brecha de pH y Conductividad entre la media + IC 95% del histórico disponible de datos y el umbral bueno/moderado de estas sustancias en el Plan. A continuación con el dato de la brecha y el apoyo de la Comisaría de Aguas de la CHC se eliminan del análisis las estaciones impactadas y por último se realiza un análisis estadístico del histórico de datos disponible de los siguientes parámetros para obtener una serie de conclusiones de caracterización básica de calidad de las aguas de la demarcación:

- pH
- Conductividad
- Alcalinidad
- Dureza
- Nitratos
- Calcio
- Magnesio
- Bicarbonato
- Carbonato
- Sulfatos
- Hidróxidos
- Cloruros

Modificación 5.

En el A*partado 5.2 Recursos hídricos externos* se ha incluido el trasvase de Deba, que está destinado a reforzar el abastecimiento de la zona de Ermua y representa un volumen de 3,15 hm^3/año.

6.3.3. Anejo III. Usos y demandas de agua

Modificación 6.

Se ha revisaso la redacción de la introducción del *Apartado 3.1 Actividades socioeconómicas.*, para facilitar su lectura.

Modificación 7.

En el *Apartado 3.1.4.4.1. Aprovechamientos hidroeléctricos* se ha incluido una referencia a la Central Hidroeléctrica de Barázar. Esta central, aunque está ubicada dentro del ámbito del sistema Nervión, turbina las aguas procedentes del sistema Zadorra de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Organismo con el que tienen la concesión de captación.

Modificación 8.

Se ha revisado la redacción y el contenido del *Apartado 3.1.5. Otros usos* para actualizar los cambios de los campos de golf e incluir otros usos recreativos. En el *Apartado 3.2.5.2. Usos recreativos- Campos de golf* se han incorporado las correcciones relacionadas con la inclusión de dos campos de golf. En el *Apartado 3.1.5.3 Deportes acuáticos y pesca deportiva* se ha añadido un plano con los usos recreativos para la navegación.

Modificación 9.

En el *Apartado 4.5. Demandas otros usos* se ha revisado la redacción de los *Apartados 4.5.1. Acuicultura* y *4.5.2. Usos recreativos: Campos de Golf*.

Modificación 10.

En el *Apartado 4.6. Resumen de demandas* se han actualizado las tablas y gráficos, una vez se hayan revisado las demandas. En el *Apartado 4.6.1 Demanda total por origen* se ha revisado la tabla 121 Aportaciones de recursos externos (trasvases) con el fin de incluir el trasvase de Deba, que está destinado a reforzar el abastecimiento de la zona de Ermua y representa un volumen de 3,15 hm^3/año.

Modificación 11.

En este anejo se han corregido también los errores detectados en las figuras siguientes:

- Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8: Hay zonas del territorio de la demarcación que no tienen información. Se procede a crear un nuevo campo denominado "sin datos".
- Figuras 6 y 7: Se producen solapes entre los rangos de la leyenda.

Dado que este anejo tiene asociado el *Apéndice III.6: Parque hidroeléctrico*, como consecuencia de los comentarios anteriores se ve afectado. De este modo, la Central Hidroeléctrica de Barázar, aunque está ubicada dentro del ámbito del sistema Nervión, turbina las aguas procedentes del sistema Zadorra de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Organismo responsable de la concesión de captación. Se explicará esta particularidad con un comentario en la ficha de la central hidroeléctrica, señalando que la toma está ubicada en el Embalse de Urrunaga del sistema Zadorra, mientras que el retorno se produce en el río Barázar, cabecera del río Arratia.

6.3.4. Anejo IV. Registro de zonas protegidas

6.3.4.1. Codificación de zonas protegidas

Se ha cambiado la redacción del apartado 3.1 y la tabla 2 por el hecho que la codificación en zonas protegidas en ocasiones coincide con la codificación oficial y en ocasiones se crea un código nuevo de la demarcación.

6.3.4.2. Zonas de abastecimiento actual y futuro

Modificación 12.

Se han corregido las masas de abastecimiento actual y futuro así como las captaciones unidas a las mismas. En concreto se añade el embalse de Añarbe y se incluye la relación de las zonas de abastecimiento futuro con masas.

Estos cambios repercuten en el apéndice con el detalle de las captaciones, en los mapas, y en los conteos de volumen y número de captaciones superficiales y subterráneas.

Modificación 13.

Se ha añadido un párrafo para indicar hay un vacío legal que impide ampliar el registro de zonas de uso recreativo que en la actualidad se alimenta sólo de las zonas de baño.

6.3.4.3. Zonas de interés económico. Peces

Modificación 14.

Se ha corregido en el primer párrafo del *Epígrafe 3.4.1 Zonas de protección de peces* sustituyendo "La protección de las aguas de cría de peces que pueden ser destinadas al

consumo humano" por "La protección o mejora de las aguas para ser aptas para la vida de los peces".

Modificación 15.

Se ha corregido la asignación zona protegida a masa en los siguientes casos: la zona protegida 1603100017 se asigna a la masa ES010MAR002420 y la zona protegida 1603100018 a la masa ES002MAR002380

6.3.4.4. Zonas sensibles

Modificación 16.

Se ha corregido el código de la zona protegida para que coincida con el oficial de zonas sensibles y se incluye en la tabla la longitud en vez de la superficie.

6.3.4.5. Zonas de protección de hábitat o especies

Modificación 17.

Se ha detectado un solape entre la masa de agua subterránea Macizos Paleozoicos Cinco Villas-Quinto Real, 013.010 y el LIC Artikutza, ES2200010.

Modificación 18.

Se han cambiado los códigos de zona protegida de LIC y ZEPAS por los códigos oficiales en las tablas correspondientes.

Modificación 19.

Corrección en el número de LIC, ZEPAS y la superficie (se considera la superficie dentro de la demarcación , no la oficial) que ocupan tanto en el texto como en los mapas (se actualiza el contorno de LIC y ZEPAS con las capas oficiales).

Modificación 20.

Se ha homogenizado el criterio para seleccionar las ZEPAS dependientes del medio hídrico respecto a la metodología de los LIC incluyendo las especies del Anejo I de la Directiva de Aves por las que se seleccionan las ZEPAS y quitando la clasificación de dependencia "media, alta o baja".

Modificación 21.

Se han añadido LIC por alegaciones (solapes con masas de cabecera lo que también afecta a los caudales ecológicos de estas masas). En la siguiente tabla se muestran los nuevos LIC a incorporar como dependientes del medio hídrico, el solape con masas, los hábitat y/o especies por los que se declaran y la superficie:

CÓDIGO DEL LIC	NOMBRE DEL LIC	CÓDIGO DE LA MASA DE AGUA	CÓDIGO DEL HÁBITAT	CÓDIGO DE LA ESPECIE	SUPERFICIE (km^2)
ES4120028	Monte Santiago		6420, 6430, 7220, 7230, 8310, 92A0	1126, 1220	12.78
ES4120049	Bosques del Valle de Mena	ES069MAR002870 (Río Ordunte I)	6410, 6430, 7110, 7140, 7150, 91E0	1092, 1125, 1194, 1301, 1426	64.18
		ES069MAR002880 (río Cadagua I)			

CÓDIGO DEL LIC	NOMBRE DEL LIC	CÓDIGO DE LA MASA DE AGUA	CÓDIGO DEL HÁBITAT	CÓDIGO DE LA ESPECIE	SUPERFICIE (km^2)
ES2110004	Arkamo-Gibijo-Arrastaria	ES052MAR002690 (Río Nervión I)	3150, 3240, 6420, 7220, 91E0, 92A0		36.82
ES2120008	Ernio-Gatzume	ES026MAR002670 (Asteasu I)	91E0	1126	14.03
ES2130009	Urkiola	ES059MAR002750 (Río Elorrio II)	3110, 7140, 91E0	1092, 1126	45.57
ES2200017	Señorío de Bértiz		91E0 1163, 1301, 1356		20.52
ES2200019	Monte Alduide		7140, 8310, 91E0	1301	36.21

6.3.4.6. Reservas naturales fluviales

Modificación 22.

Se ha corregido el solape/trazado de la Reserva Natural Fluvial Altube (zona protegida 1609100018) adaptándola al de la masa de agua con la que solapa. Esto repercute también en el apéndice IV.5.

Modificación 23.

Se ha incluido un párrafo en el que se establece que se permiten los usos lúdicos en las reservas naturales fluviales, siempre que no comprometan el estado muy bueno de la masa de agua.

6.3.4.7. Zonas minerotermales

Modificación 24.

Se ha cambiado la figura de esta apartado colocando las masas de agua subterráneas de fondo en vez de las masas río.

6.3.4.8. Zonas de protección especial

Modificación 25.

La Hoya de San Cebutre (1610100119, se mantiene como zona protegida, aunque no se localizan en un espacio de la Red Natura 2000 ni está incluida en el Inventario de Zonas Húmedas de Castilla y León.

Modificación 26.

Se ha cambiado la estructura del documento pasando a considerar las zonas húmedas de protección especial como otras zonas húmedas dentro del apartado general de zonas húmedas que ya incluía las RAMSAR y las del Inventario Nacional de Zonas Húmedas.

Modificación 27.

Los Juncales de Villabona (1610100304) han sido eliminados en la modificación del Plan Territorial Sectorial del País Vasco relativo a Zonas Húmedas aprobada en 2011, por lo que se han eliminado del listado de zonas protegidas.

Modificación 28.

Las Turberas de Verdeoespesoa (1610100306) han cambiado de denominación en la modificación del Plan Territorial Sectorial del País Vasco relativo a Zonas Húmedas aprobada en 2011, ahora se denominan Trampales de Orozko.

Modificación 29.

El total de zonas húmedas en la Demarcación del Cantábrico Oriental es de 22. De estas 5 proceden del Inventario Nacional de Zonas Húmedas, 16 han sido propuestas por el País Vasco y 1 proviene de la selección de zonas húmedas para los estudios de caracterización hidrológica.

6.3.5. Anejo V. Caudales ecológicos

Modificación 30.

En el *Apartado 3.1 Estudios realizados por las comunidades autónomas*, se ha introducido un epígrafe nuevo titulado *3.1.3 Comunidad Autónoma de Castilla y León*, con una descripción de los estudios desarrollados por la Junta de Castilla y León en materia de caudales ecológicos, en concreto en la provincia de Burgos.

Modificación 31.

En el *Apartado 4. Fases en el establecimiento del régimen de caudales ecológicos* se ha modificado el párrafo b para adecuarlo a la normativa actual: se sustituye "b) Proceso de negociación o concertación. Esta fase podría realizarse en aquellos casos que condicionen significativamente las asignaciones y reservas del plan hidrológico y está definido por diferentes niveles de acción (información, consulta pública, participación activa)" por "b) Proceso de negociación o concertación. Esta fase se realizará posteriormente a la aprobación del Plan y antes de la comunicación a los concesionarios, al no afectar significativamente las reservas y asignaciones del Plan. Alcanzará como mínimo, tal y como indica la IPH, los niveles de información y consulta pública".

Modificación 32.

Se ha modificado el listado de masas de agua que solapan con espacios de la Red Natura 2000 dependientes del medio hídrico, añadiéndose las siguientes:

Masas que se añaden al listado de Red Natura
Ordunte I
Cadagua I
Nervión I
Asteasu I
Elorrio II

Como consecuencia de lo anterior, se ha modificado el *Apartado 6.2.2.5 Régimen de caudales mínimos durante situaciones de emergencia por sequía declarada* en los siguientes aspectos:

- Se ha sustituido el párrafo "En total, 30 de las 69 masas de agua río (incluyendo embalses) pertenecen a la Red Natura, lo que supone un 43,5% del total."
- La tabla 4 y la figura 8 se han adaptado a los cambios citados. Además, en la tabla 4 la masa Río Endara pertenece al LIC Aiako Harria, y no al LIC Bidasoa (tabla 4). Por otra parte en la figura 8 se han modificado también los colores, ya que los colores de

las masas de agua de la leyenda no se corresponden con los de la figura y para los espacios de la Red Natura, en la figura se ven 2 verdes, mientras que en la leyenda sólo hay uno).

Modificación 33.

Se ha actualizado la figura 10 del *Apartado 6.3 Requerimientos hídricos de lagos y zonas húmedas*, donde se han quitado los lagos que no tienen etiquetas porque no se utilizaron para los requerimientos hídricos.

Modificación 34.

En el *Apartado 7.1.1 Resultados de los estudios de determinación del régimen de caudales mínimos*, se ha cambiado el título de la tabla 8, para poder explicar que esta parte corresponde a los resultados en los puntos de estudio y no a los finales de masa. Además, se han modificado los caudales ecológicos de las masas de agua Bidasoa I, Oria V, Urumea II y Endara, para que coincida con las conclusiones del apéndice

Modificación 35.

En el *Apartado 7.1.2 Régimen de caudales durante situaciones de emergencia por sequía declarada*, se han modificado los caudales ecológicos de las masas de agua de la tabla 12 que se muestran a continuación, al considerarse que pertenecen a Red Natura. Por tanto, para estas masas en las situaciones de sequía declarada se mantienen los regímenes de caudales ecológicos estimados para la situación de normalidad.

Masas que se añaden al listado de Red Natura
Ordunte I
Cadagua I
Nervión I
Asteasu I
Elorrio II

6.3.6. Anejo VI. Sistemas de explotación y balances

Modificación 36.

En el *Apartado 4.3. Sistemas de explotación* se ha revisado el orden de prioridad de usos para que coincida con el criterio establecido en la Normativa. En el *Apartado 4.3* se recoge el orden de prioridades de la siguiente forma:

"3 Usos industriales para producción de energía eléctrica

4 Otros usos industriales"

Mientras que en el *Artículo 16 de la Normativa* figura lo siguiente:

"3 Usos industriales incluidos los energéticos"

Modificación 37.

En el *Apartado 5.1 Sistema de explotación Nervión* y más concretamente en el punto 5.1.2.3 Recursos hídricos de otras procedencias se ha indicado el volumen anual de los recursos transferidos desde el río Mañaria al río Ermua (cuenca del río Deba), destinado a abastecer una población de 100.000 habitantes, estimado en 100 l/s.

En este mismo apartado se ha revisado también el origen del volumen estimado del trasvase del Zadorra, ya que no procede del análisis de los datos de aforos del embalse, sino que el dato se ha tomado del volumen anual promedio trasvasado del Consorcio Bilbao-Bizkaia "Plan Especial de Emergencia ante situaciones de Sequía en el ámbito de Gestión del Consorcio de aguas Bilbao-Bizkaia" (Junio, 2009).

Modificación 38.

En el *Apartado 5.1.2.7 Conducciones de transporte* en la parte correspondiente donde se describe el embalse de Undurraga y la ETAP de Venta Alta, se ha procedido a revisar el texto incluido con el fin de verificar los nombres de los embalses del sistema Zadorra y evitar repeticiones.

Modificación 39.

Apéndice VI.3: Esquemas de los sistemas de explotación

En el esquema del sistema Nervión se han revisado los datos de volúmenes trasvasados y la toma de Duranguesado en la masa de agua del Arroyo de Aquelcorta. En este esquema se incluirá una entrada al Embalse Maroño procedente del afluente del río San Miguel, afluente del río Herrerías.

6.3.7. Anejo VII. Inventario de presiones

Modificación 40.

Se han tenido en cuenta los cambios en el estado de las masas especificados en el Capítulo 8.

Modificación 41.

Se han considerado los cambios en las tomas de abastecimiento superficial y subterráneo y su relación con el control de prepotables y con la asignación a masas. En concreto los apartados afectados son: el 3.2.2.3. *Extracción de agua en aguas superficiales* y 3.2.3.3. *Extracción de agua en masas de agua subterráneas.*

6.3.8. Anejo VIII. Objetivos medioambientales y exenciones

Modificación 42.

Se ha modificado la figura y tablas correspondientes del apartado 4 Resumen de Objetivos medioambientales de las masas de agua para adaptar su contenido a los siguientes cambios:

- Se han cambiado los umbrales de los indicadores Fisicoquímicos generales en ríos: ya no se distingue entre bueno y muy bueno, ni varían por tipología.
- Se ha procedido a asignar prórroga de plazo a 2021 a las siguientes masas: Río Amavirgina II, Río Izorio, Arroyo de Aquelcorta y Río Cadagua I.
- Se ha eliminado la prórroga de plazo a 2021 para las masas Río Leizarán II y Río Oria V.
- El objetivo medioambiental de las masas Río Bearzun y Río Bidasoa II pasa del "estado ecológico muy bueno y estado químico bueno al 2015" al "estado ecológico bueno y estado químico bueno al 2015".
- Como se ha explicado anteriormente, las masas Urumea I, Urumea III, Leizarán II, Maguna y Oria V pasan de muy modificadas a naturales, por lo que en estos casos se ha sustituido el objetivo del "buen potencial" por el de "buen estado".

Modificación 43.

Se rehace la tabla de exenciones por prórroga de plazo (que incluye los elementos que se excepcionan, presiones que las causan, el plazo y el motivo de la exención y el valor en el escenario actual, intermedio y en el escenario objetivo), conforme a los cambios especificados anteriormente (se excepcionan los incumplimientos y en ocasiones es a juicio experto) y con los cambios relacionados con la evaluación del estado que se detallan a continuación:

- Río Nervión II: Añadir los valores de incumplimiento de NH_4 y DQO.
- Río Zaldivia, Río Amorebieta-Arechavalagane, Río Ibaizabal III, Río Araxes II: Añadir el valor de incumplimiento de DQO.
- Río Nervión I: Añadir los valores de incumplimiento de DBO_5 y DQO y eliminar el del plomo.
- Río Cadagua IV: Eliminar el valor de incumplimiento del selenio.
- Río Ibaizabal II: Eliminar el valor de incumplimiento del zinc.
- Río Amavirgina II: Añadir los valores de incumplimiento de NO_3, DBO_5, macroinvertebrados y DQO.
- Río Izorio: Añadir los valores de incumplimiento de DQO.

Modificación 44.

Corrección general de cambios en el solape de las masas de agua con zonas protegidas y de otras modificaciones realizadas en el Anejo IV de zonas protegidas.

Modificación 45.

Se ha verificador que o se nombran las papeleras de Aralar, Sarrio, cluster y Munksjo como las únicas responsables del mal estado y de la prórroga de plazo de las masas correspondientes y dejarlas en la tabla de exenciones como una presión tipo más general y sin olvidar al resto de presiones.

Modificación 46.

Se ha comprobado en la tabla 13 del *Apartado 4.2 Objetivos medioambientales de las masas de agua subterráneas*, los solapes de las masas de agua subterráneas con zonas protegidas para que coincidan con las modificaciones realizadas en el Anejo IV.

Modificación 47.

Se ha incluido la siguiente tabla de valores umbral y normas de calidad en la definición de objetivos de masas de agua subterráneas y se corrige la redacción en base a esta modificación.

MASAS DE AGUA	NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL		VALORES UMBRALES PARA DETERMINADOS CONTAMINANTES						
	Nitratos (mg/l)	Plaguici(*) (mg/l)	NH_4 (mg/l)	Hg (µg/l)	Pb (µg/l)	Cd (µg/l)	As (µg/l)	TCE (µg/l)	PCE (µg/l)
ETXANO	50	0,1	0.5	0.5	10	5	10	5	5
OIZ									

MASAS DE AGUA	NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL		VALORES UMBRALES PARA DETERMINADOS CONTAMINANTES						
	Nitratos (mg/l)	Plaguici(*) (mg/l)	NH_4 (mg/l)	Hg (µg/l)	Pb (µg/l)	Cd (µg/l)	As (µg/l)	TCE (µg/l)	PCE (µg/l)
BALMASEDA-ELORRIO		0,5 (total)							
ARAMOTZ									
ITXINA									
MENA-ORDUÑA									
SALVADA									
ANDOAIN									
TOLOSA					50				
MACIZOS PALEOZÓICOS CINCO VILLAS-QUINTO REAL									
ARAMA									
BASABURUA-ULZAMA					10				
BEASAIN							80		
ARALAR							10		
(*) Sustancias activas de los plaguicidas, incluidos metabolitos y los productos de la degradación y reacción.									

Modificación 48.

Se ha añadido el siguiente párrafo al final del *Apartado 5.7 Perímetros de Protección de aguas minerales y termales* (Pág. 113): "No obstante, hay que señalar que actualmente las Comunidades Autónomas están desarrollando los Planes de Gestión de los espacios Natura 2000, que definen, entre otros aspectos, los sistemas de valoración del estado de conservación de sus hábitats."

Modificación 49.

Se ha actualizado el número de exenciones por prórroga de plazo a 26.

Modificación 50.

Se ha reestructurado el apartado de zonas húmedas incluyendo las zonas húmedas de protección especial como otras zonas húmedas en el apartado de zonas húmedas

6.3.9. Anejo IX. Recuperación de costes de los servicios del agua

Modificación 51.

A lo largo de todo el documento se han corregido algunas erratas de texto.

Modificación 52.

Apartado 3.2. Organismos que prestan los servicios del agua: se ha modificado la tabla 2 para reflejar la participación de los organismos autonómicos.

Modificación 53.

Apartado 3.3. Instrumentos de recuperación de costes: se ha modificado la tabla 4, aplicando la base normativa de todos los servicios y los instrumentos de recuperación de costes de los servicios urbanos.

Modificación 54.

Apartado 3.3.2. Tarifa de abastecimiento: se ha modificado el texto explicativo.

Modificación 55.

Apartado 3.3.3. Tasa de alcantarillado: se ha cambiado el nombre (tarifa de alcantarillado) por homogeneizar con la tarifa de abastecimiento (y no tasa de abastecimiento) y se ha modificado parte del texto explicativo.

Modificación 56.

Apartado 3.3.4. Tarifa de depuración: se ha modificado parte del texto explicativo.

Modificación 57.

Apartado 5.1.1.3. Desagregación de costes por usos: figura 2 y tabla 26: se ha especificado que la demanda total es anual.

Modificación 58.

Apartado 7.1. Costes ambientales: se ha modificado la tabla 60 con el importe de las actualizaciones del programa de medidas.

Modificación 59.

Apartado 9. Previsión de la recuperación de costes: del mismo modo se ha actualizado la tabla 64 con las actualizaciones del programa de medidas.

6.3.10. Anejo X. Programa de medidas

Tal y como se comenta en el apartado 2.12 del presente documento, debido a las severas limitaciones presupuestarias que afrontan las administraciones públicas de España, se ha procedido a la adecuación del Programa de Medidas a las disponibilidades presupuestarias.

En el proceso de modificación de los apéndices X.5 Resumen del Programa de Medidas. Datos Generales y X.6 Resumen del Programa de Medidas. Financiación se tiene en cuenta, tanto la consulta realizada a cada organismo competente con motivo de la carta de la DGA, como las aportaciones recibidas en el proceso de consulta pública.

Modificación 60.

Como consecuencia de las modificaciones en el Programa de Medidas, se actualizan todas las tablas que resumen los costes de inversión, explotación y mantenimiento de las actuaciones asociadas a cada grupo del esquema de Temas Importantes y que se recogen en los apartados de "Presupuesto de las actuaciones" a lo largo del Anejo (apartados 5 a 8).

En el *Apartado 9. Resumen del Programa de Medidas* se actualizan las referencias en el texto y las tablas que resumen los costes de inversión, explotación y mantenimiento de las actuaciones:

En el *Apéndice X.5. Resumen del Programa de Medidas. Datos generales* y el *Apéndice X.6. Resumen del Programa de Medidas. Financiación* se actualizan los datos.

Modificación 61.

Para facilitar la presentación y la comprensión de la información, las actuaciones que componen el Programa de Medidas de la Demarcación, se recogen y describen atendiendo a tres criterios de agrupación: Esquema de Temas Importantes, Texto refundido de la Ley de Aguas y los informes de la Comisión Europea. En consecuencia, se incluyen tres nuevos apartados en el Anejo y un nuevo Apéndice:

- *Apartado 3.4. Instrumentos Normativos:* Puesto que se han incorporado al Programa de Medidas como actuaciones algunas disposiciones legales, se han considerado adecuado incluir un nuevo apartado desarrollando los motivos de tal incorporación.

- *Apartado 9. Adecuación del Programa de Medidas a los requerimientos del texto refundido de la Ley de aguas*: Se ha introducido este nuevo apartado desarrollando el proceso de adecuación del programa a cada uno de los apartado del artículo 42.1 g del TRLA

- *Apartado 10. Adecuación del Programa de Medidas a los informes a la comisión europea*: Se ha introducido este nuevo apartado desarrollando el proceso de adecuación del programa a los requerimientos de los informes a la comisión.

- *Anejo X.7. Información adicional para el Informe del Programa de Medidas a la Comisión Europea*: En este nuevo apéndice se han recogido los comentarios que se incluirán en el R2010 para cada unos de los grupos de Medidas Básicas y Otras Básicas: comentarios sobre las cuestiones más relevantes relacionadas con sus objetivos, requerimientos, sistemas de información y seguimiento.

De acuerdo con las modificaciones anteriores, se ha redactado de nuevo el *Apartado 3.7 "Presentación de resultados"*.

Modificación 62.

Finalmente, a lo largo de todo el documento se han corregido algunas erratas de texto detectadas y otras modificaciones que se comentan a continuación:

- *Apartado 3.2. Organismos que intervienen en la realización del programa de medidas*: actualización de los organismos recogidos

- *Apartado 3.3. Planes y programas considerados*: sustitución de las siglas del texto por el nombre completo al que se hace referencia en cada caso y se actualiza la información.

- *Apartado 6.3. Medidas dirigidas a la recuperación de los costes de los servicios del agua*: se ha modificado el texto explicativo.

- *Apartado 9.4. Financiación del Programa de Medidas*: se ha modificado el texto completo del apartado con el fin de aclarar que el "agente financiador" reflejado se refiere a la administración que financia en primera instancia las actuaciones, ya que no es función del Plan Hidrológico establecer los flujos de capital que se producen a lo largo de todo el proceso de pago de las medidas.

6.3.11. Anejo XI. Participación pública

Modificación 63.

Se ha corregido esta errata: en la tabla 10 del Anejo se dice que la segunda reunión del ETI en el ámbito territorial "País Vasco- Navarra" tuvo lugar en Irun. Sin embargo, se celebró en Hondarribia.

Modificación 64.

Se ha actualizado la referencia a la página web del CRANA que se indica en la página 34, sustituyendo "www.crana.org (apartado "Agua")" por "www.crana.org (apartado "Agua y ríos")".

Modificación 65.

La Agencia Vasca del Agua ha remitido la documentación sobre su proceso de participación pública referente a la elaboración del PH. Por ello, se ha actualizado el Anejo XI y su apéndice XI.5, incorporando la información relativa a dicho proceso. A su vez se ha realizado una revisión del formato de encabezados de los apéndices de este anejo para homogeneizar el formato.

Modificación 66.

Actualización del apartado 5.2.3 tras la CP del BPHC

Modificación 67.

Actualización del apartado 5.3.4 tras la CP del BPHC

Modificación 68.

Actualización del apartado 6.2 tras la CP del BPHC

Modificación 69.

En base a los resultados de la consulta pública del BPHC se ha editado este documento en el que se detallan los resultados y queda pendiente de incorporar las respuestas a las alegaciones recibidas.

6.4. NORMATIVA DEL PLAN HIDROLÓGICO

A continuación se describen los cambios que se han operado en la Normativa del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental tras el periodo de consulta pública al que ha sido sometido y su pormenorizado análisis por parte de la oficina de Planificación.

Se realizan algunas referencias al Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Las alegaciones a una cualquiera de las sendas normativas de las dos demarcaciones sobre las que tiene responsabilidad directa la Confederación Hidrográfica del Cantábrico han sido consideradas para su potencial aplicación a ambas normativas simultáneamente cuando ello se ha juzgado que supone una mejora del texto final.

Como cuestión de índole general se han sustituido las referencias al "Organismo de cuenca" por "Administración Hidráulica" ya que se considera una expresión más adecuada.

En la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, siguiendo los mandatos establecidos por el Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, y el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos, se ha procedido a establecer los mecanismos de coordinación entre la Administración General del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y la Comunidad Autónoma del País Vasco, que permitan la integración armónica de la Planificación Hidrológica, entre cuyos elementos destaca por su importancia la Normativa a la que se refiere este apartado.

6.4.1. Preámbulo

El preámbulo contenido en la redacción de la Normativa sometida a consulta pública fue redactado de manera preliminar y únicamente a modo indicativo, ya que su configuración final se deberá realizar posteriormente, como paso previo a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En el preámbulo se ha corregido la errata en la que se mencionaba que el Plan Hidrológico se sometió a consulta pública "a partir del día 30 de abril de 2011" ya que la fecha correcta es el 4 de mayo de 2011.

Por otra parte la referencia a la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica, se cita adecuadamente junto con su modificación posterior, en concreto la Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica.

6.4.2. Capítulo 1. Ámbito territorial, definición de masas de agua y registro de zonas protegidas

Artículo 1. Ámbito territorial

La eliminación de la referencia al "ámbito de competencias del Estado" que se realiza en el primer apartado se relaciona con la redacción de un texto normativo único para la Demarcación del Cantábrico Oriental, independientemente del ámbito en el que ejercen sus competencias las administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se añade un segundo apartado indicando los horizontes temporales del Plan Hidrológico, circunstancia que queda reflejada también en el título del artículo.

A continuación se destacan las modificaciones a establecer en este artículo, remarcadas sobre el texto original para mayor claridad.

> *Artículo 1. Ámbito territorial y horizontes temporales*
>
> *1. El ámbito territorial de la presente Normativa es el territorio de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, ~~en el ámbito de las competencias del Estado~~ definido por el Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas y el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.*
>
> *2. Los horizontes temporales, de acuerdo con el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica son: 2015 (Primer Horizonte), 2021 (Segundo Horizonte) y 2027 (Tercer Horizonte).*

Artículo 2. Identificación y delimitación de masas de agua superficial

Se corrigen algunas erratas en el Anejo 1 que han sido remarcadas en otros apartados de este documento.

Artículo 3. Identificación y delimitación de masas de agua subterránea

No se dan modificaciones a este artículo.

Artículo 4. Condiciones de referencia y límites entre clases de estado

El texto del artículo no sufre ninguna modificación sin embargo el Anejo 3, en el que se plasman las condiciones de referencia para las diferentes categorías y tipos de masas de agua superficial así como los límites entre el estado muy bueno con el bueno y entre el bueno con el moderado, incorpora algunos ajustes que han sido detallados en los apartados dedicados a esta materia en este mismo documento.

Artículo 5. Indicadores de estado químico de masas de agua subterránea

Se ha mejorado la redacción de este artículo como se muestra a continuación:

> *Artículo 5. Indicadores de estado químico de masas de agua subterránea*
>
> *Los valores umbral adoptados en el presente Plan Hidrológico respecto a los contaminantes a utilizar para la valoración del estado químico de las masas de agua subterráneas han sido calculados atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro ~~para los nitratos y plaguicidas~~. De acuerdo con el citado Real Decreto se han definido en cada una de las masas de agua valores umbrales para sustancias tales como amonio, mercurio, plomo, cadmio, arsénico, tricloroetileno y tetracloroetileno. Los valores umbral adoptados y las normas de calidad ambiental para nitratos y plaguicidas se encuentran recogidos en el Anejo 4.*

Artículo 6. Masas de aguas artificiales o muy modificadas

Las modificaciones de este artículo y del Anejo 5 con él relacionado, corresponden al mismo planteamiento ya expresado para el caso de las masas de agua superficiales y para las subterráneas.

Artículo 7. Registro de Zonas Protegidas

La modificación consiste en añadir la palabra "urbano" como precisión al abastecimiento descrito en la letra "a" del artículo y añadir el requerimiento específico de la Ley 1/2006 de Aguas del País Vasco que se muestra a continuación.

> *a) Masas de agua para abastecimiento urbano que proporcionen un volumen medio de, al menos, 10 metros cúbicos diarios o abastezcan a más de 50 personas. Los anejos 5.1 y 5.2 contienen, respectivamente, las masas de agua superficial y subterránea para abastecimiento urbano recogidas en el Registro de Zonas Protegidas. En el ámbito de la CAPV y con objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas a lo largo del primer horizonte del Plan se incluirán las captaciones que abastezcan a más de 10 habitantes, para su inclusión en la primera revisión de aquél.*

Se incluye la siguiente precisión en relación con las Zonas Húmedas.

> *j) Zonas Húmedas seleccionadas por estar ~~incluidas~~ propuestas para su inclusión en el Inventario Español de Zonas Húmedas de acuerdo con el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo o estar incluidas en la Lista del Convenio de Ramsar. La relación de Zonas Húmedas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas se recoge en el anejo ~~5~~6.12.*

Por último, las Zonas Húmedas de Interés, dentro de las Zonas de Protección Especial, pasan a denominarse "Zonas húmedas de protección especial".

6.4.3. Capítulo 2. Objetivos medioambientales

Artículo 8. Objetivos medioambientales

Este artículo únicamente remitía al Anejo 7 en el que se recogen los objetivos medioambientales para cada una de las masas de agua.

Se ha considerado adecuado añadir algunas aclaraciones adicionales e incluir una referencia a los requerimientos adicionales de las zonas protegidas.

El texto final propuesto es el siguiente:

> *Artículo 8. Objetivos medioambientales*
>
> *1. En el anejo 7 se recogen los objetivos medioambientales para cada una de las masas de agua identificadas en el ámbito del Plan y los plazos para su consecución. El presente Plan no prevé el establecimiento de objetivos medioambientales menos rigurosos.*
>
> *2. Los objetivos medioambientales para las zonas del Registro de Zonas Protegidas constituyen objetivos adicionales a los generales de las masas de agua con las cuales están relacionadas y aluden a los objetivos previstos en la legislación a través de la cual fueron declaradas dichas zonas y a los que establezcan los instrumentos para su protección, ordenación y/o gestión.*

Artículo 9. Deterioro temporal del estado de las masas de agua

La letra "c" de este artículo se modifica para incorporar algunas matizaciones adicionales, tal y como se muestra a continuación:

> c) *Se considerarán accidentes que no hayan podido preverse razonablemente, entre ellos, los vertidos accidentales ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos y de productos industriales, roturas accidentales de infraestructuras hidráulicas y de saneamiento, los incendios en industrias y los accidentes en el transporte. Asimismo se considerarán las circunstancias derivadas de incendios forestales.*

El resto del artículo permanece inalterado.

Artículo 10. Condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones

Se mantiene sin modificaciones.

6.4.4. Capítulo 3. Regímenes de caudales ecológicos

El capítulo 3 pasa a denominarse "Régimen de caudales ecológicos"

Artículo 11. Regímenes de caudales ecológicos

Este artículo contiene las disposiciones generales aplicables al régimen de caudales ecológicos.

En el segundo punto del artículo se han introducido varias modificaciones con la finalidad de:

- hacer referencia expresa al proceso de concertación mediante remisión a un nuevo artículo, incorporado al Capítulo 9 "Seguimiento y revisión del plan hidrológico", en el que se menciona la necesidad de realizar la concertación tras la notificación de los caudales ecológicos a los usuarios así como el procedimiento para facilitar la incorporación al Plan Hidrológico de las potenciales modificaciones del régimen con posterioridad a su aprobación sin necesidad de esperar a un nuevo Plan;

- aclarar la situación transitoria hasta que los caudales sean paulatinamente aplicados mediante los oportunos procesos de concertación y comunicación a los usuarios; y

- eliminar la rigidez excesiva que imponía la obligación de culminar las obras de adecuación que pudieran ser necesarias con un plazo máximo hasta 2015, y sustituirlo por un planteamiento que permite su adaptación a cada caso concreto en le marco de la concertación.

El artículo se modifica de la manera que se indica seguidamente:

Artículo 11. Cuestiones generales sobre el régimen ~~Regímenes~~ de caudales ecológicos

1. ~~Los regímenes~~ El régimen de caudales ecológicos fijados en la presente Normativa constituyen una restricción que debe ser respetada por todos los aprovechamientos de agua según lo recogido en el apartado 7 del artículo 59 del texto refundido de la Ley de Aguas, Real Decreto Legislativo 1/2010, de 20 de julio.

2. El cumplimiento del régimen de caudales ecológicos será directamente aplicado a todas las concesiones que se otorguen con posterioridad a la entrada en vigor de este plan hidrológico y a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 14. ~~Al resto de las concesiones le será de aplicación una vez se comunique a sus titulares el régimen de caudales ecológicos de acuerdo con el artículo 38 de esta Normativa. Se priorizarán las notificaciones a aquellos aprovechamientos que puedan presentar mayor incidencia en el cumplimiento de los objetivos ambientales. En su caso se establecerá un plazo máximo para la realización de las obras de adecuación que pudieran ser necesarias que no podrá exceder en ningún caso del año 2015.~~

3. La presente Normativa recoge los valores de los caudales mínimos ecológicos, los caudales máximos ecológicos y sus respectivas distribuciones temporales. El resto de componentes del régimen de caudales ecológicos se estudiará durante el periodo de vigencia del Plan Hidrológico.

Artículo 12. Caudales mínimos ecológicos

Este artículo ha tenido varias adaptaciones:

- se restringe la posibilidad de aplicar caudales mínimos ecológicos para la situación de emergencia por sequía declarada en aquellos casos en los que exista una solución técnica viable,

- se mejora el tratamiento dado a los caudales mínimos ecológicos en los manantiales, sumideros y su entorno, y

- se incluye una aclaración de lo que supone con respecto a la captación la situación en la que el caudal sea inferior al mínimo ecológico.

Se muestran a continuación las modificaciones efectuadas sobre el artículo:

Artículo 12. Caudales mínimos ecológicos

1. Para las masas de agua de las categorías río y transición se fijan los regímenes de caudales mínimos ecológicos que figuran en el anejo ~~7.1~~8.1, tanto para la situación hidrológica ordinaria como para la situación de emergencia por sequía declarada según los procedimientos establecidos en el Plan Especial de Actuación en Situación de Alerta y Eventual Sequía. ~~Estos caudales corresponden al extremo de aguas abajo de la masa de agua superficial considerada.~~

~~*2. En tanto no se disponga de los estudios específicos sobre caudales mínimos ecológicos en las masas de agua de transición, en estas masas serán de aplicación las sumas de los caudales mínimos ecológicos correspondientes al final de las masas de agua río situadas inmediatamente aguas arriba.*~~

2. En aquellos casos en los que haya soluciones técnicas viables para atender las demandas sin afectar a los caudales mínimos ecológicos para la situación hidrológica ordinaria no será de aplicación el régimen de caudales mínimos ecológicos para la situación de emergencia por sequía declarada.

3. Los caudales mínimos ecológicos citados en el primer punto corresponden al extremo de aguas abajo de la masa de agua superficial o del tramo considerado.

~~3~~4. La determinación de caudales mínimos ecológicos en los cauces, en puntos no coincidentes con los del anejo ~~7.1~~8.1, seguirá las siguientes reglas:

a) Para calcular el caudal mínimo ecológico en un lugar que se sitúe entre dos puntos para los que se disponga de caudales mínimos ecológicos se aplicará la diferencia de superficie de cuenca vertiente siguiendo la fórmula que se expone a continuación:

$$Q_x = Q_1 + \frac{(Q_2 - Q_1)}{(A_2 - A_1)} * (A_X - A_1)$$

Donde:

Q_1: Caudal mínimo ecológico en el punto de aguas arriba. En aquellos casos en los que exista aguas arriba más de un punto con caudal mínimo ecológico definido en el anejo ~~7.1~~8.1, se tomará como Q_1 el de mayor caudal

Q_2: Caudal mínimo ecológico en el punto de aguas abajo

Q_x: Caudal mínimo ecológico en el punto que se quiere estimar

A_1: Superficie de cuenca vertiente en el punto de aguas arriba

A_2: Superficie de cuenca vertiente en el punto de aguas abajo

A_x: Superficie de cuenca vertiente en el punto que se quiere estimar

b) En los casos en los que haya que extrapolar el valor del régimen de caudales mínimos, es decir, en tramos de cabecera en los que sea necesario estimar un régimen aguas arriba del primer punto con designación de caudales mínimos, la fórmula a emplear será:

$$Q_x = \frac{Q_1}{A_1} * A_x$$

Donde:

Q_1: Caudal mínimo ecológico en el punto de aguas abajo

Q_x: Caudal mínimo ecológico en el punto que se quiere estimar

A_1: Superficie de cuenca vertiente en el punto de aguas abajo

A_x: Superficie de cuenca vertiente en el punto que se quiere estimar

c) En los tramos de cauce que por su dimensión reducida no han sido designados como masas de agua y que no se encuentran conectados con ninguna masa de agua de la categoría río, en especial pequeños cauces que vierten al mar o a las aguas de transición, el cálculo del caudal mínimo ecológico se realizará considerando un valor de 2,0 l/s por cada km² de cuenca vertiente, salvo que ~~la administración competente señale otro valor~~ se justifique adecuadamente otro valor.

~~*d) En los manantiales en los que la administración competente así lo determine, en función de las previsibles afecciones al medio natural, el caudal mínimo ecológico será definido mediante estudios específicos, no siendo de aplicación el procedimiento descrito en los apartados precedentes del presente artículo.*~~

~~*e) Aguas abajo de dichos manantiales, el caudal mínimo ecológico se estimará siguiendo la regla descrita en el apartado 3 a) de este mismo artículo, tomando como valor de Q1 el definido mediante los estudios referidos en el apartado 3 d). En el caso de no encontrarse conectado aguas abajo con un punto en el que se disponga de caudal mínimo ecológico definido en el anejo 7.1 se considerará un incremento de caudal mínimo ecológico de 2,0 l/s por cada km² de incremento de cuenca vertiente.*~~

d) En los manantiales o en los lugares en los que las aguas superficiales de los cauces puedan sumirse parcial o totalmente en el terreno, en los que la administración competente así lo determine en función de las previsibles afecciones al medio natural, el caudal mínimo ecológico será definido mediante estudios específicos, no siendo de aplicación el procedimiento descrito en los apartados precedentes. Los mencionados estudios específicos deberán definir los caudales mínimos ecológicos en la totalidad del tramo de cauce que el mismo estudio determine como afectado.

~~*4. La exigencia de caudal mínimo ecológico no será superior al caudal natural existente en cada momento.*~~

5. No serán exigibles caudales ecológicos mínimos superiores al régimen natural existente en cada momento. Cuando el caudal que circule por el cauce sea inferior al caudal mínimo ecológico establecido no se podrán realizar derivaciones de agua, sin perjuicio de las excepciones contenidas en la presente normativa.

~~5~~6. Las concesiones para abastecimiento a poblaciones tendrán supremacía sobre el régimen de caudales mínimos ecológicos cuando no exista una alternativa de suministro viable que permita su correcta atención y si se cumplen las siguientes condiciones:

a) No se extrae más del 75% del caudal circulante.

b) Se toman las medidas adecuadas para la disminución del agua utilizada mientras dure la situación de caudales circulantes inferiores a los caudales mínimos ecológicos.

c) Las medidas adoptadas, y los resultados obtenidos, deberán ser objeto de Informe a elaborar por la entidad beneficiaria de la concesión, que deberá remitir ~~al Organismo de cuenca~~ a la Administración Hidráulica en un plazo no superior a 1 mes desde el comienzo de la situación.

d) A más tardar 6 meses después de la finalización del periodo en el que los caudales mínimos ecológicos hayan sido afectados se entregará ~~al Organismo de cuenca~~ a la Administración Hidráulica un Plan de Actuación encaminado a la reducción de la probabilidad de ocurrencia de estos episodios. ~~El Organismo de cuenca~~ La Administración Hidráulica hará un seguimiento de la aplicación del mencionado Plan de Actuación. En el

caso de que ~~el Organismo de cuenca~~ la Administración Hidráulica juzgue de insuficiente o inadecuado el Plan de Actuación presentado, podrá suspenderse la aplicación de la supremacía de la captación.

~~6~~7. La no remisión de los Informes o Planes de Actuación, previstos en los apartados c) y d) del punto anterior, o el incumplimiento de los plazos establecidos para su entrega ~~al Organismo de cuenca~~ a la Administración Hidráulica, será constitutivo de la infracción tipificada en el apartado g) del artículo 116 del texto refundido de la Ley de Aguas, sin perjuicio de otras responsabilidades que de dicho incumplimiento pudieran derivarse.

Artículo 13. Caudales máximos ecológicos

Se ha mejorado la redacción de este artículo pero sin alterar su contenido, tal como se muestra:

Artículo 13. Caudales máximos ecológicos

~~Para las masas de agua de la categoría río con importantes estructuras de regulación se fijan los regímenes de caudales máximos ecológicos que figuran en el anejo 8.2.~~

En el anejo 8.2 se fijan los regímenes de caudales máximos ecológicos para algunas masas de agua de la categoría río con importantes estructuras de regulación.

Artículo 14. Control y cumplimiento del régimen de caudales ecológicos

Se elimina este artículo por considerarse innecesario.

~~Artículo 14. Control y cumplimiento del régimen de caudales ecológicos~~

~~El régimen de caudales ecológicos se controlará por el Organismo de cuenca preferentemente en estaciones de aforo pertenecientes a las redes oficiales de estaciones de aforo y a la Red SAIH que reúnan condiciones adecuadas. El Organismo de cuenca podrá valorar el cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos, en cualquier punto de la red fluvial, mediante aforos específicos.~~

Artículo nuevo. Proceso de implantación del régimen de caudales ecológicos

Se ha insertado este nuevo artículo con la finalidad señalada previamente en la descripción del "artículo 11 Cuestiones generales sobre el régimen de caudales ecológicos". Tiene la siguiente redacción:

Artículo 14. Proceso de implantación del régimen de caudales ecológicos

1. El régimen de caudales ecológicos será de aplicación a las concesiones en vigor desde que se comunique a sus titulares.

2. Previamente a la comunicación del régimen de caudales ecológicos a los titulares, a la que se refiere el apartado anterior, se desarrollará un proceso de concertación según lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Planificación Hidrológica. Hasta que se efectúe la comunicación serán de aplicación los caudales mínimos medioambientales del Plan Hidrológico Norte II, aprobado mediante Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio.

3. Se priorizará la comunicación a aquellos aprovechamientos que puedan presentar mayor incidencia en el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos para las masas de agua y las zonas protegidas.

4. En el proceso de concertación se fijarán las prescripciones del plan de implantación y, en su caso, el plazo máximo para la realización de las obras de adecuación que pudieran ser necesarias.

5. Las modificaciones que puedan establecerse al régimen de caudales ecológicos derivadas de los procesos de concertación, por aplicación del apartado 4 letra d del artículo 12 o debidas a estudios de perfeccionamiento del régimen de caudales ecológicos validados por la Administración Hidráulica, serán incorporadas a la planificación sin que sean necesarios los procedimientos de consulta y aprobación del Plan Hidrológico previstos en los artículos 80 y 83 del Reglamento de Planificación Hidrológica, a excepción del informe favorable del Consejo del Agua de la demarcación.

6.4.5. Capítulo 4. Prioridad y compatibilidad de usos

Artículo 15 Usos del agua

Este artículo, que establece y describe los usos del agua, ha sido sustituido por la redacción propuesta por la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico, lo que permite dar una mayor homogeneidad entre las normativas de las diferentes demarcaciones.

Algunas diferencias destacadas introducidas en esta nueva redacción son la consideración, como uso industrial, de determinadas industrias del ocio y del turismo, así como la diferenciación entre las actividades de ocio no industriales entre aquellas que usan el agua de un modo no consuntivo (piragüismo, baño, pesca y otras) de aquellas otras que usan el agua de un modo indirecto (acampadas, excursionismo, ornitología, etc.).

La redacción de este artículo sometida a consulta pública era la siguiente:

Artículo 15. Usos del agua (redacción consulta pública)

A los efectos de lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento de Planificación Hidrológica, se consideran los siguientes usos del agua:

a) Abastecimiento a la población: se incluyen los domésticos, comerciales, municipal-institucionales, riego urbano privado, el consumo de las explotaciones ganaderas y el de las industrias conectadas a las redes generales de abastecimiento así como el de otros servicios de escasa importancia conectados a las redes municipales. Dentro de este grupo se deben incluir aquellos establecimientos hosteleros e instalaciones con una actividad y tasa de ocupación estacional tales como hoteles, apartamentos, camping, viviendas unifamiliares, etc.

b) Riego agrícola y ganadería: se incluyen los requerimientos de agua necesarios para las satisfacciones de las necesidades agronómicas de los cultivos y la ganadería. El riego contemplado en este grupo es aquel que tiene como propósito final favorecer la producción agraria, tanto de herbáceos como leñosos, el sustento de plantaciones forestales o el desarrollo de plantaciones comerciales (semilleros o viveros). Se considerarán incluidas todas las necesidades hídricas de los cultivos, incluyendo el riego antihelada. Queda excluido el riego de jardines de urbanizaciones aisladas o viviendas unifamiliares no conectadas a las redes de abastecimiento y el riego de los campos de golf.

c) Usos energéticos: se trata de aquellos destinados a la atención de industrias productoras de energía, aquellos que tienen como finalidad la producción hidroeléctrica mediante centrales fluyentes, de regulación o de bombeo, la refrigeración de centrales térmicas, sea cual sea el combustible, y termosolares, e igualmente aquellos que tienen como finalidad

aprovechar la fuerza motriz para el movimiento directo de máquinas integradas en un proceso industrial. Así mismo se incluyen aquellos destinados a la producción de energía geotérmica.

d) Usos industriales no energéticos: se agrupan las industrias productoras de bienes de consumo, las industrias extractivas y otras instalaciones industriales y de servicios aisladas o en polígonos industriales, siempre y cuando no estén conectadas a las redes de abastecimiento municipales.

e) Acuicultura: Se considera aquel aprovechamiento del recurso, bien sea directo desde aguas superficiales o subterráneas a cubrir las necesidades de agua precisas para la producción piscícola en instalaciones preparadas a tal efecto, ya sea con fines de repoblación, para la producción de alimentos o piensos, o para producir peces ornamentales. También se incluyen aquellos destinados al abastecimiento de las instalaciones de cría y engorde de especies acuáticas o anfibias, así como de las instalaciones y servicios complementarios.

La industria de transformación de los productos procedentes de la acuicultura no se considera como uso de acuicultura; quedando incluida, a los efectos del presente Plan, dentro de los usos industriales no energéticos estén o no conectados a las redes de abastecimiento.

f) Usos recreativos: Se incluyen aquellos aprovechamientos que tengan por objeto principal la satisfacción de los requerimientos de ocio en cualquiera de sus facetas recreativas, lúdicas e incluso culturales bien sean usos privados (llenado de piscinas, riego de jardines de urbanizaciones aisladas o viviendas unifamiliares) o colectivos (campos de golf, parques acuáticos, etc.). Queda incluida dentro de los usos recreativos la utilización de recursos que pudieran destinarse al mantenimiento y la adecuación de vedados y cotos de pesca. También se incluyen las instalaciones culturales y museísticas como molinos, fraguas, aserraderos, lavaderos y otros de este tipo que no puedan ser atendidos por las redes urbanas correspondientes.

g) Navegación y transporte acuático: Dentro de este uso se incluyen aquellos relacionados con la navegación, la flotación fluvial entendiendo esta última como el transporte de madera por piezas sueltas o almadías y los deportes acuáticos (vela, remo, barcos de motor, esquí acuático, piragüismo, etc.). Asimismo se incluye el suministro de canales artificiales o naturales para el rafting, piragüismo o cualquier otro tipo de navegación o flotación precise o no una modificación o condicionado del régimen natural de las masas de agua o del de explotación de los embalses.

h) Otros usos: dentro de este grupo se incluyen aquellos no incluidos directa o indirectamente en los apartados anteriores y que no son asimilables a los mismos.

El anterior artículo es sustituido por el que se recoge a continuación:

Artículo 15. Usos del agua

A los efectos de lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento de Planificación Hidrológica, se consideran los siguientes usos del agua:

1.- Clasificación de usos:

a) Abastecimiento de población:

a') *Abastecimiento a núcleos urbanos:*

i) *Consumo humano*

ii) *Otros usos domésticos distintos del consumo humano*

iii) *Municipal*

iv) *Industrias, comercios, ganadería y regadío de poco consumo de agua, situados en núcleos de población y conectados a la red municipal*

b') *Otros abastecimientos fuera de los núcleos urbanos.*

b) *Regadíos y usos agrarios.*

i) *Regadíos*

ii) *Ganadería*

c) *Usos industriales para producción de energía eléctrica:*

i) *Centrales térmicas renovables: termosolares y biomasa*

ii) *Centrales térmicas no renovables: carbón y ciclo combinado*

iii) *Centrales hidroeléctricas*

d) *Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores:*

i) *Industrias productoras de bienes de consumo.*

ii) *Industrias del ocio y del turismo.*

iii) *Industrias extractivas.*

iv) *Producción de fuerza motriz.*

e) *Acuicultura.*

f) *Usos recreativos.*

g) *Navegación y transporte acuático, incluyendo navegación de transportes de mercancías y personas.*

h) *Otros aprovechamientos:*

i) *De carácter público*

ii) *De carácter privado*

2.- *Se entiende por consumo humano el correspondiente a beber, cocinar, preparar alimentos e higiene personal.*

3.- *En los usos de industrias de ocio y turismo quedan incluidos los que implican derivar agua del medio natural y tienen como finalidad posibilitar esta actividad en instalaciones deportivas (campos de golf, estaciones de esquí, parques acuáticos, complejos deportivos y asimilables), picaderos, guarderías caninas y asimilables, así como las que tienen como finalidad el mantenimiento o rehabilitación de instalaciones industriales*

culturales: fraguas, fuentes, aserraderos, lavaderos, máquinas y otros de este tipo, que no pueden ser atendidos por las redes urbanas de abastecimiento.

4.- En los usos recreativos quedan incluidos los que no estando incluidos en el apartado anterior tienen un carácter recreativo privado o colectivo sin que exista actividad industrial o comercial, y, en concreto, los siguientes:

a) Las actividades de ocio que usan el agua en embalses, ríos y parajes naturales de un modo no consuntivo, como los deportes acuáticos en aguas tranquilas (vela, windsurf, remo, barcos de motor, esquí acuático, etc.) o bravas (piragüismo, rafting, etc.), el baño y la pesca deportiva.

b) Las actividades de ocio relacionadas con el agua de un modo indirecto, utilizada como centro de atracción o punto de referencia para actividades afines, como acampadas, excursiones, ornitología, caza, senderismo y todas aquellas actividades turísticas o recreativas que se efectúan cerca de superficies y cursos de agua."

Artículo 16. Orden de preferencia de usos

Se mantiene el orden de preferencia de los usos señalado en la redacción puesta a consulta pública y se incorpora una precisión en el segundo punto, tal y como se muestra a continuación:

Artículo 16. Orden de preferencia de usos

1. Se establece el siguiente orden de preferencia entre los diferentes usos del agua, teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno:

1. *Abastecimiento de población*
2. *Ganadería*
3. *Usos industriales ~~incluidos los energéticos~~ excluidos los usos de las industrias del ocio y del turismo*
4. *~~Regadío~~ Riego agrícola*
5. *Acuicultura*
6. *Usos recreativos y usos de las industrias del ocio y del turismo*
7. *Navegación y transporte acuático*
8. *Otros ~~aprovechamientos~~ usos*

2. El orden de prioridad no podrá afectar a los recursos específicamente asignados por este Plan en el capítulo siguiente ni a los resguardos en los embalses para la laminación de avenidas.

~~2~~3. En el caso de concurrencia de solicitudes para usos con el mismo orden de preferencia se exigirá la realización de un estudio sobre su viabilidad ambiental, económica y social. ~~El Organismo de cuenca~~ La Administración Hidráulica dará preferencia a las solicitudes más sostenibles.

~~3~~4. En los abastecimientos de población, tendrán preferencia las peticiones que se refieran a mancomunidades, consorcios o sistemas integrados de municipios, así como las iniciativas que sustituyan aguas con problemas de calidad por otras de adecuada calidad.

6.4.6. Capítulo 5. Asignación y reserva de recursos

Este capítulo de la Normativa está compuesto por un artículo inicial en el que se enumeran los sistemas de explotación de la Demarcación y se describe el ámbito que corresponde a cada uno, seguido por un grupo de artículos en el que para cada sistema de explotación se describen los recursos que se asignan.

En estos artículos se han corregido algunas erratas que ya han sido comentadas para el anejo del Plan en el que se asignan los recursos.

6.4.7. Capítulo 6. Utilización del Dominio Público Hidráulico

SECCIÓN 1. Usos comunes y privativos

Artículo 23. Uso privativo por disposición legal

Este artículo no ha sufrido modificaciones.

Artículo 24. Instalación de dispositivos de medida

Este artículo permanece inalterado salvo la sustitución de la expresión "Organismo de cuenca" por la de "Administración Hidráulica" y la eliminación del apartado 7. La redacción del apartado eliminado era la siguiente:

> *7. El personal del Organismo de cuenca en el ejercicio de sus funciones, tendrán libre acceso a todas las captaciones superficiales y subterráneas, tanto a efectos de inspección como de medición teniendo carácter probatorio los resultados de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de instalar y mantener los correspondientes medios de medición de control efectivos de los caudales tendrán la consideración de graves conforme a la normativa en materia de Aguas.*

SECCIÓN 2. Autorizaciones y concesiones

Artículo 25. Almacenamientos de regulación mínima de los aprovechamientos de aguas superficiales

Atendiendo a alegaciones recibidas y tras un análisis de estos aspectos por parte de las administraciones hidráulicas se ha decidido eliminar la totalidad del artículo titulado "Almacenamientos de regulación mínima de los aprovechamientos de aguas superficiales" ya que incluía condiciones de regulación muy notables de forma indiscriminada.

Artículo 26. Normas generales relativas a las concesiones

Se ha modificado el artículo para adecuarse a los conceptos manejados por el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La redacción establecida se muestra a continuación:

> *Artículo 25. Normas generales relativas a las concesiones*
>
> *1. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 59 del texto refundido de la Ley de Aguas y 93 y sucesivos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para las nuevas concesiones, el proyecto o anteproyecto que acompañe a la solicitud de concesión justificará adecuadamente la evaluación de las necesidades hídricas, adecuándose a los valores establecidos en este plan sobre dotaciones y cálculo de demandas y especificando no sólo el*

volumen máximo anual y mensual concedido ~~derivado~~ y el caudal máximo, sino también el régimen de derivación.

2. Los límites cuantitativos establecidos en los artículos 128 y 130 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico se entenderán referidos al caudal máximo de derivación.

Artículo 27. Dotaciones de agua para abastecimiento urbano

Este artículo presenta dos procedimientos para la justificación ante la Administración Hidráulica de los volúmenes solicitados para las concesiones de abastecimiento urbano.

Se ha eliminado la preferencia por el procedimiento particularizado sobre el genérico, que se declaraba en el texto sometido a consulta pública, dejándolo a la simple elección del que se considere en cada caso más adecuado.

Además se ha sustituido la tabla de dotaciones del procedimiento genérico por otra en la que se considera la actividad industrial y comercial para la evaluación de las necesidades dotacionales.

Las modificaciones se muestran a continuación:

Artículo 26. Dotaciones de agua para abastecimiento urbano

Para el otorgamiento de concesiones de abastecimiento urbano de población se establecen dos procedimientos, uno genérico y otro particularizado~~, si bien se utilizará preferiblemente el procedimiento particularizado~~ que podrán utilizarse en aquellos casos que se considere más adecuado.

a) Genérico. Se consideran en su conjunto todos los usos de agua que se abastecen de la red municipal, como son el uso doméstico, uso industrial y comercial, uso municipal, riego privado y uso ganadero.

Se establecen las siguientes dotaciones brutas máximas de agua, entendiéndose como dotación bruta el cociente entre el volumen a captar para la red de suministro en alta y el número de habitantes inscritos en el padrón municipal en la zona de suministro.

~~*Tabla 1. Dotaciones brutas máximas y de referencia para abastecimiento urbano. Procedimiento genérico*~~

~~Población abastecida por el sistema (habitantes)~~	~~Dotación máx. bruta (l/hab/día)~~	~~Dotación referencia (l/hab/día)~~
~~Menos de 2.000~~	~~380~~	~~340~~
~~De 2.000 a 10.000~~	~~330~~	~~325~~
~~De 10.000 a 50.000~~	~~280~~	~~300~~
~~De 50.000 a 250.000~~	~~250~~	~~270~~
~~Más de 250.000~~	~~220~~	~~250~~

Tabla 1. Dotaciones brutas máximas admisibles en litros por habitante y día para abastecimiento urbano. Procedimiento genérico

Población abastecida por el sistema	Actividad comercial-industrial vinculada (Anexo VII)		
	Alta	Media	Baja
< 2.000 hab.	340	310	290

Población abastecida por el sistema	Actividad comercial-industrial vinculada (Anexo VII)		
2.000 – 10.000 hab.	325	290	260
10.000 – 50.000 hab.	300	260	-
50.000 – 250.000 han	270	-	-
> 250.000 hab	250	-	-

b) Particularizado. Para cada uso se define una dotación bruta máxima.

Según este procedimiento, los volúmenes de agua a utilizar para el abastecimiento urbano se establecen según los siguientes usos y dotaciones brutas máximas específicas:

i) Uso sanitario. Abastecimiento a vestuarios de industrias, instalaciones deportivas, etc., se establece una dotación de 150 a 200 l/empleado-usuario/día.

ii) Uso doméstico. Se refiere específicamente al abastecimiento domiciliario, excluidas las necesidades municipales, comerciales, etc. Se establecen las siguientes dotaciones brutas máximas de agua para el uso doméstico.

Tabla 2. Dotaciones brutas máximas para uso doméstico. Procedimiento particularizado

Población abastecida por el sistema (habitantes)	Dotación máx. bruta (l/hab/dia)
Menos de 100	220
De 101 a 2.000	210
De 2.001 a 10.000	205
De 10.001 a 50.000	200
De 50.001 a 250.000	195
Más de 250.000	190

iii) Población estacional: turismo y segunda residencia. Las dotaciones brutas máximas para apartamentos y pisos de segunda residencia se considerarán equivalentes a las expresadas para el uso domestico. Para el alojamiento en chalés con uso estacional se usará una dotación bruta máxima de 350 l/habitante/día. En el cálculo del volumen de agua a utilizar se considerará una tasa de ocupación de 3,5 habitantes por alojamiento y un periodo de tiempo medio de ocupación anual, debidamente justificado.

Para otros alojamientos relacionados con la población estacional se utilizarán las dotaciones establecidas en la tabla 3.

Tabla 3. Dotaciones medias para población estacional

Tipo de establecimiento	Dotación máx. bruta (l/plaza/día)
Camping	120
Hotel	240

iv) Usos municipales, baldeos, fuentes y otros. Para el cálculo de las necesidades de baldeo se adoptará una dotación de 1,2 l/m²/día.

v) Usos hospitalarios, incluidos geriátricos y otros servicios similares. Se calcularán las necesidades de agua tomando como base el número de camas o, en su caso, plazas con una dotación de 400 l/cama-plaza/día.

vi) Usos hosteleros. Se considerará una dotación bruta máxima de 5 a 10 m^3/establecimiento/día.

vii) Usos agrarios: ganaderos y riego, incluido el riego de parques y jardines. Se utilizarán las dotaciones contenidas en los artículos específicos dedicados a estos usos.

viii) Usos industriales asociados al núcleo y que tomen de la red urbana. Se utilizarán las dotaciones contenidas en el artículo dedicado al uso industrial.

ix) Otros usos, recreativos, etc.

Artículo 28. Dotaciones de agua para usos ganaderos

La redacción de este artículo se mantiene inalterada.

Artículo 29. Dotaciones de agua para regadío

En concordancia con la nueva redacción del artículo sobre los "Usos de agua" el título de este artículo pasa a ser "Dotaciones de agua para riego agrícola". Además las dotaciones antihelada se reducen ligeramente en la tabla correspondiente: de 50 a 40 m^3/ha y año.

Artículo 30. Dotaciones de agua para usos industriales

En este artículo sobre las dotaciones a considerar en las concesiones para el uso industrial se han realizado las siguientes modificaciones:

- Las unidades de la tabla que muestra las "Dotaciones de agua para la industria" se han modificado:
    i. Donde decía (m^3/empleado/día) dice (m^3/día por empleado)
    ii. Donde decía (m^3/Tm/año) dice (m^3 por tonelada producida)
- En esa misma tabla se ha eliminado la referencia a "Minería" por considerarse finalmente que no resulta conveniente incluir un valor dada la variación que puede haber entre casos distintos.
- En la tabla referida a "Dotaciones de agua para centrales de producción eléctrica" se elimina la nuclear.
- En esa misma tabla se añade una nota al pié de la tabla con el siguiente texto "Los circuitos de refrigeración industriales con un volumen superior a 10.000 m^3/año no podrán ser en régimen abierto, salvo el caso de que la captación sea en estuario abierto o masa de agua costera."

Artículo 31. Dotaciones de agua para usos recreativos

Como adecuación a la nueva redacción del artículo sobre los "Usos de agua" el título de este artículo pasa a ser "Dotaciones de agua para riego de campos de golf, superficies ajardinadas y llenado de piscinas".

En el primer punto de este artículo se incluye una referencia a las piscinas, quedando redactado como se muestre a continuación:

1. La dotación para el riego de los campos de golf ha sido establecida con carácter general en 3.600 m³/ha/año. En el caso del riego de las superficies ajardinadas se aplicará una dotación máxima de 2.000 m³/ha/año considerando como periodo de riego 4 meses al año y en el caso de llenado de piscinas se permitirá un único llenado de la piscina al año, más la reposición de pérdidas. ~~En el resto de los usos recreativos, cuando sean asimilables a otro uso, para la determinación de la demanda se seguirán los criterios aplicables a este uso.~~

El resto de los apartados permanecen inalterados.

Artículo 32. Concesiones para riego

Atendiendo a una alegación se eliminan los dos apartados finales del artículo por no tener interés en la Demarcación.

Además se adecúa el título al artículo "Usos de agua".

Artículo 31. Concesiones para riego

1. En los proyectos para la concesión de los aprovechamientos para riego ~~el Organismo de cuenca~~ la Administración Hidráulica podrá exigir, cuando lo considere oportuno, un estudio sobre la red de drenaje y la relación agua/suelo, así como las buenas prácticas a implementar para limitar la contaminación difusa y exportación de sales, especialmente en las zonas declaradas como vulnerables.

2. En el caso de concesión o modificación de la existente para una comunidad de regantes, será obligatorio que la correspondiente comunidad de regantes apruebe en sus ordenanzas y reglamentos medidas de control de consumos de agua por parte de los comuneros, con penalizaciones por excesos de consumos, debiendo establecerse de forma obligada tarifas binómicas que combinen adecuadamente el consumo y la superficie a efectos de facturación.

~~3. Las Comunidades de Regantes de más de 1.000 hectáreas deberán llevar un control analítico periódico de la calidad de las aguas captadas, así como de la calidad de los vertidos a través de su red de drenaje. Dichos análisis serán facilitados al Organismo de cuenca con la frecuencia establecida por éste, en función de la problemática de cada zona y los objetivos de calidad establecidos en el curso receptor, masas de agua libre y sistemas acuíferos.~~

~~4. Los retornos de riego en los azarbes y colectores dentro de los límites de la zona regable correspondiente, tienen la consideración de aguas ya concedidas, por lo que su reutilización para el riego de la zona regable que las produce no se considerará nuevo uso. El uso de los retornos de riego, cuando no estén dentro de la zona regable, serán objeto de concesión. No existirá responsabilidad por la merma de caudales disponibles derivada de una gestión más eficiente del riego.~~

Artículo 33. Concesiones para acuicultura y otros

El título de este artículo pasa a ser "Dotaciones para acuicultura y otros".

Se elimina la referencia a las piscinas que se ha trasladado al artículo anterior dedicado a los usos recreativos y se realizan algunos ajustes de formato.

Artículo 32. ~~Concesiones~~ Dotaciones para acuicultura y otros

~~a)~~1. Piscifactorías: Se examinarán las necesidades indicadas de acuerdo con el número de renovaciones diarias del agua de las balsas necesarias.

A falta de justificación en contra, para las piscifactorías de salmónidos el agua necesaria se determinará del siguiente modo.

- *Incubación: 30 renovaciones/día*
- *Alevinaje: 20 renovaciones/día*
- *Engorde: 15 renovaciones/día*

~~*b) Llenado de piscinas: Se permitirá un único llenado de la piscina al año, más la reposición de pérdidas.*~~

~~*c)*~~2. *Lucha contra incendios: Se tendrá en cuenta el volumen para permitir el llenado de la balsa o depósito y su uso, más la reposición de pérdidas.*

Artículo 34. Limitaciones a los plazos concesionales

Tras un detenido análisis de las alegaciones recibidas se ha considerado adecuado eliminar el apartado 3 y el 4 de este artículo, por lo que queda redactado como se recoge seguidamente:

Artículo 33. Limitaciones a los plazos concesionales

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Aguas y en el artículo 97 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se establece que, como norma general, las concesiones se otorgarán por un plazo de 20 años. Podrán fijarse otras duraciones inferiores o superiores por razones de interés público debidamente motivadas, atendiendo especialmente al tiempo necesario para la amortización de las obras.

2. En las masas de agua afectadas por infraestructuras contempladas en el Plan Hidrológico podrán otorgarse concesiones cuya extinción estará vinculada a la puesta en funcionamiento de las infraestructuras.

~~*3. Dada la imprescriptibilidad del Dominio Público Hidráulico, ninguna concesión otorgada con anterioridad a la Ley de Bases del Patrimonio del Estado 89/1962, de 24 de diciembre, podrá superar la duración de 99 años propia de la prescripción inmemorial salvo que su extinción se anticipe a dicho plazo por aplicación de la Disposición Transitoria Primera del texto refundido de la Ley de Aguas.*~~

~~*4. La prórroga de las concesiones prevista en los títulos constitutivos respetará en todo caso el límite de 75 años establecido en el artículo 59.4 del texto refundido de la Ley de Aguas.*~~

~~*5*~~3. *En ningún caso la prórroga de hasta 10 años, regulada en el artículo 59.6 del texto refundido de la Ley de Aguas, permitirá la superación de los 75 años de duración máxima establecidos por el artículo 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas para cualquier concesión demanial.*

Artículo 35. Resolución de expedientes de concesión

Este artículo se mantiene inalterado.

Artículo 36. Tramitación de petición de concesiones

Este artículo ha sido eliminado.

Artículo 37. Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos

El título del artículo presentaba cierta incoherencia con respecto a su contenido, por lo que se ha procedido a corregirlo.

Se ha mejorado el enfoque del artículo, generalizándolo en parte, ya que según alegaciones recibidas ciertas partes del contenido del artículo no deberían imponerse de forma exclusiva a las concesiones hidroeléctricas cuando otros muchos aprovechamientos utilizan presas o azudes.

Para facilitar la consulta de todos los cambios introducidos en el artículo de referencia este se reproduce seguidamente resaltado las partes eliminadas y las añadidas.

> *Artículo 35. ~~Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos~~ Condiciones mínimas para las concesiones de aprovechamientos mediante presas o azudes*
>
> *1. Las nuevas solicitudes de concesión con la finalidad de captar agua ~~para la obtención de energía, ya sea mediante el aprovechamiento hidroeléctrico o mediante centrales térmicas o de cualquier otra tecnología~~ mediante presas o azudes, deberán incorporar un estudio que permita al ~~Organismo de cuenca~~ a la Administración Hidráulica valorar, a partir de la simulación de la gestión en el sistema de explotación correspondiente, qué cantidades de agua pueden ser objeto de aprovechamiento ~~para la obtención de energía~~ sin causar perjuicio al medio ~~hídrico~~ ambiente, respetando los regímenes de caudales ecológicos señalados en este Plan Hidrológico y sin reducir la disponibilidad para atender otras concesiones preexistentes.*
>
> *2. El proyecto de aprovechamiento ~~hidroeléctrico~~ de nueva concesión deberá incorporar, en un epígrafe claramente diferenciado, medidas tendentes a minimizar la afección ambiental. Entre las citadas medidas, además del respeto al régimen de caudales ecológicos en el tramo de toma y de restitución, se incluirán las siguientes:*
>
> *a) Instalación de dispositivos de medida y registro del caudal y sus variaciones que permitan una rápida comprobación.*
>
> *b) Instalación de dispositivos de paso en las infraestructuras que, de acuerdo con la ictiofauna afectada o que potencialmente debiera habitar en el tramo, no impidan su circulación y remonte.*
>
> *c) En su caso, instalación de dispositivos que eviten la entrada de peces en las turbinas.*
>
> *d) Incorporación de elementos que permitan el rescate de la ictiofauna en caso de vaciado de las infraestructuras.*
>
> *e) Si procede, cerramiento de los canales, cámaras de carga y otras infraestructuras de modo que se eviten riesgos para las personas y la fauna terrestre, en particular sobre los grandes mamíferos ~~tales como corzos, jabalíes, ciervos y otros~~.*
>
> *f) En canales de más de 500 m de longitud se deberán habilitar pasos para que el ganado y la fauna terrestre, en particular los grandes vertebrados, puedan cruzarlos y acceder a la orilla natural del río.*
>
> *g) Valoración y medidas de mitigación de los daños sobre la vegetación de ribera afectada, sobre las zonas húmedas e, incluso, sobre las zonas protegidas.*
>
> *h) Valoración y medidas de mitigación de los daños sobre la geomorfología fluvial afectada.*
>
> *3. En el caso de nuevas concesiones para minicentrales hidroeléctricas ~~de nueva concesión con regulación propia~~ no será autorizable la pauta de explotación denominada emboladas o*

hidropuntas. Las emboladas funcionan alternando en el transcurso de unas pocas horas períodos de turbinado y de parada hasta la recuperación del nivel de agua en el azud y/o de la cámara de carga, produciendo en el río variaciones de caudal superiores al 25% respecto del caudal natural medio circulante. En las ~~centrales~~ minicentrales existentes, salvo que esté contemplado expresamente en el condicionado de la concesión, no se permitirá turbinar un caudal mayor del caudal de derivación concedido.

~~*4. En el caso de que los aprovechamientos existentes aguas abajo de una nueva instalación hidroeléctrica sean incompatibles con el régimen de explotación proyectado para el sistema, se podrá exigir, con cargo al concesionario energético, la realización de un contraembalse que posibilite dicha compatibilidad o la expropiación forzosa de los derechos de los aprovechamientos afectados en el caso de que la preferencia de usos lo permita.*~~

4. En las nuevas concesiones para minicentrales hidroeléctricas y, con carácter general, en las modificaciones de las existentes, donde sea posible, los caudales de equipamiento se adecuarán a los caudales circulantes a lo largo del año hidrológico en régimen natural. Dichos caudales estarán en el intervalo comprendido entre el Q80 y el Q100 de la curva de caudales clasificados una vez que previamente se hayan descontado los caudales ecológicos.

~~*5. Los titulares de concesiones hidroeléctricas otorgadas, cuya ejecución haya quedado en suspenso por resolución administrativa, dispondrán de un plazo de 3 años, a partir de la entrada en vigor de esta Normativa, para proponer un nuevo diseño del aprovechamiento hidroeléctrico objeto de dicha concesión, acorde con los nuevos requerimientos medioambientales. Si en este plazo no se presenta dicha propuesta, se entenderá que se renuncia a la citada concesión.*~~

~~*6. Con carácter general, se denegarán aquellas modificaciones de características que impliquen aumento del plazo concesional, sin que en ningún caso se puedan autorizar las solicitudes efectuadas en ese sentido durante los últimos 5 años de vida de la concesión.*~~

~~*7. En aquellos supuestos excepcionales en que los estudios de viabilidad económica, técnica, social y ambiental, permitan autorizar modificaciones que supongan incremento del plazo concesional, se adoptará el menor de los dos plazos siguientes: el resultante de la fórmula prevista en el artículo 153 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, o el calculado atendiendo al plazo necesario para amortizar la inversión realizada.*~~

~~*En este último caso, se ponderará la rentabilidad que la modificación supone sobre el aprovechamiento considerado globalmente, y no exclusivamente respecto del elemento modificado.*~~

Artículo 38. Modificación y revisión de caudales concesionales

Se han incorporado algunos apartados más al artículo en relación a las cusas para la modificación de concesiones y la posibilidad de requerir a los titulares de aprovechamientos la adopción de medidas necesarias para el cumplimiento de objetivos medioambientales en determinadas masas.

Se elimina el apartado 5 que se refería a la no necesidad de revisar la concesión cundo se apliquen los caudales ecológicos del Plan, por considerarse innecesario.

Además se incorpora un texto como punto 5 perteneciente a la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Artículo 156 bis. Acreditación de menor dotación y ahorro).

El artículo se modifica como se señala seguidamente:

Artículo 36. Modificación y revisión de los caudales concesionales

1. ~~Los~~ El caudale~~s~~ derivado~~s~~ en cada momento se adecuará~~n~~ al ~~consumo~~ caudal real utilizado, aunque el concedido sea superior.

2. De acuerdo con el artículo 151.5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico se tramitarán sin nueva competencia de proyectos aquellas modificaciones de las características de las concesiones que supongan:

a) Una variación en los caudales no superior a un 10 por ciento en más o en menos.

b) Una variación del índice concesional no superior a un 10 por ciento en más o en menos en el caso de las destinadas a la producción hidroeléctrica.

3. ~~Los caudales concedidos podrán ser revisados si cambian las condiciones o características del uso que sirviera de base para la evaluación de las necesidades y su evolución en el momento de otorgar la concesión.~~ Será causa suficiente para proceder de oficio a la revisión y modificación de una concesión el cambio de las condiciones o características del uso que sirviera de base para la evaluación de las necesidades y su evolución en el momento de otorgar la concesión Dichas circunstancias serán consideradas modificación de los supuestos determinantes del otorgamiento de la concesión a los efectos previstos en el artículo 65 del texto refundido de la Ley de Aguas, por lo que la revisión así realizada no dará lugar a indemnización.

4. Asimismo será causa de revisión y modificación de una concesión la inferencia de afecciones a terceros o alteraciones significativas en las condiciones morfológicas del cauce, entre ellas, la alteración significativa de zonas húmedas y la pérdida de hábitats y/o especies.

~~4~~5. La evaluación de las necesidades reales de un aprovechamiento~~,~~ a las que habrán de adecuarse los caudales concesionales, así como la acreditación a que hace referencia el artículo 65.2 del texto refundido de la Ley de Agua, se realizará atendiendo a:

a) Las dotaciones fijadas en este Plan.

b) En su caso las superficies realmente regadas y la población realmente servida en un período suficientemente representativo.

~~b~~c) Los caudales realmente derivados en un período suficientemente representativo.

~~c~~d) Las características de las infraestructuras realmente existentes salvo que:

i) Se hayan realizado modificaciones no autorizadas ~~y estas~~ que comporten una mayor derivación o consumo de agua.

ii) La mala conservación de las infraestructuras implique mayor consumo de agua. En estos casos se considerarán únicamente los caudales realmente necesarios si se aplicasen los criterios de una buena explotación y conservación.

~~d) La supresión de las concesiones incluidas en otra posterior o cuando los caudales utilizados sean ya suministrados por una red pública de abastecimiento o una comunidad de usuarios en que esté incorporado el titular de la concesión.~~

e) El hecho de que los caudales concedidos sean suministrados desde un origen del agua distinto al previsto en la concesión, como una red pública de abastecimiento, una comunidad de usuarios o que se encuentren comprendidos en otra concesión.

f) La introducción de las mejores técnicas disponibles en cada momento.

A los efectos de aplicación de los apartados b) y c) podrá considerarse como período suficientemente representativo el de cinco años hidrológicos, comprendidos entre los diez años anteriores a la fecha de iniciación del procedimiento de revisión.

6. En el caso de aprovechamientos cuyo caudal de derivación no sea continuo se determinará tanto el caudal máximo, como su modulación y estacionalidad. En aquellos tramos en que se haya decidido la implantación de Comunidades o Juntas Centrales de Usuarios se ajustarán a la ordenación de tomas correspondiente.

7. En el caso de las masas de agua declaradas en mal estado, cuando sea preciso para la consecución de los objetivos medioambientales, se podrá requerir al titular del aprovechamiento que adopte las necesarias medidas de optimización, ahorro y minimización del impacto. Entre las medidas a adoptar cabe destacar la aplicación de mejores técnicas disponibles para optimizar la eficiencia del uso del agua, la reubicación de las tomas, modificaciones en el régimen de explotación, utilización de aguas regeneradas, etc. En el marco anterior la Administración Hidráulica podrá imponer la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen.

~~*5. De conformidad con el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Aguas, los caudales ecológicos constituyen una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de aprovechamiento, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos, por lo que la comunicación al titular de los caudales ecológicos que concretamente haya de respetar su aprovechamiento, no supondrá la revisión de la concesión para su adecuación a los Planes Hidrológicos en los términos del artículo 65.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, salvo en aquellos casos en que la aprobación de un nuevo Plan altere tan sustancialmente los caudales disponibles o los usos a que éstos puedan destinarse, que en la práctica implique la desaparición del aprovechamiento o su inviabilidad.*~~

Artículo 39. Utilización de aguas subterráneas

En la redacción se modifica la expresión "Organismo de cuenca" por "Administración Hidráulica" por considerarse un término más adecuado y se adecua la referencia interna del punto 3 al nuevo artículo 23.

Se han añadido los conceptos del artículo 188bis de la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, de este modo el punto 5 se modifica y se añaden el punto 6 y 7, (según la nueva numeración de apartados).

También se incorporan los conceptos del apartado 3 al artículo 188 de la revisión del Reglamento de Dominio Público Hidráulico mediante el punto 8 de la nueva redacción.

Para completar este artículo se ha incluido un punto 11.

A continuación se muestran las modificaciones realizadas.

Artículo 37. Utilización de aguas subterráneas

1. En relación con lo establecido en el ~~Art.~~ artículo 184.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para determinar la posible afección de nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas a captaciones anteriormente legalizadas, ~~el Organismo de cuenca~~ la Administración Hidráulica podrá exigir al peticionario que aporte un informe hidrogeológico justificativo de las posibles afecciones, basado en datos obtenidos de la ejecución de ensayos de bombeo o aforos realizados en las nuevas captaciones.

2. A los efectos del mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, se podrá exigir a los aprovechamientos de aguas subterráneas que se encuentren próximos a ríos o manantiales, o a los que se presuma que pueden incidir en el régimen de caudales ecológicos, un informe justificativo de las posibles afecciones a los mismos, que deberá cumplir con los mismos requerimientos técnicos establecidos en el apartado anterior. El régimen de explotación de la concesión deberá adecuarse para garantizar la no afección al régimen de caudales ecológicos.

3. Con carácter general, las distancias mínimas entre los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas y los preexistentes y/o manantiales serán las que figuran en el apartado 1 del artículo 23. Si una vez otorgada la concesión se comprobara que los aprovechamientos anteriores resultan afectados, se clausurará el nuevo sin derecho a indemnización o bien el titular de la nueva concesión repondrá los caudales a los aprovechamientos legalizados existentes.

4. Con objeto de mejorar el rendimiento de una captación que disponga de concesión se podrá, previa autorización de~~l Organismo de cuenca~~ la Administración Hidráulica, reparar, modificar o incluso ejecutar una nueva captación en un radio de 10 m de aquella, siempre que no implique afección a terceros ni se sitúe a distancia menor de la permitida de otras captaciones preexistentes. La nueva captación no podrá sobrepasar las dimensiones y profundidad de la anterior. La captación original deberá ser, en su caso, clausurada y sellada, salvo que ~~el Organismo de cuenca~~ la Administración Hidráulica señale lo contrario.

~~5. Con objeto de evitar el deterioro de las masas de agua subterránea, el Organismo de cuenca velará para que, en la correspondiente resolución de extinción del aprovechamiento dirigida a su titular y dictada previa audiencia al mismo, los pozos que queden en desuso sean sellados con cargo al titular de la captación salvo que dicha captación sea transformada en un punto de control de la Administración Hidráulica.~~

5. Con objeto de evitar el deterioro de las masas de agua subterránea la Administración Hidráulica velará para que en los expedientes de extinción, revisión o modificación de derechos de aguas subterráneas que conlleven el cese de la actividad extractiva, se adopten las medidas necesarias para garantizar el sellado por parte del titular de los pozos, sondeos u obras asimilables, con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma y se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado. Como excepción, el sellado del pozo no será necesario cuando la captación sea transformada en un punto de control de la Administración Hidráulica.

6. La Administración Hidráulica podrá, de forma subsidiaria, llevar a cabo el sellado de la captación, repercutiendo los costes de dicha actuación al que hubiera sido titular de la misma.

7. Las previsiones de los dos apartados anteriores, serán de aplicación a las autorizaciones de investigación de aguas subterráneas.

8. Las labores de limpieza, desarrollo y estimulación de pozos deberán ser comunicados al Organismo de cuenca con una antelación mínima de un mes.

~~6~~9. En acuíferos costeros para garantizar la no salinización se seguirán los criterios que se señalan a continuación.

Si el nivel en el pozo baja del nivel medio del mar se harán los estudios necesarios para poder definir y ejecutar los elementos de control, que permitan garantizar la no salinización del acuífero. En este caso se tendrán en cuenta la posible comunicación con el mar, la distancia al mar, el cono de depresión, y finalmente la posibilidad de establecer un sondeo de control entre el pozo y el mar.

~~7~~10. En las restantes masas de agua subterránea serán de aplicación las normas que con carácter general establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en cuanto a protección de acuíferos se refiere.

11. El mal estado cuantitativo o el mal estado químico de una masa de agua subterránea puede ser causa justificativa suficiente para la denegación de las solicitudes de aprovechamiento y del requerimiento de clausura o sellado de las captaciones preexistentes. En el caso de las masas de agua subterráneas afectadas por contaminación local, con carácter general e independientemente del destino de las aguas de la captación, se podrá exigir el sellado sanitario de los eventuales niveles contaminantes con objeto de preservar la calidad del agua subterránea.

Artículo 40. Sondeos para aprovechamientos geotérmicos

Este artículo se mantiene sin modificaciones.

6.4.8. Capítulo 7. Protección del dominio público hidráulico y calidad de las aguas

SECCIÓN 1. Normas generales, apeo y deslinde del Dominio Público Hidráulico

El título de esta sección se ha modificado, reduciéndolo exclusivamente a "Normas generales" ya que bajo él se incluyen más cuestiones de las que parecía indicar el anterior.

Artículo 41. Mejora de la morfología y calidad ambiental de los cauces

El artículo referido a la mejora de la morfología de los cauces se ha eliminado. Debe tenerse en cuenta que buena parte de los conceptos tratados en el referido artículo se encuentran incorporados al artículo 126 bis de la modificación del Reglamento de Planificación Hidrológica.

Artículo nuevo. Caudales máximos de avenida y determinación de zonas inundables

Se incorpora un nuevo artículo destinado a aclarar los procedimientos de cálculo de los caudales máximos y sobre la cartografía de inundabilidad.

Artículo 39. Caudales máximos de avenida y determinación de zonas inundables

1. En las autorizaciones de usos y actuaciones en áreas inundables definidas en los artículos siguientes el peticionario deberá considerar la inundabilidad en el estado actual de la zona. A falta de estudios específicos validados por la Administración Hidráulica, la cartografía de referencia para los distintos escenarios de probabilidad de inundación será la integrada en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables e inscrita en el Registro Central de

Cartografía de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional.

2. Para la determinación de la cartografía de inundabilidad, en tanto ésta no quede definida por la Administración Hidráulica, podrán emplearse los "Criterios técnicos para la elaboración de estudios hidráulicos" que figuran en el Anejo 9. En la elaboración de dichos estudios se realizará una estimación de los caudales de avenida considerados que, en ausencia de otros validados por la Administración Hidráulica, adoptarán como Caudal Máximo de Avenida los establecidos en el Plan Hidrológico Norte II, aprobado por Real Decreto 1664/1998.

Artículo 42. Protección contra inundaciones

Se han realizado diversa mejoras y ajustes del artículo referido a la protección contra inundaciones y parte de su contenido ha sido segregado a otros artículos. El artículo pasa a titularse "Limitaciones a los usos en la zona de policía inundable". Para mayor claridad se comentan punto por punto, marcando en rojo la nueva redacción y en negro la redacción sometida a consulta pública.

El apartado 1 contiene la introducción y justificación del artículo que se ha mejorado en cuanto a precisión de la redacción, sin variación sustancial, como se muestra seguidamente.

~~*1. De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas y en el RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, y sin perjuicio de lo que en el momento de su aprobación establezcan los planes de gestión del riesgo de inundación redactados de acuerdo con los artículos 11, 12 y 13 del RD 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación, este Plan Hidrológico determina la ordenación de usos del suelo para las diversas zonas del ámbito inundable que se detalla en los apartados siguientes, al margen de la situación básica de suelo rural de los mismos y de la preservación por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización (artículo 12.2 RDL 2/2008, de 20 de junio).*~~

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, sin perjuicio de lo que establezcan los planes de gestión del riesgo de inundación definidos en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión del riesgo de inundación, y al margen de la situación básica de suelo rural de los terrenos con riesgo de inundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2.a) del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en los apartados siguientes se establecen las limitaciones en el uso de la zona de policía inundable.

El apartado 2 es eliminado por resultar innecesario.

~~*2. Dentro de la llanura de inundación se diferencia la zona inundable y la zona de flujo preferente, definidas en el artículo 3 del RD 903/2010, de 9 de julio.*~~

El punto 3 del artículo base contiene los usos permitidos y no permitidos en la zona de flujo preferente y, en la segunda parte del mismo, la excepción, reservada a casos muy determinados, de construir en la zona de flujo preferente en suelo urbanizado. El contenido de este apartado ha sido adecuado y mejorado en la nueva redacción como puntos 2 y 3, tal como se muestra a continuación.

3. Los usos permitidos en la zona de flujo preferente deberán adecuarse a lo dispuesto en el artículo 9.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y serán los que no presenten vulnerabilidad frente a las avenidas, tales como:

a) Usos agrícolas: tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, selvicultura, viveros al aire libre y cultivos silvestres.

b) Uso ganadero no estabulado.

a) Usos recreativos, públicos y privados: parques y jardines, campos de golf, pistas deportivas, zonas de descanso, de natación, reservas naturales de caza, cotos de caza o pesca, circuitos de excursionismo o equitación.

Con carácter general no podrán ser autorizados:

i) Nuevos usos habitacionales incluidos las acampadas.

ii) Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso.

iii) Obras de reparación de edificaciones existentes que supongan una alteración de su ocupación en planta o de su volumen o el cambio de uso de las mismas que incremente su vulnerabilidad frente a las avenidas.

iv) Cerramientos y vallados que no sean diáfanos, tales como los cierres de muro de fábrica de cualquier clase.

v) Acopios de materiales de cualquier tipo de residuo, máxime cuando ocasionen una reducción significativa de la sección de desagüe, cuando puedan ocasionar la contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico o puedan flotar o ser arrastrados provocando la obstrucción de obras de drenaje, puentes, etc.

Con carácter excepcional, en un suelo que antes de la aprobación de este Plan Hidrológico, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.3 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, se encuentre en situación de suelo urbanizable, se podrá autorizar la construcción de edificaciones en la zona de flujo preferente, en solares con medianerías de edificaciones consolidadas a uno o ambos lados, siempre y cuando se de cumplimiento a los siguientes requisitos:

- Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones del núcleo urbano.

- Que los usos habitacioneales se sitúan por encima de la cota de inundación peligrosa de la zona de flujo preferente en ese punto.

- Que se cumplen, en su caso, los criterios y medidas preventivas establecidas en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación para esa localidad.

- Que se cumplen las medidas de prevención del riesgo establecidas en aplicación del artículo 15 del RDL 2/2008, de 20 de junio, y del artículo 11.2 del RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, por las autoridades competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

- Que existe un plan de protección de personas y bienes, específico para la autorización que se solicita, informado favorablemente por la administración competente en materia de protección civil.

~~- Que no se trata de instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, ni de centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de carburante, granjas y criaderos de animales.~~

~~- Que el solicitante de la autorización manifieste expresamente que conoce y asume el riesgo existente en la nueva edificación, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección.~~

~~En solares aislados solo podrá aplicarse esta excepción cuando se trate de rehabilitación, mejora, sustitución o modernización de edificaciones preexistentes. En el resto de los casos se utilizarán las medidas de gestión que contemple la legislación aplicable de manera que las edificaciones y/o usos que en ellos se dispongan resulten finalmente compatibles con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 846/1986, de 11 de abril, en la redacción introducida por el RD 9/2008, de 11 de enero) respecto a la zona de flujo preferente.~~

~~De las solicitudes que se otorguen para edificar en la zona de flujo preferente, de acuerdo con esos requisitos, se dará traslado al Registro de la Propiedad para su inscripción en el folio correspondiente como condiciones del dominio sobre la finca objeto de solicitud.~~

2. Los usos y actividades permitidos en la zona de flujo preferente deberán adecuarse a lo dispuesto en el artículo 9.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y serán los que no presenten vulnerabilidad frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha zona.

Con carácter general, en esta zona, no podrán ser autorizados:

a) Garajes y sótanos.

b) Las acampadas, en todo caso.

c) Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso, incluyendo centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de carburante, granjas y criaderos de animales.

d) Obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación o el cambio de uso de edificaciones existentes que comporten un aumento de la vulnerabilidad frente a las avenidas, a excepción de las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.

e) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los cierres de muro de fábrica de cualquier clase.

f) Rellenos y acopios de materiales o residuos de todo tipo, máxime cuando puedan ocasionar una reducción significativa de la sección de desagüe, provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico y/o flotar o ser arrastrados provocando la obstrucción de obras de drenaje y puentes.

g) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce, con excepción de las de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones subterráneas que en todo caso, salvo zonas puntuales en que no exista solución viable, deberán situarse fuera de la zona de servidumbre del dominio público hidráulico.

3. Con carácter excepcional, en un suelo que a la entrada en vigor de este Plan Hidrológico se encuentre en la situación básica de suelo urbanizado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, se podrá autorizar la construcción de edificaciones en la zona de flujo preferente en solares con medianerías de edificación consolidada a uno o a ambos lados y en solares aislados completamente insertos en el interior del suelo urbanizado preexistente.

En cualquiera de estos dos supuestos excepcionales las edificaciones y/o usos que en ellos se dispongan deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones del núcleo urbano.

b) Que los usos residenciales se sitúen por encima de la cota de inundación de periodo de retorno de 500 años.

c)Que sea compatible con los criterios y medidas preventivas que se establezcan, en su caso, en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para esa localidad.

d) Que no se trate de instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, ni de centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de carburante, depuradoras, estaciones eléctricas, granjas y criaderos de animales.

e) Que el solicitante de la autorización manifieste expresamente que conoce y asume el riesgo existente en la nueva edificación y las medidas de protección civil aplicables al caso, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección.

De las autorizaciones que se otorguen para edificar en la zona de flujo preferente, de acuerdo con estos requisitos, se dará traslado al Registro de la Propiedad para su inscripción, con cargo al peticionario, como condición del dominio sobre la finca objeto de solicitud.

El punto 4 de la redacción base se refería a la posibilidad de exigir un estudio hidráulico para las solicitudes de autorización en la zona de policía inundable, fuera de la zona de flujo preferente, así como a los usos a evitar, además el punto 7 incluía algunas prohibiciones adicionales. Estos dos apartados ha sido reelaborados en un nuevo punto 4, manteniendo lo referido a los estudios hidráulicos y mejorando y matizando las prohibiciones de uso.

~~*4. Para las solicitudes de autorización en la zona de policía inundable, fuera de la zona de flujo preferente, se podrá exigir un estudio hidráulico y ambiental de detalle que defina y justifique las medidas correctoras necesarias para hacer factible la actuación. En cualquier caso, estas medidas deberán ser ambientalmente asumibles y no agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno.*~~

~~*En esta zona se evitará el establecimiento de las infraestructuras públicas esenciales tales como hospitales, bomberos, seguridad pública o depósitos de emergencia, en las que debe asegurarse su accesibilidad en situaciones de emergencia por graves inundaciones.*~~

~~*Como criterio general, las nuevas edificaciones deberán realizarse a una cota no alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500 años.*~~

~~*7. Con carácter general, no deberán realizarse garajes y/o sótanos en zonas inundables. En el supuesto de que se cumplan las condiciones para su autorización, se deberán impermeabilizar con cierres estancos, respiraderos sobre la cota de inundación y elevación del umbral de acceso mediante rampas o escalones hasta dicha cota. En todo caso, deben evitarse los usos residenciales, industriales y comerciales a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle, salvo almacenaje o depósito de bienes o sustancias que no puedan resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno como consecuencia de arrastre, dilución o infiltración.*~~

4. Para las solicitudes de autorización en la zona de policía inundable, fuera de la zona de flujo preferente, en el suelo que a la entrada en vigor de este Plan Hidrológico se encuentre en la situación de suelo urbanizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, se podrá exigir un estudio hidráulico de detalle que defina y justifique las medidas correctoras necesarias para hacer factible la actuación, las cuales deberán ser en todo caso ambientalmente asumibles y no agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno.

Con carácter general, en esta zona, no podrán ser autorizados:

a) Garajes y sótanos, salvo que se impermeabilicen con cierres estancos, dispongan de respiraderos sobre la cota de inundación y cuyos accesos se encuentren elevados mediante rampas o escalones.

b) Las acampadas en todo caso.

c) Las infraestructuras públicas esenciales en las que deba asegurarse su accesibilidad en situación de emergencia por graves inundaciones, tales como centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil.

d) Acopios de materiales o residuos de todo tipo, máxime cuando puedan ocasionar una reducción significativa de la sección de desagüe, provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico y/o flotar o ser arrastrados provocando la obstrucción de obras de drenaje y puentes.

En el suelo urbanizado, salvo imposibilidad material debidamente justificada, los nuevos usos residenciales deberán disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500 años. Esta limitación se ampliará a todos los usos que resulten vulnerables en terrenos que se encuentren en situación básica de suelo rural según el artículo 12.2 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

Los puntos 5 y 6 de la redacción base de este artículo se referían a defensas estructurales frente a inundaciones. Estas cuestiones han sido segregadas a un nuevo artículo que se comenta a continuación.

Por último el contenido del punto 8 de la redacción base ha sido integrado en el apartado 1 del nuevo artículo ya mencionado sobre "Caudales máximos de avenida y determinación de zonas inundables".

Artículo nuevo. Medidas de protección frente a inundaciones

Los puntos 5 y 6 del artículo anterior según la redacción base, han sido sustituidos por el artículo que se muestra seguidamente. Además este nuevo artículo incluye conceptos relacionados con los Protocolos Generales de Colaboración entre Administraciones que en parte se encontraban en el artículo "Definición del Corredor Fluvial" del texto base.

Artículo 41. Medidas de protección frente a inundaciones

1. En el suelo que esté en situación básica de urbanizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, cuando para la protección de personas y bienes sea necesaria la realización de actuaciones estructurales de defensa, el nivel de protección será el establecido, en su caso, por el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para esa localidad. A falta de esta previsión, y con carácter general, se diseñará el encauzamiento para que el núcleo urbano quede fuera de la zona inundable con periodo de retorno de al menos 100 años.

2. En terrenos en situación básica de suelo rural de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 del texto refundido de la Ley de Suelo, las eventuales actuaciones, incluidas medidas estructurales y no estructurales, necesarias para la protección de las personas y bienes frente a inundaciones tendrán que localizarse exteriores a la zona de alta probabilidad de inundación del artículo 8.1.a) del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión del riesgo de inundación, en la situación de inundabilidad previa a las actuaciones, y siempre y cuando las medidas a adoptar garanticen resguardo frente a los niveles de las aguas en las avenidas de periodo de retorno de 500 años.

Con carácter excepcional se podrá permitir la localización de tales actuaciones en la zona de alta probabilidad de inundación del artículo 8.1.a) del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión del riesgo de inundación, siempre y cuando las medidas a adoptar garanticen resguardo frente a las avenidas y cuenten expresamente con el previo pronunciamiento favorable de la Administración Hidráulica, y sin que ello deba implicar necesariamente la previsión por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística del paso de dichos terrenos en situación básica de suelo rural a la de suelo urbanizado.

3. La Administración Hidráulica promoverá, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y 23 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Protocolos Generales de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales al objeto de establecer los programas de medidas que posibiliten una ordenación de los usos en la zona inundable que contribuya, además de a la protección de las personas y bienes frente a inundaciones de un río o tramos de río, a la consecución de los objetivos de preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los cauces en la laminación de caudales y carga sólida transportada.

4. Los citados protocolos serán, en la fase de avance de la formulación de la primera elaboración de un planeamiento general urbanístico o cuando se proyecte la revisión total o

parcial de uno vigente, y sin perjuicio del informe del artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el instrumento de coordinación interadministrativa para llegar a la solución adecuada en los casos en que se prevea el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado de la zona inundable.

Artículo 43. Normas específicas para el diseño de puentes, coberturas y modificación del trazado de cauces

Las modificaciones que se ha juzgado conveniente establecer a este artículo se muestran a continuación:

Artículo 42. Normas específicas para el diseño de puentes, coberturas y modificación del trazado de cauces

1. La construcción de un puente en zona urbana requiere, con carácter general, al menos dejar libre la zona de flujo preferente. Hasta 30 m de luz tendrá un solo vano, para luces mayores tendrá un vano con luz mayor de 25 m, y otro u otros dos con luces mayores de 6 m. En tramos rectos el vano de más de 25 m ~~se situará~~, y otro u otros en el centro, y en tramos curvos en el exterior de la curva. El resguardo desde el nivel de aguas a la cara inferior del tablero será, si es posible, de un metro o mayor para la avenida de 500 años de periodo de retorno. En cualquier caso en el punto central del puente este resguardo será como mínimo igual al 2,5% de la anchura del puente.

2. En los puentes de infraestructuras de comunicación que discurran por zona rural, las luces y distribución de los vanos se adaptarán a lo definido en el párrafo precedente, y el resguardo desde la superficie libre del agua a la parte inferior del tablero será el que resulte de interpolar entre los siguientes datos:

Tabla 8. Resguardos para el diseño de puentes

Cuenca (km²)	Resguardo (m)
5	0,15
10	0,25
25	0,40
50	0,50
100	0,75
1.000	1,00
2.000	1,50

Los dos primeros párrafos del punto 3 se redactan nuevamente, según se muestra a continuación, y se pasan a presentarse como punto 5. Además los dos párrafos finales se eliminan por suponer una recomendación innecesaria en un contexto normativo.

~~3. Con carácter general se evitarán los encauzamientos cubiertos, máxime cuando se prevea arrastres de sólidos y flotantes.~~

~~En el supuesto de que sea inevitable la cobertura de un cauce, si la cuenca drenada es superior a 0,5 km² la sección será visitable, con una altura de al menos 2 m y una anchura~~

~~*no inferior a 2 m. Únicamente podrá admitirse la condición de "inevitable" para los supuestos de infraestructuras y en los casos especiales de cabeceras de cuenca en áreas de intensa urbanización con superficies drenantes inferiores a 1 km², mediante el correspondiente estudio de justificación hidráulica.*~~

~~*Se procurará ir eliminando progresivamente las coberturas existentes, sobre todo para los cauces con cuencas drenantes superiores a 5 km2, e ir dimensionando convenientemente las coberturas existentes en los cauces con cuencas drenantes inferiores a 5 km2 en las que el desarrollo urbano intensivo ya se encuentre muy consolidado.*~~

~~*En los núcleos consolidados en los que no fuera posible la eliminación de las coberturas la nueva edificación dará cumplimiento a la legislación de aguas.*~~

5. Como criterio general no será autorizable la realización de coberturas en los tramos fluviales con cuenca drenante superior a 0,5 Km². En los cauces con superficie de cuenca vertiente inferior a esta cifra también se evitarán los encauzamientos cubiertos cuando se prevea arrastres de sólidos y flotantes, salvo en casos de manifiesta inevitabilidad en los cuales ésta deberá ser debidamente justificada.

Excepcionalmente se podrá autorizar la cobertura de cauces en cuencas de hasta 1 km² en casos de infraestructuras estratégicas y en los casos especiales de cabeceras de cuenca en áreas de intensa urbanización, previa justificación de la inexistencia de otras alternativas viables menos agresivas ambientalmente y con menor riesgo. En estos supuestos, la sección será visitable, con una altura de, al menos, 2 m y una anchura no inferior a 2 m.

El punto 4 de la redacción base pasa a ser el número 3 y el 5, relativo a drenaje transversal de vías de comunicación, se elimina por considerarse una limitación planteada de modo general que puede resultar inadecuada en determinados casos.

~~4~~3. Los puentes de caminos vecinales, en zona rural, tendrán mayor capacidad de desagüe que los tramos inmediatamente aguas arriba y aguas abajo. Hasta 20 m de luz el cauce se salvará con un solo vano; para luces mayores habrá un vano de 15 m y otro u otros dos con luces mayores de 2 m. La parte inferior del tablero quedará a 25 cm por encima de los terrenos colindantes, no así el camino de acceso que hasta las inmediaciones del puente se establecerá al nivel de los terrenos, de manera que se inunde antes el camino que el puente.

~~*5. En los drenajes transversales de vías de comunicación no se pueden añadir a una vaguada áreas vertientes superiores en más de un 10% a la superficie de la cuenca propia. En caso de incumplir dicha condición, deberá aumentarse la capacidad de desagüe del cauce de la vaguada receptora de modo que con la avenida de 500 años de periodo de retorno no se produzcan sobreelevaciones con respecto a la situación inicial.*~~

El punto 6 de la redacción base pasa a ser el nuevo número 4.

~~6~~4. Cuando las avenidas de un cauce afecten a una zona urbana, cualquier puente aguas abajo de la citada zona requerirá un estudio general que contemple los efectos sobre la referida zona para su autorización.

Por último los conceptos referidos a la alteración del trazado de cursos de agua, que en la redacción base eran tratados en el punto 7, en la mejora realizado se desglosan y matizan en los nuevos puntos 6 y 7.

~~*7. Queda prohibida la alteración del trazado de los cursos de agua con superficie de cuenca afluente superior a 1 km2 salvo para la prevención de inundaciones de zonas urbanas*~~

~~*consolidadas o que presenten las características del suelo urbanizado, infraestructuras existentes o para el caso de nuevas infraestructuras de carácter estratégico. Estará permitida la alteración del trazado en aquellos casos en los que se realice para aumentar la naturalidad del cauce.*~~

6. Con carácter general queda prohibida la alteración del trazado de cursos de agua con cuenca afluente superior a 1 km², salvo que sea necesaria para disminuir el riesgo de inundación de áreas urbanas, se contemple en el oportuno Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y/o sea autorizado por la Administración Hidráulica. Asimismo estará permitida la alteración del trazado en aquellos casos en los que se realice para aumentar la naturalidad del cauce previa autorización de la Administración Hidráulica. La alteración de cursos de agua con cuenca inferior a 1 km² exigirá la realización de estudios de alternativas que justifiquen la actuación, así como la adopción de las oportunas medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

7. Excepcionalmente se podrá permitir la alteración de cursos de agua de hasta 2 km2 de cuenca vertiente cuando se trate de infraestructuras de carácter estratégico y actuaciones urbanísticas de interés supramunicipal, así contempladas en los instrumentos de ordenación territorial que hayan sido informados favorablemente por la Administración Hidráulica.

En los casos anteriores será exigible la realización de un estudio de alternativas que justifique la actuación y evalúe las afecciones medioambientales, hidráulicas y urbanísticas derivadas de la intervención. Dicho estudio de alternativas deberá proponer la adopción de las necesarias medidas preventivas, correctoras y compensatorias a incorporar en la autorización que, en su caso, se otorgue.

Artículo 44. Definición de Corredor Fluvial

Para evitar la posibilidad de que se invadan competencias propias de los órganos autonómicos para la ordenación del territorio o competencias municipales, que quizás pudiera darse en el caso de los Corredores Fluviales, en particular en el caso del Ámbito de Protección Específica del Medio Fluvial, y de los Protocolos Generales relativos a la Protección del Medio Fluvial y la Prevención del Riesgo de Inundaciones a suscribir con los Ayuntamientos, se considera adecuado eliminar este artículo, no obstante, como ya se ha mencionado, una parte del contenido de este artículo se ha incluido como apartados 3 y 4 del nuevo artículo titulado "Medidas de protección frente a inundaciones".

~~*Artículo 44. Definición de Corredor Fluvial*~~

~~*1. Las llanuras aluviales son terrenos genéticamente asociados a la dinámica fluvial que, de modo natural, están expuestos a los efectos de las inundaciones durante avenidas. Dentro de estas llanuras aluviales existen sectores adyacentes a los cauces denominados Corredores Fluviales que, debido a sus características geomorfológicas, se encuentran afectados con frecuencia por las inundaciones, siendo además responsables de evacuar la mayor parte de la carga líquida y sólida durante avenidas.*~~

~~*2. Con el propósito de garantizar la protección del dominio público hidráulico, la conservación del espacio necesario para su funcionamiento, la preservación de los ecosistemas acuáticos asociados, y en evitación de riesgos graves para las personas y los bienes, el Organismo de cuenca definirá los Corredores Fluviales en los cauces públicos de su ámbito territorial.*~~

~~*Estos Corredores Fluviales comprenderán, además de los terrenos incluidos en las zonas de flujo preferente, cuantos sean necesarios para la prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, así como aquellos precisos para el mantenimiento de la estructura hidromorfológica del río.*~~

~~*3. Se define Ámbito de Protección Específica del Medio Fluvial el espacio colindante con los Corredores Fluviales que completa la protección ofrecida por ellos. Este Ámbito de Protección Específica del Medio Fluvial será definido por el Organismo de cuenca incluyendo las figuras de protección natural existentes y contornos de protección definidos por una distancia fija a las orillas en función de las características del tramo de cauce.*~~

~~*4. El Organismo de cuenca promoverá la realización de Protocolos Generales relativos a la Protección del Medio Fluvial y la Prevención del Riesgo de Inundaciones con los ayuntamientos de su ámbito territorial, en los que se refleje el compromiso de las administraciones en la protección de los Corredores Fluviales, del Ámbito de Protección Específica del Medio Fluvial y de las zonas torrenciales del cada término municipal.*~~

~~*Se promoverá que en los terrenos definidos en el Protocolo y que se encuentren en situación básica de suelo rural, sean preservados por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, propiciándose su clasificación y calificación en los instrumentos oportunos de modo que quede asegurada su protección.*~~

~~*En el suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado mediante actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización, según las situaciones básicas de suelo definidas en el artículo 12 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, el cual no cuente con anterioridad a la entrada en vigor de este Plan con proyecto de ejecución aprobado o eficaz, los Corredores Fluviales deberán quedar libres de toda construcción y de cualquier actividad vulnerable frente a las avenidas, o que supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe en dicha vía.*~~

~~*Con este propósito, la ordenación o zonificación de tales instrumentos dispondrá la localización en los Corredores Fluviales de usos dotacionales de espacios libres o zonas verdes, en consonancia con el régimen de usos permitidos en la zona de flujo preferente.*~~

SECCIÓN 2. Zonas protegidas

Artículo 45. Criterios generales

Se mejora la redacción de este artículo haciendo recaer en cada una de las administraciones competentes, la obligación de transmitir la información sobre las distintas zonas protegidas, a la Administración Hidráulica.

Artículo 44. Criterios generales

~~*De todas las zonas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas o que potencialmente puedan ser incorporadas al mismo se solicitará, en su caso, la información pertinente a los organismos encargados de su protección y gestión.*~~ *La administración competente en la designación de las zonas del Registro de Zonas Protegidas en sus distintas categorías y tipologías comunicará a la Administración Hidráulica las modificaciones, altas y/o bajas, relacionadas con dichas designaciones para la actualización del mencionado registro. Además se tendrán en cuenta los instrumentos de ordenación y gestión que puedan existir.*

Artículo 46. Masas de agua para abastecimiento

El artículo permanece inalterado a excepción de la mejora en la redacción del último punto

6. En el caso de los embalses de abastecimiento, la delimitación de los Perímetros de Protección Definitivos deberá tener en cuenta, no solo la cuenca de escorrentía directa ~~(terreno cuyas aguas superficiales drenen de forma directa al embalse),~~ superficial y subterránea sino también la cuenca de los eventuales tributarios trasvasados al embalse.

Artículo 47. Zonas designadas para la protección de hábitat o especies relacionadas con el medio acuático

Se mejora la redacción del siguiente modo:

> Artículo 46. Zonas designadas para la protección de hábitat o especies relacionadas con el medio acuático
>
> En el caso de autorizaciones y concesiones en los ~~ámbitos de las Zonas de Especial Conservación (ZEC)~~ lugares "Red Natura 2000" se deberá solicitar ~~al~~ al órgano competente en la materia un informe en el que dictamine si puede derivarse una afección apreciable al lugar y, en cuyo caso, si es necesario realizar la adecuada evaluación en los términos del artículo 6.3 ~~informe a los organismos competentes en su gestión y en la interpretación~~ de la Directiva 92/43/CEE y Directiva 2009/147/CE.

Artículo 48. Perímetros de protección de aguas minerales y termales

No se modifica este artículo.

Artículo 49. Reservas naturales fluviales

No se modifica este artículo.

Artículo 50. Zonas húmedas

Se añaden algunas matizaciones.

> *Artículo 49. Zonas húmedas*
>
> *El otorgamiento de concesiones y/o autorizaciones con previsible afección a las zonas húmedas o a sus zonas de protección, quedará condicionado al resultado del análisis de la posible repercusión ambiental debiéndose estudiar con detalle aquellos aspectos que incidan en la protección del dominio público hidráulico y dominio público marítimo terrestre y del medio biótico o abiótico ligado al mismo y en la prevención de las afecciones al régimen natural.*

Artículo 51. Zonas de protección especial

No se modifica este artículo, salvo la eliminación de la referencia expresa al deslinde de los ríos y delimitación de las llanuras de inundación.

> *Artículo 50. Zonas de protección especial*
>
> *1. En estas zonas protegidas, con carácter general, se deberá dar cumplimiento a sus respectivos documentos de ordenación o normativas, evitando aquellas intervenciones sobre el Dominio Público Hidráulico y Dominio Público Marítimo Terrestre y sus zonas de protección que puedan alterar el medio físico natural, la fauna o la flora.*

2. El otorgamiento de concesiones y/o autorizaciones con previsible afección a las zonas de protección especial o a sus zonas de protección, quedarán condicionados al resultado del análisis de la posible repercusión ambiental.

3. En los Tramos de Interés Medioambiental se arbitrarán las medidas de control y seguimiento necesarias para mantener la calidad natural de las aguas tanto de los cursos fluviales como de los sistemas subterráneos conectados a ellos.

En general se evitarán todas aquellas intervenciones sobre el cauce tendentes a alterar la fauna y la flora naturales propias del tramo.

~~*Se procederá al deslinde de los ríos concediendo especial régimen de protección a los sistemas marginales y de ribera, y delimitando las denominadas llanuras de inundación.*~~

4. En los Tramos de Interés Natural se limitarán las actividades que puedan alterar no sólo la fauna y la flora naturales del tramo, sino también el medio físico natural.

SECCIÓN 3. Vertidos

Artículo 52. Autorizaciones de vertido

Se ha modificado la redacción del artículo sometido a consulta pública, incluyendo ciertas precisiones, referentes a la posibilidad de que las autorizaciones de vertido o su revisión puedan exigir las mejores técnicas disponibles, en especial aquellas que redunden en un uso más eficiente disminuyendo el vertido generado, así como la eliminación de algunas referencias innecesarias. Las modificaciones se muestran con detalle a continuación.

Artículo 51. Autorizaciones de vertido

1. De acuerdo con los artículos 100.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y 245.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.

2. Conforme a los artículos 100.2 y 101.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y 245.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, las autorizaciones de vertidos establecerán las condiciones en que deben realizarse, con el objeto de conseguir los objetivos medioambientales establecidos.

3. La autorización de vertido de la Administración Hidráulica tendrán en todo caso, el carácter de preceptiva y previa para la implantación y entrada en funcionamiento de la industria o actividad que se trata de establecer, modificar o trasladar y precederán a la licencia de actividad que haya de otorgar las administración o, en su caso, a la comunicación previa de actividad clasificada.

~~3~~4. Todo vertido debe cumplir las características de emisión establecidas en la normativa vigente que le sean de aplicación, y serán tales que se cumplan las normas y objetivos ambientales fijados para la masa de agua en que se realiza el vertido, tanto considerando éste individualmente como en conjunto con los restantes vertidos. Además, se deberán cumplir las normas definidas en los artículos siguientes.

~~4~~5. De acuerdo con los artículos 104.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y 261 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, ~~el Organismo de cuenca~~la Administración Hidráulica podrá revisar las autorizaciones de vertido para adecuar los vertidos a los objetivos medioambientales que establece el presente Plan Hidrológico ~~de cuenca~~. Para ello, en el procedimiento de revisión de la autorización de vertido se tendrá en cuenta la aplicación de las mejores técnicas disponibles; en particular, aquellas que redunden en un uso más eficiente, disminuyendo el vertido generado.

6. En el caso de los vertidos desde tierra al dominio público marítimo terrestre se dará cumplimiento a lo dispuesto en la Sección II del Capítulo IV de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su reglamento de desarrollo, en el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar así como al resto de normativa que sea de aplicación.

~~5~~7 ~~El Organismo de cuenca~~ La Administración Hidráulica podrá imponer ~~a los vertidos~~ la obligación de regular ~~su~~ el caudal de aguas residuales ~~y que se haga~~ antes de la depuración~~, salvo excepciones justificadas~~ cuando los objetivos medioambientales así lo requieran.

8. La conexión a redes de saneamiento público de los vertidos de urbanizaciones aisladas o polígonos industriales que, por sus características de biodegradabilidad, puedan ser aceptados por las instalaciones de un sistema de saneamiento gestionado por Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas será considerada como opción preferente frente a la alternativa de depuración individual con vertido directo al dominio público hidráulico o al dominio público marítimo terrestre. Todo ello, sin perjuicio de que la Administración que corresponda imponga las condiciones que estime pertinentes en la autorización de vertido que debe otorgar conforme al artículo 101.2 del texto refundido de la Ley de Aguas y a la normativa vigente en materia de vertidos desde tierra al dominio público marítimo terrestre.

~~6~~9. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, las ~~Las~~ aguas de escorrentía pluvial que se contaminen con motivo de determinada actividad y se recojan en un sistema colector, ya sea unitario o separativo, deberán ~~depurarse de tal manera que, tras su vertido al dominio público hidráulico, no ocasionen el incumplimiento de las normas y objetivos medioambientales fijados para la masa de agua en que se realiza el vertido. A tal fin, el causante de los citados vertidos deberá obtener la autorización de vertido del Organismo de cuenca~~ someterse al procedimiento de autorización de vertido ante la Administración Hidráulica.

~~7. La evacuación de aguas residuales domésticas mediante instalaciones de depuración y filtración a través del terreno, en los casos en los que no se produjera un aporte efectivo de contaminación al dominio público hidráulico, no precisará la tramitación de una autorización de vertido en los términos previstos en los artículos 245 y siguientes del Reglamento de dominio público hidráulico.~~

Artículo 53. Vertidos procedentes de zonas urbanas

Se ha considerado conveniente la modificación de parte del contenido del artículo, en concreto en lo referente a la mejora de la redacción así como a la posible exigencia de que los aliviaderos de crecida dispongan de una cámara de decantación de sólidos, y dispositivos

para impedir la salida de grasas y aceites por los aliviaderos, por considerar innecesaria la inclusión de este apartado en la normativa. Además se ha incrementado de 400 a 2.500 m^3/día, y el 20% del caudal de dilución del río, la obligatoriedad de instalar, como mínimo, dos líneas de depuración o de bombeo, según corresponda.

El artículo se modifica como se señala seguidamente:

Artículo 52. Vertidos procedentes de zonas urbanas

1. Los proyectos de ~~nuevas urbanizaciones~~ nuevos desarrollos urbanos deberán justificar la conveniencia de establecer ~~preferentemente~~ redes de saneamiento separativas o unitarias para aguas residuales ~~y aguas~~ de escorrentía ~~pluvial.~~ , así como plantear medidas que limiten la aportación de aguas de lluvia a los colectores.

2. ~~No~~ En las redes de colectores de aguas residuales urbanas no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía ~~de lluvia~~ procedentes de zonas exteriores ~~al casco urbano en las redes de colectores de aguas residuales urbanas~~ a la aglomeración urbana o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron diseñados, salvo ~~las generadas en las zonas de actividad industrial situadas fuera del mismo o~~ en casos debidamente justificados.

3. Salvo estudios específicos, la capacidad de los colectores aguas abajo de los dispositivos de alivio de los sistemas unitarios de saneamiento será, como mínimo, de 20 litros/segundo por cada 1.000 habitantes equivalentes.

~~4. El Organismo de cuenca podrá exigir, cuando lo estime necesario para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad, que los aliviaderos de crecida dispongan de una cámara de decantación de sólidos, así como dispositivos para impedir la salida de grasas y aceites por los aliviaderos.~~

~~5~~4. Cuando como consecuencia del fallo de la E.D.A.R. sean previsibles daños importantes en el río a juicio ~~del Organismo cuenca~~ la Administración Hidráulica, se ~~impondrá~~ podrá imponer la condición de aumentar el número de líneas de depuración. Esta condición también es aplicable a los bombeos de agua residual del sistema colector.

En cualquier caso, cuando el caudal de vertido supere ~~400~~ 2.500 m^3/día y el 20% del caudal de dilución del río, será obligatorio instalar, como mínimo, dos líneas de depuración o de bombeo, según corresponda.

Artículo 54. Vertidos procedentes de zonas industriales

Se ha considerado conveniente la modificación de parte del contenido del artículo dedicado a los vertidos procedentes de zonas industriales y la inclusión de algunos aspectos adicionales, tal y como se muestra seguidamente.

Artículo 53. Vertidos procedentes de zonas industriales

1. En las redes de colectores de aguas residuales de ~~las industrias~~ zonas industriales no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía ~~de lluvia producidas en~~ procedentes de zonas exteriores a la implantación de la actividad industrial, salvo ~~excepciones justificadas,~~ en casos debidamente justificados

~~2. El vertido indirecto de una industria o polígono industrial a través de un sistema de saneamiento gestionado por un Órgano Gestor o Administración Local, se considera que es una opción preferente a la alternativa de depuración individual con vertido directo al Dominio Público Hidráulico o Dominio Público Marítimo Terrestre. No obstante, cuando por~~

~~*causas técnicas o económicas dicha conexión sea inviable, se podrá optar por dicha alternativa, siempre y cuando, se justifique que la depuración recibida será, al menos, equivalente a la alcanzada por la EDAR del citado sistema de saneamiento y además, la alternativa no suponga un mayor impacto en las masas de agua del medio receptor.*~~

~~*3*~~*2. La incorporación de aguas residuales de una industria a la red de colectores de otra antes de la depuración, requerirá que, en la autorización de vertido de la industria receptora, se incluyan las características del flujo de aguas residuales que se incorporan.*

Si la incorporación se realiza después de la depuración, requerirá autorización administrativa cada uno de los efluentes, pudiendo utilizarse una red común de evacuación de los efluentes depurados.

~~*4*~~*3. No se permitirá la llegada a los aliviaderos de crecida de aguas con sustancias peligrosas del Anexo IV del Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, ni de aguas de proceso industrial. Sólo se permitirá la utilización de aliviaderos de crecida para las aguas residuales asimilables a urbanas.*

~~*5*~~*4. Las industrias que incluyan procesos químicos~~*, biológicos o radioactivos, que sean capaces de provocar vertidos accidentales de sustancias peligrosas,* ~~*tendrán*~~ *deberán disponer de tanques de almacenamiento o de obstáculos físicos que impidan eventuales vertidos al sistema fluvial o acuífero.*

~~*6. Con objeto de evitar los problemas que pudieran originarse por causa de paradas súbitas o programadas de las estaciones depuradoras, el Organismo de cuenca podrá exigir el uso de elementos de retención y otras medidas adicionales de emergencia, que permitan el almacenamiento del agua sin tratar; para la determinación de dichos elementos se tendrán en cuenta las características del vertido y del medio receptor.*~~

5. El vertido procedente de instalaciones industriales con toma propia podrá contener parámetros contaminantes no característicos de la actividad industrial, siempre que el titular acredite que dicha contaminación procede de las aguas de captación. Dicha acreditación puede presentarla tanto con la solicitud de autorización de vertido como con los sucesivos controles de los vertidos autorizados.

Si las aguas de la toma contuvieran parámetros contaminantes característicos de la actividad industrial, la Administración Hidráulica tendrá en cuenta la acreditación presentada por el titular, para establecer los valores límite de emisión que se autorizan o, en su caso, para la modificación de los mismos, con el objetivo de cumplir las normas de calidad ambiental en el medio receptor.

Artículo nuevo. Sistemas generales de saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas

Se ha insertado un nuevo artículo sobre "Sistemas generales de saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas".

El objeto del apartado 1° de este artículo es que, en la solicitud de autorización de vertido, el peticionario pueda incluir el anteproyecto en lugar del proyecto definitivo. No se considera conveniente que la Administración Hidráulica tenga que emitir informe con anterioridad a la solicitud de autorización de vertido.

A continuación se establece la posibilidad de que la Administración Hidráulica pueda exigir en las estaciones depuradoras de aguas residuales de nueva construcción que sirven a

aglomeraciones urbanas superiores a 10.000 habitantes equivalentes, la implantación de sistemas de control en continuo del funcionamiento de las instalaciones y de la calidad del efluente.

Seguidamente se incorporan conceptos expresados en los artículos 246.2.e', 259.ter.1.c, y 259.ter.1.d de la modificación del RDPH, centrados en la obligación de adjuntar en las solicitudes de autorización de vertido de aguas residuales urbanas, documentación técnica que desarrolle y justifique adecuadamente las características del sistema colector de saneamiento y las medidas correctoras o aliviaderos previstos para limitar la contaminación por desbordamiento en episodios de lluvias; teniendo en cuenta que los aliviaderos deberán dotarse de los elementos que permitan retener y evacuar hacia la estación depuradora las primeras aguas de escorrentía, que contienen elevadas concentraciones de contaminantes, y reducir la evacuación al medio receptor de, al menos, sólidos gruesos y flotantes (cámaras de retención, pantallas deflectoras de separación de flotantes, dispositivos de regulación de admisión de caudales al colector, etc.).

Además en tiempo seco no se admitirán vertidos por los aliviaderos.

Finalmente se incorpora una redacción relacionada con el artículo 246.3.c de la modificación del RDPH y de su Disposición transitoria tercera, referida a la posibilidad de requerir a los titulares de autorizaciones de vertido de sistemas de saneamiento la presentación de un plan de minimización para reducir la contaminación por desbordamiento de aguas de escorrentía, en el que se deberá incluir un conjunto de medidas que comprendan estudios técnicos de detalle para optimizar el transporte de volúmenes de aguas residuales y de escorrentía hacia las estaciones depuradoras, reduciendo el impacto de los desbordamientos de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia; asimismo se expresarán los plazos de ejecución y sistemas de control de los alivios (posibilidad de tomar muestras, aforar el efluente aliviado y el incorporado al interceptor).

> *Artículo 54. Sistemas generales de saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas*
>
> *1. Con anterioridad a la solicitud de la autorización de vertido el promotor podrá presentar ante la Administración Hidráulica un anteproyecto con la definición de las infraestructuras generales de saneamiento y depuración.*
>
> *A partir de dicha documentación la Administración Hidráulica emitirá una evaluación preliminar sobre la adecuación del anteproyecto al cumplimiento de las normas de calidad y objetivos ambientales y sobre las características de emisión del vertido, requiriendo en su caso al solicitante para que introduzca las correcciones oportunas en el proyecto que elabore para la solicitud de la autorización de vertido.*
>
> *2. En el caso de las estaciones depuradoras de aguas residuales de aglomeraciones urbanas superiores a 10.000 habitantes equivalentes que viertan a masas de agua en estado peor que bueno o a masas directamente relacionadas con ellas, la Administración Hidráulica podrá exigir la implantación de sistemas de control en continuo del funcionamiento de las instalaciones y de la calidad del efluente.*
>
> *3. En las solicitudes de autorización de vertido de aguas residuales urbanas, el peticionario deberá adjuntar documentación técnica que desarrolle y justifique adecuadamente las características del sistema colector de saneamiento y las medidas correctoras o aliviaderos previstos para limitar la contaminación por desbordamiento en episodios de lluvias.*

Los aliviaderos deberán dotarse de los elementos que permitan retener y evacuar hacia la estación depuradora las primeras aguas de escorrentía, que contienen elevadas concentraciones de contaminantes, y reducir la evacuación al medio receptor de, al menos, sólidos gruesos y flotantes, como cámaras de retención, pantallas deflectoras de separación de flotantes, dispositivos de regulación de admisión de caudales al colector y otros.

En ausencia de precipitaciones no se admitirán vertidos por los aliviaderos.

4. La Administración Hidráulica podrá requerir a los titulares de autorizaciones de vertido de sistemas de saneamiento la presentación de un plan de minimización para reducir la contaminación por desbordamiento de aguas de escorrentía. En dicho plan se deberá incluir un conjunto de medidas que comprendan estudios técnicos de detalle para optimizar el transporte de volúmenes de aguas residuales y de escorrentía hacia las estaciones depuradoras, reduciendo el impacto de los desbordamientos de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia. Asimismo se expresarán los plazos de ejecución y los sistemas de control previstos para los alivios como toma de muestras, aforos del efluente aliviado y el incorporado al interceptor, y otros.

Artículo 55. Vertidos procedentes de instalaciones de residuos

Se mantiene la redacción de este artículo con la única modificación de la sustitución de "Organismo de cuenca" por "Administración Hidráulica" y la inserción de la referencia expresa de los respectivos reales decretos de aprobación al citar el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y el Reglamento de Planificación Hidrológica.

Artículo 56. Informes sobre planeamiento urbanístico y territorial

Los contenidos de este artículo se adecuan a la redacción dada al artículo sobre sistemas generales de saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, comentado con anterioridad.

Artículo 56. Informes sobre planeamiento urbanístico y territorial

1. Para la emisión de los informes que sobre planeamiento ~~del Organismo de cuenca~~ debe emitir la Administración Hidráulica según el artículo 25.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, el promotor deberá concretar ~~detalladamente~~ la solución propuesta para la red de saneamiento y para la depuración mediante anteproyecto.

2. En el caso de que se contemple la conexión a una red existente ~~el peticionario deberá justificar técnicamente su viabilidad sin comprometer el funcionamiento de la misma, la suficiencia en cuanto a capacidad y cotas de la red existente para soportar los nuevos desarrollos propuestos y, en su caso, las mejoras que sea necesario plantear. Asimismo deberá presentar un informe del Gestor del Saneamiento que certifique que la solución de conexión propuesta es compatible con la solución de saneamiento existente en la zona, especificando el punto adecuado para dicha conexión. El proyecto recogerá las obras a ejecutar por el promotor~~ serán válidas las prescripciones del artículo 61.8 tanto en el supuesto de viabilidad como en el contrario.

~~3. Cuando se contemple una solución individualizada para el saneamiento, una vez justificada la inviabilidad de la conexión a una red existente, deberá incluirse, al menos, como anteproyecto la solución técnica prevista.~~

Artículo Nuevo. Aplicación de medidas adicionales

Se ha insertado un nuevo artículo sobre "Aplicación de medidas adicionales". Este artículo incorpora conceptos que ya aparecen en la normativa general relativa a vertidos pero sobre los que se ha juzgado oportuno que sean incorporados a la Normativa del Plan Hidrológico, así como otros sobre la posibilidad de exigir mejores rendimientos de la depuración en caso durante el estiaje o en zonas sensibles.

Artículo 57. Aplicación de medidas adicionales

1. En aquellas masas de agua en que la consecución del buen estado se vea comprometida por los vertidos, independientemente de las actuaciones que sea necesario adoptar en el caso de vertidos ilegales, la Administración Hidráulica podrá aplicar las siguientes medidas adicionales:

a) Denegar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 247.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y en la normativa vigente en materia de vertidos desde tierra al mar, nuevas autorizaciones de vertidos, en la masa afectada y en las masas situadas aguas arriba que se determinen.

b) Revisar la autorización de vertido conforme a lo dispuesto en el artículo 261 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y artículo 58 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en la normativa que, en su momento, sea de aplicación o, en su caso, advertir al titular de la autorización de vertido de que, si dicha autorización resulta incompatible con los objetivos de la Planificación Hidrológica, concluido el plazo otorgado en la autorización será revocada unilateralmente por la Administración, sin derecho a indemnización alguna.

c) Requerir la constitución de comunidades de vertido de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 90 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y 253.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

2. En los casos en que durante la época de estiaje pudiera comprometerse la consecución de los objetivos medioambientales del medio receptor, la Administración Hidráulica podrá exigir, con carácter estacional, rendimientos de depuración superiores a los exigidos con carácter general y/o una eliminación adicional de nutrientes (nitrógeno y/o fósforo).

3. A fin de posibilitar la consecución de los objetivos medioambientales en las zonas sensibles así como en sus cuencas vertientes la Administración Hidráulica podrá requerir, a los titulares de la autorización de vertido de las EDAR que sirven a poblaciones inferiores a 10.000 habitantes equivalentes, medidas adicionales de depuración y la eliminación de nutrientes (nitrógeno y/o fósforo).

Artículo 57. Caudal mínimo circulante y vertido a cauce

Se han modificado las condiciones a las que se verán sometidas las autorizaciones de vertido en tramos de cabecera de cauces naturales de reducida entidad y diferenciando entre actividades ya existentes o de nueva creación. Además se elimina la referencia que se hacía a la potencial zona de mezcla en las masas de agua.

Artículo 58 Caudal mínimo circulante y vertido a cauce

1. El caudal a tener en cuenta para la autorización de vertido se corresponde con el caudal mínimo ecológico, del periodo de aguas bajas, en condiciones de normalidad hidrológica.

~~*2. Cuando se produzcan vertidos a cauces naturales que por su reducida entidad no hayan sido considerados como masa de agua, el tratamiento deberá aplicar las mejores técnicas disponibles y no deberá impedir alcanzar los objetivos de calidad aplicables a la masa de agua con la que confluya.*~~

2. Con carácter general, no se autorizarán los vertidos de nuevas actividades urbanas o industriales en tramos de cabecera de cauces naturales de reducida entidad y cuenca drenante que, aún teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles para los vertidos, no sean adecuados al cumplimiento de las normas de calidad y objetivos ambientales del medio receptor.

Excepcionalmente, podrán autorizarse los vertidos correspondientes a actividades ya existentes, cuando se trate de nuevas instalaciones de depuración que reduzcan la carga contaminante, aplicando las mejores técnicas disponibles, y dichos vertidos no impidan el cumplimiento de los objetivos de calidad aplicables a la masa de agua con la que confluya.

3. La autorización de vertidos a los cauces a los que se refiere el apartado 2 del presente artículo se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos de calidad físico-químicos aplicables a las masas de agua con las que confluyan ~~así como la potencial zona de mezcla~~.

Artículo 58. Bases técnicas a considerar en las autorizaciones de vertido

Se ha eliminado este artículo por considerarlo innecesario.

SECCIÓN 4. Reutilización de aguas residuales

Artículo 59. Reutilización de aguas residuales

Este artículo se ha completado con algunos conceptos adicionales.

Artículo 59. Reutilización de aguas residuales

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.1 y 109 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, la reutilización de aguas residuales procedentes de un aprovechamiento requiere concesión administrativa salvo que lo solicite el titular del vertido en cuyo caso solamente requerirá autorización administrativa. Toda reutilización de aguas depuradas se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

2. Cuando las detracciones de caudal que se realizan en el cauce y/o el vertido de aguas residuales comprometan fundadamente la consecución del buen estado de la masa de agua en los plazos previstos, la Administración Hidráulica de oficio podrá instar al titular de la concesión o autorización de vertido para que estudie como alternativa la reutilización de aguas depuradas.

3. Asimismo cuando se trate de una nueva solicitud de concesión, la Administración Hidráulica podrá reconducir dicha solicitud en una concesión de aguas regeneradas cuando, de conformidad con la normativa vigente, los usos concesionales lo admitan.

6.4.9. Capítulo 8. Estructuras organizativas de gestión de los servicios del agua. Régimen económico y financiero. Directrices de planes de gestión de la demanda. Fomento de la transparencia y la concienciación ciudadana

Artículo 60. Principios orientadores y medidas de fomento de la gestión de los servicios del agua

El artículo permanece inalterado salvo la eliminación de la referencia al Reglamento Marco de prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento

Artículo 60. Principios orientadores y medidas de fomento de la gestión de los servicios del agua

1. Las Administraciones competentes favorecerán la gestión integrada de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, fomentando la creación y el mantenimiento de estructuras supramunicipales de gestión que sean capaces de garantizar el rendimiento óptimo de las redes, de aportar un servicio cuya gestión sea profesionalizada y de tender a la recuperación de los costes de los servicios del agua con la máxima eficiencia.

2. Las ayudas para la creación y renovación de infraestructuras de abastecimiento/saneamiento, para el incremento de la eficacia de las redes y para otras medidas para el uso eficiente del agua, se adjudicarán exclusivamente a aquellas entidades que justifiquen la aplicación de los principios de recuperación de costes de los servicios de abastecimiento y saneamiento~~, de acuerdo con lo recogido en el Reglamento Marco de prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento~~.

Artículo 61. Costes de los servicios del agua

Se ha completado la redacción de este artículo como se muestra a continuación.

Artículo 61. Costes de los servicios del agua

A efectos de la identificación de los costes del ciclo integral del agua, al menos, se deben tener en cuenta ~~los siguientes tipos de coste~~ todos los costes necesarios para su prestación, independientemente de la entidad que incurra en los mismos, y que se pueden clasificar en:

~~a) Costes de explotación, personal y gestión: que se corresponden con los costes de mantenimiento y conservación, gastos de personal, costes energéticos, gastos de administración, seguros, servicios exteriores, tributos, etc. derivados de la prestación de los servicios.~~

a) Costes de mantenimiento, explotación y reposición de las redes de abastecimiento y saneamiento en alta (incluidas tanto las ETAP como las EDAR).

~~b) Costes de amortización de activos: que se corresponden con la amortización técnica de los activos que permiten prestar los servicios de agua.~~

~~c) Gastos financieros: que se corresponden con el pago de los intereses derivados del endeudamiento asumido por el ente gestor del servicio de agua.~~

b) Amortización de inversiones y programas de mejora en las redes de abastecimiento y saneamiento en alta, incluidas tanto las ETAP como las EDAR (estos programas de mejora deberán abarcar, al menos un periodo de 5 años).

c) Costes de mantenimiento, explotación y reposición de la red en baja.

d) Amortización de inversiones y programas de mejora en las redes de abastecimiento y saneamiento en baja (estos programas de mejora deberán abarcar, al menos un periodo de 5 años).

e) Costes asociados a la gestión de abonados y atención al cliente.

~~*d) Costes ambientales: que se corresponden con los costes del daño que los usos del agua suponen al medioambiente, a los ecosistemas y a los usuarios del medioambiente.*~~

f) Costes medioambientales derivados de la prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento. Se corresponden con los costes del daño que los usos del agua suponen al medioambiente, a los ecosistemas y a los usuarios del medioambiente.

Artículo 62. Directrices para la recuperación de los costes de los servicios del agua

Se ha eliminado la parte que se indica a continuación.

Artículo 62. Directrices para la recuperación de los costes de los servicios del agua

1. De acuerdo con el artículo 111 bis.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, con el fin de aplicar el principio de recuperación de costes, la administración con competencias en materia de suministro de agua fomentará el establecimiento de estructuras tarifarias por tramos de consumo, con la finalidad de atender las necesidades básicas a un precio asequible y desincentivar los consumos excesivos, teniendo en cuenta, entre otros, las consecuencias sociales, ambientales y económicas, y las condiciones geográficas y climáticas siempre que no comprometan los fines u objetivos ambientales.

2. Directrices para la tarificación de los servicios del agua para usos urbanos e industriales:

a) Se recomienda que las tarifas tengan, además de una cuota fija, una cuota variable obligatoria y progresiva en función del consumo de agua.

b) Se propone que la cuota fija no incluya ningún consumo mínimo de agua.

c) Para el establecimiento de las tarifas progresivas se proponen diferentes tramos de consumo con una escala de progresividad adecuada para recuperar costes, ahorrar recursos, y penalizar el consumo ineficiente y no sostenible.

d) Se recomienda la diferenciación en las tarifas de diferentes tipos de usuarios urbanos. Al menos: domésticos, industriales y comerciales.

~~*e) Se analizará la posibilidad de establecer bonificaciones por motivos de eficiencia y por motivos de equidad o sociales. Las bonificaciones por el motivo de eficiencia tienen como finalidad premiar el bajo consumo de agua en los hogares. Las bonificaciones por el motivo de equidad o sociales podrán ir dirigidas a familias numerosas y otros grupos sociales que no superen un cierto nivel de renta.*~~

~~f~~e) El diseño de las estructuras de las tarifas industriales debería tener en consideración los costes asociados a este uso.

~~g~~f) *Para los usos industriales podrán considerarse bonificaciones en función de la contribución al uso sostenible y al ahorro del agua mediante la utilización de las mejoras técnicas disponibles.*

Artículo 63. Planes de gestión de la demanda. Directrices para su elaboración

Se mantiene este artículo tal como fue sometido a consulta pública.

Artículo 64. Directrices para el fomento de la transparencia y la concienciación ciudadana

Se realiza una ligera adecuación del texto sometido a consulta pública.

Artículo 64. Directrices para el fomento de la transparencia y la concienciación ciudadana

1. La transparencia es un requisito imprescindible que deben cumplir todas las administraciones con competencias en los servicios del agua. Para su fomento se definen las siguientes directrices que deberían implantar todos los gestores.

a) *Creación de un sistema de información integrado que aglutine todos los datos de interés generados por los diferentes agentes que intervienen en la prestación de los servicios del agua como los debidos a: infraestructuras, demandas de agua por tipo de usuario, costes e ingresos de los servicios, evolución de las inversiones y/o subvenciones de los organismos públicos implicados en la prestación de servicios, a nivel regional, estatal y europeo.*

b) *La política de tarificación del agua debería ser transparente y de fácil comprensión para que tenga un efecto incentivador y los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos. Se debería potenciar la divulgación de la información entre los usuarios sobre los diferentes conceptos de las tarifas del ciclo integral del agua, así como los beneficios ambientales, sociales y económicos de un uso eficiente y sostenible del recurso.*

c) *Adaptación de los contenidos y el procesamiento de la información de las encuestas oficiales sobre suministro y tratamiento del agua ~~del INE y de las encuestas sobre los servicios y tarifas del agua del AEAS a las exigencias y requisitos que establece la nueva planificación~~.*

d) *Establecimiento de la figura de un ente Regulador autonómico especializado (Comisiones de Precios) que establezca y supervise las condiciones y estándares de los servicios y que unifique criterios de fijación de tarifas.*

2. La concienciación ciudadana es otro elemento que debe contribuir a un uso más sostenible de los recursos. En esta línea se propone:

a) *Promover la concienciación social sobre el ahorro de agua intentando influir en el comportamiento de la ciudadanía, las empresas y las instituciones para que realicen un mejor uso del agua.*

b) *Implantar campañas de concienciación y sensibilización ciudadana que podrán instrumentarse mediante programas educativos y formativos, campañas y actividades de comunicación, convenios de colaboración entre Administraciones públicas o particulares o a través de otros medios que se estimen convenientes y adecuados.*

Artículo 65. Financiación del programa de medidas

Este artículo se mantiene inalterado.

6.4.10. Capítulo 9. Seguimiento y revisión del plan hidrológico

Artículo 66. Seguimiento del Plan Hidrológico

El apartado 2 se modifica para adecuarse mejor a las administraciones competentes

> *2. Para la recopilación de información y de los datos necesarios para los trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico se desarrollarán mecanismos de coordinación en el marco del Comité de Autoridades Competentes. Las autoridades y administraciones responsables de la puesta en marcha y aplicación de los programas de medidas deberán facilitar ~~a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico~~ durante el primer trimestre de cada año a la Administración Hidráulica competente la información sobre el desarrollo de las actuaciones ~~que se encarguen de ejecutar~~ ejecutadas durante el año anterior, para poder dar cumplimiento a la obligación de información prevista en el artículo 87.4 del Reglamento de Planificación Hidrológica.*

Artículo 67. Revisión del Plan Hidrológico

Este artículo se mantiene inalterado.

Artículo 68. Revisión del Plan especial de sequías

El texto de este artículo se adecua de la siguiente manera:

> *Artículo 68. Revisión del Plan especial de sequías*
>
> *~~El Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la Cuenca Hidrográfica del Norte, aprobado mediante la Orden MARM/698/2007, de 21 de marzo, acomodará su ciclo de revisión al del Plan Hidrológico de cuenca de tal forma que se verifique que tanto el sistema de indicadores como las medidas de prevención y mitigación de las sequías son concordantes con los objetivos concretos de la planificación hidrológica según se vayan actualizando en las sucesivas revisiones del Plan Hidrológico de cuenca.~~*
>
> *Los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental acomodarán su ciclo de revisión al del Plan Hidrológico de tal forma que se verifique que, tanto el sistema de indicadores como las medidas de prevención y mitigación de las sequías, son concordantes con los objetivos concretos de la planificación hidrológica según se vayan actualizando en las sucesivas revisiones del citado Plan Hidrológico*

Artículo 69. Revisión del plan de gestión del riesgo de inundación

La redacción se adecua como se muestra a continuación:

> *Artículo 69. Revisión del plan de gestión del riesgo de inundación*
>
> *El primer plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación que, según lo previsto en el artículo 13 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión del riesgo de inundación, deberá aprobarse y publicarse antes del 22 de diciembre de 2015, acomodará su ciclo de revisión al del Plan Hidrológico de ~~cuenca~~ la demarcación, conforme a lo establecido en el artículo 14 del citado Reglamento, de tal forma que se verifique que los*

objetivos del primero son concordantes con el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en el Plan Hidrológico que deba ser aprobado en esa misma fecha.

Artículo 70. Zonas protegidas designadas con posterioridad al plan hidrológico de cuenca

Este artículo se mantiene inalterado.

6.4.11. Anejos de la Normativa

Anejo 3.1. Condiciones de referencia en las masas de agua de categoría río

- Cambios en los umbrales de fisicoquímicos generales por coordinación con la Administración Vasca en las masas río. Además de quitar las condiciones de referencia, se elimina el umbral MB/B y se quita la variación de los umbrales por tipología. Se considera la DQO adicionalmente y se quita como parámetro el oxígeno disuelto. En la siguiente tabla se muestran los nuevos umbrales.

INDICADORES FÍSICO - QUÍMICOS NO VARIABLES POR TIPOLOGÍA	LÍMITE BUENO / MODERADO	
pH	6-9	
Saturación de oxígeno (%)	70-120	
Conductividad (µS/cm)	700	
Nitrato (mg NO3/l)	15	
Amonio (mg NH4/l)	0,50	
DBO5 (mg/L)	5	
DQO (mg/L)	DQO al dicromato 17	DQO al Permanganato 10
Fósforo Total (mg/l)	0,40	

Anejo 3.3 Condiciones de referencia de parámetros físico-químicos no variables por tipología, en masas de agua de categoría río

- Cambios en los umbrales de fisicoquímicos no variables por tipología por coordinación con la Administración Vasca en las masas río. Se quitan las condiciones de referencia, y se elimina el umbral MB/B. Se considera la DQO adicionalmente y se quita como parámetro el oxígeno disuelto.

Anejo 4. Normas de calidad y valores umbral para masas de agua subterránea

- Se modifica el valor umbral del arsénico en la masa de agua Beasain (pasa de 130 a 80 µg/l). Además se ajustan otros valores umbral.

Anejo 5.1 Masas de agua artificiales o muy modificadas asimilables a río

- Se decide cambiar la naturaleza de las siguientes masas pasándolas a natural: Urumea I, Urumea III, Leizarán II y Oria V.

Anejos 6.1 a 6.12 Zonas protegidas

- Cambios en las zonas protegidas: Se aplican los cambios descritos en relación con el Capítulo 5 y el Anejo IV.

Anejo 7.1 Objetivos medioambientales de las masas de agua de la categoría río naturales

- Se asigna prórroga de plazo a 2021 a las siguientes masas de agua: Río Amavirgina II, Arroyo de Aquelcorta y Río Cadagua I.
- El objetivo medioambiental de las masas Río Bearzun y Río Bidasoa II pasa del "estado ecológico muy bueno y estado químico bueno al 2015" al "estado ecológico bueno y estado químico bueno al 2015".
- Se elimina la prórroga de plazo a 2021 para las masas Río Leizarán II y Río Oria V.

Anejo 7.2 Objetivos medioambientales de las masas de agua de la categoría río muy modificadas (excepto embalses)

- Se asigna prórroga de plazo a 2021 a la masa de agua Río Izorio.

Anejo 8.1 Caudales mínimos ecológicos en situación ordinaria y en situación de emergencia por sequía declarada

- Se modifican los valores de caudales ecológicos en periodo de sequía en las masas de agua siguientes:
    - Río Ordunte I
    - Río Cadagua I
    - Río Nervión I
    - Río Asteasu I
    - Río Elorrio II

Anejo nuevo. Criterios técnicos para la elaboración de estudios hidráulicos

- Se introduce como anejo 9 los "Criterios técnicos para la elaboración de estudios hidráulicos".

Anejo nuevo. Guías de buenas prácticas sobre los usos recreativos

- Se introduce como anejo 10 este anejo para impulsar la realización de guías de buenas prácticas sobre los usos recreativos, en especial de aquellas actividades de ocio que usan el agua de un modo no consuntivo.

Anejo nuevo. Municipios en función de la actividad comercial-industrial vinculada

- Se introduce como anejo 11 los "Municipios en función de la actividad comercial-industrial vinculada", de utilidad para la correcta aplicación del artículo sobre "Dotaciones de agua para abastecimiento urbano".

6.5. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

No se han recibido alegaciones específicas al Informe de Sostenibilidad Ambiental, si bien se vería afectado indirectamente por diversos cambios del contenido del PHC al recoger parte de este.

No se contempla en este punto tras la consulta pública, la elaboración de una nueva versión del ISA. No obstante, se han incluido las erratas y cuestiones detectadas en relación con este documento por si en algún momento pudieran ser de utilidad.

6.5.1. Memoria

Modificación 1.

Las tablas 78 y 80 aparecen cortadas en el margen derecho.

Modificación 2.

En la tabla 56 eliminar la referencia a "potencial" (mejillón cebra) ya que ya se han encontrado individuos adultos de esta especie en el embalse de Undúrraga.

6.5.2. Anejo II. Objetivos Ambientales

Modificación 3.

Correcciones en la última página por presencia de marcas del control de cambios.

6.6. MODELO DE DATOS. INFORMACIÓN GIS Y ALFANUMÉRICA

El modelo de datos (incluye información GIS y alfanumérica) se ha actualizado de acuerdo a las modificaciones realizadas en los documentos del Plan que se han señalado anteriormente, en todas aquellas cuestiones en que se ve afectado.

Por otra parte, se han incorporado las siguientes correcciones y mejoras específicas del citado modelo de datos:

Modificación 1.

Se ha corregido el nombre de la masa 013.012, sustituyendo "Basalburua-Ulzamal" por "Basaburua-Ulzama".

Modificación 2.

Se ha corregido la parte GIS y alfanumérica del registro de zonas protegidas:

- Se han utilizado las últimas capas oficiales de LIC y ZEPA descargadas de la Web del MAGRAMA para adaptar los polígonos de los espacios de la Red Natura 2000 seleccionados como dependientes del medio hídrico.
- Se ha corregido el trazado de la reserva natural fluvial Altube (ES017RNF1609100018).

Modificación 3.

La capa que define los límites de la Demarcación se ha ido modificando con la información resultante de la concertación entre Demarcaciones Hidrográficas en el marco del proyecto "Definición de una capa única de Demarcaciones Hidrográficas" que lidera el grupo SIA (Sistema Integrado de Información del Agua) del MAGRAMA. Actualmente se cuenta con una

capa en la que se han ajustado los sistemas de explotación y los ámbitos de participación pública.

APÉNDICE 1: ALEGACIONES RECIBIDAS EN EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA DEL BPHC

INFORME SOBRE LAS PROPUESTAS Y SUGERENCIAS AL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Octubre 2012

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Índice

001_ORI_ALTERNATIVAS_ENERGETICAS: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS Y PROYECTOS, S.L. 1

002_ORI_MUNKSJO_PAPER: MUNKSJÖ PAPER, S.A. 5

003_ORI_RFEPIRAGUISMO: REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO 9

004_ORI_CLUSTERPAPEL: ASOCIACIÓN CLUSTER DEL PAPEL DE EUSKADI 23

005_ORI_ETXEZARRETA: ETXEZARRETA URIGINTZA 27

006_ORI_HC: HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A. 45

007_ORI_ELECTRA: ELECTRA BRAVO 61

008_ORI_GIWATT: GIWATT 77

009_ORI_CH_OLAVERRI: CH OLAVERRI 95

010_ORI_CH_OLAVERRI_(2): CH OLAVERRI 127

011_ORI_HIDROELÉCTRICA_DEBA: HIDROELÉCTRICA DEL DEBA 145

012_ORI_CA_KATAURIKO: CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA 163

013_ORI_ARALAR: PAPEL ARALAR, S.A. 167

014_ORI_CH_USABAL: C.H. USABAL, S.L. 177

015_ORI_HIDRO_CADAGUA: HIDROELÉCTRICA DEL CADAGUA, S.A. 195

016_ORI_DGMA_DFORALGIPUZKOA: DIPUTACIÓN FORAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GIPUZKOA 215

017_ORI_MASUSTANEGIKO: MASUSTANEGIKO, C.B. 241

018_ORI_H_CADAGUA_(2): HIDROELÉCTRICA DEL CADAGUA, S.A. 259

019_ORI_ELECTRA_IRUN_ENDARA: ELECTRA IRUN ENDARA, S.A. 325

020_ORI_DMA_NAVARRA: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DEL GOBIERNO DE NAVARRA 343

021_ORI_HIDRAULICAS_BIDASOA: HIDRÁULICAS DEL BIDASOA, S.A. 351

022_ORI_GOIKO-URA: GOIKO URA, S.L. 367

023_ORI_ELECTRA_NAVASTUREN: ELECTRA NAVASTUREN, S.L. 387

024_ORI_UNESA: UNESA 405

025_ORI_SARRIOPAPEL: SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A. 417

026_ORI_BARBO_ER: BARBO ENERGÍAS RENOVABLES 421

027_ORI_EON: E.ON GENERACIÓN, S.L. 435

028_ORI_REYSALDE: REYSALDE, S.L. 457

029_ORI_AYTO_AMURRIO: AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 475

030_ORI_ELECTRA_OLLOQUI: ELECTRA OLLOQUI, S.A. 479

031_ORI_JUANPELLO: JUAN PELLO, S.A. 497

032_ORI_ASTIZUBI: ASTIZUBI, S.L. 515

033_ORI_MARINMUGAIRE: MARIN MUGAIRE, S.L. 533

034_ORI_SANTOLAZ: SANTOLAZ, S.L. 551

035_ORI_IBERDROLA: IBERDROLA 569

036_ORI_SGGIDPH: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRADA DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 581

037_ORI_AP_ERENOVABLES: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ENERGÍAS RENOVABLES 623

038_ORI_DGDSMR: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 697

039_ORI_JCYL_CARRETERAS: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 701

040_ORI_JCYL_DG_MEDIO_NATURAL: SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 705

041_ORI_DG_VIVIENDA_NAVARRA: DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL GOBIERNO DE NAVARRA 725

042_ORI_DBIODIVERSIDAD_GVASCO: DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO VASCO 761

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL CANTÁBRICO

COMISARÍA DE AGUAS

COMISARIA DE AGUAS
VIZCAYA
SALIDA
Fecha 31-8-2011
Firma

NOTA INTERIOR

S/REF.

N/REF.

FECHA **30/08/2011**

ASUNTO

DESTINATARIO **OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA**

Se adjunta escrito presentado en estas oficinas de María Lourdes Frías Esteban relativo a alegaciones al Plan Hidrológico.

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino · Confederación Hidrográfica del Cantábrico · Comisaría de Aguas

EL JEFE DE SERVICIO

Bernabé López Mutio

CONFEDERA HIDROGRAF DEL CANTA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
REGISTRO DE ENTRADA OFICINA BILBAO
09/08/2011 08:23:

ALEGACIÓN A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA.

PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL ESTADO.

Esta alegación la redacta Doña Mª Lourdes Frías Esteban con DNI 30.055.792-Y como presidenta del Consejo de Administración de Alternativas energéticas y Proyectos, SL con CIF B-48751614 y domicilio Bº Oromiño 1, 48215 Iurreta y en representación de la empresa que presido.

Alegación al artículo 34 de la Normativa de la Propuesta del citado Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca.

La presente alegación consiste en redactar el artículo 34 punto 3 de la siguiente manera:

"Ninguna concesión otorgada con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985, podrá superar la duración de 75 años contados desde el 1 de enero de 1986 salvo que el titulo constitutivo figure explícitamente otro inferior."

Esta modificación se induce basándose en los siguientes puntos:

1. La propia Ley de Aguas de 1985 en su disposición transitoria establece que el plazo será de 75 años, a partir de la entrada en vigor de la ley de Aguas; para aquellas concesiones que de acuerdo con sus titulos administrativos y lo que la Ley establece.

   Por lo tanto se ha de atender en primer lugar al plazo marcado en el titulo y en el caso de no venir reflejado, al ser a perpetuidad, se aplicará lo que establece la Ley, en este caso 75 años.

   La ley de aguas estableces unos periodos máximos, por lo tanto la prescripción inmemorial no existe ya que estos plazos están regulados por ley y desde el año 1986 su plazo máximo es 75 años, luego es el plazo que se establece.

   No es de aplicación la jurisprudencia, la doctrina y otras fuentes del derecho, ya que la D.T de la Ley de Aguas habla que solo se ha de tener en cuenta el titulo y la ley, y mientras ambos resuelvan el conflicto no es de aplicación otras fuentes.

2. El TR de la Ley de Aguas de 2011 recoge la idea anterior exactamente igual en su DT primera.

3. La Ley de Aguas del 85 y el TR de la Ley de Aguas de 2001 añade que los apoderamientos de aguas anteriores a la Ley de 1985 se podrán legalizar e inscribir, siempre y cuando al menos lleven 20 años aprovechándose, iniciándose en ese momento el plazo de 75 años.

   Este sería el caso de todas las concesiones que aun siendo indefinidas se hayan utilizado 20 años antes de 1985, su plazo es de 2061. Más aún deberían de serlo las que sufrieron alguna inscripción entre la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985 y tres años. Y a su vez la D.T prolongaría la concesión para aquellas que su titulo concesional fuera explícitamente menor y se renovaran o hicieran inscripciones en el periodo indicado.

4. Cuando el artículo 34 de la normativa se refiera "podrá superar la duración de 99 años" al menos debería regular la normativa y extenderse y añadir "desde el acta de reconocimiento final de la instalación"

5. La Ley de Aguas de 1879 permitía a las concesiones hidroeléctricas su carácter perpetuo y por efectos del ED de 14 de junio de 1921, modificado por el RD de 10 de noviembre de 1922, se fijaron unos plazos máximos de 75 años y la Ley de Aguas de 1985 en la DT primera, punto 2 es donde estas concesiones perpetuas, limitadas en el año 1922 y que por lo tanto no eran ya perpetuas, si se han utilizado en los últimos 20 años, pasan a tener otros 75 años.

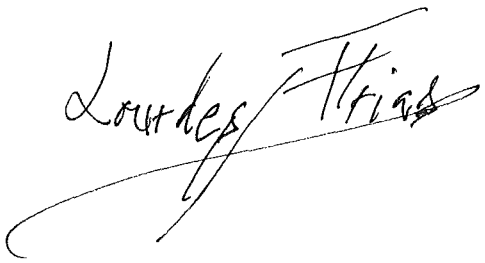
6. Con el argumento del punto anterior, los interese del artículo 132 de la Constitución Española, ya que se habían acabado el adjetivo de imprescriptibilidad de las concesiones perpetuas y a su vez está regulado por la ley (Ley 1985) que son los dos requisitos que exige la Constitución en referencia al tema tratado.

7. Por derecho comparado, se debe de aplicar la misma solución de plazos de concesión en todas las confederaciones, por lo tanto se ruega que se haga un recurso de lazada para unificar criterios al ministro competente.

8. Se debe de incluir una modificación para salvaguardar el patrimonio arqueológico industrial, de tal manera que aquellas centrales hidroeléctricas con una potencia inferior a 500 kw, con más de 50 años, que mantengan las turbinas originales, podrán seguir haciendo uso del derecho de concesión, aún con un expediente de resolución de extinción aprobado y firme, hasta que la confederación disponga otro uso de las instalaciones existentes (o similar) con el fin de que la pequeña producción económica ayude a mantener en buen estado de conservación la maquinaria existente.

En Bilbao a 3 de agosto de 2.011.

Firmado



Munksjö Paper, S.A. · Apdo. 15 · 20400 TOLOSA, ESPAÑA

Made by Munksjö™

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL CANTABRICO
OFICINA TERRITORIAL DE GUIPÚZCOA Y NAVARRA
DE COMISARÍA DE AGUAS Y DIRECCIÓN TÉCNICA
Sra: Noemí López
Paseo de Errotaburu, 1
20018 Donostia-San Sebast

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA | OFICINA SAN SEBASTIAN
18/10/2011 | 10:58:24
E002201100000795

Berástegui, 14 de octubre de 2011

ASUNTO: Alegación a la propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

Estimados Sres:

Munksjö Paper S.A. está siguiendo, a través del Cluster del Papel, el proceso de elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental que lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Tras el estudio del progreso del Plan en general, y del objetivo medioambiental fijado para el Río Berástegui (ES026MAR002610) en particular, nos preocupan las acciones que pudieran proponerse para alcanzar las metas previstas.

Indiscutiblemente, Munksjö Paper S.A. también apuesta por una mejora del estado del río Berástegui, que en su ficha de caracterización ha sido valorado como "malo" (estado ecológico "a partir de criterio de experto por lo que no se dispone del indicador que incumple": moderado, y estado químico: bueno). Este interés por la mejora del estado del cauce lleva consigo el deseo de que el Plan Hidrológico en elaboración ayude a la obtención de los mejores resultados.

Munksjö Paper S.A. es una empresa fundada en 1920 dedicada a la fabricación de papel decorativo para laminados. Se trata de la única planta que produce este tipo de producto en España y Portugal. La planta de Berástegui forma parte de un grupo sueco, líder mundial en su producto, con plantas en Suecia, Alemania y Francia. **5**

Munksjö Paper, S.A. · Eldua · 20492 BERÁSTEGUI, ESPAÑA · Tel +34 943 683 032 · Fax +34 943 683 398
Sociedad Unipersonal · Registro Mercantil de Guipúzcoa, Tomo 1479, Libro de Sociedades, Folio 1, Hoja SS9457 · C.I.F. ES A20012563

Made by Munksjö™

El interés de Munksjö Paper S.A. por el medio ambiente se ha venido demostrando en el tiempo. En 1978 se construyó la planta depuradora para tratamiento de las aguas de vertido. Fue la primera EDAR en Guipúzcoa.

En 1994 se obtuvo la certificación ISO-9001, en 1998 la ISO-14001 y el reglamento europeo EMAS (nº de registro E-EU-000003), y en 2007 la OHSAS-18001. Todas las certificaciones se han mantenido de forma ininterrumpida desde su fecha de obtención hasta la actualidad a través de auditorías llevadas a cabo por TÜV SÜD y Lloyd´s Register Quality Assurance. Además, en marzo de 2010 la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco hizo efectiva la Autorización Ambiental Integrada.

La pertenencia a un grupo internacional, nos permite conocer los parámetros de vertido de las plantas fabricantes de este mismo producto en Alemania y Francia. Además disponemos, a través de EPER España, de los datos que facilita la oficina europea IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) en su documento de referencia BREF de industria de pasta y papel. Resultando que nuestros valores específicos de uso de agua y de vertidos (sólidos en suspensión, DQO yDBO5) son similares a los de las fábricas de Alemania y Francia, y muy inferiores a los indicados en el BREF para papeles especiales.

En cuanto al uso del agua, tan solo el 2-3% del agua captada es consumida por la planta. El 97-98% restante retorna depurada al río.

Entre otros, estos datos sobre el uso del agua y la calidad del vertido demuestran que la preocupación histórica de Munksjö Paper S.A. por el medio que le rodea ha dado sus frutos al poder comparar sus datos con las plantas punteras de Alemania. Además siguiendo las directrices del sistema de gestión ISO 14001 y EMAS, esta es una labor que no acaba aquí, y que busca una mejora de los resultados de vertido año a año (nuevas tecnologías que se han implantando, las buenas práctica adoptadas, la mayor eficiencia de los circuitos, mejores técnicas disponibles BATS...)

Por otro lado, no estamos solos en el valle. Poblaciones como Berastegi (1050 habitantes), Elduain (240 habitantes) y Berrobi (580 habitantes), explotaciones agrícolas y ganaderas, e industrias de diversos tamaños (fabricantes de moldes refractarios para fundición, mandriladoras, queserías, talleres mecánicos, serrerías,...) comparten con nosotros las riberas del río y hasta el día de hoy vierte directamente al río sin tratamientos previos ni controles de calidad de vertido.

6

Por todo ello entendemos que:

Made by Munksjö™

- Munksjö Paper S.A. ha venido realizando a lo largo de su historia, y lo sigue haciendo cada día, esfuerzos de cara a mejorar la calidad de su vertido.

- Existen otros actores que todavía tienen mucho margen de mejora en este asunto.

La industria del papel, por ser intensiva en capital, necesita conocer de antemano sus expectativas a medio y largo plazo para mantener su actividad. La incertidumbre es enemiga de la inversión de larga amortización. Por todo lo cual **solicitamos:**

1- que el nuevo Plan deje claro que la situación actual de la calidad del cauce Berástegui se debe en buena medida a la falta de infraestructuras de saneamiento que generan vertidos no depurados de orígenes no papeleros. Y que, en consecuencia de lo cual, no podrán exigirse esfuerzos complementarios a la industria papelera para compensar la falta de depuración por parte de otros agentes vertedores mientras que no se determine el verdadero estado de los cauces, una vez todos los vertidos que soporten los mismos estén regulados y controlados por la autoridad.

2- que se considere en cualquier caso que el objetivo de calidad propuesto para el cauce Berastegui sólo será alcanzable como muy pronto en 2021, siempre y cuando todas las infraestructuras de saneamiento oportunas estén operativas. Y, llegada esa fecha deberá analizarse la situación del cauce en base al esfuerzo realizado por todas las organizaciones públicas (Ayuntamientos, Diputación Foral, Administración Hidráulica, Gobierno Vasco) y privadas (industria, sector agrícola y ganadero) para mejorar la calidad del mismo.

En la confianza que nuestra alegación sea estudiada y atendida, quedamos a su disposición para cualquier aclaración.

Atentamente,

Fdo.:

D. Juan Antonio Navalpotro Pascual
Director de Fábrica

Dña. Aitziber Larrañaga Irastorza
Jefe Financiero-administrativo

7

ANTRACITA, 7, 3.º 28045 MADRID TELEFONO 91 506 43 00 FAX 91 506 43 04 WEB: http://www.rfep.es

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 20/10/2011
OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 12:04:16
E001201100010662

D. JUAN JOSE ROMAN MANGAS, mayor de edad, con DNI 11936205X en representación, en su calidad de Presidente, de la Real Federación Española de Piragüismo, domiciliada a efectos de notificación en c/Antracita, 7, 3º de Madrid, código postal 28045, comparece como mejor proceda en Derecho y como parte interesada **DICE:**

De conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los artículos 74 y 80 del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha llevado el período de consulta pública de los documentos que conforman el borrador del Plan Hidrológico correspondientes a las demarcación **Cantábrico Oriental (Normativa y Plan)**.

Estos documentos, según el Reglamento de Planificación Hidrológica, deben contener la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación.

El colectivo de piragüistas, como usuarios lúdicos, recreativos y deportivos del agua es "parte interesada", y como tal tiene derecho a la participación activa en la aplicación de la política de aguas que recoge la Directiva Marco del Agua (Art. 14.1)

Con el presente escrito procedemos en fecha y forma a dar cumplimiento a la consulta pública, formulando las siguientes **ALEGACIONES,** que se estructuran siguiendo el orden en el que aparecen en los documentos mencionados.

CASTILLA Y LEÓN ES VIDA
Rías Baixas Turismo
Deputación Pontevedra
NELO
ADO

A) ALEGACIONES REFERENTES AL BORRADOR DEL DOCUMENTO DENOMINADO "NORMATIVA" del PLAN HIDROLÓGICO DE CANTÁBRICO ORIENTAL (en lo sucesivo, BNPH)

ALEGACIÓN PRIMERA:

En relación al Artículo 15, referente a los "Usos del agua" del BNPH.

Como se indica en su Preámbulo, el BNPH ha de completar una serie de contenidos obligatorios, en la forma descrita en el capítulo primero del título primero del RPH, contando con el apoyo técnico de la Instrucción de Planificación Hidrológica adoptada mediante la orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre que *"... será de aplicación en las cuencas hidrográficas intercomunitarias"* (Art 1.2), como es el caso que nos ocupa.

Pues bien, pese a lo indicado en el Preámbulo, el contenido de dicha Instrucción se ignora totalmente en la redacción del Art. 34 del texto sometido a información pública.

Dicho artículo indica que, a los efectos de lo estipulado en el artículo 12 del RPH, el presente Plan Hidrológico considera la existencia de los siguientes usos del agua: Abastecimiento a la población, Riego Agrícola y Ganadería, Usos energéticos, usos industriales no energéticos, acuicultura, usos recreativos, navegación y transporte acuático y otros usos.

Especificando respecto de los usos recreativos que "*Se incluyen aquellos aprovechamientos que tengan por objeto principal la satisfacción de los requerimientos de ocio en cualquiera de sus facetas recreativas, lúdicas e incluso culturales bien sean usos privados (llenado de piscinas, riego de jardines de urbanizaciones aisladas o viviendas unifamiliares) o colectivos (campos de golf, parques acuáticos, etc.). Queda incluida dentro de los usos recreativos la utilización de recursos que pudieran destinarse al mantenimiento y la adecuación de vedados y cotos de pesca. También se incluyen las instalaciones culturales y museísticas como molinos, fraguas, aserraderos, lavaderos y otros de este tipo que no puedan ser atendidos por las redes urbanas correspondientes*" y sobre los usos de navegación y transporte acuático "*Dentro de este uso se incluyen aquellos relacionados con la navegación, la flotación fluvial entendiendo esta última como el transporte de madera por piezas sueltas o almadías y los deportes acuáticos (vela, remo, barcos de motor, esquí acuático, piragüismo, etc.). Asimismo se incluye el suministro de canales artificiales o naturales para el rafting, piragüismo o cualquier otro tipo de navegación o flotación precise o no una modificación o condicionado del régimen natural de las masas de agua o del de explotación de los embalses*", mencionando expresamente tanto el rafting como el piragüismo, cuya protección y fomento es el objeto de esta Federación.

El planteamiento del BNPH difiere totalmente de lo previsto en la Instrucción citada, mucho más precisa. Ésta, en su punto 3.1.2.7 establece claramente cuáles son los **usos recreativos** a considerar a efectos de planificación hidrológica, indicando que: "*Bajo esta denominación se diferenciarán, en primer lugar, los usos recreativos que implican derivar agua del medio natural. Para cada uno de estos usos se indicarán las masas de agua afectadas y las coordenadas de la derivación... **En segundo lugar se identificarán aquéllas actividades de ocio que usan el agua en embalses, ríos y parajes naturales de un modo no consuntivo,** como los deportes acuáticos en aguas tranquilas (vela, windsurf, remo, barcos de motor, esquí acuático, etc.) o bravas (piragüismo, rafting, etc.), el baño y la pesca deportiva*". Indicando además que "*Para cada uno de estos usos se indicarán las masas de agua afectadas y se especificarán, en su caso, las necesidades de*

mantenimiento de niveles de agua en los embalses y caudales en los ríos". Existen además otra serie de usos recreativos que se desarrollan dentro de la zona de servidumbre del dominio público hidráulico y que también son mencionados en la Instrucción, sobre los que no vamos a extendernos.

Así que la Instrucción diferencia claramente entre usos consuntivos y no consuntivos, como por otra parte parecería lógico a efectos de planificación, sin ignorar los segundos por el hecho de que no haya una demanda concreta de agua asociada, como parece hacer el BPHN.

Más aún, considera la Instrucción que en el tratamiento a efectos de la planificación hidrológica de los deportes acuáticos, (entre los que cita expresamente el piragüismo y el *rafting*, tanto en sus modalidades de aguas tranquilas como de aguas bravas, competencia de esta Federación Deportiva) **debe prevalecer su componente de uso recreativo sobre su componente de uso de navegación, como se desprende de que sean tratados expresamente en dos puntos diferentes**. Ésta última quedaría, a efectos de planificación hidrológica, relegada por exclusión a la navegación con fines no recreativos (punto 3.1.2.8), cosa que obviamente no sucede en el BPHN, a tenor de lo que describe en la descripción que se da de los usos.

Finalmente, indicaremos que incluso el borrador de Memoria del Plan Hidrológico contempla el piragüismo y otras formas de navegación recreativa dentro del epígrafe de "Usos recreativos", y no en el de "Navegación", de forma acorde con la Instrucción (ver puntos 3.1.2.5.3 de la Memoria).

Por lo cual, basándonos en:

- El artículo 1.1 de la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica, y el contenido de la misma, especialmente los puntos 3.1.2.7 y 3.1.2.8.

- El artículo 60.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA)

SOLICITA:

Que se modifique el texto de los apartados (f) y (g) del Artículo 15, dejándolo del siguiente tenor:

(f) Usos recreativos: Se incluyen aquellos aprovechamientos que tengan por objeto principal la satisfacción de los requerimientos de ocio en cualquiera de sus facetas recreativas, lúdicas e incluso culturales bien sean usos privados (llenado de piscinas, riego de jardines de urbanizaciones aisladas o viviendas unifamiliares) o colectivos (campos de golf, parques acuáticos, etc.). Queda incluida dentro de los usos recreativos la utilización de recursos que pudieran destinarse al mantenimiento y la adecuación de vedados y cotos de pesca, ***y la navegación recreativa (vela, remo, barcos de motor, esquí acuático, piragüismo, etc.), el barranquismo, las rutas a pie o en bicicleta por el DPH, etc.****También se incluyen las instalaciones culturales y museísticas como molinos, fraguas, aserraderos, lavaderos y otros de este tipo que no puedan ser atendidos por las redes urbanas correspondientes.*

(g) Navegación y transporte acuático: Dentro de este uso se incluyen aquellos relacionados con la navegación y la flotación fluvial entendiendo esta última como el

transporte de madera por piezas sueltas o almadías, ***quedando excluida la navegación recreativa****. Asimismo se incluye el suministro de canales artificiales o naturales para el rafting, piragüismo o cualquier otro tipo de navegación o flotación precise o no una modificación o condicionado del régimen natural de las masas de agua o del de explotación de los embalses.*

ALEGACIÓN SEGUNDA:

En relación al Artículo 16 del BNHP, sobre "Orden de preferencia de usos"

El artículo 60 del TRLA se refiere exclusivamente al otorgamiento de concesiones de aguas, y en ningún caso extiende esta priorización a los usos no privativos del agua (usos comunes o comunes especiales), que quedan regulados por otros procedimientos más flexibles y acordes con su carácter de uso común, como autorizaciones administrativas, declaraciones responsables o simples normas de uso que garantizan su compatibilidad con otros usos públicos o privados del DPH.

Por lo cual, basándonos en:

- El artículo 60 del RDL 1/2001, DE 20 DE JULIO, del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que establece las condiciones de preferencia de los usos del agua sometidos a concesión administrativa.

SOLICITA:

Que se modifique el punto 1º del artículo 16 del BNPH, dejándolo de la siguiente manera:

Artículo 16. Orden de preferencia de usos

1. Se establece el siguiente orden de preferencia entre los diferentes usos **privativos** del agua, teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno

ALEGACIÓN TERCERA:

Sobre los usos y los usuarios recreativos y la condición de usuario (Cap.6, Sección 1)

Entre los denominados usos recreativos en sentido amplio se agrupan actividades muy heterogéneas y tan diversas como el piragüismo, la pesca, el paseo a pie o en bicicleta por las servidumbres del dominio público hidráulico, el baño, la visita a un humedal para observar aves, o al nacimiento de un río para fotografiarlo, la pesca recreativa, la extracción de agua para un parque de recreo acuático, un campo de golf o la producción de nieve artificial para deportes de invierno, o el llenado de piscinas públicas y particulares

Esta asimilación en un solo grupo de actividades con un uso del agua tan diferente resulta confusa e inadecuada para establecer criterios de planificación y gestión, y por tanto para el BPH. Las razones no son difíciles de comprender si, por ejemplo, se toma en consideración la disparidad de intereses y necesidades existente entre una asociación de piragüistas, de pescadores o de senderistas, o de alguien que pasea a la orilla de un río, por un lado, y los de una empresa propietaria de un campo de golf o una estación de esquí, por otro.

Por tanto, resulta necesario establecer, a efectos de planificación, diferencias entre las actividades a través de unos criterios que sean sencillos y lógicos.

Entre los diferentes criterios disponibles (criterios de autorización, destino, consumo, etc.) son especialmente útiles los de autorización administrativa (Arts. 50-52 TRLA) y de consumo, tal como se recogen en la siguiente tabla. Además de identificar el uso en dos de los aspectos más importantes desde el punto de vista administrativo y legal, tienen la virtud de definir otra serie de diferencias, como por ejemplo respecto al lugar donde se desarrolla la actividad (con la implicación que esto tiene en la recuperación de costes prevista en la DMA, por ejemplo en zonas rurales).

Tipo de usuario	Usuario recreativo común	Usuario recreativo privado
Criterio de autorización	Común o común especial	Privativo
Criterio de consumo	No consuntivo	Consuntivo
Desarrollo de la actividad	Dentro del DPH, *in situ*	Fuera del DPH, a veces lejos de la toma de agua
Ejemplos	Piragüismo, pesca, senderismo, observación aves, paseo por orillas, barranquismo, etc., etc.	Campos de golf, estaciones de esquí, parques temáticos, piscinas.

En base a la distinción precedente, cabría realizar las siguientes definiciones, siguiendo a Lacalle (2009):

- **Usos recreativos comunes:** el uso común o común especial del agua, no privativo, con fines recreativos, lúdicos o deportivos.

- **Usuarios recreativos comunes:** las personas físicas o jurídicas que realizan un uso común o común especial del agua con fines recreativos, lúdicos o deportivos. Serían por tanto usuarios recreativos comunes, sin ánimo de ser exclusivos en la enumeración, las personas físicas o jurídicas que usan el dominio público hidráulico para el senderismo, el baño, la natación y asimilados (buceo, etc.), el barranquismo, la pesca recreativa, el piragüismo, el remo, la vela, los encuentros lúdicos y deportivos, etc.

Como puede apreciarse se incluyen en este concepto los usuarios comunes tanto los que se han pueden considerar, aun teniendo la consideración de "especiales", aquellos que son «no intensivos o ligeros» (piragüismo, remo, vela) y otros que podrían considerarse «intensivos» (por ejemplo la motonáutica) por razón de su mayor impacto sobre el DPH. Este separación por criterios de intensidad, que principalmente puede articularse entre aquellos usos que emplean motores, cuya repercusión por ruidos y contaminación es evidentemente superior, y el resto, no está recogido expresamente en la regulación legal, y tenerlo en consideración a efectos de participación pública dificultaría la distinción práctica, pero no es óbice para que se siga distinguiendo claramente en la planificación y gestión, y adquiera un papel relevante, tanto en las autorizaciones como en la recuperación de costes prevista por la DMA.

Los usuarios que sí quedarían expresamente excluidos de dicha subcategoría son las personas físicas o jurídicas que requieren un uso privativo de las aguas para el ejercicio de su actividad, como es el caso de los parques de recreo acuático, irrigación de campos de golf, producción de nieve artificial para estaciones invernales, etc., actividades que además

tienen en común ser practicadas fuera, y en ocasiones lejos, del lugar de donde detraen el agua necesaria para su desarrollo.

El sentido de esta diferenciación es adecuar las categorías de usuarios a la realidad económica, social y ambiental. De esta manera, los intereses de ambas categorías de usuarios serían más homogéneos. Se corregirían así los problemas que pueden suscitarse al agrupar actividades tan heterogéneas respecto de sus intereses, capacidad económica, función social e impacto ambiental.

Si bien es cierto que los usuarios recreativos quedan incluidos dentro del concepto de usuario que recoge en su redacción actual el Artículo 27, consideramos fundamental que consolidar esta categoría de usuarios recreativos comunes, totalmente desprotegida y minusvalorada hasta la fecha en los procesos de planificación hidrológica, se recoja expresamente su definición en la normativa.

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta, entre otros:

- El artículo 3.1.2.7 de la Orden ARM/2656/2008.
- El Artículo 50.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001 del TRLA.

SOLICITA:

Que la sección primera se complete con un nuevo artículo donde se definan y distingan los usuarios comunes y los privativos, haciendo mención expresa de los usuarios recreativos comunes, como subgrupo de usuarios homogéneo a efectos de gestión y planificación del dominio público hidráulico, partiendo del criterio autorizatorio comentado.

ALEGACIÓN CUARTA:

En relación al Artículo 41, del BNPH, sobre mejora de la morfología y calidad ambiental de los cauces

Se solicita la inclusión de un nuevo epígrafe, del siguiente tenor:

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, valorando el efecto ambiental y económico de cada caso, impulsará la adopción de sistemas de franqueo aguas abajo que faciliten el tránsito de embarcaciones recreativas a través de obstáculos artificiales, incluyendo sistemas mixtos de pasos para peces y embarcaciones, así como la adopción de dispositivos que disminuyan el riesgo para los usuarios recreativos de los resaltos hidráulicos asociados a estructuras artificiales en los cauces.

ALEGACIÓN QUINTA

Sobre las zonas declaradas de uso recreativo, Sección 2ª.

La IPH establece, en su punto 4, que "*El plan hidrológico comprenderá un resumen del registro de zonas protegidas que incluirá mapas indicativos de la ubicación de cada zona, información ambiental y estado de conservación, en su caso, y una descripción de la legislación comunitaria, nacional o local con arreglo a la cual haya sido designada*".

En su punto 4.4, establece que: "*Serán zonas protegidas las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño*".

Es evidente que la redacción de la IPH prevé que también tengan el carácter de "zona protegida" otras masas de agua que sean declaradas de uso recreativo, aunque no sean declaradas aguas de baño.

En su redacción actual el BNPH no hace referencia alguna, al hablar de las zonas protegidas, sobre las masas de agua declaradas de uso recreativo (ni las declaradas como tales en base al baño, ni las declaradas en otros supuestos).

Por ello, y en base a

- El punto 4.4 de la Orden ARM/2656/2008.

SOLICITA:

PRIMERO.- Que en la Sección Segunda, sobre "Zonas protegidas", se establezcan los criterios generales de gestión pertinentes para aquellas declaradas "de uso recreativo", como se hace para el resto de zonas protegidas.

SEGUNDO.- Que el BNPH establezca criterios objetivos y concretos para decidir la declaración de zonas de uso recreativo que lo sean por un motivo diferente al baño.

B) ALEGACIONES REFERENTES AL BORRADOR DEL DOCUMENTO DENOMINADO "MEMORIA del PLAN HIDROLÓGICO DEL CANTÁBRICO ORIENTAL" (en lo sucesivo BMPH)

Ya hemos mencionado repetidas veces que en la Demarcación se dan una serie de actividades recreativas en sentido amplio (turísticas, de ocio, deportivas), muy dispares entre sí, que tienen relación directa con el agua o el uso del dominio público hidráulico y su servidumbre de paso y cuyo objetivo principal es satisfacer los requerimientos de ocio de la sociedad, a veces al amparo de una actividad comercial que ofrece el servicio. Todos estos aprovechamientos, según su naturaleza, pueden estar amparados por concesiones, ser objeto de declaración responsable, requerir autorización de otras administraciones (por ejemplo las licencias de pesca) o simplemente se pueden practicar libremente en el ámbito de los usos comunes.

En el BMPH el tratamiento que se da al uso recreativo del agua, tanto en la identificación de usos y demandas como en la posterior asignación de recursos y programas de seguimiento es prácticamente inexistente, con la llamativa excepción de los campos de golf, actividad que sí se encuentra oportunamente reflejada en la documentación relacionada con el Plan Hidrológico de la cuenca, particularmente en la descripción de usos y demandas.

Por el contrario, el tratamiento que reciben los usos recreativos no privativos es claramente insuficiente. Se trata de una deficiencia llamativa, sobre todo teniendo en cuenta que, aunque rara vez son consuntivos, estos usos tienen una importancia creciente y un potencial de crecimiento futuro importante, capacidad de generación de riqueza –especialmente en zonas desfavorecidas- y una elevada capacidad para provocar una implicación social en la conservación de los ríos, por poner a los usuarios en contacto directo con su realidad. Además de un retorno económico importante con escasos costes ambientales, lo que debería valorarse desde la perspectiva de recuperación de costes que impone la DMA.

Tradicionalmente han sido ignorados en la gestión del agua, como ocurre nuevamente en la presente Memoria. Entendemos que no debería ser así. En la cuenca del Ebro, con ciertas diferencias estructurales, pero al fin y al cabo situada en el mismo país y con tejido social muy parecido, el borrador de Memoria del Plan Hidrológico estima el volumen de estas actividades recreativas no privativas en 5 millones de usuarios/año (excluyendo de aquí a golfistas, esquiadores y usuarios de piscinas). No se trata de una cuestión menor, sino probablemente una mal conocida, medida y entendida. Además hay que indicar que su satisfacción no queda asegurada por su no consuntividad, ya que viene condicionada, más que por la asignación de unos recursos de muy escasa cuantía, por la garantía de conservación en buen estado de las masas de agua y su entorno.

En cualquier caso, la IPH (ARM 2656/2008) sí que prevé que den a estos usos la importancia que merecen, indicando que, "*además de diferenciar los usos recreativos que impliquen derivar agua del medio natural*", que se caracterizarán adecuadamente, "*se identificarán aquéllas actividades de ocio que usan el agua en embalses, ríos y parajes naturales de un modo no consuntivo, como los deportes acuáticos en aguas tranquilas (vela, windsurf, remo, barcos de motor, esquí acuático, etc.) o bravas (piragüismo, rafting, etc.), el baño y la pesca deportiva*" (aquí añadimos que se olvida incluir también el piragüismo dentro de la práctica en aguas tranquilas, quizás por confundirlo con el remo). Además, "*se han de indicar las masas de agua afectadas y se especificarán, en su caso, las necesidades de mantenimiento de niveles de agua en los embalses y caudales en los*

ríos". No solo eso, sino que se indicarán aquéllas actividades de ocio que "*estén relacionadas con el agua de un modo indirecto, utilizándola como centro de atracción o punto de referencia para actividades afines, como las acampadas, las excursiones, la ornitología, la caza, el senderismo y todas aquellas actividades turísticas o recreativas que se efectúan cerca de superficies y cursos de agua*".

Según la IPH, para cada uno de estos usos "*se indicarán las masas de agua afectadas y se especificarán, en su caso, las exigencias de mantenimiento de niveles de agua en los embalses y caudales en los ríos*".

Todo este tratamiento, que debe realizarse según la IPH, presenta lagunas sustanciales, o incluso falta, en el BMPH, por lo que no se entiende la referencia continua a que éste ha sido realizado "*siguiendo los criterios de la IPH*".

Por otro lado, al hablar de las "Masas de uso recreativo", se excluye toda mención a lo que no sea las zonas de baño. Ni siquiera menciona que existen otros usos que puedan requerir de protección, aunque la definición de masas de uso recreativo los contempla inequívocamente. En efecto, en su punto 4.4, la IPH indica que "*Serán zonas protegidas las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño*", de dónde se deduce que pueden tener este carácter otras que no sean exclusivamente las declaradas como "de baño".

Aún entendiendo que las zonas prioritarias son las que existen actualmente y que su inventario se pueda limitar a ellas, creemos que plantear la planificación en términos de cumplimiento exclusivo de lo establecido resulta equivocado. La planificación habría de considerar no sólo la garantía de cumplimiento de aquello que ya se debería estar cumpliendo (la normativa europea para las aguas aptas para el baño), sino avanzar en la recuperación de estos usos en la cuenca. Y por otro lado, no debe limitar la declaración de "masas de uso recreativo" exclusivamente a las zonas de baño "organizadas" (ya el baño es un uso común que se puede practicar, salvo prohibición expresa, en cualquier parte de la cuenca) sino que ha de contemplarse la posibilidad de que lo sean las afectadas por otros usos recreativos asociados al agua y su entorno. Estos abarcan prácticamente toda la cuenca, con diferentes intensidades de uso, objetivos, necesidades de calidad y cantidad de agua etc. Su declaración como tales, según la IPH, implica además la consideración de zonas protegidas.

De acuerdo con todo lo anterior presentamos las siguientes alegaciones:

ALEGACIÓN PRIMERA

Que, de forma concordante, y en base a los fundamentos de derecho expresados en la Alegación PRIMERA al BNPH, y para homogeneizarlo con el tratamiento recibido en el puntos 3.1.2.5 sobre "Usos y Demandas", en el punto 4.3 sobre prioridades de usos de la Memoria del BMPH se modifique la calificación y tratamiento del piragüismo, pasando a tratarse dentro del punto (7) (Usos recreativos) en lugar del (8) (Navegación).

ALEGACIÓN SEGUNDA

La IPH indica que, "*además de diferenciar los usos recreativos que impliquen derivar agua del medio natural*", que se caracterizarán adecuadamente, "*se identificarán aquéllas actividades de ocio que usan el agua en embalses, ríos y parajes naturales de un modo no consuntivo, como los deportes acuáticos en aguas tranquilas (vela, windsurf, remo, barcos*

de motor, esquí acuático, etc.) o bravas (piragüismo, rafting, etc.), el baño y la pesca deportiva" (aquí añadimos que se olvida incluir también el piragüismo dentro de la práctica en aguas tranquilas, quizás por asimilarlo equivocadamente la IPH dentro del "remo").

Por lo cual, basándonos en:

- El punto 3.1.2.7 de la Orden ARM/2656/2008.

SOLICITA QUE:

Se incluya la descripción y requerimientos de los usos recreativos no consuntivos que se realizan en la cuenca, que actualmente falta en su totalidad, fuera de la enumeración.

Solicitamos que se indique expresamente en la Memoria que la satisfacción de esos usos requiere no sólo un mero aporte cuantitativo de agua (que en la mayor parte de los casos no se precisa, ya que se adaptan en su práctica a los caudales circulantes de forma natural o afectados por usos privativos), sino también la satisfacción de una serie de condiciones de calidad y, especialmente, de no deterioro del dominio público hidráulico (tanto cauces como riberas), siendo generalmente suficiente para garantizarlos la consecución de un estado ecológico (que por otra parte exige con carácter general la DMA).

ALEGACIÓN TERCERA

La IPH indica que en el Plan Hidrológico se debe indicar respecto de los usos recreativos y, en el caso particular que nos interesa, la navegación sin motor que: "*se han de indicar las masas de agua afectadas y se especificarán, en su caso, las necesidades de mantenimiento de niveles de agua en los embalses y caudales en los ríos*".

Esto no se ha realizado ni para los embalses de la cuenca, ni en el caso de ríos, que en esta cuenca tienen una trascendencia muy importante por la extensión y calidad de las actividades de aguas bravas, con relevancia incluso internacional.

Por todo ello, en virtud de:

- El punto 3.1.2.7 de la Orden ARM/2656/2008.
- El punto 3.1.2.7 de la Orden ARM/2656/2008.

SOLICITA QUE:

Solicita que se incluya en el apartado correspondiente la siguiente tabla, que recoge los ríos de mayor interés para la práctica del piragüismo recreativo (aguas bravas), con independencia de que el potencial de práctica de esta modalidad se extienda la práctica totalidad de la cuenca.

RÍO
BIDASOA
BEARTZUN
LEITZARÁN
CADAGUA
ARANTZAZU

EZKURRA
ARNAURI

Así como la tabla de embalses para los que se reciben solicitudes de práctica de la actividad.

Igualmente, se solicita que se incluya en el mismo apartado de la Memoria **un plano de situación** que recoja los tramos de río y embalses de interés para la navegación recreativa en la demarcación (del mismo tipo del presentado para los campos de golf en la página 62 del capítulo III).

ALEGACIÓN CUARTA

La IPH establece, en su punto 4, que *"El plan hidrológico comprenderá un resumen del registro de zonas protegidas que incluirá mapas indicativos de la ubicación de cada zona, información ambiental y estado de conservación, en su caso, y una descripción de la legislación comunitaria, nacional o local con arreglo a la cual haya sido designada"*.

En su punto 4.4, establece que: "*Serán zonas protegidas las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño*".

De la redacción de la IPH es evidente que prevé que también tengan el carácter de zona protegida otras masas de agua declaradas de uso recreativo, diferentes de las declaradas aguas de baño.

El punto 5.4 del BMPH no parece contemplar este hecho, y se limita a afirmar que no hay zonas de baño en la demarcación.

Por ello, y en base a

- El punto 4.4 de la Orden ARM/2656/2008.

SOLICITA:

Que se establezcan, tanto en el citado punto 5.4 de la BMPH, como en el articulado correspondiente del BNPH, criterios objetivos y concretos para decidir la inclusión o no como "zonas protegidas" de aquellas "zonas de uso recreativo" diferentes de las "declaradas de baño", incluyendo en el BMPH las que cumplieran dichos requisitos.

ALEGACIÓN QUINTA

El epígrafe 5.9, "Reservas naturales fluviales" incluye diversos tramos coincidentes con tramos de interés especial para el piragüismo en la cuenca (especialmente en la modalidad de aguas bravas).

Dichos espacios estarán sometidos a un régimen de protección preventiva respecto de aquellos usos que pudieran alterarlos.

Entendemos que el piragüismo, dado su carácter de actividad no contaminante, no extractiva y no consuntiva será compatible con estas figuras de protección. Sin embargo, ni en el BMPH ni en el BNPH se especifican criterios para permitir o no usos no consuntivos en dichos tramos. Por ello,

SOLICITA

Que se definan en dicho epígrafe del BMPH los niveles de uso recreativo común aceptable en tramos de río clasificados como "Ríos protegidos" o "Reservas naturales fluviales".

ALEGACIÓN SEXTA

Las alegaciones manifestadas respecto del contenido de la memoria del Plan indican que en su elaboración la atención prestada a los usos recreativos comunes ha sido muy escasa o nula. De forma acorde, las actuaciones previstas en el Plan para conseguir sus objetivos muestran la misma carencia. Por ello se **SOLICITA:**

La ampliación o adecuación de los programas de actuaciones previstos en el Plan para acoger las siguientes líneas de acción, algunas de las cuales trascienden la problemática concreta de dichos usos y pueden enmarcarse dentro del objetivo más amplio de consecución del buen estado ecológico que exige la DMA, incluyendo expresamente las propuestas recogidas en el

(1) Presencia de obstáculos en el cauce:

- Demolición de azudes en desuso.
- Implantación de sistemas de franqueo para peces, valorando la implantación de pasos naturales mixtos para peces/piragüistas como alternativa al empleo de pasos "en hormigón" (artesas, ralentizadotes, etc.).
- Evaluación del riesgo/mitigación para los usuarios recreativos en resaltos hidráulicos asociados a obras transversales en los cauces.
- Adecuar el diseño, la ejecución y la restauración posterior en la construcción de nuevos azudes y aforos, teniendo en cuenta la existencia de los usos recreativos comunes.

(2) Especies invasoras

- Coordinación entre Administraciones para adoptar protocolos comunes de prevención y desinfección, ahora inexistentes. Adopción de un protocolo común en todas las Confederaciones Hidrográficas para aquellas especies más peligrosas, como por ejemplo el mejillón cebra.
- Elaboración de pautas de comportamiento adecuadas al papel real como vectores de cada grupo de usuarios recreativos, como alternativa a los sistemas de desinfección.
- Acciones de concienciación y estudio sobre las especies invasoras entre los usuarios recreativos.
- Implicación de los usuarios recreativos en sistemas de alerta temprana.

(3) Plan de mejora y creación de zonas lúdicas:

- Elaboración de un Plan integral de desarrollo de los usos recreativos de la cuenca.
- En embalses.
- En zonas ligadas a ríos.

- Diseño de instalaciones de bajo impacto para uso recreativo integradas en el DPH: canales naturales de aguas bravas, olas estacionarias, adecuación de aforos para el uso recreativo.

(4) Protección del dominio público hidráulico

- Mejora de la señalización relacionada con los usos recreativos
- Plan de mejora del acceso público al DPH.
- Definición de los niveles de uso recreativo común aceptable en tramos de río clasificados como "Ríos protegidos" o reservas fluviales.
- Facilitar recursos a los usuarios recreativos para colaborar en las labores de vigilancia. Convenios con entidades que puedan actuar como auxiliares de la administración.
- Plan de mejora de la coordinación/comunicación entre los usuarios hidroeléctricos y de turismo activo comercial.
- Programa de eliminación de basuras en cauces
- Señalización y mejora de senderos fluviales de bajo impacto.

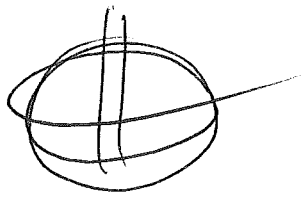
(5) Educación ambiental

- Difusión de los valores ambientales de las masas de agua y el papel de los usuarios recreativos comunes en ella. Desarrollo de programas de educación ambiental específicos para usuarios recreativos.
- Educación y comunicación: creación de webs para información del sector y campañas específicas de concienciación ambiental sobre el río
- Fomento de la construcción de centros de interpretación y museos relacionados con el medio acuático, en los que se incluya la vertiente recreativa de su uso.

(6) Gobernanza

- Integración de los usuarios recreativos comunes dentro de las asambleas de usuarios y las juntas de explotación correspondientes.
- Participación del colectivo de usuarios recreativos comunes en los procesos de definición de caudales ambientales.
- Mejora del conocimiento, caracterización y problemática de los usos recreativos comunes en aguas interiores.
- Mejora de la vigilancia de la red fluvial y aumento de los recursos dedicados.
- Formar e incentivar a los diferentes agentes competentes en tareas de inspección. Mejora de la formación del personal técnico y de guardería respecto a los usos recreativos comunes.
- Evaluación de la efectividad real de las medidas restrictivas al uso recreativo común (número máximo de usuarios, épocas con prohibiciones, etc.), en relación a lo dispuesto en el Art. 39 bis de la Ley 30/1992. En particular en lo referente a las prohibiciones al piragüismo en época de freza de salmónidos, adecuándolas al conocimiento científico existente.
- Ordenación y compatibilización de los distintos usos en ríos y embalses de la cuenca.
    - Promover mecanismos de coordinación entre distintos colectivos de usuarios recreativos y análisis de estrategias comunicativas para mejorar la convivencia.
    - Creación de un observatorio del uso recreativo común, con participación de las Administraciones implicadas en su gestión.
- Mejora de la información sobre caudales instantáneos y niveles en embalses: comunicación de horarios de sueltas que puedan afectar a usuarios recreativos.
- Mejora del acceso público a los datos en tiempo real de la totalidad de la red SAIH.

Madrid, a 15 de octubre de 2011
EL PRESIDENTE



Juan José Román Mangas

EXCMO. SR. PRESIDENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
Plaza de España, 2
33071-OVIEDO

CLUSTERPAPEL
Asociación Cluster del Papel de Euskadi

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 28/10/2011 OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 12:37:02
E001201100011103

OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICA
CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL CANTABRICO
Sr. Jesús González Piedra
Plaza de España, 2
33.071 OVIEDO

San Sebastián, 6 de octubre de 2011

ASUNTO: Alegación a la propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

Muy Señor nuestro

La Asociación Cluster del Papel de Euskadi ha seguido, y participado en el proceso de presentación y participación pública que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha realizado para la preparación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

Desde un principio nuestra Asociación ha seguido muy de cerca aspectos como la fijación de objetivos de calidad y caudales de referencia para aquellos cauces de los que la industria Papelera realiza algún tipo de aprovechamiento, captación o vertido de agua.

A la vista de este trabajo, nuestra Asociación ha identificado dos cauces, el río Amezqueta y río Zelai (o Elduarain) en los que la actividad papelera* que se desarrolla en sus márgenes podría verse seriamente comprometida a medio y largo plazo si la propuesta de Plan prospera en sus actuales términos y no establece objetivos de calidad y caudales de referencia de una forma más acorde con los esfuerzos realizados por la industria papelera y con la realidad de otros vertidos a estos mismos cauces.

Entendemos que **cualquier fijación de objetivos de calidad y caudales de referencia (ecológicos o de estiaje) debería de tener en cuenta al menos los siguientes aspectos**:

1- Las empresas papeleras con aprovechamientos en estos cauces tienen unas autorizaciones Ambientales Integradas en vigor con unas condiciones de captación y vertido que se han considerado oportunas por parte de URA (Agencia Vasca del Agua) para garantizar la calidad de los cauces en base a las tecnologías disponibles y los tipos de producción que en las mismas se realizan.

2- La aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles no siempre puede garantizar, incluso al margen de su viabilidad económica que por definición deben cumplir, el alcanzar los objetivos de calidad ambiental fijados por la autoridad competente para unos cauces concretos.

Parque Tecnológico de San Sebastián - Paseo Mikeletegi, 56 - 3ª planta - 20009 Donostia - San Sebastián - Gipuzkoa - Tel.: +34 943 309 413 - Fax. +34 943 309 412 - **www.clusterpapel.com** - e-mail: mail@clusterpapel.com

3- Estos mismos cauces sufren el vertido no depurado de aguas residuales urbanas (falta de saneamiento de los municipios) así como de aguas residuales de tipo agrícola, ganadero y de otros usos industriales.

4- A fecha de hoy no existen previsiones a corto plazo para dotar a estos municipios y a otros agentes (agrícolas, ganaderos, industriales) de infraestructuras de saneamiento a medio plazo que minimicen el impacto de los vertidos de los mismos en los cauces reseñados.

5- A la vista de la actual situación económico-financiera es más que probable que cualquier actuación en infraestructuras de saneamiento en estos cauces se demore de forma importante en el tiempo.

6- Que hasta el momento en el que todos los vertidos no estén controlados, y en consecuencia pueda saberse el verdadero impacto de cada uno de ellos en los cauces afectados, no puede fijarse a priori ni un grado de responsabilidad, real y objetivo, en la situación de los cauces ni un grado de exigencia de la mejora de los propios cauces y de los vertidos hoy en día controlados.

7- No parece adecuado que la industria papelera, con autorizaciones de vertido concretas y unos vertidos controlados, pueda ver comprometido su futuro porque otros agentes que vierten al río no lo hagan en las mismas condiciones de exigencia que la industria papelera.

8- La industria papelera es una gran usuaria de agua pero no es una gran consumidora de agua. Se debe tener en cuenta que las empresas afectadas sólo consumen entre el 3,63% y 12,5% del agua que usan.

9- Todas las empresas papeleras afectadas, además de demostrar su compromiso con la mejora medioambiental con hechos y datos concretos, bien conocidos por la Administración Hidráulica competente, tienen sus sistemas de gestión medioambiental certificados bajo la norma ISO 14001. Dos de ellas incluso con certificación EMAS.

10- La industria papelera, por ser intensiva en capital, necesita conocer de antemano sus expectativas a medio y largo plazo para realizar las inversiones necesarias y mantener así su actividad.

11- Las empresas papeleras * afectadas más directamente por esta situación dan empleo directo a 400 personas, y generan una facturación anual de 160 millones de €

Nuestra Asociación, así como todo el sector industrial papelero de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es consciente de los esfuerzos a realizar para garantizar la sostenibilidad medioambiental de nuestro entorno y le anima a esa Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y a toda la sociedad, a seguir por esta senda en el futuro. Es por ello que el sector ha realizado, y va a seguir realizando, un gran esfuerzo tanto en captación de aguas como en calidad de vertido, del que tanto esa Confederación Hidrográfica como la Agencia Vasca del Agua – URA, son conocedores.

Sin embargo, **no podemos aceptar** que la propuesta de Plan Hidrológico, en los términos en los que está actualmente redactada, suponga una clara amenaza para el futuro de las empresas papeleras con aprovechamientos en los ríos Amezketa y Zelai.

Por todo lo cual **solicitamos:**

1- Que el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental deje claro que la situación actual de la calidad de los cauces Zelai y Amezketa en particular, y la de todos los cauces que reciban vertidos directos papeleros una vez depurados según las condiciones de las correspondientes Autorizaciones Ambientales Integradas, se debe en buena medida a la falta de infraestructuras de saneamiento que generan vertidos no depurados de otros orígenes no papeleros. Y que, en consecuencia de lo cual, no podrán exigirse esfuerzos complementarios a la industria papelera para compensar la falta de depuración por parte de otros agentes vertedores mientras que no se determine el verdadero estado de los cauces, una vez que todos los vertidos que soporten los mismos estén regulados y controlados por la autoridad hidráulica.

2- Que se considere en cualquier caso que los objetivos de calidad propuestos para los cauces Amezketa y Zelai sólo serán alcanzables como muy pronto en 2021, siempre y cuando todas las infraestructuras de saneamiento oportunas estén operativas. Y, llegada esa fecha deberá analizarse la situación de los cauces en base al esfuerzo realizado por todas las organizaciones públicas (Ayuntamientos, Diputación Foral, Administración Hidráulica, Gobierno Vasco) y privadas (industria, sector agrícola y ganadero) para mejorar la calidad de los mismos, así como teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías de depuración de aguas óptimas para todos estos casos en ese momento.

En la confianza que nuestra alegación sea estudiada y atendida, quedamos a disposición esa Confederación Hidrográfica del Cantábrico para cualquier aclaración y agradeceríamos nos remitiera la copia adjunta a este documento con el debido sello de entrada para que tuviéramos constancia de la recepción del mismo por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Atentamente,

Luís Fernando Ruíz Arrúe
Presidente

Iñaki Ugarte Laguardia
Gerente

* Las empresas afectadas directamente son: Papel Aralar, S.A. en el río Amezketa, Munksjö Paper, S.A. y Sarriópapel y Celulosa, S.A. en el río Zelai

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAF.CA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 28/10/2011
OFICINA SAN SEBASTIAN 10:31:53
E00220110000081

AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. Jesús Villajos Gómez Lucerón, mayor de edad, provisto de DNI nº 15.874.104-X, actuando en nombre y representación de la mercantil ETXEZARRETA URIGINTZA, S.L., con C.I.F. B-20.570.180 con domicilio a estos efectos en Paseo de Ubarburu, nº 50 Pab. 2 de San Sebastián comparezco y como mejor proceda en Derecho **DIGO:**

Que paso a efectuar **ALEGACIONES** a la **Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental** y, concretamente, a su normativa, a tenor de las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

1) <u>Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos</u>

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su computo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

27

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art 136 de la constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización,.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

28

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evapotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas– reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo. En unas instalaciones necesitadas de inversiones Intensivas en Capital, es necesario entender que el plazo concesional resulta determinanate en la viavilidad de la empresa.

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía primaria llega a través de combustibles fósiles.

En un escenario de costes energéticos fósiles menguantes y en continuo ascenso, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energias renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energia electrica consumida fue de origen renovable.

No cabe duda de que la sostenibilidad de nuestro modelo económico y social esta ligado a otras fuentes de energía de tipo distribuido donde la hidroeléctrica desempeña un papel protagonista al ser en la actualidad la tecnología disponible con menor impacto medioambiental. Muy por encima del resto de tecnologias, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energia de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables".

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la la minihidráulica.

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

32

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal del aprovechamiento a las necesidades reales".

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años. Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,- hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

33

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia: Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidraúlico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.*

34

En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala, *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..)* ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente (*"contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

37

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.´

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

38

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, el certificado expreso emitido por la Confederación Hidrográfica, supone el reconocimiento explícito de sus derechos y, en relación a los presentes efectos, ha de destacarse la condición específica primara que, y es copia literal, dispone: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986"***.

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

   Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

"/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) <u>Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.</u>

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

40

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) <u>Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos</u>

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) <u>Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales</u>

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

41

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretados de forma restictiva como una "Lista Cerrada". Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral "*De Facto*" de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto; **42**

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que, en tiempo y forma, se tenga por presentado el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, en base a los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo en San Sebastián, a 30 de octubre de 2011.

ETXEZARRETA URIGINTZA, S.L.
Paseo Ubarburu, 50 - Pab. 2
20014 SAN SEBASTIAN

Jesús V. Gómez Lucerón

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DEL CANTABRICO

REGISTRO DE ENTRADA | OFICINA PLAZA DE ESPAÑA
28/10/2011 | 09:35:42

E00120110001106 7

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A., con domicilio en Oviedo, Plaza de la Gesta, nº 2, y en su nombre y representación, Miguel Mateos Valles, como Director de la misma, tal y como le consta a esa Confederación, ante la misma comparece, y como mejor proceda en Derecho, **DICE**:

I.- Que mediante Anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 4 de mayo de 2011, se someten a consulta pública, por periodo de 6 meses, las Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental en el ámbito de competencias del Estado y los Informes de Sostenibilidad Ambiental.

II.- Que dentro del plazo al efecto conferido, es interés de esta parte realizar las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- *OBSERVACIONES GENERALES*

Con carácter general, debemos destacar el impacto que la aprobación del Plan Hidrológico sometido a Información pública en los términos en los que está redactado, tendrá en la producción hidroeléctrica.

Actualmente el papel que juega la energía de origen hidroeléctrica en la calidad de suministro y en la cobertura de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional es insustituible.

Así se defendió en las jornadas sobre caudales ecológicos celebradas el 5 de mayo de 2011 por la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Universidad Autónoma de Madrid y la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid que entre sus conclusión señaló: *"La energía hidroeléctrica, por su extrema flexibilidad, es una garantía y una seguridad para el sistema de generación español. Los caudales ecológicos podrían suponer una merma de la flexibilidad y capacidad de gestión. Su implementación puede requerir la modificación física y estructural de las presas"*.

En efecto, este tipo de energía, capaz como ninguna otra de arranques, paradas y variaciones rápidas de la carga aportada al Sistema Eléctrico, es la única que puede garantizar el seguimiento fino de la curva de demanda y la atención rápida a variaciones bruscas de la energía entregada, bien por posibles fallos de grandes grupos térmicos, por problemas localizados en la red, o, recientemente, por el significativo aumento de las energías renovables no garantizadas (eólica y solar), aumento que necesariamente requiere como complemento

45

nueva potencia hidroeléctrica para hacer frente con rapidez y eficacia a los inevitables ceros de dichas energías.

Por ello, las afecciones a la energía hidroeléctrica con regulación pueden transformarse con gran facilidad en graves pérdidas de garantía de suministro del Sistema Eléctrico nacional. En este sentido, las dos afecciones potencialmente más perjudiciales para los usos hidroeléctricos son la imposición de caudales ecológicos y las restricciones a las variaciones rápidas en los caudales turbinados. Ambos pueden hacer inviable, o inútil, la operación de un determinado aprovechamiento hidroeléctrico.

En este sentido, es de destacar el carácter esencial del suministro de energía eléctrica, como se declara en la Exposición de Motivos de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en la que se expresa que:

"El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. [...] La presente Ley tiene, por consiguiente, como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas las características de este sector económico".

Por tanto, dado que es fundamental para garantizar el suministro eléctrico y la calidad de éste, debe valorarse la importancia del uso del agua para la generación eléctrica con máximo rigor, buscando, eso sí, un punto de equilibrio entre el medio ambiente, el uso racional del agua y la sostenibilidad.

Es necesario destacar que los pequeños aprovechamientos fluyentes y en derivación aportan una energía casi constante, de base, que en caso de resultar seriamente afectada deberá ser sustituida por producción de origen térmico (convencional o nuclear) con el consiguiente incremento de la factura de combustibles y de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y de gases contaminantes como óxidos de azufre, de nitrógeno y partículas. Esto sería incompatible con la política y los esfuerzos acordados por los Estados Miembros europeos de lucha contra el cambio climático y la contaminación o la política de fomento de energías renovables y la de reducción de la dependencia energética del exterior.

Así, el buen funcionamiento del sistema eléctrico requiere un equilibrio constante entre la generación y el consumo que se debe realizar forzosamente en tiempo real, siendo la producción hidroeléctrica la principal fuente de energía capaz de suministrar dicho servicio de regulación, garantizando así el buen funcionamiento del sistema de forma ventajosa técnica, económica y medioambientalmente respecto a otras tecnologías.

46

Las limitaciones a la producción hidroeléctrica podrían hacer que la capacidad de respuesta rápida sea insuficiente lo que puede provocar restricciones técnicas que limiten el funcionamiento del Sistema Eléctrico.

En cuanto a las Centrales Térmicas, hay que tener en cuenta que un incremento excesivo de los condicionantes y restricciones a los usos, sea en la disponibilidad de agua para refrigeración y procesos, o en las características de los vertidos, puede afectar gravemente a la garantía de suministro eléctrico nacional, en sus aspectos cuantitativos. En definitiva, no deben imponerse restricciones innecesarias que puedan afectar al suministro de energía eléctrica, ni a su calidad y que pueden causar más perjuicios que beneficios al medio ambiente visto éste de forma global y a la Sociedad en general.

Por todo ello, entendemos que deberá valorarse la existencia de la relación coste/beneficio mediambiental de las restricciones que se pretende implantar a través de la nueva planificación. Así, a título de ejemplo, la mejora medioambiental por imponer una tasa de variación de caudal y un valor de caudal ecológico en el caso de centrales que vierten a la cola de otro embalse, no es significativa, pero su aplicación supondrá un incremento de utilización de otro tipo de energías para garantizar la demanda (que serán forzosamente energías no renovables) con más impacto para el medio ambiente que se pretende proteger.

Por ello, esta parte entiende que debe integrarse en el proceso de planificación hidrológica tanto al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como máximo responsable de la garantía de suministro de energía eléctrica como a Red Eléctrica de España, como gestor del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de compatibilizar los intereses y buscar el punto de equilibrio entre el uso racional del agua y la producción eficiente de energía eléctrica.

SEGUNDO.- *ACERCA DEL PROCESO DE CONCERTACIÓN*

Dicho lo anterior, entendemos que el proceso de concertación del régimen de caudales ambientales debe llevarse a cabo con todo usuario con derechos preexistentes afectados, como mi representada, máxime cuando presta un servicio esencial para el funcionamiento de la sociedad.

Así, el Reglamento de la Planificación Hidrológica y la Instrucción de Planificación Hidrológica apuestan por un proceso de implantación concertado, que ha de tener en cuenta los usos y demandas actualmente existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas.

47

Tal y como se indica en la Instrucción de la Planificación Hidrológica (en adelante IPH) el objetivo de la concertación es compatibilizar los derechos al uso del agua con el régimen de caudales ecológicos para hacer posible su implantación.

En este sentido, el documento de Planificación, según exige el artículo 3.4.5 IPH, debe incluir un análisis de la repercusión del establecimiento del régimen de caudales ecológicos en los usos del agua existente, debiendo incluir:

a) El marco legal de los usos existentes, incluyendo las características técnico-administrativas de los mismos y un análisis jurídico de los efectos de la aplicación del régimen de caudales ecológicos en las concesiones vigentes.

b) La repercusión, tanto positiva como negativa, en los niveles de garantía de las unidades de demanda afectadas y análisis de la disponibilidad de caudales y de la compatibilidad con las concesiones existentes.

c) La repercusión económica y social, tanto positiva como negativa, de la implantación del régimen de caudales ecológicos.

Sin embargo, a la vista del documento que se somete a Información Pública, no se ha analizado correctamente ni los efectos de la aplicación del régimen de caudales ecológicos en las concesiones vigentes, ni la repercusión en las unidades de demanda afectada (en particular en los aprovechamientos hidroeléctricos), ni la repercusión económica y social de la implantación de los caudales en el Sector Eléctrico. Así, debemos recordar que no sería sólo el sector hidroeléctrico el que debería adaptarse a los requerimientos del Plan sino todo el Sistema Eléctrico Nacional, lo que obliga a ponderar las afecciones frente a las ventajas ambientales.

Asimismo, el artículo 3.4.6 de la IPH señala que los objetivos del proceso de concertación del régimen de caudales ecológicos serán los siguientes:

a) Valorar su integridad hidrológica y ambiental.
b) Analizar la viabilidad técnica, económica y social de su implantación efectiva.
c) Proponer un plan de implantación y gestión adaptativa.

Por ello, debe analizarse en primer lugar la viabilidad técnica de su implantación y tener en cuenta que la implantación del régimen de caudales tiene un coste, e implica compensación por las afecciones a derechos preexistentes, así como el coste de las obras de adaptación necesarias para hacer posible su implantación efectiva.

48

Y en relación con los usos hidroeléctricos, no solo están en juego los intereses económicos de los titulares de las concesiones, sino también el valor de la producción hidroeléctrica para el sistema eléctrico y su calidad y garantía.

Así, determinados a través de un Plan Hidrológico los caudales ecológicos, la Administración debe apostar por conseguir una salida concertada con los titulares de derechos afectados, que no tiene por que limitarse a contraprestaciones económicas a los mismos, sino que, en el caso de los usos hidroeléctricos, existen alternativas que ayudarían a compatibilizar los intereses medioambientales e hidroeléctricos. Señalamos entre estas alternativas, a título de ejemplo, las siguientes:

- Acuerdos voluntarios de suelta de caudales mínimos en el marco de programas de inversión en la recuperación de ríos o en base a contrapartidas de distinta naturaleza.
- Establecimiento de líneas de ayuda a la modernización de aprovechamientos hidráulicos existentes, con el objetivo de liberar caudales concesionales o, en general, recuperar caudal para los ríos.
- Ampliación de los plazos concesionales a cambio de reducir los caudales aprovechables, con costes compensados.
- Facilitación (simplificación, si cabe) de la tramitación y construcción de mini y *microcentrales hidroeléctricas que puedan turbinar, en régimen especial,* los caudales de mantenimiento desde el pie de presas y azudes.
- Implementación y revisión de concesiones con derechos de uso flexible del caudal (en aprovechamientos fluyentes) o del nivel del embalse (en aprovechamientos con regulación), de manera que pueda utilizarse más agua del río o embalse en épocas de caudales altos y menos agua en épocas de caudales o niveles de embalse bajos.
- Favorecer e impulsar la implantación de centrales hidráulicas de acumulación reversible.

En definitiva, y tal y como también se defendió en las jornadas sobre caudales ecológicos celebradas el 5 de mayo de 2011 por la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Universidad Autónoma de Madrid y la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid: "*Actualmente existen tecnologías para optimizar las explotaciones eléctricas afectadas por caudales ecológicos, lo que podría favorecer el entendimiento en los procesos de concertación y permitiría que las situaciones conflictivas se minimizaran.*"

En este mismo sentido, citamos el documento Resumen de las aportaciones de los expertos consultados publicado por la Confederación Hidrográfica del Ebro en su proceso de planificación hidrológica: "*En una política energética razonable, en el que el marco de establecimiento de una estrategia de ahorro y eficiencia energética que tenga como principales objetivos la reducción de la dependencia energética y la reducción de emisiones*

contaminantes, deberían eliminarse las actuales barreras administrativas, permitiéndose, al menos en Aragón, las nueva implantación de minicentrales hidroeléctricas en régimen fluyente".

Dicho lo anterior, pasamos a analizar los aspectos del documento sometido a Información Pública que pueden comprometer la actividad de producción de energía de mi representada y afectar a derechos concesionales preexistentes.

TERCERA.- *ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS (ART. 10)*

El apartado 2 del artículo 10 de la normativa sometida a Información Pública señala, en relación con el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en las concesiones preexistentes que no incluyan ésta previsión en su clausulado que *"le será de aplicación una vez se comunique a sus titulares el régimen de caudales ecológicos de acuerdo con el artículo 47 de esta normativa"*

Sin perjuicio de lo que se dirá en la Alegación Séptima siguiente acerca del artículo 47 de la normativa, debemos señalar que el procedimiento de implantación de los caudales debe hacerse con pleno sometimiento a la Ley.

La Administración no debe olvidar que si el proceso de concertación no culmina con acuerdo, la normativa no la habilita a imponer modificaciones en los títulos concesionales preexistentes mediante una simple comunicación, sin un procedimiento administrativo específico y en ningún caso, podría exigir la aplicación inmediata de los caudales impuestos *"una vez se comunique a sus titulares"*, tal y como parece que se pretende.

Así, la implantación de caudales ecológicos en relación con los derechos concesionales preexistentes no puede ser automática, ya que no solamente exige la aprobación del Plan sino también la emisión de un acto administrativo específico.

Y es en esta segunda actuación, donde debe valorarse si el respeto al caudal ecológico determina una restricción del aprovechamiento que deba ser indemnizada, asunto que será tratado en profundidad en la Alegación Séptima de este escrito.

Asimismo, este apartado señala, que "se *establecerá un plazo máximo para la realización de las obras de adecuación que pudieran ser necesarias que no podrá exceder en ningún caso del año 2015".*

50

Sin embargo, no aclara un aspecto fundamental, que es quién debe asumir el coste de dichas obras de adecuación cuando las mismas no están impuestas en los títulos concesionales

preexistentes, que, en opinión de esta parte, en ningún caso deberá serle imputado a los concesionarios, ya que se deriva de nuevas exigencias no impuestas en las concesiones existentes y que harán más gravosa la explotación del aprovechamiento. Y no solo eso, sino que la inversión, independientemente de quién asuma su coste, puede no llegar a amortizarse dentro del plazo de vigencia de la concesión.

En este sentido, si cuando la normal utilización de una concesión precisa de la realización determinadas obras cuyo coste no pueda ser amortizado dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión, el propio Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) en su art. 154, le reconoce el derecho a la prórroga del plazo para amortizar la inversión, con más argumento deberá otorgarse cuando las obras se impongan por la Administración para su adaptación al Plan Hidrológico.

Pero es que la normativa sometida a Información Pública, impone obligaciones a los titulares de derechos preexistentes que difícil encaje tienen en el Estado de derecho, ya que pretende:

1.- Que sin un procedimiento administrativo previo, sea el de concertación con terminación convencional, el de modificación y/o el de revisión de las concesiones, pueda imponer nuevas condiciones a los concesionarios con derechos preexistentes que se traduzcan en la limitación del caudal concedido y en la obligación de ejecución de obras que puede suponer que la concesión otorgada incluso llegue a perder su rentabilidad. Y todo ello, con una simple comunicación.

2.- Que la obligación de ejecutar obras de adecuación sea asumida por la concesionaria, sin contraprestación alguna, ya no solo en relación con el coste de la obra sino incluso con la posibilidad de amortizarla mediante prórroga del plazo concesional y ello, teniendo en cuenta que las obras de adecuación en los aprovechamientos Hidroeléctricos pueden alcanzar un coste elevadísimo y unos tiempo de amortización muy dilatados. Incluso en muchos casos, las mismas no serían viables técnicamente.

3.- Que, además, imponga de antemano, sin conocer si quiera que tipo de obras van a ser necesarias, un plazo máximo para la realización de las mismas, cuyo cumplimiento en la mayoría de las ocasiones no dependerá tanto del concesionario como de la tramitación administrativa que conlleve.

Por todo ello, entendemos que el artículo 10 debe ser modificado, dejando fuera de su regulación a los titulares de derechos preexistentes cuyas concesiones no incluyan la obligación de cumplimiento de un régimen de caudales ni de ejecución de obras para adecuarse a los que la Administración imponga.

51

CUARTA.- *ACERCA DE LOS PLAZOS CONCESIONALES (ART. 43)*

Entendemos que el artículo 43 del Plan sometido a Información Pública no se ajusta a lo establecido en la legislación de aplicación.

Así, en el apartado 1, señala que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 del Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y 97 RDPH la norma general es que las concesiones se otorguen por 20 años. Sin embargo dichos artículos únicamente señalan el plazo máximo, que será de 75 años. Lo cierto es que, en el caso de los usos para producción de energía eléctrica, la inversión necesaria no podría amortizarse en el plazo de 20 años, lo que haría no rentable cualquier inversión prevista y bloquearía el crecimiento de la energía hidroeléctrica en provecho de la producción térmica, con más impacto para el bien que se pretende proteger, que no es sino el medio ambiente.

Por su parte, los apartados 3 y 4, pretenden regular el plazo de las concesiones otorgadas en su día a perpetuidad, contradiciendo lo que la propia normativa ha dispuesto en relación con este asunto, que ha quedado plenamente resuelto en la Disposición Transitoria Primera del TRLA. Así, según estos apartados, las concesiones otorgadas a perpetuidad no pueden superar el plazo de 99 años desde su otorgamiento.

Sin embargo, el apartado 1 de dicha Disposición Transitoria Primera establece claramente que *"Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de 75 años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor."*

Por consiguiente, al desaparecer las concesiones a perpetuidad con la Ley de Aguas de 1985, las concesiones otorgadas antes a perpetuidad se rigen por dicha Disposición Transitoria, razón por la cual, la extinción de dichas concesiones por transcurso de plazo, tendrá lugar, ex lege, el 1 de enero de 2061.

Este plazo es el que específicamente se establece en la Ley de Aguas de 1985 (art. 57, ahora en el art. 59.4 TRLA), y es el que, por imperativo de la citada Disposición Transitoria Primera 1, debe aplicarse a dichas concesiones, computándose desde la fecha en vigor de la Ley de Aguas, que tuvo lugar el 1 de enero de 1986.

52

En definitiva, la cuestión de la caducidad de las concesiones de aguas que en su día fueron otorgadas a perpetuidad viene resuelta por una norma específica, que es la única de aplicación, sin que mediante el Plan Hidrológico pueda pretenderse la modificación de una norma con rango de Ley, como en este caso se pretende realizar con la norma sectorial de referencia en el Sector del Agua, como es el TRLA.

Por otra parte, el apartado 4 regula la prórroga de las concesiones, señalando que no se permitirán prórrogas sobre los 75 años. Asimismo, el apartado 5, señala que "*En ningún caso, la prórroga de hasta 10 años, regulada en el artículo 59.6, del TRLA permitirá la superación de los 75 años de duración máxima establecidos por el artículo 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas para cualquier concesión demanial*".

Llamamos la atención en el hecho de que, se le de aplicación directa a una norma general, sobre una específica del sector del agua, que en todo caso tendría aplicación supletoria.

Así, a través de este apartado se deja sin contenido el artículo 59.6 TRLA, que habilita al concesionario a prorrogar por encima de los 75 años cuando la normal utilización de la concesión exija la construcción de obras que no sean amortizables durante el tiempo que resta de vigencia a la misma.

También cuando se produce una modificación de la concesión que suponga un aumento de caudal está prevista la prórroga más allá de los 75 años, tal y como consta en el artículo 153 del RDPH, en la que la duración de la prórroga es la resultante de la fórmula que consta en el mismo y que supone siempre un aumento de plazo concesional si existe aumento de caudal.

En definitiva, entiende esta parte que el artículo 43 de la normativa sometida a Información Pública contradice claramente la norma de aplicación que no es otra que la Ley de Aguas y su Reglamento de desarrollo, a la que deberá remitirse en cuanto a la regulación de los plazos concesionales.

QUINTA.- *ACERCA DE LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS CONCESIONALES (ART. 44)*

El artículo 44 de la normativa sometida a Información Pública, en su apartado 2, vuelve a aplicar en su interés una norma general de aplicación supletoria, en detrimento de la legislación específica en materia de aguas.

Y es que en la normativa que específicamente el legislador español quiso que se aplicara a las concesiones de uso de aguas, no se contempla, en ningún caso, la demolición de lo construido a cargo además de la concesionaria, sino que todas las obras, sin excepción alguna, revierten a

53

la Administración una vez extinguida la concesión. Así se recoge con claridad en el artículo 53.4 TRLA y 164 del RDPH.

Lo anterior, sin perjuicio de que en relación con las concesiones preexistentes, habrá de estarse a lo que disponga el título concesional relación con la reversión de las obras a la Administración.

Por ello, entendemos que la posibilidad de exigir la demolición de lo construido debe ser eliminada del Plan.

SEXTA.- *ACERCA DE LAS CONCESIONES PARA APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS (ART. 46)*

En primer lugar, solicitamos aclaración acerca del apartado 4 del artículo 46, ya que no se entiende en que supuestos puede la Administración exigir la construcción de un contraembalse o en qué casos se acudirá a la expropiación.

Por otra parte, el apartado 6 de este artículo, contradice lo dispuesto en el TRLA y del RDPH. Dicho apartado señala *"Con carácter general, se denegarán aquellas modificaciones de características que impliquen aumento del plazo concesional, sin que en ningún caso se puedan autorizar las solicitudes efectuadas en ese sentido durante los últimos 5 años de vida de la concesión"*.

Dicha previsión deja sin efecto y sin contenido el artículo 153 del RDPH, e impide, de facto, que el concesionario, al amparo de la legislación de aguas, solicite, teniendo derecho a ello, un aumento de caudal, ya que le será denegado en tanto que las modificaciones que suponen aumento de caudal implican siempre un aumento de plazo.

Por dicha razón, el apartado 6 deberá ser eliminado del Plan.

SÉPTIMA.- *ACERCA DE LA MODIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS CAUDALES CONCESIONALES (ART. 47)*

El apartado 1 de este artículo señala *"Los caudales derivados en cada momento se adecuarán al consumo real, aunque el concedido sea superior"*. Entendemos que esa previsión del Plan no es aplicable a los caudales concedidos para aprovechamientos hidroeléctricos, en tanto que el uso hidroeléctrico no es consuntivo y varía en función de la demanda del Sistema Eléctrico.

Por otro lado, debemos mostrarnos muy críticos con el apartado 5 de este artículo, ya que va claramente no sólo en contra de lo establecido en la normativa específica de aplicación, sino

54

que vulnera derechos constitucionales fundamentales, siendo, por tanto, nulo de pleno derecho.

Dicho apartado señala que "*De conformidad con el artículo 59 del TRLA, los caudales ecológicos constituyen una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de aprovechamiento, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos, por lo que la comunicación al titular de los caudales ecológicos que concretamente haya de respetar su aprovechamiento, no supondrá la revisión de la concesión para su adecuación a los Planes Hidrológicos en los términos del artículo 65.3 del TRLA, salvo en aquellos casos en que la aprobación de un nuevo Plan altere tan sustancialmente los caudales disponibles o los usos a que éstos puedan destinarse, que en la práctica implique la desaparición del aprovechamiento o su inviabilidad*".

Como bien sabe esa Administración, las concesiones otorgan el derecho al uso privativo del agua, un derecho de carácter administrativo que reconoce a su titular el derecho al uso del agua para el destino indicado en la concesión, con exclusión de otros usuarios. Citamos en este punto la STS de 14 de diciembre de 1974: "*mediante la concesión se configura un auténtico derecho real administrativo, excluyente de cualquier otro uso, que supone y, en consecuencia, prejuzga la naturaleza pública de las aguas a las cuales afecta*". En definitiva, la concesión crea un derecho sobre aguas públicas, que no es un derecho de dominio sino un derecho a su uso exclusivo.

Por ello, las concesiones son derechos subjetivos de contenido patrimonial protegidos por el artículo 33 de la Constitución Española y como derecho no precario, no puede admitirse que la implantación de caudales ecológicos o nuevas condiciones de caudal, perjudique al concesionario sin que medie indemnización.

Así lo dispone expresamente el artículo 26.3 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional: "*La inexistencia de obligación expresa en relación con el mantenimiento de caudales ambientales en las autorizaciones y concesiones otorgadas, no exonera al concesionario del cumplimiento de las obligaciones generales que, respecto a tales caudales, sean recogidas por la planificación, **SIN PERJUICIO DEL POSIBLE DERECHO A INDEMNIZACIÓN***".

La implantación de los caudales ecológicos debe realizarse con respeto al sistema concesional y, por tanto, acudiendo al procedimiento de revisión de concesiones legalmente establecido, donde deben valorarse los daños económicos indemnizables que suponen la modificación del caudal concedido por concesión.

55

Si es preciso restringir los caudales concedidos con el fin de garantizar el cumplimiento de los caudales ecológicos, estamos ante una **modificación esencial de la concesión**, pues el artículo

144.2 del RDPH considera como característica esencial, entre otros, el caudal máximo y continuo medio equivalente a derivar.

Por su parte, el artículo 65.3 del TRLA establece que sólo en el caso señalado en el párrafo c) del apartado 1 (precisamente el de la revisión concesional para su adecuación a los Planes Hidrológicos), "***el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa***".

En el caso de mi representada y de las actuales concesiones para producción de energía, su adecuación al Plan para cumplir los caudales ecológicos se traduce en una merma del caudal concedido y en un perjuicio efectivo susceptible de cuantificación, por lo que también se cumpliría el artículo 91.2 del RDPH que indica que la revisión dará lugar a la indemnización cuando como consecuencia de la misma *"se irrogue un daño efectivo al patrimonio del concesionario"*.

En definitiva, si bien la normativa de aplicación apuesta, en cuanto a la implantación de caudales, por lo que denomina un proceso de concertación, es decir, una gestión negociada entre Administración y afectados que puede culminar en acuerdos, si a través de dicho proceso no se pudiera llegar a la terminación convencional, habrá de acudirse necesariamente al procedimiento de revisión previsto en el artículo 157 y siguientes del RDPH cuando se modifiquen los caudales concedidos

Defender lo contrario, tal y como se hace en el Plan sometido a Información Pública, merma absolutamente de eficacia dicho proceso de concertación, ya que la Administración nos está advirtiendo de que pase lo que pase en el mismo, los caudales ecológicos se impondrán, con independencia de los derechos concesionales preexistentes, con una simple comunicación y sin que en ningún caso tenga previsto compensar al concesionario.

Parece entender la Administración que la no disponibilidad de los caudales concedidos ampara la legalidad de esta imposición, lo que contradice su propia postura cuando defiende que sí procede la revisión, y por tanto la indemnización, cuando la implantación de los caudales *"en la práctica implique la desaparición del aprovechamiento o su inviabilidad"*. Es decir, según el planteamiento del texto sometido a información pública, si la implantación de los nuevos caudales implica una merma del caudal concedido que no implique la desaparición del mismo, se trataría de una restricción que no supone una revisión de la concesión para adecuarla a un plan hidrológico. Sin embargo, si la implantación de los nuevos caudales sí implica la desaparición del aprovechamiento, estaríamos a una restricción que sí supone una revisión de la concesión para adecuarla a un plan hidrológico. Entendemos en este punto que si no hay disponibilidad, no la hay para nadie. Si es una restricción que no conlleva revisión de la concesión, es una restricción para todos.

56

Todo lo anterior, es plenamente conocido por la Administración, que sabe que la interpretación que plasma en el Plan en relación con los derechos preexistentes se convertirá en controversia judicial. Así lo reconoce en el documento "Caudales Ecológicos", en cuyo capítulo 8, expresamente dispone *"Este anejo no es el lugar adecuado para tratar las distintas posturas existentes respecto al derecho a la indemnización precitada, tema que deberá ser resuelto oportunamente por los Tribunales de Justicia"*.

Pero es que además, la Administración introduce en el apartado 3 de este artículo, su segundo argumento para no compensar en ningún caso al concesionario, y es que, según dicho apartado, la revisión de caudales concedidos por implantación de caudales ecológicos no supone una adecuación a un Plan Hidrológico sino una modificación de los supuestos determinantes del otorgamiento de la concesión, que no dará lugar a indemnización.

Sin embargo, la posibilidad de aplicar dicha regla está sujeta normativamente a unos requisitos cuales son:

a) Que las modificaciones hayan sido debidamente comprobadas (art. 65.1.a del TRLA).

b) Que las únicas modificaciones de la concesión susceptibles de tener la consideración dada por el artículo 65.1.a, son las definidas en el artículo 156.2 del RDPH, que implica que se compruebe que las circunstancias objetivas que sirvieron de base al otorgamiento de la concesión hayan variado de tal modo que no sea posible alcanzar sustancialmente la finalidad de la concesión.

Por ello, entendemos que los recortes estructurales de caudal que, como en este caso, se deban a nuevos criterios de planificación hidrológica, no tiene, de ninguna manera, encaje en el supuesto legal previsto en el artículo 65.1.a) del TRLA.

En definitiva, a través del Plan que se pretende aprobar, la Administración pretende dejar sin contenido los derechos concesionales existentes, contra lo establecido en la normativa específica de aplicación, y fuerza una interpretación de la misma con el sólo objeto de no tener que hacer frente a las compensaciones que por derecho le corresponden a los afectados con derechos preexistentes como es el caso de mi representada.

Y dicho criterio contrasta con el adoptado en el documento *"Recomendaciones para la concertación de regímenes ecológicos de caudales en el marco de la planificación hidrológica Española"*, elaborado por diferentes expertos del Grupo de Trabajo de Caudales Ambientales, que al valorar la fase de negociación de caudales, incluye entre los apartados a negociar con

57

los afectados, *"el tipo y cuantía de la compensación, si así procede, por la modificación del régimen de caudales concesionales"*.

OCTAVA.- *ACERCA DEL IMPACTO DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN LAS CONCESIONES VIGENTES*

La imposición a las diferentes concesiones de HC, de los caudales ecológicos previstos en la propuesta del Plan Hidrológico de Cuenca, produce un considerable impacto sobre la producción de los aprovechamientos a los que se aplique, disminuyendo la misma y, en algunos casos, minorando la potencia de punta y causando un traslado de producción de punta a valle y llano, con el consiguiente quebranto económico para esta Sociedad.

La reducción del producible hidroeléctrico para el conjunto de las centrales de las que es concesionaría HC, es de 60, 16 GWh/año.

La reducción de potencia de punta garantizada por el equipo de HC, es de 17,15 MW.

Para los cálculos anteriores se ha tenido en cuenta lo establecido en los apartados 1 y 3 del artículo 11 de la Normativa sometida a información pública, y a las tablas concordantes con ellos del anejo 7.1. Los resultados, junto a la información complementaria correspondiente, se índica en el cuadro adjunto.

hc energía

PÉRDIDAS DE ENERGÍA POR EL AUMENTO DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS SEGÚN EL PHC

SALTO	APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO	FECHA FIN CONCESIÓN	Q CONCESIÓN l/s	Q ECO ACTUAL l/s	OBSERVACIONES	Q ECO NUEVO l/s	PRODUCCIONES GWh/año	PÉRDIDA DE ENERGÍA GWh/año	PÉRDIDA PUNTA GWh/año	PÉRDIDA POTENCIA DE PUNTA MW
LA MALVA							36,1			
	RIO VALLE	2061	1.010	-	NO OBLIGATORIO POR CONCESIÓN	80		2,9	-	-
	RÍO SALIENCIA	2061	2.100	-	NO OBLIGATORIO POR CONCESIÓN	50		1,8	-	-
	SOUSAS	2061	300	-	NO OBLIGATORIO POR CONCESIÓN	10		0,4	-	-
LA RIERA							31,2		0,5	0,4
	SOMIEDO Y SALIENCIA	2020	7.200	85 a 75	NO OBLIGATORIO POR CONCESIÓN	460		2,6		
	LAS MORTERAS	2020	1.000	14 a 6	OBLIGATORIO POR CONCESIÓN 6l/s	383		0,2		
MIRANDA	MIRANDA	2038	15.000	175	NO OBLIGATORIO POR CONCESIÓN	870	200,1	19,4	4,0	2,8
PROAZA							76,8			
	VALDEMURIO	2043	40.000	160 a 140	POR CONCESIÓN A PARTIR 2010	724		4,6	-	-
	OLID	2043	-	700 a 250	POR CONCESIÓN A PARTIR 2010	611		0,9	-	-
PRIAÑES							56,7	4,4	1,1	
	FURACON	2028	120.000	2.500	ESCALA DE PECES	9.020				-
	PRIAÑES	2028	5.600	-	-	-				-
LA BARCA	CALABAZOS	2061	109.600	5.000	GRUPO FRANCIS ECOLÓGICO	5.495	102,3	1,2	-	-
LA FLORIDA	PILOTUERTO	2061	31.000	150 a 100	NO OBLIGATORIO POR CONCESIÓN	4.650	30,5	9,1	-	-
TANES	TANES	2061	120.000	130 a 100	NO OBLIGATORIO POR CONCESIÓN	1.200	68,7	9,1	9,1	14,0
	RIOSECO	2061	-	1.800	OBLIGATORIO POR CONCESIÓN					
CAÑO							3,5			
	ESCALA	2012	-	850	OBLIGATORIO POR CONCESIÓN	1.970		-	-	-
	ALIVIADERO	2012	9.000	1.400	OBLIGATORIO POR CONCESIÓN	-		-	-	-
LAVIANA	ALIVIADERO	2061	5.500	850	OBLIGATORIO POR CONCESIÓN	1.640	3,6	1,2	-	-
SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	2035	1.500	-	FILTRACIONES DE LADERA	460	7,6	2,3	-	-
TOTALES							**616,92**	**60,16**	**14,65**	**17,15**

Nota: La pérdida de energía que figura en el cuadro es debida al incremento de los caudales ecológicos previstos en el Borrador del PHC, sobre la pérdida debida a los caudales ecológicos actuales.

Las pérdidas de energía que figuran en dicho cuadro son debidas al incremento de los caudales ecológicos previstos en el anejo 7.1, sobre la pérdida debida a los caudales ecológicos obligatorios, que figuran en las concesiones o que fueron establecidos mediante acuerdos con la Administración.

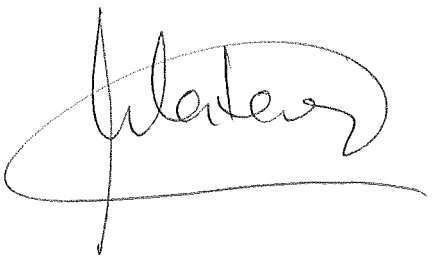
NOVENA.- *ACERCA DE LA CENTRAL TÉRMICA DE ABOÑO*

Mi representada, como titular de la Central Termica de Aboño ha detectado en los documentos sometidos a Información Publica un error material relativo a la titularidad de la concesionaria cuya corrección se solicita. En particular, y sin ánimo exhaustivo, se ha detectado en la Memoria del Plan (capítulo 3), así como en los Anejos 3 y Apéndice III y VI, en los que se nombra, erróneamente, como empresa concesionaria a la entidad HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., cuando debería señalarse HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A., titular de la instalación industrial de referencia y de las concesiones administrativas para captación de agua.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO que, teniendo por presentado este escrito con la documentación que se acompaña, se sirva admitirlo, y en mérito de lo que en él se expone, tenga por parte interesada a HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A., en el procedimiento de referencia, en virtud del artículo 31 de la Ley 30/1992, dándole traslado de las actuaciones que en el mismo se produzcan y en mérito de lo que en él se expone, modifique el texto del Plan sometido a Información Pública en los términos expuestos en el presente escrito.

Oviedo, 28 de octubre de 2011



AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO[illegible] DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIE[illegible]

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 28/10/2011
OFICINA SAN SEBASTIAN 10:33:59
E00220110000081[illegible]

D. JOSE IGNACIO GALARRAGA URRETAVIZACAYA, en su calidad de Administrador Solidario de la mercantil ELECTRA BRAVO, S.L. domiciliada a efectos de notificación en Irunzubi Industrialdea nº 2 20490 LIZARTZA (GIPUZKOA), y cuyo CIF es B/95279535, comparezco y como mejor proceda en Derecho **DIGO**

Que paso a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental y, concretamente, a su normativa, a tenor de las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su computo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

61

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art 136 de la constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización,.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

62

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evapotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas– reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

63

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo. En unas instalaciones necesitadas de inversiones Intensivas en Capital, es necesario entender que el plazo concesional resulta determinanate en la viavilidad de la empresa.

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía primaria llega a través de combustibles fósiles.

En un escenario de costes energéticos fósiles menguantes y en continuo ascenso, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energias renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energia electrica consumida fue de origen renovable.

No cabe duda de que la sostenibilidad de nuestro modelo económico y social esta ligado a otras fuentes de energía de tipo distribuido donde la hidroeléctrica desempeña un papel protagonista al ser en la actualidad la tecnología disponible con menor impacto medioambiental. Muy por encima del resto de tecnologias, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energia de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables".

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la la minihidráulica.

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

66

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal del aprovechamiento a las necesidades reales".

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años. Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,- hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

67

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia: Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidraúlico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.*

En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala, *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..)* ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión"*) y no la actualmente vigente (*"contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

70

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, el certificado expreso emitido por la Confederación Hidrográfica, supone el reconocimiento explícito de sus derechos y, en relación a los presentes efectos, ha de destacarse la condición específica primara que, y es copia literal, dispone: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986"***.

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

   Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

"/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) <u>Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.</u>

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

72

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretados de forma restictiva como una "Lista Cerrada". Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

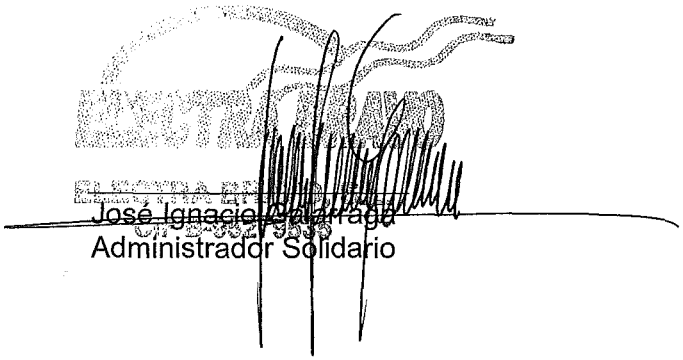
Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral *"De Facto"* de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

S O L I C I T O

Primero y único.- Que, en tiempo y forma, se tenga por presentado el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, en base a los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo en Lizartza, a 28 de octubre de 2011.



José Ignacio Zabaraga
Administrador Solidario

GiWatt Gipuzkoako Energia Hidroelektrikoaren Ekoizleen Elkartea - Asociación de Productores de Energia Hidroeléctrica de Gipuzkoa
Urbieta Kalea,13 20006 DONOSTIA GIPUZKOA giwatt@telefonica.net 943 428 047 639 724 752

AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDR(
DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIE

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 26/10/2011 OFICINA SAN SEBASTIAN 10:35:0
E002201100000815

FRANCISCO JABIER LAKUNTZA BEUNZA, mayor de edad, provisto de DNI nº 15.801.765, actuando en su calidad de Presidente de de la Asociación de Productores de Energía Hidroeléctrica de Gipuzkoa GIWATT, con domicilio a estos efectos en 20490 LIZARTZA, Irunzubi Industrialdea, 2, comparezco y como mejor proceda en Derecho **DIGO:**

Que paso a efectuar **ALEGACIONES** a la **Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental** y, concretamente, a su normativa, a tenor de las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su computo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

77

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art 136 de la constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización,.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

78

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evapotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas– reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo. En unas instalaciones necesitadas de inversiones Intensivas en Capital, es necesario entender que el plazo concesional resulta determinanate en la viavilidad de la empresa.

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía primaria llega a través de combustibles fósiles.

En un escenario de costes energéticos fósiles menguantes y en continuo ascenso, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energias renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energia electrica consumida fue de origen renovable.

No cabe duda de que la sostenibilidad de nuestro modelo económico y social esta ligado a otras fuentes de energía de tipo distribuido donde la hidroeléctrica desempeña un papel protagonista al ser en la actualidad la tecnología disponible con menor impacto medioambiental. Muy por encima del resto de tecnologias, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energia de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables".

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la la minihidráulica.

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

82

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal del aprovechamiento a las necesidades reales".

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años. Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,- hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

83

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia: Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidraúlico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.*

84

En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala, *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..)* ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente (*"contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de *pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:*

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.´

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

88

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, el certificado expreso emitido por la Confederación Hidrográfica, supone el reconocimiento explícito de sus derechos y, en relación a los presentes efectos, ha de destacarse la condición específica primara que, y es copia literal, dispone: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986"***.

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

89

"/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) <u>Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.</u>

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario. **90**

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) <u>Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos</u>

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) <u>Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales</u>

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretados de forma restictiva como una "Lista Cerrada". Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral *"De Facto"* de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

92

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que, en tiempo y forma, se tenga por presentado el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, en base a los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo en Lizartza, a 30 de octubre de 2011.

José Ignacio Galarraga
Secretario

Francisco Jabier Lakunza
Vº Bº Presidente

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
REGISTRO DE ENTRADA 31/10/2011 OFICINA SAN SEBASTIAN 12:05:19
E00220110000819

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCAS DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL (PARTE ESPAÑOLA)

D. José Javier Belza Pérez, DNI. 15.922.897C, en representación de C.H.Olaverri, S.L, CIF. B-20604930, entidad domiciliada en Oiartzun (Gipuzkoa), Astigarragako Bidea, número 2, planta 5ª, titular del aprovechamiento Central Hidroeléctrica Olaberri u Olaverri" y de acuerdo al procedimiento de consulta pública determinado en el B.O.E, número 106 de 4 de mayo de 2011, solicita que se tengan en cuenta en la elaboración del citado Plan Hidrológico las cuestiones que se citan a continuación.

CONSIDERACIONES

Sobre la necesidad de tener en cuenta el impacto ambiental diferenciado según la tipología de los aprovechamientos hidroeléctricos en referencia a la detracción de caudal. El caso de la central hidroeléctrica Olaverri, en Andoain (Gipuzkoa)

A) IMPACTO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE APROVECHAMIENTOS

En los documentos referentes al Plan Hidrológico de las Cuencas Orientales no se hace mención a este aspecto, si bien a efectos de diagnóstico puede constatarse la diferente incidencia en documentos como el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la CAPV, que incluye las cuencas de Gipuzkoa de su competencia y que se encuentra en tramitación en estos momentos.

En la Memoria del citado Plan Hidrológico (página 139), se señala que para la valoración de las presiones ejercidas por la derivación de caudal, "*resulta importante valorar cuantitativamente tanto la magnitud de caudal detraído como la longitud del tramo afectado*". De acuerdo a ello, se establece la siguiente clasificación de las centrales hidroeléctricas según sus características:

> *Tipo 1. Se trata de minicentrales que no tienen canal de derivación de longitud significativa (<100 m), debido que el punto de toma es muy próximo al de suelta. De esta manera el tramo afectado por la disminución de caudal es muy corto y no suele haber afección relevante al ecosistema fluvial.*

95

Tipo 2. Se trata de minicentrales que sí disponen de caudal de derivación significativo. Éste tiene una longitud no superior a los 250 metros. Existe, por lo tanto, un tramo de río que puede verse afectado por la disminución de caudales.

Tipo 3. Se trata de minicentrales que disponen de un canal de derivación con una longitud superior a los 250 metros. En ocasiones, el punto de toma dista varios kilómetros de la suelta. La afección al medio hídrico en caso de una gestión inadecuada de la central puede ser grande.

En el mismo apartado, y para estimación de las presiones producidas por los diferentes aprovechamientos se tiene en cuenta el tipo de central y los volúmenes captados, tal como se refleja en el cuadro correspondiente a la tabla 129 que se refleja a continuación.

Clasificación de la presión ejercida sobre las masas de agua en la categoría río por derivaciones de caudal de las centrales hidroeléctricas

NIVEL DE PRESIÓN	CAUDAL DETRAÍDO
SIN PRESION	No se produce derivación de caudal, o ésta es inferior al 0,1% del caudal natural
BAJA	El caudal derivado por todos los tipos de centrales supera el 0,1% del caudal natural
MODERADA	El caudal derivado por los canales mayores de 100 metros (centrales tipo 2 y 3) supera el 20% del caudal natural
ALTA	El caudal derivado por los canales mayores de 250 metros (centrales tipo 3) supera el 20% del caudal natural

Fuente: Memoria del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco. Página 140.

Se observa por tanto una incidencia de distinto grado, que en el caso de la longitud de derivación supone un nivel de presión que se considera bajo para las centrales con canales de menos de 100 metros.

B) TRAMOS DERIVADOS POR CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN GIPUZKOA

En el estudio "Producción hidroeléctrica en Gipuzkoa. Bases para la elaboración de las directrices sobre el uso sostenible del agua en Gipuzkoa" de la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2006, se recoge un listado de centrales y sus principales datos de tipo ambiental Se incluyen las tablas de referencia en el Anexo 1 al final del presente documento. Entre los datos que se aportan figura la longitud de las derivaciones. De acuerdo a los rangos expuestos en el apartado anterior, los aprovechamientos se distribuyen de la siguiente manera:

LONGITUD DERIVACIÓN (Mts)	NÚMERO DE CENTRALES
0 – 100	4
100-250	7
>250 De 250 a 1.000 mts: 11 centrales De 1.000 a 2.000 mts: 19 centrales Más de 2.000 mts: 21 centrales	51

Fuente: Elaboración propia según datos de (http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/directrices/agua/TOMO%20III/Monografia-Minicentrales-ESTRATEGIA%20AGUA.pdf).

En el cuadro se observa que tan sólo 4 centrales ocasionan derivaciones de menos de 100 metros de longitud. Como puede observarse en los datos que se aportan como anexo, la C.H. Olaberri figura además con un tramo derivado de "0 metros" y es la única que se encuadra entre los de derivación inferior a 100 metros dentro de demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental, siendo las otras tres de las Cuencas Internas.

La mayor parte de las centrales de Gipuzkoa se encuadran en el tercer grupo, con derivaciones de más de 250 metros. De ellas 30 cuentan con derivaciones inferiores a 2.000 metros y 21 superan esta cifra. Seis llegan a sobrepasar los 5.000 metros y en algún caso incluso superan los 15.000 metros. Estas cifras no incluyen además las derivaciones en cursos secundarios.

Resulta evidente la situación diferencial respecto a las derivaciones entre unos aprovechamientos u otros. Esta condición no se refleja sin embargo en ningún apartado de los documentos que ahora se exponen del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental.

Sin embargo, el tratamiento que se da a las centrales ubicadas a pie de presa de los embalses resulta diferente. Hay que destacar además de la no fijación de caudales ecológicos que sobrepasen la coronación de las presas, incluso la existencia de aprovechamientos específicos de los caudales ecológicos, que son turbinados. Este diferente tratamiento no tiene justificación en cuanto a objetivos ambientales.

C) *CONDICIONES ESPECÍFICAS DE HIDROELÉCTRICA OLAVERRI E INCIDENCIA EN EL RÍO SEGÚN LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO*

En concordancia con lo reflejado en la tipología, se encontraría ubicada en el Tipo 1, al no alcanzar los 100 metros, que según lo recogido para este tipo sería: "*el tramo afectado por la disminución de caudal es muy corto y no suele haber afección relevante al ecosistema fluvial*".

Se dan además algunas particularidades, que conducen a reducir esta afección y aún dentro de la tipología mencionada: **97**

- Se trata de un aprovechamiento a pie del azud, con el vertido inmediato bajo el mismo y no dispone canal de derivación ni de desagüe, únicamente la cámara de carga adosada al azud.

- El vertido tras el aprovechamiento de las aguas, se realiza en el remanso que llega hasta la misma pared del azud, sin producirse discontinuidad en la lámina de agua. La ubicación de otro azud aguas abajo favorece el mantenimiento de nivel del agua en este remanso y una elevada profundidad en el mismo.

- El vertido de caudal por encima de la presa, por la escala de peces existente y por la central, tras la turbinación, se produce en el mismo lugar, por lo que el efecto en la derivación en el río es el mismo, vaya por uno u otro conducto.

- La situación del río en cuanto a caudal es independiente del funcionamiento o no de la central y de la cantidad turbinada o pase por encima del azud.

Esta circunstancia se corrobora en la Resolución de 17 de mayo de 2007, dictada por la Confederación Hidrográfica del Norte, referente a la aprobación del Acta de Reconocimiento Final de otorgamiento de la concesión definitiva. En la citada acta, consta textualmente:

> *"El edificio de máquinas está situado junto al estribo derecho del azud. Al tratarse de una central a pie de presa el agua no se deriva fuera del cauce, ya que una vez atraviesa la cámara de carga y es turbinada, desagua en la sección inmediatamente aguas debajo de la toma, junto al azud.*
>
> *Asimismo, unos metros más debajo de la central existe un azud de otro aprovechamiento, que provoca que el remanso de la lámina de agua que alcanza el pie del azud de la central de Olaverri, lo que asegura que este tramo de río lleve agua independientemente de que la central esté o no en funcionamiento. El día de la visita de reconocimiento se procede a la puesta en marcha y paro de la central mediante accionamiento manual, comprobándose que efectivamente el caudal circulante por el tramo de río sito entre ambos azudes se mantiene constante".*

En las imágenes que se adjuntan en el Anexo 2 puede observarse el conjunto del aprovechamiento, con el azud, escala piscícola a la izquierda, cámara de carga y casa de máquinas a la derecha y el remanso que finaliza en el azud del aprovechamiento ubicado aguas abajo.

D) LA INCIDENCIA DE LA DERIVACIÓN DE ESTA CENTRAL SEGÚN EL PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEC LEITZARAN

Mediante Orden de 23 de diciembre de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco (B.O.P.V, número 24 de 4 de febrero de 2011), se acordó la aprobación inicial del proyecto de Decreto por el que se designan Zonas Especiales de Conservación de catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se fijan las medidas de conservación de estos lugares. Entre estos lugares se encuentra el del Río Leitzaran.

Los documentos que contienen las medidas de gestión de esta ZEC se denominan "Designación de la Zona de Especial Conservación ES210013 Río Leitzaran/Leitzaran Ibaia", incluyen los de Diagnóstico, Objetivos y actuaciones particulares y Mapas.

98

En el apartado 4.6.2 del documento de diagnóstico, apartado denominado "Corredor Acuático" se describen las afecciones producidas por cada una de las centrales hidroeléctricas en el ámbito de la ZEC. Los datos, según se indica, proceden del estudio "Producción hidroeléctrica en Gipuzkoa. Bases para la elaboración de las directrices sobre el uso sostenible del agua en Gipuzkoa" de la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2006. Hay un apartado concreto, denominado "Afección por derivación" que se refleja para cada una de las centrales:

CENTRAL	AFECCIÓN POR DERIVACIÓN
Olaberri	La central se encuentra a pie de presa y prácticamente no origina afección por derivación
Bertxin	La central se ubica en un tramo previamente derivado por la central de Leizaran. Vuelve a originar una segunda derivación algo superior a 3.2 km.
Leizaran	Esta central hidroeléctrica genera el tramo derivado más largo de Gipuzkoa, superior a 15.7 km de río.
Ameraun	El salto hidroeléctrico de Ameraun afecta con su derivación a un tramo de unos 4.5 km.
Plazaola 1	La derivación de caudal afecta a un tramo superior a 3.1 km de longitud.
Plazaola 2	La central toma en el afluente del Leitzaran Frankierreka, situado en Navarra y el desagüe vierte directamente en el canal de derivación de la central Plazaola nº 1. La longitud de derivación alcanza casi los 2 km.
Santolaz	No se conoce la afección por derivación que produce esta central hidroeléctrica.

Fuente: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-3074/es/contenidos/informacion/natura_2000/es_10989/adjuntos/ES2120013_LEITZARAN_01Diagn_IP.pdf

Como puede constatarse las afecciones por derivación son diferenciadas en los distintos aprovechamientos y la situación es netamente distinta en la central Olaberri respecto al resto de aprovechamientos.

Hay una referencia expresa también a este hecho diferencial, en el documento de objetivos y medidas (http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-3074/es/contenidos/informacion/natura_2000/es_10989/adjuntos/ES2120013_LEITZARAN_02Obj_Med_IP.pdf) para las especies clave visón europeo (*Mustela lutreola*) y desmán del Pirineo (*Galemys pyrenaicus*), mencionándose la necesidad de revisar los caudales mínimos del resto de aprovechamientos, sin incluirse la central de Olaberri:

> *"Son de aplicación todas las medidas propuestas en el artículo 5.5 del Capítulo I, en relación con el uso del agua en la ZEC, así como las que figuran en el elemento clave corredor fluvial, relativas a la eliminación de los obstáculos en el corredor acuático, el respeto de los caudales ecológicos y el seguimiento de la eficacia de las medias adoptadas. En particular, son importantes las relativas a la caducidad de las concesiones fuera de uso (eliminación del obstáculo), la prohibición de las sueltas en emboladas y la revisión de las condiciones de la concesión de agua de las centrales hidroeléctricas Leitzaran, Plazaola-1, Plazaola-2, Ameraun, Santolaz y Bertxin, para adecuarlas a los caudales mínimos necesarios para el mantenimiento del hábitat del visón europeo y el desmán del pirineo en un estado de conservación favorable".*

Para determinar los caudales, se recoge también dentro del documento de "Objetivos y actuaciones particulares" de la ZEC (página 36), se incluye como actuación I.AC.4 la "*elaboración de un estudio específico para la ZEC cuyo objetivo será definir un régimen de caudales adecuado para el buen estado de conservación de los hábitats y especies que constituyen elementos clave de la ZEC*".

En el Anexo 3 se reflejan los contenidos del documento de la ZEC mencionado.

E) LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OLABERRI, EN LOS EQUIPAMIENTOS DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL

Cercano a la central de Olaberri se encuentra el "Centro de Interpretación del Agua" que sirve también como centro de visitantes del Biotopo Protegido. Este centro pertenece al Ayuntamiento de Andoain y ha sido financiado con las aportaciones del Gobierno Vasco y Agencia Vasca del Agua.

Se han delimitado itinerarios y en el folleto de uno de ellos, que discurre próximo a la central se trata sobre la central de Olaberri, haciéndose constar la carencia de canal y funcionamiento antes comentado, además de referencias a la escala de peces y utilidad de las mismas para las distintas especies.

Se refleja a continuación el texto según consta en el folleto (http://www.leitzaran.org/down/AGUA_Y_TRENTXIKI_es.pdf)

CENTRAL Y PRESA DE OLABERRI

Una presa con escala para peces

La minicentral hidroeléctrica no tiene canal, siendo la propia presa la que hace la misión de cámara de carga. El desagüe del agua empleada para mover las turbinas se realiza de forma directa de la casa de máquinas.

Al final de la presa se puede apreciar una escala para peces, es decir, un pasadizo o vía de agua franqueable, que permite a los peces sortear obstáculos existentes en el curso del río, en este caso la presa. Hay escalas de múltiples formas y diseños. El tipo de escala que se determine como más apropiado en cada caso depende de varios factores. Uno de ellos lo constituye la especie o especies de peces que se pretenda beneficiar facilitándoles el paso, teniendo en cuenta para ello la capacidad natatoria y de salto de cada pez (en función de la especie, edad o talla y estado de salud).

No se puede pretender, por ejemplo, que las anguilas utilicen una escala diseñada para el remonte de las truchas, en la que es necesario dar saltos de 40 ó 50 cm fuera del agua, o que las truchas franqueen una presa reptando por el interior de un tubo que contiene ramas y por el que circula el agua del río.

La denominación genérica "salmo", aplicada a truchas y salmones, hace referencia a su gran capacidad de salto fuera del agua (Salmo es el nombre latino que deriva de salio, que en latín significa saltar). Su característica más curiosa es que después de aparearse con el macho, la trucha hembra se lo come como prueba de fidelidad. El sarcástico dicho "te quiero mucho, como la trucha al trucho" nace de esta especie y su peculiar manera de demostrar el amor.

Este material, se completa con un panel de interpretación dedicado a esta central y ubicado en las proximidades de la misma. Cuenta con un contenido similar y con imágenes de la central, de su escala de peces y de ejemplares de trucha. En el Anexo 4 se incluyen imágenes del panel.

100

Atendiendo a lo hasta aquí mencionado,

SE SOLICITA

1. Se tenga en cuenta en la normativa de caudales ecológicos a respetar por los aprovechamientos hidroeléctricos, las afecciones al ecosistema fluvial que representan según la tipología del aprovechamiento y por tanto las correcciones específicas necesarias.

En los documentos expuestos no se reflejan ni en los apartados de diagnóstico ni en los de contenido normativo referentes a caudal ecológico las condiciones específicas de los aprovechamientos que tal como se ha señalado constituyen aspectos relevantes. La diferencia incidencia ambiental se señala en documentos como el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la CAPV e incluso en los de la propia ZEC río Leitzaran.

En el caso de la central hidroeléctrica Olaberri, que constituye una excepción en el territorio de Gipuzkoa dentro de las Cuencas Orientales, al ser la única con una derivación inferior a 100 metros de longitud, el tramo derivado es incluso nulo. Tal como señalan los documentos emitidos por Confederación Hidrográfica, la situación del río bajo el azud es independiente del funcionamiento o no de la central, considerándose un aprovechamiento a pie de presa.

2. Se establezca una ordenación específica para los aprovechamientos "a pie de presa"

De acuerdo al punto anterior, y la tipología del aprovechamiento, se debería fijar en el Plan Hidrológico las magnitudes de caudal ecológico a respetar por los aprovechamientos acordes a la corrección de los impactos que se producen por este factor.

De acuerdo a lo que ocurre en los grandes embalses, caso de los de abastecimiento que se ubican en el área, la ubicación de las centrales a pie de presa es similar a las de los aprovechamientos de menor o nulo tramo derivado, como el de Olaberri. En dichos aprovechamientos bajo embalse el caudal ecológico se entiende que es el que discurre tras pasar por la central e incluso cuenta con instalaciones específicamente configuradas para ello.

Para lograr un mayor ajuste a las situaciones concretas, podría optarse a recoger la posibilidad de que los concesionarios aportaran una propuesta de caudales ecológicos, justificada por los pertinentes estudios técnicos.

A 31 de Octubre de 2011



101

ANEXO 1

LISTADO DE CENTRALES Y PRINCIPALES DATOS DE TIPO AMBIENTAL

FUENTE: "Bases para la elaboración de las directrices de uso sostenible del agua en Gipuzkoa. Producción hidroeléctrica". Diputación Foral de Gipuzkoa, 2006

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
GARAPEN ERAMANGARRIRAKO DEPARTAMENTUA
Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección General de Obras Hidráulicas

BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS DIRECTRICES SOBRE EL USO SOSTENIBLE DEL AGUA EN GIPUZKOA

PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA EN GIPUZKOA

JULIO 2006

IKAUR
ARQUITECTOS E INGENIEROS

EKOLUR

ANEXO

LISTA DE CENTRALES
Y
PRINCIPALES DATOS DE TIPO AMBIENTAL

Nota: en algunas de las centrales hidroeléctricas hay más de un azud. En los casos en que se tienen datos suficientes se han especificado.

NOMBRE	UH	RIO	ALTURA AZUD [M]	EXIST. ESCALA	EFICACIA SISTEMA MIGRACIÓN DESCENDENTE	LONG DER [M]	LONGITUD EMB [M]	QMIN ESTIAJE [L/S]	QMIN INVIERNO [L/S]	Q CONCES [L/S]	SALTO [M]
C.H. IRUGURUTZETA/IRUSTA	BIDASOA	BIDASOA	SIN DATOS		SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	150		540	314
C.H. ELORDI	BIDASOA	BIDASOA	SIN DATOS		SIN SISTEMA	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS		400	126.1
C.H. MASUSTANEGIKO	OIARTZUN	OIARTZUN	5.4		SIN SISTEMA	1468	17	85	170	400	176.81
C.H. PENADEGI	OIARTZUN	OIARTZUN	1.3		SIN SISTEMA	1833	14			280	91
C.H. PAPELERA DE ZIKUÑAGA	URUMEA	URUMEA	1.6	SI	INEFICAZ	1550	935	1500		6000	4.08
C.H. LASTAOLA	URUMEA	URUMEA	2.0	SI	SIN SISTEMA	1665	185	1500		4000	4.5
C.H. FAGOLLAGA	URUMEA	URUMEA	3	SI	INEFICAZ	695	605	1600		4500	5.8
C.H. DE RENTERIA	URUMEA	URUMEA	4.4	SI	INEFICAZ	555	570	1600		4000	6
C.H. PIKOAGA	URUMEA	URUMEA	4.5	SI	INEFICAZ	2650	1485			4400	16
C.H. SANTIAGO	URUMEA	URUMEA	5.6	SI	SIN SISTEMA	3550	530			4000	20.15
C.H. MENDARAZ	URUMEA	URUMEA	4.0	SI	SIN SISTEMA	1955	350			4000	15.18
C.H. ARRAMBIDE	URUMEA	URUMEA	3.0	SI	SIN SISTEMA	1305	105	950		8000	9.82
C.H. DE AÑARBE	URUMEA	AÑARBE	EMBALSE		SIN SISTEMA					2525	55
C.H. DE AÑARBE	URUMEA	AÑARBE	1.8		SIN SISTEMA	9710	50				
C.H. OQUILLEGUI	URUMEA	AÑARBE	4.5	SI	SIN SISTEMA	1580	100	500		1500	22
C.H. BERDABIO	URUMEA	AÑARBE	4.2	SI	SIN SISTEMA	910	50	160		1500	60.5
C.H. ANOETA	ORIA	ALKIZA	3.2	SI	SIN SISTEMA	1830	30	50		400	80
C.H. EZPALEO	ORIA	AFLU_ZEGAMA	2 TOMAS		SIN SISTEMA	SIN DATOS	SIN DATOS			300	330
C.H. SANTOLAZ	ORIA	SANTOLAZ	3 TOMAS		SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	200		650	140
C.H. AKERRETA	ORIA	AGAUNTZA	EMBALSE		-					55	82
C.H. IKAZTEGIETA	ORIA	ORIA	2.8	SI	SIN SISTEMA	1910	770	825		8000	9.3
C.H. OLABERRI	ORIA	LEIZARAN	5.5	SI	ADECUADO	0	385	340	680	3000	5.5
C.H. BAZKARDO	ORIA	ORIA	2.5	SI	ACEPTABLE	240	800	2250		12000	3.9
C.H. ABALOZ	ORIA	ORIA	2.0	SI	SIN SISTEMA	1397	788	2250		12000	8.84
C.H. ALDABA	ORIA	ORIA	3.0	SI	SIN SISTEMA	776	844	900		6700	6.5
C.H. DE LIZARTZA	ORIA	ARAXES	2.5	SI	SIN SISTEMA	4885	NAVARRA	220		590	71.37
C.H. USABAL	ORIA	ORIA	1.5	SI	SIN SISTEMA	1427	323	1175		4000	10.25

NOMBRE	UH	RIO	ALTURA AZUD [M]	EXIST. ESCALA	EFICACIA SISTEMA MIGRACIÓN DESCENDENTE	LONG DER [M]	LONGITUD EMB [M]	QMIN ESTIAJE [L/S]	QMIN INVIERNO [L/S]	Q CONCES [L/S]	SALTO [M]
C.H. ERROTA-ZARRA/BERROBIKO	ORIA	BERASTEGI	1.4		SIN SISTEMA	221	67			250	4.5
C.H. OLLOQUI	ORIA	LEIZARAN	7.0	SI	SIN SISTEMA	920	340	325		1000	28
C.H. ALKIZA	ORIA	ALKIZA	MANANTIAL		-	395	0	6,5		120	64.7
C.H. ZALDIBIA (BONBATXULO)	ORIA	ZALDIBIA	3	SI	SIN SISTEMA	1493	0	60		1500	82.34
C.H. AMERAUN	ORIA	LEIZARAN	4.1	SI	SIN SISTEMA	4510	150	323	646	3000	54
C.H. IRURA	ORIA	ORIA	1.8	SI	SIN SISTEMA	110	607	1630	3260	11000	5.5
C.H. ZALDIBIA (OSINBERDE)	ORIA	ZALDIBIA	MANANTIAL		-	3309	-	50		840	247.3
MOLINO UGARTE	ORIA	AMEZKETA	3.6		SIN SISTEMA	223	70			150	4.2
C.H. ELECTRA PLAZAOLA Nº1	ORIA	LEIZARAN	3.1	SI	SIN SISTEMA	3150	220	260		2000	52
C.H. BERTXIN	ORIA	LEIZARAN	5.8	SI	SIN SISTEMA	3245	475	391		1000	103
C.H. BERTXIN (PRESA INTURIA)	ORIA	LEIZARAN	10		SIN SISTEMA	-	1250	385			
C.H. LEIZARAN	ORIA	LEIZARAN	2.1	SI	SIN SISTEMA	15722	225			3000	208
C.H. PLAZAOLA Nº2	ORIA	LEIZARAN	5.5	SIN DATOS	SIN DATOS	-	NAVARRA			400	130.7
MOLINO REZUSTA	UROLA	UROLA	2.4		ADECUADO	15	639	1070	2790	1600	2.9
C.H. ALTUNA - TXIKI	UROLA	UROLA	2.6		SIN SISTEMA	165	343	896		1500	3.56
C.H. ALBERDIKOA	UROLA	UROLA	3.1		SIN SISTEMA	1596	594	895		1600	9.95
C.H. BADIOLEGI	UROLA	UROLA	5.2	SI	SIN SISTEMA	538	497	895		4000	7.57
C.H. ERROTA - BERRI / ASTIZUBI	UROLA	UROLA	2.8		SIN SISTEMA	2067	52	235		600	40.86
C.H. AIZPURUTXO	UROLA	UROLA	1.3	SÍ	SIN SISTEMA	2454	45	280		900	43.54
C.H. ERDOIZTA	UROLA	ALZOLARAS	1.5		SIN SISTEMA	1377	6	37		340	57
C.H. ERDOIZTA	UROLA	ALZOLARAS	8.0		SIN SISTEMA	626		37		340	57
C.H. ERDOIZTA	UROLA	ALZOLARAS	0.4		SIN SISTEMA	903	0	37		340	57
C.H. ANDRONDEGUI	UROLA	UROLA	0.3		SIN SISTEMA	1457	0	56		124	248
C.H. ANDRONDEGUI	UROLA	UROLA	3.5		SIN SISTEMA	663	11	56		124	248
C.H. ANDRONDEGUI	UROLA	UROLA	0.3		SIN SISTEMA	2629	0	56		124	248
C.H. IGARAN (1)	UROLA	UROLA	1.0		SIN SISTEMA	1087	0	55		136	
C.H. IGARAN (1)	UROLA	UROLA	1.5		SIN SISTEMA	1789	0	55		136	
C.H. IGARAN (1)	UROLA	UROLA	1.0		SIN SISTEMA	2085	0	55		136	
C.H. IGARAN (1)	UROLA	UROLA	SALTO NAT		SIN SISTEMA	2463	0	55		136	
C.H. IBAI-EDER	UROLA	UROLA	EMBALSE		SIN SISTEMA						

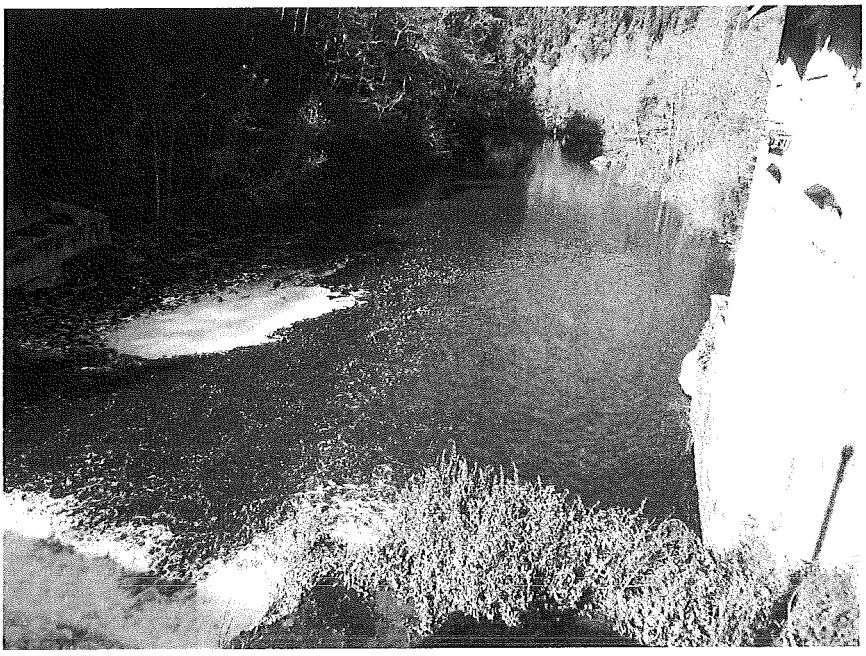
NOMBRE	UH	RIO	ALTURA AZUD [M]	EXIST. ESCALA	EFICACIA SISTEMA MIGRACIÓN DESCENDENTE	LONG DER [M]	LONGITUD EMB [M]	QMIN ESTIAJE [L/S]	QMIN INVIERNO [L/S]	Q CONCES [L/S]	SALTO [M]
C.H. MOLINO DE ALTZOLA	DEBA	DEBA	4.9		SIN SISTEMA	67	738	1140		2000	5
C.H. BARRENA-BERRI	DEBA	DEBA	3.5		SIN SISTEMA	134	201	2000		7000	9.61
C.H. AITZETARTE	DEBA	DEBA	5.0		SIN SISTEMA	224	127	2000		7000	9.69
C.H. LAUPAGO	DEBA	DEBA	4.1		SIN SISTEMA	73	290	2000		7000	5.83
C.H. SOLOGOEN	DEBA	DEBA	2.6	SÍ	ADECUADO	980	468	1300		5000	9.7
C.H. ALTUNA HERMANOS	DEBA	OÑATE	4.2		SIN SISTEMA	228	748			1760	5.02
C.H. LAMIATEGI	DEBA	ARANTZAZU	5.0	SÍ	DUDOSO	1957	152	200		1650	31.42
C.H. OLATE (ZAPATA)	DEBA	ARANTZAZU	4.5		ADECUADO	4762	70	50		907	270.75
C.H. OLATE (JATURABE)	DEBA	ARANTZAZU	25		SIN SISTEMA	2845	649	50		1000	103.5
C.H. OLATE (SARATXO)	DEBA	SARATXO	MANANTIAL		-	4408	0	50		295	217.85
C.H. OLATE (ARANTZAZU)	DEBA	SARATXO	20 TOMAS		SIN DATOS	11600		50		161	460.24
C.H. UBAO-TOKILLO	DEBA	OÑATE	MANANTIAL		-	1468	0			255	305.5
C.H. TXIRRITA	DEBA	ARAMAIO	1.7		SIN SISTEMA	263	32			600	9.69
C.H. URKULU	DEBA	OÑATE	EMBALSE		SIN SISTEMA						

ANEXO 2

IMÁGENES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA OLABERRI

Conjunto del aprovechamiento, con el azud, escala piscícola a la izquierda, cámara de carga y casa de máquinas a la derecha y el remanso que finaliza en el azud del aprovechamiento ubicado aguas abajo


© 2011 Google
Image © 2011 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
© 2011 Europa Technologies
© 2011 Tele Atlas
Fecha de las imágenes: 1/1/2009
43°11'48.15" N 2°00'37.62" O elev 114 m
Google
Al ojo
536 m



ANEXO 3

REFERENCIAS EN LOS DOCUMENTOS DE LA ZEC LEITZARAN

Documento 1. Diagnóstico. Apartado 4.6.2. Corredor acuático. Referencias para cada una de las centrales hidroélectricas.

Documento 2. Objetivos y medidas. Actuaciones para el objetivo operativo 1 en relación con el visón europeo y el desmán.

FUENTE: "Designación de la Zona de Especial Conservación ES210013 Río Leitzaran/Leitzaran Ibaia", Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, 2010.

DESIGNACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN "ES2120013" RÍO LEITZARAN / LEITZARAN IBAIA

Documento 1. Diagnóstico



Diciembre 2010

agua de su propiedad, salvo trabajos ineludibles de tipo fitosanitario o la construcción de pistas forestales con adecuados drenajes.

4.6.2. Corredor Acuático

La mayor parte del río Leitzaran transcurre por un valle muy encajado en el que apenas existen afecciones de origen antrópico. Es por ello que el tramo considerado ZEC presenta una buena calidad y mantiene unos hábitats en buen estado de conservación.

Situación actual

A continuación se expone de manera resumida la situación del corredor acuático (calidad del agua y estado ecológico, fauna piscícola) en la ZEC Leitzaran Ibaia/Río Leitzaran, ya que estos aspectos se encuentran más desarrollados en los apartados 4.1 y 4.3.2.

El río Leitzaran en el ámbito de la ZEC transcurre por un valle muy encajado y abrupto en el que apenas existen afecciones de origen antrópico. La actividad de mayor desarrollo en el valle es el aprovechamiento forestal, seguido del uso hidroeléctrico. De esta forma, el agua mantiene una buena calidad en todo el recorrido del río Leitzaran en la ZEC. Hasta fecha reciente ha existido una piscifactoría en activo que originaba un vertido importante; no obstante, actualmente se encuentra clausurada, con lo que esta afección ya no existe.

En la ZEC Leitzaran Ibaia/Río Leitzaran están presentes las especies piscícolas: loina o madrilla (*Parachondrostoma miegii)*, incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats(Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y barbo de Graells (*Luciobarbus graellsii*), incluida en el Anexo V de la Directiva Hábitats (Anexo VI de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre). Además se encuentran algunos ejemplares de salmón (*Salmo salar*) (Anexo II Directiva Hábitats (Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre)) como consecuencia del Plan de Reintroducción de la especie, así como, poblaciones de trucha (*Salmo trutta fario*) (especie de alto valor ecológico), anguila (*Anguilla anguilla*) ("en peligro crítico" según la UICN (2009), "Vulnerable" según el Libro Rojo de Vertebrados (1992) y con un "Plan de Gestión para la Recuperación de la Anguila Europea en la CAPV" de obligación europea), ezkailu y locha.

La presencia de loina y barbo es escasa y aparece solamente en el tramo final de la ZEC; no obstante, es una situación esperable, ya que el hábitat no es adecuado para estas especies, más propias de tramos con aguas tranquilas. La presencia de salmón es muy reducida y está en relación con el Plan de Reintroducción de la especie en la cuenca del Oria. En cuanto a la trucha, sus poblaciones se han reducido considerablemente en los últimos años y la especie presenta densidades débiles en general. La presencia de anguila es escasa en el ámbito de la ZEC y se localiza básicamente en el tramo bajo.

Condicionantes

Conectividad fluvial y derivación de caudal

La continuidad del corredor acuático es esencial para los desplazamientos de las especies piscícolas. Una buena continuidad garantiza los movimientos libres hacia aguas arriba y hacia aguas abajo necesarios para completar el ciclo vital de dichas especies, ya que existen zonas de freza, zonas de alimentación, zonas de descanso y refugio... y su conexión resulta primordial. Así, los peces remontan los cauces fluviales en busca de zonas adecuadas para su freza, no sólo las especies salmonícolas, salmón y trucha, sino también loina, barbo, ezkailu... Además, la presencia de obstáculos transforma las condiciones hidromorfológicas del tramo aguas arriba, creando zonas embalsadas con aguas más lentas y profundas. Asimismo, la existencia de barreras puede provocar la compartimentación de las poblaciones de una especie en pequeñas "subpoblaciones", sin posibilidad de contacto entre sí, con lo que se impide el "flujo de genes" esencial para mantener el buen estado genético de la especie.

Asimismo, la continuidad longitudinal del río, es de vital importancia para la dinámica fluvial, es decir, los regímenes de caudales líquidos y sólidos.

En la siguiente tabla se resume la situación en relación con la presencia de obstáculos en el ámbito de la ZEC Leitzaran Ibaia/Río Leitzaran. Se recogen las principales características de los obstáculos inventariados, en particular las de carácter ambiental que pueden repercutir en los objetivos de conservación de la ZEC[12]. Se incluyen los obstáculos situados en la desembocadura del río Leitzaran (sombreado), área no comprendida dentro de la ZEC, por su importancia a la hora de hablar de la permeabilidad total del río. Hay que señalar que en el río Leitzaran ya se han realizado diversas actuaciones de mejora de accesibilidad de azudes, como es el caso de la construcción de un canal lateral, escalas piscícolas y derribo de azudes, aunque todavía la permeabilidad no es total.

IDENTIFICACIÓN Y PERMEABILIDAD DE OBSTÁCULOS Y DISPOSITIVOS DE FRANQUEO. RÍO LEITZARAN							
Tipo de uso	**Nombre del obstáculo**	**Altura (m)**	**Dispositivo de Franqueo**		**Permeabilidad***		
			Existe/Tipo	**Funcion.**	**Salm.**	**Cipr.**	**Ang.**
Abastecimiento Industrial (En uso)	Presa de Inquitex	1,1	Canal lateral		B	B	B
Fuerza Motriz (en desuso)	Garaiko Errota (*Salto Leizaur*)	5,0	Canal lateral		B	B	B
Abastecimiento Industrial (en desuso reciente)	Galgo Paper S.A.	0,8	NO		R	R	R
Abastecimiento Industrial (en desuso reciente)	Galgo Paper S.A.	0,5	NO		B	B	B
	Estación de aforo Leitzaran	0,9			B	B	B
Acuicultura (en desuso reciente)	Truchas Erreka	5,0	NO		M	M	M
Hidroeléctrico (En uso)	C.H.Olaberri (Laborde)	5,5	Artesas sucesivas	Bueno	B	B	B
Hidroeléctrico (En uso)	C.H. Bertxin	5,8	Artesas sucesivas	Bueno	B	B	B
Fuerza Motriz (en desuso)	Ferrería Inturia	0,8	NO		B	B	B
Hidroeléctrico (en desuso)	C.H. Bertxin (Presa de Inturia)	12,5	NO (Existe		M	M	M

[12] Diputación Foral de Gipuzkoa, 2006 *Inventario de obstáculos en afluentes principales y eje central de la cuenca del río Oria.*

IDENTIFICACIÓN Y PERMEABILIDAD DE OBSTÁCULOS Y DISPOSITIVOS DE FRANQUEO. RÍO LEITZARAN							
Tipo de uso	**Nombre del obstáculo**	**Altura (m)**	**Dispositivo de Franqueo**		**Permeabilidad***		
			Existe/Tipo	**Funcion.**	**Salm.**	**Cipr.**	**Ang.**
			proyecto de derribo)				
Hidroeléctrico (en desuso)	C.H. Olloki	7,0	Artesas sucesivas	Bueno	B	B	B
Hidroeléctrico (En uso)	C.H. Leitzaran (Iberdrola)	2,0	Artesas sucesivas	Bueno	B	B	B
	Estación Aforo C.H. Ameraun	0,9	NO		R	R	R
Hidroeléctrico (En uso)	C.H. Ameraun	3,8	Artesas sucesivas	Bueno	B	B	B
Hidroeléctrico (En uso)	C.H. Plazaola Nº 1 (Salto Mustar)	3,1	Artesas sucesivas	Bueno	B	B	B

* B: Buena, R: Regular, M: Mala.

Se localizan 15 obstáculos en el río Leitzaran; 3 de ellos se hallan fuera del ámbito de la ZEC, mientras que los 12 restantes se encuentran incluidos en este espacio.

En cuanto a los 3 azudes que se hallan fuera del ámbito de la ZEC, la presa de Inquitex es utilizada para abastecimiento industrial y los otros 2 se encuentran fuera de uso; Garaiko Errota pertenecía a un antiguo molino y la planta de la papelera Galgo Paper cerró en 2007. Respecto a la permeabilidad, los azudes de Inquitex y Garaiko Errota resultan permeables gracias a la construcción de un canal lateral específico. Por su parte, el azud de Galgo Paper presenta una permeabilidad regular.

De los 12 obstáculos situados dentro del ámbito de la ZEC, 1 corresponde a la papelera Galgo Paper (empresa que cerró en 2007). 2 están en relacion con las estaciones de aforo de Leitzaran (DFG) y de la C.H. Ameraun. 5 están asociados con la producción hidroeléctrica: C.H. Olaberri/Laborde, C.H. Bertxin, C.H. Leitzaran/Iberdrola, C.H. Ameraun y C.H. Plazaola Nº1. Los 4 restantes se encuentran en desuso: azud Truchas Erreka (utilizado hasta tiempo reciente para acuicultura), Ferrería Inturia (abandonado), Presa de Inturia (usada antiguamente como presa de regulación de la central de Bertxin) y Central de Olloki (clausurada).

Respecto a la permeabilidad, dos de los azudes no resultan permeables debido a su altura y a que no disponen de ningún acondicionamiento para facilitar el movimiento de las especies acuáticas: Truchas Erreka y Presa de Inturia. Ambos obstáculos tienen una altura considerable. El azud de Truchas Erreka tiene una altura de 5 metros y ha entrado en desuso recientemente debido al cese de la actividad de la piscifactoría; no se conoce la existencia de proyecto de permeabilización cuya obligación es del propietario. En el caso de la presa de Inturia, alcanza una altura muy elevada, 12,5 metros; existe un proyecto de permeabilización. Por su parte, la estación de aforo de la C.H. Ameraun presenta una permeabilidad regular. Los 9 obstáculos restantes resultan permeables en principio. El azud perteneciente a Galgo Paper no supone obstáculo, ya que no ocupa todo el cauce. La estacion de aforo de Leitzaran presenta una buena permeabilidad, aspecto que ha estudiado recientemente la

Diputación Foral de Gipuzkoa mediante el marcaje de truchas con radiotransmisores. El azud de la antigua Ferrería de Inturia está roto y resulta permeable. Por último, los azudes restantes pertenecientes a las centrales en uso actualmente y a la central Olloki, ya en desuso, disponen de escala piscícola con buena permeabilidad *a priori*.

Hay que señalar las obras de permeabilización que se han desarrollado en el río Leitzaran dentro del Programa de permeabilización de obstáculos diseñado por la Diputación Foral de Gipuzkoa[13], como es el caso del canal lateral que permeabiliza los azudes de Inquitex y Garaiko Errota, además del derribo de 2 azudes, uno situado en desembocadura de uso desconocido y otro perteneciente a la antigua central hidroeléctrica de Otita/Lizarkola.

Por otro lado, la detracción de caudal por parte de las centrales hidroeléctricas en uso supone una grave afección, ya que un 80 % del río Leitzaran en su tramo gipuzkoano se encuentra derivado. Además, si se añade el embalsamiento creado por los distintos azudes, 12 % de la longitud del río, supone un total del 92 % de la longitud del río Leitzaran afectado.

GRADO DE AFECCIÓN DE LOS OBSTÁCULOS – APROVECHAMIENTOS. RÍO LEITZARAN				
Nombre	Longitud de Embalsam. (m)	Longitud Derivada (m)	Caudal Concesión (l/s)	Caudal mínimo (l/s)
Presa de Inquitex	92	398		
Garaiko Errota (Salto Leizaur)	110	44		
Galgo Paper S.A.	94			
Galgo Paper S.A.	60			
Truchas Erreka	181	381		
C.H.Olaberri (Laborde)	391	9	3.000	340/680
C.H. Bertxin	476	3.237	1.000	391
Ferrería Inturia	0			
C.H. Bertxin (Presa de Inturia)	1.251			
C.H. Olloki	348			
C.H. Leitzaran (Iberdrola)	225	15.720	3.000	---
C.H. Ameraun	196	4.509	3.000	323
C.H. Plazaola Nº 1 (Salto Mustar)	215	3.171	2.000	260

De entre todos los aprovechamientos, destaca la **C. H Leitzaran**, al afectar a casi 16 km de río con su derivación. Su caudal de equipamiento es de 3.000 l/s (Q86). No tiene impuesto ningún caudal mínimo según el condicionado de la concesión vigente. Esto significa que la central puede dejar el río seco (por lo menos en teoría) durante 279 días al año, es decir, el 76% de las jornadas. Incluso aunque respetase un caudal mínimo, el tramo se encontraría en estiaje prácticamente durante cerca de 300 días al año. Hay que tener en cuenta que, al afectar a un tramo muy largo, las condiciones en la zona más cercana a la central tienden a aproximarse al régimen natural puesto que hay numerosas aportaciones que incrementan notablemente el caudal. Sin embargo, en esta zona baja existe otra central hidroeléctrica (Bertxin) dentro del tramo derivado por la CH Leitzaran, por lo que vuelve a verse afectado de forma notable el

[13] Diputación Foral de Gipuzkoa. Dpt. Desarrollo Sostenible. 2007. Programación de actuaciones de permeabilización de obstáculos fuera de uso en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

régimen hidrológico en el tramo que teóricamente podría tenerlo algo más parecido al natural. Este salto hidroeléctrico ocasiona una alteración muy seria del régimen hidrológico en una buena fracción del Leitzaran, produciendo un posible efecto sinérgico con la C.H. Bertxin.

También hay que tener en cuenta la existencia de la Central Hidroeléctrica Santolaz situada en la regata del mismo nombre y que dispone de 4 tomas localizadas en la cabecera del Santolaz y en pequeños tributarios de dicha regata, Martingorri, Osiñaekin y Tximiola. En cuanto a la permeabilidad de los azudes relacionados con las tomas, señalar que no afectan de manera muy importante a los movimientos y migraciones piscícolas, ya que se trata de arroyos de cabecera. No obstante, sí altera de forma notable el régimen hidrológico de la regata Santolaz.

Asimismo, existe otra central hidroeléctrica C.H. Plazaola Nº 2, que deriva caudal de la regata Franki erreka, afluente del Leitzaran situado en Navarra.

Otro aspecto de importancia en relación con el impacto del uso hidroeléctrico es la migración descendente. Excepto la Central Olaberri/Laborde, los azudes pertenecientes a las restantes minicentrales en el río Leitzaran no presentan dispositivos para impedir la entrada de peces al canal, siendo éste un condicionante negativo pendiente de solución. Esto tiene como consecuencia la entrada de fauna piscícola, especialmente salmónidos, en los canales de derivación, donde quedan atrapados; una vez en la cámara de carga, no todas disponen de rejillas para impedir el paso a turbinas, como es el caso de la C.H. Leizaran, con lo cual la mortandad causada por el paso por turbinas es prácticamente total. Por otro lado, en el caso de que dispongan de rejilla para evitar la entrada en la tubería de carga, la colocación de un sistema efectivo de evacuación resulta inviable debido al elevado salto que deberían superar.

Además, la existencia de canales de derivación abiertos, que en el caso del valle del Leitzaran discurren por áreas de gran riqueza faunística, da lugar a caídas de animales en el interior de dichos canales causando la muerte de esos individuos.

A continuación se recoge una descripción pormenorizada de los problemas ambientales relacionados con la presencia de estos aprovechamientos en el ámbito de la ZEC Leitzaran Ibaia/ Río Leitzaran[14].

Central Hidroeléctrica Olaberri (Laborde)

- **Obstáculo a la migración ascendente**. Anteriormente se denominaba Laborde Hnos. Dispone de un azud de 5.5 m de altura, prácticamente infranqueable por la totalidad de especies piscícolas. Está equipado de una escala piscícola de artesas sucesivas que aparentemente funciona de manera correcta.

[14] Diputación Foral de Gipuzkoa, 2006. *Producción hidroeléctrica en Gipuzkoa. Bases para la elaboración de las directrices sobre el uso sostenible del agua en Gipuzkoa.*

- **Obstáculo a la migración descendente**. La central está ubicada a pie de presa. El sistema de rejillas parece razonablemente adecuado.

- **Afección por embalsamiento**. El azud origina un embalsamiento de 385 m de longitud.

- **Afección por derivación**. La central se encuentra a pie de presa y prácticamente no origina afección por derivación.

- **Caudal mínimo**. Esta central hidroeléctrica viene obligada a respetar un caudal mínimo de 340 l/s en periodo estival y 680 l/s en periodo invernal.

Central Hidroeléctrica Bertxin

- *Obstáculo a la migración ascendente.* La central hidroeléctrica dispone de dos presas de considerable altura. La superior, denominada Inturia, servía de elemento de regulación aunque lleva varios años no operativa. Tiene una altura superior a 10 m por lo que resulta infranqueable por la totalidad de especies piscícolas y probablemente suponga una barrera para otros grupos acuáticos. No está equipada con escala piscícola, aunque dispone de proyecto de permeabilización. La presa inferior tiene una altura de 6 m y cuenta con escala piscícola. Aparentemente es funcional aunque se desconoce la verdadera eficacia de un paso de peces de tanta envergadura. Se trata de dos elementos que en este momento son de muy difícil gestión para recuperar especies piscícolas migratorias en la interesante cuenca del Leitzaran.

- *Obstáculo a la migración descendente*. La presa superior es muy problemática para el descenso de peces migradores. En cuanto a la inferior, de la que parte el canal de derivación, no cuenta con ningún sistema efectivo para evitar que los peces se metan en el citado canal. Una vez en el mismo y llegados hasta la cámara de carga, el sistema de rejillas parece suficiente para evitar que los peces entren en la tubería de carga y lleguen hasta la turbina. Pero carece de un sistema efectivo para devolver los peces al río y su colocación parece totalmente inviable.

- *Afección por embalsamiento*. El embalsamiento de la presa superior de Inturia alcanza unos 1.250 m, mientras que el de la presa inferior, unos 475 m.

- *Afección por derivación.* La central se ubica en un tramo previamente derivado por la central de Leizaran. Vuelve a originar una segunda derivación algo superior a 3.2 km.

- *Caudal mínimo*. En esta central hidroeléctrica, la presa superior debe dejar fluir un caudal de 385 l/s, que se convierten en 391 l/s en la presa inferior.

Central Hidroeléctrica Leizaran

- *Obstáculo a la migración ascendente.* El azud de toma de esta central supera ligeramente los 2 m. Es infranqueable por la mayor parte de especies piscícolas: sólo los salmónidos de mayor talla y en determinadas

ocasiones pueden sobrepasarlo, así como algunas anguilas. Cuenta con una escala piscícola de artesas sucesivas aparentemente funcional.

- *Obstáculo a la migración descendente.* El canal tiene un fuerte caudal de equipamiento y es muy atractivo para posibles peces en migración descendente. No hay ningún sistema efectivo para bloquear el paso de los peces hasta llegar a la cámara de carga (después de varios kilómetros de canal). Una vez en la cámara de carga, y con un salto de unos 200 m, no hay sistema efectivo de evacuación y su colocación resultaría inviable. El paso por las turbinas, como en todos los saltos de esta altura, origina una mortandad total. En años anteriores se han observado cardúmenes de esguines de salmón en la cámara de carga, y se han llegado a apreciar varios cadáveres de esguines en la bajante que evacua los productos del limpiahojas automático. Es un aprovechamiento muy problemático para la gestión de migradores descendentes, uno de los más complicados y dañinos de Gipuzkoa en este aspecto.

- *Afección por embalsamiento.* Este azud origina un embalsamiento no muy largo, de unos 225 m.

- *Afección por derivación.* Esta central hidroeléctrica genera el tramo derivado más largo de Gipuzkoa, superior a 15.7 km de río.

- *Caudal mínimo.* Por los datos disponibles no está obligada a dejar ningún caudal mínimo en el río.

Central Hidroeléctrica Ameraun

- *Obstáculo a la migración ascendente.* La central de Ameraun tiene un azud de unos 4 m de altura. Por su altura resultaría infranqueable por todas las especies piscícolas y sólo franqueable con mucha dificultad por alguna anguila. Está equipado con una escala piscícola aparentemente funcional.

- *Obstáculo a la migración descendente.* En la toma no hay rejillas que eviten que los peces se introduzcan en el canal. Una vez en la cámara de carga hay un sistema de rejillas pero no un dispositivo que permita evacuar los peces migradores hacia el río. Por la altura del salto (más de 50 m) no resulta viable construir ningún elemento de este tipo.

- *Afección por embalsamiento.* El azud genera un embalsamiento de unos 150 m.

- *Afección por derivación.* El salto hidroeléctrico de Ameraun afecta con su derivación a un tramo de unos 4.5 km.

- *Caudal mínimo.* Esta central hidroeléctrica tiene impuesto un caudal mínimo de 323 l/s, caudal que se duplica en invierno con 646 l/s.

Central Hidroeléctrica Plazaola 1

- *Obstáculo a la migración ascendente.* Se trata de la central situada más aguas arriba en el Leitzaran. Su azud, de 3.1 m de altura, es infranqueable

por la totalidad de especies. Sólo las anguilas, y con dificultad, podrían superarlo. Cuenta con una escala piscícola aparentemente funcional.

- *Obstáculo a la migración descendente.* El canal no dispone de ningún sistema para evitar el paso de peces a su interior. En la cámara de carga hay una rejilla que probablemente sea efectiva para evitar que los peces pasen por las turbinas, pero no hay un sistema eficaz para devolver los peces al río. El fuerte salto, superior a 50 m, hace que sea inviable instalar algún sistema de manejo en este aspecto.

- *Afección por embalsamiento.* El azud origina un embalsamiento de unos 220 m.

- *Afección por derivación.* La derivación de caudal afecta a un tramo superior a 3.1 km de longitud.

- *Caudal mínimo.* La central hidroeléctrica Plazaola 1 tiene impuesto un caudal mínimo de 260 l/s.

Central Hidroeléctrica Plazaola 2

- *Obstáculo a la migración ascendente.* La toma de esta central está en Navarra, en un afluente del Leitzaran. El azud tiene una altura de 2,3 m, con una compuerta en la parte central donde, si está abierta, la altura disminuye a 1,10 m. De todas formas resulta infranqueable para todas las especies.

- *Obstáculo a la migración descendente.* No dispone de rejillas ni de otro dispositivo para evitar el paso de peces al interior del canal.

- *Afección por embalsamiento.* La afección causada por embalsamiento es baja.

- *Afección por derivación.* La central toma en el afluente del Leitzaran Franki erreka, situado en Navarra y el desagüe vierte directamente en el canal de derivación de la central Plazaola nº 1. La longitud de derivación alcanza casi los 2 km.

- *Caudal mínimo.* Según los datos de que se dispone, esta central no está obligada a cumplir con un caudal mínimo.

Central Hidroeléctrica Santolaz

- *Obstáculo a la migración ascendente.* Esta central hidroeléctrica tiene cuatro tomas en pequeños arroyos afluentes del Leitzaran, ambas sin escalas. De todas formas, al tratarse de arroyos de cabecera no afectan de manera muy importante a los movimientos y migraciones piscícolas.

- *Obstáculo a la migración descendente.* No se conocen las condiciones en que se encuentran las tomas.

- *Afección por embalsamiento.* No se conocen las afecciones por embalsamiento, aunque se presume que los azudes generarán pequeños tramos embalsados al encontrarse en tramos de cabecera de fuerte pendiente.

- *Afección por derivación.* No se conoce la afección por derivación que produce esta central hidroeléctrica.

- *Caudal mínimo.* El aprovechamiento tiene impuesto un caudal mínimo de 200 l/s.

La cuenca del río Leitzaran se incluye en la Demarcación Hidrográfica Norte III, bajo la competencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). Actualmente está en proceso de elaboración el nuevo Plan Hidrológico de Cuenca, pero al menos hasta que dicho Plan no entre en vigor, el caudal ecológico que hay que respetar en las concesiones es, según el Plan Hidrológico vigente (Norte III), un caudal ecológico equivalente al 10% de la aportación media interanual en régimen natural, con un mínimo de 50 l/s.

No obstante, en el momento de redacción de este documento, la CHC se halla en fase de redacción del nuevo Plan Hidrológico de Cuenca. En este momento, el documento de referencia en torno a este nuevo Plan Hidrológico, es el *Esquema de Temas Importantes*, entendiendo como temas importantes aquellas cuestiones que influyen directa o indirectamente en el cumplimiento de los objetivos de planificación hidrológica marcados en la Directiva Marco del Agua. En lo que se refiere a caudales ecológicos y jerarquía de usos, el *Esquema de temas importantes* señala que *"El régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos y aguas de transición"*.

Por su parte, la nueva Instrucción de Planificación Hidrológica, aprobada por Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, señala que será el correspondiente Plan Hidrológico de cuenca el responsable de establecer un régimen de caudales ecológicos de los cauces que lo conforman y que la necesidad de calcular este régimen será de acuerdo a modelos basados en las necesidades biológicas de los ríos. La citada norma adelanta algunos aspectos que deberán ser objeto de consideración en el nuevo Plan Hidrológico:

- En relación con la prioridad y compatibilidad de usos del agua, los Planes Hidrológicos serán los que contengan los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos que deben aplicarse en los distintos territorios de la demarcación hidrográfica. A este respecto el apartado 3.3 de la Orden matiza que *"los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el* Texto Refundido de la Ley de Aguas.

- Incluye menciones específicas a la Red Natura 2000 al señalar los objetivos que debe tener en cuenta el Plan Hidrológico al establecer el régimen de caudales ecológicos. En este sentido el apartado 3.4.1 de la Orden señala lo siguiente:

En la medida en que las zonas protegidas de la Red Natura 2000 y de la Lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar puedan verse afectadas de forma apreciable por los regímenes de caudales ecológicos, éstos serán los apropiados para mantener o restablecer un estado de conservación favorable de los hábitat o especies, respondiendo a sus exigencias ecológicas y manteniendo a largo plazo las funciones ecológicas de las que dependen.

En el caso de las especies protegidas por normativa europea (anexo I de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) y por normativa nacional/autonómica (Catálogos de Especies Amenazadas, etc.), así como en el caso de los hábitat igualmente protegidos por normativa europea (anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992) y nacional/autonómica (Inventario Nacional de Hábitat, etc.), el objetivo del régimen de caudales ecológicos será salvaguardar y mantener la funcionalidad ecológica de dichas especies (áreas de reproducción, cría, alimentación y descanso) y hábitat según los requerimientos y directrices recogidos en las respectivas normativas.

La determinación e implantación del régimen de caudales en las zonas protegidas no se referirá exclusivamente a la propia extensión de la zona protegida, sino también a los elementos del sistema hidrográfico que, pese a estar fuera de ella, puedan tener un impacto apreciable sobre dicha zona.

Partiendo de esta base, hay que señalar que para aquellas Cuencas que son competencia de la Agencia Vasca del Agua (Cuencas Internas del País Vasco), se han llevado a cabo estimaciones transitorias de las necesidades ambientales que dicho Organismo considera más ajustadas a los objetivos establecidos por la Directiva Marco del Agua (DMA), para determinar aquellos caudales que deben mantenerse con el fin de asegurar un grado de funcionalidad aceptable en los ríos, es decir, un Buen Estado Ecológico[15].

Estas estimaciones se han realizado mediante la metodología denominada Caudal Ecológico Modular (CEM), que aplica un modelo hidrológico sencillo que reproduce de forma satisfactoria los resultados obtenidos por los métodos biológicos. Así, en opinión de la Agencia Vasca del Agua, los resultados de esta herramienta son totalmente acordes con el hidrograma en régimen natural, condición importante a la hora de establecer un régimen de caudales ecológicos. Según estimaciones realizadas por el citado Organismo, la aplicación de este método proporciona una estimación aproximada de las necesidades ambientales

[15] Contribución a la elaboración del *Esquemas de temas importantes en materia de gestión de aguas* en la Demarcación Hidrográfica del Norte. Cuencas Intercomunitarias del País Vasco (Vertiente cantábrica). 2008. UR AGENTZIA / AGENCIA VASCA DEL AGUA.

para alcanzar el Buen Estado Ecológico o una funcionalidad aceptable del ecosistema fluvial, que asciende a 873 Hm^3/año para el conjunto de los ecosistemas fluviales de la CAPV, lo que supone como media un 19% de los recursos totales en régimen natural. Para el caso de la Unidad Hidrológica Oria, considerando el total de su Cuenca se estima que las necesidades ambientales anuales ascienden a 180,4 Hm^3, lo que supone un 22,2% de los recursos naturales anuales de la Cuenca.

Otro condicionante importante a la hora de la posible aplicación de medidas es el tema relacionado con la situación administrativa de los diferentes aprovechamientos hidráulicos. Dichos aprovechamientos disponen de una concesión de caudal y de un condicionado determinado en relación con diferentes medidas (caudal ecológico, medidas de permeabilización del obstáculo, etc.). Habitualmente el plazo de concesión abarca un periodo dilatado de tiempo, con un límite temporal máximo de 90 años. La cuestión es que hasta la finalización de dicho plazo parece problemática la modificación de las condiciones de la concesión. Variar algunas de estas condiciones (por ejemplo, reducción del caudal de concesión, incremento del caudal ecológico), conllevaría probablemente una compensación económica derivada del posible lucro cesante que pueda suponer dicha modificación. Por tanto la aplicación de algunas medidas relacionadas con estos aprovechamientos resulta dificultosa.

Acciones actuales

Actuaciones de seguimiento del estado ecológico del río:

Desde el año 1993 el Gobierno Vasco realiza muestreos anuales en los ríos principales de la Comunidad Autónoma para establecer la calidad del agua (índices bióticos y parámetros físico-químicos) y determinar el estado ecológico de las masas de agua. Esta red de seguimiento incluye muestreos piscícolas.

Por su parte el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa realiza controles físico-químicos de agua en la red hidrológica del Territorio Histórico de Gipuzkoa desde el año 1985. A su vez, en el año 1987 comienza el análisis de la calidad biológica mediante el uso de los macroinvertebrados bénticos como indicadores biológicos y el cálculo de índices bióticos. Incluye también muestreos piscícolas.

En la ZEC Leitzaran Ibaia/Río Leitzaran existe 1 estación de muestreo perteneciente a la red del Gobierno Vasco situada próxima al límite inferior. Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa dispone de 1 estación en la desembocadura del río Leitzaran, que queda fuera del ámbito de la ZEC, pero en las proximidades.

Actuaciones de seguimiento de la fauna piscícola:

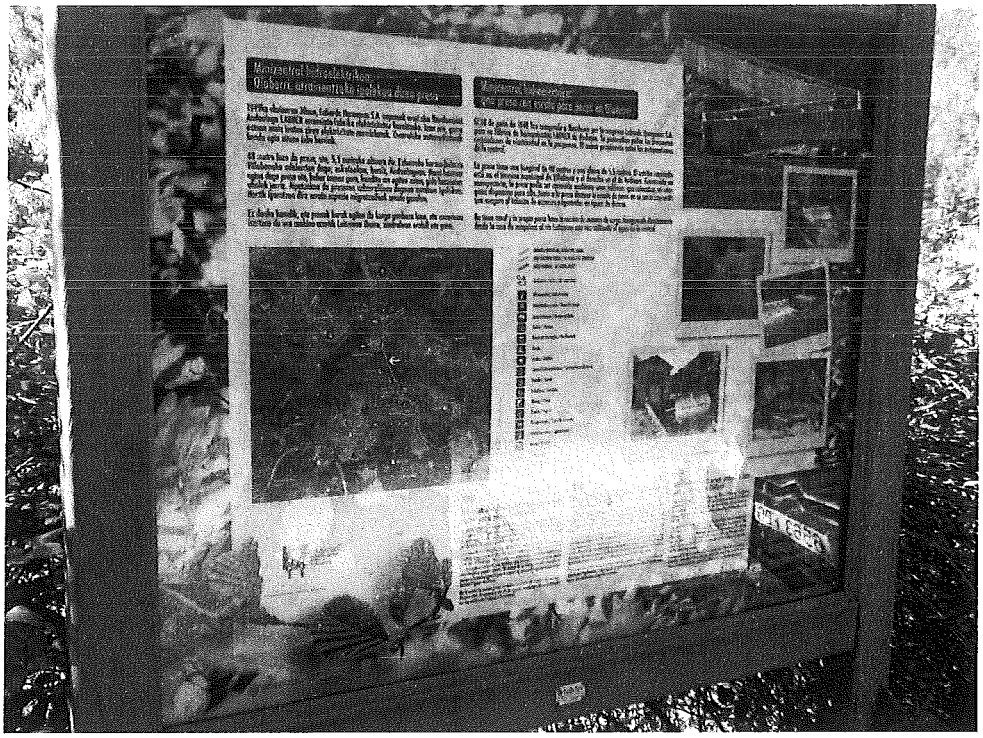
Además de los muestreos piscícolas que incluyen las redes de seguimiento de las masas de agua citadas anteriormente, el Departamento de Desarrollo del Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa realiza desde el año 1994 un

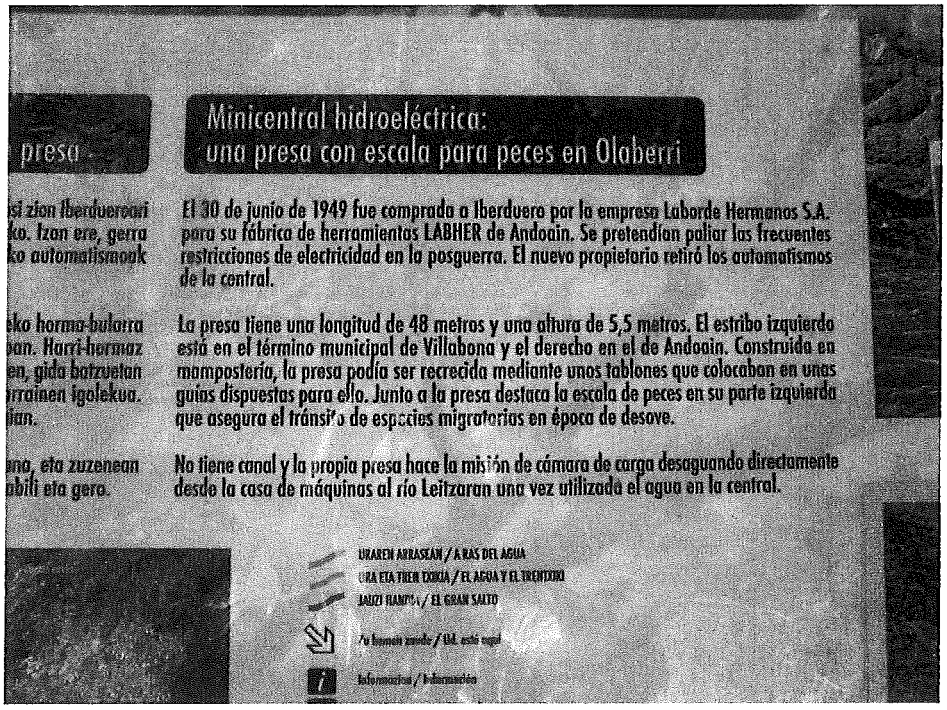
Acciones actuales y condicionantes legales	
- Campañas anuales de seguimiento de las poblaciones de desmán y visón en la cuenca del río Leitzaran (Diputación Foral de Gipuzkoa). - La Diputación Foral de Gipuzkoa ha desarrollado recientemente un "Proyecto de restauración ambiental de la margen derecha del río Leitzaran en el paraje de Oizin" para la mejora del hábitat del visón europeo.	
Objetivos y medidas	
Objetivo final	**Garantizar la presencia en la ZEC Leitzaran Ibaia/Río Leitzaran de poblaciones de visón europeo y desmán, viables y acordes con la capacidad de acogida de la ZEC, sin intervenciones externas o con la mínima intervención posible y que permitan una adecuada conservación de la especie.**
Objetivo operativo 1	**Suprimir los impactos sobre las especies en la ZEC**
Actuaciones	Son de aplicación todas las medidas propuestas en el artículo 5.5 del Capítulo I, en relación con el uso del agua en la ZEC, así como las que figuran en el elemento clave corredor fluvial, relativas a la eliminación de los obstáculos en el corredor acuático, el respeto de los caudales ecológicos y el seguimiento de la eficacia de las medias adoptadas. En particular, son importantes las relativas a la caducidad de las concesiones fuera de uso (eliminación del obstáculo), la prohibición de las sueltas en emboladas y la revisión de las condiciones de la concesión de agua de las centrales hidroeléctricas Leitzaran, Plazaola-1, Plazaola-2, Ameraun, Santolaz y Bertxin, para adecuarlas a los caudales mínimos necesarios para el mantenimiento del hábitat del visón europeo y el desmán del pirineo en un estado de conservación favorable.
Objetivo operativo 2	**Evaluar la eficacia de las actuaciones**
Actuaciones	Es de aplicación la medida **1.AC.16** en relación con el seguimiento periódico de las poblaciones de visón y desmán en la cuenca del río Leitzaran.

ANEXO 4

EQUIPAMIENTOS DE INTERPRETACION

Fotografías del panel correspondiente a la central de Olaberri colocado por el Centro de Interpretación del Agua en las proximidades de la misma




presa
Minicentral hidroeléctrica:
una presa con escala para peces en Olaberri
El 30 de junio de 1949 fue comprada a Iberduero por la empresa Laborde Hermanos S.A. para su fábrica de herramientas LABHER de Andoain. Se pretendían paliar las frecuentes restricciones de electricidad en la posguerra. El nuevo propietario retiró los automatismos de la central.
La presa tiene una longitud de 48 metros y una altura de 5,5 metros. El estribo izquierdo está en el término municipal de Villabona y el derecho en el de Andoain. Construida en mampostería, la presa podía ser recrecida mediante unos tablones que colocaban en unas guías dispuestas para ello. Junto a la presa destaca la escala de peces en su parte izquierda que asegura el tránsito de especies migratorias en época de desove.
No tiene canal y la propia presa hace la misión de cámara de carga desaguando directamente desde la casa de máquinas al río Leitzaran una vez utilizada el agua en la central.
URAREN ARRASTEAN / A RAS DEL AGUA
URA ETA TREN ERROA / EL AGUA Y EL TRENZADO
JAUZI HANDIA / EL GRAN SALTO
Información / Informazioa

AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. José Javier Belza Pérez mayor de edad, provisto de D.N.I. nº 15.922.897 C, actuando para este acto en su calidad de Administrador Único de la mercantil C.H.Olaverri, S.L, domiciliada en Oiartzun (Gipuzkoa), Astigarragako Bidea, 2 – 5ª planta y cuyo NIF es B-20667648

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

A L E G A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA | OFICINA SAN SEBASTIAN
31/10/2011 | 12:06:30
E002201100000821

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 136 de la constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art. 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

> ***"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación".*** Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) <u>Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.</u>

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

130

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles - petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

132

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,-hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de*

la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..) ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente (*"contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.'

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

   Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

   "/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) <u>Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.</u>

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3° del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada".

142

Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral "*De Facto*" de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo en Oiartzun a 31 de octubre de 2011.



AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. José Javier Belza Pérez mayor de edad, provisto de D.N.I. nº 15.922.897 C, actuando para este acto en su calidad de Administrador Solidario de la mercantil Hidroeléctrica del Deba, S.L, domiciliada en Altzola (Elgoibar), Donosti Kalea, 1 y cuyo NIF es B-20588232

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

A L E G A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
REGISTRO DE ENTRADA 31/10/2011 OFICINA SAN SEBASTIAN 12:05:53
E00220110000820

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 136 de la constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art. 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

147

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) <u>Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.</u>

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

148

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles - petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

150

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

151

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,-hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de*

153

la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..) ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente *("contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

154

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

157

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

   Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

   "/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) <u>Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.</u>

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3° del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada".

Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral "*De Facto*" de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo en Elgoibar a 31 de octubre de 2011.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA OFICINA PLAZA DE ESPAÑA
31/10/2011 11:46:30
E001201100011147

CONSORCIO DE AGUAS
KANTAURIKO URKIDETZA
REGISTRO GENERAL
ERREGISTRO OROKORRA
27 OCT 2011
Salida
Irteera 512

Kantauriko URKIDETZA
Consorcio de Aguas Ur Partzuergoa

D. Jesús González Piedra
Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica
Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Exp.: EX084_11

Ref.: COM127_11_APORTACION_PROGRAMA_MEDIDAS_PROYECTO_PLAN_HIDROLOGICO

Izoria, 27 de octubre de 2011

Estimado Sr.:

Tal y como convenimos en la Jornada de Participación Pública sobre objetivos medioambientales, exenciones, programas de medidas y normativa del pasado 18 de octubre celebrada en Basauri, a continuación detallo la aportación de este Consorcio para su inclusión -si así se estima conveniente- en el programa de medidas del Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca.

Con fecha de 28 de septiembre de 2010 la Junta de Gobierno de este Consorcio acordó la programación para la ejecución de infraestructuras de abastecimiento en alta, teniendo en consideración las conclusiones del arbitraje realizado por URA - Agencia Vasca del Agua en relación a la planificación de infraestructuras de abastecimiento en la Cuadrilla de Ayala. (Se adjunta copia del acuerdo ACR14_10JG).

Con base en lo anterior y ampliando el alcance a las actuaciones de saneamiento y depuración comarcales, fue remitido a la Agencia Vasca del Agua un programa de actuaciones para su inclusión en la elaboración de los Planes Hidrológicos.

Las actuaciones previstas fueron recogidas en el documento "Plan Hidrológico. Programa de Medidas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 2015-2021", elaborado por URA y que según tengo entendido se ha de contemplar en el Programa de Medidas de la Propuesta de *Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca que nos ocupa.*

Revisado este último documento ponemos en su conocimiento lo siguiente para su consideración en la planificación que llevan a cabo:

1. En la unidad hidrológica Ibaizabal, dentro del TH de Álava, no ha sido considerada La actuación denominada como "Solución de regulación de Llodio" con un presupuesto estimado de 574.000 euros y horizonte para su ejecución 2015. Dichas obras están incluídas en el Acuerdo Marco para la construcción de infraestructuras hidráulicas en el TH de Álava en el periodo 2004- 2008 y su actualización hasta 2012.

   En la propuesta de URA se incluye la actuación dentro de Problemática: medidas relacionadas con el suministro de demandas; Programa: Satisfacción de demandas de abastecimiento y uso eficiente del recurso; Línea de actuación: Mejora de los sistemas de tratamiento y almacenamiento de agua potable.

163

Consorcio de Aguas KANTAURIKO URKIDETZA Ur Partzuergoa N.I.F. P0100362C
Larrabe Auzoa, z/g 01479 – IZORIA (Araba) T 945 399 444 F 945 399 432 e-posta : info@kaurki.com

2. En relación con las actuaciones de saneamiento y depuración que se han recogido en la planificación de CHC, si bien se recoge la segunda fase comarcal de manera parcial en tres actuaciones, desde este Consorcio se propone la consideración desde una visión de Comarca.

   Esto se debiera de realizar mediante la elaboración, proyección y ejecución de un Plan de Saneamiento y Depuración de los núcleos de población de la Cuadrilla de Ayala no considerados en la primera fase del Plan de Saneamiento del Alto Nervión.

   Con objeto de aclarar estos extremos y poder ser incluidos -si así se considera- en los documentos de planificación, a continuación se señalan las actuaciones recogidas en la propuesta de programa de medidas y el epígrafe que las sustituye con una estimación económica muy preliminar, basada en un cálculo de inversión equivalente 300.000€ por núcleo de población a depurar.

ACTUACIONES EN EL AMBITO TERRITORIAL DE PARTICIPAICÓN PUBLICA PAIS VASCO – CASTILLA Y LEON SEGÚN EL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES. CHC	
Código	**Descripción.**
7.1.209	Saneamiento del Alto Nerbioi 2ª fase: Artomaña, Larrinbe, Lekamaña, Izoria y Respaldiza.
7.1.209	Saneamiento del Herrerías, 2ª fase.
7.1.211	Saneamiento del Izalde. 2ª Fase.

PROPUESTA DEL CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA **ACTUACIONES EN EL AMBITO TERRITORIAL DE PARTICIPAICÓN PUBLICA PAIS VASCO – CASTILLA Y LEON SEGÚN EL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES. CHC**	
Descripción.	**Importe estimado**
Plan de Saneamiento y Depuración de la Cuadrilla de Ayala. Núcleos de población de las cuencas Altube, Nervión, Izoria, Izalde y Herrerías, pertenecientes a los Municipios de Ayala, Artziniega y Okondo y no contemplados en la 1ª fase del Plan de Saneamiento del Alto Nervión. (30 núcleos).	9.000.000,00 €

Sin otro particular quedo a su disposición para cualquier consulta.

Fdo.: José Ramón Toña.
Director Gerente.

164

ACR14_10JG. Acuerdo, de 28 de septiembre de 2010, de la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza por el que se aprueba la programación para la ejecución de infraestructuras de abastecimiento en alta del Consorcio, teniendo en consideración las conclusiones del arbitraje realizado por URA - Agencia Vasca del Agua en relación a la planificación de infraestructuras de abastecimiento en la Cuadrilla de Ayala.

Con fecha de 03 de septiembre de 2006 queda aprobado de manera definitiva por la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza el Plan Director de Abastecimiento de Ayala.

Posteriormente y a la vista de las diferencias planteadas entre el citado Plan Director y el Plan Foral de Infraestructuras Hidráulicas 2003-2014 del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, se hace necesario resolver las discrepancias entre dichos documentos. Con fecha de 20 de febrero de 2009 se acuerda entre la Diputación Foral de Álava, Kantauriko Urkidetza y URA,la realización por parte de la Agencia de una labor de arbitraje.

El 29 de junio de 2010 la Junta de Gobierno aprueba (ACR11_10JG) las conclusiones del arbitraje realizado por URA - Agencia Vasca del Agua en relación a la planificación de infraestructuras de abastecimiento en la Cuadrilla de Ayala, quedando sin efecto en todo lo que se oponga a lo recogido en dicha resolución el acuerdo ACR18_06JG, de 03 de julio de 2006, por el que se aprueba el Plan Director de Abastecimiento de Ayala.

En el mismo acto señalado en el párrafo anterior se encomienda al Presidente la revisión de las actuaciones principales y complementarias a realizar a medio plazo, aplicando los criterios recogidos en el acuerdo, estableciendo una priorización y una programación de las obras a realizar en los próximos años con objeto de adecuarlas a los acuerdos de financiación de infraestructuras de aplicación.

Vista la propuesta de priorización y programación de actuaciones propuesta por el Presidente la Junta de Gobierno del Consorcio, aprueba, por unanimidad de los votos legales presentes la resolución que sigue:

ACUERDO:

1. Aprobar la priorización de actuaciones y programación de obras según se presenta en el cronograma adjunto.
2. Facultar a la Presidencia del Consorcio para la realización de las actuaciones precisas para la formalización de cuantos documentos y trámites sean necesarios para la efectividad del acuerdo autorizado, dando cuenta a los Órganos de Gobierno en la primera sesión que se celebre.

En Izoria, a 28 de septiembre de 2010.

EL PRESIDENTE, D. TXEBI ETXEBARRIA URRAZA

ACTUACION	Reparto de inversiones (miles de euros)						Total inversión (€)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Presa de Artziniega: Proyecto de Instrumentación.	157						157
Presa de Maroño: Proyecto de Instrumentación.	320						320
Solución de regulación de Llodio.				574			574
ETAP Laudio: Remodelación filtros e instalación de recuperación de aguas de lavado.			500				500
Conducción 250mm EBAP Bestialdie – ETAP Laudio: Reposición.				450			450
Mejora de red primaria abastecimiento a los núcleos de Larrimbe, Berganza y Berganzagoiti.	154						154
Fase 1. Acondicionamiento de las captaciones del Gorbea e incorporación a la ETAP de Izoria: Conducción bruta Askargan-Izoria+conexión baja Lejarzo-Aspuru+deposito Izoria.		2.039					2.039
Acondicionamiento de las captaciones del Gorbea e incorporación a la ETAP de Izoria (Fase 2)			1.932				1.932
Conexión de Larrinbe a Sistema Maroño		137					137
Conexión tratada Lekamaña- Saratxo					164		164
Conexion del abastecimiento en alta de los depósitos de Murga y Luyando.					123		123
Proyecto de reposición de conducción en alta desde la Presa de Angostina hasta la ETAP de Artziniega				762			762
Suministro e instalación de 2 grupos electrógenos para EBAPs y EATPs	101						101
Remodelación eléctrica y de control e incorporación a telemando de instalaciones	112	477	86	52			727
Presa de Olarte: Puesta fuera de servico.						400	400
Presa de Artziniega: Plan de emergencia.					350		350
Presa de Maroño: Plan de emergencia.					350		350
Total de inversión en infraestructuras (€)	**844**	**2.653**	**2.519**	**1.838**	**987**	**400**	**9.242**
Porcentaje anual de inversiones	**9,1%**	**28,7%**	**27,3%**	**19,9%**	**10,7%**	**4,3%**	**100,0%**

FINANCIACION (Importes actualizados a 2010)	
CONVENIO GV+DFA+CAKU 2003	764 €
ACUERDO MARCO GV+DFA 2004-2008	1.254 €
AMPLIACION ACUERDO MARCO GV+DFA 2009 -2012	4.371 €
CONVENIO CHC+CAKU COORDINACION CON OBRAS SANEAMIENTO	287 €
GASTOS COMPROMETIDOS POR CAKU 2009-2010	844 €
SUMA	**7.520 €**

Aralar

C/ San Bartolomé, 40
20268 AMEZKETA
Gipuzkoa · SPAIN
Tel.: +34 943 65 30 50
Fax: +34 943 65 31 61
info@papelaralar.com
www.papelaralar.com

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 02/11/2011 OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 12:27:40
E00120110001194

AENOR ER Empresa Registrada ER-0212/1994
AENOR Gestión Ambiental GA-2002/0185
IQNet

OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICA
CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL CANTABRICO
Sr. Jesús González Piedra
Plaza de España, 2
33.071 OVIEDO

Amezketa a 27 de Octubre de 2011

ASUNTO: Alegación a la propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

Muy Sr nuestro.

La publicación de la propuesta del Nuevo Plan hidrológico de la Demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental, ha supuesto una gran intranquilidad en nuestra empresa debido a la indefensión en la que nos encontramos tras haber realizado todas las actuaciones posibles, tanto técnicas como económicas, para adecuar nuestro vertido a las condiciones.

A día de hoy, nos encontramos con un nuevo Plan con nuevos objetivos prácticamente inalcanzables con las Mejores Técnicas Disponibles y que nos descoloca en nuestro Plan de Viabilidad de la Empresa.

Es por ello por lo que les adjuntamos el informe Recurso al nuevo Plan Hidrológico, proponiéndoles que acuerden con PAPEL ARALAR S.A. las condiciones reales de viabilidad técnica y económica de la imposición de los límites de las características del vertido al río Amezketa.

Atentamente

SOCIEDAD ANONIMA PAPEL ARALAR AMEZKETA (GUIPUZCOA)

Senén Amunarriz
Director Gerente
PAPEL ARALAR S.A.

RECURSO DE PAPEL ARALAR S.A. AL NUEVO PLAN HIDROLOGICO DE LA DEMARCACION HIDROGRÄFICA DEL CANTABRICO ORIENTAL.

Introducción

PAPEL ARALAR es una empresa familiar, fundada en el año 1.935, que ha ido evolucionando y ampliando sus instalaciones, adaptándose a las nuevas necesidades del mercado y de la sociedad. Es una fábrica de papel no integrada, en la que esta permanente evolución no solo se ha basado en el aumento de la capacidad productiva de sus máquinas, sino que ha ido en la línea de la búsqueda de papeles especiales que aporten un mayor valor añadido y permitan crear las bases de una empresa puntera, que perdure a lo largo de varias generaciones.

Así mismo, su evolución ha ido acompañada de una serie de medidas e inversiones para conseguir no solamente cumplir la legislación medioambiental en vigor en cada etapa de su historia, sino adecuar las mismas para contribuir al sostenimiento del medio ambiente.

Descripción de las actuales instalaciones

En línea con la filosofía de la empresa, PAPEL ARALAR S.A. ha ido diseñando sus instalaciones con el objetivo de ser líder en el sector de los papeles de embalaje flexible, y buscando la gama de productos especiales que le confiera esa mayor estabilidad y la posibilidad de mirar al futuro con optimismo, en un sector en el que la palabra crisis es algo inherente al mismo.

Para ello esta equipada de:

- Un almacén de pastas y materias primas adecuado a la amplia gama de productos
- Una central de cogeneración compuesta por una turbina de gas de 12.5 MW y una turbina de vapor a contrapresión 1,4 MW, que suministra energía eléctrica y vapor a la fábrica.
- Un sistema automatizado de alimentación de pasta a las líneas de producción
- Tres máquinas de papel, de 2.600, 3.360 y 4.400 mm de ancho respectivamente, dotadas de secadores Yankee y complementadas con diferentes equipamientos en sus secciones que permiten la posibilidad de fabricar un sinfín de calidades en la misma máquina.
- Tres bobinadoras adecuadas a la manipulación de productos especiales
- Un laboratorio de calidad , tanto para el producto final, como control de materias primas, proceso de depuración de vertidos..., etc
- Un sistema de transporte de bobinas, pesado, etiquetado y embalado automático.
- Un almacén de producto terminado con sus correspondientes muelles de carga y medios de movimientos de materiales.

- Una cocina automatizada para la preparación de los baños a aplicar a las diferentes calidades de papel, permitiendo la realización de composiciones exactas que se adapten a las necesidades de los clientes y preparada para los rápidos cambios de fabricación.
- Un sistema de recuperación interno de fibras formado por 2 bombos espesadores, 1 filtro de discos y 3 células de flotación
- Un sistema de filtración de las aguas de entrada a fábrica
- Un equipo de depuración de aguas residuales de proceso, dotado de un tanque de homogeneización-emergencia, un tratamiento físico-químico, un tratamiento biológico y un tratamiento físico-químico final.
- Un equipo de depuración de aguas de vertido procedentes de la cocina y de los equipos de aplicación que recogen las aguas contaminadas con el estucado y las llevan al depósito almacén y posteriormente al depurador decantador de salsas de estucados.
- Un equipo de extracción de fangos formado por una centrífuga y una prensa, y un sistema de recogida de los mismos

Así mismo, PAPEL ARALAR S.A. tiene implantados varios sistemas de gestión, teniendo el certificado de gestión de calidad ISO 9.002 y el certificado de Gestión Medioambiental ISO 14.001

La complejidad de nuestros productos y la necesidad de cubrir nuestra capacidad productiva con los productos especiales ha hecho que PAPEL ARALAR S.A. haya desarrollado una labor comercial en todo el mundo, teniendo ahora mismo una delegación en ASIA, con agentes en Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, India, Hong-Kong, China, Taiwán, Alemania, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Italia, Marruecos, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica y EEUU.

Gama de productos

La gama de productos de PAPEL ARALAR S.A. es un listado que continuamente se va actualizando y ampliando, siguiendo el concepto de papel a medida contenido en la filosofía de nuestra empresa, con el que buscamos la fidelización de nuestros clientes y el mayor valor añadido a nuestros productos.

Básicamente el esquema es el siguiente, si bien dentro de cada uno de ellos se establecen diferentes rangos de gramajes que pueden ir desde los 18 a los 170 gr/m^2:

GENERAL
- Celulosa estucado una cara
- Celulosa calandrado
- Estucado brillante
- Estucado doble capa

BOLSAS Y SACOS
- Celulosa envasado azúcar
- Celulosa para bolsas y regalos
- Celulosa bolsa boutique
- Celulosa bolsa antigrasa

- Estucado anticracking múltiples usos
- Estucado anticracking para bolsas boutique
- Estucados antigrasa

METALIZACION

- Soporte metal. Alto brillo etiquetas
- Soporte metal. Etiquetas de cerveza WS
- Soporte metalización regalos
- Soporte metalización etiquetas de cerveza
- Soporte metalización tabaco

ETIQUETAS

- Estucado etiquetas opacas
- Estucado etiquetas y regalos
- Estucado antigrasa Botellas de aceite

PARAFINADOS

- Soporte parafinar
- Soporte parafinar productos carnicería
- Soporte parafinar opaco
- Soporte parafinar opaco WS
- Soporte parafinar levaduras
- Soporte térmico
- Soporte estucado térmico
- Soporte autocopiativo
- Soporte autocopiativo color
- Soporte estucado CF
- Soporte estucado CF color

INTERCALARIOS

- Intercalarios metales
- Intercalarios vidrio

IMPRESION TRANSFER

- Transfer textil impresión flexo-hueco
- Transfer textil impresión Serigrafía-hueco
- Transfer textil impresión hueco
- Transfer textil impresión hueco baja porosidad.

SILICONADOS

- Papel siliconado antiadherente para hornear.
- Soporte siliconar
- Soporte siliconar doble capa
- Papel siliconado antiadherente.

CARTELES/POSTER

- Papel impresión serigrafía, Reverso azul
- Poster impresión serigrafía

- Poster impresión offset/reverso azul
- Poster impresión offset
- Poster para vitrinas
- Poster impresión Inkjet

OTROS

- Estucado Operculaje
- Estucado Banderolaje
- Celulosa para crepar
- Celulosa especial calcamonías
- Celulosa fabricación de sobres
- Celulosa retorcible
- Estucado monodosis de azucar
- Envoltorios para jabones
- Celulosa conos de helado
- Celulosa uso agrícola
- Celulosa usos médicos
- Sobres de té
- Celulosa manteles troquelados
- Celulosa color manteles
- Celulosa empaquetado resmas baja blancura
- Celulosa empaquetado resmas media blancura
- Celulosa empaquetado resmas alta blancura
- Celulosa termosoldable con tratamiento una cara para termosellar en sustitución del PE
- Hidro-enrredado Papel soporte para la fabricación de papeles hidro-enrredado de diversos colores para usos médicos e industriales

Características del sistema de producción. "Papeles Especiales"

Si bien en líneas generales, la evolución del diseño de las nuevas fabricas de papel se ha caracterizado por su especialización en líneas mono-producto, con máquinas de mayores anchos y velocidades, con el objetivo de conseguir mejores ratios económicos, productivos y de consumos, la evolución de PAPEL ARALAR S.A. ha seguido, los criterios basados en el objetivo de conseguir un sistema de producción flexible y de productos especiales.

Ello requiere de:

- Maquinas especialmente adaptadas a dichos productos
- Anchos de producción inferiores a las máquinas standar diseñadas actualmente
- Velocidades de trabajo inferiores a las máquinas de productos normales
- Lotes de fabricación infinitamente menores que los de las fábricas de productos normales.
- Mayor número de paradas para ajustes de la maquinaria por cambios de fabricación
- Mayor número de inactividades por cambios de fabricación hasta conseguir las especificaciones requeridas

- Continuos cambios de composiciones en las líneas de preparación de pastas
- Continuos cambios en las composiciones de las salsas de los baños aplicados superficialmente en el papel
- Mayor número de limpiezas de circuitos
- Mayor porcentaje de mermas que una fábrica de productos normales

Niveles de utilización de agua, actuaciones realizadas y objetivos

Tal y como se indica en el documento BREF, referente a las Mejores técnicas Disponibles en la Industria de la Pasta y el Papel, editado por el Centro de publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente,

- *"el caudal de consumo de agua para las instalaciones de papeles especiales varía fuertemente entre 40 y 300 m^3/t según el producto y las condiciones específicas de la producción".*

- *"Los papeles especiales para aplicaciones técnicas, médicas farmacéuticas y otras, se producen en lotes pequeños con más de un cambio de tipo por día y máquina de papel como promedio anual.*

- *"Para la fabricación de papeles especiales, el agua puede recircularse solo en un grado limitado debido a los estrictos requisitos de calidad de estos papeles especiales. En consecuencia, el consumo específico de agua puede exceder 100 m^3/t."*

- *"Según los criterios de calidad a alcanzar, un cambio del tipo de papel puede producir un vaciado más o menos total del sistema de pasta y de agua."*

Las medidas adoptadas en PAPEL ARALAR S.A. para la reducción del consumo de agua durante los últimos 3 años, han sido las siguientes:

- reciclado del agua procedente del circuito primario, rica en fibras finos y cargas, mediante reformas para conseguir el cierre de dicho circuito.

- reciclado del agua procedente del circuito secundario, una vez filtrada por medios mecánicos mediante bombos espesadores y células de flotación, para su empleo en el circuito de preparación de pasta.

- reutilización del agua clarificada en la planta depuradora de aguas residuales industriales, para su empleo en los anillos de cierre de las bombas de vacío, carga del pulper de recorte, y cierre de agua en las estopas de los refinos.

Para ello, ha sido necesario, entre otras actuaciones, el complementar la instalación con: un equipo de filtros de arena para el agua de entrada, un bombo espesador para la máquina III, dos células de flotación para las máquinas I y II, una célula de flotación para el circuito de comunes, un filtro SIMEONI para la alimentación de aguas de cierre a las estopas de los refinos, un circuito de bombeo para las aguas de anillo de cierre de las bombas de vacío,... etc.

Con todas estas medidas, PAPEL ARALAR S.A. ha conseguido, a pesar de pertenecer al sector de fabricación de "Papeles Especiales", llegar al nivel de consumo de agua de 13,8 m^3/t. frente a los 40 - 300 m^3/t que se establecen en el BREFT.

Inversiones efectuadas en los últimos años

Durante los últimos años, las inversiones realizadas en PAPEL ARALAR S.A. con el objetivo de minimizar su impacto ambiental, con la reducción de fangos, cierre de circuitos y adecuación del agua de vertido, han sido las siguientes:

Año	Actuación	Mejora	Coste Inversión miles euros
2.008	Instalación filtro SIMEONI	Reducción consumo agua	40,2
2.008	Instalación célula Flotación Comunes	Reducción fangos	75,7
2.008	Instalación bombo espesador maquina III	Reducción fangos	50,2
2.009	Instalación Tanque de Homogeneización vertidos	Mejora calidad vertido industrial	148,9
2.009	Instalación Tanque Biológico y dosificación de aire y nutrientes	Mejora calidad vertido industrial	286,9
2.009	Instalación célula flotación Biológico	Mejora calidad vertido industrial	57,8
2.009	Instalación bomba redundante de vertidos	Reducción riesgo vertidos accidentales	12,0
2.009	Sustitución depuración ciclónica maquina I	Reducción fangos	1.298,1
2.010	Instalación púlper Hélico 2 y tinas de recorte	Reducción residuos (papel) y consumo materia prima	345,1
2.010	Sustitución depuración ciclónica maquina II	Reducción fangos	273,6
2.010	Instalación filtros recorte	Reducción rechazos.	140,0
2.011	Sustitución depuración ciclónica maq III	Reducción fangos	806,0
2.011	Instalación filtros de discos maquina III	Reducción consumo agua y generación de fangos.	803,3
2.011	Renovación planta de cogeneración	Reducción emisiones CO2	10.000,0
		TOTAL	**14.337,8**

Estas inversiones, realizadas en base a disponer de las Mejores Técnicas Disponibles, son efectivas en cuanto a las mejoras obtenidas, pero no garantizan el cumplimiento de los límites contemplados en la nueva legislación propuesta.

El tipo de producto fabricado en PAPEL ARALAR S.A. hace que las características de su proceso sean especiales, y a su vez, lo sean también las de su vertido.

La principal característica del vertido de PAPEL ARALAR S.A. es que es un vertido de baja o muy baja biodegradabilidad., característica ésta que si bien condiciona al tratamiento biológico en cuanto a la dificultad de conseguir valores inferiores de DQO, es cierto también que su afección al río Amezketa o Amavirgiña I, es prácticamente nula debido a su baja reactividad.

NUEVO PLAN HIDROLOGICO

El nuevo Plan Hidrológico en el que se establecen los objetivos de calidad para los ríos incluidos en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental amenaza de forma directa a la viabilidad de las empresas ubicadas en los cauces de pequeño caudal, tal y como es el caso de PAPEL ARALAR S.A.

Los valores de los objetivos de calidad fijados para dichos cauces en el borrador del nuevo Plan Hidrológico, con los medios disponibles hoy en día, son inalcanzables a pesar de la implantación de las Mejores Técnicas Disponibles.

Los valores de los parámetros de calidad de nuestro vertido están recogidos en las condiciones fijadas en la AAI y es en base a ellos con los que se han ido fijando las distintas actuaciones de inversión de las instalaciones destinadas a la mejora de las condiciones medioambientales de nuestra empresa. Es en dicha AAI en la que se recogen los límites y en la que se indica que los valores admisibles de DQO podrían ser modificados al alza, dadas las características de nuestro vertido, en función de los resultados obtenidos tras la implantación de las medidas correctoras determinadas en el mismo.

Es por ello por lo que

SOLICITAMOS

- Que se tenga en cuenta que en el río Amezketa o Amavirgiña I, confluyen diferentes vertidos tanto industriales como urbanos, a día de hoy sin depurar, que están contribuyendo al empeoramiento de las características del río.

- Que se tenga en cuenta que las obras de canalización de las aguas residuales del municipio de Amezketa que están previsto realizarse por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, van a suponer una disminución en el caudal del río de Amezketa, con lo cual la exigencia en cuanto a las características del vertido de PAPEL ARALAR para conseguir cumplir las exigencias del cauce serán más restrictivas..

- Que se tenga en cuenta que el vertido procedente de PAPEL ARALAR S.A. es un vertido ya depurado, con nuevas instalaciones diseñadas con las Mejores Técnicas Disponibles.

- Que se tenga en cuenta la excepcionalidad de las características del vertido de PAPEL ARALAR S.A., en cuanto a la baja biodegradabilidad de sus efluentes, a la hora de fijar los límites de calidad del Río Amezketa y los correspondientes al vertido de PAPEL ARALAR S.A.

- Que se tenga en cuenta la viabilidad tanto técnica como económica, a la hora de establecer la aplicación de dichos límites.

- Que los requerimientos en cuanto a la aplicación de la exigencia de mejoras medioambientales sean compatibles con la situación de las empresas en el periodo de crisis en el que estamos inmersos.

- Y que las nuevas exigencias en cuanto a las condiciones del vertido de PAPEL ARALAR S.A. se lleven a cabo mediante un acuerdo con los Representantes de PAPEL ARALAR S.A.

Amezketa a 27 de Octubre de 2011

02. 11. 201
CORREOS
TRAQUIA

AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. Patxi xabier lizarraga echeberria, mayor de edad, domiciliado a efectos de notificación en C/ Elizbide Nº 2 ,1º C;P/ 31829 Dorrao Navarra, provisto de D.N.I. nº 18,192,611 W, actuando para este acto en su calidad de administrador. de la mercantil C,H,Usabal S,L, domiciliada también en DORRAO, y cuyo NIF es B31479140.

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

A L E G A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 03/11/2011
OFICINA SAN SEBASTIAN 11:37
E002201100000829

177

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 136 de la constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art. 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

179

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) <u>Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.</u>

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

180

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles - petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,-hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de*

185

la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..) ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente (*"contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.'

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

189

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

   Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

   "/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) <u>Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.</u>

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) **Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos**

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) **Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales**

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3° del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada". **192**

Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral "*De Facto*" de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

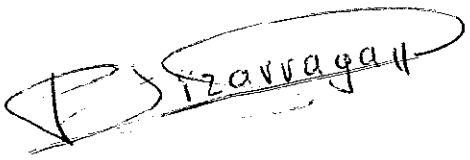
4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo en Dorrao a 31 octubre de 2011.



Administrador

hidroeléctrica DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 03/11/2011
OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 13:13:31
E001201100011264

21.10.11
CORREOS 48-SUC.5 BILBAO

A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL

D. Jorge Garcia-Egocheaga, mayor de edad, con DNI nº 78908991Q y domicilio a efecto de notificaciones en Bilbao, Alda Mazarredo 39 3ºC, actuando en nombre y representación de Hidroeléctrica del Cadagua, S.A. CIF A09105230, comparezco y digo

Que por medio del presente escrito y en relación con la Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se someten a consulta pública la **Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca del Cantábrico Oriental,** actualmente en fase de consulta, presento las siguientes

ALEGACIONES

Primera.- En relación con el régimen de caudales ecológico. En concreto, artículo 11 apartado 2 de la Propuesta.

Los caudales ecológicos son una restricción a ser respetada. En el caso de cualquier concesión otorgada y con la central hidroeléctrica en funcionamiento, este caudal ha de ser el que se impuso en el título concesional, pues este título es el que marca el derecho que tiene el concesionario durante toda la vigencia de la concesión, ya que la central podrá derivar un caudal igual al del rio menos el caudal ecológico con un máximo del caudal concesional. Aumentar el caudal ecológico supone para el concesionario una disminución del caudal total que puede derivar y por tanto es un perjuicio que se traduce en una menor producción eléctrica y menor facturación. Por tanto, el aumento del caudal ecológico supone una pérdida para el concesionario que es perfectamente evaluable.

Por otra parte, no existe en este momento un consenso científico en cuanto a la validez metodología de cálculo seleccionado para el cálculo de los caudales ecológicos y la información de estaciones de aforos y pluviométricas no es suficiente ni de la calidad adecuada. Por tanto, cualquier inferencia particular que se realice, siempre será experimental, y este caso con cargo al concesionario. Es decir, totalmente arbitrario y contrario a los intereses del administrado y se estará incurriendo en una notable inseguridad jurídica, en una clara violación —por ser una remisión a una norma en blanco—, del derecho de defensa de los administrados.
En este sentido, y respecto a la necesidad de alcanzar un acuerdo o umbral consensuado entre todos los operadores, debemos remitirnos a las Instrucción de

hidroeléctrica DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del plan hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: *"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".*

La participación activa a la que refiere la Instrucción no ha sido respetada en el presente procedimiento de siendo que, por el contrario, se establecen unos umbrales unilaterales sin soporte técnico científico que avale la bonanza de la medida.

Por tanto, solicitamos que se respeten y mantengan los caudales ecológicos definidos en los títulos concesionales.

Segunda.- Respecto al artículo 12. Cálculo de caudales ecológicos para las masas de agua de categoría río en el anejo 8.1.

Los caudales ecológicos de las masas estudiadas se han determinado en función de unos cálculos teóricos basados en modelos como el SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evapotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc, de modo que el número de variables a introducir en el modelo es tan grande que pudiera ser que los cálculos no fueran adecuados.

De hecho, en Anejo V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – "Un … problema metodológico … importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."
Así, la determinación de los caudales ecológicos pudieran ser incorrecta y la imposición de los mismos a los concesionarios de las explotaciones hidroeléctricas podría ser injusta y arbitraria.

Dada la normativa existente, tanto en el Ley de Aguas como en la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, se dice

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Pues bien; sorprende que se hayan analizado solo 9 masas. Una de ellas se corresponde con Cadagua I, que está justo en la cabecera del rio. La determinación del resto de masas del rio se realiza mediante extrapolación por métodos de modelación. La masa Cadagua II trascurre desde el núcleo de la Presilla hasta la confluencia con el río Herrerías en Sodupe con una longitud de 38 kms. En esta propuesta de PH se llega por extrapolación a la determinación de los caudales ecológicos en el resto del rio y en concreto en el punto antes mencionado en Sodupe. Sorprende este asunto porque el tramo de cabecera estudiado en el Cadagua es de unos pocos kilómetros y el punto señalado como Cadagua II simula un tramo de rio de 38 kms.

La cuenca de la masa Cadagua II (273.41 Km2) es la suma de

Cuenca del Cadagua I	96,06	km2
Cuenca de Ordunte	35,28	km2
Cuenca entre Cadagua I y II	142,07	km2
Total cuenca Cadagua II	**273,41**	**km2**

Los caudales ecológicos propuestos son los siguientes;

(en m3/seg)	alto	medio	bajo
Masa Cadagua I	0,38	0,31	0,22
Masa Cadagua II	1,22	0,93	0,62
Masa Ordunte	0,14	0,11	0,07

El régimen de Ordunte es el siguiente:

El pantano de Ordunte se alimenta de las aportaciones naturales de su cuenca y sobre todo del trasvase del rio Cerneja, de la cuenca del Ebro. El pantano tiene una turbina a pié de presa con un caudal concesional de 1.500 lts/s. Los caudales mínimos establecidos en el título concesional son de 300 l/s durante Noviembre, Diciembre y Enero y de 150 l/s durante el resto del año.
Normalmente esta central viene a turbinar un caudal de unos 650 lts/seg de los que deja en el rio el caudal ecológico de 150 o 300 l/s, según sea la estación del mes, y desvía el resto del agua por un canal hasta la central y potabilizadora de Sollano en Zalla desde donde se vehicula agua potable a Bilbao hasta 1.500 l/s.

Solo cuando el pantano está muy alto se turbinan 1.500 l/s. En el caso de grandes lluvias, el pantano vierte por coronación lo que ocurre durante un promedio de 8 días al año.

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

Por tanto, la aportación que hace la cuenca del Ordunte al río Cadagua es el caudal ecológico y los vertidos por coronación, estos últimos solo durante solo 8 días al año, que coinciden por otra parte con aguas muy altas en el Cadagua.

Aguas abajo de la desembocadura del Ordunte en el Cadagua y aguas arriba de Balmaseda hay una estación de aforos que tiene datos desde el año 1996. El análisis de los datos de ésta estación de aforos es muy importante porque nos indica el agua que exactamente pasa por ese punto. Dado que son datos reales y no obtenidos teóricamente por extrapolación o cálculos teóricos, entendemos deben usarse preferentemente este tipo de datos .

Las aportaciones intermedias entre esta estación de aforos y el punto determinado como final de la masa Cadagua II en Sodupe no son significativas pues el único afluente un poco relevante es el Retola

La conclusión es que los caudales ecológicos que se han determinado para este punto de final de la masa Cadagua II de 1.22 / 0.93 / 0.62 m3/s no son adecuados dado que representan un porcentaje del caudal superior al 25% del caudal del rio en el punto mencionado.

Según nuestros cálculos, si los caudales ecológicos se definieran como 10% del caudal medio esperable en Sodupe en cada una de las 3 temporadas del año (alta, media y baja) serían 0.65/0.40/0.20 m3/s respectivamente

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos

(i) Que se recalculen los caudales en el punto de final de masa Cadagua II en Sodupe basándose sobre todo en los datos reales de caudales diarios proporcionados por la estación de aforos.

(ii) Que el caudal ecológico que se imponga a Ordunte sea el del título concesional (300 l/s en Nov, Dic y Enero y de 150 l/s el resto de año).

(iii) Que para el cálculo de los caudales ecológicos de puntos intermedios entre el fin de la masa de Cadagua I y de Cadagua II no se tenga en cuenta el área de cuenca de Ordunte dado que su aportación al Cadagua está reducida al caudal ecológico antes mencionado (y ocasionalmente a los desembalses por coronación, que afectos de cálculos no deben ser tenidos en cuenta)

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

Tercera.- Respecto a la definición de masas de agua de Cadagua I y Cadagua II

En el anejo V pag 25, de la Normativa se definen las coordenadas UTM del final de la masa de Cadagua I. En la página 48 del mismo anejo V se define que la cuenca que corresponde a esas coordenadas UTM es de 96.06 km2, lo cual es cierto según hemos podido comprobar en la misma Confederación. Esto es, las coordenadas UTM del punto de fin de la masa corresponden a la cuenca medida.

En el Anejo I página 108 se hace una descripción inexacta de lo que es el tramo de rio que comprende Cadagua II, que comienza en el paraje denominado La Presilla (que corresponde a las coordenadas UTM del fin de la masa Cadagua I) al mencionar que incluye las centrales de Ferreria del Cerezo (Maltrana) y la central de Nava (Yecola o Maltrana de Mena) pues las tomas de estas dos centrales están aguas arriba del punto señalado como fin de la masa Cadagua I y por tanto pertenecen a esa masa de agua.

Consecuentemente, solicitamos que de la descripción de la masa de Cadagua II y se elimine la mención a las centrales de Ferreria del Cerezo (Maltrana) y de Nava (Yecola o Maltrana de Mena)

Cuarta; sobre la calificación de masa de agua muy modificada para Cadagua II

Basados en nuestro conocimiento del rio Cadagua en el tramo de aguas arriba de Balmaseda basada en nuestra larga experiencia diaria, hemos de manifestar que la calificación de masa de agua muy modificada para este tramo de rio por el simple motivo de que existan unos pequeños azudes de derivación, no nos parece acertada. En nuestra opinión, el rio goza en este tramo de una excelente salud y los pequeños azudes instalados hace mas de un siglo están ya perfectamente integrados en la ecología del rio.
En relación con la salud del rio Cadagua hasta Güeñes deseamos reproducir el siguiente estudio realizado por la DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA
"Como consecuencia de la composición calcárea del sustrato el río Kadagua presenta desde el origen valores de conductividad que superan los 400 µS/cm, pudiéndose observar sobre el sustrato considerables precipitados de carbonato cálcico. Al atravesar el diapiro de Mena (intrusión salina de forma circular compuesta por arcillas abigarradas, yeso y sal) el contenido de iones se incrementa, elevándose fuertemente la conductividad, que alcanza en este tramo valores superiores a 800 µS/cm.

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

En el tramo medio disminuye la conductividad por efecto de la entrada del río Ordunte menos mineralizado, pero posteriormente vuelve a aumentar adquiriendo valores superiores a 1000 µS/cm, en este caso por efecto de la contaminación.

El río Herrerías también presenta una conductividad elevada, que se incrementa por efecto de los vertidos llegando a medir hasta 1870 µS/cm antes de su confluencia con el Kadagua. Los nutrientes y la materia orgánica presentan valores bajos en la parte alta de la cuenca, que aumentan a partir de Balmaseda y en el tramo bajo del Herrerías.

La concentración de sulfatos es muy elevada en el río Kadagua a consecuencia de la disolución de los yesos al atravesar el diapiro de Mena.

En general, y debido al carácter turbulento del agua, los tramos superiores de estos ríos se encuentran bien oxigenados. Sólo a partir de la localidad de Aranguren y en el tramo final del Herrerías se han registrado bajas concentraciones de oxígeno.

Los organismos

En los tramos altos alternan en las riberas los alisos con los fresnos, sauces, avellanos y arces. En los tramos más bajos dominan los chopos y las falsas acacias, presentando, a menudo, una vegetación ribereña nitrófila de Urtica dioica y Polygonum persicaria. Las riberas mejor conservadas se encuentran en la parte alta del Herrerías, en un entorno de robledal. El Kadagua ya incluso en el Valle de Mena empieza a tener las riberas deforestadas. Atraviesa, además, algunos núcleos urbanos por donde circula canalizado.

Se distinguen tres zonas en el cauce principal del Kadagua por lo que respecta a la comunidad de macroinvertebrados. La primera de ellas llega hasta Balmaseda y presenta una calidad media-alta. La segunda presenta una calidad media desde Balmaseda a Zalla y Güeñes. Más abajo de los asentamientos industriales de Aranguren-Zalla la calidad es muy baja hasta la desembocadura en la ría del Nerbion.

En los tramos altos la variedad de la fauna es pequeña: según la época del año dominan los anfípodos, efemerópteros, quironómidos y moluscos. Una limitación a la distribución de la fauna en estos tramos altos, en que la calidad del agua es buena, parece deberse a la gran cantidad de precipitados calizos que se depositan sobre el sustrato y/o al tamaño del mismo, formado por grandes bloques o láminas de roca continua en la mayor parte del recorrido. Esto, unido al carácter torrencial de este primer tramo especialmente en épocas de precipitaciones, hace que la deriva de los macroinvertebrados sea importante. El impacto de Balmaseda se manifiesta por un aumento de los oligoquetos y los quironómidos en relación con las zonas anteriores, pero sigue manteniendo efemerópteros, tricpteros, moluscos e hirudíneos, lo que indica que el agua ha sufrido una cierta eutrofización o efecto de abonado pero sigue siendo de calidad aceptable. Sin embargo, aguas abajo de Güeñes y especialmente después de Aranguren, la fauna es nula o queda reducida a oligoquetos y quironómidos, lo que denota la intensa contaminación que sufre el cauce.

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

En esta cuenca está muy bien conservado el río Ordunte, con una fauna variada de plecópteros, efemerópteros, tricópteros, simulíidos, oligoquetos y quironómidos, entre otros. También presentan una fauna indicadora de buena calidad los arroyos del tramo alto del río Herrerías en tierras de Alava. Este río, sin embargo, sufre un cambio importante en la composición de la fauna después de Arceniega, pasando a dominar los oligoquetos y los quironómidos, lo que denota un incremento de la eutrofización que se agrava a partir de Gordexola.

En la parte alta del Kadagua habitan la trucha y el foxino, que dan paso en zonas más bajas al barbo, la loina y la locha de roca. En el Herrerías se encuentran también truchas y foxino en la parte alta y barbo, loina y anguila en la baja. Existen cotos en Balmaseda y Zalla, donde se captura trucha común y arco-iris, esta última introducida."

De lo anterior se deduce que no puede incluirse en el mismo estudio el tramo del Cadagua desde Las Presilla hasta Güeñes o al menos hasta Balmaseda y desde este último punto hasta Sodupe.

Consecuentemente solicitamos (i) diferencien ambos tramos, (ii) definan que el tramo de Cadagua II termine en Güeñes o en Balmaseda, (iii) eliminen en el PH la calificación de masa de agua muy modificada para el tramo entre el punto de terminación de la masa Cadagua I y Balmaseda o Güeñes, (iv) fijen el caudal ecológico del nuevo punto de fin de masa de agua Cadagua II basándose en los datos reales de caudales medidos en la estación de aforos aguas arriba de Balmaseda e (v) incluyan el tramo restante hasta Sodupe en la definición de masa Cadagua III

Quinta.- Respecto al artículo 15. Usos del Agua.

Una concesión para uso hidroeléctrico permite derivar un determinado caudal de un rio para ser turbinado y devuelto al rio.

Las tomas para abastecimiento a la población que se construyan aguas arriba con posterioridad al otorgamiento de la concesión, dado que sustraen un cierto caudal del rio y por tanto perjudican gravemente al concesionario, deben dar lugar a compensación a este, de modo que, como una parte mas del coste de la construcción de la toma para el abastecimiento, ha de calcularse la necesaria compensación de daños por pérdida de producción a los concesionarios aguas debajo de la toma de abastecimiento.

Por ello solicitamos que se establezca el derecho de los concesionarios a ser indemnizados por las tomas y detracciones de caudales aguas arriba de su concesión

hidroeléctrica DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

Sexta.- Respecto al artículo 24. Instalación de dispositivos de medida.

Esta es una obligación que la CH desea imponer a todos los concesionarios siendo que tal obligación no está recogida en la concesión y se trata por tanto de algo nuevo.

En nuestra opinión, este control es inadecuado al menos para las minicentrales de agua fluyente dado que no tienen capacidad de almacenamiento y regulación y no son consuntivas, de modo que la totalidad del agua derivada es devuelta al rio segundos mas tarde. Para unas economías ajustadas, como son las relacionadas con la explotación de las minicentrales, la imposición de implementar dispositivos de medición de los caudales derivados representa un gravamen y una carga desproporcionada.

Por otra parte, los caudales que son derivados por las minicentrales, por su propia naturaleza, son pequeños y un exhaustivo control de los mismos por parte de la administración va a ser el equivalente a controlar "el chocolate del loro" y a incrementar el cuerpo funcionarial para obtener ningún beneficio.

Por ello solicitamos que se exonere a las minicentrales de agua fluyente de la obligación de instalar dispositivos de medida de los caudales derivados y/o evacuados.

Séptima. Art 34.1 Plazo concesional

El plazo general de 20 años es completamente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que, como es sabido, requiere de unas inversiones muy cuantiosas en infraestructuras y equipos electromecánicos que difícilmente van a poder amortizarse en un plazo tan exiguo.

El texto del precepto prevé que discrecionalmente "podrán fijarse otras duraciones inferiores o superiores por razones de índole público debidamente razonadas…", dejando de nuevo un importarte elemento de discrecionalidad a la administración para dar el plazo concesional que le plazca, por lo que entendemos que tal redacción ha de ser acotada.

Entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, al ser siempre insuficiente el plazo general de 20 años, habría que modificar el precepto añadiéndole la mención *"salvo en el caso del uso hidroeléctrico que será de 40 años"*.

202

Por tanto, solicitamos se prevea que "el plazo concesional para usos hidroeléctrico será de al menos 40 años".

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

<u>Octava</u>.- Respecto al artículo 34.3 y las limitaciones a los plazos concesionales.

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derecho de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, la concesión se configura como el título por excelencia que habilita para dar cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

De entre los distintos títulos que amparan el uso y disfrute del agua, la concesión (el título concesional) es el que ha prevalecido al ser el que mayores garantías de todo orden ofrece a los distintos partícipes en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración e implantación actual, se asienta en la Ley 29/1985. Sin embargo, y en orden a contextualizar los presentes argumentos, hemos de referir, siquiera brevemente, a los antecedentes de la actual legislación.

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria que, conforme al artículo 412 del Código Civil y con el artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985 y derivó en una demanialización de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico. Sin embargo, el legislador, aún amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de dominio público.
En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La referida norma rectora del demanio hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA, que respetando los derechos adquiridos dispone:

"DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1.Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de 75 años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.

2. Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal del aprovechamiento a las necesidades reales".

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, está siendo unilateralmente cuestionado por la Administración creando así una polémica, dando lugar a

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

discrepancias entre la Administración y los concesionarios en la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años en él contenidos.

Lo que hasta la fecha constituía un pacífico y asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes *"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"*, esto es, hasta el 2061; parece sufrir un vuelco interpretativo. De tal manera, que, según la interpretación –hasta la fecha unilateral- de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto –y plazo- ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

Tal interpretación, que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley. En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas); es más, es un computo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento por parte de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); hemos de referirnos a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterda disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia: Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidraúlico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..)* ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer introducir) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

hidroeléctrica DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular, cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención del legislador hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente *("contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativo de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras. Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y el legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5.000 KVA, *"la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".*

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos (entre otros, Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995) se integran -tanto en sus fines como en el tiempo- con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (mucha de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,
- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,
- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y
- por último la comentada Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que

hidroeléctrica DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de las centrales de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio ningún inversor habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años. Dicho de otro modo, todos los actores que hemos invertido cuantiosas sumas en la adquisición y rehabilitación de minicentrales con posterioridad a 1985 lo hemos hecho bajo el amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.´

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca. En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros y, es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así pues, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza y veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que, *"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión"*.

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración, con eficacia tanto frente a terceros pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento, con carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Mi representada, sin perjuicio de remitirnos al referido Registro público, aporta respecto a sus derechos concesionales el certificado expreso emitido por la Confederación Hidrográfica del Norte de reconocimiento de sus derechos y, en relación a los presentes efectos, ha de destacarse la condición específica primara que, y es copia literal, dispone: "Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental" contiene una doble (sino más) vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas*». En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

"una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9.3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

210

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

Hemos de señalar además la discriminación que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental hace en esta propuesta de PH con el resto de los españoles, pues en ninguna de las demás propuestas de Planes Hidrológicos de otras cuencas se ha propuesto la no validez de la aplicación de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas por la que las concesiones que lo eran a perpetuidad tienen vigencia hasta el 1 de enero de 2065

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina -esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas-, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

Novena. Artículo 35.2 Respecto a la reversión de los bienes.

Creemos que es contrario a derecho que se instaure un gravamen nuevo para el administrado-concesionario cual es el de sufragar a su costa la demolición o reparación de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional. Las obligaciones de éstos se limitan por la normativa hidráulica a la reversión al Estado de las obras e instalaciones en dicho dominio, de manera que un nuevo gravamen al concesionario exigiría reserva de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Además de estos argumentos de índole jurídico, hay que considerar el elevado coste de ejecutar estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario con nuevas y sobrevenidas cargas económicas, en adición al daño que representa la extinción de su derecho concesional en sí mismo.

Décima – Art 37.7

Tal como se ha comentado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrólogico debe ser mas explícita en el establecimiento de los criterios de la determinación de los plazos concesionales y en el caso de la actividad hidroeléctrica, al ser siempre insuficiente el plazo general de 20 años, habría que modificar el precepto añadiéndole la mención *"salvo en el caso del uso hidroeléctrico que será de 40 años"*.

Por tanto, solicitamos se determinen de manera adecuada cuales son los criterios para la fijación de los plazos concesionales y que se prevea que "el plazo concesional para usos hidroeléctrico será de al menos 40 años".

Decimoprimera. - Respecto al artículo 38.3. Modificación y Revisión de los caudales concesionales.

La redacción de este párrafo es tan abierta que da a la administración una gran libertad de decidir lo que considere una "modificación de los supuestos determinantes del otorgamiento de la concesión" de modo que podría injustamente modificar el caudal concesional en perjuicio del concesionario sin que éste tenga derecho a indemnización alguna.

Nuevamente viene el texto normativo del Plan Hidrológico a vulnerar los derechos de los concesionarios existentes. Las causas de modificación o revisión de las concesiones están taxativamente establecidas por el T.R.L.A. y por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de forma que constituyen un númerus clausus que no es posible ampliar sin una formal modificación de la mencionada Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Por lo demás, vuelve a ser contrario a derecho que no se prevea la indemnización correspondiente al concesionario que ve modificada unilateralmente su concesión.

hidroeléctrica DEL CADAGUA

Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

Por tanto, solicitamos una adecuada definición de lo que se considere una "modificación de los supuestos determinantes del otorgamiento de la concesión y el reconocimiento del derecho del concesionario"

Décimosegunda.- Respecto al artículo 38.5.

El párrafo 5 del artículo 38, basándose en que el título concesional no garantiza los caudales concesionales, estima que una revisión de los caudales ecológicos no supone la revisión de la concesión. Esta afirmación no puede sostenerse en modo alguno pues (i) en muchas concesiones aparece el caudal ecológico como uno de los parámetros a respetar y (ii) un incremento del caudal ecológico significa un decremento del caudal que queda disponible para ser derivado. Por tanto, la variación del caudal ecológico supone una modificación transcendente en los términos concesionales.

Tanto mas en cuanto que no existe en este momento un consenso científico en cuanto a la validez metodología de cálculo seleccionado. Por tanto, cualquier inferencia particular que se realice, siempre será experimental, y este caso con cargo al concesionario. Es decir, totalmente arbitrario y contrario a los intereses del administrado y se estará incurriendo en una notable inseguridad jurídica, en una clara violación —por ser una remisión a una norma en blanco—, del derecho de defensa de los administrados.

Por tanto, solicitamos se admita que una modificación del caudal ecológico supone una modificación del título concesional que genera una responsabilidad patrimonial de la administración pública y obligación de indemnizar al concesionario

Décimotercera. Escala de peces

Estimamos que se debiera hacer explícita mención de que este precepto no resulta de aplicación a los aprovechamientos existentes que no tengan expresamente establecido en su título concesional la obligación de la construcción de una escala de peces.

Por otro lado, en las modificaciones de las concesiones solo debería ser aplicable a los supuestos de ampliación del caudal concesional en tanto que es una decisión dimanante de la libre voluntad del concesionario.

Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto. Por tanto, la imposición de construir una escala de peces debería ser un concepto indemnizable.

hidroeléctrica
DEL CADAGUA

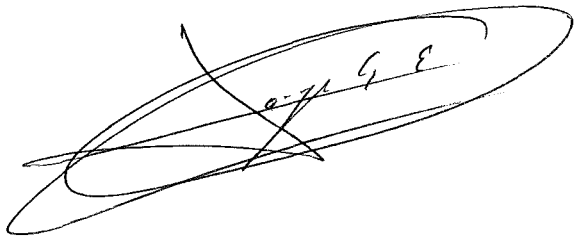
Alameda de Mazarredo , 39 - 3º c.
48009 BILBAO
Tels. 944 790 256
944 790 261
Fax 944 790 389

Por el contrario, si de lo que se trata es de evolucionar el elemento a través de un proceso de I+D, el presente Plan debería diseñar los mecanismos de financiación concertada que posibiliten dicho desarrollo, tanto en cuanto a los elementos como en cuanto a las medidas de implantación.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO que, en tiempo y forma, se tenga por presentado el presente escrito de alegaciones al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca del Cantábrico Oriental, y, en base a los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

En Bilbao, a 14 de Octubre de 2011



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
C/ Asturias, 8 - 1º – 33071 OVIEDO.

214

Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA | OFICINA PLAZA DE ESPAÑA
03/11/2011 | 12:29:54
E001201100011251

IRTEERA - SALIDA
Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
2011 URT. 31
Zk. / N.º 2575

Honekin batera bidaltzen dizkizuegu Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiak prestatutako alegazioak, Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren erkidego arteko arroetako Plan Hidrologikoaren Proiektuaren Proposamenari egindakoak.

Adjunto se acompañan las alegaciones elaboradas por la Dirección General de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de este Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa a la propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico de Cuenca de las cuencas intercomunitarias de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

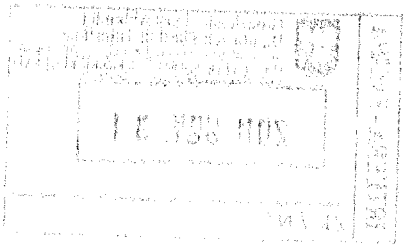
Donostia, 2011ko urriaren 28a
San Sebastián, 28 de octubre de 2011

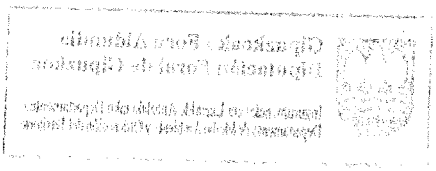
INGURUMENEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO FORU DIPUTATUAK,
EL DIPUTADO FORAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Izp. / Fdo.: Juan Carlos Alduntzin Juanena

KANTAURIKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOAREN LEHENDAKARI Jn.
Sr. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
Plaza de España, 2. 33071 OVIEDO





7-OH

INGURUMENEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUKO INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO ZUZENDARITZA NAGUSIAREN ALEGAZIOAK, KANTAURI EKIALDEKO MUGAPE HIDROGRAFIKOAREN ERKIDEGO ARTEKO ARROETAKO PLAN HIDROLOGIKOAREN PROIEKTUAREN PROPOSAMENARI EGINDAKOAK.

Lehendabizi azpimarratu nahi dugu garrantzitsua izango litzatekeela Kantauriko Ur Konfederazioak bere plan hidrologikoa koordinatzea Uraren Euskal Agentziak (URA) barne arroetarako aurrez aurkeztutakoarekin. Izan ere, irizpide desberdinak aplikatu dira hauek bezalako alderdi garrantzitsuen inguruan: erreferentziazko baldintzak, ur masen kalifikazioa, emari ekologikoak, dotazioak, eta abar.

Kantauri itsasoko gure ibai guztiak antzekoak direnez, tratamendu bera izan beharko lukete. Kontrakoak kudeaketa arazoak sortuko lituzke, eta baita konparaziozko bidegabekeriak ere arro ezberdinetako ur erabiltzaileen artean.

ERREFERENTZIAZKO BALDINTZAK. ARAUTEGIKO 3.1 ERANSKINA.-

Aipatu dugu dagoeneko beharrezkoa dela parametro fisiko-kimiko eta biologikoetan eskatu beharreko mugei buruzko adostasuna lortzea URArekin. Hala ere, guztizko P eta ortofosfatoen mugak gutxitzeko proposamena egin nahi dugu, URAren Plan Hidrologikoaren alegazioari egin zitzaion neurri berean. Izan ere, nahiz eta saneamendu obrak egin diren, puntu ugari daude mesotrofia eta eutrofiarekin, eta araudian helburutzat hartutakoak baino mantenugaien kontzentrazio txikiagoak dituzte. Gure iritzia indartzen duen txosten bat eransten dugu, EHUko adituek egindakoa.

Hau da gure proposamena:

- Guztizko fosforoa ≤ 0,2 mg P/L
- Ortofosfatoak ≤ 0,35 mg PO4/L

ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO A LA PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LAS CUENCAS INTERCOMUNITARIAS DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL

Con carácter previo queremos destacar la importancia de que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico proceda a coordinar su Plan Hidrológico con el presentado anteriormente por el **URA** para las cuencas internas. Encontramos que se han aplicado diferentes criterios en aspectos tan importantes como: Condiciones de referencia, calificación de las masas de agua, caudales ecológicos, dotaciones etc.

Todos nuestros ríos cantábricos tienen la semejanza suficiente para que tengan el mismo tratamiento. Lo contrario generaría dificultades de gestión e incluso agravios comparativos entre los usuarios del agua de las diferentes cuencas.

CONDICIONES DE REFERENCIA. ANEJO 3.1 DE LA NORMATIVA.-

Ya se ha citado la necesidad de consensuar con el **URA** los límites exigibles en los parámetros físico-químicos y biológicos. No obstante, queremos proponer un descenso en los límites de P total y ortofosfatos en los mismos términos a la alegación que se realizó al Plan Hidrológico del Ura. El hecho es que a pesar de las obras de saneamiento realizadas se encuentran numerosos puntos con mesotrofia y eutrofia a pesar de que presentan concentraciones de nutrientes inferiores a las propuestas como objetivo en la Normativa. Se adjunta un informe de especialistas de la UPV que refuerza nuestra posición.

Nuestra propuesta es la siguiente:

- Fósforo total ≤ 0,2 mg P/L
- Ortofosfatos ≤ 0,35 mg PO4/L

LEHENTASUNEZKO ERABILERAK.-

Lehentasuna eman nahi diegu industria erabilerei, energia elektrikoa ekoizteko industria erabileren aurrean, eta ez alderantziz, planean proposatu den bezala.

Eskatzen dugu erabilera lehentasunak berdinak izatea Gipuzkoako arro guztietan eta, beraz, armonizazio lana egin behar da Euskal Autonomia Erkidegoko Barneko Arroen eta Kantauri Ekialdeko Arroen Plangintza Hidrologikoaren inguruan, gure lurraldearen barruan gutxienez.

PRIORIDADES DE USOS.-

Se solicita que los Usos industriales sean prioritarios sobre los Usos industriales para la producción de energía eléctrica, y no al revés como figura en la propuesta del Plan.

Se solicita que las prioridades de uso sean las mismas en todas las cuencas del Territorio Hº de Gipuzkoa, por lo que se deberá realizar una labor de armonización del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la C.A.P.V. y de las Cuencas del Cantábrico Oriental, al menos dentro de nuestro territorio.

DOTAZIOAK.- ARAUTEGIKO 27-33 ARTIKULUAK.-

Horrela, bada, irizpide berak aplikatu behar zaizkie dotazioei Gipuzkoako Lurralde Historikoaren barruan, diferentziarik sortu gabe Kantauri Ekialdeko arroen eta Euskal Autonomia Erkidegoko barneko arroen artean.

DOTACIONES. ARTÍCULOS 27-33 DE LA NORMATIVA.-

Se solicita que las dotaciones dentro del territorio Hº de Gipuzkoa se asignen con los mismos criterios, sin que existan diferencias según que una cuenca pertenezca al Cantábrico Oriental o a las Cuencas internas de la C.A.P.V.

EMARI EKOLOGIKOEN ERREGIMENAK. ARAUDIKO 3. KAPITULUA.-

Konparaziozko taula bat egin zen BIDUR mugaz gaindiko lankidetza proiektuaren barruan (eranskin gisa aurkeztu da) eta, bertan, Urumea ibaiaren hainbat puntutan hartutako emari ekologikoen datuak bildu ziren, bai Kantauri Ekialdeko Arroen Plan proposameneko balioen bidez lortutakoak, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Barneko Arroen Plan Hidrologikoaren proposamenean erabilitako metodologiari jarraituz eskuratutakoak -arroko aforalekuetan balidatutako SACRAMENTO ereduarekin sortutako eguneroko serieak erabili ziren-. Benetako balioak erabilita kasu batean eta bestean proposatutako balio ekologikoen arteko diferentzia lortzen da.

Horren arabera, errespetatu beharreko emari ekologikoen eta benetako emari balioen arteko diferentzia garbia egongo litzateke, Euskal Autonomia Erkidegoko barneko arro batean edo kanpoko batean egon.

REGÍMENES DE CAUDALES ECOLÓGICOS. CAPÍTULO 3 DE LA NORMATIVA.-

Se dispone de una tabla comparativa (se presenta como anejo) realizada dentro del proyecto de cooperación transfronteriza BIDUR, con los datos de caudales ecológicos obtenidos en una serie de puntos del río Urumea, por medio de los valores presentes en la propuesta de **Plan Hidrológico de las Cuencas del Cantábrico Oriental,** y los obtenidos en esos mismos puntos siguiendo la metodología empleada en la propuesta de **Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la C.A.P.V.** utilizando series diarias generadas con el modelo SACRAMENTO validado en las estaciones de aforo de la cuenca. La consecuencia que se obtiene es la diferencia existente entre los valores ecológicos propuestos en uno y otro caso con los valores reales.

Según esto existiría una diferencia clara entre los caudales ecológicos a respetar y los valores de caudales reales, según se esté en una cuenca interna o externa de la C.A.P.V.

Beraz, Gipuzkoako Lurralde Historikoko arro ezberdinen emari ekologikoak proposatzea eskatzen da, arro guztietarako antzeko kalkulu metodoa erabilita.

Por tanto se solicita se proponga los caudales ecológicos de las diferentes cuencas del Territorio Hº de Gipuzkoa con una metodología de calculo similar para todas las cuencas.

BALIABIDEEN ESLEIPENA ETA ERRESERBA. ARAUDIKO 5. KAPITULUA.-

Halaber, planean aurreikusitako dotazio eta kontsumoetarako sistema ezberdinetan ezarritako emakidak eguneratzeko eskaera egiten dugu; izan ere, kasu askotan benetako kontsumoak nabarmen gainditzen dira eta, horrela, ura aurreztuz eta ur galerak gutxituz, ur sistemak hobetu ahal izango dira.

ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS. CAPÍTULO 5 DE LA NORMATIVA.-

También solicitamos que se actualicen las concesiones existentes en los diferentes sistemas a las dotaciones y consumos previstos en el Plan, ya que en muchos casos exceden de forma muy significativa a los consumos reales, promoviendo de esta forma que el ahorro de agua y las disminuciones de pérdidas reviertan en la mejora de los sistemas acuáticos.

UHOLDEEN KONTRAKO BABESA. ARAUDIKO 42. ARTIKULUA.-

Kontuan hartuta herritarrentzat dagoen arriskua, garrantzi ekonomikoa eta uholdeen gainean dagoen sentsibilitatea, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren barruan uholdeen kontrako babesari lotutako araudia nahiz artikuluen idazkera egokitzea eskatzen da.

Horren arabera, atal honen edukiari buruzko armonizazio topaketak egin beharko lirateke URA-Uraren Euskal Agentziaren eta Kantauri Ekialdeko arroetako Konfederazio Hidrografikoaren artean.

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES. ARTÍCULO 42 DE LA NORMATIVA.-

Considerando el riesgo para la población, la importancia económica, y la sensibilidad existente sobre las inundaciones, se solicita se adecue tanto la normativa como la redacción de los artículos relacionados con la Protección contra las inundaciones dentro del Territorio Hº de Gipuzkoa.

Según esto se solicita que se realicen encuentros de armonización para este apartado entre URA-Agencia Vasca del Agua y Confederación Hidrográfica de las cuencas del Cantábrico Oriental.

UR MASA ARTIFIZIALAK EDO OSO ALDATUAK. ARAUDIKO 5.1 ETA 5.2 ERANSKINAK.-

Ur masa baten kalifikazioa "oso aldatua" denean, parametro biologikoetan kalitate helburua gutxitu egin dela adierazten da. "5.1 Eranskinean" jasotako ur masen artean, "URUMEA IBAIA I ETA LEIZARAN IBAIA II" delakoek egoera ona lortzeko potentziala dute alderdi fisiko-kimiko eta biologikoetan eta, beraz, ur natural gisa kalifikatzeko proposamena egiten da. Halaber, gure ustez, "ASTEASU II" delakoak ez dauka "oso aldatua" kalifikazioa justifikatzen duen aldaketa hidromorfologikorik.

MASAS DE AGUA ARTIFICIALES O MUY MODIFICADAS ANEJOS 5.1 Y 5.2 DE LA NORMATIVA.-

La calificación de una masa de agua como muy modificada supone una reducción en los objetivos de calidad en los parámetros biológicos. De las masas contenidas en el "Anejo 5.1" "RIO URUMEA I y RIO LEIZARAN II" tienen potencial para alcanzar el buen estado en los aspecto físico-químico y biológico por lo que se propone que se les califique como aguas naturales. Asimismo, pensamos que "ASTEASU II" no tiene las alteraciones hidromorfológicas que justifiquen su calificación como muy modificada.

Lareo urtegiari kalifikazio hau ematen zaio "5.2 Eranskinean": ur masa artifiziala edo oso aldatua, lakuaren parekoa. Bestalde, "3.4 Eranskinean" adierazitakoaren arabera, lakuaren kategoriako ur masei buruzko erreferentziako baldintzen artean hauek daude:

(8) ur mailaren fluktuazio erregimena bat dator dinamika naturalarekin.

(9) ur mailak, kasu honetan, maila naturalaren % 2tik beherako fluktuazio antropogenikoak izaten ditu.

Lareo urtegian ez dira baldintza horiek betetzen, maila handiko fluktuazioa duen ustiapen erregimena jasaten baitu. Ondorioz, kalifikazio hau izango du: ur masa oso aldatua, ibaiaren parekoa.

En el "Anejo 5.2" se califica al embalse de Lareo como masa de agua artificial o muy modificada asimilable a lago. De acuerdo con el "Anejo 3.4" entre las condiciones de referencia en masas de agua de categoría lago están:

(8) el nivel de las aguas tiene un régimen de fluctuación acorde con la dinámica natural.

(9) el nivel de las aguas sufre fluctuaciones antropogénicas inferiores al 2% del nivel natural.

Estas condiciones no se cumplen en el embalse de Lareo ya que está sometido a un régimen de explotación con fluctuación de nivel importantes. En consecuencia, deberá figurar como masa de agua muy modificada asimilable a río.

UR MASEN INGURUMEN HELBURUAK. ARAUDIKO 7.1-7.5 ARTIKULUAK.-

Aurreko atalarekin bat etorriz, helburu aldaketa eskatzen dugu ur masa hauentzako:

- **LEIZARAN IBAIA II.-** Egoera ekologiko eta kimiko ona 2015ean.

- **ASTEASU IBAIA II.-** Egoera ekologiko eta kimiko ona 2015ean.

- **URUMEA IBAIA I.-** Egoera ekologiko eta kimiko ona 2015ean.

OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS MASAS DE AGUA. ARTÍCULOS 7.1 a 7.5 DE LA NORMATIVA.-

En coherencia con el apartado anterior solicitamos el cambio de objetivo a las masas de agua siguientes:

- **RIO LEIZARAN II** .- Buen estado ecológico y químico al 2015

- **RIO ASTEASU II .-** Buen estado ecológico y químico al 2015

- **RIO URUMEA I.-** Buen estado ecológico y químico al 2015

INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO ZUZENDARI NAGUSIA,
LA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS,

Izp./Fdo.: Ainhoa Iraola Apaolaza

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

COMPARATIVA CAUDALES ECOLÓGICOS

Caudales ecológicos

❑ Disposiciones de la Agencia Vasca del Agua:

- ✓ Caudales Ambientales Modulares
- ✓ Método hidrológico con tres periodos

Nombre	Aguas altas (diciembre a abril)	Aguas medias (mayo, junio y nov.)	Aguas bajas (julio a octubre)
Zikuñaga	4.383	2,771	1.120
Lastaola	4.265	2,657	1.039
Fagollaga	4.254	2.652	1.036
Ereñozu	4.229	2.642	1.031
Pikoaga	3.747	2.193	815
Santiago	3.662	2.118	790
Arranbide	3.412	1.907	694
Presa de Añarbe	1.190	644	247
By-pass Añarbe	937	467	171
Okilegi	831	409	144
Berdabio	702	337	116

Caudales ecológicos

❑ Determinaciones Proyecto Plan de DCO:

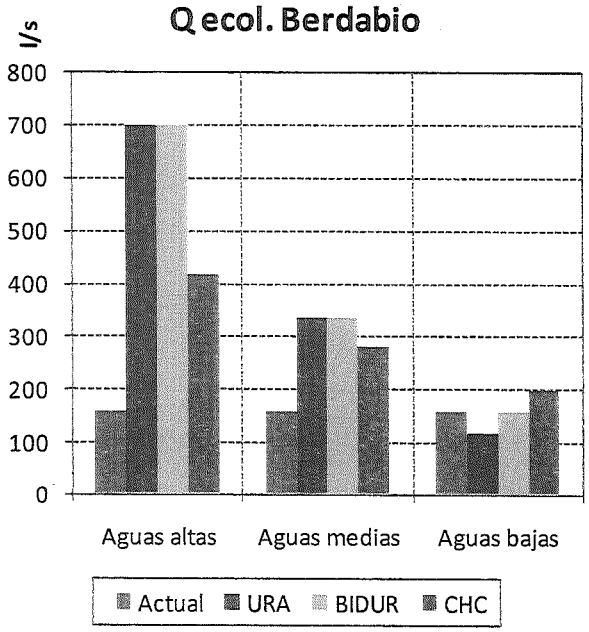
✓Combinación de métodos hidrológicos con IFIM

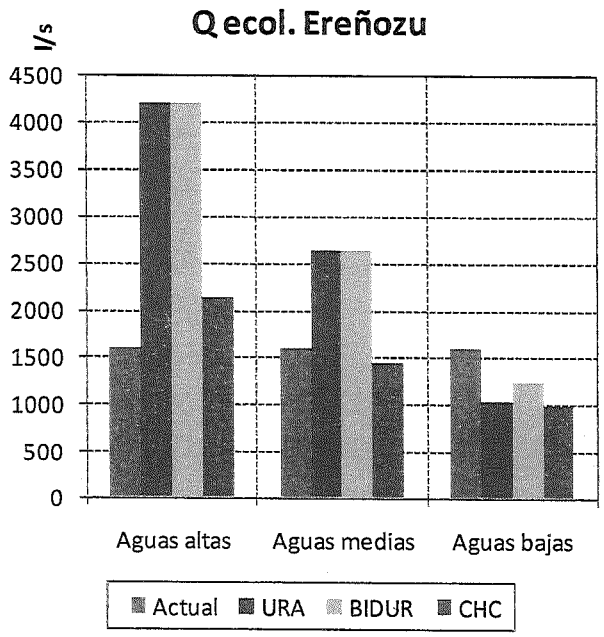
✓Series de aportaciones mensuales desagregadas (SIMPA-II)

Nombre	Aguas altas (enero a abril)	Aguas medias (mayo, junio y nov. y dic.)	Aguas bajas (julio a octubre)
Zikuñaga	2.244	1.527	1.054
Lastaola	2.160	1.470	1.010
Fagollaga	2.155	1.466	1.007
Ereñozu	2.141	1.457	1.001
Pikoaga	1.874	1.273	872
Santiago	1.800	1.222	836
Arranbide	1.679	1.139	778
Presa de Añarbe	0.690	470	330
By-pass Añarbe	550	370	260
Okilegi	497	334	235
Berdabio	419	282	198

Caudales ecológicos

❑ Comparativa:





Evaluación de los objetivos ambientales de nutrientes establecidos en la CAPV empleados para caracterizar el estado químico de las masas de agua

Autora:
Maddi Altuna, Licenciada en Ciencias Ambientales, DEA en Ecología Fundamental y Aplicada

Asesores:
Arturo Elosegi, Profesor Titular, UPV/EHU
Eugènia Martí, Científica Titular, Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)

Introducción

El objetivo de este informe es evaluar la idoneidad de los límites fijados como objetivo ambiental de los nutrientes (NH_4^+, NO_3^- y PO_4^{3-}) que se incluyen en el índice físico-químico general IFQ-R empleado para caracterizar el estado físico-químico de las masas de agua.

Para ello, por una parte, se han comparado los límites fijados en la CAPV con los establecidos por otras Agencias del Agua estatales y europeas, y por otra parte, se ha comparado el estado trófico, definido a partir de la concentración de clorofila, con las concentraciones de nutrientes existentes en los puntos de muestreo periódicos de la red fluvial gipuzkoana gestionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La Orden Ministerial relativa a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) indica que en el caso de las condiciones fisicoquímicas generales, los valores de cambio de clase de los diferentes indicadores se establecerán a partir de estudios que caractericen las condiciones naturales y relacionen, en cada tipo, las condiciones fisicoquímicas con los valores de cambio de clase de los indicadores biológicos. En ausencia de tales estudios, podrá considerarse como límite muy bueno/bueno el valor correspondiente a una desviación del 15% respecto a las condiciones de referencia, y como límite bueno/moderado el correspondiente a una desviación del 25%, siempre y cuando se encuentren dentro de los rangos que se establecen en la tabla 1.

Tabla 1. Umbrales maximos para establecer el límite del buen estado de algunos indicadores fisicoquimicos de los ríos.

Límite para el buen estado
Oxígeno disuelto > 5 mg l^{-1}
6 < pH < 9
DBO_5 < 6 mg l^{-1}
Amonio < 0.78 mg N-NH_4^+ l^{-1}
Nitrato < 5.6 mg N-NO_3^- l^{-1}
Fósforo total < 0.4 mg P l^{-1}

Según el Documento guía nº 10 (Ríos y lagos- Tipología, condiciones de referencia y sistemas de clasificación) generado por el Grupo de Trabajo 2.3 o grupo REFCOND de la Estrategia Común de Implementación de la Directiva 2000/60/CE, las condiciones de referencia se corresponden con un estado actual o pasado que se asocia a niveles de presión nulos o muy bajos, sin efectos debidos a urbanización, industrialización o agricultura intensiva y con mínimas modificaciones físico-químicas, hidromorfológicas y biológicas. En la CAPV las condiciones de referencia se han establecido como el promedio obtenido en las estaciones de referencia definidas como las estaciones de control situadas en masas de agua con escasa o nula intervención humana. Esta red de referencia se ha establecido a partir de la información recopilada desde el año 1993 en la "Red de Vigilancia de la Calidad de las Masas de Agua Superficial de la CAPV".

Comparativa de los límites de buen estado entre diferentes Agencias del Agua

En lo que respecta a la CAPV, los límites de calidad relativos a los nutrientes se han fijado siguiendo el criterio secundario establecido por la Orden ARM/2656/2008, según el cual en ausencia de estudios sobre la influencia de las condiciones fisicoquímicas sobre los indicadores biológicos, el límite bueno/moderado (cumplimiento del objetivo ambiental) será el correspondiente a una desviación del 25% respecto a las condiciones de referencia, siempre y cuando se encuentren dentro de los rangos establecidos en la tabla 1. Así pues, en la CAPV los límites establecidos son: 0.39 mg $N\text{-}NH_4^+$ l^{-1} para el amonio, 2.85 mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1} para el nitrato, y 0.23 mg $P\text{-}PO_4^{3-}$ l^{-1} para el fosfato.

En la tabla 2 se exponen algunos ejemplos de los límites del buen estado fijados para los nutrientes por diferentes Agencias del Agua estatales y europeas, y se comparan con los de la Agencia Vasca del Agua-URA. A continuación se comparan los resultados nutriente a nutriente:

Amonio

En las comunidades autonómicas de Andalucía y Cataluña, los límites del buen estado para el amonio se han fijado simplemente aplicando el umbral máximo permitido por la Orden ARM/2656/2008 (0.78 mg NH_4^+ l^{-1}) sin realizar ningún tipo de estudio sobre las condiciones de referencia de cada comunidad. Sin embargo, en la CAPV, Galicia y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) los límites establecidos son inferiores al umbral máximo permitido y se han establecido basándose en las condiciones de referencia observadas y aplicando un porcentaje de desviación sobre ellas (0.39 mg $N\text{-}NH_4^+$ l^{-1} en la CAPV y Galicia, y 0.31 mg $N\text{-}NH_4^+$ l^{-1} en la CHE). En lo que respecta a las agencias europeas del agua, en el Reino Unido y Francia, se han fijado unos rangos de variación de la concentración del amonio (que dependen de la alcalinidad del río) que van desde valores mínimos (entre 0.08 y 0.23 mg $N\text{-}NH_4^+$ l^{-1}) considerablemente inferiores al 0.39 fijado en la CAPV, hasta valores máximos cercanos a este valor.

Nitrato

En el caso del nitrato, en Andalucía, Cataluña y Portugal los límites del buen estado para el nitrato se han fijado aplicando directamente el umbral máximo permitido (5.66 mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1}). Sin embargo, en la CAPV, Galicia y la CHE se han establecido límites inferiores en base a un porcentaje de desviación respecto a las condiciones de referencia (2.85 mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1} en la CAPV y 4.52 mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1} en Galicia y la CHE). Finalmente, en Francia se ha establecido un rango de variación muy amplio (que varía en función de la alcalinidad) en el cual el límite inferior (2.26 mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1}) es ligeramente inferior al 2.85 fijado en la CAPV y el límite superior (11.2 mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1}) es cuatro veces superior al de la CAPV.

Fosfato y fósforo total

En la CAPV, Andalucía, Cataluña y Galicia, los límites del buen estado fijados para el fosfato y el fósforo total coinciden con el umbral máximo permitido por la Orden

ARM/2656/2008 (0.4 mg PT l^{-1}), y la única agencia estatal analizada que fija valores inferiores al umbral máximo ha sido la CHE que ha establecido valores de PT de 0.12 mg PT l^{-1}, y valores de fosfato de 0.1 mg $P\text{-}PO_4^{3-}$ l^{-1}. En cuanto a las Agencias del Agua europeas, tanto Reino Unido, Francia como Portugal han fijado unos rangos de variación, dependientes de la alcalinidad, para el fosfato y el fósforo total muy inferiores, que van desde 0.03 mg $P\text{-}PO_4^{3-}$ l^{-1} a 0.16 mg $P\text{-}PO_4^{3-}$ l^{-1}.

Tabla 2. Límites del buen estado para los nutrientes fijados por varias Agencias del Agua estatales y europeas. Los rangos de valores establecidos en el Reino Unido, Francia y Portugal dependen de la alcalinidad.

	$N\text{-}NH_4^+$ (ppm)	$N\text{-}NO_3^-$ (ppm)	$P\text{-}PO_4^{3-}$ (ppm)	PT (ppm)
Agencia Vasca del Agua (URA)	0.39	2.85	0.23	0.4
Agencia Andaluza del Agua	0.78	5.66	0.23	0.4
Agencia Catalana de l'Aigua	0.78	5.66	0.244	0.4
Augas de Galicia	0.39	4.52	0.23	0.4
Confederación Hidrográfica del Ebro	0.31	4.52	0.1	0.12
Reino Unido	0.23-0.47		0.05-0.12	
Francia	0.08-0.39	2.26-11.2	0.03-0.16	0.05-0.2
Portugal		5.66		0.1-0.13

Análisis del estado trófico y la concentración de nutrientes en los puntos de muestreo de la red fluvial Gipuzkoana

El segundo procedimiento utilizado para evaluar la adecuación de los límites del buen estado (cumplimiento del objetivo ambiental) relativos a los nutrientes en la CAPV ha sido el que primeramente se propone en la Orden Ministerial sobre Instrucción de Planificación Hidrológica: la realización de un estudio que caracterice las condiciones naturales y las relacione con las condiciones fisicoquímicas. Concretamente, se han analizado las condiciones tróficas y las concentraciones de nutrientes en la red de puntos de muestreo de Gipuzkoa a partir de datos del año 2009. Se ha escogido el 2009 porque se trata de uno de los años de menor variación de caudal estival de la última década, lo cual permite observar con mayor facilidad el crecimiento de perifiton como indicador de eutrofización.

El estado trófico de los puntos de muestreo de Guipuzkoa se ha evaluado a partir de la concentración de clorofila bentónica (mg m^{-2}) medida en verano del 2009, siguiendo la clasificación, ampliamente aceptada por la comunidad científica, de Dodds et al. (1998) desarrollada a partir de datos de más de 200 ríos templados de Norte América y Nueva Zelanda (Tabla 3).

Tabla 3. Estado trófico de los ríos determinado a partir de la concentración de clorofila bentónica (mg m^{-2}). Fuente: Dodds et al. (1998).

Clorofila bentónica (mg m^{-2})	Estado trófico
< 20	Oligotrofía
20-70	Mesotrofía
> 70	Eutrofía

En la figura 1 se resumen los parámetros químicos relacionados con la contaminación orgánica de los puntos de muestreo donde se han detectado indicios de eutrofia (caracterizada como mesotrofia o eutrofia) determinada a partir de la concentración de clorofila bentónica (mg m^{-2}) medida en verano del 2009. De un total de 64 puntos de muestreo analizados se han detectado problemas de eutrofía en 26 puntos. En dos de ellos no se dispone de datos químicos, por lo que no se han representado en la figura 1.

El promedio anual y estival de todos los puntos de muestreo donde se han detectado signos de eutrofización indica que existe una contaminación orgánica moderada definida a partir de una demanda química de oxígeno (DQO) de aproximadamente 11 mg O_2 l^{-1}. Asociada a esta contaminación, en verano hay cierto déficit de oxigenación con un valor medio de 7.7 mg O_2 l^{-1}, por tanto no se cumple el muy buen estado relativo a la oxigenación. El promedio de los valores estivales de amonio (0.36 mg $N\text{-}NH_4^+$ l^{-1}) es muy similar al objetivo ambiental fijado en la CAPV de 0.39 mg $N\text{-}NH_4^+$ l^{-1}. Sin embargo, las concentraciones medias estivales de nitrato y fosfato (1.41 mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1} y 0.11 mg $P\text{-}PO_4^{3-}$ l^{-1}) son de aproximadamente la mitad de los límites del buen estado establecidos en la CAPV (2.85 mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1} y 0.23 mg $P\text{-}PO_4^{3-}$ l^{-1}). Finalmente, el cociente entre las formas inorgánicas de nitrógeno (sumatorio de amonio y nitrato) y los fosfatos son siempre superiores al valor de 16, excepto en verano en 3 puntos, indicando que el fósforo es el nutriente limitante.

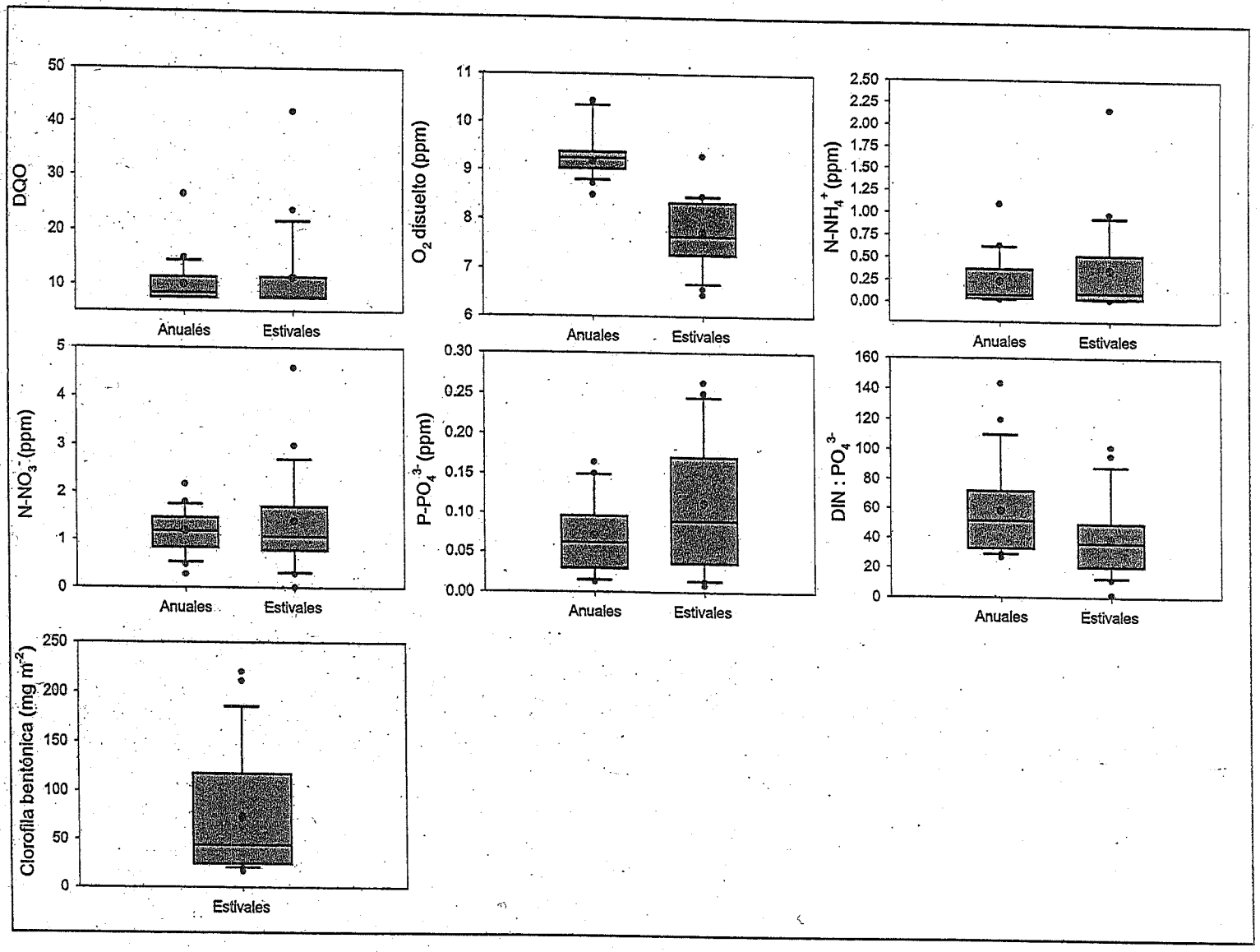


Figura 1: diagramas de caja de la concentración media anual y estival del 2009 de DQO, oxígeno disuelto, $N\text{-}NH_4^+$, $N\text{-}NO_3^-$, $P\text{-}PO_4^{3-}$, ratio DIN : $P\text{-}PO_4^{3-}$ y clorofila bentónica en los 24 puntos de muestreo de la red fluvial de Gipuzkoa donde se han detectado signos de eutrofización. El punto rojo representa la media aritmética de los datos.

Discusión

A raíz de la comparativa realizada entre diferentes Agencias del Agua estatales y europeas en relación a los límites del buen estado establecidos en la CAPV consideramos que:

- La opción de fijar el umbral máximo permitido por la Orden ARM/2656/2008 como límite del buen estado es poco adecuada, ya que no garantiza el cumplimiento del objetivo final, que es el de alcanzar el mejor estado ecológico posible en las masas de agua. Esta opción elude directamente el estudio de las concentraciones de nutrientes y de la calidad biológica de los ríos, limitándose simplemente a cumplir la legislación vigente. Este criterio es el empleado para todos los nutrientes por la Agencia Andaluza del Agua y la Agencia Catalana del Aigua, y en el caso del fosfato y el fósforo total la Agencia Vasca del Agua y Augas de Galicia también emplean este criterio de fijar como límite del buen estado el umbral máximo permitido por ley. Consideramos que ésta debería ser la última opción, y utilizarse sólo de manera provisional mientras no hubiera datos disponibles. En el caso de la CAPV hay datos suficientes para considerar dichos límites poco adecuados.

- Fijar rangos de variación de los límites del buen estado relativos a los nutrientes que varíen dependiendo de la alcalinidad puede ser una alternativa interesante a fijar límites fijos e independientes a la litología de las masas de agua. Este criterio se emplea en el Reino Unido, Francia y Portugal y va más acorde con el funcionamiento ecológico de los ríos.

- El límite de 0.39 ppm $N\text{-}NH_4^+$ establecido en la CAPV es similar al fijado por otras Agencias del Agua estatales (que se han basado en el estudio de las condiciones de referencia), y aunque está dentro del rango de valores fijados en Reino Unido y Francia, es entre 1.6 y 5.3 veces superior al valor mínimo de estos rangos de variación.

- El valor de cumplimiento del objetivo ambiental para el nitrato (2.85 mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1}) establecido en la CAPV es el más bajo fijado entre las Agencias del Agua estatales analizadas, y se encuentra dentro del rango de variación de 2.26-11.2 mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1} establecido por Francia.

- El límite del buen estado para los fosfatos (0.23 mg $P\text{-}PO_4^{3-}$ l^{-1}) fijado en la CAPV se ha establecido a partir del umbral máximo permitido por ley de PT (0.4 mg P l^{-1}), y es entre 1.4 y 7.6 veces superior a los valores establecidos por la CHE, Reino Unido, Francia y Portugal.

En cuanto al estudio sobre el estado trófico de los puntos de muestreo de la red fluvial de Gipuzkoa y las cargas de nutrientes asociadas:

- El límite del buen estado fijado para el amonio en la CAPV (0.39 mg $N\text{-}NH_4^+$ l^{-1}) es muy similar a la concentración estival media (0.36 mg $N\text{-}NH_4^+$ l^{-1}) medida en los puntos de muestreo donde se observan indicios de eutrofización.

- Sin embargo, las concentraciones medias estivales de nitrato y fosfato en los puntos de muestreo (1.41 mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1} y 0.11 mg $P\text{-}PO_4^{3-}$ l^{-1}) donde hay signos de eutrofización son aproximadamente la mitad de los límites establecidos como objetivo ambiental (2.85 mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1} y 0.23 mg $P\text{-}PO_4^{3-}$ l^{-1}), lo cual indica que existen problemas de eutrofización a

concentraciones muy inferiores de nitrato y fosfato que las establecidas como objetivo ambiental.

Conclusiones

1. El límite del buen estado de **amonio** (0.39 ppm $N\text{-}NH_4^+$) es muy similar al valor medio (0.36) a partir del cual se observan problemas asociados a la eutrofización en los ríos de Gipuzkoa; y es similar al fijado por otras agencias estatales pero considerablemente superior al valor mínimo establecido en Reino Unido y Francia. Por ello, se recomienda rebajarlo aproximadamente a 0.2 ppm $N\text{-}NH_4^+$.

2. El objetivo ambiental para el **nitrato** (2.85 ppm $N\text{-}NO_3^-$) es el más bajo de entre las Agencias del Agua estatales analizadas y se encuentra dentro de los rangos de valores europeos. Sin embargo, la concentración media de nitrato a partir del cual se han observado indicios de eutrofía en los puntos de muestreo de Gipuzkoa, es aproximadamente la mitad de este límite. Por ello, se recomienda rebajarlo aproximadamente a 1.5 ppm $N\text{-}NO_3^-$.

3. El límite de buen estado del **fosfato** y del **fósforo total** debería ser claramente rebajado porque, por una parte, las Agencias del Agua estatales y europeas que han establecido los límites en base a las condiciones de referencia analizadas marcan límites considerablemente inferiores al establecido en la CAPV (0.23 ppm $P\text{-}PO_4^{3-}$); y, por otro lado, porque las concentraciones medias estivales de fosfato a partir del cual se han detectado signos de eutrofización en la red fluvial gipuzkoana (0.11 ppm $P\text{-}PO_4^{3-}$) son aproximadamente la mitad del límite establecido como objetivo ambiental. Se sugiere establecer como objetivo ambiental una concentración aproximada de 0.1 ppm $P\text{-}PO_4^{3-}$.

Bibliografía

Agencia Andaluza del Agua (2008). Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Anejo VIII. Objetivos Medioambientales y Exenciones.

Agència Catalana del Aigua. (2010). Pla de Gestió de l'Aigua de Catalunya. Cap. 7: Objectius ambientals i estat del medi.

Agencia Vasca del Agua - URA (2008). Establecimiento de objetivos de calidad relativos a indicadores fisicoquímicos generales en los ríos de la CAPV. www.uragentzia.euskadi.net.

Augas de Galicia (2010). Plan Hidrológico – Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa. Anejo VIII. Objetivos medioambientales y exenciones.

Circulaire DCE 2005/12 nº14 du 28 juillet 2005 relative á la définiton du "bon état" et á la constitution des référentiels pour les eaux douces de surface (cours d'eau, plans d'eau), en application de la directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000, ainsi qu'á la démarche à adopter pendant la phase transitoire (2005-2007).

Confederación Hidrográfica del Ebro (2006). Ríos. Evaluación del estado de las masas de agua.

Departamento para el Desarrollo Sostenible. Diputación Foral de Gipuzkoa (2009). Estudio de la calidad del agua de los ríos de Gipuzkoa. Año 2009. Informe elaborado por Ekolur para la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Dodds WK, Jones JR & Welch EB. (1998). Suggested clasiffication of stream trophic state: distributions of temperate stream types by chlorophyll, total nitrogen and phosphorous. *Water Research* **32** (5), 1455-1462.

Instituto da água, I.P. (2009). Criterios para a classificaçao do estado das massas de agua superficiais. Rios e albufeiras.

ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.

Página web del Departamento para el Desarrollo Sostenible. Diputación Foral de Gipuzkoa (2006). http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/index.asp.

UK Technical Advisory Group on the Water Framework Directive (2008). UK Environmental Standards and Conditions (Phase 1).

Anexo 1. Concentración de nutrientes, contaminación orgánica y oxígeno disuelto anual y estival del año 2009 en los 24 puntos de muestreo en los que se han detectado indicios de eutrofización.

Anexo 1. Puntos de muestreo donde se han detectado indicios de eutrofización a partir de la concentración bentónica de clorofila (mg m^{-2}) y su información relativa a la concentración de nutrientes, contaminación orgánica y concentración de oxígeno disuelto. DQO: demanda química de oxígeno. NID: nitrógeno inorgánico disuelto.

Estación muestreo	Cuenca	Chl bentónica	Estado trófico	Datos anuales 2009							Datos estivales 2009						
				DQO	Oxigeno disuelto	$N\text{-}NH_4^+$	$N\text{-}NO_3^-$	NID	$P\text{-}PO_4^{3-}$	$NID:PO_4^{3-}$	DQO	Oxigeno disuelto	$N\text{-}NH_4^+$	$N\text{-}NO_3^-$	NID	$P\text{-}PO_4^{3-}$	$NID:PO_4^{3-}$
		(mg m^{-2})		(mg O_2 l^{-1})	(mg O_2 l^{-1})	(mg $N\text{-}NH_4^+$ l^{-1})	(mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1})	(mg N l^{-1})	(mg $P\text{-}PO_4^{3-}$ l^{-1})		(mg O_2 l^{-1})	(mg O_2 l^{-1})	(mg $N\text{-}NH_4^+$ l^{-1})	(mg $N\text{-}NO_3^-$ l^{-1})	(mg N l^{-1})	(mg $P\text{-}PO_4^{3-}$ l^{-1})	
BID00000	Bidasoa	106.9	Eutrofia		10.42	0.04	0.90	0.93	0.03	63			0.04	0.82	0.85	0.04	51
END10200	Bidasoa	44.0	Mesotrofia		10.45	0.03	0.69	0.71	0.03	51			0.03	0.01	0.03	0.01	2
OIA11000	Oiartzun	20.0	Mesotrofia	7.5	9.28	0.16	1.15	1.28	0.04	72	7.5	8.34	0.25	1.11	1.32	0.05	50
ORI11200	Oria	16.6	Eutrofia	11.3	10.28	0.06	1.00	1.04	0.08	29	7.50	9.30	0.03	1.04	1.06	0.13	18
ORI40300	Oria	26.9	Mesotrofia	8.4	9.06	0.39	1.26	1.58	0.06	56	10.13	6.91	0.71	1.24	1.82	0.09	31
ORI49000	Oria	43.5	Mesotrofia	8.8	9.01	0.28	1.25	1.48	0.07	46	9.4	7.08	0.44	1.10	1.46	0.11	21
ORI57400	Oria	30.2	Mesotrofia	8.38	9.06	0.38	1.18	1.49	0.10	35	10.13	6.57	0.60	1.07	1.55	0.17	14
ARA23700	Oria	121.6	Eutrofia	7.5	9.23	0.35	1.01	1.29	0.03	95	7.5	7.58	0.54	0.91	1.35	0.04	50
BER13200	Oria	220.7	Eutrofia	26.5	8.97	0.63	1.43	1.95	0.06	76	42	7.55	0.98	1.17	1.96	0.07	36
LEI41600	Oria	21.9	Mesotrofia	8.75	9.61	0.04	0.79	0.82	0.01	144	7.50	8.43	0.05	0.72	0.76	0.02	102
URO06900	Urola	21.8	Mesotrofia	7.5	8.89	0.02	0.49	0.51	0.02	65	7.5	8.26	0.02	0.36	0.38	0.03	26
URO09800	Urola	75.4	Mesotrofia	9.58	9.15	0.08	2.18	2.25	0.16	30	14.25	7.72	0.05	4.58	4.62	0.26	38
URO21100	Urola	24.4	Mesotrofia	8.15	9.37	0.06	1.80	1.86	0.13	33	7.50	8.04	0.13	2.99	3.09	0.17	39
URO35000	Urola	144.1	Eutrofia	7.5	9.39	0.03	1.19	1.21	0.04	68	7.5	8.10	0.03	1.02	1.05	0.05	45
URO39600	Urola	21.6	Mesotrofia	8.31	9.26	0.08	1.36	1.42	0.07	48	7.50	7.33	0.10	1.32	1.40	0.11	26
URO43800	Urola	160.0	Eutrofia	7.5	9.07	0.07	1.68	1.74	0.07	58	7.5	6.45	0.08	1.71	1.77	0.10	38
IED13700	Urola	62.5	Mesotrofia	7.5	9.32	0.03	1.09	1.11	0.02	120	7.5	8.03	0.02	0.78	0.80	0.04	46
DEB03100	Deba	28.2	Mesotrofia	7.5	9.49	0.03	0.28	0.30	0.01	49	7.5	8.46	0.02	0.28	0.30	0.01	77
DEB28700	Deba	88.1	Eutrofia	12.86	8.89	1.10	0.83	1.73	0.10	40	16.90	7.34	2.17	0.94	2.71	0.18	12
DEB38000	Deba	56.8	Mesotrofia	11.1	8.5	0.61	1.47	1.97	0.15	29	12.2	7.43	0.90	1.92	2.65	0.24	18
DEB44300	Deba	25.3	Mesotrofia	13.39	9.09	0.40	1.51	1.84	0.14	29	11.10	7.47	0.46	2.25	2.63	0.23	22
DEB48100	Deba	133.5	Eutrofia	11.54	8.72	0.27	1.57	1.78	0.15	27	9.20	6.90	0.24	2.28	2.47	0.25	20
OIN09500	Deba	44.1	Mesotrofia	7.5	9.32	0.06	0.60	0.65	0.02	82	7.5	8.39	0.05	0.75	0.79	0.02	96
UBE04000	Deba	211.4	Eutrofia	14.93	9.33	0.06		0.05			23.70	8.34	0.09		0.08		
Promedio estaciones		**72.9**	**Eutrofia**	**10.1**	**9.2**	**0.24**	**1.20**	**1.33**	**0.07**	**59**	**11.3**	**7.7**	**0.36**	**1.41**	**1.64**	**0.11**	**39**

AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. Esteban Andueza Sarratea, mayor de edad, domiciliado a efectos de notificación en C/ Blas de Lezo nº 28 1º C, 20305 Irún, provisto de D.N.I. nº 15235975Q, actuando para este acto en su calidad de Administrador Único de la mercantil Masustanegiko C.B., domiciliada también enBº Penadegui s/n, 20180 Oiartzun, y cuyo NIF es E20368825

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

A L E G A C I O N E S

1) <u>Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos</u>

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
241
REGISTRO DE ENTRADA 03/11/2011 OFICINA SAN SEBASTIAN 11:41:53
E00220110000083

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 136 de la constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art. 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

> ***"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación".*** Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) <u>Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.</u>

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles - petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

247

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,-hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de*

249

la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..) ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente *("contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

250

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.'

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

   Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que *«la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

   "/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) <u>Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.</u>

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

255

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) **Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos**

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) **Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales**

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada".

Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral "*De Facto*" de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

257

4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo en Irún el 31 de octubre de 2011.

Esteban Andueza Sarratea

Administrador Único



CORREO BILBAO SUC 5
02 NOV. 2011
48007194
Franqueo Pagado en Oficina
España

A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL

D. Jorge García-Egocheaga, mayor de edad, con DNI nº 78908991Q y domicilio a efecto de notificaciones en Bilbao, Alda Mazarredo 39 3ºC, actuando en nombre y representación de Hidroeléctrica del Cadagua, S.A. CIF A09105230, comparezco y

MANIFIESTO

1º - Que el pasado día 20 de octubre de 2011 presentamos ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Alegaciones a la **Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca del Cantábrico Oriental,** actualmente en fase de consulta

2º - que como adición a las alegaciones formuladas, y en relación con el art 34.3 deseamos suscribir los dictámenes jurídicos realizados por los profesores Eduardo García de Enterria y Andoni Ferré, que adjuntamos

3º - que deseamos anular una frase de nuestro anterior escrito que pudiera dar lugar a una interpretación errónea de lo que es nuestra línea argumental. La frase está en nuestra página 16, se refiere al 34.3 y dice así *"Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de las centrales de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio ningún inversor habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años. Dicho de otro modo, todos los actores que hemos invertido cuantiosas sumas en la adquisición y rehabilitación de minicentrales con posterioridad a 1985 lo hemos hecho bajo el amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas."* Con la anterior frase queríamos significar que desde un punto de vista empresarial, todo el marco legislativo ofrecía la estabilidad suficiente como para invertir y arriesgar. Pero desde un punto de vista jurídico, la frase puede ser interpretada de otro modo. Así, que les rogamos su eliminación del texto de nuestras alegaciones

Por todo lo expuesto,

SOLICITO que, en tiempo y forma, se tenga por presentado el presente escrito de alegaciones al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca del Cantábrico Oriental, y, en base a los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

En Bilbao, a 31de Octubre de 2011

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 03/11/2011
OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 12:33:07
E001201100011254

259

GARCÍA DE ENTERRÍA
ABOGADOS

García de Enterría Abogados S.C.P.
C.I.F. G-84600576

C/ Príncipe de Vergara, 62 - 28006 Madrid
Teléfono: 91 435 25 60 - Fax: 91 577 47 04
abogados@garciadeenterria.com
www.garciadeenterria.com

Dictamen emitido a requerimiento de la Asociación de Productores de Energías Renovables APPA sobre plazo de vigencia de 13 concesiones perpetuas de aprovechamientos hidroeléctricos.-

Junio de 2011.

Por la Asociación de Productores de Energías Renovables APPA, se solicita de este Letrado que emita Dictamen sobre los siguientes

ANTECEDENTES Y CONSULTA

Diversas Confederaciones Hidrográficas han iniciado expedientes de caducidad de diversas concesiones de aguas para aprovechamientos hidroeléctricos por la pretendida expiración del plazo concesional.

Los Organismos de cuenca entienden que pese a que las citadas concesiones fueron otorgadas, en su día y por así establecerlo la Ley vigente, a perpetuidad, debe entenderse que lo fueron por un plazo de 99 años, tomando como "dies a quo" la fecha de otorgamiento de la concesión.

La postura de los Organismos de Cuenca descansa en el Dictamen de la Abogacía del Estado, con la siguiente Conclusión:

> "Primera.- Como período máximo inicial de duración de la Concesión, de titularidad de xxxxxx., debe considerarse el de 99 años, entendiendo de ese

modo lo estipulado en la cláusula 8ª del título".

Dado que ese criterio implica la extinción de múltiples concesiones, se me consultan los siguientes extremos

1º Corrección de la doctrina del dictamen del Abogado del Estado.

2º Plazo de duración de las concesiones objeto de la consulta y *dies a quo* para su cómputo.

Aceptando el requerimiento formulado, este Letrado tiene el honor de emitir el siguiente

DICTAMEN

Primero.- El Dictamen de la Abogacía del Estado.-

Como se ha recogido en los Antecedentes, la actuación administrativa origen de esta consulta descansa en un informe de la Abogacía del Estado sobre la duración de

las concesiones de aprovechamientos del dominio público hidráulico con fines de producción de energía eléctrica.

Por ello es necesario examinar el contenido de ese Dictamen como punto de partida, para estudiar el verdadero régimen jurídico de las concesiones examinadas.

El Abogado del Estado, partiendo del hecho de que las concesiones de aguas para aprovechamientos industriales otorgadas al amparo de la Ley de Aguas de 1879 (que es el caso de las concesiones examinadas) lo eran a perpetuidad (art. 220), examina la corrección de esa concesión a perpetuidad llegando a la conclusión siguiente, a mi juicio verdaderamente sorprendente:

> "La conclusión a que nos lleva lo anterior, a nuestro juicio inexorablemente, es la imposibilidad jurídica de que por más que la Ley autorizase, en aquel tiempo, el aprovechamiento privativo de las aguas de dominio público por tiempo indefinido, a perpetuidad, el principio de rango superior que proclamaba ya entonces la imprescriptibilidad del dominio público natural, tildado de *res comunes omnicem*, operaba como limite temporal del derecho".

Con cita de una doctrina jurisprudencial del año 1997, que, como luego examinaremos, se refiere a supuestos de hecho muy distintos, y además apoyándose en

una Ley, muy posterior, la de Patrimonio del Estado de 1964 que estableció un límite temporal máximo de 99 años para las concesiones demandadas (art. 126), el Abogado del Estado concluye que ya:

> "Ha sido expuesta dentro del epígrafe anterior la motivación que nos permite concluir que ya formaba parte del régimen de los aprovechamiento de las aguas públicas anterior al otorgamiento de la concesión de la Central de xxxxx, en 1905, la regla superior obstativa de la adquisición de la propiedad y de los demás derechos reales sobre aquellos bienes demaniales por medio de la usucapión, por prolongada en el tiempo que hubiera sido la posesión del derecho, aún con buena fe y justo título. En suma, la jurisprudencia niega, a tenor de principios jurídicos arraigados en España desde la dominación romana, que se incorporaron a nuestra legislación de finales del siglo XIX, que fuera compatible con el ordenamiento jurídico el derecho perpetuo a usar y disfrutar privativamente del dominio público, estableciendo una frontera temporal -de derecho común- en coherencia con la doctrina del máximo de tres generaciones o de la prescripción inmemorial".

Con esos presupuestos, la línea argumental del dictamen es clara. Ya bajo el régimen de la Ley de Aguas de 1879 las concesiones tenían una duración máxima de 100 años:

> "Y tal duración posible, en el caso de las equivocas concesiones a perpetuidad quedó fijada por el derecho de la época, según la jurisprudencia, en momento anterior a que pudieran tener lugar los efectos propios de la prescripción adquisitiva por posesión inmemorial durante 100 años o más".

Por ello la Disposición Transitoria primera de la Ley de Aguas 29/1985, de 1 de enero de 1986, que declara la vigencia de las concesiones anteriores por un plazo máximo de 75 años a partir de su entrada en vigor, de no fijarse en el título otro menor, debe interpretarse en el sentido de que el plazo de 75 años no opera si es que la concesión no debiera quedar extinguida antes, computando el plazo máximo de 99 años desde que fue otorgada.

En definitiva, la conclusión del Abogado del Estado es que ninguna concesión puede tener una duración, contada desde su otorgamiento, superior a 99 años.

Segundo.- La duración de las concesiones demaniales estatales otorgadas al amparo de la Ley de Aguas de 1879. Inaplicación de la Ley de Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1964.-

Como se ha recogido en el apartado anterior, toda la argumentación del Abogado del Estado, descansa en una única afirmación. Pese a la afirmación de que las concesiones de la Ley de Aguas de 1879 se otorgaban a perpetuidad, debe entenderse

que su otorgamiento tenía el tope temporal de 99 años.

Esa afirmación descansa a su vez en la premisa de que ese tope temporal es consustancial con la propia naturaleza de la concesión demanial, por ser esencial para evitar la prescripción inmemorial, imposible por ser el dominio público imprescriptible.

A mi juicio, esas afirmaciones carecen totalmente de sentido y bastaría para acreditarlo con tener en cuenta que es una afirmación que se hace ahora, a principios del siglo XXI, cuando se ha admitido pacíficamente durante más de 100 años la posibilidad de concesiones perpetuas, sin que la perpetuidad afectase para nada al principio de imprescriptibilidad del dominio público. Aceptar la tesis de la Abogacía del Estado implicaría aceptar que todas las concesiones de aguas anteriores a la Ley de 13 de junio de 1879 de duración indefinida y que se respetan conforme a la Disposición General recogida en su art. 257 (es técnicamente una Disposición Transitoria), habrían quedado extinguidas hace tiempo, lo que habría impedido la aplicación de la Disposición Transitoria de la Ley de 1985. Y esto no ha ocurrido.

Pero además la conclusión del Abogado del Estado va contra la voluntad del

legislador y la doctrina tanto de nuestros Tribunales como científica. Incluso resulta contradicha por parte de la argumentación utilizada en su propio Dictamen. Veámoslo.

A) En primer lugar, la premisa de que el tope temporal de 99 años viene impuesta por la necesidad de evitar la prescripción inmemorial de 100 años, no se ajusta en absoluto a la realidad.

Se olvida que todo tipo de prescripción (y la inmemorial o centenaria no es nada más que un tipo de la misma) exige unos requisitos muy concretos, y particularmente la posesión a título de dueño (art. 1947 del Código Civil). Si no existe esa posesión a título de dueño no existe posesión que habilite para usucapir, debiendo recordarse que siempre que la posesión se tenga por otro título distinto, es necesario que el poseedor realice frente al propietario algún acto obstativo que acredite el cambio de concepto en que se posee, de forma que sólo ese acto es el "dies a quo" para el cómputo de plazo.

Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico, existen instituciones que por su naturaleza son perpetuas y no por ello afectan para nada al derecho de propiedad. El Código Civil, al regular los censos dispone en su art. 1608 que:

> "Es de naturaleza del censo que la cesión del capital o de la cosa inmueble sea perpetua o por tiempo indefinido".

No puede jurídicamente afirmarse que la perpetuidad implica la posibilidad de prescripción. Han existido derechos perpetuos parciales desde hace cientos de años y siguen existiendo, con regulación moderna (por ejemplo art. 330 y ss. de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña).

En relación a las concesiones demaniales, la doctrina, aún reconociendo que la tendencia del legislador a poner límites a la duración de las concesiones tiene su origen en la creencia de que por el trascurso del tiempo podrían los particulares adquirir definitivamente la titularidad de funciones públicas, si bien hoy el plazo funciona como una cláusula económica, ha matizado la influencia del plazo.

Así Mercedes LAFUENTE BENACHES, *La Concesión de dominio público*, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1988, pág. 76, dice:

> "La concesión de dominio público, límite temporal de la afectación al uso público de los bienes de dominio público, no desvirtúa los principios de "inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad". Los bienes de

> dominio público, después de concedidos, siguen bajo el régimen jurídico-público y se hallan fuera del comercio jurídico-privado. La Administración Pública, como quedó expuesto, otorga la concesión de dominio público sin perder la titularidad de los bienes concedidos. Consecuencia de ello es la necesidad de que la Administración autorice o apruebe cualquier operación realizada por el concesionario en virtud del derecho de concesión, con estas operaciones, no transmite ni grava el dominio público, sino su relación sobre el mismo. La Administración las vigila y si alguna de ellas pone en peligro la finalidad perseguida por la Administración, al otorgar la concesión, puede declarar la extinción de la concesión administrativa".

Nuestra jurisprudencia, -aparte de admitir la existencia de concesiones perpetuas y que la propia doctrina citada por el Abogado del Estado se refiere a supuestos de hecho posteriores a leyes que ya han fijado plazos máximos, como luego veremos-, aún reconocida la importancia del plazo, rechaza que la perpetuidad lleve consigo la posibilidad de prescripción.

Así la Sentencia de 8 de noviembre de 1991 rechaza las alegaciones de la Administración, en estos términos

> "En definitiva, no puede olvidarse que las concesiones administrativas son en nuestro Derecho bienes inmuebles a tenor del art. 334.10 del Código Civil, por lo que dicho carácter implica la posibilidad de inscripción en el Registro de la propiedad. No obstante es claro también que la concesión funeraria está sometida a fuertes restricciones dada la incomerciabilidad de esta clase de

bienes y la prohibición de que sean transmitidos a título oneroso.

Sin embargo, ello no es suficiente para enervar la validez en Derecho de la concesión a perpetuidad del enterramiento según la legislación vigente en la fecha en que dicha concesión fue otorgada. Tampoco puede admitirse, como alega el Ayuntamiento que entender válida una concesión a perpetuidad significa que se ha producido una enajenación del bien, pues el Ayuntamiento conserva íntegramente las facultades de policía mortuoria y, llegando el caso, podría aplicar la normativa vigente en materia de traslado de cementerios".

La perpetuidad no implica ni negar la incomerciabilidad de un bien de dominio público, ni su imprescriptibilidad. La Administración conserva todas sus prerrogativas, hallándose salvaguardada la regla de la imprescriptibilidad por medio del establecimiento de cánones concesionales, que correspondían a los antiguos cánones censales. Así lo ha reconocido la propia Administración y el Consejo de Estado. En la Sentencia de 7 de febrero de 1984, examinando la pervivencia de una concesión de marismas, cita un dictamen del Consejo de Estado en el que se atribuye al canon concesional la naturaleza del censo enfitéutico, de carácter perpetuo pero con el efecto de impedir la prescripción inmemorial.

Es más, incluso en la actualidad en que toda la normativa tanto general, como sectorial, establecen límites temporales, de facto pueden existir concesiones perpetuas,

dadas las posibilidades que recoge la vigente Ley de Patrimonio. Como dice Rafael FERNÁNDEZ ACEBEDO, *Concesiones Administrativas de Dominio Público*, Editorial Thomson-Civitas, Madrid 2007, pág. 286:

> "Importa llamar la atención, en último término, sobre el hecho de que, paradójicamente, la propia Ley del Patrimonio, en su artículo 137.4. i) por conexión con el 93.1, parece abrir una puerta para la vulneración del límite temporal máximo, toda vez que permite otorgar una nueva concesión por el procedimiento de adjudicación directa a favor del antiguo concesionario, sin otro requisito que la existencia de "razones excepcionales" que lo hagan conveniente. De facto queda abierta la posibilidad de que el concesionario se perpetúe en su posición de privilegio".

B) Por otra parte, no parece razonable pretender que debe prevalecer una concepción doctrinal, y además no aceptada unánimamente sobre la voluntad del legislador. Y eso es lo que hace el Dictamen que examinamos ("imposibilidad jurídica por más que la Ley lo autorizase").

Porque es totalmente claro que la voluntad del legislador fue permitir concesiones perpetuas y además adoptada con pleno conocimiento.

No puede olvidarse que en nuestra legislación histórica existieron concesiones

perpetuas y que la primera norma que estableció un límite temporal con carácter general fue la Ley de Obras Públicas de 13 de abril de 1877. Su art. 1° decía

> "Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores de este capítulo se otorgarán por noventa y nueve años a lo más, salvo los casos en que las leyes especiales de obras públicas establezcan mayor tiempo o que la concesión se otorgue por medio de una ley especial que así lo determine".

Se permitían ya las concesiones superiores a 99 años, lo que demuestra que la tesis del Abogado del Estado es insostenible, pero lo esencial es que esa norma ya estaba vigente cuando se promulgó la Ley de Aguas, que es de 13 de junio de 1879. El legislador, al regular las aguas, ya partía de la existencia general del límite temporal de 99 años, límite que respeta para determinadas concesiones (abastecimiento de poblaciones, art. 170, canales de navegación, art. 20.6), pero decide que otras concesiones sean perpetuas (riegos, viveros y concretamente las destinadas a aprovechamientos industriales, que es el caso, art. 220).

Ni que decir tiene que teniendo ambas leyes igual rango, la Ley de Aguas podía modificar la de Obras Públicas, aunque como se ve la respeta, pues ésta permitía

concesiones por plazo superior a los 99 años.

Si se tiene en cuenta la legislación local (y no podemos olvidar que el régimen concesional se refiere a todo el dominio público y no sólo al estatal), la cuestión es igualmente clara. Las limitaciones temporales se introducen, como veremos, por el Texto articulado de la Ley de Administración Local de 16 de diciembre de 1950.

C) No sólo el legislador, sino también la doctrina jurisprudencial ha admitido pacíficamente la existencia de concesiones perpetuas, aplicando la legislación vigente en el momento en que se otorgaron y la sectorial, con preferencia al límite temporal de la Ley de Obras Públicas, porque hay que tener en cuenta, lo que no hace el Abogado del Estado, la fecha de las concesiones examinadas.

Ya se ha recogido anteriormente la Sentencia de 8 de noviembre de 1991 que declara valida una concesión otorgada a perpetuidad, terminando el Considerando Segundo diciendo

> "En consecuencia, no pueden admitirse las alegaciones de la entidad local recurrente en el sentido de que en la fecha en que se otorgó la concesión no era

válido tal otorgamiento si se hacía a perpetuidad".

La misma Sentencia contempla, a mi juicio correctamente, la problemática, examinando la posible aplicación de las modificaciones en el Fundamento de Derecho Tercero:

"TERCERO.- Cuestión distinta es la relativa a las normas actualmente vigentes y a su aplicación en el caso de autos. Pues como es sabido tanto las normas estatales como las de régimen local consagran la prohibición de concesiones a perpetuidad, lo que está de acuerdo con las normas y criterio que, constituyen actualmente el régimen propio del dominio público.

Pero lo que resulta controvertido en este proceso, una vez desechada por el Tribunal de instancia la impugnación indirecta del Reglamento del Ayuntamiento de Valencia aplicable, es precisamente si la indicada legislación vigente puede aplicarse con carácter retroactivo a una concesión otorgada de forma válida en un momento anterior.

Respecto a este punto la Sala no puede acoger las alegaciones del Ayuntamiento en el sentido restrictivo en que interpreta la prohibición de irretroactividad que se contiene en el art. 9.3 de la Constitución Española. Pues dicho precepto alude claramente a la prohibición de que tengan carácter retroactivo las normas que afecten a derechos individuales, lo que no ha de entenderse en sentido restringido sino en el de que no pueden contravenirse los derechos subjetivos de los particulares".

Y concluye:

> "Por tanto, sin perjuicio de confirmar la declaración de la Sentencia apelada en el sentido de la validez de la normativa vigente, incluso la municipal de Valencia, debe concluirse que no es conforme a Derecho la aplicación retroactiva de dichas normas. En consecuencia procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada".

La Sentencia de 23 de marzo de 1972 reconoce que el criterio tradicional en materia de terrenos ganados al mar, era el de la de perpetuidad de la concesión ("principio sancionado por la jurisprudencia de todos los tiempos"), y afirma:

> "Que desde otra perspectiva sincrónica, la Ley de Obras Públicas de 13 de abril de 1877 regulaba ya, con carácter genérico, las concesiones de dominio público y de dominio del Estado, que habrían de otorgarse por noventa y nueve años a lo más, salvo los casos en que las Leyes especiales establecieran mayor tiempo (art. 101), norma coincidente sustancialmente con otra, también genérica, contenida en la Ley de Patrimonio del Estado (texto articulado mediante Decreto 1022/1964 de 15 de abril -R. 896 y 1024 y Ap. 51-66, 11098), según la cual en las concesiones o autorizaciones sobre el dominio público se incluirá necesariamente el plazo de duración, que no podrá exceder de noventa y nueve años, a no ser que las Leyes especiales señalasen otro menor, sin que en ningún caso puedan otorgarse por tiempo indefinido (art. 126), discrepancia con la trayectoria tradicional en materia de marismas cuya coexistencia durante más de ochenta años no planteó problema alguno, como revelan los numerosos dictámenes del Consejo de Estado favorables a la subsistencia del régimen específico, aun cuando el presente debate haya sido planteado en función de tal antinomia".

A continuación y sobre la base de la prevalencia de las normas especiales en la

materia, admite la perpetuidad de las concesiones:

> "Que ésta es más aparente que real y podría resolverse con un instrumental exclusivamente técnico, mediante el juego de criterios propios de la lógica jurídica, como la prevalencia de las normas especiales en la materia (aguas y puertos) sobre las genéricas que regulan el dominio público, si además se observa que una de aquéllas -la de Costas- es posterior a la de Patrimonio y ratifica el régimen tradicional para el saneamiento de las marismas".

En 1971 y pese a haberse ya promulgado la Ley de Patrimonio (de 1964), en la que basa su argumentación el Abogado del Estado, aplica la Ley de Puertos de 19 de enero de 1928 art. 51), reconociendo que el principio de perpetuidad como específico ha sido sancionado por la jurisprudencia y los dictámenes del Consejo de Estado.

La Sentencia de 7 de febrero de 1984 rechaza igualmente la aplicación de la Ley de Patrimonio de 1964, declarando la perpetuidad de una concesión de marismas otorgada en 1905, al amparo de la Ley de Puertos de 7 de marzo de 1889.

Vemos, pues, que también la doctrina jurisprudencial ha admitido la perpetuidad de concesiones otorgadas a perpetuidad, por permitirlo la legislación vigente cuando se otorgó.

D) El mismo criterio sigue la jurisprudencia que efectivamente ordena la aplicación de límites temporales a concesiones perpetuas, pues lo hace porque ya estaba vigente esa legislación cuando se produce el supuesto de hecho examinado.

La doctrina jurisprudencial es terminante al afirmar que el otorgamiento a perpetuidad de concesiones demaniales vulnerando los límites temporales establecidos por las leyes es nulo de pleno derecho, pero sólo cuando esa normativa es aplicable.

Así la Sentencia de 29 de abril de 1988, sobre un puesto en un mercado, rechaza la impugnación de un Reglamento de 1984 que establecía un plazo máximo, por estar ya vigente la normativa de régimen local y específicamente el Reglamento de Contratación que declaraba nulos los contratos por tiempo indefinido, declarando que la situación del recurrente era de precario, sin ningún derecho adquirido.

Igual criterio siguen las Sentencias de 11 de febrero de 1986 (sobre una concesión de un kiosco de 1963), de 10 de noviembre de 1987 (concesión de 1952), 20 de octubre de 1992 (concesión de 1962) 10 de noviembre de 1957. En todas ellas se rechaza la pretensión de perpetuidad de la concesión y se aplica el plazo máximo de 50

años previsto en el art. 163.1° de la Ley de Bases de Régimen Local, recordando que esa limitación ya aparecía (y estaba vigente desde 1951), en el art. 163-a) del Texto articulado de la Ley de Administración Local de 16 de diciembre de 1950. La Sentencia de 10 de noviembre de 1987 (la concesión era de 1952, anterior al Texto de 1955, pero posterior al de 1950) recuerda que es doctrina jurisprudencial la aplicación del plazo máximo.

Especial examen merece la Sentencia de 5 de mayo de 1993, pues demuestra con claridad la doctrina jurisprudencial sobre la materia. Se trata de una concesión para balneario otorgada el 26 de junio de 1883, para la que se solicita un cambio parcial de destino y uso. El Ministerio de Obras Públicas y de Urbanismo accede a la petición por Orden de 19 de junio de 1985, pero estableciendo un plazo de 20 años.

El interesado no pretende la perpetuidad de la concesión, admite la aplicación de la Ley del Patrimonio de 1964, que estableció el plazo máximo general de 99 años, pero considera que el plazo de 20 años es insuficiente, dadas las inversiones realizadas, mientras que la Administración considera la Orden adecuada.

La Sentencia rechaza la pretensión de que se anulase la condición sobre el plazo diciendo:

> "Resulta evidente que la pretensión que la parte apelante formuló en su escrito de demanda en la anterior instancia, de que se decretase la nulidad de la condición 2ª, relativa al plazo (lo que supondría si prosperase una concesión sin límite de duración), no puede ser aceptada por esta Sala, pues la propia parte apelante reconoce que la Ley de Patrimonio del Estado limita el plazo de las concesiones o autorizaciones sobre el dominio público a 99 años. Siendo, pues, incuestionable, la necesidad legal de la fijación de un plazo de duración de la concesión".

Es patente que la Sala no considera aplicable el plazo de 99 años a contar desde el otorgamiento de la concesión (que es lo que pretende el Abogado del Estado), puesto que la concesión habría caducado por expiración del plazo en 26 de junio de 1982, antes de la modificación.

Y no puede decirse que la Sala no contempla esa posibilidad porque no lo plantearon las partes. Recuérdese que el art. 43 de la Ley de la Jurisdicción vigente entonces obligaba a someter a las partes cualquier motivo susceptible de fundar el recurso o la oposición, lo que no hizo. Pero lo esencial es que la Sala estima parcialmente el recurso y modifica la Orden Ministerial, ampliando el plazo de 20 a 30

años.

La Sala, pues, de forma explícita, considera vigente la concesión, lo que evidencia que admite la perpetuidad de una concesión de 1883, y la inaplicación del plazo de 99 años de la Ley de Patrimonio a contar desde el otorgamiento de la concesión. Se aplica la Ley de Patrimonio a una modificación efectuada ya bajo la vigencia de la Ley.

D) La misma conclusión resulta de las Sentencias en que pretende basarse el Abogado del Estado si se analizan debidamente e incluso de sus propios términos.

Así la Sentencia de 2 de junio de 1997, en la que descansa toda su argumentación, efectivamente dice que existe un límite temporal a las concesiones a perpetuidad, límite de 99 años, extremo que hoy día no discute nadie, pero en ningún momento dice que ese plazo debe contarse desde la fecha de otorgamiento de la concesión. Es más el párrafo transcrito por la Abogacía del Estado comienza:

> "En cuanto al carácter perpetuo de la concesión, hemos de mantenerlo en el caso de autos por ésta nuestra Sentencia, toda vez que en la fecha en que se dicta el

reglamento municipal en 1909, así como la fecha en que se otorga el nicho por primera vez en 1935, no estaba claro en nuestro ordenamiento jurídico el carácter forzosamente limitado de las concesiones demaniales".

El supuesto de hecho examinado es una petición de cambio de titularidad, efectuada otorgada a perpetuidad, de un nicho de un cementerio efectivamente otorgado a perpetuidad, cambio autorizado por el Ayuntamiento por plazo concreto.

La Sala en el Fundamento Segundo, afirma:

"Desde luego hay que entender que no es conforme a derecho el acto administrativo municipal que, de forma incongruente respecto a la solicitud, limitó los derechos del particular aplicando con carácter retroactivo la normativa vigente. Ha de estarse a lo dispuesto en el Reglamento municipal vigente en la fecha de adquisición del nicho a perpetuidad, que desde luego era conforme con los reglamentos estatales, como demuestra que se admitió la adquisición valida a perpetuidad incluso hasta la fecha del pleno vigor de los mandatos del antes citado Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974. El solicitante tenía derecho por tanto a la transmisión de titularidad del nicho con el carácter de perpetuidad con el que fue adquirida".

Y a continuación añade:

"Así la adquisición del nicho a perpetuidad que implica ser titular de una concesión administrativa no supone que el enterramiento pueda utilizarse para

> fines distintos del primitivamente otorgado, es decir, la sepultura de la persona cuyos restos ocuparon inicialmente el nicho en cuestión. Por el contrario, puede validamente el ente municipal establecer unas limitaciones consistentes en la prohibición de enterramientos posteriores, a más del ejercicio de otras facultades que derivan de la titularidad del dominio público".

La Sala, por lo tanto, afirma que la concesión a perpetuidad era correcta, por permitirlo la legislación vigente, pero a actos posteriores debe aplicarse la legislación vigente en cada momento. En ningún momento se afirma, como entiende el Abogado del Estado, que es consustancial con la naturaleza de las concesiones la existencia de un límite temporal.

El mismo criterio siguen las demás Sentencias citadas (nota en pie de página) en el Dictamen que se examina (Sentencias de 14 de diciembre de 1998, 24 de noviembre de 2003, 26 de mayo de 2004), que examinan siempre, supuestos de cambio de titularidad, producidos en la actualidad cuando ya la legislación establecía límites temporales a la duración de las concesiones). La Sentencia de 14 de diciembre de 1998 es significativa en su justificación, que no es otra que la aplicación de la norma vigente en cada momento, afirmando:

> "En relación con lo que se acaba de indicar, hay que decir, siguiendo lo declarado por este Tribunal Supremo en su Sentencia de 24 de febrero de 1978, dictada al conocer de un supuesto similar al ahora enjuiciado, que el principio de que las normas nuevas no tiene aplicación a los hechos pasados sirve para proteger los efectos ya acontecidos de un hecho pasado, pero no para amparar los efectos que, aunque derivados de un hecho pasado, se producen bajo la vigencia de la nueva norma. En dicha Sentencia de 1987, en la que se estudia un caso de falta de acuerdo sobre la división de un panteón y la necesidad de que ante ello la Administración estableciese y definiese la distribución procedente, se indicó que se estaba ante un hecho complejo en el que no existe consumación hasta el final de la serie de actos o hechos que lo componen (fallecimiento del titular, acuerdos de división, o petición y decisión administrativa), por lo que no puede considerarse que existe consumación hasta que se alcanza el final, con lo que no hay problema de retroactividad o irretroactividad sino, sencillamente, aplicación de la normativa vigente en el momento de la consumación del total proceso. En el supuesto que ahora nos ocupa hay que resaltar que fue el 15 de diciembre de 1987, esto es, estando ya vigente la Ordenanza Municipal de que se trata, cuando se produjo la solicitud al Ayuntamiento en relación con el cambio de titularidad de los nichos en cuestión, solicitud que dio origen al acto administrativo impugnado en este proceso al no estar de acuerdo la recurrente de la primera instancia, hoy apelante, con lo acordado en el expresado acto administrativo por entender que la titularidad de los nichos en cuestión le correspondía a ella".

La razón de la desestimación de las pretensiones de los demandantes no es, pues, la aplicación retroactiva de las disposiciones de régimen local (ya se ha citado el Texto de 1950), sino, en la aplicación de la norma vigente cuando se pide el cambio de titularidad, la modificación de la concesión existente. Al contrario se reconoce y se respeta que las concesiones eran perpetuas hasta su modificación, y sin que además se

pronuncien en absoluto sobre el *dies a quo* para el cómputo del plazo máximo establecido en la cada caso.

E) Tampoco tienen, a mi juicio, virtualidad alguna los otros argumentos utilizados por el Abogado del Estado para mantener su tesis de que el plazo máximo de duración para las concesiones otorgadas a perpetuidad tiene un plazo de 99 años fijado por la Ley de Patrimonio del Estado contado desde el otorgamiento de la concesión.

1° En cuanto a la doctrina constitucional sobre la Ley de Aguas (Sentencia 227/1998) en nada confirma su tesis. Por supuesto, y nadie lo discute, que nuestra Constitución establece los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público (art. 132.1), principios incompatibles con la perpetuidad de las concesiones. Pero como principio constitucional es aplicable desde su vigencia, y además no prejuzga cual es la posible duración de las concesiones, lo que, por ser una cuestión de legalidad ordinaria queda a disposición del legislador. Pero sobre todo en ningún caso permite la aplicación de esos principios al año 1964, cuando se dictó la Ley de Patrimonio, como pretende el Abogado del Estado.

El único límite a la decisión del Legislador es que no se lesionen otros derechos fundamentales y, a estos efectos, es significativa al Sentencia constitucional citada y además en el párrafo que reproduce el Abogado del Estado. La fijación de un plazo viene impuesto por la Constitución, y el Tribunal al examinar las consecuencias de ese plazo, lo considera suficiente en estos términos.

> "Finalmente, de acuerdo con lo declarado en anteriores fundamentos, la fijación de la duración máxima de estos aprovechamientos en setenta y cinco años no es tampoco arbitraria ni engendra inseguridad jurídica, ya que, aun cuando pueda suponer una disminución de las expectativas de rentabilidad patrimonial originadas por situaciones creadas al amparo de la legislación anterior, este nuevo límite temporal es razonable y suficiente".

El Tribunal habla de un nuevo límite temporal, el previsto en la Ley de Aguas de 1985,y ese límite es el que considera constitucional.

La doctrina constitucional no avala, pues, en absoluto, la tesis de que en 1985 (fecha de la Ley de Aguas) ya tenían todas las concesiones un plazo máximo de duración de 99 años, desde su otorgamiento. Al contrario afirma que es constitucional el nuevo plazo de 75 años, desde la entrada en vigor de la nueva legislación.

Por lo demás no puede olvidarse, como hace el Abogado del Estado, la razón de esa declaración del Tribunal Constitucional. Se predicaba la inconstitucionalidad de la norma porque suprimía derechos adquiridos, en cuanto a derechos anteriores perpetuos, violación del principio de irretroactividad de las Leyes y de la garantía constitucional de la propiedad.

La Sentencia Constitucional reconoce que efectivamente se reducen derechos preexistentes y, por ello, admite que la Ley tiene efectos expropiatorios. Lo que entiende es que el mantenimiento durante un plazo de las concesiones anteriores es compensación suficiente para el daño producido, es suficiente valor de la expropiación. Lo mismo que ha declarado el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas en su conocida Sentencia 149/1991, de 4 de julio.

Pero todo ello implica admitir que las concesiones se regían por la legislación vigente cuando se otorgaron, y que las examinadas ahora eran perpetuas. De no serlo, sobraba compensar cualquier daño, pues bastaría dejar que perviviesen por el plazo de duración que, a juicio del Abogado del Estado, ya tenían.

La conclusión del Abogado del Estado de que es incompatible el régimen del dominio público hidráulico con un derecho concesional por encima incluso de 150 años (como dice), no sólo no tiene aval en la doctrina constitucional, sino que la contradice. Corresponde al legislador fijar el plazo y de la doctrina constitucional (nuevo plazo de 75 años) resulta que no es inconstitucional un posible plazo de 150 años. Podría discutirse por otras razones (por ejemplo, arbitrariedad) pero no por su naturaleza.

2º En cuanto a la cita de la Legislación de Costas, demuestra justamente lo contrario de lo que pretende el Abogado del Estado y así resulta de su afirmación:

> "En suma, en el Reglamento de 1989, sin haberlo previsto así la Ley de Costas textualmente, se acoge el criterio del plazo de 99 años como tope de duración de cualquier concesión, incluidas las otorgadas a las concesiones *ad perpetuam*, entendidas como otorgadas por 99 años como máximo, obedeció al manejo por el Poder Ejecutivo de los parámetros jurídicos del derecho común de las concesiones demaniales que han quedado anteriormente expuestos, respaldados en la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Según el Abogado del Estado, es el Reglamento de 1989 el que establece el plazo de 99 años y no la legislación de Patrimonio de 1964. No acaba de comprenderse la razón de que en el caso de las costas hay que tener en cuenta su normativa, y, en

cambio, en materia de aguas haya que aplicar la normativa general.

En todo caso, esa normativa lo que impone es computar los nuevos plazos "a contar desde la entrada en vigor de la Ley de Costas" (Disposición Transitoria 14-3 del Real Decreto 1471/1989).

Por otra parte, la jurisprudencia, aplicando la Ley de Costas 22/1988, de 28 de junio, en base a la aplicación de sus Disposiciones transitorias reconoce la pervivencia de las concesiones anteriores otorgadas a perpetuidad, pero que el título concesional permite vigilar el cumplimiento de las obligaciones y cargas concesionales y declarar, si procede, la extinción anticipada del título por incumplimiento del concesionario o ejercer las facultades de rescate. Así las Sentencias de 3 de junio y de 22 de septiembre de 2003 declaran caducadas concesiones por incumplimiento del concesionario.

Todo ello, por supuesto, con independencia de aquellos casos en que pidiéndose cambios de titularidad, y modificación de la concesión, deba aplicarse ya la nueva Ley (caso de la Sentencia de 25 de febrero de 2004).

F) En conclusión, parece claro a este Letrado, que la tesis del Abogado del Estado de que, por imperativo de la Ley de Patrimonio de 1964, el plazo máximo de toda concesión otorgada a perpetuidad es de 99 años, a contar desde la fecha de su otorgamiento, no sólo no está justificada, sino que contradice tanto la historia como la legislación y la doctrina de todo orden.

Tercero.- Aplicación de la Disposición Transitoria de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985.-

A) Como se ha expuesto anteriormente, no creo que pueda admitirse en derecho la tesis del Abogado del Estado de que el plazo máximo de duración de cualquier concesión sea el de 99 años, a contar desde su otorgamiento.

Pero además resulta contradictoria. Si se da a la Ley de 1964 un efecto derogatorio de la legislación anterior sectorial, la coherencia exigiría dar a la nueva Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 3 de diciembre de 2003 (que reduce el plazo máximo a 75 años) igual efecto derogatorio de la Ley de Aguas de 1985.

Pero sobre todo lo que, a mi juicio, carece de sentido, es que el plazo se compute desde la fecha de la concesión en las concesiones otorgadas antes de la entrada envigor de la Ley del Patrimonio de 1964. Es una afirmación que no resulta de la Ley de Patrimonio y contradice los principios elementales de irretroactividad de las normas recogida en la doctrina jurisprudencial ya citada y hoy garantizada constitucionalmente (art. 9.3 CE).

Aún admitiendo la aplicación de la Ley de Patrimonio de 1964: el plazo de 99 años, computado desde 1964, daría un plazo concesional hasta el año 2063, superior al que, a mi juicio, es el correcto.

B) A mi juicio, repito, la normativa aplicable es la sectorial; la específica recogida en la Ley de Aguas vigente, como resulta de todo lo expuesto al criticar el Dictamen del Abogado del Estado.

La duración de toda concesión es la establecida en su legislación especial y no en la legislación general y así lo reconoce pacíficamente la doctrina.

Es claro que existen o pueden existir concesiones por plazo superior al previsto en la Ley de Patrimonio y así R. FERNÁNDEZ ACEBO (obra citada pág. 284):

> "Sin embargo, también cabe interpretar que el verdadero contenido del artículo 93.3 consiste en una prohibición dirigida directamente a las normas especiales que ya no podrán establecer plazos superiores a los setenta y cinco años y ello sin perjuicio ni menoscabo de la aplicación prioritaria de dichas normas especiales. Habida cuenta del principio de la *lex posterior*, su efectividad no podrá alcanzar al legislador estatal que en cualquier momento podrá modificar, con carácter general o para un caso concreto, lo dispuesto en la Ley del Patrimonio, pues resulta obvio que el legislador no puede autolimitarse *pro futuro*".

El profesor LUCIANO PAREJO ALFONSO (Obra Colectiva, *Comentarios a la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Régimen de utilización de los bienes y derechos de dominio público*, Ed. Thomson-Civitas, Madrid 2004, pág. 455) dice al respecto:

> "d) La duración
>
> Es consustancial a la concesión, conforme al artículo 93.3 LPAP, serlo por tiempo determinado. Su otorgamiento sólo puede producirse legalmente, pues, en tales términos.
>
> El precepto legal pretende, además, fijar un plazo máximo de duración (75 años) vinculante -en defecto de otro menor establecido por legislación

especial- para cualquier acto de otorgamiento con independencia del bien demanial y la Administración de que se trate. Este propósito es evidente en su inciso final, que autoriza a las normas especiales que sean aplicables únicamente para fijar un plazo máximo menor. Establece así el legislador una regla con pretensión de imposible efectividad por entrar en contradicción frontal con el sistema de fuentes de la propia LPAP. Pues si, como también para las concesiones precisa el artículo 84.3 LPAP (de carácter básico), éstas se rigen en primer término por la legislación especial, siéndoles de aplicación la LPAP sólo en defecto o insuficiencia de aquélla, resulta impracticable que otra concreta norma del mismo texto legal, aunque sea también básica, pretenda tener posición distinta y preferente en el esquema de fuentes así dispuesto, concretamente la que proporciona prevalencia sobre la legislación especial.

Por esta decisiva razón y ya no únicamente por virtud del juego de los principios de *lex posterior* y *lex specialis*, el plazo máximo de duración fijado en la LPAP no constituye un verdadero límite a las Leyes específicas de tipos o concretos bienes demaniales, que continúan pudiendo disponer otro plazo distinto, sea mayor o menor. De lo que se sigue que su fijación no produce derogación alguna de aquellas de dichas Leyes que sean anteriores a la LPAP. No obstante, la fijación del plazo máximo debe considerarse que introduce un criterio general de policía demanial que los legisladores deberían atender en buena técnica legislativa".

C) Pues bien, los términos de la Disposición Transitoria Única 1 de la Ley de Aguas, no pueden ser más claros:

"Primera. 1. Quienes, conforme a la normativa que se deroga, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley establece,

durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor".

La nueva Ley de Aguas ha modificado la Ley de Aguas de 1879, dando a las concesiones perpetuas un plazo máximo de duración de 75 años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, venciendo el año 2061. El Tribunal Constitucional ha declarado que ese nuevo plazo es suficiente para que la Ley no tenga contenido expropiatorio (a pesar de haberse otorgado por tiempo indefinido o a perpetuidad).

La única excepción es que el título concesional establezca un plazo inferior a 75 años. Y se trata del título y no de una modificación que se presume efectuada en el mismo por una interpretación arbitraria de una Ley general y no especial que hace además una persona.

La interpretación literal del precepto (primera regla de interpretación art. 3.1 del Código Civil) no permite otra conclusión que la de que todas las concesiones otorgadas a perpetuidad vencen en 2061.

Por lo demás, aún cuando se pudiera pensar que efectivamente la Ley del

Patrimonio de 1964 había derogado la vieja Ley de Aguas (lo que sólo examinó para cubrir todas las posibilidades) no podría dudarse que dicha Ley de 1964 había sido derogada por la de Aguas de 1985. Como dice FERNÁNDEZ ACEBEDO, es obvio que el legislador no puede autolimitarse pro futuro y carece de sentido atribuir a la Ley de 1964 un carácter intocable.

En definitiva, la única norma a tener en cuenta es la Disposición Transitoria de la Ley de Aguas de 1985. Toda concesión cuyo título la otorgue a perpetuidad antes de su entrada en vigor, tiene un plazo de duración de 75 años desde esa entrada en vigor, plazo además que se estableció como fórmula para evitar el carácter expropiatorio de la Ley sobre esos derechos perpetuos, como ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional.

Por todo lo expuesto, el Letrado informante cree posible contestar a la consulta formulada mediante las siguientes

CONCLUSIONES

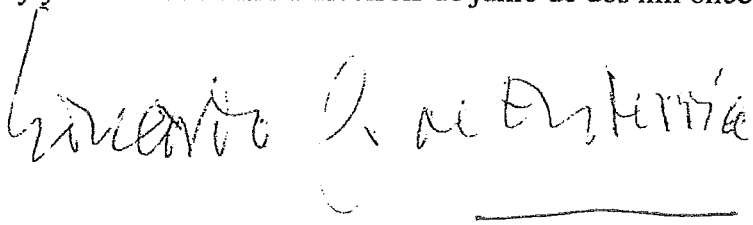
Primera.- A la vista de le evolución histórica y la doctrina tanto de los Tribunales como científica no parece que pueda mantenerse que todas las concesiones otorgadas a perpetuidad, otorgamiento autorizado por la legislación vigente en ese momento, llevasen implícita un plazo máximo de duración de 99 años, a contar desde la fecha de su otorgamiento.

Segunda.- En ningún caso parece admisible atribuir a la Ley de Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1964 el efecto de atribuir a las concesiones a perpetuidad existente un plazo máximo de duración de 99 años a partir de la fecha de su otorgamiento.

Tercero.- La única norma aplicable a las concesiones de aguas es la Disposición Transitoria Primera 1 de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985, por lo que a todas las concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos que fueron otorgados a perpetuidad, conforme a lo dispuesto en la vieja Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, debe reconocérseles un plazo de duración de 75 años, siendo el *dies a quo* el de la entrada

en vigor de la Ley de 1985, expirando el plazo, por tanto, el año 2061.

Tal es mi dictamen, que someto gustoso a cualquier otra opinión mejor fundada en Derecho y que doy y firmo en Madrid a dieciséis de junio de dos mil once.



DICTAMEN SOBRE CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL AÑO 1905

DR. ANTONI FERRÉ I MESTRE
BARCELONA – JUNIO 2011

ANTONI FERRÉ I MESTRE
Dr. en Derecho; Abogado.

- ÍNDICE -

I.-	**ANTECEDENTES**	**Pág. 3**
II.-	**ANÁLISIS DEL DICTAMEN DEL ABOGADO DEL ESTADO**	**Pág. 5**
III.-	**FUNDAMENTOS DE DERECHO**	**Pág. 9**
IV.-	**CONCLUSIONES**	**Pág. 26**
V.-	**BASES DE DATOS CONSULTADAS**	**Pág. 28**
VI.-	**SUSCRIPCIÓN**	**Pág. 28**

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

DICTAMEN SOBRE CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL AÑO 1905

D. ANTONI FERRÉ I MESTRE, Dr. en Derecho y Abogado, Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, con domicilio profesional en la calle Muntaner núm. 200, 5º 3ª, CP: 08036 – BARCELONA, ha sido contratado por la Asociación de Productores de Energías Renovables (A.P.P.A), con el objeto de elaborar un informe jurídico sobre una concesión de aprovechamiento de aguas del año 1905.

Entendemos que para una correcta precisión, y con la finalidad de delimitar el objeto del presente dictamen, es necesario proceder a concretar los siguientes

I.- ANTECEDENTES

Según la documentación consultada, la resultancia fáctica a considerar es la siguiente:

1.- Se parte de la concesión de aprovechamiento de aguas otorgada por resolución de 8 de junio de 1905, dictada por el Gobernador Civil, por la cual se otorgaba el citado aprovechamiento a perpetuidad y dejando a salvo el derecho de propiedad (cláusula 8).

299

2.- Por Resolución del Organismo de cuenca, de fecha de 7 de noviembre de 1988, confirmada por otra posterior, de 2 de enero de 1992, fue autorizada la más reciente de las trasferencias del aprovechamiento, quedando inscrito a nombre de su actual titular.

3.- La Confederación Hidrográfica, después de algunas indagaciones acerca del funcionamiento de la Central, acuerda, en fecha de 24 de julio de 2009, iniciar expediente de extinción de la concesión por las causas siguientes: a) fin del plazo concesional y b) interrupción continuada de la explotación del aprovechamiento, por periodo superior a 3 años. La resolución fue notificada al interesado con fecha de 2 de agosto de 2009 y publicada oficialmente.

En dicho expediente, y tras los trámites pertinentes, de reconocimiento del aprovechamiento hidroeléctrico, informe y audiencia del interesado, el Organismo propone declarar la extinción de la concesión, por expiración del plazo máximo de duración de la misma, descartando la causa de caducidad por interrupción prolongada e indebida de la explotación.

4.- La concesionaria se opone a la extinción de la concesión, propuesta por el órgano administrativo competente, afirmando su no conformidad al ordenamiento jurídico en atención a que el plazo máximo de duración de su derecho no ha finalizado según lo estipulado en el título concesional y en la normativa de aguas, además de hallarse en contradicción tal propuesta de extinción con

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

la autorización que le fue otorgada por el Organismo, con fecha de 4 de mayo de 2010, para realizar obras de reparación del muro del canal de alimentación de la Central, emplazado en zona de policía de cauces de la margen derecha del río.

II.- ANÁLISIS DEL DICTAMEN DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

La Abogacía del Estado ha sido conocedora del expediente administrativo de extinción de concesión de aguas que nos ocupa y, en su calidad, ha emitido Dictamen por el cual se informa sobre las consecuencias jurídicas que se desprenden. Por lo tanto, en este apartado vamos a efectuar un breve análisis de dicho dictamen. En este sentido, se destacarán sucintamente los argumentos jurídicos y conclusiones que de ellos se extraen:

I. RÉGIMEN ANTIGUO DE LA CONCESIÓN.

En este apartado el Abogado del Estado analiza el régimen antiguo de la concesión con la finalidad de acotar naturaleza jurídica de la concesión. Así, sobre la base de lo establecido en la Ley General de Obras Públicas de 1877, de la Ley de Aguas de 1879, el Código Civil de 1889 y la Ley de Patrimonio del Estado de 1964, así como la jurisprudencia relacionada, descarta la posibilidad que las concesiones constituidas a perpetuidad puedan ser objeto de prescripción por haber sido establecidas sobre bienes pertenecientes al dominio público. De igual manera, niega el carácter perpetuo de la concesión recordando que el artículo 196 de la Ley de Patrimonio del Estado de 1964 impuso el límite temporal de 99 años para las concesiones demaniales,

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

prohibiéndose su otorgamiento por período superior o con carácter indefinido.

II. RÉGIMEN VIGENTE DE LA CONCESIÓN.

En este apartado la Abogacía del Estado inicia su fundamentación jurídica reiterando la imposibilidad de adquirir la propiedad de bienes demaniales mediante el instituto de la usucapión así como el uso y disfrute privativo *ad eternum*. Todo ello, sobre el prisma de la Constitución Española cuyo artículo 132 proclama el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los bienes de dominio público.

La Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto, sometida al control del Tribunal Constitucional (STC 227/1988), estableció un plazo máximo de 75 años para las concesiones de aprovechamientos hidráulicos, con posibilidad de una prórroga por 10 años más de forma excepcional. Así pues, tanto la citada Ley de Aguas de 1985 como el texto refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, contienen una Disposición Transitoria Primera relativa a los derechos adquiridos con el antiguo régimen.

Dicho esto, el Abogado del Estado acota la problemática jurídica en la diferente interpretación que las partes hacen de la nueva regulación. Así, la Administración entiende que debe operar la prescripción inmemorial y por tanto la concesión debe entenderse extinguida, mientras que la concesionaria defiende su plena vigencia hasta un máximo de 75 años a computar desde la entrada en vigor de la Ley 29/1985.

III. EXAMEN DE LA CONCESIÓN. ALCANCE DE LOS DISPUESTO EN LA CLÁUSULA S- DEL TÍTULO.

De entrada, en este apartado la Abogacía del Estado considera correcta la interpretación realizada por el Organismo de cuenca,

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

coincidente con el dictamen que la misma emitió en fecha de 16 de abril de 2001, basado en los siguientes motivos:

1° La concesión administrativa de fecha de 8 de junio de 1905 lo fue para uso privativo del dominio público con fines industriales, por tiempo ilimitado, pero con expresa reserva del derecho de la propiedad. Sin embargo con la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo la citada concesión debe entenderse limitada en el tiempo además de seguir poseyendo todas las particularidades de los bienes demaniales.

2° La correcta interpretación de la regulación contenida en la Ley de Aguas de 1985 tiende a la extinción de todas las concesiones antiguas una vez transcurridos 75 años. En modo alguno debe interpretarse como la posibilidad de ampliar las concesiones vigentes por ese plazo si ya hubieran transcurrido los citados 75 años desde su otorgamiento.

3° Sobre todo a partir de la Ley del Patrimonio del Estado de 1964 debe entenderse la firme voluntad del legislador de limitar temporalmente las concesiones administrativas sobre el dominio público, concretando un plazo máximo de 99 años. Las legislaciones posteriores adoptan este criterio de restrictivo de la temporalidad, por todas la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 22/1988, de Costas como su Reglamento de desarrollo contenido en el Real Decreto 1471/1989.

Es más la citada Ley 22/1988, de Costas, limita las concesiones del dominio público marítimo-terrestre a un plazo máximo de 30 años y, respecto de las declaradas a

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

perpetuidad, su Reglamento de desarrollo las limita a 99 años

En base a ello, la concesión constituida en el año 1905, a entender de la Abogacía del Estado, debería entenderse finalizada en el año 2004.

IV. ANÁLISIS DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA CONCESIÓN.

En este apartado la Abogacía del Estado analiza dos hitos temporales importantes. Por un lado que el expediente de extinción de la concesión se incoara en fecha de 24 de julio de 2009, esto es poco más de cuatro años después del plazo máximo de duración de la misma, y que a su vez en fecha de 4 de mayo de 2010 se emitiera autorización para que la concesionaria ejecutara obras de reparación en las instalaciones objeto de la concesión.

A la vista de lo anterior, debe entenderse que opera la posibilidad de prórroga contenida en el artículo 59.6 del RDL 1/2001, de 20 de julio, otorgada por la Administración de forma tácita con la finalidad del que el concesionario amortice las obras realizadas, sin sobrepasar en ningún caso el límite de 10 años, sumados al plazo máximo original.

CONCLUSIONES

Primera.- La cláusula a perpetuidad de la concesión debe entenderse por plazo máximo de 99 años.

Segundo.- El plazo máximo original de la concesión debe entenderse prorrogado por el plazo el máximo de 10 años con la finalidad de que amortice las obras recientemente realizadas.

Tercero.- Decretar el archivo del expediente de extinción de la concesión. **304**

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

El plazo de duración de la concesión se antoja el punto discrepante entre el concesionario y la Administración, siendo el verdadero caballo de batalla, por cuanto los plazos que de una u otra interpretación de normativa aplicable y jurisprudencia existente en la materia harán prolongar más o menos en el tiempo la concesión administrativa en su día otorgada allá por los albores del siglo XX.

Así pues, vaya por delante que el firmante discrepa de la interpretación realizada en este punto por la Abogacía del Estado en el dictamen analizado en el apartado anterior. Y esto es así, tal y como fundamentaremos seguidamente en las próximas líneas, con la aplicación escrupulosa de la normativa específica en la materia, la jurisprudencia recaída en la misma, así como el resto del ordenamiento jurídico tendente a iluminar cualquier cuestión jurídica a que le interpelemos.

I.- NATURALEZA DE LOS BIENES OBJETO DE LA CONCESIÓN

En el dictamen elaborado por la Abogacía del Estado los bienes objeto de la concesión son considerados como bienes demaniales y por lo tanto su propia naturaleza los hace inalienables, imprescriptibles e inembargables.

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

En este punto concreto el firmante no puede más que compartir la tesis sostenida por el Abogado del Estado por la cual el mero transcurso del tiempo no es título suficiente para que, en el presente caso, opere el instituto de la prescripción adquisitiva, por cuanto ello equivaldría a la traslación del dominio del bien objeto de la concesión.

II.- PLAZO DE DURACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE

El punto de partida debemos iniciarlo en la Ley de Aguas de 1879, cuyo artículo 220 establecía de forma expresa que las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas para establecimientos industriales se otorgaban a perpetuidad salvo que por motivo de dicha actividad el agua se tornara nociva o insalubre en cuyo caso se decretaría la caducidad de la concesión, sin derecho a indemnización alguna.

Vemos por tanto, como era la propia legislación aplicable en el momento de constitución de la concesión la que contemplaba de forma expresa la necesidad de constituir las concesiones de aguas a perpetuidad. Sin embargo, las legislaciones posteriores que incidían directamente en las concesiones administrativas tendieron a la limitación temporal de las mismas y a la fijación de un régimen transitorio para todas aquellas constituidas al abrigo de concepciones más laxas, en cuanto a la temporalidad de las mismas.

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

Fue la Ley del Patrimonio del Estado, aprobada por el Decreto 1022/1964, de 15 de abril (vigente hasta el 4 de febrero de 2004), la que estableció en su artículo 126 una limitación temporal de todas las concesiones o autorizaciones sobre el dominio público, al disponer la necesidad de que éstas contemplaran de forma expresa el plazo por el cual se constituían sin que éste pudiera, en ningún caso, sobrepasar los 99 años. Por lo tanto, observamos como la norma general limitó la posibilidad de establecer plazos indefinidos al establecer una obligación de concreción de término así como un plazo máximo de concesión.

Sin embargo, la normativa específica posterior en materia de aguas fue más allá al decretar un techo temporal mucho menor. Así, la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (vigente hasta el 25 de julio de 2001), fijó el plazo máximo de las concesiones administrativas de aguas en 75 años según dispuso el artículo 57.4, si bien el apartado sexto de dicho artículo estableció la posibilidad de prorrogar el plazo, hasta un máximo de 10 años, con el fin de amortizar las obras realizadas para su normal utilización. No puede obviarse que este Ley de Aguas de 1985 derogó de forma expresa la Ley de Aguas de 1879. No obstante esta nueva disposición normativa fue lo suficientemente previsora como para establecer un régimen transitorio expreso para todas aquellas situaciones jurídicas creadas al amparo de la ley decimonónica. Entre ellas encontramos la Disposición Transitoria Primera cuyo contenido textual es el siguiente:

"DTª Primera. 1. Quienes, conforme a la normativa que se deroga, fueran titulares de aprovechamientos de aguas

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia ley establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor."

A la vista de esta DTª Primera de la Ley de Aguas se evidencia de forma clara y meridiana el ánimo de legislador de, por un lado, mantener las situaciones existentes creadas por la legislación derogada y, por otro, establecer un plazo de extinción de las mismas concretado en 75 años. Con ello, podemos afirmar que la concesión de aguas que nos ocupa tiene total vigencia en el momento en que esta norma es publicada y, con ello, legitimada para acogerse a la regulación contenida en esta DTª Primera.

Sin embargo, la interpretación que de esta DTª Primera hace el Abogado del Estado es aquella por la cual las concesiones reguladas por el régimen anterior deberán entenderse extinguidas pasados 75 años desde su entrada en vigor, si bien aquellas que no tienen plazo expreso establecido, como sucede en el caso que nos ocupa, debe entenderse de aplicación el plazo general de 99 años recogido en la Ley de Patrimonio del Estado de 1964.

Esta interpretación realizada por el Abogado del Estado, no compartida por el autor del presente dictamen, pretende ser apoyada por normativa no aplicable al caso que nos ocupa como la Ley 22/1988, de Costas (y su Reglamento de desarrollo contenido

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

en el Real Decreto 1471/1989). Es evidente, que sendas disposiciones, al igual que hace la Ley de Aguas, contienen una regulación específica sobre dominio público. Sin embargo, los bienes demaniales que cada una de estas leyes tratan son muy diferentes por más que pretendan buscarse similitudes. Así, lo ha entendido la propia Unión Europa con el ultimátum dado a nuestro Estado respecto a las mínimas políticas de protección costera que hasta la fecha había desarrollado. Es innegable que no son del mismo tipo las concesiones y derechos de aprovechamiento que particulares y empresas tienen en la zona marítimo-terrestre que la concesión de aguas que tiene una empresa en el dominio público hidráulico cuya finalidad es generar energía eléctrica. Por esta razón los plazos máximos establecidos en una y otra legislación son tan diferentes y, en cualquier caso, impiden su aplicación analógica. No existe identidad de razón suficiente como para reclamar dicha aplicación.

III.- SENTENCIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM. 227/1988, DE 29 DE NOVIEMBRE

Este razonamiento anterior vertido por el Letrado de la Administración en su dictamen intenta apoyarlo con la ayuda de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional núm. 227/1988, de 29 de noviembre, en cuyo Fundamento Jurídico Onceavo se aborda la regulación contenida en la citada DTª Primera. En realidad, de la simple lectura de la citada sentencia y, más concretamente de su FJº 11, podemos constatar que no estamos en presencia de una cita jurisprudencial que apoye sus razonamientos. Y es que la sentencia invocada de contrario tuvo

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

por finalidad, entre otras, el sometimiento de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, al prisma constitucional. Se buscaba con ello la aseveración de constitucionalidad de algunos preceptos de la norma legal al entender quienes recurrían que se vulneraban directamente disposiciones de la Carta Magna, como los artículos 9.3, 33 y 81.1 CE. Concretamente, el artículo 33 de la Constitución es tratado en el invocado FJº 11 al aplicarlo directamente sobre las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda y Tercera de la Ley impugnada, al entender que éstas podían vulnerar las garantías del derecho de propiedad privada y de los derechos patrimoniales salvaguardados en el precepto constitucional.

Respecto de la DTª Primera, en lo que aquí nos interesa, esto es el nuevo plazo máximo de 75 años para todos los derechos de aprovechamiento de aguas públicas ganados con la legislación anterior, el FJº 11 considera que dicha Disposición transitoria posee los suficientes visos de constitucionalidad como para no ser expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. Ello es debido a que, si bien es cierto que la fijación de un nuevo plazo de duración máxima de los aprovechamientos afecta directamente al contenido esencial de esos derechos, no es menos cierto que la simple modificación del elemento temporal no es *per se* motivo suficiente para desvirtuar su contenido esencial. En palabras del propio Tribunal Constitucional: *"la limitación temporal de tales aprovechamientos privativos no es una privación de derechos, sino nueva regulación de los mismos que no incide en su contenido esencial"*. Por ello, la fijación del plazo máximo de los aprovechamientos en 75 años no puede considerarse ni arbitraria ni generadora de inseguridad jurídica, más al contrario debe verse en ésta una decisión razonable y que bien puede ser suficiente

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

para amortizar las obras necesarias para la normal utilización de la concesión.

Dicho esto debemos concluir en lo siguiente: la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 227/1988, de 29 de noviembre, y en concreto su Fundamento Jurídico 11°, declara únicamente la plena constitucionalidad del nuevo plazo de 75 años de duración máxima fijado en la DTª Primera de la Ley de Aguas de 1985, para todos los derechos de aprovechamiento de aguas públicas ganados con anterioridad, sin que en ningún apartado de la sentencia constitucional se aborde expresamente la problemática aquí debatida sobre el *dies a quo* y el *dies ad quem*, del cómputo de estos 75 años, en las concesiones con cláusulas a perpetuidad. Por lo tanto, no puede subsumirse de la citada sentencia, como pretende la Abogacía del Estado, la existencia de un pronunciamiento constitucional sobre el cómputo del plazo inicial y el plazo final de las concesiones de aprovechamiento de aguas que se establecieron a perpetuidad de acuerdo con la legislación anterior.

IV.- LAS CLÁUSULAS A PERPETUIDAD Y LA RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS

Las cláusulas a perpetuidad o los plazos indefinidos han estado presentes en muchos de los contratos públicos y privados celebrados hasta el siglo pasado. Fue en este último siglo donde la mentalidad jurídica de los operadores fue modulándose de tal manera que la continuidad de plazos indelebles se antojó incompatible con los nuevos idearios. Así se fue reflejando poco a

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

poco en las diferentes normas legales que iban surgiendo al amparo de esta nueva mentalidad por cuanto todas empezaron a: establecer la obligación de acotar en el tiempo la vigencia de los nuevos negocios jurídicos; fijar plazos máximos para que éstos desplegaran sus efectos; posibilitar la existencia de prórrogas pero por tiempos determinados y, sobre todo, el reconocimiento de regímenes transitorios para todos aquellos negocios jurídicos celebrados al amparo de la legislación que recién se derogaba.

Este periodo de transición de una concepción a otra ha servido para que, a día de hoy, ya nadie niegue que las cláusulas a perpetuidad o por tiempo indefinido adolecen de nulidad si se plasman en contratos de naturaleza pública o privada celebrados en nuestros días. Sin embargo, respecto de las cláusulas existentes por este motivo en contratos celebrados en base a legislaciones anteriores que sí las permitían se entenderá que siguen desplegando sus efectos en tanto en cuanto no se produzca la caducidad de las mismas por el transcurso de los nuevos plazos fijados al efecto. Por lo tanto, sobre estas últimas debemos entender que conservan plena vigencia, si bien se dirigen irremediablemente hacia su extinción.

Como ya apuntamos con anterioridad, leyes como la Ley de Patrimonio del Estado de 1964 han servido para zanjar el debate de la limitación temporal de las concesiones o autorizaciones sobre el dominio público, por cuanto además de establecer la obligación de incluir un plazo concreto niega la posibilidad de que éste sobrepase los 99 años. No obstante, este plazo podrá ser incluso más reducido por las legislaciones especiales como así sucede con

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

la Ley de Aguas de 1985 al rebajarlo a 75 años. Aún así, lo cierto es que, a diferencia de esta última, la Ley de Patrimonio no previó un régimen transitorio para todas aquellas concesiones u autorizaciones gestadas al amparo de la normativa anterior.

Con ello, quiere hacerse expresa mención a la consideración efectuada por el Abogado del Estado en su dictamen al considerar el plazo máximo de 99 años fijado en la citada Ley como el plazo sustitutorio de la cláusula a perpetuidad plasmada en la concesión que nos ocupa. Es decir, según este razonamiento plasmado en su dictamen, la Abogacía del Estado entiende que la simple aprobación de la Ley de Patrimonio de 1964 supone que la concesión de aprovechamiento de aguas decretada por el Gobernador Civil, en resolución de 8 de junio de 1905, debe entenderse caducada en el año 2004, al aplicar los 99 años de plazo máximo establecidos su artículo 126 para cualquier concesión o autorización sobre el dominio público.

Es evidente que este razonamiento del Abogado del Estado está partiendo de dos premisas de las que discrepamos: de una parte, la preferencia de la ley general sobre la especial, lo cual constituye una afirmación difícil de sostener, como prueba claramente que ningún precepto de leyes de propiedades especiales deban entenderse derogadas por dicha ley general (díganos, si no, un único supuesto); y, de otra parte, la premisa de la retroactividad de las normas puesto que, el nuevo plazo de 99 años además de aplicarse a las concesiones de dominio público de nueva creación, pretende que también se aplique a todas aquellas concesiones vigentes en el momento de su entrada en vigor. En este punto

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

debemos detenernos en lo regulado por el artículo 2.3 del Código Civil y el artículo 9.3 de la Constitución Española. El primero establece que las Leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario, mientras que el segundo establece que la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

En el presente caso la Ley de Patrimonio del Estado de 1964 no contempla de forma expresa la aplicación retroactiva del nuevo plazo de 99 años a las concesiones anteriores a su entrada en vigor. Además, es innegable que la aplicación de dicho plazo con efectos retroactivos restringe un derecho individual que tiene el concesionario respecto del aprovechamiento de agua otorgado por la concesión. En consecuencia, podemos afirmar que la aplicación retroactiva de esta norma supone la vulneración de lo estipulado en el artículo 2.3 del Código Civil y el artículo 9.3 de la Constitución Española. En apoyo de esta tesis existe una jurisprudencia amplia y generalizada por tratarse de una materia ampliamente desarrollada por nuestros tribunales. No obstante, nos vamos a referir únicamente a la ya comentada Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional núm. 227/1988, de 29 de noviembre, puesto que precisamente entró a valorar este supuesto en aplicación de la Ley de Aguas de 1985.

En efecto, el Tribunal Constitucional abordó la problemática de la retroactividad de las normas al valorar la constitucionalidad de la Ley de Aguas de 1985. Así, en su Fundamento Jurídico Noveno esta doctrina se expresó en los siguientes términos:

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

"(...) En efecto, no hay retroactividad cuando una Ley regula de manera diferente y pro futuro situaciones jurídicas creadas con anterioridad a su entrada en vigor y cuyos efectos no se han consumado, pues, como este Tribunal ha declarado en anteriores ocasiones -SSTC 42/1986, de 10 de abril y 99/1987, de 11 de junio-, una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9.3 de la Constitución, cuando incide sobre "relaciones consagradas" y "afecta a situaciones agotadas" y "lo que se prohíbe en el art. 9.3 es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la irretroactividad". La Ley 29/1985 procede a dar una nueva regulación de los derechos individuales sobre las aguas continentales, pero no altera los efectos jurídicos de los derechos que la legislación anterior reconocía mientras estuvo en vigor. Cosa distinta es que el nuevo régimen legal no reconozca ya, en adelante, algunos de aquellos derechos o que los regule de manera más restrictiva.

Sucede aquí que los recurrentes parecen confundir el principio de irretroactividad establecido en el art. 9.3 de la Constitución con el respeto a los derechos que han sido adquiridos al amparo de la legislación que la Ley recurrida viene a derogar. Pero también hemos señalado en anteriores ocasiones que la Constitución no emplea la expresión derechos adquiridos, que no es posible equiparar el concepto de derecho individual que utiliza el art. 9.3 con el ius quaesitum (STC 27/1981, de 20 de julio) y, en definitiva, que la "invocación del principio de

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

irretroactividad no puede presentarse como una defensa de una inadmisible petrificación del ordenamiento jurídico" -SSTC 27/1981, 6/1983, de 4 de febrero y 99/1987, de 11 de junio, entre otras-. Sin quebrantar el principio de irretroactividad sancionado en el art. 9.3 del texto constitucional, el legislador puede variar, en sentido restrictivo y con eficacia ex nunc, el régimen jurídico preexistente de los derechos individuales, siempre que se ajuste a las restantes exigencias de la Constitución."

Cabe observar como el Alto Tribunal realiza una diferenciación entre el principio de irretroactividad establecido en el artículo 9.3 de la Carta Magna y los derechos adquiridos al amparo de la legislación anterior en materia de aguas, por cuanto la retroactividad prohibida es la de las normas que sean restrictivas de derechos individuales; pero por derechos individuales no cabe entender los meramente hipotéticos, basados sólo en la existencia de una norma de la que podría derivarse su reconocimiento; sino, más bien, los ya perfeccionados; situación ésta que, en principio o como regla general, no es la predicable de quien no es aún concesionario y sí sólo mero pretendiente a obtener una concesión del dominio público.

Ciertamente, el Tribunal Constitucional confirma que el legislador podrá modificar con su actuación el régimen jurídico preexistente de los derechos individuales siempre y cuando no hayan agotado sus efectos y la nueva legislación que surja incida sobre éstos en su proyección hacia el futuro. En línea con este argumento se establece la citada DTª Primera de la Ley de Aguas de 1985 al

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

reconocer la existencia de los derechos de aprovechamientos adquiridos con la legislación anterior y que por tanto los respeta, si bien establece que éstos seguirán desplegando sus efectos hasta un máximo de 75 años, lo cual indiscutiblemente es una incidencia sobre éstos pero a futuro. Por todo ello, no puede decirse en este aspecto que la Ley de Aguas sea inconstitucional puesto que deja a salvo el principio de irretroactividad de las normas al reconocer la aplicación del nuevo plazo para las anteriores concesiones únicamente a partir de su entrada en vigor.

En consecuencia, este es el razonamiento a seguir en la aplicación del plazo de 99 años establecido en la Ley de Patrimonio del Estado de 1964, en contra del sostenido por la Abogacía del Estado que inicia el cómputo de los mismos desde el inicio de la concesión, esto es desde el 8 de junio de 1905.

Es decir, si bien es cierto que la Ley de Patrimonio del Estado no establece un régimen transitorio específico para las concesiones existentes a su entrada en vigor, a diferencia de la Ley de Aguas que claramente aborda esta problemática, lo que es innegable es que de aplicar este plazo a la concesión que nos ocupa, tan sólo podría hacerse desde la aprobación de la misma, esto es desde 1964. Por lo tanto, contados los 99 años fijados en la ley estaríamos ante una concesión cuya caducidad se produciría en el año 2063.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que la Ley de Patrimonio del Estado no fija ni un derecho transitorio ni una disposición relativa a la retroactividad de sus normas. Únicamente reconoce, en su

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

artículo 126, la posibilidad de que las leyes especiales reduzcan el plazo general de las concesiones fijado en 99 años. Sobre este marco la Ley de Aguas de 1985 opta por la reducción limitando el plazo máximo de sus concesiones sobre el dominio público de aguas a los ya citados 75 años. Es por ello, que aplicando la comentada doctrina sobre la irretroactividad de las normas y más concretamente, lo establecido en la DTª Primera de la ley, podemos concluir que la concesión que nos ocupa debe seguir desplegando sus efectos hasta la fecha de 1 de enero de 2061, teniendo en cuenta que la Disposición Final Tercera de la misma ley estableció que su entrada en vigor se produciría en fecha de 1 de enero de 1986, fecha la cual debe tomarse como inicio del cómputo de los 75 años de plazo máximo para las concesiones existentes a su entrada en vigor.

Nótese como esta fecha de caducidad situada en 2061, al aplicar las prescripciones contenidas en la DTª Primera de la Ley de Aguas, se halla muy próxima a la de 2063 que surgiría de aplicar el plazo de 99 años de la Ley de Patrimonio del Estado. A pesar de ello, el plazo de caducidad debemos fijarlo el 1 de enero de 2061 ya que, como hemos apuntado, la Ley de Patrimonio del Estado no fijó un régimen transitorio del que deducir su aplicación para las concesiones establecidas a perpetuidad como si abordó la Ley de Aguas; pero además debemos aplicar el plazo contenido en esta última ya que, como ley especial, establece un plazo máximo más restrictivo que el plazo general fijado en la Ley de Patrimonio del Estado, más si cabe cuando en su artículo 126 se reconocía expresamente esta facultad.

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

En apoyo de esta tesis sostenida por el firmante tuvo la oportunidad de pronunciarse el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) en su Sentencia núm. 860/2004, de 20 julio, aborda de forma expresa lo regulado en la DTª Primera de la Ley de Aguas bajo la interpretación dada a la misma por el Tribunal Constitucional. Vale la pena detenernos en el supuesto de hecho consistente en la demanda formulada por el Ayuntamiento de Carcabuey en la cual solicitaba que se dictara sentencia en la que, estimando la demanda, se declarase no haber lugar a seguir los demandados disfrutando del derecho a suministro gratuito, con cargo al servicio municipal de abastecimiento de agua potable a la población de Carcabuey, del caudal de cuatro litros de agua por minuto o 5.760 litros diarios (los titulares de una paja de agua) o 2.880 litros diarios (los titulares de media paja de agua), negando la vigencia actual de aquél derecho y declarando que por la naturaleza del negocio jurídico celebrado en el año 1927 y el carácter demanial del bien sobre el que se gravaba, nunca puede ser considerado como un derecho adquirido a perpetuidad, con expresa imposición de las costas a los demandados en cuanto se opusieran a la demanda.

Entre la fundamentación jurídica de la sentencia, en lo que aquí interesa, debemos destacar el Fundamento Jurídico Tercero, expresado en los siguientes términos:

> *"(...) Es cierto que según le actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a*

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere. Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, ***con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación****, con carácter general, de este límite de los derechos de aprovechamiento de aguas públicas ganados con anterioridad, no puede decirse que produzca una ablación de los mismos, sino que se trata de una regulación del contenido de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132.1 de la Constitución consagra (fundamento 11 sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988). En el*

320

supuesto objeto del presente recurso, ***no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985,*** *la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala, las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley."*

Vemos como esta sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ampliamente utilizada por la Sala Contencioso-Administrativa en varias de sus resoluciones, por todas la Sentencia de 10 junio 2008, de la Sección 5ª, entra directamente en la problemática aquí debatida respecto de la aplicación de lo regulado en la DTª Primera de la Ley de Aguas de 1985. El caso analizado en la sentencia, finalmente, el Tribunal Supremo reconoció que los vecinos del municipio de Carcabuey que habían adquirido este derecho en base a la normativa anterior continuaran disfrutando de sus aprovechamientos de aguas hasta un plazo máximo de 75 años a contar desde el 1 de enero de 1986. Por lo tanto, este supuesto al ser más flagrante si cabe que el que nos ocupa debe llevarnos necesariamente al mismo resultado, entendido éste en los términos plasmados a lo largo de este escrito aceptando que la concesión de 8 de junio de 1905 continuará vigente hasta el 1 de enero de 2061.

321

V.- RESCATE DE LA CONCESIÓN

Una vez concretada ya la fecha de duración máxima de la concesión podemos sostener que, salvo causas imputables al concesionario, la Administración únicamente podrá extinguirla si previamente acuerda su rescate, esto es pagando el justiprecio correspondiente por motivo de la expropiación. Así lo reconoce la propia Ley de Aguas de 1985 en su artículo 51.1c) en relación con el artículo 63.3, coincidentes con el artículo 53.1c) en relación con el artículo 65.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y la Ley de Expropiación Forzosa cuyo artículo 41 incluso contempla las concesiones perpetuas de bienes de dominio público.

IV.- CONCLUSIONES

En este apartado procederemos a reflejar únicamente y de forma sintética las conclusiones más importantes arrojadas a lo largo de este informe sobre los pilares básicos de la problemática, consideraciones efectuadas, sobre la base del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable.

PRIMERA.- Sobre la base de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, confirmado por la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto

322

Refundido de la Ley de Aguas, la concesión decretada por resolución del Gobernador Civil, de fecha de 8 de junio de 1905, seguirá desplegando sus efectos con total vigencia hasta la fecha de 1 de enero de 2061 momento exacto de su caducidad.

SEGUNDA.- Salvo causas imputables al concesionario la Administración únicamente podrá extinguir la concesión previo pago del justiprecio correspondiente a la expropiación de la misma por motivo de su rescate.

MUNTANER 200, 5È 3A• BARCELONA • 08036
TELÉFONO: 932 008 473 • FAX: 932 019 208

V.- BASES DE DATOS CONSULTADAS

- El Derecho Editores S.A.U. (www.elderecho.com)
- Editorial Aranzadi (www.westlaw.es)
- Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es)

VI.- SUSCRIPCIÓN

Es la opinión del que suscribe el presente informe sobre les cuestiones planteadas, y que expresamente someto a cualquier otra consideración más fundada en derecho.

Es todo lo que debe informase, en Barcelona, a 1 de junio de 2011

Antoni Ferré i Mestre.
Dr en Derecho; Abogado
Profesor Asociado de la UB

324



AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. MIGUEL BALLARENA ARRAZTOA, mayor de edad, domiciliado a efectos de notificación en C/Braulio Iriarte, nº42 de Elizondo (Navarra), provisto de D.N.I. nº 15.815.876H, actuando para este acto en su calidad de administrador de la mercantil Electra Irun Endara, S.A. domiciliada también en C/Braulio Iriarte, nº42 de Elizondo (Navarra), y cuyo NIF es A20 001434.

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

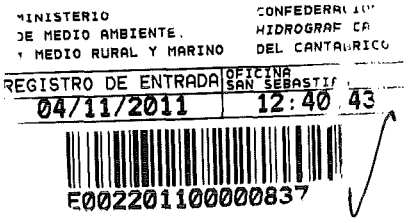
A L E G A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.



325

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 136 de la constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art. 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) <u>Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.</u>

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles - petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley",*** esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,-hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de*

la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..) ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente *("contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.´

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

"/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) <u>Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.</u>

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

339

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada".

Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral "*De Facto*" de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo Elizondo a 2 de noviembre de 2011.

D. Miguel Ballarena Arraztoa
Administrador



Dirección General de
Medio Ambiente y Agua
González Tablas, 9
31005 PAMPLONA
Tlfno. 848 42 14 97
Fax 848 42 61 27

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 04/11/2011 OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 11:23:53
E001201100011309

31 de octubre de 2011

D. Jorge Marquínez García
Presidente de la
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
Pl. de España, nº 2
33071 OVIEDO

Estimado Presidente:

Adjunto te envío Alegaciones de este Departamento al Proyecto del Plan Hidrológico del Cantábrico.

Un cordial saludo,

Andrés Eciolaza Carballo

Dirección General de
Medio Ambiente y Agua
González Tablas, 9
31005 PAMPLONA
Tlfno. 848 42 14 97
Fax 848 42 61 27

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente

31 de octubre de 2011

D. Jorge Marquínez García
Presidente de la
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
Pl. de España, nº 2
33071 OVIEDO

Estimado Presidente:

Adjunto te envío Alegaciones de este Departamento al Proyecto del Plan Hidrológico del Cantábrico.

Un cordial saludo,

Andrés Eciolaza Carballo

ALEGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA AL PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL CANTÁBRICO

PRIMERA

BIDASOA III: Propuesta de cambio de la calificación de masa muy modificada del Plan Hidrológico del Cantábrico a masa de agua superficial natural y cambio de los objetivos medioambientales

La masa **Bidasoa III (ES010MAR002420)** pertenece a la tipología Ejes fluviales principales cantabro-atlánticos calcáreos y es designada como masa muy modificada en la propuesta de Plan Hidrológico y clasificada como en estado ecológico Moderado.

Código de la Estación	utm_x	utm_y	Estación representativa en las masas de agua heterogéneas	Código de la masa	Nombre de la masa	Naturaleza	EQR03	EQR04	EQR05	EQR06	EQR07	EQR08	Estado asimilable al 2008 (último año disponible) con indicadores biológicos	Tendencias	Indicadores biológicos utilizados
BI001	625837	4780574	x	ES002MAR002340	Río Bidasoa I	Natural	0.65	0.82	-	-	-	-	Bueno	Se queda igual	Multimétrico de invertebrados
BI002	621479	4778460	x	ES002MAR002380	Río Bidasoa II	Natural	0.72	0.92	-	-	-	-	Muy bueno	Mejora	Multimétrico de invertebrados
BI004	610525	4776521	x	ES002MAR002380	Río Bidasoa II	Natural	0.88	-	-	-	-	-	Muy bueno	Se queda igual	Multimétrico de invertebrados
BI006	608490	4783029	x	ES010MAR002420	Río Bidasoa III	Natural	0.79	-	-	0.69	0.63	-	Moderado	Empeora	Multimétrico de invertebrados

Aunque en la propuesta de Plan el estado ecológico era Moderado, en una reciente revisión del Plan se reconoce que tiene Buen potencial ecológico y cumple con los objetivos ambientales de la DMA, ya que se le estaban aplicando los umbrales de masa natural.

Visto lo anteriormente expuesto y a la luz de la numerosa información que el Gobierno de Navarra dispone sobre el río Bidasoa en general y sobre esa masa de agua en particular , **se propone que la masa de agua Bidasoa III se designe como masa de agua superficial natural, en lugar de masa muy modificada, y se clasifique como en buen estado ecológico**, ya que los cambios de las características hidromorfológicas y las presiones sobre dicha

346

masa no han impedido que la masa de agua alcance su buen estado ecológico, como se ha podido verificar a partir de la valoración de los indicadores biológicos y físico-químicos realizada por el Gobierno de Navarra.

El Gobierno de Navarra mantiene una red de control de la calidad biológica que permite analizar la evolución temporal de la calidad biológica de las 2 estaciones estudiadas en esta masa (Sunbilla y Bera) desde 1994, en primavera y en estiaje. En esta red, se ha tenido en cuenta el indicador de macroinvertebrados a través del índice de calidad biológica IBMWP. **Desde 1999 casi todos los muestreos realizados en esta masa de agua se clasifican como en muy buen estado ecológico, y el resto como en buen estado.**

CAMPAÑAS		1994		1995		1996		1997		1998	
		IBMWP		IBMWP		IBMWP		IBMWP		IBMWP	
RÍO	ESTACIÓN	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI
BIDASOA	Sunbilla	209	189	211	186	121	100	94	126	138	116
BIDASOA	Bera	169	127	181	167	110	107	97	80	125	88

CAMPAÑAS		1999		2000		2001		2002		2003	
		IBMWP		IBMWP		IBMWP		IBMWP		IBMWP	
RÍO	ESTACIÓN	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI
BIDASOA	Sunbilla	129	151	128	130	100	121	124	127	114	147
BIDASOA	Bera	126	132	108	132	114	114	105	131	107	133

CAMPAÑAS		2004		2005		2006		2007		2008	
		IBMWP		IBMWP		IBMWP		IBMWP		IBMWP	
RÍO	ESTACIÓN	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI
BIDASOA	Sunbilla	121	147	129	179	117	153	115	103	137	164
BIDASOA	Bera	156	122	128	126	143	166	134	163	184	163

CAMPAÑAS		2009		2010	
		IBMWP		IBMWP	
RÍO	ESTACIÓN	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI
BIDASOA	Sunbilla	98	141	162	154
BIDASOA	Bera	168	143	180	196

Nota: color azul claro "Muy buen estado ecológico", color verde "Buen estado ecológico" y color amarillo "Estado ecológico moderado".

Por otra parte, según los datos de la red de control de calidad de aguas superficiales del Gobierno de Navarra, que tiene 3 puntos de muestreo en dicha masas (Sunbilla, Bera/Vera de Bidasoa y Endarlatsa) el estado fisicoquímico es muy bueno desde 2007.

Además, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, **se propone que los objetivos medioambientales del Bidasoa III, al sugerirse como masa natural por el Gobierno de Navarra, sean el Buen estado ecológico y químico al 2015.**

SEGUNDA

BIDASOA II y BEARZUN: Propuesta de cambio de los objetivos medioambientales de estas dos masas de agua del Plan hidrológico del Cantábrico pasando de Estado ecológico Muy bueno al Buen estado ecológico al 2015.

El objetivo de muy buen estado ecológico está asociado a masas en condiciones prácticamente inalteradas según los valores de los indicadores biológicos. Además, no deberán existir alteraciones antrópicas de los valores de los indicadores hidromorfológicos y fisicoquímicos o que las alteraciones sean de muy poca importancia.

De acuerdo con los indicadores biológicos y físico-químicos de la red de control periódico del Gobierno de Navarra y la del Plan Hidrológico del Cantábrico, las masas del Bidasoa II y Bearzun se encuentran en muy buen estado ecológico, aunque, a veces, sólo se alcanza el buen estado ecológico. Además, existen actualmente presiones y alteraciones hidromorfológicas de dichas masas que hacen que no se alcance el Estado ecológico Muy bueno, si se tienen en cuenta dichas alteraciones.

348

El Gobierno de Navarra mantiene una red de control de calidad biológica que permite analizar la evolución temporal de la calidad biológica de las 2 estaciones estudiadas

en las masas Bidasoa I (Elbetea) y Bidasoa II (Oronoz) desde 1994, en primavera y en estiaje. En esta red, se usa el indicador de macroinvertebrados a través del índice de calidad biológica IBMWP. **Desde 1994 casi todos los muestreos realizados en esta masa de agua se clasifican como en Muy buen estado ecológico, y el resto como en Buen estado**. No obstante, en la evaluación efectuada no se han tenido en cuenta los indicadores hidromorfológicos, que hacen que no se alcance el Muy buen estado ecológico en dichas masas.

CAMPAÑAS		1994		1995		1996		1997		1998	
		IBMWP		IBMWP		IBMWP		IBMWP		IBMWP	
RÍO	ESTACIÓN	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI
BIDASOA	Elbetea	136	210	207	177	124	158	103	107	135	159
BIDASOA	Oronoz	177	195	173	168	114	127	105	112	134	149

CAMPAÑAS		1999		2000		2001		2002		2003	
		IBMWP		IBMWP		IBMWP		IBMWP		IBMWP	
RÍO	ESTACIÓN	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI
BIDASOA	Elbetea	139	133	152	129	156	116	173	154	142	113
BIDASOA	Oronoz	132	137	131	130	181	116	175	110	98	157

CAMPAÑAS		2004		2005		2006		2007		2008	
		IBMWP		IBMWP		IBMWP		IBMWP		IBMWP	
RÍO	ESTACIÓN	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI
BIDASOA	Elbetea	159	146	162	151	161	186	133	121	141	164
BIDASOA	Oronoz	143	126	134	138	150	178	176	113	141	146

CAMPAÑAS		2009		2010	
		IBMWP		IBMWP	
RÍO	ESTACIÓN	PRIM	ESTI	PRIM	ESTI
BIDASOA	Elbetea	145	167	158	182
BIDASOA	Oronoz	168	168	169	133

Nota: color azul claro "Muy buen estado ecológico" y color verde "Buen estado ecológico".

Por otra parte, según los datos de la red de control de calidad del Gobierno de Navarra, que tiene 2 puntos de muestreo en las masas Bidasoa I (Arizkun) y Bidasoa II (Oronoz) en dicha masas el estado fisicoquímico es muy bueno desde 2009.

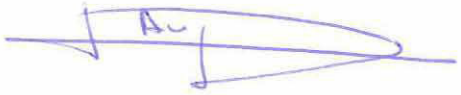
349

En consecuencia, y visto lo anteriormente expuesto, **se propone para las masas de agua Bidasoa II y Bearzun, consideradas como masas**

naturales en el PHC, los objetivos de Buen estado ecológico y químico al 2015.

Pamplona, 28 de octubre de 2011

EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA



Andrés Eciolaza Carballo

350

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

03. 11. 2011
CORREOS
ELIZONDO

AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. MIGUEL BALLARENA ARRAZTOA, mayor de edad, domiciliado a efectos de notificación en C/Braulio Iriarte, nº42 de Elizondo (Navarra), provisto de D.N.I. nº 15.815.876H, actuando para este acto en su calidad de administrador de la mercantil Hidráulicas del Bidasoa, S.A. domiciliada también en C/Braulio Iriarte, nº42 de Elizondo (Navarra), y cuyo NIF es A31 175748.

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

A L E G A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
REGISTRO DE ENTRADA | OFICINA SAN SEBASTIAN
04/11/2011 | 12:42:50
E002201100000838

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 136 de la constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art. 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles -petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

357

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley",*** esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,-hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de*

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.'

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

"/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) <u>Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.</u>

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada".

Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral "*De Facto*" de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo Elizondo a 2 de noviembre de 2011.

D. Miguel Ballarena Arraztoa
Administrador



AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. Lukas Mendikute Jauregi, mayor de edad, domiciliado a efectos de notificación en Arabazo Etorbidea nº 5 bajo de Tolosa (Guipúzcoa), provisto de D.N.I. nº 72.416.947-K, actuando para este acto en su calidad de Administrador General de la mercantil GOIKO-URA, S.L., domiciliada también en Arabazo Etorbidea nº 5 bajo 20400 TOLOSA (Gipuzkoa), y cuyo NIF es B/20556395.

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

A L E G A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
367
REGISTRO DE ENTRADA 04/11/2011 OFICINA SAN SEBASTIAN 09:22 21
E002201100000832

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art 136 de la constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

368

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas– reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

> ***"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación".*** Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación.

370

La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles -petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

372

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061;** parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,- hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable,*** *por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..)* ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

376

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa (*"contados desde la fecha de la concesión"*) y no la actualmente vigente (*"contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley"*).

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

377

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,
- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,
- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

379

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.´

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

380

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en «*los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas*» (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

   Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas*». En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

"/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) **Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.**

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) **Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos**

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) **Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales**

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada". Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

384

Finalmente, entendemos que el párrafo 5° debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral *"De Facto"* de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo en Tolosa a 28 de octubre de 2011.

Lucas Mendikute
Administrador

03. 11. 2011
CORREOS
ELIZONDO

AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. MIGUEL BALLARENA ARRAZTOA, mayor de edad, domiciliado a efectos de notificación en C/Braulio Iriarte, nº42 de Elizondo (Navarra), provisto de D.N.I. nº 15.815.876H, actuando para este acto en su calidad de administrador de la mercantil Electra Navasturen, S.L. domiciliada también en C/Braulio Iriarte, nº42 de Elizondo (Navarra), y cuyo NIF es B31642135.

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

A L E G A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
REGISTRO DE ENTRADA | OFICINA SAN SEBASTIAN
04/11/2011 | 12:39:10
E002201100000835
387

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 136 de la constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art. 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) <u>Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.</u>

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

390

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles - petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley",*** esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,-hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de*

la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..) ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente *("contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.´

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

"/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

401

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada".

402

Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral "*De Facto*" de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo Elizondo a 2 de noviembre de 2011.

D. Miguel Ballarena Arraztoa
Administrador



Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

Destinatario: 6310690 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
Oficina Registral: 50000496 Reg. Aux. M.A.R.M.- S. Juan de la Cruz-
PZA SAN JUAN DE LA CRUZ S/N - 28071 MADRID

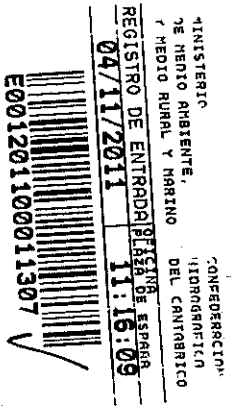
ENTRADAS
Doc. registrados: 2

Num. Registro	Fecha Entrada	Origen/Remitente	Resumen	Doc Fis
20110010077154	02.11.2011/16:12:15	*ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELECTRICA(UNESA) - MADRID.	PRESENTA DOCUMENTO RELATIVO A OBSERVACIONES EN EL PERIODO DE CONSULTA PUBLICA A LA VISTA DE LA PROPUESTA DEL PLAN HIDROLOGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACION DE CANTABRICO ORIENTAL.	X
20110010077155	02.11.2011/17:17:38	*ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELECTRICA(UNESA) - MADRID.	PRESENTA DOCUMENTO RELATIVO A OBSERVACIONES EN EL PERIODO DE CONSULTA PUBLICA A LA VISTA DE LA PROPUESTA DEL PLAN HIDROLOGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACION DE CANTABRICO OCCIDENTAL.	X

Contiene: 2 Documentos. DILIGENCIA: Para hacer constar que el último número de esta relación es el: 20110010077155
EL JEFE DE REGISTRO

DILIGENCIA: Se han recibido todos los documentos de esta relación

Fecha: 02.11.2011 Hora: 17:18:57 Pag. 1 de 1



Asociación Española de la Industria Eléctrica

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICO DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 04/11/2011 OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 11:16:09
E0012011000011307

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
02 NOV 2011
Registro Aux. - Pza. San Juan de la Cruz
ENTRADA 47154
HORA

Madrid, 31 de Octubre de 2011

A la Atención del Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
c/ Asturias 8, 1º
33071 OVIEDO

Estimado Sr.:

Adjunto le envío las Observaciones que UNESA, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, realiza en el período de consulta pública a la vista de la Propuesta del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación de Cantábrico Oriental, con el fin de que sean tenidas en cuenta en la elaboración del Plan hidrológico.

Quedando a su disposición para cualquier aclaración, le saluda atentamente

José María Marcos

Vocal de UNESA en el Consejo Nacional del Agua

407

Pº de la Castellana, 141 – Planta 12 – 28046 – Madrid · España
Tlf. +34 91 567 48 00 NIF G-82378316
www.unesa.es

OBSERVACIONES GENERALES A LOS PLANES HIDROLOGICOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL USO ENERGETICO DEL RECURSO.

Madrid, 31 de octubre de 2011

409

P° de la Castellana, 141 – Planta 32 – 28046 – Madrid · España
Tlf. +34 91 567 48 00 NIF G-82378316
www.unesa.es

OBSERVACIONES GENERALES A LOS PLANES HIDROLOGICOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL USO ENERGETICO DEL RECURSO.

31 de octubre de 2011

La presente Nota tiene por objeto recoger las principales cuestiones que preocupan al sector eléctrico a la vista del contenido de los proyectos de Plan Hidrológico en trámite de consulta, desde la perspectiva de la producción hidroeléctrica y las necesidades para refrigeración de los distintos tipos de centrales térmicas.

Las principales preocupaciones para el Sector se pueden sintetizar en el interés por mantener la actual capacidad de producción del parque generador existente y que las determinaciones de los planes no supongan una restricción que imposibilite la expansión del mismo a medio y largo plazo.

En relación con las afecciones al equipo hidroeléctrico existente esas preocupaciones están plenamente justificadas, como pone de manifiesto la tabla adjunta a esta Nota. A partir de una encuesta a las empresas titulares de los aprovechamientos hidroeléctricos en demarcaciones en que se conoce el Plan a nivel de Borrador o de consulta, y que suponen aproximadamente el 50% del parque, se puede estimar:

- Una reducción del producible hidroeléctrico para el conjunto del parque superior a los 2.000 GWh/año, lo que equivale a un incremento de los costes del sistema en otras fuentes de energía renovable de unos 160 Millones de euros anuales.
- Una reducción de la potencia punta garantizada por el equipo hidroeléctrico superior a los 700 MW, lo que equivale a unas inversiones en potencia de sustitución de más de 500 Millones de euros.

1. Papel de la energía hidroeléctrica para la calidad del Suministro eléctrico

Con carácter general, hay que destacar el papel actualmente insustituible que juega la energía de origen hidroeléctrico con regulación, en la calidad de suministro y para la cobertura de la demanda de nuestro Sistema Eléctrico Nacional. **410**

En efecto, este tipo de energía, capaz como ninguna otra de arranques, paradas y variaciones rápidas de la carga aportada al Sistema, es la única que puede garantizar el seguimiento fino de la curva de demanda y la atención rápida a variaciones bruscas de la energía entregada, bien por posibles fallos de grandes grupos térmicos, por problemas localizados en la red, o, recientemente, por el significativo aumento de las energías renovables no garantizadas (eólica y solar), aumento que necesariamente requiere como complemento nueva potencia hidroeléctrica para hacer frente con rapidez y eficacia a los inevitables ceros de dichas energías.

Por ello, las afecciones a la energía hidroeléctrica con regulación pueden transformarse con gran facilidad en graves pérdidas de garantía de suministro del Sistema Eléctrico Nacional. En este sentido, las dos afecciones potencialmente más perjudiciales para los usos hidroeléctricos son la imposición de caudales ecológicos y las restricciones a las variaciones rápidas en los caudales turbinados. Ambas pueden hacer inviable, o inútil, la operación de un determinado aprovechamiento hidroeléctrico.

En este sentido, es de destacar el carácter esencial del suministro de energía eléctrica, como se declara en la exposición de motivos de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en la que se expresa que:

"El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. [...] La presente Ley tiene, por consiguiente, como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas las características de este sector económico"

Por tanto, dada la importancia de garantizar el suministro eléctrico y la calidad de éste, debe valorarse la importancia del uso del agua para la generación eléctrica con máximo rigor. Todo ello, sin olvidar la protección al medio ambiente. En definitiva, no se persigue que se otorgue al uso hidroeléctrico una importancia desmedida o desproporcionada, colocándola por encima de los objetivos medioambientales. Pero sí se pretende abrir la discusión con la finalidad de encontrar el punto de equilibrio entre el medio ambiente, el uso racional del agua y la sostenibilidad.

Entrando ya en aspectos concretos de los documentos de los distintos planes sometidos a consulta, Memoria y Normativa, se ha de destacar en primer lugar que la importancia del uso energético del agua apenas aparece reflejada en ambos. Se menciona sin mucho énfasis el interés económico del uso energético del agua, pero nada se dice del papel del mismo para garantizar el suministro eléctrico a la población y a las actividades económicas.

2. Las pequeñas centrales fluyentes

También interesa destacar que los pequeños aprovechamientos fluyentes y en derivación, aportan una energía casi constante, de base, que en caso de resultar seriamente afectada debería ser sustituida por producción de origen térmico -convencional o nuclear-, con el consiguiente incremento de la factura de combustibles importados y, en su caso, de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y de gases contaminantes como óxidos de azufre, de nitrógeno y partículas. Ello sería incompatible con la política y los esfuerzos acordados por los Estados Miembros europeos de lucha contra el cambio climático y la contaminación o la política de fomento de energías renovables y la de reducción de la dependencia energética del exterior. Obviamente, estas consideraciones no son exclusivas para los aprovechamientos fluyentes, sino que aplican también a los aprovechamientos regulados mediante embalse.

Las previsiones de determinados planes, de construcción de nuevas escalas o pasos de peces y otras medidas que no están impuestas en el clausulado concesional, representa una afección sobrevenida a los aprovechamientos en los que se imponga, en un doble sentido: el coste de su construcción y el derivado de la explotación, en la doble vertiente de coste de mantenimiento y de pérdida de producción hidroeléctrica.

3. El agua para refrigeración de centrales térmicas y nucleares

Las centrales térmicas con refrigeración en circuito cerrado no requieren grandes volúmenes de agua. En línea con la planificación ya vigente, actualmente no se plantea ninguna nueva instalación térmica con refrigeración en circuito abierto. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que un incremento excesivo de los condicionantes y restricciones a los usos en térmicas convencionales, ciclos combinados, nucleares o biomasa, sea en la disponibilidad de agua para refrigeración y procesos, o en las características de los vertidos, puede afectar gravemente a la garantía del suministro eléctrico nacional, en sus aspectos cuantitativos. Por ello, hay que tomar en consideración que no deben imponerse restricciones innecesarias que puedan afectar al suministro de energía eléctrica, ni a su calidad y que pueden causar más perjuicios que beneficios al medio ambiente visto éste de forma global y a la Sociedad en general.

4. Caudales ambientales

En el caso de tramos de uso hidroeléctrico, el régimen de caudales ecológicos que se determine en el Plan puede ser menos riguroso que el establecido con carácter general, siempre que la excepción esté debidamente justificada, obviamente. Tanto la DMA como la Instrucción de Planificación Hidrológica contemplan esa posibilidad, mediante el uso de la figura de Masas de Aguas muy modificadas o las Masas de Agua muy alteradas hidrológicamente y otros mecanismos. La propuesta de caudales se ha realizado en algunas ocasiones sin tener en cuenta concesiones vigentes ni condicionados de las mismas. En algún caso, los caudales que

412

se proponen están basados incluso en estudios de hábitat potencialmente útiles de especies piscícolas sobre las que no se tiene constancia de su presencia en los ríos afectados.

En ocasiones, los caudales mínimos pueden ser de imposible aplicación a la vista de las características de los grupos hidroeléctricos instalados, por lo que hay que valorar la implantación caso a caso. Pudiera ser en muchos casos recomendable la implantación de una nueva minicentral de aprovechamiento del caudal ecológico como compensación al concesionario.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la aplicación de caudales ecológicos reduce la producción hidroeléctrica si no existe la posibilidad de turbinar el caudal en una central, en muchos casos exclusiva para ese fin. Y además reduce la producción posible en horas de punta de demanda o cuando el sistema eléctrico lo precisa al desvirtuar la capacidad de almacenamiento en el embalse: los volúmenes desembalsados en concepto de caudal ecológico no están disponibles en el embalse cuando el Sistema eléctrico lo precise.

En cuanto a los caudales ambientales máximos, entendemos que se deberán respetar siempre los aprobados en las concesiones existentes.

Para el cálculo de los Caudales de crecida entendemos que debe primar siempre la explotación segura de las presas frente a consideraciones de tipo medioambiental.

Tasa de cambio: Este aspecto es fundamental para la explotación de la central, ya que la implantación de tasas de cambio en la variación de caudales reduciría la flexibilidad de esos aprovechamientos para adecuar la producción a las necesidades del sistema eléctrico. En la situación actual existe una elevada flexibilidad para adecuar la producción hidroeléctrica a las necesidades del sistema, de tal forma que, en pocos minutos, se puede aumentar o reducir potencia del Sistema eléctrico en función de las necesidades del mismo, aunque ello conlleva variaciones en los caudales circulantes.

El buen funcionamiento del sistema eléctrico requiere un equilibrio constante entre la generación y el consumo que se debe realizar forzosamente en tiempo real, siendo la producción hidroeléctrica la principal fuente de energía capaz de suministrar dicho servicio de regulación, garantizando así el buen funcionamiento del sistema de forma ventajosa técnica, económica y medioambientalmente respecto a otras tecnologías.

Las limitaciones a la producción hidroeléctrica podrían hacer que la capacidad de respuesta rápida sea insuficiente lo que puede provocar restricciones técnicas que limiten el funcionamiento del Sistema y que afectarían especialmente a otras energías con gran variabilidad de funcionamiento como la energía eólica, incrementando los vertidos de esta tecnología.

Si hay que atenerse a unas tasas de variación en los caudales más estrictas que las actuales, ello equivale a limitar la pendiente de las rampas de potencia en la central, con lo que no se podría seguir las variaciones de la demanda o compensar las variaciones de la eólica o de otras unidades de producción.

Otro aspecto a tener en cuenta es que una tasa de cambio demasiado lenta en el ascenso de caudal puede ser imposible de asumir con la tecnología instalada (situación todavía más difícil en el caso de la bajada por fallo en el grupo o en la red) y conllevaría un coste demasiado alto y no razonable.

Creemos necesario que se haga una evaluación específica para cada concesión hidroeléctrica en particular por los siguientes motivos:

- por motivos tecnológicos, como por ejemplo, por imposibilidad de realizar variaciones de caudal acusadas (turbinas Kaplan),
- por interés para la regulación del Sistema, o
- incluso por la propia ubicación física de las centrales, ya que en algunos casos no tendría sentido fijar un caudal ecológico y/o una tasa de variación, al tratarse de presas o centrales que descargan a otra cola de embalse, sin afecciones a un tramo de río.

Ambas restricciones, incremento de caudales ecológicos y tasas de cambio de caudales suponen, en general, un incremento de la utilización de centrales térmicas alternativas, con el consiguiente aumento del consumo de combustibles y de emisiones contaminantes a la atmósfera y de gases de efecto invernadero.

Insistiendo en el caso de las centrales que vierten a la cola de otro embalse, la mejora medioambiental por imponer una tasa de variación de caudal y un valor de caudal ecológico es inapreciable en el ecosistema fluvial mientras que el incremento de utilización de energías alternativas para garantizar la demanda (que serán forzosamente energías no renovables puesto que las renovables tienen prioridad de funcionamiento a su máxima capacidad siempre que no haya restricciones técnicas) supone un perjuicio medioambiental. Y puede suponer una seria dificultad para desarrollar la planificación prevista en cuanto al progreso de las energías renovables para el cumplimiento de los objetivos a 2020. Puede haber un conflicto de intereses entre la necesidad estratégica de desarrollo energético y la consecución de los objetivos ambientales a que obligaría el nuevo plan.

5. Premisas para el proceso de concertación

El proceso de concertación del régimen de caudales ambientales no debe restringirse exclusivamente a aquellos casos que condicione significativamente las asignaciones y reservas del Plan hidrológico, sino que debe llevarse a cabo con todo usuario con derechos

414

preexistentes afectados, máxime a aquellos que prestan un servicio esencial, en términos de la LSE. El objetivo de la concertación es compatibilizar los derechos al uso del agua con el régimen de caudales ecológicos para hacer posible su implantación, tal y como indica la IPH (art 3.4.6), que además, aclara que:

"El proceso de concertación del régimen de caudales ecológicos tendrá los siguientes objetivos:

a) Valorar su integridad hidrológica y ambiental.

b) Analizar la viabilidad técnica, económica y social de su implantación efectiva.

c) Proponer un plan de implantación y gestión adaptativa"

Por tanto, habría que asegurar, en primer lugar, la viabilidad técnica de su implantación y tener en cuenta que la implantación del régimen de caudales implica también la compensación de las afecciones a derechos preexistentes, así como del coste de las obras y equipamientos necesarios para hacer posible el manejo de los caudales ecológicos, tal como establece con claridad la Ley de Aguas y el resto de legislación propia de un estado de derecho.

Por tanto, los planteamientos en la línea de que el Sector Hidroeléctrico deberá de adaptar los requerimientos hidroeléctricos a los ambientales, sin mayores matizaciones no parecen oportunos ni adecuados. En primer lugar, no sería el sector hidroeléctrico el que adaptaría sus requerimientos, sino todo el Sistema Eléctrico Nacional, lo que obliga a ponderar las afecciones frente a las ventajas ambientales. Por otra parte, los requerimientos hidroeléctricos se basan en derechos adquiridos de forma legal, que no pueden ser obviados sin causar un grave daño a los principios del Estado de Derecho.

Al hablar del proceso de implantación del régimen de caudales ecológicos se indica que en el proceso de concertación se tendrá en cuenta los usos y demandas actualmente existentes. Es de suponer que ello supondrá la justa compensación a los derechos afectados, pero no se suele citar. También debería añadirse siempre que se tendrá en cuenta la posible afección a la calidad de suministro y a la garantía de cobertura de la demanda energética. En algunos casos parece que se cuenta con que la aceptación de este régimen puede ser más conflictiva debido a los intereses económicos de los titulares de las concesiones de usos hidroeléctrico; no sólo se trata de intereses económicos, sino de valor de la producción hidroeléctrica para el sistema eléctrico y su calidad y garantía y de derechos justamente adquiridos, y cuyo ejercicio es del máximo interés público, como ya se ha indicado.

Por ello, es fundamental que se sopese debidamente, en colaboración con las autoridades energéticas hasta qué punto es razonable que se restrinja o afecte al uso hidroeléctrico sin poner en riesgo la garantía de suministro eléctrico.

6. El uso hidroeléctrico y el resto de los usos

Con carácter general, se debería mantener en todos los planes la prelación que figura en la propia Ley de Aguas, al menos para los tres primeros usos: 1º Abastecimiento, 2º Regadíos y 3º Usos industriales para producción de energía eléctrica.

Por otra parte, en determinados planes se hacen consideraciones sobre los usos lúdicos que no son acordes con el orden de prioridad establecido con carácter general en la ley de aguas ni en la normativa del propio plan, por lo que ningún uso de mayor prioridad debiera verse condicionado por ellos, y menos aún uno de la máxima importancia estratégica, como es el uso hidroeléctrico.

7. La planificación hidrológica y otros planes

Sobre la relación de la planificación hidrológica con otros planes y programas de carácter nacional, en algunos casos se cita los planes energéticos, pero habría que ir más allá: se debe contrastar y cuantificar en qué medida las restricciones de la planificación hidrológica van a afectar a los requerimientos de la planificación indicativa de la actividad de generación eléctrica a largo plazo, de forma que los límites a ambas se impongan por una decisión superior y no dando por hecho que los requerimientos medioambientales zonales son superior a cualquier otro. En este sentido, se deber tener presente el artículo 40.2 del TRLA, cuando establece que la "política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos usos establezcan las Administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión racional y sostenible que debe ser aplicada por el Ministerio de Medio Ambiente (...), que condicionará toda autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite".

La exigencia de planificación no es nueva, ni obedece a una imposición del Derecho comunitario. En España, la planificación hidrológica ha existido desde 1902 y, gracias a ella, se han podido corregir los intensos desequilibrios hídricos de la península ibérica. Desde 1985, con la aprobación de la Ley de aguas, los objetivos de la planificación se enriquecen y cambian sustancialmente, pues ya no basta con tratar de satisfacer demandas sino que también se hace obligatoria la protección del recurso y de los ecosistemas asociados y con carácter general, sería conveniente que el plan hiciera al menos una reserva genérica mayor de necesidades de agua para refrigeración de centrales térmicas convencionales y nucleares, de cogeneración y de renovables (centrales de biomasa) de acuerdo a la planificación del sector eléctrico.

Sarriópapel

Confederación Hidrográfica del Cantábrico
A la atención de la Sra. Noemí López
Paseo de Errotaburu nº 1, 8º
20071 – San Sebastian

Berrobi, 04 Noviembre 2011

ASUNTO: Alegación a la propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

Muy Señora nuestra

Sarriopapepl y Celulosa S.A. en su factoria de Uranga ha **seguido, y participado en el proceso de presentación y participación pública** que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha realizado para la preparación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

Desde un principio hemos seguido muy de cerca aspectos como la **fijación de objetivos de calidad y caudales de referencia** para aquellos cauces de los que la industria Papelera realiza algún tipo de aprovechamiento, captación o vertido de agua.

A la vista de este trabajo Sarriopapel y Celulosa S.A. **ha identificado que el cauce** del río Zelai (o Elduarain), en él que la actividad papelera* que se desarrolla en sus márgenes podría verse seriamente comprometida a medio y largo plazo si la propuesta de Plan prospera en sus actuales términos y no establece objetivos de calidad y caudales de referencia de una forma más acorde con los esfuerzos realizados por la industria papelera y con la realidad de otros vertidos a este mismo cauce.

Entendemos que **cualquier fijación de objetivos de calidad y caudales de referencia (ecológicos o de estiaje) debería de tener en cuenta al menos los siguientes aspectos**:

1- Sarriopapel y Celulosa S.A. con aprovechamiento en el cauce Zelai tiene una Autorización Ambiental Integrada en vigor con unas condiciones de captación y vertido que se han considerado oportunas por parte de URA (Agencia Vasca del Agua) para garantizar la calidad del cauce en base a las tecnologías disponibles y el tipo de producción que en la misma se realiza.

2- La aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles no siempre pueden garantizar, incluso al margen de su viabilidad económica que por definición deben cumplir, el alcanzar los objetivos de calidad ambiental fijados por la Autoridad competente para unos cauces correctos.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
REGISTRO DE ENTRADA 04/11/2011 OFICINA SAN SEBASTIAN 12:40:31
E002201100000836

417

Sarriópapel y Celulosa SA
Sociedad Unipersonal
Factoría Uranga
Ctra. Berástegui, s/n
20493 Berrobi, Guipúzcoa
Tel. 943 68 34 09
Fax 943 68 32 20

Sarriópapel

3- Este mismo cauce sufre el vertido no depurado de aguas residuales urbanas (falta de saneamiento de los municipios) así como de aguas residuales de tipo agrícola, ganadero y de otros usos industriales.

4- A fecha de hoy no existen previsiones a corto plazo para dotar a estos municipios y a otros agentes (agrícolas, ganaderos, industriales) de infraestructuras de saneamiento a medio plazo que minimicen el impacto de los vertidos de los mismos en el río Zelai.

5- A la vista de la actual situación económico-financiera es más que probable que cualquier actuación en infraestructuras de saneamiento en el río Zelai se demore de forma importante en el tiempo.

6- Que hasta el momento en el que todos los vertidos no estén controlados, y en consecuencia pueda saberse el verdadero impacto de cada uno de ellos en el río Zelai, no puede fijarse a priori ni un grado de responsabilidad, real y objetivo, en la situación del cauce ni un grado de exigencia de la mejora del propio cauce y de los vertidos hoy en día controlados.

7- No parece adecuado que Sarriopapel y Celulosa S.A., con autorización de vertido concreta y un vertido controlado, pueda ver comprometido su futuro porque otros agentes que vierten al río no lo hagan en las mismas condiciones de exigencia que nosotros.

8- Se debe tener en cuenta que Sarriopapel y Celulosa S.A. solo consume aproximadamente el 7% del agua utilizada.

9- Sarriopapel y Celulosa S.A., además de demostrar su compromiso con la mejora medioambiental con hechos y datos concretos, bien conocidos por la Administración Hidráulica competente, tienen su sistema de gestión medioambiental certificado (ISO 14000) e incluso la certificación EMAS.

Sarriopapel y Celulosa S.A. es consciente de los esfuerzos a realizar para garantizar la sostenibilidad medioambiental de nuestro entorno. Es por ello que vamos a seguir realizando, un gran esfuerzo tanto en captación de aguas como en calidad de vertido, del que tanto ustedes como la Agencia Vasca del Agua – URA, son conocedores.

Sin embargo, **no podemos aceptar** que la propuesta de Plan Hidrológico, en los términos en los que está actualmente redactada, suponga una clara amenaza para Sarriopapel y Celulosa S.A. con los aprovechamientos en el río Zelai.

Por todo lo cual **solicitamos:**

1- Que el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental deje claro que la situación actual de la calidad del cauce Zelai se debe en buena medida a la falta de infraestructuras de saneamiento que generan vertidos no depurados de otros orígenes no papeleros. Y que, en consecuencia de lo cual, no podrán exigirse esfuerzos complementarios a Sarriopapel y Celulosa S.A. para compensar la falta de depuración por parte de otros agentes vertedores mientras que no se determine el verdadero estado del cauce, una vez todos los vertidos que soporte el mismo estén regulados y controlados por la autoridad hidráulica.

2- Que se considere en cualquier caso que los objetivos de calidad propuestos para el cauce Zelai sólo serán alcanzables como muy pronto en 2021, siempre y cuando todas las

Sarriópapel

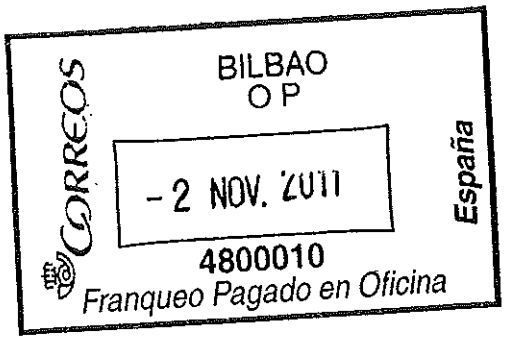
infraestructuras de saneamiento oportunas estén operativas. Y, llegada esa fecha deberá analizarse la situación del cauce en base al esfuerzo realizado por todas las organizaciones públicas (Ayuntamientos, Diputación Foral, Administración Hidráulica, Gobierno Vasco) y privadas (industria, sector agrícola y ganadero) para mejorar la calidad del mismo, así como teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías de depuración de aguas óptimas para todos estos casos en ese momento.

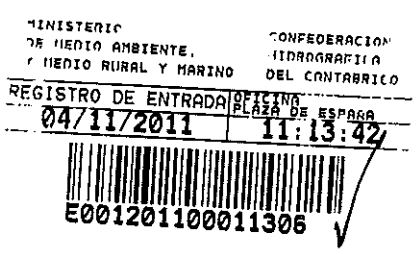
En la confianza que nuestra alegación sea estudiada y atendida, quedamos a su disposición para cualquier aclaración.

Atentamente,

Ibon Antolin Aguirre

* Las empresas afectadas directamente son: Munksjö Paper y Sarriópapel y Celulosa S.A.





A LA CONFEDERACIÓN HIDROLÓGICA DEL CANTÁBRICO

Don Pablo García Hernández, mayor de edad, con DNI núm.30.612.450-W y domicilio a efecto de notificaciones en Bilbao, carretera de Bilbao-Galdakano, 11-13, actuando en nombre y representación de la mercantil, Barbo Energías Renovables, S.A., con CIF A-95641692, comparezco y digo

Que por medio del presente escrito y en relación con la Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se someten a consulta pública las **Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca del Cantábrico Oriental y Occidental,** actualmente en fase de consulta, presento las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERA.- En relación con el régimen de caudales ecológico *(artículo 11 apartado 2 de la Propuesta).*

Los caudales ecológicos, en tanto que constituyen un límite al ejercicio del derecho concesional inicialmente otorgado, operan como una restricción al derecho cuyo agravamiento ha de ser operado a través del cauce jurídicamente instrumentado al efecto. Así, el título concesional establece, entre otros aspectos, el derecho de uso de agua que se otorga al concesionario, esto es, el caudal concesional que se define, entre otras variantes, por el caudal ecológico; de manera que la central podrá derivar un caudal igual al del rio menos el caudal ecológico con un máximo del caudal concesional.

Por lo tanto, aumentar el caudal ecológico supone para el concesionario una disminución del caudal total que puede derivar en un evidente perjuicio que se traduce en una menor producción eléctrica y, en consecuencia, una menor facturación. En definitiva, el aumento del caudal ecológico supone una pérdida para el concesionario que es perfectamente evaluable.

Por otra parte, no existe en este momento un consenso científico en cuanto a la validez metodología de cálculo para la definición de los caudales ecológicos y, por otra parte, la información de estaciones de aforos y pluviométricas no es suficiente ni de la calidad adecuada.

421

Así, los caudales ecológicos de las masas estudiadas se han determinado en función de unos cálculos teóricos basados en modelos como el SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evapotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.; de modo que el número de variables a introducir en el modelo es tan grande que pudiera resultar que los cálculos no sean los adecuados.

En concreto, el Anejo V –Caudales Ecológicos– en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 –problemas– "Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."

Es decir, el carácter experimental del método de cálculo empleado para la definición de los caudales ecológico determina un resultado, cuando menos, arbitrario que, en última instancia, repercute de manera negativa sobre el concesionario que ve limitado su derecho concesional en base a un cálculo incierto que se impone desde la Administración sin el previo consenso entre los agentes afectados.

En este sentido, y respecto a la necesidad de alcanzar un acuerdo o umbral consensuado entre todos los operadores, debemos remitirnos a las Instrucción de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores: "en aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del plan hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación".

Prosigue el citado artículo: "se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".

La participación activa a la que refiere la Instrucción no ha sido respetada en el presente procedimiento siendo que, por el contrario, se establecen unos umbrales unilaterales sin soporte técnico científico que avale la bonanza de la medida.

Por tanto, y dado el carácter cercenador respecto a los previos derechos otorgados a los concesionarios, solicitamos que se respeten y mantengan los caudales ecológicos definidos en los títulos concesionales.

SEGUNDA.- Respecto a la regulación de los usos del agua (*artículo 15).*

El artículo 15 del documento de Propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico de Cuenca contempla el régimen de los diversos usos del agua. Si bien esta parte no tiene el ánimo de realizar ninguna oposición directa a dicha regulación, se hace preciso realizar una matización respecto al régimen del uso de abastecimiento de población, más concretamente, respecto a sus posibles efectos.

Contrariamente a la utilización del agua para usos energéticos (hidroeléctricos) –que permite derivar un determinado caudal de un rio para ser turbinado y devuelto al rio, esto es, sin "agotar" el recurso-, las tomas para abastecimiento a la población sustraen un cierto caudal del río y, con ello, perjudican a las producciones hidroeléctricas situadas aguas abajo. En tal sentido, y para aquellas concesiones para usos energéticos otorgadas con carácter previo a dichos usos de agua para abastecimiento de población, se solicita que se articule un sistema de compensación (siquiera como una parte más del coste de la construcción de la toma para el abastecimiento) por la toma y detracción de caudales aguas arriba de la concesión

TERCERA.- Respecto a la instalación de dispositivos de medida *(artículo 24).*

Según redacción dada al apartado 2 de dicho artículo 24 "los titulares de aprovechamientos deberán instalar y mantener a su cargo los sistemas de medición que garanticen el registro y la comprobación de los caudales detraídos y que limiten la derivación de caudales a los máximos concedidos".

La obligación contemplada en este artículo 24 del Programa, y que se desea imponer a todos los concesionarios, no se encuentra recogida en los títulos concesionales hasta la fecha otorgados, en consecuencia, constituye una imposición que el documento introduce *ex novo*.

En opinión de quien suscribe, este control resulta inadecuado, al menos para las minicentrales de agua fluyente dado que no tienen capacidad de almacenamiento y regulación y tampoco son consumistas, de modo que la totalidad del agua derivada es devuelta al rio segundos más tarde. Para unas economías ajustadas, como son las relacionadas con la explotación de las minicentrales, la imposición de implementar dispositivos de medición de los caudales derivados representa un gravamen y una carga desproporcionada.

Dado lo desmedido del control en relación con la actividad y naturaleza de estas instalaciones, solicitamos que se exonere a las minicentrales de agua fluyente de la obligación de instalar dispositivos de medida de los caudales derivados y/o evacuados.

CUARTA. Respecto a la reversión de los bienes *(artículo 35.2).*

Consideramos contrario a derecho que se instaure un gravamen nuevo para el administrado-concesionario, cual es el de sufragar a su costa la demolición o reparación de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional.

Las obligaciones de los concesionarios se limitan (por la normativa hidráulica) a la reversión al Estado de las obras e instalaciones en dicho dominio; de manera que un nuevo gravamen al concesionario exigiría su articulación mediante reserva de Ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior.

Al margen de estos argumentos de índole jurídico, hay que considerar el elevado coste de ejecutar estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario con nuevas y sobrevenidas cargas económicas, en adición al daño que representa la extinción de su derecho concesional en sí mismo.

QUINTA.- Limitaciones a los plazos concesionales *(artículo 34).*

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derecho de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, la concesión se configura como el título por excelencia que habilita para dar cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

De entre los distintos títulos que amparan el uso y disfrute del agua, la concesión (el título concesional) es el que ha prevalecido al ser el que mayores garantías de todo orden ofrece a los distintos partícipes en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración e implantación actual, se asienta en la Ley 29/1985. Sin embargo, y en orden a contextualizar los presentes argumentos, hemos de referir, siquiera brevemente, a los antecedentes de la actual legislación.

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestre calificándola como una propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria que, conforme al artículo 412 del Código Civil y con el artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985 y derivó en una demanialización de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.
Sin embargo, el legislador, aún amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de dominio público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La referida norma rectora del demanio hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA, que respetando los derechos adquiridos dispone:

"DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1.Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de 75 años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.

2. Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal del aprovechamiento a las necesidades reales".

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, ha revelado, en fechas recientes, su carácter polémico dando lugar a discrepancias entre la Administración y los concesionarios en la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años en él contenidos.

Lo que hasta la fecha constituía un pacífico y asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes "por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley", esto es, hasta el 2061; parece sufrir un vuelco interpretativo. De tal manera, que, según la interpretación –hasta la fecha unilateral- de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto –y plazo- ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

Tal interpretación, que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley. En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas); es más, es un computo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento por parte de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (y a los que, posteriormente, haremos referencia); hemos de referirnos a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterda disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares.

Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia: Es cierto que según le actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidraúlico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..).* ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer introducir) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular, cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención del legislador hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente *("contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley")*.

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativo de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y el legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5.000 KVA,

"la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos (entre otros, Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995) se integran -tanto en sus fines como en el tiempo- con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (mucha de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

El sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de las aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares.

Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso atender a las numerosas inversiones que por los particulares usuarios del agua se acometieron (regadíos, centrales hidroeléctricas, etc.). Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativa, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.´

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos que las Administraciones de Cuenca. En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera.

Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros y, es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así pues, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza y veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que, "La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración, con eficacia tanto frente a terceros pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento, con carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental" contiene una doble (sino más) vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas*».

En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

"una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9.3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina -esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas-, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

SEXTA. Modificación y Revisión de los caudales concesionales *(artículo 38, en concreto, apartados 3 y 5).*

La redacción del apartado 3 del artículo 38 es tan abierta que confiere a la Administración una gran libertad de decidir lo que considere una "modificación de los supuestos determinantes del otorgamiento de la concesión", de modo que podría llegar a modificar el caudal concesional en perjuicio del concesionario sin que éste tenga derecho a indemnización alguna.

Nuevamente, viene la propuesta de texto normativo del Plan Hidrológico a vulnerar los derechos de los concesionarios existentes. Las causas de modificación o revisión de las concesiones están taxativamente establecidas por el T.R.L.A. y desarrolladas por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico; de forma que constituyen un *númerus clausus* que no es posible ampliar sin una formal modificación de la mencionada Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Por su parte, el apartado 5 del referido artículo 38, basándose en que el título concesional no garantiza los caudales concesionales, estima que una revisión de los caudales ecológicos no supone la revisión de la concesión. Esta afirmación no puede sostenerse en modo alguno pues (i) en muchas concesiones aparece el caudal ecológico como uno de los parámetros a respetar y (ii) un incremento del caudal ecológico significa un decremento del caudal que queda disponible para ser derivado. Por tanto, la variación del caudal ecológico supone una modificación transcendente en los términos concesionales.

Tanto mas en cuanto que no existe en este momento un consenso científico en cuanto a la validez metodología de cálculo seleccionado (a lo que ya nos hemos hecho referencia). Por tanto, cualquier inferencia particular que se realice, siempre será experimental y con cargo al concesionario. Es decir, totalmente arbitrario y contrario a los intereses del administrado y se estará incurriendo en una notable inseguridad jurídica, en una clara violación —por ser una remisión a una norma en blanco—, del derecho de defensa de los administrados.

En consecuencia, solicitamos el reconocimiento expreso que la alteración de un caudal ecológico determina la alteración del título concesional, y en consecuencia, un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública con la consiguiente obligación de indemnizar al concesionario

SÉPTIMA. Escala de peces

Estimamos que se debiera hacerse explícita mención a que este precepto no resulta de aplicación a los aprovechamientos existentes que no tengan expresamente establecido en su título concesional la obligación de la construcción de una escala de peces.

Por otro lado, en las modificaciones de las concesiones solo debiera ser aplicable a los supuestos de ampliación del caudal concesional, en tanto que es una decisión dimanante de la libre voluntad del concesionario.

Si de lo que se desea con esta imposición es evolucionar el elemento a través de un proceso de I+D, el Plan debería diseñar los mecanismos de financiación concertada que posibiliten dicho desarrollo, tanto en cuanto a los elementos como en cuanto a las medidas de implantación.

Por todo lo expuesto a lo largo del presente escrito de sugerencias al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca del Cantábrico,

SOLICITO que, en tiempo y forma, se tenga por presentado el presente escrito de alegaciones al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca del Cantábrico Oriental y Occidental, y, en base a los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

En Bilbao, a 27 de Octubre de 2011



Fdo.: Pablo García
e.r. Barbo Energías Renovables, S.A.

e·on | España

e·on | España Centrales Hidráulicas

03 NOV. 2011

SALIDA

Al ILMO. SR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTABRICO.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 07/11/2011
OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 12:19:56
E001201100011366

Mº de Política Territorial y A.P.
Registro General
Delegacion del Gobierno en Cantabria
ENTRADA
Nº de Registro: 62667 /RG 3834614
Fecha: 3/11/2011 11:46:00

Plaza de España, 2
33071 Oviedo

D. Luis Fernández Rubio con DNI nº 13.892.534-M, en nombre y representación de la sociedad **E.ON GENERACIÓN, S.L.** con CIF nº B-62733126 y domicilio en Santander (39003), calle Medio nº 12, ante Vd. comparece y respetuosamente

EXPONE:

1.- Que por su publicación en el BOE de 4 de mayo de 2011, E.ON GENERACION, S.L. (en adelante, E.ON) ha tenido conocimiento del trámite de consulta pública de las "Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental en el ámbito de competencias del Estado y los Informes de Sostenibilidad Ambiental."

2.- Que por considerar que tales Propuestas afectan directamente a sus derechos y deben ser modificadas para su mejor adecuación a la legalidad vigente y a los intereses públicos, dentro del plazo concedido E.ON desea trasladar a esa Confederación las siguientes

ALEGACIONES:

435

<u>PRIMERA:</u> LOS REGÍMENES DE CAUDALES ECOLÓGICOS PROPUESTOS DEBEN SER REVISADOS Y, EN SU CASO, CONTRASTADOS CON ESTUDIOS DE DETALLE PARA CADA MASA DE AGUA.

Las razones que se argumentan son las siguientes:

A) Los regímenes de caudales ecológicos propuestos deben ser revisados porque se está ignorando el objetivo real de los caudales ecológicos, que es conseguir un buen estado/potencial ecológico.

La Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, IPH en adelante) cuyo objeto es la obtención de resultados homogéneos y sistemáticos en el conjunto de la planificación hidrológica, partiendo de la heterogeneidad intrínseca y de las diferentes características básicas de cada plan hidrológico, define los Caudales ecológicos, (también llamados mínimos o de mantenimiento) como:

"El régimen de caudales que permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición".

<u>Por lo tanto no debe perderse de vista que el objetivo final de los caudales ecológicos es la consecución del buen estado o potencial ecológico.</u>

Se adjunta al presente escrito, Anexo Técnico, en el que se puede comprobar que la mayoría de masas de agua donde E.ON Generación tiene concesiones, presentan un buen estado/potencial ecológico con los caudales actualmente circulantes, por lo que no está justificada la imposición de nuevos caudales.

Por otra parte, en aquellos casos en los que según la Propuesta existe un incumplimiento que no permite alcanzar el buen estado ecológico (en el caso de E.ON, 2 masas de agua de 9), consideramos que no está claramente definido el motivo del incumplimiento (por deficiencias en la metodología aplicada y/o la información disponible), por lo que los resultados obtenidos no se pueden considerar como concluyentes, tal y como se acredita en el Anexo Técnico adjunto.

436

Adicionalmente a los comentarios realizados al cálculo efectuado en la Propuesta, consideramos que no queda demostrado en absoluto que la imposición de caudales ecológicos sea la medida óptima para alcanzar el buen estado/potencial. De todos modos, también sería aplicable en este caso lo que de forma general se explica en el siguiente apartado (análisis coste-eficacia), es decir, debería estar analizado qué aporta a la consecución del buen estado/potencial ecológico la imposición de caudales y su coste asociado.

B) Debe realizarse un análisis coste-eficacia de la medida que supone la implantación de caudales ecológicos.

La Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60 CE, en adelante DMA) introdujo, como elemento novedoso en la Planificación Hidrológica, la obligatoriedad de realizar un análisis económico, entendido como una fuente de información relevante de cara a conseguir los objetivos ambientales de la Directiva. En relación con los programas de medidas, este análisis económico debe contener, según establece la DMA en su art. 5 y anexo II, apartado b, la información necesaria suficientemente detallada (teniendo en cuenta los costes asociados con la obtención de los datos pertinentes) para estudiar la combinación más rentable (en el sentido de "más coste-eficacia") de medidas que, sobre el uso del agua, deben incluirse en el programa de medidas de conformidad con el art.11, basándose en las previsiones de los costes potenciales de dichas medidas. Este es el punto en el que la DMA introduce el análisis coste-eficacia como una herramienta para diseñar y seleccionar el programa de medidas de cada Demarcación.

En el caso de los caudales ecológicos, estos análisis de coste-eficacia no aparecen en el estudio. No se plantea la evaluación de la contribución a la mejora del estado ecológico de una forma clara, concisa y demostrable. Se debería realizar un análisis del coste que conlleva la aplicación de dichos caudales frente al beneficio ambiental esperado.

C) Los regímenes de caudales ecológicos deben ser revisados porque los caudales finalmente propuestos no se encuentran claramente justificados.

Se aprecia una falta de claridad en la decisión final de los caudales propuestos en el Anejo 7 de la Propuesta de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación del Cantábrico (en adelante Propuesta de PHC). En las fichas de los Apéndices 5.1 y 5.2 (Anejo 5 PHC) se presentan multitud de cálculos pero no es posible trazar la forma de obtener los caudales que finalmente se proponen, con lo que quedan insuficientemente justificados. Los criterios para elegir uno u otro método parecen arbitrarios y varían en función de la masa.

Se ha seguido la metodología descrita en la IPH para la obtención de los caudales ecológicos, para ello se han empleado métodos hidrológicos e hidrobiológicos.

Para los primeros se ha empleado la serie de caudales medios diarios en condiciones naturales. Dicha serie ha sido generada a partir de la desagregación de datos medios mensuales modelados (SIMPA II, CEDEX), buscando un patrón de distribución diario correspondiente a una estación de control en régimen natural o cuasinatural próxima.

Se encuentra necesario detallar para cada masa de agua, qué "estación de control en régimen natural o cuasinatural" se ha empleado para la desagregación diaria de los datos mensuales.

Por otro lado se considera que los resultados así obtenidos, deben utilizarse con precaución en el caso de los valores extremos (percentiles 0 y 100) ya que se ven suavizados por la propia metodología. Existen casos en los que se han antepuesto estos cálculos a otros métodos de evaluación de caudales más robustos como los métodos hidrobiológicos, como por ejemplo en la masa Navia V.

Se considera necesario que en las masas en las que haya diferencias significativas entre los caudales obtenidos mediante métodos hidrológicos e hidrobiológicos, se desarrollen los "estudios complementarios y campañas de seguimiento que sean necesarios para determinar la aplicabilidad de los métodos y las modificaciones que, en su caso, sea

preciso introducir en el régimen de caudales ecológicos propuesto" tal y como determina la IPH en su apartado 3.4.1.4.1.1. Distribución temporal de caudales mínimos.

Tanto para los métodos hidrológicos como hidrobiológicos se presentan multitud de posibilidades de cálculo, todas ellas conforme a la IPH. En el caso de los primeros, se calculan el caudal básico (Palau et al), los percentiles 5 y 15 de la curva de caudales clasificados y el método de la media móvil de orden 21/25 (Jalón et al).

Para el caso de los métodos hidrobiológicos se emplean diferentes curvas de preferencia de distintas especies y autores, diferentes criterios para la elección de los caudales (50-80% del Hábitat Potencial Útil (HPU) máximo o cambio significativo de pendiente en la curva HPU-Caudal), así como diferentes posibilidades de establecer los máximos de HPU (percentiles 15, 20 y 25 de la serie de caudales medios diarios) cuando las curvas caudal-HPU no alcancen máximos.

Todas estas metodologías ofrecen un número elevado de resultados, en ocasiones bastante dispares entre sí.

La elección de uno u otro método varía de unas masas a otras de forma aparentemente arbitraria, por lo que se cree necesaria una explicación detallada, caso por caso, del proceso seguido para la elección final de los caudales propuestos.

En el anexo técnico adjunto, en el apartado "valoración técnica de la metodología empleada" se puede ver el análisis de detalle a qué nos referimos para cada cuenca.

SEGUNDA.- LA IMPOSICION DE CAUDALES ECOLOGICOS PUEDE SUPONER UN PERJUICIO PARA EL INTERÉS GENERAL.

Sin olvidar que obviamente la imposición de caudales ecológicos se realiza con el objetivo de mejorar la calidad de nuestras masas de agua, no debemos olvidar las consecuencias derivadas de una decisión como esta.

Por un lado cabe comentar la pérdida de producción de energía hidráulica que supondrá, ya que en la mayor parte de las situaciones el caudal ecológico no se podrá turbinar por las centrales existentes debido a que su diseño no se adecua a éstos.

El vertido de este recurso desaprovechado motivará que su producción asociada deba ser compensada mediante otras fuentes alternativas, lo que supone una pérdida de eficiencia para el sistema y conllevará con toda seguridad un aumento en el uso de combustibles fósiles.

Por otro lado y como es sabido, la energía hidráulica es la que dota de versatilidad al sistema, siendo la única energía que, debido a su corto tiempo de respuesta, puede modular los desajustes entre oferta y demanda e incluso contribuir a la estabilidad de la red.

TERCERA.- LA IMPOSICION DE CAUDALES ECOLOGICOS SUPONE UN PERJUICIO ECONÓMICO ELEVADO PARA E.ON GENERACIÓN S.L.

Como se menciona en el punto anterior, en caso de que finalmente se establezcan los regímenes de caudales recogidos en el Anejo nº 7 de la Propuesta de PHC, las centrales hidroeléctricas de E.ON Generación S.L. dejarán de turbinar esos caudales y por tanto se producirá un perjuicio económico importante.

Con el fin de poner de manifiesto el orden de magnitud de este impacto económico, hemos realizado una estimación simplificada en base a los siguientes criterios:

1) Centrales tipo fluyente: estas centrales constan de un azud que deriva el agua a una conducción y posteriormente la devuelve al río una vez turbinada, generalmente varios Km aguas abajo del punto de toma. En estos casos la turbinación del caudal ecológico resulta inviable, por lo que el criterio de valoración utilizado consiste en tomar un registro histórico de producción (del

año 2000 al 2011) y asumir que cuando la central está funcionando a plena carga no hay impacto, mientras que en el resto de escenarios se deberá soltar en el azud el caudal ecológico correspondiente a cada época del año.

2) Centrales a pie de presa: estas centrales toman el agua del embalse y lo retornan al río justo aguas abajo de la presa o a escasa distancia de la misma. En este caso el impacto se ha estimado contabilizando las horas en que la central está parada y asumiendo que en esas horas hay que soltar el caudal ecológico correspondiente a cada época del año.

Con los datos de caudales obtenidos en el Anexo Técnico adjunto y aplicando los criterios anteriores, se han realizado los cálculos para todas las centrales afectadas. Los resultados se recogen en la siguiente tabla:

	ARENAS	CAMARMEÑA	URDON	LA PARAYA	BARCENA	TORINA	DOIRAS	ARBÓN
ene	21.646,37 €	24.300,37 €	8.890,70 €	11.488,85 €	7.570,43 €	6.979,37 €	- €	36.783,49 €
feb	20.661,61 €	20.282,16 €	8.066,69 €	10.572,86 €	5.744,21 €	6.303,95 €	- €	35.661,02 €
mar	16.258,26 €	19.768,96 €	7.551,80 €	9.307,14 €	7.031,52 €	6.979,37 €	- €	44.034,39 €
abr	12.961,00 €	16.000,05 €	7.899,59 €	8.339,33 €	8.320,12 €	6.754,23 €	- €	45.763,25 €
may	10.610,14 €	10.775,50 €	8.388,89 €	8.113,96 €	8.309,03 €	5.816,15 €	- €	40.448,00 €
jun	16.851,98 €	16.067,36 €	8.255,94 €	6.660,68 €	8.872,27 €	5.628,53 €	- €	43.962,52 €
jul	11.640,70 €	12.263,67 €	4.940,83 €	1.358,06 €	5.540,79 €	3.489,69 €	- €	34.325,55 €
ago	8.759,75 €	11.645,80 €	932,58 €	- €	4.129,01 €	3.489,69 €	- €	35.397,34 €
sep	7.528,61 €	7.302,20 €	3.738,31 €	1,70 €	2.531,62 €	3.377,12 €	- €	35.268,28 €
oct	9.167,41 €	11.312,43 €	4.358,20 €	2.958,73 €	2.868,30 €	3.489,69 €	- €	33.717,97 €
nov	14.459,59 €	18.226,85 €	5.087,14 €	6.970,41 €	6.592,98 €	5.628,53 €	- €	32.458,84 €
dic	15.047,48 €	18.642,99 €	6.013,58 €	8.246,09 €	6.611,17 €	5.816,15 €	- €	22.994,49 €
total	**165.592,90 €**	**186.588,34 €**	**74.124,26 €**	**74.017,81 €**	**74.121,44 €**	**63.752,46 €**	**- €**	**440.815,14 €**

441

Para la valoración económica del impacto se ha utilizado el precio medio del MWh publicado por el OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) correspondiente a la media entre enero y septiembre de 2011, que fue de 51,6 €/MWh.

Como se puede observar el impacto económico anual es elevado, superando el millón de euros al año para todas las concesiones de E.ON GENERACIÓN S.L. Teniendo en cuenta que la mayoría de las concesiones caducan en el año 2060, el importe total del impacto sin actualizaciones de precios casi llegaría a los 50 millones de euros.

CUARTA.- LA IMPOSICION DE CAUDALES ECOLOGICOS QUE NO FIGURAN EN LOS TÍTULOS CONCESIONALES, DEBE SER OBJETO DE INDEMNIZACION.

Del texto de la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico cabe apreciar que esa Confederación tiene el criterio de que el régimen de caudales ecológicos puede ser impuesto a todos los titulares de aprovechamientos de agua, y ello con independencia de que tales caudales ecológicos figuren o no figuren en los títulos concesionales, sin que a su juicio proceda ningún tipo de indemnización o compensación, salvo supuestos especiales de desaparición o inviabilidad del aprovechamiento (artículos 10 y 47). Únicamente se prevé un diferente tratamiento "procesal" para su aplicación, ya que sería directamente exigible a las concesiones que se otorguen con posterioridad a la entrada en vigor del Plan Hidrológico y a las que incluyan la previsión en el clausulado del título, mientras que al resto de las concesiones (incluidas las que no hacen ningún tipo de mención al respecto en el título), el régimen le sería de aplicación después de que se comunique a los respectivos titulares.

Consideramos que este criterio, en la medida que puede amparar la imposición de restricciones no previstas en el título concesional sin pago de ninguna indemnización u otras compensaciones al titular afectado, no se ajusta a la vigente legislación. Por el

442

contrario, E.ON entiende que la normativa en vigor permite, ciertamente, imponer al concesionario limitaciones de caudales ecológicos u otras modificaciones en aras del interés general, pero ello exige un procedimiento de revisión de la concesión y de indemnización en caso de suponga perjuicios económicos para el perjudicado.

En concreto, el criterio de E.ON resulta de la literalidad del artículo 65 de la Ley de Aguas, que literalmente establece lo siguiente:

"1. Las concesiones podrán ser revisadas:

a. Cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
b. En casos de fuerza mayor, a petición del concesionario.
c. **Cuando lo exija <u>su adecuación</u> a los Planes Hidrológicos.**

2. (...)

3. **Sólo en el caso señalado en el párrafo c) del apartado 1, el concesionario perjudicado <u>tendrá derecho a indemnización</u>, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa.**

4. (...)"

Igualmente, el criterio que defendemos se encuentra amparado en los principios esenciales de seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, así como la protección de la propiedad privada, que se recogen los artículos 9 y 33 de nuestra Constitución.

En consecuencia, consideramos que la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico, y en particular su artículo 51, debe ser modificada al objeto de que incluya que la imposición de caudales ecológicos no previstos en el título concesional, o previstos en un volumen inferior, deberá ser objeto de indemnización para compensar a su titular de los perjuicios que le ocasione.

Por todo lo cual, **SOLICITA**:

Tenga por presentado este escrito de Alegaciones y en su virtud se digne en modificar la Propuesta del Proyecto del Plan Hidrológico en los términos anteriormente expuestos, y concretamente en los siguientes aspectos:

- Revisar los regímenes de caudales ecológicos que figuran en el anejo 7 de la Propuesta de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación del Cantábrico, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y analizando caso por caso el Coste/Beneficio de la medida.
- Tener en cuenta todas las variables medioambientales y de interés general a la hora de imponer caudales ecológicos en cauces con presencia de centrales hidroeléctricas.
- Tener en consideración el grave perjuicio económico que estos caudales causan a mi representada.
- Reflejar que el concesionario perjudicado por la imposición de caudales ecológicos no previstos en el título concesional (o previstos en un volumen inferior) tendrán derecho a indemnización, conforme a lo previsto en el artículo 65.3 de la Ley de Aguas.

Se adjunta **Anexo Técnico**: Cálculo de los caudales ecológicos en los puntos de toma de las concesiones de E.On Generación, S. L. en la Demarcación del Cantábrico, según la propuesta del Plan Hidrológico del Cantábrico y consideraciones técnicas en cada caso. 2 de noviembre de 2011.

Es de justicia que solicita en Santander, a 3 de noviembre de 2011

Por E.ON GENERACIÓN, S.L.

D. Luis Fernández Rubio

444

e·on | España

ANEXO TÉCNICO A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR E.ON GENERACIÓN S. L. A LA PROPUESTA DEL PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA DEMARCACIÓN DEL CANTÁBRICO.

Cálculo de los caudales ecológicos en los puntos de toma de las concesiones de E.On Generación, S. L. en la Demarcación del Cantábrico, según la propuesta del Plan Hidrológico del Cantábrico y consideraciones técnicas en cada caso.

1.- Cálculo de los caudales ecológicos en los puntos de toma de las concesiones de E.ON Generación S.L.

El texto de la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico (en adelante Propuesta de PHC), en el capítulo tercero (Regímenes de caudales ecológicos) de la Normativa, se define la figura de "régimen de caudales ecológicos" y se establecen las pautas para su cálculo y aplicación. En el apéndice 7. se definen los caudales ecológicos para cada una de las masas de agua de la Demarcación.

En primer lugar procedemos a calcular los caudales ecológicos mínimos en los puntos de toma de las concesiones de nuestras centrales hidráulicas que no coincidan con el final de una masa de agua, en base a los datos recogidos en el Anejo 7.1 y siguiendo la metodología descrita en el artículo 11 de la Propuesta de PHC. Para ello se han calculado a partir de un Modelo Digital del Terreno las superficies de cuenca vertiente en cada punto. No se han considerado los caudales ecológicos correspondientes a situación de sequía, ya que no será un escenario habitual.

En la tabla siguiente se reflejan las superficies de cuenca en los puntos de toma, así como de la masa en la que se encuentran y de la masa superior:

Central	Azud	Sup cuenca en azud (km2)	Masa agua	Sup cuenca de la masa (km2)	Masa agua superior	Sup cuenca de la masa superior (km2)
ARENAS	PONCEBOS	266	Río Cares II	279	Río Cares I	65
CAMARMEÑA	CAIN	119	Río Cares II	279	Río Cares I	65
LA PARAYA	ALLER	14	Río Aller I	57		
LA PARAYA	LLANANZANES	10	Arroyo de Llananzanes	19		
LA PARAYA	LORRIA	10	Río Aller I	57		
BARCENA	GORGOLLON	94	Río Besaya I	199		
TORINA	AGUAYO	5	Río Besaya I	199		
TORINA	ALSA	19	Alsa/Torina	19		
URDON	URDON	17	Río Urdón	40		

A partir de las superficies de cuenca vertiente y de los caudales propuestos para cada masa en el Anejo 7.1, los caudales obtenidos para cada punto de toma son:

Central	Azud/Presa	Caudal mínimo ecológico (m3/s)			Volumen anual (hm3)
		Aguas altas	Aguas Medias	Aguas Bajas	
ARENAS	PONCEBOS	1,37	1,18	0,71	33,81
CAMARMEÑA	CAIN	0,60	0,50	0,29	14,45
LA PARAYA	ALLER	0,09	0,07	0,04	2,14
LA PARAYA	LLANANZANES	0,07	0,06	0,03	1,64
LA PARAYA	LORRIA	0,07	0,05	0,03	1,53
BARCENA	GORGOLLON	0,38	0,28	0,17	8,64
TORINA	AGUAYO	0,02	0,02	0,01	0,46
TORINA	ALSA	0,06	0,05	0,03	1,50
URDON	URDON	0,09	0,08	0,05	2,24
DOIRAS	DOIRAS	13,14	9,02	5,66	288,44
ARBÓN	ARBÓN	14,37	9,86	6,25	316,02

2.- Estado/potencial ecológico en las masas de agua en las que se ubican los puntos de toma de las concesiones de E.ON Generación S.L.

Adicionalmente se han analizado las fichas de masas de agua (obtenidas a través del Foro de Participación Pública). A continuación se muestra el estado/potencial ecológico de las masas en las que se sitúan los puntos de toma y de las situadas aguas abajo:

Nombre de la Masa	Código	Método evaluación	Estado/Potencial ecológico
Río Aller I	ES156MAR001172	Multimétrico invertebrados	Moderado1
Río Aller II	ES156MAR001160	Multimétrico invertebrados	Moderado1
Río Aller III	ES158MAR001201	Juicio de experto	Bueno
Arroyo de Llananzanes	ES156MAR001171	Juicio de experto	Malo
Embalse Alsa/Torina	ES100MAR000320	Juicio de experto	Bueno
Río Besaya I	ES105MAR000330	Juicio de experto	Bueno
Río Besaya II	ES111MAR000370	NORTI	Bueno
Río Besaya III	ES112MAR000380	NORTI	Bueno
Río Urdón	ES126MAR000560	Multimétrico invertebrados	Bueno
Río Cares II	ES131MAR000610	NORTI	Bueno
Deva III	ES132MAR000621	NORTI	Bueno
Embalse de Doiras	ES232MAR002120	Juicio de experto	Bueno
Embalse de Arbón	ES234MAR002160	Juicio de experto	Bueno
Navia V	ES234MAR002150	Multimétrico invertebrados	Moderado

3.- Consideraciones técnicas en cada caso

A continuación pasamos a analizar el régimen de caudales ecológicos propuesto para cada masa de agua en las que se sitúan nuestras centrales hidráulicas, dividido por cuencas:

3.1- Cuenca del río Besaya:

En la masa de agua de cabecera (Besaya I, ES105MAR000330) se encuentran las centrales hidroeléctricas de Bárcena (expediente concesional H/39/00158) y Torina (expediente concesional H/39/01137), siendo los puntos de derivación los azudes de Gorgollón (UTM ED50 H30, X: 413122; Y: 4771581) y Aguayo (UTM ED50 H30, X:

416341; Y: 4767056) respectivamente. En todos estos puntos de toma se ha visto aumentado el caudal mínimo estival en un 17%, frente al Plan Hidrológico de Cuenca vigente.

Además en esta misma cuenca se encuentra el embalse de Alsa, que constituye junto con su cuenca vertiente la masa ES100MAR000320 y cuyo punto de toma para la central de Torina (expediente concesional H/39/00106) es la propia presa de Alsa (UTM ED50 H30, X: 418688; Y: 4771855).

La concesión de la central de Bárcena no establece la obligación de dejar caudal ecológico, pese a lo cual, el río Besaya tiene en todo momento un caudal mínimo circulante debido a aportes externos, filtraciones y/o sueltas de agua. Este caudal se ha demostrado suficiente para garantizar el buen estado ecológico de la masa de agua en la que se encuentra (Besaya I) así como de la situada inmediatamente aguas abajo (Besaya II, ES111MAR000370), por lo que consideramos que no es necesario soltar ningún caudal adicional, máxime cuando existe una afección a tercero y sin disponer de estudios concretos que permitan acreditar la mejora medioambiental que va a suponer para el río y el ratio Coste/Beneficio de la medida.

La concesión para derivar las aguas del río Aguayo hacia el embalse de Alsa y posteriormente a la central de Torina no establece la obligación de dejar caudal ecológico. En este caso particular es la propia Confederación Hidrográfica del Cantábrico la que gestiona el agua, llevándola al embalse del Ebro en época de lluvias y devolviéndola al embalse de Alsa en estiaje. Independientemente de lo anterior, el caudal circulante en la actualidad en el río Aguayo se ha demostrado suficiente para garantizar el buen estado ecológico de la masa de agua en la que se encuentra (Besaya I) así como de la situada inmediatamente aguas abajo (Besaya II, ES111MAR000370), por lo que consideramos que no es necesario soltar ningún caudal adicional, máxime cuando existe una afección a tercero y sin disponer de estudios concretos que permitan acreditar la mejora medioambiental que va a suponer para el río y el ratio Coste/Beneficio de la medida.

La concesión para derivar las aguas del embalse de Alsa a la central hidroeléctrica de Torina tampoco establece la obligación de dejar caudal ecológico, pese a lo cual, el río Torina tiene en todo momento un caudal mínimo circulante debido a aportes externos, filtraciones y/o sueltas de agua. Este caudal se ha mostrado suficiente para garantizar el buen estado ecológico de la masa de agua en la que se encuentra (Besaya I) así como de la situada inmediatamente aguas abajo (Besaya II, ES111MAR000370), por lo que entendemos que no es necesario soltar ningún caudal adicional, máxime cuando existe una afección a tercero y sin disponer de estudios concretos que permitan acreditar la mejora medioambiental que va a suponer para el río y el ratio Coste/Beneficio de la medida.

Valoración técnica de la metodología empleada

A parte de lo anterior, y entrando ya en una valoración técnica de la metodología empleada, en esta masa se han empleado métodos hidrobiológicos para la determinación de los caudales ecológicos mínimos y pese a las dificultades de trazabilidad de los cálculos realizados entre las fichas presentadas en el Apéndice 5.1 del Anejo 5 y la propuesta final de caudales del Anejo 7.1, se intuye que se ha tomado como valor de caudal mínimo en el punto de campo el valor de 0,044 m3/s que corresponde al caudal que proporciona el 50% del Hábitat potencial útil (en adelante HPU) al estadio juvenil de la trucha común, tomando como máximo de HPU (la curva no presenta máximo) el HPU correspondiente al percentil 25 de la serie de caudales medios diarios. Esta decisión parece algo arbitraria y poco fundamentada ya que según la Instrucción de Planificación Hidrológica (en adelante IPH), se podría tomar como máximo de HPU hasta el correspondiente al percentil 10 de la serie de caudales medios diarios. Si se considera el percentil 15, que es el menor percentil para el que se presenta la ficha en el Apéndice 5.1 del Anejo 5, el caudal mínimo en el punto de campo sería 0,032 m3/s, lo que supondría un caudal mínimo bastante menor.

3.2- Cuenca del río Cares:

En esta cuenca se ubican las centrales hidroeléctricas de Camarmeña (expediente concesional H/33/99-6-6) y Arenas (expediente concesional H/33/01461), siendo los puntos de toma los azudes de Caín (UTM ED50 H30, X: 345637; Y: 4786754) y Poncebos (UTM ED50 H30, X: 351320; Y: 4791800) respectivamente, ambos situados en la masa Cares II (ES131MAR000610). En estos dos azudes se han visto incrementados los caudales mínimos estivales en un 16% y 26% respectivamente, frente al Plan Hidrológico de Cuenca Vigente.

En la situación actual se está manteniendo un caudal no cuantificado que fluye por las escalas de peces de ambos azudes y que se ha demostrado suficiente para garantizar el buen estado ecológico de la masa de agua en la que se encuentran (Cares II), por lo que consideramos que no es necesario soltar ningún caudal adicional, máxime cuando existe una afección a tercero y sin disponer de estudios concretos que permitan acreditar la mejora medioambiental que va a suponer para el río y el ratio Coste/Beneficio de la medida.

Valoración técnica de la metodología empleada

A parte de lo anterior, y entrando ya en una valoración técnica de la metodología empleada, en esta masa se han empleado métodos hidrobiológicos para la determinación de los caudales ecológicos mínimos y pese a las dificultades de trazabilidad de los cálculos realizados entre las fichas presentadas en el Apéndice 5.1 del Anejo 5 y la propuesta final de caudales del Anejo 7.1, se intuye que se ha tomado como valor de caudal mínimo en el punto de campo el valor de 0,170 m3/s que corresponde al caudal que proporciona el 50% del HPU al estadio adulto de la trucha común, tomando como máximo de HPU el correspondiente al percentil 25 de la serie de caudales medios diarios. Esta decisión parece algo arbitraria y poco fundamentada ya que según la IPH, se podría tomar como máximo de HPU hasta el correspondiente al percentil 10 de la serie de caudales medios diarios.

450

3.3- Cuenca del río Aller

En esta cuenca se ubica la central hidroeléctrica de La Paraya (expediente concesional H/33/99-1-5), que cuenta con tres puntos de toma, uno en el río Aller (UTM ED50 H30, X: 292838; Y: 4769909), otro en el arroyo Lorria (UTM ED50 H30, X: 292037; Y: 4769371) y el tercero en el Arroyo Llananzanes (UTM ED50 H30, X: 288151; Y: 4769993), los dos primeros en la masa de agua de cabecera del río Aller (Aller I, ES156MAR001172) y el último en la masa de agua Arroyo de Llananzanes (ES156MAR001171). En estos tres azudes se han visto incrementados los caudales mínimos estivales en un 5% aproximadamente, frente al Plan Hidrológico de Cuenca vigente.

En la concesión no se establecen caudales mínimos, pese a lo cual, los ríos tienen en todo momento un caudal mínimo circulante debido a aportes externos, filtraciones y/o sueltas de agua. Aunque el estado ecológico de la masa de agua río Aller I es moderado, debe tenerse en cuenta (y así se ha reconocido en las reuniones participativas de la DMA) que los resultados obtenidos aplicando la metodología general a tramos de cabecera de la Demarcación no ha sido plenamente satisfactorio, al presentar mal estado ecológico masas de agua en las que no se conocen presiones o son insignificantes. Es probable que con nuevos ajustes de la metodología a la realidad particular de este tipo de cuencas puedan llevar a resultados diferentes, en particular al buen estado ecológico. En el caso del arroyo Llananzanes el estado ecológico es malo en base a juicio de experto, algo que no nos parece debidamente justificado, y más teniendo en cuenta que existe una afección a terceros. Por tanto creemos que en este caso los caudales ecológicos de la propuesta de PHC deben revisarse y realizar estudios específicos, ya que es una zona de cabecera que a primera vista no presenta una problemática importante.

Valoración técnica de la metodología empleada

A parte de lo anterior, y entrando ya en una valoración técnica de la metodología empleada, consideramos que la evaluación del caudal ecológico al final de las masas no

queda suficientemente justificada ya que no es posible trazar cómo se ha llegado a los valores finales propuestos (0,17 m3/s en Aller I y 0,06 m3/s en el Arroyo Llananzanes). El caudal obtenido mediante el método del caudal básico (Palau et al) es de 0,12 m3/s y 0,042 m3/s respectivamente, lo que supone una diferencia sustancial con lo propuesto.

3.4- Cuenca del río Urdón

En este río, afluente del Deva, se encuentra la central hidroeléctrica de Urdón (expediente concesional H/39/00107), con un único punto de derivación en el azud del mismo nombre (UTM ED50 H30, X: 363746; Y: 4789763). La masa de agua se denomina igualmente, Urdón (ES126MAR000560). El caudal mínimo estival propuesto en la Propuesta de PHC, supone un aumento del 36% con respecto al valor del 10% del caudal medio diario que establece el Plan vigente.

En la concesión no se establecen caudales mínimos, pese a lo cual, los ríos tienen en todo momento un caudal mínimo circulante debido a aportes externos, filtraciones y/o sueltas de agua. Este caudal se ha demostrado suficiente para garantizar el buen estado ecológico de la masa de agua en la que se encuentra (Urdón), así como de la situada inmediatamente aguas abajo (Deva III, ES132MAR000621), por lo que consideramos que no es necesario soltar ningún caudal adicional, máxime cuando existe una afección a tercero y sin disponer de estudios concretos que permitan acreditar la mejora medioambiental que va a suponer para el río y el ratio Coste/Beneficio de la medida.

Valoración técnica de la metodología empleada

A parte de lo anterior, y entrando ya en una valoración técnica de la metodología empleada, en este caso el caudal propuesto a final de la masa (0,12 m3/s) corresponde al percentil 5 de la serie de caudales medios diarios a pesar de que mediante el método del caudal básico (Palau et al) se obtiene un caudal de 0,071 m3/s.

3.5- Cuenca del río Navia

En la cuenca del río Navia se encuentran las presas y embalses de Doiras y Arbón, además de las centrales hidroeléctricas de Doiras (expediente concesional H/33/99-2-1), Silvón (expediente concesional H/33/02975) y Arbón (expediente concesional H/33/02371).

Presa de Doiras

En la presa de Doiras, la concesión del aprovechamiento de la central de Silvón incluye la condición de soltar 6,2 m^3/s o el fluyente en el cauce, en caso de ser menor, debiendo garantizar en todo caso al menos un caudal de 1,56 m^3/s que se suministrará incluso con cargo al agua almacenada en el embalse. Estos caudales pueden suministrarse en términos de caudales medios diarios en el caso que la cola del embalse de Arbón llegue a la presa de Doiras.

El caudal recogido en la propuesta de PHC en aguas bajas es similar al que se mantiene actualmente, y aunque supone un incremento en aguas medias y altas no supone a priori un daño relevante, siempre y cuando se respete la posibilidad de suministrarlo en términos de caudales medios diarios.

En cualquier caso conviene resaltar que con los caudales que se sueltan en la actualidad la masa de agua situada aguas abajo de la presa, denominada Embalse del Arbón (ES234MAR002160), presenta un buen potencial ecológico.

Presa de Arbón

La masa de agua situada aguas debajo de la presa de Arbón es la Navia V (ES234MAR002150) y se ha clasificado como muy modificada. Esta masa se ve afectada por las mareas en lo que respecta a la variación de la lámina de agua, aunque no tiene intrusión salina.

Actualmente no existe obligación concesional de soltar caudal ecológico, pese a lo cual el tramo de río tiene en todo momento un caudal mínimo circulante debido a aportes naturales, filtraciones y/o fugas de las máquinas (inherentes a su diseño).

Con este caudal la masa de agua situada inmediatamente aguas abajo de la presa (Navia V) presenta un potencial ecológico moderado, pero con un valor de EQR = 0.54 (valor de 2008), muy cercano al valor objetivo EQR=0.6. Además la única medición adicional que existe es del año 2007 y arrojaba un valor de EQR=0.51, lo que puede significar que el potencial ecológico está mejorando progresivamente.

La propia Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha pospuesto la consecución del buen potencial ecológico en esta masa hasta el año 2021. Entendemos que esto es debido a la falta de información y a la peculiaridad de esta masa (afectada por la marea).

Valoración técnica de la metodología empleada

A parte de lo anterior, y entrando ya en una valoración técnica de la metodología empleada, en esta masa se han empleado métodos hidrobiológicos para la determinación de los caudales ecológicos mínimos y pese a los resultados obtenidos, que demuestran que los caudales mínimos actuales garantizan el 80 % del HPU para los estadios y especies considerados (salvo la freza del salmón que en cualquier caso se garantiza el 30% del HPU que determina la IPH para masas de agua muy modificadas), el caudal establecido es cercano al doble (6,25 m3/s). La razón que se esgrime es que los valores obtenidos por medio de métodos hidrobiológicos, están por debajo del percentil 0 de la serie de caudales medios diarios. Dicha serie ha sido generada a partir de la desagregación de datos medios mensuales modelados (SIMPA II, CEDEX), buscando un patrón de distribución diario correspondiente a una estación de control en régimen natural o cuasinatural próxima. Esta metodología planteada en la IPH es una buena aproximación para los objetivos perseguidos, pero debe aplicarse con precaución cuando se tratan los valores extremos (percentiles 0 y 100) ya que se ven enmascarados por la propia metodología.

En una valoración previa realizada por un consultor experto en la materia, creemos que la aplicación de los caudales ecológicos del Anejo 7. contribuiría a lo sumo con un incremento de entre el 5 y el 10% del HPU, lo que a priori no significaría un aumento importante en el EQR que permitiera alcanzar el buen estado ecológico.

Debido a las razones detalladas anteriormente y que se resumen a continuación:

1) Masa de agua clasificada como muy modificada
2) Situación peculiar por estar afectada hidrodinámicamente por las mareas
3) Existe un caudal mínimo circulante en todo momento
4) Los métodos hidrobiológicos empleados para la evaluación de los caudales ecológicos demuestran que los caudales actuales garantizan el HPU necesario para las especies objetivo conforme a lo que determina la IPH
5) La mejora en el río en términos de HPU derivada de la aplicación de los nuevos caudales ecológicos sería muy escasa
6) El potencial ecológico es cercano (o incluso pudiera haber alcanzado) el objetivo planteado para 2021

Consideramos que no es necesario soltar ningún caudal adicional, máxime cuando existe una afección a tercero y sin disponer de estudios concretos que permitan acreditar la mejora medioambiental que va a suponer para el río y el ratio Coste/Beneficio de la medida.

04 11 2011
CORREOS
VITORIA

AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. OSCAR DIEZ DE ULZURRUN GOÑI, mayor de edad, domiciliado a efectos de notificación en Avda. de Egües, 78 de GORRAIZ (Navarra) 31620, provisto de D.N.I. nº 18200091-F actuando para este acto en su calidad de Administrador de la mercantil REYSALDE, S.L, domiciliada también en Avda. de Egués, 78 31620 GORRAIZ (Navarra) y cuyo CIF es B31786866.

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

A L E G A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 07/11/2011 OFICINA SAN SEBASTIAN 13:30:12
E002201100000846

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 136 de la Constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art. 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

459

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) <u>Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.</u>

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

460

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles -petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

461

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

462

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,-hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de*

465

la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..) ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente *("contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

468

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.´

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

   Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

   "/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

470

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) <u>Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.</u>

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

471

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada".

472

Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5° debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral "*De Facto*" de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo en Tolosa a 28 de octubre de 2011.

REYSALDE, S.L.
C.I.F. B-31786866
Avda. Navarra, 78
31195 BERRIOPLANO (Navarra)

Fdo.: Oscar Díez de Ulzurrun Goñi
Administrador

474

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 04/11/2011
OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 13:22:58
E0012011000011330

Expte.: 11045M204

PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA
DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL

- ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO (ALAVA) –

Una vez consultado el citado documento, se realizan las siguientes consideraciones:

Dentro de las actuaciones a realizar, se debiera tener en cuenta la solución del problema generado por el vertido de aguas fecales de los siguientes núcleos rurales en la cabecera del río Nervión:

- Tertanga.
- Délika.
- Aloria.

Entendiendo que se trata de entidades locales de escasa población, se propone se estudie las siguientes alternativas, teniendo en cuenta criterios como "Caudal mínimo ecológico", "calidad mínima del agua", etc:

- Tratamiento en la propia localidad.
- Traslado hasta la EDAR de Orduña.
- Conexión a la red de saneamiento de Orduña (caso de Tertanga).
- Cualquier otra que se estime adecuada.

Dichas actuaciones se debieran recoger dentro del citado plan, así como estimar su valoración, aunque no se contemplara su ejecución antes de diciembre del año 2015, a fin de que también se tengan en cuenta en la redacción del siguientes Plan Hidrológico.

En Amurrio, a 3 de noviembre de 2011.
El ingeniero municipal.

Cristina Llamas Menéndez

De: Jesús Daniel González Piedra
Enviado el: jueves, 03 de noviembre de 2011 17:58
Para: Cristina Llamas Menéndez
Asunto: RV: AYUNTAMIENTO AMURRIO-PLAN HIDROLÓGICO DHCO
Datos adjuntos: 11045M204-AMURRIO-PLAN HIDROLÓGICO DHCO-ALEGACIONES.doc

De: Directiva Marco
Enviado el: jueves, 03 de noviembre de 2011 17:16
Para: Jesús Daniel González Piedra
CC: abbonafonte@prointec.es; vpinilla@prointec.es; olopez1@tragsa.es
Asunto: RV: AYUNTAMIENTO AMURRIO-PLAN HIDROLÓGICO DHCO

Buenas tardes,

Os envío las alegaciones del ayuntamiento de Amurrio que llegaron a Directiva.marco.

Un saludo,

María

De: Iñigo Minguez - Amurrioko Udala [mailto:iminguez@amurrio.org]
Enviado el: jue 03/11/2011 15:11
Para: Directiva Marco
Asunto: AYUNTAMIENTO AMURRIO-PLAN HIDROLÓGICO DHCO

Por la presente se da traslado de informe referente a alegaciones a la Propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Cantábrico Oriental, a fin que se tenga en cuenta en la nueva redacción del mismo.Se enviará a su vez el mismo por correo ordinario a Jesús González Piedra, de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Atentamente. Iñigo Mínguez Ingeniero municipal del Ayuntamiento de Amurrio.

AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. FCO. JAVIER CELAYETA SAN SEBASTIAN , mayor de edad, domiciliado a efectos de notificación en PASEO EZTEGARA, 16-3º IZDA – 31780 BERA-NAVARRA, provisto de D.N.I. nº 72.654.173W, actuando para este acto en su calidad de APODERADO de la mercantil ELECTRA OLLOQUI S.A.,, domiciliada también en BERA - NAVARRA, y cuyo NIF es A20177036

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

A L E G A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
479
REGISTRO DE ENTRADA 07/11/2011 OFICINA SAN SEBASTIAN 13:25:39
E002201100000843

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 136 de la constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art. 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) <u>Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.</u>

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

482

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles - petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,-hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de*

487

la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..) ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente (*"contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

> ***"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".***

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.'

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

   Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

   "/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) **Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.**

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

493

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada".

494

Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral "*De Facto*" de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

4) La revisión se produce por acción de la Administración.

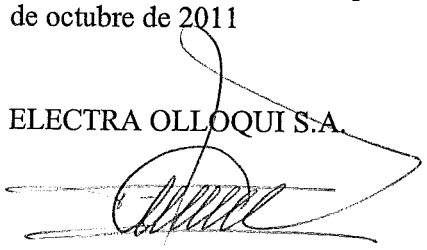
Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

PRIMERO Y UNICO.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo el presente documento en Bera el dia 31 de octubre de 2011

ELECTRA OLLOQUI S.A.



Fdo. Javier Celayeta San Sebastián

AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. OSCAR DIEZ DE ULZURRUN GOÑI, mayor de edad, domiciliado a efectos de notificación en Avda. de Egües, 78 de GORRAIZ (Navarra) 31620, provisto de D.N.I. nº 18200091-F actuando para este acto en su calidad de Administrador de la mercantil JUAN PELLO, S.A., domiciliada también en Avda. de Egués, 78 (31620) GORRAIZ (Navarra) y cuyo CIF es A-31-182504.

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

A L E G A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
497
REGISTRO DE ENTRADA 07/11/2011 OFICINA SAN SEBASTIÁN 13:31:45
E002201100000848

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 136 de la Constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art. 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) <u>Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.</u>

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

500

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles - petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

501

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

502

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

503

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,-hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de*

505

la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..) ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente *("contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

506

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

508

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.´

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

509

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

   Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

   "/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

510

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

511

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada".

512

Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral "*De Facto*" de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

513

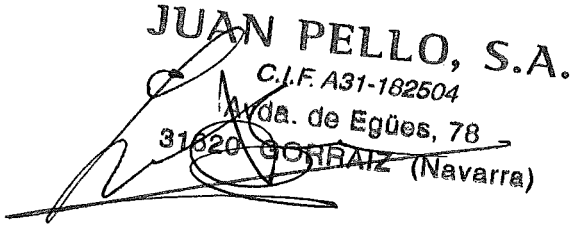
4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo en Gorraiz a 28 de octubre de 2011.



Fdo.: Oscar Díez de Ulzurrun Goñi
Administrador

514

04. 11. 2011
CORREOS
IRURTZUN

AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. Luis Astiz Garay, mayor de edad, domiciliado a efectos de notificación en Ctra. Zumarraga s/n (AZKOITIA), provisto de D.N.I. nº 15.851.501 Q, actuando para este acto en su calidad de gestor de la mercantil ASTIZUBI, S.L., domiciliada también en AZKOITIA (GIPUZKOA) y cuyo NIF es B20092904.

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

A L E G A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 07/11/2011
OFICINA SAN SEBASTIA
13:26:54
E00220110000000844

515

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 136 de la constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art. 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

517

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) <u>Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.</u>

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

518

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles - petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

520

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,-hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de*

523

la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..) ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente (*"contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

524

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

526

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.´

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

527

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

   Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

   "/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) <u>Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.</u>

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

529

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada".

530

Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral *"De Facto"* de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

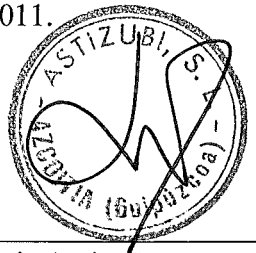
4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo en AZKOITIA a 03 de noviembre de 2011.



Luis Astiz Garay
Gestor

532

AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. OSCAR DIEZ DE ULZURRUN GOÑI, mayor de edad, domiciliado a efectos de notificación en Avda. de Egües, 78 de GORRAIZ (Navarra) 31620, provisto de D.N.I. nº 18200091-F actuando para este acto en su calidad de Administrador de la mercantil MARIN MUGAIRE, S.L., domiciliada también en Avda. de Egués, 78 (31620) GORRAIZ (Navarra) y cuyo CIF es B-31-953342.

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

A L E G A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA | OFICINA SAN SEBASTIAN
07/11/2011 | 13:29:24
E00220110000084[illegible]

533

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 136 de la Constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art. 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

535

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) <u>Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.</u>

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

536

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles -petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

537

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

538

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

539

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,-hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de*

541

la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..) ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión")* y no la actualmente vigente *("contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

543

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

544

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.´

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

"/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

546

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) <u>Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.</u>

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

547

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada".

548

Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral "*De Facto*" de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

549

4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo en Gorraiz a 28 de octubre de 2011.

MARIN MUGAIRE, S.L.
C.I.F. B-31953342
Avda. de Egües, 78
31620 GORRAIZ (Navarra)

Fdo.: Oscar Díez de Ulzurrun Goñi
Administrador

04.11.2011
CORREOS
GIPUZKOA

AL ILMO COMISARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DE LA DEMARCACION DEL CANTABRICO ORIENTAL

D. OSCAR DIEZ DE ULZURRUN GOÑI, mayor de edad, domiciliado a efectos de notificación en Avda. de Egües, 78 de GORRAIZ (Navarra) 31620, provisto de D.N.I. nº 18200091-F actuando para este acto en su calidad de Administrador de la mercantil SANTOLAZ, S.L, domiciliada también en Avda. de Egués, 78 31620 GORRAIZ (Navarra) y cuyo CIF es B-31-791627.

En virtud del presente escrito procedo a efectuar **ALEGACIONES** al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental:

A L E G A C I O N E S

1) Artículo 11 Régimen de Caudales Ecológicos

A nuestro juicio, la redacción de este artículo no se ajusta a Derecho habida cuenta de que sobre la supuesta base de la legislación de Aguas vigente se incluyen dos conceptos del todo punto contrarios al ordenamiento:

A. Por un lado, se preconiza la aplicación arbitraria de un cálculo del caudal ecológico sin que exista un consenso en cuanto a la base metodológica de su cómputo.

B. Al constituirse el Caudal Ecológico (CE) como una restricción de uso amparada por el Art. 59-7 del TRLA, el cambio de sistema de cálculo añade una nueva y diferente exigencia al título constitutivo de la concesión, por lo cual es retroactivo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
551
REGISTRO DE ENTRADA 07/11/2011
OFICINA SAN SEBASTIAN 13:30:59
E00220110000000847

El régimen de caudal ecológico, independientemente del sistema de cómputo utilizado, se plantea como de directa aplicación para todas aquellas concesiones de nueva concesión, e incluso, y ello es lo más grave, a las concesiones que incluyan esta previsión en su clausulado. Es decir, a aquellas que ya respetan el espíritu del Art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio.

Nada podemos decir sobre las nuevas concesiones. Ahora bien, con relación a las ya en vigor, siendo el título concesional un acto administrativo firme que en su momento debió tener en cuenta todas las afecciones de aplicación, cualquier alteración que a ella pudiera afectarle en la actualidad no puede considerarse más que como modificación de las anteriores, y por tanto retroactiva.

En resumen dos son las consecuencias que se deducen de esta regla:

1. Que la aplicación retroactiva de una norma de este tipo no es posible en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 136 de la Constitución).

2. Que en todo caso, dicha nueva restricción, al suponer una alteración esencial del titulo concesional con un efecto patrimonial tangible, debe dar lugar a una compensación al igual que aquellas previstas en la legislación de expropiación forzosa.

Concluimos por ello, que la aplicación del Art. 11 es retroactiva, discrecional y arbitraria, lo cual conduce a la formación para el administrado de un escenario de inseguridad jurídica que además, de producirse, debe ser objeto de indemnización.

2) Artículo 12 Caudales mínimos ecológicos

Es reconocido en la actualidad que no existe un consenso científico en cuanto a la metodología utilizada en el cálculo de los Caudales Ecológicos.

La inexistencia de una red de aforos lo suficientemente tupida como para tener un conocimiento minucioso de cada tramo de río, ha hecho que surjan variados modelos teóricos que con mayor o menor éxito intentan describir el comportamiento de los tramos fluviales.

En este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental adopta el sistema denominado como SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evadotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc.

El modelo en cuestión requiere para su exactitud un número tan grande de variables que su concreción en cada tramo de río se hace totalmente imposible. La necesidad de obtener una serie de valores que sirvan de base para el cálculo del Caudal Ecológico obliga a realizar una extrapolación genérica de datos que bajo nuestro punto de vista no necesariamente corresponde con la realidad.

Incluso el ANEXO V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – reconoce que (sic) *"Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."*

Resulta por ello fácil concluir que la aplicación de este modelo metodológico, por cuanto teórico y falto del suficiente rigor científico, no necesariamente nos conduce a una objetivización de la realidad, por lo que su manejo se torna arbitrario y por consiguiente injusto como consecuencia de una excesiva dosis de incertidumbre.

Por paradójico que parezca encontramos la solución en el marco jurídico que ampara el presente Plan Hidrológico: la Ley de Aguas, la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, que establece que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..."

Estudios específicos que debían haber sido reforzados por la supuesta voluntad de la administración, repetidamente mencionada, de consolidar el sistema a través de la Concertación con el Administrado. Concertación que entendemos no se produce de ninguna forma en el presente Plan Hidrológico, por lo menos tal y como se describe en las Instrucciones de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: ***"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".***

Según nuestro punto de vista, al plantarse un rango unilateral de datos sin soporte científico suficiente, la administración huye del espíritu y contenido de la Concertación. La convocatoria de una serie de reuniones informativas en las que nunca se ha tenido en cuenta la realidad del afectado, no justifica de modo alguno el buen fin de este sistema.

3) <u>Artículo 34: Limitación a los plazos concesionales.</u>

El plazo general de 20 años es indiscutiblemente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que como es sabido, requiere de unas sustanciales inversiones en infraestructuras y equipos electro-mecánicos que difícilmente pueden amortizarse en un plazo tan exiguo.

554

Cierto es que el texto del precepto permite la ampliación del plazo por razones técnicas derivadas del *"interés público debidamente motivado"*, pero también entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, y debido, como se dice, a la cuantía de tales inversiones, el plazo debería ser, como ha sido hasta ahora, netamente superior.

Nuestro país afronta el desafío energético desde una situación de debilidad estructural y gran dependencia exterior que la han colocado recientemente al albur de los incidentes geopolíticos y la volatilidad especulativa de los mercados financieros: prácticamente tres cuartas partes de nuestro consumo de energía llega a través de combustibles fósiles (La dependencia exterior española de combustibles fósiles -petróleo, gas, carbón- es del 75%/80%, frente al 50% de media de la UE)

En un escenario de combustibles fósiles menguantes y en imparable carestía, nos enfrentamos a un proceso de transformación radical del modelo energético en el que las energías renovables emergen como el nuevo vector económico a seguir: En el año 2010 casi un tercio de la energía eléctrica consumida fue de origen renovable.

En efecto, partiendo de que no existe hoy solución capaz de compatibilizar las cuatro vertientes de la sostenibilidad: coste asequible, abundancia, limpieza medioambiental y seguridad de suministro, muy por encima del resto de tecnologías, aporta una afección ambiental neta positiva, siendo, por su condición de energía de base, estabilizador del sistema eléctrico, y por tanto esencial en nuestro esquema energético.

La coletilla "interés público debidamente motivado" resulta por ello insuficiente y sobre todo discrecional, por cuanto deja al arbitrio de la administración valorar el grado de interés público de la inversión; interés que puede ser cambiante en función de la oportunidad de cada momento. Debemos recordar que este tipo de inversiones "Capital Intensivos" precisamente por su naturaleza, requieren plazos de amortización orientados al largo plazo para obtener ratios de "rentabilidad razonables"

Otra vez, la solución podría estar en el ordenamiento jurídico vigente: ¿Por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59-4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años? Así, a través de un marco jurídico seguro y sin aristas, se contribuiría de forma categórica a la revitalización de un sector necesario y con un indudable potencial de sostenibilidad económico-ecológica como es de la minihidráulica.

555

En cuanto al párrafo 3 del Art. 34, la redacción es ambigua y confusa, lo cual podría dar pábulo a turbias interpretaciones.

La aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/10 de 20 de julio debe ser clara, precisa y sin ambages:

Disposición transitoria primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879.

1. ***Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.***

2. ***Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.***

La concesión es el título por excelencia en virtud del cual la Administración puede atribuir derechos de uso privativo sobre el dominio público hidráulico. Esto es, da cobertura a los usos privativos del agua, en particular, y del dominio público, en general.

Como tal título, el de concesión, es el que mayores garantías jurídicas ofrece a terceros en la gestión del dominio público.

El régimen concesional, en su configuración actual, se asienta preferentemente en la Ley 29/1985, que a su vez ha tenido como base los antecedentes que de forma pormenorizada se describen a continuación:

El Título IV del Libro Segundo del Código Civil y la Ley de Aguas de 1879 regulaban la propiedad privada sobre las aguas terrestres calificándola como una "propiedad especial y un derecho accesorio a la propiedad fiduciaria" que, conforme al artículo 412 del Código Civil y al artículo 5 de la Ley de 1879, alcanza sólo a las aguas efectivamente utilizadas, pues las no aprovechadas y las sobrantes "entran en la condición de públicas".

La Ley de 1879 atribuía al dueño del predio la plena propiedad de las aguas subterráneas que hubiera obtenido por medio de pozos ordinarios y, al que los hallare e hiciera surgir a la superficie, le reconoce el carácter de dueño de los mismos "a perpetuidad".

La ruptura de la concepción respecto al régimen jurídico anterior se produjo en la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y derivó en una "demanialización" de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, que afectó a todos los recursos hídricos; los cuales pasaron a integrar *"ope legis"* el dominio público hidráulico.

Sin embargo, el legislador, amparado por el artículo 132 de la Constitución Española, se vio obligado a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación anterior, y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas de 1985.

Efectivamente, la Constitución Española en su artículo 132 dispone que:

"La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

El carácter inembargable de los bienes de dominio público que consagra la Constitución determina la necesaria adaptación de las legislaciones sectoriales, especialmente, de aquellas que regulan la disposición de los bienes de Dominio Público.

En materia de aprovechamiento de aguas la adaptación a los principios constitucionales se cumplimenta con la promulgación de la Ley 29/1985 de Aguas (posteriormente modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).

557

La referida norma rectora del Demanio Hidráulico regula el régimen concesional, contemplando la situación jurídica de aquellos aprovechamientos hidroeléctricos nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Concesiones preexistentes cuyo estatus es nuevamente recogido por la actual norma en vigor, esto es el TRLA.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal *del aprovechamiento a las necesidades reales".*

Este precepto, que hasta fechas recientes se ha desenvuelto de manera pacífica en las relaciones entre Administración y usuarios, es cuestionado a través del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental directa y unilateralmente, creando de esta forma una fútil polémica en cuanto a la interpretación y sentido que ha de darse al plazo de los setenta y cinco años.

Lo que hasta la fecha constituía un asentado criterio consistente en que aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas (y, en su mayor número, previas a la promulgación de la Constitución) que no contemplaban en su título de otorgamiento un plazo de duración, se mantenían vigentes ***"por un plazo de 75 años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley"***, esto es, **hasta el 2061**; parece sufrir un vuelco interpretativo de tal manera que, según la interpretación,-hasta la fecha unilateral, de la Confederación Hidrográfica del Norte, dicho precepto, y plazo, ha de entenderse computado desde la fecha de su otorgamiento.

La interpretación que se pretende imponer desde el documento de Plan Hidrológico en tramitación, resulta contraria a la letra de la Ley.

En tal sentido la expresión "contados desde la entrad en vigor de la Ley" es clara e inequívoca: contar un plazo desde un momento temporal definido (la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas). Es más, es un cómputo reiterado y reafirmado por el legislador en tanto que el texto de la Ley de 29/1985 lo introduce, y el Real Decreto Legislativo 1/2011 lo reitera y consagra, sin matizarlo ni corregirlo.

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia Administración a esta tesis interpretativa (computo de los setenta y cinco años desde 1986) a través de sus propios actos (a los que posteriormente haremos referencia); es preciso referirse a la Sentencia núm. 860/2004, de 20 de Julio, del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, que si bien resuelve una cuestión relativa a la naturaleza de los derechos registrados, realiza mención específica a cómo ha de computarse el plazo de los 75 años y, por ende, a la interpretación que ha de darse a la ya reiterada disposición transitoria primera:

"El tercero de los motivos (artículo 1692-4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de los artículos 132-1 de la Constitución, el artículo 65 el Reglamento Hipotecario en relación con la Disposición Transitoria 1ª, apartado número dos de la Ley de Aguas de 1985, así como la jurisprudencia que los interpreta. La argumentación del enunciado motivo se apoya en la llamada «artificial» distinción entre dominio público y aprovechamiento para uso privado, sin razones jurídicas concretas y en la falta de los requisitos necesarios exigidos por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Aguas para que este opere en beneficio de los titulares. Frente a esta pretensión impugnatoria, sólo cabe reproducir las atinadas razones de la sentencia de segunda instancia:

Es cierto que según el actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere.

Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. ***En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación, con carácter general, de este límite de los derechos de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable****, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132-1 de la Constitución consagra.* ***En el supuesto objeto del presente recurso, no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala,*** *las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de*

559

la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. (..) ***El incentivo para la inscripción del acta acreditativa de la prescripción veintenal ha sido la exención de impuestos, tasas, cánones y arbitrios, y, como es lógico también que estos aprovechamientos se prolongarán por un plazo de 75 años contados desde la entrada en vigor de la Ley,*** *sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal el aprovechamiento a las necesidades reales".*

Sin embargo, tanta incertidumbre y teoría que penetra (o se quiere hacer penetrar) en el ordenamiento jurídico hidráulico, hace preciso recordar el principio que, recogido en el artículo 3 del Código Civil, rige la interpretación de las normas:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

El establecimiento de un plazo máximo de duración se dispone para un conjunto de concesiones de naturaleza heterogénea pero que participan de una característica común todas ellas: su antigüedad. Así, y si bien la disposición transitoria del TRLA refiere a todas aquellas concesiones anteriores a la Ley de Aguas de 1985, un porcentaje amplio de las mismas data de principios de siglo XX.

La interpretación literal de la norma -de la disposición transitoria primera del TRLA- supone aplicar lo que el legislador -refrendado por el poder ejecutivo- quiso regular; cualquier otra interpretación no ajustada a la letra (precisa) de la Ley supone "enmendar la plana" al legislador. Si la intención de éste hubiera sido que las concesiones anteriores al año 1985 caducaran una vez transcurridos setenta y cinco años desde su otorgamiento la redacción hubiera sido esa *("contados desde la fecha de la concesión"*) y no la actualmente vigente (*"contados desde el día de entrada en vigor de esta Ley").*

Cada norma, y máxime las normas que regulan sectores o materias específicas, han de atender a las especificidades de la materia que regulan y al tiempo de su regulación. Por ello, resulta arriesgado trasponer preceptos, y sus interpretaciones, entre materias que poco o nada tienen en común. Sin ánimo de abordar en el presente escrito de alegaciones una tesis sobre los antecedentes legislativos de la actual regulación, sí consideramos de interés realizar una breve contextualización del porqué -esto es, de la justificación- del plazo concesional recogido en la disposición transitoria primera.

Apuntábamos la antigüedad de estos derechos y, por ende, de las infraestructuras precisas para su ejercicio. Dichas infraestructuras, y en lo que al sector energético se refiere, durante años fueron abandonándose hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en "ruinas industriales", dada la escasa rentabilidad de la producción. Sin embargo, la apuesta de sucesivos gobiernos (ya en época constitucional) por las energías renovables, y en especial por las hidroeléctricas, motivaron un marco normativo que patrocinaba la revitalización de aquellas viejas infraestructuras.

Exponente normativo máximo de este aval del ejecutivo y del legislativo lo constituye el Real Decreto 1217/1981, de 10 de Abril, de apoyo a los titulares de pequeñas centrales hidroeléctricas con potencia no superior a 5000 KVA:

"/.../ la utilización al máximo de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, autóctona y renovable, en las circunstancias actuales de costes de la energía, se ha considerado como objetivo primordial en el plan energético nacional".

La citada norma marco y sus posteriores desarrollos normativos, entre otros, el Real Decreto 916/1985, Real Decreto 2366/1994 y Orden de 23 de Mayo de 1995, se integran, tanto en sus fines como en el tiempo, con la legislación de aguas que fomenta el mantenimiento de las antiguas concesiones (muchas de ellas otorgadas para el fomento de la producción energética), precisamente, mediante el establecimiento de un plazo (setenta y cinco años desde la entrada en vigor) suficiente que permita rentabilizar la inversión en las infraestructuras de producción hidroeléctrica.

En el sector hidroeléctrico, la regulación de las aguas, configura un ámbito regulatorio de gran complejidad que, a lo largo de los años -desde la primera promulgación de la norma de Aguas de 1866 hasta la actualidad-, ha visto alterado su marco jurídico esencial desde un régimen privatista hasta la actual publicación de la Ley de Aguas incidiendo, con ello, en los derechos de muchos particulares. Sin entrar a la discusión (hoy baldía) de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, el legislador quiso crear un marco legal que posibilitara la rehabilitación de cientos de centrales hidráulicas en España pues fue un objetivo del Plan Eléctrico Nacional la promoción de las energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles importados, reducción de CO_2 en la atmósfera, lucha contra el cambio climático, etc.

En resumen, las principales piezas del marco legal del que hablamos son las siguientes;

- Ley 82/1980 sobre conservación de la energía,

- RD 1217/1981 para el fomento de producción hidroeléctrica en pequeñas centrales,

- Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, por el que se establecía un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA y

- Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con especial mención a su disposición transitoria 1ª)

El plazo que se establece en la mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas 29/1985 fue parte de un marco legal imprescindible para el desarrollo de la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, y no se trató por tanto de una medida baladí, pues de no haberse así dispuesto, no se habría acometido en España la rehabilitación de muchas de las antiguas centrales, suponiendo esto la infrautilización de nuestros ríos, el consumo de mucho mas petróleo y carbón, que hay que importar, el incremento del CO_2 en la atmósfera y el parón de la inversión relacionada con la rehabilitación de las minicentrales, que ha generado y mantiene mucho empleo.

La correcta interpretación de la disposición transitoria 1ª de la Ley no puede ser hecha sino contemplando todo el conjunto normativo para entender la auténtica voluntad del legislador. Así, cuando estableció que el plazo de extinción de las concesiones que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Aguas lo era a perpetuidad se prolongaba hasta el año 2061 es porque se perseguía la rehabilitación de centrales hidroeléctricas asociadas a las mencionadas concesiones y que produjesen los efectos favorables perseguidos por la Ley (promoción de las energías removibles)

Todo parece indicar que se buscaba la fijación de un marco legal, estable, seguro y no sujeto a interpretación que 1) promoviera la independencia energética; 2) en la que dicha energía fuera de origen renovable; y 3) en la medida de lo posible contribuyera a recuperar un patrimonio histórico-cultural de indudable interés cultural.

Y solo una vez establecido lo anterior, se produjo el auténtico desarrollo de la rehabilitación de este tipo de instalaciones de pequeña potencia, pues sin este marco regulatorio nadie habría invertido en la renovación de concesiones que pudieran expirar a los pocos años.

562

Dicho de otro modo, todos aquellos que hemos invertido importantes sumas de dinero en la adquisición y rehabilitación de minicentrales hidroeléctricas con posterioridad a 1985 lo hemos hecho al amparo de toda la legislación existente y en especial de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Aguas.

Se trata, por tanto, de dar respuesta a la necesidad de satisfacer una demanda y una necesidad -la de atender a los derechos que, sobre la base de diversas normativas, se habían consolidado en el patrimonio de los particulares- y, tal respuesta viene de la unificación del régimen de un "conjunto" de derechos concesionales: todos aquellos otorgados y adquiridos con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985.'

Todo lo que aquí venimos exponiendo, creíamos y confiábamos, que constituían criterios asentados y pacíficos. Presunción que no se fundamentaba en una mera expectativa o deseo intencionado, sino en los propios actos de las Administraciones de Cuenca.

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera, esto es, en aplicación de su tenor literal, los diversos Organismos de Cuenca han venido emitiendo específicos actos administrativos de reconocimiento y aplicación del plazo de setenta y cinco años computados desde el momento temporal indicado por la Disposición Transitoria Primera. Derecho concesional que, en tales términos y condiciones referidos a su duración (setenta y cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985), han sido inscritos en el Libro de Aguas.

Por tanto, se ratifica el valor patrimonial e interés económico desde el momento que la seguridad jurídica que presupone su inscripción en el Registro de Aguas permite que pueda servir a su titular de aval o garantía ante terceros. Es más, con la redacción dada al artículo 343 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico se admite la posibilidad de que se convierta en un título negociable en relaciones jurídico privadas, admitiéndose su enajenación y, en consecuencia, el reconocimiento de su valor económico.

Así, una vez que el concesionario obtiene la concesión, ésta se convierte en un verdadero derecho, es decir, en una situación jurídica individualizada que, además, tiene un contenido patrimonial con posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad con los efectos que éste tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico (certeza, veracidad y oponibilidad frente a terceros). Así, el apartado 4 del artículo 80 del TRLA dispone que,

563

"La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión".

La inscripción, en consecuencia, supone un acto explicito de reconocimiento del derecho por parte de la Administración con eficacia, tanto frente a terceros, pero, principalmente, frente a la misma Administración que con su actuación realiza un acto expreso de reconocimiento de carácter general, en el seno de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con carácter particular, frente al administrado.

Sin perjuicio de remitirnos a lo que el referido Registro Público aporta respecto a los derechos concesionales, muchos titulares con concesiones a perpetuidad obtenidas a principios del siglo XX han recibido certificados expresos emitidos por la Confederación Hidrográfica como reflejo del Registro de Aguas mencionando como condición específica, y es copia literal, que: ***"Se concede un plazo concesional de 75 años contados a partir del uno de enero de 1986".*** Este reconocimiento expreso valida no solo los derechos de aquellos concesionarios que hayan recibido por petición suya un certificado en estos términos sino también los derechos de todas aquellas concesiones que estén en la misma situación, esto es, todas aquellas que lo eran a perpetuidad

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que la redacción dada al artículo 34 del documento de "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental contiene una doble vulneración de nuestro Ordenamiento Jurídico:

1. Por una parte, del principio de irretroactividad de los actos y disposiciones desfavorables a los administrados. Este principio se asienta en *«los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»* (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1984), con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a situaciones no contempladas.

   Así, la Sentencia de 16 de julio de 1987, establece que «*la prohibición de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas».* En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada, entre otras, en las Sentencias de 10 de Abril de 1986 y 29 de Noviembre de 1988,

   "/.../ una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9-3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro".

Por tanto, el intuido efecto retroactivo del citado artículo 34 resulta rechazable en tanto que afectaría a derechos consolidados en el patrimonio de los administrados.

2. Por otra parte, la prelación de fuentes y la jerarquía normativa, impide -bajo sanción de nulidad- al documento de Plan Hidrológico de Cuenca disponer contrariamente a lo regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El futuro Plan Hidrológico de Cuenca se aprobará bajo la forma jurídica de Real Decreto, esto es, una norma jurídica de rango reglamentario que emana del poder ejecutivo. En contraposición, ha de señalarse que el Real Decreto Legislativo tiene rango de Ley que emana del poder legislativo.

De conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior (Reglamento = Real Decreto) no pueden contradecir ni vulnerar lo dispuesto en una norma de rango superior (Ley = Real Decreto Legislativo). Así mismo, este principio que aquí enunciamos permite solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

En consecuencia, solicitamos que el texto definitivo del futuro "Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental" habrá de respetar lo dispuesto en la norma legal en la cual se incardina, esto es, el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin introducir ni contradicciones ni interpretaciones que puedan dar origen a error o confusión y, en mor de lo dispuesto, ha de suprimirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del citado documento por resultar contrario al Ordenamiento Jurídico.

4) <u>Artículo 35-2 Resolución de expedientes de concesión.</u>

La demolición o reparación a costa del concesionario de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico y/o ponerlas en condiciones de explotación en el momento de la extinción del derecho concesional es un nuevo gravamen para el administrado-concesionario.

A tenor de la legislación vigente, las obligaciones de éstos se limitan a la reversión al Estado de las obras e instalaciones ubicadas en dicho dominio, punto. Esta nueva condición exige necesariamente una reserva expresa de ley que en el presente caso no se da al venir aprobado el presente Plan Hidrológico mediante una norma de rango inferior y sin que sea ello soslayable por la genérica mención del artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

565

Paralelamente no deberíamos olvidar el elevado coste de ejecución de estas acciones que podrían ser inasumibles para el concesionario, amén de las consecuencias medioambientales que conllevaría la demolición de una infraestructura que consecuencia de su antigüedad en la inmensa mayoría de los casos ya está integrada en el ecosistema fluvial.

1) Artículo 37-7: Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debería ser más explícito a la hora de establecer los criterios de incremento del plazo concesional atendiendo a aspectos más objetivos tales como los contemplados por la en el Art.59-4 del TRLA.

2) Artículo 38: Modificación y revisión de los caudales concesionales

De acuerdo con lo contemplado por la propuesta normativa, el Art. 151-5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las variaciones de caudal propuestos son insuficientes ya que no tienen en cuenta el tamaño de la concesión ni se relaciona con el tipo y la vida real de las instalaciones utilizadas para la producción energética. Proponemos por ello un aumento sustancial del porcentaje aplicado.

A mismo tiempo, consideramos que el párrafo 3º del artículo en cuestión ampara de forma manifiesta la discrecionalidad de la Administración. Por tanto, la indefensión jurídica generada al administrado abre la puerta a la revisión retroactiva de cualquier aspecto referente al título concesional.

La revisión del caudal concedido, al ser este un aspecto esencial que condiciona la capacidad de producción de la instalación, supone en la práctica dejar al arbitrio de la administración la viabilidad del centro productivo, pudiéndose en consecuencia alegar cualquier razón de cualquier tipo, incluso aquellas que nada tenga que ver con el ecosistema fluvial. Y ello, no es más que la definición clara y precisa de lo que consiste la inseguridad jurídica.

Parece que la Administración olvida que la relación de supuestos de modificación y revisión contemplados en el TRLA y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al ser ellos de rango normativo superior, solo pueden ser interpretadas de forma restrictiva como una "Lista Cerrada".

566

Una norma de rango jerárquico inferior, cual es el Plan Hidrológico, solo podrá, por tanto, abundar en la interpretación de la superior, pero jamás añadir nuevos condicionantes, ni ampliar el elenco de circunstancias que pudieran producir efectos negativos para el administrado.

La presente propuesta de Plan Hidrológico pretende ir más allá, estableciendo que considerándose como "modificación de las condiciones determinantes de la concesión", una hipotética revisión no dará lugar a indemnización ni compensación alguna, lo cual significa pasar por alto normativa de rango superior como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la de Expropiación Forzosa..

Con todo el respeto, pero con toda contundencia, consideramos que no es posible mantener esta previsión normativa, augurando en dicho caso una conflictividad judicial extrema, pues no es esperable pretender que los concesionarios admitan sin resistirse con todas sus fuerzas el cierre práctico de sus instalaciones sin verse indemnizados atendiendo a razones espúreas, máxime cuando este Derecho está férreamente protegido por el artículo 33-3 de la Constitución.

Finalmente, entendemos que el párrafo 5º debe explicitar que la comunicación de los caudales ecológicos, sobre todo en aquellos casos en los que el titulo concesional preexistente los recoja expresamente, sí debe considerarse como una revisión unilateral "*De Facto*" de la concesión, por lo que entendemos que SÍ debe estar sujeto a compensación tal y como establece, de acuerdo con el artículo 65-3 del mismo Texto Refundido de la Ley de Aguas, la legislación sobre Expropiación Forzosa, sobre todo en el caso de que implique la desaparición práctica del aprovechamiento, habida cuenta de que:

1) Existe un Acto Administrativo firme: La concesión. Los cambios de criterio de la administración reflejados en un acto administrativo suponen la retroactividad de dicho acto;

2) Este acto administrativo supuso en el momento de su formulación el desempeño de un exhaustivo trabajo de análisis de las condiciones por las que se debía otorgar dicho título concesional;

3) El derecho, al estar inscrito tanto en el Registro de Aguas, como probablemente en el Registro de la Propiedad, desencadena todo el mecanismo de defensa legal frente a terceros.

567

4) La revisión se produce por acción de la Administración.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T O

Primero y único.- Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de ALEGACIONES al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, y, sobre la base de los fundamentos expuestos, se tengan por admitidos para su incorporación y rectificación al referido documento.

Y para que surta los efectos pertinentes, firmo en Tolosa a 28 de octubre de 2011.

SAN PELAZ, S.L.
C.I.F. B-31791627
Avda. Eguíos, 78
31620 GORRAIZ (Navarra)

Fdo.: Oscar Díez de Ulzurrun Goñi
Administrador

IBERDROLA

04.11.2011 SUC 12 MADRID 28

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICO DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 08/11/2011 OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 11:28:22
E001201100011399

IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. (en adelante IBERDROLA), C.I.F. A-95-075586, con domicilio, a efectos de notificaciones, en Madrid, C/Tomás Redondo, 1, 28033, y en su nombre y representación D. Baldomero Navalón Burgos, con D.N.I. nº 5.393.279, en virtud de escritura de apoderamiento otorgada el 17 de mayo de 2011 ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid D. Miguel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, con el número 2472 de su protocolo,

EXPONE:

Primero: Que, dentro del proceso de planificación hidrológica llevado a cabo por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, con fecha 4 de Mayo de 2011 se ha iniciado la fase de consulta pública, durante un periodo de 6 meses, del denominado "PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL".

Segundo: Que, una vez analizados los distintos documentos que componen el Proyecto de Plan, Iberdrola considera que es de destacar la gran labor realizada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, tanto para la detallada descripción de la cuenca, como para la identificación, análisis y planteamiento de posibles soluciones de los problemas de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, en cuanto a cantidad y calidad de las aguas, en orden al cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE.

Tercero: Que, dentro del plazo otorgado, hemos de formular las siguientes

ALEGACIONES:

Primera: Consideramos que es necesario insistir en la importancia de la energía hidroeléctrica con regulación, como elemento actualmente insustituible para garantizar la seguridad y calidad del suministro en el Sistema Eléctrico Español. También vemos la necesidad de salvaguardar el papel que juegan en dicho suministro la minihidráulica y las tecnologías

569

masivas, térmicas y nucleares, así como las renovables con usos de refrigeración, todas ellas esenciales en un País tan dependiente energéticamente como es el nuestro.

En este sentido, nos reafirmamos en la alegación primera de las presentadas al llamado "Esquema provisional de temas importantes", con fecha 17 de Noviembre de 2008, y que reproducimos íntegramente a continuación.

"Con carácter general, hay que destacar el papel actualmente insustituible que juega la energía de origen hidroeléctrico con regulación, en la calidad de cobertura de la demanda de nuestro Sistema Eléctrico Nacional.

En efecto, este tipo de energía, capaz como ninguna otra de arranques, paradas y variaciones rápidas de la carga aportada al Sistema, es la única que puede garantizar el seguimiento fino de la curva de demanda y la atención rápida a variaciones bruscas de la energía entregada, bien por posibles fallos de grandes grupos térmicos, por problemas localizados en la red, o, recientemente, por el significativo aumento de las energías renovables no gestionables (eólica y solar), aumento que necesariamente requiere como complemento nueva potencia hidroeléctrica para hacer frente con rapidez y eficacia a los inevitables ceros de dichas energías.

Por ello, las afecciones a la energía hidroeléctrica con regulación pueden transformarse con gran facilidad en graves pérdidas de garantía de suministro del Sistema Eléctrico Nacional. En este sentido, las dos afecciones potencialmente más perjudiciales para los usos hidroeléctricos son la imposición de caudales ecológicos y las restricciones a las variaciones rápidas en los caudales turbinados; Ambas pueden hacer inviable, o inútil, la operación de un determinado aprovechamiento hidroeléctrico.

En este sentido, es de destacar el carácter esencial del suministro de energía eléctrica, como se declara en la exposición de motivos de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en la que se expresa que:

> "El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. [...] La presente Ley tiene, por consiguiente, como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas las características de este sector económico."

Por tanto, dada la importancia de garantizar el suministro eléctrico y la calidad de éste, debe valorarse la importancia del uso del agua para la generación eléctrica con máximo rigor. Todo ello, sin olvidar la protección al medio ambiente.

En este sentido, interesa destacar que la minihidráulica fluyente, aporta una energía casi constante, de base, que en caso de resultar seriamente afectada debería ser sustituida por producción de origen térmico -convencional o nuclear-, con el consiguiente incremento de la

570

factura de combustibles importados y, en su caso, de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Finalmente, hay que tener en cuenta que un incremento excesivo de los condicionantes y restricciones a los usos en térmicas convencionales, ciclos combinados, nucleares, termosolares o biomasa, sea en la disponibilidad de agua para refrigeración y procesos, o en las características de los vertidos, puede afectar gravemente a la garantía del suministro eléctrico nacional, en sus aspectos cuantitativos. Por ello, hay que tomar en consideración que no deben imponerse restricciones innecesarias que puedan afectar al suministro de energía eléctrica, ni a su calidad y que pueden causar más perjuicios que beneficios al medio ambiente y a la Sociedad en general."

Segunda: Cuantas restricciones, afecciones y servidumbres resulten del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental y afecten a derechos concesionales existentes, han de entenderse como un supuesto de revisión de dichos derechos concesionales, contemplado en la Ley de Aguas, en el artículo 65, apartado 1, letra c, del Texto Refundido de dicha Ley, por lo que la totalidad del impacto económico resultante –entre otros, pérdidas de producción, paso de punta a valle de parte de la energía producida, y gastos de adecuación de las infraestructuras, así como los imputables a su mantenimiento– ha de ser objeto de indemnización, en la forma prevista en el artículo 65, apartado 3, del mismo texto legal.

En tal sentido, dos tipos de razones sustentan esta interpretación y motivan, en definitiva, la necesidad de que la implantación de caudales ecológicos lleve necesariamente aparejada la indemnización al concesionario de las afecciones que, con independencia de la caracterización legal de dichos caudales, pudieran producirse con respecto al "statu quo" actual de su aprovechamiento. Unas son de fondo y otras, por así decir, formales. Pero ambas de la máxima relevancia.

En efecto, en primer lugar, es indiscutible que la Administración hidráulica puede imponer en el ejercicio de sus facultades de ordenación limitaciones temporales o coyunturales de la disponibilidad de caudales. Son las contempladas en los artículos 55 y 58, entre otros, del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Pero las modificaciones de las disponibilidades de los volúmenes concedidos que afecten a los titulares de las concesiones otorgadas en un determinado marco previo de seguridad jurídica, y que por ello afecten al equilibrio económico-financiero de la concesión, han de considerarse definitivas y estructurales, y para ellas se ha previsto el procedimiento (un procedimiento específico, propio y singular) de revisión de las características de la concesión para su adaptación a los planes. Precisamente por eso, porque suponen una afección permanente, y no meramente circunstancial o coyuntural.

571

Así, toda concesión se otorga según las previsiones de los planes hidrológicos de cuenca (art. 59.4 del Texto Refundido) y previa evaluación de su incidencia en el medio. Si los criterios de evaluación se modifican durante la vida de la concesión o, simplemente, se establecen allá

donde no los había hasta ahora (recuérdese, no por dejadez o culpa del concesionario), y ello se hace a través del instrumento del plan, existe un procedimiento legalmente establecido para ello, que garantiza, en aras de la necesaria garantía de seguridad jurídica, la reposición del equilibrio económico alterado. Lo contrario sería vaciar de contenido una previsión legal clara y establecida precisamente con esta finalidad: la contemplada en el artículo 65.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

En segundo término, y en referencia en concreto a la determinación de caudales ecológicos contenida en el Plan Hidrológico, si bien es cierto que los caudales ecológicos han de considerarse como una restricción a la explotación o aprovechamiento del agua, ello no puede ser interpretado de forma tal que se ignore el mecanismo que para la implantación de esos caudales ecológicos prevé la propia Ley de Aguas en su artículo 65. Y ello porque los principios de servicio con objetividad a los intereses generales y pleno sometimiento a la Constitución, a la Ley y al Derecho (art. 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), de buena fe, confianza legítima y legalidad, obligan a separar la función genérica de administración y control del dominio público hidráulico (que según el artículo 23.1.b de la Ley de Aguas corresponde al organismo de cuenca), de las potestades específicas que se atribuyen a la Administración Hidráulica para ejercer esa función (planificación hidrológica, inspección, potestad sancionadora, etc.). Es decir, el control del recurso o de su aprovechamiento no puede abarcar y basarse en una competencia genérica para restringir singularmente, y al margen de todo procedimiento, ese aprovechamiento, sobre todo cuando esa reducción singular es objeto de otra potestad específica, que aparece perfectamente regulada en la normativa de aguas (en el mencionado art. 65 de la Ley de aguas).

En definitiva, puesto que la fijación de los caudales ecológicos se lleva a cabo a través del Plan Hidrológico, no hay duda de que nos encontramos ante el supuesto previsto en los artículos 65.1.c y 65.3 de la Ley de Aguas, que dan cobertura a la decisión de la Administración de revisar concesiones previas y proceder a la consiguiente indemnización, de conformidad con la normativa de expropiación forzosa.

Tercera: Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que las inversiones que el titular de derechos concesionales haya de realizar para construir o adecuar infraestructuras que permitan la eficacia de la determinación de caudales ecológicos, dando así cumplimiento a los requisitos de los nuevos Planes Hidrológicos (como, por ejemplo, la construcción de escalas de peces, o la instalación de elementos de regulación que permitan cumplir con los nuevos regímenes de caudales ecológicos variables a lo largo del año), han de ser consideradas a los efectos de lo previsto en el artículo 59.6 del texto Refundido de la Ley de Aguas. En efecto, de acuerdo con esta interpretación:

1º) Son inversiones absolutamente necesarias para la normal utilización de la concesión, ya que, de no hacerse, se incumplirían los requerimientos del Plan, haciendo inviable administrativamente la concesión.

572

2º) El coste de esas obras en la mayor parte de los supuestos, no podrá ser amortizado dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión. Evidentemente, este coste, y el del mantenimiento de las obras, no pudieron preverse en el proceso de otorgamiento de la concesión, por lo que no se tuvieron en cuenta a la hora de calcular el plazo de amortización de las instalaciones.

3º) Las obras no se oponen al Plan Hidrológico, como es obvio; en cuanto a los perjuicios que se irrogarían al concesionario en caso de no prorrogarse el plazo concesional, se basan en lo dicho en el punto 2º.

En consecuencia, las inversiones debidas a adecuación de las instalaciones a los nuevos requerimientos de la Planificación Hidrológica deben ser consideradas en los términos previstos en el artículo 59.6 del texto Refundido de la Ley de Aguas, en relación en concreto a la prórroga del plazo concesional, en los términos previstos en dichp artículo 59.6 del texto Refundido de la Ley de Aguas.

Cuarta: En cuanto a aspectos concretos de la documentación sometida a consulta, hemos de decir lo siguiente:

1.- Memoria. Apartado 4.4:

En relación con el proceso de implantación de regímenes de caudales ecológicos, y en relación, en concreto al proceso de negociación o concertación a que se refiere el apartado 4.4 de la Memoria, resulta muy revelador analizar cómo ha ido variando el espíritu y la letra de las sucesivas disposiciones, desde el Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH), aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de Julio, pasando por la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), aprobada por Orden Ministerial ARM/2656/2008, de 10 de Septiembre, hasta llegar al borrador del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental.

Así, en el RPH, en su artículo 18 apartado 3, se dice textualmente: "*El proceso de implantación del régimen de caudales ecológicos se desarrollará conforme a un proceso de concertación que tendrá en cuenta los usos y demandas actualmente existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas.*" Es de destacar que el tono de esta disposición es terminante: "se desarrollará", "tendrá en cuenta", y no hace ningún distingo entre los usos existentes.

Por su parte, la IPH, en su apartado 3.4, dice que "*El establecimiento del régimen de caudales ecológicos se realizará mediante un proceso que se desarrollará en tres fases*", y en la letra b) dice: "*Una segunda fase consistente en un proceso de concertación, definido por varios niveles de acción (información, consulta pública y participación activa), en aquellos casos que condicionen significativamente las asignaciones y reservas del plan hidrológico.*" Comparando este texto con el del Reglamento se aprecia que se introduce una restricción en cuanto al carácter general de la validez del procedimiento de concertación previsto en el Reglamento, limitándolo a ciertos casos "significativos"..

573

Finalmente, en el apartado 4.4 de la Memoria del borrador del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental, en la letra b) de la descripción del proceso para la implantación de regímenes de caudales ecológicos, se dice que el proceso de negociación o concertación "*podría*" realizarse "*en aquellos casos que condicionen significativamente las asignaciones y reservas del plan hidrológico...*"; además, al final de esta letra b) se declara abiertamente la discrecionalidad de la decisión sobre la realización, o no, del proceso de concertación: "*La autoridad competente* – por cierto, no se especifica cuál pueda ser esa autoridad– *determinará en cada caso si es preceptivo o no realizar esta fase y los niveles de acción a alcanzar*". Es decir, mantiene la restricción introducida por la IPH, no soportada por el RPH, pero, además, introduce una mayor incertidumbre con la expresión "podría realizarse", y deja todo, en definitiva, al arbitrio de la administración, contradiciendo el texto del Reglamento que, basado en el Artículo 65.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, consagra la plena salvaguarda de los derechos e intereses previos, legalmente constituidos, minimizando la afección, y, en todo caso, compensando la afección inevitable.

Por otra parte no puede desconocerse el principio de jerarquía normativa garantizado por el Art. 9.3 de la Constitución Española, así como la obligación legal de que toda disposición administrativa respete las disposiciones de rango superior.

En efecto, como resulta notorio, las disposiciones generales y los reglamentos, aunque emanan de la Administración, constituyen una manifestación de la potestad normativa. Es decir, son fuente del Derecho y como tales sometidos al principio de jerarquía normativa.

En conclusión, y apelando a la imperativa necesidad de respetar el señalado principio consagrado en el Art. 9.3 de la Carta Magna y de mantener las garantías jurídicas propias de un Estado de Derecho, se solicita que el punto b) de este apartado 4.4 reproduzca textualmente el artículo 18.3 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, de forma que todas las afecciones sean tenidas en cuenta en el proceso de concertación, y siempre con el objetivo final de dar el necesario cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65.3 del texto Refundido de la Ley de Aguas.

2.- <u>Memoria. Apartado 4.4.1.1</u>:

En la letra e) se expone, de acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica, el concepto de "tasa de cambio máxima", como uno de los componentes del régimen de caudales ecológicos. Se indica en el inciso final de este apartado e) que esa tasa no ha podido determinarse, debido a la falta de datos precisos. Aún así, ante la posibilidad de su determinación e implantación en el futuro, y en relación con el uso hidroeléctrico con regulación, ha de tenerse en cuenta que una de las características de la hidroelectricidad, fundamental para el Sistema Eléctrico Español, es su flexibilidad y rapidez de respuesta para hacer frente a las oscilaciones permanentes de la demanda eléctrica, y, aún más importante, en casos de fallo de algún gran grupo térmico o nuclear, situación en la que la reposición instantánea de la producción (que, obviamente, requiere un incremento súbito y posiblemente muy notable de los caudales turbinados) es esencial para evitar el colapso total del Sistema. La

574

opción de construir un contraembalse, siempre que sea técnicamente viable, resuelve el problema, pero, en aprovechamientos existentes, representa unos costes sobrevenidos, en general muy elevados y que además han de ser debidamente compensados.

3.-Memoria. Apartado 15.2.1:

En la relación de componentes del Comité de Autoridades Competentes no figura el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ni siquiera las Consejerías de Industria de la Comunidades Autónomas afectadas. Teniendo en cuenta la importancia de los usos energéticos e industriales del agua, y que éstos serían prácticamente los únicos usuarios sin representación institucional en el citado Comité –ya que esto no ocurre con los regantes ni con los abastecedores– se solicita la incorporación a dicho Comité de al menos un representante del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

4.- Anejo 3. Apéndice 3.6:

Este apéndice se compone de fichas cuyo encabezado es: "Demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental. Ficha de caracterización de las demandas de agua para producción de energía eléctrica". Hay una ficha para la CH Barázar, y no se ve que proceda incluir esta CH como demanda de agua del Cantábrico; además, el río que consta es "Barázar".

5.- Normativa. Introducción:

En el párrafo que empieza: "*Con anterioridad al inicio del procedimiento de aprobación,...*", se dice que la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico se sometió a consulta pública "*a partir del día 30 de abril de 2011*". Sin embargo, el anuncio de inicio de la consulta pública apareció en el Boletín Oficial del Estado el 4 de mayo de 2011.

6.- Normativa. Artículo 11:

Al final del apartado 2, se dice que "*En su caso se establecerá un plazo máximo para la realización de las obras de adecuación que pudieran ser necesarias que no podrá exceder en ningún caso del año 2015.*" Teniendo en cuenta que, en las concesiones existentes, ese plazo empieza a contar en el momento que se recibe la notificación del nuevo régimen de caudales ecológicos, parece más prudente ligar el plazo máximo al momento de recepción de la notificación correspondiente, en lugar de fijar un límite absoluto que, en ciertos casos, puede resultar insuficiente. Se podría articular así: "El plazo máximo para la realización de las obras de adecuación que pudieran ser necesarias será de n años a partir de la fecha de notificación del nuevo régimen de caudales ecológicos. Dicho plazo podrá ampliarse, a petición del titular debidamente justificada, hasta un máximo de m años adicionales al plazo inicial."

575

7.- Normativa. Artículo 16:

En la relación de usos ordenados por preferencia que figura en este artículo, se ha introducido una modificación respecto a la del apartado 4.3 de la Memoria: en ésta última se distingue entre "Usos industriales para producción de energía eléctrica" (puesto 3) y "Otros usos industriales" (puesto 4), mientras que en la Normativa se han unido esos dos usos bajo el epígrafe "Usos industriales incluidos los energéticos". Aparte de la incoherencia que esto supone, ocurre que los usos para producción de energía tienen grandes diferencias con el resto de usos industriales, a la vez que representan una condición previa para la viabilidad de éstos. Por todo ello, se solicita que se mantenga la relación de prioridades de uso que aparece en el apartado 4.3 de la Memoria.

8.- Normativa. Artículo 34, apartado 1:

No se comprende la necesidad de concretar, con carácter general, la limitación del plazo concesional a 20 años, ni se considera ajustada la misma al Texto Refundido de la Ley de Aguas. A mayor abundamiento, el plazo de 20 años es excesivamente corto para la amortización de grandes infraestructuras de producción de energía, lo cual plantea, de entrada, una especie de barrera previa a salvar, que solo parece destinada a desanimar posibles iniciativas de ese tipo en el ámbito del Cantábrico Oriental. Por otra parte, si el propio artículo 34.1 ya admite la posibilidad de aumentar ese plazo, es difícil de entender por qué no se limita la Normativa del Plan a lo dispuesto en el artículo 59.4 del TRLA, que ya fija el máximo plazo concesional en 75 años, y entendiéndose que el plazo definitivo estará siempre basado en el equilibrio económico-financiero de la concesión, tal como se ha hecho desde tiempo inmemorial.

9.- Normativa. Artículo 34, apartado 3:

Con el debido respeto, el Art. 34.3 del Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca supone una vulneración de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas de acuerdo con las razones que se señalarán a continuación.

En primer lugar, dado que el sentido propio de las palabras de la Disposición Transitoria Primera es muy claro: mantenimiento de la concesión hasta 1 de enero de 2061, salvo que se establezca un plazo inferior en el título concesional.

Es decir, que una concesión otorgada a perpetuidad podrá seguir siendo explotada hasta 1 de enero de 2061. Y así ha sido admitido por unánime Jurisprudencia. Meramente a título de ejemplo, se deja señalada la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de julio de 2004 (Sentencia núm. 860/2004 de 20 julio RJ 2004\4450).

576

Y es que el tenor literal de la ley no admite duda alguna. Por ello, esta Disposición no precisa de interpretaciones *("in claris non fit interpretatio")*.

Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el Art. 3 del Código Civil.

A mayor abundamiento, debe destacarse que el sentido propio de las palabras coincide y se integra plenamente en el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y el espíritu y finalidad de la Disposición Transitoria.

Así, el legislador de 1985, como no podía ser de otra manera de acuerdo con los principios constitucionales, compatibilizó el establecimiento de un límite temporal para las concesiones con el respeto a los derechos adquiridos, fijando una fecha límite a los titulares de aprovechamientos de aguas conforme a la legislación anterior, en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada (1 de enero de 2061).

Y esta fórmula fue considerada ajustada a la Constitución por el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 29 de noviembre de 1988 (núm. 227/1988).

El Tribunal Constitucional consideró que la fijación con carácter general del plazo máximo de 75 años a partir de la entrada en vigor de la Ley de 1985, como límite temporal de los derechos de aprovechamiento de aguas públicas ganados con anterioridad, no es contraria a la Constitución. Se afirmó asimismo por la Sentencia que este nuevo límite de 75 años a partir de 1 de enero de 1986 es razonable.

Se ha destacado por la doctrina que esta nueva fijación del plazo de las concesiones y aprovechamientos adquiridos a perpetuidad en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada puede ser caracterizada como una medida de orden que, más que implicar una ventaja, supone de hecho una limitación del plazo inicial de vigencia de la concesión, pues no deja de ser una restricción de la ilimitada duración (concesiones a perpetuidad).

En definitiva, la aplicación del plazo de 75 años a partir de la entrada en vigor de la Ley supone:

a) El establecimiento de un régimen transitorio para los aprovechamientos cuyo plazo se limita a partir de la Ley de Aguas.
b) Una medida que ha sido declarada acorde con el Art. 33 de la Constitución.

Cumple recordar que la Constitución Española establece en su Art. 9 que *"Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".*

En conclusión, se considera procedente de acuerdo con los fundamentos de derecho señalados ut supra la eliminación de este apartado tercero del Art. 34.

577

10.- Normativa. Artículo 34, apartados 4 y 5:

Los apartados 4 y 5 del Art. 34 contradicen lo dispuesto en el Art. 59.6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el Art. 154 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico porque en éstos no se establece en modo alguno que las posibles prórrogas deberán estar incluidas en el plazo máximo de 75 años.

En efecto, el Art. 59.6 del TRLA dicta lo siguiente:

"6. Cuando para la normal utilización de una concesión fuese absolutamente necesaria la realización de determinadas obras, cuyo coste no pueda ser amortizado dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión, éste podrá prorrogarse por el tiempo preciso para que las obras puedan amortizarse, con un límite máximo de diez años y por una sola vez, siempre que dichas obras no se opongan al Plan Hidrológico correspondiente y se acrediten por el concesionario los perjuicios que se le irrogarían en caso contrario."

Este artículo del Texto Refundido no establece que deba computarse la prórroga dentro del plazo máximo de 75 años. Es decir, que los 75 años operen como un máximo total.

Así, al amparo de este precepto si una concesión se ha otorgado por 75 años y deben realizarse obras que no pueden amortizarse dentro de este plazo de 75 años parece claro que el citado Art. 59.6 permite la prórroga por un plazo máximo de 10 años adicional al de 75 años.

Es decir, si la Ley hubiera querido limitar las prórrogas dentro del plazo de 75 años, así lo hubiera establecido expresamente.

En idéntico sentido se pronuncia el Art. 154 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

En conclusión, se considera que procede la eliminación de los apartados 4 y 5 del Art. 34.

11.- Normativa. Artículo 35, apartado 1:

Dice: "*El incumplimiento de condiciones esenciales de la concesión supondrá la inmediata incoación del expediente de extinción*"; sin embargo, el art 66 del TRLA no es tan taxativo y dice que en ese caso "*podrán declararse caducadas*". En línea con el resto de alegaciones, cabe recordar que no puede modificarse lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas mediante la aprobación del Plan Hidrológico, por tratarse de una norma de rango inferior.

12.- Normativa. Artículo 35, apartado 2:

Este artículo deja al arbitrio de la Confederación el que las obras en el DPH reviertan al Estado en condiciones de explotación, o bien demolidas.

578

La presente previsión se dice hecha en aplicación tanto del artículo 164.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico como del 101 de la Ley 33/2003, o Ley de Patrimonio de las

Administraciones Públicas. Si bien, dicha previsión es contraria al artículo 101 LPAP. Este precepto exige en principio la demolición de las instalaciones revertidas, aunque admite que el pliego concesional pueda imponer su mantenimiento, con la consiguiente obligación de entrega por el concesionario, debiendo entender el mantenimiento como "la entrega de las instalaciones en el estado de conservación propio de unas instalaciones que han agotado su vida útil. Un estado que, naturalmente, no ha de ser calamitoso (pues si lo fuera la concesión no estaría en explotación), pero sí el propio de unas instalaciones que llevan un extenso tiempo de uso.

Pero el precepto citado no permite exigir que las instalaciones se entreguen en un uso perfecto que permita su empleo durante una nueva concesión. Al contrario, esta obligación vulneraría su tenor y racionalidad interna y, asimismo, atentaría contra la lógica propia de la dinámica concesional, en la que las mayores inversiones se realizan al comienzo de la vida de la concesión. Se trata, pues, de una previsión que debería suprimirse.

En cuanto a la referencia que se hace a la posible exigibilidad de imponer al titular de la concesión la demolición de la obras situadas en Dominio Público hidráulico por alguno de los motivos ahí señalados (no obstante de no entrar a valorar su posible contradicción con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Aguas, como en los pliegos concesionales), no podemos por más que solicitar de esa Confederación se matice dicha obligación, con objeto de que la misma sea concebida como la última posibilidad, y siempre y cuando la instalación se encuentre en tal estado de ruina o abandono que supusiera un riesgo tal como para imponer una carga tan gravosa para el titular de la concesión.

13.- Normativa. Artículo 37, apartado 1:

Hay una posible errata en el título de este artículo, ya que se habla de "Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos", y a continuación se habla de "centrales térmicas o de cualquier otra tecnología".

14.- Normativa. Artículo 37, apartado 2:

Es posible que la presa asociada a un nuevo aprovechamiento deba ser de una altura tal que haga inviable la instalación de dispositivos de paso de la ictiofauna. Por ello, se propone añadir al final del párrafo b): "o justificación de su ineficacia o inviabilidad".

Por otra parte, no se entiende por qué en las letras d), e) y f), además de en el propio párrafo b) antes comentado, se establecen condiciones adicionales y exclusivas para las concesiones hidroeléctricas, cuando la mayoría del resto de los usos utilizan, de una u otra forma, elementos tales como presas, canales, etc.

15.- Normativa. Artículo 37, apartado 6:

Una vez más la pretensión de esta disposición es, de hecho, una modificación de la Ley de Aguas, que no puede hacerse mediante Real Decreto. Se solicita la eliminación de este artículo.

16.- Normativa. Artículo 38, apartado 2:

Errata: no se trata del artículo 151.5 del RDH, sino del 151.3.

17.- Normativa. Artículo 38, apartado 5:

Si la imposición de nuevos regímenes de caudales ecológicos establecidos en la planificación hidrológica produce afecciones de cualquier tipo a las concesiones preexistentes, esas afecciones han de ser indemnizadas por imperativa aplicación del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Por ello, se solicita la supresión de este apartado.

Por todo lo cual,

SOLICITA:

Que, teniendo por recibidas las presentes alegaciones a la "PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL", sean tomadas en consideración para la elaboración del documento definitivo.

En Madrid, a 3 de Noviembre de 2011

B. Nava

580

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
Plaza de España, 2. 33071 Oviedo.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 09/11/2011
OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 12:34:29
E001201100011449

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO RURAL Y AGUA

DIRECCIÓN GENERAL
DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE GESTIÓN INTEGRADA
DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

O F I C I O

S/REF.

N/REF. JR/mj

FECHA Madrid, 4 de noviembre de 2011

ASUNTO **ALEGACIONES AL PLAN HIDROLÓGICO**

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua
- 4 NOV 2011
Dirección General del Agua
Sub. Gral. de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico
SALIDA 1/65934

DESTINATARIO SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
D. Jorge Marquínez García
Plaza de España,2.
33071 OVIEDO

Se adjuntan alegaciones al Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

EL SUBDIRECTOR GENERAL,

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino · Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua · Dirección General del Agua · Sub. Gral. de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico

Jesús Yagüe Córdova

581

CORREO ELECTRÓNICO:
JYague@mma.es

PL. SAN JUAN DE LA CRUZ S/
28071 MADRID
TEL.: 91 597 60 31
FAX: 91 597 59 29

ALEGACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL, ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ESTADO

Con fecha 04 de mayo de 2011 se sometió a consulta pública el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, ámbito de competencia del Estado.

Dentro del plazo de seis meses establecido para la consulta, la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico (SGGIDPH) presenta las siguientes alegaciones a la Normativa del citado Plan Hidrológico.

I.- ANTECEDENTES

La normativa propuesta incluye numerosas disposiciones relativas a la utilización y protección del dominio público hidráulico (D.P.H.), fundamentalmente en sus capítulos VI y VII.

Algunas de las disposiciones de este tipo pueden considerarse redactadas al amparo de la habilitación normativa hecha a los planes hidrológicos en el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), en el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), otras se refieren a asuntos propios de la cuenca que deben afrontarse desde la planificación hidrológica y el resto de disposiciones relativas a la utilización y protección del dominio público hidráulico pueden agruparse del modo siguiente:

- Disposiciones que constituyen una remisión o cita de normativa vigente, en especial del RDPH.

- Disposiciones que constituyen una modificación de la normativa vigente, en especial del RDPH, aplicada al ámbito territorial del plan.

- Disposiciones que pueden considerarse desarrollos reglamentarios del TRLA, adicionales al contenido del RDPH, aplicadas al ámbito territorial del Plan.

Por otra parte, simultáneamente con la tramitación del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, se están elaborando los planes hidrológicos del resto de demarcaciones – algunos de los cuales están asimismo en período de consulta pública -, cuyas propuestas de normativa incluyen disposiciones sobre las que cabe hacer consideraciones similares a las señaladas para la demarcación del Cantábrico Oriental en cuanto a los tipos de disposiciones, pero con contenidos solo en algunos casos parcialmente coincidentes.

Resulta, según esto, que algunas de las disposiciones propuestas en las normativas de los planes hidrológicos, actualmente en tramitación, constituyen modificaciones o desarrollos complementarios de la normativa vigente, con contenidos diferentes según el ámbito de planificación, aún cuando se refieren a aspectos comunes a todas ellas.

II.- FUNDAMENTOS

1.- La SGGIDPH, en el caso de la utilización y protección del D.P.H., considera necesaria una labor de homogeneización para que el tratamiento normativo de los temas relacionados con el D.P.H. sea el mismo en todas las demarcaciones, de modo que los reales decretos de aprobación por el Gobierno de los diferentes planes hidrológicos no supongan un tratamiento normativo diferenciado y, en su caso, discriminatorio en función del ámbito territorial de cada plan. Todo ello sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

2. La habilitación para el desarrollo normativo en los planes hidrológicos viene amparada por el artículo 81.b del RPH, por diversos artículos del TRLA (59.4, 69.1, 99, 111.bis) y del RDPH (87.2, 94, 97, 151.5, 171.9, 173.4, 184.1, 186.1, 244.1 y 245.3), por lo que los artículos de la normativa en los que se efectúa este desarrollo quedan fuera de la presente alegación.

3.- De acuerdo con el artículo 40.5 del TRLA, los planes hidrológicos de cuenca serán aprobados por el Gobierno, mediante real decreto, en los términos que estime procedente en función del interés general.

4.- Las Directrices de técnica normativa, aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, son de aplicación a los proyectos de real decreto (artículo segundo). Entre estas directrices se encuentran las relativas a especificidades de las disposiciones modificativas (de nueva redacción, de adición, etc), remisiones y citas de normativas. Estas directrices son, por tanto, de aplicación a los reales decretos de aprobación de los planes hidrológicos.

5.- A la vista del contenido de las propuestas de normativa de los planes hidrológicos que ya están en consulta pública y de los borradores del resto de normativas y en base a la habilitación a que hace referencia el fundamento 1 anterior, la SGGIDPH está tramitando una modificación del RDPH, redactada en coordinación con la Subdirección General de Planificación y Uso Sostenible del Agua, a través de un grupo de trabajo constituido al efecto, para homogeneizar y extender a todas las demarcaciones el tratamiento normativo de aquellos aspectos que, respondiendo a necesidades comunes a todas ellas, no están incluidos en el actual RDPH.

6.- Esta labor de homogeneización y de modificación del RDPH afecta a varios de los artículos de la normativa propuesta en consulta pública del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, ámbito de competencia del Estado, cuya modificación, en consecuencia, se propone en la presente alegación, atendiendo a los fundamentos anteriores.

III.- ALEGACIONES

En base a los fundamentos anteriores, la SGGIDPH presenta las siguientes alegaciones:

1.- De carácter general: **584**

a) Debe adecuarse la redacción de todos los artículos en los que se producen remisiones o citas de normativa vigente, cuidando que las reproducciones literales

de la misma, no contengan ninguna modificación por variación, intencionada o no, del texto reproducido.

b) Asimismo debe adecuarse la redacción de aquellos artículos en los que se incluye una modificación, por nueva redacción, de la normativa vigente, por cuanto estas modificaciones no pueden efectuarse para una sola demarcación y sin seguir las directrices de técnica normativa correspondientes, sino que, deben, en su caso, incluirse en una modificación del RDPH utilizando dichas directrices de técnica normativa. En su caso, estos artículos deben adecuarse teniendo en cuenta el contenido de la propuesta de modificación del RDPH, actualmente en tramitación, cuyo texto se adjunta a esta alegación.

2.- En cuanto a las modificaciones, por adición, de normativa vigente, especialmente del RDPH, cabe hacer similar consideración a la realizada para las de nueva redacción y, en este caso, deben revisarse todos los artículos correspondientes para adecuar su contenido a la propuesta de modificación del RDPH, antes citada.

3.- En concreto las alegaciones 1.b) y 2 anteriores son de aplicación a las disposiciones referentes a procedimientos administrativos de tramitación que por constituir modificaciones del RDPH no pueden ser contenido directo de las normativas de los planes hidrológicos, debiendo tramitarse, en su caso, directamente como modificaciones del citado reglamento.

4.- Alegación similar cabe hacer a las disposiciones modificativas del régimen económico-financiero, que, en su caso, requeriría, incluso, modificación del TRLA.

5.- Se adjunta una relación de artículos de la normativa del plan hidrológico que, entre otros, se consideran afectados, señalando para cada uno el asunto sobre el que se alega y el contenido de la alegación. A efectos de facilitar la adecuación a que hacen referencia las alegaciones anteriores, se adjunta asimismo la propuesta de modificación del RDPH que está en tramitación, así como un texto común sobre "definición de usos" a tener en cuenta en el artículo correspondiente de la normativa.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

1.- Relación de artículos afectados, asunto y contenido de la alegación específica correspondiente.

2.- Propuesta de modificación del RDPH.

3.- Texto común de la definición de usos del agua.

1.- Artículos afectados, asunto y alegación correspondiente

Cantábrico Oriental, ámbito de competencia del Estado.

Artículo	Asunto	Alegación
14	Usos del agua	Se propone un texto común para todas las demarcaciones, que se adjunta
26	Normas concesiones	En la modificación en trámite del RDPH, cuyo texto se adjunta, se utilizan siempre tres parámetros: - Caudal máximo instantáneo - Volumen máximo mensual - Volumen máximo anual
32	Concesiones para riegos	Se propone no incluir, por considerarse excesiva, la exigencia del control analítico de las aguas captadas por parte de las Comunidades de Regantes. El apartado 4 incluye una propuesta que corresponde a una modificación del RDPH y que no se incluye en la que se tramita actualmente por no existir suficiente consenso al respecto. Se propone retirarla de la normativa del Plan
35	Resolución de expedientes de concesión	Revisar la redacción a la vista de los artículos 164 y 165.bis de la propuesta, en trámite, de modificación del RDPH, que se adjunta
36	Tramitación conjunta o sucesiva de concesiones	Se considera una modificación innecesaria del procedimiento de tramitación no prevista en el RDPH ni en la propuesta de modificación del mismo que se está tramitando
38	Modificación y revisión de concesiones	Revisar la redacción a la vista del artículo 156.bis de la propuesta, en trámite, de modificación del RDPH, que se adjunta
39	Utilización de aguas subterráneas	Revisar la redacción a la vista de los artículos 188.3 y 188.bis de la propuesta, en trámite, de la modificación del RDPH, que se adjunta
41	Continuidad fluvial	Revisar la redacción a la vista del artículo 126.bis de la propuesta en trámite, de modificación del RDPH, que se adjunta
42	Protección contra inundaciones	Revisar la redacción del apartado 1 en lo referente a que “el Plan Hidrológico determina la ordenación de usos del suelo para las diversas zonas del ámbito inundable”..., por interferir en competencias de otras Administraciones
46	Masas de agua para abastecimiento	El texto propuesto en el apartado 1 debe revisarse para adaptarlo al artículo 56.3 del TRLA, que establece que el Organismo de cuenca “podrá determinar ”perímetros de protección
52	Autorización de vertido	Revisar la redacción a la vista del artículo 251 de la propuesta en trámite, de modificación del RDPH, que se adjunta

Artículo	Asunto	Alegación
53	Vertido de zonas urbanas	Revisar la redacción a la vista del artículo 259.ter de la propuesta en trámite, de modificación del RDPH, que se adjunta
54	Vertidos en zonas industriales	Revisar la redacción a la vista del artículo 259.ter de la propuesta en trámite, de modificación del RDPH, que se adjunta
55	Vertidos procedentes de residuos sólidos	Este tema es objeto de otra normativa por lo que se propone no considerarlo en la normativa del plan
58	Bases técnicas para las autorizaciones de vertidos	Revisar la redacción concretando su contenido (responsable del estudio, etc.) o retirarla dado su carácter genérico y ambiguo.

3.- Texto de la definición de usos del agua

"1.- Clasificación de usos:

a) Abastecimiento de población:

a') Abastecimiento a núcleos urbanos:

i) Consumo humano
ii) Otros usos domésticos distintos del consumo humano
iii) Municipal
iv) Industrias, comercios, ganadería y regadío de poco consumo de agua, situados en núcleos de población y conectados a la red municipal

b') Otros abastecimientos fuera de los núcleos urbanos.

b) Regadíos y usos agrarios.

i) Regadíos
ii) Ganadería

c) Usos industriales para producción de energía eléctrica:

i) Centrales térmicas renovables: termosolares y biomasa
ii) Centrales térmicas no renovables: nucleares, carbón y ciclo combinado
iii) Centrales hidroeléctricas

d) Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores:

i) Industrias productoras de bienes de consumo.
ii) Industrias del ocio y del turismo.
iii) Industrias extractivas.
iv) Producción de fuerza motriz.

e) Acuicultura.
f) Usos recreativos.
g) Navegación y transporte acuático, incluyendo navegación de transportes de mercancías y personas.
h) Otros aprovechamientos:

i) De carácter público
ii) De carácter privado

2.- Se entiende por consumo humano el correspondiente a beber, cocinar, preparar alimentos e higiene personal.

3.- En los usos de industrias de ocio y turismo quedan incluidos los que implican derivar agua del medio natural y tienen como finalidad posibilitar esta actividad en instalaciones deportivas (campos de golf, estaciones de esquí, parques

588

acuáticos, complejos deportivos y asimilables), picaderos, guarderías caninas y asimilables, así como las que tienen como finalidad el mantenimiento o rehabilitación de instalaciones industriales culturales: fraguas, fuentes, aserraderos, lavaderos, máquinas y otros de este tipo, que no pueden ser atendidos por las redes urbanas de abastecimiento.

4. *En los usos recreativos quedan incluidos los que no estando incluidos en el apartado anterior tienen un carácter recreativo privado o colectivo sin que exista actividad industrial o comercial, y, en concreto, los siguientes:*

   a) *Las actividades de ocio que usan el agua en embalses, ríos y parajes naturales de un modo no consuntivo, como los deportes acuáticos en aguas tranquilas (vela, windsurf, remo, barcos de motor, esquí acuático, etc) o bravas (piragüismo, rafting, etc), el baño y la pesca deportiva.*

   b) *Las actividades de ocio relacionadas con el agua de un modo indirecto, utilizada como centro de atracción o punto de referencia para actividades afines, como acampadas, excursiones, ornitología, caza, senderismo y todas aquellas actividades turísticas o recreativas que se efectúan cerca de superficies y cursos de agua."*

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas

La transposición al derecho español de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política *de aguas,* ha dado lugar a la incorporación de nuevos contenidos en los planes hidrológicos de cuenca, relacionados, en su mayor parte, con la protección, conservación y mejora del estado de las masas de agua y, en general, del dominio público hidráulico y, por tanto, con la utilización y protección de éste.

La incorporación de estos contenidos en los planes hidrológicos, actualmente en diversas fases de tramitación en las distintas demarcaciones hidrográficas, pero en estado muy avanzado en todas ellas, ha puesto de manifiesto la carencia de diversas disposiciones normativas, en el desarrollo reglamentario del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que permitan una actuación homogénea en los distintos Organismos de cuenca y otras administraciones competentes a la hora de la gestión de la utilización y protección del dominio público hidráulico en asuntos relacionados con los contenidos antes citados de los planes hidrológicos.

A su vez, la experiencia en la gestión de la utilización y de la protección del dominio público hidráulico, por parte de los Organismos de cuenca y otras Administraciones competentes, ha ido poniendo en evidencia diversas insuficiencias de regulación normativa, así como algunas ambigüedades que conviene resolver, por cuanto dificultan una gestión racional de dicho dominio.

Consecuentemente, el nuevo desarrollo normativo de la gestión de la utilización y protección del dominio público hidráulico, demandado tanto por la normativa comunitaria como por la experiencia de la Administración hidráulica, debe ser objeto de una regulación común para todas las demarcaciones hidrográficas, y no debe ser independiente en cada plan hidrológico de cuenca, aconsejando una modificación del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Por otra parte el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, modifica el concepto de sustancia peligrosa, entendiendo como tales a todas aquellas sustancias contenidas en los Anexos I y II del citado real decreto. Lo que da lugar asimismo a modificar la redacción de determinados artículos del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

A su vez, la aprobación del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, hace necesario modificar el anexo IV del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con objeto de adaptar la clasificación de los vertidos según grupos de actividades clasificadas por CNAE, a efectos del cálculo del coeficiente de mayoración o minoración del canon de control de vertidos, a los nuevos códigos aprobados mediante este real decreto.

La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, se incorporó al ordenamiento interno mediante el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, que establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, que lo desarrolla. El texto resultante de dicha transposición ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre los requisitos técnicos que deben cumplir los sistemas colectores y en concreto a la estanqueidad de los mismos y al tratamiento de las aguas en circunstancias tales como lluvias torrenciales inusuales.

Esta situación, unida al hecho de que no existe normativa específica que regule desbordamientos de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia, lleva a la necesidad de reformar el artículo 2 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, así como a incorporar al Reglamento de Dominio Público Hidráulico artículos que permitan limitar la contaminación producida por dichos desbordamientos, teniendo en cuenta que en la práctica no es posible construir los sistemas colectores y las instalaciones de tratamiento de manera que se puedan someter a tratamiento la totalidad de las aguas residuales en circunstancias tales como lluvias torrenciales inusuales.

Este real decreto consta, por tanto, de dos artículos: uno por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que constituye el objeto principal del presente real decreto; y otro, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.

En el artículo primero se incluyen: todas las disposiciones normativas derivadas del contenido común de los planes hidrológicos y de las carencias normativas detectadas en la gestión del dominio público hidráulico; así como, las derivadas de la aprobación del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, y del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril. Además, se crea un inventario de puntos de desbordamiento de aguas de escorrentía y se desarrolla el régimen jurídico de desbordamientos de aguas de escorrentía tanto para las autorizaciones de vertidos existentes a la entrada en vigor del mismo, como para las nuevas solicitudes de autorización de vertidos

En el artículo segundo se modifica el artículo 2 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, para contemplar las situaciones de contaminación por vertidos procedentes de desbordamientos de aguas de escorrentía.

El real decreto va a ser informado por el pleno del Consejo Nacional del Agua en el que participan las comunidades autónomas y sectores afectados.

Este real decreto se dicta al amparo de la disposición final segunda del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio, por el que se aprueba texto refundido de la Ley de Aguas, que habilita al Gobierno para dotar de las normas reglamentarias que requieran su desarrollo y aplicación, y del artículo 149.1.18ª y 23ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia sobre legislación básica respectivamente sobre

concesiones administrativas y protección del medio ambiente, así como del artículo 149.1.22ª de la Constitución que reserva al Estado la competencia sobre la legislación ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando discurran por más de una comunidad autónoma.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, con la aprobación previa del Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial y Ministro de Política Territorial y Administración Publica, ... el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ...

DISPONGO:

Artículo primero. *Modificación del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.*

El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, queda modificado como sigue:

Uno. En el artículo 53 se introducen las siguientes modificaciones:

El apartado 3.c) pasa a ser apartado 4.

Los apartados 4 y 5 pasan a ser párrafos del nuevo apartado 4.

El apartado 6 pasa a ser apartado 5.

Dos. Se añaden tres apartados al artículo 74, con la siguiente redacción:

"3 bis. Las autorizaciones de siembras, plantaciones o corta de árboles, establecerán la obligación al titular de restituir el terreno a su condición anterior, lo que puede incluir entre otros el destoconado, plantación de vegetación de ribera autóctona y eliminación de obras de defensa, salvo que se obtenga una nueva autorización para seguir con el cultivo durante el siguiente período vegetativo.

7. El Organismo de cuenca podrá definir una banda de protección hidráulica y ecológica cuya anchura podrá ser variable, en función del cauce y su ubicación, en la que las autorizaciones de plantaciones arbóreas quedaran limitadas a vegetación de ribera autóctona. La anchura de esta banda empezará a contar desde la línea de aguas bajas del cauce o bien la línea que, por las características geomorfológicas y sedimentarias del cauce pueda soportar la primera banda de vegetación de ribera."

8. El titular de una autorización para siembra, plantación o corta de árboles, será responsable de que la actividad no altere las condiciones de desagüe de la corriente en ese tramo, debiendo retirar árboles o ramas caídos o cualquier otro elemento relacionado con la explotación, que pudiera suponer un obstáculo al flujo y causar daños al dominio público hidráulico o a terceros".

Tres. El apartado 5 del artículo 76 queda redactado como sigue:

"5. En estas autorizaciones se ponderará su incidencia sobre el estado de las masas de agua y la morfología del cauce. Cuando la extracción se pretenda realizar en los tramos finales de los ríos y pueda ocasionar efectos perjudiciales en las playas o afecte a la disponibilidad de áridos necesarios para su aportación a las mismas, será preceptivo el informe del organismo encargado de la gestión y tutela del dominio público marítimo, al que se dará después traslado de la resolución que se adopte".

Cuatro. El apartado 1 del artículo 78 queda redactado como sigue:

"1. Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico, o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el organismo de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. En todos los casos, los proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al Organismo de cuenca para que se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9 de este Reglamento".

Cinco. El artículo 81 queda redactado como sigue:

"La autorización de cualquier otra actividad a que hace referencia el artículo 9.1.d) se tramitará por el Organismo de cuenca de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.

En relación con plantaciones, serán de aplicación para la zona de policía los mismos condicionantes establecidos en el artículo 74.7 y 8."

Seis. El apartado 2 del artículo 85 queda redactado como sigue:

"2. En la comunicación citada debería indicarse: El caudal máximo instantáneo, el volumen máximo anual y el volumen máximo mensual derivados, finalidad de la derivación, término municipal y descripción de las obras a realizar para la derivación."

Siete. El apartado 4 del artículo 89 queda redactado como sigue:

"4. Al extinguirse el derecho concesional revertirán al Estado gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional, en concreto en cuanto a la reversión de otros elementos situados fuera del demanio.

Si en dicho momento, la Administración hidráulica considerase posible y conveniente la continuidad del aprovechamiento, podrá exigir del concesionario la entrega de los bienes objeto de reversión en condiciones de explotación tal como prevén los artículos 164.3, 165.3 y 167.3 y 4. Si por el contrario lo considerase inviable, o su mantenimiento resultase contrario al interés público, podrá exigir la demolición de lo construido en dominio público de conformidad con el artículo 101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas".

Ocho. Se modifica el apartado 1 y se añade un apartado al artículo 93 con la siguiente redacción:

"1. Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley de Aguas requiere concesión administrativa Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en función del interés publico. Las concesiones serán susceptibles de revisión con arreglo a lo establecido en el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

4. No obstante, lo dispuesto en el apartado 1, los órganos de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas podrán acceder a la utilización de las aguas, previa autorización especial extendida a su favor o del Patrimonio del Estado, sin perjuicio de terceros".

Nueve. El artículo 97 queda redactado como sigue:

"Artículo 97*. Duración de las concesiones*

Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos; tendrá carácter temporal y plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no superior a setenta y cinco años de conformidad con el artículo 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas."

El plazo comenzará a computar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución concesional".

Diez. El párrafo primero del artículo 102 queda redactado como sigue:

"En toda concesión de aguas públicas se fijará la finalidad de ésta, su plazo, el caudal máximo instantáneo, el volumen máximo anual y en su caso el volumen máximo mensual cuyo aprovechamiento se concede, indicando el período de utilización cuando ésta se haga en jornadas restringidas. Se identificará el término municipal y provincia donde está ubicada la toma y las referencias cartográficas de las tomas de aguas y de sus lugares de aplicación."

Once. Se añade el siguiente texto al apartado 2.b) del artículo 106:

"Asimismo, la solicitud se acompañará de un análisis y propuesta de buenas prácticas para limitar la contaminación difusa y exportación de sales, especialmente en las zonas declaradas vulnerables."

Doce. El artículo 126 queda redactado como sigue:

"Artículo 126. *Obras dentro y sobre el dominio publico hidráulico.*

"1. La tramitación de los expedientes de concesiones y autorizaciones de obras dentro o sobre el domino público hidráulico se realizará según el procedimiento regulado en los artículos 53 y 54, con las siguientes salvedades y precisiones:

a. En el caso de estabilización de márgenes o limpieza de cauces, la documentación comprenderá, como mínimo, un plano de planta a escala de la obra a ejecutar, en el que la misma quede perfectamente definida en relación con ambas márgenes del cauce, acompañado de una sucinta memoria descriptiva.

La estabilización de márgenes deberá consistir, en lo posible, en la disminución de la pendiente de los taludes del cauce y la recuperación de la vegetación de ribera, como elemento esencial para la estabilización del talud. Con carácter general el uso de escolleras se limitará a tramos puntuales y a la base de los taludes.

Cuando por la índole de la obra solicitada, pueda verse modificada la capacidad de evacuación del cauce, se incluirán perfiles transversales del mismo y un cálculo justificativo de la capacidad a distintos niveles. Se podrán sustituir los planos a escala por croquis acotados, si se trata de obras de poca importancia a realizar en cauces públicos de escasa entidad.

b. Obras de encauzamientos, motas de defensa, puentes y pasarelas u otras modificaciones no incluidas en el apartado anterior, requerirán la presentación de proyecto suscrito por técnico competente. El Organismo de cuenca podrá acordar la sustitución del proyecto por planos a escala, descriptivos de la totalidad de las obras y una memoria justificativa, cuando a su juicio se trate de obras de poca importancia a realizar en cauces públicos de escasa entidad.

   Los proyectos de cortas o cobertura de cauces contendrán un plano topográfico que defina los vértices de la poligonal que delimita los cauces nuevo y antiguo referenciados con coordenadas ETRS89.

c. En el caso de que con las obras se pretendan recuperar terrenos que hayan pertenecido al peticionario, esta circunstancia se hará constar expresamente en la solicitud inicial, debiendo justificar la propiedad de los mismos mediante la presentación del oportuno título o certificación registral, junto con una copia del plano parcelario de la finca que se pretende recuperar y un plano topográfico que defina los vértices de la delimitación de los terrenos referenciados con coordenadas ETRS89 respecto del cauce, que deberá contrastarse con la correspondiente delimitación del dominio público hidráulico de la que disponga el Organismo de cuenca. Esta delimitación de los terrenos no vinculará el resultado del deslinde que se desarrolle en los términos previstos en los artículos 240 y siguientes.

2. Podrá prescindirse de la información pública cuando los estudios hidráulicos realizados por el solicitante y validados por el Organismo de cuenca demuestren que no se produce un incremento de niveles tanto en la otra margen del río como aguas arriba y abajo del tramo en cuestión, o bien se trate de estabilización de márgenes, limpiezas de cauces, puentes, pasarelas y coberturas de escasa importancia en cauces de pequeña entidad.

3. La actuación deberá someterse a la tramitación ambiental necesaria en función de la legislación ambiental aplicable en cada caso.

4. No necesitarán la concesión a que se refiere este artículo las obras que realice el Estado o las Comunidades Autónomas, incluidas en Planes que hubieran sido informados por el Organismo de cuenca y hayan recogido sus prescripciones. No obstante, todos los proyectos de las administraciones públicas que se realicen en estos ámbitos deberán someterse a informe del Organismo de cuenca para que se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico.

5. Las actuaciones derivadas de estos expedientes y de cualquier otro que suponga una afección al dominio público hidráulico, se almacenarán y mantendrán actualizadas en un sistema informático convenientemente georreferenciadas de

forma que sirvan de base al inventario de presiones establecido en el citado Reglamento".

Trece. Se añade un artículo 126. bis con la siguiente redacción:

"Artículo 126.bis. *Condiciones para garantizar la continuidad fluvial.*

1. El Organismo de cuenca promoverá el respeto a la continuidad longitudinal y lateral de los cauces como un valor natural que debe ser protegido compatibilizándolo con los usos actuales del agua y las infraestructuras hidráulicas recogidas en la planificación hidrológica.

2. En los condicionados de las nuevas concesiones y autorizaciones o de la modificación o revisión de las existentes, que incluyan obras transversales en el cauce el Organismo de cuenca exigirá la instalación y adecuada conservación de dispositivos que garanticen su franqueabilidad por la ictiofauna autóctona. Igual exigencia tendrá lugar para las obras de este tipo existentes, vinculadas a concesiones y autorizaciones que incluyan esta obligación en su condicionado o que deban incorporar tales dispositivos en aplicación de la legalidad vigente.

Se podrá prescindir temporalmente de estos dispositivos por criterios ambientales o por inviabilidad técnica, a justificar adecuadamente en cada caso. En función de la evolución ambiental del tramo o de la mejora de las técnicas, el Organismo de cuenca podrá exigir su instalación cuando las condiciones así lo aconsejen.

3. En las obras y en la tramitación de expedientes de autorizaciones y concesiones que correspondan a obras de defensa frente a inundaciones, el Organismo de cuenca tendrá en cuenta los posibles efectos sobre el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres que de ellos dependan. Salvo casos excepcionales, solo podrán construirse obras de defensa sobreelevadas lateralmente a los cauces en la zona de flujo preferente cuando protejan poblaciones e infraestructuras públicas existentes..

4. El Organismo de cuenca promoverá la recuperación funcional de las zonas inundables, así como la eliminación de infraestructuras que, dentro del dominio público hidráulico, se encuentren abandonadas sin cumplir función alguna ligada al aprovechamiento de las aguas, teniendo en consideración la seguridad de las personas y los bienes y valorando el efecto ambiental y económico de cada actuación."

5. Las actuaciones que se realicen deberán cumplir, en la medida de lo posible, criterios de mínima intervención, favoreciendo su recuperación natural, integrando condicionantes hidromorfológicos y utilizando, cuando sea posible, aquellas técnicas que minimicen el impacto de la intervención y que garanticen la estructura y funcionalidad ecológica del sistema, estableciendo las medidas de protección necesarias.

6. Para el otorgamiento de nuevas autorizaciones o concesiones de obras transversales al cauce, que por su naturaleza y dimensiones puedan afectar significativamente al transporte de sedimentos, será exigible una evaluación del impacto de dichas obras sobre el régimen de transporte de sedimentos del cauce. En la explotación de dichas obras se adoptarán medidas para minimizar dicho impacto".

597

Catorce. El apartado 1 del artículo 128 queda redactado como sigue:

"1. La tramitación de concesiones de agua para riegos, que no sean en régimen de servicio público con caudal máximo instantáneo menor de 8 litros por segundo y volumen máximo anual menor de 100.000 metros cúbicos, usos domésticos hasta 2.000 personas, aun cuando no constituyan un núcleo habitado tipificado en el artículo 123, acuicultura hasta un caudal máximo instantáneo de 100 litros por segundo, o bien de un caudal máximo instantáneo inferior a 5 litros por segundo, para destinos no energéticos diferentes de los ya indicados, se regirá por el procedimiento indicado en los artículos siguientes".

Quince. El apartado 1 del artículo 130 queda redactado como sigue:

"1. En la tramitación de concesiones de aguas para aprovechamiento de riego con caudal máximo instantáneo menor de 4 litros por segundo. y volumen máximo anual menor de 50.000 metros cúbicos, de usos domésticos hasta 50 personas, constituyan o no núcleo habitado, o de un caudal máximo instantáneo inferior a 2 litros por segundo para otros destinos diferentes de los indicados, además de prescindirse del trámite de competencia de proyectos y de limitar la información pública en la forma indicada en el artículo anterior, la documentación que se deberá acompañar a la instancia de petición de la concesión será la que se indica en los apartados siguientes".

Dieciséis. El artículo 132 queda redactado como sigue:

"Artículo 132. *Utilización con fines hidroeléctricos de infraestructuras del Estado.*

1. Cuando, de acuerdo con el Plan Hidrológico de la demarcación, exista la posibilidad de utilizar con fines hidroeléctricos presas de embalse o los canales construidos total o parcialmente con fondos del Estado o propios del Organismo de cuenca, podrá sacarse a concurso público la explotación de dichos aprovechamientos, de acuerdo con lo indicado en los siguientes artículos.

2. La disposición a que hace referencia el apartado anterior también será de aplicación, sin necesidad de su inclusión en el Plan Hidrológico de demarcación, a las infraestructuras que hayan revertido al Estado en los casos de extinción de concesiones".

Diecisiete. En el apartado 2 del artículo 133 el término "pesetas" queda sustituido por el término "euros".

Dieciocho. Los apartados 2 y 5 del artículo 144 quedan redactados como sigue:

"2. Por características esenciales se entenderán: Identidad del titular, volumen máximo anual, volumen máximo mensual cuando así se haya establecido en el título concesional y caudal máximo instantáneo a derivar, corriente y punto de toma, finalidad de la derivación, superficie regable en las concesiones para riego y tramo afectado en las destinadas a producción de energía eléctrica.

5. En aquellas concesiones cuyo otorgamiento viene atribuido por la Ley de Aguas al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino la tramitación de las solicitudes de modificación de características esenciales o condiciones, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 145 al 148, se llevará a cabo por el Organismo de cuenca, el cual tramitará el expediente elevándolo posteriormente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para su

resolución definitiva, a excepción de las relativas a la titularidad del aprovechamiento, que resolverá el propio Organismo de cuenca.

En los casos en que la resolución se apruebe por el Ministerio, éste dará traslado al Organismo de cuenca a efectos de inspección, vigilancia y de inscripción en el Registro de Aguas".

Diecinueve. El artículo 153 queda redactado como sigue:

"Artículo 153. *Aumento del plazo de concesión*

1. Las autorizaciones de modificación de características solo podrán conllevar un aumento del plazo concesional, si así lo solicitara el concesionario, cuando la modificación exigiera la realización de inversiones que no pudieran ser amortizadas dentro del plazo de concesión restante. La duración de la prórroga se fijará en atención al necesario período de amortización sin que el plazo total de la concesión pueda superar, en ningún caso, el máximo fijado en el artículo 97.

2. Las solicitudes de aumento de plazo a que hace referencia el apartado anterior no se admitirán durante los últimos tres años de vigencia de la concesión".

Veinte. Se añade un artículo 156.bis con la siguiente redacción:

"Artículo 156.bis. *Acreditación de menor dotación y ahorro.*

1. Para la acreditación a que hace referencia el artículo 65.2 del Real Decreto 1/2001, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas se tendrán en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a. Las dotaciones máximas establecidas en el Plan Hidrológico.
b. Las superficies realmente regadas y la población realmente servida en un período suficientemente representativo.
c. Los caudales realmente derivados en un período suficientemente representativo.
d. La capacidad de derivación y transporte de las infraestructuras vinculadas con el aprovechamiento, salvo que:

   1º Se hayan realizado modificaciones no autorizadas que comporten una mayor derivación o consumo de agua.

   2º La mala conservación de las infraestructuras implique un mayor consumo de agua.
e. El hecho de que los caudales concedidos sean ya suministrados por una red pública de abastecimiento o una comunidad de usuarios o que se encuentren comprendidos en otra concesión posterior.
f. La introducción de las mejoras técnicas disponibles en cada momento.

2. A los efectos de aplicación de los apartados 1.b) y c) podrá considerarse como período suficientemente representativo el de cinco años hidrológicos, comprendidos entre los diez años anteriores a la fecha de iniciación del procedimiento de revisión."

599

Veintiuno El apartado 1 del artículo 164 queda redactado como sigue:

"1. Los expedientes de extinción del derecho por transcurso del plazo de la concesión se podrán iniciar tres años antes de expirar su vigencia, de oficio o a instancia de parte".

Veintidós. Se añade un artículo 165.bis con la siguiente redacción:

"Artículo 165.bis. *Particularidades para los aprovechamientos hidroeléctricos.*

1. En el caso de los aprovechamientos hidroeléctricos, el informe del Servicio, a que hacen referencia los artículos 164.3 165.3 y 167.4, incluirá una propuesta razonada sobre el futuro del aprovechamiento a extinguir, que incluya entre otros aspectos, recomendaciones sobre la continuidad de la explotación, la adscripción de la titularidad de las infraestructuras e instalaciones y sobre la gestión o en su caso demolición de las infraestructuras e instalaciones que deben revertir al Estado.

2. Una vez dictada la resolución de extinción, el órgano competente, en caso de optar por la continuidad de la explotación, tramitará el correspondiente contrato de servicios o el concurso público de explotación del aprovechamiento conforme a lo especificado en el artículo 132.2".

Veintitrés. Se modifica el apartado 7 del artículo 173 y se añade un apartado 8 con la siguiente redacción:

"7. El Organismo de cuenca suministrará a las Administraciones competentes los perímetros de protección, a que se refiere el artículo 56.3 del Real Decreto 1/2001, de 20 junio, y este reglamento, así como los condicionamientos en ellos establecidos, que deberán ser tenidos en cuenta en los diferentes planes urbanísticos o de ordenación del territorio con los que se relacionan."

"8. En las solicitudes de concesión de aprovechamientos de aguas subterráneas destinadas al consumo humano que suministran un promedio diario superior a 10 metros cúbicos o sirven a más de 50 personas, se podrá exigir una propuesta de perímetro de protección justificada con un informe técnico que contemple, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Propuesta de delimitación del perímetro en base a las características hidrogeológicas del acuífero, a las características, régimen de explotación y área de influencia de la captación y a la preservación de la cantidad y calidad del recurso captado.
b. Información sobre las figuras de ordenación y zonificación territorial vigente que la afecten.
c. Identificación de las instalaciones o actividades, a las que hace referencia el apartado 6, desarrolladas en el ámbito territorial del perímetro propuesto."

Veinticuatro. El apartado a. del artículo 187 queda redactado como sigue:

a. Volumen máximo anual concedido, volumen máximo mensual en su caso y caudal máximo instantáneo.

Veinticinco. Se añade un apartado 3 al artículo 188 con la siguiente redacción: **600**

"3. Las labores de limpieza, desarrollo y estimulación de pozos deberán ser comunicados al Organismo de cuenca con una antelación mínima de un mes".

Veintiséis. Se añade un artículo 188.bis con la siguiente redacción:

"Artículo 188. bis. *Sellado de captaciones de agua subterránea.*

1. En los expedientes de extinción, revisión o modificación de derechos de aguas subterráneas que conlleven el cese de la actividad extractiva, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el sellado por parte del titular de los pozos, sondeos u obras asimilables, con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma y se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado.

2. El Organismo de cuenca podrá, de forma subsidiaria, llevar a cabo el sellado de la captación, repercutiendo los costes de dicha actuación al que hubiera sido titular de la misma.

3. Las previsiones de los dos apartados anteriores, serán de aplicación a las autorizaciones de investigación de aguas subterráneas".

Veintisiete. Los apartados 2.d) 2.e) y 2.j) del artículo 192 quedan redactados como sigue:

"2.d) Corriente o acuífero del que procedan las aguas especificando, en su caso, la masa de agua.

2.e) Lugar, término municipal y provincia en la que se capta el agua. Se incluirá las coordenadas ETRS 89, de cada una de las tomas.

2.j) Volumen máximo anual en metros cúbicos y, en su caso, modulación establecida, así como volumen máximo mensual".

Veintiocho. Se añade un artículo 192.bis con la siguiente redacción:

"Artículo192.bis. *Traslado de asientos de la Sección C a la Sección A del Registro de Aguas.*

A solicitud de los titulares y siempre que no se incrementen los caudales totales utilizados ni se modifiquen las condiciones o régimen de aprovechamiento, el Organismo de cuenca, previa revisión de los aprovechamientos y con la limitación del plazo concesional previsto en el apartado 1 de las disposiciones transitorias segunda y tercera del texto refundido de la Ley de Aguas, efectuará el traslado de los asientos de la Sección C a la Sección A del Registro de Aguas".

Veintinueve. Se añade un artículo 195.bis con la siguiente redacción:

"Artículo 195.bis. *Modificación de condiciones de aprovechamientos.*

A los efectos de aplicación del apartado tercero de las disposiciones transitoria segunda y tercera del texto refundido de la Ley de Aguas y del artículo 192.bis, se considerará modificación de las condiciones o del régimen de aprovechamiento, entre otras, las actuaciones que supongan la variación de la profundidad y del diámetro del pozo, así como cualquier cambio en el uso, ubicación o variación de superficie sobre la que se aplica el recurso en el caso de aprovechamientos de regadío".

601

Treinta. Se añade un apartado 4 al artículo 196 con la siguiente redacción:

"4. Habiendo ya transcurrido todos los plazos establecidos al efecto, no se efectuará ninguna nueva inscripción en el Catálogo de Aguas Privadas, ni se efectuará modificación alguna en las inscripciones existentes, si no es en virtud de resolución judicial firme, salvo, en su caso, la anotación de cancelación"

Treinta y uno. El apartado 2 del artículo 200 queda redactado como sigue:

"2. Los Estatutos u Ordenanzas contendrán asimismo, el correspondiente régimen de policía del aprovechamiento colectivo, así como el establecimiento de medidas de control de consumos y tarifas, que fomenten el ahorro y combinen adecuadamente el consumo y la superficie a efectos de facturación."

Treinta y dos. El apartado 3.c del artículo 242 queda redactado como sigue:

"c. Cartografía del tramo a deslindar, basada en los modelos digitales del terreno de alta definición ortofotos disponibles u otros medios de similar precisión, representada a escala no inferior a 1/1.000. Asimismo información catastral y toponímica".

Treinta y tres. Se añade un artículo 243.bis con la siguiente redacción:

"Artículo 243.bis. Zonas de aguas de baño

Treinta y cuatro. Los apartados 2, 3 y 5.d) del artículo 245 quedan redactados como sigue:

"2. Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente."

"3. La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución de los objetivos medioambientales establecidos. Dichas autorizaciones se otorgarán teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y de acuerdo con las normas de calidad ambiental y los límites de emisión establecidos en este reglamento y en el resto de la normativa en materia de aguas. Se establecerán condiciones de vertido más rigurosas cuando el cumplimiento de los objetivos medioambientales así lo requiera. Estas normas y objetivos podrán ser concretados para cada cuenca por el respectivo plan hidrológico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100.2 del texto refundido de la Ley de Aguas."

"5.d). Sustancia peligrosa: las sustancias o grupos de sustancias que son tóxicas, persistentes y bioacumulables, así como otras sustancias o grupos de sustancias que entrañan un nivel de riesgo análogo, y en particular, las contenidas en los anexos I y II del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas."

602

Treinta y cinco. El artículo 246 queda redactado como sigue:

"Artículo 246. *Iniciación del procedimiento de autorización de vertidos.*

1. El procedimiento para obtener la autorización de vertido se iniciará mediante solicitud del titular de la actividad, con los datos requeridos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, y con la declaración de vertido según modelo aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

2. La declaración de vertido contendrá los siguientes extremos:

a. Características de la actividad causante del vertido.
b. Localización exacta del punto donde se produce el vertido.
c. Características cualitativas (con indicación de todos los valores de los parámetros contaminantes del vertido), cuantitativas y temporales del vertido.
d. Descripción de las instalaciones de depuración y evacuación del vertido.
e. Proyecto, suscrito por técnico competente, de las obras e instalaciones de depuración o eliminación que, en su caso, fueran necesarias para que el grado de depuración sea el adecuado para la consecución de los valores límite de emisión del vertido, teniendo en cuenta las normas de calidad ambiental determinadas para el medio receptor.
e´. En su caso, documentación técnica que desarrolle y justifique adecuadamente las características de la red de saneamiento y los sistemas de aliviaderos, y las medidas, obras e instalaciones previstas para limitar la contaminación por desbordamiento en episodios de lluvias**.**
f. Petición, en su caso, de imposición de servidumbre forzosa de acueducto o de declaración de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa, acompañada de la identificación de predios y propietarios afectados.
g. Descripción de las medidas, obras e instalaciones de seguridad previstas para la prevención de vertidos accidentales.

3. En el caso de solicitudes formuladas por entidades locales y comunidades autónomas, la declaración de vertido deberá incluir además:

a. Inventario de vertidos industriales con sustancias peligrosas a que se refiere el artículo 245.5.d) recogidos por la red de saneamiento autonómica o local.
b. Contenido y desarrollo del plan de saneamiento y control de vertidos a la red de saneamiento autonómica o local que incluirá, en su caso, los programas de reducción de sustancias peligrosas, así como el correspondiente reglamento u ordenanza de vertidos. En el caso de que las instalaciones de depuración y evacuación necesarias formen parte de un plan o programa de saneamiento aprobado por otra Administración pública, se hará constar así en la solicitud.
c. Conjunto de medidas que comprendan estudios técnicos de detalle que, teniendo en cuenta el régimen de lluvias, las características de la cuenca vertiente, el diseño de la red de saneamiento, la naturaleza y características de las sustancias presentes en los desbordamientos de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia, y los objetivos

medioambientales del medio receptor, definan las buenas prácticas y actuaciones básicas para maximizar el transporte de volúmenes hacia las estaciones depuradoras de aguas residuales y de escorrentía y reducir el impacto de los desbordamientos de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia.

Estas medidas incluirán, como mínimo, descripción general del sistema de saneamiento y de las actuaciones previstas y cronograma de ejecución.

4. En el caso de que el solicitante de la autorización de vertido deba solicitar, además, una concesión para el aprovechamiento privativo de las aguas, o pretenda la reutilización de las aguas, la documentación a que se refieren los apartados anteriores se presentará conjuntamente con la que resulte necesaria a los efectos de obtener dicha concesión.

La puesta en explotación del aprovechamiento quedará supeditada al otorgamiento de la concesión y la autorización de vertido."

Treinta y seis. Se suprime el artículo 250.

Treinta y siete. El artículo 251 queda redactado como sigue:

"Artículo 251. *Condicionado de las autorizaciones de vertido.*

1. Las autorizaciones de vertido establecerán las condiciones en que éstos deben realizarse, concretando especialmente los extremos siguientes:

a. Origen de las aguas residuales y localización geográfica del punto de vertido.

b. El caudal y los valores límite de emisión del efluente, determinados con arreglo a las siguientes reglas generales:

1.ª Las características de emisión del vertido serán tales que resulten adecuadas para el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del medio receptor. Se podrá establecer una aplicación gradual de aquéllas hasta su completa consecución.

2.ª Se exigirán valores límite de emisión para los parámetros característicos de la actividad causante del vertido.

3.ª Los valores límites de emisión no podrán alcanzarse mediante técnicas de dilución.

c. Las instalaciones de depuración y evacuación que el Organismo de cuenca considere suficientes para cumplir la normativa sobre la calidad del agua del medio receptor.

d. Las fechas de iniciación y terminación de las obras e instalaciones, fases parciales previstas y entrada en servicio de aquéllas, así como las medidas que, en caso necesario, se deban adoptar para reducir la contaminación durante el plazo de ejecución de aquéllas.

e. Los elementos de control de las instalaciones de depuración y los sistemas de medición del caudal y de la toma de muestras, así como la periodicidad en la que es obligatorio analizar y acreditar los parámetros y condiciones del vertido, así como cualesquiera otras declaraciones y acreditaciones a que venga obligado ante el Organismo de cuenca.

e´ En su caso, medidas, actuaciones e instalaciones para la regulación de los desbordamientos de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia, así como los elementos de control de las mismas, necesarios que permitan limitar adecuadamente la contaminación que puedan producir y cumplir los objetivos medioambientales del medio receptor.

f. El plazo de vigencia de la autorización.

g. El importe del canon de control de vertidos que corresponda en aplicación del artículo 113 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio, especificando el precio unitario y sus componentes.

h. Las causas de modificación y revocación de la autorización.

i. Las actuaciones y medidas que, en casos de emergencia, deban ser puestas en práctica por el titular de la autorización, entre ellas las instalaciones de almacenamiento de agua sin tratar para el caso de paradas súbitas o programadas de las estaciones depuradoras de industrias que incluyan procesos químicos, biológicos o radioactivos.

j. En su caso, el establecimiento de los programas de reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las características del vertido a los valores límite de emisión a que se refiere el párrafo b) anterior, así como sus correspondientes plazos.

k. Cualquier otra condición que el Organismo de cuenca considere oportuna en razón de las características específicas del caso y del cumplimiento de la finalidad de las instalaciones de depuración y evacuación.

2. El condicionado de las autorizaciones de vertidos que puedan afectar a las aguas subterráneas se ajustarán, además, a lo dispuesto en el artículo 259.

3. Una vez concedida la autorización, las entidades locales y comunidades autónomas autorizadas están obligadas:

a. A informar anualmente a la Administración hidráulica sobre la existencia de vertidos en los colectores de sustancias peligrosas a que se refiere el artículo 245.5.d).

b. A informar sobre el funcionamiento de las estaciones de depuración de aguas residuales urbanas, a los fines previstos en el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se desarrolla el Real Decreto- Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

c. A informar anualmente a la Administración hidráulica sobre los desbordamientos de la red de saneamiento.

4. El incumplimiento de las condiciones de autorización podrá dar lugar a su revocación en los términos previstos en el artículo 263”.

Treinta y ocho. El apartado 1 del artículo 254 queda redactado como sigue:

“1. Los Organismos de cuenca llevarán un censo de los vertidos autorizados.”

Treinta y nueve. Se añade un artículo 259.bis con la siguiente redacción:

“Artículo 259.bis. *Vertidos en cauces con régimen intermitente de caudal.*

605

1. Todo vertido de aguas residuales que se realice en cauces con régimen intermitente de caudal y que no llegue a alcanzar una corriente permanente

podrá ser considerado como vertido directo a aguas continentales o como vertido indirecto en aguas subterráneas mediante filtración a través del suelo.

2. El Organismo de cuenca, tras valorar el del régimen de caudales y las características hidrogeológicas del cauce aguas abajo, en una distancia suficiente para poder estimar la posible afección de las aguas subterráneas, decidirá bajo cual de las consideraciones, o en su caso ambas, ha de efectuarse la tramitación de la autorización de vertido.

3. En el caso de que proceda la tramitación como vertido indirecto a aguas subterráneas, el el peticionario debe presentar el estudio hidrogeológico previo, al que hacen referencia los artículos 257 y 258, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 253".

Cuarenta. Se añade una Sección 4ª bis. al Capítulo II del Título III con la siguiente redacción:

"SECCIÓN 4.ª BIS. DESBORDAMIENTOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EPISODIOS DE LLUVIA

Artículo 259.ter. *Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia.*

1. En las autorizaciones de vertido de sistemas de saneamiento de zonas urbanas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios en relación a desbordamientos en episodios de lluvia:

a. Los proyectos de nuevos desarrollos urbanos deberán justificar la conveniencia de establecer redes de saneamiento separativas o unitarias para aguas residuales y de escorrentía, así como plantear medidas que limiten la aportación de aguas de lluvia a los colectores.

b. En las redes de colectores de aguas residuales urbanas no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía procedentes de zonas exteriores a la aglomeración urbana o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron diseñados, salvo en casos debidamente justificados.

c. En tiempo seco no se admitirán vertidos por los aliviaderos.

d. Los aliviaderos del sistema colector de saneamiento y los de entrada a la depuradora deberán dotarse de los elementos que reduzcan la evacuación al medio receptor de, al menos, sólidos gruesos y flotantes. Estos elementos no deben reducir la capacidad hidráulica de desagüe de los aliviaderos, tanto en su funcionamiento habitual como en caso de fallo.

e. Con el fin de reducir convenientemente la contaminación generada en episodios de lluvia, los titulares de vertidos de aguas residuales urbanas tendrán la obligación de poner en servicio las obras e instalaciones que permitan retener y evacuar adecuadamente hacia la estación depuradora de aguas residuales urbanas las primeras aguas de escorrentía de la red de saneamiento con elevadas concentraciones de contaminantes producidas en dichos episodios.

2. En las autorizaciones de vertido de sistemas de saneamiento de aguas residuales de zonas industriales, se tendrán en cuenta los siguientes criterios en relación a los desbordamientos en episodios de lluvia:

a. Los proyectos de nuevos desarrollos industriales deberán establecer, preferentemente, redes de saneamiento separativas, e incorporar un tratamiento de las aguas de escorrentía, independiente del tratamiento de aguas residuales.

b. En las redes de colectores de aguas residuales de zonas industriales no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía procedentes de zonas exteriores a la implantación de la actividad industrial o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron diseñados, salvo en casos debidamente justificados.

c. No se permitirán aliviaderos en las líneas de recogida y depuración de:

1º. Aguas con sustancias peligrosas.

2º. Aguas de proceso industrial.

3. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en aras del cumplimiento de los objetivos medioambientales del medio receptor, dictará las normas técnicas en las que se especifiquen y desarrollen los procedimientos de diseño de las obras e instalaciones para la gestión de las aguas de escorrentía sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas con competencia sobre cuencas intracomunitarias puedan dictar normas adicionales que garanticen el cumplimiento de dichos objetivos, y teniendo en cuenta los dispuesto en este artículo. Dichas normas se utilizarán en el establecimiento de las condiciones de las autorizaciones de vertido.

4. El deterioro temporal del estado de las masas de agua consecuencia de los desbordamientos de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia, no constituirá infracción de las disposiciones del presente real decreto si se debe a causas naturales o de fuerza mayor o al resultado de circunstancias derivadas de accidentes, que sean excepcionales o que no hayan podido preverse razonablemente, teniendo en cuenta los criterios establecidos en las normas técnicas a las que se hace referencia en el apartado 3. En tales casos el titular de la autorización informará inmediatamente al Organismo de cuenca, especificando las causas, potenciales daños y medidas adoptadas para minimizar los efectos".

Cuarenta y uno. El apartado 1 del artículo 264 queda redactado como sigue:

"1. Previo requerimiento al titular para que ajuste el vertido a las condiciones bajo las que fue otorgada la autorización y no atendido aquel en el plazo concedido, el Organismo de cuenca podrá acordar la revocación de la autorización de acuerdo con el artículo 263.2.a mediante resolución motivada".

Cuarenta y dos. Se añade el siguiente texto al artículo 295

"con la excepción de la aplicación del coeficiente de mayoración en los vertidos de piscifactorías, de aguas de achique procedentes de actividades mineras y de aguas de refrigeración, en los que se multiplicará por 10 el coeficiente que figure en la autorización".

Cuarenta y tres: La disposición adicional pasa a ser disposición adicional primera y se añade la disposición adicional segunda con la siguiente redacción:

"Disposición adicional segunda. *Inventario de los puntos de desbordamiento de aguas de escorrentía*. 607

1. Los titulares de vertidos industriales y de vertidos urbanos de más de 2.000 habitantes equivalentes, cuyos sistemas de saneamiento originen desbordamientos en episodios de lluvia, deberán presentar a los Organismos de cuenca una relación de los puntos de desbordamiento antes del 31 de diciembre de 2014.

2. Los Organismos de cuenca deberán disponer de un inventario de los puntos de desbordamiento de aguas de escorrentía de los sistemas de saneamiento antes del 31 de diciembre de 2015, el cual formará parte del inventario sobre el tipo y la magnitud de las presiones antropogénicas significativas a las que están expuestas las masas de agua, tal como queda definido en el artículo 15 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. Este inventario se almacenará y mantendrá actualizado en un sistema informático convenientemente georreferenciado".

Cuarenta y cuatro: Se incorpora la disposición transitoria tercera con la redacción que consta a continuación:

"Disposición transitoria tercera. *Incorporación en los sistemas de saneamiento de medidas para el control de desbordamiento de aguas de escorrentía*.

1. Las nuevas solicitudes de autorización de vertido, en el caso de vertidos urbanos procedentes de aglomeraciones de más de 2.000 habitantes equivalentes y de vertidos procedentes de zonas industriales, presentadas a partir del 31 de diciembre de 2015, deberán incluir la documentación técnica y las medidas, obras e instalaciones, así como el conjunto de medidas que comprendan estudios técnicos de detalle para reducir la contaminación por desbordamiento de aguas de escorrentía de los sistemas de saneamiento a las que hacen referencia los artículos 246.2.e´) y, en su caso, 246.3.c).

2. Los titulares de las autorizaciones de vertido vigentes y las que estuvieran en trámite a la entrada en vigor de este real decreto, así como las que se soliciten hasta el 31 de diciembre de 2015, deberán dotar a los puntos de desbordamiento de sistemas de cuantificación de alivios, en un plazo de 4 años desde la entrada en vigor del presente real decreto y deberán presentar la documentación técnica a la que hacen referencia los artículos 246.2.e´) y, en su caso, 246.3.c) del presente real decreto como máximo antes del 31 de diciembre de 2019, siempre que estén incluidas en alguno de los siguientes grupos:

a. Vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de más de 50.000 habitantes equivalentes.

b. Vertidos procedentes de instalaciones industriales que requieran una autorización ambiental integrada, conforme al artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y zonas industriales donde se ubique alguna de estas instalaciones.

c. Vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes o zonas industriales diferentes a los anteriores situados en una zona protegida incluida en el Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación Hidrográfica a que se refiere el artículo 24 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica.

Para los desbordamientos de aguas de escorrentía de los sistemas de saneamiento no incluidos en los grupos anteriores, el Organismo de cuenca podrá requerir motivadamente, en función de la magnitud del desbordamiento y de su afección a los objetivos ambientales del medio receptor, esta misma documentación.

3. Los Organismos de cuenca revisarán, a partir de la solicitud del interesado o de oficio, las autorizaciones de vertido para adaptarlas a los nuevos requerimientos en relación con los desbordamientos de aguas de escorrentía.

Cuarenta y cinco. El Anexo IV queda redactado como sigue:

"ANEXO IV.
Cálculo del coeficiente de mayoración o minoración del canon de control de vertidos.

A) El cálculo del coeficiente de mayoración o minoración se obtiene, para cada uno de los dos tipos de vertido indicados en el apartado 1, Naturaleza del vertido, del resultado de multiplicar los factores correspondientes a cada clase de los apartados 2, 3 y 4 siguientes.

Los vertidos de piscifactorías, de aguas de achique procedentes de actividades mineras y de aguas de refrigeración son aguas residuales industriales.

Para el cálculo del coeficiente de minoración se siguen las indicaciones establecidas en los apartados B, C y D de este anexo.

1. Naturaleza del vertido.
   - Agua residual urbana o asimilable (*).
   - Agua residual industrial.
2. Características del vertido.
   - Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes (**) = 1.
   - Urbanos entre 2.000 y 9.999 habitantes-equivalentes (**) = 1,14.
   - Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes (**) = 1,28.
   - Industrial clase 1 (***) = 1.
   - Industrial clase 2 (***) = 1,09.
   - Industrial clase 3 (***) = 1,18.
   - Clase 1, 2 o 3 con sustancias peligrosas (****) = 1,28.
3. Grado de contaminación del vertido.
   - Urbanos con tratamiento adecuado (**) = 0,5.
   - Urbanos sin tratamiento adecuado (**) = 2,5.
   - Industrial con tratamiento adecuado (**) = 0,5.
   - Industrial sin tratamiento adecuado (**) = 2,5.
4. Calidad ambiental del medio receptor (*****).
   - Vertido en zona de categoría I =1,25.
   - Vertido en zona de categoría II = 1,12.
   - Vertido en zona de categoría III = 1.

Notas:

(*) Se entiende por agua residual urbana o asimilable aquélla que no contenga un volumen de aguas residuales industriales mayor de un 30%.

(**) Las definiciones de habitante-equivalente, y de tratamiento adecuado, son las que se encuentran en el Real Decreto-ley 11/1995. En consecuencia, y a los efectos del cálculo del canon de control de vertidos, se extiende la definición de tratamiento adecuado a los vertidos industriales. Se clasificará el vertido urbano considerando el número total de habitantes de la entidad de población (núcleo) a que pertenece. En el caso de que un vertido reciba las aguas residuales de varios núcleos de población, se clasificará por la suma total de sus habitantes.

(***) Clasificación de los vertidos según la actividad industrial.

Clase	Grupo	
Clase 1.	0	Servicios.
	1	Energía y Agua.
	2	Metalurgia.
	3	Alimentación.
	4	Conservera.
	5	Confección.
	6	Madera.
	7	Manufacturas diversas.
	7 BIS	Agricultura, caza y pesca.
	7 TER	Gestión de Residuos.
Clase 2.	8	Minería.
	9	Química.
	10	Construcción.
	11	Bebidas y tabaco.
	12	Carnes y lácteos.
	13	Textil.
	14	Papel.
Clase 3.	15	Curtidos.
	16	Tratamiento de superficies.
	17	Zootecnia.

Clasificación de los vertidos grupos de actividad clasificación por CNAE

CNAE	TITULO	Grupo	Clase
0111	Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas	7 BIS	1
0112	Cultivo de arroz	7 BIS	1
0113	Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos	7 BIS	1
0114	Cultivo de caña de azúcar	7 BIS	1
0115	Cultivo de tabaco	7 BIS	1
0116	Cultivo de plantas para fibras textiles	7 BIS	1

610

CNAE	TITULO	Grupo	Clase
0119	Otros cultivos no perennes	7 BIS	1
0121	Cultivo de la vid	7 BIS	1
0122	Cultivo de frutos tropicales y subtropicales	7 BIS	1
0123	Cultivo de cítricos	7 BIS	1
0124	Cultivo de frutos con hueso y pepitas	7 BIS	1
0125	Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos	7 BIS	1
0126	Cultivo de frutos oleaginosos	7 BIS	1
0127	Cultivo de plantas para bebidas	7 BIS	1
0128	Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas	7 BIS	1
0129	Otros cultivos perennes	7 BIS	1
0141	Explotación de ganado bovino para la producción de leche	17	3
0142	Explotación de otro ganado bovino y búfalos	17	3
0143	Explotación de caballos y otros equinos	17	3
0144	Explotación de camellos y otros camélidos	17	3
0145	Explotación de ganado ovino y caprino	17	3
0146	Explotación de ganado porcino	17	3
0147	Avicultura	17	3
0149	Otras explotaciones de ganado	17	3
0150	Producción agrícola combinada con la producción ganadera	17	3
0161	Actividades de apoyo a la agricultura	0	1
0162	Actividades de apoyo a la ganadería	0	1
0163	Actividades de preparación posterior a la cosecha	0	1
0164	Tratamiento de semillas para reproducción	0	1
0321	Acuicultura marina	17	3
0322	Acuicultura en agua dulce	17	3
0510	Extracción de antracita y hulla	8	2
0520	Extracción de lignito	8	2
0610	Extracción de crudo de petróleo	8	2
0620	Extracción de gas natural	8	2
0710	Extracción de minerales de hierro	8	2
0721	Extracción de minerales de uranio y torio	8	2
0729	Extracción de otros minerales metálicos no férreos	8	2
0811	Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra	8	2
0812	Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín	8	2
0891	Extracción de minerales para productos químicos y fertilizantes	8	2
0892	Extracción de turba	8	2
0893	Extracción de sal	8	2
0899	Otras industrias extractivas n.c.o.p.	8	2
0910	Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural	0	1
0990	Actividades de apoyo a otras industrias extractivas	0	1
1011	Procesado y conservación de carne	12	2
1012	Procesado y conservación de volatería	12	2
1013	Elaboración de productos cárnicos y de volatería	4	1
1021	Procesado de pescados, crustáceos y moluscos	4	1
1022	Fabricación de conservas de pescado	4	1
1031	Procesado y conservación de patatas	4	1
1032	Elaboración de zumos de frutas y hortalizas	4	1

CNAE	TITULO	Grupo	Clase
1039	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas	4	1
1042	Fabricación de margarina y grasas comestibles similares	12	2
1043	Fabricación de aceite de oliva	3	1
1044	Fabricación de otros aceites y grasas	3	1
1052	Elaboración de helados	12	2
1053	Fabricación de quesos	12	2
1054	Preparación de leche y otros productos lácteos	12	2
1061	Fabricación de productos de molinería	3	1
1062	Fabricación de almidones y productos amiláceos	3	1
1071	Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería	3	1
1072	Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración	3	1
1073	Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares	3	1
1081	Fabricación de azúcar	3	1
1082	Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería	3	1
1083	Elaboración de café, té e infusiones	3	1
1084	Elaboración de especias, salsas y condimentos	3	1
1085	Elaboración de platos y comidas preparados	3	1
1086	Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos	3	1
1089	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.	3	1
1091	Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja	3	1
1092	Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía	3	1
1101	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	11	2
1102	Elaboración de vinos	11	2
1103	Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas	11	2
1104	Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación	11	2
1105	Fabricación de cerveza	11	2
1106	Fabricación de malta	11	2
1107	Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas	3	1
1200	Industria del tabaco	11	2
1310	Preparación e hilado de fibras textiles	13	2
1320	Fabricación de tejidos textiles	13	2
1330	Acabado de textiles	13	2
1391	Fabricación de tejidos de punto	13	2
1392	Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir	13	2
1393	Fabricación de alfombras y moquetas	13	2
1394	Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	13	2
1395	Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir	13	2
1396	Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial	13	2
1399	Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p.	13	2
1411	Confección de prendas de vestir de cuero	5	1
1412	Confección de ropa de trabajo	5	1
1413	Confección de otras prendas de vestir exteriores	5	1

CNAE	TITULO	Grupo	Clase
1414	Confección de ropa interior	5	1
1419	Confección de otras prendas de vestir y accesorios	5	1
1420	Fabricación de artículos de peletería	5	1
1431	Confección de calcetería	5	1
1439	Confección de otras prendas de vestir de punto	5	1
1511	Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles	15	3
1512	Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería	15	3
1520	Fabricación de calzado	5	1
1610	Aserrado y cepillado de la madera	6	1
1621	Fabricación de chapas y tableros de madera	6	1
1622	Fabricación de suelos de madera ensamblados	6	1
1623	Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción	6	1
1624	Fabricación de envases y embalajes de madera	6	1
1629	Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería	6	1
1711	Fabricación de pasta papelera	14	2
1712	Fabricación de papel y cartón	14	2
1721	Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón	14	2
1722	Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico	14	2
1723	Fabricación de artículos de papelería	14	2
1724	Fabricación de papeles pintados	14	2
1729	Fabricación de otros artículos de papel y cartón	14	2
1811	Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas	7	1
1812	Otras actividades de impresión y artes gráficas	7	1
1813	Servicios de preimpresión y preparación de soportes	7	1
1814	Encuadernación y servicios relacionados con la misma	7	1
1820	Reproducción de soportes grabados	7	1
1910	Coquerías	8	2
1920	Refino de petróleo	8	2
2011	Fabricación de gases industriales	9	2
2012	Fabricación de colorantes y pigmentos	9	2
2013	Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica	9	2
2014	Fabricación de otros productos básicos de química orgánica	9	2
2015	Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados	9	2
2016	Fabricación de plásticos en formas primarias	9	2
2017	Fabricación de caucho sintético en formas primarias	9	2
2020	Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos	9	2
2030	Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas	9	2
2041	Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento	9	2
2042	Fabricación de perfumes y cosméticos	9	2
2051	Fabricación de explosivos	9	2
2052	Fabricación de colas	9	2
2053	Fabricación de aceites esenciales	9	2
2059	Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.	9	2
2060	Fabricación de fibras artificiales y sintéticas	9	2
2110	Fabricación de productos farmacéuticos de base	9	2

CNAE	TITULO	Grupo	Clase
2120	Fabricación de especialidades farmacéuticas	9	2
2211	Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; reconstrucción y recauchutado de neumáticos	9	2
2219	Fabricación de otros productos de caucho	9	2
2221	Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico	9	2
2222	Fabricación de envases y embalajes de plástico	9	2
2223	Fabricación de productos de plástico para la construcción	9	2
2229	Fabricación de otros productos de plástico	9	2
2311	Fabricación de vidrio plano	9	2
2312	Manipulado y transformación de vidrio plano	9	2
2313	Fabricación de vidrio hueco	9	2
2314	Fabricación de fibra de vidrio	9	2
2319	Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico	9	2
2320	Fabricación de productos cerámicos refractarios	9	2
2331	Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica	9	2
2332	Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción	9	2
2341	Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental	9	2
2342	Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos	9	2
2343	Fabricación de aisladores y piezas aislantes de material cerámico	9	2
2344	Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico	9	2
2349	Fabricación de otros productos cerámicos	9	2
2351	Fabricación de cemento	9	2
2352	Fabricación de cal y yeso	9	2
2361	Fabricación de elementos de hormigón para la construcción	9	2
2362	Fabricación de elementos de yeso para la construcción	9	2
2363	Fabricación de hormigón fresco	9	2
2364	Fabricación de mortero	9	2
2365	Fabricación de fibrocemento	9	2
2369	Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento	9	2
2370	Corte, tallado y acabado de la piedra	9	2
2391	Fabricación de productos abrasivos	9	2
2399	Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p.	9	2
2410	Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones	2	1
2420	Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero	7	1
2431	Estirado en frío	2	1
2432	Laminación en frío	2	1
2433	Producción de perfiles en frío por conformación con plegado	2	1
2434	Trefilado en frío	2	1
2441	Producción de metales preciosos	2	1
2442	Producción de aluminio	2	1
2443	Producción de plomo, zinc y estaño	2	1
2444	Producción de cobre	2	1
2445	Producción de otros metales no férreos	2	1
2446	Procesamiento de combustibles nucleares	8	2
2451	Fundición de hierro	2	1
2452	Fundición de acero	2	1

CNAE	TITULO	Grupo	Clase
2453	Fundición de metales ligeros	2	1
2454	Fundición de otros metales no férreos	2	1
2511	Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes	7	1
2512	Fabricación de carpintería metálica	7	1
2521	Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central	7	1
2529	Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal	7	1
2530	Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de calefacción central	7	1
2540	Fabricación de armas y municiones	7	1
2550	Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos	2	1
2561	Tratamiento y revestimiento de metales	16	3
2562	Ingeniería mecánica por cuenta de terceros	2	1
2571	Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería	7	1
2572	Fabricación de cerraduras y herrajes	7	1
2573	Fabricación de herramientas	7	1
2591	Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero	7	1
2592	Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros	7	1
2593	Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles	7	1
2594	Fabricación de pernos y productos de tornillería	7	1
2599	Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.	7	1
2611	Fabricación de componentes electrónicos	7	1
2612	Fabricación de circuitos impresos ensamblados	7	1
2620	Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	7	1
2630	Fabricación de equipos de telecomunicaciones	7	1
2640	Fabricación de productos electrónicos de consumo	7	1
2651	Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación	7	1
2652	Fabricación de relojes	7	1
2660	Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos	7	1
2670	Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico	7	1
2680	Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	9	2
2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos	7	1
2712	Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico	7	1
2720	Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos	7	1
2731	Fabricación de cables de fibra óptica	7	1
2732	Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos	7	1
2733	Fabricación de dispositivos de cableado	7	1
2740	Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación	7	1
2751	Fabricación de electrodomésticos	7	1
2752	Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos	7	1
2790	Fabricación de otro material y equipo eléctrico	7	1
2811	Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores	7	1
2812	Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y neumática	7	1
2813	Fabricación de otras bombas y compresores	7	1
2814	Fabricación de otra grifería y válvulas	7	1
2815	Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión	7	1
2821	Fabricación de hornos y quemadores	7	1

615

CNAE	TITULO	Grupo	Clase
2822	Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación	7	1
2823	Fabricación de máquinas y equipos de oficina, excepto equipos informáticos	7	1
2824	Fabricación de herramientas eléctricas manuales	7	1
2825	Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica	7	1
2829	Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.	7	1
2830	Fabricación de maquinaria agraria y forestal	7	1
2841	Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal	7	1
2849	Fabricación de otras máquinas herramienta	7	1
2891	Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica	7	1
2892	Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción	7	1
2893	Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco	7	1
2894	Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero	7	1
2895	Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón	7	1
2896	Fabricación de maquinaria para la industria del plástico y el caucho	7	1
2899	Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.	7	1
2910	Fabricación de vehículos de motor	7	1
2920	Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques	7	1
2931	Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor	7	1
2932	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor	7	1
3011	Construcción de barcos y estructuras flotantes	7	1
3012	Construcción de embarcaciones de recreo y deporte	7	1
3020	Fabricación de locomotoras y material ferroviario	7	1
3030	Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	7	1
3040	Fabricación de vehículos militares de combate	7	1
3091	Fabricación de motocicletas	7	1
3092	Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad	7	1
3099	Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p.	7	1
3101	Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales	7	1
3102	Fabricación de muebles de cocina	7	1
3103	Fabricación de colchones	7	1
3109	Fabricación de otros muebles	7	1
3211	Fabricación de monedas	7	1
3212	Fabricación de artículos de joyería y artículos similares	7	1
3213	Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares	7	1
3220	Fabricación de instrumentos musicales	7	1
3230	Fabricación de artículos de deporte	7	1
3240	Fabricación de juegos y juguetes	7	1
3250	Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	7	1
3291	Fabricación de escobas, brochas y cepillos	7	1
3299	Otras industrias manufactureras n.c.o.p.	7	1
3311	Reparación de productos metálicos	0	1

CNAE	TITULO	Grupo	Clase
3312	Reparación de maquinaria	0	1
3313	Reparación de equipos electrónicos y ópticos	0	1
3314	Reparación de equipos eléctricos	0	1
3315	Reparación y mantenimiento naval	0	1
3316	Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial	0	1
3317	Reparación y mantenimiento de otro material de transporte	0	1
3319	Reparación de otros equipos	0	1
3320	Instalación de máquinas y equipos industriales	0	1
3512	Transporte de energía eléctrica	1	1
3513	Distribución de energía eléctrica	1	1
3514	Comercio de energía eléctrica	1	1
3515	Producción de energía hidroeléctrica	1	1
3516	Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional	1	1
3517	Producción de energía eléctrica de origen nuclear	1	1
3518	Producción de energía eléctrica de origen eólico	1	1
3519	Producción de energía eléctrica de otros tipos	1	1
3521	Producción de gas	1	1
3522	Distribución por tubería de combustibles gaseosos	1	1
3523	Comercio de gas por tubería	1	1
3530	Suministro de vapor y aire acondicionado	1	1
3600	Captación, depuración y distribución de agua	1	1
3700	Recogida y tratamiento de aguas residuales	1	1
3811	Recogida de residuos no peligrosos	7 TER	1
3812	Recogida de residuos peligrosos	7 TER	1
3821	Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos	7 TER	1
3822	Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos	7 TER	1
3831	Separación y clasificación de materiales	7 TER	1
3832	Valorización de materiales ya clasificados	7 TER	1
3900	Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	7 TER	1
4121	Construcción de edificios residenciales	10	2
4122	Construcción de edificios no residenciales	10	1
4122	Construcción de edificios no residenciales	10	2
4211	Construcción de carreteras y autopistas	10	2
4212	Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas	10	2
4213	Construcción de puentes y túneles	10	2
4221	Construcción de redes para fluidos	0	1
4222	Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones	0	1
4291	Obras hidráulicas	0	1
4299	Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p.	0	1
4311	Demolición	0	1
4312	Preparación de terrenos	0	1
4313	Perforaciones y sondeos	0	1
4520	Mantenimiento y reparación de vehículos de motor	0	1
4540	Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios	0	1
4671	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares	0	1
4730	Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados	0	1
5210	Depósito y almacenamiento	0	1

617

CNAE	TITULO	Grupo	Clase
5510	Hoteles y alojamientos similares	0	1
5520	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	0	1
5530	Campings y aparcamientos para caravanas	0	1
5590	Otros alojamientos	0	1
5610	Restaurantes y puestos de comidas	0	1
5621	Provisión de comidas preparadas para eventos	0	1
5629	Otros servicios de comidas	0	1
5630	Establecimientos de bebidas	0	1
5811	Edición de libros	7	1
5812	Edición de directorios y guías de direcciones postales	7	1
5813	Edición de periódicos	7	1
5814	Edición de revistas	7	1
5819	Otras actividades editoriales	7	1
5821	Edición de videojuegos	7	1
5829	Edición de otros programas informáticos	7	1
7120	Ensayos y análisis técnicos	0	1
7211	Investigación y desarrollo experimental en biotecnología	0	1
7219	Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas	0	1
7220	Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades	0	1
7420	Actividades de fotografía	9	2
8610	Actividades hospitalarias	0	1
8621	Actividades de medicina general	0	1
8622	Actividades de medicina especializada	0	1
8623	Actividades odontológicas	0	1
8690	Otras actividades sanitarias	0	1
8710	Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios	0	1
8720	Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia	0	1
8731	Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores	0	1
8732	Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física	0	1
8790	Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales	0	1
9511	Reparación de ordenadores y equipos periféricos	0	1
9512	Reparación de equipos de comunicación	0	1
9521	Reparación de aparatos electrónicos de audio y vídeo de uso doméstico	0	1
9522	Reparación de aparatos electrodomésticos y de equipos para el hogar y el jardín	0	1
9523	Reparación de calzado y artículos de cuero	0	1
9524	Reparación de muebles y artículos de menaje	0	1
9525	Reparación de relojes y joyería	0	1
9529	Reparación de otros efectos personales y artículos de uso doméstico	0	1
9601	Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel	0	1
9602	Peluquería y otros tratamientos de belleza	0	1
9603	Pompas fúnebres y actividades relacionadas	0	1
9604	Actividades de mantenimiento físico	0	1

CNAE	TITULO	Grupo	Clase
9609	Otras servicios personales n.c.o.p.	0	1

Las aguas de procedencia urbana no asimilables a aguas urbanas, por contener más de un 30% de volumen de agua industrial, se clasificarán en dos tramos:

- Vertidos con un porcentaje de aguas industriales entre el 30% y el 70% del total: el conjunto del vertido se clasificará como industrial de clase 1.

- Vertidos con un porcentaje de aguas industriales superior al 70% del total: el conjunto del vertido se considerará industrial y se clasificará según las clases industriales de las actividades de que se trate, aplicando los criterios siguientes: en el caso de polígonos industriales u otros vertidos que reúnan los efluentes procedentes de distintas actividades industriales, se aplicará al conjunto del vertido el mayor de los coeficientes que corresponderían a cada una de las actividades si vertieran individualmente. No obstante, si la solicitud de autorización de vertido desglosa los volúmenes de las distintas clases industriales, se ponderará el correspondiente coeficiente que debe aplicarse.

(****) Para la inclusión en esta clase bastará con que se constate en el vertido la presencia de una de las sustancias peligrosas en concentración superior al límite de cuantificación analítico. A los solos efectos de la aplicación de este factor, se consideran sustancias peligrosas las que figuran en los anexos I y II del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

Las sustancias seleccionadas se clasifican en sustancias prioritarias y otros contaminantes y sustancias preferentes de la siguiente forma:

- Sustancias prioritarias y otros contaminantes: son las sustancias recogidas en el anexo I, apartado A del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero.

- Sustancias preferentes: son las sustancias recogidas en el anexo II, apartado A del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero.

(*****) Se incluyen en las zonas de categoría I: las destinadas a la producción de agua potable, las zonas aptas para el baño, las zonas aptas para la vida de los salmónidos, las zonas declaradas de protección especial y los perímetros de protección contemplados en el artículo 56.3 del texto refundido de la Ley de Aguas. Asimismo, todos los vertidos a las aguas subterráneas. También se incluyen en esta categoría las

zonas declaradas sensibles en aplicación del Real Decreto-Ley 11/1995 y sus áreas de captación en este último supuesto, el coeficiente correspondiente a esta categoría se aplicará únicamente:

a. En cuanto a los vertidos de aguas residuales urbanas, a las aglomeraciones urbanas de más de 10.000 habitantes equivalentes .

b. En cuanto a los vertidos de aguas residuales industriales, a aquellas cuya autorización de vertido contemple condiciones específicas para el tratamiento, reducción o limitación del nitrógeno o el fósforo.

Se incluyen en las zonas de categoría II: las zonas aptas para la vida de los ciprínidos y para la cría de moluscos, así como cualesquiera otras para las que los planes hidrológicos de cuenca hayan determinado un uso público recreativo.

Se incluyen en las zonas de categoría III aquéllas no incluidas en las categorías anteriores.

Las definiciones anteriores se refieren a los conceptos regulados en el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, y en su aplicación se tendrán en cuenta los objetivos que, para cada horizonte temporal, los planes hidrológicos de cuenca hayan establecido para cada medio receptor.

En los supuestos en que coincidan dos o más usos en el mismo medio receptor en el que se efectúa el vertido, se aplicará el factor más elevado. La aplicación de los factores se extiende a las zonas de influencia que contengan los planes hidrológicos siempre que estén efectivamente delimitadas.

B.) Vertido de piscifactorías: en el caso de que los valores de los parámetros característicos de contaminación del vertido sean inferiores a los fijados como objetivo de calidad del medio receptor, el coeficiente será 0,006. De no cumplirse esta condición, el coeficiente se multiplicará por 3.

C.) Aguas de achique procedentes de actividades mineras: en el caso de que los valores de los parámetros característicos de contaminación del vertido sean inferiores a los fijados como objetivo de calidad del medio receptor, el coeficiente será 0,006. De no cumplirse esta condición, el coeficiente se multiplicará por 3.

D) Aguas de refrigeración: se aplicarán los coeficientes de la tabla adjunta, siempre que el vertido no ocasione el incumplimiento del objetivo de calidad fijado para la temperatura en el medio receptor y, además, no se altere el valor del resto de parámetros o sustancias del vertido respecto al agua de captación.

Si el río no tiene fijados objetivos de calidad, el incremento de temperatura media de una sección fluvial tras la zona de dispersión no superará los 3 °C.

En lagos o embalses, la temperatura del vertido no superará los 30 °C. **620**

Volumen Hm³	Coeficientes de minoración (1)

Menor de 100	0,02000
100 a 250	0,01166
250 a 1.000	0,00566
Superior a 1.000	0,00125

De no cumplirse alguna de las condiciones anteriores, los coeficientes se multiplicarán por 3.

El importe del canon se determinará por adición de los importes parciales que resulten de aplicar los sucesivos tramos de la escala.

(1) En el caso de centrales térmicas, sean convencionales o nucleares, que utilicen el agua como refrigeración, los coeficientes de la tabla corresponden a un funcionamiento tipo de 6.000 horas anuales en el caso de las centrales térmicas convencionales, y 8.000 horas anuales en el caso de las centrales nucleares. Estos coeficientes se multiplicarán por la relación entre el número de horas de funcionamiento realmente habidas en el año y las correspondientes horas de funcionamiento tipo."

Artículo segundo. *Modificación del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.*

El artículo 2 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas, queda redactado como sigue:

"El proyecto, construcción y mantenimiento de los sistemas colectores a los que hace referencia el artículo 4 del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, deberá realizarse teniendo presente el volumen y características de las aguas residuales urbanas, utilizando los mejores conocimientos técnicos disponibles que no redunden en costes desproporcionados, para limitar la contaminación aportada al medio receptor por desbordamiento de aguas de escorrentía y para conseguir una adecuada estanqueidad de los sistemas colectores, entendiéndose por estanqueidad la limitación de filtraciones.

Los Organismos de cuenca y el resto de administraciones competentes, al otorgar las autorizaciones de vertido, decidirán las medidas para limitar la contaminación por desbordamiento de aguas de escorrentía, en circunstancias tales como lluvias torrenciales inusuales, teniendo en cuenta las Normas Técnicas referidas en el artículo 259.ter.3 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico."

Disposición derogatoria única. *Adaptación de las funciones de los Consejos de Agua de la demarcación.*

> "Queda derogada la función del Consejo de Agua de la demarcación relativa al deber de informar la revocación de las autorizaciones de vertido de aguas residuales al dominio publico hidráulico que figuren, en virtud de la artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros por el que se establece su composición, funcionamiento y estructura."

Disposición final primera. *Título competencial.*

1. El artículo 1 apartado cuarenta y dos se dicta al amparo del artículo 149.1.14ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda General.
2. El artículo 1 apartado seis, catorce, quince, dieciocho al veintiuno, del veinticuatro al treinta se dictan al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución, de legislación básica sobre concesiones administrativas.
3. El artículo 1 apartado siete, dieciséis y treinta y uno se dictan al amparo del artículo 149.1.22ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma.
4. Tiene el carácter de legislación básica sobre protección de medio ambiente, sin perjuicio de las facultadas de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, de acuerdo con lo preceptuado en el 149.1.23ª de la Constitución, el resto de las disposiciones de este reglamento.

Disposición final segunda. *Entrada en vigor.*

El presente real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 10/11/2011
OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 13:04:38
E001201100011504

Asociación de Productores de Energías Renovables

04.11.2011 CORREOS

SR.

JOSE MARÍA GONZÁLEZ VÉLEZ, en su calidad de Presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables, cuyas circunstancias ya constan en esa Confederación, comparezco y como mejor proceda en Derecho **DIGO**

Que paso a realizar alegaciones al proyecto de normativa del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación hidrológica del Cantábrico oriental (parte española), con arreglo a las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- En relación con el régimen de caudales ecológicos. En concreto, artículo 11 apartado 2 de la Propuesta.

Dicho sea en términos de defensa y con todo respeto, nos oponemos frontalmente al precepto mencionado en tanto que pretende aplicar los caudales ecológicos, no a las concesiones futuras (las que se otorguen con posterioridad a la entrada en vigor del Plan), sino a las concesiones existentes con anterioridad, a menos que se prevea a favor del titular la indemnización que establece el artículo 65,3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), cosa que no se hace.

a) En primer lugar, el principio constitucional de irretroactividad de las leyes en lo que resulten desfavorables para el ciudadano exige que los caudales ecológicos fijados en el plan no sean impuestos sin indemnización a los titulares cuyos títulos concesionales no los tuvieran fijados o los tuvieran en otra cuantía.
b) En segundo lugar, el artículo 65, 3 del TRLA es taxativo al exigir indemnización en el caso de que se deban adecuar las concesiones a los planes hidrológicos de cuenca, que es precisamente el caso que nos ocupa. En este sentido no debe olvidarse que un Real Decreto —que es la norma que en su caso aprobará el Plan Hidrológico que estamos examinando— no puede violar lo dispuesto en una norma de rango superior, como es la Ley de Aguas, pues de lo contrario se estaría violando el principio de jerarquía normativa.
c) El hecho de que el artículo 73, 7 del TRLA califique a los caudales ecológicos como una restricción general a los sistemas de explotación para nada invalida la previsión del art. 65, 3 del propio TRLA que exige indemnización al titular privado de sus derechos como consecuencia de la adecuación de su concesión a los planes hidrológicos de cuenca.
d) Por lo demás, parece que la imposición de los caudales ecológicos fijados en el Plan Hidrológico ha de reputarse también nula, toda vez que, para su establecimiento, no se ha cumplido la previsión del artículo 73, 7, in fine del T.R.L.A., esto es, "no se han realizado estudios específicos para cada tramo de río"

623

Muntaner 269, 1°- 1ª
08021 - Barcelona
T. 93 241 93 63 - F. 93 241 93 67

Aguarón 23 B, 1° B
28023 - Madrid
T. 91 307 17 61 - F. 91 307 03 50

E. appa@appa.es www.appa.es

Por otra parte, no existe en este momento un consenso científico en cuanto a la validez metodología de cálculo seleccionado para el cálculo de los caudales ecológicos y la información de estaciones de aforos y pluviométricas no es suficiente ni de la calidad adecuada. Por tanto, cualquier inferencia particular que se realice, siempre será experimental, y este caso con cargo al concesionario. Es decir, totalmente arbitrario y contrario a los intereses del administrado y se estará incurriendo en una notable inseguridad jurídica, en una clara violación —por ser una remisión a una norma en blanco—, del derecho de defensa de los administrados.

En este sentido, y respecto a la necesidad de alcanzar un acuerdo o umbral consensuado entre todos los operadores, debemos remitirnos a las Instrucción de Planificación Ecológica que, en su artículo 3.4, regula el proceso de participación activa de dichos operadores:

"En aquellos casos en los que el régimen de caudales ecológicos condicione las asignaciones y reservas del plan hidrológico, el proceso de concertación abarcará todos los niveles de participación". Prosigue el citado artículo: *"se incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, usuario, organizaciones económicas sociales y ambientales y en el caso concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro eléctrico. Este proceso deberá ser previo a la inclusión del régimen de caudales en el Plan Hidrológico".*

La participación activa a la que refiere la Instrucción no ha sido respetada en el presente procedimiento de siendo que, por el contrario, se establecen unos umbrales unilaterales sin soporte técnico científico que avale la bonanza de la medida.

Por tanto, solicitamos que se suprima el contenido del artículo 11.2 de la normativa a partir del primer punto y seguido del mismo. O, en su defecto, que el propio precepto establezca que en caso de imponerse los caudales ecológicos a los concesionarios preexistentes ello se hará *"sin perjuicio de la indemnización contenida en el art. 65, 3 de del T.R.L.A."*

Segunda.- Respecto al artículo 12. Cálculo de caudales ecológicos para las masas de agua de categoría río en el anejo 8.1.

Los caudales ecológicos de las masas estudiadas se han determinado en función de unos cálculos teóricos basados en modelos como el SIMPA II (Sistema Integrado para la Modelización del proceso de Precipitación Aportación) basado en el análisis de estaciones pluviométricas, determinación del área de la cuenca vertiente, cálculo de la escorrentía aplicable, evapotranspiración, estimación de las aportaciones o detracciones de esa cuenca con otras por aguas subterráneas, etc, de modo que el número de variables a introducir en el modelo es tan grande que pudiera ser que los cálculos no fueran adecuados.

624

Muntaner 269, 1°- 1ª
08021 - Barcelona
T. 93 241 93 63 - F. 93 241 93 67

Aguarón 23 B, 1° B
28023 - Madrid
T. 91 307 17 61 - F. 91 307 03 50

E. appa@appa.es www.appa.es

De hecho, en Anejo V – Caudales Ecológicos – en su apartado 3.2 que recoge lo que se decía en el apartado 8 del Plan Hidrológico vigente; 8.2.7.1 – problemas – "Un ... problema metodológico ... importante es la dificultad de definir, con una garantía mínima, el caudal que es necesario desde un punto de vista medioambiental."

Así, la determinación de los caudales ecológicos pudieran ser incorrecta y la imposición de los mismos a los concesionarios de las explotaciones hidroeléctricas podría ser injusta y arbitraria.

Dada la normativa existente, tanto en el Ley de Aguas como en la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y Ley 11/2005 por la que se modifica la anterior, se dice que para el cálculo de los caudales ecológicos "los organismos de cuenca establecerán estudios específicos para cada tramo de río..." (art. 73, 7 in fine, del T.R.L.A.)

Pues bien, tal como decíamos en el apartado anterior, sorprende que se hayan analizado solo 9 masas, extrapolando estos resultados al resto de ríos con un modelo teórico que no tiene validez científica quedando el administrado claramente desprotegido.

Tercera.- Respecto al artículo 24. Instalación de dispositivos de medida.

El artículo 24, 2 de la propuesta de normativa se extralimita en relación a la habilitación normativa proporcionada por la Ley de Aguas. En efecto, la Ley obliga a los concesionarios *"a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto utilizados y, en su caso, retornados"*.

Lo que la ley no impone a los concesionarios —y por tanto lo que no puede imponer el Plan Hidrológico a los mismos— es que instalen a sus expensas *"los sistemas .... que limiten la derivación de caudales máximos concedidos"*. Los concesionarios tienen la obligación de no derivar más agua de la concedida. Por supuesto. Pero, a menos que se imponga en el título concesional, no tienen la obligación de instalar módulos limitadores de caudal.

Cuarta. Artículo 24, 7.

Dicha sea en términos de defensa, el Plan hidrológico de cuenca no es quién para definir el carácter y el alcance probatorio o no de los resultados de las inspecciones del personal de esa Confederación. Es una cuestión sujeta a reserva de Ley en la que las normas de rango jerárquico inferior no deben ni entrar ni aunque sea, en el mejor de los casos, para reproducir literalmente, la dicción legal.

625

Tres cuartos de lo mismo cabe decir del carácter grave o no de las infracción, pues corresponde a la Ley de aguas establecerlo.

Muntaner 269, 1°- 1ª
08021 - Barcelona
T. 93 241 93 63 - F. 93 241 93 67

Aguarón 23 B, 1° B
28023 - Madrid
T. 91 307 17 61 - F. 91 307 03 50

E. appa@appa.es www.appa.es

Quinta. Art 34.1 Plazo concesional

El plazo general de 20 años es completamente insuficiente para la actividad hidroeléctrica que, como es sabido, requiere de unas inversiones muy cuantiosas en infraestructuras y equipos electromecánicos que difícilmente van a poder amortizarse en un plazo tan exiguo.

El texto del precepto prevé que discrecionalmente "podrán fijarse otras duraciones inferiores o superiores por razones de índole público debidamente razonadas...", dejando de nuevo un importarte elemento de discrecionalidad a la administración para dar el plazo concesional que le plazca, por lo que entendemos que tal redacción ha de ser acotada o, mejor, supriida.

Entendemos que en el caso de la actividad hidroeléctrica, al ser siempre insuficiente el plazo general de 20 años, habría cuando menos que modificar el precepto añadiéndole la mención *"salvo en el caso del uso hidroeléctrico que será de 40 años"*.

Por tanto, solicitamos se prevea que "el plazo concesional para usos hidroeléctrico será de al menos 40 años".

Sexta.- Tabla 7 de la página 23

La tabla 7 de la página 23 debería incluir la correspondiente dotación de aguar para la refrigeración de las plantas termosolares en la modalidad de circuito abierto, para no incluir en discriminación con el resto de tecnologías (nuclear, ciclo combinado ...etc) que sí ven reconocido su derecho a refrigerar en esa modalidad de circuito abierto.

Séptima.- Respecto los artículos 34.3 y 33.5 y las limitaciones a los plazos concesionales.

La limitación de las concesiones a 99 años, incluso en aquellos supuestos en que por aplicación de la disposición transitoria primera de la L.A. daria lugar a un plazo mayor es —dicho sea como siempre en términos de defensa— contraria a derecho.

Asentamos tal afirmación en sendos dictámenes jurídicos realizados por los profesores Eduardo García de Enterría y Antoni Ferré que esta Asociación encargó en su momento en previsión de que, como de hecho ha ocurrido, esa Confederación optase por aplicar a las concesiones hidroeléctricas una más que discutible doctrina en su día formulada nada menos que para el ámbito "funerario" (sic). Acompañamos como anexo los mencionados dictámenes.

626

Muntaner 269, 1º- 1ª
08021 - Barcelona
T. 93 241 93 63 - F. 93 241 93 67

Aguarón 23 B, 1º B
28023 - Madrid
T. 91 307 17 61 - F. 91 307 03 50

E. appa@appa.es www.appa.es

Por lo demás, limitar a 20 años las concesiones hidroeléctricas significa, en la práctica, prohibir la actividad hidroeléctrica en la cuenca mediante nuevos aprovechamientos, dado que el monto de las inversiones necesarias para acometer la construcción de una central hace del todo punto imposible que pueda ser amortizado en ese tiempo y, además, se obtenga el legítimo beneficio industrial.

Entendemos preferible que, si la autoridad hidráulica estima adecuado a los intereses públicos prohibir la construcción de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos, se recoja tal prohibición de manera frontal y sin subterfugios en la normativa del Plan, con objeto de que, en sede jurisdiccional pueda ser valorada en su ajuste o no a derecho. Al optar por efectuar tal prohibición por la vía fáctica mediante la limitación del plazo a 20 años se está incurriendo en lo que a nuestro juicio podría ser considerada como una conducta impropia de gestores públicos y asimilable a la desviación de poder.

Octava.- Artículo 31.1

Dicho sea con el debido respeto, la calificación de "esenciales" referido al condicionado de la concesión, es una **categoría jurídica inexistente** en nuestro derecho hidráulico. Lo que, según la Ley de Aguas, pueden ser esenciales o pueden no serlo son las características de las concesiones, no de sus condicionados, que es cosa bien distinta.

Siendo así, es obvio que no es ajustado a derecho dotar de una determinada consecuencia jurídica (la incoación del expediente de extinción) a la violación de una categoría jurídica que no se sabe en qué consiste por no estar dicha categoría acuñada en el derecho de aguas.

Vuelve a ser ésta una temática reservada a la Ley. Es la Ley y no una norma de rango inferior la que debe establecer y tipificar las conductas contrarias a la misma, asignado las correspondientes sanciones a tales conductas. Las normas de rango inferior, como la presente normativa (que se aprueba por Real Decreto), nada pueden hacer, añadir, quitar o modificar respecto a los estrictos términos legales.

Novena. Artículo 35.2 Respecto a la reversión de los bienes.

Creemos que es contrario a derecho que se instaure un gravamen nuevo para el administrado-concesionario cual es el de sufragar a su costa la demolición de las obras e instalaciones levantadas en el dominio público hidráulico. Las obligaciones de éstos se limitan por la normativa hidráulica a la reversión al Estado de las obras e instalaciones en dicho dominio, sin más.

La demolición de dichas obras e instalaciones es un nuevo gravamen al administrado que se pretende imponer de manera no ajustada a derecho por venir vehiculizado a través de una norma de rango reglamentario (como la presente normativa), cuando en esta materia existe reserva y rango de Ley.

627

Muntaner 269, 1°- 1ª
08021 - Barcelona
T. 93 241 93 63 - F. 93 241 93 67

Aguarón 23 B, 1° B
28023 - Madrid
T. 91 307 17 61 - F. 91 307 03 50

E. appa@appa.es www.appa.es

Lo anterior no queda en absoluto invalidado por la mención del artículo 101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Dicha Ley no puede dar cobertura a la "inventada" obligación de demolición, por tratarse de una ley general frente a una ley especial o sectorial como es la Ley de Aguas, pues lo contrario significaría violar el elemental criterio hermenéutico de que ley especial prevalece sobre ley general.

Décima – Art 37.7

Tal como se ha comentado anteriormente, la Propuesta de Plan Hidrológico debe ser más explícita en el establecimiento de los criterios de la determinación de los plazos concesionales y en el caso de la actividad hidroeléctrica, al ser siempre insuficiente el plazo general de 20 años, habría que modificar el precepto añadiéndole la mención *"salvo en el caso del uso hidroeléctrico que será de 40 años"*.

Por tanto, solicitamos se determinen de manera adecuada cuales son los criterios para la fijación de los plazos concesionales y que se prevea que "el plazo concesional para usos hidroeléctrico será de al menos 40 años".

Decimoprimera. - Respecto al artículo 38.3. Modificación y Revisión de los caudales concesionales.

La redacción de este párrafo es tan abierta que da a la administración una gran libertad de decidir lo que considere una "modificación de los supuestos determinantes del otorgamiento de la concesión" de modo que podría injustamente modificar el caudal concesional en perjuicio del concesionario sin que éste tenga derecho a indemnización alguna.

Nuevamente viene el texto normativo del Plan Hidrológico a vulnerar los derechos de los concesionarios existentes. Las causas de modificación o revisión de las concesiones están taxativamente establecidas por el T.R.L.A. y por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de forma que constituyen un númerus clausus que no es posible ampliar sin una formal modificación de la mencionada Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

A ello no obsta el hecho de que el texto del apartado 3 del artículo que comentamos pueda guardar más o menos similitud con lo establecido en el T.R.L.A. Las normas limitativas de derechos gozan de reserva de ley, de modo que **no les es lícito** a las normas de rango inferior, completar, extender, interpretar o ampliar los estrictos contenidos del texto legal. Eso es función de los Tribunales de Justicia, no del legislador reglamentario.

628

Muntaner 269, 1°- 1ª
08021 - Barcelona
T. 93 241 93 63 - F. 93 241 93 67

Aguarón 23 B, 1° B
28023 - Madrid
T. 91 307 17 61 - F. 91 307 03 50

E. appa@appa.es www.appa.es

Tres cuartos de lo mismo hay que sostener a la pretendida falta de indemnización en el supuesto de la modificación o revisión de las concesiones. Las causas y supuestos que dan lugar a indemnización están establecidos en la Ley de Aguas y no es quién el Plan Hidrológico de Cuenca u cualquier otro Real Decreto para modificar, explicar, ampliar o negar los términos legales.

Así las cosas, solicitamos sin más la supresión del apartado.

Decimosegunda.- Respecto al artículo 38.5.

Este precepto vuelve a caer en el defecto que venimos alertando de la extralimitación normativa. A nuestro juicio, el hecho de que los caudales ecológicos sean una restricción previa no afecta para nada al derecho a ser indemnizados que les asiste a los particulares que hayan visto mermados sus derechos como consecuencia de la adecuación de su aprovechamiento preexistentes a los planes hidrológicos aprobados con posterioridad (art. 65, 3 del T.R.L.A.)

El derecho a ser indemnizados no depende del "cuánto" sino del "qué". No depende del cuánto afecta la adecuación al nuevo plan del aprovechamiento preexistente, sino del hecho mismo de la adecuación, en el bien entendido de que produzcan perjuicios.

Si la Ley de Aguas hubiera querido limitar la indemnización sólo y exclusivamente a los casos en que el nuevo planeamiento hidrológico supusiera la inviabilidad o desaparición del aprovechamiento como pretende imponer la normativa del Plan, simplemente lo hubiera dicho y, sin embargo, no lo hizo.

Nuevamente estamos en un caso de restricción de derechos individuales que nuestro ordenamiento reserva a las normas con rango de ley para salvaguardar una elemental seguridad jurídica a los particulares, a los efectos de que éstos no puedan ver menoscabados sus derechos por la simple decisión de normas de rango inferior o reglamentario, como la que parece que quiere aprobar esa Confederación.

Por lo demás, no será inútil considerar que no existe en este momento un consenso científico en cuanto a la validez metodología de cálculo seleccionado por el Plan para al cálculo de los caudales ecológicos, de manera que se está corriendo el riesgo cierto de someter al concesionario preexistente a un riesgo cierto de indefensión.

De esta manera, solicitamos también la supresión sin más del párrafo 5 comentado.

629

Muntaner 269, 1°- 1ª
08021 - Barcelona
T. 93 241 93 63 - F. 93 241 93 67

Aguarón 23 B, 1° B
28023 - Madrid
T. 91 307 17 61 - F. 91 307 03 50

E. appa@appa.es www.appa.es

Decimotercera. Artículo 41.6. Escala de peces

La, a nuestro juicio, deficiente redacción del apartado (todo el artículo parece referirse a las nuevas infraestructuras, pero el apartado 6 no contiene tal precisión) hace que el precepto sea aplicable a las infraestructuras existentes al tiempo de la entrada en vigor de la normativa del Plan, lo cual vuelve a significar una violación del ordenamiento jurídico.

Destaquemos, de entrada, algo elemental: ¿por qué criterios se impone a los titulares de los azudes de menos de 10 metros la construcción de dispositivos de franqueo y se libera de tal obligación a los titulares de los azudes más altos?. ¿Qué justifica tal discriminación?. ¿Por qué razones se ha cifrado la altura significativa en 10 metros y no en 7, 8 o 5,5 metros?. Tal arbitrariedad no puede conducir sino a la nulidad del precepto mencionado.

En fin, insistimos en que la imposición de nuevos gravámenes al administrado es función de las normas con rango de ley, no de normas de rango inferior o reglamentario.

Por último, queremos destacar que esa Confederación debe conocer, sin duda, la jurisprudencia del Tribunal Supremo que reputa nulas las órdenes de las confederaciones que imponen a los concesionarios la construcción a sus expensas de escalas de peces cuando tal obligación no estaba recogida en el título concesional.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO que, en tiempo y forma, se tenga por presentado el presente escrito de alegaciones al documento de Propuestas de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca del Cantábrico Oriental y en base a lo alegado interesado se resuelva de conformidad.

APPA SECRETARÍA GENERAL

Barcelona, 3 de Noviembre de 2011

Anexo I: Dictámen García Enterría Abogados
Anexo II: Dictámen Iuricat Advocats

630

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. Plaza de España 2, 33071 OVIEDO.

Muntaner 269, 1º- 1ª
08021 - Barcelona
T. 93 241 93 63 - F. 93 241 93 67

Aguarón 23 B, 1º B
28023 - Madrid
T. 91 307 17 61 - F. 91 307 03 50

E. appa@appa.es www.appa.es

ANEXO 1

GARCÍA DE ENTERRÍA
ABOGADOS

García de Enterría Abogados S.C.P.
C.I.F. G-84600576

C/ Príncipe de Vergara, 62 - 28006 Madrid
Teléfono: 91 435 25 60 - Fax: 91 577 47 04
abogados@garciadeenterria.com
www.garciadeenterria.com

Dictamen emitido a requerimiento de la Asociación de Productores de Energías Renovables APPA sobre plazo de vigencia de 13 concesiones perpetuas de aprovechamientos hidroeléctricos.-

Junio de 2011.

APPA
SECRETARÍA GENERAL

Por la Asociación de Productores de Energías Renovables APPA, se solicita de este Letrado que emita Dictamen sobre los siguientes

ANTECEDENTES Y CONSULTA

Diversas Confederaciones Hidrográficas han iniciado expedientes de caducidad de diversas concesiones de aguas para aprovechamientos hidroeléctricos por la pretendida expiración del plazo concesional.

Los Organismos de cuenca entienden que pese a que las citadas concesiones fueron otorgadas, en su día y por así establecerlo la Ley vigente, a perpetuidad, debe entenderse que lo fueron por un plazo de 99 años, tomando como "dies a quo" la fecha de otorgamiento de la concesión.

La postura de los Organismos de Cuenca descansa en el Dictamen de la Abogacía del Estado, con la siguiente Conclusión:

> "Primera.- Como período máximo inicial de duración de la Concesión, de titularidad de xxxxxx., debe considerarse el de 99 años, entendiendo de ese

modo lo estipulado en la cláusula 8ª del título".

Dado que ese criterio implica la extinción de múltiples concesiones, se me consultan los siguientes extremos

1º Corrección de la doctrina del dictamen del Abogado del Estado.

2º Plazo de duración de las concesiones objeto de la consulta y *dies a quo* para su cómputo.

Aceptando el requerimiento formulado, este Letrado tiene el honor de emitir el siguiente

DICTAMEN

Primero.- El Dictamen de la Abogacía del Estado.-

Como se ha recogido en los Antecedentes, la actuación administrativa origen de esta consulta descansa en un informe de la Abogacía del Estado sobre la duración de

las concesiones de aprovechamientos del dominio público hidráulico con fines de producción de energía eléctrica.

Por ello es necesario examinar el contenido de ese Dictamen como punto de partida, para estudiar el verdadero régimen jurídico de las concesiones examinadas.

El Abogado del Estado, partiendo del hecho de que las concesiones de aguas para aprovechamientos industriales otorgadas al amparo de la Ley de Aguas de 1879 (que es el caso de las concesiones examinadas) lo eran a perpetuidad (art. 220), examina la corrección de esa concesión a perpetuidad llegando a la conclusión siguiente, a mi juicio verdaderamente sorprendente:

> "La conclusión a que nos lleva lo anterior, a nuestro juicio inexorablemente, es la imposibilidad jurídica de que por más que la Ley autorizase, en aquel tiempo, el aprovechamiento privativo de las aguas de dominio público por tiempo indefinido, a perpetuidad, el principio de rango superior que proclamaba ya entonces la imprescriptibilidad del dominio público natural, tildado de *res comunes omnicem*, operaba como limite temporal del derecho".

Con cita de una doctrina jurisprudencial del año 1997, que, como luego examinaremos, se refiere a supuestos de hecho muy distintos, y además apoyándose en

una Ley, muy posterior, la de Patrimonio del Estado de 1964 que estableció un límite temporal máximo de 99 años para las concesiones demandadas (art. 126), el Abogado del Estado concluye que ya:

> "Ha sido expuesta dentro del epígrafe anterior la motivación que nos permite concluir que ya formaba parte del régimen de los aprovechamiento de las aguas públicas anterior al otorgamiento de la concesión de la Central de xxxxx, en 1905, la regla superior obstativa de la adquisición de la propiedad y de los demás derechos reales sobre aquellos bienes demaniales por medio de la usucapión, por prolongada en el tiempo que hubiera sido la posesión del derecho, aún con buena fe y justo título. En suma, la jurisprudencia niega, a tenor de principios jurídicos arraigados en España desde la dominación romana, que se incorporaron a nuestra legislación de finales del siglo XIX, que fuera compatible con el ordenamiento jurídico el derecho perpetuo a usar y disfrutar privativamente del dominio público, estableciendo una frontera temporal -de derecho común- en coherencia con la doctrina del máximo de tres generaciones o de la prescripción inmemorial".

Con esos presupuestos, la línea argumental del dictamen es clara. Ya bajo el régimen de la Ley de Aguas de 1879 las concesiones tenían una duración máxima de 100 años:

> "Y tal duración posible, en el caso de las equivocas concesiones a perpetuidad quedó fijada por el derecho de la época, según la jurisprudencia, en momento anterior a que pudieran tener lugar los efectos propios de la prescripción adquisitiva por posesión inmemorial durante 100 años o más".

Por ello la Disposición Transitoria primera de la Ley de Aguas 29/1985, de 1 de enero de 1986, que declara la vigencia de las concesiones anteriores por un plazo máximo de 75 años a partir de su entrada en vigor, de no fijarse en el título otro menor, debe interpretarse en el sentido de que el plazo de 75 años no opera si es que la concesión no debiera quedar extinguida antes, computando el plazo máximo de 99 años desde que fue otorgada.

En definitiva, la conclusión del Abogado del Estado es que ninguna concesión puede tener una duración, contada desde su otorgamiento, superior a 99 años.

Segundo.- La duración de las concesiones demaniales estatales otorgadas al amparo de la Ley de Aguas de 1879. Inaplicación de la Ley de Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1964.-

Como se ha recogido en el apartado anterior, toda la argumentación del Abogado del Estado, descansa en una única afirmación. Pese a la afirmación de que las concesiones de la Ley de Aguas de 1879 se otorgaban a perpetuidad, debe entenderse

que su otorgamiento tenía el tope temporal de 99 años.

Esa afirmación descansa a su vez en la premisa de que ese tope temporal es consustancial con la propia naturaleza de la concesión demanial, por ser esencial para evitar la prescripción inmemorial, imposible por ser el dominio público imprescriptible.

A mi juicio, esas afirmaciones carecen totalmente de sentido y bastaría para acreditarlo con tener en cuenta que es una afirmación que se hace ahora, a principios del siglo XXI, cuando se ha admitido pacíficamente durante más de 100 años la posibilidad de concesiones perpetuas, sin que la perpetuidad afectase para nada al principio de imprescriptibilidad del dominio público. Aceptar la tesis de la Abogacía del Estado implicaría aceptar que todas las concesiones de aguas anteriores a la Ley de 13 de junio de 1879 de duración indefinida y que se respetan conforme a la Disposición General recogida en su art. 257 (es técnicamente una Disposición Transitoria), habrían quedado extinguidas hace tiempo, lo que habría impedido la aplicación de la Disposición Transitoria de la Ley de 1985. Y esto no ha ocurrido.

Pero además la conclusión del Abogado del Estado va contra la voluntad del

legislador y la doctrina tanto de nuestros Tribunales como científica. Incluso resulta contradicha por parte de la argumentación utilizada en su propio Dictamen. Veámoslo.

A) En primer lugar, la premisa de que el tope temporal de 99 años viene impuesta por la necesidad de evitar la prescripción inmemorial de 100 años, no se ajusta en absoluto a la realidad.

Se olvida que todo tipo de prescripción (y la inmemorial o centenaria no es nada más que un tipo de la misma) exige unos requisitos muy concretos, y particularmente la posesión a título de dueño (art. 1947 del Código Civil). Si no existe esa posesión a título de dueño no existe posesión que habilite para usucapir, debiendo recordarse que siempre que la posesión se tenga por otro título distinto, es necesario que el poseedor realice frente al propietario algún acto obstativo que acredite el cambio de concepto en que se posee, de forma que sólo ese acto es el "dies a quo" para el cómputo de plazo.

Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico, existen instituciones que por su naturaleza son perpetuas y no por ello afectan para nada al derecho de propiedad. El Código Civil, al regular los censos dispone en su art. 1608 que:

> "Es de naturaleza del censo que la cesión del capital o de la cosa inmueble sea perpetua o por tiempo indefinido".

No puede jurídicamente afirmarse que la perpetuidad implica la posibilidad de prescripción. Han existido derechos perpetuos parciales desde hace cientos de años y siguen existiendo, con regulación moderna (por ejemplo art. 330 y ss. de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña).

En relación a las concesiones demaniales, la doctrina, aún reconociendo que la tendencia del legislador a poner límites a la duración de las concesiones tiene su origen en la creencia de que por el trascurso del tiempo podrían los particulares adquirir definitivamente la titularidad de funciones públicas, si bien hoy el plazo funciona como una cláusula económica, ha matizado la influencia del plazo.

Así Mercedes LAFUENTE BENACHES, *La Concesión de dominio público*, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1988, pág. 76, dice:

> "La concesión de dominio público, límite temporal de la afectación al uso público de los bienes de dominio público, no desvirtúa los principios de "inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad". Los bienes de

> dominio público, después de concedidos, siguen bajo el régimen jurídico-público y se hallan fuera del comercio jurídico-privado. La Administración Pública, como quedó expuesto, otorga la concesión de dominio público sin perder la titularidad de los bienes concedidos. Consecuencia de ello es la necesidad de que la Administración autorice o apruebe cualquier operación realizada por el concesionario en virtud del derecho de concesión, con estas operaciones, no transmite ni grava el dominio público, sino su relación sobre el mismo. La Administración las vigila y si alguna de ellas pone en peligro la finalidad perseguida por la Administración, al otorgar la concesión, puede declarar la extinción de la concesión administrativa".

Nuestra jurisprudencia, -aparte de admitir la existencia de concesiones perpetuas y que la propia doctrina citada por el Abogado del Estado se refiere a supuestos de hecho posteriores a leyes que ya han fijado plazos máximos, como luego veremos-, aún reconocida la importancia del plazo, rechaza que la perpetuidad lleve consigo la posibilidad de prescripción.

Así la Sentencia de 8 de noviembre de 1991 rechaza las alegaciones de la Administración, en estos términos

> "En definitiva, no puede olvidarse que las concesiones administrativas son en nuestro Derecho bienes inmuebles a tenor del art. 334.10 del Código Civil, por lo que dicho carácter implica la posibilidad de inscripción en el Registro de la propiedad. No obstante es claro también que la concesión funeraria está sometida a fuertes restricciones dada la incomerciabilidad de esta clase de

bienes y la prohibición de que sean transmitidos a título oneroso.

Sin embargo, ello no es suficiente para enervar la validez en Derecho de la concesión a perpetuidad del enterramiento según la legislación vigente en la fecha en que dicha concesión fue otorgada. Tampoco puede admitirse, como alega el Ayuntamiento que entender válida una concesión a perpetuidad significa que se ha producido una enajenación del bien, pues el Ayuntamiento conserva íntegramente las facultades de policía mortuoria y, llegando el caso, podría aplicar la normativa vigente en materia de traslado de cementerios".

La perpetuidad no implica ni negar la incomerciabilidad de un bien de dominio público, ni su imprescriptibilidad. La Administración conserva todas sus prerrogativas, hallándose salvaguardada la regla de la imprescriptibilidad por medio del establecimiento de cánones concesionales, que correspondían a los antiguos cánones censales. Así lo ha reconocido la propia Administración y el Consejo de Estado. En la Sentencia de 7 de febrero de 1984, examinando la pervivencia de una concesión de marismas, cita un dictamen del Consejo de Estado en el que se atribuye al canon concesional la naturaleza del censo enfitéutico, de carácter perpetuo pero con el efecto de impedir la prescripción inmemorial.

Es más, incluso en la actualidad en que toda la normativa tanto general, como sectorial, establecen límites temporales, de facto pueden existir concesiones perpetuas,

dadas las posibilidades que recoge la vigente Ley de Patrimonio. Como dice Rafael FERNÁNDEZ ACEBEDO, *Concesiones Administrativas de Dominio Público*, Editorial Thomson-Civitas, Madrid 2007, pág. 286:

> "Importa llamar la atención, en último término, sobre el hecho de que, paradójicamente, la propia Ley del Patrimonio, en su artículo 137.4. i) por conexión con el 93.1, parece abrir una puerta para la vulneración del límite temporal máximo, toda vez que permite otorgar una nueva concesión por el procedimiento de adjudicación directa a favor del antiguo concesionario, sin otro requisito que la existencia de "razones excepcionales" que lo hagan conveniente. De facto queda abierta la posibilidad de que el concesionario se perpetúe en su posición de privilegio".

B) Por otra parte, no parece razonable pretender que debe prevalecer una concepción doctrinal, y además no aceptada unánimamente sobre la voluntad del legislador. Y eso es lo que hace el Dictamen que examinamos ("imposibilidad jurídica por más que la Ley lo autorizase").

Porque es totalmente claro que la voluntad del legislador fue permitir concesiones perpetuas y además adoptada con pleno conocimiento.

No puede olvidarse que en nuestra legislación histórica existieron concesiones

perpetuas y que la primera norma que estableció un límite temporal con carácter general fue la Ley de Obras Públicas de 13 de abril de 1877. Su art. 1° decía

> "Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores de este capítulo se otorgarán por noventa y nueve años a lo más, salvo los casos en que las leyes especiales de obras públicas establezcan mayor tiempo o que la concesión se otorgue por medio de una ley especial que así lo determine".

Se permitían ya las concesiones superiores a 99 años, lo que demuestra que la tesis del Abogado del Estado es insostenible, pero lo esencial es que esa norma ya estaba vigente cuando se promulgó la Ley de Aguas, que es de 13 de junio de 1879. El legislador, al regular las aguas, ya partía de la existencia general del límite temporal de 99 años, límite que respeta para determinadas concesiones (abastecimiento de poblaciones, art. 170, canales de navegación, art. 20.6), pero decide que otras concesiones sean perpetuas (riegos, viveros y concretamente las destinadas a aprovechamientos industriales, que es el caso, art. 220).

Ni que decir tiene que teniendo ambas leyes igual rango, la Ley de Aguas podía modificar la de Obras Públicas, aunque como se ve la respeta, pues ésta permitía

concesiones por plazo superior a los 99 años.

Si se tiene en cuenta la legislación local (y no podemos olvidar que el régimen concesional se refiere a todo el dominio público y no sólo al estatal), la cuestión es igualmente clara. Las limitaciones temporales se introducen, como veremos, por el Texto articulado de la Ley de Administración Local de 16 de diciembre de 1950.

C) No sólo el legislador, sino también la doctrina jurisprudencial ha admitido pacíficamente la existencia de concesiones perpetuas, aplicando la legislación vigente en el momento en que se otorgaron y la sectorial, con preferencia al límite temporal de la Ley de Obras Públicas, porque hay que tener en cuenta, lo que no hace el Abogado del Estado, la fecha de las concesiones examinadas.

Ya se ha recogido anteriormente la Sentencia de 8 de noviembre de 1991 que declara valida una concesión otorgada a perpetuidad, terminando el Considerando Segundo diciendo

> "En consecuencia, no pueden admitirse las alegaciones de la entidad local recurrente en el sentido de que en la fecha en que se otorgó la concesión no era

válido tal otorgamiento si se hacía a perpetuidad".

La misma Sentencia contempla, a mi juicio correctamente, la problemática, examinando la posible aplicación de las modificaciones en el Fundamento de Derecho Tercero:

> "TERCERO.- Cuestión distinta es la relativa a las normas actualmente vigentes y a su aplicación en el caso de autos. Pues como es sabido tanto las normas estatales como las de régimen local consagran la prohibición de concesiones a perpetuidad, lo que está de acuerdo con las normas y criterio que, constituyen actualmente el régimen propio del dominio público.
>
> Pero lo que resulta controvertido en este proceso, una vez desechada por el Tribunal de instancia la impugnación indirecta del Reglamento del Ayuntamiento de Valencia aplicable, es precisamente si la indicada legislación vigente puede aplicarse con carácter retroactivo a una concesión otorgada de forma válida en un momento anterior.
>
> Respecto a este punto la Sala no puede acoger las alegaciones del Ayuntamiento en el sentido restrictivo en que interpreta la prohibición de irretroactividad que se contiene en el art. 9.3 de la Constitución Española. Pues dicho precepto alude claramente a la prohibición de que tengan carácter retroactivo las normas que afecten a derechos individuales, lo que no ha de entenderse en sentido restringido sino en el de que no pueden contravenirse los derechos subjetivos de los particulares".

Y concluye:

> "Por tanto, sin perjuicio de confirmar la declaración de la Sentencia apelada en el sentido de la validez de la normativa vigente, incluso la municipal de Valencia, debe concluirse que no es conforme a Derecho la aplicación retroactiva de dichas normas. En consecuencia procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada".

La Sentencia de 23 de marzo de 1972 reconoce que el criterio tradicional en materia de terrenos ganados al mar, era el de la de perpetuidad de la concesión ("principio sancionado por la jurisprudencia de todos los tiempos"), y afirma:

> "Que desde otra perspectiva sincrónica, la Ley de Obras Públicas de 13 de abril de 1877 regulaba ya, con carácter genérico, las concesiones de dominio público y de dominio del Estado, que habrían de otorgarse por noventa y nueve años a lo más, salvo los casos en que las Leyes especiales establecieran mayor tiempo (art. 101), norma coincidente sustancialmente con otra, también genérica, contenida en la Ley de Patrimonio del Estado (texto articulado mediante Decreto 1022/1964 de 15 de abril -R. 896 y 1024 y Ap. 51-66, 11098), según la cual en las concesiones o autorizaciones sobre el dominio público se incluirá necesariamente el plazo de duración, que no podrá exceder de noventa y nueve años, a no ser que las Leyes especiales señalasen otro menor, sin que en ningún caso puedan otorgarse por tiempo indefinido (art. 126), discrepancia con la trayectoria tradicional en materia de marismas cuya coexistencia durante más de ochenta años no planteó problema alguno, como revelan los numerosos dictámenes del Consejo de Estado favorables a la subsistencia del régimen específico, aun cuando el presente debate haya sido planteado en función de tal antinomia".

A continuación y sobre la base de la prevalencia de las normas especiales en la

materia, admite la perpetuidad de las concesiones:

> "Que ésta es más aparente que real y podría resolverse con un instrumental exclusivamente técnico, mediante el juego de criterios propios de la lógica jurídica, como la prevalencia de las normas especiales en la materia (aguas y puertos) sobre las genéricas que regulan el dominio público, si además se observa que una de aquéllas -la de Costas- es posterior a la de Patrimonio y ratifica el régimen tradicional para el saneamiento de las marismas".

En 1971 y pese a haberse ya promulgado la Ley de Patrimonio (de 1964), en la que basa su argumentación el Abogado del Estado, aplica la Ley de Puertos de 19 de enero de 1928 art. 51), reconociendo que el principio de perpetuidad como específico ha sido sancionado por la jurisprudencia y los dictámenes del Consejo de Estado.

La Sentencia de 7 de febrero de 1984 rechaza igualmente la aplicación de la Ley de Patrimonio de 1964, declarando la perpetuidad de una concesión de marismas otorgada en 1905, al amparo de la Ley de Puertos de 7 de marzo de 1889.

Vemos, pues, que también la doctrina jurisprudencial ha admitido la perpetuidad de concesiones otorgadas a perpetuidad, por permitirlo la legislación vigente cuando se otorgó.

D) El mismo criterio sigue la jurisprudencia que efectivamente ordena la aplicación de límites temporales a concesiones perpetuas, pues lo hace porque ya estaba vigente esa legislación cuando se produce el supuesto de hecho examinado.

La doctrina jurisprudencial es terminante al afirmar que el otorgamiento a perpetuidad de concesiones demaniales vulnerando los límites temporales establecidos por las leyes es nulo de pleno derecho, pero sólo cuando esa normativa es aplicable.

Así la Sentencia de 29 de abril de 1988, sobre un puesto en un mercado, rechaza la impugnación de un Reglamento de 1984 que establecía un plazo máximo, por estar ya vigente la normativa de régimen local y específicamente el Reglamento de Contratación que declaraba nulos los contratos por tiempo indefinido, declarando que la situación del recurrente era de precario, sin ningún derecho adquirido.

Igual criterio siguen las Sentencias de 11 de febrero de 1986 (sobre una concesión de un kiosco de 1963), de 10 de noviembre de 1987 (concesión de 1952), 20 de octubre de 1992 (concesión de 1962) 10 de noviembre de 1957. En todas ellas se rechaza la pretensión de perpetuidad de la concesión y se aplica el plazo máximo de 50

años previsto en el art. 163.1° de la Ley de Bases de Régimen Local, recordando que esa limitación ya aparecía (y estaba vigente desde 1951), en el art. 163-a) del Texto articulado de la Ley de Administración Local de 16 de diciembre de 1950. La Sentencia de 10 de noviembre de 1987 (la concesión era de 1952, anterior al Texto de 1955, pero posterior al de 1950) recuerda que es doctrina jurisprudencial la aplicación del plazo máximo.

Especial examen merece la Sentencia de 5 de mayo de 1993, pues demuestra con claridad la doctrina jurisprudencial sobre la materia. Se trata de una concesión para balneario otorgada el 26 de junio de 1883, para la que se solicita un cambio parcial de destino y uso. El Ministerio de Obras Públicas y de Urbanismo accede a la petición por Orden de 19 de junio de 1985, pero estableciendo un plazo de 20 años.

El interesado no pretende la perpetuidad de la concesión, admite la aplicación de la Ley del Patrimonio de 1964, que estableció el plazo máximo general de 99 años, pero considera que el plazo de 20 años es insuficiente, dadas las inversiones realizadas, mientras que la Administración considera la Orden adecuada.

La Sentencia rechaza la pretensión de que se anulase la condición sobre el plazo diciendo:

> "Resulta evidente que la pretensión que la parte apelante formuló en su escrito de demanda en la anterior instancia, de que se decretase la nulidad de la condición 2ª, relativa al plazo (lo que supondría si prosperase una concesión sin límite de duración), no puede ser aceptada por esta Sala, pues la propia parte apelante reconoce que la Ley de Patrimonio del Estado limita el plazo de las concesiones o autorizaciones sobre el dominio público a 99 años. Siendo, pues, incuestionable, la necesidad legal de la fijación de un plazo de duración de la concesión".

Es patente que la Sala no considera aplicable el plazo de 99 años a contar desde el otorgamiento de la concesión (que es lo que pretende el Abogado del Estado), puesto que la concesión habría caducado por expiración del plazo en 26 de junio de 1982, antes de la modificación.

Y no puede decirse que la Sala no contempla esa posibilidad porque no lo plantearon las partes. Recuérdese que el art. 43 de la Ley de la Jurisdicción vigente entonces obligaba a someter a las partes cualquier motivo susceptible de fundar el recurso o la oposición, lo que no hizo. Pero lo esencial es que la Sala estima parcialmente el recurso y modifica la Orden Ministerial, ampliando el plazo de 20 a 30

años.

La Sala, pues, de forma explícita, considera vigente la concesión, lo que evidencia que admite la perpetuidad de una concesión de 1883, y la inaplicación del plazo de 99 años de la Ley de Patrimonio a contar desde el otorgamiento de la concesión. Se aplica la Ley de Patrimonio a una modificación efectuada ya bajo la vigencia de la Ley.

D) La misma conclusión resulta de las Sentencias en que pretende basarse el Abogado del Estado si se analizan debidamente e incluso de sus propios términos.

Así la Sentencia de 2 de junio de 1997, en la que descansa toda su argumentación, efectivamente dice que existe un límite temporal a las concesiones a perpetuidad, límite de 99 años, extremo que hoy día no discute nadie, pero en ningún momento dice que ese plazo debe contarse desde la fecha de otorgamiento de la concesión. Es más el párrafo transcrito por la Abogacía del Estado comienza:

> "En cuanto al carácter perpetuo de la concesión, hemos de mantenerlo en el caso de autos por ésta nuestra Sentencia, toda vez que en la fecha en que se dicta el

reglamento municipal en 1909, así como la fecha en que se otorga el nicho por primera vez en 1935, no estaba claro en nuestro ordenamiento jurídico el carácter forzosamente limitado de las concesiones demaniales".

El supuesto de hecho examinado es una petición de cambio de titularidad, efectuada otorgada a perpetuidad, de un nicho de un cementerio efectivamente otorgado a perpetuidad, cambio autorizado por el Ayuntamiento por plazo concreto.

La Sala en el Fundamento Segundo, afirma:

"Desde luego hay que entender que no es conforme a derecho el acto administrativo municipal que, de forma incongruente respecto a la solicitud, limitó los derechos del particular aplicando con carácter retroactivo la normativa vigente. Ha de estarse a lo dispuesto en el Reglamento municipal vigente en la fecha de adquisición del nicho a perpetuidad, que desde luego era conforme con los reglamentos estatales, como demuestra que se admitió la adquisición valida a perpetuidad incluso hasta la fecha del pleno vigor de los mandatos del antes citado Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974. El solicitante tenía derecho por tanto a la transmisión de titularidad del nicho con el carácter de perpetuidad con el que fue adquirida".

Y a continuación añade:

"Así la adquisición del nicho a perpetuidad que implica ser titular de una concesión administrativa no supone que el enterramiento pueda utilizarse para

> fines distintos del primitivamente otorgado, es decir, la sepultura de la persona cuyos restos ocuparon inicialmente el nicho en cuestión. Por el contrario, puede validamente el ente municipal establecer unas limitaciones consistentes en la prohibición de enterramientos posteriores, a más del ejercicio de otras facultades que derivan de la titularidad del dominio público".

La Sala, por lo tanto, afirma que la concesión a perpetuidad era correcta, por permitirlo la legislación vigente, pero a actos posteriores debe aplicarse la legislación vigente en cada momento. En ningún momento se afirma, como entiende el Abogado del Estado, que es consustancial con la naturaleza de las concesiones la existencia de un límite temporal.

El mismo criterio siguen las demás Sentencias citadas (nota en pie de página) en el Dictamen que se examina (Sentencias de 14 de diciembre de 1998, 24 de noviembre de 2003, 26 de mayo de 2004), que examinan siempre, supuestos de cambio de titularidad, producidos en la actualidad cuando ya la legislación establecía límites temporales a la duración de las concesiones). La Sentencia de 14 de diciembre de 1998 es significativa en su justificación, que no es otra que la aplicación de la norma vigente en cada momento, afirmando:

> "En relación con lo que se acaba de indicar, hay que decir, siguiendo lo declarado por este Tribunal Supremo en su Sentencia de 24 de febrero de 1978, dictada al conocer de un supuesto similar al ahora enjuiciado, que el principio de que las normas nuevas no tiene aplicación a los hechos pasados sirve para proteger los efectos ya acontecidos de un hecho pasado, pero no para amparar los efectos que, aunque derivados de un hecho pasado, se producen bajo la vigencia de la nueva norma. En dicha Sentencia de 1987, en la que se estudia un caso de falta de acuerdo sobre la división de un panteón y la necesidad de que ante ello la Administración estableciese y definiese la distribución procedente, se indicó que se estaba ante un hecho complejo en el que no existe consumación hasta el final de la serie de actos o hechos que lo componen (fallecimiento del titular, acuerdos de división, o petición y decisión administrativa), por lo que no puede considerarse que existe consumación hasta que se alcanza el final, con lo que no hay problema de retroactividad o irretroactividad sino, sencillamente, aplicación de la normativa vigente en el momento de la consumación del total proceso. En el supuesto que ahora nos ocupa hay que resaltar que fue el 15 de diciembre de 1987, esto es, estando ya vigente la Ordenanza Municipal de que se trata, cuando se produjo la solicitud al Ayuntamiento en relación con el cambio de titularidad de los nichos en cuestión, solicitud que dio origen al acto administrativo impugnado en este proceso al no estar de acuerdo la recurrente de la primera instancia, hoy apelante, con lo acordado en el expresado acto administrativo por entender que la titularidad de los nichos en cuestión le correspondía a ella".

La razón de la desestimación de las pretensiones de los demandantes no es, pues, la aplicación retroactiva de las disposiciones de régimen local (ya se ha citado el Texto de 1950), sino, en la aplicación de la norma vigente cuando se pide el cambio de titularidad, la modificación de la concesión existente. Al contrario se reconoce y se respeta que las concesiones eran perpetuas hasta su modificación, y sin que además se

pronuncien en absoluto sobre el *dies a quo* para el cómputo del plazo máximo establecido en la cada caso.

E) Tampoco tienen, a mi juicio, virtualidad alguna los otros argumentos utilizados por el Abogado del Estado para mantener su tesis de que el plazo máximo de duración para las concesiones otorgadas a perpetuidad tiene un plazo de 99 años fijado por la Ley de Patrimonio del Estado contado desde el otorgamiento de la concesión.

1° En cuanto a la doctrina constitucional sobre la Ley de Aguas (Sentencia 227/1998) en nada confirma su tesis. Por supuesto, y nadie lo discute, que nuestra Constitución establece los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público (art. 132.1), principios incompatibles con la perpetuidad de las concesiones. Pero como principio constitucional es aplicable desde su vigencia, y además no prejuzga cual es la posible duración de las concesiones, lo que, por ser una cuestión de legalidad ordinaria queda a disposición del legislador. Pero sobre todo en ningún caso permite la aplicación de esos principios al año 1964, cuando se dictó la Ley de Patrimonio, como pretende el Abogado del Estado.

El único límite a la decisión del Legislador es que no se lesionen otros derechos fundamentales y, a estos efectos, es significativa al Sentencia constitucional citada y además en el párrafo que reproduce el Abogado del Estado. La fijación de un plazo viene impuesto por la Constitución, y el Tribunal al examinar las consecuencias de ese plazo, lo considera suficiente en estos términos.

> "Finalmente, de acuerdo con lo declarado en anteriores fundamentos, la fijación de la duración máxima de estos aprovechamientos en setenta y cinco años no es tampoco arbitraria ni engendra inseguridad jurídica, ya que, aun cuando pueda suponer una disminución de las expectativas de rentabilidad patrimonial originadas por situaciones creadas al amparo de la legislación anterior, este nuevo límite temporal es razonable y suficiente".

El Tribunal habla de un nuevo límite temporal, el previsto en la Ley de Aguas de 1985,y ese límite es el que considera constitucional.

La doctrina constitucional no avala, pues, en absoluto, la tesis de que en 1985 (fecha de la Ley de Aguas) ya tenían todas las concesiones un plazo máximo de duración de 99 años, desde su otorgamiento. Al contrario afirma que es constitucional el nuevo plazo de 75 años, desde la entrada en vigor de la nueva legislación.

Por lo demás no puede olvidarse, como hace el Abogado del Estado, la razón de esa declaración del Tribunal Constitucional. Se predicaba la inconstitucionalidad de la norma porque suprimía derechos adquiridos, en cuanto a derechos anteriores perpetuos, violación del principio de irretroactividad de las Leyes y de la garantía constitucional de la propiedad.

La Sentencia Constitucional reconoce que efectivamente se reducen derechos preexistentes y, por ello, admite que la Ley tiene efectos expropiatorios. Lo que entiende es que el mantenimiento durante un plazo de las concesiones anteriores es compensación suficiente para el daño producido, es suficiente valor de la expropiación. Lo mismo que ha declarado el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas en su conocida Sentencia 149/1991, de 4 de julio.

Pero todo ello implica admitir que las concesiones se regían por la legislación vigente cuando se otorgaron, y que las examinadas ahora eran perpetuas. De no serlo, sobraba compensar cualquier daño, pues bastaría dejar que perviviesen por el plazo de duración que, a juicio del Abogado del Estado, ya tenían.

La conclusión del Abogado del Estado de que es incompatible el régimen del dominio público hidráulico con un derecho concesional por encima incluso de 150 años (como dice), no sólo no tiene aval en la doctrina constitucional, sino que la contradice. Corresponde al legislador fijar el plazo y de la doctrina constitucional (nuevo plazo de 75 años) resulta que no es inconstitucional un posible plazo de 150 años. Podría discutirse por otras razones (por ejemplo, arbitrariedad) pero no por su naturaleza.

2º En cuanto a la cita de la Legislación de Costas, demuestra justamente lo contrario de lo que pretende el Abogado del Estado y así resulta de su afirmación:

> "En suma, en el Reglamento de 1989, sin haberlo previsto así la Ley de Costas textualmente, se acoge el criterio del plazo de 99 años como tope de duración de cualquier concesión, incluidas las otorgadas a las concesiones *ad perpetuam*, entendidas como otorgadas por 99 años como máximo, obedeció al manejo por el Poder Ejecutivo de los parámetros jurídicos del derecho común de las concesiones demaniales que han quedado anteriormente expuestos, respaldados en la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Según el Abogado del Estado, es el Reglamento de 1989 el que establece el plazo de 99 años y no la legislación de Patrimonio de 1964. No acaba de comprenderse la razón de que en el caso de las costas hay que tener en cuenta su normativa, y, en

cambio, en materia de aguas haya que aplicar la normativa general.

En todo caso, esa normativa lo que impone es computar los nuevos plazos "a contar desde la entrada en vigor de la Ley de Costas" (Disposición Transitoria 14-3 del Real Decreto 1471/1989).

Por otra parte, la jurisprudencia, aplicando la Ley de Costas 22/1988, de 28 de junio, en base a la aplicación de sus Disposiciones transitorias reconoce la pervivencia de las concesiones anteriores otorgadas a perpetuidad, pero que el título concesional permite vigilar el cumplimiento de las obligaciones y cargas concesionales y declarar, si procede, la extinción anticipada del título por incumplimiento del concesionario o ejercer las facultades de rescate. Así las Sentencias de 3 de junio y de 22 de septiembre de 2003 declaran caducadas concesiones por incumplimiento del concesionario.

Todo ello, por supuesto, con independencia de aquellos casos en que pidiéndose cambios de titularidad, y modificación de la concesión, deba aplicarse ya la nueva Ley (caso de la Sentencia de 25 de febrero de 2004).

F) En conclusión, parece claro a este Letrado, que la tesis del Abogado del Estado de que, por imperativo de la Ley de Patrimonio de 1964, el plazo máximo de toda concesión otorgada a perpetuidad es de 99 años, a contar desde la fecha de su otorgamiento, no sólo no está justificada, sino que contradice tanto la historia como la legislación y la doctrina de todo orden.

Tercero.- Aplicación de la Disposición Transitoria de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985.-

A) Como se ha expuesto anteriormente, no creo que pueda admitirse en derecho la tesis del Abogado del Estado de que el plazo máximo de duración de cualquier concesión sea el de 99 años, a contar desde su otorgamiento.

Pero además resulta contradictoria. Si se da a la Ley de 1964 un efecto derogatorio de la legislación anterior sectorial, la coherencia exigiría dar a la nueva Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 3 de diciembre de 2003 (que reduce el plazo máximo a 75 años) igual efecto derogatorio de la Ley de Aguas de 1985.

Pero sobre todo lo que, a mi juicio, carece de sentido, es que el plazo se compute desde la fecha de la concesión en las concesiones otorgadas antes de la entrada envigor de la Ley del Patrimonio de 1964. Es una afirmación que no resulta de la Ley de Patrimonio y contradice los principios elementales de irretroactividad de las normas recogida en la doctrina jurisprudencial ya citada y hoy garantizada constitucionalmente (art. 9.3 CE).

Aún admitiendo la aplicación de la Ley de Patrimonio de 1964: el plazo de 99 años, computado desde 1964, daría un plazo concesional hasta el año 2063, superior al que, a mi juicio, es el correcto.

B) A mi juicio, repito, la normativa aplicable es la sectorial; la específica recogida en la Ley de Aguas vigente, como resulta de todo lo expuesto al criticar el Dictamen del Abogado del Estado.

La duración de toda concesión es la establecida en su legislación especial y no en la legislación general y así lo reconoce pacíficamente la doctrina.

Es claro que existen o pueden existir concesiones por plazo superior al previsto en la Ley de Patrimonio y así R. FERNÁNDEZ ACEBO (obra citada pág. 284):

> "Sin embargo, también cabe interpretar que el verdadero contenido del artículo 93.3 consiste en una prohibición dirigida directamente a las normas especiales que ya no podrán establecer plazos superiores a los setenta y cinco años y ello sin perjuicio ni menoscabo de la aplicación prioritaria de dichas normas especiales. Habida cuenta del principio de la *lex posterior*, su efectividad no podrá alcanzar al legislador estatal que en cualquier momento podrá modificar, con carácter general o para un caso concreto, lo dispuesto en la Ley del Patrimonio, pues resulta obvio que el legislador no puede autolimitarse *pro futuro*".

El profesor LUCIANO PAREJO ALFONSO (Obra Colectiva, *Comentarios a la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Régimen de utilización de los bienes y derechos de dominio público*, Ed. Thomson-Civitas, Madrid 2004, pág. 455) dice al respecto:

> "d) La duración
>
> Es consustancial a la concesión, conforme al artículo 93.3 LPAP, serlo por tiempo determinado. Su otorgamiento sólo puede producirse legalmente, pues, en tales términos.
>
> El precepto legal pretende, además, fijar un plazo máximo de duración (75 años) vinculante -en defecto de otro menor establecido por legislación

especial- para cualquier acto de otorgamiento con independencia del bien demanial y la Administración de que se trate. Este propósito es evidente en su inciso final, que autoriza a las normas especiales que sean aplicables únicamente para fijar un plazo máximo menor. Establece así el legislador una regla con pretensión de imposible efectividad por entrar en contradicción frontal con el sistema de fuentes de la propia LPAP. Pues si, como también para las concesiones precisa el artículo 84.3 LPAP (de carácter básico), éstas se rigen en primer término por la legislación especial, siéndoles de aplicación la LPAP sólo en defecto o insuficiencia de aquélla, resulta impracticable que otra concreta norma del mismo texto legal, aunque sea también básica, pretenda tener posición distinta y preferente en el esquema de fuentes así dispuesto, concretamente la que proporciona prevalencia sobre la legislación especial.

Por esta decisiva razón y ya no únicamente por virtud del juego de los principios de *lex posterior* y *lex specialis*, el plazo máximo de duración fijado en la LPAP no constituye un verdadero límite a las Leyes específicas de tipos o concretos bienes demaniales, que continúan pudiendo disponer otro plazo distinto, sea mayor o menor. De lo que se sigue que su fijación no produce derogación alguna de aquellas de dichas Leyes que sean anteriores a la LPAP. No obstante, la fijación del plazo máximo debe considerarse que introduce un criterio general de policía demanial que los legisladores deberían atender en buena técnica legislativa".

C) Pues bien, los términos de la Disposición Transitoria Única 1 de la Ley de Aguas, no pueden ser más claros:

"Primera. 1. Quienes, conforme a la normativa que se deroga, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley establece,

durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor".

La nueva Ley de Aguas ha modificado la Ley de Aguas de 1879, dando a las concesiones perpetuas un plazo máximo de duración de 75 años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, venciendo el año 2061. El Tribunal Constitucional ha declarado que ese nuevo plazo es suficiente para que la Ley no tenga contenido expropiatorio (a pesar de haberse otorgado por tiempo indefinido o a perpetuidad).

La única excepción es que el título concesional establezca un plazo inferior a 75 años. Y se trata del título y no de una modificación que se presume efectuada en el mismo por una interpretación arbitraria de una Ley general y no especial que hace además una persona.

La interpretación literal del precepto (primera regla de interpretación art. 3.1 del Código Civil) no permite otra conclusión que la de que todas las concesiones otorgadas a perpetuidad vencen en 2061.

Por lo demás, aún cuando se pudiera pensar que efectivamente la Ley del

Patrimonio de 1964 había derogado la vieja Ley de Aguas (lo que sólo examinó para cubrir todas las posibilidades) no podría dudarse que dicha Ley de 1964 había sido derogada por la de Aguas de 1985. Como dice FERNÁNDEZ ACEBEDO, es obvio que el legislador no puede autolimitarse pro futuro y carece de sentido atribuir a la Ley de 1964 un carácter intocable.

En definitiva, la única norma a tener en cuenta es la Disposición Transitoria de la Ley de Aguas de 1985. Toda concesión cuyo título la otorgue a perpetuidad antes de su entrada en vigor, tiene un plazo de duración de 75 años desde esa entrada en vigor, plazo además que se estableció como fórmula para evitar el carácter expropiatorio de la Ley sobre esos derechos perpetuos, como ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional.

Por todo lo expuesto, el Letrado informante cree posible contestar a la consulta formulada mediante las siguientes

CONCLUSIONES

Primera.- A la vista de le evolución histórica y la doctrina tanto de los Tribunales como científica no parece que pueda mantenerse que todas las concesiones otorgadas a perpetuidad, otorgamiento autorizado por la legislación vigente en ese momento, llevasen implícita un plazo máximo de duración de 99 años, a contar desde la fecha de su otorgamiento.

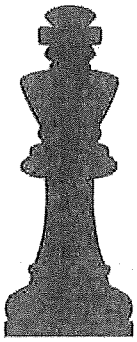
Segunda.- En ningún caso parece admisible atribuir a la Ley de Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1964 el efecto de atribuir a las concesiones a perpetuidad existente un plazo máximo de duración de 99 años a partir de la fecha de su otorgamiento.

Tercero.- La única norma aplicable a las concesiones de aguas es la Disposición Transitoria Primera 1 de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985, por lo que a todas las concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos que fueron otorgados a perpetuidad, conforme a lo dispuesto en la vieja Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, debe reconocérseles un plazo de duración de 75 años, siendo el *dies a quo* el de la entrada

en vigor de la Ley de 1985, expirando el plazo, por tanto, el año 2061.

Tal es mi dictamen, que someto gustoso a cualquier otra opinión mejor fundada en Derecho y que doy y firmo en Madrid a dieciséis de junio de dos mil once.

ANEXO II



DICTAMEN SOBRE CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL AÑO 1905

iuracat
ADVOCATS

Aragó 208, 5è 2a
08036 Barcelona
T. +34 93 200 84 73
F. +34 93 201 92 03

www.iuracat.com
correo@iuracat.com

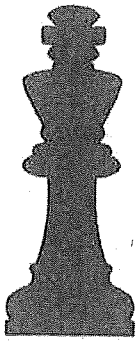
Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urnieta

DR. ANTONI FERRÉ I MESTRE
BARCELONA – JUNIO 2011

APIA
SECRETARÍA GENERAL

B-64200686

ANTONI FERRÉ I MESTRE
Dr. en Derecho; Abogado.



- ÍNDICE -

iuracat
ADVOCATS

Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 84 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

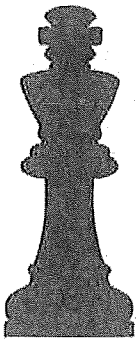
Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urnieta

I.-	ANTECEDENTES	Pág. 3
II.-	ANÁLISIS DEL DICTAMEN DEL ABOGADO DEL ESTADO	Pág. 5
III.-	FUNDAMENTOS DE DERECHO	Pág. 9
IV.-	CONCLUSIONES	Pág. 26
V.-	BASES DE DATOS CONSULTADAS	Pág. 28
VI.-	SUSCRIPCIÓN	Pág. 28

B-64200686

ANTONI FERRÉ I MESTRE
Dr. en Derecho; Abogado.

DICTAMEN SOBRE CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL AÑO 1905



iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 81 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elías
Fernando Lloria Urnieta

D. ANTONI FERRÉ I MESTRE, Dr. en Derecho y Abogado, Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, con domicilio profesional en la calle Muntaner núm. 200, 5° 3ª, CP: 08036 – BARCELONA, ha sido contratado por la Asociación de Productores de Energías Renovables (A.P.P.A), con el objeto de elaborar un informe jurídico sobre una concesión de aprovechamiento de aguas del año 1905.

Entendemos que para una correcta precisión, y con la finalidad de delimitar el objeto del presente dictamen, es necesario proceder a concretar los siguientes

I.- ANTECEDENTES

Según la documentación consultada, la resultancia fáctica a considerar es la siguiente:

1.- Se parte de la concesión de aprovechamiento de aguas otorgada por resolución de 8 de junio de 1905, dictada por el Gobernador Civil, por la cual se otorgaba el citado aprovechamiento a perpetuidad y dejando a salvo el derecho de propiedad (cláusula 8).

671

B-64200686



iuracat
ADVOCATS

Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 84 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urnieta

2.- Por Resolución del Organismo de cuenca, de fecha de 7 de noviembre de 1988, confirmada por otra posterior, de 2 de enero de 1992, fue autorizada la más reciente de las trasferencias del aprovechamiento, quedando inscrito a nombre de su actual titular.

3.- La Confederación Hidrográfica, después de algunas indagaciones acerca del funcionamiento de la Central, acuerda, en fecha de 24 de julio de 2009, iniciar expediente de extinción de la concesión por las causas siguientes: a) fin del plazo concesional y b) interrupción continuada de la explotación del aprovechamiento, por periodo superior a 3 años. La resolución fue notificada al interesado con fecha de 2 de agosto de 2009 y publicada oficialmente.

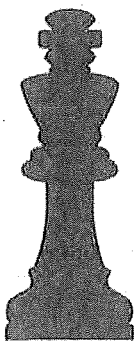
En dicho expediente, y tras los trámites pertinentes, de reconocimiento del aprovechamiento hidroeléctrico, informe y audiencia del interesado, el Organismo propone declarar la extinción de la concesión, por expiración del plazo máximo de duración de la misma, descartando la causa de caducidad por interrupción prolongada e indebida de la explotación.

4.- La concesionaria se opone a la extinción de la concesión, propuesta por el órgano administrativo competente, afirmando su no conformidad al ordenamiento jurídico en atención a que el plazo máximo de duración de su derecho no ha finalizado según lo estipulado en el título concesional y en la normativa de aguas, además de hallarse en contradicción tal propuesta de extinción con

672

B-64200686

la autorización que le fue otorgada por el Organismo, con fecha de 4 de mayo de 2010, para realizar obras de reparación del muro del canal de alimentación de la Central, emplazado en zona de policía de cauces de la margen derecha del río.



II.- ANÁLISIS DEL DICTAMEN DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T 34 93 200 81 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elías
Fernando Lloria Urnieta

La Abogacía del Estado ha sido conocedora del expediente administrativo de extinción de concesión de aguas que nos ocupa y, en su calidad, ha emitido Dictamen por el cual se informa sobre las consecuencias jurídicas que se desprenden. Por lo tanto, en este apartado vamos a efectuar un breve análisis de dicho dictamen. En este sentido, se destacarán sucintamente los argumentos jurídicos y conclusiones que de ellos se extraen:

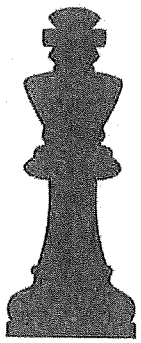
I. RÉGIMEN ANTIGUO DE LA CONCESIÓN.

En este apartado el Abogado del Estado analiza el régimen antiguo de la concesión con la finalidad de acotar naturaleza jurídica de la concesión. Así, sobre la base de lo establecido en la Ley General de Obras Públicas de 1877, de la Ley de Aguas de 1879, el Código Civil de 1889 y la Ley de Patrimonio del Estado de 1964, así como la jurisprudencia relacionada, descarta la posibilidad que las concesiones constituidas a perpetuidad puedan ser objeto de prescripción por haber sido establecidas sobre bienes pertenecientes al dominio público. De igual manera, niega el carácter perpetuo de la concesión recordando que el artículo 196 de la Ley de Patrimonio del Estado de 1964 impuso el límite temporal de 99 años para las concesiones demaniales,

673

B-64200686

prohibiéndose su otorgamiento por período superior o con carácter indefinido.



iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 81 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elías
Fernando Lloria Urnieta

II. RÉGIMEN VIGENTE DE LA CONCESIÓN.

En este apartado la Abogacía del Estado inicia su fundamentación jurídica reiterando la imposibilidad de adquirir la propiedad de bienes demaniales mediante el instituto de la usucapión así como el uso y disfrute privativo *ad eternum*. Todo ello, sobre el prisma de la Constitución Española cuyo artículo 132 proclama el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los bienes de dominio público.

La Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto, sometida al control del Tribunal Constitucional (STC 227/1988), estableció un plazo máximo de 75 años para las concesiones de aprovechamientos hidráulicos, con posibilidad de una prórroga por 10 años más de forma excepcional. Así pues, tanto la citada Ley de Aguas de 1985 como el texto refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, contienen una Disposición Transitoria Primera relativa a los derechos adquiridos con el antiguo régimen.

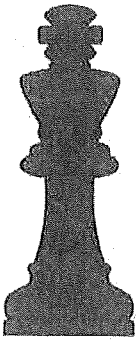
Dicho esto, el Abogado del Estado acota la problemática jurídica en la diferente interpretación que las partes hacen de la nueva regulación. Así, la Administración entiende que debe operar la prescripción inmemorial y por tanto la concesión debe entenderse extinguida, mientras que la concesionaria defiende su plena vigencia hasta un máximo de 75 años a computar desde la entrada en vigor de la Ley 29/1985.

III. EXAMEN DE LA CONCESIÓN. ALCANCE DE LOS DISPUESTO EN LA CLÁUSULA S- DEL TÍTULO.

De entrada, en este apartado la Abogacía del Estado considera correcta la interpretación realizada por el Organismo de cuenca,

B-64200686

coincidente con el dictamen que la misma emitió en fecha de 16 de abril de 2001, basado en los siguientes motivos:



iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T. 34 93 200 01 73
F. 34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correu@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urrieta

1° La concesión administrativa de fecha de 8 de junio de 1905 lo fue para uso privativo del dominio público con fines industriales, por tiempo ilimitado, pero con expresa reserva del derecho de la propiedad. Sin embargo con la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo la citada concesión debe entenderse limitada en el tiempo además de seguir poseyendo todas las particularidades de los bienes demaniales.

2° La correcta interpretación de la regulación contenida en la Ley de Aguas de 1985 tiende a la extinción de todas las concesiones antiguas una vez transcurridos 75 años. En modo alguno debe interpretarse como la posibilidad de ampliar las concesiones vigentes por ese plazo si ya hubieran transcurrido los citados 75 años desde su otorgamiento.

3° Sobre todo a partir de la Ley del Patrimonio del Estado de 1964 debe entenderse la firme voluntad del legislador de limitar temporalmente las concesiones administrativas sobre el dominio público, concretando un plazo máximo de 99 años. Las legislaciones posteriores adoptan este criterio de restrictivo de la temporalidad, por todas la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 22/1988, de Costas como su Reglamento de desarrollo contenido en el Real Decreto 1471/1989.

Es más la citada Ley 22/1988, de Costas, limita las concesiones del dominio público marítimo-terrestre a un plazo máximo de 30 años y, respecto de las declaradas a

B-64200686

perpetuidad, su Reglamento de desarrollo las limita a 99 años

En base a ello, la concesión constituida en el año 1905, a entender de la Abogacía del Estado, debería entenderse finalizada en el año 2004.

IV. ANÁLISIS DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA CONCESIÓN.

En este apartado la Abogacía del Estado analiza dos hitos temporales importantes. Por un lado que el expediente de extinción de la concesión se incoara en fecha de 24 de julio de 2009, esto es poco más de cuatro años después del plazo máximo de duración de la misma, y que a su vez en fecha de 4 de mayo de 2010 se emitiera autorización para que la concesionaria ejecutara obras de reparación en las instalaciones objeto de la concesión.

iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T 34 93 200 81 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urnieta

A la vista de lo anterior, debe entenderse que opera la posibilidad de prórroga contenida en el artículo 59.6 del RDL 1/2001, de 20 de julio, otorgada por la Administración de forma tácita con la finalidad del que el concesionario amortice las obras realizadas, sin sobrepasar en ningún caso el límite de 10 años, sumados al plazo máximo original.

CONCLUSIONES

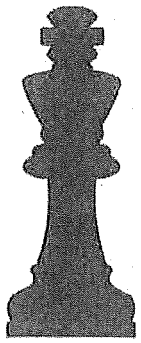
Primera.- La cláusula a perpetuidad de la concesión debe entenderse por plazo máximo de 99 años.

Segundo.- El plazo máximo original de la concesión debe entenderse prorrogado por el plazo el máximo de 10 años con la finalidad de que amortice las obras recientemente realizadas.

Tercero.- Decretar el archivo del expediente de extinción de la concesión.

676

B-64200686



iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 008 473
F +34 93 019 208
www.iuracat.com
correu@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urnieta

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

El plazo de duración de la concesión se antoja el punto discrepante entre el concesionario y la Administración, siendo el verdadero caballo de batalla, por cuanto los plazos que de una u otra interpretación de normativa aplicable y jurisprudencia existente en la materia harán prolongar más o menos en el tiempo la concesión administrativa en su día otorgada allá por los albores del siglo XX.

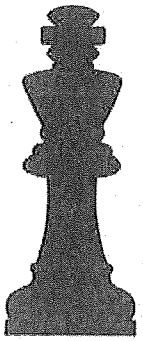
Así pues, vaya por delante que el firmante discrepa de la interpretación realizada en este punto por la Abogacía del Estado en el dictamen analizado en el apartado anterior. Y esto es así, tal y como fundamentaremos seguidamente en las próximas líneas, con la aplicación escrupulosa de la normativa específica en la materia, la jurisprudencia recaída en la misma, así como el resto del ordenamiento jurídico tendente a iluminar cualquier cuestión jurídica a que le interpelemos.

I.- NATURALEZA DE LOS BIENES OBJETO DE LA CONCESIÓN

En el dictamen elaborado por la Abogacía del Estado los bienes objeto de la concesión son considerados como bienes demaniales y por lo tanto su propia naturaleza los hace inalienables, imprescriptibles e inembargables.

677

B-64200686



En este punto concreto el firmante no puede más que compartir la tesis sostenida por el Abogado del Estado por la cual el mero transcurso del tiempo no es título suficiente para que, en el presente caso, opere el instituto de la prescripción adquisitiva, por cuanto ello equivaldría a la traslación del dominio del bien objeto de la concesión.

iuracat
ADVOCATS

Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 84 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

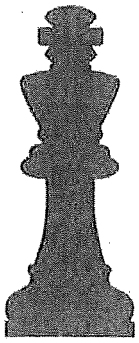
Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urrieta

II.- PLAZO DE DURACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE

El punto de partida debemos iniciarlo en la Ley de Aguas de 1879, cuyo artículo 220 establecía de forma expresa que las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas para establecimientos industriales se otorgaban a perpetuidad salvo que por motivo de dicha actividad el agua se tornara nociva o insalubre en cuyo caso se decretaría la caducidad de la concesión, sin derecho a indemnización alguna.

Vemos por tanto, como era la propia legislación aplicable en el momento de constitución de la concesión la que contemplaba de forma expresa la necesidad de constituir las concesiones de aguas a perpetuidad. Sin embargo, las legislaciones posteriores que incidían directamente en las concesiones administrativas tendieron a la limitación temporal de las mismas y a la fijación de un régimen transitorio para todas aquellas constituidas al abrigo de concepciones más laxas, en cuanto a la temporalidad de las mismas.

B-64200686



iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T. +34 93 200 84 73
F. +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elías
Fernando Lloria Urrieta

Fue la Ley del Patrimonio del Estado, aprobada por el Decreto 1022/1964, de 15 de abril (vigente hasta el 4 de febrero de 2004), la que estableció en su artículo 126 una limitación temporal de todas las concesiones o autorizaciones sobre el dominio público, al disponer la necesidad de que éstas contemplaran de forma expresa el plazo por el cual se constituían sin que éste pudiera, en ningún caso, sobrepasar los 99 años. Por lo tanto, observamos como la norma general limitó la posibilidad de establecer plazos indefinidos al establecer una obligación de concreción de término así como un plazo máximo de concesión.

Sin embargo, la normativa específica posterior en materia de aguas fue más allá al decretar un techo temporal mucho menor. Así, la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (vigente hasta el 25 de julio de 2001), fijó el plazo máximo de las concesiones administrativas de aguas en 75 años según dispuso el artículo 57.4, si bien el apartado sexto de dicho artículo estableció la posibilidad de prorrogar el plazo, hasta un máximo de 10 años, con el fin de amortizar las obras realizadas para su normal utilización. No puede obviarse que este Ley de Aguas de 1985 derogó de forma expresa la Ley de Aguas de 1879. No obstante esta nueva disposición normativa fue lo suficientemente previsora como para establecer un régimen transitorio expreso para todas aquellas situaciones jurídicas creadas al amparo de la ley decimonónica. Entre ellas encontramos la Disposición Transitoria Primera cuyo contenido textual es el siguiente:

"DTª Primera. 1. Quienes, conforme a la normativa que se deroga, fueran titulares de aprovechamientos de aguas

B-64200685

públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia ley establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor."

iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 81 73
F +34 93 201 02 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

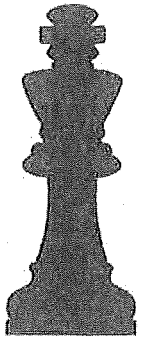
Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elías
Fernando Lloria Urnieta

A la vista de esta DTª Primera de la Ley de Aguas se evidencia de forma clara y meridiana el ánimo de legislador de, por un lado, mantener las situaciones existentes creadas por la legislación derogada y, por otro, establecer un plazo de extinción de las mismas concretado en 75 años. Con ello, podemos afirmar que la concesión de aguas que nos ocupa tiene total vigencia en el momento en que esta norma es publicada y, con ello, legitimada para acogerse a la regulación contenida en esta DTª Primera.

Sin embargo, la interpretación que de esta DTª Primera hace el Abogado del Estado es aquella por la cual las concesiones reguladas por el régimen anterior deberán entenderse extinguidas pasados 75 años desde su entrada en vigor, si bien aquellas que no tienen plazo expreso establecido, como sucede en el caso que nos ocupa, debe entenderse de aplicación el plazo general de 99 años recogido en la Ley de Patrimonio del Estado de 1964.

Esta interpretación realizada por el Abogado del Estado, no compartida por el autor del presente dictamen, pretende ser apoyada por normativa no aplicable al caso que nos ocupa como la Ley 22/1988, de Costas (y su Reglamento de desarrollo contenido

B-64200686



iuracat
ADVOCATS

Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 209 84 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urnieta

en el Real Decreto 1471/1989). Es evidente, que sendas disposiciones, al igual que hace la Ley de Aguas, contienen una regulación específica sobre dominio público. Sin embargo, los bienes demaniales que cada una de estas leyes tratan son muy diferentes por más que pretendan buscarse similitudes. Así, lo ha entendido la propia Unión Europa con el ultimátum dado a nuestro Estado respecto a las mínimas políticas de protección costera que hasta la fecha había desarrollado. Es innegable que no son del mismo tipo las concesiones y derechos de aprovechamiento que particulares y empresas tienen en la zona marítimo-terrestre que la concesión de aguas que tiene una empresa en el dominio público hidráulico cuya finalidad es generar energía eléctrica. Por esta razón los plazos máximos establecidos en una y otra legislación son tan diferentes y, en cualquier caso, impiden su aplicación analógica. No existe identidad de razón suficiente como para reclamar dicha aplicación.

III.- SENTENCIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM. 227/1988, DE 29 DE NOVIEMBRE

Este razonamiento anterior vertido por el Letrado de la Administración en su dictamen intenta apoyarlo con la ayuda de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional núm. 227/1988, de 29 de noviembre, en cuyo Fundamento Jurídico Onceavo se aborda la regulación contenida en la citada DTª Primera. En realidad, de la simple lectura de la citada sentencia y, más concretamente de su FJº 11, podemos constatar que no estamos en presencia de una cita jurisprudencial que apoye sus razonamientos. Y es que la sentencia invocada de contrario tuvo

B-64200686

por finalidad, entre otras, el sometimiento de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, al prisma constitucional. Se buscaba con ello la aseveración de constitucionalidad de algunos preceptos de la norma legal al entender quienes recurrían que se vulneraban directamente disposiciones de la Carta Magna, como los artículos 9.3, 33 y 81.1 CE. Concretamente, el artículo 33 de la Constitución es tratado en el invocado FJ° 11 al aplicarlo directamente sobre las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda y Tercera de la Ley impugnada, al entender que éstas podían vulnerar las garantías del derecho de propiedad privada y de los derechos patrimoniales salvaguardados en el precepto constitucional.

iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T. 93 200 84 73
F. 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

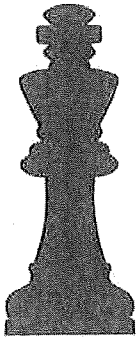
Jordi Parpal Marlà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elías
Fernando Lloria Urnieta

Respecto de la DTª Primera, en lo que aquí nos interesa, esto es el nuevo plazo máximo de 75 años para todos los derechos de aprovechamiento de aguas públicas ganados con la legislación anterior, el FJ° 11 considera que dicha Disposición transitoria posee los suficientes visos de constitucionalidad como para no ser expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. Ello es debido a que, si bien es cierto que la fijación de un nuevo plazo de duración máxima de los aprovechamientos afecta directamente al contenido esencial de esos derechos, no es menos cierto que la simple modificación del elemento temporal no es *per se* motivo suficiente para desvirtuar su contenido esencial. En palabras del propio Tribunal Constitucional: *"la limitación temporal de tales aprovechamientos privativos no es una privación de derechos, sino nueva regulación de los mismos que no incide en su contenido esencial"*. Por ello, la fijación del plazo máximo de los aprovechamientos en 75 años no puede considerarse ni arbitraria ni generadora de inseguridad jurídica, más al contrario debe verse en ésta una decisión razonable y que bien puede ser suficiente

682

B-64200686

para amortizar las obras necesarias para la normal utilización de la concesión.



iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 84 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elías
Fernando Lloria Urnieta

Dicho esto debemos concluir en lo siguiente: la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 227/1988, de 29 de noviembre, y en concreto su Fundamento Jurídico 11°, declara únicamente la plena constitucionalidad del nuevo plazo de 75 años de duración máxima fijado en la DTª Primera de la Ley de Aguas de 1985, para todos los derechos de aprovechamiento de aguas públicas ganados con anterioridad, sin que en ningún apartado de la sentencia constitucional se aborde expresamente la problemática aquí debatida sobre el *dies a quo* y el *dies ad quem*, del cómputo de estos 75 años, en las concesiones con cláusulas a perpetuidad. Por lo tanto, no puede subsumirse de la citada sentencia, como pretende la Abogacía del Estado, la existencia de un pronunciamiento constitucional sobre el cómputo del plazo inicial y el plazo final de las concesiones de aprovechamiento de aguas que se establecieron a perpetuidad de acuerdo con la legislación anterior.

IV.- LAS CLÁUSULAS A PERPETUIDAD Y LA RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS

Las cláusulas a perpetuidad o los plazos indefinidos han estado presentes en muchos de los contratos públicos y privados celebrados hasta el siglo pasado. Fue en este último siglo donde la mentalidad jurídica de los operadores fue modulándose de tal manera que la continuidad de plazos indelebles se antojó incompatible con los nuevos idearios. Así se fue reflejando poco a

683

B-64200686

poco en las diferentes normas legales que iban surgiendo al amparo de esta nueva mentalidad por cuanto todas empezaron a: establecer la obligación de acotar en el tiempo la vigencia de los nuevos negocios jurídicos; fijar plazos máximos para que éstos desplegaran sus efectos; posibilitar la existencia de prórrogas pero por tiempos determinados y, sobre todo, el reconocimiento de regímenes transitorios para todos aquellos negocios jurídicos celebrados al amparo de la legislación que recién se derogaba.

iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T 34 93 200 81 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elías
Fernando Lloria Urrieta

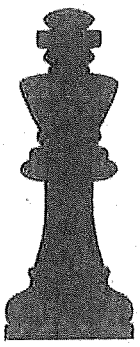
Este periodo de transición de una concepción a otra ha servido para que, a día de hoy, ya nadie niegue que las cláusulas a perpetuidad o por tiempo indefinido adolecen de nulidad si se plasman en contratos de naturaleza pública o privada celebrados en nuestros días. Sin embargo, respecto de las cláusulas existentes por este motivo en contratos celebrados en base a legislaciones anteriores que sí las permitían se entenderá que siguen desplegando sus efectos en tanto en cuanto no se produzca la caducidad de las mismas por el transcurso de los nuevos plazos fijados al efecto. Por lo tanto, sobre estas últimas debemos entender que conservan plena vigencia, si bien se dirigen irremediablemente hacia su extinción.

Como ya apuntamos con anterioridad, leyes como la Ley de Patrimonio del Estado de 1964 han servido para zanjar el debate de la limitación temporal de las concesiones o autorizaciones sobre el dominio público, por cuanto además de establecer la obligación de incluir un plazo concreto niega la posibilidad de que éste sobrepase los 99 años. No obstante, este plazo podrá ser incluso más reducido por las legislaciones especiales como así sucede con

684

B-64200686

la Ley de Aguas de 1985 al rebajarlo a 75 años. Aún así, lo cierto es que, a diferencia de esta última, la Ley de Patrimonio no previó un régimen transitorio para todas aquellas concesiones u autorizaciones gestadas al amparo de la normativa anterior.



iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T. +34 93 200 84 73
F. +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

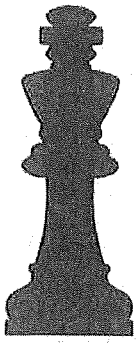
Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elías
Fernando Lloria Urnieta

Con ello, quiere hacerse expresa mención a la consideración efectuada por el Abogado del Estado en su dictamen al considerar el plazo máximo de 99 años fijado en la citada Ley como el plazo sustitutorio de la cláusula a perpetuidad plasmada en la concesión que nos ocupa. Es decir, según este razonamiento plasmado en su dictamen, la Abogacía del Estado entiende que la simple aprobación de la Ley de Patrimonio de 1964 supone que la concesión de aprovechamiento de aguas decretada por el Gobernador Civil, en resolución de 8 de junio de 1905, debe entenderse caducada en el año 2004, al aplicar los 99 años de plazo máximo establecidos su artículo 126 para cualquier concesión o autorización sobre el dominio público.

Es evidente que este razonamiento del Abogado del Estado está partiendo de dos premisas de las que discrepamos: de una parte, la preferencia de la ley general sobre la especial, lo cual constituye una afirmación difícil de sostener, como prueba claramente que ningún precepto de leyes de propiedades especiales deban entenderse derogadas por dicha ley general (díganos, si no, un único supuesto); y, de otra parte, la premisa de la retroactividad de las normas puesto que, el nuevo plazo de 99 años además de aplicarse a las concesiones de dominio público de nueva creación, pretende que también se aplique a todas aquellas concesiones vigentes en el momento de su entrada en vigor. En este punto

B-64200686

debemos detenernos en lo regulado por el artículo 2.3 del Código Civil y el artículo 9.3 de la Constitución Española. El primero establece que las Leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario, mientras que el segundo establece que la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.



iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 84 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

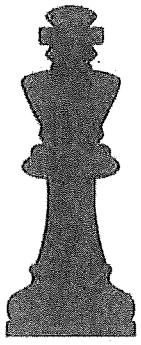
Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elías
Fernando Lloria Urnieta

En el presente caso la Ley de Patrimonio del Estado de 1964 no contempla de forma expresa la aplicación retroactiva del nuevo plazo de 99 años a las concesiones anteriores a su entrada en vigor. Además, es innegable que la aplicación de dicho plazo con efectos retroactivos restringe un derecho individual que tiene el concesionario respecto del aprovechamiento de agua otorgado por la concesión. En consecuencia, podemos afirmar que la aplicación retroactiva de esta norma supone la vulneración de lo estipulado en el artículo 2.3 del Código Civil y el artículo 9.3 de la Constitución Española. En apoyo de esta tesis existe una jurisprudencia amplia y generalizada por tratarse de una materia ampliamente desarrollada por nuestros tribunales. No obstante, nos vamos a referir únicamente a la ya comentada Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional núm. 227/1988, de 29 de noviembre, puesto que precisamente entró a valorar este supuesto en aplicación de la Ley de Aguas de 1985.

En efecto, el Tribunal Constitucional abordó la problemática de la retroactividad de las normas al valorar la constitucionalidad de la Ley de Aguas de 1985. Así, en su Fundamento Jurídico Noveno esta doctrina se expresó en los siguientes términos:

686

B-64200686



iuracat
ADVOCATS

Muntaner 200, 5è 3a.
08036 Barcelona
T. +34 93 200 81 75
F. +34 93 200 92 08

www.iuracat.com
correo@iuracat.com

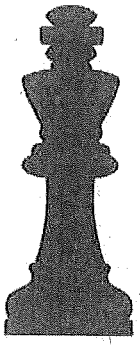
Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urnieta

"(...) En efecto, no hay retroactividad cuando una Ley regula de manera diferente y pro futuro situaciones jurídicas creadas con anterioridad a su entrada en vigor y cuyos efectos no se han consumado, pues, como este Tribunal ha declarado en anteriores ocasiones -SSTC 42/1986, de 10 de abril y 99/1987, de 11 de junio-, una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9.3 de la Constitución, cuando incide sobre "relaciones consagradas" y "afecta a situaciones agotadas" y "lo que se prohíbe en el art. 9.3 es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la irretroactividad". La Ley 29/1985 procede a dar una nueva regulación de los derechos individuales sobre las aguas continentales, pero no altera los efectos jurídicos de los derechos que la legislación anterior reconocía mientras estuvo en vigor. Cosa distinta es que el nuevo régimen legal no reconozca ya, en adelante, algunos de aquellos derechos o que los regule de manera más restrictiva.

Sucede aquí que los recurrentes parecen confundir el principio de irretroactividad establecido en el art. 9.3 de la Constitución con el respeto a los derechos que han sido adquiridos al amparo de la legislación que la Ley recurrida viene a derogar. Pero también hemos señalado en anteriores ocasiones que la Constitución no emplea la expresión derechos adquiridos, que no es posible equiparar el concepto de derecho individual que utiliza el art. 9.3 con el ius quaesitum (STC 27/1981, de 20 de julio) y, en definitiva, que la "invocación del principio de

B-64200686

irretroactividad no puede presentarse como una defensa de una inadmisible petrificación del ordenamiento jurídico" -SSTC 27/1981, 6/1983, de 4 de febrero y 99/1987, de 11 de junio, entre otras-. Sin quebrantar el principio de irretroactividad sancionado en el art. 9.3 del texto constitucional, el legislador puede variar, en sentido restrictivo y con eficacia ex nunc, el régimen jurídico preexistente de los derechos individuales, siempre que se ajuste a las restantes exigencias de la Constitución."



iuracat
ADVOCATS

Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 84 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

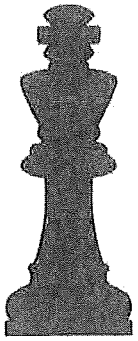
Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elías
Fernando Lloria Urrieta

Cabe observar como el Alto Tribunal realiza una diferenciación entre el principio de irretroactividad establecido en el artículo 9.3 de la Carta Magna y los derechos adquiridos al amparo de la legislación anterior en materia de aguas, por cuanto la retroactividad prohibida es la de las normas que sean restrictivas de derechos individuales; pero por derechos individuales no cabe entender los meramente hipotéticos, basados sólo en la existencia de una norma de la que podría derivarse su reconocimiento; sino, más bien, los ya perfeccionados; situación ésta que, en principio o como regla general, no es la predicable de quien no es aún concesionario y sí sólo mero pretendiente a obtener una concesión del dominio público.

Ciertamente, el Tribunal Constitucional confirma que el legislador podrá modificar con su actuación el régimen jurídico preexistente de los derechos individuales siempre y cuando no hayan agotado sus efectos y la nueva legislación que surja incida sobre éstos en su proyección hacia el futuro. En línea con este argumento se establece la citada DTª Primera de la Ley de Aguas de 1985 al

B-64200685

reconocer la existencia de los derechos de aprovechamientos adquiridos con la legislación anterior y que por tanto los respeta, si bien establece que éstos seguirán desplegando sus efectos hasta un máximo de 75 años, lo cual indiscutiblemente es una incidencia sobre éstos pero a futuro. Por todo ello, no puede decirse en este aspecto que la Ley de Aguas sea inconstitucional puesto que deja a salvo el principio de irretroactividad de las normas al reconocer la aplicación del nuevo plazo para las anteriores concesiones únicamente a partir de su entrada en vigor.



iuracat
ADVOCATS

Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 84 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

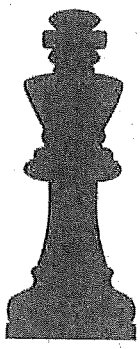
Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elías
Fernando Lloria Urrieta

En consecuencia, este es el razonamiento a seguir en la aplicación del plazo de 99 años establecido en la Ley de Patrimonio del Estado de 1964, en contra del sostenido por la Abogacía del Estado que inicia el cómputo de los mismos desde el inicio de la concesión, esto es desde el 8 de junio de 1905.

Es decir, si bien es cierto que la Ley de Patrimonio del Estado no establece un régimen transitorio específico para las concesiones existentes a su entrada en vigor, a diferencia de la Ley de Aguas que claramente aborda esta problemática, lo que es innegable es que de aplicar este plazo a la concesión que nos ocupa, tan sólo podría hacerse desde la aprobación de la misma, esto es desde 1964. Por lo tanto, contados los 99 años fijados en la ley estaríamos ante una concesión cuya caducidad se produciría en el año 2063.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que la Ley de Patrimonio del Estado no fija ni un derecho transitorio ni una disposición relativa a la retroactividad de sus normas. Únicamente reconoce, en su

B-64200686



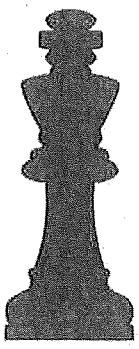
iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 81 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urnieta

artículo 126, la posibilidad de que las leyes especiales reduzcan el plazo general de las concesiones fijado en 99 años. Sobre este marco la Ley de Aguas de 1985 opta por la reducción limitando el plazo máximo de sus concesiones sobre el dominio público de aguas a los ya citados 75 años. Es por ello, que aplicando la comentada doctrina sobre la irretroactividad de las normas y más concretamente, lo establecido en la DTª Primera de la ley, podemos concluir que la concesión que nos ocupa debe seguir desplegando sus efectos hasta la fecha de 1 de enero de 2061, teniendo en cuenta que la Disposición Final Tercera de la misma ley estableció que su entrada en vigor se produciría en fecha de 1 de enero de 1986, fecha la cual debe tomarse como inicio del cómputo de los 75 años de plazo máximo para las concesiones existentes a su entrada en vigor.

Nótese como esta fecha de caducidad situada en 2061, al aplicar las prescripciones contenidas en la DTª Primera de la Ley de Aguas, se halla muy próxima a la de 2063 que surgiría de aplicar el plazo de 99 años de la Ley de Patrimonio del Estado. A pesar de ello, el plazo de caducidad debemos fijarlo el 1 de enero de 2061 ya que, como hemos apuntado, la Ley de Patrimonio del Estado no fijó un régimen transitorio del que deducir su aplicación para las concesiones establecidas a perpetuidad como si abordó la Ley de Aguas; pero además debemos aplicar el plazo contenido en esta última ya que, como ley especial, establece un plazo máximo más restrictivo que el plazo general fijado en la Ley de Patrimonio del Estado, más si cabe cuando en su artículo 126 se reconocía expresamente esta facultad.

B-64200686



iuracat
ADVOCATS

Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 84 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

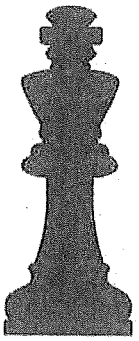
Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urnieta

En apoyo de esta tesis sostenida por el firmante tuvo la oportunidad de pronunciarse el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) en su Sentencia núm. 860/2004, de 20 julio, aborda de forma expresa lo regulado en la DTª Primera de la Ley de Aguas bajo la interpretación dada a la misma por el Tribunal Constitucional. Vale la pena detenernos en el supuesto de hecho consistente en la demanda formulada por el Ayuntamiento de Carcabuey en la cual solicitaba que se dictara sentencia en la que, estimando la demanda, se declarase no haber lugar a seguir los demandados disfrutando del derecho a suministro gratuito, con cargo al servicio municipal de abastecimiento de agua potable a la población de Carcabuey, del caudal de cuatro litros de agua por minuto o 5.760 litros diarios (los titulares de una paja de agua) o 2.880 litros diarios (los titulares de media paja de agua), negando la vigencia actual de aquél derecho y declarando que por la naturaleza del negocio jurídico celebrado en el año 1927 y el carácter demanial del bien sobre el que se gravaba, nunca puede ser considerado como un derecho adquirido a perpetuidad, con expresa imposición de las costas a los demandados en cuanto se opusieran a la demanda.

Entre la fundamentación jurídica de la sentencia, en lo que aquí interesa, debemos destacar el Fundamento Jurídico Tercero, expresado en los siguientes términos:

> *"(...) Es cierto que según le actual artículo 50-2 de la Ley de Aguas de 1985 «no podrá adquirirse por prescripción el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico», por lo que debe entender derogado este artículo 409 del Código Civil en lo que a*

B-64200686



iuracat
ADVOCATS

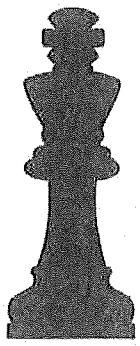
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T. 34 93 200 81 73
F. 34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correu@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urnieta

la prescripción adquisitiva del aprovechamiento privativo de aguas públicas se refiere. Este radical cambio surte, desde luego, eficacia de futuro, quedando pues impedida la adquisición por usucapión de tal derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. Surge, no obstante el problema del derecho de aprovechamiento de aguas públicas, según el código civil y la anterior Ley de Aguas, que lo hayan adquirido por prescripción. En este sentido la disposición transitoria primera dispone que se conservarán los derechos inherentes a esas titularidades, pero convirtiendo tales derechos, que eran de duración indefinida (artículos 8 y 149 de la Ley de Aguas anterior), limitación temporal, ***con un plazo máximo de 75 años a partir del 1 de enero de 1986. La fijación****, con carácter general, de este límite de los derechos de aprovechamiento de aguas públicas ganados con anterioridad, no puede decirse que produzca una ablación de los mismos, sino que se trata de una regulación del contenido de aquellos derechos, que debe merecer un juicio favorable, por cuanto a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto por esencia al límite temporal alguno conforme a su configuración jurídica general, es ajena al contenido esencial de los derechos individuales sobre bienes de dominio público, su condición de derecho a perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la Ley; antes bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son compatibles en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el artículo 132.1 de la Constitución consagra (fundamento 11 sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988). En el*

692

B-64200686



iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 81 73
F +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

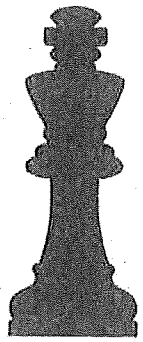
Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urnieta

supuesto objeto del presente recurso, ***no habiendo transcurrido tampoco el plazo de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985,*** *la prescripción ganada debe continuar surtiendo sus efectos no siendo obstáculo, a juicio de la Sala, las previsiones de la misma Disposición Transitoria 1ª, apartado 2, en cuanto requiere que la prescripción sea «acreditada», acreditación que se refiere a la inscripción del aprovechamiento en el Registro de la Propiedad por el cauce del artículo 65 Reglamento Hipotecario que regula la tramitación de la pertinente acta de notoriedad, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley."*

Vemos como esta sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ampliamente utilizada por la Sala Contencioso-Administrativa en varias de sus resoluciones, por todas la Sentencia de 10 junio 2008, de la Sección 5ª, entra directamente en la problemática aquí debatida respecto de la aplicación de lo regulado en la DTª Primera de la Ley de Aguas de 1985. El caso analizado en la sentencia, finalmente, el Tribunal Supremo reconoció que los vecinos del municipio de Carcabuey que habían adquirido este derecho en base a la normativa anterior continuaran disfrutando de sus aprovechamientos de aguas hasta un plazo máximo de 75 años a contar desde el 1 de enero de 1986. Por lo tanto, este supuesto al ser más flagrante si cabe que el que nos ocupa debe llevarnos necesariamente al mismo resultado, entendido éste en los términos plasmados a lo largo de este escrito aceptando que la concesión de 8 de junio de 1905 continuará vigente hasta el 1 de enero de 2061.

693

B-64200686



iuracat
ADVOCATS

Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T +34 93 200 84 73
F +34 93 201 02 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urnieta

V.- RESCATE DE LA CONCESIÓN

Una vez concretada ya la fecha de duración máxima de la concesión podemos sostener que, salvo causas imputables al concesionario, la Administración únicamente podrá extinguirla si previamente acuerda su rescate, esto es pagando el justiprecio correspondiente por motivo de la expropiación. Así lo reconoce la propia Ley de Aguas de 1985 en su artículo 51.1c) en relación con el artículo 63.3, coincidentes con el artículo 53.1c) en relación con el artículo 65.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y la Ley de Expropiación Forzosa cuyo artículo 41 incluso contempla las concesiones perpetuas de bienes de dominio público.

IV.- CONCLUSIONES

En este apartado procederemos a reflejar únicamente y de forma sintética las conclusiones más importantes arrojadas a lo largo de este informe sobre los pilares básicos de la problemática, consideraciones efectuadas, sobre la base del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable.

PRIMERA.- Sobre la base de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, confirmado por la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto

694

B-64200686

Refundido de la Ley de Aguas, la concesión decretada por resolución del Gobernador Civil, de fecha de 8 de junio de 1905, seguirá desplegando sus efectos con total vigencia hasta la fecha de 1 de enero de 2061 momento exacto de su caducidad.

SEGUNDA.- Salvo causas imputables al concesionario la Administración únicamente podrá extinguir la concesión previo pago del justiprecio correspondiente a la expropiación de la misma por motivo de su rescate.

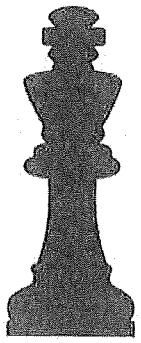
iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T. +34 93 200 81 73
F. +34 93 201 92 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

Jordi Parpal Marlà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urrieta

695

ANTONI FERRÉ I MESTRE
Dr. en Derecho; Abogado.

V.- BASES DE DATOS CONSULTADAS



- El Derecho Editores S.A.U. (www.elderecho.com)
- Editorial Aranzadi (www.westlaw.es)
- Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es)

iuracat
ADVOCATS
Muntaner 200, 5è 3a
08036 Barcelona
T. 34 93 900 01 73
F. 34 93 901 02 08
www.iuracat.com
correo@iuracat.com

Jordi Parpal Marfà
Antoni Ferré i Mestre
Gabriel Balbastre Pérez
Rafaela Bernabé Pérez
Raquel Bernabé Pérez
Ma Carmen Detrell Elias
Fernando Lloria Urnieta

VI.- SUSCRIPCIÓN

Es la opinión del que suscribe el presente informe sobre les cuestiones planteadas, y que expresamente someto a cualquier otra consideración más fundada en derecho.

Es todo lo que debe informase, en Barcelona, a 1 de junio de 2011

Antoni Ferré i Mestre.
Dr en Derecho; Abogado
Profesor Asociado de la UB

696

B-64200686

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 11/11/2011
OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 12:04:14
E001201100011541

SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA
SECRETARIA GENERAL DE MEDIO RURAL
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL

O F I C I O

SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO RURAL
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
07 NOV 2011
SALIDA N.º 124 | 2310

S/REF.
N/REF. ECN/emq
FECHA 04 de noviembre de 2011
ASUNTO Rmdo. Informe

DESTINATARIO Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Adjunto se remite informe sobre la **Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental**

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL,

Jesús Casas Grande

697

C/ ALFONSO XII, 62
28071 MADRID
TEL.: 913476657
FAX.: 913471618

CORREO ELECTRONICO

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA
SECRETARIA GENERAL DE MEDIO RURAL
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL

INFORME SOBRE EL ESCRITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL.

Antecedentes y objeto de la consulta

Con fecha 9 de agosto de 2011, tuvo entrada en esta Dirección General un escrito procedente la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, mediante el que se informaba de la publicación, el 4 de mayo de 2011, en el Boletín Oficial del Estado, de la resolución de dicha Confederación por la que se sometía a consulta pública la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Este escrito se acompañaba de CD que contenía dicha Propuesta.

La Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua, DMA), pide a los Estados miembros el fomento de la participación activa de todas las partes interesadas en la aplicación de la Directiva y en particular en la elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca. Se solicita a esta Dirección General, por tanto, la realización de las aportaciones y sugerencias que estime oportunas como parte del proceso de este proceso de participación activa.

Valoración y comentarios

La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, una vez analizado el escrito y la documentación que lo acompaña, toma nota de la información que se aporta y estima las siguientes consideraciones:

a) Desde esta Dirección General, y en el marco de sus competencias, sólo puede contribuirse desde los ámbitos de la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR), que se está materializando mediante convenios con las Comunidades Autónomas que anticipan el desarrollo de los Programas de Desarrollo Rural Sostenibles (PDRS), en concreto los relativos a programas piloto en determinadas comarcas y en las Reservas de la Biosfera; la coordinación de los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por la Unión

699

CORREO ELECTRONICO

C/ ALFONSO X
28071 MADRID
TEL.: 91347668
FAX.: 91564523

Europea a través del FEADER; y aspectos generales relacionados con el desarrollo territorial, la ordenación rural y el paisaje.

b) Respecto de la consideración del paisaje, y dado que la Cuenca Hidrográfica del Cantábrico Oriental es intercomunitaria, conviene recordar que el 1 de Marzo de 2008 entró en vigor en nuestro país el Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa, cuyos compromisos sobre protección, ordenación y gestión del paisaje comparten la Administración General del Estado y las CCAA, respetándose el principio de subsidiariedad, por lo que cada nivel administrativo (nacional, regional y local) está llamado a considerar el paisaje en sus políticas y a formular estrategias dentro del marco de sus competencias apoyado en medios e instituciones que permitan su puesta en práctica.

c) Considerando el Artículo 25 de la mencionada Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, referente al Agua, esta Dirección General, dentro de sus competencias de fomento de la eficiencia, el ahorro y el buen uso de los recursos hídricos en el medio rural, en el marco de la planificación hidráulica correspondiente, velará también por el cumplimiento de los objetivos de estado de agua establecidos por los Planes de Cuenca de la Directiva Marco del Agua, entre los cuales se encuentra la elaboración de este Plan Hidrológico.

Por todo lo expuesto, desde esta Dirección General se espera que estas observaciones faciliten la tramitación del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

Madrid, a 4 de noviembre de 2011

EL VOCAL ASESOR

Fdo. Eduardo Crespo de Nogueira Greer

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 21/11/2011 OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 12:33:33
E001201100011811

D. Jorge Marquínez García
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
Plaza de España, 2
33071 OVIEDO (ASTURIAS)

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
REGISTRO ÚNICO C. AGRICULTURA Y G. C. FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Valladolid, 11 de noviembre de 2011

El 4 de mayo de 2011 se inicia el período de información pública de la Propuesta de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental en el ámbito de competencias del Estado. La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, perteneciente a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, como parte interesada en los contenidos de los citados Planes, ha llevado a cabo un análisis de la información elaborada por la Confederación, del cual se desprenden los siguientes comentarios válidos para ambos Planes.

Autorizaciones y concesiones

El artículo 25 de la Normativa establece como requisito para otorgar una concesión de aguas superficiales la disponibilidad de un almacenamiento de regulación mínimo de 10 días. Al menos para las concesiones de abastecimiento a poblaciones consideramos que es un valor excesivo que debería matizarse.

Protección contra inundaciones

Según la Normativa, las depuradoras de aguas residuales, al considerarse "nuevas edificaciones", deben ubicarse fuera de la zona de flujo preferente, a cota suficiente para que la avenida de período de retorno de 500 años no la alcance.

Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Tel. 983 419 000 - Fax 983 419 999

La obligación de construir las depuradoras fuera de la zona de flujo preferente puede implicar en algunos casos alejarlas del cauce más de lo recomendable. Por la propia naturaleza de las depuradoras, tienen que ubicarse cerca del punto de vertido, y, por otra parte, adoptando las medidas oportunas pueden considerarse actividades no vulnerables frente a las inundaciones.

Por todo ello consideramos que deberían revisarse los criterios de protección frente a inundaciones de este tipo de instalaciones, principalmente en los casos de pequeñas y medianas depuradoras, estableciendo unos umbrales de tamaño asociados a unos requerimientos más o menos estrictos de protección. Es razonable considerar que las depuradoras pequeñas, que no implican reducción significativa de la capacidad de desagüe del cauce y cuentan con equipos electromecánicos sencillos y no vulnerables frente a las inundaciones, sean evaluadas con criterios y exigencias diferentes a las depuradoras de grandes núcleos de población, que normalmente llevan asociados elevados costes de inversión y cualquier fallo en su funcionamiento tiene una relevancia mucho mayor.

Corredor fluvial y Ámbito de Protección Específica del Medio Fluvial

Consideramos totalmente loables los objetivos que estos conceptos persiguen: por un lado, evitar los riesgos por inundaciones, y por otro, conservar los ecosistemas asociados a los cauces y proteger el dominio público hidráulico. Sin embargo, la aplicación de dichas figuras de protección podría suponer limitaciones a la hora de diseñar las plantas depuradoras, tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior. Por ello, volvemos a insistir en la necesidad de adaptar las exigencias a las características de la instalación que se pretenda construir.

Vertidos procedentes de zonas urbanas

Nuestra experiencia en materia de diseño de depuradoras de aguas residuales para pequeños y medianos núcleos de población en el territorio de Castilla y León nos lleva a rebatir la necesidad de instalar dos líneas de depuración para vertidos que

Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Tel. 983 419 000 - Fax 983 419 999

superen los 400 m3/día y el 20% del caudal de dilución del río, tal y como establece la Normativa. El umbral de 400 m3/día hace referencia a depuradoras menores o iguales a 2.000 habitantes equivalentes y el valor del 20 % del caudal de dilución es superado en muchas ocasiones en los que los cauces receptores del vertido son de muy poca entidad.

Su aplicación supondría una elevación del coste de implantación de las depuradoras, muchas veces inasumible, y desde nuestro punto de vista, en ocasiones innecesario.

Agradeciendo su voluntad de contar con nuestras alegaciones.

EL DIRECTOR GENERAL
DE CARRETERAS E NFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Luis Alberto Solís Villa

Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Tel. 983 419 000 - Fax 983 419 999

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Dirección General del Medio Natural

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 30/11/2011 OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 12:15:50
E001201100012130

Ref.ª EAE/BU/722/11
Expte. LIR/rp

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
A/A Jorge Marquínez García
Plaza de España, 2
33071 OVIEDO

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
REGISTRO ÚNICO C. AGRICULTURA Y G, C. FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Salida Nº. 2011237001 8325 24.11.11 13:42:09

Asunto: Informe del Servicio de Espacios Naturales

Para su conocimiento y efectos oportunos, se adjunta informe del Servicio de Espacios Naturales, de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, relativo al siguiente plan:

PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL

Valladolid, 23 de noviembre de 2011.

EL JEFE DEL SERVICIO DE
ESPACIOS NATURALES

Fdo.: Fco. Javier Ezquerra Boticario

705

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Dirección General del Medio Natural

Ref.ª EAE/BU/722/11
Expte. LIR/rp

INFORME DEL SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES RELATIVO A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL

SA

TÍTULO	PROMOTOR
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
TIPO DE DOCUMENTO	**ÓRGANO SOLICITANTE**
Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca e ISA	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	**FASE DEL PROCEDIMIENTO**
Evaluación de Planes y Programas	Informe de la Dirección General del Medio Natural al Plan e ISA (Art. 45.4 Ley 42/2007, de 13 de diciembre)
ESPACIOS RED NATURA 2000	**ESPACIOS NATURALES (Ley 8/1991)**
LIC "Bosques del Valle de Mena" LIC y ZEPA "Monte Santiago"	Monumento Natural "Monte Santiago"
OTRAS FIGURAS E INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN	**FECHA DE ENTRADA REGISTRO INTERNO**
Sin coincidencia	9 de agosto de 2011

1. ANTECEDENTES

En agosto de 2011 tuvo entrada en el registro interno de este Servicio escrito de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico mediante el que se notificaba que en el mes de mayo pasado se había iniciado la fase de consulta pública de la *Propuesta de proyecto de Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental*, de seis meses de duración.

Junto al citado escrito se acompaña, en formato digital el Proyecto de Plan Hidrológico así como su Informe de Sostenibilidad Ambiental. Esta documentación se considera suficiente para elaborar el presente informe, elaborado a su vez a partir de los recibidos de los diferentes Servicios de la Dirección General del Medio Natural (Espacios Naturales, Defensa del Medio Natural, Restauración de la Vegetación, Caza y Pesca y Gestión Forestal).

707

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La propuesta de Proyecto de Plan consta, como se ha indicado, de una Memoria y de la Normativa, además de los Anejos. La primera se organiza en los siguientes epígrafes:

1. *Introducción y antecedentes*
2. *Descripción general de la demarcación*
3. *Descripción de usos, demandas y presiones*
4. *Prioridades de usos y asignación de recursos*
5. *Identificación y mapas de las zonas protegidas*
6. *Programas de control y estado de las masas de agua*
7. *Objetivos medioambientales para las masas de agua*
8. *Diagnóstico del cumplimiento de los objetivos medioambientales*
9. *Análisis económico de los usos del agua*
10. *Planes y programas relacionados*
11. *Planes dependientes: Sequías e inundaciones*
12. *Programas de medidas*
13. *Participación pública*
14. *Seguimiento del plan hidrológico*
15. *Listado de autoridades competentes*

Dado lo extenso del documento no se realiza aquí mayor descripción de su contenido, remitiéndonos a aquél para su conocimiento. Únicamente en el siguiente epígrafe se harán breves reseñas a aquellas cuestiones que pudieran ser de interés en función de las conclusiones del presente informe y de las competencias de este Servicio.

Los objetivos de la planificación hidrológica, con ser múltiples –el recurso agua está sujeto a numerosas demandas de muy diverso tipo-, se agrupan en el Proyecto en dos conjuntos claramente definidos y diferenciados: objetivos medioambientales y objetivos de atención a las demandas (abastecimiento, riego, energía, etc).

708

El ámbito de este Plan Hidrológico se describe en el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. Pero a través

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

del Real Decreto 266/2008, del 22 de febrero, se modifica la Confederación Hidrográfica del Norte y se divide en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). Así mismo se renombra la Demarcación Hidrográfica del Miño-Limia como Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil (DHMS) y la Demarcación Hidrográfica del Norte como Demarcación Hidrográfica del Cantábrico (DHC). Posteriormente el Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, modificó el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, y el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. Esta norma define que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico "Comprende el ámbito territorial de la zona terrestre de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, así como la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, en el ámbito de las competencias del Estado." El presente informe se emite en referencia al Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental (en adelante PHC Oriental).

En Castilla y León la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental abarca una pequeña superficie, formada en su inmensa mayoría por el municipio de Valle de Mena –con el Ordunte y el Cadagüa como principales cursos de agua- y pequeños retazos de los municipios de Berberana y Junta de Villalba de Losa –sin apenas arroyos, con los cortados calizos que forman el límite de cuenca hidrográfica. En el primer municipio se sitúa el LIC "Bosques del Valle de Mena", formada por masas forestales si bien ninguna asociada a cursos de agua importantes. En los segundos encontramos el Monumento Natural "Monte Santiago", también declarado LIC y ZEPA, con las cresterías calizas de la Sierra Salvada, en el puerto de Orduña, donde se produce el salto del río Nervión al poco de su nacimiento.

Buena parte del contenido y objetivos que conforman el PHC Oriental, incluidos los plazos para su cumplimiento, vienen definidos y condicionados por las exigencias de la Directiva Marco del Agua, especialmente en lo referente a los objetivos medioambientales. Y los objetivos de dicha Directiva son prevenir el deterioro, mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del agua. Esta directiva establece una serie de tareas con un estricto calendario para su cumplimiento, que repercute en todos los aspectos de la gestión de aguas.

3. NORMATIVA

1. Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de Castilla y León.
2. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
3. Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.

709

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

4. Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección.
5. Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y se establece su régimen de protección.
6. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres y Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
7. Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (modificado por Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio).
8. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
9. Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
10. Decreto 58/1996, de 14 de marzo, que aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Monte Santiago.
11. Decreto 59/1996, de 14 de marzo, de declaración del Monumento Natural de Monte Santiago.

4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN

El Proyecto pone de manifiesto varias cuestiones que esta Servicio cree oportuno resaltar por considerarlas premisas básicas de partida que condicionan toda la planificación posterior así como las conclusiones del presente informe:

- el epígrafe 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN concluye declarando una realidad que nos llevan a la esencia y corazón mismo de la planificación: la reducción en un porcentaje apreciable de la cantidad del recurso agua. *Según un estudio del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX sobre la evaluación de los efectos del Cambio Climático sobre los recursos hídricos, el*

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

coeficiente de reducción global de las aportaciones a utilizar en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental para el horizonte temporal de 2027 es del ***2%****.*

- los **objetivos ambientales** (proteger, mejorar y regenerar las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas) son **irrenunciables** –salvo situaciones muy específicas y motivadas-; y han de realizarse en un cronograma prefijado y estricto. Y ello derivado directamente de las obligaciones impuestas por la Directiva Marco del Agua (DMA). Y en este sentido se formulan las alternativas planteadas en el ISA, que se diferencian únicamente en dos parámetro: la fecha en que se pretenden alcanzar los objetivos ambientales –que, en todo caso, es anterior al 2027, conforme con la DMA- y la forma en que se solventa el aumento de la demanda del recurso agua (aumento de la disponibilidad, ahorro, mejora de la eficiencia...).
- los caudales ecológicos [...] ***no tendrán el carácter de uso, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación****, salvo en el caso del abastecimiento de población en condiciones de sequías prolongadas; siempre y cuando, no existiendo una alternativa de suministro viable permita su correcta atención, y se cumplan las condiciones recogidas en la Normativa del Plan Hidrológico.*

Puede de esta manera entenderse que, por la propia esencia del Proyecto y la normativa a la que está obligado (en especial la DMA), la aplicación de la nueva planificación hidrológica habrá de suponer, a priori, una mejora sustancial del dominio público hidráulico y, por ende, de los valores ambientales tutelados por esta administración. No en vano el objetivo de la citada Directiva es el de establecer un marco de protección para las aguas -tanto superficiales como subterráneas- que, entre otras cosas:

> *a) prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos;*
>
> *b) promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles;*
>
> *c) tenga por objeto una mayor protección y mejora del medio acuático, entre otras formas mediante medidas específicas de reducción progresiva de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias, y mediante la interrupción o la supresión gradual de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias;*

711

Y son propios de la DMA conceptos tales como: *«buen estado de las aguas superficiales»* o *«buen estado ecológico»*.

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

No obstante es necesario hacer las consideraciones que siguen sobre determinados aspectos particulares que se consideran especialmente relevantes.

MEMORIA

3.1.2.4 Usos energéticos (pág. 3-14)

Son numerosos los informes emitidos por este Servicio para la evaluación ambiental de pequeñas instalaciones de producción de energía eléctrica –comúnmente denominadas *minicentrales hidroeléctricas*-, algunas de las cuales se ubican en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Resulta obligada aquí la reflexión habitualmente hecha por este Servicio según la cual este tipo de instalaciones plantean, para unas producciones de relativa poca entidad, importantísimas afecciones ambientales; que inciden además, como el propio Proyecto pone continuamente de manifiesto, en un medio sometido ya a múltiples y antiguas presiones y cuya previsión de disponibilidad es siempre a la baja. El cuadro extraído del Plan muestra claramente cómo un alto número de instalaciones hidroeléctricas (104, con un elevado impacto ambiental global) aportan apenas el 12% de la energía producida por una sola instalación térmica.

Por lo tanto parecería razonable llevar a cabo una evaluación a medio largo plazo que tuviera en cuenta por un lado la aportación real de este tipo de instalaciones a la producción energética nacional y, por otro, sus indudables afecciones ambientales.

TIPO		Nº INSTALACIONES	POTENCIA (Mw)	PRODUCCIÓN (Gwh/año)
Hidroeléctricas		104	150	327
Térmica	Servicio Público	1	800	2.691
Total		**105**	**950**	**3.018**

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

4.5. Caudales ecológicos (pág. 4-3)

Los caudales ecológicos son por una parte restricción previa y, por otra, un objetivo ambiental a satisfacer. Es fácil de entender que, en el actual contexto de presiones y demandas sobre el recurso agua, el cálculo de los caudales ecológicos es un parámetro de extraordinaria importancia dada su naturaleza. Y, en buena lógica, dicho cálculo ha de ser adecuado. Los valores de caudal ecológico establecidos en el Proyecto de Plan se han comparado con los *Estudios para la Determinación de Caudales Mínimos* en el río Cadagüa, realizados por la Dirección General del Medio Natural (en el Anexo I se detallan los estudios disponibles que se ponen a disposición de esa Confederación). Y se ha detectado que el *propuesto por el Proyecto es inferior al planteado en los Estudios:*

Estación CHC Oriental: **Cadagüa I**	Q_{ecolg} propuesto en **Plan** (m^3/s)	Q_{ecolg} Estudios **DGMN** (m^3/s)
Aguas altas	0,38	1,45
Aguas medias	0,31	0,95
Aguas bajas	0,22	$Q_{natural}$

A la vista de lo anterior este Servicio entiende insuficiente el régimen de caudales ecológicos planteados en el Proyecto para el río Cadagüa en el tramo burgalés. Asimismo entiende que, para garantizar el buen estado ecológico de la masa de agua, deberían revisarse, ofreciendo como referencia los valores indicados en la tabla anterior, obtenidos en los estudios hidrobiológicos efectuados por la Dirección General del Medio Natural y que en todo momento estarían a disposición de esa Confederación.

Por otro lado, en el Proyecto se han definido únicamente los regímenes mensuales de caudales ecológicos y los caudales máximos, siendo muy deseable que no se retrasara el establecimiento de caudales de avenida y tasas de cambio, al objeto de asemejar en lo posible dichas caudales ecológicos al régimen natural de las masas de agua.

5.3. Zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas (pág. 5-5)

En esta tipología de zonas se incluye un tramo de casi 17 km de longitud en el río Cadagüa, en el municipio de Valle de Mena. Sin embargo esta catalogación no tiene reflejo en la Normativa del Plan, limitándose su régimen de protección a lo estipulado en la Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. Considerando el objetivo de esta figura de protección y su similitud con algunas de las que a continuación se analizan, convendría estudiar la

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

oportunidad de simultanear varias de las mismas, o bien plantear un régimen de protección en la normativa del Plan.

5.7. Zonas de protección de hábitat y especies (pág. 5-7)

Indicar que en la relación de normas vigentes relativas a los lugares Natura 2000 habría de añadirse el *Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.* Pese a que los lugares Natura 2000 pertenecientes a la Comunidad de Castilla y León existentes en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental no tienen un carácter netamente fluvial, en el LIC y ZEPA "Monte Santiago" tiene su nacimiento el río Nervión.

5.9. Reservas Naturales Fluviales (pág. 5-9)

En la Normativa se establece que "*Las Reservas definidas se limitan a los bienes de dominio público hidráulico correspondientes a los tramos fluviales asociados a cada Reserva. En estos tramos no se autorizarán actividades que puedan afectar a sus condiciones naturales.*" Así entendida, esta figura, independientemente de su coincidencia o no con figuras competencia de otras administraciones, sería al entender de este Servicio una protección adecuada y conveniente y, en su caso, un excelente complemento a otras protecciones ambientales ya existentes. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León no se ha definido ninguna, pero cabría considerar lo indicado para el epígrafe 5.3 acerca de la simultaneidad de figuras, con el fin de conseguir un régimen de protección homogéneo y efectivo.

5.10. Zonas de protección especial (pág. 5-10)

Dentro de esta categoría se consideran tres subcategorías, con diversos tramos en la Comunidad de Castilla y León:

- Tramos de interés natural y medioambiental. En Castilla y León únicamente se designa el "Nacimiento del río Cadagüa" como Tramo de interés natural. Estos tramos se definen como aquellos que presentan unas características poco alteradas de:
  - Morfología y estructura del cauce (no canalizado).
  - Régimen de caudales.
  - Mantenimiento de los procesos de intercambio característicos de los medios fluviales (flujos según los ejes vertical, horizontal y longitud).

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

- Calidad del agua.
- Conservación del sistema ribereño.
- Diversidad de la fauna y flora asociada al sistema fluvial.
- Patrón de usos en la cuenca.

Estas características son análogas, si no idénticas, a las de varias de las otras figuras previstas. Por ello reiterar el comentario apuntado para el epígrafe 5.3, en cuanto a buscar un régimen de protección homogéneo.

- Espacios Naturales Protegidos. Únicamente es coincidente en Castilla y León con el Monumento Natural "Monte Santiago".
- Zonas Húmedas. No existe ninguna zona húmeda dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León en el ámbito del Plan, sin embargo éste registra en el presente epígrafe como zona húmeda a proteger conforme la Normativa del Plan el espacio "Hoya de San Cebutre". Es evidente que cualquier protección adicional a la ya prevista en la normativa se entiende como apropiada y conveniente.

5.11. Zonas húmedas (pág. 5-13)

Otro tanto puede decirse de las zonas húmedas registradas en este otro epígrafe. Como ya se ha indicado, no existe ninguna zona húmeda dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León en el ámbito del Plan, si bien aquí se incluye, entre otros pequeñas zonas turbosas, el espacio "Turbera de Zalama", zona de indudables valores ambientales, cuya protección es sin duda positiva, y en la que ya se han realizado actuaciones conjuntas de conservación por parte de las Administraciones de Castilla y León y País Vasco.

En general, en relación con la globalidad de las zonas protegidas, este Servicio hace reseña de las siguientes circunstancias acerca de los valores naturales presentes en el ámbito castellano de la Demarcación y que, en una u otra figura y con uno u otro régimen, deberían quedar bajo el amparo del Plan Hidrológico por su íntima relación con el dominio público hidráulico:

- Existen aún en este ámbito micropoblaciones de cangrejo autóctono (*Austrapotamobius pallipes*), cuya conservación resulta primordial y para lo cual este Servicio muestra específicamente su plena disponibilidad para colaborar.
- En íntima relación con el punto anterior estaría el control de las poblaciones de cangrejo señal (Pascifastacus leniusculus), por ser éste vector de la afanomicosis

715

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

o peste del cangrejo, enfermedad que ha hecho desaparecer las poblaciones de cangrejo autóctono en nuestro país y en la práctica totalidad de Europa.

- La zona está incluída en el área de distribución y expansión del visón europeo (Mustela lutreola), especie catalogado en peligro de extinción, con presencia puntual del mismo en la zona y cuya expansión depende en gran medida del buen estado ecológico de las masas de agua de la Demarcación y de la conservación de sus bosques de ribera. En este sentido, también deben extremarse las medidas para ejercer el control de la eventual presencia en la zona de visón americano, (Neovison neovison), principal amenaza de la especie autóctona, procedente de los cursos medios y bajos de los ríos de la demarcación.
- Muy importantes son también las poblaciones de trucha autóctona, con estirpes propias en esta subcuenca, cuya carga genética debería se conservada sin introgesiones de ejemplares procedentes de repoblaciones.
- Recordar la importancia de evitar la introducción y extensión de especies exóticas invasoras, como el black bass.
- Finalmente es muy importante tener presentes la existencia en el ámbito del Plan de numerosas especies incluidas en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, estrechamente ligadas al medio acuático:

ANEXO II. Especies catalogadas «Vulnerables»

Blechnaceae. *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
Rosaceae. *Prunus lusitanica* L. subsp. *lusitanica*

ANEXO III. Especies catalogadas «De atención preferente»

Salicaceae. *Salix aurita* L.

Particularmente, en el pantano de Ordunte aparece una especie creciendo en las orillas (litoral) formando céspedes inundados que también se debe mencionar:

ANEXO III. Especies catalogadas «De atención preferente»

Plantaginaceae. *Littorella uniflora* (L.) Ascherson

Hay especies ligadas a turberas de cobertor (de cumbre de montaña) o de ladera, no ligadas a cursos fluviales, pero sí consideradas humedales:

ANEXO II. Especies catalogadas «Vulnerables»

Cyperaceae. *Eriophorum vaginatum* L.

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

ANEXO III. Especies catalogadas «De atención preferente»

Menyanthaceae. *Menyanthes trifoliata* L.
Droseraceae. *Drosera intermedia* Hayne
Lycopodiaceae. *Lycopodiella inundata* (L.) J. Holub
Thelypteridaceae. *Thelypteris palustris* Schott

Y para terminar, existen otras que están en diversos hábitats, que ocasionalmente pueden estar ligadas a cursos fluviales o humedales (no turberas), pero no estricta ni exclusivamente en cursos de agua:

ANEXO III. Especies catalogadas «De atención preferente»

Aspidiaceae. *Dryopteris aemula* (Aiton) Kuntze.
Ericaceae. *Erica lusitanica* Rudolphi
Liliaceae. *Lilium pyrenaicum* Gouan
Lycopodiaceae. *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & C. F. P. Mart. subsp. *Selago*
Rosaceae. *Sorbus torminalis* (L.) Crantz
Taxaceae. *Taxus baccata* L.

6.1.1.4.2. Programa de control de las zonas protegidas (pág. 6-13)

Se describe y establece en este epígrafe el sistema de control para las diferentes zonas protegidas. Este sistema se construye mediante el funcionamiento de redes de estaciones en las que se efectúan muestreos periódicos de diferentes parámetros. Estas redes ofrecen datos que pueden ser singularmente importantes de cara a la gestión y tutela de los valores competencia de este Servicio (estados de las masas de agua o grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos), por lo que se solicita de esa Confederación el acceso a los datos obtenidos en aquéllas.

7. Objetivos ambientales para las masas de agua (pág. 7-1)

Este epígrafe, de especial relevancia en el desarrollo del Plan Hidrológico, puede sin embargo evaluarse de forma sintética si establecemos que la premisa de partida –a la que obliga de Directiva Marco del Agua- es la consecución del buen estado en todas las masas de agua de la demarcación. En detalle,

Para conseguir una adecuada protección de las aguas, se deberán alcanzar los siguientes objetivos medioambientales (art 35 del RPH):
a) Para las aguas superficiales:
a') Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales.
b') Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un buen estado de las mismas.

717

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

c') Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

b) Para las aguas subterráneas:

a') Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.

b') Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas.

c') Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.

c) Para las zonas protegidas: cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en cada zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen. Los objetivos correspondientes a la legislación específica de las zonas protegidas no deben ser objeto de prórrogas u objetivos menos rigurosos.

d) Para las masas de agua artificiales y muy modificadas: proteger y mejorar las masas de agua artificiales y las muy modificadas para lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales.

Parece claro que estos objetivos, que en esencia buscan la conservación y mejora del medio acuático, están necesariamente en consonancia con los objetivos de conservación y recuperación de los hábitat y especies –todos ellos ligados al medio acuático directa o indirectamente- competencia de esta Servicio. Más allá de los plazos establecidos y de deterioros temporales –que habrán de evaluarse particularmente- los objetivos ambientales perseguidos posibilitan la consecución de los objetivos de conservación del resto de las administraciones con competencias al respecto.

12. Programa de Medidas (varias pág.)

Dentro del Programa de Medidas, y en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, únicamente se describen nueve medidas (cuatro "Básicas", tres "Otras básicas" y dos "Complementarias". Y de todas ellas únicamente tienen plasmación física sobre el terreno (el resto consisten básicamente en planificaciones y estudios) la construcción de estaciones depuradoras y potabilizadoras. Es evidente que son medidas fundamentales, pero se echa de menos el planteamiento de otras medidas de actuación sobre el dominio público hidráulico como las acciones de mejora de la continuidad longitudinal y transversal de los ríos o las acciones de recuperación de sus condiciones morfológicas.

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

NORMATIVA

Se considera adecuado lo previsto en el *CAPÍTULO 3. Regímenes de caudales ecológicos* aunque sería deseable no retrasar el establecimiento, dentro del régimen de caudales ecológicos, de las tasas de cambio, al objeto de asemejar en lo posible dichas caudales ecológicos al régimen natural de las masas de agua.

En la normativa no existe ninguna disposición relativa a los aprovechamientos forestales o plantaciones de especies ribereñas. Sería conveniente establecer dicha disposición al objeto de definir una banda de protección junto al cauce para garantizar la continuidad de masas forestales en galería, dada su importancia para la conservación y mejora de la biodiversidad.

Artículos 14. Se prevé aquí el control de los caudales ecológicos en el conjunto de la Demarcación, que servirán para su control y ajuste de cara a las próximas revisiones del Plan. Manifestar aquí el interés de esta administración, como encargada de gestionar y tutelar recursos íntima e inextricablemente relacionados con el dominio público hidráulico, y en aras de los principios de coordinación, cooperación y colaboración entre administraciones, por acceder a los resultados de dicho seguimiento.

Artículos 47 al 51. Nuevamente aquí hacer referencia a lo apuntado en el presente informe en cuanto a la multiplicidad de figuras de protección contempladas en el Plan –de las cuales no todas se ven reflejadas en la Normativa- y la confusión a que ello pude conducir. E insistir en la conveniencia de unificar los regímenes de protección de cara a una mayor simplicidad y efectividad de las figuras.

Mención aparte merecen las Reservas Naturales Fluviales, figuras perfiladas como de protección de los bienes del dominio público hidráulico que este Servicio considera, además de adecuadamente definidas al objeto de evitar conflictos de competencias, un buen complemento a las figuras de protección ya existentes para hábitat y especies, por lo que debería contemplarse su simultaneidad..

4. OTRAS CONSIDERACIONES

Como cuestiones a contemplar tanto en la elaboración como en la aplicación del Plan Hidrológico se hacen las siguientes consideraciones:

1. Por lo que respecta a las escalas piscícolas debería imponerse de forma obligatoria al promotor la certificación de su adecuado funcionamiento mediante sistemas de validación que podrían consensuarse entre ambas administraciones. La presencia de estas escalas debería también tenerse en cuenta a la hora de las distintas concesiones de caudal,

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

especialmente en los periodos invernales coincidentes con inviernos secos, ya que éstas pueden requerir la totalidad del flujo circulante por el río exclusivamente para su funcionamiento.

2. De especial relevancia para la seguridad de los pescadores, así como para minimizar las afecciones al comportamiento de la fauna asociada al río, es la aplicación exhaustiva de tasas de cambio a la hora de realizar los desembalses o del inicio y finalización de la fase de turbinado.

3. Uno de los objetivos del Plan Forestal de Castilla y León es la conservación de los recursos genéticos de las especies forestales. A tal efecto, se promueve la utilización de especies adaptadas a la estación forestal, sin comprometer la riqueza genética de las especies y poblaciones. En las actuaciones de restauración de ribera que se lleven a cabo se recomienda la utilización de especies arbóreas o arbustivas autóctonas, características de los hábitats de ribera y presentes en los ríos de la Demarcación Hidrológica Cantábrica.

4. Las distintas Administraciones que gestionan el territorio, en función de su ámbito competencial, tienen una importante responsabilidad en la conservación del patrimonio natural presente, debiendo coordinarse para lograr este objetivo principal. Así, por un lado, en la zona de ribera, los organismos responsables de cuenca que llevan a cabo medidas para asegurar la conservación de los recursos genéticos de las especies presentes en estas zonas, procurando que los materiales forestales de reproducción (en adelante MFR) que se empleen en las restauraciones no afecten de manera negativa su conservación. Por otro lado, el órgano de control de la Comunidad Autónoma es competente de asegurar la trazabilidad y calidad genética del material vegetal que se implante. La coordinación de ambas Administraciones es esencial para conseguir el objetivo buscado por ambas. Para toda actuación realizada en la zona de ribera han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

   a) Su posible afección sobre masas forestales incluidas en el *Catálogo de Materiales Base para la producción de MFR de Castilla y León*, en especial las fuentes semilleras, por si fueran necesarias medidas protectoras a aplicar.

   b) La procedencia y calidad genética y fenotípica del MFR utilizado en todas las plantaciones que se lleven a cabo en el ámbito geográfico del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental ha de ser, en general, la idónea desde un punto de vista ecológico, debiendo estar garantizadas y documentadas, en particular cuando la normativa forestal así lo establezca (especies *incluidas en los Anexos I y XII del RD 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, y en el Anexo I del Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la*

720

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

comercialización de los materiales de forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León).

En este sentido, y de acuerdo a la normativa vigente de MFR, en el caso de utilizar especies reguladas será necesario emplear MFR de las categorías identificado, seleccionado, cualificado o controlado, las cuales deberán estar perfectamente documentadas con el preceptivo documento del proveedor y etiqueta identificativa, emitidos por un proveedor, vivero en este caso, autorizado por el órgano de control de la Comunidad Autónoma.

En el caso de especies "no reguladas" se evitará, en lo posible, grandes movimientos de dichas especies entre cuencas hidrográficas, ni se empleará material de procedencias poco recomendables.

c) El material vegetal a utilizar no debe comprometer la riqueza y diversidad genética de las poblaciones autóctonas presentes, por lo que ha de analizarse, por el técnico redactor del proyecto, las procedencias más apropiadas para cada una de las especies según el grado de variabilidad existente y la dispersión por cuenca o subcuenca, evitando utilizar material muy distante al de la zona a utilizar o excesivamente emparentado.

d) Se tendrá especial cuidado en que las actuaciones de restauración de riberas no pongan en riesgo, por contaminación genética debida a interpolinización o hibridación con masas cercanas, la calidad fenotípica y genotípica de las poblaciones preexistentes, especialmente las de los materiales de base declarados.

5. Conscientes de la dificultad de aplicar las normas generales sobre comercialización de MFR en las especies de ribera, se ha elaborado el "PROTOCOLO TÉCNICO PARA LA GESTIÓN DE MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN DE ESPECIES EMPLEADAS EN RESTAURACIONES DE RIBERAS". Dicho protocolo ha sido concebido como una guía que sirva como herramienta para la gestión de los MFR utilizados en las revegetaciones de riberas. Está promovido por el COMITÉ NACIONAL DE MEJORA Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES con la participación de un gran número de Comunidades Autónomas (entre ellas Castilla y León), así como por diferentes organismos implicados (Área de ingeniería ambiental del CETA-CEDEX (Ministerio de Fomento- Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino); Comisión Nacional del Chopo; Subdirección General de gestión integrada del dominio público hidráulico - Dirección General del Agua (MARM)).

721

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

El protocolo establece pautas para la utilización del MFR según diferentes casos de autorización:

- Modelo general: establecido por el Real Decreto 289/2003.

- Caso particular para especies de ribera autóctonas: regulado al amparo del artículo 5.4a del Real Decreto 289/2003 para la producción y comercialización de partes de plantas de especies de ribera autóctonas con fines no productivos.

Se considera prioritario que las actuaciones que desarrolle la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, y que estén directamente relacionadas con la revegetación de riberas, tengan en cuenta dicho Protocolo Técnico. En el mismo se establece la normativa básica asociada a la gestión de los MFR, de obligado cumplimiento, así como una serie de recomendaciones técnicas y principios generales que deben tenerse en cuenta en la gestión de los MFR para su adecuación a las zonas de actuación y para la promoción de la conservación de los recursos genéticos de las especies forestales.

5. CONCLUSIONES

A tenor de lo expuesto en los párrafos precedentes, se dispone la remisión de este informe al organismo solicitante para su toma en consideración, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

En particular se hace constar de forma expresa que una vez analizadas y valoradas las posibles afecciones del plan y su puesta en marcha sobre la red Natura 2000 en Castilla y León, se considera realizada la evaluación requerida por el Art. 45.4 de la *Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad*, y el artículo 2 del *Decreto 6/2011, de 10 de febrero*, concluyéndose que el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, en los términos en que está planteada, no causará perjuicio a la integridad de los lugares Natura 2000:

LIC "Bosques del Valle de Mena"

LIC y ZEPA "Monte Santiago"

Estas conclusiones, constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

No obstante, este Servicio entiende necesaria una revisión de la determinación de caudales mínimos según las indicaciones expuestas en este informe de cara a garantizar la

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

conservación de los hábitat y especies ligadas al medio acuático en los cursos de agua de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en Castilla y León. Para coadyuvar a ello se insiste en la total disposición de este Servicio a establecer los cauces de diálogo adecuados que permitan un análisis conjunto de las cuestiones más relevantes destacadas en este informe, así como a contrastar las metodologías utilizadas y los resultados obtenidos para definir los caudales ecológicos que permitan alcanzar los objetivos a que la normativa vigente nos obliga.

El presente informe se emite con independencia de los que fuera necesario evacuar en la tramitación de los diferentes proyectos derivados del Plan Hidrológico ahora evaluado, y sobre los cuales ahora nada se prejuzga.

Valladolid, 23 de noviembre de 2011
EL JEFE DEL SERVICIO
DE ESPACIOS NATURALES

Fdo.: Fco. Javier Ezquerra Boticario

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

Ref.ª EAE/BU/722/11
Expte. LIR/rp

ANEXO I

Estudios disponibles en la Dirección General del Medio Natural

Estudios de análisis de caudales mínimos

NOMBRE	PROV	RÍO	TRAMO	FECHA
Estudio para la determinación de caudales de mantenimiento en varias cuencas de la provincia de Burgos	BU	Cadagua Nela Rudrón Pedroso Esgueva Riaza	Todas	2000
Estudio para la determinación de caudales mínimos en varias cuencas de la provincia de León LE 227/01	LE	Metodología		2002
Estudio para la determinación de los cauces mínimos en distintos ríos de la provincia de Léon LE227/01	LE	Grande Yuso Sella Cares Torío Curueño	Todos	2002
Estudio para la determinación de caudales mínimos en varias cuencas de la provincia de León SC 112/99	LE	Metodología		2001
Estudio para la determinación de caudales mínimos en varias cuencas de la provincia de León	LE	Resumen		2001
Fijación de regímenes de caudales ecológicos mínimos en los principales ríos de Castilla y León.	SSCC	Metodología		1992

Estudios hidrobiológicos

NOMBRE	PROV	RÍO	TRAMO	FECHA
E.H. de la cuenca del río Cadagua	BU	Cadagua	Todos	2006
E.H. de la cuenca del río Cares en la provincia de León	LE	Cares	Todos	2003
E.H. de la cuenca del río Sella en la provincia de León	LE	Sella	Todos	2003
E.H. delas cuencas de los ríos Cares y Sella en la provincia de León (Regulación de la pesca deportiva)	LE	Cares Sella	Todos	2003
E.H. de la cuenca del río Tuerto en la provincia de León	LE	Tuerto	Todos	2001
E.H. de la cuenca del río Eria en la provincia de León	LE	Eria	Todos	2003

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 933

Gobierno de Navarra

Departamento de Fomento y Vivienda
Dirección General de Vivienda y Ordenación del Territorio

CORREOS PAMPLONA - IRUÑA O P 15 DIC. 2011 España
Franqueo Pagado en Oficina

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
REGISTRO DE ENTRADA OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 16/12/2011 10:04:06
E00120110001258

Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Cantábrico Oriental (BOE 4/5/2011).

Informe propuesta de la Dirección General de Vivienda y Ordenación del Territorio.

En el BOE de 4/5/2011 se publicó una Resolución por la que se somete a consulta pública por el plazo de seis meses la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Cantábrico Oriental. Dicha Propuesta fue puesta en formato digital a disposición de la Directora General de Vivienda y Ordenación del Territorio, al objeto de que se realicen las aportaciones y sugerencias que se estimen oportunas.

Visto el citado documento y, en particular, los Artículos 42, "Protección contra inundaciones", y 44, "Definición de Corredor Fluvial", de la Normativa del Plan Hidrológico propuesto, se ha constatado la existencia de diversas divergencias entre el contenido y previsiones de los citados artículos y los conceptos, criterios y normas contenidos en los Planes de Ordenación Territorial recientemente aprobados por el Gobierno de Navarra, -y, en particular, en el Plan de Ordenación Territorial de la "Navarra Atlántica" (POT-2)-, respecto a los "Cauces y riberas", "Resto de la Zona fluvial" y "Zonas inundables", cuyo régimen de uso y protección vienen desarrollados en los Anexos PN3, PN4 y PN5 de dichos POT. El POT-2 en concreto fue aprobado por Decreto Foral 44/2011, de 16 de mayo, quedando inserta su normativa como Anexo al citado Decreto Foral y publicándose ambos en el BON nº 145, de 21 de julio de 2011, con los pertinentes enlaces con, entre otros, los Anexos citados.

En consecuencia, se formulan ante esa Confederación Hidrográfica del Cantábrico las siguientes observaciones adjuntándose a las mismas los antedichos Anexos.

En primer lugar hay que señalar que la ordenación de los usos en zonas inundables es una tarea primordial para la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a fin de prevenir los riesgos de las inundaciones, garantizar al máximo la seguridad de las personas y los bienes, así como de minimizar en lo posible las consecuencias negativas para el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, asociadas a este tipo de riesgos naturales.

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el **Texto Refundido de la Ley de Aguas,** establece en su artículo 11 que las Comunidades Autónomas podrán establecer normas complementarias a la regulación de usos de las zonas inundables que en su caso haya establecido el Estado en orden a garantizar la seguridad de las personas y los bienes. **725**

El vigente **Reglamento del Dominio Público Hidráulico, dentro de la zona inundable**, constituida por el cauce de los ríos y arroyos y por sus llanuras

de inundación, **distingue el dominio público hidráulico, la zona de flujo preferente** (definida a partir de la avenida de periodo de retorno de 100 años) **y la zona inundable** por episodios extraordinarios (fijada por la avenida de 500 años):

- La protección del **dominio público hidráulico y de la zona de flujo preferente depende del Organismo de cuenca**, a cuyo efecto debe autorizar previamente cualquier actividad en dicha zona, con independencia de cualquier otra autorización que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas.
- En la **zona inundable el Gobierno y las Comunidades Autónomas** podrán establecer las limitaciones que se estimen necesarias para garantizar la seguridad de las personas y de los bienes.

Partiendo de estas premisas y conforme a la potestad a la que alude el artículo 11 del **Real Decreto Legislativo 1/2001,** el GN ha desarrollado en el **ANEXO PN5** de los POT los **Criterios relativos a la Zonificación de Áreas Inundables y usos admisibles en las mismas,** desplegando de manera pormenorizada en los **ANEXOS 3 y 4**, como luego se indicará, el régimen de uso y protección para zonas específicas del espacio fluvial

En cualquier caso, los criterios sobre zonificación, estudios y usos del suelo en zonas inundables que se establecen en dicho Anexo PN5, deberán ser compatibles con el contenido del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, por el que se transpone la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

Expresamos a continuación de manera sintética el contenido del ANEXO PN5 de los POT en lo que a la "Zonificación del espacio fluvial" se refiere, haciendo alusión a los Anexos en los que se recoge el correspondiente régimen de uso y protección y, en su caso, a determinados aspectos del mismo.

ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO FLUVIAL ESTABLECIDA POR LOS PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (POT).

El espacio fluvial viene integrado **según el POT** por las siguientes zonas:

- **Zona Fluvial, y dentro de ella el Sistema de Cauces y Riberas.** En el "ANEXO PN3: Áreas de especial protección" se establece el correspondiente régimen de uso y protección.
- **Zona de Territorio Fluvial Preferente. (*)**
- **Zonas Inundables.** En el "ANEXO PN4: Suelo de protección por riesgos naturales" se establece el correspondiente régimen de uso y protección.

726

(*) NOTA: En el documento original se incurre en un error material al incluir respecto a la **Zona de Territorio Fluvial Preferente** la siguiente referencia:

- Se incluye en la subcategoría "Prevención de Riesgos Naturales", sub-subcategoría "SNUPrtR: ZI - Zonas Inundables".
- Régimen de uso y protección regulado en el anexo: ANEXO PN4: Suelo de protección por riesgos naturales.

Como puede apreciarse tal referencia corresponde a las **Zonas Inundables,** siendo en el **punto 1.2.2 del Anexo PN5** en el que se establece el régimen de usos y protección correspondiente a la **Zona de Territorio Fluvial Preferente,** determinándose en primer lugar que "en la zona de territorio fluvial preferente **no se puede admitir ninguna nueva instalación o edificación** ni ningún uso o actividad que suponga un obstáculo o alteración del régimen de corrientes o que conlleve un alto nivel de riesgo de producción de daños", señalándose a continuación determinadas excepciones y los usos compatibles con estas condiciones para toda clase de suelos.

ZONA FLUVIAL.

Se considera como **Zona Fluvial aquella que incluye el cauce, el corredor ribereño y**, de manera parcial, y en algún caso total, **la llanura de inundación**, y se delimita atendiendo a estudios geomorfológicos, históricos y ambientales, teniendo en cuenta también la mancha de inundación de diez años de periodo de retorno basada en modelos hidráulicos, debiéndose ajustar el criterio hidráulico con los otros criterios referidos.

En el "ANEXO PN3: Áreas de especial protección" se establece el correspondiente régimen de uso y protección.

En dicho Anexo se señala que **dentro de esta Zona Fluvial** se distingue el **Sistema de Cauce y Riberas**, que es la zona comprendida entre las dos riberas, entendidas éstas como las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, según definición del Reglamento de Dominio Público. El POT delimita esta zona con una banda de 5m situados por encima del nivel de aguas bajas, que se amplía a partir de los siguientes criterios:

- La vegetación de ribera natural existente, esté incluida en espacios naturales protegidos o no.
- Las zonas de vegetación potencial de ribera de los espacios lindantes con los cauces, que estén calificados como LIC, ZEC u otros espacios protegidos por su valor ambiental.

727

- En el caso de existir diques, próximos al cauce (entre 0 y 20 m), se consideran incluidas las superficies "no protegidas de la inundación" por el dique.
- Se deberá conseguir la continuidad del Sistema de Cauces y Riberas entre diferentes municipios.

Estos criterios no eximen en ningún caso del cumplimiento de lo expuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

En aquellos casos en los que no exista un estudio de inundabilidad para delimitar la Zona Fluvial, como mínimo se delimitará la zona referida al Cauce y Riberas.

La autorización de las actividades se someterá a lo determinado en la vigente legislación en materia de aguas.

El régimen de uso y protección que se incluye en el Anexo, se formula **distinguiéndose** el régimen de uso y protección aplicable al "**Sistema de Cauces y Riberas"** del régimen de uso y protección aplicable al **"Resto de la Zona Fluvial**.

ZONA DE TERRITORIO FLUVIAL PREFERENTE.

Es aquella zona del espacio fluvial necesaria para proteger el régimen de corrientes en avenidas y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes, siendo una **aproximación a la zona de flujo preferente** definida en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

La zona de territorio fluvial preferente incluye **la vía de intenso desagüe** así como las zonas donde se pueden producir graves daños sobre las personas y los bienes, **delimitadas a partir de la avenida de 100 años de periodo de retorno**, quedando definido su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas.

En la zona de territorio fluvial preferente se determina como norma general que **no se puede admitir ninguna nueva instalación o edificación** ni ningún uso o actividad que suponga un obstáculo o alteración del régimen de corrientes o que conlleve un alto nivel de riesgo de producción de daños.

ZONA INUNDABLE.

Se considera zona inundable **la delimitada por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo de retorno sea de 500 años.**

728

De acuerdo con los periodos de retorno y los calados se pueden distinguir las **siguientes zonas de riesgo:**

- Zona de riesgo bajo: zonas en donde cabe esperar inundaciones con un periodo de retorno superior a 50 años y un calado reducido (menor de 0'4 m).
- Zona de riesgo medio: zona en donde cabe esperar inundaciones con un periodo de retorno inferior a 50 años y un calado reducido (menor de 0'4 m), o con un periodo de retorno superior a 100 años y un calado intermedio (entre 0'4 y 1 m).
- Zona de riesgo alto: zonas en donde cabe esperar inundaciones con un periodo de retorno inferior a 100 años y un calado intermedio (entre 0'4 y 1 m) o un calado alto (superior a 1 m), o con un periodo de retorno de entre 100 y 500 años y un calado alto (superior a 1 m). En cualquier caso, sea cual sea el calado esperado, se considerará también zona de riesgo alto cuando la velocidad del agua sea igual o superior a 1m/s.

El riesgo de inundación de cualquier zona de la Comunidad Foral de Navarra se determinará a partir de los estudios del Departamento competente en la materia o de los **estudios de inundabilidad** realizados en cada caso.

El POT establece para las **zonas inundables en suelos no urbanizables** los usos y actividades considerados como permitidos, autorizables o prohibidos en función del grado de riesgo que presenten las mismas. Dicha regulación viene expresada en el **"ANEXO PN4 - Suelo de protección por riesgos naturales"**.

Asimismo y a título orientativo, y con carácter general, se recogen los usos y actividades considerados como compatibles y prohibidos **en suelos urbanos y urbanizables sometidos a inundación**, en función, asimismo, del grado de riesgo que presenten los mismos (Ver **"ANEXO PN5 Criterios relativos a la Zonificación de Áreas Inundables y usos admisibles en las mismas"**).

Las zonas de riesgo y los criterios de cálculo han sido probados sobre llanuras de inundación de ríos de la cuenca del Ebro y comparados con la zona de flujo preferente mediante un modelo bidimensional. Como es evidente, la zona de riesgo alto, al introducir criterios relativos a la avenida de 500 años de periodo de retorno, es ligeramente superior a la zona de flujo preferente, y por tanto más restrictiva, pero los resultados son coherentes y satisfactorios.

COMENTARIO Y CONCLUSIÓN.

Algunos aspectos de los indicados precedentemente armonizan con los contenidos normativos del Plan Hidrológico propuesto, como son los relativos al campo de competencias exclusivas de la Confederación que fundamentalmente abarca la protección del **dominio público hidráulico y de la zona de flujo preferente**, así como todo lo concerniente a la **zona de policía,** y que, en general, tienen su reflejo en el artículo 42 de la Normativa propuesta en el Plan Hidrológico.

729

Pero existen algunos otros aspectos que, a nuestro juicio, no se compadecen con la regulación contenida en el POT-2, aprobada por el Gobierno de Navarra y ya publicada, como por ejemplo el recogido en el punto 4 del artículo 42, referido a las "solicitudes de autorización en la **zona de policía inundable**, fuera de la zona de flujo preferente", en la que "como **criterio general**, las nuevas edificaciones deberán realizarse a una cota no alcanzable por la avenida de **periodo de retorno de 500 años",** siendo así que el ámbito definido por la avenida de periodo de retorno de 500 años puede ser en muchos casos más amplio que la zona de flujo preferente y que la zona de policía.

Esta falta de concordancia quizás pueda darse también en el caso de los **Corredores Fluviales** en los cauces públicos a los que alude el artículo 44 - con ámbitos superiores al definido por los terrenos incluidos en las zonas de flujo preferente-, y, en particular, en el caso del **Ámbito de Protección Específica del Medio Fluvial,** que viene a constituir el espacio colindante con los Corredores Fluviales completando la protección ofrecida por ellos, y que será definido por el Organismo de cuenca incluyendo las figuras de protección natural existentes y contornos de protección definidos por una distancia fija a las orillas en función de las características del tramo de cauce.

Finalmente, cuando de los Protocolos Generales relativos a la Protección del Medio Fluvial y la Prevención del Riesgo de Inundaciones a suscribir con los Ayuntamientos se trata, previstos en el mismo artículo 44, la posibilidad de invadir competencias propias de los órganos competentes en ordenación del territorio y competencias municipales puede resultar más patente, si nos atenemos al contenido que en dichos Protocolos se pretende "promover" conforme al contenido de los dos últimos párrafos del punto 4 del citado artículo 44.

Entendemos, que la normativa hidráulica en lo que se refiere a la zona de policía y, en su caso, a la zona de flujo preferente, y la normativa urbanística respecto a zonas inundables establecida en los POT, deben ser coherentes y deberán ser consideradas conjuntamente, respetando las competencias de ambas administraciones, en aquellas Comunidades Autónomas que dispongan de dichas normativas urbanísticas sobre zonas inundables.

En consecuencia, se solicita de ese Organismo de Cuenca que a la vista de lo que precede revise los contenidos de la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Cantábrico Oriental y, en particular, el de los Artículos 42, "Protección contra inundaciones", y 44, "Definición de Corredor Fluvial", de la Normativa del mismo, en orden a

730

concordar los mismos con el contenido del Plan de Ordenación Territorial de la "Navarra Atlántica" (POT-2), armonizando las competencias de esa Confederación y las de los órganos competentes en materia de ordenación del territorio y/o urbanismo.

Pamplona 18 de octubre de 2011
LA DIRECTORA GENERAL DE
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Marie Gómez Sánchez

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO.

731

Gobierno de Navarra

Nasursa

NT

PN3

POT

PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE NAVARRA

POT 2 NAVARRA ATLÁNTICA



ANEXOS TEMÁTICOS
Patrimonio Natural
PN3 Áreas de Especial Protección

ANEXO PN3 - ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

ÍNDICE

1.- SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN. EN RAZÓN DEL MDT ADOPTADO EN EL POT: ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 3

2.- FICHAS DE ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 8

SUBCATEGORÍA: SNU DE PROTECCIÓN POR EL MDT. SUELO DE VALOR AMBIENTAL. 9

SNUPrtA: VEI - Vegetación de Especial Interés 9

SNUPrtA: CT - Conectividad Territorial 12

SNUPrtA: LEIG - Lugares de Especial Interés Geológico 14

SNUPrtA: H – Humedales 15

SNUPrtA: ZF - Zona Fluvial. Sistema de Cauces y Riberas 17

SUBCATEGORÍA: SNU DE PROTECCIÓN POR EL MDT. SUELO DE VALOR PAISAJÍSTICO 21

SNUPrtP: PS - Paisajes Singulares 21

SNUPrtP: PN - Paisajes Naturales 22

SUBCATEGORÍA: SNU DE PROTECCIÓN POR EL MDT. SUELO DE VALOR CULTURAL. 23

SNUPrtCu: CH - Caminos Históricos 23

MAPA. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 25

ANEXO PN3 - ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

1.- SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN. EN RAZÓN DEL MDT ADOPTADO EN EL POT: ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

Una de las circunstancias que deben concurrir para que un suelo pueda ser categorizado suelo no urbanizable de protección, según el artículo 94.1.b) y 2.a) de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), es que un instrumento de ordenación del Territorio, en este caso el POT, haya considerado apropiado excluirlo del proceso urbanizador en razón, entre otros, al **Modelo de Desarrollo Territorial (MDT)** adoptado en su ámbito.

Partiendo del análisis del medio natural, se ha efectuado una selección a escala POT de aquellos elementos del medio que cuentan con valores que los hacen merecedores de ser categorizados como suelos de protección. Teniendo en cuenta el análisis previo, expuesto en la Memoria Justificativa, **los suelos recogidos en esta categoría se agrupan en tres de las ocho subcategorías contempladas en el artículo 94.3 de la LFOTU:**

- *Suelo de valor ambiental.*
- Suelo de valor paisajístico.
- Suelo de valor cultural.

Dentro de cada subcategoría se han definido distintas sub-subcategorías atendiendo a los valores concretos que se protegen.

La ***protección de estos suelos resulta del Modelo de Desarrollo Territorial*** adoptado en cada POT, modelo que en cada ámbito responde a objetivos específicos, razón por la cual las sub-subcategorías identificadas en cada uno de ellos no resultan necesariamente homogéneas.

Las áreas de especial protección identificadas por el POT, se recogen con carácter orientativo a escala 1/100000 en el **mapa "3.1. Patrimonio Natural. Áreas de Especial Protección"**.

La concreción y exacta delimitación de estas Áreas queda remitida a los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal y, en su caso, a los instrumentos de ordenación territorial con competencia para ello, la cual se llevará a efecto conforme a los criterios y principios recogidos en este Anexo.

Los suelos no urbanizables de protección en razón del Modelo de Desarrollo Territorial (MDT) definidos (Art. 20 Normativa), en el ámbito del POT 2 Navarra Atlántica son:

- Zonas de conectividad entre Urbasa-Andía y Aralar, Monte Trinidad de Erga y Dos Hermanas en Irurtzun, Peñas de Aia y el LIC 2120016 Aiako Harria localizado en Guipúzcoa, Aritzalku entre Etxarri-Aranatz y Bakaiku.
- Zonas en el río Arakil entre los municipios de Lakuntza-Arruazu, Arruazu-Uharte-Arakil y Etxarren-Irurtzun.

✓ Lugares de Especial Interés Geológico. (SNUPrtA: LEIG)

Se ha señalado un lugar de especial interés geológico (LEIG) en el ámbito de la Navarra Atlántica, caracterizado por ser una zona discreta en superficie, con valores singulares a nivel supramunicipal, prioritarios en su selección por requerir de un mayor grado de conservación por su fragilidad.

- PIG 43 - Valle seco del río Ertzilla.

Existen otros puntos o lugares de interés no señalados por estar incluidos en LIC u otros espacios ya protegidos.

✓ Humedales. (SNUPrtA: H)

Son humedales todas aquellas zonas que de forma permanente o temporal mantienen terrenos fluyentes o acogen una lámina de agua embalsada, incluyendo fuentes, manantíos, turberas, juncales, carrizales, rezumaderos, tobas calizas, manantiales salinos y los que dan o han dado lugar a salinas. Son ecosistemas frágiles y valiosos.

Se han definido como suelo de protección aquellos que presenten especial interés a nivel supramunicipal por su calidad, extensión o singularidad, con el fin de poner en valor y evitar el deterioro de la calidad y la cantidad de las aguas superficiales y de los ecosistemas asociados a estos medios. Se incluye en la delimitación además de la zona de agua libre o zona húmeda propiamente dicha, una banda definida por la presencia de vegetación freatofítica o higroturbosa. Se incluyen:

- Parajes de Argintzu, Atxuri, Azaldegi, Belate, Lixketa (a, b, c) Maulitx (a, b) Mendaur (a, b), Mendibil y Olabidea.

✓ Zona Fluvial. Sistema de Cauces y Riberas. (SNUPrtA: ZF)

La "Zona Fluvial. Sistema de Cauces y Riberas", constituye una red extensa en el territorio, que con escasa ocupación superficial cumple funciones valiosas y esenciales entre las que destacan el transporte del agua, la capacidad de autodepuración de la misma, el mantenimiento de una biodiversidad propia y la función de conector natural en todo el territorio.

736

amplia panorámica y fragilidad visual elevada, como son los cortados y de gran singularidad escénica como son las foces, gargantas, cañones y desfiladeros fluviales. Se incluyen en este ámbito:

- Los cortados de Urbasa-Andia y Roquedos de Aralar.

- SUBCATEGORÍA: SNU DE PROTECCIÓN POR EL MDT. SUELO DE VALOR CULTURAL.

✓ Caminos Históricos. (SNUPrtCu: CH)

Por su valor cultural y su especial significado testimonial, potencial y funcional, se propone la protección de aquellos caminos históricos todavía no protegidos por legislación sectorial especialmente relevantes en el territorio. Se incluyen entre otros:

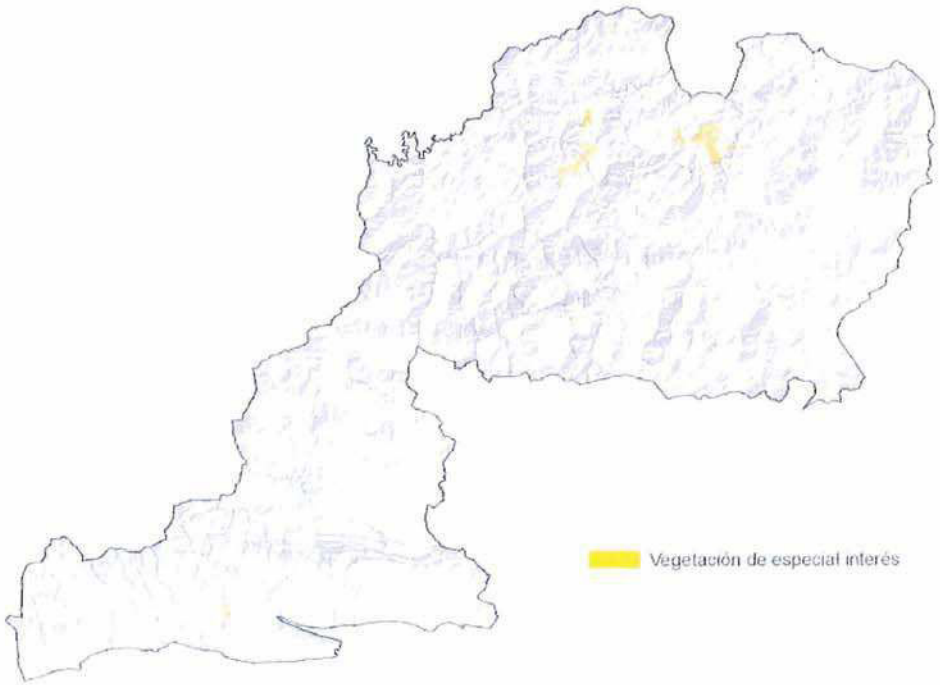
- Posibles variantes del Camino de Santiago.
- Antiguas vías férreas en desuso que pudieran transformarse en vías verdes como la vía del ferrocarril del Bidasoa.
- Viejos caminos históricos entre municipios y comarcas.
- Vías romanas.

SUBCATEGORÍA: SNU DE PROTECCIÓN POR EL MDT. SUELO DE VALOR AMBIENTAL.

SNUPrtA: VEI - Vegetación de Especial Interés

S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.94.1.b LFOTU)

Categoría:	Subcategoría:	Sub-subcategoría:	Código:
SNU de Protección	Por valor ambiental	Vegetación de Especial Interés	SNUPrtA: VEI



SUPERFICIE

11'8 km².

CRITERIO PARA LA DELIMITACIÓN

La delimitación deberá ajustarse a las formaciones de vegetación que se detallan a continuación, pudiendo incluirse en el área delimitada aquellas formaciones vegetales naturales como matorrales, pastos,... para conformar una superficie de fácil gestión, con límites claros como caminos, parcelas,...

- Formación actual de carpe en la zona de San Juan Xar y parte de su área potencial.
- Robledales de Etxarri.
- Tejos de Atxala.
- Robledales pubescentes localizados bajo las sierras de Urbasa –Andia y Aralar. En este ámbito existen algunos rodales adehesados con presencia de ejemplares vetustos y muy gruesos de gran calidad estética y ecológica.

MOTIVOS DE PROTECCIÓN

Se trata de algunas formaciones vegetales valiosas y características de Navarra que no han quedado incluidas en los espacios ya protegidos. Estas formaciones contribuyen a mejorar la coherencia global y la sostenibilidad del Modelo de Desarrollo Territorial.

738

S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.94.1.b LFOTU)

Categoría:	Subcategoría:	Sub-subcategoría:	Código:
SNU de Protección	Por valor ambiental	Vegetación de Especial Interés	SNUPrtA: VEI

QUE IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA

Agropecuario		
Concentración parcelaria	Pr	
Roturación con cambio de uso y pérdida de suelo forestal.	Pr	
Transformación en regadío	Pr	
Forestal		
Obras de corrección de la erosión	A	En zonas localizadas previamente evaluadas con esta problemática
Repoblación	A	Con fines de protección de la biodiversidad de los hábitats de interés ya existentes.

Otro tipo de actividades y usos no constructivos que impliquen movimiento de tierras, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos.

QUE NO IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA

Agropecuario		
Cultivos	Pr	
Pastoreo	A	*Cuando se haya realizado de forma habitual sobre las formaciones protegidas, o no suponga pérdida del valor a proteger y se adecue la carga ganadera.*
Forestal		
Aprovechamiento de leñas	A	
Otros aprovechamientos: hongos, plantas medicinales, frutos silvestres, etc. con fines comerciales.	A	

Otro tipo de actividades y usos no constructivos que no impliquen movimiento de tierras, no recogidos en esta tabla son en principio Autorizables.

MUNICIPIOS INCLUIDOS

Ergoiena, Arbizu, Lesaka, Etxarri-Aranatz, Arantza, Etxalar e Igantzi.



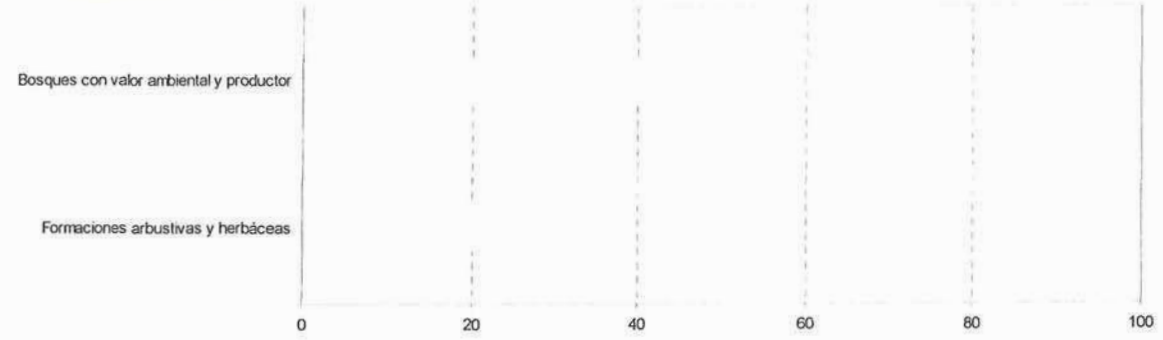
LEYENDA

Pe	Permitido	A	Autorizable	Pr	Prohibido

S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.94.1.b LFOTU)

Categoría:	Subcategoría:	Sub-subcategoría:	Código:
SNU de Protección	Por valor ambiental	Conectividad Territorial	SNUPrtA: CT

UNIDADES AMBIENTALES INCLUIDAS



Nota: porcentaje sobre suelo de protección.

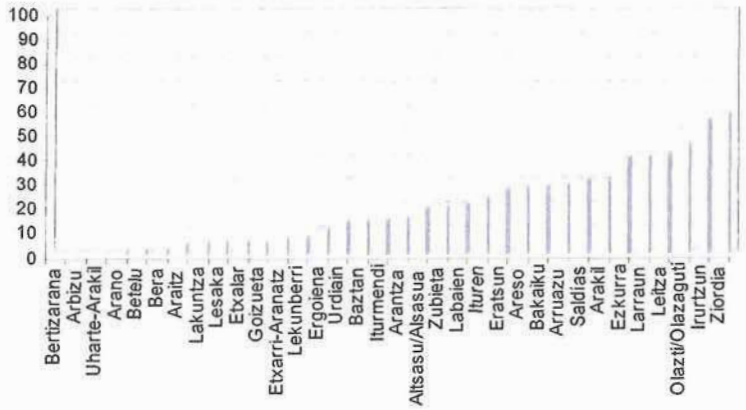
CRITERIOS GENERALES DE USO

Aquellas infraestructuras o actuaciones que pudieran afectar a estos suelos, deberán tener en especial consideración no actuar como barreras infranqueables para la fauna y flora y deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la pérdida de conexión entre los espacios.

Bajo esta sub-subcategoría de suelo subyacen otras sub-subcategorías en las que tienen cabida diversos usos conforme al régimen de protección que les fuere aplicable. Asimismo se considerarán autorizables todas aquellas acciones o infraestructuras que no supongan una pérdida de conexión territorial.

MUNICIPIOS INCLUIDOS

Bertizarana, Arbizu Uharte-Arakil, Arano, Betelu, Bera, Ergoiena, Lakuntza, Araitz, Etxalar, Goizueta, Etxarri-Aranatz, Lekunberri, Saldias, Baztan, Urdiain, Iturmendi, Lesaka, Arantza, Altsasu/Alsasua Zubieta, Labaien, Ituren, Eratsun, Areso, Bakaiku, Arruazu, Arakil, Ezkurra, Larraun, Leitza, Ziordia, Irurtzun y Olazti/Olazagutia.

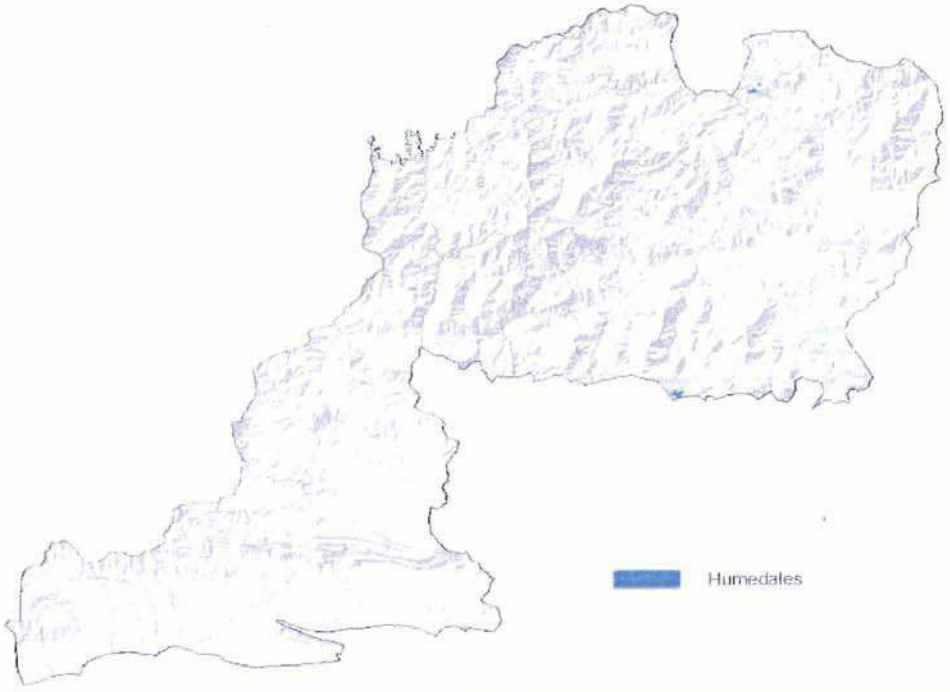


Nota: porcentaje de suelo ocupado sobre la superficie municipal.

SNUPrtA: H – Humedales

S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.94.1.b LFOTU)

Categoría:	Subcategoría:	Sub-subcategoría:	Código:
SNU de Protección	Por valor ambiental	Humedales	SNUPrtA: H



CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN

Se incluyen las turberas incluidas en la cartografía del Gobierno de Navarra: Argintzu, Atxuri, Azaldegi, Belate, Lixketa (a, b, c) Maulitx (a, b) Mendaur (a,b), Mendibil y Olabidea

En torno a los Humedales se define una banda que incluye la vegetación freatofítica e higroturbosa, asociada a estos, con el objetivo de garantizar las condiciones freáticas de las turberas.

MOTIVOS DE PROTECCIÓN

Los valores a proteger son el ecosistema singular y muy frágil de turbera, así como el registro geológico evolutivo de flora del lugar, sobre la vegetación que estuvo asentada en los alrededores de la turbera en los últimos miles de años.

CRITERIOS GENERALES DE USO

Serán usos compatibles con el mantenimiento de los valores a proteger todos aquellos que no alteren la dinámica natural ni el nivel freático de estos suelos. En la banda de protección serán autorizables los usos que no supongan movimientos de tierras y aquellos que vayan orientados a la puesta en valor y a la interpretación de los valores a proteger, siempre que se asegure la integridad del espacio.

NORMATIVA

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS [1]

[1] las instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

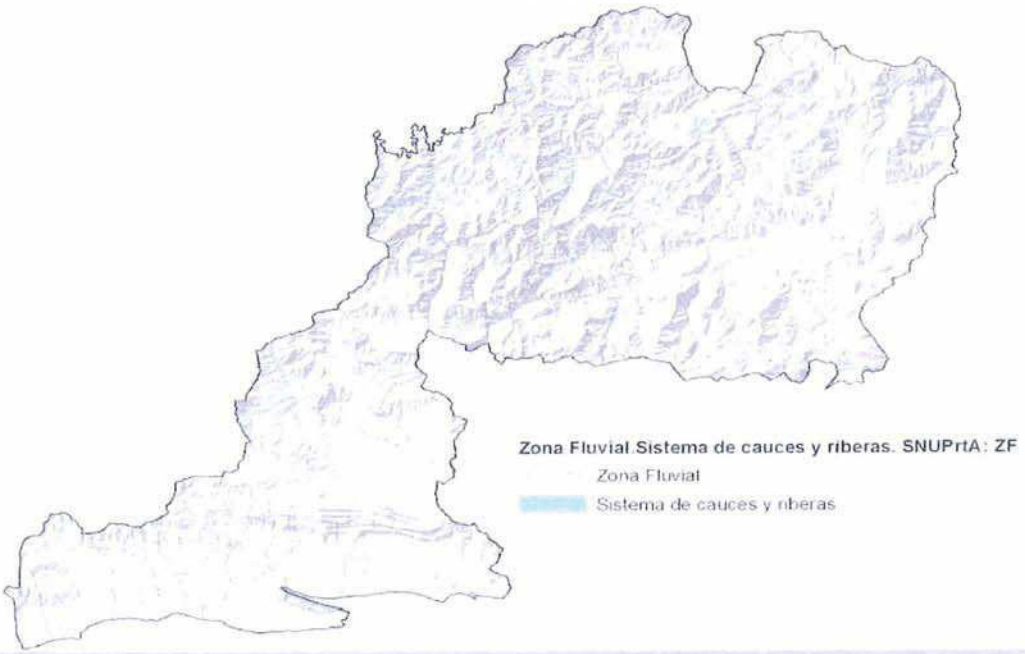
Cualquier construcción permanente o temporal	Pr

741

SNUPrtA: ZF - Zona Fluvial. Sistema de Cauces y Riberas

S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.94.1.b LFOTU)

Categoría:	Subcategoría:	Sub-subcategoría:	Código:
SNU de Protección	Por valor ambiental	Zona Fluvial. Sistema de Cauces y Riberas	SNUPrtA: ZF



CRITERIOS DE DELIMITACIÓN

Esta delimitación afecta a toda la red hidrográfica de Navarra según la cartografía a escala 1/25000 del Gobierno de Navarra incluyendo: ríos principales, afluentes principales, afluentes secundarios, afluentes terciarios y otras corrientes. Dentro de "otras corrientes" quedan recogidos barrancos y regatas de menor entidad, así como madres y meandros abandonados.

La **Zona Fluvial** incluye el cauce, el corredor ribereño y, de manera parcial, y en algún caso total, la llanura de inundación, y se delimita atendiendo a estudios geomorfológicos, históricos y ambientales, teniendo en cuenta también la mancha de inundación de 10 años de periodo de retorno basada en modelos hidráulicos, debiéndose ajustar el criterio hidráulico con los otros criterios referidos.

Dentro de esta Zona Fluvial se distingue el **Sistema de Cauce y Riberas**, que es **la zona comprendida entre las dos riberas**, entendidas éstas como las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, según definición del Reglamento de Dominio Público. El POT delimita esta zona con una banda de 5m situados por encima del nivel de aguas bajas, que se amplía a partir de los siguientes criterios:

- La vegetación de ribera natural existente, esté incluida en espacios naturales protegidos o no.
- Las zonas de vegetación potencial de ribera de los espacios lindantes con los cauces, que estén calificados como LIC, ZEC u otros espacios protegidos por su valor ambiental.
- En el caso de existir diques, próximos al cauce (entre 0 y 20 m), se consideran incluidas las superficies "no protegidas de la inundación" por el dique.
- Se deberá conseguir la continuidad del Sistema de Cauces y Riberas entre diferentes municipios.

Estos criterios no eximen en ningún caso del cumplimiento de lo expuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

En aquellos casos en los que no exista un estudio de inundabilidad para delimitar la Zona Fluvial, como mínimo se delimitara la zona de Sistema Cauce y Riberas.

S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.94.1.b LFOTU)

Categoría:	Subcategoría:	Sub-subcategoría:	Código:
SNU de Protección	**Por valor ambiental**	**Zona Fluvial. Sistema de Cauces y Riberas**	**SNUPrtA: ZF**

		vinculados al medio fluvial, y previstos en un instrumento de ordenación territorial o de planeamiento.
Infraestructuras	A	Cuando se justifique que deban necesariamente ocupar este suelo. Se adoptarán las medidas necesarias para que no constituyan un obstáculo al normal discurrir de las aguas, ni vulneren la conectividad.

Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos

ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS

QUE IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA

Agropecuario		
Transformación o mejora del regadío	Pr	
Concentración parcelaria	Pr	
Roturación con cambio de uso y pérdida de suelo forestal	Pr	
Hidrológico		
Dragado	A	
Limpieza de cauces y riberas	A	
Rectificación de cauces	A	Con justificación, siempre que sea para prevenir un riesgo para personas o bienes.
Extractivo		
Actividad extractiva (gravas, arenas ...)	Pr	

Otro tipo de actividades y usos no constructivos que impliquen movimiento de tierras, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos

APROVECHAMIENTOS QUE NO IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA

Agropecuario		
Cultivos madereros rápidos	Pr	
Pastoreo	A	Los vallados o cerramientos en ningún caso podrán suponer un impedimento al libre discurrir de las aguas ni contribuir a la creación de obstáculos en periodos de crecida.
Forestal		
Aprovechamiento maderero y de leñas	A	
Otros aprovechamientos: hongos, plantas medicinales, frutos silvestres, etc. con fines comerciales.	A	
Energético		
Aprovechamiento fuerza motriz: molinos, batanes, otros...	A	Si es sobre una estructura preexistente y sobre la que haya concesión.
Especiales		
Vertidos de aguas residuales tratadas o sin tratar	A	Requieren autorización y medidas específicas de la autoridad competente.

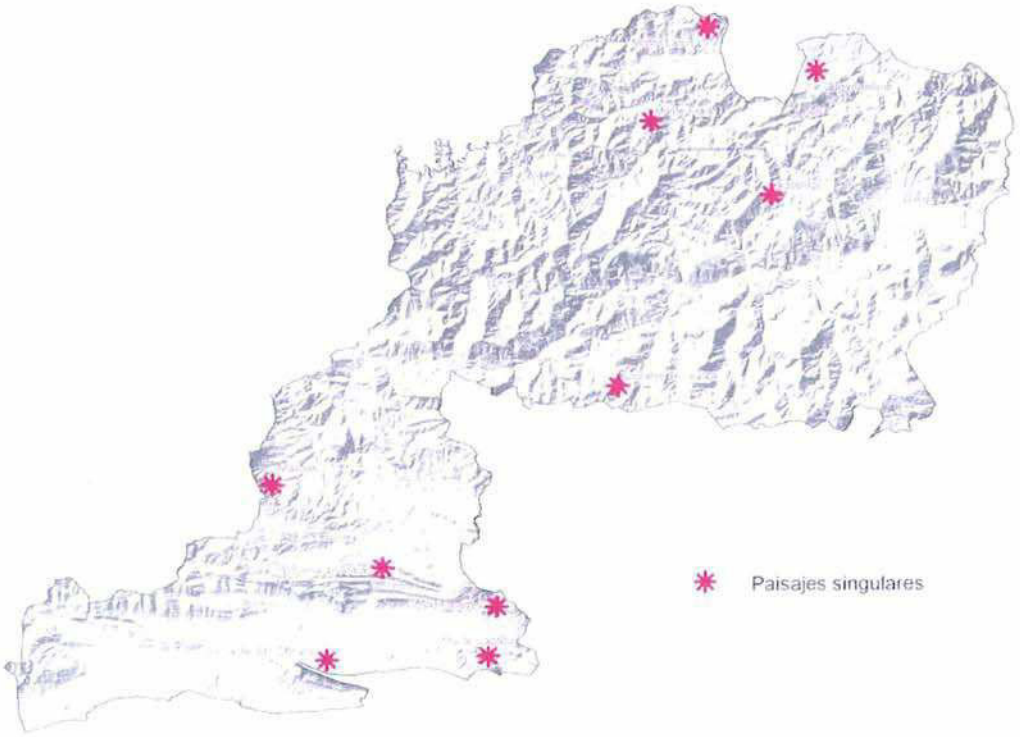
Otro tipo de actividades y usos no constructivos que no impliquen movimiento de tierras, no recogidos en esta tabla son en principio Autorizables

743

SUBCATEGORÍA: SNU DE PROTECCIÓN POR EL MDT. SUELO DE VALOR PAISAJÍSTICO.
SNUPrtP: PS - Paisajes Singulares

S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.94.1.b LFOTU)

Categoría:	Subcategoría:	Sub-subcategoría:	Código:
SNU de Protección	Por valor paisajístico	Paisajes Singulares	SNUPrtP: PS



CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN

Conjunto de espacios donde se aúnan valores paisajísticos como para ser catalogados como suelos de protección, hitos simbólicos o patrimoniales singulares: San Donato, Sierra de Aralar, Mailoak, Monte Larun, Monte Frain, Aizcolegui, Dos Hermanas, Monte Gaztelu, Txurregui, Embalse Laurza, Zugarramurdi

Su delimitación exacta requiere de un análisis de la cuenca visual y de su yuxtaposición con otros elementos del territorio.

MOTIVOS DE PROTECCIÓN

Se deberá proteger el entorno paisajístico que da entidad al elemento singular, evitando la instalación de elementos discordantes con la singularidad del paisaje o la eliminación de elementos definitorios del mismo que supongan merma de la identidad del espacio protegido.

CRITERIOS GENERALES DE USO

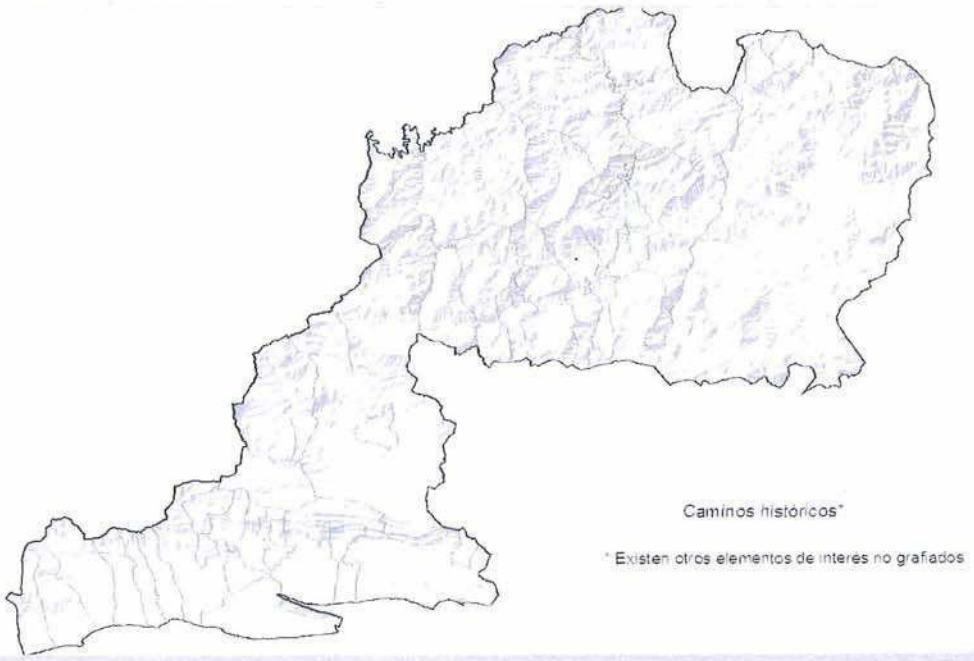
Los usos admitidos serán en principio los posibles y autorizables en las subcatalogación de suelo no urbanizable subyacentes a los entornos paisajísticos a proteger, debiéndose además condicionar las autorizaciones de estas actuaciones a la corrección de impactos paisajísticos que pudieran generar. En los proyectos se podrán exigir, en aquellos casos que así se estimen oportunas, simulaciones paisajísticas, pudiéndose condicionar la autorización a la aplicación de medidas específicas de corrección o integración paisajística.

744

SUBCATEGORÍA: SNU DE PROTECCIÓN POR EL MDT. SUELO DE VALOR CULTURAL.
SNUPrtCu: CH - Caminos Históricos

S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.94.1.b LFOTU)

Categoría	Subcategoría	Sub-subcategoría	Código
SNU de Protección	Por valor cultural	Caminos Históricos	SNUPrtC: CH



CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN

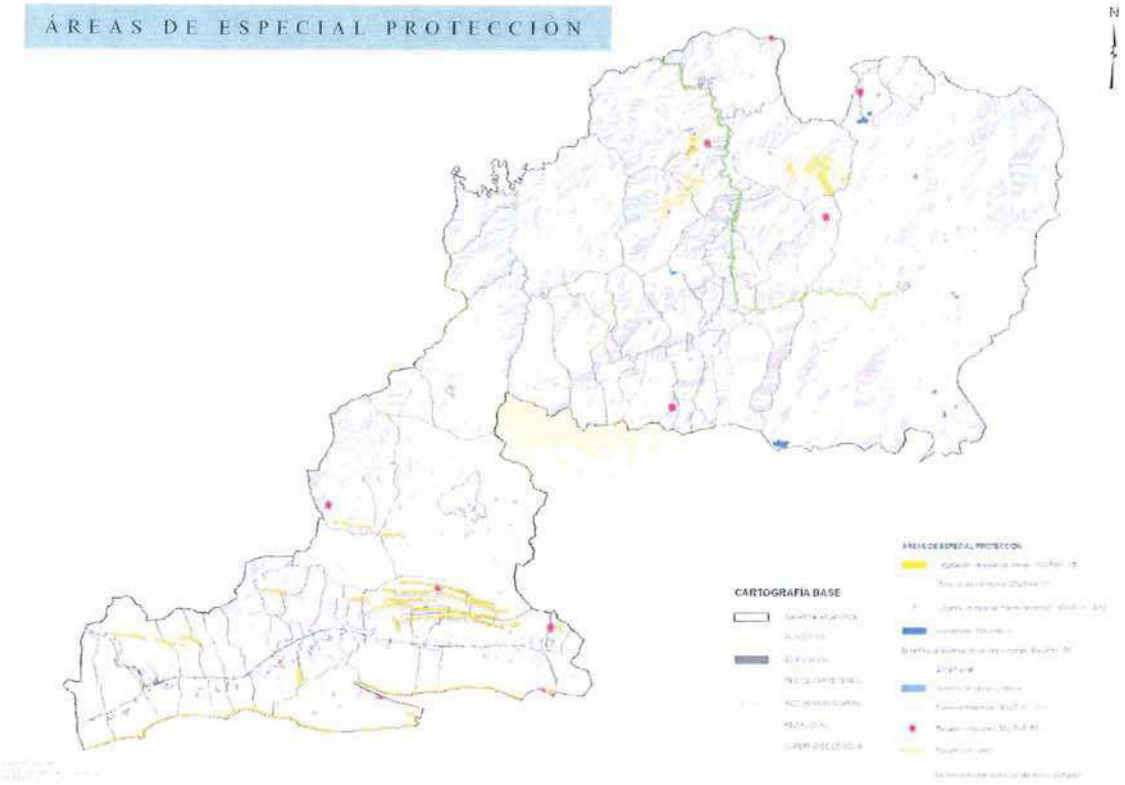
Espacios lineales no protegidos por legislación sectorial como son: otros posibles itinerarios y variantes del Camino de Santiago, antiguas vías férreas en desuso con un componente histórico, que pueden transformarse en vías verdes como la vía del ferrocarril del Bidasoa, y los caminos y vías históricos, muchos de ellos sin definir y que deben ser incluidos en los planes municipales en esta sub-subcategoría.
El criterio para delimitar la anchura de banda de protección en torno a estos caminos y vías especialmente relevantes, estará en relación con su cuenca visual, con las correcciones que requiera el tipo de entorno inmediato.

MOTIVOS DE PROTECCIÓN

Esta importante trama de caminos tiene un interés polivalente como enlace de una red de elementos culturales y espacios naturales asociados al propio itinerario en un enfoque integral de recursos asociados con valor turístico. Se debe preservar el propio trazado, el interés paisajístico del mismo y el valor de conectividad no motorizada entre núcleos urbanos, con los espacios protegidos, así como elementos de interés cultural, etnológico, religioso asociados.

CRITERIOS GENERALES DE USO

Los usos y actividades señalados como autorizables en la banda de protección definida en torno al camino, lo serán conforme al régimen de usos establecido para la sub-subcategoría del suelo subyacente a dicha banda, y siempre que no interfieran directamente con la finalidad de camino como recurso de turismo y ocio de primer orden.Se tendrá en cuenta la puesta en valor de los tramos de entrada y partida de los caminos históricos, en el entronque con los núcleos urbanos, a su paso por polígonos industriales, nuevas infraestructuras,... mejorando y restaurando estos parajes.
Los puentes o pasos que vayan a utilizarse desde estos caminos deben adecuarse al uso peatonal con mínimo riesgo para los usuarios.
En la banda de protección delimitada se definirá una zona de servidumbre cuya anchura mínima será de tres metros medidos desde el borde exterior de dichos caminos, salvo que una normativa sectorial especifica determine una anchura mínima superior. En dicha zona las actividades no constructivas que impliquen movimientos de tierras requerirán autorización, quedando prohibidas todas las actividades constructivas, salvo las infraestructuras, que requerirán autorización. Para los caminos que no tengan delimitada una zona de servidumbre, se establece una zona de servidumbre (artº. 112.2 LFOTU). Con



MAPA. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Gobierno de Navarra

Nasursa

NT

PN4

PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE NAVARRA

POT 2 NAVARRA ATLÁNTICA



ANEXOS TEMÁTICOS
Patrimonio Natural
PN4 Suelo de Protección por Riesgos Naturales

ANEXO PN4: SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES

INDICE

1.- SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES 3
2.- RIESGOS CON UN COMPONENTE TERRITORIAL IMPORTANTE 7
2.1.- RIESGO SÍSMICO 7
2.2.- RIESGO DE AVALANCHA 8
2.3.- RIESGO DE MOVIMIENTOS EN MASA 8
2.4.- RIESGO DE INCENDIO 9
2.5.- RIESGOS DE INUNDACIÓN 9
3.- FICHAS DE S.N.U. DE PROTECCIÓN DE RIESGOS NATURALES 10
SUBCATEGORÍA: SNU DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES. SUELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 11
SNUPrtR: ZI - Zonas Inundables 11

1.- SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES

En Navarra se dispone de determinada información sobre riesgos que resulta parcial, salvo en lo referente a riesgos de inundación de los grandes ríos navarros. En este campo concreto se ha realizado una muy importante labor en la determinación de las áreas inundables, con una fiabilidad y un rigor adecuado a lo más avanzado en las tecnologías actuales.

De forma genérica **los riesgos o catástrofes que tienen una incidencia territorial en la C.F. de Navarra se clasifican en tres grandes grupos:**

- Los **riesgos tecnológicos,** incluyéndose riesgos en fábricas con componentes peligrosos, rupturas de presas, etc.
- Los **riesgos de tipo climático**: olas de calor, olas de frío, nieblas, tormentas, nevadas, heladas, sequías,.... Existen ya métodos de predicción relativamente precisos y sistemas de alerta a la población eficaces.
- Los **riesgos con un componente territorial importante**: con un nivel de incidencia variable en función de las particularidades geológicas o geomorfológicas del territorio, la presencia de sistemas de drenaje de mayor o menor entidad y laderas más o menos estables. Se incluyen los Riesgos:

    - Sísmico, avalanchas, movimiento en masa, incendios, inundación.

Estos últimos riesgos con un componente territorial importante son de muy diversa índole y son los que debieran ser objeto de un "Estudio de Riesgos Naturales de la Comunidad Foral de Navarra", o de varios estudios según los riesgos, que permitan la identificación de zonas de riesgo. Hasta que esta identificación se lleve a cabo se deberán tener en consideración estos riesgos naturales en los planes municipales, especialmente en los entornos inmediatos de las áreas urbanizadas o urbanizables y de las infraestructuras.

Cuando se disponga de mapas de riesgos contrastados y de un "Estudio –o estudios- de Riesgos Naturales de la Comunidad Foral de Navarra", procedería la elaboración de un Plan " –o en su caso planes- de Protección ante Riesgos Naturales, o la actualización y ampliación del actual Plan Territorial de Protección Civil de Navarra (PLATENA), cuya última actualización se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2008. Los suelos señalados como con "riesgo significativo" adoptarán la categoría de suelos no urbanizables de protección por legislación sectorial. Estos suelos se superpondrán a los suelos de protección y/o preservación subyacentes.

Importa resaltar que la existencia de un mapa de riesgos incompleto, no refleja la probabilidad real de riesgos en determinadas zonas, que deberán ser objeto de estudio.

749

Por tanto, el suelo no urbanizable de protección por riesgos naturales definido (Art. 22 Normativa), en el ámbito del POT 2 Navarra Atlántica es:

Causas de protección	Subcategorías de SNU	Sub-subcategorías de suelo de protección
POR RIESGOS NATURALES (ART.94.1.c)	Suelo de prevención de riesgos	Zonas inundables (**SNUPrtR: ZI**)

De acuerdo con el artículo 94.3 de la LFOTU, y atendiendo al motivo por el que los terrenos correspondientes a las zonas susceptibles de riesgos naturales adquieren la categoría de suelo no urbanizable de protección, **se distingue en ella la siguiente subcategoría y sub-subcategoría:**

- SUBCATEGORÍA: SNU DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES. SUELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

Zonas Inundables. (SNUPrtR: ZI):

Su contenido se refiere a las inundaciones amplias y lentas de los grandes ríos navarros sobre llanuras de inundación extensas. El POT aporta la representación gráfica y la propuesta de criterios normativos de las Zonas inundables, diferenciándose los dos siguientes ámbitos:

- ✓ **Las zonas inundables valoradas** mediante modelos hidráulicos, como por ejemplo HEC-RAS o MIKE-11, según modelo tridimensional del terreno a escala 1/5000. Se ha grafiado en la cartografía la zona inundable con un periodo de retorno de 500 años, señalando además las líneas del periodo de retorno de 100 y 10 años, que tienen relación directa con las zonas de riesgo bajo, medio y alto definidas en las fichas de riesgos.

- ✓ **Las llanuras de inundación y fondos de valle** definidas en los mapas geomorfológicos 1/25000. Se corresponden con superficies de terreno con evidentes datos objetivos de haberse conformado mediante el aporte continuado de materiales sedimentarios transportados en episodios de avenidas e inundaciones. Estas formaciones geomorfológicas, sin embargo, no llegan a definir la probabilidad de "padecer" un episodio de avenidas en un lapso de tiempo determinado, ni la altura que puede llegar a alcanzar la lámina de agua, pero sí pueden considerarse zonas inundables potenciales.

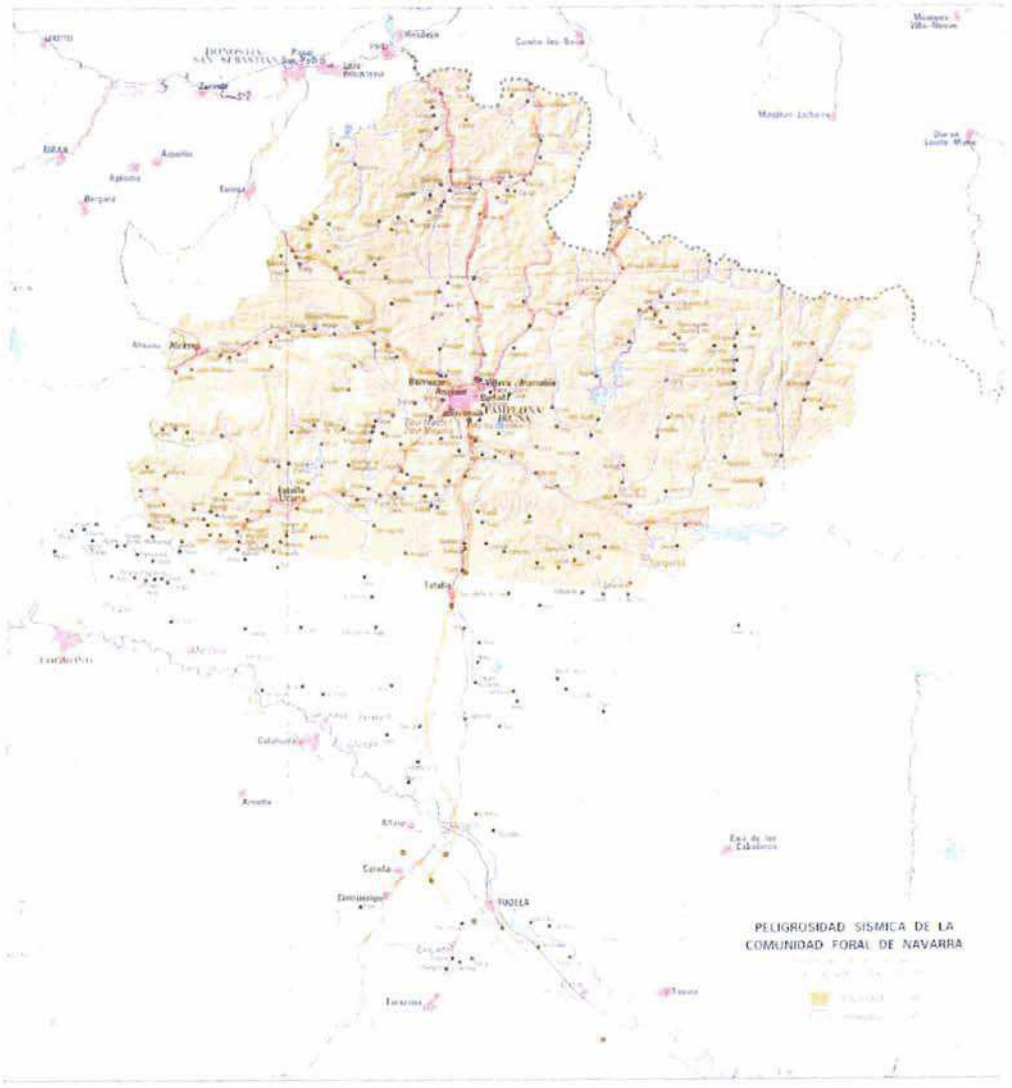
750

2.- RIESGOS CON UN COMPONENTE TERRITORIAL IMPORTANTE

2.1.- RIESGO SÍSMICO

En esta materia resulta aplicable la normativa de construcción en función del riesgo de seísmo recogida en el **Plan Territorial de Protección Civil de Navarra**, aprobado por Decreto Foral 230/1996, de 3 de junio, cuyo texto ha sido actualizado periódicamente, (última actualización aprobada por la Comisión de Protección Civil con fecha de 18 de noviembre de 2008), Plan que incluye un mapa en el que se gradúa el riesgo de seísmo en Navarra.

Asimismo, por **Real Decreto 997/2002**, de 27 de septiembre, se aprobaron las normas de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR.02).



Previos los estudios correspondientes, los planes urbanísticos de aquellos municipios que cuenten con este tipo de riesgo, definirán de forma gráfica el suelo no urbanizable de protección por prevención de riesgos de movimientos en masa.

2.4.- RIESGO DE INCENDIO

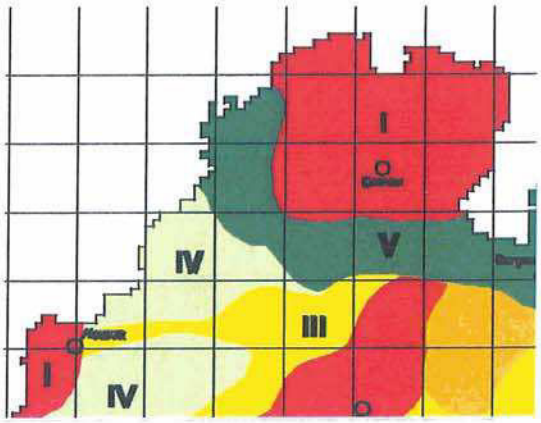
En el Plan Territorial de Emergencias de Navarra (PLATENA) se recoge un mapa de zonificación en el que se señala el nivel de riesgo de incendio en función del clima y el tipo de "combustible".

I: ROJO: RIESGO MUY ALTO

II: NARANJA: RIESGO POTENCIAL

III: AMARILLO: RIESGO ALTO

V: VERDE: RIESGO BAJO



Dicho documento propone, con carácter orientativo, "Regulaciones de orden territorial para la protección de vidas y bienes frente a los incendios", en las cuales se contempla la necesidad de realizar perímetros con escaso, o nulo, material potencialmente combustible, junto a las urbanizaciones, instalaciones industriales o comerciales e infraestructuras existentes; y, como medida de prevención, la prohibición de realizar nuevas urbanizaciones en zonas forestadas o arbustivas proclives al fuego.

2.5.- RIESGOS DE INUNDACIÓN

RIESGO DE CRECIDAS "AMPLIAS Y LENTAS"

Son crecidas amplias y lentas en los grandes ríos en "llanuras aluviales". Se corresponde en los POT con la sub-subcategoría: Zonas Inundables. (SNUPrtR: ZI), y cuyo contenido se ha reflejado en el apartado 1.

RIESGO DE CRECIDAS "RÁPIDAS Y VIOLENTAS"

Son crecidas rápidas y violentas, casi impredecibles en barrancos, pequeños ríos y zonas de montaña en situaciones meteorológicas concretas y adversas. Este tipo de riesgos

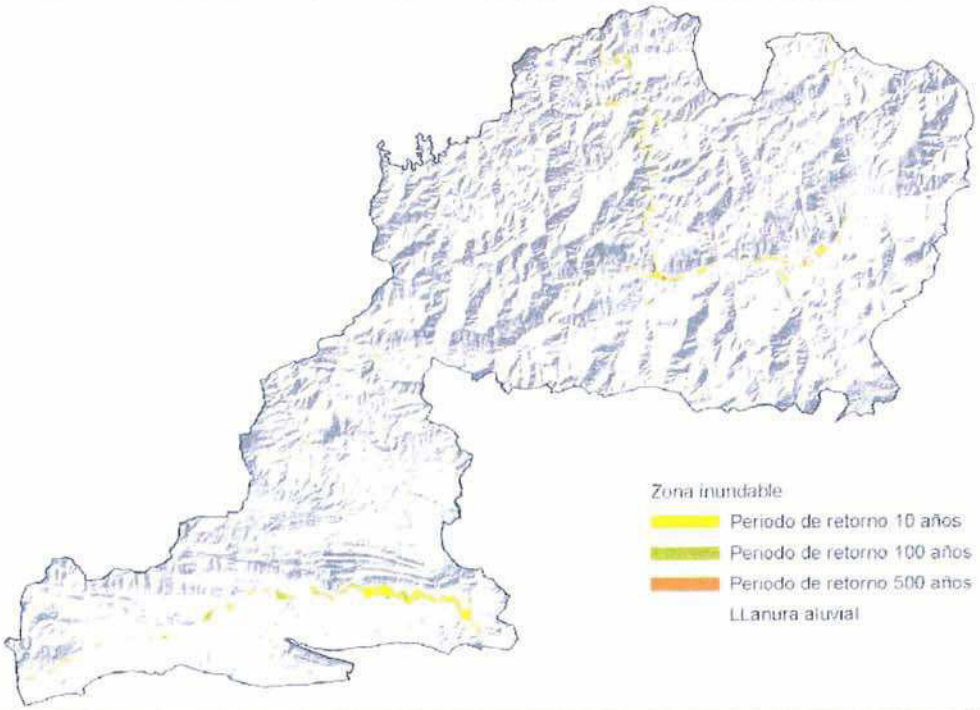
752

SUBCATEGORÍA: SNU DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES. SUELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

SNUPrtR: ZI - Zonas Inundables

S.N.U. DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES (Art.94.1c LFOTU)

Categoría:	Subcategoría:	Sub-subcategoría:	Código:
SNU de Protección	Prevención de Riesgos	Zonas inundables	SNUPrtR: ZI



CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN

Mientras no exista un estudio específico de inundabilidad donde se definan las diferentes zonas de riesgo dentro de la zona inundable de acuerdo con los períodos de retorno y los calados, se tomará como referencia el periodo de retorno de 500 años de los estudios realizados por el Gobierno de Navarra y en su defecto las llanuras aluviales y de inundación de los cursos de agua determinadas en el mapa geomorfológico.

Las zonas de riesgo a establecer en las zonas inundables son las siguientes:

- Zona de riesgo bajo: zonas donde cabe esperar inundaciones con un periodo de retorno superior a 50 años y un calado reducido (menor de 0,4 m).
- Zona de riesgo medio: zonas donde cabe esperar inundaciones con un periodo de retorno inferior a 50 años y un calado reducido (menor de 0,4 m), o con un periodo de retorno superior a 100 años y un calado intermedio (entre 0,4 y 1 m).
- Zona de riesgo alto: zonas donde cabe esperar inundaciones con un periodo de retorno inferior a 100 años y un calado intermedio (entre 0,4 y 1 m) o alto (superior a 1 m), o con un periodo de retorno de entre 100 y 500 años y un calado alto (superior a 1 m). En cualquier caso, sea cual sea el calado esperado, se considerará también zona de riesgo alto cuando la velocidad del agua sea igual o superior a 1 m/s.

CRITERIOS DE PROTECCIÓN

Protección de las personas y bienes frente a los riesgos de inundación.

753

S.N.U. DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES (Art.94.1c LFOTU)

Categoría:	Subcategoría:	Sub-subcategoría:	Código:
SNU de Protección	Prevención de Riesgos	Zonas inundables	SNUPrtR: ZI

Industria ligera-servicios y pesada	A	Sólo se admitirá si el tiempo de respuesta es mayor de 3 horas y esté operativo el SAIH.
Industrias pesadas, peligrosas e insalubres	Pr	
Instalaciones turísticas, deportivas y de ocio	Pr	Salvo instalaciones abiertas, tales como parques, zonas deportivas y de ocio, compatibles con una inundación.
Vivienda unifamiliar aislada	A	Que sea autorizable legalmente y se sitúe –incluido el sótano si lo hubiere- a una cota tal que no quede afectada por la avenida de 100 años. Sólo se admitirá si el tiempo de respuesta es mayor de 3 horas y está operativo el SAIH.
Infraestructuras lineales	A	Siempre que permitan la preservación del régimen de corrientes.
Infraestructuras puntuales: depuradoras	A	Con medidas de drenaje, defensa y protección.

Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos

ZONA DE RIESGO ALTO

Agricultura	A	Restricción en las instalaciones relacionadas con la explotación agrícola, como almacenes agrícolas.
Ganadero	Pr	
Industria	Pr	Salvo las actividades extractivas.
Instalaciones turísticas, deportivas y de ocio	Pr	Salvo instalaciones abiertas, tales como parques, zonas deportivas y de ocio, compatibles con una inundación y que el tiempo de respuesta sea mayor de dos horas.
Vivienda unifamiliar aislada	Pr	
Infraestructuras lineales	A	Siempre que permitan la preservación del régimen de corrientes.
Infraestructuras puntuales: depuradoras	A	Con medidas de drenaje, defensa y protección.

Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos

MUNICIPIOS INCLUIDOS

Según los estudios realizados hasta la fecha presentan zonas de inundación importante: Altsasu/Alsasua, Araitz, Arakil, Arantza, Arbizu, Areso, Arruazu, Bakaiku, Baztan, Beintza-Labaien, Bera, Bertizarana, Betelu, Donamaria, Doneztebe/Santesteban, Elgorriaga, Eratsun, Ergoiena, Etxalar, Etxarri-Aranatz, Ezkurra, Goizueta, Igantzi, Irañeta, Irurtzun, Ituren, Iturmendi, Lakuntza, Larraun, Leitza, Lekunberri, Lesaka, Oitz, Olazti/Olazagutia, Saldias, Sunbilla Uharte-Arakil, Urdazubi/Urdax, Urdiain, Urrotz, Ziordia, Zubieta y Zugarramurdi.

Gobierno de Navarra

Nasursa

NT

PN5

LANES DE RDENACIÓN
ERRITORIAL DE NAVARRA

POT 2 NAVARRA ATLÁNTICA



ANEXOS TEMÁTICOS
Patrimonio Natural
PN5 Criterios relativos a la Zonificación de Áreas Inundables y Usos Admisibles en las mismas

ANEXO PN5 - CRITERIOS RELATIVOS A LA ZONIFICACIÓN DE ÁREAS INUNDABLES Y USOS ADMISIBLES EN LAS MISMAS

ÍNDICE

1.- CRITERIOS RELATIVOS A LA ZONIFICACIÓN DE ÁREAS INUNDABLES Y USOS ADMISIBLES EN LAS MISMAS 3
1.1.- OBJETO Y ANTECEDENTES 3
1.2.- ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO FLUVIAL ESTABLECIDA POR EL POT. 4
1.2.1.- ZONA FLUVIAL 5
1.2.2.- ZONA DE TERRITORIO FLUVIAL PREFERENTE 6
1.2.3.- ZONA INUNDABLE 7
1.3.- ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 9
1.4.- ACTIVIDADES Y USOS COMPATIBLES Y PROHIBIDOS EN LA ZONA INUNDABLE 10
I. ZONA CON RIESGO BAJO 11
II. ZONA CON RIESGO MEDIO 12
III. ZONA CON RIESGO ALTO 12

ANEXO PN5 - CRITERIOS RELATIVOS A LA ZONIFICACIÓN DE ÁREAS INUNDABLES Y USOS ADMISIBLES EN LAS MISMAS

El presente ANEXO PN5 Criterios relativos a la zonificación de áreas inundables y usos admisibles en las mismas, es común para los cinco POT.

1.- CRITERIOS RELATIVOS A LA ZONIFICACIÓN DE ÁREAS INUNDABLES Y USOS ADMISIBLES EN LAS MISMAS

1.1.- OBJETO Y ANTECEDENTES

El presente Anexo tiene por objeto establecer los criterios orientados a regular los usos y actividades en zonas inundables de Navarra, así como cuantos aspectos se refieran a la realización de estudios de inundabilidad que se precisaren en zonas potencialmente inundables. El contenido de este Anexo **afecta a toda clase de suelos bien sean urbanos, urbanizables y/o no urbanizables.**

La ordenación de los usos en zonas inundables es una tarea primordial para la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a fin de prevenir los riesgos de las inundaciones, garantizar al máximo la seguridad de las personas y los bienes, así como de minimizar en lo posible las consecuencias negativas para el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, asociadas a este tipo de riesgos naturales.

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el **Texto Refundido de la Ley de Aguas,** establece en su artículo 11 que las Comunidades Autónomas podrán establecer normas complementarias a la regulación de usos de las zonas inundables que en su caso haya establecido el Estado en orden a garantizar la seguridad de las personas y los bienes.

Por otro lado, el **Real Decreto 849/1986**, de 11 de abril, por el que se aprueba el **Reglamento del Dominio Público Hidráulico**, modificado entre otros por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, confiere a la Administración hidráulica de una herramienta de gestión que le permite actuar eficazmente contra estos efectos nocivos asociados a las inundaciones.

Dicho Reglamento, **dentro de la zona inundable**, constituida por el cauce de los ríos y arroyos y por sus llanuras de inundación, **distingue el dominio público hidráulico, la zona de flujo preferente** (definida a partir de la avenida de periodo de retorno de 100 años) **y la zona inundable** por episodios extraordinarios (fijada por la avenida de 500 años). Para cada uno de los elementos señalados se introducen criterios generales para su protección ambiental, garantizando, asimismo, la protección de las personas y bienes y la protección del régimen de corrientes en avenidas. De esta forma, también se da cumplimiento a las exigencias de la Directiva sobre evaluación y gestión de los riesgos de inundación (2007/60/CE).

El espacio fluvial viene integrado según el POT por las siguientes zonas:

- **Zona Fluvial, y dentro de ella el Sistema de Cauces y Riberas.**
  - Se incluye en la subcategoría "Valor ambiental", sub-subcategoría "SNUPrtA: ZF - Zona Fluvial. Sistema de Cauces y Riberas".
  - Régimen de uso y protección regulado en el anexo:
    - ANEXO PN3: Áreas de especial protección.

- **Zona de Territorio Fluvial Preferente.**
  - Se incluye en la subcategoría "Prevención de Riesgos Naturales", sub-subcategoría "SNUPrtR: ZI - Zonas Inundables".
  - Régimen de uso y protección regulado en el anexo:
    - ANEXO PN4: Suelo de protección por riesgos naturales.

- **Zonas Inundables.**
  - Se incluye en la subcategoría "Prevención de Riesgos Naturales", sub-subcategoría "SNUPrtR: ZI - Zonas Inundables".
  - Régimen de uso y protección regulado en el anexo:
    - ANEXO PN4: Suelo de protección por riesgos naturales.

1.2.1.- ZONA FLUVIAL

A los efectos de la regulación de los usos del suelo admisibles en las áreas inundables, el POT introduce la figura de "**Zona Fluvial**", dirigiendo su preservación a la protección de la calidad del agua y de los ecosistemas asociados, así como de la morfología del cauce y sus riberas.

El cauce (con presencia continuada o no de agua) es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). La delimitación de este terreno se realizará no sólo a partir de criterios hidrológicos, sino atendiendo también a sus características geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles.

Ahora bien, siguiendo el criterio ambiental de conceptuar las riberas, no sólo como la estrecha banda entre el nivel de aguas bajas y el nivel de las máximas crecidas ordinarias, sino como un corredor ecológico perteneciente al territorio fluvial, se considera como **Zona Fluvial aquella que incluye el cauce, el corredor ribereño y**, de manera parcial, y en algún caso total, **la llanura de inundación**, y que se delimita atendiendo a estudios **geomorfológicos, históricos y ambientales**, teniendo en cuenta también la mancha de inundación de diez años de periodo de retorno basada en modelos hidráulicos, debiéndose **ajustar el criterio**

758

en esta zona no se admiten medidas estructurales de protección de nuevas edificaciones. Como excepción, se admiten medidas para construcciones y actividades ya consolidadas en caso de que no resulte factible la reubicación de las mismas fuera de la zona del territorio fluvial preferente.

Se consideran usos compatibles con estas condiciones y para toda clase de suelos –urbanos, urbanizables y no urbanizables sin perjuicio, en este último caso, de que lo sean con el régimen de uso y protección del suelo que subyace a la inundación– **los siguientes:**

- Usos agrarios, como tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, silvicultura, viveros al aire libre y cultivos silvestres.
- Uso industrial-comercial, como áreas de almacenaje temporal, zonas de aparcamientos, etc.
- Usos asociados al residencial, como parques, jardines, zonas de juegos, etc.
- Usos recreativos, como campos de golf, pistas deportivas al aire libre, zonas de descanso, circuitos de excursionismo, cotos de caza, y otros de similar naturaleza, sin edificaciones ni construcciones de ningún tipo.
- Infraestructuras lineales de comunicación y transporte, siempre y cuando permitan la preservación del régimen de corrientes.
- Infraestructuras puntuales: depuradoras, con medidas de drenaje, defensa y protección, y estaciones de bombeo de aguas residuales o potables.
- Infraestructuras de servicios y cañerías, debidamente soterradas y protegidas y siempre y cuando se preserve el régimen de corrientes y se garantice la no afectación a la calidad de las aguas.
- Aquellos otros usos previstos por la legislación aplicable en materia de dominio público hidráulico.

1.2.3.- ZONA INUNDABLE

Se considera zona inundable, de conformidad con la legislación vigente y atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, **la delimitada por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo de retorno sea de 500 años.**

A efectos de la correspondiente regulación de usos en esta área, se tendrán en cuenta tres niveles de riesgo, sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal de aguas. De acuerdo con los periodos de retorno y los calados se pueden distinguir las **siguientes zonas de riesgo:**

759

que se encuentre el entorno. Si a la vista de los resultados obtenidos no fuera posible la reducción del riesgo de inundación, y/o el régimen de uso según el planeamiento vigente fuera incompatible con los usos considerados compatibles conforme al grado de riesgo de inundación finalmente resultante, se procederá a la revisión o modificación, según proceda, de dicho planeamiento, sin perjuicio de los efectos indemnizatorios a que, en su caso, pudiera dar lugar dicha revisión o modificación.

En todo caso, estas actuaciones deberán **obtener la preceptiva autorización de la Administración Hidráulica,** de conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas y en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

En lo que al suelo no urbanizable de protección respecta, serán de aplicación los regímenes de uso y protección previstos en el **ANEXO PN3** - Áreas de especial protección y en el **ANEXO PN4** - Suelo de protección por riesgos naturales.

I. ZONA CON RIESGO BAJO

Compatibles:

- Residencial, si se sitúa –incluidos los sótanos si los hubiere– a una cota tal que no quede afectado por la avenida de 100 años.
- Industria: Ligera-servicios y Pesada. En el caso de la industria pesada con la adopción de las medidas de defensa que se estimen oportunas, siempre que el tiempo de respuesta sea mayor que tres horas y esté operativo el SAIH.
- Equipamientos comunitarios abiertos y cerrados (salvo vitales):
    - Parques, zonas deportivas al aire libre compatibles con una inundación, aparcamientos en superficies, y otros similares.
    - Equipamientos cerrados.
- Infraestructuras lineales y puntuales.

Prohibidos:

- Industrias peligrosas y/o insalubres.
- Equipamientos comunitarios vitales: servicios públicos esenciales como bomberos, hospitales, y similares.

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
Ingurumen Sailburuordetza
Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
Viceconsejería de Medio Ambiente
Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental

2011 ABE DIC 20

SARRERA
Zk. 492144

JORGE MARQUÍNEZ GARCÍA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
Plaza de España 2
33071 OVIEDO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
REGISTRO DE ENTRADA 23/12/2011
OFICINA PLAZA DE ESPAÑA 12:21:18
E001201100012801

***Gaia*/Asunto:** Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental

***Erref.*/Ref.:**
***Kodea*/Código:** OP-2011_265

Goian aipatutako gaiari dagokionez, honekin batera doakizu Biodibertsitate eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzako Zerbitzu Teknikoei eskatutako informazioa.

Con relación al asunto de referencia, adjunto remito la información solicitada a los Servicios Técnicos de la Dirección de Biodiversidad.

Adeitasunez

Atentamente

Vitoria - Gasteiz, 2011ko abenduaren 19a

Vitoria - Gasteiz, 19 de diciembre de 2011

BIODIBERTSITATERAKO ETA INGURUMEN PARTAIDETZARAKO ZUZENDARIA
EL DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

GERMÁN ALONSO CAMPOS

EUSKO JAURLARITZA
PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 95 42 – Fax 945 01 95 40 – 01010 Vitoria-Gasteiz

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
Ingurumen Sailburuordetza
Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
Viceconsejería de Medio Ambiente
Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental

INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL CUENCAS DE LOS RÍOS CADAGUA, NERVIÓN, ORIA, URUMEA Y BIDASOA

CÓDIGO: OP-2011_265

1. ANTECEDENTES

Esta Dirección emitió en febrero de 2009 un informe (código de expediente ECIA-2008_063) en el marco del procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico, en el que se aportaban fuentes de información y consideraciones relacionadas con la biodiversidad en la CAPV.

Posteriormente, el 3 de noviembre de 2011, esta Dirección emitió un informe relativo al Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Occidental, a solicitud de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

No habiéndose recibido en esta Dirección el proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental, en el escrito de remisión del citado informe se solicitó a esa Demarcación la concesión de un plazo de dos meses para poder informar también dicho proyecto.

Si bien no se ha recibido respuesta en relación a dicha solicitud, se ha analizado la documentación disponible en la página Web de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y se ha elaborado el presente informe, que recoge las propuestas de esta Dirección en relación al Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental, para su consideración por el órgano promotor del mismo.

La información publicada en la Web (www.chcantabrico.es) y sometida a información pública, consiste en los documentos de Memoria y Anejos, Normativa, Informe de Sostenibilidad Ambiental y Documentación de Apoyo (cartografía, etc.).

Se ha efectuado un análisis de los contenidos del Plan que guardan relación con la conservación de la biodiversidad ligada al medio acuático y especialmente aquellos aspectos relativos a la Red Natura 2000, en la medida en que los objetivos y medidas para la conservación de los hábitats y especies de interés comunitario han de ser incorporados a la planificación hidrológica.

2. RED NATURA 2000 EN EL ÁMBITO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL

El Registro de Zonas Protegidas del plan (apartado 5.7 de la Memoria y artículo 52) incluye una selección de aquellos lugares designados para la conservación de hábitats y especies ligados al medio acuático. Se trata de los LIC de Gorbeia, Aralar, Alto Oria, río Araxes, río Leitzaran y Aiako Harria.

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 95 42 – Fax 945 01 95 40 – 01010 Vitoria-Gasteiz

A excepción de los LIC de Gorbeia y Aralar, ambos parques naturales, el resto de los lugares están en proceso de ser designados como Zonas Especiales de Conservación, en aplicación de la Directiva Hábitat y la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. La designación implica establecer objetivos y medidas de conservación orientadas a garantizar o, en su caso, restablecer el estado de conservación de los hábitats y especies que han motivado la inclusión del lugar en la Red Natura 2000.

Los primeros borradores de los instrumentos para la gestión de las futuras ZEC se pusieron a disposición de las administraciones implicadas, entre ellas la Confederación del Cantábrico, a principios del año 2010. En estos primeros borradores se proponía ampliar los LIC transversalmente y longitudinalmente, incorporando arroyos de cabecera y tributarios con especial interés para la conservación de hábitats y especies. Pero estas delimitaciones ampliadas fueron posteriormente modificadas y aprobadas inicialmente en marzo de 2011.

Tal y como se ha podido constatar al revisar la documentación, se ha incorporado al Plan Hidrológico la delimitación ampliada, correspondiente a la primera versión puesta a disposición de la Confederación en el año 2010, y no es la aprobada inicialmente. En cualquier caso, una vez finalizado el trámite de información pública de los documentos, este Departamento ha decidido tramitar la designación únicamente en el ámbito declarado LIC por la Comisión Europea en el año 2004 y tramitar un expediente de ampliación de los LIC separadamente.

Por lo tanto, sería conveniente revisar la cartografía del Registro de Zonas Protegidas para incorporar la delimitación oficial. La cartografía con la delimitación oficial se adjunta en el CD adjunto a este informe.

Posteriormente, este Departamento comunicará a la Confederación Hidrográfica cualquier cambio que se produzca en la delimitación de los lugares Natura 2000, ya sea por la aprobación de un expediente de ampliación y/o por la revisión de los límites.

4. MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS

En el apartado 2.2.2 de la Memoria se describe el proceso para la designación de las masas de agua muy modificadas, resultando la designación definitiva de varias masas en el ámbito de la Red Natura 2000, en concreto, las masas ES028MAR002661 Oria V, ES027MAR002620 Leizaran II y ES018MAR002492 Urumea III. Por lo tanto, en el apartado 4.1 del Anejo 4 de Objetivos Ambientales se establece para estas masas "*alcanzar un buen potencial ecológico y buen estado químico*", en el año 2015, en el caso de la masa Urumea III, y en el año 2021 para las masas Leizaran II y Oria V.

Si bien es posible que una masa de agua asociada a un Lugar de Importancia Comunitaria sea caracterizada como masa de agua muy modificada en aplicación de los criterios de la Directiva Marco del Agua, se considera que las masas de agua Leizaran II y Urumea III no debiera tener esta calificación.

Efectivamente se trata de masas de agua sometidas a importantes regulaciones para abastecimiento y uso hidroeléctrico, sin embargo, conforme a los resultados de la Red de Seguimiento del Estado Biológico de los ríos de la Agencia Vasca del Agua[1], ambas masas

[1] Red de seguimiento de la calidad de las aguas superficiales de la CAVP. Agencia Vasca del Agua: http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/calidad_aguas/es_doc/calidad_aguas_superficiales.html

presentan un estado ecológico Bueno y los indicadores biológicos señalan un estado Muy Bueno. Asimismo, tampoco se encuentra motivo para la exención en el plazo puesto que estas masas ya alcanzan actualmente un buen estado ecológico.

Por otra parte, hay que tener en cuenta, que la calificación de una masa de agua como muy modificada y, por lo tanto, la adopción del objetivo de alcanzar un buen potencial ecológico, no exime de alcanzar los objetivos relativos al buen estado de conservación de los hábitats y especies por los cuales ese lugar ha sido designado LIC. En el transcurso de los trabajos para designar este lugar como ZEC las principales presiones detectadas sobre los hábitats y las especies son la relativas a los obstáculos en el cauce, las regulaciones para uso hidroeléctrico (el 80 % del tramo guipuzcoano del río Leizaran se encuentra derivado) y la mortandad en canales y turbinas.

Se considera que el Plan Hidrológico ya plantea regulaciones y programas de medidas orientadas a la eliminación de estas presiones a más corto plazo que el año 2021, como la implantación de caudales ecológicos de forma prioritaria para el año 2015 (artículo 11 de la normativa) y el control establecido en el artículo 14, así como la adecuación de las infraestructuras infranqueables antes del 1 de enero de 2016, los programas de demolición y permeabilización de azudes, etc.

Por otra parte, en los instrumentos para la gestión de estas ZEC, también se plantea la necesidad de revisar las condiciones de aquellas concesiones que están provocando alteraciones significativas en los hábitats y especies objeto de conservación y/o impiden el restablecimiento de un estado de conservación favorable para las mismas.

Por lo tanto, desde esta Dirección se propone la revisión de la caracterización de las masas Leizaran II y Urumea III para considerarlas masas de agua natural, con el objetivo de alcanzar un buen estado ecológico y buen estado químico para el año 2015.

5. CAUDALES ECOLÓGICOS

El establecimiento de caudales ecológicos y la adaptación de las concesiones a este nuevo régimen se consideran cuestiones de primer orden para la conservación de la biodiversidad, máxime si se tiene en cuenta que las detracciones y derivaciones de caudal son una de las principales presiones a la que se encuentran sometidos los ecosistemas fluviales. De hecho este factor, entre otros, juega un papel importante en la regresión sufrida por las poblaciones de las especies ligadas al medio acuático.

En este sentido se valora positivamente el proceso de cálculo de caudales ecológicos seguido en el Plan Hidrológico, que contempla tanto caudales mínimos como máximos, su distribución temporal enfocada a los requerimientos del ciclo biológico de las principales especies fluviales, así como –para tramos muy regulados- caudales de crecida y tasa de cambio máxima.

Sin embargo, en la línea de lo establecido por la ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica, los instrumentos para la gestión de las ZEC prevén la realización de estudios específicos para definir en cada lugar el régimen de caudales ambientales apropiados para mantener o restablecer un estado de conservación favorable de los hábitat o especies, respondiendo a sus exigencias ecológicas y manteniendo a largo plazo las funciones ecológicas de las que dependen (regulación 5.R.1 y actuación 1.AC.4).

765

En tanto en cuanto se elaboran esos estudios, los instrumentos para la designación de las ZEC

establecen la necesidad de aplicar un régimen de caudales que se adapte al hidrograma natural del río, que podrá definirse aplicando la metodología del caudal ecológico modular, utilizado en la planificación hidrológica de las cuencas internas del País Vasco. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el plan hidrológico que corresponda en función de la cuenca y aplicando siempre, de entre esas dos posibilidades, el régimen de caudales más favorable desde el punto de vista ambiental (regulación 5.R.4).

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la Agencia Vasca del Agua aplica sus propios métodos de cálculo y emplea una red de puntos de simulación adaptada al ámbito de Comunidad Autónoma, y teniendo en cuenta el proceso de concertación al que deben someterse ambos planes, se propone que se contrasten los resultados obtenidos con los que establece este Plan Hidrológico y que, en cada caso, se apliquen los más favorables desde el punto de vista ambiental.

Por lo demás, se considera correcta la regulación de la implantación de caudales ecológicos del artículo 11 de la Normativa, si bien se propone que en la priorización de las notificaciones a la que se hace referencia en dicho artículo, se tenga en cuenta también la afección a los lugares, hábitats y especies de la Red Natura 2000 u otras zonas protegidas (especies amenazadas, espacios naturales protegidos, etc.). Por lo tanto se propone modificar la redacción de dicho artículo como sigue:

"....*Se priorizarán las notificaciones a aquellos aprovechamientos que puedan presentar mayor incidencia en el cumplimiento de los objetivos ambientales o en la conservación de hábitats y especies*".,,,,

Asimismo, se propone que la previsión de priorizar las notificaciones en estos ámbitos del Registro de Zonas Protegidas se incorpore al apartado 5.5 del Programa de Actuaciones.

6. REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS

Zonas de protección de hábitat o especies

El Plan Hidrológico incluye en la Zona de Protección de Hábitats y Especies del Registro los lugares Natura 2000 cuyos elementos objeto de conservación son hábitats o especies ligadas al medio acuático.

Se propone la inclusión en esta categoría de al menos aquellas zonas del ámbito de la Demarcación declaradas de interés especial en los planes de gestión de especies amenazadas ligadas al medio acuático (nutria, visón europeo y desmán del Pirineo). El PH de las cuencas internas del País Vasco incluye tramos de estas características, aunque como una subcategoría dentro de las Zonas de Protección Especial.

La cartografía de las Áreas de Interés Especial de los Planes de Gestión de estas especies se proporciona en el CD adjunto al presente informe.

Zonas de Protección Especial

Zonas de Interés Natural.

Tal y como se define esta categoría, realmente no se aprecia la diferencia con respecto a la categoría de Reservas Fluviales. En este sentido una única subcategoría de zonas de interés natural y medioambiental podría ser suficiente, sin necesidad de hacer más subdivisiones.

Zonas de Interés Medioambiental

En los trabajos para la designación de las ZEC esta Dirección ha detectado determinados tramos de especial interés naturalístico o ambiental. Se sugiere al organismo de cuenca que valore su inclusión en la categoría de protección especial (el número 1 se utiliza para los tramos de mayor interés y el número 2 para el resto). No se han considerado los tramos de río que son LIC fluvial y sí aquellos que forman parte de LIC zonales, como por ejemplo el arroyo Endara que pertenece al LIC de Aiako Harria.

UH	Río/Tramo	Orden de interés
Bidasoa	Regata de Endara	1
Urumea	Arroyo Urruzuno/Etxolaberri	1
	Landarbaso/Epele	1
Oria	Alkiza	1
	Zubiri/Berostegi	2
	Orexaran	2
	Urtzu	2

Zonas Húmedas

En esta categoría se han tenido en cuenta humedales incluidos en inventarios y catálogos de las Comunidades Autónomas. En lo que respecta al País Vasco, se trata de humedales incluidos en el Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV en el grupo I (humedales en espacios naturales protegidos) y en el grupo III. Recientemente se ha procedido a revisar este inventario mediante Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Inventario de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (el nuevo inventario y la cartografía se proporcionan en el CD adjunto).

En referencia a los humedales incluidos en el Registro de Zonas Protegidas, cabe indicar que los juncales de Villabona (B11G2) han desaparecido del Inventario, porque se han excluido los juncales en general y las turberas de Verdeoespesoa han pasado a denominarse Trampales de Orozko, con el mismo código (B1B2).

7. PROGRAMA DE MEDIDAS

Conservación y mejora de la biodiversidad

El Programa de Medidas contempla en los apartados 5.1 y 5.5 medidas para la restauración ambiental de cauces, lagos, zonas húmedas y ecosistemas asociados, y para conservar y mejorar la biodiversidad.

Se considera que las líneas son positivas para mantener o en su caso restablecer el estado de conservación de los hábitats y especies ligadas al medio acuático, en particular las líneas

relativas a la mejora del estado ecológico, la definición e implantación de caudales ecológicos, la eliminación y permeabilización de obstáculos, la restauración de los hábitats de ribera y la eliminación de especies exóticas invasoras de flora y fauna. Sin embargo, al estar vinculadas a la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, en la mayoría de los casos sólo han quedado esbozadas como líneas de actuación y sin la suficiente concreción.

Por otra parte, resulta necesario llamar la atención sobre determinadas líneas de actuación que consideramos debieran ser objeto de revisión. Estas actuaciones (desbroces, podas, talas y retirada de restos vegetales) analizadas individualmente pueden carecer de impactos reseñables por su escasa entidad, pero en conjunto afectan a muchos tramos de la red fluvial y en ocasiones son reiteradas, por lo que a medio plazo se pueden estar generando impactos apreciables. Los principales efectos negativos se relacionan con la simplificación de la estructura ribereña (se pierden por ejemplo refugios para fauna) y con el hecho de que se favorecen estados más inmaduros del bosque de ribera.

Por lo tanto, se propone la incorporación de los siguientes criterios en este apartado del programa:

- Como criterio general, los desbroces, podas y retirada de madera, conocidos habitualmente como limpiezas de cauces, se deberían limitar a situaciones de riesgo hidráulico.

- Por otra parte, dado el valor para la biodiversidad de las acumulaciones de restos vegetales y de la presencia de árboles muertos, que constituyen refugio y aportan recursos tróficos a diversas especies (quirópteros, insectos xilófagos, pícidos o mustélidos como el visón europeo o la nutria), se tenderá a su mantenimiento en el medio fluvial, siempre y cuando no supongan riesgo. Asimismo, debería priorizarse el troceado de los elementos de mayor entidad y su abandono *in situ* frente a su retirada manual o mecánica.

- Se propone que se elimine la medida *"Poda en altura de los árboles ribereños para potenciar esta vegetación"*, ya que aunque las formaciones de ribera son muy dinámicas y pueden tolerar cierto nivel de intervención, no se considera que esta medida sea necesaria para mejorar el estado ecológico de estas formaciones. Como alternativa, se propone determinar en qué casos puede realizarse esta poda, ya que una técnica tan compleja únicamente parece apropiada en casos muy concretos, por ejemplo, como alternativa a las talas bajo tendidos eléctricos.

Integración de los objetivos de la Red Natura 2000 en la Planificación Hidrológica.

Por una parte, se propone que en el apéndice X.I Planes y Programas de las Comunidades Autónomas del País Vasco con la incidencia en la planificación se incluyan también los planes de objetivos y medidas de conservación de las Zonas Especiales de Conservación de la Red Natura 2000.

Estos documentos de objetivos y medidas de conservación para la designación de las ZEC están actualmente en tramitación. Se han aprobado inicialmente, se han sometidos a los trámites de información pública y audiencia y se está elaborando la versión que será aprobada definitivamente a principios del año 2012.

Estos documentos constan de unas directrices, regulaciones y actuaciones comunes, de aplicación a todas las ZEC de ríos y estuarios, y por otra parte se proponen una serie de actuaciones particulares en cada lugar.

En el Anexo I se proporciona la versión más actualizada de las directrices y regulaciones que guardan una relación directa con la planificación hidrológica.

En el Anexo II se recogen las actuaciones comunes y particulares que es necesario abordar en cada una de las ZEC y que, por lo tanto, proponemos sean también incorporadas al Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental.

La cartografía en la que se representan las medidas de conservación se proporciona en el CD adjunto a este informe.

Por último, señalar que el coste de la elaboración de los documentos para la designación de las ZEC en el ámbito de este Plan no aparece consignado en el apéndice el X.5 Resumen del Programa de Medidas. El coste de la designación asciende a 0,36 M€, desde el año 2009 al horizonte 2015.

8. NORMATIVA

En general, se valora positivamente la normativa del Plan Hidrológico en tanto en cuenta constituye una herramienta de primer orden para eliminar presiones sobre los ecosistemas acuáticos y para mejorar la biodiversidad, como las regulaciones del capítulo 3 relativas a los caudales ecológicos y el artículo 38 sobre la modificación y revisión de los caudales concesionales.

Sin embargo, en relación a lo expresado en el apartado 5 de este informe sobre los caudales ecológicos y Natura 2000, se considera necesario que en el artículo 11 se incluya la previsión de que los caudales ecológicos mínimos puedan ser objeto de revisión. Se propone la inclusión del siguiente apartado:

6. Los regímenes de caudales ecológicos podrán ser modificados en función de su adaptabilidad al estado ecológico de las masas de agua, al conocimiento técnico-científico o a los requerimientos de los hábitats y especies de las zonas del Registro de Zonas Protegidas, de acuerdo con los mecanismos de seguimiento y revisión contemplados en el presente Plan".

Resulta un tanto confusa la sección 1. Normas generales, apeo y deslinde del Dominio Público Hidráulico, en la que no se incluye ninguna determinación relativa al deslinde. Por otra parte, el artículo 44 de esta misma sección define el corredor fluvial y el ámbito de protección específica del medio fluvial, aunque no se aclara cuál es su objeto y virtualidad. Tampoco se fija un plazo para su definición y el apartado 4 resulta confuso en cuanto que se generan servidumbres de uso en base a posibles "*Protocolos con los Ayuntamientos*", "*en los ámbitos definidos en los Protocolos*", "*en los suelos urbanizables que no cuenten no cuente con anterioridad a la entrada en vigor del Plan con proyecto de ejecución*", etc.. Por lo tanto, se propone que se revise este artículo para dotarlo de mayor claridad.

Por otra parte, se propone añadir el siguiente párrafo al artículo 43 -. Normas específicas para el diseño de puentes, coberturas y modificaciones de trazado:

> *"Se preservará la continuidad de las riberas o taludes fluviales bajo las obras, al objeto de mantener pasos secos adecuadas para fauna como los mamíferos semiacuáticos (visón, nutria, etc.)".*

Finalmente, se propone incluir en la normativa de este Plan Hidrológico otras determinaciones de la versión del Plan Hidrológico de las cuencas internas de la CAPV sometida a información

pública (diciembre de 2010)[2], por considerar que contribuyen positivamente al mantenimiento de la biodiversidad:

Artículo 61. Contenido mínimo de los proyectos de dispositivos para la mejora de la conectividad fluvial

Artículo 77. Autorizaciones con afección al Dominio Público Hidráulico y Marítimo Terrestre y a la vegetación de ribera de sus márgenes.

Artículo 78. Medidas de restitución y/o restauración ambiental en el cauce y riberas

Artículo 79. Fianza o aval por las medidas de restitución ambiental

Artículo 82. Realización de talas o plantaciones forestales y/o de cultivos arbóreos en el cauce y en la Zona de Servidumbre

Artículo 86. Accesos a las obras con afección al cauce y/o riberas

Artículo 93. Cruces subálveos

Artículo 97. Zona de Servidumbre del Dominio Público Hidráulico

Artículo 98. Paseos peatonales y vías ciclables

9. ERRATAS Y OMISIONES

- No coincide la prioridad de usos del apartado 4.3 de la memoria y la del artículo 16 de la normativa.
- La masa "río Endara" figura en la tabla 4 dentro del LIC del río Bidasoa, pero en realidad pertenece al LIC de Aiako Harria
- En la tabla 10 del Anejo 4. Registro de Zonas Protegidas. Especies dependientes del agua presentes en los LIC seleccionados. No se cita el visón europeo.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2011

E/ V°.B°.

Marta Rozas Ormazabal
Biodibertsitaterako Zerbitzu Arduraduna
Responsable del Servicio de Biodiversidad

Mª Jose Lodeiro Rico
INGURUMEN TEKNIKARIA
TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE

[2] Proyecto de Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la CAPV sometido a información pública:

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/plan_hidrologico/es_doc/plan_hidrologico.html

ANEXO I. PROPUESTA DE ACTUACIONES COMUNES DE LAS ZEC FLUVIALES PARA SU INCORPORACIÓN AL PLAN HIDROLÓGICO DEL CANTÁBRICO ORIENTAL (Ver cartografía de medidas de actuación en el CD adjuntoa a este informe)

CÓDIGO	ACTUACIONES COMUNES EN RÍOS
1.AC.1	Se promoverán proyectos de restauración de los hábitats propios de la ribera fluvial (aliseda – fresneda, bosques galería de *Salix alba* y *Populus alba*) en aquellos tramos donde se ha perdido la continuidad del bosque de ribera por presencia de prados, cultivos u otros usos que impliquen su discontinuidad. El objetivo será conseguir la restauración y el mantenimiento de una banda continua de vegetación natural de ribera, con una anchura mínima de 5 metros a lo largo de todo el tramo ZEC.
1.AC.3	Se promoverá ante el organismo competente de cuenca la determinación del Dominio Público Hidráulico a partir de los estudios técnicos realizados o validados por el citado organismo atendiendo a las características morfológicas, los estudios hidrológicos e hidráulicos y las referencias históricas disponibles. Además de la determinación del DPH en los términos señalados, se delimitará para cada ZEC su *"territorio fluvial"*, entendiendo como tal un espacio estrechamente relacionado con el ecosistema fluvial y de suficiente anchura y continuidad como para conservar o recuperar la dinámica hidrogeomorfológica del río, obtener un corredor ribereño continuo que garantice la diversidad ecológica y permita establecer la potencialidad de recuperar ámbitos asociados a la dinámica fluvial. Comprenderá, al menos, las áreas inundadas por avenidas de periodo de retorno de 10 años, y excluirá los ámbitos urbanizados.
1.AC.4	Se promoverá ante el organismo de cuenca competente la revisión del régimen de caudales ambientales que se aplica en las principales concesiones vigentes en el ámbito de las ZEC. Para ello se realizarán estudios específicos cuyo objetivo será salvaguardar o alcanzar el buen estado de conservación de los hábitats y especies que constituyen objetivos clave de las ZEC.
1.AC.7	Las actuaciones de permeabilización de obstáculos que se proponen para cada una de las ZEC fluviales deberán incorporar pasos específicos para anguila en aquellos casos en los que no se opte por la construcción de pasos mulitiespecíficos como canales laterales o derribos parciales. En la instalación de dichos dispositivos se priorizarán los tramos bajos de los cauces
1.AC.8	Se evaluará la efectividad de los dispositivos de permeabilización de obstáculos existentes en el ámbito de afección de la ZEC y, si no resultan adecuados, se tomarán las medidas necesarias para garantizar los desplazamientos (ascendentes y descendentes) de la fauna piscícola y del resto de las especies que constituyen elementos clave en el ámbito de la ZEC.
1.AC.9	Se ejecutarán proyectos de revegetación de escolleras y plantación de márgenes en zonas encauzadas con el fin de dar sombra al cauce y paliar los efectos de las altas temperaturas que se alcanzan en verano a consecuencia de la falta de vegetación arbolada en las riberas.
1.AC.10	Se ejecutarán los planes de saneamiento y depuración pendientes en el ámbito que afecta a las ZEC (de acuerdo con el Plan de saneamiento y depuración de la CAPV 2015. URA. Agencia Vasca del Agua). • Araxes: Construcción de la EDAR de Lizartza y colector de saneamiento. Saneamiento de núcleos menores (Txarama, Leaburu, Gaztelu). • Alto Oria: Conexión saneamiento Zaldibia, y saneamiento de núcleos

CÓDIGO	ACTUACIONES COMUNES EN RÍOS
	de población de Mutiloa, Gabiria, Altzaga, Arama, Gaintza, Abaltzisketa, Baliarrain y Orendain. Asimismo s realizará un seguimiento específico del funcionamiento de los sistemas de depuración existentes en los núcleos de población que vierten a la ZEC.
1.AC.17	Se desarrollarán actuaciones de erradicación y seguimiento periódico de especies de flora exótica invasora (*Fallopia japonica, Buddleja davidii, Arundo donax, Phyllostachis aurea*, principalmente) que contribuyan a la depreciación de los hábitats naturales de ZEC, mediante métodos no agresivos para la estructura y funciones de los hábitats naturales. Se priorizarán las técnicas manuales y localizadas frente al uso de maquinaria o fumigaciones extensivas. La erradicación debe ser controlada por especialistas en flora.
1.AC.18	Se llevará a cabo actuaciones de seguimiento y erradicación periódica de especies de fauna exótica invasora, priorizando aquellas con un mayor potencial de afección (visón americano, coipú, cangrejo señal, cangrejo rojo, gambusia) sobre las especies consideradas elementos clave

Actuaciones particulares de cada ZEC

CÓDIGO	ACTUACIONES DE LA ZEC RÍO ORIA (EJE PRINCIPAL)
AP2	Redacción y ejecución de proyectos de permeabilización de los obstáculos existentes en el ámbito de la ZEC que presentan mala permeabilidad para ciprínidos (ver Mapa de actuaciones)
1.AC.1	Restauración de la vegetación natural de ribera en los tramos propuestos (ver Mapa de Actuaciones). Incluye la restauración de 24,6 ha de bosque de galería en áreas actualmente ocupadas por prados de siega, cultivos herbáceos, otros usos y en otras zonas donde el bosque de galería se encuentra muy degradado.
1.AC.8	Evaluación de la eficacia de los sistemas de permeabilización de obstáculos en el ámbito de la ZEC, en particular para la escala de peces del azud de la central hidroeléctrica Ikaztegieta. En el caso de que la escala piscícola no sea efectiva, se tomarán las medidas necesarias para garantizar los desplazamientos de los peces y el resto de las especies que constituyen elementos clave en el ámbito de la ZEC.
1.AC.9	Ejecución de proyectos para la revegetación de escolleras y plantación de márgenes en zonas encauzadas. Objetivo: realizar actuaciones sobre un total de 13.000 ml de cauce.

CÓDIGO	ACTUACIONES DE LA ZEC RÍO ARAXES
1.AC.1	Restauración de la vegetación natural de ribera en una banda de 5 metros de anchura en los tramos propuestos (ver Mapa de Actuaciones). Incluye la restauración de 6,6 ha de bosque de galería en áreas actualmente ocupadas por prados de siega, cultivos herbáceos u otros usos que interrumpen la conectividad del corredor fluvial.
1.AC.9	Revegetación de escolleras (actuaciones sobre un total de 615 m de longitud).

CÓDIGO	ACTUACIONES DE LA ZEC RÍO ARAXES
AP.1	Redacción y ejecución de proyectos de demolición/ permeabilización de los obstáculos asociados a las concesiones de Papelera de Amaroz, Celulosas del Araxes 2 (Insalus) y antigua Serrería de Leaburu
AP.2	Promover un proceso de concertación o negociación en relación con el aprovechamiento hidroeléctrico de la central de Lizartza, con el fin de analizar las posibilidades de establecer unas condiciones más favorables para alcanzar el buen estado de conservación del hábitat fluvial. El proceso de concertación debe considerar incluso el posible cese de la actividad, como opción más ambiciosa de cara a propiciar un espacio de dimensiones suficientes para albergar una población viable de desmanes y un pequeño núcleo poblacional de visón europeo en la ZEC.

CÓDIGO	ACTUACIONES DE LA ZEC RÍO LEITZARAN
1.AC.1	Restauración y mejora de la vegetación natural (con especies propias de la vegetación potencial del lugar) de las márgenes fluviales en una banda de al menos 10 metros de anchura en aquellas zonas en las que los cursos de agua de la ZEC atraviesen terrenos públicos (Montes Comunales y Montes de Utilidad Pública) y de 5 m de anchura en el resto de cursos de agua que atraviesan la ZEC. Incluye la revegetación de 26,15 ha de márgenes fluviales en montes de utilidad pública y de 1,5 ha en áreas actualmente ocupadas por usos que interrumpen la conectividad del corredor fluvial (ver Mapa de Actuaciones).
AP.1	Se redactarán y ejecutarán proyectos para la permeabilización/demolición de los obstáculos asociados a las concesiones fuera de uso existentes en la ZEC (Piscifactoría Truchas Erreka, Olloki y Presa Inturia) o en sus proximidades (Galgo Paper). Destaca como objetivo prioritario la presa de Inturia, con proyecto de demolición redactado. Su ejecución sería de gran interés. Los proyectos deberán incorporar actuaciones de mejora morfológica de las riberas del remanso o embalsamiento en todas las obras de derribo total o parcial de azudes/obstáculos.
1.AC.8	En relación con la evaluación de la eficacia de los sistemas de permeabilización de obstáculos en el ámbito de la ZEC, en particular para los obstáculos: Estación de Aforo de la C.H. Ameraun, y escala de peces de los azudes correspondientes a las centrales hidroeléctricas Olaberri/Laborde, Bertxin, Leizaran/Iberdrola, Ameraun y Plazaola1.
AP.2	Instalación de sistemas eficaces para favorecer la migración descendente y evitar la entrada de peces y otras especies de fauna en los canales de las centrales hidroeléctricas Olaberri/Laborde, Bertxin, Leizaran/Iberdrola, Ameraun y Plazaola1.
AP.3	Los canales de derivación de las Centrales Hidroeléctricas en uso del río Leitzaran deberán incorporar medidas para evitar la caída de animales en el canal, bien mediante cubrición en su totalidad o por lo menos en los lugares de interés para paso de fauna. A este respecto se redactará un estudio de evaluación del impacto originado por caída de animales y se propondrán las medidas adecuadas para prevenir o corregir dicho

773

CÓDIGO	ACTUACIONES DE LA ZEC RÍO LEITZARAN
	impacto.

CÓDIGO	ACTUACIONES DE LA ZEC RÍO URUMEA
1.AC.1	Restauración de la vegetación natural de ribera en una banda de 5 (6,97 ha) metros de anchura en los tramos propuestos (ver Mapa de Actuaciones).
AP.1	Redacción y ejecución de proyectos de permeabilización de los siguientes obstáculos: • Sustitución de la escala de peces del azud de Lastaola por un cauce alternativo o canal lateral sobre el canal de derivación existente. • Sustitución de la escala de peces del azud de Fagollaga por un sistema eficaz para la ictiofauna y las especies que constituyen elementos clave en el ámbito de la ZEC.
1.AC.8	Permeabilización de obstáculos en el ámbito de la ZEC, en particular para la escala de peces del azud de la C.H. Renteria. En el caso de que la escala piscícola no sea efectiva, se tomarán las medidas necesarias para garantizar los desplazamientos de los peces y el resto de las especies que constituyen elementos clave en el ámbito de la ZEC.
AP.2	Instalación de sistemas eficaces para favorecer la migración descendente y evitar la entrada de peces y otras especies en los canales de las centrales hidroeléctricas del ámbito ZEC, o bien para evacuarlos antes de su paso por las turbinas (C.H. Renteria, C.H. Fagollaga y Papelera Zikuñaga).
AP.3	Promover un proceso de concertación o negociación en relación con el aprovechamiento hidroeléctrico de las minicentrales de Santiago y Pikoaga, con el fin de analizar las posibilidades de establecer unas condiciones más favorables para alcanzar el buen estado de conservación del hábitat fluvial. El proceso de concertación debe considerar incluso el posible cese de la actividad de estas minicentrales, como opción más ambiciosa de cara a propiciar un espacio de dimensiones suficientes para albergar una población viable de desmanes y un pequeño núcleo poblacional de visón europeo en la ZEC.
AP.4	En relación con la concesión de abastecimiento de Añarbe y con el fin de establecer un régimen de caudales ambientales apropiado para mantener o establecer el estado de conservación favorable de los hábitats o especies de interés comunitario y/o regional que constituyen elementos clave de la ZEC, se elaborará un estudio sobre la relación recurso/demanda con el fin de optimizar el uso del recurso agua así como estudios específicos de caudales ambientales. Asimismo, para el resto de concesiones, resulta de aplicación la actuación común **1.AC.4.**

CÓDIGO	ACTUACIONES EN LA ZEC DE AIAKO HARRIA
Directriz 40	Los tramos de regatas cuyo estado de conservación permita la presencia de especies amenazadas o hábitats de interés quedan incluidos como Zonas de Protección Estricta, incorporándose progresivamente aquellos que se vayan identificando.
Directriz 41	Los tramos de regatas y alisedas cuyo estado de conservación no sea el considerado como favorable, pero permita la presencia actual o potencial de especies amenazadas o hábitats de interés se incluyen en las Zonas de Restauración Ecológica; y se procederá a redactar directrices para su restauración.
Medida 42	Establecer un caudal mínimo en las centrales de Añarbe y Mendaraz y controlar su mantenimiento y el de las centrales de Masustanegi, Berdabio y Okillegi.
Medida 43	Instalar sistemas adecuados en la cámara de carga de las presas para que los peces y desmanes que entren en ellos tengan salida al río.
Medida 44	Tapar partes de los canales más peligrosos para la caída de animales con losas, construir donde el terreno permita rampas de salida, u otras técnicas disuasorias.

ANEXO II. Extracto de los objetivos y medidas de conservación comunes a las ZEC fluviales

1. Relación de los objetivos de conservación para el corredor fluvial y los hábitats y especies de interés comunitario de las ZEC fluviales

- Aumentar la superficie ocupada por hábitats naturales y aumentar su diversidad.
- Mejorar la calida de las aguas.
- Eliminar los obstáculos en las instalaciones fuera de uso y permeabilizar adecuadamente el resto.
- Garantizar un régimen de caudales naturales en el río Urumea.
- Suprimir los impactos sobre las especies objeto de conservación de la ZEC

2. Directrices, regulaciones y actuaciones propuestas para la ZEC

CÓDIGO	DIRECTRICES RELATIVAS AL USO DEL AGUA
5.D.1	La gestión del uso del agua debe orientarse a la optimización de este recurso, fundamental para la consecución de los objetivos de conservación de las ZEC fluviales de la región biogeográfica atlántica
5.D.2	Se promoverá la caducidad de todas las concesiones de aprovechamiento fuera de uso, tanto de las existentes en el ámbito de la ZEC, como las que se sitúen fuera de sus límites pero puedan comprometer los objetivos de conservación de la ZEC. Se estudiarán las posibilidades de demolición o permeabilización del obstáculo asociado a la concesión. En el caso de que resulte factible, se optará por la demolición del obstáculo y, en su defecto, por aquella solución de permeabilización que resulte más efectiva, siendo preferible la construcción de canales laterales o rampas frente a las escalas de artesas sucesivas
5.D.3	El órgano gestor de la ZEC promoverá ante el organismo de cuenca competente la aplicación del régimen de caudales ecológicos en las nuevas y antiguas concesiones de aprovechamiento de aguas, incidiendo en particular en aquellos casos en que la detracción de caudales suponga una mayor amenaza para la consecución de los objetivos de conservación de la ZEC en cuestión.
5.D.4	Como criterio general, debe restringirse al máximo la autorización de nuevas concesiones de aprovechamiento de aguas en el ámbito de las ZEC fluviales, que en todo caso estarán sujetas a la previa evaluación de sus repercusiones sobre los elementos objeto de conservación de la ZEC. Esta evaluación deberá incluir un análisis de alternativas técnicamente viables, así como una justificación suficiente de la necesidad de la concesión y de la idoneidad ambiental de la solución adoptada, que deberá garantizar que no se producirán afecciones significativas sobre los elementos objeto de conservación de la ZEC. En todo caso se garantizará un régimen de caudales compatible con el mantenimiento o restablecimiento de un estado de conservación favorable de los hábitats o especies objeto de conservación de la ZEC en cuestión.

CÓDIGO	DIRECTRICES RELATIVAS AL USO DEL AGUA
5.D.5	Se velará porque las instalaciones con derechos concesionales de aprovechamientos de agua en el ámbito de las ZEC mantengan siempre operativos los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. Asimismo se deberán mantener limpias y en adecuadas condiciones todas las instalaciones asociadas a la concesión, y en particular los dispositivos de paso de peces (rampas, escalas...), rejillas, etc., de forma que se garantice su funcionalidad en todo momento y se faciliten los desplazamientos, tanto en sentido ascendente como descendente, de las especies que constituyen elementos clave de la ZEC.

CÓDIGO	REGULACIONES RELATIVAS AL USO DEL AGUA
5.R.1	Para el ámbito correspondiente a las cuencas intercomunitarias de la CAPV resulta de aplicación la ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. Por lo tanto, en la medida en que las zonas protegidas de la Red Natura 2000 puedan verse afectadas de forma apreciable por los regímenes de caudales ecológicos, éstos serán los apropiados para mantener o restablecer un estado de conservación favorable de los hábitat o especies, respondiendo a sus exigencias ecológicas y manteniendo a largo plazo las funciones ecológicas de las que dependen".
5.R.2	Entre las líneas de actuación propuestas en las ZEC, se prevé la realización de estudios específicos para definir el régimen de caudales ambientales adecuado para salvaguardar o alcanzar el buen estado de conservación de los hábitats y especies que constituyen elementos clave en cada lugar. En tanto en cuanto se elaboran esos estudios, en las ZEC se aplicará un régimen de caudales que se adapte al hidrograma natural del río, que podrá definirse aplicando la metodología del caudal ecológico modular, utilizado en la planificación hidrológica de las cuencas internas del País Vasco. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el plan hidrológico que corresponda en función de la cuenca y aplicando siempre, de entre esas dos posibilidades, el régimen de caudales más favorable desde el punto de vista ambiental.
5.R.3	Las ZEC fluviales se considerarán ámbitos prioritarios a efectos de la implantación del régimen de caudales ecológicos al que se hace referencia en la regulación 5.R.2.
5.R.4	El órgano gestor solicitará al organismo de cuenca competente la iniciación de oficio de un expediente de modificación de aquellas concesiones que provoquen alteraciones significativas en los hábitats y especies objeto de conservación o impidan el restablecimiento de un estado de conservación favorable para las mismas.
5.R.5	No se autorizarán detracciones acumulativas de caudal en las ZEC que impliquen un caudal mínimo en los ríos inferior al caudal ecológico estimado.
5.R.6	Los titulares de las concesiones con infraestructuras que dificulten la movilidad de las especies ligadas al medio acuático y el cumplimiento de su ciclo biológico deberán llevar a cabo las actuaciones necesarias para permitir la circulación tanto ascendente como descendente de la fauna, mejorar la conectividad fluvial y el control del régimen de caudales ecológicos fijados.

CÓDIGO	REGULACIONES RELATIVAS AL USO DEL AGUA
5.R.7	Los proyectos para la ejecución de dispositivos de conectividad fluvial tendrán el contenido mínimo recogido en el Apéndice de este documento. En la determinación de las especies objetivo a que se refiere la letra a) de dicho apéndice deberán tenerse en *cuenta en particular las especies que constituyen elementos* clave de la ZEC. Además, aquellos casos en los que no se opte por la construcción de pasos multiespecíficos como canales laterales o derribos parciales, deberán incorporarse pasos específicos para anguila.
5.R.8	La instalación de nuevas centrales hidroeléctricas en el ámbito de las ZEC fluviales, así como la ampliación de las ya existentes, se considera incompatible con los objetivos de conservación de estos espacios.
5.R.9	Se prohibirá la práctica de las sueltas en emboladas en las centrales hidroeléctricas existentes en el ámbito de la ZEC, controlándose en particular el cumplimiento de esta disposición